

**UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID**  
**FACULTAD DE DERECHO**  
**Departamento de Historia del Derecho y de las**  
**Instituciones**



**EL CONSEJO DE INDIAS Y SU RELACIÓN CON LA VIA**  
**RESERVADA EN EL REINADO DE FELIPE V**

**MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR**  
**PRESENTADA POR**

**Mariana Moranchel Pocaterra**

Bajo la dirección del doctor

José Sánchez-Arcilla Bernal

**Madrid, 2012**

**UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID  
DEPARTAMENTO DE HISTORIA DEL DERECHO Y DE LAS  
INSTITUCIONES**

**TESIS DOCTORAL**

**EL CONSEJO DE INDIAS Y SU RELACIÓN CON LA VÍA  
RESERVADA EN EL REINADO DE FELIPE V**

**Presentada por Mariana Moranchel Pocaterra  
Director: Dr. Dn. José Sánchez-Arcilla Bernal  
Catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones  
Madrid, 2012.**

## ÍNDICE

### INTRODUCCIÓN

1. Elección del tema e hipótesis de trabajo .....	1
2. Estado de la cuestión.....	8
3. Fuentes de información .....	24
3.1. Fuentes normativas.....	24
3.2. Los documentos de aplicación de derecho .....	28
3.3. Literatura jurídica .....	33
4. Metodología .....	35

### I. EL CONSEJO DE INDIAS DENTRO DEL “GOBIERNO POR CONSEJOS”

1. El desarrollo del <i>deber de consejo</i> y su institucionalización en Indias.....	39
2. El Consejo de Indias y el “gobierno por consejos” durante la época de los Austrias .....	59
3. El Consejo de Indias y el “gobierno por consejos” en el reinado de Felipe V (1700-1746) .....	87

### II. LA ORGANIZACIÓN INTERNA DEL CONSEJO

1. Las Plantas del Consejo .....	125
1.1. La herencia de Carlos II: las reformas a las plantas del Consejo de Indias en 1677, 1687 y 1691.....	126
1.2. Las plantas del Consejo de Indias en el reinado de Felipe V .....	129
a) Planta de 1701 .....	129
b) Planta de 1702.....	130
c) Planta de 1706 .....	131

d) Planta de 1713 .....	132
e) Planta de 1715 .....	133
f) Planta de 1717 .....	134
2. El presidente y el gobernador del Consejo de Indias .....	137
2.1. Distinción entre las figuras de presidente y gobernador .....	137
2.2. Origen y condición social de sus titulares .....	140
2.3. Mención de sus titulares .....	141
2.4. Elección, juramento y toma de posesión .....	149
a) Elección .....	149
b) Juramento y toma de posesión .....	151
2.5. Salarios y emolumentos que percibían .....	153
2.6. Prerrogativas y atribuciones .....	156
3. Los consejeros .....	161
3.1. Número de consejeros .....	161
3.2. Clasificación .....	170
a) Consejeros togados y de capa y espada .....	170
b) Consejeros supernumerarios y honoríficos .....	172
c) El decano .....	175
3.3. Elección, juramento y duración del cargo .....	177
3.4. Honores y privilegios .....	180
3.5. Régimen económico de los consejeros .....	181
a) Salarios y emolumentos .....	181
b) Descuentos .....	183
3.6. Cargos internos de los consejeros .....	184
a) Juez visitador .....	185
b) Juez semanero .....	186
c) Juez de penas de cámara .....	187
3.7. Participación de los consejeros en otros órganos colegiados .....	189
3.8. Prerrogativas y atribuciones .....	192
4. El gran canciller, su teniente y el oficial de sello y registro .....	195
4.1. La situación del nombramiento de gran canciller durante el reinado de Felipe V .....	195
4.2. Prerrogativas y atribuciones .....	197
4.3. El teniente y el oficial del sello y registro .....	199
5. Los fiscales y sus agentes fiscales .....	201
5.1. Situación de los fiscales en el reinado de Felipe V .....	201
5.2. Nombramiento y toma de posesión .....	205
5.3. Prerrogativas y atribuciones .....	206
5.4. Los agentes fiscales .....	210



6. Los secretarios.....	212
6.1. Situación del los secretarios durante el reinado de Felipe V.....	212
6.2. Nombramiento y toma de posesión .....	215
6.3. Prerrogativas y atribuciones .....	217
6.4. División de las secretarías del Consejo de Indias.....	223
a) La Secretaría del Perú .....	224
b) La Secretaría de la Nueva España.....	225
6.5. El personal subalterno de las secretarías .....	226
6.6. El secretario de la presidencia .....	233
7. El receptor, el tesorero y el depositario.....	236
7.1. Del receptor y tesorero de los Austrias al depositario de los Borbones .....	236
7.2. Prerrogativas y atribuciones del depositario .....	241
8. Alguacil mayor.....	242
9. Los relatores .....	244
9.1. Evolución histórica.....	244
9.2. Nombramiento y toma de posesión .....	246
9.3. Prerrogativas y atribuciones .....	248
10. El escribano de cámara.....	251
10.1. Situación de los escribanos en el reinado de Felipe V .....	251
10.2. Nombramiento y toma de posesión .....	252
10.3. Prerrogativas y atribuciones .....	254
11. El contador mayor de las Indias .....	257
11.1. Situación del contador mayor de las Indias.....	257
11.2. Nombramiento y toma de posesión .....	260
11.3. Prerrogativas y atribuciones .....	261
12. El cronista mayor .....	265
12.1. La evolución histórica de la figura del cronista mayor de Indias durante el reinado de Felipe V.....	265
12.2. Nombramiento y toma de posesión .....	267
12.3. Prerrogativas y atribuciones .....	268
13. El cosmógrafo y catedrático de matemáticas .....	269
13.1. Situación del cosmógrafo y cronista de matemáticas en el reinado de Felipe V .....	269
13.2. Nombramiento y toma de posesión .....	269
13.3. Prerrogativas y atribuciones .....	270
14. Porteros y barrenderos.....	272
14.1. La situación de los porteros en el reinado de Felipe V .....	272
14.2. El portero de estrados .....	275

14.3. El barrendero .....	276
15. El abogado y el procurador de pobres.....	276
15.1. El abogado de pobres .....	276
15.2. El procurador de pobres .....	279
16. Otros cargos anejos al Consejo de Indias.....	283
16.1. El comisario general de Indias de la orden de San Francisco .....	283
16.2. El agente para las Indias con sede en Roma.....	284
16.3. El capellán .....	285

### III. LAS COMPETENCIAS DEL CONSEJO DE INDIAS

1. Consideraciones Generales .....	287
2. Los principios rectores de la administración de las Indias.....	290
2.1. El Consejo de Indias y el gobierno indiano.....	295
a) El gobierno temporal.....	295
b) El gobierno espiritual .....	303
2.2. El Consejo de Indias y los asuntos de justicia.....	306
2.3. El Consejo de Indias y la hacienda indiana .....	309
2.4. El Consejo de Indias y los asuntos de guerra .....	312
3. La asignación de competencias al Consejo entre los siglos XVI y XVII .....	316
3.1. Las competencias del Consejo de Indias durante los reinados de Carlos V y de Felipe I.....	316
3.2. La pérdida de competencias del Consejo de Indias en los reinados de Felipe III, Felipe IV y Carlos II .....	326
4. Las competencias del Consejo de Indias en la primera mitad del siglo XVIII .....	336
4.1. La gradual pérdida de competencias en el reinado de Felipe V .....	336
4.2. Las competencias del Consejo de Indias y la vía reservada.....	344
4.3. La situación de las competencias del Consejo de Indias tras la expedición de los reales Decretos de 1717 .....	365

### IV. LA FORMA DE TRABAJO DEL CONSEJO DE INDIAS

1. Introducción .....	371
2. El despacho <i>a boca</i> .....	372

3. El despacho por escrito .....	376
3.1. La vía de expediente .....	379
3.1.1. Actos de iniciación .....	380
a) Recepción de la documentación .....	381
b) Tipos de asuntos que se remitían al Consejo .....	386
- Los asuntos de oficio provenientes de las Indias .....	386
- Los asuntos de oficio provenientes de la Península .....	389
- Los asuntos de particulares.....	391
c) Distribución de la documentación .....	394
3.1.2. Actos de instrucción .....	397
a) Búsqueda y localización de antecedentes.....	397
b) Elaboración de extractos y sus tipos .....	400
c) Opinión del fiscal .....	401
d) Opinión de los contadores .....	402
e) Votaciones .....	403
f) Consulta .....	407
3.1.3. Actos de resolución .....	412
3.1.4. Actos de comunicación de la resolución .....	413
3.1.5. Actos de recurso .....	420
3.1.6. Esquema de la vía de expediente.....	423
3.2. La vía de justicia.....	431
4. La vía reservada y el Consejo de Indias .....	437
4.1. Procedimiento de creación de la legislación indiana.....	441
4.1.1. Iniciativa.....	441
4.1.2. Remisión de la real orden por la vía reservada y su lectura en el Consejo.....	442
4.1.3. Dictamen del fiscal.....	443
4.1.4. Debate del dictamen del fiscal en pleno o en sala.....	444
4.1.5. Preparación de la consulta.....	444
4.1.6. Envío de la consulta al monarca por la vía reservada .....	445
4.1.7. Despacho <i>a boca</i> con el monarca .....	446
4.1.8. Remisión del real decreto para su validación.....	447
4.2. Esquema de la relación entre la vía ordinaria y la vía reservada dentro del procedimiento de creación de la legislación indiana.....	448

## V. RESULTADOS

1. Las competencias del Consejo de Indias: gobierno, justicia, guerra y hacienda a la luz de las consultas remitidas al monarca.....	453
2. La vigencia de las Ordenanzas de 1636 ente los años de 1701 a 1746....	477

## **VI. CONCLUSIONES**

1. La situación político-administrativa del Consejo de Indias en el reinado de Felipe V y su relación con la vía reservada.....	489
---	-----

## **VII. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA**

1. Fuentes manuscritas .....	495
2. Fuentes impresas .....	497
2.1. Textos normativos .....	497
2.2. Literatura jurídica .....	498
3. Bibliografía .....	503

## **VIII. APÉNDICE**

1. El personal del Consejo de Indias en reinado de Felipe V .....	539
---	-----

## INTRODUCCIÓN

### 1. Hipótesis de trabajo.

Desde los primeros tiempos del descubrimiento y conquista de las Indias, los monarcas castellanos se preocuparon por allegarse de personas e instituciones capaces de asesorarle a fin de *gobernar como conviene tan grandes reinos y señoríos*. Pero no fue hasta el reinado de Carlos V cuando ese deber de consejo se institucionalizó tras la creación del Real y Supremo Consejo de Indias<sup>1</sup>.

Como sucedió con otros órganos de la administración central de la Monarquía, el Consejo de Indias formaba parte del denominado “gobierno

---

<sup>1</sup> Existe entre los autores una diferencia de opinión respecto de la fecha de su fundación. Ya desde el siglo XVI hubo disparidad de opiniones. Así uno de los grandes relatores del propio Consejo de Indias, A. de León Pinelo, afirmaba que su fundación tuvo lugar en el año de 1511 cuando se formó una Junta para los negocios de las Indias con título de Consejo. Vid. *Tablas cronológicas de los reales Consejos Supremo y de la Cámara de las Indias Occidentales*, Madrid, 1660, 2ª ed. facsimilar, Madrid, 1892, p. 39. Compartiendo esta opinión, Antonio Martínez de Salazar en el siglo XVIII afirmaba que el rey Fernando estableció el Consejo de Indias en 1511 y en 1524 lo perfeccionó Carlos V. Vid. *Colección de memorias y noticias del gobierno general y político del Consejo*, Madrid, 1764, p. 12. Otra corriente historiográfica, continuadora de las ideas del que fuera fiscal de dicho órgano, J. de Solórzano Pereira, señalaban que el Real y Supremo Consejo de Indias se estableció el 01.08.1524. Vid. *Política Indiana*, Madrid, 1647, ed. facsimilar, Madrid, 1972, p. 246. A principios del siglo XX, el historiador alemán E. Schäfer confirmaba el año de 1524 como fecha de creación de dicho órgano colegiado. Vid. *El Consejo Real y Supremo de las Indias*, Sevilla, 2003, t. 1, p. 62. Una tercera propuesta fue elaborada por uno de los oficiales de dicho órgano indiano, J. Díez de la Calle, quien afirmaba que el Consejo surgió hacia el año de 1518. Vid. *Memorias y noticias sacras y reales del Imperio de las Indias Occidentales*, Madrid, 1646, citado por C. García-Gallo, “La información administrativa en el Consejo de Indias. Las «Noticias» de Díez de la Calle”, en *Actas del III Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano*, Madrid, 1973, p. 363. En el último tercio del siglo pasado D. Ramos publicó un artículo en donde precisó que el Consejo de Indias fue fundado en Valladolid el 08.03.1523 cuando, “al ser depuesto de sus cargos Diego Colón, quedó cancelado el régimen dual y entró en funcionamiento el régimen de pleno realengo, sin limitaciones, ni coparticipación alguna”. Vid. “El problema de la fundación del Real Consejo de las Indias y la fecha de su creación”, en *El Consejo de las Indias en el siglo XVI*, Valladolid, 1970, pp. 11-48. Finalmente, en opinión de R. García no es tan importante dilucidar la fecha exacta de creación; lo cierto es que para dicho autor, en el año de 1524 el Consejo era toda una realidad institucional. Vid. *El Consejo de Indias durante los reinados de Carlos III y Carlos IV*, Navarra, 1998, p. 17.

por consejos”, los cuales debían asesorar al monarca en los asuntos de sus respectivas competencias<sup>2</sup>. En su caso, el Consejo de Indias fue investido con el título de Real y Supremo facultándolo en el conocimiento exclusivo de los asuntos más importantes relacionado con aquellos territorios ultramarinos.

En los primeros tiempos las competencias del Consejo fueron omnicomprendivas, esto es, comprendían todo lo relacionado con el gobierno político y administrativo de las Indias, así como la administración de justicia, la organización y recaudación de los ingresos que las Indias producían y todos los asuntos militares<sup>3</sup>. Se convirtió en el único órgano supremo capaz de conocer cuestiones relativas a aquellos territorios; así lo estableció un real decreto promulgado por Felipe II señalando que ningún otro Consejo, ni Tribunal de la corte podían entrometerse en conocer negocios pertenecientes al mencionado órgano indiano<sup>4</sup>.

Pero debido a los numerosos problemas económicos en los que continuamente se encontraba la Corona fue necesario realizar una serie de reformas de la administración central; por ello, crearon instituciones dirigidas a mejorar dicha situación. Todas estas modificaciones generaban, entre otras consecuencias, la pérdida de atribuciones de unos órganos favoreciendo a otros. Así, por ejemplo, Felipe II decidió unificar la organización fiscal de la Monarquía confiando al Consejo de Hacienda la administración de todos los fondos reales, incluyendo entradas y salidas de las cuentas indianas, dando como resultado una disminución de su autonomía financiera, ya que desde entonces todos sus gastos tenían que ser aprobadas por orden real librada por dicho Consejo de Hacienda<sup>5</sup>. En el

---

<sup>2</sup> Formaron parte de esta organización administrativa los Consejos de Castilla, Aragón, Estado, Navarra, Hacienda, Guerra, Mesta, Cruzada, Inquisición, Órdenes, Indias, Portugal, Flandes e Italia. Una visión general de este gobierno por Consejos puede verse en F. Tomás y Valiente, “El gobierno de la monarquía y la administración de los reinos en la España del siglo XVII”, en *Historia de España Menéndez Pidal*, Madrid, 1982, vol. XXV, pp. 1-214.

<sup>3</sup> Lo que se traduce en palabras de A. García Gallo a asuntos relativos a gobierno, justicia, guerra y hacienda. Vid. “Los principios rectores de la organización territorial de las Indias en el siglo XVI”, en *Anuario de Historia del Derecho Español*, nº 40 (1970), pp. 313-347.

<sup>4</sup> Real decreto 22.09.1584 incluida como la ordenanza 3 de las Ordenanzas del Consejo de Indias de 1636. *Ordenanzas del Consejo Real de las Indias nuevamente recopiladas por el rey D. Felipe Quarto N. S. para su gobierno establecido*, Año de 1636, Madrid, Julián Paredes, 1681, texto facsimilar y estudio M. Moranchel Pocaterra en *Cuadernos de Historia del Derecho*, nº 8 (2001), pp. 273-379.

<sup>5</sup> Vid. I. Sánchez Bella, “El Consejo de las Indias y la hacienda indiana en el siglo XVI, en *El Consejo de las Indias en el siglo XVI*, Valladolid, 1970, p. 150.

siglo XVII con la creación de la Cámara de Indias<sup>6</sup>, de la Junta de Guerra<sup>7</sup> de Indias o de la Junta de Comercio<sup>8</sup>, materias relacionadas con asuntos de gracia y merced, guerra o comercio fueron extraídas también del conocimiento del Consejo de Indias.

Pero toda esta pérdida de competencias se acentuó en el siglo XVIII con la creación de las diferentes secretarías de Estado y del despacho<sup>9</sup>. En efecto, cuando Felipe V inició una serie de reformas político-administrativas tendentes a dar agilidad y rapidez a la resolución de los asuntos decidió “reservarse para sí” el conocimiento de los principales asuntos, surgiendo la llamada vía reservada.

La hasta entonces única Secretaría del Despacho Universal fue la institución utilizada por el monarca para implementar el uso de la vía reservada en el gobierno de la Monarquía. En 1705 esta Secretaría fue dividida en dos departamentos, uno para asuntos de guerra y hacienda y, el otro, con competencias en cualquier otra materia. Desde ese momento, los consejos debían remitir sus consultas a dichas secretarías. En principio, la misión de estas nuevas organizaciones administrativas era la de preparar y

---

<sup>6</sup> Aunque no es abundante la bibliografía al respecto puede consultarse a J. J. Real Díaz, “El Consejo de Cámara de Indias: Génesis de su fundación”, en *Anuario de Estudios Americanos*, nº 19 (1962), pp. 725-758 y el de J. A. Escudero, “La creación del Consejo de Cámara de Indias”, en *Derecho y Administración Pública en las Indias Hispánicas, Actas del XII Congreso Internacional de Historia del Derecho Indiano*, Cuenca, 2002, vol. I, pp. 621-667.

<sup>7</sup> Sobre la Junta de Guerra de Indias son importantes las obras de J. F. Baltar Rodríguez: *Las Juntas de Gobierno en la Monarquía Hispánica (s. XVI-XVII)*, Madrid, 1998 y “Sobre el origen de la Junta de Guerra de Indias”, en *XIII Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano: Actas y estudios*, 2003, vol. 1, pp. 671-686. También puede consultarse los estudios de J. C. Domínguez Nafria, “La Junta de Guerra de Indias. Estudio institucional”, en *Temas de historia militar: 2º Congreso de Historia Militar*, Zaragoza, 1988, vol. 1, pp. 79-116 y H. J. Tanzi “La Junta de Guerra de Indias”, en *Revista Chilena de Historia del Derecho*, nº 5 (1969), pp. 81-96.

<sup>8</sup> El tema ha sido analizado por W. J. Callahan, “A Note on the Real y General Junta de Comercio, 1679-1814”, en *The Economic History Review*, vol 21 (1968), pp. 519-528 y por P. Molas y Ribalta, “La Junta General de Comercio y Moneda. La Institución y los hombres”, en *Hispania. Revista de Historia*, vol. 38, nº 9 (extraordinario 1978), pp. 1-38; “Instituciones y comercio en la España de Olivares”, en *Studia Historica. Historia Moderna*, nº 5 (1987), pp. 91-97.

<sup>9</sup> Sobre las Secretarías y los secretarios es fundamental la obra de J. A. Escudero López, *Los Secretarios de Estado y del Despacho (1474-1724)*, Madrid, 1973; *Los orígenes del Consejo de Ministros en España. La Junta Suprema de Estado*, Madrid, 1979; “La reconstrucción de la administración central en el siglo XVIII”, en *Historia de España Menéndez Pidal*, Madrid, vol. 1, t. 29 (1985), pp. 81-175 y *Administración y Estado en la España moderna*, Madrid, 1999.

extractar la documentación que los diferentes órganos remitían al rey para que éste pudiera resolver de manera más ágil y precisa<sup>10</sup>.

Tras varias modificaciones a las recién creadas Secretarías de Estado y del Despacho, finalmente un real decreto de 30 de noviembre de 1714 articuló un nuevo sistema político-administrativo sobre la base de cuatro Secretarías del Despacho encargadas de asuntos de Estado, Eclesiásticos y de Justicia, de Guerra y, Marina e Indias, para los asuntos financieros una Veeduría General<sup>11</sup>. Estas reformas fueron comunicadas a los distintos consejos, entre ellos el de Indias, con la finalidad que remitieran sus consultas a los respectivos secretarios. En 1717 varios reales decretos cercenaron gran parte de las atribuciones del Consejo indiano, las cuales fueron asignadas a esas nuevas Secretarías<sup>12</sup>.

Justamente esta transferencia de competencias que sufrió el Consejo de Indias a favor de las secretarías de Estado y del despacho constituye el objeto de estudio de la presente investigación. Creemos que el análisis de las relaciones que se fraguaron en la práctica administrativa cotidiana entre el Consejo de Indias y las secretarías de Estado y del despacho nos permitirán valorar hasta qué punto la situación privilegiada y el prestigio político que el Consejo de Indias, hasta entonces había gozado, fue acaparado por los nuevos órganos de la administración central.

Bajo esta perspectiva y como consecuencia de la gran importancia de las reformas impuestas por Felipe V en la administración central de la Monarquía nos encontramos ante una investigación que busca dar respuesta a varios interrogantes<sup>13</sup>. Lo primero que interesa verificar es la relación que

---

<sup>10</sup> El desarrollo de las competencias de las Secretarías de Estado y del Despacho y especial la de Indias ha sido ampliamente tratado por M. Gómez en su obra *Forma y expedición del documento en la Secretaría de Estado y del Despacho de Indias*, Sevilla, 1993. También en su artículo titulado “La nueva tramitación de los negocios de Indias en el siglo XVIII: de la “Vía del Consejo” a la “Vía Ordinaria”, en *El Gobierno de un mundo. Virreinos y Audiencias en la América Hispánica*, Cuenca, 2004, pp. 203-250. Obras a las que nos referiremos con detalle más adelante.

<sup>11</sup> *Novísima Recopilación de las leyes de España en que se reforma la recopilación publicada por... Felipe II y se incorporan las pragmáticas, cédulas, decretos... expedidas hasta el de 1804 mandando formar por Carlos IV* (en adelante Nov. Recop.), Madrid, 1805. Nov. Recop. 3.6.4.

<sup>12</sup> Entre ellos el real decreto de 20.01.1717. A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 107v-108v; 542 L. 2, ff. 41-43.

<sup>13</sup> Para la realización de la presente investigación hemos asumido como guía metodológica las propuestas de J. Sánchez-Arcilla basada en estudiar una institución jurídica ocupándose de sus “problemas jurídicos”, ya que en opinión del mencionado autor “el origen y transformaciones que se operan en las instituciones jurídicas sólo deben ser contemplados en la medida que puedan repercutir en la problemática jurídica de dicha institución”.



se desarrolló entre el Consejo de Indias y las secretarías de Estado y del despacho en el reinado de Felipe V. En otras palabras, buscamos establecer el punto de encuentro entre los dos procesos administrativos distintos. Por un lado existía el tradicional denominado “vía de Consejo” o también llamada “vía ordinaria”<sup>14</sup> a través de la cual el Consejo consultaba al monarca los más variados asuntos a fin de recabar su decisión; y por el otro, una nueva forma de resolver los problemas con la inclusión de la llamada vía reservada<sup>15</sup>, en donde el monarca, decidía “en derecho” avocar los negocios para sí, presidiendo por tanto de la intromisión de los tradicionales consejos. No se trata, como menciona M. Gómez de la desaparición de unas instituciones y el nacimiento de otras, sino más bien las reformas buscaban “superponer dos estructuras administrativas diferentes, encajarlas y hacerlas funcionar como parte de un engranaje que ponía en marcha la pesada maquinaria del Estado”<sup>16</sup>.

En este sentido es menester señalar la importancia que tiene en una investigación de corte institucional, en nuestro caso, el estudio del Consejo de Indias en el reinado de Felipe V, analizarlo a la luz de las otras instituciones con las que “convivió”, como lo fueron las Secretarías de Estado y del Despacho, de manera que puedan contemplarse esas relaciones “desde dentro”<sup>17</sup>. Para lograrlo es necesario contar con un contexto histórico-jurídico específico que nos permita visualizar con claridad esas relaciones “inter-institucionales”.

Con el fin de establecer aquellas competencias que poco a poco el Consejo de Indias fue perdiendo en favor de otros órganos de la administración central de la Monarquía, y en especial en las Secretarías de

---

Discurso metodológico que compartimos en toda su extensión. Vid. *Jacobus, id quod ego. Los caminos de la ciencia jurídica*, Madrid, 2003, pp. 453-54.

<sup>14</sup> Aunque será un tema que analizaremos en detalle, cabe mencionar que la vía ordinaria era la forma regular y común en la que los Consejos y Juntas remitían al monarca cualquier documentación. Entre ellas las consultas para que éste emitiera su decisión. Una idea general de esta vía puede verse en A. M<sup>a</sup> Barrero García, “La vía ordinaria y la vía reservada en la administración de la América española”, en *Estructuras, gobierno y agentes de la administración en la América española siglos XVI, XVII y XVIII, Actas del VI Congreso del Instituto de Historia del Derecho Indiano*, Valladolid, 1984, pp. 233-249 y M. Gómez Gómez, “La nueva tramitación...”

<sup>15</sup> En términos generales se entiende por vía reservada “el curso extraordinario que se daba a ciertos negocios, despachándolos el rey por sí mismo o por sus secretarios, sin consulta de Consejos ni de otra autoridad”. *Diccionario de la Lengua Española (RAE)*.

<sup>16</sup> M. Gómez Gómez, “La nueva tramitación...”, p. 208.

<sup>17</sup> Señala J. Sánchez-Arcilla que para no perder la perspectiva y el sentido de una institución es necesario realizar un estudio histórico-jurídico que sea capaz de contemplar dicha institución dentro del sistema en que “convive” a fin de analizar también las relaciones inter-institucionales. Vid. *Jacobus, id quod ego...*, p. 451.

Estado y del Despacho, nos encontramos con la necesidad de establecer hasta qué punto el ordenamiento vigente a la llegada al trono de Felipe V, esto es, las Ordenanzas del Consejo de 1636 continuaban vigentes y cuáles de ellas fueron modificadas a partir de la expedición de los decretos de Nueva Planta. Para ello es conveniente contar con un panorama general del estado de este supremo órgano antes de la llegada de los Borbones a España. Con este punto de partida es posible plantearse entonces preguntas tales como ¿Cuáles fueron las principales reformas a las que se sometió el Consejo de Indias? ¿Qué atribuciones perdió a favor de las Secretarías de Estado y del Despacho? ¿Cómo era la relación entre el Consejo y la vía reservada? y ¿En qué situación quedó el Consejo frente al nuevo orden político-administrativo? El hecho es que ningún cambio fue repentino, su organización y estructura estuvo condicionada por las necesidades de cada momento.

En realidad ni siquiera es posible establecer un criterio de reformas unívoco dentro del reinado de Felipe V, los cuarenta y seis años supusieron cambios continuos en los que se desarrolló un fenómeno de ensayo-error en la toma de decisiones<sup>18</sup>. Varias fueron las razones de ello, pero en gran medida dependió de las personas que temporalmente ocuparon el cargo de secretario de Estado y del Despacho de Estado. En efecto, según la influencia que ejercían distintos personajes en la vida del rey Borbón dependía las reformas administrativas a las que sometería a los órganos de la administración central. Sin olvidar que la Guerra de Sucesión también fue un detonante que condicionó algunas otras reformas. Todo ello lo hemos tenido en cuenta a la hora de abordar los textos normativos, la literatura jurídica y los documentos administrativos emanados tanto del Consejo de Indias, como de la vía reservada.

Al hilo de nuestra investigación había que establecer la posición jurídico-política en la que el Consejo se mantuvo durante la primera mitad del siglo; para ello, era menester revisar la documentación emanada del propio Consejo, el tratamiento que se le daba y las resoluciones que el monarca declaraba a las consultas. Con este análisis podríamos estar en posición de establecer hasta qué punto Felipe V aceptaba las opiniones de su Consejo. Sabemos que nada obligaba al monarca a seguir las recomendaciones de sus órganos asesores, pero según lo hemos podido verificar con algunas

---

<sup>18</sup> Al respecto D. Ramos se refería a la propensión por parte de la historiografía moderna a etiquetar cada época con el fin de particularizar y distinguir su esencia. Justamente esta inclinación ha etiquetado al setecientos como “el siglo de las reformas” lo que confiere a la centuria una engañosa unidad, de la que en realidad, carece. Vid. “La época de la Nueva Monarquía”, en *Historia General de España y América*, Rialp, Madrid, 1983, t. XI-1, p. XI.

consultas de la época de los Austrias, un alto porcentaje de ellas eran aceptadas sin más por los monarcas.

Por tanto, a través del estudio de la organización y funcionamiento del Consejo de Indias en el reinado de Felipe V nos han surgido una serie de interrogantes que creemos poder resolver a partir del análisis de la práctica administrativa durante ese reinado. La primera de las hipótesis se centrará no sólo en establecer la relación que existió entre el Consejo y las secretarías de Estado y del despacho, sino también verificar los efectos jurídico-políticos que produjo la utilización de la vía reservada como medio para la resolución de los asuntos relacionados con los territorios de Ultramar en detrimento de la vía ordinaria o también llamada de “vía Consejo”.

La segunda de las hipótesis se centrará en determinar hasta qué punto las Ordenanzas de 1636 estuvieron vigentes en el reinado de Felipe V y cuáles de ellas fueron modificadas<sup>19</sup>. Y finalmente, establecer el grado de influencia del Consejo de Indias en la toma de decisiones del monarca aún y cuando las competencias de gobierno, guerra, comercio y navegación las había perdido a favor de la vía reservada.

En principio los límites cronológicos propuestos abarcan los años del reinado de Felipe V, esto es, de 1700 a 1746, si bien es cierto el corte es algo convencional, también supone algunas razones metodológicas. La adopción de 1700 como punto inicial se debe a dos motivos. Uno por ser el año del cambio de dinastía en España, tras la muerte de Carlos II y la entrada, un año después, de Felipe V como rey. El otro, porque precisamente este monarca fue quien, tras varias reformas, y en especial con los decretos de Nueva Plata implementó el uso de la vía reservada como una forma de reorganizar no sólo la administración central, sino también la forma de adaptar a las secretarías de Estado y del despacho dentro de la nueva forma de gobernar. El estudio se cierra en 1746, fecha de la muerte de este primer Borbón, cuyas reformas fueron retomadas y ampliadas por sus sucesores, quienes llevaron a su cenit la nueva organización administrativa impuesta por Felipe V.

Este límite tiene un significado diferenciador que marca dos modos de gobernar distintos; mientras que en los siglos XVI y XVII los modos

---

<sup>19</sup> Cuando en el año 2000 publicamos las Ordenanzas del Consejo de Indias de 1636 advertimos que para establecer la vigencia de dicho ordenamiento jurídico en el siglo XVIII era necesario conocer en detalle el funcionamiento del Consejo durante los primeros decenios del setecientos. Siguiendo esta idea nos proponemos dilucidar este tema en la presente investigación. Vid. M. Moranchel Pocaterra, “Las Ordenanzas del Real y Supremo Consejo de Indias de 1636. Primera parte”, en *CHD*, n° 8 (2001), p. 281.

operativos de ejercer el poder se hacía a través de las opiniones de los consejos y Juntas; con Felipe V, una nueva forma de gobernar surgió con la intervención directa de las secretarías de Estado y del despacho a través de la vía reservada. Sin embargo, a fin de tener una visión más completa del estado en que se encontraba el Consejo de Indias en algunos temas haremos alusión a su forma de organización en la época de los Austrias, de lo contrario correríamos el riesgo de tener una información parcial, toda vez que siempre es necesario contar con un mínimo de referencia del período anterior. Si bien no es nuestra intención detallar el funcionamiento del Consejo antes de 1700, si al menos analizaremos los hitos fundamentales de dicha institución.

## 2. Estado de la cuestión.

Cuando nos planteamos realizar la presente investigación nos percatamos que existía una nutrida bibliografía relacionada, por un lado, con el Consejo de Indias, y, por el otro, con las Secretarías de Estado y del Despacho. Empero, la ausencia de estudios que relacionaran el trabajo de una y otra institución a través de la “vía ordinaria” y de la “vía reservada” fue un elemento decisivo a la hora de la elección del tema. Justamente a partir de esta interrelación sería posible aproximarnos a lo que alguna vez Escudero denominó “el desenlace de esta pugna entre el rey y sus consejos y en qué medida afectó a cada uno de ellos”<sup>20</sup>, que, para nuestro caso específico, únicamente lo referiremos al de Indias.

En las últimas dos décadas ha surgido un renovado espíritu por analizar las reformas que la administración central española experimentó en la época de los Borbones durante el siglo XVIII: Por ello, la producción científica al respecto es enorme<sup>21</sup>. De tal suerte que para los efectos de esta investigación

---

<sup>20</sup> J. A. Escudero, “La reconstrucción de la administración...”, pp. 100-101.

<sup>21</sup> Véase en este sentido J. P. Dedieu, “La Nueva Planta en su contexto. Las reformas del aparato del Estado en el reinado de Felipe V”, en *Manuscripts, Revista d’Història Moderna*, n°18, (2000), pp. 113-139 o “Dinastía y elites de poder en el reinado de Felipe V”, en *Actas del Coloquio Internacional Los Borbones. Dinastía y memoria de nación en la España del siglo XVIII*, Madrid, 2002, pp. 381-399. J. M. de Bernardo Ares cuenta con una importante producción historiográfica del período reformista de Felipe V: “La Monarquía de Ryswick y el Estado Español de Utrecht. Dos formas diferentes de configurar política y económicamente a Europa”, en *Felipe V de Borbón, 1701-1746*, Córdoba, 2002, pp. 501-518; “La política colonial americana de los Borbones durante la Guerra de Sucesión a la Corona española”, en *Estudios de historia iberoamericana: XXXIV Reunión Anual de la Society for Spanish and Portuguese Historical Studies*, Madrid, 2004, vol. 2, pp. 174-177;

es imprescindible mencionar algunos de los estudios llevados a cabo referidos a la administración de la monarquía en la época del primer Borbón.

Al ser el Consejo de Indias una institución político-administrativa de gran envergadura dentro de la edad Moderna, no sólo para España, sino también para América, la historiografía surgida a propósito es numerosa<sup>22</sup>.

---

“Felipe V: La transformación de un sistema de gobierno”, en *Felipe V y su tiempo. Congreso Internacional*, Zaragoza, 2004, pp. 967-990. Otras importantes aportaciones ha realizado G. A. Franco Rubio: “Reforma administrativa y nuevas instituciones: la Secretaría de Guerra y Marina en la España del Siglo XVIII”, en *El mundo hispánico en el siglo de las luces. Actas del Coloquio Internacional Unidad y diversidad en el mundo hispánico del siglo XVIII*, Salamanca, 1996, pp. 643-654 y el “Reformismo institucional y elites administrativas en la España del siglo XVIII: Nuevos oficios, nueva burocracia. La Secretaría Estado y del Despacho de Marina (1721-1808)”, en *La pluma, la mitra y la espada. Estudios de Historia Institucional en la Edad Moderna*, Madrid, 2000, pp. 95-130. M<sup>a</sup> V. López Cordón ha publicado entre otras obras: “Administración y política en el siglo XVIII: Las Secretarías de Estado y del Despacho”, en *Crónica Nova*, 1995, n<sup>o</sup> 22, pp. 185-209; “Cambio social y poder administrativo en la España del siglo XVIII: las Secretarías Estado y del Despacho”, en *Sociedad, administración y poder en la España del antiguo régimen. Hacia una nueva historia institucional. I Simposium Internacional del Grupo PAPE*, Granada, 1996, pp. 111-130; “Secretarios y Secretaría en la Edad Moderna: de las manos del Príncipe a relojeros de la Monarquía”, en *Studia Historica*, Salamanca, 1996, n<sup>o</sup> 15 pp. 107-131 e “Instauración dinástica y reformismo administrativo: la implantación del sistema ministerial”, en *Manuscripts, Revista d’Història Moderna*, Barcelona, 2000, n<sup>o</sup> 18, pp. 93-111. A estos estudios se puede añadir los de J. L. Castellano Castellano, “La carrera burocrática en la España del siglo XVIII”, en *Sociedad, administración y poder en la España del antiguo régimen. Hacia una nueva historia institucional. I Symposium Internacional del Grupo PAPE*, Granada, 1996, pp. 25-45 y “El gobierno en los primeros años del reinado de Felipe V. La influencia francesa”, en *Felipe V de Borbón, 1701-1746*. Córdoba, 2002, pp. 130-142. Entre los artículos más destacados de C. de Castro se encuentran: “Las Secretarías de los Consejos, las de Estado y Despacho y sus oficiales durante la primera mitad del siglo XVIII”, en *Hispania*, Madrid, n<sup>o</sup> 201, vol 59/1 (1999), pp. 193-215; “El Estado español en el siglo XVIII: su configuración durante los primeros años del reinado de Felipe V”, en *Historia y política: Ideas, procesos y movimientos sociales*, Madrid, n<sup>o</sup> 4 (2000), pp. 137-170 y su artículo “Las primeras reformas institucionales de Felipe V: El marqués de Canales, 1703-1704”, en *Cuadernos dieciochescos* n<sup>o</sup> 1 (2000), p. 155-183; de esta misma autora *A la sombra de Felipe V. José de Grimaldo, ministro responsable (1703-1726)*, Madrid, 2004. Por su parte, J. A. Escudero ha realizado aportaciones a este tema en su síntesis “La reconstrucción de la administración...”, pp. 81-175.

<sup>22</sup> En 1998 D. Castañeda publicó en México un artículo donde recopiló la bibliografía que hasta entonces se había publicado sobre el Consejo indiano. Vid. “La bibliografía jurídica del Consejo de Indias” en *Cuadernos del Instituto de Investigaciones Jurídicas. La supervivencia del Derecho español en Hispanoamérica durante la época independiente*, México, 1998, pp. 95-108. Pero debido a la revalorización que en los últimos años se ha hecho de la presencia de la dinastía de los Borbones en España se han publicado importantes obras relativas al Consejo de Indias en el siglo XVIII. Sin ánimo de ser exhaustiva y con el fin de sistematizar la información mencionaremos las obras que nuestro juicio han sido más importantes se encuentran: A. F. González González, “El Consejo de

Indias en la crisis de los Consejos y en el nacimiento de la estructura administrativa contemporánea”, en *Boletín Americanista*, nº 28 (1978), pp. 165-177; M. Hernández Ruigómez, “Un sermón pronunciado ante el Consejo de Indias en vísperas de la ruptura de hostilidades entre las coronas española y británica (1739), en *Revista de Indias*, nº 42 (1982), pp. 203-222; L. Navarro García, “Felipe V y el Consejo de Indias: el debate de las encomiendas”, en *Boletín de Temas Americanistas*, nº 3 (1983), pp. 5-11; V. Tau Anzoátegui, “La formación y promulgación de las leyes indianas: en torno a una consulta del Consejo de Indias en 1794”, en *Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas*, nº. 23, (1986), pp. 209-231; M<sup>a</sup> Pérez Canto y C. Vázquez Rodríguez de Alba, “El Consejo de Indias ante los decretos de Nueva Planta, 1714”, en *Boletín Americanista*, nº 38 (1988), pp. 227-245; J. Cervera Pery, *La Casa de Contratación y el Consejo de Indias (las razones de un superministerio)*, Madrid, 1997; R. García Pérez, *El Consejo de Indias...*, “El Consejo de Indias en la Corte de Felipe V: lógica jurídica y lógica política en el gobierno de América”, en *El Gobierno de un mundo. Virreinos y Audiencias en la América Hispánica*, Cuenca, 2004, pp. 167- 201 y “El gobierno y suprema jurisdicción del Consejo de Indias en el reinado de Carlos III: Apuntes para una revisión historiográfica”, en *Derecho, instituciones y procesos históricos: XIV Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano*, 2008, vol. 1, pp. 471-492; J. A. Escudero López, “El gobierno del Consejo de Indias entre los siglos XVI y XVII”, en *Derecho, instituciones y procesos históricos: XIV Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano*, Lima, 2004, pp. 457-470 y “Reformas del Consejo de Indias a la entrada del siglo XVIII”, en *La América hispana en los albores de la emancipación, Actas del IX Congreso de Academias Iberoamericanas de Historia*, 2005, pp. 675-684. Mención aparte merece el artículo de J. Solís Fernández ya que es el único que por el momento se refiere a la organización del Consejo de Indias del otro pretendiente a la Corona. Vid. “Notas para el estudio del Consejo de Indias del archiduque Carlos de Austria”, en *Actas del VII Congreso Internacional de Historia de América. I. La Corona de Aragón y el Nuevo Mundo: del Mediterráneo a las Indias*, Zaragoza, 1996, pp. 685-710. Sobre este tema también ha sido útil el texto de M<sup>a</sup> V. León Sanz, *Entre Austrias y Borbones. El Archiduque Carlos y la Monarquía de España (1700-1714)*, Madrid, 1993. Existe además una copiosa literatura relacionada con los ministros y oficiales que formaron parte de dicho órgano colegiado indiano. Los más relevantes son: D. Rípodas Ardanaz, “Los discursos exhortatorios del marqués de Bajamar (una imagen del Consejo de las Indias bajo Carlos IV)”, en *Anuario Histórico Jurídico Ecuatoriano*, nº 6 (1980), 241-269, que se completa con la publicación que en el 2002 se hizo de dichos discursos: A. Porlier y Sopranis, (marqués de Bajamar), *Discursos al Consejo de Indias*, ed. y estudio preliminar de M<sup>a</sup> S. Campos Díez, Madrid, 2002; M. González Quintana, “Don J. Vázquez de Arce, un granadino presidente del Consejo de Indias”, en *El reino de Granada y el Nuevo Mundo: V Congreso Internacional de Historia de América*, Granada, 1994, vol. 1, pp. 223-236; M. A. González de San Segundo, “Los aragoneses y la Fiscalía del Consejo de Indias en el reinado de Felipe IV”, en *XIII Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano: Actas y estudios*, 2003, vol. 1, pp. 709-726; A. Bermúdez Aznar, “El oficio de relator del Consejo de Indias”, en *Derecho, instituciones y procesos históricos: XIV Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano*, Lima, 2004, pp. 457-470; M. Gómez Gómez, “Instrucciones para el gobierno del presidente o gobernador del Consejo de Indias”, en *Historia, Instituciones y Documentos*, nº 31 (2004), pp. 287-299, de la misma autora “La Secretaría de la presidencia del Consejo de Indias y sus competencias documentales”, *Derecho, Instituciones y Procesos Históricos: XIV Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano*, Lima, 2008, pp. 493-514 y , “El archivo secreto del Consejo de Indias y sus fondos bibliográficos”, en *Historia, instituciones y documentos*, Madrid, nº 19 (1992), pp. 187-214, de la misma autora, “Las imprentas oficiales: el caso del impresor del Consejo de Indias”, en *Historia, Instituciones,*

Existen una numerosa historiografía referida a la historia y organización del Consejo indiano relativa a los siglos XVI y XVII, si bien no pretendemos ser exhaustivos, toda vez que la presente investigación fija como período de estudio básicamente los años del reinado de Felipe V, cierto es que el conocimiento de esta institución en la época del último Habsburgo es vital para analizar los cambios surgidos en la administración central ultramarina en las cuatro primeras décadas del siglo XVIII.

Sobre la historia y organización del Consejo de Indias el propio Schäfer publicó en los años treinta del siglo pasado dentro de la revista *Investigación y Progreso* varios artículos relacionados con la vida de esta institución, haciendo especial referencia a la organización interna del propio órgano colegiado<sup>23</sup>.

Una obra colectiva de gran envergadura es la titulada *El Consejo de las Indias en el siglo XVI*, la cual surgió a partir del encuentro realizado en Valladolid en 1970 por ilustres americanistas de aquella época, quienes se reunieron con la finalidad de rendir homenaje al que fuera entre los años de 1568 a 1570 presidente del Consejo de Indias, el vallisoletano Luis Méndez de Quixada. Al respecto fueron varias las ponencias que de este encuentro sentaron las bases teóricas para el posterior estudio institucional del Consejo<sup>24</sup>.

---

*Documentos*, nº 22 (1995), pp. 247-260. La organización del trabajo del Consejo de Indias ha sido analizado por A. M. Heredia Herrera, "Los cedularios de oficio y de partes del Consejo de Indias: sus tipos documentales (s. XVII), en *Anuario de Estudios Americanos*, nº 29 (1972), pp. 1-60, de la misma autora "La carta como tipo diplomático indiano", en *Anuario de Estudios Americanos*, nº 77 (1977), pp.65-95. J. Villegas, "Consultas del Consejo de Indias al Rey para nombrar a los arzobispos y obispos de las iglesias de Indias, 1577-1601", en *Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas*, nº 9, 1972, pp. 102-136.

<sup>23</sup> "El Consejo de Indias y el virrey Francisco de Toledo", en *Investigación y Progreso*, año V, nº 7 (jul-ago 1931), pp. 103-106; "La plantilla del Consejo de Indias y las reformas intentadas durante el reinado de Carlos II", en *Investigación y Progreso*, año VI, nº 4 (abril 1932), pp. 59-62; "El origen del Consejo de Indias. Ha existido la Junta de Indias?", en *Investigación y Progreso*, año VII, nº3 (marzo 1933), pp. 71-75; "La fundación del Consejo por Carlos V", en *Investigación y Progreso*, año VII, nº 5 (mayo 1933), pp. 141-146 y "El cosmógrafo Jaime J.", en *Investigación y Progreso*, año X, nº 1 (enero 1936), pp. 10-15.

<sup>24</sup> Entre los temas debatidos en dicha reunión se encuentran los realizados por los siguientes americanistas: J. Pérez de Tudela, "El presidente Loaysa, la real provisión de Granada y la Leyes Nuevas", pp. 49-60; F. de P. Solano, *Algunos aspectos de la política de consejero sobre la organización de la iglesia indiana en el siglo XVI*, pp. 173-180; J. J. Real Díaz, "La política del Consejo de Indias, durante la presidencia de don Luis Méndez Quixada", pp. 79-87; C. Pérez Picón, "Don Luis Méndez Quixada, presidente del Real Consejo de Indias", pp. 89-108; J. Manzano y Manzano, "La visita de Ovando al Real Consejo de las Indias y el Código Ovandino", pp.111-123; M. L. Díaz-Trechuela Spínola, "El Consejo de las Indias y Filipinas en el siglo XVI", pp. 125-138; D. Ramos, "Retrato de un presidente del Consejo siendo niño, con su padre, el Virrey Velasco en un lienzo guadalupano", pp.

Un artículo muy clarificador acerca de las competencias de los secretarios del Consejo se debe a A. García-Gallo<sup>25</sup>. En dicha investigación señaló la necesidad de matizar la función efectiva de este órgano colegiado durante los siglos XVI y XVII, sobre todo porque se muestra contrario a la “visión simplista y generalizada de la administración central española en la edad Moderna” cuando distingue y contrapone el sistema de los consejos bajo los Austrias, y el de la época borbónica, en la que la gestión se lleva personalmente por los secretarios de Estado y del despacho universal<sup>26</sup>. De esta misma temática, esto es, lo relativo a la situación de los secretarios del Consejo de Indias durante el siglo XVII, C. García-Gallo presentó en un Congreso de Historia del Derecho Indiano una ponencia en la que aludía la importancia de la obra de uno los grandes secretarios del Consejo, J. Díez de la Calle<sup>27</sup>.

La organización interna de este organismo colegiado ha sido analizado en el artículo de J. A. Escudero titulado *El gobierno del Consejo de Indias entre los siglos XVI y XVII*<sup>28</sup>. En él, señala la forma de cómo operaba el organismo que “gobernaba a las Indias”. Afirmaba que la actividad del Consejo dependió del rey que en ese momento dirigía el gobierno de la Monarquía y distinguía por un lado, la forma autocrática de Carlos V y Felipe II, y, por el otro, el gobierno delegado en validos o privados de Felipe III.

Con la intención de tener una visión general dentro del desarrollo del Consejo de Indias en reinado del primer Borbón nos ha parecido conveniente consultar obras de carácter histórico-administrativos que nos permitieran contextualizar las reformas a las que fue sometido en cuarenta y seis años de reinado. Entre ellas están el escrito por Beneyto Pérez<sup>29</sup> o el de Muro Romero<sup>30</sup>. Sin embargo, en los manuales de Derecho indiano que

---

211-215; A. Gimeno Gómez, “El Consejo de Indias y la difusión del castellano”, pp. 191-210; P. Borges Morán, *El Consejo de Indias y el paso de los misioneros a América durante el siglo XVI*, pp. 181-189.

<sup>25</sup> A. García-Gallo, “El Consejo y los Secretarios en el Gobierno de las Indias en los siglos XVI y XVII”, en *Estudios de Derecho Indiano. Los orígenes españoles de las instituciones americanas*, Madrid, 1987, pp. 777-809.

<sup>26</sup> *Ibidem*, p. 777-778.

<sup>27</sup> C. García-Gallo, “La información administrativa en el Consejo de Indias. Las «Noticias» de Díez de la Calle”, en *Actas del III Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano*, Madrid, 1973, pp. 361-376.

<sup>28</sup> Vid. J. A. Escudero López, “El gobierno del Consejo...”, pp. 457-470.

<sup>29</sup> *Historia de la administración española e hispanoamericana*, Madrid, 1958.

<sup>30</sup> “Instituciones de gobierno y sociedad en Indias (1700-1760)”, en *Estructuras, gobierno y agentes de la administración en la América española siglos XVI, XVII y XVIII*, *Actas del VI Congreso del Instituto de Historia del Derecho Indiano*, Valladolid, 1984, pp. 163-232.



consultamos, el Consejo de Indias era analizado en sus competencias, organización y funcionamiento durante el reinado de los Habsburgo; en cambio, ese mismo esquema en el siglo XVIII no se realizaba y únicamente se aludía a las competencias que los decretos de nueva planta habían trasladado a las nacientes secretarías de Estado y del Despacho<sup>31</sup>.

En los años setenta G. Bernard publicó en francés la primera obra que analizaba la organización y funcionamiento tanto del Consejo de Indias, como de la Secretaría de Estado y del Despacho de Indias<sup>32</sup>. Con independencia que trataremos en profundidad la obra de Bernard al hilo de nuestra exposición, creemos necesario establecer las líneas generales sobre las que sustentó su investigación. Básicamente partía de la idea que el Consejo de Indias sufrió una progresiva decadencia a lo largo del siglo XVIII. Estableció que el destino del Consejo de Indias estuvo marcado por la desacertada decisión de parte de la mayoría de sus miembros de apoyar durante la Guerra de Sucesión al archiduque Carlos, de ahí que el vencedor de la guerra, Felipe V, perdiera la confianza en dicho Consejo, convirtiéndolo en un órgano de segundo plano, traspasando su gran poder político a las nuevas Secretarías Universales de Estado y del Despacho<sup>33</sup>.

La obra de Bernard marcó claramente una nueva línea de investigación centrada en la organización administrativa indiana durante el siglo XVIII. A través de los ocho capítulos en que se divide la monografía, estudió la historia del Consejo y de la Secretaría de Estado y del Despacho de Indias a partir de la llegada de los Borbones al poder, siendo el punto de inflexión la invasión de las tropas napoleónicas. Bernard pretendía establecer las razones por las que el Consejo perdió gran parte de su poder a favor de las instituciones administrativas -importadas allende los Pirineos-, esto es, la implantación de las Secretarías de Estado y del Despacho, siendo el estudio de ambas instituciones administrativas un todo inseparable<sup>34</sup>.

---

<sup>31</sup> Destacan las obras de J. M<sup>a</sup> Ots Capdequí, *Manual de Historia del Derecho Español en las Indias y del Derecho propiamente indiano*, Madrid, 1945, A. Levaggi, *Manual de historia del Derecho argentino; castellano-indiano*, Buenos Aires, 1986; A. Dougnac Rodríguez, *Manual de historia del Derecho indiano*, México, 1994; A. Muro Orejón, *Lecciones de historia del derecho hispano-indiano*, México, 1989; J. M. Pérez-Prendes, *La Monarquía indiana y el Estado de Derecho*, Valencia, 1989.

<sup>32</sup> *Le Secrétariat d'État et le Conseil Espagnol des Indes (1700-1808)*, Ginebra, 1972. Este texto fue completado por el propio historiador francés con la publicación de los nombres de los ministros que ocuparon las Secretarías de Estado y del Despacho. Vid. "Liste des Secrétaires d'État Espagnols de l'avènement des Bourbons jusque'en 1808", en *Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos*, t. 52, n<sup>o</sup> 2 (1956), pp. 387-394.

<sup>33</sup> *Ibidem*, pp. 6 y 203.

<sup>34</sup> *Id.* p. VII.

Para el estudio del Consejo de Indias en el reinado de los Borbones el libro de Bernard resulta de consulta indispensable, sin embargo, el periodo en cuestión fue superficialmente tratado en lo que respecta a la conformación de las relaciones entre el Consejo y las Secretarías de Estado<sup>35</sup>. Asimismo el tratamiento que se le dio al tema de las competencias del Consejo de Indias quedaron determinadas desde la perspectiva de la secretaría de Estado lo que no nos ayudó a aclarar la relación práctica entre ambas instituciones<sup>36</sup>.

Por su parte, A. F. González señaló que el Consejo de Indias entró en franca declive durante el siglo XVIII, no por haber apoyado al archiduque, como afirma Bernard, sino porque existieron otras cuestiones que provocaron la pérdida del poder del Consejo de Indias dentro de la política indiana.<sup>37</sup> Para este autor la razón de la decadencia del Consejo de Indias durante la llamada “crisis de los consejos” puede verse, entre otras razones, por la precaria situación económica de la Monarquía, misma que influyó en el presupuesto interno de la institución para el pago de los salarios de los ministros y oficiales, dando lugar a una serie de corruptelas difíciles de erradicar. Uno de esos actos de corrupción emergió desde el interior de la Corona con la venta de oficios, que llegó al extremo cuando en el reinado de Carlos II era posible adquirir plazas de fiscales y consejeros. Otra razón pudo ser el deterioro funcional del propio órgano colegiado provocado por el favoritismo de los reyes, que durante la época del último de los Austrias, no sólo introdujeron válidos en el Consejo, sino que contravinieron frecuentemente lo establecido en los decretos de limitación de oficiales dentro de la planta del propio Consejo. También existió al interior del Consejo un deterioro funcional debido, entre otras cuestiones, a que con el tiempo se fueron creando nuevos organismos administrativos que arrebataron al Consejo varias de sus atribuciones, además de los continuos roces que existían con otros consejos por atraerse para sí la mayor parte de los asuntos indianos. En otras palabras, la falta de aplicación de normas que regulaban la planta y organización interna del Consejo, condujeron a su propia decadencia, al tiempo que había que crear un nuevo organismo administrativo que supliera la acción del Consejo, las Secretarías de Estado y del Despacho<sup>38</sup>.

---

<sup>35</sup> Nos referimos a los capítulos tercero y cuarto. Id., pp. 77-134.

<sup>36</sup> Id., pp. 15-18.

<sup>37</sup> A. F. González González, “El Consejo de Indias en la...”, pp. 169-171.

<sup>38</sup> Ibídem, pp. 167-69.

Más recientemente C. de Castro en su artículo sobre *las secretarías de los consejos, las de Estado y del despacho* analizó las relaciones que se fueron trabando entre cada uno de estos órganos de la administración central a través de la figura de los secretarios. En dicho artículo la autora confirmaba las conclusiones de Bernard en el sentido de que las reformas de Felipe V provocaron que los antiguos consejos del sistema de gobierno de los Austrias perdieran poder a favor de las Secretarías de Estado y del Despacho, quienes pasaron a ocupar el primer plano dentro de la monarquía<sup>39</sup>.

Dentro de esta misma corriente interpretativa se encuentran importantes autores, entre ellos, el historiador inglés John Lynch quien al referirse a la situación del “Estado borbónico” sostuvo que cuando Felipe V asumió el poder, lo primero que hizo fue garantizar que la fortaleza de la Corona frente a sus súbditos más poderosos, de manera que degradó políticamente a los “grandes”, aumentado en más de doscientos los nuevos nobles como pago a su lealtad y por los servicios prestados en la guerra de Sucesión. Esta degradación, en opinión Lynch, fue trasladada a las instituciones, lo que vino a significar la exaltación del despacho a expensas de los consejos. A partir de entonces, el despacho pasaba “por encima de los consejos y trataba directamente con los funcionarios regionales y provinciales, excluyendo de esta forma a los aristócratas de la elaboración y ejecución de la política”<sup>40</sup>.

Continuando con dicha línea argumental A. Morales afirmaba que la dinastía Borbónica intentó reforzar el poder del monarca según el modelo francés, con una orientación política unificadora y centralizadora a fin de “racionalizar el aparato estatal y hacer más eficaz la intervención del Estado”. Según dicho autor, estos fines fueron alcanzados a partir de las reformas orgánicas a la administración central, en donde, las secretarías de Estado despojaron a los consejos de todas sus competencias de tipo ejecutivo, dejándole solo las de índole judicial<sup>41</sup>. Para Kamen en cambio, en

---

<sup>39</sup> C. de Castro Monsalve, “Las Secretarías de los Consejos...”, p. 194.

<sup>40</sup> J. Lynch, *La España del siglo XVIII*, Barcelona, 2004, pp. 57-58.

<sup>41</sup> “Política y administración en la España del siglo XVIII (notas para una sociología histórica de la administración pública”, en *Revista de Administración Pública*, nº 105 (1984), pp. 167-201. Resulta curioso que un historiador francés, J. P. Dedieu, en su artículo sobre las reformas implementadas por Felipe V en sus primeros años de reinado planteara como hipótesis si el origen de todas ellas fueron producto de la influencia francesa. Tras una interesante línea argumentativa, llega a la conclusión que efectivamente “la influencia es innegable y profunda, Felipe V había sido criado en la corte de Luis XIV”. Sin embargo, admite que existen algunas reformas, como lo fueron la Nueva Planta, que derivan directamente de ideas, técnicas administrativas o tentativas del reinado de Carlos II. Por lo que concluye que se ha vuelto insostenible la idea que “las reformas de Felipe V sean un calco de lo francés”. Vid. “La Nueva Planta en su contexto...”, pp. 137-38. Esta postura es

este período los franceses dieron énfasis al despacho, pero no para gobernar a través de este cuerpo, sino para apartar la iniciativa de los grandes y de los consejos. En su opinión, la verdadera fuente de las decisiones gubernamentales fue más bien el núcleo consistente en un ministro principal ayudado por cierto número de secretarios, que se reunían dentro o fuera del despacho según las circunstancias. Este núcleo se expansionó hasta que los propios secretarios se convirtieron en los principales ministros de la Corona<sup>42</sup>.

Por su parte, J. A. Escudero López señaló que el declive del Consejo de Indias formaba parte del mismo fenómeno de debilitamiento de los viejos consejos ante la pujanza de las nuevas secretarías, las que anulaban prácticamente todas las funciones de otros organismos, como los consejos<sup>43</sup>. Sin embargo, a diferencia de la visión de Bernard, el declive del Consejo debía explicarse por el vasto proceso general que afectó al común de los consejos y “no por un incidente particular en apariencia rayando en lo anecdótico<sup>44</sup>”.

Otra línea de investigación, contraria a la decadencia inminente del Consejo de Indias a favor de las secretarías de Estado y del despacho, reconoce la importancia que el Consejo de Indias tuvo dentro de la administración de los asuntos americanos a partir del último tercio del siglo XVIII<sup>45</sup>. Esta corriente doctrinal afirma que la expedición del real decreto de julio de 1773 supuso el renacer de esta institución, toda vez que en dicha disposición Carlos III declaró al Consejo de Indias como “Tribunal de término”, igualando su condición de alto tribunal con el Consejo de Castilla<sup>46</sup>. Entre los defensores de esta interpretación se encuentra el historiador M. Burkholder quien señaló que este decreto logró igualar a los

---

compartida, con sus propios matices por V. López Córdón “Instauración dinástica y reformismo administrativo...”, pp. 109-10 o A. Dubet, “¿La importación de un modelo francés? Acerca de algunas reformas de la administración española a principios del siglo XVIII”, en *Revista de Historia Moderna*, nº 25 (2007), pp. 207-233.

<sup>42</sup> Vid. H. Kamen, *La guerra de sucesión en España 1700-1715*, Barcelona, 1974, p. 125.

<sup>43</sup> “Reformas del Consejo de ...

<sup>44</sup> Recordemos que G. Bernard señala que la traición de algunos consejeros de Indias en la Guerra de Sucesión acarrió la destrucción del Consejo, a partir de este momento, el rey no depositó más su confianza en él. Vid. *Le Secrétariat d'État...*, p. 6.

<sup>45</sup> Ya en el siglo XIX G. Desdèvis Du Dezert había señalado que “al enorme desarrollo del imperio colonial había correspondido un desarrollo paralelo al Consejo de Indias, su importancia a finales del siglo XVIII era inmensa”. Vid. *La España del Antiguo Régimen*, Madrid, 1989, p. 317.

<sup>46</sup> Real decreto 29.07.1773. A.G.I., Indiferente General, 824. R. García ha analizado con gran detalle el contenido de dicho decreto, así como los efectos jurídicos que su promulgación generó. Vid. *El Consejo de Indias...*, pp. 120-36.

consejeros indianos en categoría, sueldos y emolumentos con los de Castilla, dando como resultado que los mejores letrados formaran parte de dicho órgano, sin pretender ahora ascender al Consejo de Castilla<sup>47</sup>. Además, desde ese momento el número de ministros indianos creció de ocho a catorce, debiendo cumplir el requisito de contar con amplia experiencia en asuntos americanos<sup>48</sup>, lo que en opinión del mencionado autor, favoreció al prestigio del Consejo dentro de la organización central de la monarquía<sup>49</sup>.

También I. Sánchez Bella en su estudio sobre la *Iglesia y el Estado en América española* señalaba que frente a la imagen que se ha generalizado de la decadencia del Consejo en el siglo XVIII, se advierte una gran vitalidad, al menos en cuestiones eclesiásticas, en la segunda mitad del siglo. Recomendando la necesidad de corregir esa imagen, bajo esta perspectiva, uno de sus discípulos, R. García, se avocó a la tarea de comprobar que durante el último tercio de setecientos el Consejo de Indias reforzó su prestigio y su influencia en las decisiones que afectaban a los territorios ultramarinos<sup>50</sup>. En efecto, en su tesis titulada *El Consejo de Indias durante los reinados de Carlos III y Carlos IV* reivindicó la posición del Consejo de Indias frente al poder de las Secretarías de Estado y del Despacho<sup>51</sup>.

La obra de R. García se ha convertido en una obra de referencia relativa al Consejo de Indias y en especial para el setecientos, que en nuestro caso particular, ha servido de guía vital para la elaboración del presente trabajo.

---

<sup>47</sup> M. A. Burkholder, "The Council of the Indies in the Late Eighteenth Century: A new Perspective", en *The Hispanic American Historical Review*, vol. 56, nº 3 (1976), p. 412.

<sup>48</sup> El real decreto 26.02.1776 ordenó a la Cámara de Indias proponer únicamente para el caso de consejeros indianos aquellos con experiencia en asuntos americanos. A.G.I., Indiferente General, 869.

<sup>49</sup> Vid. M. A. Burkholder, "The Council of the Indies...", p. 414. H. C. Claring sostuvo que aún y cuando el Consejo fue despojado de muchos de sus anteriores atribuciones, continuaba orgulloso de sus tradiciones. Vid. *El imperio hispánico en América*, Buenos Aires, 1966, p. 126. Considerando la importancia de esta interpretación, J. Barbieri afirmaba que después de las grandes reformas por las que había pasado el sistema administrativo, el Consejo de Indias continuó siendo consultado de manera significativa, y lejos de perder más atribuciones, los decretos de 1787 y 1790 confirmaron simplemente los decretos de 1717 y 1754. Vid. "The Culmination of the Bourbon reforms, 1787-1792", en *The Hispanic American Historical Review*, vol. 57, nº 1 (1977), p. 58.

<sup>50</sup> Vid. I. Sánchez Bella, *Iglesia y Estado en la América española*, Pamplona, 1990, p. 42. Años más tarde, en una obra de conjunto el mencionado autor nuevamente sugería la necesidad de revisar la idea que se tiene de la posición del Consejo de Indias en relación con la vía reservada, sobre todo referido al último tercio del siglo XVIII en donde además de una Sala de justicia, había otras dos Salas de gobierno, se equiparó al Consejo de Indias al de Castilla, fueron aumentados el número de plazas de ministros togados. Vid. "La administración central"; en *Historia del Derecho Indiano*, Madrid, 1992, pp. 194-95.

<sup>51</sup> R. D. García Pérez, *El Consejo de Indias...*

A lo largo de las cuatro partes en las que el mencionado autor dividió su obra se desgranar los elementos más importantes de un estudio de corte institucional. En la primera parte elaboró una completa síntesis de la historia del Consejo en la época de los Austrias y en los reinados de Felipe V y su hijo, Fernando VI. En el siguiente capítulo elaboró un detallado análisis tanto de los órganos personales, como de los órganos colegiados de gestión interna del Consejo. La tercera parte versó básicamente sobre las competencias asignadas a este supremo Tribunal, así como la forma en la que éste se relacionaba con otros órganos de la administración dieciochesca como son las secretarías de Estado y del despacho y que en nuestra opinión esta es una de las partes medulares del texto, sobre todo porque en ella se establece la fortaleza que en materia política mantuvo el Consejo de Indias no sólo como tribunal de término, sino que además por la potenciación que en la práctica diaria de la facultad consultiva, determinó su influencia en la toma de decisiones políticas. Finalmente, la última parte del libro describe el funcionamiento y la organización del trabajo del Consejo de Indias y su relación con la vía reservada en los años de los reinados de Carlos III y Carlos IV<sup>52</sup>.

El trabajo de R. García presenta una visión crítica sobre la pretendida decadencia del Consejo de Indias a favor de las secretarías de Estado y del despacho durante la segunda mitad del siglo XVIII, reconociendo en su lugar, el papel principal que tuvo el Consejo dentro de la administración de los territorios ultramarinos, al menos, en los años de los reinados de Carlos III y Carlos IV<sup>53</sup>. Entre las razones que pergeñó fueron, por un lado, la posición de privilegio obtenida a partir de la expedición del real decreto de 29 de julio de 1773 que declaró al Consejo de Indias como Tribunal de término<sup>54</sup>. La segunda razón, y quizá más importante, la labor consultiva realizada por el Consejo como órgano especialista en cuestiones de Indias sobre la mayor parte de los negocios americanos, por ello señala que “a pesar de haberle sido arrebatado de su conocimiento asuntos de hacienda, guerra, navegación y comercio por los decretos de 1717, 1747 y 1754,

---

<sup>52</sup> *Ibíd.*, pp. 402 y ss.

<sup>53</sup> *Id.*, pp. 7 y 8.

<sup>54</sup> “La elevación del Consejo de Indias al máximo rango de Tribunal de término, equiparable en sueldo y honores al Consejo de Castilla... abrió las puertas del Consejo a los funcionarios que prestaban sus servicios en América... La meta última de los funcionarios reales en los tribunales indios dejó de ser las Audiencias de México y Lima, pues la cúspide de la carrera judicial de estos letrados era ahora el Real y Supremo Consejo de las Indias”. *Id.*, p. 130.

normalmente eran sometidos a su deliberación para que expusiera su parecer”<sup>55</sup>.

Sin embargo, al tratarse de un estudio clásico de corte institucional, el estudio de R. García deja a un lado la influencia que las secretarías del Estado y del despacho tuvieron en la actuación del Consejo de Indias. Así lo expresa él mismo en su introducción cuando deja claro que “no hemos estimado oportuno dedicar un apartado a analizar la relación del Consejo con otras instituciones y organismos de la Monarquía, como son las Secretarías del Despacho de Indias, los demás consejos y las Audiencias indianas. Pretendemos así evitar repeticiones, por cuanto este tema es analizado a lo largo del trabajo al hilo de otras cuestiones”<sup>56</sup>.

Posteriormente, en una ponencia presentada en el XIV Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano celebrada en Lima<sup>57</sup>, el mencionado autor apuntó la problemática surgida de considerar que el Consejo de Indias perdiera su posición política privilegiada respecto a los asuntos indianos, por lo que argüía que “no puede quedar reducido a la simple contrastación del aumento o disminución de materias que son o no sometidas a su consideración”, en su lugar será necesario “penetrar en la lógica institucional del Antiguo Régimen para valorar en su justa medida el espacio que en la administración de los territorios americanos ocupaba el Consejo, las Secretarías y demás órganos de gobierno”<sup>58</sup>.

Años más tarde, dicho autor insistía en la necesidad de analizar la pérdida del poder del Consejo de Indias durante el reinado del primer Borbón<sup>59</sup>. Para lograrlo, era necesario aludir no sólo a las realidades de control de poder a la que llamó -lógica política-, sino a la traducción de esos lineamientos en normas jurídicas -lógica jurídica-. Al estudiar las reformas impuestas al Consejo de Indias señala el autor que la impresión que proporcionan las dos décadas del siglo XVIII es de desorden y confusión, ya que, en estos años de guerra, se suceden los cambios en el centro del poder, en las instituciones de gobierno, en los bandos y camarillas que conspiran por atraerse el favor real o paralizar las medidas de reforma impulsadas por el ministro de turno<sup>60</sup>.

---

<sup>55</sup> Id., p. 391.

<sup>56</sup> Id., p. 11.

<sup>57</sup> R. D. García Pérez, “El gobierno y suprema jurisdicción...”, p. 473

<sup>58</sup> *Ibíd.*, p. 474.

<sup>59</sup> R. D. García Pérez, “El Consejo de Indias en la Corte de Felipe V...”, pp. 167-201.

<sup>60</sup> *Ibíd.*, pp. 169-70.

En dicho artículo, R. García expuso con gran nitidez las posturas que en los primeros años del reinado del primer Borbón surgieron en relación con el Consejo de Indias. En esta época se habían configurado dos modelos de Monarquía con formas distintas de concebir el poder. Uno de ellos propugnaba la necesidad de neutralizar la acción de los consejos, de la nobleza y de la Iglesia de manera que el rey “se encontrara en condiciones de devolver a la monarquía hispánica la grandeza perdida”<sup>61</sup>. La otra postura, en cambio, buscaba el restablecimiento de la “constitución tradicional” a la cual iba asociado el sistema de consejos, con el consiguiente protagonismo de los letrados dentro del gobierno de la Monarquía. Sea cual sea la postura seguida por unos u otros ministros cercanos al monarca, lo cierto es que en opinión del citado autor, el Consejo de Indias lograba sobreponerse a las “las medidas que de facto o de iure” lo intentaban desplazar del lugar que tradicionalmente había ocupado, toda vez que dicho órgano indiano contaba con una larga experiencia en el gobierno americano, lo que le dotaba de un peso específico que el monarca no podía pasar por alto<sup>62</sup>.

En lo que respecta específicamente a nuestro objeto de estudio, esto es, la relación entre el Consejo de Indias y la vía reservada en el reinado de Felipe V, han sido útiles dos ponencias que se han presentado en dos Congresos Internacionales relacionados con la historia institucional iberoamericana. El primero de ellos se debe a A. M<sup>a</sup> Barrero, quien en su artículo “La vía ordinaria y la vía reservada en la administración de la América española”<sup>63</sup>. La autora analizaba las reformas legales a las que se había sometido el Consejo de Indias. Este artículo abrió una nueva línea de investigación acerca de las reformas sufridas por el dicho órgano colegiado. Centró su estudio en el análisis de los principios que inspiraron las reformas a la administración central de la Monarquía, y en especial, en los decretos de creación de las secretarías de Estado y del despacho o los que establecían las competencias de los distintos órganos que intervenían en la administración

---

<sup>61</sup> Id., p. 198.

<sup>62</sup> Id., pp. 197-98.

<sup>63</sup> En *Actas del VI Congreso del Instituto de Historia del Derecho Indiano. Estructuras, gobierno y agentes de la administración en la América española siglos XVI, XVII y XVIII*, Valladolid, 1984, pp. 233-249. Unos años antes J. Medina bajo la dirección de A. García-Gallo había presentado una comunicación cuyo objeto era la de estudiar los cambios que a lo largo del siglo XVIII se produjeron en los organismos peninsulares encargados de la gestión y tramitación de los asuntos de Indias. Vid. “Las reformas de la administración central indiana en el siglo XVIII”, en *Memorias del IV Congreso Internacional de Historia del Derecho Indiano, Revista de la Facultad de Derecho de México*, t. 26, n° 101-102 (enero-junio 1976), pp. 437-445.



central<sup>64</sup>. Si bien el artículo nos da una idea general de la normativa reformista, también es cierto, que como dice su propia autora no tiene la pretensión de elaborar un estudio exhaustivo, porque la finalidad “no es la puesta en práctica de las reformas”<sup>65</sup>. Cuestión que para nuestra investigación resulta de capital importancia.

Veinte años más tarde, M. Gómez en su ponencia “La nueva tramitación de los negocios de Indias en el siglo XVIII: de la “vía del consejo” a la “vía reservada” utilizó un enfoque más práctico, que teórico<sup>66</sup>. Describe con gran detalle la forma en la que los asuntos indianos eran despachados por los distintos órganos de la administración borbónica. Siendo la paleografía la especialidad de la mencionada autora, es fácil comprender que su hipótesis de trabajo se basara en analizar los procesos de comunicación y de gestión documental que existían entre el Consejo de Indias y la secretaría de Estado y del despacho. Al efecto, en su opinión, “no es posible entender un gobierno sin documentos”, de ahí la importancia que le da al uso generalizado del expediente, con el cual el sistema de gobierno lograba una mayor coherencia en las determinaciones y una gran eficacia en su ejecución<sup>67</sup>. A través del uso del expediente los reformadores borbónicos supieron ver la necesidad que una sola persona se hiciese responsable del curso administrativo completo, cuestión que en principio los consejos no habían logrado, ya que los papeles se “desmembraban entre las diversas dependencias que podían intervenir en el curso administrativo” haciendo lento e ineficiente el sistema administrativo<sup>68</sup>.

Dicho artículo ha sido de vital importancia para nuestra investigación, sin importar la preferencia por el análisis de los distintos documentos que se tramitaban en la Secretaría de Estado y del Despacho de Indias, la autora ha llegado a través de varios estudios anteriores a un profundo conocimiento de la organización político-administrativa del siglo XVIII, especialmente, a partir de los reinados de Carlos III y Carlos IV, los cuales han completado nuestra visión general del gobierno de los Borbones en España<sup>69</sup>.

---

<sup>64</sup> Vid. A. Barrero, “La vía ordinaria...”, p. 234.

<sup>65</sup> Loc. Cit.

<sup>66</sup> En *Actas del Congreso Internacional “El Gobierno de un mundo. Virreinos y Audiencias en la América Hispánica”*, Cuenca, 2004, pp. 203-250.

<sup>67</sup> *Ibíd.*, p. 209.

<sup>68</sup> *Id.*, p. 243.

<sup>69</sup> Véase en este sentido M. Gómez Gómez, “El archivo secreto del Consejo de Indias y sus fondos bibliográficos”, en *Historia. Instituciones. Documentos*, n° 19 (1992), pp. 187-214; *Forma y expedición... Actores del documento: oficiales, archiveros y escribientes de la Secretaría de Estado y del Despacho Universal de Indias durante el siglo XVIII*, Madrid, 2003 o *El sello y registro de Indias. Imagen y Representación*, República Checa, 2008.

Junto a la amplísima producción historiográfica relativa al estudio de la administración central hispánica, otros historiadores del derecho han dado a conocer manuscritos cuyo contenido ha facilitado a los investigadores un mejor conocimiento de las facultades, competencias y preeminencias del Consejo de Indias. El primero de ellos fue realizado en los años treinta del siglo pasado por J. Manzano. En concreto se trata de la «*Representación hecha a S.M. por el Consejo de Indias, exponiendo las reglas y leyes que ha observado para el gobierno de ellas, desvelo y dilatado tiempo que se causó en su formación y perjuicios que se podían ocasionar de alterarlas*»<sup>70</sup>. Dicha representación fue elevada en 1714 por el Consejo de Indias al monarca a fin de darle “cuenta del origen y vicisitudes de dicho órgano colegiado, de las leyes que había tenido a la vista en el gobierno de aquellos territorios, así como su funcionamiento y organización interna”<sup>71</sup>. Años más tarde P. Pérez y C. Vázquez se avocaron a la tarea de analizar e interpretar punto por punto el contenido de dicha Representación<sup>72</sup>, comentarios que completaron nuestra visión de dicho manuscrito.

Otros manuscritos de gran interés ha sido publicados por M. Gómez quien en su trabajo sobre la figura del presidente del Consejo analizó varias de las instrucciones que el secretario de la presidencia del Consejo de Indias remitía al oficial mayor de la Secretaría del Despacho de Indias acerca de las preeminencias del presidente o gobernador de las Indias<sup>73</sup>. Si bien dichas instrucciones correspondían al último tercio del siglo XVIII, el documento es de especial interés porque permite contemplar de manera general las competencias otorgadas a la figura del presidente o gobernador del Consejo de Indias.

Importante también resultó la publicación de un “borrador” acerca de las atribuciones de la Cámara y Consejo de Indias formadas por el que fuera oficial de dicho órgano, Pedro Telmo Iglesias en el año de 1812. Este documento fue incluido por R. García en el anexo de su obra del Consejo de Indias en el reinado de Carlos III y Carlos IV<sup>74</sup> y que ha sido de gran utilidad para comprender de manera más clara las competencias de uno y

---

<sup>70</sup> El original del manuscrito lo hemos consultado en B.N. Mss. II/844.

<sup>71</sup> J. Manzano Manzano, “Un documento inédito relativo a cómo funcionaba el Consejo de Indias, en *The Hispanic American Historical Review*, vol. 15, nº 3 (agosto 1935), pp. 313-351.

<sup>72</sup> M<sup>a</sup> P. Pérez Cantó y C. Vázquez Rodríguez de Alba, “El Consejo de Indias ante los decretos de Nueva Planta, 1714”, en *Boletín Americanista*, nº 38 (1988), pp. 227-245.

<sup>73</sup> M. Gómez Gómez, “Instrucciones para el gobierno del presidente o gobernador del Consejo de Indias”, en *Historia, Instituciones y Documentos*, 2004, nº 31, pp. 287-299.

<sup>74</sup> Vid. R. D. García Pérez, *El Consejo de Indias...*, pp. 519-30

otro órgano de la administración central indiana y que plenamente operaban en el reinado de Felipe V.

D. Ripodas Ardanaz en su artículo *Los “Discursos Exhortatorios” del Marqués de Bajamar*<sup>75</sup> estudió el contenido de los catorce discursos elaborados por el que fuera gobernador del Consejo de Indias, Antonio Porlier. Menciona que estos discursos exhortatorios tenían por finalidad recordar a los ministros y oficiales del Consejo sus obligaciones en las tareas de justicia y gobierno, para completar este estudio, S. Campos en el año 2000 transcribió el contenido de los catorce escritos del marqués de Bajamar<sup>76</sup>. Huelga decir que la introducción a dichos *Discursos* alude no solo al origen del Consejo, sino a su composición, competencias, funcionamiento y personal, dando con ello una idea muy clara del Consejo de Indias durante el siglo XVIII.

Si bien el tema del presente trabajo de investigación se enfoca a los años del reinado de Felipe V, no por eso hemos obviado el análisis, aunque sea somero, de aquel Consejo de Indias creado por el archiduque Carlos durante la guerra de Sucesión. Al efecto, existen varios autores que se han acercado a dicha temática, entre ellos, V. León quien reconstruyó el proyecto político del archiduque, valorando dentro del contexto de la propia guerra de las medidas que el pretendiente al trono de España impulsó, entre ellas, el mantenimiento del gobierno por consejos, como una forma de continuar con la tradición de los Austrias<sup>77</sup>. En otro artículo titulado “El reinado del archiduque Carlos en España: la continuidad de un programa dinástico de gobierno” nuevamente se reafirmó en la idea que el gobierno de Carlos III de Austria logró realizarse a través del “sistema polisinodial” de los Habsburgo, pero debido a que los consejos se encontraban en Madrid bajo el poder de Felipe V, tuvo que ordenar la reunión de dichos órgano colegiados, entre ellos el de Indias, bajo la presidencia de los ministros más antiguos, cuestión que no resultó adecuada para algunos de los miembros del Consejo indiano<sup>78</sup>. También sobre el Consejo de Indias del archiduque J. Solís Fernández<sup>79</sup> realizó un estudio definiendo la situación del Consejo de Indias en los años de la guerra Sucesión, haciendo especial hincapié en aquellos miembros que formaron parte de este órgano colegiado, así como las

---

<sup>75</sup> D. Ripodaz Adarnaz, “Los Discursos exhortatorios...”, pp. 241-272.

<sup>76</sup> A. Porlier y Sopranis, (marqués de Bajamar), *Discursos al Consejo de Indias...*

<sup>77</sup> M<sup>a</sup> V. León Sanz, *Entre Austrias y Borbones. El Archiduque Carlos y la Monarquía de España (1700-1714)*, Madrid, 1993.

<sup>78</sup> “El reinado del archiduque Carlos en España: la continuidad de un programa dinástico de gobierno”, en *Manuscripts, Revista d’Història Moderna*, n° 18 (2000), p. 46.

<sup>79</sup> J. Solís Fernández, “Notas para el estudio del Consejo...”, pp. 685-710.

consecuencias políticas y económicas que padecieron tras la victoria de Felipe V.

### 3. Fuentes de información.

En opinión de J. Sánchez-Arcilla la historia del derecho se sustenta sobre una base empírica sólida a través del análisis de textos normativos, documentos de aplicación del derecho, sentencias judiciales y la literatura jurídica<sup>80</sup>. El nivel de veracidad científica no depende, según el mencionado autor, sólo de la correcta aplicación de un método, sino que éste se encuentra íntimamente relacionado por la cantidad de fuentes conservadas y que el historiador esté dispuesto a manejar<sup>81</sup>. De lo anterior es fácil comprender la importancia que las fuentes de información tiene para contribuir en el desarrollo de cualquier investigación. Por ende, en las siguientes líneas analizaremos aquellas fuentes que se han utilizado en la preparación de este trabajo.

#### 3.1. Fuentes normativas.

En un estudio de corte institucional el estudio del ordenamiento jurídico vigente del periodo analizado resulta de vital importancia a fin de proceder a su proyección temporal. En otras palabras, para obtener una visión completa de una institución es necesario elaborar un análisis de las normas que regularon su vida y funcionamiento<sup>82</sup>. Tratándose de instituciones político-administrativas las fuentes jurídicas resultan ser un material imprescindible para la comprobación de nuestra hipótesis de trabajo. Si bien es imposible recoger de una manera exhaustiva la documentación del Consejo de Indias y de las secretarías de Estado y del despacho, si hemos intentado reunir aquellas disposiciones más importantes que sobre su organización y funcionamiento fueron dándose a lo largo de la primera mitad del dieciocho.

En los primeros años de vida el Consejo de Indias debía regirse de acuerdo con lo establecido en las Ordenanzas del Consejo de Castilla, pero al resultar insuficientes en su aplicación fue necesario la creación de un

---

<sup>80</sup> Vid. J. Sánchez-Arcilla Bernal, *Jacobus, id quod ego...*, p. 450.

<sup>81</sup> *Ibidem*, p. 449.

<sup>82</sup> *Id.*, pp. 450-51.

ordenamiento *ad hoc* a dicho órgano colegiado. Las primeras disposiciones especiales expedidas para regular las competencias y la forma de trabajar del Consejo de Indias fueron las Leyes Nuevas publicadas en 1542 y su anexo en 1543<sup>83</sup>

Pero este primer intento normativo no dio los frutos deseados, las circunstancias cambiaban continuamente debido, entre otras razones, a los nuevos descubrimientos y a las imperiosas necesidades económicas de la Corona. Con la intención de reorganizar la forma de trabajo y las atribuciones del órgano administrativo más importante para las Indias fue necesario elaborar un nuevo marco normativo. En 1571 se promulgaron las segundas Ordenanzas del Consejo de Indias<sup>84</sup>. Las ciento veintidós disposiciones buscaban ordenar sus competencias, la forma de trabajo y la organización de todo su personal. Al resultar insuficientes, treinta años más tarde fueron modificadas algunas disposiciones dispersas concedidas entre los años de 1597 y 1609<sup>85</sup>.

Con la intención de recopilar todas las normas que regulaban las competencias, estructura y organización fueron promulgadas las terceras Ordenanzas del Consejo de Indias, mismas que vieron la luz en 1636<sup>86</sup>. A partir de entonces, dichas disposiciones se convirtieron en el ordenamiento rector de la vida de dicho órgano asesor. En 1680 las Ordenanzas formaron parte del libro segundo de la Recopilación de las Leyes de Indias. Desde este momento no se volvió a crear un nuevo cuerpo normativo, si bien hubo un intento a finales del siglo XVIII, cuando Carlos IV ordenó la creación de una Junta integrada por consejeros de Indias con la obligación de examinar

---

<sup>83</sup> Las llamadas Leyes Nuevas de 1542-43 son en realidad dos Ordenanzas Reales expedidas, la más antigua en Barcelona el 20 de noviembre de 1542, con el título *Lo que se ordena para el Consejo y Audiencias de las Indias y gobernación dellas y conservación de los indios* y la otra en Valladolid a 4 de junio de 1543, con el epígrafe *Declaración de algunas de las ordenanzas que se hicieron para el buen gobierno de las indias y buen tratamiento de los naturales dellas*. Texto facsimilar y estudio A. Muro Orejón en *Anuario de Estudios Americanos*, nº 16 (1959), pp. 561-619.

<sup>84</sup> *Ordenanzas del Consejo de las Indias de 1571*, texto facsimilar de la edición de 1585. A. Muro Orejón (editor). Tirada especial del tomo XIV del *Anuario de Estudios Americanos*, Sevilla, 1957.

<sup>85</sup> Algunas de estas disposiciones quedaron contenidas en un folleto impreso denominado: *Ordenes que se han dado para el gouierno del Consejo Real de las Indias, y Secretarios del, desde el año passado de quinientos y nouenta y siete, hasta el de seiscientos y nueue*. Cuyo contenido eran las siguientes disposiciones de 06.05.1597, 25.08.1600, 31.12.1604 y 16.03.1609.

<sup>86</sup> *Ordenanzas del Consejo Real de las Indias nuevamente recopiladas por el rey D. Felipe Quarto N. S. para su gouierno establecido*, Año de 1636, Madrid, Julián Paredes, 1681, texto facsimilar y estudio M. Moranchel Pocatererra en *Cuadernos de Historia del Derecho*, nº 8 (2001), pp. 273-379 y nº 9 (2002), pp. 247-364.

cada una de las antiguas ordenanzas, las propuestas no fueron consideradas por el monarca, dicho órgano fue disuelto sin que se pudieran promulgar nuevas ordenanzas<sup>87</sup>.

Como ya se ha mencionado, el hecho que no se expidiera un nuevo ordenamiento que regulara la acción del Consejo no impedía que el monarca continuara promulgando disposiciones normativas que modificara el contenido de las de 1636. Así, desde el reinado de Carlos II encontramos nuevas disposiciones que regulaban la organización de dicho órgano colegiado. Todas estas disposiciones debían consignarse en libros-registro del Consejo<sup>88</sup>, los cuales en la actualidad se encuentran custodiados en el Archivo General de Indias<sup>89</sup>. Varias de esas disposiciones también las hemos localizado en algunos manuscritos conservados tanto Archivo Histórico Nacional<sup>90</sup>, como en la Biblioteca Nacional de Madrid<sup>91</sup>.

De la misma manera, disponemos de varias colecciones de cédulas expedidas por el Consejo de Indias que fueron recopiladas en su tiempo por Francisco Xavier Pérez<sup>92</sup> y López y Fray J. Matraya y Ricci<sup>93</sup>. En el siglo pasado A. Muro publicó una colección de cédulas del siglo XVIII<sup>94</sup>.

Mención aparte merece la consulta realizada de las obras del panameño J. de Ayala<sup>95</sup>. Nos referimos básicamente a tres de ellas: el *Diccionario de Gobierno y Legislación de Indias* constituido por veintiséis tomos

---

<sup>87</sup> R. D. García Pérez, "Las nonatas ordenanzas del Consejo de Indias de Carlos IV", en *Anuario de Estudios Americanos*, vol. 56, n° 2 (1999), pp. 651-672.

<sup>88</sup> Ordenanza 152 de 1636.

<sup>89</sup> En A.G.I. existen 48 libros de Registros Generalísimos que contienen las principales disposiciones de gobierno dictadas para las Indias. Vid. A.G.I., Indiferente General, 418-432. También existe una serie dentro del mismo Indiferente General donde se localiza todo lo relativo al personal y al régimen interno del Consejo de Indias. Vid. A.G.I., Indiferente General, 861-982.

<sup>90</sup> Para la localización de información del Consejo de Indias en el A.H.N. nos ha sido de utilidad A. González Palencia, "Extracto del Catálogo de los documentos del Consejo de Indias conservados en la Sección de Consejos del Archivo Histórico Nacional", en *Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos*, 3ª época, año 24, t. 41 (ene-dic 1920), pp. 417-448.

<sup>91</sup> B.N., Mss. 19.251. Reales decretos, órdenes y cédulas que el Consejo de Indias tiene en su tabla.

<sup>92</sup> *Teatro de la legislación universal de España e Indias, por orden cronológico de sus cuerpos, y decisiones no recopiladas: y alfabético de sus títulos y principales materias*, Madrid, 1791-1798, 28 vols.

<sup>93</sup> *Catálogo cronológico de las pragmáticas, cédulas, decretos, órdenes y resoluciones reales generales emanadas después de la Recopilación de las leyes de Indias*, advertencia preliminar J. M. Mariluz Urquijo, Buenos Aires, 1978.

<sup>94</sup> *Cedulario Americano del siglo XVIII*, Sevilla, 1969, 3 ts.

<sup>95</sup> Vid. J. M<sup>a</sup> Ots y Capdequí, "Don Manuel Josef de Ayala y la Historia Natural de Nuestra Legislación de Indias", en *The Hispanic American Historical Review*, vol. 3, n° 3 (ago. 1920), pp. 281-332.

manuscritos que se encuentran en el Archivo Histórico Nacional<sup>96</sup> y que han sido publicados por M. del Vas<sup>97</sup>. La segunda, compuesta por cuarenta y dos tomos, contienen todas aquellas disposiciones al que el *Diccionario* hacía referencia una parte de este Cedulaario de Indias se encuentra también en el Archivo Histórico Nacional<sup>98</sup>. La tercera obra, denominada *Miscelánea* de Ayala está integrada por ochenta y cuatro volúmenes que contienen las más variadas noticias referentes a diversas materias. Esta monumental obra se encuentra custodiada en los fondos de la Biblioteca del Palacio Real<sup>99</sup>.

Parar el estudio de la vida y organización de las secretarías de Estado y del despacho hemos utilizado los decretos de nueva planta incluidos en la Novísima Recopilación<sup>100</sup>. En los primeros años de experiencia de las secretarías de Estado era común que los decretos de modificación a la planta y forma de trabajar de dichos órganos fueron remitidos al Consejo de Indias para su información, de ahí que gran parte de la normativa que regía la vida de estas instituciones también se encontrara en los libros-registro del Consejo de Indias<sup>101</sup>.

Al respecto es menester apuntar un par de cuestiones. En primer lugar, las secretarías de Estado y del despacho fueron muy poco reguladas a través de disposiciones reales, sobre todo durante el reinado de Felipe V, cuando lo que se pretendía era la rapidez en la resolución de los asuntos; entonces no había por qué limitar su radio de acción. En segundo lugar, hasta el año de 1721 no existió de manera continuada una Secretaría de Estado que se ocupara especialmente de los asuntos relacionados con los territorios ultramarinos, de modo que muchas de las disposiciones de carácter administrativo nunca fueron enviadas para ser archivadas en el Consejo de Indias. Por último, no debemos olvidar que en 1734 hubo un incendio en

---

<sup>96</sup> A.H.N., Códices, L. 726-751.

<sup>97</sup> M. J. de Ayala, *Índice del Diccionario de Gobierno, y legislación de Indias y España, Norte de los acertados Actos positivos de la Experiencia. Comprehende no solo la Nomenclatura de los decretos, Consultas, Cédulas, Reglamentos, Reales Ordenes, y Oficios, sino en Compendio, o Extracto, los Casos, y Resoluciones en cada Materia a que se contrahe la Voz, como se demuestra aquí...*, Madrid, 1772. A.H.N., Códices L. 726-751. También conocido como *Diccionario de Gobierno y Legislación de Indias, edición y estudios* M. M. del Vas Mingo, Madrid, 1988-1996, 13 ts.

<sup>98</sup> A.H.N., Códices, L. 684-725.

<sup>99</sup> B.P.R., *Miscelánea de Manuel José de Ayala*. Sobre el contenido de esta colección puede verse M. M. Vas del Mingo y M. Luque Talaván, "Análisis de la Miscelánea de Manuel José de Ayala conservada en la Real Biblioteca (Palacio Real de Madrid)", en *IX Congreso Internacional de Historia de América*, 2002, vol. 1, pp. 285-292.

<sup>100</sup> Nov. Recop. 3.6.4-10.

<sup>101</sup> A.G.I., Indiferente General 538-545.

Madrid que destruyó el antiguo Palacio Real<sup>102</sup>. El fuego consumió el lugar donde se encontraba el archivo con los papeles de las Secretarías de Estado y del Despacho, por lo que en el Archivo General de Indias únicamente se encontraban los documentos que dichas oficinas habían remitido al Consejo, todo lo demás, desapareció con el fuego.

Finalmente es importante resaltar que todas las disposiciones jurídicas a las que aludiremos han sido copiadas íntegramente de las distintas fuentes, sin embargo en aras a una mayor comprensión de su contenido y rapidez en su lectura decidimos actualizar la ortografía de acuerdo a las reglas modernas de paleografía

### **3.2. Los documentos de aplicación de derecho.**

El análisis del Consejo de Indias y su relación con la vía reservada basado únicamente en el estudio de las fuentes normativas hubiera dejado a la presente investigación con unas conclusiones sino erróneas, si al menos muy incompletas. De manera que para tener la certeza que los organismos político-administrativos estudiados seguían en la práctica lo ordenado en las diferentes disposiciones jurídicas, era menester realizar un estudio utilizando documentos de aplicación del derecho<sup>103</sup>. En otras palabras, con el estudio del derecho “realmente vivido” podríamos contemplar el alcance efectivo de las medidas introducidas por los decretos de 1717 y cómo ello afectó al prestigio y a la capacidad de decisión, del que hasta ese momento había sido el garante de la política indiana<sup>104</sup>.

Antes de acercarnos a localizar información en los archivos en los que hubiera información relacionada con nuestro objeto de estudio creímos conveniente revisar documentos de aplicación del derecho que ya hubieran sido publicados en alguna colección. Para ello, decidimos centrarnos en la

---

<sup>102</sup> El relato completo sobre el incendio puede verse en F. de Salabert (marqués de la Torrecilla y de Valdeolmos), *Relato del incendio del Alcázar de Madrid en la Noche Buena de 1734*, Citado por Maura Gamazo, Gabriel, Duque de Maura, *Carlos II y su Corte*, Madrid, 1911, t. 1, apéndice 1, pp. 453-466.

<sup>103</sup> La importancia del uso de documentos de aplicación del derecho puede verse en J. Sánchez-Arcilla, “La administración de justicia...”, p. 310.

<sup>104</sup> En opinión de A. Heredia el interés general de las consultas estriba en la amplitud de la información derivada de las facultades del Consejo y de la extensión cronológica que va desde su creación en 1524, hasta su desaparición, bien entrado el siglo XIX. Las consultas, por tanto, constituyen también termómetros de la autoridad del Consejo de Indias y su evolución. Vid. *Catálogo de las Consultas del Consejo de Indias. (1600-1604)*, Prólogo, Sevilla, 1983, t. I, p. XV.



documentación que más evidenciaba la obligación por parte del Consejo de Indias de asesorar al monarca, esto es, las consultas. En efecto, el Consejo de Indias como Supremo órgano de gobierno y de justicia de Indias preceptivamente debía asesorar al monarca en todas las materias de su competencia. Dicho parecer quedaba plasmado en un documento, al que se le denominaba “consulta” el cual era elevado al rey para ayudarlo a resolver cualquier cuestión<sup>105</sup>. Las Ordenanzas de 1636 establecieron que el Consejo debía registrar en un libro las consultas que se hubieren de remitir al monarca y en otro se debían asentar según fueren respondidas junto con la debida resolución<sup>106</sup>.

En nuestra búsqueda de información nos encontramos que desde el año de 1972 A. Heredia había realizado un trabajo ingente de publicación de las consultas que el Consejo remitía al rey tan importante y completo el contenido que decidimos comenzar a trabajar con este material. El catálogo de consultas del Consejo de Indias fue publicado en dos fases. Hacia 1972 se publicaron los primeros dos tomos de consultas correspondientes al siglo XVI; el primer tomo abarcaba los años de 1529 a 1591 y el segundo de 1592 a 1599<sup>107</sup>. En su introducción la propia autora reconocía la gran cantidad de legajos que hubo de revisar para poder elaborar el mencionado catálogo. También señaló que la mayoría de la documentación utilizada fue localizada en la sección “Gobierno” del Archivo General de Indias. Una década más tarde, A. Heredia nuevamente publicó una serie continuada de doce tomos concernientes a las consultas de los años de 1605 a 1675<sup>108</sup>.

---

<sup>105</sup> Un análisis detallado sobre el término consulta puede verse en J. J. Real Díaz, *Estudio diplomático del documento indiano*, Madrid, 1991, pp. 73 y ss.

<sup>106</sup> *Mandamos, que en el nuestro Consejo de las Indias aya un libro, en que luego como se acordare, que algún negocio se nos consulte, demás de tomarlo por memoria el que hubiere de ordenar la consulta, se ponga la sustancia de lo que como dicho es se nos hubiere de consultar, y en él se pongan también los acuerdos del Consejo, que al presidente pareciere: y halla otro, en que se pongan todas las consultas que se nos hicieren, y después en ellas lo que mandaremos, y respondiéremos, todo reducido al estilo de los Secretarios, como se platica en todos los nuestros Consejos, y Tribunales, que nos consultan: y el uno y otro libro estén guardados en el Consejo con mucho secreto...*, Ordenanza 26 de 1636. *Recopilación de las leyes de los Reynos de las Indias* (en adelante Recop. Indias), Madrid, Julián de Paredes, 1681. Recop. Indias 2.2.26.

<sup>107</sup> A. Heredia Herrera, *Catálogo de las Consultas del Consejo de Indias*, Sevilla, 1972, t. I (1529-1591) y t. II (1591-1599),

<sup>108</sup> A. Heredia Herrera, *Catálogo de las Consultas del Consejo de Indias*, Sevilla, t. I (1529-1591) 1972; t. II (1591-1599) 1972; t.1 (1600-1604) 1983; t.2 (1605-1609) 1984; t.3 (1610-1616) 1984; t.4 (1617-1625) 1985; t.5 (1626-1630) 1987; t.6 (1631-1636) 1988; t.7 (1637-1643) 1990; t.8 (1644-1650) 1992; t.9 (1651-1656) 1992; t.10 (1657-1661) 1993; t.11 (1662-1668) 1994; t.12 (1669-1676) 1995.

La forma en la que hicimos uso de esta información lo señalaremos en la parte correspondiente a la metodología, baste por el momento indicar que entre los catorce tomos publicados había información proveniente de más de 32.500 consultas, material que decidimos utilizar con fines estadísticos. Empero, esta valiosa información quedaba incompleta respecto a nuestra investigación, toda vez que el mencionado *Catálogo* culminó en el año de 1675.

Para continuar con nuestra investigación debíamos encontrar y sistematizar las consultas que el Consejo había remitido a Felipe V. La búsqueda había que realizarla a través de los descriptores que al efecto el Archivo de Indias tenía dispuesto y que en su momento había elaborado en el siglo XIX Aniceto de la Higuera. Tras una revisión exhaustiva de los índices de la sección de “Gobierno”<sup>109</sup> nos percatamos que la revisión de todos los legajos era inabarcable para una sola persona, razón por la cual nos decantamos por utilizar series específicas de consultas que se encontraban en el Indiferente General<sup>110</sup>, dejando a un lado todas aquellas consultas que se encontrasen en los catorce distritos que también forman parte de la sección quinta. Aún así el radio de búsqueda seguía siendo demasiado amplio, por ello, acotamos las fuentes a algunos cuantos legajos relacionados con las series completas del Indiferente General<sup>111</sup>.

Desde el siglo XVI los monarcas dispusieron que los secretarios de los consejos debían llevar en unos asientos denominados libros-registro la información de toda la documentación que pasara por dichas instituciones. Para el caso del Consejo de Indias esta obligación recayó en sus dos secretarios, uno se haría cargo de los asuntos relacionados con la Nueva España y el otro con los del Perú<sup>112</sup>. Pero había un tipo de negocios que bien

---

<sup>109</sup> En la sección Gobierno se localizan los documentos relacionados con asuntos de gobierno, hacienda y guerra del Consejo de Indias. Está dividido en catorce secciones que corresponden al menos en el siglo XVIII a los catorce distritos audienciales (Santo Domingo, México, Guatemala, Guadalajara, Filipinas, Panamá, Lima, Cuzco, Santa Fe, Charcas, Buenos Aires, Quito, Chile y Caracas) y la décima quinta sección se integró por los legajos que corresponden al Indiferente General.

<sup>110</sup> Sobre el contenido del Indiferente General puede verse mi artículo “Gobierno, Justicia, Guerra y Hacienda: una nueva visión del “Indiferente General” del Archivo General de Indias”, en *Cuadernos de Historia del Derecho*, n° 14 (2007), pp. 329-398.

<sup>111</sup> A.G.I., Indiferente General, 552-558.

<sup>112</sup> *Al uno de los dos Secretarios del Consejo de las Indias le ha de pertenecer, y aplicarsele, como por la presente le aplicamos, y encomendamos, todos los negocios, y materias tocantes al Estado, Gobierno, y Gracia, Hacienda, y Guerra, y otros cualesquiera, así eclesiásticos, como Seculares, que no fueren pleitos de justicia entre partes, visitas, ni residencias de todos los Reinos y Provincias del Perú, Chile, Tierrafirme, y Nuevo Reino de Granada, en que al presente ay seis Audiencias Reales, que son la de*

podía corresponder indistintamente a cualquiera de los dos secretarios por lo que a estos asuntos se les denominó de “Indiferente” y que según las Ordenanzas de 1636 correspondía al secretario más antiguo. Entre los asuntos que se debían entender por indiferente se encontraban los siguientes:

*...algunos negocios comunes, y neutrales, que no reciben cómoda división, es nuestra voluntad y mandamos, que estos, y todas las cosas generales, y que de oficio se mandaren despachar para todas las Indias, indiferente, y indistintamente: la correspondencia general con la Casa de la Contratación, Consulado, y Comercio de Sevilla, y con las Islas de Canaria, despachos generales para Roma, y para estos Reinos, así Eclesiásticas, como Seculares: y los que tocaren al mismo Consejo, y á su gobierno, Ministros, y Oficiales dél, se despachen y pertenezcan, así los que se trataren en el dicho Consejo, como en las Juntas particulares<sup>113</sup>.*

Estos registros debían conservarse en el archivo del Consejo, razón por la cual en la actualidad se encuentran custodiados precisamente el Archivo General de Indias dentro de la sección quinta también llamada Sección de Gobierno. Después de analizar los índices que se habían elaborado de esta sección del Archivo nos dimos cuenta que existían libros-registro de consultas titulados de “Indiferente General del Perú”<sup>114</sup> y de “Indiferente General de Nueva España”<sup>115</sup>. Faltaba por encontrar los libros registro de las consultas propiamente del Indiferente General. Al efecto, localizamos toda una serie de legajos titulados “Registros de consultas” que tenían la ventaja de estar digitalizados y contaban con índices, condiciones que facilitaban su uso. Si bien no se trataba de un material especialmente extenso, si creímos

---

*Lima, Charcas, Quito, Chile, Nuevo Reino de Granada, y Panamá, con todo lo que se comprehende debajo de la jurisdicción y distrito dellas. Y al otro Secretario le ha de tocar y pertenecer la negociación y despacho de todo lo que en las mismas materias y forma toca á las Provincias de la Nueva España, Guatemala, Filipinas, Nueva Galicia, é Isla Española, en que ay otras cinco Audiencias, con todo lo que se comprehende debajo de la jurisdicción y distrito dellas. Y es nuestra voluntad, que por mano de los dichos dos Secretarios, y en sus oficios se hagan y despachen todos los dichos negocios, assi los que se resolvieren y acordaren en el Consejo, como en las Juntas de Guerra, y Hacienda, y otras qualesquiera, que Nos mandaremos hacer para los dichos negocios, ó alguno dellos.* Ordenanza 115 de 1636. Recop. Indias 2.6.2.

<sup>113</sup> Ordenanza 117 de 1636. Recop. Indias 2.6.4.

<sup>114</sup> Nos referimos a los legajos “Consultas Indiferente del Perú” y corresponde a los siguientes expedientes: A.G.I., Indiferente General, 269 (1701-1702); 270 (1703-1704), 271 (1705-1707); 272 (1708-1709); 273 (1710-1711); 274 (1712-1713); 275 (1714-1716); 276 (1717-1723); 277 (1724-1726); 278 (1727-1732); 279 (1733-1743); 280 (1744-1759) y 281 (1721-1750).

<sup>115</sup> Titulados bajo el nombre “Consultas, reales decretos y órdenes. Indiferente Nueva España” correspondientes a los siguientes expedientes: A.G.I., Indiferente General, 1 (1652-1701); 2 (1702-1704), 3 (1705-1710); 4 (1711-1712); 5 (1713-1715); 6 (1716-1721); 7 (1722-1736) y 8 (1737-1756).

que tenía la suficiente entidad para ser utilizados en una base de datos. Por lo tanto, para la presente investigación decimos utilizar la información que nos proporcionaron los mencionados libros registro de consultas de la sección Indiferente General.

Con el fin de completar nuestra base de datos requeríamos obtener información de los asuntos que la vía reservada remitía al Consejo de Indias durante el periodo en cuestión, sin embargo nos encontramos con algunos inconvenientes. El primero de ellos, la falta de libros-registro de las secretarías de Estado y del despacho, capaces de proporcionar información clara y sistematizada.

Para M. Gómez, en realidad, referirse al término libros-registro de la Secretarías resulta dudoso, ya que si bien era la denominación común de la época, afirma que la inexistencia de unos libros de entrada específicos obligaron a la oficina a registrar documentos de cierta importancia. Dichos libros se titularon “Registros de decretos”, denominación, que según la mencionada autora, generaba confusión para distinguirlos de los procedentes del Consejo de Indias<sup>116</sup>. Aún así, la mencionada historiadora localizó, casi completa, la serie de libros Registros denominada de “decretos” desde el año de 1732<sup>117</sup>; sin embargo, señala que no ha podido encontrar los libros referentes a las consultas del Consejo, libros que según un expediente relativo al Repartimiento de Negociados de 19 de agosto de 1737 obligaba a la Secretaría de Estado y del Despacho a llevar y a asentar un resumen de las consultas formadas por el Consejo de Indias y remitidas a la Secretaría para conocimiento del monarca<sup>118</sup>.

Otra de las razones por las que carecemos de documentación de primera mano emitida por la vía reservada sobre todo durante los primeros años de su puesta en marcha, es porque como ya se ha mencionado, gran parte de la documentación quedó calcinada en el incendio del Palacio Real de 1734<sup>119</sup>.

---

<sup>116</sup> M. Gómez Gómez, *Forma y expedición...*, pp. 178-79.

<sup>117</sup> Se refiere a los siguientes legajos: A.G.I., Indiferente General, 542,L.4 (11.03.1732-28.01.1736); 543 (1733-1766); 543 L.1 (15.10.1733-28.10.1742 ); 543 L.2 (23.06.1736-29.04.1751); 543 L.3 (06.02.1736-13.06.1739) y 543 L.4 (15.09.1740-05.06.1766).

<sup>118</sup> Otros registros que las Secretarías de Estado y del Despacho estaban obligados a llevar eran los llamados “decretos” donde aparecían también reales órdenes, otros denominados “Órdenes generales y Circulares” y por último el llamado “Cédulas y Despachos diversos”. El Repartimiento de Negociado puede verse en A.G.I., Indiferente General, 918. Citado por M. Gómez Gómez, *Forma y expedición...*, pp. 178, nota 188.

<sup>119</sup> Desde su creación, el Consejo de Indias tuvo como sede el Palacio Real en donde se despachaban todos los asuntos. Con las reformas de 1717 Felipe V decidió trasladarlo al Palacio que perteneció al Duque de Uceda y a la reina Mariana de Austria al que se le denominó con el tiempo el “Palacio de los Consejos”; en cambio, las Secretarías de Estado

Por consiguiente, sólo en el Archivo de Indias podemos localizar dicha información y, tampoco se han hallado los libros-registros relacionados con el Consejo de Indias.

Debido a todos estos inconvenientes optamos por analizar la relación entre la vía reservada y el Consejo de Indias desde la óptica de esta última institución. Si contamos con los datos que aportan las consultas emitidas por el Consejo en relación a su trabajo diario y que posteriormente debía remitir al monarca a través de la vía reservada, era posible comprobar con cierta certeza hasta qué punto el sistema normativo impuesto a través de los decretos de Nueva Planta eran llevados a la práctica. Lo que a su vez nos permitiría constatar la influencia que el Consejo de Indias conservó en la primera parte del siglo XVIII.

### 3.3. Literatura Jurídica.

Con el fin de obtener una mayor información relacionada con la normativa que regía la vida del Consejo de Indias, ha sido de obligada consulta los escritos de juristas de la época, quienes en sus obras, desgajan el contenido de las disposiciones. En nuestro caso, han sido de gran utilidad las obras escritas por Antonio Martínez de Salazar<sup>120</sup>, Pedro Escolano de Arrieta<sup>121</sup>, Antonio Sánchez Santiago<sup>122</sup> o Ángel Antonio Henry Veira<sup>123</sup>, entre otros muchos.

Mención aparte es el libro de Francisco Xavier Garma y Durán<sup>124</sup>, archivero de la Corona de Aragón quien en 1751 imprimió el cuarto tomo del *Theatro Universal de España*. Esta obra presenta una amplísima y

---

y del Despacho permanecieron hasta los primeros años s. XIX en el Palacio Real. Con el incendio del Palacio en 1718 hubo que realizar una transferencia masiva de toda la documentación al Archivo de Simancas y el gran incendio del Alcázar del 24 de diciembre de 1734 acabó con lo poco que quedaba. Vid. M<sup>a</sup> J. Álvarez-Coca González, “La Cámara de Castilla: Secretaría de Gracia y Justicia. Problemas archivísticos e investigación histórica”, en *El tercer poder. Hacia una comprensión histórica de la justicia contemporánea en España*, Frankfurt, 1992, p. 17.

<sup>120</sup> *Colección de memorias y noticias...*

<sup>121</sup> *Práctica del Consejo Real en el despacho de los negocios consultivos, instructivos y contenciosos con distinción de los que pertenecen al Consejo Pleno, o a cada Sala en Particular: y las fórmulas y cédulas, provisiones y certificaciones respectivas*, Madrid, 1796.

<sup>122</sup> *Idea elemental de los tribunales de la Corte en su actual estado*, Madrid, 1788.

<sup>123</sup> *El oficinista instruido o práctica de oficinas reales*, Madrid, 1815, ed. facsimilar, Madrid, 2000.

<sup>124</sup> *Theatro Universal de España e Indias*, Madrid, 1751, t. 4.

documentada visión de los distintos consejos y tribunales de la Monarquía, cuya información que ha sido vital para el estudio del Consejo de Indias en el reinado de Felipe V.

En el siglo de la ilustración no era extraño hallar obras relacionadas con la práctica administrativa. Desde muy pronto surgieron textos con una finalidad más pragmática que teórica. Entre este tipo de literatura pueden incluirse la *Practica de secretarios* escrita por Antonio de Prado y Rozas<sup>125</sup>, oficial de la Secretaría de Estado y del Despacho de Estado y Guerra, quien a lo largo de ochenta capítulos recomendaba a los oficiales de las distintas Secretarías de Estado la forma en que debían despachar y resolver los asuntos que el Secretario del ramo les había encomendado. Otra obra con pretensiones más didácticas que teóricas fue la publicada por Gaspar Ezpeleta y Mallol<sup>126</sup>.

La relación que existía entre el Consejo de Indias y otros órganos de la administración central de la Monarquía quedaron patentes en el importante Informe que el archivero de la Primera Secretaría, Agustín Riol remitiera a Felipe V en junio de 1726<sup>127</sup>.

El estudio de las reformas al ordenamiento del Consejo de Indias durante el siglo XVIII no hubiera sido completo, sino hubiéramos contado con la visión sistemática y ordenada que Manuel J. de Ayala elaboró a sus comentarios a las disposiciones contenidas en el capítulo segundo del libro segundo de la Recopilación de Indias. Sus *Notas* nos aportaron la información necesaria para dilucidar la vigencia de las Ordenanzas del Consejo de 1636 y estar en condiciones de establecer hasta qué punto durante el reinado de Felipe V continuaron en vigor gran parte de ellas<sup>128</sup>.

---

<sup>125</sup> *Reglas para oficiales de secretarías y Catálogo de los secretarios del Despacho y del Consejo de Estado que ha habido desde los señores Reyes Católicos hasta el presente, junto con las plantas dadas a las secretarías*, edit. J. M<sup>a</sup> García Madaira, Las Secretarías del Despacho. Dos Estudios sobre Historia de la Administración, Madrid, 1982. pp. 79-184.

<sup>126</sup> *Práctica de secretarios, que contiene una concisa explicación de las calidades de este empleo, distinción de las cartas misivas y declaración de las circunstancias principales de que deben constar para tenerse por bien escritas*, Barcelona, 1758.

<sup>127</sup> “Informe que hizo Su Majestad en 16 de junio de 1726 sobre la creación, erección e institución de los Consejos y Tribunales, las instrucciones que se les impusieron para obrar según su instituto; el estado que hoy tienen los papeles de sus archivos, y la forma de su antiguo y actual manejo; las causas que hubo en cada una para etc.”, en *Semanario Erudito de Valladares*, Madrid, n° 3 (1787), pp. 73-236.

<sup>128</sup> *Notas a la Recopilación de Indias. Origen e historia ilustrada de las Leyes de Indias*, Madrid, 1946.

#### 4. Metodología.

Todo método de investigación requiere el uso de técnicas específicas que sean capaces de hacer posible una mejor aplicación del mismo. Una de esas técnicas consistía en el adecuado acopio, sistematización e interpretación de datos extraídos de fuentes de investigación. Para ello lo primero que había que hacer era confeccionar una base de datos capaz de contener la información proporcionada en los catorce tomos del Catálogo de Consultas que en su tiempo publicó A. Heredia<sup>129</sup>.

En los campos que formaban parte de la base incluimos la fecha de la consulta, el nombre del monarca al que se había remitido la consulta y la localización del documento dentro del Archivo de Indias. Pero el grueso de nuestra información debería quedar refundida en dos campos fundamentales, por un lado, la materia sobre la que versaba la consulta, esto es, si se trataba de un asunto de gobierno, justicia, guerra y hacienda, todos ellos considerados como los grandes principios rectores de la administración indiana<sup>130</sup> y por el otro, la resolución que el monarca daba a la consulta<sup>131</sup>. Ambos campos podían ser de gran utilidad buscando responder dos cuestiones, la primera conocer cuál era la competencia más comúnmente ejercida por el Consejo y, la segunda, para reconocer hasta qué punto los monarcas aceptaron positivamente la opinión de su Consejo.

Para el caso de la base de datos que recogía las consultas que el Consejo de Indias remitía al monarca tuvimos que partir de una muestra. Como ya se ha mencionado, la sección Gobierno del Archivo General de Indias está dividida en 14 distritos audienciales y el Indiferente General. En todas estas “sub-secciones” se encontraban legajos denominados libros de Consultas ordenados cronológicamente, situación que hacía inviable su utilización, ya que nos estamos refiriendo a más de legajos por consultar. Una manera más sencilla de obtener la información fue acudir nuevamente a dicha sección de Indiferente General, en ella, se remitían al menos todas las consultas que afectaban al grueso de los territorios. Además justamente en esta sección encontramos los registros generales en donde se extractaba en ellos el

---

<sup>129</sup> Vid. *Catálogo de consultas*....

<sup>130</sup> Vid. A. García Gallo, “Los principios rectores de la organización territorial...”, pp. 313-347.

<sup>131</sup> Entre todas las respuestas que el monarca daba a las consultas decidimos encuadrarlas en siete categorías a saber: «Si», «No», «Nombra», «Envía», «Resolución en la consulta», «Nueva consulta», «Quedo enterado», «Sin respuesta», «Firmado» y «Resuelto en otra consulta».

contenido de la consulta, los consejeros presentes a la hora de votar dicha consulta y la propia decisión del monarca. De manera que a la hora de confeccionar la base de datos relativa a las consultas que el Consejo de Indias remitía al monarca fue posible contar con material más que suficiente que pudiera servirnos de base para corroborar nuestras hipótesis iniciales<sup>132</sup>.

Cuando empezamos a capturar las consultas del Consejo de Indias durante el reinado de Felipe V, decidimos utilizar la misma base de datos, sobre todo, porque el tipo de documento no había variado en lo absoluto y el contenido era similar, además de que en los libros registro que utilizamos también había quedado plasmada la decisión real. Si bien el número de documentos utilizados era sensiblemente inferior, por razones estadísticas, esta variación no significaría un gran cambio en los resultados.

Una vez concluidas ambas bases de datos estaríamos en posición de hacer uso de la estadística a fin de obtener ciertos resultados cuantitativos. Si bien es posible utilizar complicados métodos estadísticos, creímos posible que con el uso de operaciones estadísticas sencillas, nuestros resultados podían ser correctos. Así por ejemplo, es posible apreciar estadísticamente el número de consultas que sobre materia de gobierno, guerra o hacienda resolvía el Consejo después del año de 1717 cuando a partir de los decretos de Nueva Planta le quedaron excluidos de su conocimiento dichas atribuciones. También a través del análisis de la incidencia en las respuestas que el monarca daba a las opiniones del Consejo en las consultas podríamos saber el grado de implicación del Consejo en la toma de decisiones. Información que señalaremos en el capítulo de resultados.

Por otro lado, en el año 2000 J. P. Dedieu<sup>133</sup> propuso un cambio de la metodología que hasta entonces se venía desarrollando en el estudio de las

---

<sup>132</sup> A.G.I., Indiferente General, 553A L.3 (03.08.1702-22.12.1705); 553A L.4 (01.01.1703-30.12.1711); 553B L.1 (01.09.1699-14.12.1700); 553B L.2 (21.04.1701-31.12.1702); 554 L.1 (16.11.1706-05.11.1707); 554 L.2 (13.10.1707-27.11.1708); 554 L.3 (01.01.1712-13.01.1740); 555A L.1 (16.04.1734-11.08.1738); 555 BL.3 (01.01.1736-08.02.1739); 555B L.4 (06.04.1739-21.10.1740); 556 L.1 (18.03.1738-11.06.1746); 567 L.1 (19.10.1709-04.09.1710); 567 L.2 (14.12.1708-21.01.1710); 567 L.3 (06.02.1711-09.10.1711); 568 L.4 (13.10.1711-03.06.1712); 568 L.5 (06.05.1712-16.09.1712); 568 L.6 (16.09.1712-06.02.1713); 569 L.7 (26.02.1713-14.07.1713); 569 L.8 (31.07.1713-22.01.1714); 570 L.1 (04.12.1708-11.08.1710); 570 L.2 (24.02.1710-11.08.1710); 570 L.3 (21.08.1710-31.10.1711); 571 L.4 (13.10.1711-08.11.1712); 571 L.5 (13.06.1713-10.01.1714); 572 L.6 (10.01.1714-10.08.1714); 572 L.7 (06.06.1714-02.05.1716).

<sup>133</sup> J. P. Dedieu, "Procesos y redes. Historia de las Instituciones administrativas de la época moderna. Hoy", en *La pluma, la mitra y la espada. Estudios de Historia Institucional en la Edad Moderna*, Madrid, 2000, pp. 13-30.



instituciones administrativas de la edad Moderna. Entre sus propuestas encontramos la inclusión del estudio “del proceso”, entendido este como una herramienta necesaria para comprender la organización del trabajo en las empresas, especialmente en las oficinas. En opinión del mencionado autor, mediante el uso de esta metodología no sólo se podría obtener un organigrama que indicara las distintas oficinas y el grado de subordinación de unas a otras, sino que se lograba seguir, en la medida de lo posible, cada una de las operaciones que la institución estaba capacitada para efectuar, así como los pasos sucesivos que se daban<sup>134</sup>. Así, podían aparecer aquellos elementos del organigrama según la función realizada y no basado en la importancia que las disposiciones jurídicas les atribuían, pudiéndose obtener un esquema que permitiera comprender y caracterizar la forma de organización de la institución estudiada<sup>135</sup>.

Analizando a priori dichas propuestas y tras haber acudido a una conferencia presentada por J. Sánchez-Arcilla<sup>136</sup>, nos pareció conveniente llevar a cabo esta metodología. El punto de base partió de la idea que la forma de trabajo del Consejo de Indias y de las secretarías de Estado y del despacho se asemejaban al estilo de oficinas administrativas modernas, en donde, se llevaban a cabo una serie de procedimientos dirigidos a un fin específico. Si lo que buscamos es analizar cómo se relacionaban ambas instituciones, el estudio del desarrollo de sus respectivos procesos, podía ser una herramienta muy útil para la contrastación de nuestra hipótesis de trabajo.

Para la confección de dichos organigramas era necesario en principio acudir a las disposiciones normativas creadas al efecto. En el caso del Consejo de Indias dichas disposiciones eran de fácil alcance, básicamente las Ordenanzas del Consejo de 1636 tenían contemplado su funcionamiento. Pero como consecuencia de la Guerra de Sucesión, Felipe V decidió variar la planta del Consejo lo que repercutió al mismo tiempo en la forma de trabajo. Con el tiempo, el cambio de rumbo de esta vía de Consejo vino dada por la inclusión de las secretarías de Estado y del despacho a través de la denominada vía reservada dentro del trámite administrativo que se realizaba en el Consejo, información que los propios reales decretos nos lo iban aportando. Sin embargo, en el caso de los procesos derivados de la vía

---

<sup>134</sup> *Ibíd.*, p. 26.

<sup>135</sup> *Id.*, p. 30.

<sup>136</sup> “El gobierno de las Indias desde la metrópoli: el Consejo de Indias y la Secretaría del Despacho”. Conferencia pronunciada en el *II Seminario 2009: Documentación hispanoamericana en Archivos y Bibliotecas madrileña*, Departamento de Ciencias y Técnicas Historiográficas, UCM, 3.11.2009.

reservada las fuentes no eran tan claras, ya que las secretarías de Estado y del despacho fueron “organismos de gobierno legislativamente abiertos en todo momento a nuevas prácticas burocráticas”<sup>137</sup> por lo que en los primeros años de su implantación pocas eran las reglas de organización que se habían creado. Solo hacia el final del reinado de Felipe V fue factible localizar disposiciones internas que regulaban de manera general la tramitación de los expedientes a través de la vía reservada.

Es importante mencionar que para la confección de los procesos llevados a cabo en la Secretaría de Estado y del Despacho de Indias han sido de guía los trabajos elaborados por la M. Gómez, el detalle con el que analiza todos los aspectos que integraban un expediente tramitado a través de la vía reservada han sido vitales para nuestra investigación<sup>138</sup>.

---

<sup>137</sup> M. Gómez Gómez, *Forma y expedición...*, pp. 127-28.

<sup>138</sup> *Ibidem...*, pp. 125 y ss. Más modernamente en sus obras: “La nueva tramitación de los negocios...”, pp. 203-250 y *El sello y registro de Indias...*, pp. 145 y ss.

## I. EL CONSEJO DE INDIAS DENTRO DEL “GOBIERNO POR CONSEJOS”

### 1. El desarrollo del *deber de consejo* y su institucionalización en Indias.

El origen del deber de consejo<sup>1</sup> aparece recogido en los textos bíblicos en donde se recomienda que *sin consejo nada emprendas, así no tendrás que arrepentirte de lo hecho*<sup>2</sup>, siendo el propio Espíritu Santo el instituido para socorro de la débil inteligencia humana. Sin embargo, el propio texto advierte que este consejo sólo lo debe solicitar aquel que está dotado de prudencia y de saber *al necio le parece derecho su camino, más el que escucha el consejo es sabio*<sup>3</sup>, de ahí que el consejo lo puede recabar aquel que está llamado a tomar una decisión importante, tal y como lo menciona el libro de Eclesiástico *a toda empresa preceda el consejo*<sup>4</sup>. Por ello, Juan Eusebio Nieremberg dirá *el consejo aprovecha, no a quien tiene mucho entendimiento para conocerle, sino a quien tiene poca voluntad de no resistirle*<sup>5</sup>. En la misma línea Saavedra Fajardo expresará que *no todo se puede vencer con la fuerza, a donde ni esta, ni la celeridad puede llegar, llega el consejo*<sup>6</sup>.

Este deber de consejo se tradujo dentro de los reinos hispánicos en un órgano colegiado creado por los reyes a fin de tomar decisiones cruciales para la vida del reino contando con la opinión de aquellos a los que el

---

<sup>1</sup> Según el *Diccionario de Autoridades* (1780) la palabra consejo tiene varias acepciones entre ellas la de “parecer o dictamen que se da o toma para hacer o dejar de hacer alguna cosa” o “el acuerdo o resolución que se ha tomado sobre ello”. También significa el Tribunal supremo que está compuesto de diferentes ministros, con un presidente o gobernador que tiene el rey en su Corte para los negocios de gobierno y la administración de la justicia, siendo por excelencia consejo el Consejo Real de Castilla. Se llama también consejo a la casa o sitio donde se juntan los consejos. A efectos del presente tema la acepción que nos interesa es la primera de ellas, esto es, la del dictamen o parecer para hacer algo.

<sup>2</sup> Proverbios 11, 14.

<sup>3</sup> Proverbios 12, 15.

<sup>4</sup> Eclesiástico 37, 20.

<sup>5</sup> J. E. Nieremberg, *Centuria de Dictámenes Prudentes*, Bruselas, 1664, cent IV, Dict. General, Década 1, f. 99.

<sup>6</sup> D. Saavedra Fajardo, *Idea de un Príncipe político cristiano representado en Cien Empresas*, Milán, 1642, Empresa 84.

monarca les otorgaba su confianza. Al efecto, existen diferentes teorías que buscan explicar el origen de dicho órgano asesor, sin embargo, según afirma J. Sánchez-Arcilla es difícil precisar la fecha exacta de creación, sobre todo porque desde tiempos lejanos los reyes habían sido acompañados por un conjunto de personas a su servicio, que le asesoraban en las cuestiones más importantes del reino<sup>7</sup>, por lo que el Consejo ha existido siempre<sup>8</sup>. Ahora bien, según afirma el citado autor, sí que es posible precisar cómo ese deber de asesorar al rey dio lugar a la creación de un Consejo Real integrado por las personas más cercanas y elegidas por él, a quienes se les encomendaba el ejercicio de competencias específicas<sup>9</sup>.

En esta misma línea, S. de Dios afirmaba que un grave problema surgido para explicar el origen del Consejo Real se generaba por el planteamiento de base, esto es, el identificar la institución del Consejo Real con la función de consejo, de aconsejar al rey, lo que llevaba a diferir sin posibilidad de solución el problema de los orígenes, sin considerar que el Consejo Real era un órgano complejo de la administración central que sólo podía surgir y desarrollar su actividad dentro de una organización política determinada<sup>10</sup>.

Ciertamente no es nuestra intención analizar los orígenes del Consejo Real, sólo haremos mención a la existencia de las varias corrientes historiográficas que han tratado de explicar la institucionalización de dicho Consejo, porque como ya se expresó, el deber de asesorar al monarca ha existido desde tiempos remotos y lo que importa ahora es determinar cómo ese deber de consejo fue formalizado en un órgano colegiado organizado jurídicamente, de cuya multiplicación surgió el gobierno por consejos, también llamado por algunos autores como “régimen polisinodial”<sup>11</sup> formado por consejos permanentes con competencias y atribuciones delimitadas.

---

<sup>7</sup> Vid. J. Sánchez-Arcilla, *La administración de justicia real en León y Castilla en la Baja Edad Media (1252-1504)*, tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 1980, p. 531.

<sup>8</sup> *Ibíd.*, p. 537.

<sup>9</sup> *Íd.*, p. 532.

<sup>10</sup> Vid. S. de Dios, *El Consejo Real de Castilla (1385-1522)*, Madrid, 1982, p. 8.

<sup>11</sup> Es importante señalar que la palabra “polisinodia” no existe en el Diccionario de la RAE, aún así es un término que se ha utilizado comúnmente para referirse “aquella forma de gobierno que se realiza a través de la implantación de un régimen de consejos”. P. Fernández Albaladejo, *Fragmentos de Monarquía*, Madrid, 1992, p. 89.

Una de las líneas historiográficas más extendida es aquella que fundamentaba el origen del Consejo Real a la época visigótica<sup>12</sup>, especialmente en las Aulas regias y a su posterior evolución en el *Palatium Regis* asturleonés y en las Curias de los reinos altomedievales<sup>13</sup>. Otra postura atribuyó a Fernando III la fundación de dicho Consejo Real<sup>14</sup>; incluso Castillo de Bobadilla llegó afirmar que el antecedente próximo del Consejo se encontraba en el Adelantado Mayor<sup>15</sup>. En cambio, otros autores determinaron que el origen se remontaba al año de 1385 con la expedición de las Ordenanzas dadas por Juan I<sup>16</sup>. Finalmente hubo una corriente que

---

<sup>12</sup> Sobre esta corriente historiográfica S. de Dios elabora una brillante refutación a la teoría que afirmaba que el origen del Consejo de Castilla se encontraba en las instituciones visigodas. Vid. S. de Dios, *El Consejo Real...*, p. 9-34.

<sup>13</sup> Entre los autores que relacionan el origen del Consejo a épocas visigóticas y altomedievales se encuentran por ejemplo P. Cantos Benitez, *Escrutinio de maravedises y monedas de oro antiguas, su valor, reducción y cambio a las monedas corrientes*, Madrid, 1763, pp. 11-13; P. Escolano de Arrieta, *Práctica del Consejo Real...*, t. 1, pp. 1-4; F. Martínez Marina, *Teoría de las Cortes o grandes juntas de los reinos de León y Castilla. Monumentos de su constitución política y de la soberanía del pueblo*, Madrid, 1813, t. 1, pp. 28-29. En el siglo XX defendieron esta postura C. Sánchez Albornoz, “El Aula Regia y las asambleas políticas de los Godos”, en *Cuadernos de Historia del Derecho Español*, nº 5 (1946), pp. 5-110 y en “La Curia Regia Portuguesa. Siglos XII y XIII”, en *Investigaciones y documentos sobre las instituciones hispanas*, Santiago de Chile, 1970, pp. 382-459; N. Guglielmi, *La Curia Regia en León y Castilla*, en *Cuadernos de Historia del Derecho Español*, Buenos Aires, nº 23-24 (1955), pp. 116-267 y nº 28 (1958), pp. 5-42; L. G. de Valdeavellano, *Curso de historia de las instituciones españolas. De los orígenes al final de la Edad Media*, Madrid, 1970, pp. 450-456 y más modernamente J. M. Pérez Prendes, *Cortes de Castilla y León*, Madrid, 2000, pp. 15 y ss.

<sup>14</sup> Con sus propios matices, entre los autores que establecían que el Consejo Real provenía de la época de Fernando III se encontraban J. de Mariana, *Historia General de España*, Madrid, 1873, lib. 13, cap. 8; P. de Salazar de Mendoza, *Origen de las dignidades seglares de Castilla y León con relación sumaria de los reyes de estos Reynos*, Madrid, 1696, p. 141; A. M. Burriel, *Memorias para la vida del Señor Rey Don Fernando III*, Madrid, 1800, vol. 1, cap. 51, p. 88; A. Núñez de Castro, *Vida de S. Fernando III, rey de Castilla y León*, Madrid, 1787, pp. 165-167; A. Marichalar y C. Manrique, *Historia de la Legislación y Recitaciones del Derecho Civil en España*, Madrid, 1861, t. 2, pp. 510-511. También existieron detractores de esta teoría como lo fueron: J. Sempere y Guarinos, *Historia del Derecho Español*, Madrid, 1822, pp. 359-365; M. Danvila y Collado, *El poder civil en España*, Madrid, 1883, t. 1, pp. 125 y Torreánaz (conde de), *Los consejos del Rey durante la Edad Media*, Madrid, 1884, t. 1, pp. 115-119.

<sup>15</sup> Vid. J. Castillo de Bobadilla, *Política para Corregidores y señores de vasallos*, Madrid, 1597, lib. 1, cap. 2, p. 16.

<sup>16</sup> Esta postura es seguida por J. Sempere y Guarinos, *Histoire des Cortès D’Espagne*, Burdeos, 1815, pp. 121-122 y en su *Historia del Derecho...*, p. 422; F. Cos Gayón, *Historia de la administración pública de España en sus diferentes ramos de derecho político, diplomacia, organización administrativa y hacienda desde la dominación romana hasta nuestros días*, Madrid, 1851, pp. 107-108; M. Colmeiro, *De la Constitución y del Gobierno de los Reinos de León y Castilla*, Madrid, 1855, t. 2, pp. 244-245; M. Danvila y Collado, *El poder civil...*, t. 1, pp. 133 y Torreánaz (conde de), *Los consejos del Rey...*, pp. 136-137. Entre los autores del siglo pasado que compartieron la idea de la creación del Consejo Real

estableció el origen de dicho órgano colegiado dentro de un continuo proceso de desarrollo de las instituciones visigóticas y altomedievales, aunque reconociendo la importancia de las Ordenanzas de 1385 en la creación del Consejo Real<sup>17</sup>.

Sea cual fuere la fecha exacta de la creación del Consejo como órgano colegiado permanente, con composición y competencias específicas, consultivas o decisorias, lo cierto es que aún durante el período medieval los reyes siempre tuvieron la necesidad de colaboración de sus vasallos, quienes tenían a su vez la obligación de acudir a la llamada del rey para cumplir su deber de aconsejar, dando lugar, a decir de J. M. Pérez-Prendes, a la ligazón de fidelidad que unía al vasallo con su señor, en cuya virtud debía asistir a las reuniones de su Curia a fin de dar su opinión o consejo sobre los aspectos y temas que se trataran<sup>18</sup>. Así, el alma de la organización política medieval fue la potestad real, que para ejercerla requería la colaboración de sus vasallos<sup>19</sup>; por lo que posteriormente, la presencia de un órgano consultivo junto al poder real estuvo condicionado a las situaciones propias de cada uno de los reinos ibéricos<sup>20</sup>.

Fue en Las Partidas, en opinión de B. Pérez, donde se formalizó la teoría del Consejo sobre el ejercicio de la acción de aconsejar a fin de favorecer la

---

a partir de las Cortes de Valladolid de 1385: L. G. de Valdeavellano, *Curso de historia...*, p. 458-59; B. González Alonso, *El corregidor castellano (1348-1808)*, Madrid, 1970, p. 47; L. Suárez Fernández, *Juan I de Trastámara: 1379-1390*, Palencia, 1994, pp. 170-172 y en este siglo J. Valdeón Baroque, *Los Trastámaras: el triunfo de una dinastía bastarda*, Madrid, 2001, pp. 67-68.

<sup>17</sup> R. Gibert Sánchez de la Vega, *El antiguo Consejo de Castilla*, Madrid, 1964, p. 14; A. García-Gallo, “Las Audiencias en Indias: su origen y caracteres”, en *Los orígenes españoles de las instituciones americanas*, Madrid, 1987, pp. 897-98 y G. Villapalos Salas, *Los recursos contra los actos de gobierno en la Baja Edad Media*, Madrid, 1976, pp. 266-67. Contrario a esa línea historiográfica, S. de Dios afirma que el origen de este Consejo Real no puede verse como una simple relación causal de evolución de las antiguas Aulas regias visigodas, del Palatium asturleonés o de la Curia Regia altomedieval, toda vez que sin negar el carácter consultivo de la Curia, ni de la existencia de consejeros reales y reteniendo el oficio de *consilium* como obligación vasallática y necesidad de los reyes de obtener la opinión de obispos, nobles e incluso de ciudades, no significa que exista una continuidad institucional, Vid. S. de Dios, *El Consejo Real...*, pp. 27-28.

<sup>18</sup> Vid. J. M. Pérez Prendes, *Cortes de Castilla...*, p. 21. El tema de la lealtad y la obediencia que los vasallos le deben a su rey es tratado con gran elocuencia por B. Cárceles Gea en su artículo “*Voluntas e iurisdictio*: obediencia, ejecución y cumplimiento de la voluntad real en la Corona de Castilla en el siglo XVII”, en *Monarquía, imperio y pueblos en la España moderna*, Alicante, 1997, pp. 663-677.

<sup>19</sup> Vid. J. M. Pérez Prendes, “Cortes de Castilla y Cortes de Cádiz”, en *Revista de Estudios Políticos*, Madrid, nº 126 (1962), p. 334.

<sup>20</sup> Vid. J. Sánchez-Arcilla, *La administración de justicia...*, p. 538.

obra de gobierno<sup>21</sup>. En efecto en dicho ordenamiento Alfonsino se establecía que *las cosas que son fechas con consejo se facen mas ordenadamente que las otras et vienen á mejor acabamiento...*<sup>22</sup>, consejo era pues *bon entendimiento que home toma sobre las cosas dubdosas porque non pueda caer en yerro*<sup>23</sup>, por ello, *...conviene que aya omes buenos, e sabidores que le aconsejen, e le ayuden...*<sup>24</sup>. Sin embargo, Salustiano de Dios señalaba que en la época de Alfonso X no existió un Consejo como órgano o institución permanente, sí en cambio una retórica del consejo, en cuanto función de aconsejar, función de consejo que se estima necesaria para poder tomar acuerdos debidamente<sup>25</sup>.

Por su parte, F. Tomás y Valiente señalaba que durante el bajo medievo cada rey creaba y estructuraba un órgano inicialmente consultivo o asesor para servirse de él a la hora de dirigir la política del reino y que con el tiempo se convirtió en una institución encargada de resolver cuestiones judiciales y de gobierno. Empero, el citado autor apuntaba que no se conocía bien “cómo operó esta transición del Consejo puramente consultivo al órgano capacitado y competente para adoptar decisiones ejecutivas, dotado de jurisdicción propia y ordinaria”<sup>26</sup>. Lo cierto es que hacia el siglo XIV ese deber de consejo se concretó en Castilla con la creación de un cuerpo consultivo cuya finalidad fue la de asesorar al rey en la gestión de los asuntos públicos y de colaborar en el gobierno y administración del reino, surgiendo así el Consejo Real.

En efecto, según apunta S. de Dios<sup>27</sup>, Juan I estableció en las Cortes de Valladolid de 1385 la nueva institución del Consejo Real de la siguiente manera: *ordenamos un consejo en el cual continuadamente anduviesen con uso en quanto nos estuviésemos en guerra e estuviésemos en-nuestro rregno, o lo mas çerca dellos que ser pudiese*<sup>28</sup>. Afirmación compartida entre otros autores por B. González Alonso, quien señaló que a partir de ese momento fue posible distinguir aquellos asuntos librados por el rey a su completo

---

<sup>21</sup> J. Beneyto Pérez, *Historia de la administración...*, p. 249.

<sup>22</sup> *Las Siete Partidas del Rey Don Alfonso el Sabio* (en adelante Partidas), cotejadas con varios códices antiguos por la Real Academia de la Historia Madrid, Imprenta Real, 1807. Partidas 3. 21. pr.

<sup>23</sup> Partidas 3. 21. 1.

<sup>24</sup> Partidas 2.1.1.

<sup>25</sup> Vid. S. de Dios, *El Consejo Real...*, pp. 38-39.

<sup>26</sup> Vid. F. Tomás y Valiente, “El gobierno de la monarquía...”, p. 125.

<sup>27</sup> El Consejo Real fue creado en las Cortes de Valladolid de 1385. Vid. S. de Dios, *Fuentes para el estudio del Consejo Real de Castilla*, Salamanca, 1986, p. XVI.

<sup>28</sup> *Cortes de los Antiguos Reinos de León y de Castilla* (en adelante CLC), publicadas por la Real Academia de la Historia, Madrid, 1863, vol. II, p. 332.

arbitrio, de los reservados al rey, pero sometidos previamente por éste a deliberación del Consejo, de los asuntos resueltos por el Consejo, pero mediando consulta anterior al rey y de los librados por el Consejo sin otra intervención que la de sus propios miembros<sup>29</sup>. Pero no fue hasta la celebración de las Cortes de Briviesca de 1387<sup>30</sup> cuando se dotó al Consejo Real de su primera organización<sup>31</sup>.

En la época de los Reyes Católicos, el Consejo Real ocupó un lugar preeminente frente a cualquier otro órgano colegiado<sup>32</sup>, sobre todo, a partir de la expedición de las Ordenanzas de Toledo de 1480<sup>33</sup>. Al respecto, varios son los autores que señalaron la importancia de estas Cortes<sup>34</sup>, aduciendo que las mismas perfilaron la organización y las competencias del Consejo, no sólo para que funcionara como órgano consultivo tendente a facilitar a los monarcas el dictamen de los más variados asuntos, sino también como un órgano gubernativo y judicial<sup>35</sup>.

En Aragón, al igual que en el reino de Castilla, desde la baja Edad Media existió un órgano asesor del monarca, mismo que funcionó de un modo más

<sup>29</sup> Vid. B. González Alonso, *El corregidor castellano...*, pp. 47-48.

<sup>30</sup> *Otrosi por quanto nos rrespondistes al consejo que vos pidamos de las cosas que deuiamos de mandar, a nos ploguiera que nos rrespondierades mas larga mente, por que segund la nuestra rrespuesta la carga se torna a vos mesmos de ver e de ordenar aquello que pediamos a vos otros consejo que ordenasedes, en el qual dicho vuestro capitolo se contiene tres puntos: el primero que nos pongamos en rregla por quelas cosas que fizieremos sean de grand fruto e de poco afan; el segundo que trayamos conusco el consejo que ordenamos en Valladolid, pero que non esten en el grandes ommes, por que podamos corregir al que alguna cosa non deuida fiziere; el terçero que demos rregla al dicho nuestro Consejo de las cosas que han de libra...*, CLC, vol. II, p. 381.

<sup>31</sup> Vid. S. de Dios, *El Consejo Real...*, p. 78. Tras las Ordenanzas de Valladolid de 1385 y las de Briviesca de 1387, se expidieron entre otros Ordenamientos los de 1389, 1390 y 1406; la Orden que se debe tener en el Consejo de Justicia de 1432; las Leyes para el Consejo Real de 1440; la Ordenanza sobre el Consejo de 1442; las Leyes para el Consejo Real de 1459; la Orden para el Consejo de 1465; Ordenanzas de Toledo de 1480, y las Ordenanzas que parece que se deben ordenar para que las cosas del Consejo anden bien ordenadas de 1490. Todos estos documentos jurídicos pueden verse en S. de Dios, "Ordenanzas del Consejo de Castilla (1385-1490)", en *Historia, Instituciones y Documentos*, n° 7 (1980), pp. 269-271 y *Fuentes para el estudio del Consejo de Castilla*, Salamanca, 1986.

<sup>32</sup> Como lo fueron las Audiencias y la Chancillería, incluso de los secretarios del Rey. Vid. J. A. Escudero López, *Los Secretarios...*, vol. 2, p. 318.

<sup>33</sup> *Cortes de León y de Castilla*, vol. 4, pp. 111-120.

<sup>34</sup> Entre ellos J. Sempere y Guarinos, *Histoire des Cortès...*, p. 197; M. Danvila y Collado, *El poder civil...*, vol. 1, p. 527; Cos Gayón, *Historia de la administración...*, p. 100; L. G. de Valdeavellano, *Curso de historia de las...*, pp. 459-460; J M<sup>a</sup> Cordero Torres, *El Consejo de Estado. Su trayectoria y perspectivas en España*, Madrid, 1944, pp. 28-31; R. Gibert Sánchez de la Vega, *El antiguo Consejo...*, p. , entre otros.

<sup>35</sup> Vid. J. A. Escudero López, *Los Secretarios de Estado...*, vol. 2, p. 318.



o menos permanente para el conocimiento y resolución de los asuntos políticos y administrativos<sup>36</sup>. Pero fue hasta el año de 1494, a través de una real pragmática<sup>37</sup>, cuando Fernando El Católico decidió dotarle de una regulación propia, convirtiéndolo en un órgano destinado a la resolución de asuntos de gobierno y de causas de justicia procedentes de dicho reino<sup>38</sup>.

Así, durante el reinado de los Reyes Católicos al menos existieron dos consejos permanentes, por un lado se encontraba el Consejo de Castilla<sup>39</sup> y

---

<sup>36</sup> Vid. L. G. de Valdeavellano, *Curso de historia de las...*, pp. 460-61.

<sup>37</sup> F. Soldevilla, "El Document de fundació del Consell Suprem d'Aragó", en *V Congreso de la Corona de Aragón*, Zaragoza, 1955 pp. 329-339 y en F. Miquel, "Notas de Archivo, de la sección 2ª. "Consejo supremo de Aragón", en *Analecta sacra tarraconensia: Revista de ciències histórico-eclésiàstiques*, vol. 31, nº 1 (1958), p. 169.

<sup>38</sup> Vid. J. Arrieta Alberdi, *El Consejo Supremo de la Corona de Aragón (1494-1707)*, Zaragoza, 1994, pp. 25 y ss.

<sup>39</sup> Acerca del origen del Consejo de Castilla, S. de Dios ha escrito tres obras fundamentales sobre dicho órgano colegiado "Las Ordenanzas del Consejo de Castilla...", *El Consejo Real...*, y *Fuentes para el estudio del Consejo...* Sin olvidar la clásica obra de R. Gibert, *El Antiguo Consejo...* Del período de Carlos V puede consultarse a P. Gan Giménez quien sobre dicho Consejo ha publicado las siguientes obras: "Los Presidentes del Consejo de Castilla", en *Chronica Nova: Revista de historia moderna de la Universidad de Granada*, nº 1 (1968), pp. 7-31; "El Consejo Real de Castilla: tablas cronológicas (1499-1558)", en *Chronica Nova: Revista de historia moderna de la Universidad de Granada*, nº 4-5 (1969), pp. 5-179 y *El Consejo Real de Carlos V*, Granada, 1988. De la época de Felipe II puede verse L. Mª García-Badell Arias, "La frustración de Felipe II: el fracaso de la reforma del Consejo Real de Castilla de 1598", en *Felipe II (1527-1598): Europa y la monarquía católica*, vol. 1, t. 1, 1998, pp. 307-340. Del reinado de Felipe III se encuentran los artículos de J. Fayard, *Los miembros del Consejo de Castilla (1612-1746)*, Madrid, 1982 y R. Gómez Rivero, "Consejeros de Castilla de Felipe III", en *Anuario de Historia del Derecho Español*, nº 74 (2004), pp. 97-138. Del reinado de Felipe V son fundamentales las obras de J. Fayard, "La tentative de reforme du Conseil de Castilla sou le regne de Philippe V (1713-1715)", en *Melanges de la Casa de Velázquez II* (1966), pp. 259-281 y L. Mª García-Badell, "Felipe V, la Nobleza Española y el Consejo de Castilla. La Explicación jurídica e histórica de la consulta que hizo el Real Consejo de Castilla, atribuida a Macanaz", en *Cuadernos de Historia del Derecho*, nº 12 (2005), pp. 125-149. También para este período puede verse Mª del C., Fernández Giménez, "Notas sobre la reforma de Castilla en 1713", en *Anuario de Historia del Derecho Español*, nº 69 (1999), pp. 547-578. Del reinado de Fernando VII es fundamental la obra de J. Mª Puyol Montero, *El Consejo Real de Castilla en el reinado de Fernando VII*, Madrid, 2001. Sobre los miembros de dicho Consejo existen varios artículos, entre los que destacan: A. López Gómez, "Los fiscales del Consejo Real", *Hidalguía*, nº 219 (1980), 193-243; J. Fayard, "Los ministros del Consejo Real de Castilla (1746-1788)", en *Cuadernos de Investigación Histórica*, nº 6 (1982), pp. 109-136; J. Cañas Murillo, "Juan Pablo Forner y su "Consulta [...] al Consejo de Castilla", en *Dieciocho: Hispanic enlightenment*, vol. 22, nº 1 (1999), pp. 17-24; C. Carrasco Canals, "La burocracia española del siglo XVI al XVIII: (un examen de su ordenamiento a través del Consejo de Castilla 1532 a 1732)", en *La burguesía española en la Edad Moderna*, vol. 2, 1996, pp. 875-892; S. M. Coronas González, *Ilustración y Derecho. Los fiscales del Consejo de Castilla en el siglo XVIII*, Madrid, 1992; L. Anes Fernández, "Don Lope de Sierra Cienfuegos, fiscal del Consejo de Castilla en el reinado de

por el otro el de Aragón<sup>40</sup>, pero fue en el último tercio del siglo XVI cuando existió un verdadero régimen de organismos colegiados<sup>41</sup>. Es por ello que aún a la muerte de Fernando, el sistema estaba en fase de desarrollo, ya que

---

Carlos III”, en *Cuadernos de Estudios del siglo XVIII*, nº 5 (1995), pp. 3-22. También pueden verse: P. Molas y Ribalta, “Aragón en el Consejo de Castilla”, en *Cuadernos Dieciochistas*, nº 2 (2001), pp. 13-35; M<sup>a</sup> I. Cabrera Bosch, *El Consejo Real de Castilla y la Ley*, Madrid, 1993 y L. Navarro García, “El Consejo de Castilla y su crítica de la política indiana en 1768”, en *Homenaje al profesor Alfonso García-Gallo*, Madrid, 1996, vol. 5, 1996, pp. 187-208.

<sup>40</sup> Del origen del Consejo de Aragón puede verse J. Arrieta Alverdi, *El Consejo Supremo...* y “El Consejo de Aragón y las Cortes catalanas”, en *Les Corts a Catalunya: Actes del Congrés d'Historia Institucional*, 1991, pp. 245-25; F. Soldevilla, “El Document de fundació...”, pp. 329-339; P. Arregui Zamorano, “Ordenanzas del Consejo de Aragón”, en *Anuario de Historia del Derecho Español*, nº 55 (1985), pp. 705-734. Acerca de los miembros que lo integraban se encuentran las obras de: J. Lalinde Abadía, “El Vicecanciller y la Presidencia del Consejo Supremo de Aragón”, en *Anuario de Historia del Derecho Español*, nº 3 (1960), pp. 175-248; M. A. González de San Segundo, “Notas sobre miembros del Consejo de Aragón en la administración indiana (1621-1707)”, en *Actas y estudios del XI Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano*, Buenos Aires, 1997, vol. 3, pp. 31-50, del mismo autor, “Los consejeros de capa y espada en el Consejo de Aragón (la nobleza aragonesa en el gobierno de la Monarquía)”, en *Nobleza y sociedad en la España moderna III: Las Noblezas españolas, reinos y señoríos en la Edad Moderna*, Oviedo, 1999, pp. 145-194; De la época de los Austrias puede verse los siguientes autores: C. Riba y García, *El Supremo Consejo de Aragón en el reinado de Felipe II*, Madrid, 1914; M. Ortega López, “Las consultas del Consejo Supremo de Aragón a finales del siglo XVI, en *Hernán Cortés y su tiempo. V Centenario (1485-1985)*, Cáceres, vol. 2 (1987), pp. 578-584, J. Arrieta Alverdi, “Gobernar rescribiendo: Felipe II y el Consejo de Aragón”, en *Felipe II y el Mediterráneo*, vol. 3 (La monarquía y los reinos I), 1999, pp. 65-96. El estudio del Consejo de Aragón en el siglo seiscientos ha sido abordado por F. Sánchez Marcos, “El Consejo de Aragón y Cataluña durante el virreinato de don Juan de Austria (1653-1656)”, en *Historia social de la administración española. Estudios sobre los siglos XVII y XVIII*, Barcelona, 1980, pp. 65-83; M. Ortega López del mismo autor “La observación del reino de Aragón por el Consejo Supremo de Aragón durante el siglo XVII, en *Manuscrits Revista d'història moderna*, nº 7 (1988), pp. 51-69 y “El Consejo Supremo de Aragón y la supervisión de la justicia del reino aragonés durante el siglo XVII, en *Manuscrits Revista d'història moderna*, nº 8 (1990), pp. 139-164; J. F. Baltar Rodríguez, “Las negociaciones del Consejo de Aragón en el siglo XVII”, en *Anuario de Historia del Derecho Español*, nº 71 (2001), pp. 267-316. La localización de los documentos emanados por este Consejo son imprescindibles los artículos de E. Sarrablo Agráveles, *Catálogo de consultas del Consejo de Aragón*, Madrid, 1975 y M<sup>a</sup> J. Álvarez-Coca González, “La Corona de Aragón: documentación en el Consejo y la Cámara de Castilla (1707-1834): fuentes en el Archivo Histórico Nacional”, en *Hispania: Revista española de historia*, vol. 49, nº 173 (1989), pp. 895-948. Otros temas también relacionados con el Consejo aragonés son analizados por: M<sup>a</sup> V. León Sanz, “El fin del pactismo: La autoridad real y los últimos años del Consejo de Aragón”, en *Pedralbes. Revista d'història Moderna*, nº 13, 1 (1993), pp. 197-204; M. A. González de San Segundo, “El Consejo de Aragón y la Orden de Montesa”, en *Anuario de Historia del Derecho Español*, nº 67 (1997), pp. 901-924; E. Galván Rodríguez, “La Inquisición y el Consejo de Aragón en el reinado de Felipe II (1586-1589)”, en *Revista de la Inquisición: (intolerancia y derechos humanos)*, nº 11 (2005), pp. 11-22 y M<sup>a</sup> V. Candela Marco, “El Consejo de Aragón: asistencia social a sus miembros en tiempos de Carlos II”, en *Millars: Espai i historia*, nº 32 (2009), pp. 123-142.

<sup>41</sup> Vid. S. de Dios, *El Consejo Real...*, p. 175.

a pesar de lo descrito por el cronista Hernando del Pulgar, respecto del despacho de los asuntos en cinco consejos<sup>42</sup>, no podía referirse, en opinión de Fernández Albaladejo, más que al Consejo Real<sup>43</sup>.

De lo anterior es fácil comprender que a partir de entonces surgiera una abundante literatura política<sup>44</sup> destinada a valorar el tema del deber de consejo dentro de la Monarquía Hispánica. De los autores que se avocaron a realizar un discurso político relacionado con *el Consejo y los consejeros de príncipes*, se encontraban Furió Ceriol<sup>45</sup>, Cerdán de Tallada<sup>46</sup>, Felipe<sup>47</sup>, Camos<sup>48</sup>, Rivadeneyra<sup>49</sup>, Castillo de Bobadilla<sup>50</sup>, Ramírez de Prado<sup>51</sup>,

---

<sup>42</sup> En aquellas cortes de Toledo, en el palacio real donde el Rey e la Reyna posaban, había cinco consejos en cinco apartamientos; en el uno estaba el Rey e la Reyna con algunos Grandes de su reino, e otros de su consejo, para entender en las embajadas de los reinos extraños que venían a ellos, y en las cosas que se trataban en corte de Roma con el Santo Padre, e con el rey de Francia, e con los otros Reyes, e para las otras cosas necesarias de se proveer por expediente. En otra parte estaban los Perlados e Doctores, que eran diputados para oír las peticiones que se daban, e proveer e dar cartas de justicia, las cuales eran muchas e de diversas calidades: otrosi en que los procesos de los pleitos que ante ellos pendían, e determinarlos por sentencias definitivas. En otra parte del palacio estaban Caballeros e Doctores naturales de Aragón e del Principado de Cataluña, e del Reino de Sicilia, e de Valencia, que veían las peticiones e demandas, e todos los otros negocios de aquellos reinos: y estos entendían en los expedir, porque eran instructos e los fueros e costumbres de aquellas partidas. En otra parte del palacio estaban los diputados de las hermandades de todo el reino, que veían las cosas concernientes a las hermandades según las leyes que tenían. En otra parte estaban los contadores mayores e oficiales de los libros de la hacienda e patrimonio real: los quales facían las rentas, e libraban las pagas e mercedes, e otras cosas que el Rey e la Reyna facían, e determinaban las causas que concernían a la hacienda e patrimonio real. E de todos estos consejos recorrían al Rey e la Reyna con cualquier cosa de duda que ante ellos recrecía, E las cartas e provisiones que daban eran de gran importancia... H. del Pulgar, *Crónica de los Reyes Católicos don Fernando y doña Isabel de Castilla y de Aragón*, Imprenta de Benito Monfort, Valencia, 1780, parte segunda, cap. 95, p. 167.

<sup>43</sup> P. Fernández de Albaladejo, *Fragmentos de...*, p. 89.

<sup>44</sup> También en obras teatrales de la época quedaba reflejada ese deber de consejo, como fue el caso de la comedia titulada "La octava maravilla" de Lope de Vega.

<sup>45</sup> F. Furió Ceriol, *Consejo y consejeros del Príncipe*, Amberes, 1559.

<sup>46</sup> T. Cerdán de Tallada, *Verdadero gobierno de esta Monarquía tomando por su propio sugeto la conservación de la paz*, Valencia, 1581. También en su obra *Veriloquium en Reglas de Estado*, Valencia, 1604.

<sup>47</sup> B. Felipe, *Del Consejo y consejeros de Príncipes*, Turín, 1589.

<sup>48</sup> A. de Camos, *Microcosmia y gobierno universal del hombre cristiano*, Barcelona, 1592.

<sup>49</sup> P. de Ribadeneyra, *Tratado de la religión y virtudes que debe tener el Príncipe Christiano, para gobernar y conservar sus Estados, contra lo que Nicolás Machiavelo, y los políticos de este tiempo enseñan*, Madrid, 1595.

<sup>50</sup> J. Castillo de Bobadilla, *Política para corregidores...*

<sup>51</sup> L. Ramírez de Prado, *Consejo y consejeros de príncipes*, Madrid, 1616.

Madariaga<sup>52</sup>, Santamaría<sup>53</sup>, Bermúdez de Pedraza<sup>54</sup>, Ceballos<sup>55</sup>, Fernández de Navarrete<sup>56</sup>, Saavedra Fajardo<sup>57</sup>, Pérez del Barrio<sup>58</sup>, entre otros muchos<sup>59</sup>.

Centrándonos en las afirmaciones vertidas por Rivadeneyra en su *Tratado de la religión y virtudes que debe tener el Príncipe Christiano* es posible comprender las razones por las que el rey debía tomar consejo: *Qualquiera hombre, aunque sea persona particular, tiene necesidad en las cosas graves y dificultosas de consejo, y de no fiarse de sí, por la flaqueza de su entendimiento, y por la fuerza de las pasiones, que se suelen cegar y arrebatat la voluntad, y llevarla en pos de sí*<sup>60</sup>, y por ser considerado “cabeza de una República”, de ahí que tenga obligación de tratar y consultar los negocios graves que se ofrecen con las personas de ciencia y conciencia, ya que *de la resolución que tomare, pende el bien o el mal de la Republica*<sup>61</sup>. En ese mismo sentido, afirmaba Juan Pablo Mártir *uno de los mayores fundamentos de su reputación será la fama que ha juntado, al juicio e inteligencia propia, un fiel y prudente Consejo, teniendo gran cuidado en hacerle tal; mas este Consejo por prudente y sagaz que sea, conviene vencerle con la inteligencia y capacidad del Príncipe...*<sup>62</sup>.

Dentro de su labor consultiva, los consejos asumían por delegación las funciones propias del rey, siendo en todo momento el monarca la autoridad omnímoda del reino, cuyas funciones sólo podían ser partidas o divididas

<sup>52</sup> J. de Madariaga, *Del Senado y de su Príncipe*, Valencia, 1617.

<sup>53</sup> J. de Santamaría, *Tratado de República, y policía christiana. Para Reyes y Príncipes: y para los que en el gobierno tienen sus vezes*, Barcelona, 1617.

<sup>54</sup> F. Bermúdez de Pedraza, *El Secretario del Rey*, Madrid, 1620.

<sup>55</sup> J. de Ceballos, *Arte real para el buen gobierno de los Reyes y Príncipes y de sus vasallos*, Toledo, 1623.

<sup>56</sup> P. Fernández de Navarrete, *Conservación de Monarquías*, Madrid, 1626.

<sup>57</sup> D. de Saavedra Fajardo, *Empresas políticas...*, Empresa 55.

<sup>58</sup> G. Pérez del Barrio Angulo, *Secretario y consejero de señores y ministros*, Madrid, 1645.

<sup>59</sup> Algunos otros autores pueden consultarse en M. Moranchel Pocaterra, “El *deber de consejo* y su reflejo institucional en los dominios indianos (siglos XVI-XVIII)”, en *CHD*, (vol. extra. 2010), pp. 404-412.

<sup>60</sup> P. de Ribadeneyra, *Tratado de la religión...*, Lib. 2, cap. 24.

<sup>61</sup> Loc. cit.

<sup>62</sup> Según este autor son cinco cosas por las que el monarca debe pedir consejo: *el primero en cuanto pertenece a las rentas propias y de hacienda... la segunda en que debe el príncipe pedir consejo será acerca de los mantenimientos convenientes para la vida, sabiendo de que tiene necesidad las ciudades de sus Reinos, y si faltare en alguna de ellas lo que importa para conservación de ellos, acudir al remedio de suerte que se provea a la falta... lo tercero debe el Señor pedir consejo en la defensa y guarda de sus Reinos... lo cuarto se ha de tomar consejo sobre el hecho de la paz y de la guerra... lo quinto en lo que se debe aconsejar es en cuanto toca a poner leyes en las ciudades o en el Reino...* J. P. Mártir Rizo, *Norte de Príncipes*, Madrid, 1626, cap. 18.

por razones técnicas u operativas<sup>63</sup>. De esta manera, la mayoría de los consejos eran al mismo tiempo supremos<sup>64</sup> órganos de justicia, gobierno y legislación que giraban en torno al poder del rey. En este sentido, los monarcas delegaron en sus consejos los asuntos jurisdiccionales y gubernativos, aunque los relativos a gobierno, generalmente, se reservaban la resolución final. Esta misma idea es la que contempla García Marín cuando afirma que los oficiales y magistrados del monarca cuando actúan, lo hacen ejerciendo unas competencias y en uso de unas atribuciones que les han sido especialmente conferidas por el príncipe, en quien radica toda potestad y jurisdicción<sup>65</sup>.

A lo largo de la Edad Moderna dichos órganos se fueron encarnando en la vida política, administrativa y judicial del reino, destacando en el despacho del Consejo la distinción de materias y procedimientos, por ello dirá Maravall que “el Consejo es una pieza esencial de la construcción política que se intenta, apoyado en una convicción de aristocracia intelectual, a él le incumbe conseguir que el Rey, siendo libre y soberano, se mantenga en la medida justa de su poder... al Consejo, como reunión de varones sabios y prudentes que ayudan al Monarca y esclarecen su criterio antes de su soberana decisión”<sup>66</sup>.

En esta misma línea argumental, Tomás y Valiente aludía al principio de unidad del poder, lo que significaba que ese mismo poder era “indiviso pero múltiple”, es decir, pertenecía al rey pero era ejercido por sus consejos. Sin embargo, ni en conjunto, ni en particular, ningún Consejo poseía poder propio y ajeno al del rey, era claro entonces que “su poder radicaba sobre aquellas materias, en aquella forma y con aquellos límites que el rey les

---

<sup>63</sup> S. M. Coronas González, *Estudios de Historia del Derecho Público*, Valencia, 1988, p. 60.

<sup>64</sup> Según el propio conde-duque los consejos son supremos en cuanto que *está representado VM y es su cabeza y de VM y de estos Ministros se constituye un cuerpo y como en la persona de VM aunque una sola, concurren diversas representaciones de Rey... Copia de papeles que ha dado Su Majestad el Conde Duque, gran canciller, sobre diferentes materias de gobierno de España*. Vid. J. H. Elliot y J. F. de la Peña, *Memoriales y cartas el Conde Duque de Olivares, t. 1 Política interior 1621 a 1627*, Madrid, 1978, p. 74. También “Instrucciones que se dio al señor Felipe Cuarto sobre materias del gobierno de estos Reinos y sus agregados” en A. Valladares de Sotomayor, *Semanario Erudito que comprehende varias obras inéditas, críticas, morales, instructivas, políticas, históricas, satíricas y jocosas de nuestros mejores autores antiguos y modernos*, Madrid, 1788, t. 11, pp. 195. (En adelante *Semanario Erudito de Valladares*).

<sup>65</sup> Vid. J. García Marín, *La burocracia castellana bajo los Austrias*, Sevilla, 1976, p. 48.

<sup>66</sup> Vid. J. A. Maravall, *La teoría española del Estado en el siglo XVII*, Madrid, 1944, p. 276.

había establecido”<sup>67</sup>, por lo que dichas atribuciones nunca llegaron a confiscar los poderes del monarca, ya que aún obligado a solicitar la opinión de sus consejeros, nunca estuvo constreñido a seguirla. Por su parte, Clavero se refiere a la posición del rey frente a su Consejo, aduciendo que éste “no lo suplantaba, lo suplía, hacía sus veces, lo representaba siendo él mismo, revistiendo su persona, identificándose con él”<sup>68</sup>, no como persona física, diría Kantorowicz, sino como aquel que garantiza la continuidad y la unidad del reino como persona política<sup>69</sup>.

En principio el rey no tenía limitada su capacidad decisoria y nada le obligaba a seguir el consejo de sus asesores. Empero autores como Juan Santa María en el siglo XVII señalaron que en caso que el rey discrepara y se evadiera del parecer unánime de sus consejeros caería en la tiranía<sup>70</sup>, por ello quizá en la mayoría de las ocasiones el monarca aceptaba el parecer de los de su Consejo, de ahí que afirmase que *la buena, o mala elección de los consejeros, pende la honra y provecho del Rey, y de todo el Reino, y el que en esto yerra, necesariamente ha de errar en todo... porque sin ninguna duda todo buen despacho estriba y nace de la fuerza, y virtud del bueno consejo*<sup>71</sup>.

Sin embargo, es menester señalar que la complejidad de la relación que existía entre el monarca y sus consejos originó que en ocasiones no se percibiera con nitidez la supremacía real. En efecto, según afirma García Marín los oficiales aparecen gestionando en nombre del rey los intereses de la comunidad, lo que configurará de un modo especial el lado interno de las relaciones entre unos y otros, especialmente cuando la conjunción de esfuerzos entre el monarca y sus oficiales que exige la búsqueda del bien general, plantee a los autores “el problema de rescatar ante todos la preeminencia soberana del príncipe”<sup>72</sup>. Por ello, Salvador de Mellado le

<sup>67</sup> F. Tomás y Valiente, “El gobierno de la Monarquía...”, p. 128.

<sup>68</sup> En el estudio que Bartolomé Clavero elaborara de las Ordenanzas de la Real Audiencia de Sevilla se refería a la posición del rey frente a su Consejo, aduciendo que éste “no lo suplantaba, lo suplía, hacía sus veces, lo representaba siendo él mismo, revistiendo su persona, identificándose con él. Vid. B. Clavero, “Sevilla, Concejo y Audiencia: Invitación a sus Ordenanzas de Justicia”, en *Ordenanzas de la Real Audiencia de Sevilla*, facsímil, Sevilla, 1995, pp. 22-24.

<sup>69</sup> Vid. E. H. Kantorowicz, *Los dos cuerpos del rey. Un estudio de teología política medieval*, Madrid, 1985, pp. 19-22.

<sup>70</sup> *Si el Monarca, sea quien fuere, se resolviera por sola su cabeza, sin acudir a su Consejo, o contra el parecer de sus consejeros, aunque acierte en su resolución, sale de los términos de la Monarquía, y se entra en los de la tiranía.* J. de Santa María, *Tratado de República...*, fol 5.

<sup>71</sup> *Ibíd.*, f. 40.

<sup>72</sup> J. García Marín, *La burocracia...*, p. 41.

sugería al monarca que *no les deje ser absolutos en el gobierno, sino que esto ha de ser con continua dependencia de la persona Real, la cual enmiende, apruebe o repruebe, según la razón dictare, no dejándose llevar dellos en ninguna cosa*<sup>73</sup>.

Una muestra que dejaba claro la impotencia del rey frente al poder que había adquirido el Consejo Real fue expuesto por García-Badell al analizar la decisión que Felipe II hubo de tomar respecto del enfrentamiento entre el Consejo y la Chancillería de Valladolid<sup>74</sup>, de cuyo resultado se expidieron las Ordenanzas de 1598. En opinión del citado autor, con dicho ordenamiento el monarca buscaba entre otras cuestiones, someter al control real las decisiones del Consejo en materia gubernativa y, evitar en la medida de lo posible, la tendencia a “considerar el gobierno como una manifestación más de la *iurisdictio*, sometiendo la toma de decisiones en todos los negocios gubernativos a los procedimientos y criterios propios de la administración de justicia”<sup>75</sup>, lo que en última instancia lograba someter la decisión real a la propia legislación del reino, afectando con ello su capacidad soberana.

Sobre esta misma cuestión, a principios del siglo XVIII, el Consejo de Castilla al considerarse mermado en sus competencias frente a otros órganos de la Monarquía elevó una consulta<sup>76</sup> al monarca, a fin de defender su supremacía. En dicho escrito aducía que si bien no es el *Consejo el que manda, sino el rey con acuerdo de su Consejo*, también aclaraba que la potestad *es tan una y conexa de V.M. y el Consejo*<sup>77</sup>. A fin de someter a dicho órgano a la voluntad real, Melchor de Macanaz refutó punto por punto todo lo que el Consejo argüía en su famosa consulta, recordando a Felipe V que:

---

<sup>73</sup> S. de Mallea, *Rey pacífico, y gouierno de principe catolico, sobre el Psalmo 100 de Daud "Misericordiam, & iudicium cantabo tibi Domine"*, Génova, 1646, p. 64.

<sup>74</sup> El enfrentamiento surgió en el año de 1586 cuando el Consejo Real remitió a la Chancillería de Valladolid la demanda interpuesta por Pedro Arias en el Consejo sobre la posesión del condado de Puñoenrostro. A través de una real cédula, el Consejo advirtió a la Chancillería que no debía pronunciar sentencia sin antes consultarle, razón por la que ésta rehusó a cumplir aduciendo que el Consejo le usurpaba su autoridad como tribunal supremo. Al quedar paralizado el pleito, el demandante acudió directamente con Felipe II, quien a través de la formación de una Junta particular esperaba resolver el asunto “considerando la competencias entre los dos tribunales”, pero la Junta no hizo más que confirmar la obligación de la Chancillería de consultar al rey. L. M<sup>a</sup> García-Badell Arias, “La frustración de Felipe II...”, pp. 307-340.

<sup>75</sup> *Ibíd.*, p. 312.

<sup>76</sup> Sobre el contenido y alcance de esta consulta Vid. L. M<sup>a</sup> García Badell Arias, “Felipe V, la Nobleza Española y el Consejo de Castilla...”, pp. 125-149.

<sup>77</sup> S. de Dios, *Fuentes para el estudio...*, p. 175.

*...la jurisdicción que ejercen todos los consejos de Castilla, de Italia, de Indias, de Órdenes y de Hacienda es delegada; y por más que los reyes hayan querido ilustrar y engrandecer el de Castilla, nunca pensaron en hacer otra cosa que un tribunal, en cuyos individuos, sustituyesen la administración de justicia. Lo contrario sería obrar el Rey contra sus mismos intereses; sería dividir aquella túnica inconsútil del gobierno monárquico, que solo haciéndola pedazos se puede separar, sería romper y despreciar las leyes fundamentales de estos Reinos, que atribuyeron la suprema potestad a una sola persona; sería tener Consejo del Reino, no del Rey, y dar lugar a que otro día se dijese, que sin aquel Consejo no podía SM ejercer la autoridad soberana. Y porque parece que alude a esto decir a SM el Consejo mismo, que es coadjutor del Rey, no se puede omitir la expresión, de que el Consejo sin rey es nada, que es un cuerpo que alienta solo por su real voluntad, que sin él podría justamente SM regir sus pueblos, subrogando su comisión a otros Ministros...<sup>78</sup> porque el Consejo no tiene más vida que la que el rey le quiere dar, y los pueblos no tienen más derecho que a ser regidos en justicia, y esto podrá ser sin nombre de Consejo...<sup>79</sup>.*

La respuesta caló tan hondo en la política de Felipe V, que en noviembre de 1713 se decretó una reforma a la planta del Consejo de Castilla y de algunos otros órganos colegiados de la Monarquía.

Otro tema relacionado con el *deber de consejo* lo fue la composición del Consejo, cuestión importante si consideramos que durante la Edad Media sus miembros eran considerados quienes cuidaban de los intereses de la comunidad<sup>80</sup>. Por ello, la condición social y profesional de los consejeros provocó desde finales del siglo XIV continuos enfrentamientos entre los miembros más importantes del reino, sobre todo desde la promoción de letrados dentro del Consejo Real. Mientras que las Ordenanzas de Valladolid de 1385 fijaron la composición del Consejo con cuatro prelados, cuatro caballeros y cuatro ciudadanos<sup>81</sup>, las de Briviesca de 1387 variaron dicha configuración, sustituyendo a los ciudadanos por letrados<sup>82</sup>.

En opinión de J. Pérez una de las razones por las que los reyes decidieron confiar la gobernación de sus reinos a letrados fue por la tendencia surgida en la segunda mitad del siglo XV a pensar que “el poder supone un saber”,

<sup>78</sup> M. R. de Macanaz, “Explicación jurídica e histórica de la consulta que hizo el Real Consejo de Castilla al Rey Nuestro Señor, sobre lo que S.M. se sirvió preguntarle, y se expresa en esa obra; con los motivos que dieron causa para la real pregunta y la respuesta. Y defensa legal de una de las principales partes, que componen el todo de la soberanía de su Magestad”, en *Semanario Erudito de Valladares*, Madrid, 1788, t. 9, p. 48.

<sup>79</sup> *Ibíd.*, p. 49.

<sup>80</sup> Vid. J. Beneyto Pérez, “Burocracia y derecho público: la conciencia y los medios del Estado en la España moderna”, en *Revista de Estudios Políticos*, nº 95 (1957), p. 19.

<sup>81</sup> Ordenanzas fundacionales del Consejo Real, Valladolid, 1385, Vid. S. de Dios, *Fuentes para el estudio...*, p. 5.

<sup>82</sup> Segundas Ordenanzas del Consejo, Briviesca, 1387. *Ibíd.*, p. 9.



de ahí que se diera preferencia a los letrados por encima de los nobles<sup>83</sup>. Esta promoción de letrados en el Consejo se estableció de manera clara en las Cortes de Toledo de 1480 al mencionar que *según la doctrina moral, los hombres de buen entendimiento naturalmente deben ser fechos señores e regidores de los otros; cuando estos tales rigen e gobiernan, entonces la República se llama bienaventurada*<sup>84</sup>; de ahí que en estas mismas Cortes se fijara en número de ocho o nueve los letrados que debían formar parte del Consejo Real, completando esta planta con un prelado y tres caballeros<sup>85</sup>. En el caso del Consejo de Aragón, la pragmática de creación de 1494 estableció que sus miembros debían ser letrados<sup>86</sup>.

El propio Sánchez de Arévalo a fines del siglo XV apuntaba la necesidad que el rey fuera asesorado por letrados *para que la tal ciudad o reino sea bien erigido e gobernado es necesario que tenga sabios e discretos consejeros, hábiles y expertos e prudentes, mirando más a la prudencia política que no a la militar o a la mecánica. Ca puede ser alguno bien prudente en fechos de armas e de guerras e en otros oficios e no será prudente político para regir e gobernar la república*<sup>87</sup>. Compartiendo esta idea, Mosén Diego de Valera aconsejaba a los reyes que *lo primero que cumple para esto conseguir, es que queráis de cada uno ser servido del oficio que sabe: de los letrados en la ciencia e justicia; de los religiosos e clérigos, en las cosas de conciencia; de los caballeros experimentados, en lo que toca a la guerra*<sup>88</sup>.

---

<sup>83</sup> J. Pérez, *Isabel y Fernando: Los Reyes Católicos*, Guipúzcoa, 1988, p. 116.

En un manuscrito anónimo del siglo XV el autor se cuestionaba *¿cuál alcanza más gloria, el que por trabajo de armas defiende y acrecienta la cosa pública, o él que por prudencia y diligencia de saber en igual grado trabajando la acrecienta y ampara?*. A través de trece capítulos, el autor del manuscrito defendía la superioridad de “el regimiento por prudencia”, es decir a los letrados como los de mayor dignidad al afirmar que *es de mayor provecho y dignidad en la República el acto de prudencia y administración legal, que no la gobernación por fuerza de armas*. Vid. J. Weiss, “La *Qüestión entre dos Cavalleros*: Un nuevo tratado político del siglo XV, en *Revista de Literatura Medieval*, nº 4 (1992), pp. 9-42 y “La *Qüestión entre dos Cavalleros*: Un nuevo tratado político del siglo XV (II), en *Revista de Literatura Medieval*, nº 7 (1995), pp. 187-210.

<sup>84</sup> CLC, vol. IV, p. 160.

<sup>85</sup> *Ibidem*, p. 111.

<sup>86</sup> Aludía especialmente a letrados poseedores del título de *micer* como doctores en ambos derechos. Vid J. Arrieta Alverdi, *El Consejo Supremo...*, p. 77.

<sup>87</sup> R. Sánchez de Arévalo, *Suma de la política*, Madrid, 1456, ed. facsimilar, Madrid, 1944, pp. 98-99.

<sup>88</sup> Citado por J. A. Maravall, “Los hombres de saber o letrados y la formación de la conciencia estamental, en *Estudios de Historia del pensamiento español*, Madrid, 1973, vol. 1, p. 74.

La asistencia de letrados en el Consejo proporcionaba al príncipe los conocimientos y el tiempo que necesariamente le había de faltar a una sola persona, tal y como lo expresó Madariaga, quien valoraba la preparación de los consejeros que elaboraban la resolución, y continuaba diciendo:

*...siendo los consejeros los ojos de su Majestad, con los cuales mira siempre por la exaltación del nombre cristiano y de su Monarquía; son sus oídos, con que da a todos benigna audiencia. Porque con tantos ojos ve un Príncipe y con tantas orejas oye. Son su olfato, en el cual sentido es significada la providencia del rey sabio, que huele las cosas muy de lejos, y las previene y dispone suavemente. Son su gusto para conocer y discernir los buenos y malos guisados que hacen en el reino sus ministros. Son sus pies y manos, para ejecutar con su autoridad lo que él debe, si pudiera solo acudir a todo. Son finalmente el corazón de este inmenso cuerpo místico de la Monarquía de España*<sup>89</sup>.

En este sentido, Maravall al considerar al Consejo como “reunión de varones sabios y prudentes que ayudan al monarca y esclarecen su criterio antes de su soberana decisión”<sup>90</sup> se explicaba la extensa literatura política dedicada a los requisitos necesarios para ser consejero. En términos generales, dichas obras “suelen dejar bien sentado el principio de que el príncipe está sobre el Consejo, y por tanto, no está obligado a seguir sus advertencias o amonestaciones u opiniones que nunca pueden alcanzar para el soberano valor de mandatos”<sup>91</sup>, como es el caso de Castillo de Bobadilla para quien *el buen crédito y reputación de los Príncipes y Gobernadores, ayuda mucho el tomar consejo, porque así dan autoridad y peso a sus leyes y mandatos, porque los súbditos visto que se rigen por consejos y pareceres de sabios, obedecen y respetan más*<sup>92</sup>.

Según afirmaba Carande, Carlos V no hizo más que respetar la política de sus abuelos, quienes hicieron de los letrados uno de los grandes instrumentos de la organización administrativa de los distintos reinos, toda vez que “buscaron a sus hombres de confianza entre la clase culta de letrados, humanistas y universitarios; clase a la sazón floreciente, y en gran parte formada por clérigos doctísimos, en derecho, en moral y en teología”<sup>93</sup>. Felipe II continuador de la política de su padre prosiguió decantándose por el nombramiento de letrados dentro de los miembros de

---

<sup>89</sup> Ibídem, f. 6r.

<sup>90</sup> Vid. J. A. Maravall, *La teoría española...*, pp. 275-276.

<sup>91</sup> F. Tomás y Valiente, , “El gobierno de la Monarquía...”, p. 130.

<sup>92</sup> J. Castillo de Bobadilla, *Política para corregidores...*, lib 2, cap. 6, p.. 380.

<sup>93</sup> R. Carande, “Gobernantes y gobernados en la hacienda de Castilla (1536-1665)”, en *Siete estudios de Historia de España*, Barcelona, 1969, p. 113.

los distintos consejos, de ahí la importancia de cuidar la calidad personal de sus magistrados<sup>94</sup>.

Por consiguiente, durante el siglo XVI los consejos se convirtieron en órganos monopolizados por letrados<sup>95</sup>, quienes a pesar de pertenecer a distintas clases sociales, lograron una posición social homogénea<sup>96</sup>, dando lugar a la construcción de una conciencia estamental, en donde solo muy pocos tenían acceso a ella<sup>97</sup>.

Sin embargo, la inclusión masiva de los letrados en los consejos fue causa de graves enfrentamientos entre “doctores” y “caballeros”, prueba de ello se encuentra en un memorial analizado por García-Badell en su artículo sobre las reformas de Felipe II al Consejo de Castilla. En dicho memorial se destacaba la incompetencia de los letrados sobre todo en materia de gobierno, aduciendo su falta de experiencia fuera de las letras, con el consiguiente retraso de los asuntos, sobre todo por la utilización de procedimientos judiciales en la resolución de asuntos de gobierno<sup>98</sup>, por lo que para solventar esos males se proponía *que las cosas de gobernación se acertarían mejor a proveer por personas sin letras, que fuesen desocupadas de otros negocios e de buen e natural e san intención y tuviesen plática y experiencia de hacienda e mercaderías*<sup>99</sup>.

Por su parte, Hurtado de Mendoza narraba cómo los Reyes Católicos pusieron *en el gobierno de la justicia, y las cosas públicas en manos de*

---

<sup>94</sup> Vid. F. Tomás y Valiente, “El gobierno de la Monarquía...”, p. 136.

<sup>95</sup> El *Diccionario de Autoridades* (1734) define al letrado como “el docto en las ciencias: que porque estas se llamaron letras, se le dio este nombre”. Otra acepción al término es la se utiliza comúnmente para designar al abogado.

<sup>96</sup> Según mencionaba Joseph Pérez, los letrados de los Reyes Católicos y de los primeros Austrias no son simples licenciados, en su mayor parte proceden de Colegios Mayores, esa especie de grandes escuelas universitarias que funcionan al margen de las universidades de Salamanca y Valladolid, y en las que se recibe a una élite de estudiantes que tienen la seguridad de encontrarse, tras un breve paso por un corregimiento o una magistratura local, en uno de los grandes cuerpos del Estado como lo son los consejos o las Chancillerías. Vid. J. Pérez, *Isabel y Fernando...*, p. 116.

<sup>97</sup> Vid. J. A. Maravall, “Los hombres de...”, pp. 347.

<sup>98</sup> En dicho memorial se decía que *Los extranjeros se ríen y mofan mucho del descuido que pasa en estos Reinos en lo de la gobernación y de lo mal que se proveen algunas cosas que tocan a ella. Y todos tienen por averiguado, que la culpa de ello está en ser regidos por letrados. Y de esto hay muy gran murmuración*. En el manuscrito citado se denunciaba la incapacidad de los letrados en la resolución de asuntos de gobierno aduciendo que: *...por lo que han estudiado y lugar que tienen, pretenden que pueden saber y entender todo lo que es menester para proveer las cosas de la buena gobernación. Y en saliendo de lo de su facultad, que consiste en letras, como lo demás no lo han estudiado y algunos no tienen experiencia dello, pasan trabajo en determinarse*. Vid. L. M<sup>a</sup> García-Badell Arias, “La frustración de Felipe II...”, p. 308.

<sup>99</sup> Loc. cit.

*letrados, gente media entre los grandes y pequeños, sin ofensas de los unos ni de los otros. Cuya profesión eran letras legales, comedimiento, secreto, verdad, vida llana, y sin corrupción de costumbres; no visitar, no recibir dones, no profesar estrechez de amistades, no vestir, ni gastar, suntuosamente, blandura y humanidad en su trato, juntarse a horas señaladas para oír causas, o para determinarlas, y tratar del bien público... Esta manera de gobierno, establecida entonces con menos diligencia, se ha ido extendiendo por toda la cristiandad, y está hoy en el colmo de poder y autoridad*<sup>100</sup>.

Empero, el mencionado autor apuntaba que *en las cualidades de los letrados estaban sus defectos*; entre otras cuestiones porque tenían una tendencia a excederse de sus atribuciones y *por esto amigos en particular de traer por todo, como superiores, su autoridad, y apuralla a veces hasta grandes inconvenientes y raíces que ahora se han visto*<sup>101</sup>. Porque hay cosas que los “hombres de la guerra” entienden con más facilidad porque saben tener en cuenta las circunstancias, disposición de los ánimos, la coyuntura y en función de sus elementos, elegir el momento más oportuno para aplicar una medida, mientras que los letrados se atienen a la letra de los textos y no conocen más que las normas<sup>102</sup>.

Poco a poco esta preferencia por la elección de letrados dentro de las más altas esferas de la administración central de la Monarquía hubo de modificarse. Mientras que durante los reinados de Felipe III<sup>103</sup> y Felipe IV el cambio no fue perceptible, sobre todo porque ambos monarcas poco se esmeraron en este punto y dejaron en manos de sus validos<sup>104</sup> la promoción de cargos importantes a hombres de su plena confianza, a privados suyos, carentes de los méritos necesarios, quizá por ello, tanto el duque de Lerma,

<sup>100</sup> D. Hurtado de Mendoza, *Guerra de Granada que hizo el rey Felipe II contra los moriscos de aquel Reino*, Lisboa, 1627, Lib. 1.

<sup>101</sup> Loc. cit.

<sup>102</sup> Vid. J. Pérez, *Isabel y Fernando...*, pp. 116-117.

<sup>103</sup> Sobre el papel de los letrados en el reinado de Felipe III puede verse J. M. Pelorson, *Los “letrados” los juristas castellanos bajo Felipe III*, Valladolid, 2008.

<sup>104</sup> El tema de los validos es analizado con gran detalle en el texto de F. Tomás y Valiente, *Los validos en la monarquía española del siglo XVI. Estudio institucional*, Madrid, 1990. Sobre esta cuestión existen dos obras colectivas importantes, el primero el de J. Elliot, *El mundo de los validos*, Madrid, 2000 y el segundo el coordinado por J. A. Escudero López, *Los validos*, Madrid, 2004. Algunos artículos especializados sobre los hombres de confianza del rey son: J. A. Escudero López, “Privados, validos y primeros ministros en la monarquía española de Antiguo Régimen: viejas y nuevas reflexiones”, en *Anales de la Real Academia de jurisprudencia y legislación*, nº 39 (2009), pp. 665-680 y el de C. Bolaños Mejías, “Fracaso de la reforma institucional a finales del reinado de Felipe III”, en *Anuario de Historia del Derecho Español*, nº 74 (2004), pp. 659-684.

como el conde-duque de Olivares<sup>105</sup> potenciaron la figura de los letrados dentro de los consejos para sus propio fines políticos<sup>106</sup>. Ya en la época de Carlos II el panorama cambió por completo.

En efecto, a mediados del siglo XVII una grave crisis en el seno de la administración de la Monarquía provocó que el monarca decidiera aumentar el número de ministros de capa y espada dentro de las filas de sus consejos. Si bien es cierto que en esta época el título universitario garantizaba prácticamente un nombramiento en los tribunales, las audiencias y chancillerías, desde los cuales se podía aspirar a formar parte de los consejos<sup>107</sup>, con el tiempo, dichos títulos comenzaron a devaluarse y el gran descenso en el número de alumnos de los colegios mayores repercutió en la propia composición de los consejos. Por ello, Carlos II nombró como consejeros de capa y espada<sup>108</sup> a aquellos que no poseían títulos universitarios, pero que contaban con otros atributos, como su condición nobiliaria o su relación de parentesco con algún alto oficial, quienes fueron resultaron ser más dúctiles y afines al poder, que los letrados, sometidos por la fuerza de la tradición al ordenamiento real.

A partir de entonces el nombramiento de ministros de capa y espada se convirtió en algo más frecuente, ya que si bien se cuestionaba su capacidad dentro de las magistraturas, no así respecto de la aptitud para la resolución de asuntos de gobierno. Algunos autores sostenían que para resolver asuntos

---

<sup>105</sup> El conde-duque repitiendo casi literalmente el pasaje ya citado de la *Guerra de Granada* escrita por Diego Hurtado de Mendoza definía a los consejeros como *gente mediana entre los grandes y los pequeños, sin ofensa de los unos y de los otros, cuya profesión son letras legales, comedimiento, secreto, verdad, vida llana y sin corrupción de costumbres, no visitar, no recibir dones, no profesar estrechez de amistades, no vestir ni gastar suntuosamente, y en su trato blandura y espera y urbanidad*. Vid. *Instrucción que se dio al Señor Felipe Quarto sobre materias del gobierno de estos reynos y sus agregados. [Memorial enviado a Felipe IV por el conde-duque de Olivares el 25 de diciembre de 1624]*, en *Semanario Erudito de Valladares*, Madrid, 1788, t. 11, pp. 197-98.

<sup>106</sup> Refiriéndose específicamente al Consejo de Estado, Tomás y Valiente señalaba que tanto Lerma como Olivares decidieron someter a dicho Consejo a su servicio directo, además de crear algunas Juntas con la finalidad de restarles competencias de hecho a la mayoría de los consejos. Vid. F. Tomás y Valiente, “La Monarquía española...”, p. 131.

<sup>107</sup> Sin embargo, en esta carrera administrativa no se primaba el talento, ya que la mayoría de los letrados egresaban de los colegios mayores, en donde sólo tenían acceso miembros de un mismo núcleo familiar. Esta situación dio como resultado una estrecha asociación entre la carrera universitaria y los nombramientos en la administración central creando un círculo cerrado de administradores que monopolizaban la carrera pública. Vid. J. Lynch, *Edad Moderna: Crisis y recuperación, 1598-1808*, Barcelona, 2005, pp. 356-357.

<sup>108</sup> Según el *Diccionario de la Lengua Castellana* (1729) los Ministros de capa y espada eran “aquellos que no visten toga, y andan en traje cortesano, y no profesan la facultad de leyes: por lo cual no tienen voto en los negocios de justicia, sino solo en los consultivos y de gobierno”.

de gobernación era menester poseer ciertas cualidades de carácter, de juicio, para tomar decisiones en función de las circunstancias; en cambio, la propia formación del letrado le incitaba a responder con mucha mayor lentitud a casi todas las cuestiones intentando sopesar los pros y los contras de tomar una postura u otra sin salirse apenas del propio ámbito del derecho del reino, es por ello que se afirma que “valen más hombres de experiencia inteligentes (idiotas astutos), aún sin títulos, que letrados cubiertos de diplomas”<sup>109</sup>.

Cuando Felipe V llegó a España “los poderes de los consejos le parecieron exorbitantes”<sup>110</sup>, hasta el punto que uno de sus grandes asesores franceses, Orry en 1703 expuso al monarca a través de un memorial la importancia que los consejos habían adquirido dentro del gobierno español. Se refería a dichos órganos colegiados como *los que gobiernan el Estado y disponen de todos los empleos, de todas las gracias y de todas las rentas del reino, de manera que su intención, por lo general es que el rey no tenga, propiamente hablando, ninguna parte activa en el gobierno, sino que solamente les preste su nombre para autorizar su administración*<sup>111</sup>. Por tanto, desde los inicios de su reinado, Felipe V se propuso realizar una serie de reformas tendentes a limitar el poder que habían adquirido los consejos<sup>112</sup>.

En conformidad con lo hasta aquí expuesto es posible afirmar que cuando los monarcas decidieron institucionalizar el *deber de consejo* a partir de la creación de distintos consejos. Dichos órganos colegiados se convirtieron en uno de los más importantes resortes políticos de la Monarquía hispánica,

---

<sup>109</sup> Esta teoría fue desarrollada por Bartolomé Felipe quien a finales del siglo XVI aconsejaba a Felipe II que *teniendo los príncipes necesidad de negociar con muchas y muy diversas personas no menos necesario les es aprovecharse de las cautelas y astucias de los idiotas que de las letras y ciencia de los letrados porque como dicen la mitad del año se vive con arte y engaño, y la otra con engaño y arte. Para los negocios que penden de conciencia y justicia aprovechan los letrados y para cobrar las rentas y tratar los negocios que pertenecen a la hacienda de la República los idiotas astutos, ni bastan los idiotas para gobernar bien la República ni los que gastan la vida en estudiar. La experiencia muestra que no menos se valen los príncipes de las astucias y cautelas de los idiotas que de las letras y ciencia de los letrados porque los que se dan a ellas sean poco prácticos en los negocios... los letrados son perplejos en resolverse en los negocios sobre que se consulta porque se les representan muchas dificultades y muchos inconvenientes que las hacen estar llenos de respetos y imaginaciones que de ningún provecho hacen...* B. Felipe *Tratado consejos y consejeros...*, p. 62.

<sup>110</sup> J. Fayard, *Los miembros del Consejo...*, p. 161.

<sup>111</sup> Las palabras de Orry son extraídas del *Plan pour la régie des affaires du roi d’Espagne*. AAE, París, Corr. Pol. Espagne, vol. 119, ff. 95-218. Loc. cit.

<sup>112</sup> En el siguiente apartado haremos un análisis más detallado de las reformas impuestas al gobierno por consejos.

cuya autoridad no sólo contenía la propia potestad real, sino que en opinión de algunos autores “participaban de la función soberana del príncipe”<sup>113</sup> y cuyos miembros, varones sabios y prudentes, le ayudaban a esclarecer su criterio antes de su soberana decisión<sup>114</sup>.

Por tanto, en el siguiente apartado analizaremos cómo la institucionalización de ese *deber de consejo* a través de la creación del Consejo Real dio paso, a partir del siglo XVI, a la creación de un sistema de gobierno colegiado<sup>115</sup> dando lugar al denominado “gobierno por consejos”, potenciado por los Austrias y combatido posteriormente, por los Borbones, especialmente por Felipe V con la creación del régimen ministerial. Es importante puntualizar que el hilo conductor de dicho proceso será el tema el Consejo de Indias. Así, analizaremos la evolución de este gobierno por consejos a través del de Indias y la forma en la que el mencionado régimen ministerial fue acaparando poco a poco su función primordial: aconsejar al rey en todo lo concerniente a las Indias.

## **2. El Consejo de Indias y el “gobierno por consejos” durante la época de los Austrias.**

Si bien durante la época de los Reyes Católicos se sentaron las bases de una organización conciliar, ello no significó, según afirma Fernández Albaladejo, la existencia propiamente del gobierno por consejos, más bien se trataba de especializaciones dentro de un gran Consejo<sup>116</sup>. Por tanto, la implantación de un régimen gobernado por consejos fue impuesta por la necesidad de gobernar una herencia política tan compleja como la que había recaído en Carlos V, quien debía establecer una cierta coordinación entre los diversos territorios que componían su imperio, a cuyo efecto los consejos estaban llamados a jugar ese papel<sup>117</sup>.

---

<sup>113</sup> J. P. Dedieu, “La muerte del letrado”, en *Letrados, juristas y burócratas en la España moderna*, Cuenca, 2005, p. 483.

<sup>114</sup> Vid. J. A. Maravall, *La teoría española...*, pp. 321-322.

<sup>115</sup> Tomás y Valiente utilizaba esta expresión con algo de recelo, al afirmar que los consejos no lograron formar parte de un todo, con una trascendencia mayor a una mera yuxtaposición de partes, ya que la creación de cada uno de los consejos fue para solventar distintas necesidades políticas y administrativas dentro de un proceso discontinuo. Vid. F. Tomás y Valiente, “El gobierno de la Monarquía...”, p. 126.

<sup>116</sup> Vid. P. Fernández Albaladejo, *Fragmentos de...*, pp. 88 y 89.

<sup>117</sup> *Ibídem*, p. 90.

En otras palabras, gobierno por consejos se produjo por la acumulación de los consejos territoriales, a consecuencia del esfuerzo unitario asumido por Carlos V y por razones de especialización en cuanto a los consejos por materias, convirtiéndose en “ruedas y piezas del mecanismo político presidido por el rey”<sup>118</sup>. Esta organización por consejos venía configurada como “un precipitado lógico” necesario dentro de la Monarquía carolina, dada la obligación del emperador de respetar los ordenamientos de las partes que lo constituían<sup>119</sup>.

La articulación de la Monarquía universal fue posible debido a que los consejos se convirtieron en piezas fundamentales de la administración, por ello según afirma Escudero se trataba de organismos colegiados de carácter consultivo a quienes se les dotó de competencias administrativas y judiciales, hasta tal extremo que se convirtieron en tribunales supremos o de última instancia en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones<sup>120</sup>.

Dentro del complejo orden en que se estructuró el gobierno por consejos se diferenciaron dos tipos de consejos en relación a los asuntos que conocían. Por una parte se encontraban aquellos que tenían una delimitación territorial clara, y por el otro, los consejos con competencias especializadas por razón de la materia. Ciertamente este sistema se desarrolló a través de un proceso largo de acuerdo a la propia institucionalización de la monarquía, llegando haber en el siglo XVII hasta trece órganos consultivos permanentes<sup>121</sup> y varias Juntas *ad hoc*<sup>122</sup> creadas de manera transitoria para facilitar la actividad de gobierno.

---

<sup>118</sup> J. Beneyto Pérez, *Historia de la administración...*, pp. 351-352.

<sup>119</sup> F. Barrios Pintado, “Consolidación de la polisinodia hispánica y administración indiana”, en *El Gobierno de un mundo. Virreinos y Audiencias en la América Hispánica*, Cuenca, 2004, pp. 119-120.

<sup>120</sup> J. A. Escudero López, *Los orígenes del Consejo...*, t. 1, pp. 19-21.

<sup>121</sup> Los trece órganos consultivos permanentes fueron los consejos de Castilla, Aragón, Navarra, Cruzada, Inquisición, Flandes, Indias, Italia, Estado, Guerra, Hacienda, Portugal y la Cámara de Castilla. Y con algunas intermitencias la Cámara de Indias. Vid. F. Tomás y Valiente, “El gobierno de la Monarquía...”, pp. 124 y ss. Un análisis bibliográfico completo de los consejos de los Austrias puede verse en S. M. Coronas González, *Estudios de Historia...* También resulta interesante el artículo Pere Molas donde hace un somero análisis de la bibliografía reciente sobre los distintos consejos de la Monarquía hispánica. Vid. P. Molas y Ribalta, “consejos y Audiencias”; en *Studia Historica. Historia Moderna*, nº 15 (1996), pp. 9-21.

<sup>122</sup> Sobre este tema puede verse M<sup>a</sup> D. Sánchez González, *El deber del Consejo en el Estado Moderno. Las Juntas “Ad hoc” en España (1471-1665)*, Madrid, 1993; *Las Juntas ordinarias: Tribunales permanentes en la corte de los Austrias*, Madrid, 1995 y “El deber del Consejo durante el siglo XVIII, partiendo del estudio de algunas normas borbónicas sobre Juntas ordinarias”, en *Anuario de Historia del Derecho Español*, nº 67-II (1997), pp.



Algunos de los consejos territoriales aparecieron por vía de fraccionamiento respecto a otros consejos creados con anterioridad, como lo fueron los consejos de Indias<sup>123</sup> y de Italia<sup>124</sup>, los cuales surgieron cuando sus asuntos fueron separados del conocimiento de los precedentes consejos de Castilla y de Aragón, en 1524 y 1564 respectivamente. En otras ocasiones, la creación del Consejo se realizaba como consecuencia de la incorporación de un nuevo territorio a la Monarquía, como lo fue el de Portugal<sup>125</sup>. Otros consejos de base territorial lo fueron el de Flandes y Borgoña<sup>126</sup> y el de Navarra<sup>127</sup>, este último, además fue el único que residió fuera de la Corte.

---

1005-1025. Acerca de las Juntas en la época de los Austrias puede verse J. F. Baltar Rodríguez, *Las Juntas de Gobierno...*

<sup>123</sup> Al ser el Consejo de Indias el tema central de la presente investigación decidimos hacer un análisis de la bibliografía que existe sobre el particular en la parte introductoria.

<sup>124</sup> El Consejo de Italia ha sido estudiado con todo detalle por M. Rivero Rodríguez, entre sus obras destacan las siguientes: El Consejo de Aragón y la fundación del Consejo de Italia” en *Pedralbes. Revista d’Historia Moderna*, nº 9 (1989), pp. 57-90; “*El Consejo de Italia (1556-1598)*”, Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Madrid, 1991, inédita; “La Fundación del Consejo de Italia: Corte, grupos de poder y periferia (1536-1559)”, en *Instituciones y élites de poder en la monarquía hispana durante el siglo XVI*, 1992, pp. 199-222; “El Consejo de Italia: la gobernación de los dominios hispánicos”, en *Historia 16*, nº 197 (1992), pp. 55-58; “La visita del Consejo de Italia”, en *Felipe II (1527-1598): Europa y la monarquía*, vol. 1, t. 2, 1998, pp. 705-730; “El Consejo de Italia y la territorialización de la monarquía (1554-1600)”, en *Felipe II y el Mediterráneo*, vol. 3, 1999 (La monarquía y los reinos I), pp. 97-114 y “La preeminencia del Consejo de Italia y el sentimiento de la nación italiana” en *La monarquía de las naciones: patria, nación y naturaleza en la monarquía de España*, 2004, pp. 505-528. Otros artículos sobre la misma temática son: C. Giardina, “II Supremo Consiglio d’Italia”, en *Atti della Reale Accademia di Scienze, Lettere e Belle Arti di Palermo*, Palermo 1934, pp. 1-190; F. Ruiz Martín, “Notas sobre el Consejo de Italia”, en *Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos*, nº 54 (1948), pp. 315-322 y L. Barreca, “El Consejo Supremo de Italia y el caso de la Baronesa de Carini”, en *Cuadernos de Investigación Histórica*, nº 2 (1978), pp. 115-119.

<sup>125</sup> Para el estudio de este Consejo son importantes los textos de S. de Luxán Meléndez, “La pervivencia del Consejo de Portugal durante la Restauración: 1640-1668”, en *Norba. Revista de Historia*, nº 8-9 (1987-1988), pp. 61-86; del mismo autor *La revolución de 1640 en Portugal, sus fundamentos sociales y sus caracteres nacionales. El Consejo de Portugal, 1580-1640*, Madrid, 1988 y “Los funcionarios del Consejo de Portugal: 1580-1640”, en *Cuadernos de Investigación Histórica*, nº 12 (1989), pp. 197-228. De gran utilidad para el estudio de dicho Consejo es el artículo de J. A. Escudero López, “La creación del Consejo de Portugal”, en *Boletim da Faculdade de Direito*, Coimbra nº 58, 1982. También son relevantes las obras de F. Bouza Álvarez, *Portugal en la monarquía hispánica (1580-1640)*, *Felipe II, las Cortes de Tomar y la génesis del Portugal católico*, Madrid, 1987 y *Portugal no tempo dos Filipes. Política, cultura, representações (1580-1668)*, Lisboa, 2000.

<sup>126</sup> Destaca la tesis de J. M. Rabasco Valdés, *El Real y Supremo Consejo de Flandes y de Borgoña*, tesis doctoral, Universidad de Granada, 1978. Del mismo autor “Una etapa del Consejo de Flandes de Borgoña: del Ministerio colateral a las ordenanzas de 1588”, en *Anuario de Historia Contemporánea*, nº 6 (1979), pp. 59-82. Valiosa información sobre

Dentro de los consejos especializados por materias existía una clara distinción, por un lado estaban aquellos cuyas competencias concernían a todos los territorios de la Monarquía, entre los que se encontraban el de la Inquisición<sup>128</sup> y el de Hacienda<sup>129</sup>; y otros, los llamados consejos menores,

---

este órgano lo señala M. A. Echevarría, *Flandes y la Monarquía Hispánica 1500-1713*, Madrid, 1998 y el artículo de A. Esteban Estríngana, “Preludio de una pérdida territorial. La supresión del Consejo Supremo de Flandes a comienzos del reinado de Felipe V”, en *La pérdida de Europa: la guerra de Sucesión por la Monarquía de España*, 2007, pp. 335-378.

<sup>127</sup> Para el estudio de este Consejo destacan las monografías de J. Salcedo Izu, *El Consejo Real de Navarra en el siglo XVI*, Pamplona, 1964 y el de J. M. Sesé Alegre, *El Consejo Real de Navarra en el siglo XVIII*, Pamplona, 1994. También se han escrito artículos importantes entre ellos: L. J. Fortún Pérez de Ciriza, “El Consejo Real de Navarra entre 1494 y 1525”, en *Príncipe de Viana. Anejo (Ejemplar dedicado a: Homenaje a José María Lacarra)*, nº 2-3 (1986), pp. 165-180; M<sup>a</sup> I. Ostolaza Elizondo, “El Consejo Real de Navarra en los siglos XVI y XVII: aspectos administrativos y tramitación documental”, en *Huarte de San Juan. Geografía e historia. Revista de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales*, nº 3-4 (1996-1997), pp. 105-164, y de la misma autora “Administración del reino de Navarra en la etapa de los Austrias”, en *Hispania: Revista española de historia*, vol. 60, nº 205 (2000), pp. 563-596. Por su parte R. García ha publicado sobre este tema el artículo titulado “El Consejo Real de Navarra, entre el derecho del rey las libertades del reino (1800-1836), en *Anuario de Historia del Derecho Español*, nº 72 (2002), pp. 125-200.

<sup>128</sup> Para un análisis detallado de éste Consejo puede verse las monografías de J. R., Rodríguez Besné, *El Consejo Supremo y General Inquisición*, Madrid, 2000 y de T. Sánchez Rivilla, *El Consejo de Inquisición (1483-1700): introducción al estudio social de sus miembros*, Madrid, 1995. Sobre este tema J. Martínez Millán ha escrito entre otros artículos “Las elites de poder durante el reinado de Carlos V a través de los miembros del Consejo de Inquisición (1516-1558)”, en *Hispania: Revista española de historia*, vol. 48, nº 168 (1988), pp. 103-168; “Los miembros del Consejo de Inquisición durante el siglo XVII”, en *Hispania sacra*, vol. 37, nº 76 (1985), pp. 409-49; “La Inquisición en Cataluña durante el siglo XVIII ¿Una institución en crisis?”, en *Pedralbes. Revista d'història moderna*, nº 4 (1984), pp. 63-92 y en coautoría con T. Sánchez Revilla, “El Consejo de Inquisición (1483-1700)”, en *Hispania Sacra*, vol. 36, nº 73, (1984), pp. 71-193. Otros artículos relativos al Consejo de la Inquisición son escritos por J. A. Escudero López, “Los orígenes del Consejo de la Suprema Inquisición”, en *Anuario de Historia del Derecho Español*, nº 53 (1983), pp. 237-288; P. Huerga Criado, “La etapa inicial del Consejo de Inquisición (1483-1498)”, en *Hispania Sacra*, vol. 37, nº 75 (1985), pp. 451-463; M<sup>a</sup> del C. Fernández Giménez, “Problemas del Consejo de la Inquisición en el reinado de Felipe II, en *Revista de la Inquisición: (intolerancia y derechos humanos)*, nº 10 (2001), pp. 193-211; S. Cabezas Fontanilla, “Las Secretarías del Consejo de Inquisición y su sistema de producción documental (siglos XV-XVII)” en *Boletín de la Sociedad Española de Ciencias y Técnicas Historiográficas*, nº 3 (2005), pp. 211-238 y J. R. Rodríguez Besné, “El Consejo de Inquisición: entre el sistema polisinodial y el Santo Oficio” en *Intolerancia e Inquisición*, Madrid, 2006, vol. 1, pp. 441-453.

<sup>129</sup> Uno de los expertos en este Consejo es C. J. de Carlos Morales quien ha escrito entre otros textos “El Consejo de Hacienda de Castilla en el reinado de Carlos V (1523-1526)”, en *Anuario de Historia del Derecho Español*, nº 59 (1989), pp. 49-59; “Grupos de poder en el Consejo de Hacienda de Castilla: 1551-1556”, en *Instituciones y élites de poder en la monarquía hispana durante el siglo XVI*, 1992, pp. 107-136 y *El Consejo de Hacienda de Castilla, 1523-1602: patronazgo y clientelismo en el gobierno de las finanzas reales durante el siglo XVI*, Valladolid, 1996. Sobre el origen del Consejo de Hacienda

cuyo ámbito de competencias se limitó a los territorios castellanos donde se encontraban el Consejo de Órdenes<sup>130</sup> y el de la Santa Cruzada<sup>131</sup>.

Por otro lado, a fin de organizar políticamente todos los reinos que formaban parte de la Monarquía universal y con la intención de frenar la tendencia disgregadora surgida de la pluralidad consejos, Carlos V decidió fundar al Consejo de Estado<sup>132</sup> para que “sirviera de clave del arco o de cúspide” capaz de asesorarle en la política general de la Monarquía y de asumir la dirección política del Estado. Con el tiempo, los asuntos de guerra también hubieron de tratarse de forma independiente de los asuntos de

---

puede verse los artículos de M. Cuartas Rivero, “El Consejo de Hacienda en su primera época”, en *Hacienda Pública Española*, nº 74 (1982), pp. 255-266; T. García-Cuenca Ariati, “El Consejo de Hacienda (1476-1803)”, en *La Economía española al final del Antiguo Régimen. Instituciones*, vol. IV, 1982, pp. 403-502 y E. Hernández Esteve, *Creación del Consejo de Hacienda de Castilla (1523-1525)*, Madrid, 1983. Otros artículos sobre temas más específicos son los escritos por M. A. González de San Segundo, “Ministros aragoneses en el Consejo de Hacienda (1641-1746)”, en *Anuario de Historia del Derecho Español*, nº 70 (2000), pp. 89-124 y por M<sup>a</sup> del C. Fernández Gómez, “Notas sobre el Consejo de Hacienda y la política financiera de Felipe IV”, en *Anuario de Historia del Derecho Español*, nº 73 (2003), pp. 315-350.

<sup>130</sup> En este tema destacan los estudios elaborados por E. Postigo Castellanos, “El Consejo de las Órdenes Militares: fundación y reformas de Carlos V”, en *Hispania Sacra*, vol. 39, nº 80 (1987), pp. 537-565 y de la monografía sobre éste órgano de la administración central *Honor y privilegio en la corona de Castilla. El Consejo de las Órdenes y los caballeros de hábito en el siglo XVII*, Soria, 1988. Pero también se han realizado algunos artículos interesantes, entre ellos: M<sup>a</sup> J. Álvarez-Coca González, “El Consejo de las Órdenes Militares”, en *Cuadernos de Historia Moderna*, nº 15 (1994), pp. 297-324; R. Molina Recio, “La alta nobleza castellana en el reinado de Carlos V: don Pedro Fernández de Córdoba, primer presidente del Consejo de Órdenes”, en *Carlos V europeísmo y universalidad*, Madrid, 2001, vol. 2, pp. 405-420; R. Gómez Rivero, “Consejeros de Órdenes: procedimiento de designación (1598-1700)”, en *Hispania: Revista española de historia*, vol. 63, nº 214 (2003), pp. 657-744; C. López González, y J. I. Ruiz Rodríguez, “Felipe V y la reforma del Consejo de las Órdenes Militares”, en *Política y cultura en la época moderna: (cambios dinásticos, milenarismos, mesianismos y utopías)*, 2004, pp. 443-448 y el de Pedro Porras Arboledas, “El origen del Real Consejo de Órdenes de José López de Agurleta”, en *Cuadernos de Historia del Derecho*, nº 16 (2009), pp. 275-351.

<sup>131</sup> Sobre este Consejo es muy escasa la bibliografía que existe, sin embargo, se han publicado algunos artículos, entre ellos: M. Alcocer Martínez, “El Consejo de Cruzada”, en *Revista Histórica* (1925), pp. 237-288; C. J. de Carlos Morales y J. Martínez Millán, “Los orígenes del Consejo de Cruzada (siglo XVI)”, en *Hispania: Revista española de historia*, vol. 51, nº 179 (1991), pp. 901-932 y el de H. Pizarro Llorente, “La pugna cortesana por el control del Consejo de Cruzada (1575-1585)”, en *Felipe II (1527-1598): Europa y la monarquía católica*, Madrid, 1998, vol. 1, t. 2, pp. 635-676.

<sup>132</sup> Vid. F. Tomás y Valiente, “El gobierno de la monarquía...”, p. 126. También puede verse F. Barrios, *El Consejo de Estado...*, p. 58 y ss.

Estado, surgiendo entonces el Consejo de Guerra<sup>133</sup>. En ambos consejos la presidencia siempre estuvo en manos del propio monarca.

Desde 1523 el Emperador acostumbraba reunirse con su Cámara<sup>134</sup> para tratar los asuntos relacionados con materias de gracia y merced, esto es, respecto de los nombramientos de los distintos oficiales y miembros que formaban parte dentro de los órganos de la administración real, así como para la concesión de mercedes y presentación de dignidades eclesiásticas. Con el tiempo, Felipe II decidió expedir unas instrucciones en enero de 1588 a fin de institucionalizar las tareas llevadas a cabo por la Cámara de Castilla<sup>135</sup>, dando origen a la creación de un nuevo Consejo cuya finalidad

<sup>133</sup> Por su importancia institucional se han escrito algunas monografías como la de F. Andújar Castillo, *Consejo y consejeros de guerra en el siglo XVIII*, Granada, 1996 y la de J. C. Domínguez Nafria, *El Real y Supremo Consejo de Guerra (siglos XVI-XVIII)*, Madrid, 2001. También se han publicado numerosos artículos sobre el Consejo de Guerra, entre los que destacan los siguientes: I. A. A. Thompson, "The Armada and administrative reform: the Spanish council of war in the reign of Phillip II", en *Historical English Review*, nº 82 (1967), pp. 698-725; J. L. Bermejo Cabrero, "El Consejo de Guerra en el siglo XVIII", en *Estudios sobre la administración central española*, Madrid, 1982, pp. 61-73; J. M<sup>a</sup> Burrieta Mateos, "Aportación documental para el estudio del Consejo de Guerra", en *Actas del Congreso Internacional Carlos V. Europeísmo y universalidad*, Madrid, 2001, pp. 85-93 y J. M. Troyano Chicharro, "El papel del Marqués de Bedmar en el cambio dinástico y su presencia en el Consejo de Guerra", en *El cambio dinástico y sus repercusiones en el s. XVIII*, Jaén, 2001, pp. 153-167. Por su parte de la obra de S. Fernández Conti destaca el artículo titulado "El gobierno de los asuntos de la Guerra en Castilla durante el reinado del emperador Carlos V (1516-1558)", en *Instituciones y Elites de Poder en la Monarquía Hispana durante el siglo XVI*, Madrid, 1992, pp. 47-105 y su libro *Los consejos de Estado y Guerra de la Monarquía hispana durante la época de Felipe II: 1548-1598*, Madrid, 1998.

<sup>134</sup> Vid. F. Barrios Pintado, *Los Reales consejos. El gobierno central de la Monarquía en los escritores sobre Madrid del siglo XVII*, Madrid, 1988, pp. 183-184.

<sup>135</sup> Entre los estudios relacionados con su evolución histórica destacan los de S. de Dios, "El ejercicio de la gracia regia en Castilla entre 1250 y 1530, los inicios del Consejo de la Cámara", en *Anuario de Historia del Derecho Español*, nº 60 (1990), pp. 323-352 y *Gracia, merced y patronazgo real. La Cámara de Castilla entre 1474-1530*, Madrid, 1993; J. M. Delgado Barrado, "La Cámara de Castilla: fuentes legislativas para un estudio institucional (1442-1759)", en *Hispania: Revista española de historia*, vol. 52, nº 180 (1992), pp. 59-81; J. A. Escudero López, "El Consejo de Cámara de Castilla y la reforma de 1588", en *Anuario de Historia del Derecho Español*, nº 67 (1997), pp. 925-942. Más recientemente se encuentran los trabajos de M. A. González Fuertes, *La Cámara de Castilla y el Real Patronato (1733-1759): de la prepotencia a la impotencia*, en *Brocar: Cuadernos de Investigación Histórica*, nº 25 (2001), pp. 75-108 y *La organización institucional de la Cámara de Castilla en la época borbónica*, Córdoba, 2002 y el de R. Gómez Rivero, "Cámara de Castilla (1588-1598)", en *Anuario de Historia del Derecho Español*, nº 70 (2000), pp. 125-194. Entre los estudios más importantes relativos a su funcionamiento se encuentran los siguientes artículos: J. L. Heras Santos, "Indultos concedidos por la Cámara de Castilla en tiempos de los Austrias", en *Studia historia. Historia moderna*, nº 1 (1983), pp. 115-142; M<sup>a</sup> J. Álvarez-Coca González, "La Cámara de Castilla: Secretaría de Gracia y Justicia", en *Cuadernos de Historia Moderna*, nº 15 (1994), pp. 279-296; P. Loupès, "Los mecanismos de la Cámara de Castilla en el siglo XVIII", en *La pluma, la mitra y la espada*:

se centró en asesorar al monarca en los asuntos antes mencionados. En la época de Felipe III y bajo la influencia del duque de Lerma se creó una nueva Cámara cuya competencia se centró en asuntos de gracia y merced indianos dando lugar a la Cámara de Indias<sup>136</sup>.

Si bien no todos estos órganos colegiados fueron creados por el Emperador, también es cierto que a partir de las reformas a la administración emprendidas por él, sus sucesores fueron capaces de organizar el sistema de consejos, como instituciones competentes para asesorar al monarca en gobierno de todos sus reinos. Empero, aún a finales del propio siglo XVI el sistema por consejos dio pruebas de fatiga, debido principalmente a la dispersión de los asuntos, lo que se tradujo en incoherencias administrativas, en dilaciones que acumulaban montañas de papeles, en el confusionismo en las atribuciones de cada uno de los consejos, ocasionando la dilación en la resolución de los asuntos, lo que diluía las responsabilidades en los momentos críticos. Además, el conservadurismo de sus miembros, especialmente letrados, impidió el “establecimiento de una teoría administrativa moderna”<sup>137</sup>, esto es, mucho más ágil y eficiente para gobernar a miles de vasallos ubicados en todo el orbe.

---

*estudios de historia institucional en la Edad Moderna*, 2000, pp. 49-64; V. García Herrero, “Los recursos contra las resoluciones de la Cámara de Castilla. Un ejemplo de proceso judicial”, en *Espacio, tiempo y forma*, Serie IV, Historia moderna (2005-2006), pp. 271-299; I. J. Ezquerro Revilla, El “límite doméstico de la administración castellana moderna: los porteros de Cámara y el Consejo Real”, en *Evolución y estructura de la Casa Real de Castilla. Estructura y oficios de la Casa de Castilla*, Madrid, 2010, vol. 2, pp. 809-836 y M<sup>a</sup> del. M. Felices de la Fuente, “La Cámara de Castilla, el rey y la creación de títulos nobiliarios en la primera mitad del siglo XVIII”, en *Hispania: Revista española de historia*, vol. 70, n° 236 (2010), pp. 661-686. Por otra parte también se han realizado importantes estudios relacionados con su composición entre los que se encuentran: J. Martínez Millán y C. J. de Carlos Morales, “La administración de la Gracia Real: los miembros de la Cámara de Castilla (1543-1575)”, en *Instituciones y élites de poder en la monarquía hispana durante el siglo XVI*, Madrid, 1992, pp. 25-46; P. Molas y Ribalta, “Los fiscales de la Cámara de Castilla”, en *Cuadernos de Historia Moderna*, n° 14 (1993), pp. 11-28; T. Puñal Fernández, “Los oficios de la escritura: escribanos de Cámara en Castilla en el siglo XV”, en *Evolución y estructura de la Casa Real de Castilla. Estructura y oficios de la Casa de Castilla*, Madrid, 2010, vol. 2, pp. 737-760.

<sup>136</sup> De los artículos especializados en analizar el tema de la Cámara de Indias se encuentran el trabajo de J. J. Real Díaz, “El Consejo de Cámara de Indias: Génesis de su fundación”, en *Anuario de Estudios Americanos*, n° 19 (1962), pp. 725-758 y el de J. A. Escudero, “La creación del Consejo de Cámara de Indias”, en *Derecho y Administración Pública en las Indias Hispánicas, Actas del XII Congreso Internacional de Historia del Derecho Indiano*, Cuenca, 2002, vol. I, pp. 621-667.

<sup>137</sup> J. Vicens Vives, “Estructura administrativa estatal en los siglos XVI y XVII”, en *Obra dispersa*, Madrid, 1971, vol. 2, p. 369-370.

Para el caso que nos ocupa aquí, esto es el del Consejo de Indias es posible afirmar que su integración dentro del mencionado gobierno por consejos se debió entre otras razones a una inusitada extensión geográfica y a su creciente peso económico dentro de la hacienda castellana, lo que provocó “la territorialización del mundo indiano”<sup>138</sup>, con su consiguiente influencia en el resto de los órganos gubernativos. Con la creación de dicho órgano consultivo<sup>139</sup>, Carlos V sentó las bases del ejercicio del poder castellano en América, siendo el Consejo de Indias el órgano colegiado con competencias supremas encargado de gobernar e impartir justicia como máximo tribunal de las Indias<sup>140</sup>.

Según apunta Feliciano Barrios la consolidación de la “polisinodia hispánica” se realizó a través de ocho principios fundamentales, mismos que a la postre fueron creados por o para el propio Consejo de Indias. En primer lugar por la creación de órganos de gobierno de carácter conciliar no vinculados a la administración privativa de cada uno de los reinos que integraban la monarquía. En segundo lugar debido a la creación de órganos colegiados especializados dentro de una misma Corona, ya sea por razones de materia o de territorio, como es el caso del de Indias. En tercero por los usos administrativos que poco a poco se generalizaron en la mayoría de los consejos, como es el caso de la mecánica de la consulta como eje administrativo funcional de todo el gobierno por consejos. El cuarto como resultado a la diferenciación entre asuntos de gobierno y de gracia, de los de carácter contencioso, en este caso mientras que en los asuntos de gobierno el Consejo de Indias pronto obtuvo sus propios perfiles de actuación, en los jurisdiccionales dependía del sistema castellano. El quinto principio se basaba en las atribuciones propias del Consejo de Indias, las cuales dieron lugar a que el área de influencia en los otros órganos consultivos haya sido fundamental sobre todo en asuntos de gobierno. El sexto como medida que consolidaba el éxito de un determinado mecanismo administrativo en un Consejo y que fue común que se extendiera a los demás órganos consultivos de la Monarquía; en el caso del Consejo de Indias las Ordenanzas de 1571 y de 1636 influyeron en los otros consejos. El séptimo principio se desarrolló a partir de la diferencia en cuanto al tratamiento administrativo para los asuntos de oficio que de parte, y, que para el Consejo indiano tuvo especial

---

<sup>138</sup> Vid. F. Barrios Pintado, “Consolidación de la polisinodia...”, p. 120.

<sup>139</sup> Acerca del debate teórico surgido a raíz de la fecha de creación del Consejo de Indias puede verse R. D. García Pérez, *El Consejo de Indias...*, pp. 15-17.

<sup>140</sup> Vid. H. Pietschmann, “Los problemas políticos indianos, el humanismo político y la autoridad imperial”, en *Carlos V y la quiebra del humanismo político en Europa (1530-1558)*, Madrid, vol. IV, pp. 64-67.

preferencia los de oficio. Y, finalmente el octavo principio se sustentó por la tendencia a la búsqueda de un conocimiento técnico por parte de los miembros de los consejos, buscando siempre personas especializadas en los asuntos ultramarinos<sup>141</sup>.

Como ya se mencionó líneas atrás, a pesar que en el segundo tercio del siglo XVI el gobierno por consejos era toda una realidad político-administrativa, no se trataba de un sistema cerrado, sino al contrario, se iba construyendo poco a poco. Por ello, en varias ocasiones Carlos V remitía algunas cartas a la Emperatriz Isabel en donde establecía las instrucciones necesarias de cómo se debían despachar los negocios de la Monarquía. En algunas de esas cartas se estableció que en el caso del Consejo de Indias, éste continuara con sus audiencias, y que sólo le consultaren –a la Emperatriz- cuando fuere necesario<sup>142</sup>.

Para Escudero la verdadera ordenación del gobierno por consejos se llevó a cabo durante el reinado de Felipe II, especialmente a través de tres vías: en primer lugar por el mantenimiento y potenciación de los consejos bajomedievales de los reinos, como lo fueron el de Castilla, Aragón y Navarra; en segundo lugar, por la segregación como unidades autónomas de lo que antes habían sido secciones más o menos especializadas de ellas, como lo fue el Consejo de Indias respecto del de Castilla o el de Italia respecto al de Aragón; extrayéndose además de los consejos de Castilla y de Indias los consejos de Cámara de cada uno de esos territorios; y, en tercer lugar por la creación de organismos nuevos a fin de hacer frente a la expansión territorial de la monarquía, como fueron el Consejo de Portugal y el de Flandes y por la conveniencia de tratar de manera autónoma determinadas materias en algún reino, como lo fue el Consejo de Órdenes

---

<sup>141</sup> Vid. F. Barrios Pintado, “Consolidación de la polisinodia...”, pp. 122-125.

<sup>142</sup> Instrucciones de Carlos V a la Emperatriz Isabel de cómo habría de regirse en el despacho de los negocios de Estado durante su ausencia. (Toledo 8 de marzo de 1529). *Que la Emperatriz mande que los Contadores Mayores y los consejos de Indias y Órdenes y Inquisición y Contadores de Cuentas hagan sus consejos y audiencias, y despachos lo que se ofreciere, como lo acostumbran y cuando conviniere le consulten lo que fuere menester, como conmigo lo suelen hacer... ha de mandar que todas las cartas, provisiones, y cédulas que hubieren de firmar, de cualquier calidad que sean, vayan señaladas de los consejos y personas que para ello están diputadas. Y que los secretarios no se las den a firmar de otra manera... todo lo que despacharen en el Consejo de las Indias y señalaren para firmar de la Emperatriz, ha de despachar y refrendar en lugar del dicho secretario Cobos, Juan de Sámano a quien él deja para ello, y no otro alguno.* Vid. M. Fernández Álvarez, *Corpus Documental de Carlos V. (1516-1539)*, Salamanca, 1972, vol. 1, pp. 148-150.

para Castilla o en la totalidad de la Monarquía, como fueron los consejos de Estado, Guerra e Inquisición<sup>143</sup>.

De lo anterior se desprende que sea justamente en el reinado de Felipe II cuando el Consejo de Indias fuera organizado a través de una normativa creada ex profeso para ello. Cabe recordar que durante los primeros años de vida el Consejo de Indias funcionaba según lo establecido en las Ordenanzas del Consejo de Castilla. Fue hasta el 30 noviembre de 1542 con la expedición de las llamadas Leyes Nuevas<sup>144</sup> cuando éste órgano colegiado indiano contó con una regulación propia<sup>145</sup>. Empero, pronto la práctica obligó a enmendar o modificar algunos de los capítulos de dichas Leyes, así el 4 de junio de 1543 se dictaron en Valladolid seis<sup>146</sup> disposiciones adicionales firmadas por el príncipe Felipe en representación del Emperador.

Pero las Leyes Nuevas y sus adiciones no lograron paliar las deficiencias que de origen mostraba la organización y la labor del propio Consejo, por lo que a partir de la visita del consejero de la Inquisición y hombre de confianza de Felipe II, Juan de Ovando y tras analizar su larga consulta, el rey solicitó la elaboración de unas ordenanzas que organizaran la planta y forma de trabajar del Consejo de Indias. Las Ordenanzas fueron promulgadas en el Pardo el 24 de septiembre de 1571<sup>147</sup>. A partir de entonces, el Consejo, contó al igual que el resto de los órganos que conformaban el gobierno por consejos, con un ordenamiento propio para “el buen gobierno de las Indias”.

Fue en el siglo XVII cuando los monarcas potenciaron dicho régimen como “un sistema de equilibrio entre fuerzas semiautónomas, cuando no antagónicas” a través de la introducción de personal manejable en los consejos (consejeros de capa y espada), la valoración del papel de los secretarios de Estado y la creación del valido o privado. Sin embargo, desde

---

<sup>143</sup> Vid. J. A. Escudero López, *Felipe II. El rey en el despacho*, Madrid, 2002, pp. 36-37.

<sup>144</sup> “Las leyes nuevas de 1542-1543. Ordenanzas para la Gobernación de las Indias y buen tratamiento y conservación de los indios”, edición y estudio A. Muro Orejón, en *Anuario de Estudios Americanos*, nº 16 (1959), pp. 561-619. Este ordenamiento está formado por 40 capítulos; solo los nueve primeros se referían al Consejo de Indias.

<sup>145</sup> En opinión de Schäfer estas Leyes Nuevas fueron el resultado de amplias deliberaciones de una comisión de prelados, caballeros, religiosos y consejeros de Castilla, asistiendo varias veces el emperador en propia persona. Vid. E. Schäfer, *El Consejo Real...*, t. 1, pp. 82 y ss.

<sup>146</sup> Los seis capítulos pueden verse en A. Muro Orejón, “Las leyes nuevas...”, p. 582-587.

<sup>147</sup> “Las Ordenanzas de 1571 del Real y Supremo Consejo de las Indias”, texto facsimilar de la edición de 1585 de A. Muro Orejón, en *Anuario de Estudios Americanos*, nº 14 (1957), pp. 363-423.



el propio reinado de Felipe II la maquinaria conciliar había comenzado a “chirriar y durante el reinado de sus sucesores llegó casi a la parálisis”<sup>148</sup>. Como ya se ha mencionado, el gobierno por consejos era deficiente entre otras cuestiones porque no garantizaba la existencia de un ejecutivo eficaz, ni una centralización suficiente, además al llegar a Madrid cientos de documentos de todo el mundo hispánico, desde los Países Bajos a Filipinas, los oficiales eran incapaces de resolver todos los asuntos.

Felipe III heredó los defectos estructurales de la administración española, agravándolos con sus propios métodos de trabajo, sobre todo porque permitió a los consejos asumir mayor control sobre asuntos de sus respectivas competencias. Así, durante los primeros años de su reinado desatendió por completo sus propias responsabilidades, provocando una ralentización en la resolución de los asuntos; en ocasiones, dilataba más de seis meses en remitir a los consejos el material que llegaba a su poder y era frecuente que tardara en resolver más de tres meses a cualquiera de las consultas que sus consejos le realizaban.

Para evitar el entorpecimiento de su vida personal, el monarca delegó en el duque de Lerma<sup>149</sup> la coordinación de los consejos. Pero esta coordinación resultó ser casi inexistente<sup>150</sup>, ya que tanto él, como el rey solían aceptar el parecer de los consejos; sólo había dos aspectos que al

---

<sup>148</sup> J. Lynch, *Los Austrias (1598-1700)*, Barcelona, 1992, p. 33.

<sup>149</sup> Entre la bibliografía más importante sobre el duque de Lerma y su influencia en el reinado de Felipe III se encuentra la obra de A. Feros Carrasco, “Almas gemelas: monarcas y favoritos en la primera mitad del siglo XVII”, en *España, Europa y el mundo atlántico: homenaje a John H. Elliott*, 2001, pp. 49-82; del mismo autor *El Duque de Lerma: realeza y privanza en la España de Felipe III*, Madrid, 2002 y “El duque de Lerma: valimiento y construcción de un nuevo paradigma político”, en *Los validos...*, pp. 63-80. Por su parte, Ricardo Gómez Rivero ha escrito algunos artículos importantes, entre ellos “Lerma y el control de los cargos”, en *Anuario de Historia del Derecho Español*, nº 73 (2003), pp. 193-230, otro artículo con ese mismo título en *Los validos...*, pp. 81-120. También puede verse J. A. Escudero López, “Los poderes de Lerma”, en *Homenaje al profesor Alfonso García-Gallo*, Madrid, 1996, t. II, vol.1, pp. 47-104; “Los poderes de Lerma”, en *Los validos*, Madrid, 2004, pp. 121-176 y “Privados, validos y primeros ministros...”

<sup>150</sup> Se decía que Lerma carecía tanto de la voluntad, como de la energía necesaria para dominar la administración y la toma de decisiones políticas. En 1598 se quejaba de los problemas que le acarreaba su nueva posición: *Yo estoy trabajando siempre como suelo y aquí mas porque no se puede creer la gente que ayude y en oírlos se pasa no más el día*. Por tanto, en opinión de Suárez Fernández, Lerma no estaba preparado para soportar el peso de la administración, ni tampoco la impopularidad de la toma de decisiones, a menos que resultara inevitable. Vid. L. Suárez Fernández, L., “La política en la crisis de la hegemonía española, siglo XVII”, en *Historia general de España y América*, Riapl, Madrid, 1991, t. 8, p.430.

duque de Lerma se interesaban, por un lado las finanzas, en especial los gastos y por el otro, el patronazgo<sup>151</sup>.

Esta forma de gobierno obligó a los consejos a asumir mayores responsabilidades por lo que tuvieron que revisar los distintos procedimientos para la resolución de los asuntos. A fin de paliar la sobrecarga de trabajo fueron creadas una serie de comisiones o juntas con la finalidad de estudiar y resolver problemas urgentes y especiales<sup>152</sup>. El propio Consejo de Indias logró aligerar la pesada carga de trabajo a través de la creación de juntas especiales, entre las que destacaron la Junta de Guerra de Indias<sup>153</sup> y la Junta de Hacienda<sup>154</sup>. Este sistema de juntas permitió resolver el número creciente de asuntos, de manera que el Consejo podía estudiar simultáneamente una serie de asuntos urgentes, sin que el pleno del Consejo tuviera que dedicarse a un solo problema<sup>155</sup>.

Bajo el régimen del duque de Lerma se fundó dentro del Consejo de Indias, la Cámara de Indias compuesta por el Presidente y tres Consejeros, cuya función más importante fue la de consultar la provisión de todos los empleos eclesiásticos y seculares de las Indias, así como la distribución de las mercedes<sup>156</sup>. Con la creación de dicho órgano colegiado el duque lograba además de controlar los nombramientos, de eliminar las consultas de plazas y mercedes al Consejo de Indias de manera que podía otorgar “a su casa y amigos” la mayor cantidad posible de beneficios de todas clases y esto era más fácil con la ayuda de unos pocos hombres y no de todos los consejeros de Indias<sup>157</sup>.

La ambición y las corruptelas que se manejaron en el seno de la Cámara de Indias precipitaron que en 1609 el monarca decidiera su extinción, lo que

<sup>151</sup> J. Lynch, *Los Austrias...*, pp. 33-34.

<sup>152</sup> Sobre las Juntas creadas en este período véase J. F. Baltar Rodríguez, *Las Juntas de gobierno...*; C. Espejo Hinojosa, “Enumeración y atribuciones de algunas juntas de la administración española desde el siglo XVI hasta el año 1800”, en *Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo de la Comunidad de Madrid*, n° 8 (1931), p. 32; M<sup>a</sup> D. Sánchez González, *El deber del Consejo...*, entre otros.

<sup>153</sup> Un estudio pormenorizado de esta Junta vid. H. J. Tanzi, “La Junta de Guerra...”, J. C. Domínguez Nafria, “La Junta de Guerra...”, J. F. Baltar Rodríguez, “Sobre el origen de la Junta de Guerra... y el de M<sup>a</sup> D. Sánchez González, *Las Juntas ordinarias...*

<sup>154</sup> Para la Junta de Hacienda de Indias puede verse I. Sánchez Bella, *La organización financiera de las Indias. Siglo XVI*, México, 1990; del mismo autor “La Jurisdicción de hacienda en las Indias (s. XVI y XVII)”, en *Anuario de Historia del Derecho Español*, n° 29 (1959), pp. 175-228; A. Domínguez Ortiz, *Política y hacienda de Felipe IV*, Madrid, 1983; C. J. Carlos Morales, *El Consejo de Hacienda...*

<sup>155</sup> J. Lynch, *Los Austrias...*, p. 35.

<sup>156</sup> Vid. E. Schäfer, *El Consejo Real...*, t. 1, pp. 179 y ss.

<sup>157</sup> *Ibíd.*, p. 180.

a su vez provocó una reorganización dentro del propio Consejo de Indias. Pese a ello, el duque no sólo no perdió influencia política dentro del Consejo, sino además Felipe III mediante una cédula de 1612<sup>158</sup> concedió a la firma de Lerma la misma validez que la suya<sup>159</sup>, asunto harto importante considerando que era él y no el rey quien resolvía cualquier consulta que el mencionado órgano colegiado le presentaba al monarca.

Durante estos años los consejos perdieron importancia en el escenario político a favor del gran poder acuñado por el duque de Lerma. Fueron comunes los roces surgidos entre los distintos consejos con tal de atraer para sí la mayoría de asuntos. Como fue el caso de la permanente lucha de competencias entre el Consejo de Indias y el de Hacienda por obtener la administración financiera de la Casa de la Contratación; o el del Consejo de Castilla por conocer asuntos indianos fuera de sus propias competencias y que su presidente, el conde de Miranda, protegido de Lerma, luchaba por obtener cualquier tipo de beneficio<sup>160</sup>. Estas y otras corruptelas provocaron que la omnipotencia del duque de Lerma llegara a su fin en octubre de 1618<sup>161</sup>. Aún así Felipe III continuó siendo asesorado por otros validos,

---

<sup>158</sup> *Desde que conozco al duque de Lerma le he visto servir al rey mi señor y padre, que aya gloria, y a mí con tanta satisfacción de entrambos que cada día me hallo más satisfecho de la buena cuenta que me da de todo lo que le encomiendo y mejor servido dél; y por esto, y lo que me ayuda a llevar el peso de los negocios, os mando que cumpláis todo lo que el duque os dixere o ordenare, y que se haga lo mismo en ese Consejo, y podásele también decir todo lo que quisiere saber dél, que aunque esto se ha entendido así desde que yo subcedí en estos Reynos, os lo he querido encargar y mandar agora.* A.G.S., Estado, leg. 4.126. Cit. F. Tomás y Valiente, *Los validos...*, apéndice I, p. 157.

<sup>159</sup> Sin embargo, Escudero no comparte esta idea al afirmar que aunque Lerma como Uceda firmaran órdenes por mandato del rey no implicaba que tuvieran firma delegada. Vid. J. A. Escudero López, "Los poderes de Lerma...", t. II, vol.1, pp. 47-104.

<sup>160</sup> E. Schäfer, *El Consejo Real...*, t. 1, p. 193.

<sup>161</sup> Según afirmaba Tomás y Valiente en cuanto Felipe III se dio cuenta de la trascendencia de la cédula de 1612 en donde se le otorgaron poderes amplísimos al duque de Lerma, hubo de rectificar su política en los siguientes términos: *En ausencia y otros impedimentos del cardenal duque de Lerma ha firmado el duque de Uceda órdenes mías en diversas materias, por mi mandado. Así lo tendréis entendido, y lo mismo de las que ha firmado el cardenal duque, conforme a mis órdenes que sobre esto di. Y para mayor facilidad y despacho de los negocios tendréis también entendido, y así lo publicaréis en ese Consejo, que las órdenes y deliberaciones que emanaren de las respuestas que yo diere a las consultas que se me hicieren por mis consejos o Juntas, que sea necesario remitirse a otros consejos o Juntas o personas, para que las ejecuten, el secretario que fuere de tal Consejo o Junta, avise en papel aparte, para que formen los despachos que convengan, y todo lo que fuese mercedes y órdenes universales y cosas que emanasen de mi voluntad y deliberación, las rubricaré yo de mi mano, y no de otra persona alguna, con que cesará la forma de despacho de las órdenes que hasta ahora se han dado en mi nombre, y las que tuvistes mías en ese Consejo, mandando que se obedeciesen, y se le comunicase al cardenal duque de Lerma cualquier secretos que quisiese saber dese Consejo, las recogeréis y me*

como fue el caso del duque de Uceda<sup>162</sup> quien acompañaría al monarca hasta los últimos días de su reinado, en 1621<sup>163</sup>.

Al morir Felipe III de manera prematura subió al trono su hijo, quien a su corta edad aún no estaba totalmente preparado para la difícil carga del gobierno, por lo que durante los primeros tiempos hubo de “buscar desesperadamente la mano rectora de un poderoso ministro, el conde de Olivares”<sup>164</sup>, aunque éste tuvo que esperar la muerte de su tío Baltasar de Zúñiga, a finales del 1622, para hacerse cargo del control del gobierno de la Monarquía<sup>165</sup>.

A fin de lograr una hegemonía política en el seno de la organización de la administración Central de la Monarquía, el conde-duque tuvo que enfrentarse, en opinión de García-Badell a dos problemas importantes, por un lado debía de controlar a los consejos, y con ello a la tradición de la propia Monarquía, y por el otro, necesitaba acabar con la multiplicidad de jurisdicciones surgidas a raíz del gran número de consejos territoriales que en ese momento existían<sup>166</sup>.

Para controlar a los órganos colegiados y evitar que entorpecieran cualquier iniciativa de reforma decidió nombrar personas de su confianza en los cargos más importantes de los consejos; además, potenció la creación de órganos asesores de carácter temporal, esto es, Juntas *ad hoc*<sup>167</sup> capaces de resolver problemas concretos en momentos puntuales, mermando con ello el

---

*las enviaréis originalmente en virtud de esta orden.* A.G.S., Estado, leg. 4.126. Cit. F. Tomás y Valiente, *Los validos...*, apéndice II, p. 158.

<sup>162</sup> Acerca de la vida del Duque de Uceda puede verse además de los citados textos de F. Tomás y Valiente, *Los validos...* y F. Benigno, *La sombra del rey: validos y lucha política en la España del siglo XVII*, Madrid, 1994 y el artículo de R. M<sup>a</sup> Pérez Marcos, “El duque de Uceda”, en *Los validos...*, pp. 177-24.

<sup>163</sup> En el decreto 15.11.1618 dirigido al presidente del Consejo de Indias, Felipe III aclaraba los poderes que otorgaba a Uceda y que en absoluto eran tan amplios como los que en su tiempo poseyó el duque de Lerma. *Ibidem*, nota. 73, pp. 196-197.

<sup>164</sup> J. Lynch, *Los Austrias...*, pp. 81-82.

<sup>165</sup> Según afirmaba Antonio Feros en los comienzos del reinado de Felipe IV existieron dos privados, uno político, Baltasar de Zúñiga, tío de Olivares, y uno familiar, el mismo conde-duque quien, al menos oficialmente, servía desde palacio a la personal del rey dejando los asuntos públicos a Zúñiga. Vid. “Almas gemelas...”, pp. 76-77.

<sup>166</sup> Vid. L. M<sup>a</sup> García-Badell Arias, “La Junta Grande de Competencias de Felipe IV: Rey, nobleza y consejos en la Monarquía Católica”, en *Cuadernos de Historia del Derecho*, vol. extraordinario (2004), pp. 105-136.

<sup>167</sup> En realidad la proliferación de juntas fue obra de Lerma quien vio a los consejos como organismos anquilosados por un procedimiento complicado y rutinario, por lo que con la creación de juntas buscaba escapar a la oposición existente en el seno de los distintos consejos, lo cual obviaba interponiendo comités particulares integrados por personas designadas por él y obedientes a sus dictámenes. Vid. F. Barrios Pintado, *El Consejo de Estado...*, p. 124.

poder de los consejos<sup>168</sup>. Con estas medidas, a decir del mencionado autor, el conde no rompía con el principio del gobierno por consejo, sino que evitaba la resistencia de los consejeros poco abiertos a las novedades y a las trabas que “un minucioso procedimiento prefijado por las leyes y el estilo oponía a cualquier reforma”<sup>169</sup>.

Durante veintidós años el conde-duque de Olivares ejerció su impronta sobre el gobierno y en especial en los consejos. En un memorial a él atribuido le expresaba a Felipe IV la importancia del gobierno por consejos dentro de la monarquía:

*...tiene V.M. diversos consejos en su Corte que son supremos, unos respecto de las provincias y reinos que gobiernan, otros respecto de algunas materias que particularmente les están cometidas por V.M. en esta Corona de Castilla. En ellos está representado V.M. y es su cabeza, y de V.M. y de estos miembros se constituye un cuerpo. Y como en la persona de V.M. aunque una sola concurren diversas representaciones de rey, por serlo de diversos reinos, que se han incorporado en esta Corona, tan principal y separadamente como se estaban antes, es fuerza tener en su Corte Consejo de cada uno, y con eso se considera VM en cada reino; y así los hay de todos y entre sí guardan la prelación respecto del tiempo que se incorporaron con esta Corona...*<sup>170</sup>.

De la citada representación es posible comprender la forma en la que el conde-duque se ocupó de las grandes tareas de gobierno, para ello, a decir de Tomás y Valiente se “procuró coleccionar muy diversos títulos” a fin de contar con “el soporte jurídico suficiente que le permitiera actuar oficialmente en tan heterogéneos terrenos”<sup>171</sup>. En el caso del Consejo de Indias, Felipe IV le otorgó en 1623 el cargo de Gran Chanciller de las Indias por juro de heredad, obteniendo además de una renta de 25,000 escudos al año, la guarda y custodia del sello del Consejo como signo exterior del poder real<sup>172</sup>.

---

<sup>168</sup> En la biografía del conde-duque realizada por Elliot se refiere a más de una quincena de ellas: Junta del Almirantazgo, de Armadas, de Comercio, de Desempeño, de Educación, de Ejecución de las prevenciones de la defensa, de millones, de Minas, de Obediencia, de Población, de la sal, de Reformación y por supuesto la Junta Grande. Vid. J. Elliot, *El conde-duque de Olivares*, Barcelona, 1990.

<sup>169</sup> L. M<sup>a</sup> García-Badell Arias, “La Junta Grande...”, pp. 107-108.

<sup>170</sup> Copia de papeles que ha dado Su Majestad el Conde Duque, gran canciller, sobre diferentes materias de gobierno de España. Vid Elliot J. H. y Peña, F. de la, *Memoriales y cartas el Conde Duque de Olivares. T.1 Política interior 1621 a 1627*, Madrid, 1978, pp. 49-100. También en *Semanario...*, t. 11, pp. 195-196.

<sup>171</sup> F. Tomás y Valiente, “El gobierno de la Monarquía...”, pp. 114-115.

<sup>172</sup> Vid. E. Schäfer, *El Consejo Real...*, t. 1, pp. 216-217. La copia del título de Gran Canciller puede verse en F. Tomás y Valiente, *Los validos...*, Apéndice IV, pp. 159-164.

Justamente este nombramiento dio como resultado que Olivares se ocupara de manera más cercana a los problemas internos que aquejaban al Consejo de Indias, pero sus “vastos planes y empresas le impidieron interesarse más detenidamente en los pormenores del servicio”<sup>173</sup>. Aún así, imperó la necesidad y tras varias consultas al monarca, Felipe IV decidió promulgar el 1 de agosto de 1636 un nuevo ordenamiento que regulara la vida de dicho órgano; ordenamiento llamado a regular dicho Consejo aún durante todo el siglo XVIII<sup>174</sup>. Por otro lado es importante señalar que fue justamente en este reinado cuando se sentaron las bases para la creación de la Recopilación de las Leyes de los Reinos de las Indias de 1680<sup>175</sup>, que si bien por distintos motivos no obtuvo la sanción real necesaria, si que se elaboró por la mano de sus juristas de este período<sup>176</sup>. Empero, dicho cuerpo normativo indiano hubo de esperar hasta el reinado de su sucesor Carlos II para que se le otorgara valor normativo.

Fue tal el poder que adquirió Olivares que algunos autores afirmaban que el válido universal parecía “usurpar no solo el *deber de consejo*, sino

<sup>173</sup> Vid. E. Schäfer, *El Consejo Real...*, t. 1, p 229.

<sup>174</sup> *Ibidem*, pp. 231-237. El texto completo de las Ordenanzas puede verse M. Moranchel Pocatterra, “Las Ordenanzas del Real y Supremo Consejo de Indias...”

<sup>175</sup> Una de las mejores obras que versa sobre la Recopilación se debe a Juan Manzano, *Historia de las Recopilaciones de Indias*, Madrid, 1991, 2 vols. Del mismo autor “Cómo se formó la Ley primera de la Recopilación de Indias de 1680”, en *III Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano*, Madrid, 1973, pp. 281-296. Para entender el proceso de creación de la Recopilación es fundamental la obra de A. de León Pinelo, *Discurso sobre la Importancia, Forma y Disposición de la Recopilación de Leyes de las Indias Occidentales*, Madrid, 1623. También puede consultarse entre otros textos R. Altamira, “La intervención de D. Juan de Solórzano en la Recopilación de Indias”, en *Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales*, nº 3 (1920), pp. 50-84; J. Torre Revello, *Noticias históricas sobre la Recopilación de Indias y Ensayo bibliográfico sobre Juan de Solórzano y Pereira*, ambos publicados en Buenos Aires, 1929; C. García-Gallo, “La legislación indiana de 1636 y la Recopilación de 1680”, *Anuario de Historia del Derecho Español*, nº 49 (1979), pp. 99-120; B. Bernal, “Exégesis del Libro II de las notas a la Recopilación de leyes de Indias de Prudencio Antonio de Palacios” en *IV Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano*, Madrid, 1980, pp. 97-114; A. Muro Orejón, “La Recopilación de Indias de 1680”, en *Justicia, Sociedad y Economía en la América Española (siglos XVI, XVII y XVIII)*, Valladolid, 1983, pp. 53-70; F. Icaza Dufour (coord.), *Recopilación de las Leyes de los reynos de las Indias. Estudios histórico-jurídicos*, México, 1987; I. Sánchez Bella, *Derecho Indiano. Estudios II. Fuentes. Literatura Jurídica. Derecho Público*, Pamplona, 1991; J. M<sup>a</sup> Mariluz Urquijo, “Hacia la unificación legislativa: la Recopilación de las Leyes de Indias” en *La formación de las sociedades iberoamericanas (1568-1700)*, Madrid, 1999, pp. 717-738; J. Alvarado, *Historia de la literatura jurídica en la España del Antiguo Régimen I*, Madrid, 2000 y VVAA, *Juristas Universales*, vol. 2. *Juristas Modernos*, Madrid, 2004.

<sup>176</sup> Vid. F. J. Andrés Santos, “Los proyectos de recopilación del derecho indiano en la época de Felipe IV”, en *Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Coruña*, nº 11 (2007), pp. 45-69.

también el oficio de rey”<sup>177</sup>, por ello Felipe IV a través de un real decreto dirigido al Consejo de Estado estableció que *no sólo representase con entera libertad cristiana, sin detenerse en motivo alguno por respeto humano, cuanto creyese conveniente al bien de la Monarquía, sino que replicara a las reales resoluciones siempre que juzgase no haberlas dictado el Rey con cabal conocimiento de causa*<sup>178</sup>.

Como ya se ha mencionado, una de las más importantes reformas llevadas a cabo por Olivares fue la búsqueda permanente por afirmar la potestad real sobre el sistema de consejos. Para ello propuso la creación de una junta, la Junta Grande de Competencias, como un órgano capaz de resolver conflictos jurisdiccionales surgidos entre los distintos consejos<sup>179</sup>. A través del real decreto de 16 de noviembre de 1625 Felipe IV no sólo dio orden y concierto a dicha Junta, sino que la convirtió en el tribunal supremo de competencias cuyas resoluciones debían ser definitivas y ejecutivas<sup>180</sup>.

Con la creación de dicha Junta los consejeros de Castilla “veían perdida su preeminencia y superioridad frente a otros consejos”<sup>181</sup>. En protesta enviaron al monarca sendos memoriales y consultas en el que señalaban los inconvenientes que ofrecía la Junta Grande, por lo que le rogaban regresar al sistema antiguo<sup>182</sup>. El rey, no obstante, acordó se ejecutara el real decreto y en 1627 y 1628 dictó algunas normas a fin de evitar los inconvenientes de su operatividad.

---

<sup>177</sup> Vid. I. A. A. Thompson, “El valido arbitrista: El Conde-Duque de Olivares y el valimiento de su tiempo”, en *Los validos...*, p. 315.

<sup>178</sup> Real decreto citado por L. Jordana de Pozas, *El Consejo de Estado español y las influencias francesas a lo largo de su evolución*, Madrid, 1953, p. 13.

<sup>179</sup> Antes de la creación de dicha Junta y desde 1608 el Consejo de Castilla fue el órgano encargado de conocer los asuntos de competencias y diferencias que tuvieran cualesquiera tribunales de estos reynos, que residen en corte o fuera della, entre sí o con las justicias ordinarias, en que yo no tenga dada orden o la diere adelante sobre ello, consultándome primero lo que tocara a los tribunales. La orden puede verse S. de Dios, *Fuentes para el estudio...*, Documento XXIII, pp. 120-127.

<sup>180</sup> ...en la qual dicha Junta se haya de conocer y conozca sumariamente de los mismos autos, los quales hayan de tener sustanciados los tribunales dentro de ocho días de cómo se empezase la competencia, y decidiese y ejecutoriase con auto de la dicha Junta, sin que haya de haber ni haya lugar a suplicación ni otro recurso... Real decreto 09.12.1625 en P. Escolano de Arrieta, *Práctica del Consejo Real...*, pp. 353-354.

<sup>181</sup> L. M<sup>a</sup> García-Badell Arias, “La Junta Grande...”, p. 110.

<sup>182</sup> Entre los argumentos que el Consejo de Castilla esgrimió contra la mencionada Junta Grande fue que las causas de competencia se alargarían aún más por la dificultad de reunirse los once ministros en que se había de componer la Junta, y que por tanto, era preferible el método antiguo. Vid. L. Arrazola, et. al., *Enciclopedia Española de Derecho y Administración o Nuevo Teatro Universal de la legislación de España y de las Indias*, Madrid, 1860, t. 11, pp. 261-262.

En realidad, no sólo se trataba de la formación de una junta de carácter administrativo, sino que el propio Felipe IV fue más allá, pues en opinión de García-Badell, el monarca buscaba además de someter a todo el aparato administrativo “a un principio jerárquico ordenador”, en donde la Junta sería el órgano superior a todos los consejos, y por el otro, “liberar las cuestiones referentes a la soberanía de las trabas de la jurisprudencia, sometiéndola a la literalidad de la ley y a la razón natural”<sup>183</sup>.

Fueron tantas las quejas contra esta Junta Grande que en 1647 se formó una Junta *ad hoc*, la que a través de un largo informe recomendó su extinción. El rey conforme con lo propuesto decidió extinguir la Junta de Competencias en ese mismo año de 1647. Sin embargo, en 1656 se volvió a restablecer con las mismas atribuciones que le fueron concedidas en el real decreto de 1625, señalando que la práctica había demostrado que el método antiguo utilizado en la resolución de asuntos de competencias causaba un “grave daño a la administración de justicia”. Nuevamente los consejeros replicaron contra la Junta y no fue sino hasta 1665 una vez fallecido Felipe IV, cuando finalmente la Junta de Competencias fue extinguida de manera definitiva.

Por otro lado, en pleno declive de la privanza del conde-duque, el monarca decidió dar un nuevo rumbo a su gobierno introduciendo diversas modificaciones institucionales a fin de tratar de corregir el aparato de gobierno instrumentado por Olivares. En efecto, Felipe IV buscaba restaurar, aún en apariencia, “el modelo tradicional del monarca que gobierna de forma efectiva con el asesoramiento de los consejos”<sup>184</sup>. Así en 1642 remitió al Consejo de Indias un decreto en el que afirmaba su intención de continuar gobernando a través de sus consejos:

*Siendo en el gobierno de mis Reinos el único objeto de mis deseos la conservación de la Religión en su más acendrada pureza, i aumento; el bien, i alivio de mis Vasallos; la recta administración de Justicia; la extirpación de los vicios; i exaltación de las virtudes; que son los motivos, porque Dios pone en manos de los Monarcas las riendas del gobierno; i atendiendo por consiguiente a la seguridad de mi conciencia, que es inseparable de esto, no obstante hallarse ya prevenido por los reyes mis predecesores, i por mí a ese Consejo repetidas veces contribuya en todo lo que depende de él a estos fines, por lo que le toca: he querido renovar esta orden, i encargarle (como lo hago) vigile, i trabaje con toda la mayor aplicación posible al cumplimiento de esta obligación, en inteligencia de que mi voluntad es que en adelante no solo me represente lo que juzgare conveniente, i necesario*

<sup>183</sup> L. M<sup>a</sup> García-Badell Arias, “La Junta Grande...”, p. 114.

<sup>184</sup> A. Gamba Gutiérrez, “Don Luis Méndez de Haro, el Valido encubierto”, en *Los validos...*, p. 296.



*para su logro, con entera libertad Cristiana, sin detenerse en motivo alguno por respeto humano; sino que también replique a mis resoluciones, siempre que juzgare (por no haberlas Yo tomado con entero conocimiento) contravienen a cualquier cosa que sea, protestando delante de Dios no ser mi ánimo emplear la autoridad, que ha sido servido depositar en mí, sino para el fin, que me la ha concedido; i que Yo descargo delante de su Divina Majestad sobre mis Ministros todo lo que ejecutare en contravención de lo que les acuerdo, i repito por este decreto, no pudiéndome tener por dichoso, si mis Vasallos no lo fueren debajo de mi Gobierno; i si Dios no es servido en mis Dominios, como debe serlo (por nuestra desgracia, miseria, i flaqueza humana) a lo menos que sea con más obediencia a sus leyes, i preceptos de lo que ha sido hasta aquí: tendrase entendido en el Consejo de Indias, para su cumplimiento*<sup>185</sup>.

Otro de los cambios operados tras la caída de Olivares fue la restauración de la Cámara de Indias. En 1644 el conde de Castrillo, presidente del Consejo de Indias leyó ante los miembros del mencionado órgano un real decreto de Felipe IV creando nuevamente el Consejo de Cámara de Indias *como solía formarse de tres consejeros del mismo Consejo que concurran con el presidente dél, y por ellos se despachen y consulten las cosas y negocios que se consultaban y despachaban por él, cuando lo había y nombro por camaristas a los licenciados don Pedro González de Mendoza, Paulo Arias Temprado y don Jerónimo de Villaneuva*<sup>186</sup>.

Esta decisión “sobrevino como un rayo” para los miembros del Consejo, quienes representaron al monarca en distintos memoriales y consultas “los agravios que les hace y la nota de su reputación, pues parece darlos por ministros no limpios”<sup>187</sup>. En una consulta dirigida al monarca, los consejeros declaraban que *bajo el punto de vista judicial es del todo inadmisibile abolir o modificar las honras y prerrogativas acordadas, en daño de sus poseedores*, ya que al habérseles quitado sus privilegios en asuntos de cámara si habérseles oído, tanto a los consejeros togados, como a los de capa y espada, los han condenado por completo a la inactividad. En la misma consulta recordaron al monarca que el ejemplo de la anterior Cámara Indias se suprimió pronto por generar grandes inconvenientes y porque en los demás consejos con competencias parecidas a las de Indias no existía una Cámara. Todos los argumentos esgrimidos en la consulta debían ser expuestos en persona ante el monarca, pero Felipe IV se negó y al margen

---

<sup>185</sup> R. decreto 01.05.1642. *Autos Acordados que contienen los libros por el orden de títulos de las leyes de Recopilación* (en adelante A. A. de la N. Recop.), Madrid, Joaquín Ibarra, 1777, 4 ts. A. A. de la N. Recop. 2.4.70.

<sup>186</sup> R. decreto 10.02.1644. El texto completo A.H.N., Cedulaire de Indias, vol. 10 (Códices L. 693), f. 350, nº 602.

<sup>187</sup> E. Schäfer, *El Consejo Real...*, t. 1, pp. 223.

de la consulta respondió *Por escrito me puede dar cuenta el Consejo de lo que se ofreciere, y siempre tendré atención a la razones que me representare*<sup>188</sup>.

El Consejo no cesó en sus reclamaciones y presentó una nueva consulta a fin de influir en la voluntad del rey y dejar sin efecto la creación de la Cámara de Indias, pero nuevamente el monarca respondió contundentemente a través de una real orden:

*Ejecútese la resolución que tengo tomada de que haya Consejo de Cámara en el de Indias, según la formación y nombramiento que hice de tres que han de concurrir con el gobernador dél, y comiencese luego sin ulterior dilación a despachar los negocios que tocaren a la cámara, que así conviene a mi servicio y a la satisfacción pública...*<sup>189</sup>

Después de esta resolución, la Cámara de Indias comenzó a funcionar, no sin causar algunos inconvenientes en materia de competencias entre éste órgano y el propio Consejo indiano. Por lo cual se solicitó a uno de sus miembros, Antonio de León Pinelo hiciera un memorial ajustando las competencias de cada uno de estos órganos y distinguiéndolo de las competencias de la Junta de Guerra de Indias<sup>190</sup>. A partir de entonces, la Cámara de Indias funcionó con altibajos<sup>191</sup>.

Unos meses anteriores a la muerte de Felipe IV, el Consejo de Castilla le remitió un memorial en el que le proponía diferentes remedios para el alivio de la Monarquía<sup>192</sup>. En dicho memorial se aconsejaba al monarca realizar ciertas reformas en materia hacendaria a fin de reducir gastos. Se hizo patente el gasto que generaba el gran número de ministros y oficiales que formaban parte de los consejos, por lo que se proponía una drástica reducción a la planta de cada uno de ellos. Además, se recomendaba ampliar las competencias del Consejo de Hacienda con la intención de buscar nuevos recursos para el fisco y mejorar la organización administrativa de la hacienda real, de modo que el sistema jurisdiccional no pudiese actuar como instrumento del reino y bloquear la ejecución de las disposiciones

---

<sup>188</sup> A.G.I., Indiferente General, 827. Consulta de 19.02.1655 transcrita íntegramente por J. A. Escudero López, “La creación del Consejo de la Cámara de Indias...”, p. 627.

<sup>189</sup> A.G.I., Indiferente General, 763.

<sup>190</sup> A.G.I., Indiferente General, 827. El memorial ha sido transcrito en el Apéndice I y II del artículo de J. A. Escudero López, “La creación del Consejo...”, pp. 650-660.

<sup>191</sup> Por real decreto de 06.03.1701 quedó suprimida por tercera ocasión. El 29.04.1716 fue restaurada y un año más tarde, el 11.03.1717, nuevamente se suprimió. Posteriormente el 22.12.1721 fue restaurada hasta el 18.08.1809 cuando los franceses la suprimieron definitivamente. Vid. J. J. Real Díaz, “El Consejo de Cámara de Indias...”, p. 726.

<sup>192</sup> B.N., Mss 17,635, ff. 49-57.

fiscales<sup>193</sup>. Pero la muerte le sobrevino y las reformas hubieron de ponerse en marcha, por la fuerza de la necesidad, en el reinado de su sucesor.

Al iniciar el reinado del último de los Austrias, la Monarquía se encontraba sumida en una profunda crisis política y económica, por lo que continuamente se debatía acerca de la correcta y legítima forma de gobernarla<sup>194</sup>. Esta situación fue potenciada por las condiciones personales Carlos II<sup>195</sup>, lo que generó que la tutela del rey estuviera en manos de su madre, la reina María Ana de Austria quien de acuerdo con el testamento de Felipe IV<sup>196</sup> debía estar asistida por una Junta de Regencia<sup>197</sup>.

Según los deseos del monarca, dicha Junta debía actuar como órgano asesor que facilitara el gobierno a la Reyna, a quien reservó *la última voluntad y suprema potestad en todo*. Sin embargo, en opinión de Escudero, la Junta de Regencia suplantó la estructura político-administrativa de los consejos y se convirtió especialmente en “el núcleo aglutinante del poder

---

<sup>193</sup> Vid. B. Cárceles de Gea, *Reforma y fraude fiscal en el reinado de Carlos II. La Sala de Millones (1658-1700)*, Madrid, 1995, pp. 57-58.

<sup>194</sup> Vid. B. Cárceles de Gea, “Juicio y debate del régimen polisinodial en las campañas políticas del reinado de Carlos II”, en *Predalbes. Revista d’història moderna*, nº 7 (1987), p. 104.

<sup>195</sup> Baste recordar que fue un niño débil y que en sus 39 años de vida jamás gozó de buena salud, por lo que en todo momento soportó la tutela de su madre, de Juan de Austria y de algunos otros personajes. Entre algunas obras biográficas se encuentran L. Pfandl, *Carlos II*, Madrid, 1947; C. Rico-Avelló y Rico, *Carlos II; sus “tercianas” hechizos y dolencias*, Madrid, 1948; G. Maura y Gamazo, *Vida y reinado de Carlos II*, Madrid, 1990; H. Kamen, *La España de Carlos II*. Barcelona, 1981; J. Calvo Poyato, *Carlos II el Hechizado*, Madrid, 1996, del mismo autor *La vida y la época de Carlos II el Hechizado*, Madrid, 1998; J. Contreras, *Carlos II el Hechizado. Poder y melancolía en la corte del último Austria*, Madrid, 2003.

<sup>196</sup> Los pormenores de dicho documento puede verse en A. Domínguez Ortiz, “Testamento de Felipe IV”, en *Testamentos de los reyes de la Casa de Austria*, Madrid, 1982, vol. 4.

<sup>197</sup> De acuerdo con el testamento de Felipe IV los hombres que debían formar parte de la Junta eran el presidente del Consejo de Castilla, el vicescanciller o presidente de Aragón, el arzobispo de Toledo, el inquisidor general, un consejero de Estado y un Grande de España. Los nombres de cada uno de ellos se especificaron en el testamento especial de 1665: el conde de Castrillo, D. García de Haro Sotomayor y Guzmán (presidente del Consejo de Castilla), el Conde de Peñaranda, D. Gaspar de Bracamonte y Guzmán (consejero de Estado y Presidente del Consejo de Indias); D. Cristóbal Crespi de Valdaura (vicescanciller de Aragón); el marqués de Aytona y de la Puebla, D. Guillén Ramón de Moncada (grande de España) y el cardenal D. Pascual de Aragón (consejero de Estado, Virrey de Nápoles e Inquisidor General). El secretario del despacho Universal, D. Blasco de Loyola, lo fue también de la Junta. Sin embargo, durante la vigencia de esta Junta sus miembros hubieron de cambiar por razones personales o políticas. Vid. J. Cano, “El gobierno y la imagen de la Monarquía Hispánica en los viajeros de los siglos XVI y XVII. De Austrias a Borbones, en *La monarquía de España y sus visitantes: siglos XVI al XIX*, Madrid, 2007, pp. 29 y ss. También M<sup>a</sup> C. Sevilla González, “La Junta de Gobierno durante la minoría del rey Carlos II”, en *Los validos...*, pp. 583-615.

por encima del propio Consejo de Estado”<sup>198</sup>. Así lo refiere una consulta que el Consejo remitió a la reina gobernadora a fines de 1675. En dicho documento los consejeros duque del Alburquerque, condestable de Castilla, almirante de Castilla, duque del Infantado, duque de Osuna y príncipe de Stillano expresaron su inconformidad por no haberse respetado la preeminencia que el Consejo de Estado siempre tuvo respecto a que sus consultas no pasasen a personas, ni tribunal alguno<sup>199</sup>. En respuesta, la reina no hizo más que reiterar la preeminencia que dicho organismo disfrutaba en relación con el resto de los consejos, lo que debía traducirse en que el de Estado conociera y coordinase las consultas de interés general expedidas por los otros, mientras que las suyas sólo fueran a manos del mismo rey<sup>200</sup>.

En ese sentido se intentaba pasar de una forma de gobernar basada en principios jurídico-políticos tradicionales a través del sistema de consulta, a una forma ejecutiva de resolver los asuntos. Por ende, durante este período se va conformando lo que se denomina “un choque de paradigmas que se enmarca dentro de una monarquía conciliar que está viéndose suplantada por otra eminentemente ejecutiva”<sup>201</sup>. Así por ejemplo durante la minoría de edad de Carlos II, la reina gobernadora y la Junta de Regencia se convirtieron en los protagonistas del gobierno, evitando en todo momento la participación de cualquiera de los consejos en los asuntos graves del reino. Sin embargo, los diversos órganos consultivos no dejaron de presionar para poder recuperar el poder perdido.

Esta opción defendida por el gobierno por consejos se va a dejar sentir en momentos puntuales del reinado de Carlos II, entre ellos, los del gobierno de sus validos y primeros ministros entre los que destacaron Everardo

<sup>198</sup> J. A. Escudero López, “Rey, ministros y grupos políticos en la España de los Austrias”, en *Administración y Estado en la España Moderna*, Valladolid, 1999, p. 526.

<sup>199</sup> La razón de esta consulta proviene del descontento provocado en el seno del Consejo de Estado debido a que la reina gobernadora había mostrado a Juan de Austria una consulta previa de 04.09.1675 relativa a la situación de la armada. Este hecho provocó que el Consejo sintiera peligrar su preeminencia frente a otros órganos de la Monarquía. Vid. J. A. Escudero López, “Consultas al Consejo de Estado. Trámites irregulares en el reinado de Carlos II”, en *Homenaje al Dr. Dn. Juan Reglá Campistol*, Valencia, 1975, vol. 1, pp. 661-664. También en *Administración y...*, pp. 110-111.

<sup>200</sup> La respuesta dice así: *Quedo con la estimación que es justo del celo del Consejo, y siempre ha sido y es mi ánimo el mantenerle su autoridad y que se guarden los estilos. Y en este caso por la precisión del tiempo tuve por bien de mandar que se envíe en originales la consulta y despachos que citaba a don Juan mi primo. Y tendré muy presente en lo de adelante lo que el Consejo me representa*. *Ibidem*, p. 112.

<sup>201</sup> Vid. B. Cárceles de Gea, “La crisis de la monarquía judicial: la consulta del Consejo de Castilla de 1683”, en *Norba, Revista de historia*, nº 5 (1984), p. 137.

Nithard<sup>202</sup>, Fernando de Valenzuela<sup>203</sup>, el duque de Medinaceli<sup>204</sup> y el conde de Oropesa<sup>205</sup>, cuyas políticas reformistas tendieron a cuestionar las prerrogativas que en materia de gobierno gozaban los consejos, así como su privilegiada posición en los asuntos más graves de la Monarquía<sup>206</sup>.

Un documento que circuló por toda la Corte le recriminaba al duque de Medinaceli el error de dejar fuera a los consejos en la toma de decisiones, sobre todo en aquellas que afectaban directamente al reino. En dicho manuscrito titulado *La Junta de los vivos y de los muertos* se anunciaba que *...si dura dos años este hombre en el ministerio ni habrá Italia, ni habrá Flandes, ni habrá Indias, y quiera Dios, que haya España, claman todos los consejos con consultas sin que deje llegar al Rey ninguna porque no conozca en qué estado lo tiene, y busque quien le vaque de él. Él las detiene todas enviándole alguna de cajón en que se entretenga...*<sup>207</sup>, obviando con ello el consejo de los más sabios y cualificados del reino para resolver los asuntos más urgentes de la Monarquía.

Por otro lado, la mala situación financiera precipitó las reformas que hubieron de sufrir los consejos, por lo que fue necesario realizar una serie de

---

<sup>202</sup> Sobre la biografía de Nithard puede verse además de la multicitada obra de F. Tomás y Valiente, *Los validos...* las siguientes obras: M<sup>a</sup> del C. Saenz Berceo, “Juan Everardo Nithard, un valido extranjero”, en *Los validos*, Madrid, 2004, pp. 323-352; J. Calvo Poyato, “Jaque mate la expulsión de Nithard” en *La aventura de la historia*, n<sup>o</sup> 60 (2003), pp. 50-54; J. R. Novo Zaballón, “De confesor de la Reina a embajador extraordinario en Roma: La expulsión de Juan Everardo Nithard”, en *Centros de poder italianos en la monarquía hispánica (siglos XV-XVIII)*, Madrid, 2010, pp. 751-836; R. Pilo Gallisai, “La correspondencia del cardenal de Moncada en la conjura contra Nithard (1666-1668)”, en *La dinastía de los Austria: las relaciones entre la Monarquía Católica y el Imperio*, Madrid, 2011, vol. 2, pp. 1075-1088, entre otros.

<sup>203</sup> Algunos de los textos que analizan su inclusión dentro del gobierno de Carlos II son el de M<sup>a</sup> del C. Fernández Giménez, “Valenzuela: valido o primer ministro”, en *Los validos...*, pp. 353-405; H. Kamen, *La España de Carlos II...*, J. Contreras, *Carlos II...*, J. A. Escudero López, “El destierro de un Primer Ministro. Notas sobre la expulsión de Valenzuela a Filipinas”, en *Administración y Estado...*, pp. 621-635. El análisis de su última voluntad puede verse en L. M<sup>a</sup> García-Badell Arias, “La sucesión de Carlos II y las Cortes de Castilla”, en *Cuadernos de Historia del Derecho*, vol. 13 (2006), pp. 125-149.

<sup>204</sup> M<sup>a</sup> D. Alamo Martell, “El VIII duque de Medinaceli: primer ministro de Carlos”, en *Los validos...*, pp. 547-572; I. A. A. Thompson, “El contexto institucional de la aparición del ministro favorito”, en *El mundo de los validos*, Madrid, 2000, 25-42; L. Pfandl, *Carlos II...*, C. Sanz Ayán, “Reformismo y Real Hacienda: Oropesa y Medinaceli”, en *Nobleza y Sociedad en la España Moderna*, Oviedo, 1995, pp. 157-183.

<sup>205</sup> Para profundizar en la vida del conde puede verse a J. R. Rodríguez Besné, “Crisis y quebranto político del noveno conde de Oropesa”, en *Los validos...*, pp. 573-582; I. A. A. Thompson, “El contexto institucional...”, H. Kamen, *La España de Carlos II...*, C. Sanz Ayán, “Reformismo y Real Hacienda...”, entre otros.

<sup>206</sup> Vid. B. Cárceles de Gea, “Juicio y debate del régimen polisinodial...”, p. 114.

<sup>207</sup> El documento se encuentra en la B.N., Mss. 11.097, ff. 296-297.

reformas tendentes a minorar los graves problemas económicos y políticos. En este contexto, los consejos se declararon contrarios a renunciar a cualquiera de sus atribuciones, erigiéndose al mismo tiempo en “representantes calificados de la tradición foral”, para oponerse a toda reforma, aun la más mínima<sup>208</sup>. Pese a ello, varias fueron las modificaciones a las plantas de los consejos, entre las que se encontraron las de los años de 1677, 1687 y 1691<sup>209</sup>. En origen todas estas reformas buscaron paliar el caos en que se encontraba la administración del reino a través de una planificación del gobierno, empero su implementación se hizo casi imposible.

Antes de realizar las reformas financieras pertinentes fue necesario contar con la información adecuada, para ello se solicitó a los miembros de los consejos datos sobre sus ministros y oficiales, así como los salarios y los emolumentos que gozaban cada uno de ellos. A partir de esta información fue posible realizar ajustes a las plantas de los consejos, entre ellos al de Indias.

La primera de las reformas se llevó a cabo en 1677 y estuvo dirigida a reducir el número de consejeros y oficiales, para lo cual se disminuyó el salario a los consejeros numerarios, mientras que a los supernumerarios se les recordó que ocupaban plazas sin salario y que deberían estar a la espera de su incorporación a la planta fija. Mediante real decreto de 6 de julio se informaba al presidente del Consejo de Indias, conde de Medellín lo siguiente:

*Siendo tan de mi servicio el ir reduciendo los tribunales al pie que deben tener a si por excusar la mayor dilación que el crecido número de Ministros causa al breve expediente de los negocios, como por el gozo de los salarios que se aumenta cuando tanto debe atenderse aminorarle: He resuelto que el Consejo, y Cámara de Indias, se reduzca al número de un presidente y ocho Consejeros, un Fiscal, y dos secretarios, con un oficial mayor, dos segundos, dos terceros y dos entretenidos en cada Secretaría... La Junta de Guerra, se ha de componer del Presidente, cuatro Consejeros de Guerra, los que Yo señalaré, y otros cuatro Ministros del Consejo de Indias, y por ella tampoco han de llevar gajes, ni otros emolumentos...*<sup>210</sup>.

Esta disposición que en principio buscaba disminuir los gastos ocasionados por las abultadas nóminas del Consejo, la Cámara y la Junta de Guerra de India, no logró su cometido, ya que en opinión de Schäfer, desde

---

<sup>208</sup> Vid. J. Vicens Vives, “Estructura administrativa...”, p. 371.

<sup>209</sup> A.H.N., Cedulaire de Indias, vol. 13 (Códices L. 696), ff. 1r.-4v.

<sup>210</sup> Real decreto 06.07.1677. A.G.I., Indiferente General, 826. También en A.H.N., Cedulaire de Indias, vol. 22 (Códices L. 705), f. 317v-318r, nº 292.

su propia redacción el monarca estaba dispuesto a dar marcha atrás de antemano<sup>211</sup>, sobre todo cuando afirmaba que *toda esta disposición se irá poniendo en práctica según fueran vacando las plazas, y mercedes que hay hoy hechas así del Consejo, Cámara, y Secretarías, como de la Junta de Guerra, porque no es mi ánimo que se haga novedad con los que al presente están sirviendo*. Según esto, todas aquellas plazas que no contemplara este decreto serían suprimidas en cuanto quedaren vacantes, pero en la realidad esta situación no llegó a realizarse. Por ello, el Consejo “tomó el asunto con calma”<sup>212</sup>.

Pese a la pérdida de su prestigio, los consejos denunciaban a través de sendos memoriales, los ataques a los que los ministros del rey les sometían. Una muestra de ello lo fue la consulta que el Consejo de Castilla elevó al rey el 14 de octubre de 1683, época en la que el duque de Medinaceli, como primer ministro, inició una serie de reformas que buscaban transformar la organización político-administrativa de la Monarquía, y en especial, establecer un régimen ejecutivo sin la intromisión del gobierno por consejos<sup>213</sup>.

Entre los años de 1687 y 1691, tanto Manuel Joaquín de Toledo y Portugal, conde de Oropesa, como el secretario del despacho, Manuel de Lira, se abocaron a reorganizar el sistema de consejos a través de la supresión total de plazas compradas. En efecto, como la situación económica de la Monarquía era insostenible, el 31 de enero de 1687 se expidió un nuevo decreto<sup>214</sup> en donde se ordenaba al Consejo de Indias, como al resto de los otros consejos, la supresión total de las plazas compradas, dejando a sus propietarios únicamente el título y la categoría, así como un 5% de interés de las cantidades abonadas por la compra. Además, las plazas supernumerarias concedidas “por gracia” también debían suprimirse en cuanto quedaran vacantes por traslado de sus propietarios. Y, finalmente quedaba prohibido admitir en lo futuro súplicas de plazas supernumerarias. En la aplicación de este decreto es difícil conocer el número de oficiales afectados, en cambio se sabe que los consejeros duque de Guastala, Vespasiano Gonzaga y el marqués de Íscar debieron de salir del Consejo<sup>215</sup>.

---

<sup>211</sup> Vid. E. Schäfer, “La plantilla del Consejo de Indias...”, p. 60.

<sup>212</sup> E. Schäfer, *El Consejo Real...*, t. 1, p. 266.

<sup>213</sup> Un análisis pormenorizado de dicha consulta puede verse en B. Cárcelos de Gea, “La crisis de la monarquía judicial...”, p. 139 y ss.

<sup>214</sup> A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 46v-47r. También en A.H.N., Cedulaire de Indias, vol. 33, (Códices L. 716), f. 298.

<sup>215</sup> E. Schäfer, *El Consejo Real...*, t. 1, p. 268.

La última gran reforma, la de 1691, misma que se llevó a cabo tres semanas después de que el conde de Oropesa fuera retirado del cargo, buscaba la reducción tanto de la planta de cada uno de los consejos, cuanto de los salarios de sus miembros. En el Consejo de Indias dichas reformas se implementaron a partir de la expedición del real decreto de 17 de julio de 1691 en donde se estableció su nueva planta, así como los salarios y emolumentos que debían recibir sus miembros<sup>216</sup>. Pese a que los propios consejeros enviaron sendos memoriales solicitando a Carlos II la reconsideración de su decisión, éste sólo les respondía acerca de “la necesidad de cumplir con lo ordenado”.

Todas estas modificaciones al sistema tradicional de gobierno de la Monarquía tuvieron dentro de la perspectiva política una repercusión mayor de la esperada, sobre todo porque las circunstancias propiciaron que el rey pudiera reunir bajo su poder a un grupo selecto de ministros y oficiales quienes, ya no debían buscar el bien común a través de su consejo, también tenían que ejecutar las decisiones reales a fin de cubrir las necesidades públicas. En otras palabras, los antiguos derechos y privilegios que gozaban los ministros y oficiales fueron superados por el principio de la contribución como servicio a la corona<sup>217</sup>, máxime en épocas de grandes necesidades económicas. Justamente esta intromisión real sobre el número de integrantes de los consejos “denota la entrada en crisis y la inadecuación de todo un cuerpo institucional”<sup>218</sup>.

En ocasiones, los ministros de Carlos II respetaron la costumbre de consultar formalmente a los consejos, pero convertían las opiniones de los consejeros en simples puntos de referencia que utilizaban en su propio beneficio, aduciendo siempre el principio que el parecer de los consejeros podía ser importante, pero que no obligaba al rey a seguirlo. En un documento de la época se mencionaba que *el poder supremo es libre; no está exento de la dirección o del consejo, pero debe estar distante de parecer mandado*<sup>219</sup>, en otras palabras, “a los tribunales les toca consultar, al monarca resolver, siendo la potestad un atributo específico del rey”<sup>220</sup>. Por

---

<sup>216</sup> Vid. E. Schäfer, *El Consejo Real...*, t. 1, pp. 268 y ss. De este mismo autor “La plantilla del...”, pp. 59-62.

<sup>217</sup> Vid. B. Cárcelos de Gea, *Reforma y fraude fiscal...*, p. 61.

<sup>218</sup> *Ibidem*, p. 63.

<sup>219</sup> “Visita de la Esperanza al tiempo presente”, B.N., Mss. 18.208.

<sup>220</sup> Acertadamente Beatriz Cárcelos asegura que el Consejo no co-participaba en el poder, pretendiendo ostentar prerrogativas que sólo correspondían al príncipe. Vid. B. Cárcelos de Gea, “Juicio y debate del régimen polisinodial...”, p. 115.



ello se le recuerda a Carlos II que sea un auténtico rey “en vos solo permitid la absoluta potestad, porque entre tantos le deis caudal a la duda”<sup>221</sup>.

En 1694 Gaspar Alonso de Valeria, obispo de Solsona, le propuso al rey que en lugar de realizar tantas consultas debiera contar con un primer ministro, y que en caso de no aceptarlo, al menos pusiera al pleno del Consejo de Estado; asimismo, aconsejaba cambiar el estilo del gobierno, mudando la conducta política cuando los estilos que se llevaban hasta entonces no se experimentaban útiles, y mucho más cuando se conocían perjudiciales:

*Yo refiero lo que todos dicen, V. M. sabrá mejor que nadie, si tiene o no fundamento: más como quiera que esto sea, si V. M. hiciera reflexión sobre las historias, hallaría que los grandes menoscabos y desórdenes de las monarquías, nunca se repararon con irresoluciones y perplejidades de quien las mandaba, ni con la consulta de muchos, sino con la resolución grande, pronta y constante de sus príncipes, apoyadas del consejo de uno o pocos ministros, de verdadero celo y fidelidad, de seguro y desinteresado amor, de fe y secreto inviolable, de grande y clara comprensión, de largas, universales y maduras experiencias, de solícita y desembarazada expedición, y de aplicación incansable...*<sup>222</sup>.

En esa misma Representación, el obispo de Solsona insistió en la necesidad que el rey contara con el apoyo de un gabinete formado por pocos ministros, en contra del sistema colegiado de consejos, que tantas desconfianzas generaba, sobre todo porque dichos órganos siempre han funcionado en beneficio privado de los consejeros:

*Mas cuando pareciese a V. M. que no tiene ministro o ministros de quienes pueda tener entera y segura confianza para fiarse de ellos, en esta coyuntura, considerada la mala disposición de esta Corte, y el natural perplejo y desconfiado que supone tiene V. M. creen los hombres sabios, que si V. M. quiere preservar en el dictamen de no tener primer Ministro (sobre que había mucho que decir) abrazaría V. M. una conducta muy necesaria y útil, o por lo menos no tan perjudicial si para cada ramo eligiese un Ministro, y ordenase resueltamente a todos, que cada uno solo se meta en hablarle en lo que tuviera a su cargo, porque así cerrará V. M. la puerta a muchos siniestros, y apasionados informes; se librá de muchos mal fundados recelos y desconfianzas, y tendrán menos fomento las irresoluciones, que es voz común, predominan mucho en V. M. las cuales*

---

<sup>221</sup> B.N., Mss. 17.535, f. 66.

<sup>222</sup> “Representación hecha a la Majestad del Rey Don Carlos Segundo por el Obispo de Solsona, en el año de 1694, en que se descubre los males de este Reyno”, en *Semanario Erudito de Valladares*, Madrid, 1790, t. 30, pp. 260-263.

*siempre y en todos los Príncipes son muy perjudiciales al gobierno público...*<sup>223</sup>.

En 1700 vio la luz el libro de Pedro Portocarrero dedicado a analizar la caída de los imperios, donde hace un análisis pormenorizado de las causas de la decadencia de la Monarquía. En su opinión allí donde el poder no era ejercido correctamente por el soberano, la ruina amenazaba a la monarquía, ruina que vendría por el mal desempeño de la directa responsabilidad regia y por una deficiente selección de los ministros que habían de ayudarle:

*El mayor daño que padece una república es la desunión de los que la gobiernan, ésta siempre tiene su origen de la voluntad. Dejándose llevar de ella precisamente ha de pervertir la luz de la razón; sin ella reynan las passiones, nace la emulación, de ésta el ocio y embidia, aquel por la venganza, éste por el interés, ponen en confusión una Monarchía e insensiblemente, aunque a passos largos, camina a su ocaso... Los imperios que por su grandeza necessitan de comunicar parte de su poder y Traten los príncipes de extirpar esta mala semilla en sus palacios y tribunales y, asegurando el acierto, eternizarán su corona*<sup>224</sup>.

De lo anterior es posible comprender las razones por las que una parte de los escritos dirigidos al rey defendieran la postura del ejercicio del poder ejecutivo en manos del soberano, achacándole a los consejos la grave crisis en que se encontraba la república por su ineficacia en la resolución de los problemas al hacer interminables consultas y a su falta de adecuación de las resoluciones en materia de gobierno, perdiendo “la legitimidad de su contrato con el rey”<sup>225</sup>. Pero las reformas al sistema consistorial llevadas a cabo por Carlos II no lograron el objetivo buscado, esto es, someter a los consejos a la voluntad ejecutiva del rey, simplemente se sobrepuso nuevamente la figura del valido o primer ministro, como lo fueron los casos del duque de Medinaceli o del conde de Oropesa.

---

<sup>223</sup> Ibídem, p. 263.

<sup>224</sup> P. Portocarrero y Guzmán, *Theatro Monárchico de España*, Madrid, 1700, pp. 328-29.

<sup>225</sup> B. Cárcelos de Gea, “Juicio y debate del régimen polisinodial...”, p. 118. En consonancia con esta idea, Desdevises al tratar el tema de los consejos afirmaba que en España todas las cuestiones se realizaban por escrito y con una lentitud tal, que era de lo más raro ver adoptar una medida a tiempo, cuestión que deploraban hasta los propios políticos de la época. Vid. *La España del...*, p. 292.

### 3. El Consejo de Indias y “el gobierno por consejos” en el reinado de Felipe V (1700-1746)

A partir de la proclamación a Felipe V como nuevo rey<sup>226</sup>, la organización administrativa al más alto nivel hubo de cambiar. En efecto, con los nuevos aires llegados de la mano de un joven rey, el duque de Anjou implementó una serie de reformas tendentes a potenciar su posición real frente a las otras fuerzas políticas que dominaban la Corte española, ampliando “la capacidad de acción de la Corona y buscando una fuerte corrección de la tutela en la que había caído la monarquía frente a la clase política del reino”<sup>227</sup>.

Desde el principio, Luis XIV estuvo perfectamente informado de cuanto sucedía en España<sup>228</sup>. La ininterrumpida correspondencia que mantenía con su nieto le garantizaba el control directo sobre todas las decisiones que debían adoptarse<sup>229</sup>; en varias de esas epístolas, el monarca francés le “aconsejaba” la forma en que debía de gobernar: ...no os dejéis gobernar;

---

<sup>226</sup> Una visión panorámica del reinado de Felipe V puede verse en dos obras clásicas, la primera la del marqués de San Felipe: V. Bacallar y Sanna, *Comentarios de la Guerra de España e historia de su rey Phelipe V el Animoso, desde el principio de su reynado hasta la paz general del año 1725*, Génova, 1725, 2 t. y la de W. Coxe, *España bajo el reinado de la Casa de Borbón, desde 1700 en que subió al trono Felipe V hasta la muerte de Carlos III acaecida en 1788*, Madrid, 1846, ed. facsimilar, Alicante, 2011. Más modernamente existen importantes monografías de la vida y reinado del primer Borbón, entre ellas: L. Taxonera, *Felipe V: fundador de una dinastía y dos veces rey de España*, Barcelona, 1942; P. Voltes Bou, *Felipe V: fundador de la España contemporánea*, Madrid, 1991; H. Kamen, *Felipe V: el rey que reinó dos veces*, Madrid, 2000; C. Martínez Shaw y M. Alfonso Mola, *Felipe V*, Madrid, 2001; A. González Enciso, *Felipe V: la renovación de España. Sociedad y economía en el reinado del primer Borbón*, Pamplona, 2003. Muy útil ha sido el texto de P. Molas y Ribalta, *Bibliografía de Felipe V*, Madrid, 2004.

<sup>227</sup> J. P. Dedieu, “Dinastía y elites de poder...”, p. 381.

<sup>228</sup> L. M<sup>a</sup> García-Badell ejemplificaba a través de una orden de 28.12.1701 la forma en que Luis XIV tomaba el control de España obligando a todos los ministros españoles en el exterior enviarle copia de su correspondencia con la Secretaría de Estado competente al embajador de París, quien daba cuenta de ella al monarca francés por medio de Torcy y, a su vez, reenviaba la transcripción literal de aquellas cartas a Madrid. Para dicho autor la práctica resultó letal para el Consejo de Estado porque incrementó su tarea diaria, al ver remitidos a consulta, correspondencia que ya había sido vista y consultada, y porque la resolución efectiva estaba tomada en Francia antes de que Felipe V conociese sus votos. Vid. “Luis XIV y la sucesión de la Monarquía española: los presupuestos de la Embajada de Amelot. 1705-1706, en *Cuadernos de Historia del Derecho*, vol. extraordinario (2010), pp. 164.

<sup>229</sup> Vid. H. Kamen, *La guerra de sucesión en España 1700-1715*, Barcelona, 1974, pp. 55-56.

*sed siempre amo, ni tengáis favorito ni primer ministro. Escuchad y consultad a los de vuestro Consejo, pero decidid*<sup>230</sup>.

Uno de los consejos que el joven rey puso en práctica fue precisamente la creación de un Consejo de Gabinete llamado de “despacho” en donde debían pasar todos los papeles que se le comunicaban al rey y donde se debía de emitir la decisión real definitiva<sup>231</sup>. En principio, el Consejo estuvo integrado por personas de la confianza del monarca, el cardenal Portocarrero, arzobispo de Toledo, Manuel de Arias, arzobispo de Sevilla y Antonio de Ubilla, secretario del despacho universal. En ocasiones también entraba el embajador francés d’Harcourt, pero a partir del nombramiento de Marcin, todos los embajadores franceses debían de acudir a dicho Consejo<sup>232</sup>. Así, los diplomáticos comenzaron acudir a todas las reuniones del despacho, superando su autoridad a la de los propios españoles<sup>233</sup>.

Con la intromisión de los ministros franceses<sup>234</sup> dentro del Consejo de Gabinete, éste se convirtió en instrumento de la política francesa, lo que provocó que los Grandes de España protestaran sobre la enorme injerencia de Francia<sup>235</sup>. Pero poco o nada de resultado dieron dichas quejas, ya que desde 1703 y hasta la creación de las cuatro secretarías de Estado y del despacho, dicho Consejo se convirtió en el órgano colegiado con gran

<sup>230</sup> W. Coxe, *España bajo el reinado...*, p. 162.

<sup>231</sup> Vid. J. P. Dedieu, “La Nueva Planta...”, p. 115.

<sup>232</sup> Según el marqués de San Felipe *esta Junta en que presidía y despachaba el Rey, no entraban más que el cardenal, el presidente de Castilla Arias, y el embajador de Francia, a cuyo voto se tenía la mayor consideración, porque se veían disposiciones para la guerra, y se conocía el cardenal incapaz de manejar solo tan gran negocio. Desde entonces tomaron tanta mano sobre los de España los ministros franceses, que dieron más celos a los príncipes, viendo estrechar la unión a un grado que todo se ponía al arbitrio de Luis XIV, de cuyas vastas ideas recelaban su ruina los vecinos reinos*. V. Bacallar y Sanna, (marqués de San Felipe), *Comentarios de la guerra...*, t. 1, p. 30.

<sup>233</sup> Vid. H. Kamen, *La guerra de sucesión...*, pp. 101-102.

<sup>234</sup> Los embajadores de Francia Harcourt, Marcin, Estrées, Gramont y Amelot eran los primeros ministros de la monarquía hispánica al formar parte de hecho del “despacho del rey”. Desde su privilegiada posición político-diplomática fueron los únicos ejecutores de las decisiones tomadas exclusivamente en Versalles. Vid. J. M. de Bernardo Ares, “La España francesa y la Europa británica a comienzos del siglo XVIII. De la monarquía «paccionada» de los Austrias a la monarquía «nacional» de los borbones”, en *El Estado-Nación en dos encrucijadas históricas*, Madrid, 2006, p. 180.

<sup>235</sup> En noviembre de 1705 el duque de Medinaceli y el conde de Aguilar manifestaron sus agravios a Amelot, pidiéndole cualquiera que fuese la forma de gobierno que el rey adoptase, gabinete o junta, el embajador francés no debía de ser incluido. Carta de Amelot a Luis XIV 11.11.1705. Citada por H. Kamen, *La guerra de sucesión...*, p. 102.

influencia en donde se llevaba a efecto “el despacho a boca”<sup>236</sup> y donde se tomaban las decisiones políticas más importantes del reino.

Como ya se ha mencionado, durante los primeros años de su reinado, Felipe V tuvo una dependencia absoluta a su abuelo<sup>237</sup>, no sólo dentro del campo personal, sino también, y quizá lo más importante, dentro de la política española<sup>238</sup>. Entre los temas que con mayor frecuencia se repetían en la documentación intercambiada entre la Corte francesa y sus embajadores y agentes de España era lo relativo al gobierno del rey y a la necesidad de neutralizar la acción de los consejos<sup>239</sup>, sobre todo porque *todos los asuntos eran librados en unos consejos que deliberaban siempre, pero nunca actuaban*<sup>240</sup>.

Desde finales del reinado de Carlos II la literatura extranjera de la época interpretaba que uno de los males que aquejaban el gobierno de los Austrias era el gobierno por consejos. Así, por ejemplo uno de los embajadores franceses en la corte de España, el marqués de Villars describía a un Carlos II *sin conocimientos, ni sentimientos, que no tiene disposición para nada... apenas sabe leer y escribir... Su primer ministro [el Duque de Medinaceli] tiene buena voluntad, pero su talento es mediocre y carece de poder, solo puede autorizar por su impotencia la dominación del rey por los consejos. Dichos consejos se componen de gente desprovista de ingenio y experiencia, que no sirve sino sus intereses personales y los de sus parientes, a expensas de los mayores intereses del Estado*<sup>241</sup>.

---

<sup>236</sup> Sitio en el que se recogían de “la boca del monarca la palabra que tiene, por el mero hecho de ser suya”. J. P. Dedieu, “La Nueva Planta en...”, p. 115. En el capítulo cuarto abundaremos sobre este tema.

<sup>237</sup> Un buen ejemplo de esta influencia la encontramos en una carta fechada en Versalles el 01.02.1703, en donde le escribía a su nieto: *Hace dos años que reináis y todavía no habéis hablado con autoridad y sabiduría, por demasiada desconfianza en vos mismo; no habéis podido deshaceros de esa timidez...* A. Baudrillart, *Philippe V et la Cour de France*, Paris, 1890, t. 1, p. 140-41.

<sup>238</sup> Uno de los asuntos de especial relevancia para la Corte francesa lo fue el comercio indiano; desde el primer momento los barcos franceses comerciaron con las colonias españolas sin autorización, siendo difícil para las autoridades americanas rechazarlos, so pretexto de la “estrecha unión de las dos Coronas”. El Consejo de Indias continuamente remitía consultas a Felipe V advirtiéndole del estado en que se encontraba el comercio indiano, a lo que el rey o no respondía o simplemente contestaba “quedo enterado”. Vid. C. de Castro, *A la sombra de Felipe V...*, pp. 55-56.

<sup>239</sup> Vid. R. D. García Pérez, “El Consejo de Indias en la Corte...”, p. 171.

<sup>240</sup> A. Baudrillart, *Philippe V et...*, t. 1, p. 86.

<sup>241</sup> El texto ha sido traducido por A. Dubet, *Un estadista francés en la España de los Borbones. Juan Orry y las primeras reformas de Felipe V (1701-1706)*, Madrid, 2008, p. 66.

Tras la muerte del último de los Austrias las posiciones teóricas no variaron, se continuaba interpretando a la Monarquía española bajo un poder dominado por consejos. Éstos integrados por dos grupos hegemónicos lograban someter la voluntad real; por un lado se encontraban los Grandes de España quienes se aferraban a una etiqueta perenne de sus privilegios y por el otro los letrados, quienes ejercían una dominación absoluta en los tribunales<sup>242</sup>.

En términos generales, la mayoría de los asesores franceses defendían la postura de alterar el equilibrio de las fuerzas políticas existentes, reconocían que el gobierno por consejos no era la mejor opción, pero sabían que era imposible prescindir por completo de los consejos, pues representaba al sistema tradicional español<sup>243</sup>. En una misiva que el marqués de Louville le dirigió al ministro Jean-Baptiste Colbert, marqués de Torcy afirmaba que los consejos de la Monarquía no eran necesarios, pero era mejor mantenerlos a fin de evitar la oposición de la población, recomendaba algunas modificaciones al sistema de gobierno, sobre todo le parecía necesario la supresión del Consejo de Indias, toda vez que el mismo le sustraía al monarca todos los beneficios económicos que podía obtener. Con esta medida se terminaría con el fraude existente en el comercio con las colonias y haría operativo la formación de una flota y de unos ejércitos capaces de vencer al enemigo; sin embargo, el propio Louville sabía que estas medidas encontrarían oposición entre sus miembros, entre ellos el marqués de Carpio, Presidente de dicho órgano<sup>244</sup>.

---

<sup>242</sup> Las cartas de Luis XIV, sus ministros y los jefes militares acusaban a los consejos una y otra vez. Se denunciaba al Consejo de Indias como autor de los peores abusos como la venta ilimitada de cargos; el Consejo de Hacienda cuya mala administración era notoria; el de Flandes, cuya autoridad en los Países Bajos era excesiva, así como la de los consejos colaterales de Bruselas. El Consejo de Guerra entraba en muchas materias que no tenía que ver con la guerra, y ninguno de sus miembros era de la guerra; no obstante solían atreverse a decidir en negocios de tierra o mar, en los que también eran ignorantes, y a propósito de los países más lejanos de esta Monarquía, sin usar otro mapa que el mapamundi. *Ibidem*, p. 67.

<sup>243</sup> Algunas de esas cartas pueden verse en Marqués de Louvielle, *Mémoires secrets sur l'établissement de la maison de Bourbon en Espagne, extraits de la correspondance du Marquis de Louville, gentilhomme de la Chambre de Philippe V et chef de Sa Maison française*, París, 1818, t. 1, pp. 150-156.

<sup>244</sup> *...Les conseils eux-mêmes, qui ne valent rien, qui ruinent l'état, et dont les chefs vendent toutes les charges, ne sont pas jaloux tous les jours; car le conseil d'état voulait, il n'y a pas longtemps, retirer les garnisons de Catalogne pour les employer ailleurs, parce que, disait-il, c'était le côté de la France... [p. 150-151] ...Enfin, si vous cassez le conseil des Indes, qui ôte au roi catholique la seule ressource qu'il ait pour rétablir ses affaires; par le moyen de ce retranchement et l'extinction de toutes les fraudes, vous donnerez à notre maître de*

La puesta en marcha de estos ideales franceses sobre el gobierno de la Monarquía hispánica fue muy simple, Luis XIV logró que el trámite en la resolución de los asuntos fuera tan larga y farragosa que provocó la paulatina “esclerosis” del Consejo de Estado. El trámite impuesto fue el siguiente: una vez que las consultas eran elevadas al rey por medio del secretario del Despacho Universal, pasaban al correo de París para que el monarca francés hiciera sus observaciones y resolviera el asunto; ya de regreso en Madrid, Felipe V dictaba la resolución definitiva, pudiendo tardar dicha resolución tantos meses, que el Consejo de Estado quedó fuera de la participación en el gobierno de la Monarquía<sup>245</sup>.

Otro de los consejeros de Felipe V, Jean Orry, aconsejaba varias reformas. La primera de ellas buscaba una reforma de la administración fiscal a través del nombramiento de tres cargos: el secretario del Despacho de Guerra quien ordenaría los pagos; una Tesorería General de la Guerra que recibiera los fondos y ejecutase órdenes de pago y el nombramiento de comisarios, contadores y veedores capaces de controlar la actividad del tesorero<sup>246</sup>. Un memorial atribuido a Orry atacaba directamente al gobierno por consejos español<sup>247</sup>. En él se afirmaba que el rey se encontraba imposibilitado de conocer el estado de sus reinos, no pudiendo gobernar por sí mismo en caso de mantener el sistema de consejos. Para evitar este inconveniente se proponía establecer “una jurisdicción entre el despacho y los consejos por medio de la cual el rey mandaría examinar todos los negocios y haría que le diesen cuenta antes de restituirlos a los consejos”<sup>248</sup>. También enfatizaba la necesidad de crear un ministerio y varios departamentos, recomendando la desaparición de los consejos de Italia, Aragón, Indias y Guerra.

Frente a esta política anti sinodal, el Consejo de Estado envió al rey una consulta en donde se resumían las quejas contra la política de los franceses. En ella denunciaba los abusos cometidos por los franceses, así como la mala dirección de la guerra y solicitaba al monarca respetar la constitución tradicional de la monarquía, restituyendo a los tribunales de la Corte su condición *de depositario del Consejo juicioso, del juramento tomado por el*

---

*bonnes armées et de bonnes flottes, avec lesquelles il se moquera des cris injustes et vaincra ses ennemis...* [p. 154]. Ibídem, pp. 147-156.

<sup>245</sup> Vid. L. Mª García-Badell Arias, “Luis XIV y la sucesión...”, p. 164.

<sup>246</sup> Acerca de la reforma en materia hacendaria y de los personajes nombrados para ocupar tales cargos puede verse A. Dubet, *Un estadista francés...*, pp. 181-203.

<sup>247</sup> El memorial es citado por R. D. García Pérez, “El Consejo de Indias en la Corte...”, p. 172.

<sup>248</sup> A. Dubet, *Un estadista francés...*, p. 165.

*rey de España, y del que él ha recibido de sus súbditos... que ellos debían tener conocimiento de todo, para dar su opinión, correspondiendo la decisión al rey de España... Que se podían formar juntas particulares en ciertas situaciones, y dar comisiones a los más apropiados para ellas; pero que deben actuar en público y estar guiados por mentes superiores como las del despacho...*<sup>249</sup>. Pero estas demandas del Consejo de Estado, significaron en opinión de Kamen, “la última amenaza de una aristocracia que se desvanecía, a partir de entonces los nobles fueron excluidos del gobierno efectivo y los consejos reducidos a un mínimo papel”<sup>250</sup>.

Otro de los grandes cambios que realizó Felipe V en sus primeros años de reinado fue la división de la antigua Secretaría del Despacho Universal de los Austrias<sup>251</sup> que en este tiempo estaba bajo el mando de José Ubilla, en dos departamentos. Por un lado los asuntos de guerra serían conocidos por el marqués de Canales<sup>252</sup> y todos los demás permanecerían del conocimiento del propio Ubilla<sup>253</sup>. Así lo refiere Macanaz en una carta en donde señala que el gobierno *...se halla hoy con la novedad de haberse despedido del despacho los dos cardenales, cuyo motivo se atribuye a la creación de nuevo secretario del Despacho, en lo tocante a Guerra, y que ésta ha procedido como otras muchas resoluciones de la más oculta deliberación de SM... el electo secretario es el Marqués de Canales, quien entra a despachar lo de su negociación diferentes horas, que el Marqués de Rivas lo demás Universal...*<sup>254</sup>. Dos años más tarde, por decreto de 11 de julio de 1705<sup>255</sup> Felipe V hubo de dividir esta única Secretaría del Despacho Universal en dos, por un lado creó la Secretaría de Estado y del Despacho de Guerra y Hacienda a cuyo mando fue nombrado José Grimaldo y, por el otro, a la Secretaría de Estado y del Despacho que conocería de “todos los demás” asuntos y cuya titularidad recayó en el marqués de Mejorada, quien

<sup>249</sup> Consulta citada por H. Kamen, *La guerra de sucesión...*, p. 106.

<sup>250</sup> Loc. cit.

<sup>251</sup> Otra de las reformas propuesta por Orry consistía precisamente en dividir el secretario del despacho Universal en tres departamentos geográficos. Vid. A. Dubet, *Un estadista francés...*, pp. 165-166.

<sup>252</sup> Acerca del trabajo realizado por Manuel Coloma Escolano, marqués de Canales es importante el artículo de C. de Castro, “Las primeras reformas institucionales de Felipe V: El marqués de Canales, 1703-1704”, en *Cuadernos dieciochescos* nº 1 (2000), p. 155-183.

<sup>253</sup> Vid. J. A., Escudero López, *Los orígenes del Consejo...*, vol. 1, pp. 36-38.

<sup>254</sup> M. R. de Macanaz, “Noticias individuales de los sucesos más particulares, tanto de Estado como de Guerra, acontecidos en el reinado del rey nuestro señor don Felipe Quinto desde el año de 1703 hasta el de 1706”, en *Semanario Erudito de Valladares*, Madrid, 1788, t. 7, p. 47.

<sup>255</sup> ANH, Estado, L. 928.



sustituyó Manuel Vadillo<sup>256</sup>. Era evidente que durante los años de la guerra de sucesión los asuntos tramitados por Grimaldo debían ser los más importantes, de allí que el ministro interviniera de forma directa en los asuntos relativos al comercio indiano; así lo demuestra la continua correspondencia existente entre el Consejo de Indias y la Secretaría de Estado y del Despacho de Guerra y Hacienda sobre materias relacionadas con la organización y el despacho de la flota americana<sup>257</sup>.

Por otro lado, mientras que Felipe V iniciaba las reformas en la administración central, el otro pretendiente a la corona de España, el hijo del emperador de Austria, el archiduque Carlos fue también aclamado rey de la Monarquía española el 12 de febrero de 1703 en la Corte imperial vienesa. Para poder llevar a cabo su proyecto político, hubo de recurrir a constantes referencias históricas y doctrinales, entre ellas la de respetar el gobierno por consejos.

En efecto, durante el periodo que el archiduque ocupó Madrid, desde el 27 de junio, y a lo largo del mes de julio de ese año 1706, intentó mantener el gobierno por consejos tal y como se encontraba funcionando en ese momento, proyectando de modo conjunto la organización de los consejos de Castilla, Indias, Hacienda y Órdenes Militares, continuando por lo tanto, la coherencia del régimen desplegado desde el siglo XVI<sup>258</sup>. El archiduque tenía claro que debía conservar el dicho régimen con una preferencia por el modelo de “monarquía judicial” en el que los asuntos se trataban por la vía de los consejos, más que por el del sistema francés de una “monarquía administrativa” a través de la vía expeditiva de las secretarías de Estado y del despacho<sup>259</sup>. Justamente uno de los consejos que más apoyaron al archiduque fue el de Indias, sobre todo, porque a decir de J. L. Solís, “el archiduque tuvo presente en todo momento la pertenencia de las Indias al conjunto de la Monarquía en la que pretendía haber sucedido, manteniendo por ello sus órganos de gobierno característicos”<sup>260</sup>.

Sea por cobardía, tibieza u oportunismo, lo cierto es que cuando las tropas aliadas entraron en Madrid gran número de miembros de los consejos

---

<sup>256</sup> V. Bacallar y Sanna, *Comentarios de la Guerra...*, t. 1, pp. 150.

<sup>257</sup> Vid. I. Martínez Navas, “La división de la materia administrativa en el reinado de Felipe V y la real Cédula de 18 de mayo de 1747”, en *XIII Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano*, Puerto Rico, 2003, p. 534.

<sup>258</sup> J. Solís Fernández, “Elementos de la administración austro-española y la administración central castellana en 1710”, en *Cuadernos de Historia del Derecho*, vol. extraordinario (2010), p. 651.

<sup>259</sup> Vid. P. Fernández Albaladejo, *Fragmentos...*, pp. 380 y ss.

<sup>260</sup> J. Solís Fernández, “Notas para el estudio del Consejo...”, p. 688.

de la Monarquía y sobre todo del Consejo de Indias se alinearon a la causa austriaca<sup>261</sup>. En contrapartida, Felipe V dispuso la salida de la villa de Madrid, ordenando a los consejos pasasen primero a Guadalajara<sup>262</sup> y posteriormente a Burgos<sup>263</sup>. Mientras que al primer sitio se movilizaron aquellos ministros y oficiales que el propio rey dispuso, a Burgos solo acudieron unos pocos oficiales<sup>264</sup>, por lo que fue imposible el despacho de los asuntos. En estas circunstancias, el monarca hubo de tomar medidas urgentes y extraordinarias. Por un lado, concedió al entonces Presidente del Consejo de Indias, duque de Atrisco, la facultad de hacer nombramientos sin pasar previamente por consulta, nombramientos que el propio rey confirmaría posteriormente, como ocurrió en el caso de los porteros Manuel del Río y León<sup>265</sup> y Antonio Izquierdo<sup>266</sup>; de los contadores Juan Francisco del Zerro<sup>267</sup> y Gonzalo del Río Lorenzana<sup>268</sup> o de los oficiales de las Secretarías Simón Mozo de la Torre<sup>269</sup> y Joseph Miranda<sup>270</sup>.

La segunda medida extraordinaria consistió en identificar las decisiones legítimas emanadas del Consejo de Indias afecto al rey Borbón de las emitidas por el rey intruso, así por decreto de 7 de julio de 1706 el monarca señaló a las autoridades americanas los requisitos que debían tener aquellos documentos enviados desde la Metrópoli para no confundirlos con aquellos

<sup>261</sup> L. Navarro García, “La política indiana”, en *Historia General de España y América, Rialp*, Madrid, 1983, t. XI-1, p. 9.

<sup>262</sup> Por real decreto de 17.06.1706 se ordenó a los tribunales trasladarse a Guadalajara y que para el caso del Consejo de Indias acuda *su excelencia el Señor Presidente, dos señores ministros inferiores (los que eligiere), el señor Fiscal, los dos señores secretarios, sus oficiales y demás ministros inferiores, y precisos, dependientes de él, que le pareciere para el curso, y expediente regular de los negocios llevando los sellos, y archivos de sus papeles, teniendo entendido que los demás Ministros que quisieren seguir después, han de ser admitidos en Guadalajara al ejercicio de sus plazas, y que aquellos que quedan han de cesar enteramente en el despacho tanto de Gobierno, como de Justicia, respecto de que en Madrid no ha de haber, ni quedar Ministros de este Tribunal con jurisdicción alguna, porque esta ha de residir, y subsistir en los que han de ir a Guadalajara, para componer el Consejo*. Auto del Real decreto de 19 de junio de 1706 dirigido a la Contaduría de Cuentas. A.H.N., Cedulaire de Indias, vol. 15 (Códices L. 698), f. 141r-141v, nº 145.

<sup>263</sup> Real decreto de 24.06.1706 citado por G. Bernard, *Le Secrétariat d'État...*, p. 2.

<sup>264</sup> El fiscal del Consejo, Agustín de los Ríos declaró no saber donde se encontraban los consejeros y el duque de Atrisco atestiguó que solo cuatro funcionarios de diversos rangos habían salido de Madrid, habiendo quedado los demás a disposición de los enemigos, junto con los papeles y sellos oficiales del Consejo de Indias. Vid. L. Navarro García, “La política indiana...”, p. 9.

<sup>265</sup> A.G.I., Indiferente General, 542, L. 1, 51-55.

<sup>266</sup> A.G.I., Indiferente General, 542, L. 1, 55-58.

<sup>267</sup> A.G.I., Indiferente General, 542, L. 1, 26-31.

<sup>268</sup> A.G.I., Indiferente General, 542, L. 1, 21-26.

<sup>269</sup> A.G.I., Indiferente General, 542, L. 1, 15-20.

<sup>270</sup> A.G.I., Indiferente General, 542, L. 1, 11-15.

remitidos por el Consejo de Indias controlado por el archiduque desde el 19 de junio<sup>271</sup>. También envió algunas órdenes en donde se prohibía enviar caudales desde las Indias sin orden expresa y no dar curso a ningún nombramiento eclesiástico o civil que no tuviera el sello secreto.

A su regreso a Madrid, Felipe V restituyó a los consejos y tribunales de la forma en la que estaban organizados en Burgos, debiendo despachar sin más ministros de los allí presentes<sup>272</sup>. También aprovechó la ocasión para enjuiciar a todos aquellos que habían desobedecido y traicionado su confianza, por lo que fueron obligados a abandonar la Corte en un plazo de veinticuatro horas y se les sometió al proceso de una Junta creada *ad hoc*<sup>273</sup>. Introdujo cambios en la organización del gobierno por consejos, particularmente en su plantilla, que se redujo en 1707 de 490 a 296 personas entre consejeros y oficiales, algunos de los cuales fueron encarcelados y desterrados de la Corte so pretexto de no acompañar al monarca en su huída de Madrid por falta de recursos económicos<sup>274</sup>. En el caso del Consejo de Indias, suspendió a catorce de sus miembros y resolvió mediante decreto de 1 de diciembre de 1706 *invalidar todo lo actuado en el tiempo que Madrid y otros lugares padecieron de la opresión de los enemigos*<sup>275</sup>. Las plazas de los cesados no fueron nuevamente ocupadas, de allí que redujera la planta del Consejo a la establecida en el decreto de 1691, misma que había sido confirmada por él mismo en 1701.

<sup>271</sup> Al Virrey del Perú, participándole la resolución de S. M., y ordenándole lo que ha de ejecutar con todos los despachos que no vayan en la forma que se previene, es decir firmados por el Duque de Atrisco, presidente del Consejo y por los consejeros y refrendados por uno de los secretarios de Estado y del despacho Universal, Marqués de la Mejorada o Don José Grimaldo, y sellados con el sello real secreto. A. Muro Orejón, *Cedulario Americano del Siglo XVIII*, Sevilla, 1969, vol. 2, p. 167.

<sup>272</sup> Real decreto de 18.08.1706. A.H.N., Cedulario de Indias, vol. 34 (Códices L. 717), f. 73, n° 57.

<sup>273</sup> *He resuelto dar desde luego por vacos a todos los Ministros de la tabla las plazas que servían en los consejos, en castigo por ahora solo de su inobediencia por el acto de haber asistido estos, sin perjuicio de lo que después resultare de otras culpas contra ellos. Y manda que todos los Ministros que quedan por esta razón fuera de los tribunales, salgan de la Corte, dentro de veinte y cuatro horas, a distancia de dos, tres o cuatro leguas de ella, según la comodidad o mi conveniencia que tuvieren, para el efecto de ser oídos, y darse satisfacción a los otros cargos que se les harán por una Junta de Ministros que a este fin he mandado formarse, donde se reconozcan las demás causas, no solo para el cargo correspondiente a los que lo merecieren, si no para que en aquellos en que no hubiese habido más delito que el de inobediencia, no quede contra ellos ni sus familias la nota de infidelidad.* Real decreto 18.09.1706. A.G.I., Indiferente General, 542, L. 1, ff. 81-86; 583 L. 2, ff. 57-60.

<sup>274</sup> Vid. J. C. Saavedra Zapater, "Entre el castigo y el perdón. Felipe V y los austracistas de la Corona de Castilla, 1706-1715", en *Espacio, Tiempo y Forma*, Madrid, Hª Moderna, serie IV, t. 13 (2000), p. 480.

<sup>275</sup> A. Muro Orejón, *Cedulario Americano...*, vol. 2, p. 205.

En los siguientes años, esto es, de 1706 a 1709, la actitud de Felipe V y de sus consejeros franceses confirmaron la ruptura entre las antiguas formas de gobernar y la implantación de un nuevo modelo más absolutista a través de la exclusión de los Grandes y de los consejos en la toma de decisiones políticas importantes, así como la consolidación del Despacho, a través del cual el embajador francés, Amelot, formalizaba el gobierno de Luis XIV<sup>276</sup>.

En 1709, las continuas guerras sostenidas por Francia y España llegaron a su cénit, por lo que Luis XIV se vio forzado a buscar la paz con los Aliados, a cambio, tuvo que retirar su apoyo a Felipe V y éste a su vez hubo de renunciar a sus derechos al trono de Francia<sup>277</sup>. Los consejeros y ministros franceses, así como su ejército tuvieron que abandonar España, y con ellos, la influencia de Versalles salió de la Corte española. Solamente la princesa de los Ursinos permaneció en Madrid “para velar hasta cierto punto por la continuidad del régimen anterior”<sup>278</sup> y se nombró a Blécourt como el nuevo representante extraordinario de Francia. Los Grandes de España al sentirse aliviados por la salida del ejército francés creyeron que el sistema volvería al sistema anterior; en una representación sobre el Estado de la monarquía dirigida a Felipe V le expresaban cuan *han herrado en proponer a VM nuevas plantas de consejos y gobierno, y el cuidado sólo se había de poner en corregir el desorden de la mala práctica de las leyes*<sup>279</sup>.

Sin embargo, en 1710, Madrid cayó por segunda vez en poder del archiduque, varios nobles se unieron a su causa por estar en contra de las decisiones de la monarquía borbónica. En principio, el archiduque tenía planeado mantener las instituciones tradicionales, entre ellos los consejos<sup>280</sup>, pero el abandono de los oficiales de dichos órganos, le obligó a establecer nuevas formas administrativas. A través de un real decreto de 23 de octubre de 1710 nombró como secretarios de Estado y del Despacho a Ramón de

<sup>276</sup> I. M<sup>a</sup> Vicent López, “Felipe V y la Monarquía Católica durante la Guerra de Sucesión: una cuestión de «estilo»”, en *Espacio, Tiempo y Forma*, Madrid, serie IV, H<sup>a</sup> Moderna, t. 7 (1994), p. 418.

<sup>277</sup> A. Baudrillart, *Philippe V et...*, t. 1, pp. 403-405.

<sup>278</sup> H. Kamen, *La guerra de sucesión...*, p. 62.

<sup>279</sup> B.N., Mss. 10.695, f. 105.

<sup>280</sup> La teoría política de la época confirmaba la necesidad de la organización administrativa a través del régimen de consejos. Una de esas obras se atribuyó a un austracista, Juan Amor de Soria, quien en un escrito fechado en 1710 titulado *Reflexiones políticas que pone en la R. consideración de Vuestra Majestad un Leal Vasallo, afecto y celoso del R. Servicio de la penosa tarea de gran Monarquía y del bien público con el motivo de la posesión que Vuestra Majestad toma de los dominios*, defendía el sistema de consejos y proponía una reforma al pago de la media annata a fin de resolver los problemas que ocasionaría la puesta en marcha nuevas instituciones<sup>280</sup>. Vid. M<sup>a</sup> V. León Sanz, *Entre Austrias y Borbones...*, pp. 119-126.

Vilana Perlas, marqués de Rialp y a Antonio Romeo de Anderaz, marqués de Erendazu a fin de despachar a boca con el monarca; además, ordenó el establecimiento de los órganos de gobierno de la Monarquía, entre los que se encontraban los consejos de Estado, Guerra y Aragón, formándose entre finales de 1710 y 1711 los restantes consejos<sup>281</sup>, aunque carecieran de competencias por estar su jurisdicción bajo el dominio de Felipe V<sup>282</sup>. Respecto del Consejo de Indias, afirma Virginia León, que el archiduque no sintió “la necesidad” de organizar a dicho Consejo, y menos aún de tratar de las dependencias americanas, sobre todo porque las colonias continuaban bajo el control Borbón y porque en su bando no había demasiados expertos, pese a ello, confirmó a varios ministros del Consejo evitando hacer cambios innecesarios<sup>283</sup>.

Para Felipe V en cambio, la guerra de Sucesión tuvo como efecto inmediato la renovación de las viejas estructuras político-administrativas reflejadas a través de la promulgación de los decretos Nueva Planta y del nuevo formato de organización de la administración del reino, con el aumento de las competencias de las diversas secretarías de Estado y del

---

<sup>281</sup> Vid. M<sup>a</sup> V. León Sanz, “El reinado del archiduque Carlos...”, pp. 46-49.

<sup>282</sup> El marqués de San Felipe relató en detalle la entrada del archiduque a Madrid y la ausencia de ministros en la Corte: *Habían los tribunales del rey Felipe pasado con la Reina a la ciudad de Vitoria, y no halló el rey Carlos en la corte ministros para formar los suyos, y así creó por presidente de la Sala Criminal de Alcaldes a don Francisco Álvarez Guerrerros. Nombró ministros y sólo dio despachos en ínterin, por no quitar a los ausentes la esperanza de volver a sus empleos; quitó el de corregidor a don Antonio Sanguineto y puso al marqués de Palomares, y esto acabó con la providencia para los víveres y con la quietud del pueblo, porque la prudencia y ajustada dirección de Sanguineto contenía en orden al vulgo, ya inclinado al tumulto por falta de pan, pues no permitían las partidas de caballería de Vallejo y Bracamonte que se introdujesen en Madrid, ni los aldeanos querían traerlos, por si el hambre ocasionaba una rebelión y llegaban a las armas. Esta malicia oportuna, aunque ajena de caridad, fue de suma importancia, porque no se podía mantener un ejército de veintiocho mil hombres y tan gran cantidad de bagajes en un lugar que ya padecía entera falta de todo, y de quien violentamente se sacaba el preciso alimento, por no haber otro remedio de subsistir las tropas; y aunque enviase el rey Carlos partidas de caballería por los vecinos lugares a buscar víveres, les hacía tantas emboscadas don José Vallejo, con exacta noticia de la tierra y el favor de los paisanos, que nada lograban los alemanes, siempre vencidos o ahuyentados. Determinó el rey Carlos hacer su pública entrada en la villa, y visitando antes el santuario de Nuestra Señora de Atocha, subió por la propia calle, acompañado de dos mil caballos que le precedían de sus guardias y su familia; ni aún la curiosidad movió al pueblo y, retirado a sus casas, rebosaban melancolía las plazas. Oíanse voces de niños que, atraídos con dineros, aclamaban al nuevo Rey; y alguna vez se oía aclamar a Felipe V. Esto hirió altamente el ánimo del príncipe austriaco, y al llegar a la puerta que llaman de Guadalajara, sin proseguir hasta el Real Palacio, como era costumbre, declinó por la derecha, y por la calle de Alcalá y su puerta volvió a salir de Madrid, diciendo que era una corte sin gente.* V. Bacallar y Sanna, *Comentarios de la Guerra...*, t. 2, pp. 37-38.

<sup>283</sup> Vid. M<sup>a</sup> V. León Sanz, *Entre Austrias y Borbones...*, p. 74.

despacho en detrimento del gobierno por consejos. Si bien es cierto que esa intención de reforma de la administración tenía como fin acabar con la pretendida autonomía funcional de los consejos, en especial la de Castilla, lo cierto es que el propio Felipe V tuvo que retornar a su antiguo método y manejo. Sin embargo, tras la retirada de la Corte a Valladolid en septiembre de 1710, varios nobles se negaron a seguirlo y se quedaron para recibir al archiduque en la capital. La crítica situación de la monarquía y la falta de apoyo militar francés hicieron que Felipe V buscara el apoyo del conde de Bergeyck, quien en julio de 1711 formaba parte del Despacho del rey y sobre todo buscaba elaborar, según una carta que le escribiera a Torcy, un plan que permitiera a Felipe V ser *dueño de sus Estados, independientemente de todos sus consejos*<sup>284</sup>.

A su regreso a Madrid, los desertores fueron juzgados y sus bienes confiscados, fue, en opinión de Kamen, “el fin de los Grandes de Castilla, su número disminuyó, su honor se comprometió y quedó a la vista su incompetencia”<sup>285</sup>. En materia administrativa Bergeyck continuaba poniendo en marcha sus ideas sobre las reformas a la marina, hacienda y a la administración; fue además, quien implementó el sistema de intendencias en España, pero antes de que pudiera poner en marcha todas sus ideas, Felipe V, a principios de enero de 1712 decidió enviarlo como embajador de España ante la Corte la inglesa para la firma de la paz. Después de una breve ausencia, Orry regresó de nuevo a la Corte, aliándose con la princesa de los Ursinos y con Melchor de Macanaz.

A principios de 1711 el archiduque había ordenado constituir todos los consejos dependientes de la corona de Castilla, de la misma forma que los instituidos en Madrid, dejando en su puesto al personal que hubiera pasado a la causa austracista, completando tan solo las plazas de ausentes<sup>286</sup>. Pero la muerte de su padre precipitó los acontecimientos, por lo que en septiembre de ese año, Carlos de Austria abandonó España para tomar posesión del Imperio. Finalmente, en 1713 se firmó la paz de Utrecht poniendo fin a la guerra y renunciando a su anhelo de obtener la Corona Española.

Por su parte, Felipe V tras su triunfo hubo de retomar algunas de las reformas político-administrativas que había comenzado a su llegada a España. El 10 de noviembre de 1713<sup>287</sup> impulsó las reformas planteadas por

<sup>284</sup> Carta dirigida al Ministro de Asuntos Exteriores de Francia Torcy del 05.09.1711. Vid. H. Kamen, *La guerra de sucesión...*, p. 63.

<sup>285</sup> *Ibíd.*, pp. 117-118.

<sup>286</sup> Vid. M<sup>a</sup> V. León Sanz, *Entre Austrias y Borbones...*, pp. 64-65.

<sup>287</sup> A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 58v-.62v; 827.

su ministro Orry, esto es, aquellas que buscaban disminuir la influencia de los consejos a través de fraccionar su autoridad, haciéndola recaer en un número mayor de personas<sup>288</sup>.

En el caso del Consejo de Indias decidió transformar su planta y nombró a tres presidentes a fin de debilitar el poder político del Consejo y el prestigio personal del presidente único. Aumentó a veinte el número de consejeros con la esperanza de dar celeridad a todos los asuntos que habían quedado rezagados por razón de la guerra; además, nombró a tres secretarios en lugar de los dos que había y decidió remitir todos los asuntos relacionados con los ingresos provenientes de las Indias a una Junta especial<sup>289</sup> creada ex profeso para ello y compuesta por tres Consejeros de Indias y tres de Hacienda. En esta misma reforma el monarca creó una Junta de Hacienda de Indias privando al Consejo de Indias del conocimiento de todo lo relativo a las finanzas de aquellos territorios y lo remitió a una junta especial compuesta por tres consejeros del Consejo de Indias y tres del Consejo de Hacienda, otorgando la presidencia al presidente de Hacienda. Dicho órgano debía tratar solamente lo relativo a las finanzas de Indias, gastos, recaudación de impuestos, productos de comercio, salida y regreso de la flota y galeones así como todo lo relativo a rentas y otros derechos del

---

<sup>288</sup> I. Martínez Navas, “Alberoni y el gobierno de la Monarquía española”, en *Revista electrónica del Departamento de Derecho de la Universidad de La Rioja*, nº 8 (2010), p. 93.

<sup>289</sup> La justificación que Felipe V dio para la creación de una Junta Especial de Hacienda fue: *Y porque lo que mira a las Rentas de las Indias, y todo lo que toca a mi Real Hacienda, así de los Reynos del Perú, y de Nueva España, como de lo que rindiere el comercio de España, y de las Indias, y gastos, y cosas que para su recaudación se consideraren por precisos; he resuelto se regle, corra, y se dirija por una tinta que yo nombraré de tres Consejeros de Indias, y tres de el de Hacienda a la cual presidirá siempre uno de los Presidentes de Hacienda con el Fiscal de Indias, y uno de los dos de Hacienda, y un secretario particular destinado solo para esta Junta, que también nombraré para que juntos todos estos Ministros, conozcan de todo lo tocante a la Hacienda de Indias gastos de ella para su beneficio recaudación, y aumento, y la que produjeren los comercios, envío, y retorno de Flotas, y Galeones, y esta Junta arrendará, administrará, y dirigirá general y particularmente, todo lo que tocara a los referidos gastos, rentas, regalías, y derechos que me tocaren sin que ninguno de los dos consejos de Indias, y Hacienda, ni otra ninguna Junta, se puedan mezclar, ni mezclen en nada que a esto toque, por que han de quedar inhibidos de este conocimiento respecto de que todo lo que mira a esta recaudación, cuentas, y razón de las expresadas rentas, regalías, y derechos que me pertenezcan, se han de presentar, formar, ver y concluir en la Contaduría mayor del Consejo de Hacienda, como se hace y debe practicar generalmente con todas la rentas, y hacienda que me pertenece en los demás Reynos y Dominios.* Real decreto 10.11.1713. A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 58v.-62v; 827.

rey, con la exclusión de todo lo que afectase a los demás miembros del Consejo de Indias, de Hacienda y de cualquier otra junta<sup>290</sup>.

Tras un análisis pormenorizado a dichas reformas, el Consejo de Indias remitió al monarca una representación de fecha 26 de febrero de 1714 en donde explicaba las razones por las que no se debían aplicar los cambios. En primer lugar pretendía demostrar la interdependencia que existía entre las finanzas y el gobierno de las Indias, sobre todo porque las percepciones venidas de las Indias eran empleadas sobre el propio territorio y el resto pasaba a España, en donde el Consejo no podía tocar la más mínima cantidad sin una consulta previa al rey, por lo que el Consejo no entendía el interés del rey en privarle de la gestión de los gastos y de los ingresos indianos<sup>291</sup>.

Entre las múltiples razones que el Consejo esgrimió contra la no aplicación de los decretos de Nueva Planta eran la experiencia y la información acumulada a lo largo de doscientos años, cuestión que les había permitido adaptarse a todos los tiempos. Otro argumento utilizado fue el de la distancia, toda vez que esta circunstancia ralentizaba el despacho de los asuntos, por lo que cualquier cambio que se decidiera introducir en los territorios indianos, en caso de no ser acertado, tardaría tres o cuatro años en resolverse. Se insistía en la complejidad y trabazón en el modo de despachar los expedientes, ya que podía darse el caso que un asunto eclesiástico no pudiera separarse de los de la real hacienda, relacionados a su vez con los militares y los políticos, con lo cual era menester resolver a través de una sola consulta.

Pero a diferencia de lo que el Consejo pretendía, el rey no sólo no rectificó en su política, sino continuó extrayendo la mayor parte de las atribuciones de los consejos de la Monarquía a partir de la reforma de las Secretarías del Despacho. Dividió por materias y no por territorio a dichas secretarías de Estado y del despacho, creó además la figura del Veedor General encargado de coordinar las cuatro Secretarías y de controlar todo lo

---

<sup>290</sup> G. Bernard, *Le Secrétariat d'État...*, p. 7. Los miembros que formaron parte de esta Junta pueden verse en J. M<sup>a</sup> de Francisco Olmos, *Los miembros del Consejo de Hacienda (1722-1838) y organismos económico-monetarios*, Madrid, 1997, p. 386.

<sup>291</sup> *Representación hecha a S.M. por el Consejo de Indias, exponiendo las reglas y leyes que ha observado para el gobierno de ellas, desvelo y dilatado tiempo que se causó en su formación y perjuicios que se podrían ocasionar de alterarlas*. Año de 1714. B.P.R., Mss. 844. El manuscrito también fue analizado por Vid. M<sup>a</sup> P. Pérez Cantó y C. Vázquez Rodríguez de Alba, "El Consejo de Indias ante los decretos de Nueva Planta, 1714", en *Boletín americanista*, n<sup>o</sup> 38 (1988), pp. 227-245 y transcrita parcialmente por J. Manzano Manzano, "Un documento inédito relativo a cómo funcionaba el Consejo de Indias, en *The Hispanic American Historical Review*, vol. 15, n<sup>o</sup> 3 (agosto 1935), pp. 313-351.



relacionado con la hacienda<sup>292</sup>. Esta reforma en principio tenía por finalidad agilizar el despacho de los asuntos, regulando para ello su organización interna y el régimen de trabajo y buscando la eficacia en la resolución en los despachos de asuntos de gobierno y de justicia<sup>293</sup>. Una vez que se llevó a cabo tan ansiada reforma, el propio Orry escribía al rey los resultados de los nuevos cambios y le decía: *Si este plan se ejecuta y la elección de sujetos es buena, verá muy presto el Rey que los negocios mudan de semblante: Cada departamento de los cuatro secretarios de Estado tomará su regla, y sólo desde aquel día empezará Su Majestad a tener una dirección clara y segura en su Gobierno*<sup>294</sup>.

Empero, estos cambios no dieron el fruto esperado, toda vez que las reformas propuestas por el francés Orry acerca de intervenir en todos los asuntos importantes de gobierno, así como la multiplicación de instituciones sin una delimitación precisa de competencias, impidieron que el despacho de los distintos negocios se realizara con la agilidad que presuntamente buscaban alcanzar estas reformas. Por ende, el ministro de asuntos exteriores francés, D'Aubigny, proponía restituir los consejos a su antigua planta, elegir como presidente de cada uno de ellos a ministros cualificados, y que éstos formaran el Consejo del rey actuando al mismo tiempo como secretarios de Estado. Los presidentes de los consejos llevarían al despacho con el rey los asuntos de su competencia, y una vez decididos por el rey en su Consejo, el secretario correspondiente se encargaría de su ejecución. De esta manera, se excusarían los crecidos gastos que ocasionaban los nuevos secretarios y el gobierno quedaría en manos de gente más respetable. Además tenía claro la oposición que encontraría cualquier modelo de gobierno que no respetase las reglas tradicionales de la monarquía<sup>295</sup>.

Finalmente, las reformas a las nuevas plantas de los consejos fueron revocadas a través del decreto de 9 de junio de 1715, tras la caída de Orry<sup>296</sup>, su principal promotor. Este decreto dirigido en principio al Consejo de Castilla establecía la reducción de las presidencias colectivas a una sola y la disminución en el número de ministros y oficiales que integrarían cada uno de dichos órganos colegiados. Para el caso del Consejo de Indias fue a

---

<sup>292</sup> Novísima Rec. 3.6.4.

<sup>293</sup> Vid. M<sup>a</sup> P. Pérez Cantó y C. Vázquez Rodríguez de Alba, "El Consejo de Indias...", pp. 228-229.

<sup>294</sup> A.H.N., Estado, 3497. Propuesta de un Consejo Real y secretarios de Estado. Citado por I. Martínez Navas, "Alberoni y el gobierno...", p. 94.

<sup>295</sup> Vid. R. D. García Pérez, "El Consejo de Indias en la Corte...", p. 180.

<sup>296</sup> Orry fue cesado en sus funciones en febrero de 1715. Gaceta de Madrid n° 7 de 12.02.1715.

través de un decreto particular de 5 de agosto de ese año en donde se suprimieron dos de las tres presidencias creadas en 1713, se disminuyó a diez el número de consejeros, quedando ocho togados y dos de capa y espada. También se redujo el número de secretarios, quedando como en la planta de 1691 uno para Perú y el otro para Nueva España, finalmente la Junta de Guerra de Indias quedó nuevamente restablecida<sup>297</sup>.

En definitiva, los consejos vinieron a quedar de forma similar a la que había legado Carlos II en las reformas de 1691. Pero esta situación no quedó establecida definitivamente, la inclusión de las reformas realizadas a las secretarías de Estado y del despacho a través del real decreto de 30 de noviembre de 1714<sup>298</sup> generó dos cauces de resolución de los asuntos de Estado. Por un lado quedaron las secretarías del despacho a las que se les amplió su ámbito de competencias por materias: Estado, Guerra, Marina e Indias y Justicia, Hacienda; se estableció una Veeduría General de Hacienda y un Intendente General<sup>299</sup>, también fue confirmado legalmente el Consejo de Despacho. Y, por el otro, los antiguos consejos creados por la dinastía de los Austrias a los que hubo que reestructurarles también en sus competencias y atribuciones ya que estas habían sido mermadas sobre todo en materia de gobierno.

Todos estos cambios no fueron bien acogidos por los miembros de los distintos órganos político-administrativos de la Monarquía, por tanto, Felipe V a fin de calmar los ánimos, exhortó a los consejos en un decreto de 10 de febrero de 1715 para que le representasen con absoluta libertad lo que considerasen necesario para la recta administración de la justicia<sup>300</sup>. Ese mismo día se emitió copia de dicho decreto para el caso del Consejo de Indias encargándole no solo limitarse a exponer lo que considerase conveniente, también debía replicar en todo aquello que estimase perjudicial con absoluta libertad:

*No sólo me represente lo que juzgare conveniente y necesario para su logro con entera libertad cristiana, sin detenerse en motivo alguno, por respecto humano sino que también replique a mis resoluciones siempre que juzgare (por no haberlas yo tomado con entero conocimiento) contraviene a*

---

<sup>297</sup> Vid. G. Bernard, *Le Secrétariat d'État...*, pp. 10-11.

<sup>298</sup> Nov. Recop. 3.6.4.

<sup>299</sup> Se nombró a Miguel Fernández Durán como secretario de Guerra, a Bernardo Tinajero de la Escalera se le asignó el despacho de Marina e Indias, en la Secretaría de Estado se mantuvo a José Grimaldo y la de Justicia y gobierno político se le asignó a Manuel de Vadillo. Orry se encargó de la Veeduría y la Intendencia se le asignó a Lorenzo Armengual, obispo de Gerona. Vid. J. A. Escudero López, *Los orígenes del Consejo...*, p. 52.

<sup>300</sup> Copia del real decreto dirigido al Consejo de Estado en F. Barrios Pintado, *El Consejo de Estado...*, pp. 490-491.

*cualquiera cosa que sea protestándome delante de dios, no ser mi ánimo emplear la autoridad, que ha sido servido depositar en mí, sino para el fin que me la ha concedido, y que yo descargo delante de su divina majestad sobre mis ministros todo lo que ejecutaren en contravención de lo que les acuerdo y repito por este decreto, no pudiéndome tener por dichoso, sin mis vasallos no lo fueren debajo de mi gobierno, y si dios no es servido en mis dominios, sino como debe serlo, para nuestra desgracia, miseria y flaqueza humana, a lo menos con más obediencia a su leyes, y preceptos, de lo que lo ha sido hasta aquí*<sup>301</sup>.

En respuesta a esta disposición real, el propio Consejo de Indias a través de un memorial de marzo de 1715 se apresuró a reclamar que el rey atendiera a sus consultas y no se fiara de informes de otras personas: *dar a V.M. humildes gracias por el Santo y venerado decreto que el día 10 de febrero de este año mandó V M expedir a sus Tribunales*. En dicho memorial el conde de Frigiliana, su Presidente, aprovechó la oportunidad para solicitar el restablecimiento del Consejo y de paso arremetió contra la nueva planta:

*Los consejos, Señor, es preciso establecerlos a sus antiguas reglas, y conforme las leyes municipales de estos Reinos, considerando aquellos ministros más útiles y prácticos que sin pasión ni respeto humano consulten a VM lo conveniente a la justicia y bien de sus vasallos, y quitando los vicios en que se hubieren relajado los tribunales, descansará el católico celo de VM en sus dictámenes, ordenando que cada Consejo entienda en todo lo que pertenece quitando a este fin tanto número de juntas, contadurías y otras oficinas nuevas, que ha puesto en mayor confusión la hacienda de V M enriqueciendo de sus individuos y empobrecimiento de sus vasallos... La felicidad del Monarca está, Señor, en la elección de Ministros. El riesgo de los malos bastante evidencia ha dejado a VM... Siempre se gobernó esta dilatada Monarquía con un secretario del Despacho Universal, y con cinco ha logrado la experiencia el desengaño, de que los cuatro sobran: porque si se mantienen las demás oficinas antiguas (como se han mantenido) es preciso que unos u otros estén ociosos: la necesidad pide que se dividan las dos Secretarías de Estado y de Guerra, y dejando sólo a la del despacho lo decisivo, cargue sobre las otras lo consultivo, y demás negocios que se hubieran de correr todo por la parte que le tocare, y no será fatiga intolerable el empleo del Despacho Universal*<sup>302</sup>.

A partir de entonces parecía que los consejos habían recuperado su antigua organización y con ello su poder dentro de la Monarquía, pero nada más alejado de la realidad, sobre todo porque las nuevas secretarías de

<sup>301</sup> A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 89r-90r; 583 L. 3, ff. 259-262. También A. Muro Orejón, *Cedulario Americano...*, vol. 2, p. 429.

<sup>302</sup> Copia de un papel que se puso en las reales manos de Sus Majestades el día 01.03.1715 años. Mss. 6732 f. 112-118. Biblioteca Municipal de Madrid. Publicado por M. T. Pérez Picazo, *La publicística española en la Guerra de Sucesión*, Madrid, 1966, t. 2, pp. 175-178.

Estado y del despacho ya habían comenzado a funcionar y no existía forma de dar marcha atrás. Si bien durante aquel periodo el efecto de la Secretaría de Estado de Indias poco se hizo sentir, ya que aún no se había separado las funciones de gobierno del Consejo, pero, por el contrario, la Junta de Hacienda fue confirmada como un órgano tendente a permanecer a fin de reunir bajo una misma dirección todo lo que concerniese al dinero de la Corona, fuese cual fuese el territorio de origen<sup>303</sup>.

Aún así, los teóricos insistían en la necesidad del monarca de asesorarse de los más sabios como lo fue la obra de Charles Irénée Castel<sup>304</sup> conocido como el abate Saint-Pierre, quien publicó una obra titulada *Discours sur la polysynodie: où l'on démontre que la polysynodie, ou pluralité des Conseils, est la forme de ministère la plus avantageuse pour un Roy, et pour son royaume*, en dicha obra el abate esgrimía veinte ventajas y treinta y siete objeciones al gobierno por consejos con sus respectivas réplicas. El tema general derivaba de la comparativa del gobierno de Luis XIV y de su sucesor el regente, estudio desfavorable al primero por la manera en que tomaba sus decisiones apelando a ideas propias o a las de sus acólitos. Saint Pierre advierte que ese procedimiento es riesgoso para la conducción del reino y que la mejor alternativa consiste en disponer de un grupo de asesores de diversa filiación. A la luz de esta obra, Jordana de Pozas concluyó que el propio abate coincidía con los postulados de los autores españoles en defensa de la labor de los consejos<sup>305</sup>.

Pero todas estas alusiones teóricas a la necesidad de conservar el gobierno por consejos no generaron el efecto deseado, ya que tras la boda del rey con su nueva esposa, Isabel de Farnesio, entraron en la estela política nuevos personajes, pero ahora de origen italiano, quienes al igual que los franceses sentían “aversión hacia el poder de los consejos”<sup>306</sup>. Uno de los más importantes lo fue Giulio Alberoni<sup>307</sup> quien como sus antecesores

<sup>303</sup> Vid. G. Bernard, *Le Secrétariat d'État...*, p. 11.

<sup>304</sup> *Discurso sobre la polisinodia, donde se demuestra que la polisinodia, o pluralidad de los consejos es la forma de gobierno más ventajosa para un rey y para su reino. La mayor parte de la información del abate se encuentra en francés, pero G. Reza hace un interesante análisis de la obra del abate Saint Pierre.* Vid. G. de la Reza, “Síntesis y reajuste de la tradición anfictiónica. El proyecto de Paz perpetua del abate de Saint Pierre”, en *La Invención de la Paz. De la República Cristiana del Duque de Sully a la Sociedad de Naciones de Simón Bolívar*, México, 2009, pp. 51-60.

<sup>305</sup> L. Jordana de Pozas, *El Consejo de Estado...*, p. 15.

<sup>306</sup> Vid. R. D. García Pérez, “El Consejo de Indias en la Corte...”, p. 185.

<sup>307</sup> Algunos aspectos de su vida pueden consultarse en: P. Castagnoli, *Il Cardinale Giulio Alberoni. I. Il ministro dei Farnese*, Piacenza-Roma, 1929; L. Taxonera, *El Cardenal Julio Alberoni, forjador de una nueva España en el siglo XVIII*, Madrid, 1945; F. Valsecchi, “La política italiana de Alberoni: aspectos y problemas” en *Cuadernos de investigación*

consideraba al mencionado régimen como un “instancia mediatizadora o condicionadora de la autoridad real”<sup>308</sup>, concretando esta idea a través de potenciar y acaparar la vía reservada en perjuicio de la vía de Estado<sup>309</sup>. En una carta de 13 de junio de 1718 dirigida al conde de Rocca, ministro de hacienda de Parma, exponía su opinión sobre el gobierno por consejos y daba cuenta de la política que, desde su acceso al poder, había seguido hacia los consejos. Según narraba Coxe, *Alberoni introdujo un sistema nuevo que cambiaba esencialmente la dirección de los negocios de cada ministerio... No sólo redujo y modificó los consejos separando a los individuos de cuyo talento o influjo eran de temer... sino que con pretexto de conservar el secreto necesario, alcanzó del rey una orden para que los ministros extranjeros no remitiesen sus correspondencias por la vía acostumbrada llamada generalmente vía de estado, sino por un método particular de correspondencia llamado vía reservada, enviando los pliegos directamente al despacho real*<sup>310</sup>. Además, durante el tiempo en que el cardenal permaneció en España, entre los años de 1715 y 1719, el Consejo de Despacho dejó de funcionar, debido a que las cuestiones de Estado eran solo de su competencia<sup>311</sup>.

No fue casualidad entonces que durante la época de Alberoni se promulgaran varios reales decretos cuya finalidad radicaba en la centralización del poder en manos de unas secretarías del despacho de fácil manejo<sup>312</sup>. Por su parte, los consejos de la Monarquía también se vieron afectados en cuanto a sus competencias y funcionamiento. Así, el 20 de enero de 1717 se expidió un extenso decreto dirigido a todos los consejos de la Monarquía<sup>313</sup>. Lo primero que estipuló fue el traslado de todos ellos al palacio que habitó la reina doña María Ana de Austria, a fin *de la más breve solicitud de sus dependencias, por lo distante que se hallan unas oficinas de otras*. En dicho decreto se “procuró disciplinar la tarea realizada por los secretarios y oficiales de los consejos, y coordinar las actividades de estos

---

histórica, nº 2 (1978), pp. 479-494; J. A. Pujol Aguado, “España en Cerdeña (1717-1720)”, en *Studia historica. Historia moderna*, nº 13 (1995), pp. 191-214; I. Martínez Navas, “Alberoni y el gobierno de la Monarquía...”, pp. 63-110; M. Barrio Gonzalo, “El Cardenal Alberoni y España: política religiosa y carrera eclesiástica”, en *Hispania sacra*, vol. 62, nº 127 (2011) pp. 205-234.

<sup>308</sup> Vid. R. D. García Pérez, “El Consejo de Indias en la Corte...”, p. 185.

<sup>309</sup> Vid. B. Badorrey Martín, *Los orígenes del Ministerio...*, p. 40.

<sup>310</sup> G. Coxe, *España bajo el reinado...*, p. 576.

<sup>311</sup> Vid. F. Barrios Pintado, *El Consejo de Estado...*, p. 181.

<sup>312</sup> J. C. Domínguez Nafria, *El Real y Supremo...*, p. 192.

<sup>313</sup> A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 99 v -106r; 827; 542 L. 2, ff. 23-34. B.N., Mss. 19251. ff. 1-6. Nov. Recop. 4.2.1.

organismos”<sup>314</sup>. Además, los secretarios debían acudir después de su asistencia en el Consejo, a las Secretarías con puntualidad, dispuestos a oír a las partes en sus dependencias; procurando que el despacho fuera breve pero atendiendo a los litigantes con benignidad y atención, evitando a toda costa que los pretendientes se detuvieran conversando con los oficiales, impidiéndoles así desempeñar su trabajo y poniendo en peligro el deseado secreto.

También se estableció que los secretarios de los consejos debían confeccionar una relación semanal de los asuntos especificando los expedientes procedentes de los reales decretos, así como la remisión a los consejos de *los decretos y resoluciones que en sus secretarías estuvieren pendientes*, ya sea porque mandados cumplir se hayan de expedir órdenes, o por que se haya acordado de representar sobre ellos, o por que se haya diferido tratar y conferir sobre su cumplimiento, o, en otro cualquier modo, no estén fenecidos, y para que allí según su estado se vaya dando curso a los negocios. Los fiscales también debían asentar en un libro los negocios a su cargo formando con ellos listas que lleven al Consejo para facilitar en sus instancias y expediciones.

Este decreto fijaba un rígido horario de trabajo, debiendo sus ministros y oficiales asistir a los consejos con toda puntualidad. Prohibió que se propusieran parientes para el nombramiento de oficiales, pajes o criado, ni que se pudieran sacar papeles de las oficinas. Señaló que toda la documentación debía ser registrada en unos libros-registro especiales que debían estar al cargo de las Secretarías. Finalmente prohibió que los secretarios de Estado y del despacho pudieran ocupar plazas dentro de los consejos. Asimismo, se prohibía a los secretarios del Consejo, y a los oficiales de las secretarías desempeñar otra ocupación que no fuera de su cargo.

En el caso del Consejo de Indias la impronta del cardenal se dejó sentir a través de la expedición de varios decretos fechados el 20 de enero y 11 de septiembre de 1717, provocando una disminución en su participación en la vida y el gobierno indiano<sup>315</sup>. En el primero de esos decretos el monarca decidió reorganizar la planta del Consejo; sustituyó al entonces presidente conde Firigiliana, por Andrés de Pez, a quien sólo le nombró gobernador de dicho Consejo *en atención a sus servicios, y a los especiales que me hizo en esta guerra*<sup>316</sup>. Tratando de potenciar una mayor agilidad en la resolución de

---

<sup>314</sup> J. C. Domínguez Nafria, *El Real y Supremo Consejo...*, p. 192.

<sup>315</sup> Vid. G. Bernard, *Le Secrétariat d'État...*, pp. 12-15.

<sup>316</sup> A.G.I., Indiferente General, 542, L. 2, ff. 7r-8v.

los asuntos, el real decreto fijó su planta, de tal manera que el Consejo quedaría compuesto por un gobernador o presidente, seis ministros togados y dos de capa y espada, de dos fiscales y dos secretarios. Por otro lado, dicho decreto extinguió a la Junta de Azogues haciendo del conocimiento del Consejo dicha materia<sup>317</sup>. A fin de dar consecución al organigrama fijado para el Consejo, en otros decretos completó el nombramiento de los consejeros<sup>318</sup> y secretarios<sup>319</sup> que faltaban. En otro decreto estableció los sueldos que debían percibir sus miembros, cuyos pagos debían realizarse a través de la Tesorería General del reino, con lo cual en el mismo documento cesó el funcionamiento de la Tesorería del propio Consejo de Indias<sup>320</sup>.

Ese mismo día 20 de enero el monarca expidió el decreto que mayor repercusión tendría en el Consejo de Indias durante todo el siglo XVIII, esto es aquel en donde el monarca se reservó para su privativo conocimiento todo lo gubernativo, económico y providencial de las Indias, de modo que el *Consejo providenciare solo en causas y negocios de mera justicia*<sup>321</sup>. En la exposición de motivos de este decreto se enfatizó la necesidad de restablecer el comercio de las Indias, por lo que para evitar confusiones estableció separar las oficinas a fin de distribuir los asuntos de las *Secretarías de mi Real Despacho*. Por tanto, se estableció el exclusivo carácter de tribunal de justicia, perdiendo a favor de las Secretarías conocer asuntos tocantes a lo *gubernativo, económico y providencial* de las Indias.

Un elemento importante que concedió al Consejo de Indias cierto peso político dentro del gobierno del Nuevo Mundo fue la reconocida “facultad consultiva” en asuntos relacionados con la hacienda, guerra, comercio y navegación de las Indias que el propio rey concedió en el mencionado decreto de 20 de enero de 1717: *...Y si al Consejo se le ofreciere en los negocios que expidiere, hay en las noticias que tuviere cosa digna de mi Real noticia, me lo podrá hacer presente...* Como veremos más adelante, en cumplimiento de esta norma, el Consejo continuo influyendo de manera directa en la toma de decisiones que afectaban al Nuevo Mundo.

---

<sup>317</sup> A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 106r -107v; 542 L. 2, ff. 35-37. B.N., Mss. 19251. ff. 7-8.

<sup>318</sup> Por real decreto de 28 de enero de 1717 nombra consejero a Manuel de Vadillo y Velasco. A.G.I., Indiferente General, 542, L. 2, f. 49. B.N., Mss. 19251. f. 15.

<sup>319</sup> A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 112v-113v; 542, L. 2, ff. 39-40. B.N., Mss. 19251. ff. 9r-9v.

<sup>320</sup> A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 109r-110v, 542, L. 2. ff. 45-49. B.N., Mss. 19251. ff. 13-14. Nov. Recop. 4.2.14.

<sup>321</sup> A.G.I., Indiferente General, 829 ff. 107vº-108vº; 542 L. 2, ff. 41-43. B.N., Mss. 19251. ff. 11-12.

Sin embargo, tales decretos no tuvieron gran acogida por parte del Consejo de Indias, por lo que el monarca hubo de resolver las múltiples quejas que este órgano remitía. A través del real decreto de 11 de septiembre de ese mismo año se enfatizaba con gran detalle que los asuntos relativos a la *Real Hacienda, Guerra, Comercio, y Navegación de aquellos a estos Reinos, provisiones de empleos y cargos, y órdenes respectivas de estas tres clases, y sus incidencias y dependencias, corran privativamente por la vía reservada*, quedando al Consejo el conocimiento de asuntos relacionados con el gobierno municipal de las Indias, la concesión de licencias para pasar aquellos territorios ultramarinos, la obligación de velar por el cumplimiento de las leyes, el conocimiento de los asuntos relacionados con el Regio Patronato indiano, la provisión de cargos no relacionados con las materias exclusivas de la vía reservada y, por supuesto, la capacidad informar al rey de cuantos negocios éste decidiese someter a la consideración del Consejo. Por no considerarla necesaria, en este mismo decreto se extinguió a la Cámara de Indias, ya que las providencias de cargos relacionados con las materias de hacienda, guerra, comercio y navegación correrían por la vía reservada, y las demás provisiones debían realizarse por el propio Consejo, previa consulta con el monarca<sup>322</sup>.

Según afirma Escudero estos decretos intentaban “al menos formalmente, restar efectividad a unos organismos para otorgárselos a otros, sino de que el monarca atrajese a sí determinados asuntos que luego iban a despacharse por los ministerios”, de ahí que los consejos no se atrevieran a protestar en demasía por la sustracción de sus competencias<sup>323</sup>. Ciertamente la intencionalidad política de estas disposiciones fue la de marginar al Consejo de los asuntos americanos que más importaban en ese momento a Alberoni, ya que con estas disposiciones quedó establecido el monopolio de la vía reservada, afectando en mayor medida al Consejo desde su posición de privilegio en el gobierno y en la administración de justicia de los territorios americanos. Sin embargo, en opinión de R. García “la efectividad de esta disposición fue mínima” debido a que la práctica diaria con la vía reservada, la falta de experiencia y de personal en las secretarías de Estado y del despacho, así como la abundancia de trabajo provocaron el efecto contrario, esto es, el Consejo indiano continuaba conociendo la mayoría de asuntos relacionados con aquellos territorios<sup>324</sup>, de allí que el monarca tuviera que

<sup>322</sup> A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 113rº- 14rº; 824; 542, L. 2, ff. 73-75. BM., Mss. 19251. f. 31.

<sup>323</sup> Vid. J. A. Escudero López, *Los orígenes del Ministerio...*, vol. 1, p. 183.

<sup>324</sup> R. D. García Pérez, *El Consejo de Indias...*, p. 42 y “El Consejo de Indias en la Corte...”, p. 185.



recordar el contenido de aquellos decretos en más de una ocasión, hasta el propio Fernando VI tuvo que reafirmar y concretar su contenido a través del real decreto de 18 mayo de 1747<sup>325</sup>.

Pero estas reformas también alcanzaron a la organización de la vía reservada. Desde finales de abril de 1715 se suprimieron la Veeduría General que había sido ocupada por Orry y la Secretaría de Marina e Indias, cuyos asuntos fueron repartidos entre las tres subsistentes secretarías<sup>326</sup>. Dos años más tarde también se suprimió la Secretaría de Hacienda como departamento autónomo y se integró a la Secretaría de Justicia<sup>327</sup>. En cuanto a sus titulares, Felipe V confirmó en sus cargos a Grimaldo y a Fernández Durán y solamente nombró a José Rodrigo Villalpando, marqués de la Compuesta, como el nuevo secretario de la Secretaría de Justicia, Guerra y Hacienda.

Esta supresión de la Secretaría de Despacho de Indias y Marina proporcionó en opinión de I. Martínez un cierto respiro al Consejo de Indias, al quedar confusamente repartidas las competencias de la Secretaría de Indias entre las tres nuevas de Guerra y Marina, Gracia y Justicia y Hacienda, que además no habían recibido una instrucción específica sobre las materias indianas que le correspondería a cada una de ellas<sup>328</sup>, aunque pronto esta situación tendería a cambiar.

Con todas estas modificaciones Alberoni logró alejar a los ministros del entorno del monarca, de forma que sólo él tenía trato directo por un lado con el rey y por el otro con los ministros, en tanto que los secretarios de Estado y del despacho comunicaban al rey únicamente por escrito los asuntos relativos a sus oficinas<sup>329</sup>. En otras palabras, a través de estas reformas Alberoni convirtió a la vía reservada en el cauce ordinario del despacho de los asuntos manejados por él, ostentando una posición superior frente a cualquier otra fuerza política de la Monarquía.

---

<sup>325</sup> A.G.I., Indiferente General, 855. Sobre el alcance de este decreto puede verse I. Martínez Navas, "La división de la materia administrativa...", pp. 548 y ss.

<sup>326</sup> A.H.N., Estado, leg. 3496. Vid. J. A. Escudero López, *Los Secretarios de Estado...*, t. III, pp. 959-960.

<sup>327</sup> decreto de 2 de abril de 1717. Nov. Recop. 3.6.5.

<sup>328</sup> Vid. I. Martínez Navas, "La división de la materia administrativa...", p. 532. También F. Muro Romero, "Instituciones de gobierno y sociedad en Indias (1700-1760)", en *Estructuras, gobierno y agentes de la administración en la América española siglos XVI, XVII y XVIII, Actas del VI Congreso del Instituto de Historia del Derecho Indiano*, Valladolid, 1984, p. 171.

<sup>329</sup> Vid. I. Martínez Navas, "Alberoni y el gobierno de la Monarquía...", p. 101.

El poder que logró afianzar el cardenal se vio ampliado a través de la expedición de un real decreto fechado el 26 de octubre de 1717 por el que se le concedían amplios poderes para tratar y firmar la paz con cualquier potencia extranjera, así como para tomar decisiones en materia de hacienda, marina y guerra, pudiendo utilizar el dinero necesario para llevar a la práctica esta disposición:

*Conociendo el amor, celo y desinterés con el cual me sirve el Cardenal Alberoni y por la entra satisfacción con que me hallo de su Persona y capacidad por la presente le doy y concedo todo el poder, autoridad y facultad que requiere sin limitación alguna para tratar y concluir cualquiera Paz con cualquiera potencia de Europa y por este efecto prometo en Fe y palabra Real que pasaré y cumpliré lo que el dicho Cardenal Alberoni estipulará, concluirá y efectuará en mi nombre con cualquiera Potencia de Europa dándole el premio de gastar todo el dinero que será necesario en gastos secretos, sin que sea obligado dar cuenta en los Tribunales de mi Real Hacienda.*

*También doy al dicho Cardenal plena facultad y autoridad de dar las órdenes y disposiciones necesarias para todo lo que mira a Hacienda, Marina y Guerra, a fin que estando Yo armado pueda lograr una Paz honorable y ventajosa<sup>330</sup>.*

A través de la expedición de este decreto Alberoni llegó a poseer un poder sin limitación, actuando como un primer ministro que acompañaba al monarca a los sitios reales, pero que curiosamente no dispuso de otro título diferente al de favorito o privado, ya que jamás recibió empleo u honor de la mano de Felipe V<sup>331</sup>. Por su parte, el entonces secretario de Estado y del despacho, José Grimaldo, permanecía en la covachuela despachando asuntos sin posibilidades de acercamiento al monarca<sup>332</sup>. Sin embargo, en

---

<sup>330</sup> A.H.N., Estado 2884.2. Citado por B. Badorrey Martín, *Los orígenes del Ministerio de Asuntos Exteriores (1714-1808)*, Madrid, 1999, p. 40.

<sup>331</sup> I. Martínez Navas, "Alberoni y el gobierno de la Monarquía...", p. 98.

<sup>332</sup> En palabras del marqués de San Felipe Alberoni buscaba cualquier arte a fin de *apartar del Rey a cuantos podían influir consideraciones que avivasen la reflexión, y tenerle falto de noticias. Por eso había mandado a los ministros que servían en las cortes extranjeras que ni a los secretarios del despacho Universal las comunicasen, y sólo a él en derecho se escribiese, para que estrechado más el Rey a mendigar avisos de lo que pasaba, ni aún pudiesen los secretarios dárselos, porque éstos de oficio le presentan las cartas de los ministros, que no deja el Rey de leerlas, porque es difícil en materia de Estado minutarlas; por eso las quería Alberoni en su poder, porque dejando la formalidad de llevarlas al Rey, sólo le decía lo que no embarazaba a su idea, conociendo la oportunidad y la sazón. Esto lo hizo también por quitar al marqués de Grimaldo la ocasión de hablar más frecuentemente con el Rey, temiendo que en la sinceridad de Grimaldo peligrase su gigante autoridad; por eso en las jornadas que el Rey hacía a Valsain, Aranjuez o El Escorial, sólo se servía del secretario universal de Guerra, marqués de Tolosa, para dar las órdenes de Guerra; que las de Estado sólo las fiaba a su pluma propia o a la de un secretario suyo particular.* V. Bacallar y Sanna, *Comentarios de la Guerra...*, t. 2, pp. 233-34.

opinión de J. A. Escudero el poder otorgado a Alberoni no fue extraordinario, de carácter general, como sería propio de un primer ministro, sino otro más concreto, aplicado a la política internacional en paz o en guerra, facultándole únicamente para concluir acuerdos o referencias a las cuestiones de marina y hacienda, conexas a ella<sup>333</sup>.

Pero los malos resultados para la Monarquía surgidos de las erradas políticas militares y económicas llevadas a cabo por Alberoni no duraron demasiado, los consiguientes apuros en que puso a la Corona se volvieron contra él<sup>334</sup> y el 11 de diciembre de 1719 fue desterrado de España<sup>335</sup>. además, algunos de los altos cargos de la administración central de la Monarquía asimilados al gobierno de Alberoni también fueron cesados, como fue el caso del gobernador del Consejo, Andrés de Pez<sup>336</sup>. Por ello, en palabras de Fernández Albaladejo, “la caída del cardenal facilitó las cosas para un movimiento de reacción que se extendió durante los años siguientes, y que a todas luces, estuvo promovido por el amplio espectro corporativo-letrado inmediatamente afectado por la impronta administrativa de Alberoni”<sup>337</sup>.

En sustitución del cardenal, José de Grimaldo<sup>338</sup>, por entonces secretario de Estado y del Despacho de Estado se convirtió en la figura política más influyente de la Corte<sup>339</sup>. En este período *el rey puso las dependencias*

---

<sup>333</sup> J. A. Escudero López, “Introducción. Privados, validos y primeros ministros”, en *Los validos...*, pp. 27-28.

<sup>334</sup> Vid. R. D. García Pérez, “El Consejo de Indias en la Corte...”, pp. 185-186.

<sup>335</sup> Señala el marqués de San Felipe que el rey había dejado en manos de Miguel Durán, secretario del despacho Universal de Guerra y Marina un decreto que debía notificarse al cardenal, cuyo contenido era: *Que estando obligado a procurar a sus vasallos las ventajas de una paz general, para la cual se buscaban los medios, que le hiciesen sólida, y duradera, y queriendo para eso quitar todos los obstáculos, que pueden retardar una obra, en que tanto interesa el bien público, como también por otros justos motivos, había resuelto apartar de los negocios en que tenía el manejo el cardenal Alberoni: y al mismo tiempo ordenarle salir de Madrid en término de ocho días; y de los reinos de España en tres semanas, con prohibición de no mezclarse más en cosa alguna del Gobierno, ni parecer en la Corte, ni otro lugar, en que el Rey, la Reyna, u otro Príncipe de la Casa Real se pudiesen encontrar.* V. Bacallar y Sanna, *Comentarios de la Guerra...*, t. 2, p. 243.

<sup>336</sup> Vid. G. Bernard, *Le Secrétariat d'État...*, p. 211.

<sup>337</sup> P. Fernández Albaladejo, *Fragmentos de Monarquía...*, p. 390.

<sup>338</sup> Una de las biografías más completas de Grimaldo es la de C. de Castro, de Castro, *A la sombra de Felipe V. José de Grimaldo...* Algunos artículos sobre este personaje son:

<sup>339</sup> José de Grimaldo era superior a cualquier otro porque le estaba encomendada la Secretaría más importante, la de Estado; porque tenía una estrecha relación personal con el monarca; despachaba diariamente con el soberano asuntos que le competían a cualquiera de las otras Secretarías, tenía el título de secretario con título del Consejo de Estado, era el secretario privado de la reina y por ende era el presidente de la Junta de Estado. Vid. J. L. Castellanos, *Gobierno y poder...*, p. 86.

*regulares en los tribunales que tocaba y dio más gratos oídos a la paz*<sup>340</sup>, lo que suponía que los consejos recuperarían su lugar y las Secretarías recobrarían su autonomía<sup>341</sup>. Pero nada más lejos, mientras que los consejos no fueron rehabilitados en sus antiguas competencias, las Secretarías fueron potenciadas en cuanto a su actividad rectora.

Tras la salida de Alberoni, Felipe V decidió restituir a los consejos ciertas competencias que se habían visto privados a partir de los decretos de 1717. En el caso específico del Consejo de Indias, un real decreto de 26 de octubre de 1720 le restableció en el conocimiento y manejo de lo que pertenecía al producto de las composiciones de tierras, condenaciones, multas y penas de cámara impuestas en Indias<sup>342</sup>. Asimismo, mediante decreto de 22 de enero de 1721<sup>343</sup> el monarca decidió restablecer la Cámara de Indias, para lo cual restituyó en el gobierno del Consejo a Andrés de Pez, y a cuatro consejeros, dos togados y dos de capa y espada, añadiendo a un consejero de capa y espada mediante real decreto de 1731 y a cuatro en 1734<sup>344</sup>.

Además, con el fin de reorganizar la tramitación de los asuntos indianos, decidió restablecer las secretarías de Estado y del despacho a número de cuatro. Nombró a Juan de Dios del Río González, marqués de Campoflorido, por entonces gobernador del Consejo de Hacienda, como el nuevo secretario de Estado y del Despacho de Hacienda, uniendo en una misma persona los asuntos hacendarios. Por su parte Miguel Fernández Durán continuó como ministro de la Guerra, Marina e Indias, excepto lo eclesiástico de Indias y la Secretaría de Justicia y de Estado continuaron en manos de José Rodrigo y de Grimaldo respectivamente<sup>345</sup>. Al año siguiente Fernández Durán fue destituido a consecuencia de haber participado en ciertos asientos de víveres para el ejército en África, razón por la cual, Grimaldo aprovechó la ocasión para recomendar al monarca su división en dos<sup>346</sup>. A través del real decreto de 8 de enero de 1721 la nueva Secretaría de Indias y Marina conocería de asuntos indianos a excepción de lo

---

<sup>340</sup> V. Bacallar y Sanna, *Comentarios de la Guerra...*, t. 2, p. 247.

<sup>341</sup> J. L. Castellanos, *Gobierno y poder...*, p. 85.

<sup>342</sup> AGN, Indiferente General 538, L. YY11, ff. 113r-114v. La misma cédula pero con fecha de 7 de diciembre de 1720 en AGN, Indiferente General 652.

<sup>343</sup> A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 121r-121v y 824.

<sup>344</sup> A.G.I., Indiferente General, 986

<sup>345</sup> Vid. J. A. Escudero López, *Los orígenes del Consejo...*, t. 1, p. 58.

<sup>346</sup> Vid. J. A. Escudero López, "La reconstrucción de la administración...", p. 120.

eclesiástico y de los negocios de marina relativos a asientos y provisiones<sup>347</sup>.

En realidad, la creación de esta específica Secretaría de Indias no hizo más que perjudicar los intereses del Consejo de Indias al ver mermada su capacidad de actuación a favor de la vía reservada, por ello M. Gómez menciona que en la práctica, la disminución de competencias a favor de las Secretarías no fue del todo absoluta, la verdadera modificación de los asuntos indianos fue efectiva a partir de la creación de una secretaría con competencias exclusivas respecto asuntos indianos, ya que hasta entonces, el despacho de estos asuntos habían pasado por secretarías dedicadas fundamentalmente a los negocios de España<sup>348</sup>.

Pero todos estos vaivenes dentro de la organización de la administración central de la Monarquía provocaron un caos respecto a la distribución de los asuntos; desde el principio las relaciones entre las Secretarías y los consejos se hicieron muy difíciles debido a la complejidad en el reparto de competencias. El caso del Consejo de Indias y la Secretaría del Despacho de Marina e Indias no fue una excepción, aún en 1726 Santiago Riol afirmaba que *el globo de negocios, y expedientes en que entiende este Consejo, y las materias de que trata y conoce es tan grande y universal, que barza toda la diversidad de las que están divididas en todos los demás negocios de la Monarquía*<sup>349</sup>.

Frente a este caos administrativo, dichas reformas beneficiaron los intereses de unos cuantos, así por ejemplo Grimaldo no sólo recuperó sus funciones como secretario de Estado, sino que también recobró su posición como hombre de confianza de Felipe V, sobre todo tras la expedición del real decreto de 22 de junio de 1721 que además de confirmarlo como

---

<sup>347</sup> A.H.N., Estado, leg. 3496, l. Citado en J. A. Escudero López, *Los Secretarios de Estado...*, t. 3, p. 960.

<sup>348</sup> Entre 1717 y 1721 la trayectoria del despacho de los asuntos de Indias fue el siguiente: el 2 de abril de 1717 los asuntos indianos se repartieron entre la Secretaría de Guerra y Marina y Justicia, Gobierno Político y Hacienda. En 1720 todos los asuntos se centralizaron en la recién creada Secretaría de Guerra, Marina e Indias; la materia eclesiástica era remitida a la Secretaría de Justicia y Gobierno Político y los asuntos de hacienda se remitían a la Secretaría de Hacienda. En enero de 1721 la Secretaría de Guerra, Marina e Indias fue dividida en dos: la de Guerra y la de Marina e Indias. Vid. M. Gómez Gómez, *Forma y expedición...*, pp. 38-39.

<sup>349</sup> S. A. Riol, "Informe que hizo Su Majestad en 16 de junio de 1726 sobre la creación, erección e institución de los consejos y Tribunales, las instrucciones que se les impusieron para obrar según su instituto; el estado que hoy tienen los papeles de sus archivos, y la forma de su antiguo y actual manejo; las causas que hubo en cada una para etc.", en *Semanario Erudito de Valladares*, Madrid, 1787, t. 3, p. 73.

secretario real, le concedió el nombramiento de consejero de Estado<sup>350</sup>, *porque verdaderamente el ánimo del Rey era a Grimaldo, propenso por su blandura, sinceridad e indiferencia, estudiando no apoyar su dictamen en las consultas que subía al Despacho, sino muy instado del Rey, y aun mandado, diciendo que siempre el dictamen del Rey había visto ser el más acertado y prudente*<sup>351</sup>.

Sin embargo, el nuevo sistema de gobierno y las posibles alianzas para conseguir la paz no mejoraron la difícil situación que atravesaba la Monarquía española. Además, la tendencia enfermiza hacia la melancolía que continuamente aquejaba al rey hizo crisis en el verano de 1722, lo que le llevó apartarse de Madrid y a buscar tranquilidad en su nuevo palacio de La Granja<sup>352</sup>. Para el despacho de los asuntos sólo admitía la presencia de Grimaldo, permaneciendo el resto de los secretarios y consejeros en Madrid, lo que ocasionaba un retraso en toda la maquinaria estatal<sup>353</sup>.

Tras graves e insistentes episodios psicopáticos<sup>354</sup>, el rey tomó la decisión de retirarse *para pensar únicamente en servirle [a Dios] y llorar mis culpas pasadas, y hacerme menos indigno de comparecer en su presencia, cuando fuere servido de llamarme a su juicio que le llevaban a pensar lo incapaz que era para gobernar correctamente*, por ello decidió abdicar a favor de su hijo Luis<sup>355</sup>. La renuncia fue remitida a través de un escrito dirigido al Consejo de Castilla con fecha de 10 de enero de 1724 a fin de que éste informara a las demás órganos de la administración su decisión:

*Habiendo considerado de cuatro años a esta parte con alguna particular reflexión y madurez las miserias de esta vida, por las enfermedades, guerras y turbulencias que Dios ha sido servido enviarme en veintitrés años de mi reinado, y considerando también que mi hijo primogénito don Luis, Príncipe jurado de España, se halla también en edad suficiente, ya casado, y con*

<sup>350</sup> A.H.N., Estado, L. 928d. Citado en B. Badorrey Martín, *Los orígenes del...*, p. 46.

<sup>351</sup> V. Bacallar y Sanna, *Comentarios de la Guerra...*, t. 2, p. 272.

<sup>352</sup> Sobre este tema pueden verse las obras de Y. Bottineau, *El arte cortesano en la España de Felipe V (1700-1746)*, Madrid, 1986 y *El arte barroco*, Madrid, 1990.

<sup>353</sup> Concepción de Castro al analizar la correspondencia de la oficina de Grimaldo opina que era él quien decidía qué cartas, asuntos o peticiones, fueran personales u oficiales, de su competencia o fuera de ella, iba a mencionar al monarca, aunque mandara al mismo tiempo enviarlas al ministro adecuado; a veces las enviaba ya con la resolución del rey, para que fueran simplemente tramitadas. Vid. C. de Castro, *A la sombra de Felipe V...*, p. 357.

<sup>354</sup> Vid. P. Voltes, *Felipe V fundador de la España contemporánea*, Madrid, 1991, pp. 208-209.

<sup>355</sup> La carta que Felipe V remitiera a su hijo Luis el 14 de enero de 1724 cediéndole el trono de la Monarquía hispánica y la respuesta de éste puede verse en *Semanario Erudito de Valladares*, Madrid, 1788, t. 11, pp. 271-77.

*capacidad, juicio y prendas suficientes para regir y gobernar con acierto y justicia esta Monarquía, he deliberado apartarme absolutamente del gobierno y manejo de ella, renunciándola con todos sus Estados, reinos y señoríos en el referido Príncipe don Luis, mi hijo primogénito, y retirarme con la Reina, en quien he hallado un pronto ánimo y voluntad a acompañarme gustosa a este palacio y retiro de San Ildefonso, para servir a Dios; y desembarazado de estos cuidados, pensar en la muerte y solicitar mi salud. Lo participo al Consejo para que en su vista avise es donde convenga y llegue a noticia de todos*<sup>356</sup>.

Pero antes de su retiro a La Granja, Felipe V nombró una especie de Junta o Consejo de Despacho para que asistiera al joven monarca con las labores del gobierno. Entre los miembros que formaron parte de dicho órgano se encontraban el marqués de Mirabal, nombrado presidente del Consejo de Castilla; el arzobispo de Toledo, Diego de Astorga y Céspedes; el inquisidor general y obispo de Pamplona, Juan de Camargo; el marqués de Valero, presidente del Consejo de Indias; el marqués de Ledesma; Miguel de Guerra ex presidente de los consejos de Castilla y Hacienda; el conde de San Esteban del Puerto y, como secretario a Juan Bautista Orendain<sup>357</sup>.

Otro de los cambios que Felipe V realizó antes de su partida fue la remodelación del entramado político de la Monarquía. Nombró al marqués de Valero como presidente del Consejo de Indias, al conde de Santiesteban del Puerto le concedió la presidencia del Consejo de Órdenes, a Orendain le otorgó el título de secretario de Estado y del Despacho de Estado, ya que Grimaldo debía acompañar al monarca en su retiro a La Granja, designó a Antonio de Sopena como titular de la Secretaría de Marina e Indias en sustitución de Andrés de Pez y concedió el nombramiento de secretario a Fernando Verdes Montenegro, quien sustituyó al marqués de Campoflorido en la Secretaría de Hacienda. Solamente el marqués de Castelar y José Rodrigo continuaron al frente de las secretarías de Estado y del despacho de Guerra y Justicia respectivamente<sup>358</sup>.

Cuando Luis I juró como rey de España, el mariscal Tessé, embajador de Francia propuso al joven monarca algunos cambios en la administración de la Monarquía<sup>359</sup>. En primer lugar le recomendó otorgar el título de secretario de Estado a todos los miembros del Consejo de Despacho. También advirtió

---

<sup>356</sup> El citado documento se encuentra transcrito en la obra de A. Danvila, *El reinado relámpago. Luis I y Luisa Isabel de Orleans (1707-1742)*, Madrid, 1952, pp. 207-8.

<sup>357</sup> Vid. C. de Castro, *A la sombra de Felipe V...*, pp. 364-365 y J. A. Escudero López, *Los orígenes del Consejo...*, vol. 1, p. 66.

<sup>358</sup> Vid. A. Danvila, *El reinado relámpago...*, p. 226. También V. Bacallar y Sana, *Comentarios a la Guerra...*, t. 2, p. 311.

<sup>359</sup> Vid. A. Baudrillart, *Philippe V e...*, t. 3, pp. 31-34.

al recién estrenado monarca la necesidad que había de hacer una correcta división de competencias, disminuyendo el número de juntas y de consejos de manera que se buscara una mayor unidad en las actuaciones. Según Danvila, las bases del proyecto de Tessé eran las siguientes:

*A falta de un Primer Ministro, que en el fondo creía el Embajador indispensable, aunque en sus Memorias y Despacho se defiende que aspirase para sí mismo el cargo, gobernará el joven Luis por sí solo, sin que ello le costara más de media hora de trabajo por la mañana y media por la tarde. En el gobierno le ayudarían: el Gabinete como cuerpo consultivo, y los diferentes secretarios que recibirían el nombre de Ministros, asistiendo, en calidad de tales a las deliberaciones del Consejo, despachando directamente y aboca, los asuntos del departamento con Su Majestad. Los citados Ministros habían de ser: uno para los Negocios Extranjeros y los asuntos de Indias y Méjico, otro para Guerra, otro para Marina y un cuarto para Hacienda. Con tal organización creía Tessé que se podían suprimir o simplificar las numerosas Juntas y consejos españoles, que, con su manera imperfecta de funcionar, dificultaban la buena marcha de los negocios públicos<sup>360</sup>.*

Pero la realidad fue bien distinta, antes que el nuevo rey tomara alguna decisión importante era menester que enviara el asunto al Palacio de La Granja para que el secretario del rey, José de Grimaldo, las examinara y luego Felipe V las aceptara<sup>361</sup>, de ahí que Escudero afirmara que “el rey teórico era Luis I, pero el monarca decisor seguía siendo Felipe V”<sup>362</sup>. Toda esta intromisión lo único que logró fue crear una situación de lo más contradictoria y caótica, ya que desde los órganos de la administración central hasta los distintos plenipotenciarios extranjeros debían enviar a San Ildelfonso y a Madrid la documentación por duplicado, esperando de ambas partes la resolución pertinente.

Por su parte, los miembros de la Junta o Consejo de Despacho intentaron mejorar su posición frente a las intromisiones de Grimaldo repartiéndose entre ellos el despacho de los asuntos internacionales con las diversas potencias extranjeras, para luego informar a dicha Junta. Logrando por un lado reducir al secretario de Estado y del despacho de Estado, Orendain, a

---

<sup>360</sup> Vid. A. Danvila, *El reinado relámpago...*, pp. 272-73.

<sup>361</sup> Vid. G. Bernard, *Le Secrétariat d'État...*, p. 34. Escudero cita una carta del embajador inglés Stanhope en que señala que “El rey no había alterado la forma de gobierno que le dejó su padre y que las cuestiones más importantes a resolver eran propias de hacienda y de convocatoria de Cortes para la aceptación, confirmación y renuncia...”, Vid. J. A. Escudero López, *Los orígenes del Consejo...*, t. 1, p. 68.

<sup>362</sup> J. A. Escudero López, “La reconstrucción de la administración...”, p. 120.



un simple conductor de deliberaciones<sup>363</sup> y privando a Felipe V de la toma de decisiones. Frente a esta situación Grimaldo e Isabel de Farnesio “reaccionaron rápidamente” y lograron que el monarca expidiera un decreto a través del cual se autorizaba al secretario de Estado y del Despacho de Estado, Orendain, solicitar informes a cada uno de los miembros de la Junta, a fin de presentarlos al rey en el despacho ordinario. Esta disposición supuso en opinión de Beatriz Badorrey la anulación efectiva de dicha junta, que era visto por muchos como un paso atrás en el proceso de reforma administrativa iniciada en 1705<sup>364</sup>. Pero el despacho de los asuntos de gobierno desde San Ildelfonso y el reinado terminaron muy pronto, Luis I murió el 31 de agosto, con diecisiete años y tan sólo ocho meses de reinado<sup>365</sup>.

A la muerte de su hijo Luis, la idea de Felipe V de volver a ocupar el trono fue una constante, sin embargo, también vacilaba con la idea de dar el trono a su hijo Fernando y que en su minoría de edad tuvieran el mando de la Monarquía cinco tutores, que ya había destinado, estando también con el ánimo de que cuando las circunstancias del tiempo se opusieran a la recta intención, entrar solamente a gobernar la Monarquía sin título de rey, con lo cual excluía a los tutores y dejaba al real infante en posesión de la Corona. Con el fin de tomar la decisión correcta solicitó al Consejo de Castilla y a una Junta de teólogos<sup>366</sup> un informe sobre la legalidad de su regreso al trono en razón de las cuestiones jurídicas y morales que este hecho entrañaba. En principio el marqués de Miraball, presidente del Consejo de Castilla respondió que el monarca continuaba como propietario de la Corona y

---

<sup>363</sup> Relata Coxe que *La Junta, con intento de sustraerse a la autoridad del monarca retirado, trató de limitar, por medio de un reparto nuevo de los negocios, la inspección que ejercían en sus deliberaciones Grimaldo y Orendain, resucitando una costumbre que existía en tiempo de los últimos soberanos de la dinastía austriaca. Los vocales se repartían entre sí las relaciones con las potencias extranjeras, tomando cada uno un ramo particular y distinto, y enseguida dando su parecer a la corporación reunida. De este modo excluyeron a la secretaría de Estado de toda participación en los negocios con el extranjero, reduciéndola a ser un solo conducto de sus deliberaciones. Esta inesperada medida fue un golpe fatal para el poder de Felipe V, y cuando supo el mariscal Villars, en Versalles, este cambio, no pudo menos de exclamar: «Adios a la corte de San Ildelfonso; feliz pude creerse si se le asegura su comida y su cena».* W. Coxe, *España bajo el reinado...*, p. 716.

<sup>364</sup> B. Badorrey Martín, *Los orígenes del Ministerio...*, p. 51.

<sup>365</sup> Un relato de los sucesos posteriores a la enfermedad y muerte del “malogrado” rey puede verse A. Danvila, *El reinado relámpago...*

<sup>366</sup> La Junta estuvo integrada por el recién nombrado Obispo de Málaga, José García, el padre Juan de Soto, fray Alonso Pimentel, inquisidor de la Corte, fray Gabriel Barbastro, maestros Juan de Campo Verde y Francisco Granados. Vid. N. de J. Belando, *Historia civil de España. Sucesos de la guerra y tratados de paz desde el año de mil setecientos, hasta el del mil setecientos y treinta y tres*, Madrid, 1744, vol. 3, pp. 359-360.

ponderó la obligación que por justicia y conciencia debía volver al gobierno<sup>367</sup>. Al recibir la respuesta de la Junta de Teólogos<sup>368</sup>, nuevamente el Consejo de Castilla emitió una segunda opinión:

*...declarado y jurado Rey de España el Señor infante Don Fernando, quedaría VM absolutamente enajenado del dominio de la Corona, y Regencia de la Monarquía, y uno, y otro conferido en la voluntad de los cinco tutores, y VM manda que sobre este particular el Consejo se explique, declarando más este punto a si entiende, que VM absolutamente no podrá ser administrador, ni ejercer el régimen de la Monarquía, sin tener el dominio de la Corona... que no siendo VM rey propietario en la especie, que hoy se trata, tampoco puede VM administrar, gobernar, ni regentar la Monarquía, ni en carácter de Regente, ni con otro título...*

*El Consejo ha dicho siempre a VM y ha protestado en la precedente consulta a esta la sinceridad, amor, celo y verdad con que en tales ocasiones, y en la mayor de todas, que es la presente ha informado siempre lo que parecido, y parece, que conviene al servicio de Dios, de VM, y al bien universal de estos Reinos, y vuelve a hacer testigo a dios, que el dictamen del Consejo VM es de justicia Rey y Señor natural de estos dominios; y que sin dar lugar a discursos de contingentes opiniones está VM obligado en justicia, y conciencia a entrar en el manejo del reino con el preciso carácter de Rey...*

*Estos Reinos están ahora sin Rey, los vasallos huérfanos, los Tribunales suspensos, porque no tienen cabeza en cuyo nombre se puedan formar los despachos; y el perjuicio en la dilación es tan gravísimo que apenas cabe en la explicación. El remedio de todos estos daños consiste únicamente en que VM resuelta, la necesidad insta por momentos, los españoles lo suspiran, la Europa lo aguarda con impaciencia, el Consejo ansiosamente lo pide, y solo resta que VM lo mande<sup>369</sup>.*

Finalmente, Felipe V decidió reasumir la corona, para ello ordenó la convocatoria a Cortes para el 25 de noviembre a fin de hacer el juramento real y fuera aceptado el Príncipe Fernando como heredero al trono. Tras la reunión de las Cortes y un breve período de reclusión en La Granja, Felipe retornó a Madrid, junto con Grimaldo, a quien le devolvió su plaza de secretario de Estado.

<sup>367</sup> V. Bacallar y Sanna, *Comentarios de la Guerra...*, t. 2, p. 322-23.

<sup>368</sup> La Junta de Teólogos respondió en los siguientes términos: *Que habiendo mirado con la mayor, y más profunda atención punto de tanta gravedad, y de tantas circunstancias, es de sentir: que no obstante el voto, que V. Mag. Hizo de renunciar a la Corona, y el gobierno, para no volver a reasumirle, tiene obligación grave, debajo de pecado mortal, a tomar el gobierno o Regencia del reino no habiendo considerado la Junta, que en V. Mag. hay igual obligación a tomar la Corona, porque discurre gravísimos inconvenientes en que V. Mag. no entre en el gobierno o regencia, lo que discurre en volver a la Corona. Asimismo y por la misma razón, que sin embargo del voto, tiene V. Mag. obligación de tomar el gobierno.* Ibídem, p. 362-63.

<sup>369</sup> Ibídem, p. 363-365.

Al poco tiempo, la reina cansada de Grimaldo, decidió apostar por Orendain, “más capaz de adaptarse a los nuevos proyectos de la reina, preocupada siempre, ante todo, por el futuro de sus hijos”<sup>370</sup>. No así el monarca, “que se negaba a prestar atención a cuanto se le decía en contra de quien tenía por mejor de los hombres y el más fiel de los cortesanos, lleno de méritos, de actividades y de destrezas”<sup>371</sup>.

Varias fueron las reformas a la administración central de la Monarquía que hubieron de darse en estos años, entre ellas, el cese del secretario de Hacienda, Fernando Fuertes Montenegro por haber sido acusado de dilapidación, en su lugar, el rey nombró a Orendain, confirmó en la Secretaría de Estado a Grimaldo, en la de Guerra a Baltasar Patiño, en la Secretaría de Marina e Indias nombró Antonio Sopeña y la Secretaría de Justicia y Gobierno Político recayó en manos de José Rodrigo. Por su parte, el marqués de Mirabal tuvo que dejar la presidencia del Consejo de Castilla, misma que fue a manos del obispo de Sigüenza, Juan de Herrera<sup>372</sup>.

Poco a poco Grimaldo fue apartado del despacho con el rey, sobre todo desde la llegada de Riperdá<sup>373</sup>, “alejándole de verle y hablar con él, de aconsejarle y de sugerirle la respuesta a los asuntos que se iban presentando”<sup>374</sup>. El 12 de diciembre de 1725 el barón de Riperdá fue nombrado secretario de Estado y secretario del Despacho<sup>375</sup> sin negociación señalada, convirtiéndose en el personaje político más influyente en la corte. Sin embargo, esta situación hubo de provocar nuevamente cambios en la administración central, así entre el 2 febrero y el 14 de mayo de 1726 Riperdá ocupó la plaza de secretario de Estado y del Despacho de Guerra y de Marina e Indias y disfrutaba el más alto cargo fiscalizador como

<sup>370</sup> C. de Castro, *A la sombra de Felipe V...*, p. 371.

<sup>371</sup> L. Taxonera, *Felipe V...*, p. 202.

<sup>372</sup> Vid. J. A. Escudero López, *Los orígenes del Consejo...*, t. 1, pp. 79-80.

<sup>373</sup> Acerca de la figura de Riperdá pueden consultarse entre otras obras J. L. Bermejo Cabrero, “Sobre la caracterización institucional de Riperdá”, en *Anuario de Historia del Derecho Español*, nº 60 (1990), pp. 551-556 y J. A. Escudero López, *Los orígenes...*, t. 1, pp. 80-84. También en pleno siglo XVIII se escribió una biografía S. J. Mañer, *Historia del duque de Riperdá, Primer ministro de España, en el reynado del señor Felipe V*, Madrid, 1796. En el siglo XIX G. Moore elaboró un texto que aludía a la vida política del duque *Lives of Cardinal Alberoni, and the Duke of Ripperda, and Marquis of Pombal, three distinguished political adventurers of the last century exhibiting a view of the kingdoms of Spain and Portugal*, Londres, 1814. Más modernamente L. de Taxonera, *El Duque de Riperdá: el gobernante aventurero*, Madrid, 1945 y D. Perona Tomás, “Apuntes sobre el perfil institucional de Alberoni, Riperdá y Godoy”, *Anuario de Historia del Derecho Español*, nº 68 (1998), pp. 83-150.

<sup>374</sup> Vid. C. de Castro, *A la sombra de Felipe V...*, p. 376.

<sup>375</sup> J. L. Bermejo realizó un análisis pormenorizado de ambos nombramientos. Vid. “Sobre la caracterización institucional...”, pp. 552-553.

superintendente general del Estado. Mientras que Grimaldo y Orendain no habían sido apartados de la confianza de Felipe V, por lo que el primero conservaba la titularidad en la Secretaría de Estado y al segundo le nombraron secretario de Estado de Justicia<sup>376</sup>.

El mayor grado de poder que el barón obtuvo se debió a un decreto fechado en el Pardo el 4 de marzo de 1726 en donde el monarca ordenaba que en caso que cualquiera de sus ministros o altos servidores hiciese perjuicio o lastimase intereses de cualquiera de sus vasallos podía acudir en queja al duque de Riperdá para que, después de examinada convenientemente, comprobadas las pruebas y dado cuenta a su majestad, se hiciese justicia y se castigase el exceso en los que se hallasen culpables, según el rigor se las leyes<sup>377</sup>. En opinión de J. L. Bermejo este decreto colocaría al duque en la mayor altura de la esfera del gobierno, como intermediario entre el rey y los súbditos a la hora de exponer éstos sus quejas frente a los abusos y agravios de las otras instancias de gobierno y administración<sup>378</sup>.

Pero las tropelías y los excesos que Riperdá había cometido en las negociaciones del Tratado de Viena, pronto le cobraron factura que acabaron por alterar su imagen ante Felipe V, quien a finales de mayo de 1726 le relevó de la presidencia de Hacienda, con el pretexto de “aliviarle una parte del trabajo”. El barón al conocer la noticia de su despido, decidió renunciar a todos sus cargos dentro de la administración central de la Monarquía, renuncia que fue admitida por el monarca y que aún así decidió conferirle como merced tres mil doblones de pensión al año<sup>379</sup>.

La crisis de 1726 determinó la caída del primer ministro Riperdá, lo que originó nuevamente una reestructuración de la titularidad de las secretarías. En principio Grimaldo recuperó la Secretaría de Estado, Orendain continuó dirigiendo los asuntos relacionados con la Paz de Viena; Francisco de Arriaza regresó a la Secretaría de Hacienda y Baltasar Patiño, marqués de Castelar, fue nombrado secretario de Estado y del Despacho de Guerra. José Rodrigo permaneció en la Secretaría de Estado y del Despacho de Justicia y José Patiño fue designado para la Secretaría de Marina e Indias<sup>380</sup>.

---

<sup>376</sup> Vid. J. Lynch, *La España del siglo XVIII*, Barcelona, 2004, p. 81.

<sup>377</sup> Citado por L. Taxonera, *El duque de Riperdá...*, p. 204 y el texto completo en la nota 18, pp. 412-19.

<sup>378</sup> Vid. J. L. Bermejo, “Sobre la caracterización institucional...”, p. 555.

<sup>379</sup> Vid. J. Campo Raso, *Memorias políticas y militares, para servir de continuación a los comentarios del marqués de San Felipe*, Madrid, 1792, pp. 32-33.

<sup>380</sup> W. Coxe, *España bajo el reinado...*, p. 765.

Pero pronto Grimaldo fue relevado del cargo debido a las intrigas generadas por Isabel de Farnesio y el que había sido su subalterno, Orendain. Al monarca no le quedó otra salida más que autorizar su jubilación. Tras la caída de Grimaldo, ingresó una figura importante dentro de la administración indiana, José Patiño<sup>381</sup>, Presidente de la Casa de Contratación e Intendente de Marina en Cádiz, quien en 1726 tomó el relevo de Grimaldo. En estos años los problemas de la política indiana más importantes fueron la defensa del territorio de las Indias y la organización e impulso del comercio transoceánico, amén del prolongado forcejeo con Inglaterra tratando de contener los daños derivados del uso y abuso de los privilegios concedidos a la Compañía del Mar del Sur<sup>382</sup>.

Con el tiempo también obtuvo la titularidad de la Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda; posteriormente, en 1729 se hizo cargo de la de Guerra y a la muerte de Orendain, en 1734 de la de Estado. Por tanto, hubo un tiempo en que Patiño logró concentrar en su poder todos los resortes de la política de la Monarquía, a excepción de la Secretaría de Justicia que continuaba a cargo de José Rodrigo. La razón de esta acumulación fue, según Bernard, que el rey constató que siempre había fricciones entre los distintos ministros, los límites de cada departamento no estaban bien definidos y de ahí venía el afán por acumular todas las cargas sobre una misma espalda<sup>383</sup>. Por ello dirá Escudero que parece ocioso preguntarse si existía o no cualquier tipo de despacho colectivo de los ministros con el rey y la reina, pues despachar con Patiño era despachar la práctica totalidad de los asuntos de la Monarquía<sup>384</sup>.

En efecto, la “omnipresencia” de José Patiño significó su supremacía frente a cualquier órgano de la administración de la Monarquía y en especial al sistema de consejos. El propio Coxe expresaba que *fue él quien suprimió aquellas discusiones interminables que se prolongaban gracias a multiplicadas memorias e informes, que habían dado celeridad a la lentitud*

---

<sup>381</sup> La clásica biografía de de José Patiño ha sido escrita por A. Rodríguez Villa, *Patiño y Campillo. Reseña histórico-biográfica de estos dos ministros de Felipe V. Formada por documentos inéditos y desconocidos en su mayor parte*, Madrid, 1882. Más modernamente han escrito sobre la obra de este ministro A. Bethencourt, *Patiño en la política de Felipe V*, Madrid, 1954; I. Pulido Bueno, *José Patiño: el inicio del gobierno político-económico ilustrado en España*, Huelva, 1997; C. Pérez Fernández-Turégano, *Patiño y las reformas de la administración en el reinado de Felipe V*, Madrid, 2006; R. J. López, “José Patiño: un político al servicio del rey Felipe V”, en *Plenitudo veritatis: homenaje a Mons. Romero Pose*, Madrid, 2008, pp. 581-624.

<sup>382</sup> L. Navarro García, “La política indiana...”, p. 27.

<sup>383</sup> Vid. G. Bernard, *Le Secrétariat d'État...*, p. 40.

<sup>384</sup> Vid. J. A. Escudero López, “La reconstrucción de la administración...”, p. 127.

*del gobierno español, concentrando en sí mismo la decisión acerca de los diferentes ramos de la administración pública*<sup>385</sup>.

Justamente en los años de mayor influencia de Patiño dentro del gobierno de la Monarquía, el Consejo de Indias careció de titular. En efecto, desde el fallecimiento de su presidente, el marqués de Valero a finales del 1727 y hasta 1737, Felipe V no hizo ningún nombramiento ni de presidente, ni de gobernador de Indias; buena muestra, en opinión de Muro Romero del desinterés por parte de la corona del gobierno de consejos y en especial del indiano<sup>386</sup>.

Rodríguez Villa, uno de los biógrafos de José Patiño, reconocía el corto tiempo que el ministro se mantuvo “en las elevadas regiones del mando, diez años y medios”, tiempo en el que mejoró la organización de la marina española; una armada y ejército bien pagado y mantenido en disciplina; aumentó los tesoros de las Indias a través del fomento de las minas; impulsó el comercio con sus flotas y galeones; se propagó la religión católica en nuevas misiones; se abrió el comercio directo con Filipinas; economizó la real hacienda, etc.<sup>387</sup> En otras palabras, Patiño “no solo dio continuidad y coherencia a la dirección de los asuntos indianos, sino que los elevó al plano de los problemas capitales de la política nacional, plano en el que se mantuvo en todo el resto de la centuria”<sup>388</sup>.

La muerte de Patiño dio entrada a una nueva fase en el sistema ministerial. Uno de sus antiguos protegidos, Sebastián de la Cuadra, fue nombrado titular del ministerio de Estado y se le concedió la interinidad de los asuntos de guerra; además, como era habitual, el nuevo secretario también fue designado consejero de Estado y de Guerra. Al marqués de Torrenueva le nombraron secretario de Hacienda y titular interino del despacho de los asuntos de Marina e Indias. Finalmente, la Secretaría de Estado y del Despacho de Justicia continuó en manos de José de Rodrigo. Todos estos cambios dieron la impresión de generar un debilitamiento del régimen ministerial a favor de la pretendida revitalización de los consejos<sup>389</sup>, pero en realidad supuso un reacomodo del sistema ministerial para que pudiera ser cooptado por muy pocos ministros.

---

<sup>385</sup> W. Coxe, *España bajo el reinado...*, p. 850.

<sup>386</sup> Vid. F. Muro Romero, “La administración bajo los primeros borbones”, en *Historia General de España y América*, Madrid, Rialp, 1983, t. XI-1, p. 270.

<sup>387</sup> Vid. A. Rodríguez Villa, *Patiño y Campillo...*, pp. 109-110.

<sup>388</sup> L. Navarro García, “La política indiana...”, p. 37.

<sup>389</sup> Vid. J. A. Escudero López, *Los orígenes del Consejo...*, t. 1, p. 101.

Esta situación varió a mediados de 1739 cuando el marqués de Torrenueva fue nombrado consejero de capa y espada del Consejo de Indias y sus ministerios fueron ocupados por José de la Quintana como ministro de la Secretaría de Marina e Indias y Juan Bautista de Iturralde de Hacienda<sup>390</sup>. Éste último tuvo que renunciar debido a sus erradas políticas económicas, en su lugar se nombró a Fernando Verdes Montenegro, quien por motivos de salud fue relevado a su vez por José de Campillo y Cossío<sup>391</sup>.

En 1741 se volvieron a fusionar en manos de Campillo las Secretarías de Hacienda, Marina e Indias y Guerra, mismas que serían ocupadas hasta su muerte en 1743<sup>392</sup>, cubriendo sus ausencias por enfermedad, Cenón de Somodevilla, marqués de la Ensenada<sup>393</sup>, quien a partir de ese año y hasta su cese en 1754 ocupó los cuatro ministerios antes mencionados.

Pese a los distintos cambios que pudiera sufrir la organización administrativa durante el período del segundo reinado de Felipe V el sistema ministerial se consolidó a través de estructuras diferenciadas, tanto, que las cinco secretarías de Estado y del despacho hasta ese momento existentes, fueron servidas por un mismo titular, como ya mencionamos fueron los casos de Patiño, Campillo o el marqués de la Ensenada<sup>394</sup>. Justamente esta acumulación de Secretarías en manos de un solo titular provocó que el Consejo de Indias continuara expresando su opinión sobre la mayoría de los

---

<sup>390</sup> Gaceta de Madrid nº 10 de 10.03.1739.

<sup>391</sup> Sobre la vida y obra del ministro Campillo puede verse A. Rodríguez Villa, *Patiño y Campillo...*; R. Fuertes Arias, *Ensayo biográfico acerca del Excmo. Sr. Don Joseph del Campillo Cossío (1692-1743)*, Madrid, 1927; C. Pérez Bustamante, “Campillo y las Indias”, en *Revista de Indias*, vol. 1, nº 2 (1940), pp. 119-125; M. Artola, “Campillo y las reformas de Carlos III”, en *Revista de Indias*, vol. 12, nº 50 (1952), pp. 685-714; J. Martínez Cardós, “Un informe de Campillo sobre la propuesta de una compañía holandesa para comerciar con la América Española”, en *Revista de Indias*, vol. 21, nº 84 (1961), pp. 255-69, del mismo autor “Don José del Campillo y Cossío”, en *Homenaje a Ciriaco Pérez-Bustamante*, II, Madrid, 1969 y en *Revista de Indias*, vol. 30, nº 119-122 (1970), pp. 503-42; V. García Caso, *El ministro Campillo*, Asturias, 1988; I. Martínez Navas, “El Tribunal del Santo Oficio de Logroño y don José del Campillo y Cossío”, en *Berceo* nº 140 (2001), pp. 275-292, entre otros.

<sup>392</sup> Gaceta de Madrid nº 16 de 16.04.1743.

<sup>393</sup> La biografía del marqués ha sido estudiada entre otros por A. Rodríguez Villa, *D. Cenón de Somodovilla, Marqués de la Ensenada*, Madrid, 1878; A. González de Amenazua, *Un modelo de estadista, el Marqués de la Ensenada*, Madrid, 1917; J. Salva Riera, *El marqués de la Ensenada*, Madrid, 1942; C. Ibañez de Ibero, *El marqués de la Ensenada*, Cádiz, 1944; D. Ochagavía Fernández, *Don Cenón de Somodevilla, el Marqués de la Ensenada*, *Berceo*, nº 13 (1949), pp. 511-524; A. Manzanares Beriaín, *El Marqués de la Ensenada, estadista universal*, Logroño, 1982; F. Abad León, *El Marqués de la Ensenada, su vida y su obra*, Madrid, 1985; D. Ozanan, “El marqués de la Ensenada”, en *Fernando VI y Bárbara de Braganza: un reinado bajo el signo de la paz. 1746-1759*, Madrid, 2002, pp. 299-307.

<sup>394</sup> Vid. J. A. Escudero López, *Los orígenes del Consejo...*, t. 1, p. 163.

asuntos que tradicionalmente eran de su competencia, sobre todo desde 1723 a 1743, pues mientras que el Consejo vio aumentada a diez sus plazas de ministros, las secretarías de Estado y del despacho se encontraban faltas de personal y de fondos necesarios que le imposibilitaban su dedicación al conocimiento de los temas americanos<sup>395</sup>.

En efecto, la última década del reinado de Felipe V se caracterizó por una mayor receptividad de los asuntos americanos dentro del Consejo de Indias. En estos años fue nombrado el conde de Montijo como su presidente, quien por haber recibido otros encargos tales como la de encabezar la delegación española en la dieta de Frankfurt o ser nombrado mayordomo mayor de la reina fue sustituido en sus ausencias por José de Carvajal y Lancaster.

Una de las grandes aportaciones de Carvajal fue haber logrado impulsar una serie de reformas tendientes a mejorar el comercio indiano a través del fomento de compañías privilegiadas de comercio a fin de evitar el contrabando<sup>396</sup> y el de mejorar las relaciones internacionales de España con Portugal, Francia o Inglaterra para favorecer los intereses españoles en América, lo que se reflejó “en el inicio de un nuevo auge del prestigio del Consejo a pesar de la gran disminución de sus competencias”<sup>397</sup>.

Tras la muerte de Felipe V en julio de 1746 los miembros del Consejo de Indias elucubraban con la posibilidad de recuperar sus privilegios y prerrogativas, pero nada más lejos de eso, Fernando VI continuó con la política iniciada en 1717, confirmando treinta años más tarde la división de competencias entre el gobierno por consejos y la Secretaría de Estado y del Despacho de Indias<sup>398</sup>.

---

<sup>395</sup> F. Muro Romero, “Instituciones de gobierno y sociedad...”, p. 171.

<sup>396</sup> Vid. J. M. Delgado Barrado, “América y el proyecto de compañías privilegiadas de José de Carvajal y Lancaster (1745-1754)”, en *Brocar*, nº 22 (1998), pp. 103-120.

<sup>397</sup> Vid. F. Muro Romero, “La administración bajo...”, p. 270.

<sup>398</sup> A.G.I., Ultramar, 709.



## II. LA ORGANIZACIÓN INTERNA DEL CONSEJO

Con el fin de realizar una descripción general de la estructura orgánica del Consejo hemos creído conveniente hacer un estudio detallado de su personal, para ello expondremos las normas que se promulgaron en cada momento, de modo que se establezca la composición de dicho órgano colegiado tomando como referencia los cambios estructurales, esto es, las plantas que recibió desde la llegada al trono de Felipe V hasta su muerte; con el propósito de apreciar con mayor nitidez las numerosas reformas de las que fue objeto durante la primera mitad del siglo XVIII.

Es importante señalar que tanto en el reinado de Carlos II como en el de Felipe V el Consejo de Indias se organizó de acuerdo a lo establecido en las Ordenanzas de 1636. Dichas disposiciones fueron recogidas en su mayoría en el título segundo del libro segundo de la Recopilación de las Leyes de Indias de 1680. Sin embargo, con el tiempo, los numerosos decretos especiales expedidos ya desde el propio reinado de Carlos II, y por supuesto, durante el reinado de Felipe V terminaron por derogar tácita o expresamente el contenido de algunas de esas normas recogidas en dicha Recopilación.

Hacia finales del siglo XVIII Carlos IV ordenó al Consejo de Indias el nombramiento de una Junta encargada de actualizar la normativa reguladora de la organización y funcionamiento del Consejo a fin de redactar unas nuevas Ordenanzas que nunca llegaron a ver la luz<sup>1</sup>. De lo anterior se desprende que el presente estudio lo haremos a través de la normativa mencionada, intentado verificar hasta qué punto las Ordenanzas de 1636 del Consejo de Indias perdieron vigencia en el reinado del primer Borbón.

---

<sup>1</sup> R. D. García Pérez, "Las nonatas ordenanzas...", p. 651.

## 1. Las Plantas del Consejo.

### 1.1. La herencia de Carlos II: las reformas a las plantas del Consejo de Indias en 1677, 1687 y 1691.

Durante el reinado de Carlos II el régimen de gobierno por consejos hubo de sufrir importantes reformas, debido entre otras razones, a la maltrecha economía del reino. En efecto, fue en este período donde se intentaron realizar grandes esfuerzos para restringir en lo posible gastos tan elevados cuan inútiles por medio de varias reformas. La primera de ellas fue establecida a través del real decreto de julio 1677 con la intención de reducir el número de consejeros:

*Siendo tan de mi servicio el ir reduciendo los tribunales al pie que deben tener así por excusar la mayor dilación que el crecido número de ministros causa al breve expediente de los negocios, como por el gozo de los salarios que se aumenta cuando tanto debe atenderse aminorarle: He resuelto que el Consejo, y Cámara de Indias, se reduzca al número de un presidente y ocho consejeros, un fiscal y dos secretarios, con un oficial mayor, dos segundos, dos terceros y dos entretenidos en cada secretaría...<sup>2</sup>.*

Sin embargo, quizá por miedo a decisiones enérgicas, según afirma Schäfer, el rey estaba dispuesto a deshacerlo de antemano<sup>3</sup> al establecer en la última parte del mencionado decreto que *...toda esta disposición se irá poniendo en práctica según fueran vacando las plazas, y mercedes que hay hoy hechas así del Consejo... porque no es mi ánimo que se haga novedad con los que al presente están sirviendo*. Con lo cual esta pretendida reforma de nueva planta del Consejo quedó en un mero proyecto. Además, los efectos buscados con la implantación de dicho decreto “se notaron tan poco” que el propio Consejo se atrevió a solicitar la concesión de ingresos especiales para solventar los salarios dado el crecido número de plazas. A lo que Carlos II “con decreto de reforma y todo, estampa impasiblemente su acostumbrado «Como parce»”<sup>4</sup>

Años más tarde, en vista de los apuros económicos en los que se encontraba la real hacienda, un segundo decreto de reforma de 31 de enero de 1687 ordenaba la extinción de las plazas compradas *quedando las que fueren excluidos con los honores de él y a pagar de los mismo efectos del*

---

<sup>2</sup> A. H. N., Cedulaire de Ayala, t. 22 (Códices, L. 705), f. 317v-318r, n.º. 292.

<sup>3</sup> Vid. E. Schäfer, *El Consejo Real...*, t. 1, p. 266 y en su artículo “La plantilla del Consejo...”, p. 59.

<sup>4</sup> E. Schäfer, *El Consejo Real...*, t. 1, p. 267.

*Consejo el cinco por ciento de la cantidad que dieron, y que las supernumerarias, y que se hubieren concedido por gracia y no por compra se vayan extinguiendo conforme se fuere acomodando a los sujetos que las tienen, y he mandado que no se admitan memoriales para plaza ninguna que sea supernumeraria*<sup>5</sup>. Pero esta medida tampoco llegó a realizarse, de hecho ese mismo año aumentó a dos el número de fiscales<sup>6</sup>. Otros oficios sujetos a venalidad<sup>7</sup> dentro del Consejo tampoco fueron modificados como consecuencia de este decreto, como lo fueron las plazas del escribano de cámara de justicia.

En 1690 el personal completo del Consejo alcanzó aproximadamente cien individuos, existiendo al menos cincuenta supernumerarios asalariados de todas las categorías, lo que provocaba, por un lado, que el despacho de los negocios se ralentizara y corriera peligro el secreto que se debía guardar, y, por el otro, un aumento considerable de egresos a la maltrecha real hacienda<sup>8</sup>. Para paliar todos estos inconvenientes el 7 de julio de 1691 se expidió un decreto cuya finalidad consistía en establecer una nueva planta del Consejo con un número de ministros determinados. Por tanto, el Consejo debía quedar compuesto de la siguiente manera:

*El presidente, ocho ministros togados, dos de capa y espada, dos Secretarios y un fiscal, quedando en este número los más antiguos, e incluidos en él, el teniente de gran chanciller, el tesorero, y el Alguacil mayor...*

*La secretaría del Perú se reduzca a nueve oficiales incluso el mayor con la distinción de dos segundos, dos terceros, y cuatro entretenidos con la calidad de que el más moderno haya de cuidar de los derechos de despachos de partes y gastos de secretaría con la ayuda de costa que lo antiguo se hubieren estilado dar en los mismos derechos, quedando a elección del secretario los sujetos que se hubieren de nombrar de los mismos que actualmente hay en ella para desde la plaza tercera inclusive abajo (para que con el oficial mayor y los segundos del número no se ha de hacer*

<sup>5</sup> A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 46v-47r.

<sup>6</sup> Vid. E. Schäfer, "La plantilla del Consejo...", p. 60.

<sup>7</sup> Sobre venta de oficios son fundamentales las obras de F. Tomás y Valiente, *La venta de oficios en Indias (1492-1606)*, Madrid, 1982. Del mismo autor existen algunos artículos al respecto: "Venta de oficios públicos en Castilla durante los siglos XVII y XVIII", en *Gobierno e instituciones en la España del Antiguo Régimen*, Madrid, 1980, pp. 151-177; "Notas sobre las ventas de oficios públicos en Indias" en *III Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano, Actas y Estudios*, Madrid, 1973, pp. 377-421 o "Ventas y renunciaciones de oficios públicos a mediados del siglo XVII", en *Revista de la Facultad de Derecho de México*, 26, n° 101-102 (enero-junio 1976), pp. 727-53. También es interesante el artículo de A. Domínguez Ortiz, "La venta de cargos y oficios en Castilla y sus consecuencias económicas y sociales", en *Instituciones y sociedad en la España de los Austrias*, Barcelona, 1985, pp. 137-184.

<sup>8</sup> E. Schäfer, *El Consejo Real...*, t. 1, p. 262.

*novedad, sino e por vacante suya) hasta llenar el de las nueve referidas, y cesando a todos los demás el ejercicio...*

*Practíquese con la secretaría de Nueva España lo mismo que en la del Perú en todo sin diferencia alguna...*

*Y no debiendo haber según las ordenanzas recopiladas el año de seiscientos y treinta y cinco más que un oficial de Libros en estos oficios, se reformarán de los cuatro que hay (el uno con título de mayor) los tres de ellos quedando el más antiguo con ejercicio y goce entero y los otros con la mitad, y la opción a su vacante por antigüedades como los Contadores, observándose precisa, y puntualmente lo que se dispone por las referidas Ordenanzas, sin interpretación alguna, ni permitirse que hay más que los dichos cuatro Contadores, y un Oficial de Libros, con el Capellán, y dos Oficiales de este no hay que hacer novedad por ser precisos....*

*Queden los tres Relatores más antiguos (de los seis que hay) con ejercicio y goce y los otros tres reformados con la mitad de los gajes suministrando en las vacantes por sus antigüedades...*

*También deben quedar el Abogado, y el Procurador de Pobres, y dos Agentes fiscales el uno para los negocios del Perú, y el otro para los de Nueva España...*

*Consérvese un Oficial de Sello y Registro por ser antiguo, y necesario. De los once Porteros que hay solo han de quedar los cuatro del número con ejercicio y goce, y los siete supernumerarios con la mitad y opción a las vacantes del número por sus antigüedades y no hay que hacer novedad en los cuatro Alguaciles que nombra el presidente y el Alguacil Mayor...<sup>9</sup>.*

A diferencia del real decreto de 1677, los consejeros excedentes del pie fijo debían cesar, quedando sólo con la mitad del sueldo fijado y teniendo opción por antigüedad a las plazas vacantes. Sin embargo, este decreto de 1691 estableció dos excepciones a fin de conservar a dos consejeros excedentes *en atención a los particulares méritos y especiales circunstancias que concurren en sus personas: el conde de Paredes y Manuel de Lira.*

Sin embargo, dichas reformas del Consejo hubieron de ponerse en marcha hacia 1693 con una planta de ocho consejeros togados de pie fijo, quedando sólo dos togados en plaza de opción. En 1698, en lugar de dos consejeros de capa y espada, el rey había nombrado a cuatro más, con lo cual a su muerte existían diez y nueve consejeros, en lugar de los diez que establecía el real decreto de 1691 situación que dio lugar a que el propio Consejo de Indias en 1700 expusiera en una consulta el contraste existente entre lo ordenado y la realidad, consulta que al parecer quedó sin respuesta ante la inminente muerte del monarca<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> Real decreto de reforma de 17.07.1691. A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 47r-52v.

<sup>10</sup> Vid. E. Schäfer, *El Consejo Real...*, t. 1, p. 273.

## 1.2. Las plantas del Consejo de Indias en el reinado de Felipe V.

En principio, la llegada de la nueva dinastía no supuso un cambio radical en la manera de gobernar la Monarquía. En cuanto Felipe V llegó a Madrid expidió un decreto ordenando al Consejo de Indias el cumplimiento de su deber:

*Ordeno y encargo a todos los de ese Consejo que en cuanto pertenezca a su Instituto me consulten con celo, cristiana libertad, y suma pureza, y sin respeto humano; lo que juzgaren sea de mi obligación, y más conveniente a mis Reynos y por que el Secreto es el alma de las resoluciones, encargo y mando que se observe religiosamente en cuanto se tratare, confiere, resolviere advirtiéndole que haré gran cargo al que faltare en lo que tanto importa...*<sup>11</sup>.

Pero a partir de este momento y hasta el final de su reinado fue una constante en la política de Felipe V disminuir el gasto generado a la real hacienda en pago de las nóminas, los gajes y emolumentos de los ministros y oficiales que formaban parte de los órganos de la administración central, además de disminuir el excesivo poder que ostentaban dichos órganos. Por ello, el monarca en numerosas ocasiones expidió una serie de decretos cuya finalidad era disminuir al máximo el pie que debían tener todos los consejos de la Monarquía, entre ellos, el de Indias, decretos que analizaremos a continuación.

### a) La Planta de 1701.

A través del real decreto de 6 de marzo de 1701 el rey decidió reformar la planta del Consejo y demás tribunales de Indias debido al abultado número de ministros que lo componían. Así, el real decreto fijó que la planta del Consejo debía ser la siguiente:

*El presidente o gobernador, el gran chanciller, ocho consejeros togados, dos de Capa y Espada, un fiscal y dos Secretarios uno del Perú y Tierra Firme, y otro de Nueva España, y Isla de Barlovento, de manera que no haya más, que dando por ahora los que hallan fuera del número en ambas clases del Consejo, con el ejercicio y goce de sus plazas de consejeros, y*

---

<sup>11</sup> Real decreto de 24.02.1701 para que el Consejo consulte con libertad lo que contemple más del real servicio. A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 53r-53v; 583 L. 3, ff. 69-70.

*consumiéndose las que fueren vacando por muerte o jubilación, hasta reducirse al número referido*<sup>12</sup>.

Se prohibió a los ministros que duplicaran goces y salarios en caso que hallarse cumpliendo con otras ocupaciones, incompatibles a partir de entonces. Además, extinguió la Cámara de Indias, trasladando al Consejo el conocimiento de todas sus provisiones y negocios, pero cediendo en beneficio de la real hacienda todos los sueldos, propinas y emolumentos de los camaristas<sup>13</sup>.

## **b) La Planta de 1702.**

Con la intención de ir reduciendo el número ministros y oficiales que formaban parte del Consejo, el rey decidió nuevamente reducir el número de miembros *al número de un presidente, ocho consejeros, un fiscal y dos secretarios con un oficial mayor, dos segundos, dos terceros y dos entretenidos en cada Secretaría*<sup>14</sup>. En realidad no se trataba de una nueva planta, simplemente buscaba que se diera cumplimiento a la composición del Consejo que en su momento había dispuesto Carlos II.

Aquellos miembros del Consejo que quedasen fuera de este listado podían *mantener el goce y ejercicio hasta que fuesen vacando sus plazas, reduciéndolas al número prefinido y prohibiendo la duplicación de goces*.

Asimismo los oficiales de las dos secretarías, contadores del Consejo y ministros de todas clases se debían reducir al número prefinido en el mencionado decreto de 1691, quedando por tanto los oficiales supernumerarios quedarían sin ejercicio de su plaza.

---

<sup>12</sup> Real decreto sobre la extinción de la Cámara, reforma de los ministros del Consejo y demás tribunales. 06.03.1701. A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 53v-56r; 827; 583 L. 3, ff. 73-77.

<sup>13</sup> En marzo de ese mismo año de 1701 el monarca a través de un real decreto insistió nuevamente en la extinción de la Cámara de Indias, trasladado sus negocios al Consejo, el cual debía de consultar todos los empleos eclesiásticos, políticos y militares según la forma que se practicaba desde los años de 1609 hasta el de 1644, proponiéndose por cada uno de empleos a tres sujetos, sino es que se convenga entre sí en sus votos. A.G.I., Indiferente General, 583 L. 3, ff. 68-69.

<sup>14</sup> Real decreto sobre la composición del Consejo de Indias y de la Junta de Guerra. 02.07.1702. A.G.I., Indiferente General, 583 L. 3, ff. 87-88.

### c) La Planta de 1706.

En junio de 1706 cuando las tropas del archiduque se aproximaron a Madrid, Felipe V ordenó a los presidentes, consejeros y demás tribunales abandonar Madrid y seguirlo hacia Guadalajara<sup>15</sup>. A través de una consulta el Consejo preguntó al monarca quiénes debían partir a Guadalajara. En respuesta el monarca señaló:

*...al presidente, dos señores ministros (los que eligiere), el señor fiscal, los dos señores secretarios, sus oficiales y demás ministros inferiores, y precisos, dependientes de él, que le pareciere para el curso, y expediente regular de los negocios llevando los sellos, y archivos de sus papeles, teniendo entendido que los demás ministros que quisieren seguir después han de ser admitidos en Guadalajara al ejercicio de sus plazas, y que aquellos que quedan han de cesar enteramente en el despacho tanto de gobierno como de justicia, respecto de que en Madrid no ha de haber ni quedar ministros de este Tribunal con jurisdicción alguna*<sup>16</sup>.

Posteriormente, Felipe V emitió un nuevo decreto de 24 de junio en donde estableció que por motivos de la guerra, los tribunales debían pasar a Burgos. Tras su regreso triunfal a Madrid, el 18 de agosto, el monarca resolvió restituir a los consejos y tribunales en la forma que estaban en Burgos y *que se juntasen, y despachasen sin más ministros que los que al presente servían hasta que mandase otra cosa*<sup>17</sup>.

El 23 de septiembre el rey restituyó a sus puestos a los ministros subalternos que habían servido bajo la ocupación extranjera, pero que se habían limitado a cumplir las órdenes de sus superiores. Por el contrario, ordenó castigar severamente a aquellos que hubiesen tenido relaciones con el enemigo o hubieran actuado o hablado en su favor<sup>18</sup>.

En ese mismo mes, el monarca decidió continuar con la planta que el Consejo de Indias había tenido de acuerdo con la última reforma *entendiéndose que en aquellos en que hubieren quedado ahora habilitados más ministros que los que en ella se señalaron, no es mi intención queden fuera, sino que como fueren vacando las plazas se vayan extinguiendo hasta*

<sup>15</sup> Real decreto para que todos los tribunales queden con el número de ministros asignados en la última reforma. 23.09.1706. A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 56r-56v; 583 L. 3 ff. 29-30.

<sup>16</sup> Auto acordado de 19.06.1706. A.H.N., Cedula de Ayala t. 15 (Códices, L. 698), f. 141, nº 145.

<sup>17</sup> Real decreto que restituye los consejos y tribunales en la forma que estaban en Burgos. 18.08.1706. A.H.N., Cedula de Ayala t. 34 (Códices, L. 717), f. 75, nº 60.

<sup>18</sup> Real decreto 23.09.1706. A.G.I., Indiferente General, 583 L. 2, ff. 28-29, 652.

*el número señalado*<sup>19</sup>. En otras palabras, el Consejo debía formarse de acuerdo con lo establecido en el real decreto de 1691.

#### **d) La Planta de 1713.**

Por influencia del ministro francés Orry, Felipe V decidió reformar la planta de todos los consejos que componían la Monarquía debido al *grave atraso que se experimenta en muchos negocios de la mayor importancia, en perjuicio, no sólo de mi servicio, sino en contra de mis Vasallos, y considerando, que este atraso procede inculpablemente del corto número de ministros en los tribunales*. También decidió dividir la cabeza del Consejo a fin de debilitar el poder dicho órgano indiano y el prestigio del presidente único<sup>20</sup>. Por tanto resolvió que el Consejo de Indias se formara de aquí en adelante *de tres presidentes, de veinte consejeros, los diez Togados, y los otros diez de Capa y Espada, de un fiscal, de dos Abogados generales, de tres Secretarios, y que se dividan en tres Salas*<sup>21</sup>.

En esta reforma también se creó una Junta especial que conocería de aquí en adelante todas las finanzas de aquellos territorios, lo que evitaría la intromisión directa del Consejo de Indias en los asuntos financieros de la Monarquía. Si bien la Junta se compondría por miembros del Consejo de Indias y del de Hacienda.

Sin embargo, en la práctica, el mencionado decreto no logró agilizar el trámite de los negocios, muy al contrario lo complicó y con ello el tiempo de resolución de los mismos. En algunas ocasiones el Consejo tuvo que consultar al monarca acerca de la forma de actuar, como fue el caso de una consulta en donde le exponían dos dudas relacionadas con la aplicación del decreto:

*La primera si respecto de haber diferentes resoluciones tomadas ya por el Consejo en sala de Gobierno en que sólo falta la ejecución de los despachos por no haber cabido en el tiempo de oficio, y en los de partes, por no haber acudido estas, entre los generales hay algunos de Hacienda de libranzas mandadas expedir por VM, ha de correr o suspenderse la ejecución hasta estar perfecta la Planta, y si ha de suceder lo mismo en algunos pleitos de Justicia ya vistos, y en estado de pronunciar las Sentencias, otros votados y*

---

<sup>19</sup> Real decreto de 23.09.1706. A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 56r-56v.

<sup>20</sup> Vid. G. Bernard, *Le Secrétariat d'État...*, p. 7.

<sup>21</sup> Real decreto 10.11.1713. A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 58v-.62v; 827.



*sin pronunciarse, y otros vistos y no votados, respecto de la mudanza de Jueces con la asignación que VM prefiere de las Salas en que han de asistir.*

*La Segunda si en el ínterin que VM aclara, o resuelve las dudas que se ofrecen al Consejo, y se irán proponiendo a VM para practicarse el todo de la Planta y reglas que VM previene en su real decreto se han de observar por el Consejo en su Gobierno; se ha de ir dando curso a muchos y graves negocios y causas que hay pendientes de todas clases<sup>22</sup>.*

Sin obtener respuesta, en febrero de 1714 el fiscal del Consejo elevó una Representación<sup>23</sup> a Felipe V con la intención de evitar, en la medida de lo posible, la aplicación de las reformas de 1713<sup>24</sup>. Para ello su autor, Josef de los Ríos, elaboró por orden de los consejeros un *resumen sustancial del todo de las Indias, sus partes, gobierno y reglas con que hasta hoy se han conservado y producen de las mismas leyes...*<sup>25</sup>. Los consejeros buscaban convencer al monarca de los males que pudieran surgir en caso de tomar una decisión inoportuna con la aplicación del mencionado decreto y el caos que se podría ocasionar en caso que los asuntos de gobierno, guerra y finanzas quedaran en distintas manos. Aunque no hubo una respuesta expresa a dicho memorial, el Consejo estaba obligado a dar cumplimiento al decreto mencionado.

#### **e) La Planta de 1715.**

La confusión generada por el nombramiento de tres presidentes, así como la división del poder entre éstos, el procurador y los dos abogados generales y la creación de un tercer secretario sin una misión definida dieron lugar, entre otras muchas razones<sup>26</sup>, al restablecimiento del Consejo de Indias a su estado anterior a las referidas reformas de 1713.

Se suprimieron dos de las tres presidencias, los dos abogados generales y la tercera secretaría. El número de consejeros fue reducido a la mitad,

---

<sup>22</sup> Consulta de 17.11.1713. A.G.I., Indiferente General, 827.

<sup>23</sup> *Representación hecha a S.M. por el Consejo de Indias, exponiendo las reglas y leyes que ha observado para el gobierno de ellas, desvelo y dilatado tiempo que se causó en su formación y perjuicios que se podrían ocasionar de alterarlas. Año de 1714.* B.P.R., Mss. II/844. Una parte de esta representación fue publicada a principios del siglo pasado por J. Manzano Manzano, "Un documento inédito... y más modernamente fue analizado por M<sup>a</sup> P. Pérez Cantó y C. Vázquez Rodríguez de Alba, "El Consejo de Indias... pp. 224 y ss.

<sup>24</sup> *Ibídem*, p. 228.

<sup>25</sup> *Representación hecha a S.M. por el Consejo de Indias...*, B.P.R., Mss. II/844.

<sup>26</sup> Políticamente una de las razones fue la pérdida de poder de Orry y de la princesa de los Ursinos en beneficio de la nueva reina y de su asesor Alberoni.

nombrando solo a dos consejeros de capa y espada y los restantes debían ser letrados. Los consejeros debían ser considerados por orden de antigüedad, teniendo en cuenta la fecha de juramento del cargo. Los restantes consejeros podían guardar los honores y tratamientos de consejeros pero sin el ejercicio de sus atribuciones<sup>27</sup>. Además, las plazas supernumerarias se debían extinguir. Por tanto, la planta del Consejo debía quedar nuevamente según lo establecido en los decretos de 1691 y 1701.

#### **f) La Planta de 1717.**

A través del real decreto de 20 de enero de 1717 el monarca ordenó que el Consejo de Indias se debía componer en adelante de *un gobernador o presidente, seis ministros togados, dos de capa y espada, dos fiscales y dos secretarios*<sup>28</sup>.

En cuanto a los oficiales que habían sido nombrados, el monarca mandaba *que así como vayan vacando las plazas que excedieren el referido número queden suprimidas*. En este decreto también se extinguió la Junta de Azogues cuyas *dependencias y negocios que antes se trataban en ella*, se debían tratar en adelante a través del Consejo de Indias.

Mediante otro real decreto de ese mismo 20 de enero Felipe V señaló a todos sus ministros y oficiales el monto de los sueldos que debían de recibir a fin de asegurar:

*...la independencia, y libertad de sus ejercicios, y que relevados de las solicitudes y necesidad de contraer empeños por anticipaciones emprendidas, y otros modos a que en la incertidumbre de los plazos y tiempos de pagar por la retardación contingente arribo de las flotas, suele (no con pequeños inconvenientes) precisarlos su indigencia, puedan tener toda aquélla aplicación debida a la importancia, y gravedad de los cargos de mi Real confianza que dependen de su cuidado*<sup>29</sup>.

Meses más tarde, a través de varios decretos, el monarca estableció los oficiales que debían formar parte de cada una de las secretarías del Consejo.

---

<sup>27</sup> Real decreto 05.08.1715. A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 90r-97r; 827.

<sup>28</sup> Real decreto 20.01.1717. A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 160r-107; 542 L. 2, ff. 35-37. B.N., Mss. 19251. ff. 7-8. A. Muro Orejón, *Cedulario Americano...*, t. II, pp. 527-528.

<sup>29</sup> A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 109r-110v y B.N., Mss. 19.251. ff. 13-14. También en la Nov. Recop. 4.2.14.

Así por ejemplo tanto el secretario de Nueva España<sup>30</sup>, como el del Perú<sup>31</sup> debían estar asistidos por sus oficiales primero, segundo, tercero, cuarto, el oficial mayor y dos plazas de entretenidos.

Una relación de julio de 1718 fijó el número de miembros subalternos del Consejo, así como los sueldos y emolumentos que debían de percibir cada uno de ellos. Por tanto, los sujetos que debían formar parte del Consejo eran: un secretario de la presidencia; un capellán, un sacristán de la Capilla y el comisario general de San Francisco de las Indias. El cronista mayor de Indias y el cosmógrafo mayor. Un escribano de Cámara y su oficial mayor; tres relatores; un oficial del sello y registro; un abogado y un procurador de pobres; un agente fiscal; ocho porteros, dos alguaciles y un criado. Finalmente, la Contaduría del Consejo estaría compuesta por un contador de cuentas primero, un segundo, un tercero, un cuarto y un oficial mayor.<sup>32</sup>

Por otra parte, Felipe V prohibió a todos los secretarios, a los oficiales de las secretarías y demás dependientes del Consejo tener más ocupaciones que las de su misma plaza y empleo, ni gozar duplicados de sueldo que el correspondiente a tal empleo y en caso que el monarca decidiera ocupar a un ministro en otro *empleo temporal que llaman comisión y que yo lo mandare así, lo haga efectuar pero no ha de gozar de más que un sueldo en que podrá tener elección del mayor, manteniéndose propiedad del que fuere jurado, en cuyo caso también se deberá poner interino en su lugar que sirva y goce el mismo sueldo que el propietario*<sup>33</sup>. De modo que aunque una persona tuviera varias ocupaciones, sólo podría percibir el sueldo de uno de ellos. Posteriormente esta prohibición se extendió a los ministros y cualquier otra persona, pudiendo solo percibir el sueldo que tuviere asignado con el empleo que sirviere, a excepción de formar parte de alguna Junta particular<sup>34</sup>.

En una consulta de septiembre de 1737 el Consejo solicitaba al monarca la provisión de dos nuevas plazas de consejeros togados. La petición se basaba en la necesidad apremiante de despachar a la brevedad los expedientes, por lo que era fundamental aumentar en ocho el número de

---

<sup>30</sup> Lista de los oficiales que se compondría la secretaría del Perú remitida el 01.05.1717. B.N., Mss. 19.251, ff. 21-22. A.G.I., Indiferente General, 542, L. 2, ff. 61-62.

<sup>31</sup> Lista de los oficiales que se compondría la secretaría del Perú remitida el 01.05.1717. B.N., Mss. 19.251, f. 22.

<sup>32</sup> Lista de los empleos subalternos del Consejo y sueldos que han de servir de 17.07.1718. A.G.I., Indiferente General, 829.

<sup>33</sup> Real decreto de 12.02.1717. A.G.I., Indiferente General, 542, L. 2, ff. 53-55. B.N., Mss. 19.251, f. 17-18. Nov. Recop. 4.2.16.

<sup>34</sup> Real decreto de 08.04.1739. Nov. Recop. 4.2.17.

ministros togados en lugar de los seis que se habían fijado en la planta de 1717. Entre las razones que el Consejo esgrimió se encontraba la falta de ministros para resolver los asuntos tanto de justicia, como de gobierno:

*Con reflexión a todo lo referido hace presente a VM el Consejo, que debiendo ser ocho los ministros que deben haber en él según su creación, se han seguido nocivas consecuencias al Real servicio, y al bien de las partes, por no poder muchas veces dividirse la Sala de Justicia, y cuando se ejecuta queda la de Gobierno sin ningún ministro togado para resolver los muchos expedientes en que concurren puntos de derechos; a que se añade que para los casos de remisiones, armas, jueces, no hay necesarios para determinarlos; y no habiendo hasta ahora llegado el caso del aumento de ministros que VM se sirvió ofrecer para suplir los perjuicios que a falta de ellos se ocasiona: hace asimismo presente a VM que de los ocho ministros, que por la ejecución debe haber, sólo existen actualmente seis, a causa de que Dn. Diego de Zúñiga, además de la Cédula de preeminencias, se halla absolutamente imposibilitado de poder concurrir tanto por su crecida edad, como por la debilidad de potencias; lo que obligó a VM a resolver, que la comisión de composición de tierras, que estaba a cargo de este ministro la ejerciese Dn. Antonio de Pineda. Y que el Marqués de San Gil se halla empleado en su embajada, siendo presumible que por el mayor carácter no venga a ejercer la plaza de toga, que por ponérsela se valió del medio de hacer el juramento en manos de Dn. Joseph Patiño. Por cuya razón existen sólo seis de los cuales bien por natural falta de salud o por destinarlos VM a varias Juntas particulares, suelen faltar algunos a la asistencia del Consejo; lo que obliga a no poderse dividir las más veces Sala de Justicia, en la que se hallan pendientes muchas, y graves dependencias, todo lo cual pone el Consejo en la Real inteligencia de VM para que se digne proveer con la más posible brevedad a lo menos dos plazas de ministros, togados para que de esta forma este corriente el número de los ocho de su establecimiento, y puedan tener regular curso las dependencias de la inspección del Consejo<sup>35</sup>.*

La respuesta no se hizo esperar y en enero del siguiente año el monarca accedió a nombrar dos nuevos consejeros con el fin de dar celeridad a los negocios de justicia y suplir en ocasiones las ausencias de algunos otros ministros togados<sup>36</sup>.

Sin embargo, como veremos más adelante, todas estas plantas del Consejo que fueron fijadas de acuerdo a las circunstancias políticas y económicas del momento, no dieron los frutos deseados, toda vez que en la mayoría de las nóminas que hemos encontrado, el número de ministros y

---

<sup>35</sup> Consulta del Consejo de Indias solicitando la provisión de dos plazas de consejeros togados y un fiscal de 16.09.1737. A.G.I., Indiferente General, 824.

<sup>36</sup> Real decreto de 28.01.1738. A.G.I., Indiferente General, 543 L. 3, ff. 275-278.

oficiales rebasaba por mucho al fijado por los numerosos decretos expedidos<sup>37</sup>.

## **2. El presidente y el gobernador del Consejo de Indias.**

### **2.1. Distinción entre las figuras de presidente y gobernador.**

El presidente era la máxima autoridad dentro del Consejo de Indias, a él le competía presidir y mandar en dicho órgano, sin embargo, con el fin de cubrir las posibles ausencias del presidente fue necesario crear la figura del gobernador, quien le sustituía en el cargo y estaba investido con la misma autoridad que al presidente.

La legislación castellana en general, y la indiana en particular, no establecieron la distinción entre una y otra figura. Desdevises del Désert afirmaba que una de las razones de tal distinción pudo ser de orden financiera, toda vez que los presidentes del Consejo de Castilla tenían un salario mayor al del gobernador, por lo que ese mismo criterio debía aplicarse al de Indias<sup>38</sup>. En cambio, para Schäfer la diferencia estribaba en las formas de la palabra escrita y verbal en la que debían referirse a ellos, así mientras que el presidente como propietario efectivo de la presidencia tenía derecho a la denominación de “su excelencia”, el gobernador que era sustituto perpetuo del presidente ausente se intitulaba solamente “su señoría”<sup>39</sup>. Además, según Bernard el nombramiento de gobernador podía revocarse en cualquier momento<sup>40</sup>. Para J. L. Bermejo la diferencia entre presidentes y gobernadores “resulta difícil de trazar”, pero los presidentes mantenían un grado mayor de vinculación con el organismo, hasta el punto, que, en ocasiones, el presidente era considerado como propietario del cargo, cuestión que no ocurría con el gobernador al que se le caracterizó por un mayor grado de provisionalidad<sup>41</sup>.

---

<sup>37</sup> Uno de los apéndices de esta investigación es precisamente las plantas del Consejo de Indias, desde el inicio del reinado de Felipe V en 1700 hasta su muerte acaecida en 1746.

<sup>38</sup> G. Desdevises Du Désert, “Les institutions de l’Espagne au XVIII siècle”, en *Revue Hispanique*, t. 70, n° 157 (1927), p. 70.

<sup>39</sup> Vid. E. Schäfer, *El Consejo Real...*, p. 290.

<sup>40</sup> Vid. M. G. Bernard, *Le Secrétariat d’État...*, p. 77.

<sup>41</sup> J. L. Bermejo Cabrero, *Poder político y administración de justicia en la España de los Austrias*, Madrid, 2005. p. 66.

Sin embargo, frente a estas teorías, Rafael García arguye que todas estas diferencias antes mencionadas no parece que sea posible aplicarlas al Consejo de Indias, ya que los sueldos de uno y otro no eran muy distintos; además no parece que existieran normas que se opusieran a la destitución del presidente en el momento que el rey lo considerara más oportuno, por lo que concluye, que el cargo de presidente y el de gobernador podían considerarse “empleos equiparables a todos los efectos”, tanto por las preeminencias las que tenían derecho, como a los honorarios y emolumentos que llevaban anejos los nombramientos<sup>42</sup>. De hecho, en 1787, Simón Arroyo, secretario de la presidencia del Consejo de Indias envió a Pedro Aparici, oficial mayor de la secretaría de Estado y del Despacho de Indias una instrucción sobre las atribuciones propias del presidente del Consejo de Indias; en dicho documento señalaba la importancia de la autoridad del empleo de presidente del Supremo Consejo de Indias y el de gobernador, en cuyo concepto “no hay diferencias”<sup>43</sup>. Por ende, si en el siglo XVIII los teóricos no se preocuparon por distinguir las dos figuras, es posible, que en la práctica no existiera tal distinción<sup>44</sup>.

Pese a lo anterior, llama la atención que en el proemio de las Ordenanzas de 1636 el monarca aludía a la figura del *gobernador, gran chanciller, y los del nuestro Consejo de las Indias*<sup>45</sup>, sin mencionar la figura del presidente. De hecho, durante el siglo XVII se nombraron diez gobernadores que sustituyeron en sus funciones a los presidentes<sup>46</sup> de turno; hubo un caso, en

---

<sup>42</sup> R. D. García Pérez, *El Consejo de Indias...*, pp. 61-62. Sobre este tema Janine Fayard en su estudio acerca de los miembros del Consejo de Castilla afirmaba que no existía una distinción entre la figura del presidente y la del gobernador del Consejo. Tanto las actas de nombramiento, como los privilegios, los poderes y los sueldos de ambas figuras eran idénticas. La duración del cargo estaba sometida por completo a la voluntad real y hasta podían conservar su rango y sueldo después de haber dejado la presidencia o el gobierno del Consejo. Vid. *Los miembros del Consejo...*, p. 134.

<sup>43</sup> *Instrucción sobre las competencias y prerrogativas correspondientes al empleo de presidente del Consejo de Indias realizadas por Simón Martínez del Arroyo, secretario de la presidencia del mismo Consejo, a instancia de Pedro Aparici, oficial mayor de la Secretaría de Estado y del Despacho Universal de Indias*. Madrid 24.06.1787. Publicado por M. Gómez Gómez, “Instrucciones para el gobierno...”, pp. 287-299.

<sup>44</sup> J. Fayard señala que ninguno de los juristas españoles del siglo XVII y XVIII que estudiaron al Consejo de Castilla como Moriana, Martínez Salazar o Escolano se interesaron por el problema planteado de la doble titulación del responsable del Consejo. Vid. *Los miembros del Consejo...*, pp. 134-35.

<sup>45</sup> Ordenanzas del Consejo Real de las Indias de 1636. Vid. M. Moranchel Pocatterra, “Las Ordenanzas...”, 2001, p. 302.

<sup>46</sup> Algunos ejemplos durante el siglo XVII son Lorenzo de Caldas y Balda, conde de la Puebla del Maestre, nombrado “gobernador” (31.10.1628-26.11.1632); García de Avellaneda y Haro, conde de Castrillo, nombrado “gobernador con calidad de presidente” (27.11.1659-1659); Gaspar de Bracamonte, conde de Peñaranda, nombrado “gobernador

el que primero se concedió el título de gobernador y más tarde se le otorgó el de presidente del Consejo<sup>47</sup>. Sea cual sea la distinción entre una figura y otra, lo cierto es que durante el reinado del primer Borbón se nombraron siete presidentes<sup>48</sup>, de los cuales dos de ellos fueron en principio gobernadores interinos<sup>49</sup> y sólo hubo dos gobernadores<sup>50</sup> a los que no se les concedió el título de presidente.

El proceso de elección de los titulares del Consejo de Indias durante el reinado de Felipe V fue muy complejo debido a distintos factores político-administrativos. Algunas de esas cuestiones pudieron ser, entre otras, la crisis surgida como consecuencia de la guerra de Sucesión, la ocupación de Madrid en dos ocasiones por el archiduque Carlos, la abdicación del Felipe V en favor de su hijo o la división por materias de las secretarías de Estado y del despacho, especialmente tras la expedición de los decretos de Nueva Planta, provocaron en tres ocasiones que el Consejo careciera de titular. Intentando dar claridad a la exposición elaboraremos a partir de un esquema cronológico de los personajes que ocuparon la titularidad del Consejo de Indias entre los años de 1700 a 1746, asumiendo que en algunas ocasiones la información de la que disponemos no siempre es muy precisa.

---

con calidad de presidente en ausencia del conde de Castrillo” (30.10.1653-1659) y presidente (1660-14.07.1671); Licenciado González Caballero “gobernador por ausencia del conde de Peñaranda” (25.04.1660-16.12.1662); Doctor Francisco Ramos del Manzano “gobernador por ausencia del conde de Peñaranda” (17.12.1662-24.11.1664) Príncipe Vicente Gonzaga “gobernador en sustitución del duque de Medinaceli” (09.03.1680-12.11.1685); Fernando Joaquín Fajardo, marqués de los Vélez “gobernador por ausencia del duque de Medinaceli” (12.11.1685-1687); José Solís y Valdenaharro, conde de Montellano “gobernador” (25.10-22.12.1695), Pedro Núñez de Prado, conde de Adanero “gobernador” (23.12.1695-12.03.1699). Vid. Schäfer, E., *El Consejo Real*, t. 1, pp. 334-335.

<sup>47</sup> Nos referimos a Fernando Joaquín Fajardo, marqués de los Vélez, gobernador por ausencia del duque de Medinaceli, (12.11.1685-1687), luego nombrado presidente (18.12.1687-20.09.1693). *Ibíd.*, t. 1, p. 334.

<sup>48</sup> El duque de Medinaceli, el duque de Uceda, Alonso Pérez Araciel, Gonzalo Machado, conde de Frigiliana, el marqués de Valero y el conde de Montijo.

<sup>49</sup> Tanto el duque de Atrisco como el conde de Frigiliana fueron en un tiempo gobernadores interinos del Consejo en ausencia de su presidente, el duque de Uceda. En cambio José de Carvajal y Lancaster fue gobernador interino en ausencia del conde de Montijo y fue Fernando VI quien le otorgó la presidencia del Consejo.

<sup>50</sup> El duque de Atrisco y Andrés de Pez.

## 2.2. Origen y condición social de sus titulares.

Desde su creación fue común que los reyes eligieran personajes importantes como cabeza de este supremo organismo<sup>51</sup>. Normalmente los monarcas preferían rodearse de individuos afectos a su política y a quienes le tenían una confianza absoluta; situación que no varió en el reinado del primer Borbón.

En efecto, durante más de cuarenta y cinco años del reinado de Felipe V, el Consejo de Indias fue presidido por muy distintos personajes de la nobleza y de la política española. Hubo cinco grandes de España que ocuparon la titularidad del Consejo, entre ellos, el duque de Medinaceli, el duque de Uceda, el duque de Atrisco, el conde de Frigiliana y el conde de Montijo. Incluso Luis I nombró al que había sido virrey de la Nueva España, el marqués de Valero, como presidente del Consejo.

Sin embargo, a partir de las reformas de los decretos de 1713 el monarca concedió la presidencia del Consejo de Indias a ministros letrados, como lo fueron Alonso Pérez Araciel<sup>52</sup> y Gonzalo Machado<sup>53</sup>. Hubo un especialista en temas de marina indiana que fue Andrés de Pez y Malzarraga y el último titular del Consejo de Indias durante el período de Felipe V lo ocupó un político y letrado ilustrado, José de Carvajal y Lancaster<sup>54</sup>.

A continuación haremos una breve mención de los miembros del Consejo de Indias que llegaron a ser sus titulares, sea como presidentes o como gobernadores y cuyas decisiones marcaron de una u otra manera las líneas de actuación de dicho órgano colegiado.

---

<sup>51</sup> Para el conocimiento de los presidentes y gobernadores del Consejo de Indias durante los siglos XVI y XVII es fundamental el apéndice primero del texto de E. Schäfer, *El Consejo Real...*, t.1, pp. 333-335.

<sup>52</sup> Graduado de bachiller de cánones en 1673. Al año siguiente obtuvo el grado de licenciado en leyes y en 1682 le concedieron la cátedra de Decretales Mayores de la Pontificia Universidad de Salamanca. Vid. A. de Blas Ladrón de Guevara, *Historia de la muy noble y leal ciudad de Alfaro*, Zaragoza, 1915, pp. 174-177.

<sup>53</sup> Oidor del Consejo de Santa Clara en Nápoles, ministro togado del Consejo de Indias antes de ser nombrado uno de sus presidentes. M. A. Burkholder, *Biographical Dictionary of Councilors of the Indies, 1717-1808*, Connecticut, 1986, p. 73.

<sup>54</sup> Felipe V lo nombró gobernador interino del Consejo el 23.10.1742 para sustituir en sus ausencias al entonces presidente de dicho órgano, Cristóbal Gregorio Portocarrero Guzmán Luna, *Ibidem*, pp. 21-22. También en M. G. Bernard, *Le Secrétariat d'État...*, p. 77.



### 2.3. Mención de sus titulares

En el inicio del reinado de Felipe V, el entonces gran canciller de las Indias, Francisco de Haro Guzmán y Toledo, marqués del Carpio, estaba encargado de la presidencia del Consejo por ausencia de su titular, el duque de Medinaceli<sup>55</sup>. Tras la renuncia de éste<sup>56</sup>, a finales de 1702 Félix Fernández de Córdoba, duque de Uceda<sup>57</sup> fue nombrado presidente del Consejo de Indias.

Sin embargo, en abril de 1703 las urgencias de la guerra motivaron al monarca a nombrar al dicho duque de Uceda embajador en Roma

---

<sup>55</sup> El cargo lo ocupó del 29.11.1701 hasta su renuncia el 09.10.1702, sin embargo cesó en sus funciones en marzo de 1703. *Ibidem*, p. 211.

<sup>56</sup> El 20.02.1703 el duque de Medinaceli envió al monarca una carta donde le pedía el relevo como presidente del Consejo de Indias. *Señor: El celo al real servicio de VM me obliga a representar lo que VM tendrá presente con mis dos documentos de 28 y 31 del pasado acerca del valimiento de los caudales de la flota detenidos en Segovia que habrá VM de hacer a fin de asistir a la causa pública, y aunque la resolución de VM fue a mi celo tan sensible como corresponde a las correspondencias que de ella preveo resultarán y que podrían tocarme a mí, mas gran paste por el Ministerio de presidente del Consejo de Indias con que VM me honró cuya razón me obligó muchas veces a suplicar a VM se sirviese exonerarme de él. Y considerando que estas decisión podría también atraer inconvenientes, lo sacrifiqué todo al servicio de VM pero habiendo llegado a mi noticia por carta de Don Joan de la Rea haber recibido en derechura en contra del Marqués de Ribas el orden de VM para lo cual había de ejecutar en virtud del decreto de VM (al mismo tiempo que sin noticia al Consejo ni a mí de esta resolución) me ordenó VM le convocase para publicarla. El precio señor que yo me pongo a los pies de VM y a ellos el empleo de la presidencia para que VM se sirva de proveerla en quien con más acierto (por la mayor confianza de VM) pueda ejercitarla. No siendo Yo capaz de servirla desautorizando, ni presidir en dicho consejo que lo está y a esto también me obliga el considerar que el Real decreto de VM no se puede en ningún modo acertar, aun con las cosas de menor consecuencia cuando el tribunal por donde corren, y el ministro que con él preside, sean de VM poco atendidos. Con que arriesgándose hace evidente su real servicio, y con el mi propio crédito no he podido excusar hacer a VM la suplica de dejo hecho y que he dilatado consultar, hasta tener las noticias que me obliga a ello, tan autenticada como puedo. No obstante que la había entendido ya por parte que no me dejaba dudar la certeza. Que os guarde la fe católica y real persona de VM, como la cristiandad ha menester. Madrid 20 de febrero de 1703. Don Luis de la Cerda y Aragón. B.N., Mss. 11319/36.*

<sup>57</sup> En un decreto dirigido al marqués de Carpio el 30.04.1703 Felipe V concedió el título de presidente del Consejo de Indias al duque de Uceda *en atención a los méritos y servicios y a la grande satisfacción con que los continua en la embajada de Roma le he hecho merced de la presidencia del Consejo de Indias que ejercía el Duque de Medinaceli quedando vaca la propiedad de la de Órdenes que tenía concedida el duque de Uceda...*, A.G.I., Indiferente General, 553A L. 3. También en F. X. Garma y Durán, *Theatro Universal...*, t. 4, pp. 355-56.

permitiéndole retener el título de presidente de dicho Consejo<sup>58</sup>. Con el fin de cubrir sus ausencias en el despacho de los asuntos indianos, el monarca hubo de nombrar a Rodrigo Manuel Manrique de Lara, conde de Frigiliana<sup>59</sup> gobernador interino del Consejo de Indias.

Pero nuevamente las circunstancias de la guerra determinaron que Felipe V eligiera al conde de Frigiliana como presidente del Consejo de Aragón<sup>60</sup>, por lo que en agosto de 1705 José Sarmiento Valladares, duque de Atrisco<sup>61</sup> ocupó la plaza de gobernador interino del Consejo de Indias, cargo que gozaría hasta su muerte, en septiembre de 1708.

Por su parte, el archiduque Carlos ya instalado en Madrid, dispuso que los consejos se reunieran bajo la presidencia de los ministros más antiguos, siendo el Consejo de Indias uno de los órganos colegiados que siguieron dicha normativa. Sin más complicación, el archiduque se dispuso a nombrar a los ministros que compondrían dicho órgano con la misma graduación que tenían con Felipe V, evitando hacer cambios innecesarios y sólo utilizando la provisión de empleos como medio para captaciones parciales o de recompensas de méritos prestados a la causa austracista<sup>62</sup>. Remitió a través de un conserje del Consejo un oficio al marqués del Carpio, entonces gran canciller de las Indias, para que presidiese el Consejo, pero éste se excusó por motivos personales. Empero, aun sin presidente, el Consejo de Indias comenzó a despachar órdenes hacia América<sup>63</sup>.

En contra de estas decisiones emanadas del Consejo de Indias afecto al archiduque, Felipe V desde el Campo Real de Atienza ordenó a los virreyes,

---

<sup>58</sup> El duque de Uceda era un grande de España y durante los primeros años del reinado de Felipe V fue nombrado virrey de Sicilia, posteriormente se le concedió la presidencia del Consejo de Órdenes y luego la de Indias. En la guerra de Sucesión se le encargó de la embajada de Roma. Sin embargo en 1710 decidió pasar al bando austracista, aduciendo entre sus motivos el que se decidiera alojar en su palacio de Madrid al duque de Orleans, sin contar con su consentimiento o "el no recibir jamás satisfacción aún en lo simplismo verbal cuando todos los otros que son mis enemigos y que obran en formas contrarias por serlo más del rey, reciben tan exageradas gracias". H. Kamen, *La guerra de...*, p. 112.

<sup>59</sup> Vid. G. Bernard, *Le Secrétariat d'État...*, p. 211.

<sup>60</sup> Accedió al gobierno del Consejo de Aragón el 13.01.1698, pero el 29.12.1700 regresó a la presidencia el duque de Montalto, quien fue exonerado de dicho cargo a través de un real decreto de 15.09.1705, lo que dio paso al nombramiento del conde de Frigiliana como presidente a todos los efectos hasta la disolución del mismo en julio de 1707, fecha en la que se integró nuevamente al Consejo de Indias. Vid. J. Arrieta Alberdi, *El Consejo Supremo...*, p. 613.

<sup>61</sup> Título expedido 30.08.1705 en A.G.S., Dir. Gral. del Tesoro, Inv. 13, leg. 8, f. 276.

<sup>62</sup> Vid. M<sup>a</sup> V. León Sanz, *Entre Austrias y Borbones...*, pp. 74-75.

<sup>63</sup> Hasta enviaron una carta a la Casa de Contratación de Sevilla para pedirle que prestase obediencia al archiduque. El real decreto de 17.06.1706 en A.H.N., Estado, leg. 6379, caja 2. Citado por J. A., Escudero López, "Reformas del Consejo de Indias...", pp. 677-781.

gobernadores y capitanes generales de las Indias no dar cumplimiento a las normas remitidas durante la ocupación austriaca en Madrid de la siguiente manera:

*...que cualquiera orden, despacho, cédula, presentación de Arzobispos, Obispo, prebendas eclesiásticas, títulos de presidentes de Audiencias, gobernadores, Corregidores, Alcaldes mayores, y demás ministros, así Eclesiásticos, como seculares de todos los Dominios, que fueren presentados ante vos, que se hayan dado desde el día diez y nueve de Junio pasado de este año, hasta la fecha de este, no le deis cumplimiento en manera alguna, si no fuesen firmados o señalados del Duque de Atrisco como presidente que es de mi Consejo de las Indias, y de los ministros que con él firmaron, refrendados de uno de mis dos Secretarios de Estado y del Despacho Universal, Marqués de Mejorada, o Don Joseph de Grimaldo, sellados con mi sello secreto, guardando vuestro acreditado celo a mi servicio*<sup>64</sup>.

Además, decidió suspender al marqués de Carpio de su cargo de canciller de Indias, quien como hemos visto, tras la solicitud que le hiciera el archiduque de presidir al Consejo de Indias en ausencia del gobernador, éste se excusó por motivos personales. Empero, nada le valió a los ojos de Felipe V, porque tampoco abandonó la capital según las instrucciones dadas por el propio rey<sup>65</sup>. En cambio, el conde de Frigiliana pese a ser acusado partidario de la casa de Austria<sup>66</sup>, fue nombrado en enero 1710 nuevamente gobernador del Consejo de Indias<sup>67</sup>.

Tras la derrota del bando Borbón en la batalla de Zaragoza, el mariscal Staremberg le informó al archiduque que *le había ganado la batalla y la Monarquía porque tenía por decisiva la acción*<sup>68</sup>. En su segunda ocupación a Madrid<sup>69</sup> el archiduque Carlos era informado que los tribunales afectos a Felipe V habían huido de la capital del reino acompañando a la reina a la ciudad de Vitoria, por lo que *no halló en la Corte ministros para formar los*

<sup>64</sup> Real decreto de 27.07.1706. A.G.I., Indiferente General, 542, L. 1, ff. 68-72.

<sup>65</sup> Sobre este tema puede verse a V. León Sanz, “La oposición a los Borbones españoles: los austracistas en el exilio”, *Actas de la IV Reunión Científica de la Asociación Española de Historia Moderna*, vol. 2. Disidencias y exilios en la España Moderna, Alicante, 1996, pp. 469-500 y J. C. Saavedra, “Entre el castigo y el perdón Felipe V y los austracistas de la Corona de Aragón”, en *Espacio, Tiempo y Forma*, nº 13 (2000), pp. 469-503.

<sup>66</sup> A. Morel-Fatio y H. Léonardon, “Mémoire pour servir d’instruction au sieur marquis de Bonnac, lieutenant pour le roi au pays de Foie, allant en Espagne en qualité d’envoie extraordinaire de Sa Majesté. 5 Août 1711”, en *Recueil des Instructions données Aux Ambassadeurs et Ministres de France depuis les traités de Westphalie Jusqu’a la Révolution Française*, París, 1898, t. XII-2, p. 201.

<sup>67</sup> Gaceta de Madrid nº 7 de 18.02.1710. Según detalla Garma, el conde de Frigiliana tomó posesión el 17.02.1710. F. X. Garma y Durán, *Theatro Universal...*, t. 4, p. 356.

<sup>68</sup> V. Bacallar y Sanna, *Comentarios de la guerra...*, t. 2, p. 25.

<sup>69</sup> Los austracistas ocuparon nuevamente Madrid entre el 21.09 y 09.11.1710.

suyos<sup>70</sup>. Esta situación ocasionó que el archiduque nombrara a pocos ministros y *sólo dio despachos en ínterin, por no quitar a los ausentes la esperanza de volver a sus empleos*<sup>71</sup>.

Para evitar un caos en la administración del reino, Juan Antonio Romeo y Anderaz, secretario del Despacho del archiduque insistía en la importancia de integrar los organismos de la Monarquía lo más rápido posible, por lo que aconsejaba realizar los nombramientos de los cargos más importantes con nuevos ministros. Para el caso de la presidencia del Consejo de Indias no consideraba conveniente nombrar al marqués del Carpio *porque habiendo de estar subordinado al Superintendente general de toda la real hacienda, habrá embarazos, y así sería muy del servicio de VM poner por gobernador del Consejo de Indias un sujeto más manejable, y no hallado por mi dictamen ninguno más a propósito para ello que D. Juan de Larrea, que ha sido muchos años secretario del mismo Consejo y después consejero y Camarista; y si VM concedía la presidencia del Consejo de Órdenes al marqués de Carpio, quedaría premiado y gustoso*<sup>72</sup>. En consecuencia, designó a Pedro de Gamarra y Arriaga<sup>73</sup> para que presidiera al Consejo de Indias, sin concederle el título de presidente, aduciendo que el duque de Uceda<sup>74</sup> era quien tenía el cargo en propiedad. Esta situación tan irregular se debió, en opinión del marqués de San Felipe, a que con la retención del título a favor del duque de Uceda, el archiduque pagaba todos los servicios que ocultamente había recibido de éste<sup>75</sup>.

<sup>70</sup> V. Bacallar y Sanna, *Comentarios de la guerra...*, t. 2, p. 37.

<sup>71</sup> *Ibíd.*, t. 2, p. 38.

<sup>72</sup> “Representación hecha por Juan Antonio Romeo fechado el 15 de septiembre de 1710, Guerra de Sucesión. Correspondencia interceptada”, en *Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos*, (enero 1873), año III, p. 26.

<sup>73</sup> Caballero de la Orden de Santiago; oidor de la Chancillería de Valladolid; alcalde de Casa y Corte (19.10.1697); fiscal del Consejo de Indias (17.09.1699); consejero de Indias (25.06.1702 y suspendido en el cargo el 18.09.1706. Miembro del Consejo de Indias del archiduque, cuya presidencia ejerció en octubre de 1710. Vid. J. Solís Fernández, “Notas para el estudio...”, pp. 706-7.

<sup>74</sup> El duque de Uceda permaneció en su puesto de ministro plenipotenciario de Italia, con sede en Génova, bajo el peso de la sospecha de traición y el miedo a ser apresado como sucedió a su amigo Medinaceli. Felipe V lo llamó a su presencia en noviembre de 1710, pero no acudió. Al contrario, salió a recibir al archiduque, recién nombrado emperador Carlos VI, al que rindió homenaje en el puerto de San Pedro de Arenas, cerca de Génova, en 1711. Allí permaneció a las órdenes de su nuevo monarca, hasta que, en 1713 se trasladó a Viena. Vid. M. Martín Velasco, “La documentación histórica y la publicística del siglo XVIII, El IV Duque de Uceda y su correspondencia con don Félix de la Cruz Aedo”, en *Documentación de las Ciencias de la Información*, 2006, vol. 29, p. 144.

<sup>75</sup> Vid. V. Bacallar y Sanna, *Comentarios de la guerra...*, t. 2, pp. 38-39.

Finalizada la guerra, Felipe V inició una serie de reformas tendentes a modificar el sistema polisinodial. Al efecto expidió varios decretos fechados el 10 de noviembre de 1713 cuyo objetivo era el de acrecentar el personal de los consejos<sup>76</sup> siguiendo en apariencia la filosofía de “a más gente en los consejos, más rapidez en el despacho”<sup>77</sup>. En opinión de Bernard, en cambio, estas reformas tenían por objetivo debilitar el poder político del Consejo y el prestigio personal del presidente único<sup>78</sup>. En el caso específico del Consejo de Indias se aumentó a tres el número de presidentes<sup>79</sup>.

Al término del decreto se incluían los nombres y sueldos de quienes debían desempeñar los cargos. Se nombró como presidentes del Consejo de Indias al conde de Frigiliana, a Alonso Pérez de Araciel<sup>80</sup> y a Gonzalo Machado<sup>81</sup>; distinguiéndose cada uno de ellos simplemente por las percepciones económicas asignadas<sup>82</sup>.

Pero estas reformas generaron una gran confusión en la tramitación del despacho ordinario del Consejo, además de un alto costo para la real hacienda, por lo que Felipe V decidió revocarlas a través del decreto de 5 de agosto de 1715<sup>83</sup>. A partir de ese momento, dos de sus ex presidentes fueron nombrados consejeros de capa y espada<sup>84</sup> y solamente el conde de Frigiliana permaneció en la presidencia del Consejo hasta 1717, cuando por su avanzada edad fue exonerado de acudir al Consejo, concediéndole además, el derecho a conservar todos los honores y emolumentos propios del presidente<sup>85</sup>.

Con el fin de cubrir la ausencia del presidente del Consejo, el 20 de enero de 1717 el rey concedió a Andrés de Pez<sup>86</sup> el título de gobernador de dicho

---

<sup>76</sup> Aumentó a cinco presidentes en el Consejo de Castilla y a cuatro en el de Hacienda. Vid. G. Bernard, *Le Secrétariat d'État...*, p. 6.

<sup>77</sup> J. A., Escudero López, “Reformas del Consejo de Indias...”, p. 680.

<sup>78</sup> Vid. G. Bernard, *Le Secrétariat d'État...*, p. 7.

<sup>79</sup> A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 58v-.62v; 827.

<sup>80</sup> Título expedido 17.10.1714 en A.G.S., Dir. Gral. del Tesoro, Inv. 13, leg. 9, f. 379.

<sup>81</sup> Título expedido 17.09.1714 en A.G.S., Dir. Gral. del Tesoro, Inv. 13, leg. 9, f. 631.

<sup>82</sup> El conde de Frigiliana gozaría un sueldo de diez mil escudos de vellón al año, Alonso Pérez de Araciel cinco mil escudos de sueldo al año y Gonzalo Machado cuatro mil escudos de sueldo al año.

<sup>83</sup> A.H.N., Cedulaire de Ayala t. 33 (Códices, L. 706), f. 299, n° 268.

<sup>84</sup> Vid. G. Bernard, *Le Secrétariat d'État...*, pp. 211.

<sup>85</sup> De acuerdo con el real decreto de 20.01.1717 se concedió al conde de Frigiliana *en atención al mucho amor y fidelidad, con que había desempeñado diferentes empleos; le exoneró S. M. de la asistencia y cargo de dicha presidencia, dejándole los honores; y sueldo de 12.000 escudos de vellón*. A.H.N., Cedulaire de Ayala, t. 13 (Códices, L. 693), f. 10, n° 7.

<sup>86</sup> Andrés Matías de Pez Malzarraga fue un geógrafo y cartógrafo español nacido en Cádiz. En 1681 fue nombrado alférez en la Armada de Barlovento donde su valentía contra los

órgano, en agradecimiento a los servicios prestados durante el sitio de Barcelona<sup>87</sup>. Mientras permaneció al frente del Consejo de Indias, Andrés de Pez intentó convencer a Felipe V de la necesidad de reformar la planta del Consejo<sup>88</sup>, pero en esos tiempos tan complejos y debido a la expedición de los decretos de Nueva Planta, el rey se opuso por completo a aumentar el número de oficiales. Aún así, hubo dos temas fundamentales dentro de la administración indiana en los que el gobernador influyó de manera decisiva en el ánimo del monarca. Por un lado logró que Felipe V concediera trasladar la Casa de Contratación al puerto de Cádiz<sup>89</sup> y por el otro, consiguió el restablecimiento de la Cámara de Indias<sup>90</sup>.

Pero la salida forzosa de Alberoni en la primavera de 1720 provocó que algunos de los importantes nombramientos realizados durante su prianza

---

piratas ingleses le valió el ascenso entre otros cargos al de capitán general de Veracruz. Durante la guerra de Sucesión participó activamente en el sitio de de Barcelona. En recompensa Felipe V le nombró en 1715 consejero del Consejo de Guerra, posteriormente le concedió el cargo de gobernador del Consejo de Indias y en 1721 también ocupó la plaza de secretario de Estado y del Despacho de Marina e Indias hasta su muerte en 1723. Vid. M. Burkholder, *Biographical Dictionary of Councilors...*, p. 94. En el siglo XIX Adolfo de Castro escribió una biografía sobre dicho ministro *Vida del Almirante D. Andrés de Pes*, Cádiz, 1879.

<sup>87</sup> El nombramiento de presidente se plasmó en uno de los reales decretos de 20.01.1717 de la siguiente manera: *Siendo precisa la asistencia en el de Indias de su presidente o gobernador, y hallándose el actual entonces conde de Frigiliana incapaz de ejecutarlo por su avanzada edad... en cuyo lugar nombro a Don Andrés de Pez en atención a sus servicios, y en especial al adquirido en siete expediciones de Mar de dilatadas navegaciones, concluyéndolas con mandar mis armas navales sobre el sitio de Barcelona*. A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 106r-107v; 542 L. 2, ff. 35-37. B.N., Mss. 19251. ff. 7-8. A. Muro Orejón, *Cedulario Americano...*, t. II, pp. 527-528.

<sup>88</sup> Acerca del proyecto de Andrés de Pez de proponer algunas reformas estructurales al Consejo de Indias es importante el artículo de J. M<sup>a</sup>, Mariluz Urquijo, "Proyectos de Andrés de Pes sobre la organización del Consejo de Indias", en *Actas del IX Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano*, Madrid, 1991, t. 1, pp. 357-365.

<sup>89</sup> Sobre el traslado de la Casa de la Contratación puede verse entre otros los siguientes textos: A. de Castro, *Vida del Almirante D. Andrés...*, pp. 39-43; G., Bernard, "La Casa de Contratación de Sevilla, luego en Cádiz en el siglo XVIII", en *Anuario de Estudios Americanos*, vol. 12 (1955), pp. 253-286; V. Fernández Cano, "Disputa por la sede de la Casa de la Contratación en 1725", en *Anuario de Estudios Americanos*, n° 26 (1969), pp. 357-383; A. Crespo Solana, *La Casa de Contratación y la Intendencia General de la Marina en Cádiz (1717-1730)*, Cádiz, 1996; C. S. Alonso Díaz, "El traslado de la Casa de la Contratación a Cádiz 1717", en *Revista da Faculdade de Letras*, n° 13 (1996), pp. 354-64; A. J. Kuethe, "La Casa de la Contratación en la época de su traslado a Cádiz", en *La Casa de Contratación y navegación entre España y las Indias*, 2004, pp. 205-218.

<sup>90</sup> A través del real decreto de 06.03.1701 Felipe V ordenó extinguir la Cámara de Indias, para restablecerla el 29.03.1716 y nuevamente suprimirla el 11.09.1717 y finalmente la volvió a restablecer el 22.12.1721. Vid. A. Sánchez Santiago, *Idea elemental de los tribunales de la Corte en su actual estado*, Madrid, t. 2, 1788 p. 109 y en J. M<sup>a</sup>, Mariluz Urquijo, "Proyectos de Andrés de Pes...", pp. 364-365.

fueran “sospechosos a los ojos del monarca”, por lo que en ese año Andrés de Pez fue cesado del cargo de gobernador del Consejo de Indias<sup>91</sup>. Al año siguiente “libre de toda sospecha” volvió a gozar del favor real y no sólo fue confirmado como gobernador del Consejo de Indias, sino además Felipe V le nombró secretario de Estado y del despacho de Marina e Indias<sup>92</sup>. De modo que en una sola persona recayó el despacho de todos los asuntos indianos<sup>93</sup>, conservando ambos cargos hasta su muerte acaecida en marzo de 1723.

Un año más tarde y tras la abdicación de Felipe V, el nuevo rey, Luis I concedió en 1724 el título de presidente del Consejo de Indias<sup>94</sup> al que había sido su mayordomo mayor, Baltasar de Zúñiga, marqués de Valero<sup>95</sup>. Pese a la muerte del joven rey, el marqués continuó presidiendo dicho órgano hasta su fallecimiento en noviembre de 1727.

Los siguientes diez años, esto es, entre 1727 y 1737, el Consejo de Indias se encontró acéfalo y no fue sino hasta mediados de ese 1737 cuando Felipe V confirió el título de presidente de dicho órgano a Cristóbal

---

<sup>91</sup> Vid. A. de Castro, *Vida del Almirante D. Andrés...*, pp. 44-45.

<sup>92</sup> En un escrito de 08.01.1721 dirigido al secretario de Estado y del Despacho de Justicia, José Rodrigo, Felipe V resolvió lo siguiente: *El rey ha resuelto que Dn Andrés de Pez, vuelva a servir el gobierno del Consejo de Indias, como le tenía antes, y con el encargo y manejo de las dependencias de Indias y de Marina, que ha de despachar por sí mismo a los reales pies de su Majestad, a excepción de aquellas pertenecientes a lo eclesiástico de Indias...* A.H.N., Estado leg 3496,2 citado en J. A. Escudero López, *Los secretarios de Estado...*, p. 314., n. 1097.

<sup>93</sup> Fue tal el poder que adquirió Andrés de Pez que en una carta escrita por el embajador Stanhope a su gobierno sobre la conveniencia de un truke de la plaza de Gibraltar por La Florida y la parte española de la isla de Santo Domingo que se refería a él de la siguiente manera: *Los negocios de Indias están enteramente en sus manos. Nada se debe esperar opuesto a su sentir, por más que verdaderamente se encuentre resuelto a favorecer a los súbditos de S. M. en su comercio y a conservar una buena inteligencia entre ambas naciones. Pero en un asunto de tal importancia y en contraposición a sus creencias, no podemos tener ilusión alguna en cuáles son sus designios. Dos o tres veces he hablado con él acerca de este negocio, no como embajador, sino con la familiaridad del amigo y la confianza que domina en nuestras visitas particulares y lo he hallado tan tenazmente inflexible cual el Rey de España en que se devuelva Gibraltar.* Vid. A de Castro, *Vida del Almirante D. Andrés...*, p. 63.

<sup>94</sup> Título expedido 28.01.1724 en A.G.S., Dir. Gral. del Tesoro, Inv. 13, leg. 8, f. 455.

<sup>95</sup> Baltasar de Zúñiga y Sotomayor fue virrey de Navarra, Cerdeña y de Nueva España. Como premio a sus servicios Felipe V le concedió el ducado de Arión con Grandeza de España. Vid. L. Vilar y Pascual, *Diccionario Histórico Genealógico y Heráldico de las Familias Ilustres de la Monarquía Española*, Madrid, 1864, t. 7, p. 483. Coxe lo define como persona de mediana o escasa capacidad, que había sido virrey de México y, al regreso de España, cargado de riquezas adquiridas en el Nuevo Mundo, le fue fácil alcanzar favor palaciego con magníficos regalos que hizo a la familia real, y, sobre todo, por la resolución manifiesta de dejar por heredero al príncipe de Asturias. Vid. W. Coxe, *España bajo el reinado...*, p. 709.

Gregorio Portocarrero, conde de Montijo<sup>96</sup>. Durante su presidencia, el conde fue elegido para encabezar la delegación diplomática española en la dieta de Frankfurt de 1741 para elegir al emperador Carlos VII, por lo que tuvo que abandonar algún tiempo el despacho de los asuntos indianos. A su regreso a España en la primavera de 1744 retomó la presidencia del Consejo, aunque el año siguiente obtuvo el favor de la reina y fue nombrado mayordomo mayor<sup>97</sup>.

Para evitar que las ausencias del conde de Montijo entorpecieran el buen trabajo del Consejo, el monarca decidió nombrar a un gobernador interino<sup>98</sup>, José de Carvajal y Lancaster<sup>99</sup>; de modo que entre los años de 1742 y 1748 en el Consejo de Indias despachaba un gobernador que en caso de comparecencia del presidente, se convertía simplemente en un consejero de capa y espada<sup>100</sup>. A la muerte de Felipe V el conde de Montijo perdió el

---

<sup>96</sup> El secretario de Estado y del Despacho de Estado, José Patiño, fue el encargado de remitir al conde de Montijo su nombramiento como presidente del Consejo de Indias: *Participo a V.S. que S.M. ha resuelto que sirva el Conde de Montijo la presidencia del Consejo de Indias que le tenía conferida, y que se expide esta noche al Consejo y Cámara de Indias, el decreto correspondiente que se ha ejecutado aquí para su cumplimiento. Atendiendo el Rey a los méritos y servicios de VE ejecutados con celo, y acierto particularmente en los importantes encargos de la Embajada extraordinaria de Inglaterra, he venido en conferir a VE la presidencia del Consejo de Indias para cuando haya concluido la Comisión, y se restituya a esta Corte, lo que participó a VE de su real orden para que se halle en la inteligencia de la merced que SM le ha hecho y hace su real intención para su cumplimiento. Dn Joseph de Patiño = Al Conde de Montijo. A.G.I., Indiferente General, 543, L. 2, ff. 29-30. También en la Gaceta de Madrid nº 25 de 18.06.1737.*

<sup>97</sup> Vid. D. Ozanam, *Les diplomates espagnols du XVIIIe siècle*, Madrid, 1998, p. 401.

<sup>98</sup> Gaceta de Madrid nº 47 de 20.11.1742.

<sup>99</sup> José de Carvajal y Lancaster fue un noble español nacido en Cáceres. Oidor de la Real Chancillería de Valladolid, consejero y camarista del Consejo de Indias y secretario del ministro Campillo. Acompañó al conde de Montijo en la representación española en la dieta de Frankfurt. A su regreso el rey le nombró gobernador del Consejo de Indias. En enero de 1746 fue designado presidente de la Junta de Comercio y Moneda. Con el ascenso al trono de Fernando VI fue nombrado secretario de Estado y del Despacho Estado. Para profundizar en la biografía de Carvajal puede verse la extensa obra de J. M. Delgado Barrado: *José de Carvajal y Lancaster: testamento político o idea de un gobierno católico (1745)*, Córdoba, 1999; *El proyecto político de Carvajal: pensamiento y reforma en tiempos de Fernando VI*, Madrid, 2001; “Ensenada versus Carvajal: un tópico a debate”, en *El Catastro de Ensenada: magna averiguación fiscal para alivio de los vasallos y mejor conocimiento de los reinos: 1749-*, Madrid, 2002, pp. 101-112 y “La transmisión de las obras de Carvajal: del Testamento Político a Mis pensamientos (1745- 1753)”, en *ministros de Fernando VI*, Córdoba, 2002, pp. 45-64.

<sup>100</sup> A través del real decreto de 09.11.1742 Felipe V decidió que Carvajal fuera gobernador condicionado a que podría ejercer su cargo *siempre que por ausencia, enfermedad, u otro motivo, no asista el conde del Montijo declarando plaza de capa y espada con voto en todos los negocios la de dicho ministro; y que cuando concurra el presidente quede*



favor del nuevo rey, quedando únicamente Carvajal como gobernador del Consejo hasta su muerte acaecida en 1754.

## **2.4. Elección, juramento y toma de posesión.**

### **a) Elección del presidente o gobernador.**

En los primeros años del reinado de Felipe V la Cámara de Castilla<sup>101</sup> fue el órgano encargado de elaborar las consultas en las que proponía al monarca una lista de posibles candidatos al cargo de presidente del Consejo de Indias. Sin embargo, hubo ocasiones en donde sin mediar consulta, el monarca a través de un real decreto designaba directamente a la persona que presidiría su Consejo. Las razones más frecuentes por las que el monarca prefería esta forma de elección de presidentes o de gobernadores era recompensar a su titular por los servicios prestados a la Corona<sup>102</sup>, como fue el caso del nombramiento del duque de Uceda:

*En atención a los méritos y servicios del Duque de Uceda y a la grande satisfacción con que los continua en la Embajada de Roma, le he hecho Merced de la presidencia del Consejo de Indias que ejercía el Duque de Medinaceli, quedando vaca la propiedad de las de órdenes que tenia concedido al Duque de Uceda. Tendrase entendido en el Consejo de Indias y se le dará el Despacho que se acostumbra para su cumplimiento. Señalado de S.M.*<sup>103</sup>.

Al final de la Guerra de Sucesión y con la expedición, entre 1707 y 1713 de los decretos de Nueva Planta, la Cámara de Castilla fue suprimida<sup>104</sup>. Desde este momento sus competencias fueron asumidas por el Consejo de Castilla. Así, el decreto de supresión disponía que *las materias que en él se trataban y se han tratado hasta aquí se repartan entre las cinco salas del Consejo*. Aunque en apariencia estas reformas ampliaban las atribuciones del Consejo, en realidad supuso “un ataque frontal contra la autonomía del Consejo, y una tentativa para reducirlo al papel de instrumento pasivo de los

---

*inmediato a él, con preferencias a todos los demás, expidiéndole la Cámara el despacho correspondiente.* A.H.N., Cedulaire de Ayala, t. 27 (Códices, L. 710), f. 213, nº 218.

<sup>101</sup> *Que en la Cámara se vean de aquí adelante todo... lo que toca a la provisión y nombramiento de personas para las plazas de mis consejos...* Nov. Recop. 4.4.1.

<sup>102</sup> Vid. J. Fayard, *Los miembros del Consejo...*, p. 86.

<sup>103</sup> A.G.I., Indiferente General, 553A L. 3.

<sup>104</sup> decreto de Nueva Planta para los consejos de Castilla y de Hacienda y Sala de Alcaldes, con la supresión de la Cámara de Castilla. 10.11.1713. También puede verse S. de Dios, *Fuentes para el estudio del Consejo...*, pp. 128-132.

deseos del monarca”<sup>105</sup>. Los graves inconvenientes surgidos de la aplicación práctica de estos decretos provocaron la vuelta al sistema anterior, por lo que la Cámara de Castilla fue nuevamente restablecida en sus antiguas prerrogativas<sup>106</sup>.

Para entonces el nuevo centro de gravedad del poder se desplazaba hacia las recién reformadas secretarías de Estado y del despacho, las cuales con el tiempo llegaron a intervenir de manera directa en la elección de los ministros del Consejo de Indias y de sus titulares. Así, a través del real decreto de 20 de enero de 1717 la secretaría de Estado y del despacho de Gracia y Justicia fue la encargada de tramitar cerca del rey los asuntos que consultara la Cámara, actuando como un filtro, con plena confianza real<sup>107</sup>. En dicha secretaría *deberá correr con las resoluciones que yo tomare sobre todas consultas de los consejos, órdenes o decretos que en materia particulares o generales les expidiere... decreto de elecciones y nominaciones de ministros, informes de sus calidades y todos los demás empleos políticos y mixtos de Policía y de Justicia; y por lo que toca a Indias, con la formación de todas las Cédulas y Despachos que se hubieren de dirigir a ellas en lo gubernativo y político*<sup>108</sup>. Por ende, a partir de la expedición de dicho decreto las consultas por parte de la Cámara de Castilla para la elección de presidentes del Consejo de Indias fueron enviadas al monarca a través de la Secretaría de Justicia, Gobierno Político y Hacienda.

Sin embargo, es posible que este panorama cambiara desde 1720, momento en el cual Felipe V decidió centralizar los asuntos indianos en Manuel Fernández Durán, titular desde esa fecha de la Secretaría de Estado y del Despacho de Guerra, Marina e Indias<sup>109</sup>. Un año más tarde la situación nuevamente varió al crearse mediante decreto de enero de 1721 dos nuevas Secretarías: una de Guerra y la otra de Marina e Indias. Y decimos posible, porque los decretos de creación de las secretarías de Estado y del despacho hasta antes de 1721 nada señalaban respecto del nombramiento del presidente o gobernador del Consejo de Indias. En realidad fue hasta la expedición del real decreto de 26 de agosto de 1754, cuando Fernando VI especificó las materias que debían de conocer cada una de sus secretarías de

<sup>105</sup> J. P. Dedieu, “La Nueva Planta en su contexto...”, p. 119.

<sup>106</sup> Real decreto 09.06.1715. *Es mi voluntad que vuelva a su primera existencia, manejo y dependencia la Cámara de Castilla, como estaba antes de la nueva planta...*, Nov. Recop. 4.4.4.

<sup>107</sup> Vid. M. A. González Fuertes, *La organización institucional de la Cámara...*, p. 54.

<sup>108</sup> Real decreto de 02.04.1717 que dividió el despacho universal en tres Secretarías: Estado y Negocios Extranjeros, Guerra y Marina y por último la de Justicia y Gobierno Político tanto de España como de los demás ramos de Indias y Hacienda. Nov. Recop. 3.6.5.

<sup>109</sup> Vid. M. Gómez Gómez, *Forma y expedición del...*, pp. 38-39.

Estado. Así, la Secretaría del Despacho de Gracia y Justicia debía conocer todo lo perteneciente *al gobierno de tribunales, con la nominación de personas para presidentes, gobernadores y ministros de ellos... exceptuándose la nominación de los presidentes o gobernadores, ministros togados, de capa y espada, y Secretarios de los consejos de Indias y Hacienda, y la de ministros del de Guerra, todos los cuales se han de despachar por sus respectivas secretarías*<sup>110</sup>. A contrario sensu a la Secretaría de Marina e Indias le correspondía entre otras materias *proponer las personas que le parezcan más a propósito para ministros togados, de capa y espada, Secretarios y Contador General del Consejo de Indias, y para presidente y ministros del Tribunal de la Casa de la Contratación... Cuanto a los demás empleos de justicia, y otros puramente políticos, como son plazas togadas corregimientos y alcaldías mayores, los proveerá a consulta de la Cámara de Indias...*<sup>111</sup>.

De la lectura de ambas disposiciones es posible inferir que a partir de 1754 existió la certeza que las propuestas para nombrar presidente o gobernador del Consejo de Indias correspondía directamente a la Secretaría de Estado y del Despacho de Marina e Indias. En cambio como el real decreto de 1721 no especificaba de manera taxativa las competencias de la recién creada Secretaría de Estado y del Despacho de Marina e Indias, por lo que el órgano competente para proponer al monarca el nombre de los candidatos a ocupar la titularidad del Consejo correspondió al secretario que despachaba los asuntos indianos, como fue el caso de José Patiño respecto del nombramiento del conde de Montijo<sup>112</sup>.

## **b) Juramento y toma de posesión.**

El juramento y la toma de posesión que debía llevar a cabo el presidente, o en su caso el gobernador antes de su entrada al Consejo de Indias tuvo una acusada carga simbólica<sup>113</sup>. Schäfer señalaba la importancia que daban “las autoridades españolas al ceremonial exterior y a las fórmulas burocráticas con el fin de ocultar la ruina de España, ya que en cuanto era posible, en las altas autoridades cundió cada vez más la costumbres de sustituir la vanidad

---

<sup>110</sup> Real decreto de 26.08.1754. Nov. Recop. 3.6.8.

<sup>111</sup> Real decreto de 26.08.1754. Nov. Recop. 3.6.9.

<sup>112</sup> A.G.I., Indiferente General, 543 L. 2, ff. 29-30.

<sup>113</sup> Vid. F. Barrios, *El Consejo de Estado...*, p. 227.

interior y la esterilidad de la labor administrativa por una pompa solemne, ceremonias escrupulosas y burocratismo mezquino”<sup>114</sup>.

Comparando la ceremonia del juramento que los consejeros del Consejo de Guerra debían realizar, respecto del realizado por el presidente del Consejo de Indias<sup>115</sup> es posible aseverar que el mismo era muy parecido, ya que, ante todo se trataba de un acto administrativo a partir del cual comenzaba a computarse la antigüedad en el cargo<sup>116</sup>.

La variación se encontraba en el contenido del juramento que se debía recitar ante los miembros del Consejo. En el caso del presidente del Consejo de Indias la fórmula que debía pronunciar era la siguiente:

*- Que VE o VSI Jura a Dios, y a esta † ( o a la del hábito que tuviere) y a las palabras de los Santos cuatro Evangelios, que bien y fielmente usará y ejercerá el cargo de presidente o gobernador de este Real Consejo en que SM ha proveído a VE o VSI y guardará las Leyes y Ordenanzas del Reino y las que estén hechas y se hicieren para el buen gobierno de las Indias y el secreto del Consejo, y de los negocios y cosas que se ofrecieren en que convenga dar aviso a SM lo hará VE o VSI por escrito o por palabra, y en las que hubiere voto le dará libremente, y sin respeto guardando, y haciendo guardar justicia, así en este Consejo, como en todas las Audiencias, y parte de las Indias. Procurando VE o VSI que se propongan a SM para los cargos, y plazas que se hubieren de proveer personas de quien se tenga entera satisfacción, que la harán y principalmente en lo que toca al gobierno espiritual y procurando con todo cuidado y continua provisión que se dilate y extienda por aquellas partes la predicación del Evangelio, y que en lo descubierto, y que se descubriere tengan los naturales suficiente doctrina para que puedan salvarse, y SM cumpla con su obligación, procurando VE o VSI en todo lo que se pudiere su conservación, y que sean bien tratados, y relevados de trabajos y molestias, para que vivan en libertad, y Policía como hombres de razón, y en todo VE o VSI mirará, tratará y procurará aquello que entendiere que más conviene al servicio de Dios y de SM y descargo de su conciencia, aumento de su hacienda, bien y acrecentamiento de los estados de las Indias, y de los naturales de ellas, procediendo en todo como bueno, y fiel ministro.*

*-Si, Juro.*

*-Si así lo hiciere VE o VSI Dios le ayude, y si no se lo demande. Diga Amén.*

*-Amen<sup>117</sup>.*

Del contenido del juramento es fácil contemplar la unidad jerárquica y de obediencia de los vasallos en torno a la persona real, pues “el símbolo era la

<sup>114</sup> Vid. E. Schäfer, *El Consejo Real...*, t. 1, p. 288.

<sup>115</sup> El ceremonial completo es transcrito por R. D. García Pérez, *El Consejo de Indias...*, pp. 64-65.

<sup>116</sup> Vid. J. C. Domínguez Nafria, *El Real y Supremo Consejo...*, p. 348.

<sup>117</sup> B.P.R., Mss. II/2893.

imagen magnificada de la monarquía, a ella remitía y a su unidad se aplicaba<sup>118</sup>. Pero también quedaba claro algunas de las más importantes obligaciones del titular del Consejo entre las que destacaban velar por los indios y procurar su buen tratamiento para que vivan como hombres de razón; la obligación del secreto que se debe guardar de los asuntos despachados en el mismo; el derecho votar con libertad y respeto haciendo guardar la justicia; y por su puesto dar aviso al rey de los negocio y cosas que convengan a los intereses reales.

Como se ha mencionado, la fecha del juramento determinaba de ordinario la antigüedad del individuo en el Consejo como miembro activo. Sin embargo, el tiempo que transcurría entre el nombramiento y el juramento se encontraba en función de la ausencia o presencia en la Corte de la persona designada. Por ello, en ocasiones ocurría que el monarca por especial privilegio reconocía la antigüedad desde el nombramiento de una persona ausente como si hubiese jurado<sup>119</sup>. Un caso lo fue el nombramiento del conde de Montijo como presidente del Consejo de Indias, mientras se encontraba en Inglaterra:

*Participo a VS que SM ha resuelto que sirva el Conde de Montijo la presidencia del Consejo de Indias que le tenía conferida, y que se expide esta noche al Consejo y Cámara de Indias el decreto correspondiente que se ha ejecutado aquí para su cumplimiento. Atendiendo el Rey a los méritos y servicios de VE ejecutados con celo, y acierto particularmente en los importantes encargos de la Embajada extraordinaria de Inglaterra, he venido en conferir a VE la presidencia del Consejo de Indias para cuando haya concluido la Comisión, y se restituya a esta Corte, lo que participó a VE de su real orden para que se halle en la inteligencia de la merced que SM le ha hecho y hace su real intención para su cumplimiento...*<sup>120</sup>.

## 2.5. Salarios y emolumentos que percibían.

El presidente y el gobernador de Indias fueron los miembros del Consejo de India que más gratificaciones recibían por su trabajo. Schäfer refiere que el último gobernador de los Austrias, Pedro Núñez de Prado recibió 500.000 maravedís por año.

---

<sup>118</sup> Vid. S. Cárdenas Gutiérrez, “De las juras reales al juramentocConstitucional: Tradición e Innovación en el ceremonial novohispano, 1812-1820”, en *Cuadernos del Instituto de Investigaciones Jurídicas. La supervivencia del Derecho español en Hispanoamérica durante la época independiente*, México, 1997, p. 67.

<sup>119</sup> Vid. F. Barrios, *El Consejo de Estado...*, p. 226.

<sup>120</sup> A.G.I., Indiferente General, 543 L. 2, ff. 29-30.

En cambio, para el período de Felipe V, Bernard analizó los salarios que les correspondían a los ministros del Consejo. Explica que mientras que el duque de Medinaceli no obtuvo sueldo alguno al no haber ejercido nunca la presidencia. El duque de Uceda, en cambio, obtuvo 216.328 maravedís anuales como salario, más 185.232 maravedís para propinas. Durante la guerra de Sucesión, el duque de Atrisco recibió el mismo tratamiento que él y el conde de Frigiliana obtuvo 120.000 reales, suma con la cual se jubiló el 20 de enero de 1717<sup>121</sup>.

Las reformas a la planta del Consejo en 1713 aumentó a tres el número de presidentes, cuya distinción se encontraba precisamente en el sueldo a percibir, en este sentido el conde de Frigiliana recibiría 10.000 escudos de vellón, Alonso Pérez de Araciel 5.000 y Gonzalo Machado 4.000<sup>122</sup>, pero esta situación fue modificada en agosto de 1715, fecha en la cual se suprimió a los dos últimos presidentes<sup>123</sup>.

Por su parte, Andrés de Pez percibía sólo 80.000 reales de vellón<sup>124</sup>. Cuando Baltasar de Zúñiga obtuvo la presidencia del Consejo su salario era también de 80.000 reales, pero no conforme con ello envió un memorial al monarca solicitando un aumento; en marzo de 1724 Felipe V accedió y le concedió 90.179 reales anuales<sup>125</sup>. Su sucesor, Cristóbal Gregorio Portocarrero, también obtuvo el mismo salario, pero Carvajal y Lancaster, que fue nombrado gobernador, solo obtuvo los 80.000 reales, salario que disfrutó hasta su muerte en 1754<sup>126</sup>.

Además del salario, los presidentes y demás miembros del Consejo percibían otros emolumentos de carácter extraordinario como lo eran las propinas<sup>127</sup>, las luminarias ordinarias y extraordinarias<sup>128</sup> y casas de aposento<sup>129</sup>, cuyas cantidades llegaron a ser bastante altas<sup>130</sup>. Sin embargo,

<sup>121</sup> G. Bernard, *Le Secrétariat d'État...*, p. 77.

<sup>122</sup> A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 58v-.62v; 827.

<sup>123</sup> A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 90r-97r; 827.

<sup>124</sup> Real decreto de 20.01.1717 en que se señalaban los sueldos que habían de percibir en la Tesorería General los señores presidente y ministros del Consejo. A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 109r-110v, 542, L. 2. ff. 45-49. B.N., Mss. 19251, ff. 13-14.

<sup>125</sup> Vid. G. Bernard, *Le Secrétariat d'État...*, p. 78.

<sup>126</sup> A.G.I., Indiferente General, 447 L. 46, ff. 92-92v.

<sup>127</sup> Se trata de cantidades que se da a una persona por algún trabajo especial. *Diccionario de Autoridades 1737*.

<sup>128</sup> Son los gajes que se dan a los ministros por el gasto que se les considera deben hacer las noches que haya luminarias públicas. *Diccionario de Autoridades 1734*.

<sup>129</sup> Era una indemnización que se pagaba por residir en la Corte. Vid. J. C. Domínguez Nafria, *El Real y Supremo...*, p. 359.

con la maltrecha hacienda real y debido a los gastos que ocasionaba la guerra, muchas de estos emolumentos se fueron reduciendo poco a poco. Las reformas de 1691 iniciadas por Carlos II fueron las primeras normas tendentes a disminuir dichos gajes<sup>131</sup>. Por su parte, Felipe V en las reformas de 1713 suprimió todos los emolumentos que se otorgaban hasta entonces a los miembros del Consejo:

*...unos y otros, según su carácter, y manejo, que el que se ha considerado suficiente para su mantenimiento y decencia teniendo entendido, no ha de percibir ningún otro emolumento por razón de Casa de aposento, ayuda de costa, propinas, y otras obviaciones, respecto de ir consideradas todas en la porción de sueldo, que señalo a cada uno, por cuya razón prohíbo a todos exijan, retengan, tomen y se apropien otros ningunos útiles, ni intereses por ningún título, ni causa que sea ni más derechos de sentencias que los que van seguirá el mismo reglamento que el del Consejo de Castilla señalados en el Reglamento que para ello, y otros puntos se ha expedido al Consejo de Castilla<sup>132</sup>.*

Sin embargo, la reforma de 1715 restableció todos los derechos de los miembros del Consejo de Indias al estado que gozaban en 1691:

*En esta suposición es mi Real ánimo restituir a su primer instituto el empleo de presidente o gobernador de ese Consejo con todas las preeminencias, honores y prerrogativas que antes tenía, y no fueren contrarias a las leyes, ordenanzas reales y considerando cuan conveniente es minorar el número de ministros de todas clases, restituyéndole al que establecieron con acordada providencia las Leyes y los citados decretos de los años de mil seiscientos noventa y uno, y mil setecientos y uno<sup>133</sup>.*

Pero la carencia de dinero para hacer frente a todos los gastos que generaban las continuas guerras provocaron que nuevamente en 1739 Felipe V ordenara a través de un decreto la reducción de los gastos, prohibiendo que los consejeros cobrasen los gajes propios de los que acudían a Juntas particulares<sup>134</sup>.

---

<sup>130</sup> En el Archivo de Indias hallamos dos legajos que contienen relaciones de propinas, aguinaldos y luminarias ordinarias del Consejo de Indias entre los años de 1684 a 1710. A.G.I., Contaduría, 211.

<sup>131</sup> Todos los ministros deberán gozar de *salario, casa de aposento, y las tres propinas, y luminarias ordinarias, y cera de candelaria que les pertenece por el Consejo, permitiendo que las luminarias extraordinarias se paguen en especie de a ocho, y excluyendo los aguinaldos, y demás obviaciones de Corpus, dietas votivas y extraordinarias, tablados de toros, y todo lo que percibían por la Junta de Guerra por ser esta duplicación contraria a mis órdenes y gravosas a la Real Hacienda*. Real decreto 17.07.1691. A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 47r-52v; 827.

<sup>132</sup> Real decreto 10.11.1713. A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 58v-62v; 827.

<sup>133</sup> Real decreto 05.08.1715. A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 90r-97r; 827.

<sup>134</sup> *He resuelto que ministro alguno, ni otra persona, de cualquier estado, grado, y calidad que sea, pueda obtener goces duplicados, bien con el empleo, que sirve o sirviere; a*

## 2.6. Prerrogativas y atribuciones.

Analizar las competencias del presidente o gobernador del Consejo de Indias no es tarea fácil, sobre todo porque nos encontramos que en el reinado de Felipe V dicha institución fue objeto de numerosas reformas, no sólo debido al cambio de mentalidad con la llegada de una nueva monarquía al poder, sino también por razones administrativas que buscaban entre otras razones, contrarrestar el poder del Consejo y quizá también, con la intención de dar celeridad a los asuntos indiano.

A continuación daremos un marco general de las atribuciones que gozaba el presidente o gobernador del Consejo durante el reinado del primer Borbón. Empero, es necesario señalar que dichas atribuciones no fueron las mismas a lo largo de cuarenta y seis años, por lo que en principio detallaremos aquellos privilegios establecidos en las Ordenanzas de 1636, y posteriormente, en la medida de lo posible, aludiremos a la legislación que al efecto se expidió durante dicho reinado. Para la elaboración de este epígrafe nos ha sido de gran utilidad dos documentos relativos a las “*competencias, prerrogativas y regalías que correspondían al cargo de presidente o gobernador del Consejo de Indias*” elaboradas por el secretario de la presidencia, Simón Martínez Arroyo<sup>135</sup>.

En opinión de Margarita Gómez dos fueron las atribuciones más significativas del presidente: por una parte era la cabeza rectora del Consejo, es decir, coordinaba su acción, y, por la otra, era la voz y mano del monarca en cuanto funcionaba como un instrumento del rey, en y ante el Consejo<sup>136</sup>. Para explicar ambas atribuciones hemos creído conveniente analizar

---

*excepción de lo señalado por el establecimiento a algunas Juntas particulares, a que no ha de optar esta conveniencia, como ni aquellos, a quienes se haya hecho algún aumento al sueldo de pie fijo, por no estar competentemente dotado; y que en concurrencia con dos sueldos sea acto libre la elección del mayor con las demás restricciones, que previene el decreto general, que sobre esta asunto se expidió en ella ó de 1717; que igualmente se suspenda por sólo el término de dos años el pagamento de toda pensión, y sobresueldo concedido hasta hoy, entendiéndose por regla general su excepción. Aranjuez 08.04.1739. Nov. Recop. 4.2.17.*

<sup>135</sup> Se trata de la *Instrucción sobre las competencias y prerrogativas correspondientes al empleo de presidente del Consejo de Indias...* y Segunda instrucción formada por Simón Martínez del Arrollo, secretario de la presidencia, a instancias de Francisco Moñino, gobernador del Consejo de Indias, para conocimiento de las antiguas regalías del empleo. Madrid, 20.09.1787. Ambos documentos fueron publicados por M. Gómez Gómez, “Instrucciones para el gobierno del presidente... Sobre dicho tema y de esta misma autora ha sido de gran utilidad su artículo “La Secretaría de la presidencia...”, pp. 493-514.

<sup>136</sup> M. Gómez Gómez, “Instrucciones para el gobierno del presidente...”, p. 288.



individualmente las preeminencias<sup>137</sup>, prerrogativas y competencias basándonos como ya en la normativa vigente en el reinado de Felipe V.

Como cabeza del cuerpo colegiado el presidente llevó a cabo diferentes tareas de coordinación y dirección del trabajo de los ministros y oficiales, así como de la institución en su conjunto<sup>138</sup>. Entre las prerrogativas y preeminencias que conllevaban dicho empleo, se encontraban repartir por Salas los pleitos y negocios que hubiere y como le pareciere más conveniente<sup>139</sup>, distribuyendo aquellos asuntos que no habían de acordarse en pleno o que exigían un estudio particular de uno o varios consejeros<sup>140</sup>. Debía actuar con la diligencia necesaria para el despacho de los expedientes y negocios de los ausentes, especialmente de los de provincias, concejos, universidades y otras comunidades<sup>141</sup>.

También señalaba a los consejeros que debían formar la Sala de Gobierno y la Sala de Justicia<sup>142</sup> a fin de organizar y distribuir en ellas los pleitos y negocios de cada día<sup>143</sup>. Esta prerrogativa fue modificada a partir de la reforma al Consejo de 1713 cuando fueron creadas tres plazas de presidentes, entonces el propio decreto señalaba el nombre de los ministros que debían acudir a cada una de las Salas<sup>144</sup>; dos años más tarde, la derogación de dicho decreto retornó al presidente al estatus establecido en las Ordenanzas de 1636.

Así mismo, podía asistir a cualquiera de las Salas del Consejo, por lo que le estaba permitido votar en asuntos de gobierno, guerra, gracia y merced. Si era letrado también podía usar esta preeminencia en asuntos relativos a visitas, residencias y cualquier clase de pleitos que no fueren de justicia

---

<sup>137</sup> Para el caso de la figura del presidente o gobernador del Consejo de Indias Simón Martínez utilizó la palabra “regalía” en la *Segunda instrucción... para conocimiento de las antiguas regalías*, Ibídem, p. 296. Este mismo término utilizó Martínez de Salazar cuando se refería que por decreto de 10.02.1730 comunicado al Consejo, *ser privativa regalía de los señores gobernadores de él, las elecciones y nombramientos de administradores de los estados y mayorazgos, que se litigan en el Consejo, y se mandan secuestrar, y el de los demás empleos concernientes a los mismos mayorazgos, como son alcaldes mayores, jueces de residencias....* Vid. A: Martínez de Salazar, *Colección de memoria...*, p. 30.

<sup>138</sup> . Gómez Gómez, “Instrucciones para el gobierno del presidente...”, p. 288.

<sup>139</sup> Ordenanza 11 de 1636. Recop. Indias 2.2.11.

<sup>140</sup> Ordenanza 14 de 1636. Recop. Indias 2.2.14.

<sup>141</sup> Ordenanza 71 de 1636. Recop. Indias 2.3.3.

<sup>142</sup> Esta preeminencia fue modificada por real decreto de 15.03.1752 en el que se disponía el nombramiento de seis ministros togados que debían servir diariamente en la Sala de Justicia, cuando no tuvieran pleitos que resolver, entonces entrarían en la Sala de Gobierno. Vid. R. García Pérez, *El Consejo de Indias...*, p. 69.

<sup>143</sup> Ordenanza 69 de 1636. Recop. Indias 2.3.1.

<sup>144</sup> Real decreto 10.11.1713. A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 58v.-62v; 827.

contenciosa entre partes, pero no siendo letrado solamente le estaba permitido votar en negocios de gobierno, gracia y merced<sup>145</sup>. El valor de su voto era el mismo que el resto de los consejeros, aunque en ocasiones el rey podía tenerlo más en cuenta<sup>146</sup>. El presidente declaraba, en caso de duda o diferencia de opinión entre los miembros del Consejo de Indias, sobre la naturaleza de los negocios que allí se trataban, el presidente era el encargado de determinar si el negocio se debía de ver en una u otra sala<sup>147</sup>. Empero, durante el reinado de Felipe V algunas materias quedaron fuera del conocimiento por parte del Consejo en favor de la vía reservada, como lo fueron los despachos de guerra o de algunos de gobierno<sup>148</sup>; pero en el caso de los asuntos de gracia y merced el presidente continuó votando en el Consejo y en la Cámara de Indias.

Al presidente le correspondía ordenar y proveer cualquier asunto relacionado con el gobierno espiritual y temporal de las Indias, conservación y buen tratamiento de los naturales y sobre la real hacienda, debiendo hacer ejecutar y cumplir las leyes<sup>149</sup>. Sin embargo, el contenido de esta atribución también varió a lo largo del reinado de Felipe V según disminuían las competencias del propio Consejo.

Todas las resoluciones reales remitidas al Consejo mediante decretos a las consultas del Consejo y Cámara o por reales Órdenes iban dirigidas a nombre del presidente o gobernador. El presidente al recibirlas las debía de enviar a la oficina correspondiente para su publicación. Tenía a su cargo la inspección de toda clase de negocios dirigidos a él desde las Indias o a través de la vía reservada<sup>150</sup>. Era el primero en suscribir los documentos expedidos por el Consejo e iniciar, igualmente la línea de suscripciones con las que se validaban las consultas. Dichas consultas eran dirigidas al despacho del Rey por el secretario aunque eran devueltas al Consejo por mano de su presidente<sup>151</sup>, en cambio, las consultas acordadas en justicia eran elevadas al monarca por el presidente y no por el secretario<sup>152</sup>. Podía elevar

<sup>145</sup> Ordenanza 73 de 1636. Recop. Indias 2.3.5.

<sup>146</sup> R. García Pérez, *El Consejo de Indias...*, pp. 71-72.

<sup>147</sup> Vid. M. Gómez Gómez, "Instrucciones para el gobierno...", p. 289. La ordenanza 74 de 1636 aludía a la determinación de los negocios de gobierno o de justicia. Recop. Indias 2.3.6.

<sup>148</sup> Tema que trataremos en el capítulo siguiente. Baste con advertir que la mayor parte de asuntos de gobierno temporal y de la real hacienda quedaron fuera del conocimiento del Consejo de Indias.

<sup>149</sup> Ordenanza 70 de 1636. Recop. Indias 2.3.2.

<sup>150</sup> Vid. M. Gómez Gómez, "Instrucciones para el gobierno del presidente...", p. 294.

<sup>151</sup> Ordenanza 126 de 1636. Recop. Indias 2.6.13.

<sup>152</sup> Ordenanza 129 de 1636. Recop. Indias 2.6.16.

al monarca “consultas propias en individuales, que eran remitidas por un circuito a las acordadas por el Consejo o la petición de informes individuales y particulares aún en contra de la actuación del propio Consejo como colectividad”<sup>153</sup>.

Controlaba el archivo secreto<sup>154</sup> donde se conservaban no sólo los documentos emitidos y recibidos para el gobierno y la administración de las Indias, sino también todas aquellas obras manuscritas e impresas que estuvieran escritas o se escribieran en adelante sobre materias de Indias con el fin de hallar prontamente cualquier información que sobre tan importantes territorios fuera solicitada<sup>155</sup>.

Igualmente, actuaba como la cabeza visible del tribunal en cuantas ceremonias y actos protocolarios se celebrasen y, por lo mismo, recibía y encauzaba todos los escritos relativos a las cortesías propias de la Corte, tales como felicitaciones o pésames a la familia real<sup>156</sup>.

Respecto de la segunda atribución más importante, el presidente o el gobernador ejercían la voz y la mano de la cabeza suprema, el rey, su principal instrumento de control y también su representación más eficaz. Entre ellas estaba la posibilidad de presidir a nombre del rey tanto el Consejo, como la Cámara de Indias<sup>157</sup>, de manera que representaba al monarca en todos los asuntos relacionados con las Indias. A partir de 1737 fue nombrado también superintendente general de azogue de España e Indias en todo lo gubernativo, económico y contencioso<sup>158</sup>.

Mantenía una correspondencia fluida con otras autoridades indianas o peninsulares, entre las que destacaba el mismo secretario de Estado y del Despacho a través de reales órdenes o reales decretos.

Al interior del Consejo, el presidente o gobernador podían conceder licencias a los consejeros para contraer matrimonio o para ausentarse de la

---

<sup>153</sup> M. Gómez Gómez, “Instrucciones para el gobierno del presidente...”, p. 291.

<sup>154</sup> Durante el siglo XVIII este archivo funcionó más como una biblioteca especializada en temas indianos, frente a los verdaderos archivos administrativos y de gestión, centrados en las secretarías. M. Gómez Gómez e I. González Ferrín, “El archivo secreto del Consejo...”, pp. 188 y ss.

<sup>155</sup> Ordenanzas 64 y 65 de 1636. Recop. Indias 2.2.67-69.

<sup>156</sup> Vid. M. Gómez Gómez, “Instrucciones para el gobierno del presidente...”, p. 295.

<sup>157</sup> La Cámara de Indias fue suprimida mediante real decreto de 06.03.1701. Vuelve a ser creada el 29.04.1716, para ser de nuevo suprimida el 11.03.1717. Reaparece por cuarta vez el 22.12.1721 hasta su extinción el 18.08.1809. Vid. J. J. Real Díaz, “El Consejo de Cámara de Indias...”, p. 726, nota 4.

<sup>158</sup> Real decreto 19.07.1737. A.G.I., Indiferente General, 543, L. 3, ff. 200-206.

Corte por enfermedad u otro motivo<sup>159</sup>. Gozaba del derecho de disponer los fondos de la tesorería a fin de poner el “páguese a los libramientos” que se despachan contra dicho caudal para el pago de sueldos y emolumentos de los ministros y oficiales del Consejo<sup>160</sup>.

Procuraba una mayor vigilancia para que los ministros y oficiales del Consejo guardasen el secreto respecto de los negocios despachados dentro del Consejo, castigando con rigor al que quebrantase o revelase algún asunto<sup>161</sup>. A través de un real decreto de 1701 Felipe V insistía en la obligación por parte del presidente de vigilar sobre la observancia del secreto<sup>162</sup>.

En cuanto representante del monarca, el presidente podía elegir y nombrar por sí mismo un buen número de empleos y comisiones como, por ejemplo designar cada año entre los consejeros al ministro visitador de los oficiales y al superintendente de los contadores<sup>163</sup>. Debido a la guerra de Sucesión, Felipe V concedió excepcionalmente al entonces gobernador del

---

<sup>159</sup> Vid. M. Gómez Gómez, “Instrucciones para el gobierno del presidente...”, p. 299.

<sup>160</sup> Según dos reales decretos del Consejo de Indias de 29.05.1649 y 27.12.1655. *El tesorero de ninguna forma pueda pagar aunque sea con libramientos del Consejo por su arbitrio y elección, sino aquellas partidas en que tuviere especial orden del presidente, prefiriendo los salarios de ministros y alimentos del Consejo y gastos de estrados ordinarios...* Autos acordados 151 y 152 Recop. Indias 2.7. También M. Gómez Gómez, “Instrucciones para el gobierno del presidente...”, p. 289, nota 10.

<sup>161</sup> Ordenanza 82 de 1636. Recop. Indias 2.3.14.

<sup>162</sup> ... y por que el secreto es el alma de las resoluciones, encargo y mando que se observe religiosamente en cuanto se tratare, confiere, resolviere advirtiéndole que hará gran cargo al que faltare en lo que tanto importa. Y mando a los presidentes que celen mucho sobre la observancia del secreto dándole cuenta del que contraviniese a esta orden para pasar a la demostración que convenga. Y eso mismo encargo a los Secretarios de todos los consejos para que celen sobre la ejecución de esta orden en los oficiales de su dependencia dándole la misma cuenta. Real decreto 24.02.1701. A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 53r-53v.

<sup>163</sup> Ordenanza 74 de 1636. Recop. Indias 2.3.8. Según unas instrucciones de 1776 los empleos cuya provisión era privativa de los presidentes eran los siguientes: juez de ministros del Consejo, Juez de penas de cámara, bibliotecario del archivo secreto del Consejo, juez conservador del hospicio seminario que en Valladolid tenía la provincia de agustinos en Filipinas, juez protector del real colegio seminario de San Telmo de Sevilla, capellán del Consejo, abogado de pobres, procurador de pobres, dos alguaciles, sacristán que debía serlo un portero, barrendero, oficial del sello y registro de Indias, relator del Consejo interino o por sustitución, relatores de las Audiencias de Indias en propiedad, jueces de residencias de regentes y ministros de las Audiencias, gobernadores, auditores, corregidores y alcaldes mayores. *Instrucción sobre las competencias y prerrogativas correspondientes al empleo de presidente del Consejo de Indias, realizadas por Simón Martínez del Arroyo, secretario de la presidencia del mismo Consejo, a instancia de Pedro Aparici, oficial mayor de la Secretaría de Estado y del Despacho Universal de Indias* (A.G.I., Indiferente General, 902). Vid. M. Gómez Gómez, “Instrucciones para el gobierno...”, p. 295.

Consejo, el duque de Atrisco, la posibilidad de nombrar a los consejeros y oficiales que debían pasar primero a Guadalajara y posteriormente a Burgos para continuar con el despacho de los asuntos<sup>164</sup>.

Además, debía vigilar que el consejero a quien tocara acudir a la Junta de Competencias no faltara a ella y que en caso que se excusara nombrar a otro que le sustituyese, y si éste también se excusara debía señalar a un tercero<sup>165</sup>. Tenía derecho a que ser informado en todo momento de las Juntas particulares a las que debían acudir los consejeros seleccionados para ello<sup>166</sup>.

El presidente o gobernador del Consejo estaba al frente de una importante oficina que dependía directamente de él, esto es, la secretaría de la presidencia del Consejo. Esta Secretaría era una oficina con entidad propia y con sus peculiares atribuciones y empleados, que coordinaba las amplias competencias a él atribuidas<sup>167</sup>.

Del análisis anterior es posible establecer que el presidente, con sus prerrogativas y preeminencias se convirtió en una herramienta fundamental para la “política de control y vigilancia llevada a cabo por la Corona con la intención de superar los límites que estos mismos tribunales habían puesto a su acción”<sup>168</sup>. Todas estas preeminencias y prerrogativas permitieron a los presidentes y gobernadores adquirir y desarrollar parcelas de actuación propias y diferenciadas, o lo que es lo mismo, su reconocimiento e individualización como autoridad distinta a la institución en su conjunto; quizá por ello Rafael García concluía que “no se le puede considerar un *primum inter pares*, como el primero entre los ministros de Indias, aunque ciertamente lo era; por el contrario se encontraba en un nivel distinto y superior que el resto de los consejeros”<sup>169</sup>.

---

<sup>164</sup> A.G.I., Indiferente General, 583, L. 2, ff. 23-25.

<sup>165</sup> Ordenanza 78 de 1636. Recop. Indias 2.3.10.

<sup>166</sup> Ordenanza 79 de 1636. Recop. Indias 2.3.11.

<sup>167</sup> Esta misma preeminencia la conserva el gobernador del Consejo de Castilla en el siglo XIX. Vid. J. M<sup>a</sup> Puyol Montero, *El Consejo de Castilla...*, t. 2, pp. 654.

<sup>168</sup> Vid. M. Gómez Gómez, “Instrucciones para el gobierno del presidente...”, p. 292.

<sup>169</sup> R. D. García Pérez, *El Consejo de Indias...*, p.72.

### 3. Los consejeros.

Según la doctrina del siglo XVIII los ministros<sup>170</sup> eran un reflejo del rey, que en palabras de Saavedra Fajardo eran *los retratos de la majestad, la cual, no pudiéndose hallar en todas partes, se representa por ellos; y así conviene que se parezcan al príncipe en las costumbres y virtudes*<sup>171</sup>. Los consejeros debían cumplir frente al monarca con ese *deber de consejo*, llamándole la atención sobre las consecuencias de sus decisiones a través de las consultas o por cualquier otra vía, aún suspendiendo la ejecución de las normas hasta comprobar que efectivamente expresaban la voluntad del monarca<sup>172</sup>. Los consejeros también podían elevar, por iniciativa propia<sup>173</sup>, propuestas sobre distintos temas a fin de contribuir a la formación de las decisiones reales<sup>174</sup>, en resumen, la figura del consejero ocupaba un lugar fundamental no sólo dentro de la organización interna del propio Consejo, sino dentro de la propia administración central de la Monarquía; por ello, en los siguientes epígrafe haremos un análisis sobre su número, clasificación, prerrogativas y atribuciones.

#### 3.1. Número de consejeros.

Desde sus orígenes la plantilla del Consejo de Indias varió sustancialmente según las necesidades políticas del momento. En un principio este órgano colegiado se componía de cuatro o cinco consejeros, generalmente letrados. Con la creciente cantidad de negocios, el número de los consejeros también aumentó; así a mediados del siglo XVI hubo entre seis y ocho, incluyendo los ausentes por comisiones especiales<sup>175</sup>. Durante el reinado de Felipe II el número ascendió hasta nueve consejeros, todos letrados. En 1600, Felipe III a propósito de la creación de la Cámara de

<sup>170</sup> En esta época los ministros del Consejo podían ocupar además otros cargos dentro de otros consejos, Audiencias o Chancillerías. Vid. J. P. Dedieu, “La muerte...”, p. 480.

<sup>171</sup> D. Saavedra Fajardo, *Empresas políticas...*, Empresa 52, p. 139.

<sup>172</sup> Recop. Indias 2.1.22. A. García-Gallo, “La ley como fuente del derecho en Indias en el siglo XVI”, en *Anuario de Historia del Derecho Español*, nº. 21-22 (1951-1952), pp. 607-730 y más modernamente B. González Alonso, “La fórmula «Obedézcase, pero no se cumpla» en el Derecho castellano de la Baja Edad Media”, en *Anuario de Historia del Derecho Español*, nº. 50 (1980), pp. 469-487.

<sup>173</sup> Ordenanza 16 de 1636. Recop. Indias 2.2.16.

<sup>174</sup> J. P. Dedieu, “La muerte...”, p. 481 y M<sup>a</sup> I. Cabrera Bosch, *El Consejo Real...*, pp. 143-44.

<sup>175</sup> Vid. E. Schäfer, “La plantilla del Consejo...”, p. 59.

Indias, aumentó a doce el número de consejeros<sup>176</sup>; posteriormente, Felipe IV<sup>177</sup> decidió nombrar dos ministros de capa y espada no letrados fuera de plantilla<sup>178</sup>, a partir de entonces el Consejo estuvo formado por ocho consejeros letrados y dos de capa y espada.

Carlos II<sup>179</sup> intentó a través de un real decreto de 6 de julio de 1677 reducir el número de consejeros:

*Siendo tan de mi servicio el ir reduciendo los tribunales al pie que deben tener así por excusar la mayor dilación que el crecido número de ministros causa al breve expediente de los negocios, como por el gozo de los salarios que se aumenta cuando tanto debe atenderse aminorarle: He resuelto que el Consejo, y Cámara de Indias, se reduzca al número de un presidente y ocho consejeros...*<sup>180</sup>.

Años más tarde, el propio rey insistió en este aspecto, por lo que expidió a través de otro real decreto la nueva composición del Consejo en vista de los apuros económicos en los que se encontraba la real hacienda de la siguiente manera: *Considerando lo mucho que importa aminorar en todo lo posible el número de los ministros de los tribunales, por los inconvenientes que resultan de su multiplicidad en el atraso de los negocios, en la gran descomodidad que padecen los pretendientes y para aliviar la Real Hacienda para acudir a las urgencias de la defensa, y conservación de la Monarquía que tan amenazada se halla en todas partes, he resuelto que el Consejo de Indias se componga de pie fijo que aquí adelante del presidente, ocho ministros togados, dos de capa y espada...*<sup>181</sup>. A diferencia del real decreto de 1677, los consejeros excedentes del pie fijo tenían que cesar, quedando sólo con la mitad del sueldo fijado y teniendo opción por antigüedad a las plazas vacantes. Sin embargo, este decreto de 1691 estableció dos excepciones a fin de conservar a dos consejeros excedentes *en atención a los particulares méritos y especiales circunstancias que concurren en sus personas*<sup>182</sup>.

En realidad estas reformas hubieron de esperar hasta el año de 1693 cuando el Consejo se integró con ocho consejeros togados de pie fijo, quedando sólo dos togados en plaza de opción. Pero cinco años más tarde,

<sup>176</sup> En su reinado nombró a 36 consejeros. E. Schäfer, *El Consejo Real...*, t. 1, p. 238.

<sup>177</sup> Nombró en sus 44 años de reinado a 78 consejeros, 21 de ellos eran de capa y espada. *Ibidem*, t. 1, p. 239.

<sup>178</sup> *Id.*, p. 240.

<sup>179</sup> Durante su reinado se nombraron 72 consejeros, entre los cuales 24 eran de capa y espada. *Id.*, p. 260.

<sup>180</sup> A.H.N., Cedulaire de Ayala t. 22 (Códices, L. 705), f. 317 vº-318r, nº. 292.

<sup>181</sup> Real decreto de reforma de 17.07.1691. A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 47r-52v.

<sup>182</sup> Se refería al conde de Paredes y a don Manuel de Lira.

en lugar de dos consejeros de capa y espada, el rey había nombrado a cuatro más por ausencia de dos de ellos: *continúen los ocho ministros togados que hoy están en actual ejercicio, y los condes de Villaumbrosa, Cifuentes y D. Manuel de Lira, pues cuando vengan D. Pedro Ronquillo y D. Gregorio de Solórzano o vacare plaza de la Cámara, mandaré lo que convenga. La Cámara no es, ni ha sido de planta fija, y así las plazas de capa y espada de ella y del Consejo no deben reputarse por del número, que éste sólo consta de los ocho togados*<sup>183</sup>. Del contenido de este decreto es fácil comprender que a la muerte del monarca, existían diez y nueve consejeros, en lugar de los diez que establecía el real decreto de 1691.

Al llegar Felipe V al trono inició una serie de reformas tendentes a organizar la estructura de los consejos de la Monarquía, entre ellos el de Indias. En 1701 fijó su planta en ocho consejeros letrados y dos de capa y espada, tal y como se estableció en 1691. Pero a diferencia de lo establecido por Carlos II, Felipe V no estableció ninguna excepción en su aplicación, al contrario determinó que *no se me consulte ni admitan memorial contra lo dispuesto en este decreto, y para que si se le remitiere alguna orden mía que no se arregle a él se me haga presente esta resolución*<sup>184</sup>. Pero la realidad era bien distinta, analizando la nómina del Consejo tras la reforma nos encontramos que había cinco consejeros togados, en lugar de los ocho establecidos, y al menos diez de capa y espada, en lugar de los dos que establecía el mencionado real decreto.

Nuevamente en 1702 el monarca insistía en la composición del Consejo de Indias, por lo que expidió un decreto estableciendo en ocho el número de los consejeros que formarían parte del Consejo de Indias<sup>185</sup>, pero según las nóminas del consejos, en ese año continuaban sirviendo en dicho órgano cinco consejeros togados y ocho de capa y espada, seis más de los establecidos. Al año siguiente, no sólo no había disminuido la planta, sino que muy al contrario el número aumentó rápidamente, por lo que en 1704 pertenecían al Consejo nueve consejeros togados y diez de capa y espada.

En un decreto de marzo de 1705 Felipe V decidió extinguir la Cámara de Indias y de paso establecer el número de miembros que debían componer al Consejo, así como los salarios que debían de percibir. Determinó que fueran ocho los consejeros togados y dos de capa y espada los ministros que debían

<sup>183</sup> A.G.I., Indiferente General, 826. Citado por E. Schäfer, "La plantilla del Consejo de Indias...", p. 61.

<sup>184</sup> Real decreto 06.03.1701. A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 53v-56r; 827; 583 L. 3, ff. 73-77.

<sup>185</sup> Real decreto 02.07.1702. A.G.I., Indiferente General, 583 L. 3, ff. 87-88.



formar parte de él, sin embargo, como en otras ocasiones sucedió, la realidad superó a la norma y a final de ese año había en la nómina del Consejo nueve consejeros de capa y espada y ocho togados.

Pero la guerra de Sucesión habría de cambiar el número de ministros que lo compondría. En el año de 1706, en plena guerra sucesión, al aproximarse las tropas del archiduque Carlos a Madrid, Felipe V nombró a los consejeros que habían de seguirlo a Burgos, entre ellos, al duque de Atrisco y dos ministros elegidos por él<sup>186</sup>.

Sin embargo, una consulta del duque de Atrisco, presidente del Consejo de Indias, hizo cambiar los nombramientos de consejeros, toda vez que según establecía la Recopilación de Indias era necesario al menos tres consejeros para resolver asuntos de justicia<sup>187</sup>. En respuesta, Felipe V resolvió que el presidente del Consejo *nombre el ministro o ministros togados, que faltaren hasta asistir para dar expedición a los negocios de justicia que se ofrecieren en ese Consejo, previniendo VE lo conveniente a que precisamente pasen estos ministros sin admitirles excusa alguna*<sup>188</sup>.

Por su parte, durante su primera ocupación en Madrid, el archiduque Carlos ordenó la formación de los consejos de la monarquía, entre ellos el de Indias. Durante los dos meses de la ocupación los consejeros que formaron parte del bando austracista fueron Manuel García Bustamante, Pedro de Gamarra, José Bolero, Manuel de Gamboa, Ramón Portocarrero, el marqués de Casal de los Griegos, Sancho de Castro y Losada, el marqués de Rivas, José de Cossío, Juan de Larrea y Mateo Ibáñez de Mendoza<sup>189</sup>.

Cuando Felipe V recuperó Madrid, hacia el otoño de 1706 dispuso entre otras cuestiones que *aquellos consejeros le siguiesen sin demora en la*

---

<sup>186</sup> A.G.I., Indiferente General, 583 L. 2, ff. 23-25.

<sup>187</sup> *Quando en el Consejo se vieren visitas, y residencias, y pleytos de Iusticia, fiscales, y entre partes, y otros qualesquiera, en definitiva, ó en los articulos incidentes, y dependientes de ellos, si los votos no fueren conformes de, se aya de estar, y esté por lo que la mayor parte determinare, siendo á lo menos tres votos conformes de toda conformidad: y aviendo votos iguales, ó no aviendo los dichos tres votos conformes, se remita á mas luezes, que por lo menos los que lo vieren en remission sean tres, y se junten con los demás á determinarlo; excepto si la causa fuere de menor quantia, que en tal caso han de bastar, y basten dos votos conformes de toda conformidad, como los demás no lo sean: y los dichos negocios de menor quantia, dos del Consejo solos los puedan ver, y conocer de ellos, y determinarlos, siendo conformes de toda conformidad y en los criminales, en que pueda aver condenacion corporal, ó privacion, o suspension de oficio, ó condenacion pecuniaria, que exceda la menor quantia, aya de aver tambien los dichos tres votos conformes de toda conformidad: y en la remission, y en lo demás se guarde lo que está dispuesto por leyes destos Reynos.* Recop. Indias 2.2.59.

<sup>188</sup> Resolución de 24.06.1706. A.G.I., Indiferente General, 583 L. 2, ff. 23-25.

<sup>189</sup> Vid. J. Solís Fernández, "Notas para el estudio del Consejo...", p. 690.

*misma forma en la que hoy están en Burgos, y que en Madrid, se juntasen y despachasen sin más ministros, que los que al presente sirvieron en Burgos, hasta que yo mandare otra cosa*<sup>190</sup>. Más tarde, en septiembre de ese mismo año, confirmó las reformas llevadas a cabo en 1701 sobre la planta y el número de ministros que debían componer el Consejo de Indias insistiendo en no revocar los nombramientos ya realizados, *sino que como fueren vacando las plazas se vayan extendiendo hasta el número señalado, pero que en aquellos tribunales aunque no hubieren quedado habilitados todos los que por esta razón deben componerlos, en estos desde luego se entiendan han de arreglarse a la planta dada en la última reforma*<sup>191</sup>.

Mediante otro decreto de 27 de septiembre de 1706 el Consejo fue reducido a cuatro los consejeros togados y a dos los de capa y espada<sup>192</sup>, el resto fue cesado de sus plazas de consejeros *en castigo por su inobediencia y apoyo a la causa austracista*<sup>193</sup>. Así comenzó el castigo a todos los órganos que le traicionaron al haber apoyado los intereses del archiduque Carlos, para ello a través de una orden de 16 de septiembre de ese mismo año decidió *dar desde luego por vacas a todos los ministros de la tabla, las plazas que servían en los consejos, en castigo por ahora solo de su inobediencia... sin perjuicio de lo que después resultase de otras culpas contra ellos*. Tales consejeros y oficiales debieron de abandonar *en veinticuatro horas la corte a distancia de dos, tres o cuatro leguas de ella, según la comodidad o mayor conveniencia que tuvieren para el efecto de ser oídos y dar satisfacción a los dichos cargos para lo que creo una Junta que exigirá responsabilidades por la traición a Felipe V*<sup>194</sup>.

<sup>190</sup> Real decreto 18.08.1706. A.H.N., Cedulaire de Ayala, t. 34 (Códices, L. 717), f. 73, n° 57.

<sup>191</sup> Real decreto 23.09.1706. A.H.N., Cedulaire de Ayala t. 33 (Códices, L. 716), f. 297v°-298r, n° 264.

<sup>192</sup> *Habiendo resuelto que en ese Consejo de las Indias haya por ahora sólo seis Plazas, los dos de Capa y Espada, que han de ejercer Dn Alonso Carnero y D. Antonio de Oms y las cuatro Togadas, he tenido por bien nombrar para estas a Dn Pedro de Ursúa, regente de Sevilla, a Dn. Joseph Hualte regente de Navarra, a Dn Luis Ramírez de Arellano del Consejo de Hacienda, y a Dn Manuel de la Cruz Ahedo del mismo Consejo, y asimismo he resuelto conceder a Dn Josef de los Ríos fiscal de ese Consejo, los honores y antigüedad de consejero. Tendrase entendido en él para su cumplimiento.* Real decreto 27.09.1706. A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 56v-57r; 583 L. 2, ff. 41-42.

<sup>193</sup> Quedaron en esta situación Francisco de Ezcarai, Juan García de Bustamante, Juan de Castro Gallego, Pedro Gamarra, Joseph Valero, Ramón Portocarrero, Joseph Cossio, Marqués de Ribas, Don Juan de Larrea, Juan de Gamboa, el marqués de Cassal, el marqués de la Laguna y Joseph de Escala. Real decreto 18.09.1706. A.G.I., Indiferente General, 542 L. 1, ff. 81-86; 583 L. 2, ff. 57-60. G. Bernard, *Le Secrétariat d'État...*, pp. 4-5.

<sup>194</sup> Real decreto 23.09.1706. A.H.N., Cedulaire de Ayala t. 34 (Códices, L. 717), f. 75, n° 60. Sobre este tema es muy importante el artículo de M<sup>a</sup> V. León Sanz, "Confiscación de

En la segunda ocupación del archiduque Carlos a Madrid se encontró con una corte vacía<sup>195</sup>, por lo que hubo que dictar disposiciones tendentes a organizar el gobierno de la monarquía. En octubre de 1710 expidió un real decreto sobre el establecimiento de los consejos<sup>196</sup>; en él fueron nombrados entre otros los ministros que debían formar parte del Consejo de Indias. Designó como consejeros de capa y espada a José María Francisco de la Cerda Manrique de Lara, Marqués de la Laguna y Fernando de Torres Mesía, I Conde de Velayos. También nombró como consejeros togados a, Mateo Ibáñez de Mendoza, Ramón Portocarrero, Sancho de Castro y Losada e Ignacio Baquerizo<sup>197</sup>. Por su parte Felipe V previniendo un nuevo abandono de Madrid, decidió enviar a Valladolid al presidente del Consejo, así como los archivos y a los consejeros subalternos en número suficiente, además decretó que si el archiduque obligaba al Consejo a reunirse en su ausencia, nadie sería acusado de infidelidad<sup>198</sup>, por ello cuando recuperó Madrid, el Consejo de Indias volvió a operar de la misma manera que lo venía haciendo antes de la ocupación austracista y no fue necesario crear nuevamente una Junta de secuestro y confiscación de bienes parecida a la del año de 1706<sup>199</sup>.

Un nuevo decreto de 1713<sup>200</sup> decidió aumentar el número de ministros a veinte, diez togados<sup>201</sup> y diez de capa y espada<sup>202</sup>. Dos años más tarde y tras

---

bienes y represión borbónica en la Corona de Castilla a comienzos del siglo XVIII”, en *Cuadernos de Historia Moderna*, nº 21 (1998), pp. 127-175.

<sup>195</sup> Los tribunales afectos al rey Borbón hubieron de ir primero a Valladolid y después seguir a la reina a la ciudad de Vitoria. Vid. V. Bacallar y Sanna, *Comentarios de la Guerra de España...*, t. 2, pp. 37-38.

<sup>196</sup> Citado por V. León Sanz, *Entre Austrias y...*, p. 62.

<sup>197</sup> *Ibidem*, pp. 74-75. El archiduque nombró a José de Hualte y a Pinto de Lara como posibles ministros que en su momento pudieran formar parte del Consejo de Indias. Vid. J. Solís Fernández, “Notas para el estudio del Consejo...”, pp. 693-694.

<sup>198</sup> *Subseguido al contrario suceso de la batalla el natural y recelado movimiento que el ejército de los enemigos como superior venía efectuando en seguimiento del de SM siendo preciso ceder a la fuerza; mandó pasasen (como lo más apreciable de indispensable de su Real Persona) a residir a Valladolid, y en su consecuencia fuese el de Indias con el presidente y demás ministros que quisiesen, y pudiesen ir según su salud, medios, y posibilidad para el curso y expediente regular de los negocios, llevando los archivos y papeles con el resguardo y seguridad que se juzgase más conveniente en inteligencia que el que por cualquiera de estos motivos se quedase no había de ser, ni se había de tener por delincuente ni le sería de nota de infidelidad ni menos amos, como no ejerciesen sus ministerios ni otros algunos en servicio del Archiduque a no ser violentados a ello que de esta manera serían mantenidos en sus honores y empleos cuando siendo Dios servido engrosado su ejército, y triunfante de sus enemigos se restituyese con la reina, y el príncipe a Madrid.* Real decreto 07.09.1710. A.H.N., Cedulaire de Ayala t. 112 (Códices, L. 695), nº 299, f. 244.

<sup>199</sup> G. Bernard, *Le Secrétariat d'État...*, pp. 5-6.

<sup>200</sup> Real decreto 10.11.1713. A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 58v-62v; 827.

los graves problemas financieros, Felipe V reorganizó nuevamente los consejos, de ahí que el de Indias quedó comprendido como lo estaba en la planta de 1691 y 1701, esto es, con ocho ministros togados y dos ministros de capa y espada:

*...que han de componer este número han de ser de los más antiguos que hay al presente según sus Juramentos, quedando por ahora los que se hallaren más modernos, fuera de este número en ambas clases, así togados como de Capa y Espada, creados antes de la Nueva Planta, con los honores, y con el goce que entonces tenían con ellos, sin la menor diferencia peso, sin el ejercicio, dejándolos a todos como los dejó la opción a las plazas del número como fueren vacando por muerte o jubilación, u otro cualquier motivo de los que ahora han de quedar en él entrando cada uno en su clase, y por su antigüedad en las vacantes que hubiere, para que se vayan extinguiendo, como con efecto se han de extinguir, precisamente las plazas supernumerarias así del Consejo, como las de los subalternos de todas clases, hasta que en cada una queden sólo los del número, aquí predefinido<sup>203</sup>.*

Tras la creación de las secretarías de Estado y del despacho, el Consejo quedó establecido a través del real decreto de 20 enero de 1717<sup>204</sup> con una planta de seis ministros togados<sup>205</sup> y dos de capa y espada<sup>206</sup>; suprimiendo todas las plazas que excedieran lo establecido. Lo cierto es que revisando las nóminas del Consejo de los años posteriores a esta reforma, siempre existieron más de cinco ó seis consejeros de capa y espada en lugar de los dos que establecía la reforma<sup>207</sup>.

Con el tiempo y el aumento del volumen de trabajo, el Consejo se vio obligado a consultar a Felipe V sobre la necesidad de ampliar el número de consejeros togados. En noviembre de 1732 remitió una consulta con motivo del pleito que se siguió por Francisco de Aróstegui y Roque García en donde le exponía que en los asuntos de justicia le era imposible al Consejo dar cumplimiento a lo dispuesto en la Recopilación de Indias *relativo a que*

<sup>201</sup> Nombró como consejeros togados a Manuel de la Cruz Aedo, José Agustín de los Ríos, Miguel Calderón de la Barca, Nicolás Manrique, Juan de Otalora, Fernando de Arango, José de Munibe, Diego de Zúñiga, Antonio Valcarcel Formento y Diego de Rojas.

<sup>202</sup> Se nombraron a los siguientes consejeros de capa y espada: Alonso Carrero, el marqués de Valero, Manuel Mieses, el marqués de Miaña, el conde de Aranero, Manuel de Silva, Francisco Javier de Goyeneche, el marqués de Monteleón, José de Grimaldo y Francisco Antonio de Salcedo.

<sup>203</sup> Real decreto 05.08.1715. A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 90r-97r; 827.

<sup>204</sup> Real decreto 20.01.1717. A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 160r-107; 542 L. 2, ff. 35-37. B.N., Mss. 19251. ff. 7-8. A. Muro Orejón, *Cedulario Americano...*, t. II, pp. 527-528.

<sup>205</sup> Felipe V señaló como consejeros togados a Gonzalo Machado, Alonso Araciel, Diego de Rojas, Diego de Zúñiga, Martín de Mirabal y Antonio de la Pedrosa.

<sup>206</sup> Manuel de Silva y Antonio Cristóbal de Ubilla, marqués de Rivas.

<sup>207</sup> Relaciones de sueldos del Consejo. A.G.I., Indiferente General, 986 A.

*en los pleitos no habiendo votos iguales o no habiendo tres votos conformes se remitan a más jueces, de suerte que los que vieren en la remisión sean seis y se junten a determinarlo*<sup>208</sup>. Y que por no haberles en el Consejo se había suplicado por los interesados se viese por otros ministros o que se habilitasen a los fiscales, a lo que VM se sirvió resolver «Vengo en habilitar a los dos fiscales del Consejo, solo para la determinación de este pleito; y para los casos que se ofrezcan en delante de las mismas circunstancias, que este, me propondrá el Consejo la providencia, que le pareciere conveniente se podrá aplicar por punto general»<sup>209</sup>.

Pero no siendo suficiente esta medida, nuevamente el Consejo solicitó al monarca la ampliación permanente a ocho el número de consejeros togados, en lugar de los seis establecidos en 1717, entre los argumentos que se esgrimían se encontraban los siguientes:

*Con reflexión a todo lo referido hace presente a VM el Consejo, que debiendo ser ocho los ministros, que deben haber en él según su creación, se han seguido nocivas consecuencias, al real servicio, y al bien de las partes, por no poder muchas veces dividirse Sala de Justicia, y cuando se ejecuta queda la de Gobierno sin ningún ministro togado para resolver los muchos expedientes en que concurren puntos de derechos; a que se añade que para los casos de remisiones, armas, jueces, no hay necesarios para determinarlas; y no habiendo hasta ahora llegado el caso del aumento de ministros que VM se sirvió ofrecer para suplir los perjuicios, que a falta de ellos se ocasiona: hace asimismo presente a VM que de los ocho ministros, que por la ejecución debe haber, sólo existen actualmente seis, a causa de que D. Diego de Zúñiga, además de la cédula de preeminencias, se halla absolutamente imposibilitado de poder concurrir tanto por su crecida edad, como por la debilidad de potencias; lo que obligó a VM a resolver, que la comisión de composición de tierras, que estaba a cargo de este ministro la ejerciese D. Antonio de Pineda: Y que el Marqués de San Gil se halla empleado en su embajada, siendo presumible que por el mayor carácter no venga a ejercer la plaza de toga, que por ponérsela se valió del medio de hacer el juramento en manos de D. Joseph Patiño. Por cuya razón existen sólo seis de los cuales bien por natural falta de salud o por destinarlos VM a varias Juntas particulares, suelen faltar algunos a la asistencia del Consejo; lo que obliga a no poderse dividir las más veces Sala de Justicia, en la que se hallan pendientes muchas, y graves dependencias, todo lo cual pone el Consejo en la Real inteligencia de VM para que se digne proveer con la más posible brevedad a lo menos dos plazas de ministros togados, para que de esta forma este corriente el número de los ocho de su establecimiento, y*

---

<sup>208</sup> Recop. Indias 2.2.59.

<sup>209</sup> A.G.I., Indiferente General, 824.

*puedan tener regular curso las dependencias de la inspección del Consejo*<sup>210</sup>.

En respuesta a dicha consulta, el monarca decidió solicitar al conde de Montijo, presidente del Consejo de Indias, que *reservadamente informe de los sujetos que podían ser más a propósito para el aumento de los dos ministros togados*. El presidente propuso a José Laysequilla y a José de Carvajal y Lancaster. Pero fue hasta enero de 1738 cuando el monarca decidió aumentar el número de ministros togados a ocho<sup>211</sup>, nombrando a los ministros propuestos seis meses antes por el conde de Montijo. Respecto de las plazas de capa y espada, el monarca volvió a recordar que en éstas no existía un número “predefinido”, por lo que no parece se necesitase de otra circunstancia que la declaración de VM, de allí que en el año de su muerte, en el Consejo de Indias estaba formado por ocho consejeros togados y por más de diez consejeros de capa y espada<sup>212</sup>.

### 3.2. Clasificación.

#### a) Consejeros togados y de capa y espada.

Los consejeros togados eran aquellos letrados de los consejos que llevaban toga<sup>213</sup>; se trataba de ministros que gozaban de una plaza en alguno de los consejos y supremos tribunales del reino. Desde su creación, los consejeros togados fueron el sustento jurídico del Consejo de Indias.

Su número de ocho al menos desde las reformas de 1681 sufrió algunas variaciones. Así como consecuencia de la llamada Jornada de Burgos, Felipe V decidió disminuir a cuatro el número de consejeros togados<sup>214</sup>. Posteriormente, las reformas de Orry de 1713 aumentaron a diez su número; pero nuevamente en 1715 Felipe V decidió reducirlos a ocho. Las reformas de 1717 disminuyeron la planta a seis consejeros togados, pero el aumento de trabajo en materia de justicia obligó al Consejo a solicitar en múltiples

---

<sup>210</sup> Consulta del Consejo de Indias solicitando la provisión de dos plazas de consejeros togados. 16.09.1737. A.G.I., Indiferente General, 824.

<sup>211</sup> Real decreto 28.01.1738. A.G.I., Indiferente General, 543 L. 3, ff. 275-278.

<sup>212</sup> Relaciones de sueldos del Consejo. A.G.I., Indiferente General, 986 A. También en M. A. Burkholder. *Biographical Dictionary...* y en G. Bernard, *Le Secrétariat d'État...*, pp. 212-214.

<sup>213</sup> *Diccionario de Autoridades 1739*.

<sup>214</sup> A.G.I., Indiferente General, 542, L. 1, ff. 68-72.

ocasiones aumentar dos plazas de togados; finalmente en 1737 Felipe V aceptó proveer dichas plazas<sup>215</sup>, quedando por tanto en ocho el número de ministros togados que formaban parte del Consejo de Indias.

Sin detenernos demasiado sobre este punto ya que el mismo es analizado con gran detalle por Rafael García<sup>216</sup>, creemos pertinente advertir que para llegar a ser consejero togado del Consejo de Indias era necesario, como sucedía dentro del Consejo de Castilla, haber sido colegiales egresados de los cuatro colegios mayores de Salamanca, el de San Ildefonso en Alcalá de Henares o el de Santa Cruz de Valladolid y haber cursado al menos diez años de estudios en la universidad<sup>217</sup>. Posteriormente debieron de pasar por una alcaldía o por la plaza de oidor en la Audiencia o Chancillería y continuaban por los consejos como alcaldes u oidores o simplemente practicar la abogacía con algún letrado ya establecido<sup>218</sup>.

José de Ayala en sus *Notas a la Recopilación* citando a Juan Rubio señalaba las calidades que debía ocurrir en los jueces, refiriéndose a los consejeros togados decía que los ministros debían *oír con paciencia, responder con prudencia, sentenciar con justicia y ejecutar con clemencia*. Además, continúa diciendo *los que sirven en América deben al mismo tiempo no ser fáciles de alterar las costumbres que encuentren establecidas en las provincias con general aprobación por más extrañas que les parezcan, hasta que la experiencia le acredite si son realmente opuestas a la buena administración de Justicia, y al mejor servicio del soberano*<sup>219</sup>.

Los consejeros togados poseían amplias competencias dentro del Consejo, en realidad gozaban de voz y voto en todos aquellos asuntos relacionados con las cosas de gobierno, guerra, gracia y merced, así como en las visitas, residencias y demás asuntos de justicia contenciosa entre partes. Por tanto, los ministros togados podían sentarse dentro de las Salas de Gobierno y de Justicia, simplemente guardando la antigüedad que les correspondía.

En contraposición de los consejeros togados se encontraban los llamados de “capa y espada”, esto es aquellos que no visten toga y andan de traje cortesano, y no profesan la facultad de leyes, por lo cual no tienen voto en

---

<sup>215</sup> A.G.I., Indiferente General, 824.

<sup>216</sup> R. D. García Pérez, *El Consejo de Indias...*, pp. 139 y ss.

<sup>217</sup> Vid. J. Fayard, *Los miembros del Consejo...*, p. 35 y ss.

<sup>218</sup> Vid. P. Gan Giménez, *El Consejo Real...*, p. 163. También M. A. Burkholder, *Biographical Dictionary...*, pp. XIX-XX.

<sup>219</sup> M. J. de Ayala, *Notas a la Recopilación...*, pp. 81-82.

los negocios de justicia, sino sólo en los consultivos y de gobierno<sup>220</sup>. Por tanto, según la propia Recopilación de Indias los consejeros de capa y espada solamente pueden intervenir en asuntos de gobierno, guerra, gracia y merced<sup>221</sup>.

En general, los ministros de capa y espada se formaban en “la escuela de la vida” que podía ser la propia administración pública dentro de otros consejos, de las cecretarías de Estado y del despacho o de cualquier otro organismo público<sup>222</sup>.

En la mayoría de las plantas del Consejo de Indias el número de ministro de capa y espada era de dos, sin embargo, Carlos II dispuso que las plazas de capa y espada *no deben reputarse por el número que este consta de los ocho togados*<sup>223</sup>. Este mismo principio fue aplicado por Felipe V que si bien en las distintas plantas estableció en dos el número de ministros de capa y espada, en realidad no había número definido en esta categoría, quizá por ello entre los años de 1717 y 1746 Felipe V nombró a veinticuatro ministros togados y a veinticinco de capa y espada<sup>224</sup>.

## **b) Consejeros supernumerarios y honoríficos.**

Los consejeros supernumerarios eran aquellos que estaban “fuera del número establecido”<sup>225</sup>. En opinión de Bernard la palabra supernumerario designaba simplemente a toda persona nombrada para un puesto donde se aumentaba el número de esas personas que tenían que ocupar el cargo por reformas sucesivas<sup>226</sup>. Se trata pues de aquellos consejeros nombrados además de los que normalmente estaban previstos por las distintas normativas. El motivo de estos nombramientos podía ser por el deseo real de honrar a alguien con el título o quizá por la necesidad de que en determinados momentos hubiera suficientes consejeros, ya que frecuentemente los de número se encontraban comisionados fuera de la

---

<sup>220</sup> *Diccionario de Autoridades 1729*.

<sup>221</sup> Recop. Indias 2.3.5. Aunque esta norma se refiere a las competencias del presidente del Consejo, es posible aplicar su contenido a los consejeros.

<sup>222</sup> Vid. R. D. García Pérez, *El Consejo de Indias durante...*, p. 149.

<sup>223</sup> A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 52r- 53r.

<sup>224</sup> M. A. Burkholder, *Biographical Dictionary...*, pp. 149-152.

<sup>225</sup> *Diccionario de Autoridades 1739*.

<sup>226</sup> Vid. G. Bernard, *Le Secrétariat d'État...*, pp. 174-75.



Corte o postrados con achaques y enfermedades por sus avanzadas edades<sup>227</sup>.

La planta del Consejo de Indias de 1691 estableció que todas las plazas de supernumerarios debían de ser suprimidas pero concediéndoles la mitad de su paga y la opción a las vacantes de número por su antigüedad<sup>228</sup>. A la llegada de Felipe V una nueva reforma a la estructura del Consejo ordenó la supresión de las plazas supernumerarias conforme fueran vacando, *con el ejercicio y goce de sus plazas de consejeros, y consumiéndose las que fueren vacando por muerte o jubilación, hasta reducirse al número referido* de ocho consejeros togados y dos de capa y espada<sup>229</sup>.

Posteriormente, tras su regreso a Madrid, Felipe V en 1706 estableció que en aquellos tribunales que hubieren quedado habilitados más ministros de los establecidos en la última reforma, esto es la de 1701, no era su intención *queden fuera, sino que como fueren vacando las plazas se vayan extinguiendo hasta el número señalado* y solamente se debían de abstener de remplazarlos por otros en el futuro<sup>230</sup>.

Las reformas de 1715 redujeron considerablemente el número de los consejeros, que dos años antes se habían nombrado dentro de los decretos de Nueva Planta; de manera que el Consejo quedó establecido con ocho consejeros togados y dos de capa y espada permaneciendo en el cargo los más antiguos de acuerdo a sus juramentos y *los que se hallaren más modernos, fuera de este número en ambas clases, así togados como de capa y espada, creados antes de la Nueva Planta, con los honores, y con el goce que entonces tenían con ellos, sin la menor diferencia peso, sin el ejercicio, dejándolos a todos como los dejo la opción a las plazas del número como fueren vacando por muerte o jubilación, u otro cualquier motivo de los que ahora han de quedar en él entrando cada uno en su clase, y por su antigüedad en las vacantes que hubiere, para que se vayan extinguiendo, como con efecto se han de extinguir, precisamente las plazas supernumerarias así del Consejo, como las de los subalternos de todas clases, hasta que en cada una queden sólo los del número, aquí predefinido*<sup>231</sup>. Tras la lectura de este decreto es incomprensible que el intentar aminorar los gastos que ocasionaba una abultada nómina establecía

<sup>227</sup> Vid. J. C. Domínguez Nafraía, *El Real y Supremo Consejo...*, pp. 344-45.

<sup>228</sup> A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 47r-52v; 827.

<sup>229</sup> A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 53v-56r; 827; 583 L. 3, ff. 73-77.

<sup>230</sup> Real decreto 23.09.1706. A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 56r-56v; 583 L. 3 ff. 29-30. Cedula de Ayala t. 33 (Códices, L. 716), n° 264, ff. 297v-298r.

<sup>231</sup> A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 90r-97r; 827.

la conservación de salarios a consejeros que ni siquiera trabajarían, en lugar de recolocarlos en otro lugar<sup>232</sup>.

A través de un real decreto de febrero de 1717 el monarca prohibió a los secretarios, oficiales o demás dependientes del Consejo tener más ocupaciones que las de su misma plaza y empleo, ni llevar más que un sueldo y que en caso que hubiere supernumerarios, *éstos sustituirán al propietario del empleo gozando sólo de la diferencia que hubiere desde el que gozaren al que tuviere el propietario*<sup>233</sup>. En los últimos años del reinado de Felipe V fue muy común el nombramiento de ministros y oficiales supernumerarios con sueldo y opción a las vacantes del número que se causen para que entren a servirlos<sup>234</sup>. Pero también hubo nombramientos de ministros supernumerarios sin goce de sueldo, como fue el nombramiento de Juan de Gaona y Portocarrero, conde de Valdeparaíso<sup>235</sup>.

Por otra parte, la categoría de ministros honorarios surgió a partir del siglo XVIII y eran aquellos consejeros a quienes se les otorgaba un empleo con carácter honorífico, no percibiendo sus titulares ningún tipo de sueldo, gaje o emolumento<sup>236</sup>.

El nombramiento de ministros honorarios se utilizaba para recompensar servicios a la corona o para fortalecer la posición de una persona de cara al ejercicio de un determinado cargo o misión<sup>237</sup>. En el primer caso se encontraban los nombramientos de ministros que antes habían sido miembros de alguna de las Audiencias indianas<sup>238</sup>, como fue el caso de Pedro Martínez de Arizala, quien ocupó la plaza de oidor de la Audiencia de Quito y que en 1738 Felipe V le nombró ministro honorario del Consejo de Indias<sup>239</sup>, el de Francisco Sagardía y Palencia quien había sido oidor de la Audiencia de Charcas y al que el monarca concedió la plaza honoraria en agosto de 1736<sup>240</sup>, aunque posteriormente, en el año de 1743 fue nombrado oidor en la Audiencia de Lima<sup>241</sup> o el caso de Antonio Hermenegildo

<sup>232</sup> Vid. G. Bernard, *Le Secrétariat d'État...*, p. 175.

<sup>233</sup> Nov. Recop. 4.2.16.

<sup>234</sup> Un ejemplo fue el nombramiento como consejero supernumerario a Juan de Gaona y Portocarrero, conde de Valparaíso el 24.10.1741. Un año más tarde ocupó el cargo como numerario. A.G.I., Indiferente General, 886 A. También en M. A. Burkholder. *Biographical Dictionary...*, p. 48 y G. Bernard, *Le Secrétariat d'État...*, p. 218.

<sup>235</sup> A.G.I., Indiferente General, 447 L. 46, f. 23.

<sup>236</sup> Vid. F. Barrios Pintado, *El Consejo de Estado...*, p. 230.

<sup>237</sup> Vid. R. D. García Pérez, *El Consejo de Indias durante...*, p. 101.

<sup>238</sup> G. Bernard, *Le Secrétariat d'État...*, p. 176.

<sup>239</sup> La relación de méritos en A.G.I., Indiferente General, 228 N. 51.

<sup>240</sup> La relación de méritos en A.G.I., Indiferente General, 146 N. 100.

<sup>241</sup> A.G.I., Indiferente General, 447 L. 46, ff. 110v-111.

Querejazu y Mollinedo a quien en 1744 se lo otorgó una plaza de ministro honorario por haber ostentado el cargo de presidente de la Audiencia de La Plata<sup>242</sup>.

### c) El decano.

Sólo había necesidad de nombrar decano cuando el presidente o el gobernador del Consejo estuvieren ausentes o se encontrasen enfermos. En este caso correspondía al ministro con más antigüedad dentro del Consejo ser su decano. Según advierte Martínez de Salazar el decano *no debe tener otras autoridades ni preeminencias que las que por tal ministro más antiguo le corresponde*<sup>243</sup>. Fue tanto el interés por parte de los consejeros de llegar a ser decanos del Consejo, que enviaron una consulta relativa a la antigüedad de los ministros nombrados el mismo día, a lo que el monarca resolvió lo siguiente:

*Para que en adelante cesen cualesquier disputas sobre la preferencia entre los ministros, que fueren propuestos a un mismo tiempo, y nombrados por resolución, u decreto de un mismo día, declaro por punto general que , siempre que la Cámara me consultare dos, o más plazas de un Tribunal con la distinción, y regulación de primera, y segunda, o Yo eligiere en un mismo decreto dos, o más ministros para plazas de un mismo Consejo, Chancillería, o Audiencia, haya de gozar la antigüedad el que yo eligiere para la plaza primera, y el que fuere nombrado primero en el decreto. Tendrase entendido en el Consejo, y Cámara para su cumplimiento; y se prevendrá a la Chancillerías, y Audiencias lo correspondiente para su ejecución*<sup>244</sup>.

En el período que analizamos hubo varias ocasiones en las que el Consejo se encontró sin titular, por lo que la figura del decano fue más común que en otros tiempos. De los períodos a los que nos referimos se encuentran los meses transcurridos entre la renuncia como gobernador del Consejo de Indias de Andrés de Pez, en octubre de 1718 hasta su reincorporación en el cargo en enero de 1721<sup>245</sup>. El segundo período fue aquel que sobrevino entre la muerte del marqués de Valero en noviembre de 1727 y el nombramiento del conde de Montijo en junio de 1737<sup>246</sup>. Otro

<sup>242</sup> A.H.N., Órdenes Militares expedientillos, nº 7445.

<sup>243</sup> A. Martínez de Salazar, *Colección de memorias y noticias...*, p. 87.

<sup>244</sup> Real decreto 17.02.1735. A. A. de la N. Recop. 2.4.95.

<sup>245</sup> Vid. G. Bernard, *Le Secrétariat d'État...*, p. 172.

<sup>246</sup> A.G.I., Indiferente General, 543 L. 2, ff. 29-30. También en la Gaceta de Madrid nº 25 de 18.06.1737.

período carente de titular se dio precisamente en la presidencia del conde de Montijo a quien se le confirió el cargo de embajador extraordinario de Inglaterra, de allí que fuera corto el tiempo que podía presidir al Consejo y no fue sino hasta 1742 cuando se nombró a José de Carvajal y Lancaster<sup>247</sup> como gobernador interino, para cubrir las ausencias del conde.

De lo anterior se desprende que al menos en tres ocasiones, el decano de turno hubo de ocuparse interinamente de las competencias que le correspondían al presidente o gobernador. Dentro de estos períodos, el más largo fue la década que transcurrió entre los años de 1727 a 1737, siendo el decano del Consejo el consejero de capa y espada, Francisco Javier de Goyeneche<sup>248</sup> a quien gracias a los servicios prestados por su padre, Juan de Goyeneche, Felipe V le concedió el título de marqués de Belzunce<sup>249</sup>.

En ocasiones podía suceder que el decano de turno del Consejo no pudiera acudir, entonces actuaba en el cargo el siguiente ministro en antigüedad. Así sucedió en marzo de 1735 cuando el marqués de Belzunce solicitó al monarca licencia para ausentarse de la Corte por seis meses con la intención de sanar sus enfermedades<sup>250</sup>, a lo que el monarca accedió, ocupando el cargo de decano Antonio de Sopeña y Mioño<sup>251</sup>.

Entre las prerrogativas más importantes que ostentó el decano se encontraba la de enviarle las consultas cerradas y selladas para que las

<sup>247</sup> Su nombramiento data 23.10.1742. Vid. G. Bernard, *Le Secrétariat d'État...*, pp. 211-12.

<sup>248</sup> Formaba parte de una de las familias navarras más importantes y con mayor influencia en el reinado de Felipe V. Fue nombrado consejero de capa y espada del Consejo de Indias el 11.11.1707. Tras las múltiples reformas que sufrió la planta del Consejo, la plaza de Goyeneche fue disminuida, sin embargo pudo retener los honores y la mitad del sueldo. El 16.02.1722 retomó su posición de ministro de capa y espada. En 1731 Felipe V le nombró marqués de Belzunce y en 1744 fue nombrado camarista de Indias, cargo que desempeñó hasta su muerte en 04.03.1748. Vid. M. A Burkholder, *Biographical Dictionary...*, p. 53. G. Bernard, *Le Secrétariat d'État...*, pp. 214-15. Sobre la familia a la que pertenecía el ministro puede verse en S. Aquerreta, *Negocios y finanzas en el siglo XVIII: la familia Goyeneche*, Pamplona, 2001; M<sup>a</sup> J., Lecertúa Goñi, "Las elites Vasco-Navarras en la monarquía borbónica en el siglo XVIII: la familia Goyeneche", en *Sancho el sabio: Revista de cultura e investigación vasca*, n° 19 (2003), pp. 67-94; VV. AA., *Juan de Goyeneche y el triunfo de los navarros en la monarquía hispánica del siglo XVIII*, Pamplona, 2005.

<sup>249</sup> Real Despacho 13.05.1731. A.H.N., consejos, 8944 A.

<sup>250</sup> Carta de D. Miguel de Villanueva, secretario de la negociación del Perú, al marqués de Belzunce, decano del Consejo, comunicándole la licencia concedida que solicita para curarse. 30.03.1735. A.G.I., Indiferente General, 446A L. 42, ff. 251-251v.

<sup>251</sup> Nombrado secretario de Estado y del Despacho de Marina e Indias el 10.01.1724, puesto que sirvió hasta el año de 1726. Le concedieron el título de consejero de capa y espada en el Consejo de Indias el 12.02.1726 y en 24.10.1721 le nombraron camarista del mismo Consejo. Vid. M. A Burkholder, *Biographical Dictionary...*, p. 119. G. Bernard, *Le Secrétariat d'État...*, p. 216.

abriera y viera en el Consejo<sup>252</sup>. También debía repartir en Salas los negocios y pleitos que se debieran de ver cada día, por lo que en su ausencia, era el decano, quien distribuía el trabajo<sup>253</sup>. Para realizar sus tareas el decano, al igual que el presidente o el gobernador, era auxiliado por el secretario de la presidencia<sup>254</sup>.

A través de un real decreto de 1732<sup>255</sup>, Felipe V, resolvió devolver al marqués de Belzunce, como decano del Consejo de Indias, la prerrogativa que ostentaba el presidente o gobernador del Consejo de nombrar personas para tomar residencias en las Audiencias y Chancillerías de Indias<sup>256</sup>, como lo tenía antes de la reforma de abril de 1720<sup>257</sup>.

El decano asistía a funciones, actos y regocijos públicos en nombre del Consejo<sup>258</sup>, así sucedió con el marqués de Belzunce quien debía acompañar al secretario de Estado y del Despacho, Fernando Verdes, a la obra de la capilla mayor del convento del Carmen y a la colocación de la imagen de Santo Toribio<sup>259</sup>.

### 3.3. Elección, juramento y duración del cargo.

De la misma manera que sucede con la elección y el nombramiento del presidente o gobernador del Consejo, los consejeros indianos podían ser

---

<sup>252</sup> Recop. Indias 2.3.7.

<sup>253</sup> Ordenanza 69 de 1636. Recop. Indias 2.3.1.

<sup>254</sup> Vid. A. Martínez de Salazar, *Colección de memorias y noticias...*, p. 87.

<sup>255</sup> Real decreto de 19.12.1732. A.G.I., Indiferente General, 446A L. 42, ff. 118v-119v.

<sup>256</sup> La norma primigenia respecto del nombramiento de los visitadores era: *Las residencias de oficios que se proveyeren por consulta de nuestro Consejo de Indias se tomen por la comisión, y orden, y juez que fuere nombrado por el presidente dél, y venga al Consejo...* Recop. Indias 5.15.4. Dicha disposición se complementaba con aquella que prohibía a las Audiencias de las Indias que *se entrometan, ni embaracen en el conocimiento y determinación de las residencias, que se tomen a los gobernadores, Corregidores, Alcaldes mayores, ni otras justicias, ministros nuestros de las Indias, que por Nos fueren proveídos, ni a los que por ellos sirvieren en interin, ni a los que comprendieren y expresaren las órdenes y comisiones, que por Nos fueren despachadas, porque esto solo toca a los de nuestro Consejo de Indias: con apercibimiento, que demás de que serán multados, por esta causa en las cantidades que pareciere justo, se pasará a mayores penas y demostraciones contra los que faltaren a lo contenido en esta.* Recop. Indias 2.15.69.

<sup>257</sup> En el real decreto de 29.04.1720 Felipe V dispuso que *el presidente del Consejo y por su falta el señor decano, no diesen estas comisiones a sujetos que se hallasen en la Corte, sino que las dirigiesen a algunos ministros de las Audiencias de los distritos, con facultad de sustituirlas en personas de entera satisfacción.* A.G.I., Indiferente General, 446A L. 42, ff. 118v-119v.

<sup>258</sup> Vid. A. Martínez de Salazar, *Colección de memorias y noticias...*, p. 93.

<sup>259</sup> A.G.I., Indiferente General, 446A L. 42, ff. 216-218.

nombrados a partir de dos vías: por un lado a través de la propuesta realizada por el órgano competente con el nombre de los posibles candidatos y, por el otro, a partir de un real decreto donde el monarca nombraba a una persona para ocupar la plaza dentro del Consejo sin mediar consulta por parte de los órganos competentes para ello. En opinión de Burkholder cuando esto sucedía el candidato no contaba con los méritos necesarios, en cambio aquellos nombramientos que surgían de una consulta constituían una garantía de las capacidades profesionales de los futuros consejeros<sup>260</sup>.

Durante el reinado de Felipe V los órganos encargados de proponer a los candidatos más idóneos para ocupar las plazas de ministros variaron considerablemente. En un principio la Cámara de Indias<sup>261</sup> era la encargada de las propuestas, pero cuando ésta fue extinta en 1701, dicha competencia se trasladó a la Cámara de Castilla<sup>262</sup>, misma que también fue extinguida en 1713, por lo que las propuestas debían surgir del Consejo de Castilla hasta que en 1715 la Cámara de Castilla volvió a ser restablecida en sus antiguas atribuciones<sup>263</sup>. Sin embargo, a partir de la creación de las secretarías de Estado y del despacho, dichas consultas de la Cámara fueron despachadas directamente entre el rey y el secretario de Estado correspondiente.

Como regla general la cédula de nombramiento era expedida por la Cámara de Castilla y en los períodos en que funcionaba era la Cámara de Indias la que la emitía. Sin embargo, en 1741 a raíz de una consulta que la Cámara de Castilla elevó al monarca, daba cuenta que la Cámara de Indias había despachado los títulos de dos plazas de camaristas, específicamente las cédulas de Antonio Álvarez y a José de Carvajal, a lo que el rey resolvió que *en adelante se abstenga la Cámara de Indias de dar posesión a alguno de los ministros que yo nombrare para ella sin que primero presente la citada real cédula que debe preceder expedida por la de Castilla*<sup>264</sup>.

En el nombramiento constaba el nombre del elegido, el cargo que ocupaba, el salario y la estimación de la media anata. El pago debía realizarse en la Contaduría General de Valores y Distribución de la real Hacienda y se debía tomar razón en la Contaduría General de Indias. El contador daba fe en el mismo título de que el pago se había realizado<sup>265</sup>.

<sup>260</sup> Vid. M. A Burkholder, *Biographical Dictionary*..., pp. XV-XVI.

<sup>261</sup> Vid. G. Bernard, *Le Secrétariat d'État*..., p. 110.

<sup>262</sup> Vid. M. A Burkholder, *Biographical Dictionary*..., p. XV y R. D. García Pérez, *El Consejo de Indias durante*..., p. 103.

<sup>263</sup> Nov. Recop. 4.4.4.

<sup>264</sup> Real decreto 11.01.1741. A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 122r -122v.

<sup>265</sup> Vid. R. D. García Pérez, *El Consejo de Indias durante*..., p. 106.

Con esta certificación el nuevo ministro se dirigía al Consejo de Indias a prestar juramento, toda vez que desde ese momento podía empezar a cobrar su salario y se consideraba su antigüedad para efectos de preferencia en los asientos, en su derecho a voto dentro de las Salas que conformaba el Consejo y en la posibilidad de ser decano<sup>266</sup>.

Tal y como lo mencionamos en el caso del presidente o gobernador del Consejo, el juramento era un acto administrativo a partir del cual comenzaba a computarse la antigüedad en el cargo; además, en tanto no hubiera juramento, los actos del ministro carecían de validez<sup>267</sup>. Precisamente esta última razón fue la que obligó a que los consejeros honorarios realizaran el juramento respectivo<sup>268</sup>.

La variación en la fórmula que se debía recitar estaba en función de la calidad de la persona, es decir, si se trataba de un miembro de la jerarquía eclesiástica<sup>269</sup>, de un consejero con hábito de cualquier de las tres órdenes militares o si se trataba de cualquier otra persona. Normalmente el juramento se realizaba en presencia del presidente o del gobernador, pero a falta de cualquiera de estos, era el decano la persona que presenciaba el acto. Los recién nombrados consejeros se comprometían a procurar el servicio de Dios y a velar por el bien del Estado y el servicio del Rey, obligándose a guardar la Leyes y Ordenanzas del reino y las que se hubieren realizado para el buen servicio a Dios y a velar por el bien del Estado y el servicio del Rey<sup>270</sup>.

Por otra parte, en caso que el consejero llegara a una edad muy avanzada, que le impidiera acudir con regularidad al Consejo, podía ser jubilado. La jubilación se concedía por la totalidad del sueldo o parte del mismo según la

---

<sup>266</sup> Vid. J. M<sup>a</sup> Puyol Montero, *Consejo Real de Castilla...*, t. 2, p. 691.

<sup>267</sup> Vid. R. D. García Pérez, *El Consejo de Indias durante...*, p. 108.

<sup>268</sup> Vid. J. M<sup>a</sup> Puyol Montero, *Consejo Real de Castilla...*, t. 2, p. 703.

<sup>269</sup> La fórmula establecida para el Juramento de señores consejeros sacerdotes puede verse en B.P.R., Mss. II/2893, ff. 280r-281r. Así mismo la de consejeros de hábito de las tres órdenes en los ff. 281r-282v.

<sup>270</sup> Los consejeros debían recitar el siguiente juramento: *Que juráis a Dios y a esta ⁊ y a las palabras de los Santos cuatro Evangelios, que usaren bien, y fielmente el cargo de consejero de SM en este su real Consejo de las Indias, en que os ha proveído, y guardaréis el servicio de Dios Ntro Señor y de SM y el bien del Estado, y República de las Indias, y donde vieren el servicio de Rey nuestro Señor, lo alegréis, y lo contrario estovaréis, y si fuere necesario le daréis aviso de ello por vuestra persona, si pudieredes, y sino por vuestras cartas, y fieles mensajeros, y guardaréis las leyes y ordenanzas del Reyno, y las que están hechas, y se hicieren para el buen gobierno y estado de las Indias, y para este real Consejo, y el secreto de él, y diréis y daréis vuestro voto libremente, y que por respeto alguno no dejaréis de hacer lo que Dios y vuestra conciencia os pareciere ser Justicia, y en todo haréis lo que como bueno, y fiel ministro debéis y sois obligado hacer. -Si, Juro. -Si así lo hicieredes, Dios nuestro señor os ayude, y si no os lo demande. -Amen.* B.P.R., Mss. II/2893, ff. 279v-280r.

persona en cuestión. Hubo ocasiones en que se concedía a los ministros la llamada “cédula de preeminencia”, esto es, el dispensarlos de acudir personalmente al Consejo por motivos de salud<sup>271</sup> pero manteniéndoles el sueldo íntegro. Un ejemplo fue Manuel de Silva y Meneses quien a partir de 1739 fue dispensado de asistir a la Cámara de Indias, situación que perduró hasta su muerte en 1743<sup>272</sup>.

Aquellos consejeros que eran jubilados conservaban todos los privilegios y honores de su cargo. De hecho en 1706 Felipe V dispuso que aquellos ministros que hubieren sido jubilados *voten y determinen los pleitos vistos por ellos*<sup>273</sup> a fin de evitar el perjuicio de la dilación de las causas y negocios que se tenían pendientes en el Consejo por razones de la guerra.

### 3.4. Honores y privilegios.

Los consejeros de Indias poseían una serie de privilegios acordes con su empleo. Ciertamente los ministros del Consejo de Castilla ostentaban la primera categoría dentro de los que formaban parte del gobierno por consejos<sup>274</sup>, sin embargo, al contar el Consejo de Indias con la categoría de supremo<sup>275</sup>, hacía que sus miembros también tuvieran preferencias dentro de las ceremonias y actos públicos; además gozaban de privilegios económicos y sociales que potenciaban su propio prestigio social.

En los actos públicos la concurrencia de ministros pertenecientes a cualquiera de los denominados supremos tribunales, como eran además el de Castilla e Indias, los Consejos de Guerra y Hacienda<sup>276</sup>, generaba abundantes conflictos. El Consejo de Castilla tendía en todo momento a

<sup>271</sup> Vid. J. M<sup>a</sup> Puyol Montero, *El Consejo Real de Castilla...*, t. 2, pp. 744-45.

<sup>272</sup> Vid. M. A Burkholder, *Biographical Dictionary...*, p. 117.

<sup>273</sup> Real decreto 29.11.1706. A.G.I., Indiferente General, 583, L. 2, ff. 40-41. Curiosamente esta medida es retomada por Carlos IV en una real resolución de 25.10.1794. Nov. Recop. 4.8.9.

<sup>274</sup> Vid. J. M<sup>a</sup> Puyol Montero, *El Consejo Real de Castilla...*, t. 2, p. 721.

<sup>275</sup> Era Supremo porque le fue otorgado *la Jurisdicción Suprema de todas nuestras Indias Occidentales descubiertas y que se descubrieren, y para la buena gobernación y administración de justicia pueda ordenar y hacer con consulta nuestra las leyes, pragmáticas, ordenanzas y provisiones generales y particulares, que por tiempo para el bien de aquellas Provincias convinieren... el dicho nuestro Consejo sea obedecido y acatado, así como lo son el Consejo de Castilla, y los otros nuestros consejos en lo que les pertenece, y que sus provisiones y mandamientos sean en todo por todos cumplidos y obedecidos en todas partes, y en estos Reinos, y en aquellos, y por todas y cualquier personas*. Recop. Indias 2.2.2

<sup>276</sup> Vid. G. Desdevise Du Dézert, *La España del antiguo...*, pp. 322 y ss.



competir por su superioridad frente a los otros órganos colegiados. Un ejemplo de ello fue cuando en enero de 1738 dicho Consejo remitió un decreto al impresor de la Guía de Forasteros, Antonio Sanz, compeliéndole a realizar algunas modificaciones a la Guía. Básicamente ordenaban que *en la referida nómina de los ministros del Consejo Real de Indias, no se pusiese la palabra de Supremo, ni a los que son en él camaristas, las de Ilustrísima*<sup>277</sup>. Contrario a este decreto, el Consejo de Indias envió una consulta al rey solicitando el mismo tratamiento que el de los consejeros castellanos, sin embargo el rey resolvió a favor de lo establecido por el Consejo de Castilla<sup>278</sup>. A partir de ese momento el Consejo de Indias no cesó en su intención de equipararse en honores y prerrogativas que gozaba el Consejo castellano. La situación fue resuelta hasta el año de 1783 cuando el monarca decidió dar prioridad a la antigüedad de los consejeros, en lugar de considerar la pertenencia a cualquiera de los Supremos consejos de la Monarquía<sup>279</sup>.

### 3.5. Régimen económico.

#### a) Salarios y emolumentos.

Los ministros del Consejo de Indias, salvo raras ocasiones, ya se tratase de ministros togados o de capa y espada, cobraban anualmente los mismos salarios. Según unas listas que la Contaduría del Consejo envió a Carlos II<sup>280</sup>, los consejeros en 1691 percibirían en concepto de salario 707.296 maravedíes o su equivalente 20.200 reales de vellón<sup>281</sup>. En 1717 recibían 3,600 escudos al año; a partir 1725 los ministros comenzaron a percibir

---

<sup>277</sup> A.G.I., Indiferente General, 824.

<sup>278</sup> Rafael García establece que el decreto es de 29.08.1741. Vid. *El Consejo de Indias...*, p. 173. Mientras que Bernard coincide con la fecha del documento que hayamos en el A.G.I. Vid. *Le Secrétariat d'État...*, p. 182.

<sup>279</sup> Nos referimos al real decreto de 11.04.1783 en el que Carlos III trató de poner fin a los conflictos de precedencias. Estableció que dado que los consejos de Guerra y de Indias gozaban de los honores y antigüedad de los de Castilla, los concejeros de estos tribunales debían reputarse como de uno solo, de manera que cuando concurriesen se precediesen indistintamente unos a otros, siguiendo el orden de la antigüedad de cada uno. Vid. R. D. García Pérez, *El Consejo de Indias...*, p. 175.

<sup>280</sup> Vid. E. Schäfer, *El Consejo Real...*, t. 1, p. 271.

<sup>281</sup> Con el propósito de homogenizar las cantidades percibidas por los ministros del Consejo hemos decidido convertir las monedas utilizadas. De tal manera que 350 maravedíes equivalen a un escudo de oro. Vid. <http://www.maravedis.org/tiposmonedas.html> (activo 17.05.2011).

4,000 escudos o 40,000 reales de vellón, cantidades que permanecieron sin revisión hasta el año de 1763<sup>282</sup>.

Además del salario, los consejeros tenían derecho a percibir algunos otros emolumentos que sumados daban como resultado una gran cantidad de salario en especie. En 1691 entre las gratificaciones que un ministro podía recibir estaban la casa de aposento, las tres propinas concedidas en las fiestas de San Isidro, San Juan y Santa Ana, las luminarias ordinarias y la cera de la Candelaria<sup>283</sup>. Pero en el decreto de reforma del Consejo de 1713 el monarca decidió conceder a sus ministros y oficiales como pago a sus servicios únicamente un sueldo anual suficiente para su mantenimiento y decencia, eliminando *cualquier otro emolumento por razón de casa de aposento, ayuda de costa, propinas, y otras obvenciones, respecto de ir consideradas todas en la porción de sueldo*<sup>284</sup>. En 1715 esta situación nuevamente varió cuando el monarca decidió que todos los ministros gozaran el mismo sueldo que gozaban antes de la Nueva Planta<sup>285</sup>, por lo que volvían a recibir las gratificaciones concedidas en 1691.

En 1717 Felipe V además de aumentar a 3,600 reales el salario de los ministros, *también comprendido todo el goce que con sus plazas, y en los respectivos a ellas gozaban antes, así por la gruesa del salario, como por casa de aposento, propinas ordinarias y extraordinarias, ayudas de costa, y otras cualesquiera obvenciones anuales, en cuya consecuencia es mi Real intención, que desde luego cesen todas las demás consignaciones de salarios y emolumentos que por el todo, o en parte hayan dado o por cualquiera modo gozado, y respectivamente las direcciones, y destinaciones particulares*<sup>286</sup>.

Sin embargo, esta situación nuevamente hubo de cambiar, así en abril de 1739 el rey prohibió a todos sus ministros obtener goces duplicados *bien con el título de ayuda de costa, gajes, sobresueldos, gratificación, o con otro, porque tan solamente ha de percibir cada uno el que le corresponda, y tuviere asignado con el empleo que sirve o sirviere*<sup>287</sup>.

<sup>282</sup> Vid. M. Burkholder, *Biographical...*, p. xvi. El decreto de 12.01.1763 otorgaba a los consejeros en concepto salario la cantidad de 48.000 reales al año. Vid. R. D. García Pérez, *El Consejo de Indias durante...*, p. 156.

<sup>283</sup> Real decreto 17.07.1691. A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 47r-52v.

<sup>284</sup> Real decreto 10.11.1713. A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 58v-.62v; 827.

<sup>285</sup> Real decreto 05.08.1715. A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 90r-97r; 827.

<sup>286</sup> Real decreto 20.01.1717. Nov. Recop. 4.2.14. A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 109r-110v, 542, L. 2. ff. 45-49. B.N., Mss. 19251, ff. 13-14.

<sup>287</sup> Real decreto 08.04.1739. Nov. Recop. 4.2.17.

## b) Descuentos.

Cuando el consejero tomaba posesión del cargo debía formalizar el pago de la media anata<sup>288</sup>, esto es, la mitad del importe del verdadero valor de los sueldos, gajes, casas, propinas, luminarias y demás emolumentos que se gozaren en cada oficio, aunque se dieran por asistencia y trabajo personal<sup>289</sup>. Según establecía la Recopilación de Indias estaban obligados al pago de la media anata todos aquellos a quienes se les concediera un título, una merced o una renta, sin excepción de persona alguna<sup>290</sup>. El pago de la media anata normalmente se fraccionaba en dos partes, la primera se debía hacer al contado antes de entregarse el título o despacho del oficio, renta o merced, y la segunda parte dentro del año garantizando su pago mediante una fianza. En 1745 un real decreto dispuso que todos los títulos, cédulas y despachos que adelante se expidieran contuvieran en lugar de la cláusula de haberse satisfecho la media anata se pusiera *la de que antes de obtener el uso, posesión, o juramento de la merced o empleo concedido, ha de preceder tomarse la razón por la Contaduría General de Valores, a que está incorporada la media anata, declarando haberse pagado, y quedar asegurado este derecho, con expresión de lo que importare*<sup>291</sup>.

A la llegada al trono de Felipe V y como consecuencia de la guerra de Sucesión se ordenó retener la mitad del salario anual en todos los empleos militares y civiles de los consejos de Indias y de Castilla<sup>292</sup>. Posteriormente

---

<sup>288</sup> Por regla general todas las gracias y oficios de provisión mediata o inmediata del rey adeuda el derecho de la media anata. Si el oficio se confiere en propiedad se exige por razón de media anata la mitad del sueldo que tuviere señalado en la real hacienda. J. Rezabal y Ugarte, *Tratado del real derecho de las medias-anatas seculares y del servicio de lanzas a que están obligados los títulos de Castilla*, Madrid, 1792, pp. 35 y ss.

<sup>289</sup> Real decreto 22.05.1691 y Cédula 17.02.1649. Que se pague la media anata de todas las mercedes que no sean eclesiásticas. Apéndice del artículo de M<sup>a</sup> E. Rodríguez Vicente, “El derecho de media anata”, en *Poder y Presión fiscal en la América española, siglos XVI, XVII y XVIII*, Madrid, 1986, p.485.

<sup>290</sup> *Que la media anata se pague de todas las mercedes, títulos, oficios y rentas que se dieren por Nos o por nuestros consejos, Virreyes, Capitanes generales y otros ministros, de cualquier mercedes y oficios que no fueren eclesiásticos, siempre que para ello sea necesario cédula o despacho nuestro o de nuestros ministros. Así en las primeras provisiones, como en los ascensos de unas plazas a otras, en la misma especie de moneda en que se pagare el útil de ellas regulándose este derecho por la mitad de lo que el primer año importare el verdadero valor de los sueldos, gajes, casas, propinas, luminarias y demás emolumentos que se gozaren con cada oficio, aunque se den por asistencias y trabajo personal, y de la paga de este derecho no se pueda eximir, ni exima ninguna persona, de cualquier estado, calidad o condición que sea.* Recop. Indias 8.19.4.

<sup>291</sup> Real decreto 24.09.1745. A.G.I., México, 1119.

<sup>292</sup> Vid. G. Bernard, *Le Secrétariat d'État...*, p. 177.

en octubre de 1707 y agosto de 1713 se dispuso que todos los ministros y oficiales debían entregar un donativo del 5% primero y luego un 10% de los salarios y gratificaciones recibidas<sup>293</sup>.

Por otra parte, el retraso en los pagos de los salarios fue tan importante que el propio Consejo remitía continuamente consultas al monarca en este sentido. Mediante una consulta de julio de 1716 el Consejo solicitó a Felipe V el cobro de sus salarios de los fondos provenientes de las dos flotas que acababan de arribar a Cádiz. En principio Felipe V aceptó la propuesta, pero debido a las urgencias económicas que atravesaba la real hacienda, decidió revocar la autorización; por lo que el Consejo nuevamente renovó la petición del pago retrasado de sus nóminas<sup>294</sup>. Para paliar esta situación en 1717 el monarca decidió pagar a su Consejo de los fondos de la Tesorería General del Reino con el fin de evitar que los consejeros se cobraran directamente con los dineros provenientes de las flotas de Indias<sup>295</sup>.

En 1736 el Consejo se quejaba del retraso de cuatro años en el pago de sus nóminas, por lo que solicitaba que al menos se le pagara dos años de los cuatro, ya que sus oficiales no encontraban ya prestamistas que les dejaran dinero para poder subsistir. Según establece Bernard el retraso medio parece haber sido al menos de cuatro a cinco años. En 1745 el marqués de La Ensenada hizo saber al Consejo que se le iba a pagar cinco años de una sola vez<sup>296</sup>.

### 3.6. Cargos internos de los consejeros.

Dentro de la organización interna del Consejo de Indias, los consejeros constituían un cuerpo colegiado con competencias tan complejas y diversas que en ocasiones había necesidad de designar a algunos de ellos para realizar determinadas actividades. Por ejemplo era necesario nombrar un consejero que vigilara el buen hacer de los miembros del Consejo, de allí la decisión de elegir de entre los consejeros a un juez visitador. También era necesario designar semana a semana a un consejero encargado de verificar toda la documentación que se libraba y despachaba dentro del Consejo. Fue de vital importancia que el presidente designara un consejero que se ocupara

---

<sup>293</sup> Vid. J. Fayard, *Los miembros del Consejo...*, p. 103.

<sup>294</sup> Vid. G. Bernard, *Le Secrétariat d'État...*, p. 178.

<sup>295</sup> Real decreto 30.04.1717. A.G.I., Indiferente General., 829, ff. 113rº - 114rº; 542, L. 2, ff. 57-58. B.N., Mss. 19251. ff. 19.

<sup>296</sup> Vid. G. Bernard, *Le Secrétariat d'État...*, p. 179.

de vigilar la cobranza de las multas y condenaciones que imponía el propio Consejo y la Cámara de Indias.

#### **a) Juez visitador.**

Un elemento fundamental dentro de la estructura de la administración de la Monarquía fue precisamente el control de los ministros y oficiales al servicio del rey. Entre los muchos instrumentos que se crearon para tal efecto estaban las visitas<sup>297</sup>, esto es, aquellas inspecciones de procedimiento más o menos secretas para conocer las “actuaciones” de los oficiales dentro del Consejo de Indias<sup>298</sup> y para investigar si los pleitos, expedientes y papales se encontraban enlegajados, matriculados y bien colocados<sup>299</sup>.

De los miembros del Consejo de Indias que estuvieron sujetos a visita fueron los relatores, el escribanos de cámara, sus oficiales, los alguaciles y porteros, abogados, escribanos y demás ministros inferiores quienes debían ser controlados en su trabajo diario y ejecución de sus oficios a través de visitas que debía realizar un consejero señalado anualmente por el presidente<sup>300</sup>.

El juez visitador debía revisar la situación de los libros del Consejo donde se asentaban las cédulas, títulos, consultas, emolumentos necesarios para dar relación al Consejo en pleno. También debía verificar si alguno de los oficiales del Consejo habían actuado conforme a lo dispuesto en las ordenanzas y asegurarse que su trabajo no había causado perjuicio a los litigantes por malicia, descuido u omisión, y si realizaban los cobros de sus servicios de acuerdo a lo establecido en los aranceles fijados por el monarca. También si todos los subalternos del Consejo y demás ministros cumplían

---

<sup>297</sup> Se entendía por visita el acto de jurisdicción con el que algún juez se informaba del proceder de los ministros y oficiales y del estado de las cosas en los distritos de su jurisdicción, pasando personalmente a reconocerlo o enviando en su nombre a quien lo ejecutase (*Diccionario de Autoridades*, 1739). Sobre este tema puede verse L. Zumalacárregui, “Visitas y Residencias en el siglo XVI”, en *Revista de Indias*, nº 7 (1946), pp. 917-21; G. Céspedes del Castillo, “La visita como institución...”, pp. 984-325. Más modernamente C. Molina Argüello, “Visitas y residencias en Indias”, en *III Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano*, Madrid 1973, pp.423-431. Del mismo Congreso el artículo de I. Rodríguez Flores, “Decisiones del Consejo de Indias en materia de visitas y residencias a través de la obra de Lorenzo Matheu i Sanz”, en *III Congreso...*, pp. 433-474.

<sup>298</sup> G. Céspedes del Castillo, “La visita como institución indiana”, en *Anuario de Estudios Americanos*, nº 3 (1946), p. 983.

<sup>299</sup> Vid. A. Martínez Salazar, *Colección de memorias...*, p. 218.

<sup>300</sup> Recop. Indias 2.3.8.

con lo establecido en las leyes y en los autos acordados expedidos por el propio Consejo. Al terminar la visita el juez proveía en un auto definitivo las prevenciones y declaraciones conducentes a lo que hubiese advertido y justificado para dar cuenta al Consejo en pleno y con su acuerdo se cumpliera lo determinado por él<sup>301</sup>.

Rafael García al analizar esta institución en el último tercio del siglo XVIII llegó a la conclusión que muy probablemente Fernando VI hubo de expedir un nuevo decreto en 1747 donde establecía la importancia de practicar la visita a los subalternos del Consejo porque quizá era una actividad que los consejeros no solían efectuar<sup>302</sup>.

#### **b) Juez semanero.**

Los consejeros tenían la obligación de revisar las libranzas de las provisiones, cédulas y cualquier otro documento que se despachaban en el Consejo cada semana. El semanero era una especie de consejero de guardia cuya obligación se extinguía al cabo de una semana debiendo ser sustituido por otro consejero<sup>303</sup>.

La designación del juez semanero se realizaba por “su rueda y turno” cada semana. El portero de Cámara era el encargado de anunciar con antelación a través de un escrito en el tablón del Consejo el nombre del semanero de turno<sup>304</sup>. Solamente para asuntos de justicia, se nombraba como ministro semanero al más moderno de los consejeros<sup>305</sup> quien debía comprobar las provisiones con los decretos y autos, poniéndosele presente los expedientes y recados, junto con los poderes que presentaban las partes<sup>306</sup>.

El juez semanero realizaba una atribución fundamental dentro del Consejo y consistía en verificar si las decisiones emanadas del Consejo estaban acordes con las provisiones, cédulas y cualquier otro documento que se despachaba. Martínez de Salazar relataba que los ministros semaneros se les ponían presentes *las provisiones mandadas a expedir, las leen y cotejan con los decretos y autos de que dimanar, y estando arregladas, firman en el*

---

<sup>301</sup> Vid. A. Martínez Salazar, *Colección de memorias...*, pp. 218-19.

<sup>302</sup> Vid. R. D. García Pérez, *El Consejo de Indias...*, pp. 184-85.

<sup>303</sup> Vid. J. C. Domínguez Nafria, *El Real y Supremo Consejo...*, pp. 347-48.

<sup>304</sup> Ordenanza 77 de 1636. Recop. Indias 2.3.9.

<sup>305</sup> Ordenanza 77 de 1636. Recop. Indias 2.3.9.

<sup>306</sup> A. Martínez Salazar, *Colección de memorias...*, p. 213.

*lugar que les corresponde que es a la mano derecha y al pie ponen segunda rúbrica que da a entender no ofrecérseles reparo, y con esta señal los demás señores ministros firman sin el menor escrúpulo*<sup>307</sup>.

Formaba también parte de las atribuciones del consejero semanero no dejar pasar a la firma del rey las provisiones y cédulas con mala letra, tachadas y enmendadas, o sin asentar los derechos o con cualquier otro defecto, pudiendo romper la que no estuviera a su satisfacción<sup>308</sup>.

### **c) Juez de penas de cámara.**

Anualmente un consejero nombrado por el presidente estaba obligado a ocuparse de la cobranza de multas y condenaciones que se imponían por el Consejo y la Cámara de Indias, ejecutando o mandando ejecutar las sentencias impuestas por dichos órganos y poniendo los medios necesarios para que se cumpliesen sus autos y decretos<sup>309</sup>.

En abril de 1676 Carlos II ordenó el nombramiento de dicho juez a fin de evitar *la notable omisión en las diligencias, en perjuicio de las consignaciones a que se están aplicadas... para lo cual el Consejo deberá dar todo el favor y asistencia que hubiere menester para conseguirla ejecutando las comisiones y despachos que sobre esto les enviare*<sup>310</sup>.

En marzo de 1717 Felipe V confirmó el nombramiento que Andrés de Pez, gobernador del Consejo, hiciera a Diego de Zúñiga como juez de cobranza de las condenaciones y multas que se obtenían en el Consejo y Junta de Indias. En la confirmación del nombramiento, el monarca encomendaba a Zúñiga que cobrara:

*...de cualesquier personas que se hallaren en esta mi Corte y fuera de ella así en estos como en aquellos mis reinos y provincias, y de sus bienes y fiadores todas las cantidades de pesos y maravedís que se están debiendo y en adelante se debieren y adeudaren de las condenaciones que les han sido hechas por los del mi Consejo de las Indias y las que se hicieren*

---

<sup>307</sup> *Ibíd.*, p. 212.

<sup>308</sup> Un real decreto 02.01.1747 establecía que en el despacho de las reales provisiones que se libraren *se guarden inviolablemente todas aquellas solemnidades que las dan el ser de cartas legítimas sin que los oficiales, por cuyos Ministerios corren, falten a lo que deben en sus oficios, tendrán los ministros semaneros especial cuidado en el examen y reconocimiento de ellas para que no exceda en los acuerdos del Consejo*. A.G.I., Indiferente General, 886. Vid. R. D. García Pérez, *El Consejo de Indias durante...*, p. 452.

<sup>309</sup> *Ibíd.*, 179-180.

<sup>310</sup> Recop. Indias. 2.3.23.

*pertenecientes a mi Cámara y Real fisco, Estrados y obras pías, en virtud de mis cartas-ejecutorias, autos y sentencias que están dadas y se dieren en él haciéndolas ejecutar y llevar a pura y debida ejecución y para su cobranza todas las prisiones, embargos, trances y remates de bienes o adjudicación de ellos en caso de no haber postor que fueren necesarios hacerse procediendo en ello como maravedís de mi Real haber conforme a lo establecido y dispuesto por derecho: y llamadas las partes y oídas y sustanciaréis las causas que están pendientes tocantes a esta comisión de cobranzas y todas las demás que en adelante se ofrecieren hasta la sentencia y determinación en primera instancia*<sup>311</sup>.

Pero la expedición del real decreto de noviembre de 1717 en donde se ordenaba que *todos los asuntos que mirasen directa o indirectamente a la real hacienda debían correr privativamente por la vía reservada sin intervención del Consejo y sus ministros*, provocó que el Consejo perdiera el derecho de cobro de las penas de Cámara y condenaciones. Los graves perjuicios que esta situación generó, orillaron a Felipe V a confirmar en octubre de 1720 a Diego de Zúñiga como juez de condenaciones de Cámara a fin de que *continuar con la comisión de recaudación de las condenaciones y multas del Consejo, juntamente con la de composiciones de tierras del Perú y Nueva España, en la conformidad que antes había corrido con obligación de darme cuenta de las materias que ocurriesen conducentes a ellas antes de resolverlas*<sup>312</sup>.

Quince años más tarde y debido a la avanzada edad y achaques de Zúñiga, el monarca nombró a Antonio de Pineda para que le sustituyera *en las dos expresadas comisiones de juez de venta y composición de tierras y de cobranzas de condenaciones de multas con opción a ellas y con la misma calidad de darme cuenta de todas las cobranzas de condenaciones y multas que se hiciesen y también de las ventas e indultos de tierras antes de despacharse las confirmaciones para que Yo tomase la resolución que fuese de mi agrado*<sup>313</sup>.

Tras la muerte de Pineda, en noviembre de 1743, Felipe V nombró a Antonio José Álvarez de Abreu, marqués de la Regalía, como el nuevo juez general para la venta y composición de tierras de Indias y sus islas, así como juez de la cobranza y condenaciones del Consejo<sup>314</sup>. Cargo que desempeñaría hasta su muerte en 1756<sup>315</sup>.

---

<sup>311</sup> A.G.I., Indiferente General, 653.

<sup>312</sup> Real Cédula 05.12.1720. A. Muro Orejón, *Cedulario Americano...*, t. 3, pp. 321-327.

<sup>313</sup> Real Cédula 28.09.1736. A.G.I., Indiferente General, 869B.

<sup>314</sup> Real Cédula 12.12.1743. A.G.I., Indiferente General, 653. A. Muro Orejón, *Cedulario Americano...*, t. 3, pp. 321-327.

<sup>315</sup> Vid. M. A. Burkholder, *Biographical Dictionary...*, pp. 6-7.



Entre las competencias del juez de penas de Cámara estaban la cobranza de las condenaciones y de las multas que se imponía y mandaban sacar en el Consejo y en la Cámara de Indias, así como las que se generaban en las Indias. Para realizar la cobranza en el Nuevo Mundo hubo la necesidad de nombrar subdelegados que le ayudasen a dicho fin. Normalmente los subdelegados indianos eran los regentes, aunque también los gobernadores o auditores de guerra podían auxiliarle en estos cobros<sup>316</sup>. Por el desempeño de esta actividad, el consejero seleccionado percibía 6,000 reales de vellón al año, cantidad que le era satisfecha con el cobro de las propias multas y condenaciones<sup>317</sup>.

Las cantidades obtenidas de las multas y condenaciones pertenecían al propio Consejo, quien podía disponer de este dinero para hacer frente *a sus gastos precisos de estrados, fiestas votivas y otros fines de mi servicio*<sup>318</sup>.

### 3.7. Participación de los consejeros en otros órganos colegiados.

Además de su trabajo diario, los ministros del Consejo debían formar parte de otros órganos colegiados creados con la finalidad de responder a cuestiones concretas. A partir del siglo XVII con la proliferación de las Juntas y Comisiones particulares, temporales o permanentes, fue común que el Consejo de Indias se encontrara representado por algún ministro de capa y espada o togado<sup>319</sup>. En un decreto de 1630, Felipe IV ordenaba que los consejeros de las Indias acudieran a las Juntas que *fueren llamados*, debiendo notificar al presidente o gobernador del Consejo sobre el día y la hora de la asistencia a la Junta correspondiente<sup>320</sup>.

Uno de esos órganos colegiados lo fue la Junta de Competencias<sup>321</sup>. Según una disposición de Felipe IV, el presidente o gobernador del Consejo de Indias era el encargado de nombrar al consejero que debía acudir a dicha

---

<sup>316</sup> Vid. R. D. García Pérez, *El Consejo de Indias durante...*, p. 180.

<sup>317</sup> A.G.I., Indiferente General, 994.

<sup>318</sup> Real decreto 25.02.1736. A.G.I., Indiferente General, 653.

<sup>319</sup> Los consejeros con títulos de nobleza no tenían preferencia en ser nombrados para estas comisiones especiales, ya que solo era decisiva la antigüedad como ministro del Consejo. Ordenanza 80 de 1636. Recop. Indias 2.3.12.

<sup>320</sup> Ordenanza 79 de 1636. Recop. Indias 2.3.11.

<sup>321</sup> Sobre este tema es fundamental el artículo de J. M<sup>a</sup> García-Badell Arias, "La Junta Grande de Competencias... El funcionamiento de dicha Junta puede verse en A. Martínez Salazar, *Colección de memorias...*, cap. 24 y en P. Escolano de Arrieta, *Práctica del Consejo Real...*, t. 1, cap. 29. cap. Más recientemente a D. M. Sánchez, *El deber de consejo...* y J. F. Rodríguez, *Las Juntas de Gobierno...*

Junta, y en caso que éste no pudiera asistir, entonces era necesario nombrar a un sustituto<sup>322</sup>. Uno de los graves problemas que se enfrentaban las Juntas particulares fue la inasistencia de los consejeros, provocando el consiguiente retraso en la resolución de los asuntos. Para paliar esta situación en 1722 Felipe V resolvió que de los cinco ministros que integraban la Junta, cuatro de ellos nombrados ex profeso y el quinto sería designado directamente por él. El contenido del decreto era el siguiente:

*...que en adelante se determinen todas las Competencias por cinco ministros, concurriendo con los cuatro, destinados para ellas, otro mas que he de nombrar Yo para cada una, que se ofrezca: y a este fin mando que, luego que esté formada cualquiera se me haga presente por los que presidieren o gobernaren los consejos, que la formaren, para que con esta noticia pase a la elección del quinto ministro, que tenga por más conveniente y se determine la competencia, dándome cuenta de su decisión, antes de publicarla*<sup>323</sup>.

Otra Junta en la que debían participar ministros del Consejo de Indias fue la de Comercio. Desde su creación, en el último tercio del siglo XVII, la Junta estuvo integrada por ministros indianos<sup>324</sup>, las buenas intenciones que Carlos II puso en su organización pronto dieron síntomas de debilidad, por lo que a finales de ese siglo se convirtió en un órgano casi “moribundo”<sup>325</sup>. En 1705 en plena guerra de Sucesión Felipe V decidió restablecer dicha Junta quedando integrada en sus primeros momentos hasta por cinco miembros del Consejo de Indias<sup>326</sup>, junto con el fiscal de la Casa de Contratación. Si bien esta situación fue excepcional, lo cierto es que dentro de la Junta de Comercio siempre hubo al menos un consejero indiano<sup>327</sup>. Después de las continuas vicisitudes por las que atravesó este órgano colegiado, en 1730 el monarca dio un nuevo impulso al comercio fusionando en un solo organismo a la Junta de Comercio con la de recién

<sup>322</sup> Ordenanza 78 de 1636. Recop. Indias 2.3.10.

<sup>323</sup> M. J. de Ayala, *Notas a la Recopilación de Indias...*, pp. 80-81. Este mismo decreto lo cita A. Martínez Salazar, *Colección de memorias...*, 282. También en A. A. de la N. Recop. 1.4.10.

<sup>324</sup> El primero designado en 1679 fue el secretario del Consejo José de Veitia y Linaje. A su muerte fue nombrado en su lugar Luis Cerdeño y Monzón. P. Molas y Ribalta, “La Junta General de Comercio...”, pp. 22-23.

<sup>325</sup> La Real y General Junta de Comercio fue creada en 1679 con Carlos II, desde entonces parte de sus miembros procedían del Consejo de Indias y de la Casa de la Contratación. Vid. W. J. Kallagan, “A note on the Real y General Junta de Comercio 1679-1814”, en *The Economic History Review*, nº 21 (dic. 1968), p. 519.

<sup>326</sup> Se nombraron a Manuel García Bustamante, Martín de Solís, Manuel de Gamboa, marqués de Casal y Agustín de los Ríos como el fiscal de la Junta. Vid. P. Molas y Ribalta, “La Junta General de Comercio...”, p. 33.

<sup>327</sup> *Ibíd.*, p. 5.

creada Junta de Moneda<sup>328</sup>. El decreto de creación de la nueva Junta no especificó el número de ministros, ni en cuanto proporción de los distintos consejos. Formaron parte de esta Junta Antonio Álvarez Abreu<sup>329</sup> y a su muerte a José de la Quintana como miembros de dicho órgano colegiado<sup>330</sup>.

El Consejo de la Santa Cruzada fue otro de los órganos colegiados en donde debía intervenir un ministro perteneciente al Consejo de Indias a fin de concederle voz y voto en todo lo tocante a la Santa Cruzada en las Indias. El nombramiento del consejero debía realizarlo el propio monarca<sup>331</sup> y no el presidente o el gobernador como en otras ocasiones. Ayala en sus *Notas a la Recopilación* refiere que por decreto de diciembre de 1705, Felipe V nombró a Pedro de Gamarra como ministro encargado de atender los asuntos de la Santa Cruzada, en sustitución de Martín de Solís quien se encontraba gravemente enfermo<sup>332</sup>. En 1734 se nombró como asesor del Consejo de Cruzadas por parte del Consejo de Indias a Antonio José de Pineda Capdeville<sup>333</sup>, tras su muerte fue reemplazado en el cargo por José Cornejo<sup>334</sup>.

Pero todas estas comisiones no hacían más que retrasar el trabajo de los consejeros, ya que el tiempo dedicado a estos asuntos le impedía dedicarse a las cuestiones de sus propias del Consejo, dando como resultado graves inconvenientes para el propio órgano colegiado<sup>335</sup>.

### 3.8. Prerrogativas y atribuciones de los consejeros.

Fueron muchas y muy variadas las prerrogativas y atribuciones que gozaban los ministros del Consejo. La mayor parte de ellas quedaron contempladas en las propias Ordenanzas de 1636 y otras tantas se fueron adaptando a la nueva normativa surgida en los cuarenta y seis años del reinado de Felipe V. No es nuestra intención abarcar todas, sí en cambio queremos resaltar aquellos cuyo contenido nos han parecido de mayor

---

<sup>328</sup> La real Cédula de 15.11.1730. A.G.I., Indiferente General, 445 L.41.

<sup>329</sup> También era miembro de la Junta de Minas, de Tabaco y de Dependencia de Asuntos Extranjeros. Vid. M. A. Burkholder, *Biographical Dictionary...*, pp. 6-7.

<sup>330</sup> *Ibíd.*, p. 13.

<sup>331</sup> *Recop. Indias* 2.3.21.

<sup>332</sup> M. J. de Ayala, *Notas a la Recopilación de Indias...*, p. 86.

<sup>333</sup> Vid. M. A. Burkholder, *Biographical Dictionary...*, 95-96. R. D. García Pérez, *El Consejo de Indias durante...*, p. 176.

<sup>334</sup> *Ibíd.*, p. 31.

<sup>335</sup> R. D. García Pérez, *El Consejo de Indias durante...*, p. 179.

relevancia a fin de contar con los elementos necesarios que permitan una cabal comprensión de la organización interna del Consejo durante el reinado del primer Borbón.

En principio la principal misión de los ministros del Consejo de Indias fue precisamente dar cumplimiento al *deber de consejo*, el cual como ya hemos analizado en el primer capítulo, suponía entre otras cuestiones hacer del conocimiento del monarca las consecuencias de sus decisiones a través de consultas<sup>336</sup>. En 1641 Felipe IV a través de un real decreto facultó a sus ministros para que pudieran representarle con entera libertad todo lo que pudiese convenir a la conservación de sus reinos:

*...mi voluntad es que en adelante no sólo me represente lo que juzgare conveniente, y necesario para su logro, con entera libertad cristiana, sin detenerse en motivo alguno por respeto humano; sino que también replique a mis resoluciones, siempre que juzgare (por no haberlas Yo tomado con entero conocimiento) contravienen a cualesquiera cosa que sea, protestando delante de Dios no ser mi ánimo emplear la autoridad, que ha sido servido depositar en mí, sino para el fin, que me la ha concedido; y que Yo descargo delante de su Divina Majestad sobre mis ministros todo lo que ejecutare en contravención de lo que les acuerde, y repito por este decreto, no pudiendo tener por dichosos, si mis Vasallos no lo fueren debajo de mi Gobierno, y si Dios no es servido en mis dominios, como debe serlo (por nuestra desgracia, miseria, y flaqueza humana) a lo menos lo sea con mas obediencia sus leyes, y preceptos de lo que ha sido hasta aquí*<sup>337</sup>.

Esta misma disposición fue recordada por Felipe V a través de dos reales decretos, uno del año de 1701<sup>338</sup> y otro de febrero de 1715<sup>339</sup>. Por tanto, a través de ambas vías los consejeros contribuían a conformar las decisiones reales respecto de cualquier asunto relacionado con las Indias.

Jean Pierre Dedieu refiriéndose al quehacer de los ministros señalaba que “el ministro no trabajaba con sus manos, no leía expedientes, no escribía, oía y emitía sentencias orales, de palabra. Leía por su cuenta un relator y escribía las sentencias en su lugar un secretario o escribano. Su palabra contenía en sí misma su propia justificación; no tenía que fundamentar las

<sup>336</sup> M<sup>a</sup> I. Cabrera Bosch, *El Consejo Real...*, pp. 143-44.

<sup>337</sup> Real decreto 01.05.1641. A. A. de la N. Recop. 2.4.70.

<sup>338</sup> *Deseando en mi Gobierno los mayores aciertos para el servicio de Dios y bien de mis Vasallos, y debiendo valerme a este fin del Consejo de mis ministros, ordeno y encargo a todos los de ese Consejo que en cuanto pertenezca a su Instituto me consulten con celo, cristiana libertad, y suma pureza, y sin respeto humano; lo que juzgaren sea de mi obligación, y más conveniente a mis Reynos Real.* decreto 24.02.1701. A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 53r -53v; 583 L. 3, ff. 69-70.

<sup>339</sup> Real decreto 10.02.1715. A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 89r-90r; 583 L. 3, ff. 259-262. Muro Orejón, A., *Cedulario Americano...*, t. 2, p. 429.

decisiones o sentencias. Su ciencia, cuando actuaba como verdadero ministro, era por definición, perfecta, sólo la fragilidad humana restaba algo de perfección y sólo otro ministro podía determinar y corregir sus defectos<sup>340</sup>. En otras palabras, entre las obligaciones de un consejero estaban la de asistir a las sesiones del Consejo<sup>341</sup>, escuchar los asuntos y emitir su voto<sup>342</sup>.

En efecto, una vez que los consejeros habían tomado posesión del cargo, era necesario que acudieran todos los días por la mañana y por la tarde al Consejo. A través de un auto acordado de noviembre de 1715 Felipe V ordenó a todos los ministros de los consejos asistir puntualmente para el despacho de los asuntos sin ninguna excepción más que por orden real especial o por enfermedad corporal<sup>343</sup>. Al igual que en el Consejo de Castilla, los ministros y oficial subalterno tenían la obligación de reunirse todos los días con excepción de los domingos, fiestas religiosas de precepto, fiestas de Corte y vacaciones, limitadas a la semana santa y navidades<sup>344</sup>.

Según establecía las Ordenanzas de 1636 los consejeros debían asistir al Consejo tres horas por la mañana y los martes, jueves y sábado dos horas por la tarde<sup>345</sup>. A partir de 1707 un real decreto resolvió que la comparecencia de los ministros debía ser desde el primero de mayo hasta finales de agosto de siete a diez de la mañana y desde el primero de septiembre hasta el último de abril a las ocho a las once de la mañana<sup>346</sup>. Entre los años de 1713 y 1715 los decretos de nueva planta ampliaron el horario de trabajo de los consejeros de la misma manera que se hizo para los ministros del Consejo de Castilla. En estos dos años el horario de todos los tribunales fue de tres horas por la mañana y tres por las tardes de los lunes, miércoles y viernes no siendo fiestas de precepto<sup>347</sup>. Tras este breve período, lo normal fue que los consejeros se reunieran por la mañana, reservando las tardes para el trabajo de las comisiones, examen de los expedientes, reunión de juntas particulares<sup>348</sup>.

---

<sup>340</sup> J. P. Dedieu, "La muerte del...", pp. 480-81.

<sup>341</sup> Ordenanza 11 de 1636. Recop. Indias 2.2.11.

<sup>342</sup> Ordenanzas 15 y 16 de 1636. Recop. Indias 2.2.15 y 2.2.16.

<sup>343</sup> Real decreto 25.11.1715. A. A. de la N. Recop. 2.4.78.

<sup>344</sup> J. Fayard, *Los miembros del Consejo...*, p. 104.

<sup>345</sup> Ordenanza 5 de 1636. Recop. Indias 2.2.5.

<sup>346</sup> Real decreto 02.05.1707. Vid. J. M. Ayala, *Notas a la Recopilación...*, pp. 33-34.

<sup>347</sup> Reglamento expedido al Consejo de Castilla 10.11.1713. A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 69r-75v.

<sup>348</sup> J. Fayard, *Los miembros del Consejo...*, p. 106.

A principio de cada Consejo los ministros debían reunirse en pleno a fin de que el presidente, gobernador o decano<sup>349</sup> pudieran repartir los asuntos por Salas<sup>350</sup>. Una vez que los asuntos se habían remitido a las correspondientes Salas, el mismo presidente o gobernador señalaba a los ministros que debían acudir a cada una de ellas. Encontrándose en sus respectivas salas, los consejeros debían escuchar la lectura de los informes que les eran sometidos a su conocimiento con el objetivo de tomar una decisión acertada.

Los consejeros estaban obligados en todo momento a dar grata audiencia a los particulares no sólo dentro del recinto del Consejo, sino que también debían de asistir en sus casas y posadas a los negociantes y particulares para que les informasen de sus negocios y pleitos, siendo brevemente despachados<sup>351</sup>. Ampliando el contenido de esta obligación, Felipe V a través de una real decreto de diciembre de 1703 ordenó al presidente del Consejo señalar los días y horas que los consejeros debían de dar audiencia a los particulares, de manera que éstos pudieran acudir con la certeza que serían atendidos<sup>352</sup>.

Otra de las misiones de los consejeros era la de acudir a todas aquellas juntas y comisiones que el monarca hubiera establecido, notificándole al presidente o gobernador el día y la hora de las sesiones a las que estaban convocadas<sup>353</sup>. Además, los consejeros que habían sido designados como semaneros, juez visitador o juez de penas de Cámara debían de realizar el trabajo correspondiente.

Al ser los ministros que integraban el Consejo elegidos por el monarca, en principio el cargo era inamovible, no siendo posible su destitución sino en caso de falta grave y comprobada en juicio. Un caso claro lo fueron las decisiones emanadas de la Junta de Indultos creada en plena Guerra de

---

<sup>349</sup> Ordenanza 69 de 1636. Recop. Indias 2.3.1.

<sup>350</sup> Ordenanza 11 de 1636. Recop. Indias 2.2.11.

<sup>351</sup> Ordenanza 81 de 1636. Recop. Indias 2.3.13.

<sup>352</sup> *Habiendo llegado a mi noticia que a los litigantes, y pretendientes se les sigue notable perjuicio de no tener regulares, y francas las Audiencias de los ministros, y siendo esta una tan principal parte de sus ministerios, como lo es de mi Real providencia el atender al consuelo de mis Vasallos, os mando que celéis con virtud, ejemplo, y con la mayor vigilancia en que todos los ministros del Consejo tengan indispensablemente señalada la hora cada día, sea por mañana, o tarde para oír a los que tengan que hablarles por razón del oficio, haciendo saber a estos la hora que señalaren para que puedan acudir a ella, y os encargo atendáis al más exacto cumplimiento de este decreto, a cuyo fin le haréis publicar en el Consejo de Indias, y me daréis cuenta de su observancia.* Real decreto 09.12.1703. A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 57v-58r; 583 L. 3, ff. 99-100.

<sup>353</sup> Ordenanza 79 de 1636. Recop. Indias 2.3.11

Sucesión que juzgó a todos aquellos consejeros que apoyaron la causa del archiduque<sup>354</sup>. Sin embargo, el rey no podía librarse de hecho de un ministro molesto a menos que fuera por un ascenso o una jubilación. El ministro estaba sometido al control del monarca, que establecía reglas de comportamiento para asegurar la libertad e imparcialidad de su trabajo<sup>355</sup>, pero que de ninguna forma podía coartar su acción<sup>356</sup>.

#### 4. El gran canciller, su teniente y el oficial de sello y registro.

##### 4.1. La situación del nombramiento del gran canciller durante el reinado de Felipe V.

Cuando Felipe V subió al trono, el marqués de Carpio, Francisco Álvarez de Toledo, ocupaba el cargo de gran canciller de las Indias. El marqués había obtenido el cargo desde el año de 1688<sup>357</sup> tras haber contraído nupcias con Catalina Méndez de Haro y Guzmán, hija del tercer gran canciller de las Indias y descendiente directo del conde-duque de Olivares<sup>358</sup>. En mayo de 1696 se le concedió el cargo de consejero de capa y espada<sup>359</sup> y desde el año de 1699 presidió al Consejo de Indias gracias a la prerrogativa que Felipe IV otorgó en su día al conde-duque<sup>360</sup>.

Pero la guerra de Sucesión habría que cambiar la posición privilegiada que poseía el gran canciller. Cuando el archiduque Carlos invadió Madrid por primera vez *le hizo enviar recado con un portero del de Indias, para que viniese a presidirle como canciller; excusose el marqués del Carpio con el pretexto de tener a su hija mayor mala; y aunque la misma enfermedad le*

---

<sup>354</sup> Fueron sujetos a proceso y condenados de traidores los consejeros Pedro Gamarra, Sancho de Castro, Ramón Portocarrero, José Huelte y el marqués de la Laguna. Real decreto 09.02.1711. A.G.I., Indiferente General, 432 L. 46, f. 221v.

<sup>355</sup> Así por ejemplo en caso que en el Consejo se viere un negocio o despacho que estuviera involucrado directamente alguno de los consejeros o fuera de algún familiar, no podía hallarse en el Consejo. Ordenanza 85 de 1636. Recop. Indias 2.3.17.

<sup>356</sup> Vid J. P. Dedieu, "La muerte del...", p. 481.

<sup>357</sup> El nombramiento es del 12.09.1688. Vid. E. Schäfer, *El Consejo Real...*, t. 1, pp. 336.

<sup>358</sup> Felipe IV mediante decreto de 27.07.1623 concedió a Gaspar de Guzmán, conde-duque de Olivares el nombramiento de Canciller Mayor de las Indias y el de Registrador del Consejo en juro de heredad y a perpetuidad. El título puede verse en F. Tomás y Valiente, *Los validos en la Monarquía...*, anexo IV y en el estudio de G. Lohmann Villena el texto de A. de León Pinelo, *El gran Canciller de Indias*, Sevilla, 1953, apéndice VIII.

<sup>359</sup> Nombrado el 07.05.1696. Vid. E. Schäfer, *El Consejo Real...*, t. 1, pp. 349.

<sup>360</sup> Por real decreto de 15.10.1653 el monarca concedía al gran Canciller la prerrogativa de presidir el Consejo en ausencia o falta de presidente. *Ibíd.*, p. CLXIII.

*obligó a venirse dentro de pocos días, no concurrió al Consejo*<sup>361</sup>. Por el otro lado, Felipe V mandó a los ministros del Consejo seguirle primero a Guadalajara y después a Burgos, el marqués permaneció en Madrid. Una vez que Felipe V hubo recuperado Madrid, creía que el marqués le había traicionado por no haberle seguido a Burgos<sup>362</sup>, en tanto se hacían las averiguaciones pertinentes, el monarca decidió desterrarlo de Madrid y enviarlo a Oviedo<sup>363</sup>.

Por un real decreto de septiembre de 1706 el marqués de Carpio fue suspendido del cargo de consejero de capa y espada<sup>364</sup>. Si bien al año siguiente se le permitió residir otra vez en Madrid, fue privado de la facultad de entrar en el Consejo y tampoco podía ejercer su oficio<sup>365</sup>. En octubre de 1707 no sólo se ratificó su suspensión como consejero, sino que se amplió al nombramiento de gran canciller<sup>366</sup>.

Sin embargo, la pérdida del ejercicio del cargo de gran canciller de las Indias no supuso en opinión de Guillermo Lohmann “la pérdida de la propiedad del mismo y el goce de sueldos y emolumentos correspondientes”<sup>367</sup>. En efecto, el marqués de Carpio continuó percibiendo el sueldo de canciller y de registrador al menos hasta 1711.<sup>368</sup>

Con la expedición de los decretos de 1713, la plaza de gran canciller y registrador de las Indias fue suprimida ya que el decreto de reforma guardó silencio al respecto<sup>369</sup>. En cambio, las reformas a la Planta del Consejo de 1715 simplemente reconocieron la existencia de la plaza: *He resuelto que el número de pie fijo, y permanente del Consejo se componga en delante de un presidente o gobernador, del gran chanciller (cuando lo hubiere)*<sup>370</sup>. Por tanto, en estos años el cargo de canciller fue incorporado a la Corona. Pero

<sup>361</sup> M. R. de Macanaz, *Obras escogidas*, Madrid, 1847, p.127.

<sup>362</sup> Vid. M. Gómez Gómez, *El sello y registro de Indias...*, p. 103 y G. Bernard, *Le Secrétariat d'Etat...*, p. 3. Sobre este tema puede verse a M<sup>a</sup> V. León Sanz, “La oposición a los Borbones españoles: los austracistas en el exilio”, en *Actas de la IV Reunión Científica de la Asociación Española de Historia Moderna*, vol. 2. Disidencias y exilios en la España Moderna, Alicante, 1996, pp. 469-500 y J. C. Saavedra, “Entre el castigo...”, pp. 469-503.

<sup>363</sup> Vid. H. Kamen, *La Guerra de Sucesión...*, p. 111.

<sup>364</sup> Real decreto de 18.09.1706. Vid. G. Bernard, *Le Secrétariat d'Etat...*, pp. 81 y 213.

<sup>365</sup> Real decreto 05.09.1707. Vid. G. Lohmann Villena, estudio al texto A. de León Pinelo, *El gran Canciller...*, p. CLXVIII.

<sup>366</sup> V. Bacallar y Sanna, *Comentarios de la Guerra...*, t. 1, p. 222. Real decreto de 05.10.1707. Vid. G. Bernard, *Le Secrétariat d'Etat...*, pp. 81 y 212.

<sup>367</sup> Vid. J. M. de Ayala, *Notas a la Recopilación...*, p. 94.

<sup>368</sup> Para Bernard el marqués de Carpio gozó del salario de gran Canciller hasta su muerte acaecida a finales de 1713. G. Bernard, *Le Secrétariat d'Etat...*, p. 212.

<sup>369</sup> Real decreto de 10.11.1713. A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 58v-.62v; 827.

<sup>370</sup> Real decreto de 05.08.1715. A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 90r-97v; 827.



esta incorporación no significó la supresión del sello y el registro de Indias, que en opinión de Margarita Gómez “siguió existiendo y muy activamente, pero sí la intermitencia del título y con ello el deterioro de su honor y calidad<sup>371</sup>”.

Fue hasta mediados de 1756 cuando Fernando VI reconoció a Fernando Álvarez de Toledo y Beaumont, duque de Alba, su derecho al cargo de gran canciller de las Indias<sup>372</sup> con las mismas prerrogativas que en su tiempo se le habían concedido al conde-duque de Olivares<sup>373</sup>.

#### 4.2. Prerrogativas y atribuciones.

Correspondía al gran canciller el mismo salario que gozaba el presidente o gobernador del Consejo<sup>374</sup>. De manera que en 1700 el marqués de Carpio recibía 500,000 maravedís por año<sup>375</sup>. En cambio, para el período de Felipe V, Bernard analizó los salarios que les correspondían a los presidentes y gobernadores del Consejo, así los duques de Uceda y Atrisco obtuvieron 216,328 maravedís anuales como salario, más 185,232 maravedís para propinas y el conde de Frigiliana obtuvo 120,000 reales. De lo anterior se desprende que el gran canciller recibiera estas mismas cantidades de salario<sup>376</sup>.

Además del salario, el gran canciller gozaba del cobro de los derechos del sello y registro que se percibían por todos los documentos extendidos en el Consejo de Indias y provistos del gran sello real. Entre los documentos que requerían sello se encontraban cartas, provisiones o despachos con los títulos o nombramientos de todas clases<sup>377</sup> y algunos otros documentos de

---

<sup>371</sup> M. Gómez Gómez, *El sello y registro...*, pp. 163-64.

<sup>372</sup> Nombramiento 04.03.1756. A.G.I., Indiferente General, 448 L. 49, f. 62v-64.

<sup>373</sup> Vid. R. D. García Pérez, *El Consejo de Indias...*, p. 78 y M. Gómez Gómez, *El sello y registro...*, p. 104.

<sup>374</sup> El gran canciller fue igualado en sus ingresos al presidente. E. Schäfer, *El Consejo Real...*, t. 1, pp. 220.

<sup>375</sup> El último gobernador de los Austrias, Pedro Núñez de Prado, conde de Adanero, gozaba de 500.000 maravedís por año. *Ibidem*, p. 256.

<sup>376</sup> Vid. G. Bernard, *Le Secrétariat d'Etat...*, p. 78.

<sup>377</sup> Entre los títulos que se sellaban y registraban estaban: el de presidente, oidor, alcalde de corte y chancillería, fiscal de Audiencia, virrey, gobernador y capitán general, corregidor, alguacil mayor, tesorero, alférez mayor, escribano de Cámara, escribano de Provincia, escribano de número, notario, notario mayor, chanciller mayor, almirante, adelantado o merino mayor, tesorero de rentas reales, tesorero de Casa de Moneda, oficiales mayores de Casa de Moneda, regimiento, oficial ejecutor, alcalde contador, factor, depositario general, receptor de penas de Cámara y gastos de justicia, general de armada y de flota, almirante de

carácter judicial<sup>378</sup>. El arancel que regulaba estos derechos fue establecido mediante decreto de febrero de 1618<sup>379</sup>, tasas que permanecieron sin variación hasta la expedición del real decreto de marzo de 1740<sup>380</sup>, en el que se actualizó el nuevo arancel, no sólo para el Consejo de Indias, sino para todas las cancellerías metropolitanas<sup>381</sup>.

Aunque el título de gran canceller fuera concedido por juro de heredad, su titular debía realizar el respectivo juramento ante los miembros del Consejo<sup>382</sup>. Además, se le concedía la prerrogativa de poder nombrar a la persona que determinase como sucesor del cargo “para siempre jamás”<sup>383</sup>. Otra de las prerrogativas que concedía el título era poder asistir inmediatamente detrás del consejero más antiguo a cualquiera de los actos públicos como eran las procesiones, las fiestas o el besamanos del rey.

A mediados del siglo XVIII un testimonio escrito por un miembro del Consejo de Indias refería que los herederos en el cargo podrían gozar del cargo de canceller y *ejercer el oficio sin necesidad de expedir otra provisión o cédula, ni aprobación de otros reyes sucesores que la revalidara*<sup>384</sup>. Sin embargo, existían algunas atribuciones que sólo se habían concedido de manera particular al conde-duque, como lo eran tener voz y voto en el Consejo, Cámara y Junta de Guerra de Indias en todos los asuntos

---

armada y de flota, capitanes, alcaides de fortaleza... Real decreto de 11.02.1618. A.G.I. Indiferente General, 448 L 45, ff. 29-32.

<sup>378</sup> Además de títulos, también se cobraba por sellar y registrar licencia para mayorazgo, indulto de pena de muerte, legitimación de hijos bastardos, mercedes para una ciudad, nacionalización. También ejecutoriales de deanato, canonjías, raciones y beneficios, patentes para la predicación. Entre los documentos judiciales que contemplaba el arancel la comisión para recibir probanzas con testigos, prolongación de términos, comisión en causa de apelación, ejecutoria de sentencia definitiva. Las tasas del arancel pueden verse en E. Schäfer, *El Consejo Real...*, t. 1, pp. 220-221.

<sup>379</sup> Real decreto de 11.02.1618. A.G.I. Indiferente General, 448 L 45, ff. 29-32; 615.

<sup>380</sup> Real decreto 06.03.1740. A. A. de la N. Recop. 2.15.10.

<sup>381</sup> Vid. G. Lohmann Villena, estudio al texto A. de León Pinelo, *El gran Canciller...*, p. CLXIV.

<sup>382</sup> La fórmula que debían recitar era la siguiente: *Que juráis a Dios y a esta ⁊ ( o a la del hábito que trajere) y a las palabras de los Santos cuatro Evangelios, que os sabréis bien y legalmente en el ejercicio del oficio de gran canceller de las Indias, de que SM os ha hecho merced, mirando por el beneficio, aumento y conservación de su Real Patrimonio y hacienda, evitando cualquier cosa que no sea en servicio de SM dando noticia de ellos, y que guardaréis secreto en lo que fuere necesario, y las leyes y ordenanzas hechas para el buen gobierno de las Indias, alivio y buen tratamiento de los naturales de ellas, y en todo haréis lo que como bueno, y fiel gran canceller debéis y sois obligado hacer. Decid: -Si, Juro. -Si así lo hicieredes Dios ayude, y si no os lo demande. Diga Amen. -Amen.* B.P.R., Mss. II/2893, pp. 278v-279r.

<sup>383</sup> Vid. E. Schäfer, *El Consejo Real...*, t. 1, p. 219, nota 170.

<sup>384</sup> El testimonio se encuentra en A.G.I., Indiferente General, 1318. Citado por R. M. Gómez Gómez, *El sello y registro...*, pp. 99-100.

de gracia y gobierno o el derecho a sentarse en el sitio inmediato al del presidente o gobernador del Consejo y en ausencia de ellos en el sitio más próximo al decano o ministro más antiguo del Consejo o Cámara de Indias. Otro de los derechos concedido a título particular fue el de presidir el Consejo en caso que el presidente o el gobernador estuvieren ausentes<sup>385</sup>. Para que los sucesores de la casa de Olivares pudieran gozar de dichas preeminencias, requerían una disposición real que a título particular les concediesen tales prerrogativas. En el caso del marqués de Carpio, único gran chanciller dentro del reinado del primer Borbón, dichas prerrogativas le fueron concedidas desde el reinado de Carlos II<sup>386</sup>.

#### 4.3. El teniente y el oficial del sello y registro.

Una de las prerrogativas del gran chanciller fue la de nombrar directamente la persona que realizaría las labores propias de la cancellería del Consejo de las Indias, esto es, al teniente de gran chanciller<sup>387</sup>. El marqués de Carpio nombró a Manuel José Imberto y Leoz<sup>388</sup> como su teniente de gran chanciller y registrador de las Indias, título que fue confirmado por Carlos II en abril de 1696<sup>389</sup>.

El teniente estaba obligado a tener en su poder el sello real quien debía custodiarlo con buen orden y concierto y aseo. Además debía conservar todos los registros de todas las provisiones que se emitiesen en el Consejo ordenados por años. Debía sellar todos los despachos que el Consejo le

---

<sup>385</sup> Según el real decreto de 21.02.1648 *...ejercer el oficio de presidente en el dicho mi Consejo de las Indias y en la Junta de Guerra de ellas en ausencia u otro impedimento, y tener voto en él y en ella, porque esta calidad y prerrogativa tan solamente se dio al dicho conde-duque don Gaspar de Guzmán para los días de su vida y no más...* A.G.I., Indiferente General, 863. Vid. E. Schäfer, *El Consejo Real...*, t. 1, p. 222, nota 180.

<sup>386</sup> Vid. J. M. de Ayala, *Notas a la Recopilación...*, p. 94.

<sup>387</sup> *Ordenamos y mandamos que haya un gran chanciller de las Indias, como al presente le ay, el cual tenga a su cargo nuestros sellos Reales, sirviendo por sus Tenientes la Chancillería, y registro de todas nuestras cartas, provisiones, despachos que se hubieren de despachar, selladas, y registradas, nombrando para ello a las personas que hubieren de servir de Chancilleres, y Registros, así en el dicho Consejo...* Ordenanza 89 de 1636. Recop. Indias 2.4.1.

<sup>388</sup> Natural de Estella (Pamplona), caballero de la orden de Santiago y mayordomo del marqués de Carpio, quien le nombró su teniente de gran chanciller de las Indias. Vid. M. Fernández García, *Parroquias madrileñas de San Martín y San Pedro el Real: algunos personajes de su archivo*, Madrid, 2004, p. 245.

<sup>389</sup> Carlos II otorgó el título de teniente de gran chanciller y registrador de las Indias 07.04.1696. A.G.I., Indiferente General, 863. Vid. M. Gómez Gómez, *El sello y registro...*, pp. 315-316.

enviare, los documentos de oficio, gracia y gobierno expedidos por las secretarías del Consejo. También estaba obligado a sellar y registrar los asuntos de justicia que le remitía el escribano de cámara de justicia<sup>390</sup>.

Para realizar su trabajo, el teniente de gran canciller era asistido por un oficial del sello y registro. El nombramiento de éste oficial también era una prerrogativa del gran canciller, quien podía elegir a la persona más idónea para el cargo, pudiendo además cambiarlo o removerlo según su voluntad<sup>391</sup>. Durante el reinado del primer Borbón ocupó este cargo Agustín del Campo nombrado en el año de 1686<sup>392</sup>. Tras la supresión del cargo de gran canciller, el Consejo de Indias a consulta del monarca nombró de forma interina a Andrés González Vadillo<sup>393</sup>, quien a su muerte en 1733 fue sustituido por Francisco de Mello<sup>394</sup>.

<sup>390</sup> Ordenanza 91 de 1636. Recop. Indias 2.4.3.

<sup>391</sup> Ordenanza 89 de 1636. Recop. Indias 2.4.1.

<sup>392</sup> Título 11.03.1686. *Por cuanto por muerte del señor Francisco Fernández de Grimaldo esta vaca la plaza de oficial del sello y registro del Consejo de las Indias, que Don Isidro de Camargo consejero de la orden del real de Castilla en virtud del poder que tiene don Gaspar de Haro y Guzmán, marqués del Carpio, conde-duque de Olivares, gran chanciller de las Indias y Registrador perpetuo de ellas de mi Consejo de Estado, mi virrey y capitán general del Reino de Nápoles, usando de la facultad que le está concedida por razón de derecho del cargo de gran chanciller para nombrar persona que sirva la dicha plaza ha nombrado a vos D. Agustín del Campo por la suficiencia y buenas partes que concurren en la vuestra para que uséis y ejerzáis el dicho oficio como lo hizo el dicho Don Francisco Martínez de Grimaldo, vuestro antecesor que es mi real voluntad es que después de haber aprobado dicho nombramiento como en virtud de la presente le apruebo lo podáis servir y sirváis. Por tanto mando al gobernador y a los del dicho Consejo que vean esta mi cédula y reciban de vos el dicho Agustín del Campo el juramento que en tal caso se requiere de que bien y fielmente usaréis de dicho oficio y solemnidades os harán, reciban y tengan por tal oficial del dicho sello y registro. Así mismo mando a mi tesorero general que al presente es y adelante fuere del dicho Consejo os pague cada un año setenta y cinco mil maravedís de salario por los tercios de los cuarenta mil de ellos de lo procedido de penas de Cámara y los treinta y cinco mil restantes de los derechos de mesadas eclesiásticas que es la cantidad y situación que tienen los oficios segundos de las secretarías del dicho mi Consejo, y gozó el dicho don Francisco Fernández de Grimaldo vuestro antecesor y que se os acuda con los demás emolumentos y otro tanto para casa de aposento, como se da a cada uno de los dichos oficiales segundos y del género de hacienda según y de la manera que a ellos se les paga todo lo cual habéis de gozar desde el día constares haber hecho el juramento, en adelante todo el tiempo que sirvierais el dicho oficio que con otras cartas de pago y traslado signado de esta mi cédula mando se reciba y pase en cuenta al dicho tesorero general con que así os diere y pagare sin otro recado alguno. Y se declara que ha cumplido con lo que toca al derecho de la media anata: y de la presente tomarán la razón mis contadores de cuentas que residen en el dicho Consejo. Fecha en Madrid a 11 de marzo de 1686. A.G.I., Indiferente General, 443 L. 33, ff. 92v-93v.*

<sup>393</sup> Título 14.12.1717. A.G.I., Indiferente General, 446A, L. 42, ff. 129r-129v. Vid. M. Gómez Gómez, *El sello y registro...*, pp. 318.

<sup>394</sup> Título 19.09.1733. A.G.I., Indiferente General, 446A L. 43, ff. 142r-144r.

Tanto el teniente de gran canciller, como su oficial debían prestar juramento ante los ministros del Consejo<sup>395</sup>.

El salario que gozaba el oficial del sello ascendía a 6,000 reales de vellón, reduciéndose las obviaciones que hasta ese momento percibía por concepto de luminarias extraordinarias<sup>396</sup>. Aún en 1733 Francisco de Mello seguía gozando en concepto de sueldo de la cantidad antes mencionada. Como cualquier otro nombramiento estaba obligado a pagar la media anata, en este caso, debía satisfacer 4,000 reales de vellón, *los tres mil de ellos por el salario y los mil restantes por razón de aprovechamientos*<sup>397</sup>.

El teniente de gran canciller y su oficial estaban obligados a validar todos los documentos que emanaban del Consejo de Indias a través del sellado del documento. Tras la colocación del sello era menester firmar a la espalda el documento. Para finalizar el trámite se requería que todos los documentos quedaran registrados en unos libros creados al efecto, de manera que el documento real contara con todos aquellos elementos necesarios para su validez jurídica<sup>398</sup>.

## 5. Los fiscales y sus agentes fiscales

### 5.1. Situación de los fiscales en el reinado de Felipe V.

El fiscal era el ministro cuyo trabajo consistía en defender el derecho del rey en los pleitos civiles en que tuviera algún interés y en los criminales para poner la acusación de los reos que cometían cualquier delito<sup>399</sup>. En opinión de José María Sesé el fiscal “representaba y ejercía el ministerio público en el Consejo, velaba por el cumplimiento de las leyes y en su caso llevaba ante el tribunal a aquellos que las transgredían”<sup>400</sup>.

---

<sup>395</sup> *Que juráis a Dios y a esta ⁂ (o a la del hábito que tuviere) y a las palabras de los Santos cuatro Evangelios, que bien y fielmente ejercéis el oficio de Teniente de gran chanciller y Registrador de este Real Consejo (o de oficial del sello), de que SM os ha hecho merced y guardaréis el secreto que conviene a él: Y en todo haréis lo que como bueno y fiel ministro estáis obligado = Decid: -Si, Juro. -Si así lo hicieredes Dios os ayude, y si no os lo demande. Decid Amen. -Amen. B.P.R., Mss. II/2893, p. 279r.*

<sup>396</sup> A.G.I., Indiferente General, 863. Vid. R. D. García Pérez, *El Consejo de Indias...*, p. 94.

<sup>397</sup> A.G.I., Indiferente General, 446A L. 43, ff. 142-144.

<sup>398</sup> Ordenanza 92 de 1636. Recop. Indias 2.4.4.

<sup>399</sup> *Diccionario de Autoridades 1732.*

<sup>400</sup> J. M<sup>a</sup> Sesé Alegre, *El Consejo Real de Navarra...*, p. 48.

De acuerdo con la última planta del Consejo fijada por Carlos II, en el Consejo de Indias sólo podía haber un fiscal. Cuando Felipe V ascendió al trono ocupaba la plaza Pedro de Gamarra y Arriaga<sup>401</sup>, quien en 1702 fue promovido a una plaza de consejero togado; en su lugar, se nombró a Manuel de Gamboa<sup>402</sup> como nuevo fiscal, cuyos méritos también le valieron el ascenso a ministro togado. Posteriormente, el 1 de diciembre de 1704 fue nombrado José Agustín de los Ríos fiscal del Consejo de Indias<sup>403</sup>.

Dos años más tarde y en plena guerra de Sucesión, Agustín de los Ríos fue acusado de traición por no acudir a la llamada del rey a Burgos, pero tras varias indagaciones, el monarca decidió restablecerlo de empleo y sueldo, además en 1706 el rey le concedió los honores y antigüedad de consejero togado<sup>404</sup> aunque en realidad continuaba ejerciendo las competencias de un fiscal pero con derecho a voto.

Tras la segunda recuperación de Madrid de manos del archiduque, Felipe V confirmó a Agustín de los Ríos como fiscal del Consejo de Indias<sup>405</sup>, pero con los honores y antigüedad de consejero togado, cargo que ocuparía hasta su jubilación con las reformas del Consejo en enero de 1717<sup>406</sup>.

Las llamadas reformas de Orry de 1713 mantuvieron la plaza del fiscal “general” y crearon la figura de abogado general<sup>407</sup>. Mientras que el fiscal debía participar en la Sala gobierno, los dos abogados generales sólo podían conocer de las materias que se despacharen en la Sala de justicia. Sin embargo, los tres letrados debían participar en el Consejo en pleno. Martín de Mirabal<sup>408</sup> ocupó la plaza de fiscal, en tanto que Pedro Gómez de la Caba y Baltasar de Acevedo fueron nombrados abogados generales.

<sup>401</sup> G. Bernard, *Le Secrétariat d'Etat...*, p. 227.

<sup>402</sup> José Solís refiere que en 1706 los dos ex-fiscales del Consejo, Pedro de Gamarra y Manuel de Gamboa, se aliaron al bando de los austracistas, el primero permaneciendo como ministro del Consejo de Indias y el segundo como ministro del Consejo de Castilla. Por su traición, Felipe V decidió desterrarlos, por lo que decidieron continuar bajo las órdenes del archiduque. En la segunda invasión a Madrid en el año de 1710, Pedro de Gamarra continuó ejerciendo el cargo de ministro togado. El mismo cargo ocupó Manuel de Gamboa dentro del Consejo de Castilla. Vid. “Notas para el estudio...”, pp. 689-92.

<sup>403</sup> Nombramiento del 01.12.1704. A.G.I., Indiferente General, 553A L. 3, f. 606.

<sup>404</sup> Real decreto 27.09.1706 en el que se nombra a Agustín de los Ríos como consejero togado. A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 56v-57r; 583 L. 2, ff. 41-42.

<sup>405</sup> Real decreto de constitución del Consejo de Indias tras la restitución de la Corte en Madrid en 09.02.1711. A.G.I., Indiferente General, 432, L. 46, f. 221v.

<sup>406</sup> G. Bernard, *Le Secrétariat d'Etat...*, p. 214.

<sup>407</sup> Real decreto 10.11.1713. A.G.I., Indiferente General 829, ff. 58v-.62v; 827.

<sup>408</sup> Realizó sus estudios de licenciatura y doctorado en la Universidad de Salamanca, obteniendo la cátedra en Derecho canónico en 1701. Más tarde fue nombrado oidor en la Cancillería de Granada, y posteriormente en la de Valencia. En 1709 fue designado

Pero estos nombramientos pronto cambiaron, Pedro Gómez de la Caba<sup>409</sup> fue promovido como ministro togado del Consejo de Castilla, siendo sustituido por Diego de Valdés<sup>410</sup> quien había sido auditor de la Casa de Contratación de Sevilla. Por su parte, Baltasar de Acevedo también fue promovido como contador del Consejo de Castilla y reemplazado por Juan de la Chica<sup>411</sup>.

Al anularse las reformas de la nueva planta, las figuras de los abogados generales quedaron extinguidas desde entonces<sup>412</sup>, y en su lugar se nombraron dos fiscales:

*...siendo mi más puntual deseo facilitar el breve despacho de los negocios, y la administración de la Justicia, para el mayor alivio y consuelo de mis Vasallos, enterado de que la multiplicidad de los que ocurren en ese Consejo, graban sumamente a un solo fiscal, y que ni con la mayor aplicación es bastante a dar expediente pronto a ellos para que se logre este, y sea menor el trabajo dividido entre dos, he resuelto crear otra fiscalía mas, como se ejecutó en otro tiempo dividiéndose entre ellos los negociados del Perú y Nueva España*<sup>413</sup>.

Para ocupar las plazas el monarca permitió que Martín de Mirabal<sup>414</sup> fuera el primero en elegir la fiscalía y para la otra nombró a Antonio Valcarcel Formento<sup>415</sup>. A los dos fiscales se le concedieron *los honores y antigüedad de consejeros*, esto es voz y voto en el Consejo. Además, el fiscal más antiguo debía ocuparse de todos los asuntos del llamado “Indiferente”<sup>416</sup>, especialmente asuntos relacionados de la trata de negros.

---

presidente de la Casa de Contratación y en 1714 fiscal del Consejo de Indias. En agosto del año siguiente obtuvo la responsabilidad del Perú cuando la fiscalía fue dividida en dos. En las reformas de 1717 fue ascendido al cargo de consejero togado, misma que ocupó hasta su muerte en ese mismo año. Vid. A. Burkholder, *Biographical Dictionary...*, pp. 80-81.

<sup>409</sup> Nombramiento de 30.05.1715 *Con la obligación que habéis de tener de hacer instancia en el en todos los pleitos que en él se trataren y a falta del fiscal general como encargado de toda la conservación de la autoridad real y causa pública*. A.G.I., Indiferente General, 865.

<sup>410</sup> Vid. G. Bernard, *Le Secrétariat d'Etat...*, p. 227.

<sup>411</sup> *Ibidem*, pp. 91-92.

<sup>412</sup> Según el decreto de reforma *los dos Abogados generales Dn Diego de Valdés y Girón, y Dn Juan Manuel de la Chica cuyas plazas quedan extinguidas, volverán al ejercicio de las que tenían cuando vinieron a servir estas, sino estuvieren ya proveídas en otros, y si los estuvieren atenderé a sus méritos, y al menoscabo que han padecido para emplearlos en otras plazas*.

<sup>413</sup> Real decreto 05.08.1715 reduciendo al Consejo a su antigua planta. A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 90r-97r; 827.

<sup>414</sup> Vid. G. Bernard, *Le Secrétariat d'Etat...*, p. 227.

<sup>415</sup> *Ibidem*, p. 228.

<sup>416</sup> Ordenanza 117 de 1636. Recop. Indias 2.6.4.

En enero de 1717 Felipe V confirmó a Antonio Valcarcel en la fiscalía de la Nueva España y nombró a Juan Caballero y Soto<sup>417</sup> como fiscal del Perú. Pero las reformas a la planta del Consejo de 1720 recortaron una de las plazas de fiscal y Juan Caballero hubo de ser retirado de la fiscalía con la mitad del salario. Al año siguiente fue designado Juan de Valcarcel Dato<sup>418</sup> como único fiscal del Consejo, pero ese mismo año el rey le concedió la presidencia de la Chancillería de Valladolid.

Posteriormente en el año de 1721 Felipe V otorgó el título de fiscal del Perú a Pedro Afán de Rivera<sup>419</sup>, quien a los dos años fue promovido a la presidencia de la Audiencia de Valladolid, ocupando su lugar José de Laysequilla y Palacios y Aguilar<sup>420</sup>. En 1738 a Prudencio Antonio de Palacios<sup>421</sup> y en 1744, en los últimos años del reinado de Felipe V a José Manuel de Rojas<sup>422</sup>.

Para los asuntos de Nueva España en el período que analizamos únicamente se nombraron a Antonio Varcárcel y Formento<sup>423</sup>, Tomás de Solá y Soto, quien fue sustituido por Manuel Martínez Carvajal y éste a su vez por José Borrul y Ramón.

Si analizamos las biografías de los personajes que ocuparon el empleo de fiscal es posible advertir que la mayor parte de los personajes que ocuparon la plaza de fiscal carecían de experiencia indiana, ciertamente aún no había

---

<sup>417</sup> Real decreto 20.01.1717 donde se nombraron los ministros y secretarios que habían de componer el Consejo de Indias. A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 106r -107v; 542 L. 2, ff. 35-37. B.N., Mss. 19251. ff. 7-8. A. Muro Orejón, *Cedulario Americano...*, t. 2, pp. 527-528.

<sup>418</sup> Nombrado fiscal del Perú en octubre de 1720. M. A. Burkholder, *Biographical Dictionary...*, p. 129.

<sup>419</sup> *Ibíd.*, pp. 2-3.

<sup>420</sup> Obtuvo la licenciatura en Derecho canónico en la Universidad de Salamanca y fue abogado en el Consejo Real en 1698. Oidor en las Audiencias de Santo Domingo, Quito y Santa Fe. Nombrado fiscal del Perú en 1722 y en 1727 recibió sueldo de ministro togado. Ocupó una de las dos plazas que se agregaron al Consejo en 1738. *Id.*, pp. 68-69. G. Bernard, *Le Secrétariat d'Etat...*, p. 229.

<sup>421</sup> Obtuvo la licenciatura en cánones por la Universidad de Salamanca obteniendo en 1708 licencia del Consejo Real. *Id.*, pp. 91-92.

<sup>422</sup> En el año de 1703 la Chancillería de Granada aceptó a Rojas para realizar prácticas de abogado, con el tiempo fue nombrado oidor de dicho tribunal. El 28.03.1744 fue nombrado fiscal del Consejo de Indias y más tarde le promovieron como ministro togado dentro del Consejo de Castilla. *Id.*, 108.

<sup>423</sup> Obtuvo la licenciatura en cánones por la Universidad de Salamanca, ocupando diversas cátedras en el colegio mayor de Cuenca y Salamanca. Nombrado ministro togado del Consejo de Indias en 1714. Al año siguiente Felipe V le otorgó el título de fiscal del Consejo para asuntos de Nueva España, pero con las reformas del año de 1715 fue reintegrado a su plaza de ministro togado. *Id.*, 129-130.



disposiciones que obligaran a ello<sup>424</sup>. Además, de los dieciséis fiscales que formaron parte del Consejo durante el reinado del primer Borbón, sólo cuatro de ellos permanecieron por más de tres años en el empleo<sup>425</sup>, casi siempre eran promovidos a otras plazas dentro de las Audiencias metropolitanas o al poderoso Consejo de Castilla<sup>426</sup>.

## 5.2. Nombramiento y toma de posesión.

En términos generales la Cámara de Indias era el órgano competente para elaborar la consulta con la propuesta de los posibles candidatos al cargo de fiscal. La excepción a esta regla venía dada en aquellos períodos en donde el propio monarca había decidido extinguir la Cámara de Indias<sup>427</sup>, recayendo sus competencias nuevamente en el Consejo de Indias<sup>428</sup>. Cuando la consulta tenía por objeto los nombramientos de autoridades y oficiales indianos, Felipe V ordenó en 1715 que en las consultas que en adelante se hiciesen las enviasen reducidas a tres sujetos, y no más, como lo practicaba el Consejo de Castilla y antes la Cámara de Indias<sup>429</sup>. Además de enviar en la consulta la terna de los candidatos más a propósito para el empleo fue

---

<sup>424</sup> Los posibles candidatos a ocupar plazas de justicia debían ser personas de las *calidades, letras, virtud, y entendimiento, suficiencia, experiencia, y aprobación que conviene, y respectivamente fuere, y es necesaria para ellos; consultándonoslas, con relación de sus partes, y calidades, como lo tenemos ordenado*. Ordenanza 30 de 1636. Recop. Indias 2.2.30.

<sup>425</sup> Nos referimos a Tomás de Solá, Manuel Martínez Carvajal, José de Burrul y José de Laysequilla.

<sup>426</sup> Fue hasta la expedición de un real decreto de 29.07.1773 cuando *se reconoció la antigüedad para entrar vacantes de plaza desde que cumplan el término de tres años, y que les sirva aunque continúen en sus empleos, contándoseles desde aquella fecha cuando pasen de ejercerla*. Citada por R. D. García Pérez, *El Consejo de Indias...*, p. 188.

<sup>427</sup> La Cámara de Indias fue suprimida el 06.03.1701. Se creó nuevamente el 29.04.1716 y luego se suprimió el 11.03.1717. Reapareció por cuarta vez el 22.12.1721 hasta su extinción el 18.08.1809.

<sup>428</sup> Cuando era el Consejo el encargado de proponer a las personas más idóneas era necesario que se consultasen las que al parecer de cada uno de los del Consejo *tenga más partes para lo que se hubiere de proveer, en la forma que por ordenes, ó decretos nuestros estuviere dispuesta: y la consulta que se hiciere, señalada de todos, en la forma dicha, se nos enviará, para que de las dichas personas, ó de otras, Nos escojamos la que nos pareciere mejor: y de lo que Nos resolviéremos, se le dará aviso al dicho presidente, para que lo diga á la parte: y después que lo haya aceptado, lo diga así mismo en el dicho Consejo*. Ordenanzas 28. Recop. Indias 2.2.38. Según Ayala esta norma quedó abrogada cuando el rey creó la Cámara de Indias, al respecto cabe hacer notar que la aplicación de esta Ordenanza se aplicó en los momentos en los que no había Cámara y que ya hemos mencionado. J. M. Ayala, *Notas a la Recopilación...*, p. 48.

<sup>429</sup> Real decreto 09.06.1715. *Ibíd.*, p. 44.

necesario, a partir de la expedición del real decreto de septiembre de 1726, que la propuesta se acompañase con un extracto sucinto de los méritos y circunstancias de todos los pretendientes aunque no fuesen consultados<sup>430</sup>.

Tras analizar las propuestas de los candidatos más idóneos, el monarca hacía la elección del fiscal y lo remitía al órgano encargado para la preparación del decreto correspondiente a fin de que el personaje elegido pudiera realizar el pago de la media anata correspondiente.

Para tomar posesión del cargo era necesario que el nuevo fiscal realizara el juramento en presencia de los miembros del Consejo<sup>431</sup>; debía realizarse frente a una cruz y con los Evangelios delante<sup>432</sup>. Cuando un fiscal era nombrado ministro togado del mismo Consejo no era necesario volver a prestar juramento, ya que en su momento lo había realizado<sup>433</sup>. En otras ocasiones, en cambio, cuando el fiscal era promovido a cargos fuera del Consejo, aunque se tratase de la propia Casa de la Contratación, era menester realizar de nuevo el juramento de fidelidad.

### 5.3. Prerrogativas y atribuciones

El salario de los fiscales debía ser igual al de los consejeros. Sin embargo, a decir de Janine Fayard “los fiscales eran inferiores en dignidad”, la razón era muy sencilla, no podían votar, “ya que defendían los derechos de una de las partes, tanto si se trataba del rey como del interés de la

<sup>430</sup> Real decreto 04.09.1726. Id., pp. 48-49.

<sup>431</sup> El juramento era el siguiente: *Que juráis a Dios y a esta ⁊ (o a la del hábito que tuviere) y a las palabras de los Santos Evangelios, que bien y fielmente ejercéis de procurador fiscal del reino en este su real Consejo de las Indias, y con todo cuidado miraréis y procuraréis lo que tocara al servicio de Dios, y de SM y a su real fisco, hacienda y patrimonio, y seguiréis y proseguiréis los negocios y pleitos fiscales que hay, y hubiere en este Real Consejo y a él vinieren con todo cuidado, y guardaréis las leyes y ordenanzas del reino, y las que están hechas y se hicieren para este real Consejo y el secreto de él, y en todo haréis lo que como bueno y leal Procurador fiscal de SM y promotor de su real justicia debéis y sois obligado hacer = Decid: -Si, Juro. -Si así lo hicieredes Dios os ayude, y si no os lo demande. Decid Amen. -Amen. B.P.R., Mss. II/2893, p. 283r.*

<sup>432</sup> Es de hacer notar que mientras en los documentos de nombramiento se le designaba “fiscal”, en el documento de juramento se hacía referencia al “procurador fiscal del reino”. Este mismo término se utiliza en el caso del fiscal del Consejo de Castilla. Según Santos Coronas la razón de esta denominación tiene su origen en el período bajomedieval en donde el procurador era quien velaba por los derechos patrimoniales del rey, era el promotor de su justicia velando por el orden social y jurídico de la comunidad. Vid. S. M. Coronas González, *Ilustración y Derecho...*, p. 88.

<sup>433</sup> Como fue el caso del fiscal Agustín de los Ríos o el de Martín de Miraval.

sociedad”<sup>434</sup>. Sin embargo, entre sus preeminencias se encontraban el derecho a sentarse inmediatamente después de los consejeros<sup>435</sup>. Además, en ocasiones, los decretos de nombramiento otorgaban a algunos ministros *los honores y antigüedad de consejeros*<sup>436</sup>, como fue el caso de Martín de Mirabal o de Antonio Valcarcel.

En 1713 el salario del fiscal ascendía a 3,000 reales de vellón, mientras que los dos abogados solo gozaron de 2,000 reales. Las reformas de 1717 aumentaron a 3,600 reales su salario y un decreto de 1724 señaló 4,000 como el salario que debían obtener los fiscales<sup>437</sup>. Para poder cobrar su salario, los fiscales debían presentar un certificado del secretario más antiguo en donde constara haber entregado todos los lunes una lista sobre los pleitos de oficio pendientes por resolución<sup>438</sup>. Obligación que fue eliminada cuando el rey estableció que la paga de los salarios de todos los tribunales de la Corte debía ser satisfecha a través de la Tesorería General con toda puntualidad<sup>439</sup>.

Una de las más importantes obligaciones del fiscal del Consejo de Indias fue “la conservación de la autoridad real y causa pública”, es decir, velar que en el Consejo se hiciera observar la leyes y pragmáticas hechas para remedio de los desórdenes públicos, utilidad y bien común de los reinos, así como hacer ejecutar los decretos expedidos por el Consejo una vez vistos por él<sup>440</sup>. Por ello, podía y debía intervenir en todas las causas que afectasen a la corona y al patrimonio real, así como todos aquellos casos en que se dudase de la preeminencia de la jurisdicción real. En caso de tener noticias

---

<sup>434</sup> J. Fayard, *Los miembros del Consejo...*, p. 156.

<sup>435</sup> Ordenanza 111 de 1636. Recop. Indias 2.5.14.

<sup>436</sup> Un real decreto de 23.06.1760 dirigido al duque de Alba, gran Canciller de las Indias, declaró que el voto concedido o que en adelante se concediere a alguno de sus fiscales o secretarios, sea el último de todos los ministros propietarios de él. Debiéndose aplicar este principio en todos los consejos y tribunales del reino. Vid. J. C. Domínguez Nafría, *El Real y Supremo...*, p. 378.

<sup>437</sup> Vid. G. Bernard, *Le Secrétariat d'Etat...*, p. 93.

<sup>438</sup> Ordenanza 112 de 1636. Recop. Indias 2.5.15. Ayala al analizar el contenido de esta disposición menciona que *Las relaciones y memorial de los pleitos fiscales que están pendientes en su poder, no avisan de ellos los Lunes, porque estas relaciones de todos los negocios que han pasado a su poder para responder y oír sus dictámenes, las forman sus respectivos Secretarios cada mes, con fecha de el, y año en que se les pasó y las presentan a cada Sala del Consejo...*, Vid. J. M. Ayala, *Notas a la Recopilación...*, pp. 102-103.

<sup>439</sup> Real decreto de 20.01.1717 en que se señalan los sueldos que habían de percibir en la Tesorería General, los señores presidente, y ministros del consejo. A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 109r-110v, 542, L. 2. ff. 45-49. Nov. Recop. 4.2.14.

<sup>440</sup> Vid. S. M. Coronas González, *Ilustración y Derecho...*, pp. 45-46.

sobre el incumplimiento de una determinada disposición, el fiscal estaba obligado a denunciarlo ante el Consejo<sup>441</sup>.

Pero como ya mencionamos, las reformas de 1713 establecieron además de la plaza de fiscal, la figura de dos abogados generales. Según el decreto mencionado, el fiscal sólo podía actuar en despachos de gobierno, mientras que los abogados lo debían hacer en asuntos de justicia. Además, dichas reformas establecieron que todo aquello no especificado para las Indias debía de regirse según lo establecido en la Nueva Planta para Castilla, se especificó que los abogados generales estaban también encargados de la vigilancia del cumplimiento de la legislación real<sup>442</sup>, pudiendo entrar en la Sala de gobierno en caso de ausencia del fiscal general.

Cuando en 1715 las reformas a la planta de los consejos, Felipe V decidió dividir la fiscalía del Consejo de Indias en dos: una conocería los asuntos de Perú y la otra los de la Nueva España. Dichas reformas ampliaron las competencias de los fiscales, entre ellas, la de ser informados de la naturaleza de todos los asuntos, para ello los secretarios les debían remitir las listas de cartas provenientes de los buques que llegaban a España en cualquier momento<sup>443</sup>.

La misión más importante del fiscal era la de velar por la legalidad de lo acordado en el seno del Consejo. Para ello, debía estudiar los asuntos que eran remitidos al Consejo y emitir su opinión a través de un dictamen. Con dicho informe los consejeros deliberaban y votaban. En otras palabras, al fiscal le correspondía la defensa de la jurisdicción, patrimonio y hacienda real. También estaba obligado a dar cuenta al monarca del cumplimiento de todas las disposiciones expedidas por él tendentes, sobre todo, aquellas destinadas al buen trato de los indios, así como de la protección a las personas pobres y miserables<sup>444</sup>.

En materia de justicia el fiscal debía dar cuenta de los pleitos que hubiere incoado y de todos los que era función suya seguir<sup>445</sup>. También debía estar pendiente de que las visitas y residencias se tomaran en tiempo y forma

---

<sup>441</sup> Vid. R. D. García Pérez, *El Consejo de Indias...*, p. 192.

<sup>442</sup> Auto acordado del Consejo de Indias de 24.10.1714. A.G.I., Indiferente General, 827.

<sup>443</sup> *...para que los fiscales se puedan enterar de la naturaleza de todos los negocios y causas, y puedan pedir su expediente según esta orden y conforme juzgar en convenir, se les pasará por las secretarías copia de los índices de la Cartas que vinieren en cada ocasión de Galeones, Flotas y Navíos sueltos.* Real decreto de 05.08.1715. A.G.I., Indiferente General, 829, pp.90r-97r; 827.

<sup>444</sup> Ordenanza 98 de 1636. Recop. Indias 2.5.1.

<sup>445</sup> Como la de los pleitos en que el Fisco fuere el reo (Ordenanza 103 de 1636. Recop. Indias 2.5.6.) o cuando el fisco fuere actor (Ordenanza 109 de 1636. Recop. Indias 2.5.12.).

debidos<sup>446</sup> para lo cual podía dejar de acudir al Consejo por las tardes<sup>447</sup>. Además, conocía de asuntos relacionados con la concesión de mercedes y gratificaciones, velando por el cumplimiento de los méritos y calidades aducidas por los pretendientes, así como el monto de la gratificación que se les hubiere concedido<sup>448</sup>.

Según la representación elaborada por el que fuera fiscal del Consejo de Indias, Agustín de los Ríos, para que el fiscal pudiera despachar los asuntos era menester que las secretarías le remitieran:

*...antecedentes, papeles, consultas, resoluciones, y todo cuanto ha precedido de sujeta materia, es o puede ser concerniente a ella, y estos son papeles de 4, de 10, de 20, de 40 y más años, y muchas veces, el que de la otra secretaría, se le agreguen y junten papeles de otro Reino y negociación por si tiene alguna conexión en la dependencia actual y ver en ellos las providencias que allí se tomaron en diferentes tiempos, todo a fin de univocar el régimen universal, o en toda América, o en cada Reino, o en cada Provincia sobre cada punto*<sup>449</sup>.

La Recopilación de Indias establecía que el fiscal debía llevar registro de todo lo actuado ante él. Por ende era menester registrar en un libro los asientos y capitulaciones que se hubieren concedido, teniendo cuenta y razón del cumplimiento de lo establecido en ellos<sup>450</sup>. Un libro donde se asentara todo lo que se pidiera y se proveyere en el Consejo<sup>451</sup>. Asimismo contar con un libro donde apareciera una memoria de todos los pleitos fiscales que hubiere y el estado en que se encontraba cada uno<sup>452</sup> y un libro donde anotar los maravedís que se hubieren librado para la prosecución de las causas fiscales a fin de tener la información necesaria para cobrar las costas a las personas que hayan salido condenadas<sup>453</sup>. Mediante un decreto

---

<sup>446</sup> En realidad las visitas venían desde las Indias *sustanciadas, y determinadas, con que lo que sólo hay que hacer es pasárselas al fiscal, que las reconoce, y si hay puntos en que es preciso hablar, y informar como son cargos de real Hacienda, causa pública o malos procedimientos del residenciado los apunta en papel reservado para cuando llegue el caso de verse porque alegatos, impedimentos no hay que hacerse, aunque por la mayor parte gobernadores y Corregidores de Indias vienen canonizados y absueltos*. Vid. J. Manzano y Manzano, “Un documento inédito...”, p. 328.

<sup>447</sup> Ordenanza 102 de 1636. Recop. Indias 2.5.5.

<sup>448</sup> Ordenanza 42 de 1636. Recop. Indias 2.2.42.

<sup>449</sup> Vid. J. Manzano y Manzano, “Un documento inédito...”, p. 318.

<sup>450</sup> Ordenanza 107 de 1636. Recop. Indias 2.5.10.

<sup>451</sup> Ordenanza 108 de 1636. Recop. Indias 2.5.11.

<sup>452</sup> Ordenanza 109 de 1636. Recop. Indias 2.5.12. Respecto de esta disposición Ayala menciona no haber visto a los señores fiscales del Consejo con semejante libro y después de servir en el tribunal, *tampoco les ha oído en quince años dar cuenta de lo que previene la Ley respecto que el lunes de cada semana entregue el listado para que se vea ante el Consejo*. Vid. J. M. de Ayala, *Notas a las Recopilación...*, p. 101.

<sup>453</sup> Ordenanza 110 de 1636. Recop. Indias 2.5.13.

de 1717, Felipe V ordenó que los fiscales del Consejo de Indias debían llevar además un libro distinto de las causas y negocios de su cargo *para los expedientes de secretaría, en que por cualquier manera interviniesen a fin de que formando para ellos listas que lleven el Consejo, se faciliten en sus instancias y recuerdos los expedientes*<sup>454</sup>.

#### 5.4. Los agentes fiscales.

Para que el fiscal del Consejo de Indias estuviera en posición de dar cabal cumplimiento a las tareas que las diversas disposiciones establecían requería ayuda de oficiales letrados. Las ordenanzas de 1571 fueron las primeras en reconocer la necesidad de nombrar un agente fiscal que facilitara la expedición de todos los despachos que llegaban a manos del fiscal<sup>455</sup>. Cuando la fiscalía se dividió en dos también se crearon dos agentes fiscales, uno para el Perú y otro para la Nueva España<sup>456</sup>.

Si bien las reformas de 1691 suprimieron las plazas de solicitadores, un real decreto de marzo de 1696 autorizó a los fiscales a nombrar a su ayudante fiscal cuyo salario debía salir del producto del cobro de multas y condenaciones<sup>457</sup>. Las reformas a la planta del Consejo de Indias de 1715 fijaron las plazas de agentes fiscales para cada uno de los dos virreinos. Desde entonces hubo dos solicitadores trabajando de manera directa con los fiscales del Consejo. En una consulta de 1737 el Consejo insistía en la necesidad de nombrar un nuevo solicitador *por ser tantos los despachos que deben conocer los fiscales*, sin embargo, el rey se rehusó a ello<sup>458</sup>.

Martínez Salazar mencionaba que el nombramiento de los agentes fiscales era una prerrogativa de los fiscales<sup>459</sup>, quienes debían elegir entre *abogados recibidos y aprobados en la facultad, experimentados en el obrar y proceder de todo cuanto se ha de ver y despachar en este Consejo y despachar para las Indias*<sup>460</sup>.

---

<sup>454</sup> Real decreto 20.01.1717. A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 99 v -106r; 827.

<sup>455</sup> *Porque mayor solicitud y cuydado aya en las cosas de nuestro fisco, queremos que aya un solicitador fiscal, que solicite y procure las cosas que el fiscal del consejo de Indias le encargare.* Ordenanza 64 de las de 1571.

<sup>456</sup> Vid. E. Schäfer, *El Consejo Real...*, t. 1, p. 262, nota 11.

<sup>457</sup> Vid. G. Bernard, *Le Secrétariat d'Etat...*, p. 93.

<sup>458</sup> Consulta de 16.09.1737. A.G.I., Indiferente General, 824.

<sup>459</sup> A. Martínez de Salazar, *Colección de memorias y noticias...*, p. 96.

<sup>460</sup> Vid. J. Manzano Manzano, "Un documento inédito...", p. 318.

Una vez que el fiscal había nombrado a su ayudante era menester expedir el título de nombramiento a fin de que se pagara la media anata y se hiciera el juramento respectivo. Como cualquier cargo que se ocupaba en el Consejo, el solicitador fiscal debía pronunciar las palabras necesarias para entrar en posesión de su cargo<sup>461</sup>.

Los agentes fiscales debían solicitar y procurar que todas las cosas que el fiscal del Consejo de Indias les encargare se cumplieran a tiempo, debiendo tener cuidado de tomar de las secretarías y contaduría los papeles que se remitieren<sup>462</sup>. Su salario en 1718 era de 4,500 reales de vellón anuales, cantidad que fue aumentada al doble a partir de una reforma del año de 1756<sup>463</sup>. Los solicitadores fiscales al igual que los fiscales tenían condicionado el pago de salarios en razón al cumplimiento de algunas de sus obligaciones. En este caso en particular, el agente debía presentar a la Contaduría del Consejo el libro en donde había de asentar las condenaciones que se hicieren cada semana<sup>464</sup>.

Normalmente el solicitador fiscal era ayudado por oficiales supernumerarios que colaboraban estrechamente en su misión de relevar a los titulares de algunos de los trabajos, pero el decreto precisaba bien que los fiscales mantenían el derecho a revocar a los supernumerarios y reemplazarles cuando juzgaren conveniente<sup>465</sup>.

---

<sup>461</sup> La fórmula del juramento era la siguiente: *Que juráis a Dios y a esta ⁂ ( o a la del hábito que tuviere) y a las palabras de los Santos cuatro Evangelios, que bien y fielmente usaréis el cargo y oficio de solicitador y ayudante del fisco real de SM en todos los negocios comenzando y que se ofrecieren, vinieren y ocurrieren a este real Consejo de Indias, y haréis las diligencias que fueren necesarias con todo cuidado, y guardaréis el secreto de todo lo que conviniere se guarde y se os encargare, y haréis todo lo demás que como bueno y leal ministro debéis y sois obligado como tal solicitador y ayudante = Decid: -Sí, Juro. -Si así lo hicieredes Dios os ayude, y si no os lo demande. Decid Amen. -Amen.* B.P.R., Mss. II/2893, p. 279r.

<sup>462</sup> Ordenanza 113 de 1636. Recop. Indias 2.5.16.

<sup>463</sup> Vid. G. Bernard, *Le Secrétariat d'Etat...*, p. 93.

<sup>464</sup> Ordenanza 181 de 1636. Recop. Indias 2.10.8.

<sup>465</sup> Vid. G. Bernard, *Le Secrétariat d'Etat...*, p. 94.

## 6. Los secretarios.

### 6.1. Situación de los secretarios en el reinado de Felipe V.

Angel Antonio Henry refiriéndose a los secretarios y su labor afirmaba que su instituto, así como el objeto de las secretarías era cuanto pertenece a la dirección y gobierno del ramo o ramos para que estaba establecida, esto es, todos los asuntos gubernativos: *Ocúpanse pues los secretarios y sus secretarías, por naturaleza de su empleo, en escribir y hacer escribir, formar o dictar todos los papeles pertenecientes a estos asuntos gubernativos, y entender en su despacho ya público, ya reservado*<sup>466</sup>. Fue tan importante la figura del secretario que Gaspar Ezpeleta se refería a los secretarios *como un empleo tan honrada servidumbre, que llega casi a tener parte en el dominio del príncipe a quien asiste*<sup>467</sup>.

Las Ordenanzas del Consejo de 1571 establecieron que en el Consejo debía haber un secretario que refrendara las “cosas de gobernación”<sup>468</sup>. Pero con el tiempo y el aumento en el volumen del trabajo hubo la necesidad ampliar el número de secretarios de gobernación, lo cual dio lugar a que el Consejo en una petición dirigida al rey solicitara la creación de otra secretaría. En respuesta a dicha petición, Felipe III a través de una real orden de 1604 decidió ampliar a cuatro el número de secretarios de gobernación que habían de despachar en el Consejo y la Cámara de Indias. Dos de los secretarios trabajarían en el propio Consejo y los otros dos en la Cámara de Indias<sup>469</sup>. Pero tras la desaparición de la Cámara de Indias, quedaron en el Consejo solamente dos secretarios<sup>470</sup>.

Aún en el decreto de reforma del Consejo de 1691, Carlos II continuó con el criterio de preservar la figura de los dos secretarios a fin de dar salida a los despachos de gobernación<sup>471</sup>. En la reforma a la planta de 1701 no hubo variaciones, permaneciendo los dos secretarios dentro de la

<sup>466</sup> A. A. Henry Veira, *El oficinista instruido...*, p. 30.

<sup>467</sup> G. Ezpeleta y Mallol, *Práctica de secretarios, que contiene una concisa explicación de las calidades de este empleo, distinción de las cartas misivas y declaración de las circunstancias principales de que deben constar para tenerse por bien escritas*, Barcelona, 1758, p. 2.

<sup>468</sup> Ordenanza 1 de 1571. Vid. M. Moranchel Pocaterra, “Las Ordenanzas del Real...”, 2001, p. 305.

<sup>469</sup> Real decreto 31.12.1604. A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 27v-35v.

<sup>470</sup> Real Orden e instrucción 16.03.1609. A.G.I., Indiferente General, 829.

<sup>471</sup> Real decreto 17.07.1691. A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 47r-52v; 827.



organización del Consejo. Uno de los secretarios conocería de los asuntos relacionados con Perú y Tierra Firme y el otro lo correspondiente a la Nueva España e Isla de Barlovento<sup>472</sup>. A la llegada al trono de Felipe V eran secretarios del Consejo Manuel de Aperregui por la negociación de la Nueva España<sup>473</sup> y Domingo López de Calo y Mondragón<sup>474</sup> por la de Perú.

Como consecuencia de la desobediencia de algunos de los miembros del Consejo de Indias de seguir a Felipe V a Burgos, en 1707 la Junta de Indultos decidió sustituir a los secretarios de dicho Consejo. De manera que Domingo López de Calo fue sustituido en la secretaría del Perú por Bernardo Tinajero de la Escalera<sup>475</sup> y Manuel de Aperregui por Gaspar de Pinedo<sup>476</sup>.

Tres años más tarde después de haber sido expulsado de Madrid, el archiduque entró en la Corte el 20 de septiembre de 1709 sin poder configurar a ningún órgano indiano. Por su parte, Felipe V decidió salir de Madrid y enviar a Valladolid primero y luego a Vitoria a los miembros del Consejo de Indias, entre ellos, los dos secretarios, Bernardo Tinajero y Félix de la Cruz Aedo<sup>477</sup>.

Las reformas de 1713 aumentaron una secretaría, de manera que hubo un secretario por cada una de las tres Salas en que quedó dividido el trabajo dentro del Consejo de Indias<sup>478</sup>. En el decreto se señaló como secretarios a Francisco de Castejón, Bernardo Tinajero y Diego de Morales Velasco<sup>479</sup>. Posteriormente, el real decreto de 1715 dejó sin efecto las anteriores reformas, volviendo a funcionar únicamente las dos secretarías<sup>480</sup>, quedando como titulares Diego de Morales Velasco para Nueva España y Francisco de Castejón para el Perú, ya que desde 1714 Bernardo Tinajero de la Escalera había sido nombrado secretario de Estado y del Despacho de Indias y

---

<sup>472</sup> Real decreto 06.03.1701. A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 53v-56r; 827; 583 L. 3, ff. 73-77.

<sup>473</sup> Nombramiento 23.03.1700. Vid. E. Schäfer, *El Consejo Real...*, t. 1, p. 354.

<sup>474</sup> Vid. G. Bernard, *Le Secrétariat d'Etat...*, p. 229.

<sup>475</sup> Título de nombramiento 05.10.1706. A.G.I., Indiferente General, 542 L. 1, ff. 88-93.

<sup>476</sup> Título de nombramiento 05.10.1706. Vid. G. Bernard, *Le Secrétariat d'Etat...*, p. 230. Permaneció en dicha secretaría del Perú hasta 25.06.1709, posteriormente Bernardo Tinajero de la Escalera le sustituyó cuatro meses (desde 02.07.1709 a 20.10.1709). A.G.I., Indiferente General, 598 L. 36.

<sup>477</sup> Comenzó a despachar como secretario del Perú desde 05.11.1709 hasta el 24.02.1711 que fue sustituido por Bernardo Tinajero de la Escalera hasta el 23.11.1711. Loc. Cit.

<sup>478</sup> Real decreto 10.11.1713. A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 58v-62v; 827.

<sup>479</sup> A partir de 05.09.1713 suscribió los despachos de la secretaría de Nueva España. A.G.I., Indiferente General, 598 L. 37.

<sup>480</sup> Real decreto 05.08.1715. A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 90r-97r; 827.

Marina<sup>481</sup>.

En las reformas a la Planta del Consejo de 1717<sup>482</sup> el monarca concedió el nombramiento de secretario de la Nueva España a Andrés de Elcorobarrutia<sup>483</sup> y para el Perú a Francisco de Quincoces, quien fue sustituido ese mismo año por Francisco de Arana<sup>484</sup>. Tras la muerte de éste último el rey nombró a Francisco Díaz Román<sup>485</sup> como secretario del Perú y en 1729 Jerónimo Uztáriz<sup>486</sup> sustituyó a Andrés de Elcorobarrutia para el despacho de los asuntos de Nueva España. Empero, en el año de 1732 murieron ambos secretarios por lo que Felipe V hubo de autorizar al secretario de la Junta de Azogues, Francisco Antonio de Maturana<sup>487</sup> firmar y refrendar como secretario todos los despachos de ambas secretarías.

Posteriormente Miguel de Villanueva<sup>488</sup> fue nombrado secretario para los asuntos del Perú, cargo que ocuparía hasta el reinado de Fernando VI. En cambio para la secretaría de la Nueva España se nombró primero a Juan Ventura Maturana<sup>489</sup>, a quien le sucedieron en el cargo Simón Mozo de la Torre<sup>490</sup>, Francisco Campo de Arbe<sup>491</sup> y Fernando Triviño y Figueroa<sup>492</sup>.

<sup>481</sup> Nombrado el 30.11.1714. Vid. G. Bernard, *Le Secrétariat d'Etat...*, p. 229.

<sup>482</sup> Real decreto 20.01.1717. A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 106r -107v; 542 L. 2, ff. 35-37. B.N., Mss. 19251. ff. 7-8.

<sup>483</sup> Ocupó la plaza de secretario de Nueva España hasta su muerte acaecida el 07.02.1729.

<sup>484</sup> A.G.I., Indiferente General, 542 L. 2, ff. 61-62. B.N., Mss. 19251. ff. 21-22.

<sup>485</sup> Nombrado el 29.01.1727. Vid. G. Bernard, *Le Secrétariat d'Etat...*, p. 230.

<sup>486</sup> Título de nombramiento 29.01.1727. A.G.I., Indiferente General, 445 L. 41, ff. 33r-34v.

<sup>487</sup> *Para que por el fallecimiento de Francisco Díaz Román y Gerónimo de Usatiz, secretarios que fueron del Consejo de Indias, no dejen de tener curso los títulos y cédulas que hubieren de expedirse por el referido Consejo, ni se ocasione a las partes, los perjuicios que se les seguirá de estar detenidos, por no haber quien los refrendase. He resuelto refrendar a los mencionados títulos y cédulas en íntegro, nombrando personas que sirvan las secretarías del Perú y de Nueva España, para lo cual concede a SE la facultad necesaria y de su real orden participando esta deliberación para que la haga presente el Consejo, y se de de puntual cumplimiento. Sevilla a seis de febrero de 1732. Sr. Dn Joseph Patiño, Dn Francisco Antonio de Maturana.* A.G.I., Indiferente General, 652; 542 L. 2, ff. 425-426.

<sup>488</sup> Título de nombramiento 01.05.1732. A.G.I., Indiferente General, 445 L. 41, ff. 271-274.

<sup>489</sup> Título de nombramiento 01.03.1732. A.G.I., Indiferente General, 445 L. 41, ff. 274-277. En 1735 Juan Ventura ocupaba también la plaza de oficial mayor de la Secretaría de Estado y del Despacho de Indias, situación que provocó un gran descuido por su parte dentro de la Secretaría de Nueva España del Consejo de Indias. El problema fue resuelto cuando Felipe V decidió cesarlo del cargo de oficial mayor del Despacho de Indias. Vid. M. Gómez Gómez, *El sello y registro...*, pp. 183-84 y en *Actores del documento...*, pp. 393-94.

<sup>490</sup> Título de nombramiento 21.04.1737. A.G.I., Indiferente General, 446 L. 43, ff. 372-374v.

<sup>491</sup> Título de nombramiento 01.02.1738. A.G.I., Indiferente General, 447 L. 45, ff. 8-10v.

<sup>492</sup> Título de nombramiento 30.04.1740. A.G.I., Indiferente General, 447 L. 45, ff. 112-113.

## 6.2. Nombramiento y toma de posesión.

Según advierte Rafael García durante el siglo XVIII no existió ningún requisito para ser nombrado secretario del Consejo<sup>493</sup>. En realidad no se necesitaba ni siquiera estudios universitarios; empero, era necesario contar con una serie de saberes para ejercer el empleo, entre ellos, el conocimiento de varias lenguas, incluyendo el latín, así como cierta erudición y cultura general<sup>494</sup>.

Los secretarios normalmente eran personas que tenían una amplia experiencia práctica a partir de su formación como oficiales de las secretarías. Por ello, el ingreso como secretario se hacía normalmente desde abajo, en una de las últimas mesas de la oficina correspondiente y con un sueldo aún escaso; a partir de allí se iba ascendiendo, con el paso del tiempo y las vacantes, hasta alcanzar el puesto de oficial mayor y lograr la plaza más alta, la de secretario<sup>495</sup>.

En los primeros años del siglo XVIII y en los períodos de funcionamiento de la Cámara de Indias, ésta era la encargada de proponer al monarca la terna de los posibles candidatos a secretarios del Consejo. Cuando el trabajo de la Cámara cesaba por decisión real, el Consejo era el órgano competente para realizar la propuesta de los candidatos y presentarla al monarca a través de una consulta. Sin embargo, el real decreto de 20 de enero de 1717 estableció que el titular de la secretaría de Estado y del Despacho de Guerra, Marina e Indias fuera el encargado de tramitar cerca del rey los asuntos que consultara la Cámara, actuando como un filtro, contando con la plena confianza real<sup>496</sup>. A partir de 1720 el órgano

---

<sup>493</sup> Vid. R. D. García Pérez, *El Consejo de Indias...*, pp. 245-46.

<sup>494</sup> Gaspar de Ezpeleta señalaba que *bastará que el secretario sea gramático, retórico, histórico, político y práctico en las cuatro principales lenguas castellana, latina, francesa e italiana*. Vid. *Práctica de secretarios...*, p. 11.

<sup>495</sup> C. de Castro Monsalve, "Las Secretarías de los consejos...", p. 196.

<sup>496</sup> Según relata Ricardo Gómez el ministro de Justicia se reunía en gabinete con el rey a fin de despachar los nombramientos. En el gabinete el secretario de Estado y del Despacho de Justicia leía al monarca el expediente, influyendo a no dudarlo, en la voluntad real para que designara a quien "desea" su propio ministro. La resolución real acordada en el gabinete se anotaba por el propio secretario de Estado al final o al reverso del expediente. Después el ministerio de Justicia expedía a la Cámara el decreto de nombramiento con la fecha del día del despacho. Vid. R. Gómez Rivero, "Las competencias del Ministerio de Justicia en el Antiguo Régimen", en *Documentación Jurídica* n° 65-66 (1990), p. 255.

encargado de hacer dicha consulta lo fue el secretario de Estado y del Despacho que conociera en específico los asuntos indianos<sup>497</sup>.

El título de secretario de algunos consejos en ocasiones fue previo al nombramiento de secretario del rey, pero éste aparecía condicionando la posibilidad de ejercer el cargo; en otras palabras, era posible designar a alguien secretario de un Consejo sin que fuera secretario del rey; empero, era precisa esta última calidad para entrar en el desempeño del oficio. Así por ejemplo en el nombramiento de Jerónimo Uztariz el rey concedió al secretario en el mismo título el derecho de *refrendar cartas, provisiones, albalaes y otros despachos que yo firmare y mandare tocantes a la negociación de la expresada secretaría pues para ello os doy todo el poder y facultad que requiere y fuere necesario*<sup>498</sup>.

Tras la expedición del título de nombramiento, el secretario elegido debía pagar la media anata y acudir ante el presidente y los consejeros a fin de otorgar el juramento<sup>499</sup>.

Cuando el nuevo secretario entraba a servir su oficio era menester que se le entregase por inventario y memoria todos los papeles y escrituras que hubieren en poder del anterior secretario y se le hiciera cargo de ello<sup>500</sup>. Ayala al comentar el contenido de dicha disposición añadía que en ella no se señalaba la persona que debía entregar la documentación y tomar cuenta de ello, incluso llegó a afirmar que dicha entrega jamás se había practicado<sup>501</sup>.

---

<sup>497</sup> En 1720 los asuntos indianos los tramitaba el secretario de Estado y del Despacho de Guerra, Marina e Indias y desde 1721 el secretario de Estado y del Despacho de Marina e Indias.

<sup>498</sup> Título de nombramiento de Jerónimo de Uztariz como secretario de la negociación de la Nueva España 29.01.1727. A.G.I., Indiferente General, 445 L. 41, ff. 33-34v.

<sup>499</sup> La fórmula de juramento era: - *Que juráis a Dios y a esta ⁊ ( o a la del hábito que tuviere) y a las palabras de los Santos cuatro Evangelios, que serviréis bien y fielmente al rey nuestro señor en el oficio de secretario de este Real Supremo Consejo en que os ha proveído, y le ejerceréis procurando lo que tocara al servicio de Dios Nuestro Señor y de SM y estorbando lo contrario y guardaréis las leyes, ordenanzas e instrucciones de este Real Consejo hechas y que se hicieren y el secreto se él, y en todo haréis lo que como bueno y fiel secretario debéis, y sois obligado a hacer. = Decid: -Si, Juro. -Si así lo hicieredes Dios os ayude, y si no os lo demande. Decid Amen. -Ame. B.P.R., Mss. II/2893, p. 283v-284r.*

<sup>500</sup> Ordenanza 121 de 1636. Recop. Indias 2.6.8.

<sup>501</sup> J. M. Ayala, *Notas a la Recopilación...*, p. 108.

### 6.3. Prerrogativas y atribuciones.

Ordinariamente aquellos a quienes se concedía el título de secretario del rey pasaban a desempeñar las secretarías del Consejo sirviendo junto al monarca, de allí su importancia<sup>502</sup>. Saavedra Fajardo afirmaba que *del entendimiento, no de la pluma, es el oficio de secretario. Si fuese de pintar las letras, serían buenos secretarios los impresores*<sup>503</sup>.

El salario de los secretarios a finales del siglo XVI fue de 23.009 reales<sup>504</sup>. Dicha cantidad varió a través de un real decreto de marzo de 1705 donde se señaló la cantidad de 6.500.628 maravedís anuales como salario del secretario<sup>505</sup>. Las reformas a la planta del Consejo de Indias de 1713 modificaron la cantidad a 30.000 reales (3.000 escudos)<sup>506</sup>. Además, desde 1715 cualquier oficial o ministro del Consejo tuvo prohibido el cobro de cualquier otra cantidad distinta de la de su salario, quizá por ello en las reformas de 1717 el monarca decidió aumentar el salario anual del secretario a 36.000 reales (3.600 escudos)<sup>507</sup>. Finalmente a través de un real decreto de marzo de 1724 se concedió a los secretarios un salario de 40.000 reales, cifra que no varió el resto del reinado de Felipe V<sup>508</sup>.

Además de sus salarios, los secretarios tenían derecho al cobro de la mitad del arancel que se devengaba por la expedición de los despachos de partes<sup>509</sup>. En 1722 Felipe V expidió el arancel de los derechos *que han de percibir y cobrar los Secretarios de las dos secretarías de Indias del Perú y*

---

<sup>502</sup> Su importancia radicaba sobre todo en la materialización de las órdenes del rey, la redacción de los despachos, el refrendo de los documentos y por supuesto la asesoría que de manera informal podían realizar. Vid. J. A. Escudero López, *Los secretarios de Estado...*, vol. 2, p. 325 y 367.

<sup>503</sup> D. Saavedra Fajardo, *Idea de un príncipe político...*, empresa 56.

<sup>504</sup> Vid. G. Bernard, *Le Secrétariat d'Etat...*, p. 84.

<sup>505</sup> Se trataba de sólo un diez por cierto menos del que obtenían los consejeros o fiscales. A.G.I., Indiferente General, 826.

<sup>506</sup> Real decreto 10.11.1713. A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 58v-.62v; 827.

<sup>507</sup> Real decreto 20.01.1717. A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 109r-110v.

<sup>508</sup> Fue en 1773 cuando el rey señaló que la presidencia del Consejo de la India debía ser responsable de muchas cuestiones relacionadas con la Cámara, con los asuntos del gobierno o de otro tipo temas que se discutieron y resolvieron con frecuencia en juntas particulares. Vid. G. Bernard, *Le Secrétariat d'Etat...*, p. 79.

<sup>509</sup> Mientras que los documentos de oficio no devengaban derecho alguno, los documentos a petición de parte debían pagar unas tasas por su expedición. Para hacer constar su pago era necesario que en el propio documento se asentara la cantidad y el concepto de esos derechos, debiendo rubricarlos el oficial mayor. En caso que el monarca concediera la exención del pago, en el mismo debía aparecer la indicación de nihil (nichil) o gratis. Vid. J. J. Real Díaz, *Estudio diplomático del documento...*, pp. 172-73.

de la Nueva España<sup>510</sup>. Cantidades que se mantuvieron hasta la concreción de un nuevo arancel concedido por Fernando VI en 1749<sup>511</sup>.

Uno de los primeros encargos que tenían los secretarios era la de recibir las cartas y los despachos venidos de las Indias, las cuales sin abrirlas debían remitirlas al Consejo para que se abrieran en él y se entregasen posteriormente por inventario al secretario que correspondiere, para que luego las reconocieran y sacaren relaciones sumarias de su contenido a fin de que nuevamente el Consejo determinase su importancia<sup>512</sup>. Pero a partir de una consulta de diciembre de 1738 en el que el presidente del Consejo, conde de Montijo, propuso al *monarca que a fin de que todo el Consejo no se embarazase, los cajones se abriesen en una de sus Salas con asistencia del ministro que el presidente o gobernador o en su falta el decano nombrase, el escribano de Cámara y los secretarios, según la negociación a que tocase con un oficial, a lo que Felipe V resolvió: he venido en lo que proponéis y así lo he mandado*<sup>513</sup>.

A los secretarios del rey les correspondía la ejecución de la voluntad real a través de materializar las órdenes del monarca<sup>514</sup>, redactar los despachos, refrendar los documentos y mantenerse como su asesor. Para Escudero dicho asesoramiento constituía una mecánica formal de trabajo, ya que si bien el rey consultaba determinados días al Consejo, existía una vía no institucionalizada en donde se confiaba al secretario del Consejo el despacho de los asuntos que el rey debía decidir en uno u otro sentido, lo que facilitaba que el secretario orientara la solución de los asuntos, “convirtiéndose muchas veces en decisión real una mera ratificación de lo que el secretario había sugerido”<sup>515</sup>.

<sup>510</sup> Real decreto 09.01.1722. A. A. de la N. Recop. 2.18.7.

<sup>511</sup> Arancel de los derechos que se han de llevar en las dos secretarías del Supremo Consejo y Cámara de las Indias por cada uno de los despachos que se expiden de partes, así en lo secular, como en lo perteneciente a lo eclesiástico. 22.12.1749. Publicado por la imprenta Viuda de Peralta, 1760. También en A.G.I. Indiferente General, 822.

<sup>512</sup> Ordenanza 128 de 1636. Recop. Indias 2.6.15.

<sup>513</sup> Consulta 25.12.1738 citada en la *Segunda instrucción formada por Simón Martínez del Arrollo, secretario de la presidencia, a instancias de Francisco Moñino, gobernador del Consejo de Indias, para conocimiento de las antiguas regalías del empleo*. A.G.I., Indiferente General, 902. Vid. M. Gómez Gómez, “Instrucciones para el gobierno del presidente...”, p. 296.

<sup>514</sup> Bermúdez de Pedraza refiriéndose al secretario señalaba que si el monarca era la cabeza *sus secretarios son la garganta del cuerpo místico de esta Monarquía, y por este cuello se comunica a los demás miembros de sus reinos el alimento de su gobierno*. F. Bermúdez de Pedraza, *El Secretario del Rey...*, p. 15.

<sup>515</sup> J. A. Escudero, *Los secretarios de Estado...*, vol. 2, p. 368.

En efecto, a los secretarios les competía hacer la relación de los negocios, leer las cartas y peticiones referentes al ámbito geográfico a su cargo, recoger por escrito lo que se acordase y resolviese en el Consejo, haciendo conforme a ello los despachos y consultas que procedían<sup>516</sup>. Sin embargo, el secretario no podía intervenir en la deliberación, su principal misión consistía en reunir y ordenar los escritos, aportar los antecedentes necesarios y recoger y redactar los acuerdos para elevarlos a consulta al monarca. Justamente por este hecho García-Gallo relataba que durante el siglo XVII existieron tensiones entre los consejeros y los secretarios del Consejo de Indias, toda vez que “los secretarios pretendían atribuirse la superior condición y las prerrogativas de otros secretarios por serlo todos del rey”<sup>517</sup>. Por su parte, Concepción de Castro señalaba que con la aparición de las secretarías de Estado y del despacho, el papel de los secretarios de los consejos se debilitó, si bien seguirían realizando cuestiones administrativas a través del manejo de papeles, lo cierto es que disminuyó su prestigio<sup>518</sup>.

Para el cumplimiento de su empleo era menester que el secretario tuviera un conocimiento de todo lo que en materia de gobierno, justicia, guerra y hacienda se despachara en el Consejo, por lo que en su caso era de gran importancia el guardar el secreto en todos los asuntos<sup>519</sup>; al mismo tiempo debía celar sobre la ejecución de esta discreción que se guardara entre sus oficiales<sup>520</sup>.

---

<sup>516</sup> Ordenanza 118 de 1636. Recop. Indias 2.6.5.

<sup>517</sup> A. García-Gallo, A., “El Consejo y los Secretarios...”, p. 790.

<sup>518</sup> C. de Castro Monsalve, “Las Secretarías de los consejos...”, pp. 194-95.

<sup>519</sup> La literatura de la época de los Austrias consideraba que dentro de las calidades que debían caracterizar a los secretarios estaba precisamente la confianza del monarca y el secreto. Así por ejemplo Bermúdez de Pedraza definía a los secretarios como los guardianes de los secretos porque esta es su profesión... también les llamaban silenciarios por el silencio que guardan en las cosas que el príncipe les comunica (*El secretario del rey...*, p. 15). Por su parte Saavedra Fajardo llegó a decir que *la parte más esencial en el secretario es el secreto, de quien se le dio por esto el nombre, para que en sus oídos le sonase a todas horas su obligación (Idea de un príncipe político...*, Empresa 56). En cambio la literatura de la época de los borbones lo definía siempre de una manera mucho más pragmática quizá debido al predominio de escritores burócratas en activo proclives al reformismo administrativo tal y como afirmaba Gaspar de Ezpeleta *decía que eran muchas y estimables calidades para componer un buen secretario... sobre las dos inseparables precisiones del secreto y la verdad, en cuyas basas debe afirmar y levantar la fábrica de su empleo (Práctica de Secretarios...*, p. 3). Vid. M<sup>a</sup> V. López-Cordón Cortezo, “Secretarios y Secretarías en la edad Moderna”, en *Studia Historica* n° 15 (1996), pp. 107-131.

<sup>520</sup> Varias son las disposiciones que en este sentido promulgó Felipe V así por el ejemplo el real decreto 24.02.1701 para que en el Consejo guarde sigilo de los asuntos (A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 53r -53v; 583 L. 3, ff. 69-70); dentro de la Jornada de Burgos en el real decreto de 27.07.1706 (A.G.I., Indiferente General, 542, L. 1, ff. 68-72.); en el real decreto de reforma del Consejo de 10.11.1713 (A.G.I., Indiferente General, 829, ff.

Otra de las atribuciones adjudicadas al secretario del Consejo fue la de redactar las consultas de su propia mano<sup>521</sup>. Al respecto señalaba Ayala que *precisamente la desidia, vejez y achaques* habían generado la inobservancia en cuanto a que los secretarios *no sólo no escriben las consultas, más ni las forman, si no por ellos su oficiales, respectivamente conforme están repartidos los negocios de cada uno, y únicamente en las de provisiones de empleos que propone la Cámara, suscriben los dichos nombres de los propuestos*<sup>522</sup>. Esta última parte de la ordenanza hubo de variar a partir del real decreto de 1710, pues desde entonces los secretarios simplemente remitían las consultas al presidente del Consejo, quien reuniéndose con el monarca las leía todos los viernes.

Durante la presidencia del conde de Frigiliana, Felipe V estableció que en caso de ausencia del rey y estando el señor conde inmediato a su real persona, se remitieran las consultas a sus manos para que por ellas pasasen a las del monarca poniendo al final de cada una su dictamen y volviendo respondidas al Consejo por la misma mano, sin que en esto se variara la ordenanza ni el estilo que asentaba<sup>523</sup>.

En 1734 el monarca obligó a todos aquellos que vivieran en España pero que gozaran de una encomienda en Indias que debían presentar para su cobro su fe de vida expedida y autorizada por el secretario del Consejo correspondiente, y en caso contrario, no se les librarían las cantidades percibidas por las dichas encomiendas<sup>524</sup>.

Los secretarios eran los responsables del control y registro de la documentación que en materia de gobierno conociere o expidiere el propio de Consejo, por tanto, tenía la obligación de tener y custodiar varios tipos de libros<sup>525</sup>. Así por ejemplo, el secretario debía llevar libros de información

---

69r-75v.) y en el real decreto de 20.11.1717 sobre que los consejos y sus oficinas pasen a residir al palacio de la reina María Ana de Austria y su modo de despacho (A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 99 v -106r; 827; 542 L. 2, ff. 23-34).

<sup>521</sup> *Todas las consultas que se acordaren en el Consejo, y en las Juntas de los negocios que se trataren en ellas, las harán los Secretarios; y las del Consejo, y de las Juntas, que tocaren al gobierno, que requieran secreto, las escribirán de su mano para que le haya: y en las que fueren de partes, pondrán los pareceres del Consejo de su mano...* Ordenanza 126 de 1636. Recop. Indias 2.6.13.

<sup>522</sup> M. J. de Ayala, *Notas a la Recopilación...*, p. 109.

<sup>523</sup> Real Orden para que los secretarios del Consejo escriban las consultas y las pasen por el presidente. 18.11.1710. A.H.N., Cedulario de Ayala t. 12 (Códices, L. 695), f. 244v, nº 299.

<sup>524</sup> A. Muro Orejón, *Cedulario Americano...*, t. 3, pp. 160-61.

<sup>525</sup> Joaquín Real Díaz los denomina “libros administrativos”. Vid. J. J. Real Díaz, *Estudio diplomático...*, pp. 61-62; en cambio Margarita Gómez los llama simplemente “libros de expedición” refiriéndose a libros donde se traslada de forma auténtica la documentación expedida por un organismo o persona en el ejercicio de su autoridad y suelen estar a cargo



permanente acerca de todas las cosas del Estado de las Indias, así de la tierra, como de la mar, naturales y morales, perpetuas y temporales, eclesiásticas y seglares, pasadas y presentes, y que por tiempo serán, sobre que pueda caer gobernación, ó disposición de ley<sup>526</sup>, a fin de contar con la información necesaria para el buen gobierno de las Indias y la buena organización interna del Consejo<sup>527</sup>.

Así mismo tenía a su cargo los llamados “registros de consultas”<sup>528</sup>, entre ellos dos libros de consultas, en uno se debían asentar las consultas que se remitían al monarca junto con los acuerdos a los que llegaba el Consejo y otro donde se anotaban las consultas junto con el parecer del monarca<sup>529</sup>. Además, debían tener un libro de los traslados de todas las bulas, breves apostólicos e instrumentos importantes que existían en el Consejo. Era menester conservar un libro de consultas de mercedes en donde se asentaran las calidades, méritos y servicios de las personas a quienes se les concedían<sup>530</sup>. También tenían que apuntar en un libro los despachos de justicia que el escribano de cámara enviaba al rey por mediación del secretario<sup>531</sup>.

Tanto el secretario de la Nueva España como del Perú estaban obligados a consignar en un libro aparte todos los oficios, provisiones o cédulas que el rey o el Consejo despacharen a sus respectivas circunscripciones<sup>532</sup>. Debían de tener un “libro registro” en donde se recogía un extracto de todas las provisiones y órdenes de gobierno y hacienda que se hubieran expedido para que sus destinatarios las conozcan y puedan cumplirlas a la brevedad<sup>533</sup>.

---

de los secretarios responsables. Vid. M. Gómez Gómez, *El sello y registro...*, p. 164. Sobre el tema de los libros registro contenidos en el Consejo de Indias pueden verse entre otros textos a R. Altamira y Crevea, “Los cedularios como fuente histórica de la legislación indiana”, en *Revista de Historia de América*, nº 10 (1940), pp. 5-86 y nº 19 (1945), pp. 61-129; A. Muro Orejón, “Cedulario Americano del siglo XVIII”, en *Anuario de Historia del Derecho Español*, nº. 23 (1953), pp. 37-53; G. Lohmann Villena, “El índice general de los papeles del Consejo de Indias”, en *Revista de historia de América*, nº 51 (1961), pp. 137-162 y el artículo de A. M., Heredia Herrera, “Los cedularios de oficio...”, pp.1-60.

<sup>526</sup> El presidente del Consejo también estaba obligado a tener un libro con dichas descripciones. Ordenanza 6 de 1636. Recop. Indias 2.2.6.

<sup>527</sup> Esta clase de libros son denominados por Margarita Gómez como “libros de información y transmisión”, cuya importancia radicaba precisamente en que los mismos conservaban copias de documentos con especial significación para el gobierno o la historia de las Indias. Vid. M. Gómez Gómez, *El sello y registro...*, pp. 167-68.

<sup>528</sup> *Ibídem*, pp. 168-69.

<sup>529</sup> Ordenanza 26 de 1636. Recop. Indias 2.2.26.

<sup>530</sup> Ordenanza 42 de 1636. Recop. Indias 2.2.42.

<sup>531</sup> Ordenanza 148 de 1636. Recop. Indias 2.6.35.

<sup>532</sup> Ordenanza 153 de 1636. Recop. Indias 2.6.40.

<sup>533</sup> Ordenanza 159 de 1636. Recop. Indias 2.6.46.

Otro libro importante era el llamado “libro de relación”<sup>534</sup> donde los secretarios debían realizar un extracto de todas las provisiones, cédulas o cualquier otro despacho general o particular para que queriéndose ver en ellos por extenso que pueda ser *las pongan por sus títulos y materias comunes, en un libro, que para ello tengan dispuesto y ajustado, conforme á los libros, títulos y materias en que se distribuye esta Recopilación, poniendo en la relación los tiempos en que se hubieren despachado, y las hojas de los libros donde se hubieren asentado, para que conviniendo, se puedan ver en ellos por extenso*<sup>535</sup>.

Pero toda esta responsabilidad de llevar al tiempo un gran número de libros varió a partir de la expedición de los decretos de enero de 1717<sup>536</sup>. En opinión de Margarita Gómez, a partir de este momento no sólo mudaron de domicilio los consejos al palacio de doña María Ana de Austria, sino que la propia documentación del Consejo hubo de modificarse. Aunque la citada autora desconoce quién y cómo se dio la orden de reorganizar los libros de las secretarías del Consejo, lo cierto es que a partir de ese momento muchas series de libros fueron cerradas para pasar a un sistema más simple y sencillo de dos grandes series, una recogía documentación expedida de oficio (“De oficio. Perú corriente”) y otra donde se registrarían los de parte (“De partes. Perú corriente”) siguiendo un orden cronológico independientemente del lugar a donde fueran dirigidos<sup>537</sup>. A partir del año de 1739 los libros que debían llevar los secretarios del Consejo tuvieron que volver a formarse según establecían las propias Ordenanzas de 1636<sup>538</sup>.

Según la Recopilación de Indias en caso de ausencia del secretario por falta de saludo u otro impedimento, el otro secretario podía suplirlo, sin que entrara oficial alguno en el Consejo y faltando ambos, podían despachar

<sup>534</sup> Vid. M. Gómez Gómez, *El sello y registro...*, p. 170.

<sup>535</sup> Ordenanza 157 de 1636. Recop. Indias 2.6.44.

<sup>536</sup> Real decreto 20.01.1717. A.G.I., Indiferente General 829, ff. 99 v -106r; 827; 542 L. 2, ff. 23-34. B.N., Mss. 19251. ff. 1-6.

<sup>537</sup> Este nuevo sistema se implantó en la secretaría de Nueva España a partir de 1735. Cinco años más tarde se volvió al sistema anterior. Vid. M. Gómez Gómez, *El sello y registro...*, p. 181-83.

<sup>538</sup> A pesar la decisión del Consejo de continuar con los libros que tenían las secretarías según lo establecido por las Ordenanzas de 1636, el secretario del Perú continuó con los libros “corrientes” de oficio y de parte, únicamente se agregaron otros como los de órdenes generales, decretos y resoluciones, Cámara, Consultas y resoluciones; Consejo consultas y resoluciones. En 1747 se añadieron los libros de “expedientes y papeles entregados”. *Ibíd.*, pp. 186-187, nota 558.

directamente los oficiales mayores<sup>539</sup>. En 1739 Felipe V decidió derogar el contenido de dicha disposición al establecer que:

*...en lo que trata sobre lo peculiar, y respectivo a este punto, y no en otro alguno, y para que las referidas dependencias tengan curso, y despachen con la más prontitud. Mando que el oficial mayor del secretario que estuviere enfermo o ausente, de cualquiera de las dos secretarías, entre a despachar en el Consejo los expedientes de su oficina, no obstante de concurrir el otro secretario, que no tuviere motivo fundado, y preciso para estar ausente; y que en el caso de que por algún embarazo no pueda asistir el oficial mayor, entre a ejecutarlo el segundo, con cuyo método y regla, se evitará intervenga accidente, o pretexto que retarde el despacho de los negocios, como hasta ahora se ha observado<sup>540</sup>.*

Por otro lado es importante mencionar que debido al ejercicio propio del oficio de secretario, esto es, *ser una mano de la voluntad del príncipe y un instrumento de su gobierno*<sup>541</sup>, desarrollaron un papel fundamental como nexo que unía al Consejo con el rey, con las secretarías de Estado y del Despacho, con las propias autoridades indianas e incluso con los particulares ya que al ser el encargado de redactar las consultas, también lo era para transmitir a las autoridades y particulares las decisiones reales<sup>542</sup>.

#### 6.4. División de las secretarías del Consejo de Indias.

El criterio utilizado para dividir el trabajo de las secretarías fue el geográfico. De manera que por un lado estaría la secretaría del Perú y por el otro, la de la Nueva España. Sin embargo, había asuntos que podían corresponder a cualquiera de las dos secretarías, ya sea porque los asuntos no ofrecían cómoda división o porque se trataba de despachos que involucraban a ambos territorios indianos; asuntos cuyo conocimiento la propia orden de 1604 asignó al secretario más antiguo<sup>543</sup>.

En la época que estudiamos dichos negocios comunes o también llamados del “indiferente” de Indias continuaron despachándose por el secretario más antiguo. Así, los asuntos que correspondían al indiferente general eran básicamente:

---

<sup>539</sup> Ordenanza 119 de 1636. Recop. Indias 2.6.6.

<sup>540</sup> Real decreto 20.01.1739. A.G.I., Indiferente General, 543 L. 3, ff. 468-470; 584 L. 5, ff. 159-161.

<sup>541</sup> D. de Saavedra Fajardo, *Idea de un príncipe político...*, Empresa 56.

<sup>542</sup> Vid. R. D. García Pérez, *El Consejo de Indias durante...*, pp. 250-51.

<sup>543</sup> Vid. E. Schäfer, *El Consejo Real...*, t. 1, pp. 198-199.

*La correspondencia general con la Casa de la Contratación, Consulado, y Comercio de Sevilla, y con las Islas de Canaria, despachos generales para Roma, y para estos Reinos, así Eclesiásticas, como Seculares: y los que tocaren al mismo Consejo, y á su gobierno, ministros, y Oficiales dél, se despachen y pertenezcan, así los que se trataren en el dicho Consejo, como en las Juntas particulares, al más antiguo de los dos Secretarios, así respeto de los que ahora son, como de los que sucedieren en adelante*<sup>544</sup>.

A fin de tener una idea más clara de los asuntos que se despachaban en ambas secretarías, hemos creído conveniente delimitar a continuación su radio acción.

#### **a) Secretaría del Perú.**

Correspondía a la secretaría del Perú el despacho de todos los asuntos eclesiásticos, políticos y militares que la Cámara y el Consejo de Indias consultaban al monarca para asuntos relacionados con los virreynatos del Perú, Río de la Plata y Santa Fe de Bogotá<sup>545</sup>. También le competía el

---

<sup>544</sup> Ordenanza 117 de 1636. Recop. Indias 2.6.4. En el decreto de 06.06.1776 el monarca estableció que todos los asuntos relacionados con el indifferente correspondieran al secretario del Perú. Vid. M. J. de Ayala, *Notas a las Recopilación...*, p. 107.

<sup>545</sup> *A lo que corresponde también tres Arzobispados, dieciséis Obispados, seis Audiencias, veintidós Gobiernos, noventa y cinco Corregimientos, dos Alcaldías mayores, dos Contadurías de Cuentas y treinta Cajas Reales. En la real Audiencia de Lima: los presidentes (que es el virrey del Perú) y en su jurisdicción el gobierno de Guancavélica. Los corregimientos de Abancay, Arequipa, Andaguaylas, Andes del Cuzco, Paucartambo, Arica, Amaraez, Calcaylares, Camana, Canes, Canches, Canta, Cañete, Castro-virreina, Caxamarca, Caxamarquilla, Provincia de Pataz, Caxatambo, Cercado de Lima, Chachapoyas, Chancay, Chilques, Masques, Chumbivilcas, Collaguas, Caylloma, Conchucos, Condesuyos de Arequipa, Cotabamba, Cuzco, Guamalies, Guamanga, Guanta, Guanuco, Guarochiri, Guaylas, Layos, Ica, Pisco, Nasca, Jauja, Lucanas, San Juan de Matusana, Ottaca, Luya, Chillaos, Moquegua, Parina-cocha, Piura, Quispicanche, Santiago de Miraflores de Saña y pueblo de Chitlayo, Santa, Tarma, Truxillo, Vilcasguama, Cangallo. La Contaduría Mayor de Cuentas de Lima. Las Cajas Reales Lima, Arequipa, Arica, Atunjauija, Caylloma, Cuzvco, Guancavelica, Piura, Truxillo, la de Visco y Pasco. En la Audiencia real de Chile los del presidente (que es capitán general) y en su distrito los gobiernos de La Plaza, Presidio de Valdivia, Valparayso, Chiloe, La Concepción, La Serena, Puerto de Coquimbo. Los Corregimientos de Aconcagua, Chillan, Colchagua, Mendoza y Maule. Las Cajas Reales de Santiago de Chile y la de Concepción de Chile. En la jurisdicción de la real Audiencia de Charcas, los gobiernos de Paraguay, Tucumán, Buenos Ayres, Chucuyto, Santa Cruz de la Sierra. Los Corregimientos de Amparaez, Atacama, Assangaro, Assilo, Carabaya, Carangas, Chayanta, Cochabamba, Lampa, Larricaja, Lipes, Mizque, Omasuyo, Pacages, Verenguela, Paria, Paucarcolla, Puno, Paz, Pilaya, Papaya, Porco, San Felipe de Austria y minas de Oruro, Tarija, Chinas, Tomina, Zicazica. La Alcaldía Mayor del Potosí, Tucumán, Buenos Ayres, Paraguay y Santa Cruz de la Sierra. En el distrito de la Audiencia de Real de Quito los gobiernos de*

conocimiento de los asuntos relacionados con la Casa de Contratación, así como todo aquello que tuviera relación con los generales, almirantes y oficiales de marina; el envío de la armada, flotas y navíos. Además eran de su competencia el despacho de cualquier asunto relacionado con las provincias y puertos de Tierra Firme. Pero estaban fuera de su competencia el conocimiento de cualquier pleito de justicia entre partes, visitas y residencias<sup>546</sup>.

## b) Secretaría de la Nueva España.

Por su parte, la secretaría de Nueva España conocía de todos aquellos asuntos relacionados con el virreinato de México y los territorios de las Filipinas. También era la responsable de los despachos relacionados con la expedición de flotas y navíos a México y Honduras<sup>547</sup>. Al igual que el

---

*Popayán, Quixos, San Francisco de Borja. Los Corregimientos de Chimbo, Cuenca, Guayaquil, Latacunga, Loja, Zamora, Jaen de Bracamoros, Octavalo, Quito, Riobamba, San Miguel de Ibarra. Y las Cajas Reales de Quito, Cuenca, Popayán y Guayaquil. En la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá los del presidente (que es el virrey) y su jurisdicción los Gobiernos de la Isla de La Trinidad y provincia de Guayana, Maracaybo, Choco, Nayba, Santa Martha, Cartagena. Los Corregimientos de Antiochia, Chita, Coyayma, Atacayma, Laxas, Panches, Sanchica, San Juan de los Llanos, Somogozo, Tocayme, Ibagué, ciudad de Mariquita, Tunjar, Turmeque, Zipaquira con el agregado de Ubates. La Contaduría Mayor de cuentas de Santa Fe. Las Cajas Reales de Santa Fe, Cartagena, Monpox, Antiochia, Santa Martha y Maracaybo. En la jurisdicción de la real Audiencia de Panamá los gobiernos de las provincias de Veragua, el de la provincia del Dairen. La Alcaldía Mayor de la villa de Nata y villa de los Santos. Cajas Reales de Panamá y Portovelo. Por lo Eclesiástico en lo referido al imperio los arzobispados de Lima, Santa Fe de Bogotá y Charcas. Obispos de Arequipa, Cartagena, Concepción, Chile, Santa Cruz de la Sierra, Buenos Ayres, Guamanga, Panamá, Popayán, La Paz, Paraguay, Santa Martha, Quito, Truxillo, Tucumán y Chile. F. X. Garma y Durán, *Theatro Universal...*, t. IV, pp. 329-335.*

<sup>546</sup> Ordenanza 115 de 1636, Recop. Indias 2.6.2.

<sup>547</sup> *El virreinato de Nueva España con lo eclesiástico, político y militar que en él se comprende de tres arzobispados, doce obispos, cuatro presidentes de audiencias y los demás ministros que se componen en cuyos distritos hay dieciocho Gobiernos, dieciséis Corregimientos, setenta y ocho Alcaldías mayores, una Contaduría Mayor de cuentas, dieciocho Cajas Reales, el Gobierno y la Capitanía General de las Islas Filipinas con lo que pertenece de un arzobispado, tres obispos, un presidente de Audiencia y ministros que sirven tres Gobiernos y una Caja Reales todo en esta forma. En la Audiencia Real de México los del presidente (que es el virrey) y en su jurisdicción los Gobiernos de La Florida, Tlaxcala, Nuevo Reyno de León, Nuevo Mexico, Santiago y Veracruz. Los Corregimientos de Mexico, Querétaro, Chetla, Oaxaca, Santiago de los Valles, Guaxolotitlan y Zacatecas. Las Alcaldías Mayores de Acayuca, Acatlan Piastla, Cordova y San Antonio de Guatulco, Chalco, Chicontepeque, Chilapa y Tistla, Chinantla, Cholula,*

secretario del Perú, también estaban fuera de su competencia todos los asuntos relacionados con materia de justicia.

## 6.5. El personal subalterno de las secretarías.

En las secretarías del Consejo existían una serie de oficiales numerarios y supernumerarios bajo el mando de su titular quien debía cuidar en todo momento del buen orden y de la eficacia de las oficinas<sup>548</sup>. Los oficiales *eran aquellos empleados destinados para auxiliar y ayudar en las cosas de*

---

Cuicatlan, Esmiquilpa, Guautla y Amilcas, Guajozingo, Guajuapa, Guanajuato, Guaspaltepeque, Guazaqualco, Guayococotla, Guchiapa, Istlavaca, Jalapa y Jalatzingo, Jonotla y Tetela, San Juan de los Llanos, Justlavaca y Hipaltepeque, San Luis de Potosí, San Luis de La Paz, Mina de Sichu y los Pozos, Malinalco, Marabatio, Mazapil, Mechoacán, Mestitlan, Miagatlan, Nejapa, Orizava, Pachuca, Panuco y Tampico, Papantla, Puebla de los Angeles, Salvatierra y Zelaya, Sayula, Simapan, Singuylica, Tasco, Teguacan, Teguatepeque, Tecale, Tescuco, Teotalapa, Teutila, Tacuba, Talpujagua, Teposcolula, Teutilan, Tlacolula, Tulancingo, Teozaqualco, Ticayan, Tlapa, Tula, Tuspa, Veracruz vieja, Villalta, Usila y Casamaluapa, Ygualapa, Yzucan, Zacatlan y la de Zaqualpa. La Castellanía de Acapulco. La Contaduría Mayor de cuentas de México y las Caxas Reales de Acapulco, Florida, México, Minas de San Luis, Veracruz y Zacatecas.

En el distrito de la Audiencia Real de Santo Domingo los Gobiernos de Cuba y Habana, Cumana, La Margarita, San Juan de Puerto Rico y el de Venezuela y Caracas. La Alcaldía Mayor de Santiago de los Cavalleros. Las Caxas Reales de Santo Domingo, Habana, Cumana, Santa Margarita, Puerto Rico y Venezuela.

En la jurisdicción de la Real Audiencia de Guatemala los Gobiernos de Costa Rica, Honduras, Nicaragua y de Yucatán y Campeche. Los Corregimientos de Atitlan, y Atepanatitan, Casaltenango, Casayaltran y Sutiava, Chiquimula de la Sierra, Escuitla y Guazapan, Huegotenango y el de Sebaseo. Las Alcaldías Mayores de Chiapa, Exalapacintla, Soconusco y la de Tabasco. Las Caxas Reales de Guatemala, Honduras, Nicaragua y la de Yucatán. En el distrito de la Real Audiencia de Guadalajara los Gobiernos de San Francisco de Coaguila, Nueva Vizcaya y el de Sinaloa. Los Corregimientos de Tlajomulco y Caxatitlan y el de Zacatecas. Las Alcaldías Mayores del Real y Minas de Sombrerete, Santa María de los Lagos, Pueblos Llanos, Minas de San Gregorio, Sonora Real y Minas del Rosario y la de Suchipila y Aguascalientes. Las Cajas Reales de Guadalajara y la Nueva Vizcaya. En la Real Audiencia de Manila, el presidente (que es gobernador y capitán general) y su jurisdicción los gobiernos de Guajan, islas Marianas y el Samboagan. La Caxa Real de Manila. Por lo Eclesiástico en la Nueva España los Arzobispados de México, Santo Domingo y Guatemala. Los obispados de Caracas, Chiapa, Cuba, Durango, Guadalajara, Puebla, Mechoacan, Nicaragua, Puerto Rico, Oaxaca, Comayagua y el de Yucatán. Y en las Islas Filipinas el Arzobispado de Manila y los obispados de Cazeres, Nombre de Jesús y el de Nueva Segovia. F. X. Garma y Durán, *Theatro Universal...*, t. IV, pp. 335-341.

<sup>548</sup> Vid. J. C. Domínguez Nafría, *El Real y Supremo Consejo...*, p. 366.

*oficio a sus respectivos jefes, los secretarios, considerados como los brazos y manos de éstos*<sup>549</sup>.

Era común que el número de oficiales que formaban parte de las secretarías del Perú y de la Nueva España variaran considerablemente, no sólo porque los diferentes decretos intentaban reducir su número, sino porque en la realidad siempre hubo más oficiales de los que los decretos establecían. Así, mientras que la planta de 1691 redujo a nueve el número de oficiales que debían integrar cada una de las secretarías: un oficial mayor, dos segundos, dos terceros y cuatro entretenidos<sup>550</sup>.

El real decreto de agosto de 1715 mantuvo el número de oficiales establecidos en 1702. Fue en la planta de 1717 cuando el monarca decidió reducir a seis el número de los oficiales, de manera que hubiera un oficial mayor, un oficial segundo, un tercero y tres entretenidos. Tres años más tarde, la cifra ascendía a ocho, el oficial mayor, dos segundos, dos terceros y tres entretenidos, cifra que permanecerá hasta el final del reinado del primer Borbón.

Señalaba Bernard que en 1742 el rey comprobando que en cada secretaría había once oficiales, de los cuales tres eran supernumerarios, quiso devolver la cifra de seis como en 1717, pero en la práctica la reforma no se aplicó<sup>551</sup>. Empero, estos datos no concordaban con la realidad, ya que el cúmulo de trabajo provocó que en cada una de las secretarías se nombraran oficiales supernumerarios que ayudasen en su trabajo a los numerarios con los entretenidos<sup>552</sup>. La idea no era desaparecer por completo a los

---

<sup>549</sup> A. A. Henry Veira, *El oficinista instruido...*, p. 81.

<sup>550</sup> Los entretenidos eran “unos jóvenes que hacían méritos sin sueldo en alguna oficina para según el que tengan entrar en ella”. A. A. Henry Veira, *El oficinista instruido...*, p. 96.

<sup>551</sup> Vid. G. Bernard, *Le Secrétariat d'Etat...*, p. 85.

<sup>552</sup> Como ejemplo de la preocupación del monarca por disminuir la planta de las secretarías del Consejo encontramos un real decreto de 19.01.1742 que establecía el modo y el número de los oficiales en las secretarías del Perú y Nueva España: *Con motivo de haberse aumentado con varios pretextos, y en diferentes ocasiones el número de los oficiales de la secretaría de Nueva España desde el de 6 a que se redujo por la Nueva Planta con que se estableció el año de 1717 hasta el de 11 que actualmente tiene con el título de un oficial, dos segundos, dos terceros, tres entretenidos del número y tres supernumerarios, y considerando suficiente el número de seis que se la señaló el año de 1717 para la fácil y pronta expedición de los negocios que ocurrieren y deban evacuarse en ella: He resuelto que por ahora continúen en el ejercicio sus plazas y con los mismos sueldos que gozan, Dn Pedro de la Vega, Oficial Mayor, Dn Fernando de Acevedo de segundo, Dn Miguel Santiesteban de tercero, Dn Joseph de Elcorbarrutia de cuarto, Dn Pedro Maldonado de quinto, Dn Isidro de la Quintana de sexto, Dn Ignacio Ugalde de séptimo, Dn Francisco Xavier de Villanueva de octavo, Dn Gil Pablo Matheo de noveno, Dm Joseph de Palacio de décimo. Suprimiéndose la nominación de segundos, y terceros más modernos, entretenidos y supernumerarios. Y mando que conforme fueren vacando las seis plazas primeras vayan*

supernumerarios o entretenidos, sino sacarlos de los presupuestos de los órganos colegiados, y simplemente disfrutar de una asistencia gratuita<sup>553</sup>.

Como resultado de dichas reformas, la reducción de los oficiales en las secretarías del Consejo dejó a bastantes de ellos sin empleo; algunos pasaron a los nuevos ministerios, donde reiniciaron sus carreras. También hubo oficiales que quedaron en espera de ser reabsorbidos en el futuro, al “hilo de vacantes en uno u otro tipo de secretarías”, por lo que Felipe V ordenó se les pagara la mitad del sueldo<sup>554</sup>.

Dentro de los oficiales que formaban parte de las secretarías existía una gradación entre ellos. Debajo del secretario se encontraba el oficial primero, también llamado oficial mayor quien era nombrado directamente por el rey a propuesta del Consejo. Los otros oficiales, esto es, los segundos, terceros y entretenidos dependía de la propuesta de cada secretario<sup>555</sup>. En 1717 un real decreto prohibió a los secretarios presentar como candidatos a oficiales *a sus pajes, criados, ni tampoco a los que fueren de otros, porque mi voluntad es que me propongan personas beneméritas con independencia de sus familias*<sup>556</sup>. De lo anterior es fácil suponer que surgiría una verdadera carrera administrativa al servicio de la burocracia central, de manera que obtenían unas expectativas de ascenso y promoción<sup>557</sup>.

A partir de la creación de las secretarías de Estado y del despacho la provisión de los empleos para oficiales de las secretarías de los consejos y sus respectivos ascensos quedaron de manera indirecta en manos del titular de la secretaría de Estado y del Despacho de Estado, ya que era quien trasladaba las propuestas al monarca, le informaba y le aconsejaba. En

---

*optando a ellas conforme Yo resolveré a las proposiciones que se me hicieren, los que quedan en el ejercicio de las demás, extinguiéndose las resultas de estas hasta que quede reducida la secretaría a la seis referidas con que se estableció la Nueva Planta del año de 1717. Y al mismo número y con igual método quiero que se establezca ahora y reduzca para lo sucesivo la secretaría del Perú, debiendo quedar los oficiales que la componen con la antigüedad y sueldos que gozan actualmente, y con la sucesiva nominación de primero, segundo, y así hasta el último, extinguiéndose también las Plazas que fueren vacando hasta que queden reducidas al número de seis.* A.G.I., Indiferente General, 918.

<sup>553</sup> Vid. C. de Castro Monsalve, “Las Secretarías de los consejos...”, p. 202.

<sup>554</sup> *Ibíd.*, p. 205.

<sup>555</sup> Real decreto 17.07.1691. A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 47r-52v; 827. Mediante decreto de 02.03.1643 el monarca estableció que le propusieran para *todo género de oficios y dignidades a los más beneméritos y no les deja arbitrio en la materia, porque su ánimo es que los más virtuosos, los mejores, los más útiles y convenientes para los ministerios públicos se le proponga con precisa obligación de conciencia.* Auto Acordado 127. Recop. Indias 2.2.

<sup>556</sup> Real decreto 20.01.1717. AG.I., Indiferente General, 829, ff. 99 v -106r; 827; 542 L. 2, ff. 23-34. B.N.M., Mss. 19251. ff. 1-6. Nov. Recop. 4.2.2.

<sup>557</sup> J. C. Domínguez Nafria, *El Real y Supremo Consejo...*, p. 392.



efecto, con la creación de una secretaría especializada en los asuntos de Indias, éste se convirtió en el órgano encargado de entregar al monarca las propuestas de oficiales. Según relata Concepción de Castro en una ocasión cuando uno de los secretarios del Consejo de Indias trataba de aprovechar la vacante para aumentar hasta trece el número de oficiales y un archivero de número, pero la respuesta fue la siguiente; *las Indias ya no se gobiernan sólo por ese Consejo, porque todo lo referente a guerra, armadas, flotas galeones y hacienda se lleva en el ministerio de Marina e Indias, y la secretaría del Consejo tiene más que suficiente con ocho oficiales*<sup>558</sup>.

Para formar parte como oficial de alguna de las secretarías no era necesario cubrir ningún requisito específico, de hecho ni siquiera se requerían estudios especializados. Según Prado y Rozas los oficiales debían ser hombres diestros, esto es *que sepan desempeñar con acierto la obligación en que les constituye su empleo, pues de lo contrario serán perjudiciales al servicio del rey, y al público. Por esto, los señores Secretarios que tienen la regalía de proponer a SM los empleos reflexionarán con mucha madurez, y atención la elección de los sujetos, para ajustar la capacidad de estos a los puestos y no al contrario, sin dejarse vencer de los empeños y fines particulares mayormente cuando no sólo tendrán muy presentes las reales resoluciones que hay sobre ello*<sup>559</sup>.

Henry Veira señalaba que un oficial necesitaba ante todo saber su oficio y para saberlo era menester adquirir los conocimientos que le conducirían a ello. Además de tener buena letra, debía tener un conocimiento del idioma en que escribe, saber expresarse bien o conocer el tono y el estilo de la secretaría<sup>560</sup>. Pero todos estos requisitos que en teoría debían cumplir los oficiales distaban mucho de la realidad. Según menciona Rafael García, en general los oficiales que ascendían carecían de estudios superiores, por lo que normalmente aducían como méritos la experiencia en el oficio o simplemente los méritos contraídos por familiares en el servicio a la corona<sup>561</sup>, situación que provocaba no sólo lentitud en la tramitación de la documentación, sino errores graves en los mismos.

---

<sup>558</sup> Vid. C. de Castro Monsalve, "Las Secretarías de los consejos...", p. 205.

<sup>559</sup> A. de Prado y Rozas, *Reglas para oficiales de secretarías y catálogo de los secretarios del Despacho y del Consejo de Estado que ha habido desde los señores Reyes Católicos hasta el presente, junto con las plantas dadas a las secretarías*, edit. J. M<sup>a</sup> García Madaira, *Las Secretarías del Despacho. Dos Estudios sobre Historia de la Administración*, Madrid, 1982. P. 96.

<sup>560</sup> Vid. A. A. Henry Veira, *El oficinista instruído...*, pp. 89-92.

<sup>561</sup> Vid. R. D. García Pérez, *El Consejo de Indias...*, p. 257.

Todos los oficiales recibían el título con su nombramiento<sup>562</sup>. Para ocupar el cargo debían por un lado pagar la media anata correspondiente<sup>563</sup> y por el otro, realizar el juramento respectivo ante los miembros del Consejo. A diferencia de otros cargos dentro del Consejo, el juramento realizado por los oficiales era mucho más corto porque básicamente interesaba que el oficial guardara la máxima discreción<sup>564</sup>.

Es importante resaltar que dicho juramento sólo lo realizaban la primera ocasión que ingresaban como oficiales dentro del Consejo, ya que en los ascensos a plazas de mayor rango no era necesario su repetición.

La carrera de los oficiales de las secretarías de los consejos no era en opinión de Concepción de Castro “en absoluto desdeñable, como no lo era en absoluto su status”, ya que por lo general pertenecían a familias hidalgas y muchos de ellos, desde su juventud, pertenecían a alguna de las órdenes militares más prestigiosas<sup>565</sup>. Normalmente el ingreso a alguno de los empleos dentro de las secretarías del Consejo de Indias se hacía desde abajo, esto es, como supernumerario o meritorio. Con el paso del tiempo y las posibles vacantes se iba ascendiendo gradualmente hasta ocupar la plaza de oficial mayor, tras lo cual quedaba ser secretario del Perú o de Nueva

---

<sup>562</sup> Sin embargo, Margarita Gómez refiere que el oficial de las Secretarías de Estado y del Despacho podían considerarse en posesión del cargo para el que habían sido nombrados sin ser imprescindible para el ejercicio del cargo contar con la real provisión del nombramiento, de hecho en ocasiones dichos títulos fueron expedidos transcurridos varios meses e incluso años desde el ingreso al órgano correspondiente. Vid. *Forma y expedición del documento...*, p. 98.

<sup>563</sup> Carlos II a través de un real decreto de 1697 estableció que los oficiales que ascendieran dentro de la misma Secretaría solamente pagarían la media anata de lo que correspondía al aumento de goce que tuviere la plaza a que ascendiere. Vid A. de Prado y Rozas, *Reglas para oficiales de secretarías...*, p. 104. Así por ejemplo una carta de 23.07.1737 que el secretario del Consejo de Indias del Perú, Miguel de Villanueva, remitió al secretario de Hacienda sobre la media anata que debía satisfacer un oficial de dicha Secretaría que fue ascendido. *A Dn Gabriel de Peralta oficial tercero más antiguo de la Secretaría del Perú de mi cargo se le ascendido a la plaza de oficial segundo más moderna de ella y por aumentarle 2.000 reales de vellón más de sueldo al año debe al derecho de la media anata 1.000 reales de la misma especie. Lo que participio a VM a fin de que disponga e satisfaga a esta Contaduría con las precauciones y prevenciones en las reglas de este derecho.* A.G.I., Indiferente General, 446A L. 44, f. 78v.

<sup>564</sup> Las palabras que los oficiales de las secretarías debían pronunciar eran las siguientes: *Que juráis a Dios y a esta ¢ (o a la del hábito que tuviere) y a las palabras de los Santos cuatro Evangelios, que bien y fielmente usaréis el cargo de oficial de la secretaría (o mayor o entretenido) y guardaréis el secreto del Consejo, y en todo haréis lo que como bueno y leal ministro en semejante oficio debéis y sois obligado a hacer.* = *Decid: -Si, Juro. -Si así lo hicierdes Dios os ayude, y si no os lo demande. Decid Amen. -Amen.* B.P.R., Mss. II/2893, p. 286.

<sup>565</sup> C. de Castro Monsalve, “Las Secretarías de los consejos...”, p. 196.

España y quizá alcanzar el mismo puesto dentro del Consejo más importante, el de Castilla.

Como ya se ha mencionado existían diferentes escalas dentro de los oficiales que formaban parte de cada una de las secretarías del Consejo: oficiales mayores, segundos, terceros o supernumerarios, cuya diferencia no se encontraba en opinión de Rafael García en la función que desempeñaban, sino en el salario que cobraban<sup>566</sup>. Así por ejemplo un real decreto de mayo de 1717 estableció los sueldos que debían percibir los miembros de las dos secretarías, de modo que el oficial mayor recibiría 18.000 reales de vellón, el segundo 12.000, el tercero 10.000 y todos los demás supernumerarios 8.000 reales<sup>567</sup>. Cifras que según Bernard no variaron hasta 1808<sup>568</sup>.

Al igual que los secretarios, los oficiales de las secretarías tenían derecho al cobro de un porcentaje del arancel que se devengaba por la expedición de los despachos de partes. En el arancel expedido en 1722 se fijaron los derechos *que han de percibir y cobrar los Secretarios de las dos secretarías de Indias del Perú y de la Nueva España*<sup>569</sup>, empero, en dicho decreto no se decía nada sobre el monto a percibir por cada uno de los oficiales. Fue a partir del arancel concedido por Fernando VI en 1749<sup>570</sup> cuando se fijó el porcentaje que debía cobrar cada uno de ellos<sup>571</sup>.

Entre las “operaciones y funciones de los oficiales”<sup>572</sup> que debían desempeñar los oficiales de las secretarías del Consejo estaban la expedición de todos los asuntos a su cargo, la más puntual asistencia a las horas señaladas<sup>573</sup>, tener arreglados y al corriente los asuntos que se les

---

<sup>566</sup> Vid. R. D. García Pérez, *El Consejo de Indias...*, p. 258.

<sup>567</sup> Real decreto 01.05.1717. A.G.I., Indiferente General, 542 L. 2, ff. 61-62.

<sup>568</sup> Vid. G. Bernard, *Le Secrétariat d'Etat...*, p. 86.

<sup>569</sup> Real decreto 09.01.1722. A. A. de la N. Recop. 2.18.7.

<sup>570</sup> Arancel de los derechos que se han de llevar en las dos Secretarías del Supremo Consejo y Cámara de las Indias por cada uno de los despachos que se expiden de partes, así en lo secular, como en lo perteneciente a lo eclesiástico. 22.12.1749. Publicado por la imprenta Viuda de Peralta, 1760. También en A.G.I. Indiferente General, 822.

<sup>571</sup> Un acuerdo del Consejo 22.12.1749 señaló un 3% de los derechos del arancel a los librancistas, si no tenía otro negocio, ya que en caso contrario debía percibir sólo un 2%. Debía de repartirse un 14% entre los oficiales que carecieran de negociado, distribuyendo el resto en tantas partes como oficiales hubiere más una, percibiendo dos partes el oficial mayor y sólo una el resto de oficiales. Vid. R. D. García Pérez, *El Consejo de Indias...*, p. 268.

<sup>572</sup> Vid. A. A. Henry Veira, *El oficinista instruido...*, pp. 48-49.

<sup>573</sup> Con las reformas de 1717, Felipe V amplió el horario de trabajo de las Secretarías del Consejo de manera que los oficiales debían entrar desde el primero de mayo en adelante a las nueve de la mañana, y que estén hasta la una del día, y a las siete por la tarde, manteniéndose a lo menos hasta las nueve de la noche. Y desde primero de septiembre en adelante entren a las diez del día y permanezcan hasta la una, y por la tarde entren a las seis

hubieren asignado, formar todos los borradores o minutas de cuanto asunto conociera, así como que los últimos oficiales dentro de la gradación de la secretaría debían de trabajar en lo que se les dispusiera, ya en los borradores que fuesen capaces de hacer, en ponerlos en limpio y sacar exacta y cuidadosamente los distintos despachos.

Realmente el peso del trabajo en las secretarías del Consejo recaía en sus oficiales, ellos eran quienes extractaban los asuntos, puntualizaban los datos más importantes, formaban las cédulas, títulos y cualquier otra disposición que emanara del Consejo en materia de gobierno, así como consultas, certificaciones y títulos. Al colaborar con el secretario en su tarea, los oficiales también estaban encargados de la elaboración, guarda y custodia de la mayoría de los libros que estaban al cargo de dicha oficina.

Para realizar su trabajo con mayor eficiencia, los oficiales normalmente utilizaban formularios para elaborar los documentos que le solicitaban, aunque había un cierto tipo de documentos, sobre todo de los llamados “de oficio”, en donde el uso de fórmulas era casi imposible debido a la variedad de asuntos que se podían tratar, razón por la cual Prado y Rozas aconsejaba al oficial tener siempre presente tres cosas: *quién escribe, sobre qué escribe y a quién escribe, con las cuales (como se guarden) será imposible que un mediano entendimiento deje de acertar en la formación de cualquier género de despachos y órdenes*<sup>574</sup>.

Normalmente los oficiales solían trabajar en casa, lo que provocaba en muchas ocasiones numerosas pérdidas de expedientes y grandes retrasos en su despacho, por ello, las reformas de 1717 les prohibieron llevarse a sus casas cualquiera de los expedientes tramitados *por el peligro del secreto, y otros no inferiores inconvenientes y los Secretarios deberán volver por la tarde al despacho de sus secretarías aunque no con la precisión de estar todas la horas que los oficiales, si las que bastaren para dar providencia a los negocios que dependan de su persona, como de la de sus oficiales*<sup>575</sup>.

A fin de dar cumplimiento a todas sus obligaciones, Felipe V prohibió a los secretarios y sus oficiales tener agencias ni otro empleo *que les embarace la asistencia de sus plazas, porque solo han de contener en las que estuvieran ejerciendo en las secretarías que están determinados*<sup>576</sup>. De

---

y salgan hasta las nueve. Real decreto 20.01.1717. AG.I., Indiferente General, 829, ff. 99 v -106r; 827; 542 L. 2, ff. 23-34. B.N.M., Mss. 19251. ff. 1-6. Nov. Recop. 4.2.2.

<sup>574</sup> A. de Prado y Rozas, *Reglas para oficiales de secretarías...*, p. 98.

<sup>575</sup> Real decreto 20.01.1717. AG.I., Indiferente General, 829, ff. 99 v -106r; 827; 542 L. 2, ff. 23-34. B.N.M., Mss. 19251. ff. 1-6. Nov. Recop. 4.2.2.

<sup>576</sup> Loc. Cit.

manera que a partir de 1717 los oficiales no podían tener dos plazas, ni tampoco cobrar dos sueldos.

## 6.6. El secretario de la presidencia.

Las primeras noticias que se tienen de la existencia del secretario de la presidencia datan de mediados del siglo XVI<sup>577</sup>, quizá cuando Juan de Subiza fue nombrado secretario<sup>578</sup> del entonces gobernador del Consejo de Indias, García de Avellaneda y Haro, conde de Castrillo para acompañarle a Nápoles<sup>579</sup>. En opinión de Margarita Gómez en esta época la figura del secretario de la presidencia no estaba institucionalizado; sin embargo, una real cédula daba orden de ayuda de costa, sin que “ello implicase vinculación alguna a la planta oficial de la institución”<sup>580</sup>.

En efecto, en 1702 a través de un real decreto, Felipe V concedió a Manuel de Ugarte 600 ducados al año por haber ayudado como secretario al marqués del Carpio<sup>581</sup>. Ese mismo año fue nombrado Bernardo de Ezpeleta<sup>582</sup> para que asistiera al presidente del Consejo, el duque de Medinaceli. Cuando en 1704 el duque fue cesado, Manuel de Ugarte recuperó su empleo de secretario del marqués de Carpio, ordenándose se le pagasen 600 ducados al año<sup>583</sup>. Posteriormente, el oficial tercero de la secretaría de Nueva España, Francisco Antonio de Errazquin fue nombrado

---

<sup>577</sup> En opinión de Schäfer el primer secretario de la presidencia fue Juan de Subiza a quien por Real Cédula de 13.04.1647 se le concedió la merced de seguir percibiendo 600 ducados por el desempeño de su oficio. E. Schäfer, *El Consejo Real...*, t. 1, p. 335. También lo señala M. Gómez Gómez, “La Secretaría de la presidencia...”, p. 494.

<sup>578</sup> Real Cédula de 12.08.1653 al Consejo de Indias para que a Juan de Subiza que va a servir como secretario del conde de Castrillo a Nápoles se le acuda con el salario de 2.000 ducados aunque esté ausente. A.G.I., Indiferente General, 437 L. 17, ff. 55-57.

<sup>579</sup> El Conde de Castrillo fue gobernador del Consejo del 27.11.1632 -1659, ausente como virrey de Nápoles 1653-1659. Vid. E. Schäfer, *El Consejo Real...*, t. 1, p. 335.

<sup>580</sup> M. Gómez Gómez, “La Secretaría de la presidencia...”, p. 494.

<sup>581</sup> Real decreto 10.10.1702. A.G.I., Indiferente General, 553 A, L. 3.

<sup>582</sup> Real decreto 30.11.1702. *Habiendo elegido el Duque de Medinaceli a Dn. Bernardo de Ezpeleta para que sirva la secretaría de la presidencia de ese Consejo, mando se le asista todo el tiempo que ejerciere esta ocupación con la misma Ayuda de costa que hubieren gozado sus antecesores y fuere estilo pagándosele en la propia consignación.* A.G.I., Indiferente General, 553A L. 3.

<sup>583</sup> Real decreto 10.08.1704. A.G.I., Indiferente General, 553A L. 3, ff. 517-518.

secretario de la presidencia en 1705<sup>584</sup>. Entre los años de 1711 y 1717 ocupó el cargo de secretario de la presidencia Luis de Azpilcueta<sup>585</sup>.

Pero esta situación tan inestable para los mencionados secretarios hubo de cambiar en 1718 cuando Andrés de Pez ocupaba al mismo tiempo la plaza de gobernador del Consejo y la de secretario de Estado y del Despacho de Guerra, Marina e Indias. De manera que para poder controlar los asuntos surgidos en el seno del Consejo tuvo la necesidad de nombrar a José de Torrecilla<sup>586</sup> como secretario de la presidencia del Consejo. A partir de este momento la plaza de secretario quedó definitivamente establecida y funcionando junto con las otras dos secretarías del Consejo. En 1721 tras la muerte de Andrés de Pez, el secretario Torrecilla fue cesado, siendo su sustituto Bartolomé Crespo<sup>587</sup>. Posteriormente entre los años de 1737 a 1739 ocupó el cargo de secretario de la presidencia Andrés Crespo del Valle<sup>588</sup> y en 1741 fue sustituido por Miguel Gutiérrez<sup>589</sup>, quien permanecería como secretario hasta 1755.

Como se ha mencionado fue a partir de 1718 cuando el empleo de secretario de la presidencia quedó institucionalizado, por lo que todos los que ocuparon dicho cargo recibían su nombramiento a través de una real cédula en la cual el monarca ratificaba como secretario de la presidencia a la

<sup>584</sup> Real decreto de nombramiento a Francisco de Errazquin como secretario de las presidencia del Consejo 27.05.1705. *Habiendo elegido el Duque de Atrisco a Dn Francisco de Errazquin mi secretario para que lo sea de la presidencia del Consejo de las Indias: He venido en esta atención y a la habilidad y suficiencia con que sirve este encargar en concederle la ayuda de costa que han gozado todos sus antecesores. Y mando se le asista y pague de los mismos efectos y consignación que se hubiere hecho con ellos, sin diferencia alguna. Tendrase entendido en el Consejo de Indias y se le dará el despacho necesario para su cumplimiento.* A.G.I., Indiferente General, 553A L. 3, ff. 828-829. También en M. Gómez Gómez, “La Secretaría de la presidencia...”, p. 496, nota 12.

<sup>585</sup> A.G.I., Indiferente General, 445 L. 40, ff. 54r-54v.

<sup>586</sup> Real Cédula de nombramiento 26.11.1721 en A.G.S., Dir. Gral. del Tesoro, Inv. 13, leg. 8, f. 243.

<sup>587</sup> Real Cédula de nombramiento 30.09.1724 en A.G.S., Dir. Gral. del Tesoro, Inv. 13, leg. 9, f. 431.

<sup>588</sup> Carta del secretario del Consejo de Indias al secretario de Nueva España, D. Simón Mozo de la Torre, avisándole el nombramiento de D. Andrés Crespo del Valle por secretario de la presidencia del Consejo 06.07.1737. A.G.I., Indiferente General, 446 A L. 44, ff. 72v-73r.

<sup>589</sup> Real Cédula de nombramiento 14.05.1741. A.G.I., Indiferente General, 447 L. 45, ff. 144v-145. Cuando José de Carvajal y Lancaster fue nombrado gobernador interino para sustituir las enfermedades del presidente Cristóbal Portocarrero, su secretario Miguel Gutiérrez continuó en el puesto pero no llegó a expedirse un nuevo título de nombramiento, José de Carvajal no lo creyó necesario para asegurar su continuidad. Sin embargo, en 1755 la Contaduría sí que lo echó en falta. Como consecuencia el sueldo de 800 escudos al año percibidos en principio indebidamente le fue reclamado. Vid. M. Gómez Gómez, “La Secretaría de la presidencia...”, p. 495, nota 9.

persona propuesta por el presidente o en su caso por el gobernador; desde ese momento se fijó como salario anual del secretario 8.000 reales de vellón anuales, cifra que ya no variaría durante todo el reinado de Felipe V<sup>590</sup>.

Por otra parte fue bastante habitual que los secretarios de las presidencias una vez cesados en sus cargos, sea por cambio en la figura del presidente o gobernador del Consejo o por muerte, mantuvieran la gracia de los 600 u 800 ducados propios del empleo, aunque para poder hacerlos efectivos los propios secretarios o sus herederos hubieron de reclamar al monarca el pago de su salario y sólo tras la emisión de un informe por parte de la Contaduría del Consejo, el pago les era satisfecho<sup>591</sup>.

Entre las tareas más importantes que realizaba el secretario estaba precisamente la de auxiliar al presidente, el gobernador o el decano del Consejo en su trabajo diario. En opinión de Margarita Gómez eran cinco tareas fundamentales que debía llevar a cabo el secretario de la presidencia: ser la voz y memoria del presidente, el receptor de la correspondencia, el receptor de su voluntad, el trasmisor de sus disposiciones y como la garantía y custodia de su actuación<sup>592</sup>.

De lo anterior se desprende que el secretario fuera el responsable de llevar y custodiar todos los registros de las reales órdenes, decretos y consultas que pasaban por el presidente del Consejo y que emanaran del propio Consejo, de la Cámara de Indias, de la Superintendencia de Azogue, de la Junta de asiento de negros o de cualquier otro órgano de cuyas decisiones debieran remitirse posteriormente por la vía reservada para su tramitación con el monarca. También tenía a su cargo el registro de las consultas que el presidente de manera particular remitía al monarca, así como de todas aquellas consultas emanadas del Consejo y de la Cámara de Indias<sup>593</sup>.

También era el encargado de registrar toda aquella documentación remitida tanto por las propias oficinas del Consejo, como de la vía reservada o de cualquier otro órgano colegiado. En este sentido el secretario llevaba dos tipos fundamentales de pliegos de oficio: por un lado las reales provisiones y reales cédulas intitulados por el monarca, así como las cartas

---

<sup>590</sup> Vid. G. Bernard, *Le Secrétariat d'Etat...*, p. 79.

<sup>591</sup> Vid. M. Gómez Gómez, "La Secretaría de la presidencia...", p. 496.

<sup>592</sup> En efecto, el secretario "recibía y encauzaba la documentación propia del presidente, se hacía cargo de correspondencia, actuaba como su representante y transmitía como su portavoz la decisiones que aquel le comunicaba". *Ibidem*, p. 501.

<sup>593</sup> En términos generales el secretario de la presidencia del Consejo de Castilla realizaba similares atribuciones. Vid. J. M<sup>a</sup> Puyol Montero, *El Consejo de Castilla...*, t. 2, p. 654.

acordadas y o mandamientos intitulados por el órgano colegiado. El otro pliego se formaba con las resoluciones del rey a través de la propia consulta o mediante la expedición de una real orden o real decreto. Otro tipo de registro que llevaba el secretario de la presidencia lo fue el de cartas de agradecimientos, memoriales y relaciones de méritos y servicios remitidos directamente al presidente<sup>594</sup>.

Sin embargo, todo este trabajo tenía que realizarlo el secretario de manera solitaria y quizá ayudado por algunos miembros del servicio del personal del presidente o gobernador del Consejo, y fue hacia el año de 1773<sup>595</sup> cuando Carlos III decidió crear una oficina específica, la secretaría de la presidencia del Consejo de Indias, compuesta por un secretario con nombramiento vitalicio, dos oficiales y un portero, cuyos salarios fueron dotados a partir del producto de penas de Cámara<sup>596</sup>.

## **7. El receptor, el tesorero y el depositario.**

### **7.1. Del receptor y tesorero de los Austrias al depositario de los Borbones.**

Desde la fundación del Consejo de Indias, Carlos V decidió nombrar a un oficial encargado de la receptoría de las rentas reales provenientes de las Indias<sup>597</sup>, Varios fueron los oficiales designados para ocupar la plaza de receptor de penas y licencias<sup>598</sup>, pero no fue sino hasta 1567 cuando Felipe II nombró a Antonio de Cartagena como receptor de penas de cámara con cargo a la nómina del Consejo de Indias<sup>599</sup>.

---

<sup>594</sup> Vid. M. Gómez Gómez, "La Secretaría de la presidencia...", pp. 504-506.

<sup>595</sup> Real decreto 12.08.1773. A.G.I., Indiferente General, 545 L. 4, ff. 176v-177r.

<sup>596</sup> Vid. R. D. García Pérez, *El Consejo de Indias...*, pp. 241-42.

<sup>597</sup> En estos años las rentas que el monarca obtenía de sus posesiones en las Indias eran de dos clases, por un lado se trataba de los ingresos directos de metales, piedras preciosas y joyas, y por el otro lado, eran aquellas rentas surgidas de los derechos y multas de condenaciones pronunciadas por la Casa de la Contratación y del dinero surgido del pago de las licencias y multas impuestas por el Consejo de Indias. Vid. E. Schäfer, *El Consejo Real...*, t. 1, p. 112.

<sup>598</sup> El primero en ocupar esta plaza fue Sebastián del Portillo quien pronto fue sustituido por Antonio de Villegas. También ejercieron este oficio Diego de Haya, Hernando de Ochoa y Ochoa de Luyando. *Ibídem*, t. 1, p. 112, nota 36.

<sup>599</sup> Real Provisión 02.03.1567. A.G.I., Indiferente General, 425, L. 24 ff. 320-321.



Las Ordenanzas de 1571 regularon en más de una docena de disposiciones el dicho oficio de receptor de penas de cámara. Entre otras cuestiones, el receptor estaba obligado a cobrar y recaudar todas las condenaciones que en el Consejo de hicieren y aplicaren para la cámara y estrados del Consejo<sup>600</sup>; así mismo debía llevar un control de las cantidades que se aplicaban para el pago de los gastos y pasaje de los religiosos y ministros de doctrina, para las obras pías y los derechos de las licencias de esclavos<sup>601</sup> y de pasajeros a Indias que se debía y que en caso que por su culpa y negligencia dichos ingresos no entraran a la hacienda real, para lo cual debía llevar un control pormenorizado en un libro donde asentara las condenaciones<sup>602</sup>.

Como el receptor debía responder con su propio patrimonio en caso de no haber cobrado alguna cantidad de penas de condenación imputables a él ya sea por su culpa o negligencia<sup>603</sup> era menester que otorgara fianza en la cantidad que al Consejo estipulase<sup>604</sup>. Durante estos años las cantidades recaudadas por el receptor de penas de cámara iban destinadas al pago de ayudas extraordinarias de costas o a mercedes concedidas a los miembros del Consejo, contando siempre con la aprobación del monarca<sup>605</sup>.

Sin embargo, las penurias económicas por las que atravesaba la real hacienda provocaron que el monarca decidiera vender el oficio de receptor. Si bien la plaza de receptor se concedió en 1599 a Diego de Vergara Gaviria<sup>606</sup>, a partir de 1616 Felipe III decidió concedérsela por juro de heredad con derecho a traspasarla<sup>607</sup>. Tras su muerte acaecida en 1638, su

---

<sup>600</sup> Para lo cual el Consejo debía remitir al receptor todas las ejecutorias y despachos necesarios para cobrar las penas y condenaciones que en él se hubieren hecho. Ordenanza 108 de 1571.

<sup>601</sup> Debía llevar un libro donde se asentaban las cantidades pagadas por las licencias de reclamos. Ordenanza 111 de 1571.

<sup>602</sup> Ordenanza 107 de 1571.

<sup>603</sup> Ordenanza 105 de 1571.

<sup>604</sup> Ordenanza 106 de 1571. En el título de nombramiento de Diego Ruiz Osorio como receptor de cámara del Consejo el 21.08.1591 establecía que debía otorgar fianza por valor de 10.000 ducados. A.G.I., Indiferente General, 426 L. 28, ff. 105r-105v. En la segunda mitad del siglo XVII el Consejo de Indias acordó imponer una fianza de 20.000 ducados por concepto de fianza, como garantía al cumplimiento de su obligación, y también fue posible embargar rigurosamente todos los bienes del tesorero quebrado. Vid. E. Schäfer, *El Consejo Real...*, t. 1, p. 255.

<sup>605</sup> *Ibídem*, 125-26.

<sup>606</sup> Diego Vergara Gaviria fue nombrado receptor de penas del Consejo de Indias en sustitución de Diego Ruiz Osorio. A.G.I., Indiferente General, 427 L. 31, ff. 69r-69v.

<sup>607</sup> Tomás y Valiente citando a Juan Diez de la Calle señalaba que el oficio de receptor general de penas de cámara valió 40.000 pesos en 1626 y sólo 24.300 en 1645. Vid. "Ventas y renunciaciones de oficios...", p. 748, nota 82.

viuda enajenó la plaza de receptor a favor de Francisco Gutiérrez Bustamante quien recibió el título real en 1641 y al año siguiente, cuando Felipe IV convirtió la plaza de receptor por la de tesorero, el dicho Francisco Gutiérrez adquirió esta plaza por 50,000 ducados de vellón. Tres años más tarde cayó en quiebra y huyó de Madrid<sup>608</sup>.

Con el tiempo sus herederos hubieron de pagar la quiebra, aunque pronto tuvieron que vender la plaza de tesorero por generar altas pérdidas. Su sucesor pagó a la caja del Consejo la quiebra de los 40.000 ducados por el oficio, pero pasados seis años y con pérdidas que ascendía a 4.500 ducados el tesorero Juan Bautista Everardo también quebró, habiendo pagado a su antecesor 35.000 ducados. Fue rescatado de la quiebra por Diego González de Arce por 32.000 ducados<sup>609</sup>, siendo el último de los tesoreros del siglo XVII Diego Manuel González de Arce, marqués de la Fuente Hermosa, quien fuera suspendido del cargo por Felipe V en 1703 tras la declaración de quiebra de su familia. Todas estas quiebras tenían su explicación en opinión de Schäfer por las continuas demandas por parte de la Corona sobre las cantidades recabadas en concepto de penas de Cámara, así como por la irregularidad de la llegada de las flotas de las Indias<sup>610</sup>.

Según se ha mencionado líneas atrás, a partir de 1642 el oficio de receptor fue transformado en el de tesorero, empero, las normas que regían su actividad, esto es, las Ordenanzas de 1636 continuaron refiriéndose al receptor<sup>611</sup> y hubo que esperar a la publicación de la Recopilación de Leyes de Indias de 1680 para ver reflejada dicha transformación<sup>612</sup>.

En las reformas a la planta del Consejo de Indias de 1691, Carlos II incluyó al tesorero general como uno de los oficiales que formarían parte de la nueva estructura del Consejo. Su salario ascendía a 2.200 reales de vellón al año, a lo que había que agregar algunas otras gratificaciones tales como el pago de la Casa de aposento, las tres propinas y luminarias ordinarias y extraordinarias de la Candelaria<sup>613</sup>.

---

<sup>608</sup> El asunto de la quiebra del tesorero general del Consejo debía ser conocido privativamente por el fiscal Paulo Arias Temprado (15.01.1644). A.G.I., Indiferente General, 436 L. 12, ff. 130-131.

<sup>609</sup> Vid. E. Schäfer, *El Consejo Real...*, t. 1, p. 357.

<sup>610</sup> *Ibidem*, pp. 254-255.

<sup>611</sup> Nos referimos entre otras a las Ordenanzas 106, 110, 142, 199-200 y 215-233 de 1636.

<sup>612</sup> El título séptimo del libro segundo de la Recop. de Indias se titula del Tesorero General, Receptor de el Consejo Real de las Indias.

<sup>613</sup> Vid. G. Bernard, *Le Secrétariat d'État...*, pp. 96. E. Schäfer, *El Consejo Real...*, t. 1, p. 269.

Ocuparon la plaza de tesoreros durante los primeros diecisiete años del reinado del primer Borbón Diego Manuel González de Arce marqués de Fuentehermosa<sup>614</sup>, Juan Velasco y Angulo<sup>615</sup>, Juan Francisco de Goyeneche quien adquirió la plaza por 40.000 ducados por juro de heredad<sup>616</sup>, nombrando como teniente de tesorero a su hijo Francisco Javier de Goyeneche, futuro marqués de Belzunce, quien en 1715 ocupó la titularidad de la plaza, siendo su teniente Miguel Gastón de Iriarte<sup>617</sup>.

En 1717 Felipe V decidió extinguir la tesorería del Consejo a través de un real decreto exponiendo los siguientes motivos:

*Conduciendo tanto al designio de restablecer el Gobierno en la mayor pureza, y observancia de las leyes en mis dominios de las Indias, que los tribunales de ellas, y especialmente el Superior que reside en esta Corte, por donde se distribuye, y dirige la Justicia, estén suficientes, y efectivamente dotados para que en la decencia y manutención de los ministros, y fácil y pronta paga de sus salarios se asegure la independencia, y libertad de sus ejercicios, y que relevados de las solicitudes y necesidad de contraer empeños por anticipaciones emprendidas, y otros modos a que en la incertidumbre de los plazos y tiempos de pagar por la retardación contingente arribo de las flotas, suele (no con pequeños inconvenientes) precisarlos su indigencia, puedan tener toda aquélla aplicación debida a la importancia, y gravedad de los cargos de mi Real confianza que dependen de su cuidado;*

*He resuelto que el gobernador del Consejo goce con este empleo desde el día primero de este año en cada uno ocho mil escudos de a diez reales de vellón, y cada uno de los consejeros fiscales, y Secretarios tres mil y seiscientos escudos pagamentos, como los salarios y goces que por mí tienen los demás ministros y Oficiales subalternos del Consejo se les han de hacer a los tiempos y plazos acostumbrados con los demás ministros por mi Tesorería General con toda la puntualidad que corresponde, y conviene al fin expresado, sin descuentos del diez por ciento, no quedando en la cantidades aquí asignadas a los dichos ministros de la Tabla del Consejo, comprendido todo el goce que con sus plazas, y en los respectivos a ellas gozaban antes, así por la gruesa del salario, como por Casa de aposento, propinas ordinarias y extraordinarias, ayudas de costa, y otras cualesquiera ob venciones anuales, en cuya consecuencia es mi Real intención, que desde luego cesen todas las demás consignaciones de salarios y emolumentos que por el todo, o en parte hayan dado o por cualquiera modo gozado, y*

---

<sup>614</sup> Ibídem, p. 374.

<sup>615</sup> G. Bernard, *Le Secrétariat d'État...*, p. 233.

<sup>616</sup> Relata Bernard que Juan Francisco de Goyeneche consiguió el permiso para transferir la plaza a su hijo Francisco Javier (25.03.1708), cuando éste llegó a la edad de veinte y cinco años asumió el cargo el 09.12.1715. Posteriormente, en 1716 Felipe V le designó consejero de Indias por lo que hubo de nombrar a Miguel Gastón de Iriarte su teniente para el ejercicio de la plaza de tesorero, cargo que ocupó hasta su extinción en 1717. Ibídem, p. 95.

<sup>617</sup> A.G.I., Indiferente General, 986A.

*respectivamente las direcciones, y destinaciones particulares, con que fueren remitidos los caudales de Indias, que me pertenecen, o que tuvieren consideración de fiscales, o públicos, en cualquiera manera que hayan sido hasta ahora de la distribución del Consejo, o sujeto a particulares encargos o comisiones de los ministros de él, porque todos han de entrar indistintamente en mi Tesorería General, de donde las que tuvieren por su naturaleza precisas o privilegiadas aplicaciones, serán por mis Reales Órdenes distribuido, cesando como mando cese la Tesorería del dicho Consejo de Indias*<sup>618</sup>.

En sustitución del tesorero, el monarca creó la plaza de depositario del Consejo con la intención de suprimir los derechos de tesorería que Goyenche obtenía a raíz de percibir el 3% de todas las cantidades que por concepto de penas de cámara vinieren de Indias. En su lugar, el nuevo depositario obtendría el 1% de dichas condenaciones, lo que representaba una media de 197 ducados al año, cantidad que fue redondeada a 200 ducados (2.200 reales) al año, ahorrándose la real hacienda 17.000 reales de vellón al año<sup>619</sup>.

En el período que estamos analizando ocuparon la plaza de depositario del Consejo Miguel Gastón de Iriarte<sup>620</sup>, Martín de Echarte<sup>621</sup> y José de Partearroyo<sup>622</sup>. A la muerte de éste último sirvió la plaza interinamente José de Pedrezuela, quien en 1771 decidió dimitir, por lo que el monarca aprovechó el momento y declaró extinguido el empleo de depositario y que en adelante sus competencias debían de ser realizadas por un oficial de la Contaduría elegido por el Consejo a propuesta del contador general<sup>623</sup>.

En el título de nombramiento del oficial en cuestión, esto es, el receptor, el tesorero o el depositario establecía que para poder tomar posesión del oficio era necesario prestar el juramento respectivo ante los miembros del Consejo de Indias<sup>624</sup>.

<sup>618</sup> Real decreto 20.10.171. A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 109r-110v, 542, L. 2. ff. 45-49. B.N. Ms. 19251. ff. 13-14.

<sup>619</sup> Vid. G. Bernard, *Le Secrétariat d'État...*, pp. 96-97.

<sup>620</sup> A.G.I., Contaduría, 14. También G. Bernard, *Le Secrétariat d'État...*, p. 233.

<sup>621</sup> Loc. Cit.

<sup>622</sup> Real resolución de 18.01.1737 nombrando a José de Partearroyo el nuevo depositario general. A.G.I., Indiferente General, 446A L. 44, ff. 44v-46.

<sup>623</sup> Vid. R. D. García Pérez, *El Consejo de Indias durante...*, p. 197.

<sup>624</sup> Las palabras que el depositario o el tesorero debía recitar eran las siguientes: - *Que juráis a Dios y a esta ⁂ (o a la del hábito que tuviere) y a las palabras de los cuatro Santos Evangelios, que bien y fielmente y con todo cuidado, diligencia y asistencia usaréis y ejerceréis el oficio de tesorero de SM en este real Consejo de Indias y miraréis y examinaréis las escrituras, papeles y recaudos de las cuentas que hiciéredes, vieredeis, tomaredes y guardaréis justicia a las partes y mirais por la hacienda de SM, su utilidad y buen recaudo y guardaréis secreto de lo que se deba guardar y guardaréis las leyes y*

## 7.2. Prerrogativas y atribuciones del depositario.

En cuanto tomaba posesión del cargo, el tesorero general debía otorgar fianza suficiente para garantizar el cumplimiento del cobro de las cantidades que se adeudasen. El monto era fijado por el Consejo, pero en 1704 un real decreto estableció que los contadores del dicho Consejo debían de *determinar el valor de dicha fianza a partir de que apreciase y tasasen el valor de la Tesorería según los emolumentos, útiles, honores y mercedes que por reales cédulas se concedieron a estos oficios, poniéndolo en la Real noticia, con expresión también de la cantidad en que se benefició la propiedad en otras ocasiones*<sup>625</sup>.

La misión más importante que debía llevar a cabo el receptor o en su caso el tesorero era el cobro, administración, registro y reparto de todas las penas, condenaciones y depósitos para lo cual debía hacer las diligencias necesarias a fin de cobrarlas. Todas aquellas ejecutorias que debían ejecutarse en las Indias también eran responsabilidad del tesorero-receptor, para ello debía enviar dichas ejecutorias a las Indias estableciendo las diligencias necesarias para lograr su cobro<sup>626</sup>.

Era fundamental que el tesorero-receptor elaborase los despachos necesarios para cobrar las penas, condenaciones y depósitos del Consejo, para lo cual era menester que dicho oficial recibiera las ejecutorias de manos de los fiscales<sup>627</sup>. También se requería que el contador tomara razón de dichos despachos<sup>628</sup>.

En principio el receptor se encargaba de realizar los pagos de los salarios y demás emolumentos que les correspondiesen a los ministros y oficiales del Consejo<sup>629</sup>. Pero tras la expedición del real decreto de 1717 todos los salarios y emolumentos debían ser satisfechos a través de la Tesorería General, cesando como hemos visto a la Tesorería General del Consejo<sup>630</sup>.

---

*ordenanzas que están hechas y se hicieren para el buen gobierno y estado de las Indias, leyes y ordenanzas del reino, y en todo haréis lo que como bueno y fiel ministro dicho cargo de contador debéis y sois obligado a hacer = Decid: - Si, Juro. -Si así lo hiciéredes Dios os ayude, y si no os lo demande. Decid Amen. -Amen. B.P.R., Mss. II/2893, p. 285v.*

<sup>625</sup> Real decreto 19.01.1704. J. M. de Ayala, *Notas a la Recopilación...*, p. 130.

<sup>626</sup> Ordenanza 217 de 1636. Recop. Indias 2.7.3.

<sup>627</sup> Ordenanza 220 de 1636. Recop. Indias 2.7.6.

<sup>628</sup> Ordenanza 219 de 1636. Recop. Indias 2.7.5.

<sup>629</sup> Ordenanza 229 de 1636. Recop. Indias 2.7.15.

<sup>630</sup> Real decreto 20.01.1717. A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 109r-110v, 542, L. 2. ff. 45-49.

Recomendaba Antonio Henry que un tesorero o depositario de cualquier clase no debía omitir cuidado ni formalidad alguna para estar siempre a cubierto de las cantidades o cosas que entregue, y en estado de saber el de los caudales o efectos de su cargo. Continuos asientos, apuntes y notas, no fiando nada a la memoria, ni dejando para después la mínima cosa. Al ser el encargado de los caudales del rey debía estar atento en todo momento en contar el dinero, asegurarse de la calidad de la moneda y por supuesto no podrá entregar un real sin orden y recibo autorizado en lo formal y firmado a quienes correspondía dicha competencia<sup>631</sup>.

Finalmente, como cualquier otro subalterno del Consejo, su plaza estaba sujeta a visita por parte de uno de los ministros del propio órgano colegiado, el Consejo podía decidir en cualquier momento realizar la visita y verificar el último alcance de lo cobrado, así como de lo que faltase por cobrar<sup>632</sup>.

## 8. Alguacil mayor.

El alguacil mayor de Indias estaba encargado de ejecutar las órdenes del Consejo<sup>633</sup>. Su existencia se remonta unos años anteriores a la fundación del propio Consejo de Indias, cuando Carlos V en 1510 nombró a Fernando Tello alguacil mayor de Indias con un salario de 200.000 maravedís anuales<sup>634</sup>. Tras la creación del Consejo de Indias se contempló el oficio de alguacil dentro de su planta. Tanto las Ordenanzas de 1571<sup>635</sup>, como las de 1636<sup>636</sup> contemplaron la figura del alguacil mayor del Consejo como parte de los oficiales encargados de ejecutar algunas de las decisiones que en materia de justicia llevaba a cabo dicho órgano.

El nombramiento de los dos alguaciles correspondía al presidente o gobernador del Consejo de Indias<sup>637</sup>. Una vez que éste había nombrado al

---

<sup>631</sup> Vid. A. A. Henry Veira, *El oficinista instruido...*, pp. 75-80.

<sup>632</sup> Ordenanza 233 de 1636. Recop. Indias 2.7.19.

<sup>633</sup> Según las Partidas *el aguacil era aquel que ha de prender e de justiciar los omes en la Corte del Rey por su mandado o de los jueces que juzgan los pleitos*. Partida 2.9.20.

<sup>634</sup> Vid. E. Schäfer, *El Consejo Real...*, t. 1, p. 46.

<sup>635</sup> Ordenanza 102 de 1571. Relataba Schäfer que en 1568 Felipe II dio una instrucción especial a los alguaciles de Corte ordenándoseles que, alternando por semana, uno debía estar por la mañana a disposición del Consejo para lo que se ofreciere mandar y que en actos públicos los dos acompañen al Consejo. La ayuda de costa era de 10.000 maravedís al año. *Ibidem*, t. 1, p. 126, nota. 72.

<sup>636</sup> Ordenanza 244 de 1636.

<sup>637</sup> Vid. M. Gómez Gómez, "Instrucciones para el gobierno...", p. 295.

nuevo alguacil, era menester que se expidiera el título por parte de la Cámara o Consejo de Indias para que el nuevo oficial pudiera, por un lado, realizar el pago de la media anata y, por el otro, hacer el juramento<sup>638</sup>.

Durante el reinado del primer Borbón algunos de los alguaciles mayores que ejercieron dicho oficio fueron Francisco Castejón<sup>639</sup>, Fernando Martínez<sup>640</sup>; Andrés Cabrera<sup>641</sup>, José de Cabrera<sup>642</sup>, José Merino del Castillo y Córdoba<sup>643</sup> o José Martín de Eugenio<sup>644</sup>.

El salario de los alguaciles a finales del siglo XVII fue de 34.000 maravedís<sup>645</sup>, cifra a la que se debía agregar las ayudas de costas por ir a caballo a las funciones de la Iglesia del convento del Carmen Calzado a que va en cuerpo el Consejo, como también el 31 de julio a la del Santo Apóstol Santiago, en el de las Comendadoras; el 21 de octubre al convento de Santa Teresa y el 13 de diciembre el de la fiesta de la Purísima Concepción, al grande de San Francisco<sup>646</sup>. Pero todas estas ayudas de costa hubieron de terminar a partir de que se expidiera el real decreto de 1718 en donde se señaló en concepto de salario la cantidad de 6.000 reales de vellón al año a los alguaciles José de Cabrera y Francisco de Castejón, quedando integrada a dicha cantidad todo los goces que a título de casa de aposento, cera de la candelaria, propinas, luminarias ordinarias y extraordinarias, goces y

---

<sup>638</sup> Anualmente en el primer día después de las vacaciones de navidad, esto es, el día 7 de enero los alguaciles de corte hacían el mismo juramento que cuando entraron a ejercer sus empleos. Vid. A. Martínez de Salazar, *Colección de memorias y noticias...*, p. 335. Las palabras que debían de recitar eran las siguientes: - *Que juráis a Dios y a esta  $\tau$  y a las palabras de los cuatro Santos Evangelios, que bien y fielmente usaréis el oficio de alguacil de este real Consejo de que se os ha hecho merced y haréis todo lo que os fuere encargado y mandado y guardareis el secreto de lo que se debiere guardar, y en todo haréis lo que como bueno y leal alguacil debéis hacer = Decid: -Si, Juro. -Si así lo hicieredes Dios os ayude, y si no os lo demande. Decid Amen. -Amen.* B.P.R., Mss. II/2893, p. 286v-287r.

<sup>639</sup> Sabemos que en 1700 formaba parte de la planta del Consejo de Indias ejerciendo el oficio de alguacil mayor de Indias en 12.05.1700. A.G.I., Indiferente General, 444 L.38, ff. 273r-273v.

<sup>640</sup> Nombrado alguacil interino en 09.04.1701. A.G.I., Indiferente General, 444 L.38, ff. 308v-309r.

<sup>641</sup> En 28.01.1710 ya recibía un salario a través del tesorero del Consejo. A.G.I., Indiferente General, 445 L.39, ff.25v-26r.

<sup>642</sup> El 24.04.1711 se le nombró interinamente como alguacil del Consejo en lugar de Andrés de Cabrera, su padre A.G.I., Indiferente General, 445 L.39, ff. 89-92.

<sup>643</sup> Nombrado alguacil en ínterin el 03.03.1715. A.G.I., Indiferente General, 445 L.39, ff. 305v-308.

<sup>644</sup> Nombrado alguacil interino en 11.03.1741 sirviendo las ausencias y enfermedades de los dos alguaciles que hay del número. A.G.I., Indiferente General, 447 L.46, ff. 8V-9.

<sup>645</sup> Vid. G. Bernard, *Le Secrétariat d'État...*, p. 107.

<sup>646</sup> M. J. de Ayala, *Notas a la Recopilación...*, p. 160.

aguinaldos se disfrutaban con anterioridad los miembros y oficiales del Consejo<sup>647</sup>.

La principal misión de los alguaciles fue la de ejecutar las prisiones que se hubieren dictaminado en los pleitos sustanciados en el Consejo de Indias, ya que según Ayala la ejecución de los mandamientos y apremios dictados por el Consejo eran obligación de los porteros y no de los alguaciles<sup>648</sup>.

Según la Recopilación de Indias<sup>649</sup>, el Consejo podía *mandar llamar a dos alguaciles de Casa y Corte* para realizar lo que se ofreciere. Así durante los primeros años del reinado de Felipe V fueron enviados al Consejo de Indias alguaciles de casa y corte, entre ellos, Santiago de Cotes<sup>650</sup>, Pedro de la Breña<sup>651</sup>, Pedro Suárez de Salcedo<sup>652</sup> o José Pavón<sup>653</sup>. Sin embargo, a partir de la reforma del Consejo de 1717 no hemos encontrado a dichos alguaciles trabajando para el Consejo de Indias y quizá por ello Ayala en su Notas afirmara *que nunca el Consejo ha usado para sus mandamientos y ejecuciones de los alguaciles de la Casa y Corte, ni de la Villa, por tener bastante con sus dos propios*<sup>654</sup>.

## 9. Los relatores.

### 9.1. Evolución histórica.

El relator era el encargado de resumir, extractar y “relatar” el contenido de los negocios y pleitos que se despachaban en el Consejo de Indias, tanto en la sala de justicia, como en la de gobierno. El primer relator que conoció de asuntos indianos lo fue el entonces también relator del Consejo de Castilla, el licenciado Alarcón a quien en 1520 el Emperador le asignó el pago de 8.000 maravedís por realizar tal actividad<sup>655</sup>.

---

<sup>647</sup> Real decreto 17.07.1718. A.G.I., Indiferente General, 829.

<sup>648</sup> M. J. de Ayala, *Notas a la Recopilación...*, p. 160.

<sup>649</sup> Ordenanza 244 de 1636. Recop. Indias 2.14.1.

<sup>650</sup> A.G.I., Indiferente General, 455 L.39, ff. 24-24v.

<sup>651</sup> A.G.I., Indiferente General, 445 L.39, ff. F.27-27v.

<sup>652</sup> A.G.I., Indiferente General, 445 L.39, ff.97V-98.

<sup>653</sup> A.G.I., Indiferente General, 445 L.40, ff.49r-49v.

<sup>654</sup> M. J. de Ayala, *Notas a la Recopilación...*, p. 160.

<sup>655</sup> Título de nombramiento 17.05.1520. A.G.I., Indiferente General, 420 L. 8, ff. 228r-228v. Vid. E. Schäfer, *El Consejo Real...*, t. 1, p. 58.



Después de la fundación del Consejo de Indias, en 1526 el licenciado Francisco de Ceynos<sup>656</sup> fue nombrado fiscal y al mismo tiempo relator del Consejo de Indias con 40.000 maravedís de sueldo. Debido al aumento del volumen de trabajo fue necesario separar ambas plazas, por lo que en 1533, se designó a Hernando Chaves como relator del Consejo con un salario de 30.000 maravedís, cantidad que recibía de las penas de cámara de la Casa de Contratación<sup>657</sup>.

Para el año de 1541 solamente el licenciado Chaves ejercía el oficio de relator. Diez años más tarde Carlos V nombró a dos relatores, el licenciado Santander y el licenciado Rabanal<sup>658</sup>, aunque éste último fue promovido a fiscal de México, suprimiéndose su plaza, quedando el licenciado Santander como único relator, hasta que en 1560 fue agregada una nueva plaza. En 1571 las Ordenanzas consignaron a dos relatores dentro del Consejo de Indias<sup>659</sup>, sin embargo, el que fuera relator del Consejo, Antonio de León Pinelo refería en su *Tablas Cronológicas* que hacia 1580 ya había tres relatores en el Consejo<sup>660</sup>, dos de ellos con un salario de 100.000 maravedís y el tercero con 75.000 maravedís provenientes de las penas de cámara de la Casa de Contratación<sup>661</sup>.

En el reinado de Felipe III fue una constante el aumento del personal subalterno del Consejo, entre ellos, los relatores, quienes en el año de 1618 llegaron a ser hasta cinco. Pero nuevamente las Ordenanzas de 1636 confirmaron en tres el número de relatores que debían laborar en el Consejo<sup>662</sup>. En las reformas de 1691 llevadas a cabo por Carlos II el número se redujo a tres de los seis que ejercían el oficio, los restantes gozarían la mitad de los gajes y con derecho a ocupar las plazas según fueran vacando<sup>663</sup>.

Cuando Felipe V asumió el poder en el Consejo había tres relatores. Posteriormente, las reformas de 1713 debieron aumentar el número de

---

<sup>656</sup> Real Provisión 31.08.1526. A.G.I., Indiferente General, 421 L. 11, ff. 136r-136v

<sup>657</sup> Vid. E. Schäfer, *El Consejo Real...*, t. 1, p. 66.

<sup>658</sup> *Ibíd.*, p. 92.

<sup>659</sup> Ordenanza 1 de 1571.

<sup>660</sup> Entre 1580 y 1582 fueron relatores Baños, Lupidana y Zamora. Vid. A. de León Pinelo, *Tablas Cronológicas...*, p. 21.

<sup>661</sup> En 1591 Felipe III ordenó a la Casa de la Contratación el envío de una sola cantidad, de manera que ya no libraría la paga de cada uno de los destinatarios de la nómina a su cargo, como era el caso de los relatores, solicitador fiscal o porteros del Consejo, quienes su salario iba a cargo de los tributos cobrados por la Casa. Vid. E. Schäfer, *El Consejo Real...*, t. 1, p. 132, nota 100.

<sup>662</sup> Ordenanza 1 de 1636.

<sup>663</sup> Real decreto 17.07.1691. A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 47r-52v; 827.

dichos oficiales, sin embargo el real decreto dirigido específicamente al Consejo de Indias nada decía al respecto y el mismo remitía al reglamento expedido para el Consejo de Castilla<sup>664</sup>. La planta de 1715 nuevamente señaló en número de tres a los relatores que debían ejercer el oficio en el Consejo de Indias<sup>665</sup>. A partir de entonces esta cifra no varió en el reinado del primer Borbón.

## 9.2. Nombramiento y toma de posesión.

Según la Recopilación de Indias los relatores del Consejo debían guardar en el uso de sus oficios las leyes de Castilla<sup>666</sup>. De lo anterior se desprende que para poder acceder a una relatoría era menester cumplir con los requisitos que establecían las disposiciones reales para el caso de los relatores del Consejo de Castilla<sup>667</sup>.

Para acceder a una relatoría se debía aprobar un examen cuyos requisitos fueron regulados a través de una real Pragmática promulgada por Felipe IV el 18 de septiembre de 1630<sup>668</sup>. Dicha disposición señalaba la forma de llevar a cabo el oportuno examen consistente en entregar a cada pretendiente un proceso aceptado por la mayor parte de los integrantes del Consejo. Una

<sup>664</sup> Seguirá el mismo reglamento que el del Consejo de Castilla *señalados en el Reglamento que para ello, y otros puntos se ha expedido al Consejo de Castilla, de que también va aquí copia para que por lo que mira a estos decretos, forma de sentarse en el Tribunal, días y horas del Consejo que ha de haber en adelante, abstinencias de otros ningunos negocios, ni comisiones que han de tener los ministros, relación que se ha de poner en mis manos del importe de los derechos de propinas, y demás utensilios, y efectos que hasta aquí se han percibido, y cobrado, por el Consejo, que en adelante se han de recaudar para mi Real Hacienda, manejo de los Secretarios, separación de los negocios que entre ellos se han de hacer y oficiales que han de proponer, regle a él en todo y por todo el Consejo de Indias, y los ministros que para el van señalados como si en este fuese lo referido expresado a la letra porque mi voluntad es que en esta Planta y regla se uniformen en él todos los tribunales de la Corte.* Real decreto 10.11.1713. A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 58v-62v; 827.

<sup>665</sup> Real decreto 05.08.1715. A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 90r-97r; 827.

<sup>666</sup> *Ordenamos y mandamos, que los Relatores que huviere en el nuestro Consejo de las Indias en el uso y ejercicio de sus oficios, guarden las Leyes de estos Reinos, que hablan de los Relatores del Consejo y tribunales de ellos...* Recop. Indias. 2.92.1.

<sup>667</sup> Enfatiza Agustín Bermúdez que esta remisión a la normativa castellana seguirá siendo un obligado marco de referencia para la regulación del relator del Consejo de Indias, entre las que destacan las Ordenanzas del Consejo de Castilla promulgadas en la Coruña de 1554 o la Recopilación de las leyes destos Reynos de 1567. Vid. A. Bermúdez Aznar, “El oficio de relator...”, pp. 441-44.

<sup>668</sup> A. X. Pérez y López, *Teatro de la legislación...*, t. 26, pp. 112-13. También Nov. Recop. 4.20.2.

vez entregado el examen, el opositor contaba con veinticuatro horas para entregar su relación, debiendo además *dar su parecer como licenciado*. Tras terminar su lectura, el presidente o gobernador del *Consejo hacían una señal con la campanilla de modo que saliera el opositor, observándose la misma ceremonia para el resto de opositores*. Posteriormente el escribano de cámara anotaba el día del examen de cada pretendiente a la plaza y se fijaba fecha para la votación del Consejo. La elección del relator se debía dar por el mayor número de votos y en igualdad de votos elegía el presidente del Tribunal. Tras la votación, el escribano de cámara era el encargado de notificar al opositor vencedor.<sup>669</sup>

En principio no existía ningún requisito para presentarse al examen de relator. Schäfer señalaba que los relatores eran letrados que debían poseer gran habilidad y conocimiento de los documentos para comprender rápida y certeramente lo importante y resumirlo bien<sup>670</sup>. En este sentido, Agustín Bermúdez también afirmaba que las referencias documentales mostraban la necesidad de estar en posesión del título de licenciado en derecho<sup>671</sup>, entre otras razones, porque según la legislación real era incompatible el oficio de relator con el de abogado<sup>672</sup>.

El candidato era propuesto a través de una consulta al monarca a quien se le presentaba una terna de candidatos que cubrían los requisitos necesarios. Posteriormente el monarca nombraba al nuevo relator del Consejo<sup>673</sup>. Tras la expedición del título por las secretarías, después de haber realizado el correspondiente pago de la media anata, el nombramiento era refrendado por uno de los secretarios del Consejo<sup>674</sup>. A partir de ese momento y antes de entrar a laborar, el relator debía prestar el juramento ante los ministros de dicho órgano colegiado<sup>675</sup>, de manera que fuera recibido como tal. Además

---

<sup>669</sup> El proceso de selección de los relatores del Consejo de Castilla lo describe A. Martínez de Salazar, *Colección de memorias...*, p. 677.

<sup>670</sup> Vid. E. Schäfer, *El Consejo Real...*, t. 1, p. 126.

<sup>671</sup> A. Bermúdez Aznar, "El oficio de relator...", p. 434.

<sup>672</sup> N. Recop. 2.17.13.

<sup>673</sup> En la *Instrucción sobre competencia y prerrogativas correspondientes al empleo de presidente del Consejo de Indias...* se señalaba que el presidente o gobernador del Consejo podía hacer el nombramiento de los relatores interinos. Vid. M. Gómez Gómez, "Instrucciones para el...", p. 295.

<sup>674</sup> Vid. R. D. García Pérez, *El Consejo de Indias durante...*, p. 214.

<sup>675</sup> Las palabras que debía recitar eran las siguientes: - *Que juráis a Dios y a esta ✠ (o a la del hábito que tuviere) y a las palabras de los Santos cuatro Evangelios, que bien y fielmente con todo cuidado y diligencia usaréis y ejerceréis el oficio de relator de este real Consejo de que se os ha hecho merced y guardareis el secreto de él, y las leyes y ordenanzas del reino, y la que están hechas y se hicieren para el buen gobierno y a las partes su derecho y justicia, y no llevaréis derechos demasiados y ningunos a los pobres, ni*

de guardar el secreto de lo tratado en el Consejo<sup>676</sup> era necesario que se comprometiera a la percepción de los derechos establecidos por el arancel<sup>677</sup>.

En el reinado de Felipe V ocuparon las relatorías del Consejo de Indias los siguientes licenciados: Agustín de Ceballos de Estrada<sup>678</sup>, Francisco Serrano de Valencia<sup>679</sup>, Juan Villagutierre<sup>680</sup>, Juan de la Bría Chacón<sup>681</sup>, Francisco Ramiro Valenzuela<sup>682</sup>, Manuel de Arredondo<sup>683</sup>, Luis Escandón<sup>684</sup>, Luis Lagunez Malaguilla<sup>685</sup>, Dionisio Martínez de Larne<sup>686</sup> y Francisco Javier Sánchez de Villegas<sup>687</sup>.

### 9.3. Prerrogativas y atribuciones.

El salario de los relatores del Consejo de Indias era a finales del siglo XVII de 120,000 maravedís anuales, a lo que había que sumar las ayudas por concepto de casa de aposento, luminarias ordinarias y extraordinarias y aguinaldos<sup>688</sup>. A partir de 1717 el salario se fijó en 10.000 reales de vellón anuales, *siendo esta cantidad la equivalente a la que antes recibían por concepto de casas de aposento, gajes de secretario, propinas, luminarias,*

---

*indios, y en todo procederéis con la fidelidad que debéis y sois obligado = Decid: -Si, Juro. -Si así lo hicierdes Dios os ayude, y si no os lo demande. Decid Amen. -Amen. B.P.R., Mss. II/2893, p. 285.*

<sup>676</sup> La Recopilación establecía que en caso que los relatores faltaren al secreto de lo acordado en el Consejo antes de su publicación debían ser sancionados según la pena impuesta por el propio Consejo. Ordenanza 169 de 1636. Recop. Indias 2.9.2.

<sup>677</sup> N. Recop. 2.17.1.

<sup>678</sup> Vid. E. Schäfer, *El Consejo Real...*, t. 1, p. 359.

<sup>679</sup> Título de nombramiento 03.05.1685. A.G.S., Dir. Gral. del Tesoro, leg. 171 f. 110.

<sup>680</sup> Vid. E. Schäfer, *El Consejo Real...*, t. 1, p. 360.

<sup>681</sup> Real cédula nombramiento 25.04.1687. A.G.I. Indiferente General, 445, L. 39, ff. 161v-163v

<sup>682</sup> Sabemos que en el año de 1711 ya era relator del Consejo de Indias. A.G.I. Indiferente General, 445, L. 39, ff. 189v-190r.

<sup>683</sup> Real Provisión 31.10.1711 dándole el título de relator del número del Consejo, en lugar y por muerte del licenciado Don Francisco Serrano de Valencia. A.G.I. Indiferente General, 445, L. 39, ff. 161v-163v.

<sup>684</sup> Título de nombramiento 27.11.1721. A.G.S., Dir. Gral. del Tesoro, Inv. 13, leg. 8, f. 308.

<sup>685</sup> Título de nombramiento 10.05.1724. A.G.S., Dir. Gral. del Tesoro, Inv. 13, leg. 8, f. 307.

<sup>686</sup> Título de nombramiento 18.08.1734. A.G.S., Dir. Gral. del Tesoro, leg. 179, f. 123.

<sup>687</sup> Título de nombramiento 22.12.1739. A.G.S., Dir. Gral. del Tesoro, leg. 180, f. 181.

<sup>688</sup> Vid. E. Schäfer, *El Consejo Real...*, t. 1, p. 246.

*ceras de la candelaria, aguinaldo, y ayudas de costa que antes tenían*<sup>689</sup>. Cifra que permanecería sin alteración durante todo el siglo XVIII.

Además de sus salarios, los relatores podían cobrar los derechos establecidos en el arancel por cada expediente o pleito despachado, tanto en la sala de gobierno, como en la justicias<sup>690</sup>. En 1722 Felipe V expidió un nuevo arancel fijando los derechos que habían de percibir los relatores del Consejo de Indias<sup>691</sup>. Cantidades que se mantuvieron hasta la concreción de un nuevo arancel concedido en 1830<sup>692</sup>.

La falta de actualización del salario, como del arancel generaron el uso de prácticas corruptas, así por ejemplo, según J. L. de las Heras solía suceder que en los consejos los jueces no examinaban por sí las actas judiciales antes de decidir los litigios, para ayudarse en su función los relatores eran

---

<sup>689</sup> Real decreto 17.07.1718. A.G.I., Indiferente General, 829.

<sup>690</sup> Real decreto junio 1556 que establece el arancel de los relatores de los consejos y alcaldes de Corte. N. Recop. 2.17.23.

<sup>691</sup> Real decreto 09.01.1722. *Por las relaciones que hacen los Relatores de los expedientes en las Salas de Gobierno y de Justicia, o sean de procesos, o de otras cuales quiera escrituras, puedan llevar de cada parte que litiga 4. mrs. de plata por hoja, y si litigare alguna Comunidad puedan percibir este derecho doble. De los procesos que hicieren relación para recibir a prueba, lleven de cada parte dos mrs. de plata por hoja y siendo pleito entre Comunidades perciban derecho doble. En las relaciones para determinar los pleitos en definitiva se tase a 4. mrs. de plata por hoy, para que los perciban de cada una de las partes desde el último auto interlocutorio; y de lo antecedentemente actuado, de que ya hicieron antes relación, lleven tres mrs. por hoja de cada una de las partes. Por las relaciones en Revista lleven a razón de 4 mrs. por hoja de cada parte por lo nuevamente actuado en este grado, y por lo que estaba actuado en primera instancia, perciban solamente tres mrs. de plata por hoja, de cada parte: En los pleitos de segunda suplicación, haciéndose relación a fin de ver si ha lugar la dicha segunda suplicación, perciban 3. mrs. de plata por cada hoja de cada parte, y cobren también este mismo derecho en el caso de declarar que tiene lugar la suplicación, y en el de hacer la relación en definitiva. Cuando se remitiese alguna causa en discordia a mas Jueces, por la relación que a estos hicieren, perciban 2. mrs. de plata por hoja de cada parte: De los Memoriales Ajustados que hicieren de los pleitos a instancia de las partes o de orden del Consejo, se tasaran los derechos, que parecieren proporcionados por los ministros de la Sala donde se hubiere visto el pleito según la calidad de el, y el trabajo, y aplicación, que haya puesto el relator para formar el dicho Memorial Ajustado; cuando fueren muchas las personas que litigaren con una misma acción puedan llevar respectivamente los derechos referidos, como si fueran de tres partes; previniéndose que para cobrar los derechos que en este Arancel quedan señalados ha de preceder la tasación del Contador más antiguo de este Consejo de las Indias, reconocimiento, y numeración de las hojas del proceso, y la cantidad, que fuere tasada por el dicho Contador, la ha de sentar, y firmar de su mano en el proceso debajo de la pena establecida en la ley 23. título 17, lib. 2. de la Recop. y con la percepción de estos derechos, y el sueldo, que les da su Majestad, no puedan percibir otros ningunos, ni con el pretexto de ser voluntarios de la parte; y lo que percibieren por razón de dichos derechos, lo asienten en la segunda o tercera hoja del proceso, y den recibo de ello a las partes. A. A. de la N. Recop. 2.17.18.*

<sup>692</sup> Vid. R. D. García Pérez, *El Consejo de Indias durante...*, p. 217, nota 393.

los encargados de confeccionar un resumen final del proceso a fin de que los consejeros emitieran su fallo. De manera que antes de sentenciar se informaban del juicio a través de la síntesis realizada por el relator incidiendo su actividad de manera directa en el resultado del juicio, por lo que se convirtió en una costumbre regalar presentes a dichos oficiales a favor de los intereses propios<sup>693</sup>.

Varias eran las actividades que los relatores debían desarrollar dentro del trabajo diario del Consejo. La principal consistía en resumir y extractar el contenido de los asuntos que se veían en el Consejo cuya finalidad estribaba en que los ministros contaran con un buen extracto del negocio, sin necesidad de hacer una lectura pormenorizada de todo el expediente. Por ello, de su trabajo dependía en buena medida la correcta administración de justicia y una adecuada toma de decisiones que en materia de gobierno debían tomar los consejeros<sup>694</sup>.

Se prohibía a los relatores recibir papeles cuya relación estuviera encomendada a otro relator, y en caso de hacerlo debía solicitar la licencia del presidente o gobernador del Consejo<sup>695</sup>. En el caso del oficio de relator, las Ordenanzas de 1571 concedieron al Consejo la posibilidad de castigar y en su caso, expulsar de su oficio aquel relator que no realizara adecuadamente su oficio<sup>696</sup>.

En principio los relatores debían elaborar los memoriales de su puño y letra y sólo en casos extremos podrían ayudarse de oficiales, siempre que el trabajo se realizara en la propia casa del relator. Evitando en todo momento no hacer memoriales de los pleitos a menos que las partes de conformidad lo pidieran<sup>697</sup>. Con el fin de que el Consejo se asegurase del adecuado trabajo realizado por los relatores, el presidente nombraba cada año al consejero visitador encargado de revisar el buen uso de sus oficios<sup>698</sup>.

---

<sup>693</sup> Vid. J. L. de las Heras Santos, *La justicia penal de los Austrias en la Corona de Castilla*, Salamanca, 1994, p. 170.

<sup>694</sup> Vid. R. D. García Pérez, *El Consejo de Indias durante...*, p. 212.

<sup>695</sup> Ordenanza 170 de 1636. Recop. Indias 2.9.3.

<sup>696</sup> Ordenanza 174 de 1636. Recop. Indias 2.9.7.

<sup>697</sup> Ordenanza 171 de 1636. Recop. Indias 2.9.4.

<sup>698</sup> Ordenanza 76 de 1636. Recop. Indias 2.3.8.

## 10. El escribano de cámara.

### 10.1. Situación de los escribanos de cámara en el reinado de Felipe V.

El escribano de cámara era el encargado de gestionar todas las cartas y despachos emanados del Consejo en materia de justicia. Por ello, al estar encargado de recibir los pleitos de los particulares y encauzarlos dentro de la mecánica del propio Consejo fue considerado una pieza clave en la labor del Consejo, siendo su rango el mayor entre los subalternos<sup>699</sup>.

En las reformas a los consejos de 1713 el escribano de cámara pasó a depender directamente de los secretarios del Consejo, el propio reglamento del Consejo de Castilla que también debía aplicarse al Consejo de Indias advertía las razones de esta decisión:

*...siendo lo más importante de los negocios el Secreto en los consejos, y tribunales y que aunque le guarden con exactitud y legalidad los ministros, que son obligados a él, no se consigue tan enteramente como conviniera en los de Justicia por haber de pasar, y actuarse muchos de ellos por ministros inferiores que no están ligados con la obligación del juramento de que resulta faltarse muchas veces a la administración de justicia, y hacerse público lo que debiera reservarse; he resuelto que de aquí adelante corra, y se despache por mano de los Secretarios en Jefe que ahora se establecen en mis consejos, todo lo que por ellos, y por las Salas de cada uno se tratare, y acordare, sean negocios políticos, gubernativos, de gracia, o de justicia, y todos lo que hasta aquí se han despachado, y despacharán así por las mismas Secretarías como por las Escribanías de cámara de los consejos, no obstante la práctica y estilo observado hasta aquí con los Escribanos de cámara, pues se considera no son de menos importancia, ni aprecio los negocios que por las referidas escribanías se despacharán en la expedición de los decretos, autos, y sentencias de justicia que decidían las honras, vidas y haciendas de los vasallos cuyas materias no conviene que siendo de tanta entidad se fíen de personas de menor carácter, y representación que las de mis Secretarios en quienes reside la obligación del secreto y que han tenido siempre, y deben tener en adelante el asiento, los honores, y la representación igual en todo a la de los mismos ministros del Tribunal, en el cual deben residir, y guardarse con especial cuidado en sus archivos, los decretos, consultas, autos y sentencias de cualquier calidad que sean que en ellos se dieren, pues en la custodia y conservación de semejantes instrumentos consisten las haciendas y aún las honras de mis vasallos, por lo cual he tomado esta resolución la cual mando se observe inviolablemente así por los tribunales, y Salas de ellos, como por los Secretarios que se establecen en cada uno, sin embargo, de que hasta aquí no hayan sido de su*

---

<sup>699</sup> Vid. J. M<sup>a</sup> Puyol Montero, *El Consejo de Castilla...*, t. 2, p. 792.

*manejo estas materias de Justicia, ni los autos, acuerdos y sentencias que de ellas dimanaban teniéndose entendido, que en adelante han de serán, y se deben reputar los Escribanos de cámara, los de Provincias y los del Número por unos Subalternos de los mismos Secretarios, y debajo de sus órdenes para recibir las que las dieren sin ejecutar otras más que las suyas, ni tener otro manejo, ni dependencia, acto, ni firma alguna en las materias, y negocios que antes trataban*<sup>700</sup>.

Llama la atención que en dicha disposición se señalara que uno de los motivos por los que el escribano de cámara debía quedar bajo la supervisión del secretario del Consejo era precisamente porque éste podía incurrir en una indiscreción. Sin embargo, como veremos en el siguiente epígrafe, el escribano estaba obligado a prestar juramento de cumplir con la obligación de guardar el debido secreto en los asuntos manejados por él. Para el año de 1715 la situación del escribano retornó al estado en que se encontraba y no volvió a depender del secretario del Consejo. A partir de ese momento éste ocupó un papel fundamental dentro de la organización interna.

Durante el reinado de Felipe V ostentaron el cargo de escribano de cámara del Consejo de Indias Juan Ortiz de Bracamonte<sup>701</sup> y a partir de 1725 Antonio Salazar y Castillo<sup>702</sup>.

## 10.2. Nombramiento y toma de posesión.

Al igual que sucedía en las Escribanías de Cámara del Consejo de Castilla<sup>703</sup>, en Indias el oficio fue enajenado por la Corona y perteneció a diferentes personas a quienes se les concedió el derecho de nombrar a su teniente para ejercer el oficio y de quien percibían por arrendamiento la cantidad que tenía asignada el Consejo<sup>704</sup>. Por un auto acordado de 1722 se estableció que los escribanos de cámara debían pagar sólo a los propietarios

---

<sup>700</sup> Real decreto 10.11.1713 expedido al Consejo de Castilla y dirigido al Consejo de Indias para su cumplimiento. A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 69r-75v.

<sup>701</sup> Título expedido 01.03.1709 en A.G.S., Dir. Gral. del Tesoro, Inv. 13, leg. 8, f. 267.

<sup>702</sup> Título expedido 18.03.1725 en A.G.S., Dir. Gral. del Tesoro, Inv. 13, leg. 9, f. 370. Nombrado en 1725 hasta su renuncia a favor de su hija Manuela Silvestra Salazar y Ramírez el 03.04.1759. Vid. R. D. García Pérez, *El Consejo de Indias...*, pp. 276-277.

<sup>703</sup> A. Martínez de Salazar, *Colección de memorias y noticias...*, pp. 658-659.

<sup>704</sup> El primer secretario de Cámara del Consejo de Indias fue Francisco de Sopando Balmaseda en 1570. A principios del siglo XVII Álvaro Ximénez de Espinaredo adquirió por juro de heredad que había devenido vendible y renunciable. Su viuda decidió renunciar al cargo a favor de Julián de Sevilla. R. D. García Pérez, *El Consejo de Indias...*, p. 276.



7,000 reales de vellón en razón de los emolumentos que en justicia correspondían a los dueños de los oficios<sup>705</sup>.

Para que la transmisión del oficio vendible<sup>706</sup> pudiera entregarse a un nuevo adquirente era menester que el titular renunciara y traspasara su oficio a través de un escrito llamado de “de petición y renunciación”. El escrito iba dirigido al rey en donde el escribano exponía los motivos de su renuncia y el nombre de la persona en quien renunciaba<sup>707</sup>. Dicho escrito de renuncia era normalmente aceptado por el rey, dando su conformidad a partir de la expedición del título respectivo. Esta confirmación real significaba en opinión de Tomás y Valiente que el rey procuraba conservar la regalía consistente en la designación de la persona titular del oficio; así, con la expedición del título del oficio concreto en nombre de su adquirente por vía privada, se cubría “con un manto de derecho público la operación privada, su enajenación entre particulares”<sup>708</sup>.

En 1726 un real decreto obligó a los dueños de las escribanías o a sus apoderados que en caso de vacante de la plaza propusieran a tres candidatos cuyos nombres serían enviados al monarca a través de una consulta para que éste decidiera el candidato que fuera de su mayor agrado<sup>709</sup>.

En materia de venta de oficios imperaba el principio de que cualquier oficio público debía estar desempeñado por la persona más idónea en conocimientos técnicos y en cualidades de moralidad<sup>710</sup>. Para el caso del escribano de cámara no existió requisito legal alguno. Empero, Martínez de Salazar establecía que el pretendiente *debía mostrar inteligencia y habilidad para dar a entender los asuntos, responder con reflexión, despachar con presteza sin confusión, ni interés manifestándose afable, cortés y caritativo con los litigantes y acomodar su genio al de unos y otros para acreditar que el concepto del hombre juicioso consiste en la conversación, buen trato y*

---

<sup>705</sup> Real decreto 15.04.1722. A. A. de la N. Recop. 4.21.16.

<sup>706</sup> Recop. Indias 8.20.1.

<sup>707</sup> Vid. S. de Dios, *El Consejo Real...*, p. 319.

<sup>708</sup> F. Tomás y Valiente, “Ventas y renunciaciones de oficios públicos...”, p. 728.

<sup>709</sup> *Por ahora los escribanos de Cámara por razón de los emolumentos que pertenecen a los dueños de los oficios que ejercen, paguen y les satisfagan en cada un año, que han de contarse desde el principio de este presente, siete mil reales de vellón, teniendo cada uno de dichos escribanos de Cámara libro de cuenta y razón donde se sienten todos los emolumentos y útiles sin reservación de cosa alguna, para dar relación jurada de ellos al Consejo al fin del año, y de aquí en adelante vacando los oficios o cualquiera de ellos, los dueños no pasen a nombrar persona determinada, y propongan tres al Consejo, para que de ellas elija al que tuviere por conveniente, lo que se les gaga notorio.* A. A. de la N. Recop. 2.19.66.

<sup>710</sup> Vid. F. Tomás y Valiente, “Ventas y renunciaciones...”, p. 737.

*compostura con los demás, de lo que muchas veces pende el alivio de los litigantes*<sup>711</sup>.

Una vez que el escribano obtenía el título era común que acudiera al Consejo con el escrito de renunciación a fin de hacer el juramento y tomar posesión del cargo<sup>712</sup>. El escribano, como cualquier otro subalterno del Consejo debía realizar la solemnidad habitual del juramento ante los miembros del Consejo<sup>713</sup>.

Tras el juramento ante la Sala en pleno el escribano de cámara entraba en posesión del cargo sin que procediera examen, ni requisito alguno<sup>714</sup>.

### 10.3. Prerrogativas y atribuciones.

El escribano de cámara obtenía ingresos a partir de dos vías. Por un lado un salario fijo y, que en 1717, ascendía a 12,000 reales de vellón anuales<sup>715</sup>. Y, por el otro, tenía la posibilidad de cobrar derechos devengados por sus servicios según el arancel previamente establecido<sup>716</sup>. En las Ordenanzas de 1636 se ordenó al escribano de cámara cobrar los mismos derechos de arancel fijados para el escribano del Consejo de Castilla<sup>717</sup>.

En 1722 encontrándose Felipe V en Ventosilla expidió un decreto estableciendo el arancel de los derechos que debían cobrar los escribanos de cámara del Consejo de Castilla<sup>718</sup>; cantidades, que como ya se mencionó,

---

<sup>711</sup> A. Martínez de Salazar, *Colección de memorias y noticias...*, p. 658.

<sup>712</sup> Vid. S. de Dios, *El Consejo Real...*, p. 321.

<sup>713</sup> La fórmula de juramento que debían utilizar era la siguiente: - *Que juráis a Dios y a esta  $\dagger$  (o a la del hábito que tuviere) y a las palabras de los Santos cuatro Evangelios, que bien y fielmente usaréis y ejerceréis el cargo y oficio de escribano de cámara de SM en este su Real Supremo Consejo de las Indias, y ordenanzas del reino, y las que están hechas y se hicieren para este Consejo, y para el buen gobierno del estado de las Indias, y el secreto del Consejo, y no llevaréis derechos demasiados, y ningunos a los pobres, y en todo haréis lo que como bueno y fiel ministro de SM en el dicho cargo y oficio debéis y sois obligado a hacer. = Decid: -Si, Juro. -Si así lo hicieredes Dios os ayude, y si no os lo demande. Decid Amen. -Amen.* B.P.R., Mss. II/2893, p. 286.

<sup>714</sup> En cambio para los escribanos de cámara de las Audiencias indianas un requisito para acceder al oficio era precisamente aprobar un examen. Recop. Indias 5.8.4.

<sup>715</sup> Real decreto 17.07.1718. A.G.I., Indiferente General, 829. G. Bernard, *Le Secrétariat d'Etat...*, p. 114.

<sup>716</sup> Ordenanza 187 de 1636. Recop. Indias 2.10.15.

<sup>717</sup> En 1722 se reiteró la obligación por parte del escribano de Cámara para cobrar los mismos derechos que su homónimo en el del Consejo de Castilla. A. A. de la N. Recop. 2.19.54.

<sup>718</sup> Real decreto 09.01.1722. A. A. de la N. Recop. 2.19.52.

debía de adecuarse el escribano del Consejo de Indias. En dicho decreto se estableció al vellón como la moneda a utilizar en el cobro de los derechos<sup>719</sup>. También se obligó a los escribanos a poner en todos los despachos expedidos por ellos un *recibo rubricado de su mano al pie de ellos, con expresión precisa de la cantidad y la que hubiere recibido por derecho de tira de los pleitos la han de poner en las hojas de rollo o pieza corriente de los autos, adonde correspondiere al tiempo que la perciban*.

Para evitar que los escribanos abusaran de los litigantes, un decreto expedido en 1726 los obligó a exponer en un lugar visible el arancel que cobraría por sus servicios, advirtiéndoles a demás que en caso de excederse en el cobro de las cantidades establecidas en el arancel serían castigados en proporción al caso, calidad y estado de cada uno<sup>720</sup>.

El escribano de cámara era el encargado de leer personalmente las peticiones de justicia solicitadas por las partes y escribir de su mano los decretos que se acordaren en el Consejo. En caso que no pudiera acudir al pleno era sustituido por su oficial mayor quien siendo escribano real podía refrendar los despachos y después el presidente o gobernador del Consejo para que lo refrende el escribano de cámara de Castilla<sup>721</sup>.

A fin de remitir al monarca todos aquellos asuntos de justicia que se resolvían en el Consejo, era menester que el escribano de cámara enviara la documentación correspondiente al secretario del Consejo, quien era el encargado de presentar al monarca dichos despachos. Además, ambos debían asentar en un libro las consultas que en materia de justicia se acordaren, así como la resolución real<sup>722</sup>.

Además, el escribano recibía las quejas de los particulares, preparaba y distribuía los asuntos, tomaba nota del desarrollo de los juicios y enviaba copia a los particulares interesados, escribían los decretos y las determinaciones y con solo su rúbrica quedaban autorizados, firmaban las

---

<sup>719</sup> Ayala refiere que en una consulta de 22.09.1733 *el rey resolvió se arreglase el escribano de Cámara al arancel por lo que miraba a los derechos que percibiese de los expedientes de Islas de Canarias y de estos Reinos, a saber los de las enunciadas Islas en reales de plata nueva de a 12 cuartos y medio, que era lo usual de ellas y los de Andalucía y otras partes de estos reinos en reales de vellón. Y en cuanto a los de las Indias los cobrase en la moneda de reales de plata de ellas, que era de a 16 cuartos, llamada antigua; de modo que no excediese su valor a el de vellón que tenía antes de la pragmática de 1728*. Vid. M. J. de Ayala, *Notas a la Recopilación...*, p. 142.

<sup>720</sup> Real decreto 28.02.1726. Nov. Recop. 4.2.3.

<sup>721</sup> Ordenanza 177 de 1636. Recop. Indias 2.10.3.

<sup>722</sup> Ordenanza 178 de 1636. Recop. Indias 2.10.4.

cartas-órdenes del Consejo, y se les daba puntual cumplimiento<sup>723</sup>. Sin embargo, para que las escrituras tuvieran valor legal, era necesario que el oficial mayor de la Escribanía fuera quien emitiera el documento y no el propio escribano de Cámara. También tenía obligación de tener un “libro de condenaciones”<sup>724</sup> en el que apuntar cualquier maravedí que fuere a cargo del receptor<sup>725</sup>.

Debía conservar un “libro de fe o de testimonio”<sup>726</sup> donde se asentara el juramento que habían de hacer los del Consejo cuando fueren recibidos en su oficio, anotando el día del juramento de cada ministro y oficial<sup>727</sup>. También debía llevar un libro en donde anotar todo lo relativo a las condenaciones impuestas a los juicios presentados ante el Consejo. Asimismo debía llevar un inventario que incluyera los procesos en curso y su estado a fin de poder informar con detalle ante el Consejo. En 1738 Felipe V ordenó a los escribanos acudir a la apertura de los pliegos llegados de las Indias de modo que pudieran realizar el inventario de la documentación antes de verse por la propia Sala de Justicia<sup>728</sup>.

Además el escribano de cámara era el jefe de la oficina a cuyo cargo se encontraban un oficial mayor y algunos oficiales numerarios y supernumerarios. En dicha oficina se despachaban todos los asuntos que el Consejo conocía por vía de justicia, de la misma manera que las secretarías del Consejo lo hacían para la vía de gobierno. Según afirma Rafael García la Escribanía de Cámara servía de enlace entre las decisiones del Consejo y los destinatarios, pudiendo ser los ministros a quienes se encomendaba realizar una residencia, también podían ser las partes que intervenían en un proceso judicial, el fiscal del Consejo o cualquiera de los tribunales indianos. En otras palabras, la Escribanía ponía en contacto al Consejo con las partes, los relatores, los fiscales, los tribunales de Indias o cualquier otra institución que tuviera una intervención dentro de un proceso<sup>729</sup>.

Como ya se ha mencionado formaban parte de la Escribanía un oficial mayor y dos oficiales, cuyas vacantes eran provistas por el titular del oficio quien solicitaba del Consejo los ascensos regulares y el dueño de la plaza proponía un sujeto idóneo para ocupar la última plaza de la Escribanía, esto

---

<sup>723</sup> Vid. A. Martínez de Salazar, *Colección de memorias y noticias...*, p. 658.

<sup>724</sup> Sobre estos tipos de libros Vid. M. Gómez Gómez, *El sello y registro...*, p. 169.

<sup>725</sup> Ordenanza 181 de las de 1636. Recop. Indias 2.10.8.

<sup>726</sup> Vid. M. Gómez Gómez, *El sello y registro...*, p. 171.

<sup>727</sup> Ordenanza 182 de las de 1636. Recop. Indias 2.10.10.

<sup>728</sup> Real decreto 27.12.1738. A.G.I., Indiferente General, 543 L. 3, ff. 461-462.

<sup>729</sup> R. D. García Pérez, *El Consejo de Indias...*, p. 281.

es, la de oficial tercero<sup>730</sup>. Ocuparon el cargo de oficial mayor de la dicha Escribanía durante el reinado de Felipe V Bernardo Lancero<sup>731</sup>, Juan Antonio Lecaroz a quien se le asignó un salario de 2,600 reales de vellón al año<sup>732</sup> y tras su muerte acaecida en 1732 fue nombrado como nuevo oficial mayor José de Siles y Calahorra<sup>733</sup>, cargo que ostentó hasta el año de 1752.

Varias eran las prohibiciones que se habían impuesto a los escribanos, además de aquella que no les permitía cobrar a las partes cantidades mayores por razón de derechos de la establecida en los aranceles. Tenían prohibido por ejemplo ser solicitadores o procuradores de negocios en el propio Consejo, so pena de diez años de destierro<sup>734</sup>. No podían mostrar a las partes probanzas antes de la publicación<sup>735</sup> y debían tener cuidado en que sus escritos contuvieran los requisitos señalados por las leyes.

Con el fin de verificar el cumplimiento de sus oficios, tanto el escribano de cámara, como su oficial mayor estaban sujetos a la visita realizada por el consejero visitador. Tras la visita, tanto el escribano, como sus oficiales podían ser castigados en caso de encontrarse culpables por incumplimiento de sus deberes<sup>736</sup>.

## **11. El contador mayor de las Indias.**

### **11.1. Situación del contador en el reinado de Felipe V.**

Una de las labores más importantes del Consejo fue la de fiscalizar la actuación de los oficiales reales de hacienda nombrados para las Indias. En principio las Ordenanzas de la Casa de Contratación del año de 1510

---

<sup>730</sup> El régimen de ascensos daba lugar a que cuando una persona recibía el nombramiento de oficial mayor o de escribano de Cámara, la persona designada contaba con amplia experiencia en el despacho de los negocios, pues en los primeros tiempos de su trabajo en el Consejo había desempeñado los cargos de oficial tercero dentro de la propia Escribanía de Cámara del Consejo. *Ibíd.*, pp. 277-279.

<sup>731</sup> Carta acordada 10.16.1702 para que el tesorero general pague una ayuda de cámara al oficial mayor de la Escribanía de Cámara. A.G.I., Indiferente General, 444 L. 38, ff. 391v-392.

<sup>732</sup> Real decreto 17.07.1718. A.G.I., Indiferente General, 829.

<sup>733</sup> Real Cédula de nombramiento de oficial mayor de la Escribanía de Cámara 15.10.1732. A.G.I., Indiferente General, 445 L. 41, ff. 327v-330.

<sup>734</sup> Ordenanza 170 de 1636. Recop. Indias 2.9.3.

<sup>735</sup> Ordenanza 187 de 1636. Recop. Indias 2.10.15.

<sup>736</sup> Ordenanza 76 de 1636. Recop. Indias 2.3.8.

señalaron la obligación de asentar en un libro las cuentas remitidas por los oficiales reales<sup>737</sup>. Tras la creación del propio Consejo de Indias dicha obligación de fiscalización fue asumida por este órgano en detrimento de la Casa, para lo cual en 1528 se creó en el Consejo la plaza de oficial de cuentas cuyo nombramiento recayó en Sebastián de Portillo<sup>738</sup>, treinta años más tarde fue sustituido en el mismo oficio por Antonio Villegas. Al poco tiempo de su nombramiento y debido al aumento del número de cajas reales en Indias<sup>739</sup>, Felipe II decidió nombrar a dos contadores, el primero de ellos lo fue el oficial Antonio Villegas<sup>740</sup> y el segundo Juan López de Zubizarreta<sup>741</sup>.

Si bien las Ordenanzas de 1571<sup>742</sup> contemplaban solo dos contadores de cuentas hábiles y suficientes, cuatro años más tarde se dotó a los contadores de un ayudante y en 1578 ya había cuatro contadores en el Consejo<sup>743</sup>, cifra contemplada también por las Ordenanzas de 1636<sup>744</sup>.

A partir del tercer decenio del siglo XVII en la Contaduría del Consejo fue posible la compra de oficios. También fue común la concesión, por merced, de la futura sucesión a hijos o a otros parientes cercanos de los contadores activos, y aunque en general estos futurarios no cobraban sueldo hasta su colocación definitiva, al menos participaban en las propinas y otros ingresos especiales, aumentando con esto los gastos del Consejo. Tratando de evitar todos estos inconvenientes Carlos II en el real decreto de enero de 1687 señaló la supresión total de las plazas compradas, dejando a sus propietarios sólo el título y la categoría así como un 5% de interés de las cantidades pagadas por la compra, se debían suprimir todas aquellas plazas supernumerarias no compradas, sino adquiridas por gracia cuando quedasen vacantes por tras lado de sus propietarios<sup>745</sup>. Los oficios vendibles de

---

<sup>737</sup> *Ordenamos y mandamos que de aquí adelante todo el cargo y descargo de la hacienda que ocurriere en esa Casa asentéis particularmente en libros de marca mayor encuadernados que tenéis en la Casa...* Ordenanzas hechas el año de 1510 para la Casa de la Contratación de Sevilla 15.06.1510. A.G.I., Indiferente General, 1092. N. 3.

<sup>738</sup> Cuyo salario ascendía a 20.000 maravedís. Real Cédula 19.02.1528. A.G.I., Indiferente General, 421 L. 12, ff. 300v.

<sup>739</sup> Vid. E. Schäfer, *El Consejo Real...*, t. 1, p. 125.

<sup>740</sup> Título de nombramiento 24.10.1567. A.G.I., Indiferente General, 425 L. 24, ff. 363v-365v.

<sup>741</sup> Título de nombramiento 06.10.1567. A.G.I., Indiferente General, 425 L. 24, ff. 361v-362v.

<sup>742</sup> Ordenanza 1 de 1571.

<sup>743</sup> Vid. E. Schäfer, *El Consejo Real...*, t. 1, p. 125.

<sup>744</sup> Ordenanza 1 de 1636. Recop. Indias 2.2.1.

<sup>745</sup> Real decreto 31.01.1687. A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 46v-47r.

plantilla de los oficiales, como el de los contadores, no fueron modificados, por lo que no tuvieron que dimitir<sup>746</sup>.

La reforma a la planta del Consejo de 1691 conservó a los cuatro contadores más antiguos y un oficial de libros, mientras que todos los demás fueron cesados:

*...refórmese los contadores supernumerarios que hay en la Contaduría del Consejo, quedando los cuatro más antiguos con ejercicio y goce, y los otros sin ejercicio, pero con la mitad de su goce, y la opción para entrar en las cuatro Plazas del número según sus antigüedades en las que tienen. Y no debiendo haber según las ordenanzas recopiladas el año de seiscientos y treinta y cinco más que un oficial de Libros en estos oficios, se reformarán de los cuatro que hay (el uno con título de mayor) los tres de ellos quedando el más antiguo con ejercicio y goce entero y los otros con la mitad, y la opción a su vacante por antigüedades como los contadores, observándose precisa, y puntualmente lo que se dispone por las referidas Ordenanzas, sin interpretación alguna, ni permitirse que hay más que los dichos cuatro Contadores, y un oficial de libros, con el Capellán, y dos oficiales de este no hay que hacer novedad por ser precisos<sup>747</sup>.*

Cuando Felipe V subió al trono había catorce oficiales en servicio, cifra que se intentaría reducir. Así, las reformas a la planta del Consejo de Indias de los años de 1701, 1706, 1715 y 1717 mantuvieron la cifra de cuatro contadores y un oficial de libros. En 1706 ninguno de los contadores había acompañado al rey a Burgos por lo que fue preciso nombrar a dos contadores interinos para suplir a los traidores, de manera que fueron nombrados fueron Gonzalo del Río y Lorenzana<sup>748</sup> y Juan Francisco del Zerro<sup>749</sup>. Los cuales no parece que continuasen después del regreso del rey a Madrid y probablemente volvieron a los empleos que habían desempeñado antes. Por el contrario, aquellos cuyas obligaciones habían sido suplidas, Luis Garzón de Astorga, Antonio de Salazar, Juan de Velasco y Angulo y Alonso Buendía fueron restituidos a pesar de su actitud en apoyo al archiduque<sup>750</sup>.

Además de los cuatro contadores numerarios, la Corona hubo de admitir que entraran en el Consejo contadores supernumerarios a fin de disminuir la nómina de la Contaduría, toda vez que sólo les correspondía la

<sup>746</sup> Como fue el caso de Antonio Freire, Juan Antonio Blanco y Alonso de Buendía quienes habían comprado sus plazas. Vid. E. Schäfer, *El Consejo Real...*, t. 1, p. 268, nota 31.

<sup>747</sup> Real decreto 17.07.1691. A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 47r-52v; 827.

<sup>748</sup> Título de nombramiento 30.07.1706. A.G.I., Indiferente General, 542, L. 1, ff. 21-26.

<sup>749</sup> Título de nombramiento 30.07.1706. A.G.I., Indiferente General, 542, L. 1, ff. 26-31.

<sup>750</sup> Vid. G. Bernard, *Le Secrétariat d'État...*, p. 120.

mitad del salario de los numerarios, allegándose además de mayor número de oficiales necesarios para verificar las cuentas de los tribunales indianos<sup>751</sup>. Entre 1717 y 1720 hubo solamente uno, Pedro Pablo de Herrera. En 1728 se permitió un nuevo nombramiento de supernumerario recayendo el título en Juan de Miranda y Testa. Durante los años de 1732 a 1746 se nombraron a seis contadores supernumerarios<sup>752</sup>. Por el contrario, los contadores titulares no fueron siempre cuatro, lo que demuestra que el texto de la reforma quedó lejos de su aplicación efectiva, a partir de la muerte de Juan Antonio Franco en el año de 1732 no hubo más que tres titulares y dos tras la muerte de Lope Hurtado de Mendoza y Figueroa en 1747<sup>753</sup>.

## 11.2. Nombramiento y toma de posesión.

Los contadores numerarios y supernumerarios al recibir su título debían pagar la media anata, de manera que cuando se presentasen ante los miembros del Consejo pudieran realizar el respectivo juramento<sup>754</sup>.

Dos eran las cuestiones más importantes por las que debía jurar su cargo, la primera de ellas era la de la guarda del secreto de todas las cuentas e informes que llegaran a sus manos y, la segunda, no cobrar cantidades mayores a las establecidas en los respectivos aranceles. Por ello, en 1722 encontrándose Felipe V en Ventosilla expidió un decreto estableciendo el

---

<sup>751</sup> Loc. Cit.

<sup>752</sup> Juan de Miranda y Testa, Lope Hurtado de Mendoza y Figueroa, Juan Crisóstomo Bonavia, Eugenio de Alfaro, Julián de la Torre y Manuel Antonio de Cevallos. A.G.I., Indiferente General, 986A.

<sup>753</sup> Vid. G. Bernard, *Le Secrétariat d'État...*, pp. 120-21.

<sup>754</sup> Las palabras que debían recitar eran las siguientes: *Que juráis a Dios y a esta † (o a la del hábito que tuviere) y a las palabras de los cuatro Santos Evangelios, que bien y fielmente y con todo cuidado, diligencia y asistencia usaréis y ejerceréis el oficio de contador de SM en este real Consejo de Indias y miraréis y examinaréis las escrituras, papeles y recaudos de las cuentas que hiciéredes, vieredeis, tomaredes y guardaréis justicia a las partes y mirais por la hacienda de SM, su utilidad y buen recaudo y guardaréis secreto de lo que se deba guardar, y no llevaréis derechos demasiados, y guardaréis las leyes y ordenanzas que están hechas y se hicieron para el buen gobierno y estado de las Indias, leyes y ordenanzas del reino, y en todo haréis lo que como bueno y fiel ministro dicho cargo de contador debéis y sois obligado a hacer = Decid: -Si, Juro. -Si así lo hicieredes Dios os ayude, y si no os lo demande. Decid Amen. B.P.R., Mss. II/2893, p. 284r-285r.*



arancel de los derechos que debían cobrar los oficiales de la Contaduría del Consejo y los oficiales de las contadorías<sup>755</sup>.

### 11.3. Prerrogativas y atribuciones.

En 1578 el salario de los cuatro contadores ascendía a 150.000 maravedís, a lo que había que sumar algunos emolumentos como lo fueron la ayuda de aposento, los aguinaldos, las luminarias ordinarias y extraordinarias, etc.<sup>756</sup>. Durante el año de 1640 los salarios de cada uno de los cuatro contadores se acrecentó en 50.000 maravedís y al contador supernumerario se le concedió ayuda para casa de aposento<sup>757</sup>. A la llegada

---

<sup>755</sup> *Por un título de virrey ya sea de Nueva España, ya del Perú, ha de llevar la Contaduría 25 doblones para los contadores y 4 doblones para los fiscales de ella, con la calidad y condición de no percibir otros ningunos derechos de cuantos despachos pertenecieren al virrey durante el tiempo del Virreinato. De todos los demás títulos de presidentes, oidores, gobernadores, alcaldes mayores, sin distinción de Audiencias, ni gobiernos 8 reales de plata de cada uno y si la gracia o merced fuese hecha a dos o más personas se duplicarán los derechos a este respecto y proporción según fueren de las Secretarías. De las ejecutoriales y presentaciones eclesiásticas de arzobispados y demás dignidades ocho reales de plata sin distinción alguna de dignidades, ni distritos. De las libranzas de cualquier efecto seis reales de plata y si fuere la libranza de narrativa dilatada y de suma considerable recibirán los derechos dobles con tal que la libranza exceda de diez mil pesos. Por los asuntos de rentas generales si son de negros veinticinco doblones para los contadores y cuatro para los oficiales. Y si fueren de alcabalas, pólvora, naipes y otras cualesquiera rentas siendo el arrendamiento solo por cinco años, ocho doblones; y si fuere por tiempo más dilatado doce doblones con la obligación de dar todos los despachos correspondientes de cada asiento sin recibir otro emolumento alguno. Por las certificaciones sin distinción de personas, ni empleos o circunstancias, seis reales de plata, cuatro para los contadores y dos para los oficiales. Por los pliegos de receptas que se expiden por otras oficinas y demás informes que se hacen por instancia, interés de partes percibirán los derechos que atendidas sus circunstancias tasare el semanero. Por la ordenación de cuentas, dos reales de plata por cada pliego, tendiendo los renglones y partes que ordena la ley y no estando conforme a ello lo escrito, minorará estos derechos en la suma que le pareciere justa el juez semanero, el cual deberá también tasar los derechos de los finiquitos respecto de no poderse señalar cantidad determinada, que se proporcionen a todos, porque en unos será mayor el trabajo de los Contadores y en otro menor; como también en el caso de ir ya ordenadas las cuentas a estilo de Contaduría, tasará el Semanero los derechos que deberá llevar el contador de ver si van ordenadas en forma. Los derechos que ha de llevar el contador más antiguo a quien se comete la tasa de los pleitos respecto de que al acrecentarlos o disminuirlos dependerá de ser los procesos de más o menos volumen, los tasará también el juez semanero. Real decreto 09.01.1722. A. de la N. Recop. 2.19.53.*

<sup>756</sup> Vid. E. Schäfer, *El Consejo Real...*, t. 1, p. 135.

<sup>757</sup> *Ibíd.*, p. 256.

de Felipe V el salario de los contadores era de 330.000 maravedís<sup>758</sup>. En el real decreto de julio de 1718 donde se remite la lista de los empleos subalternos del Consejo y los sueldos con los que han de servir se señala para el caso de la Contaduría del Consejo lo siguiente:

*Que Luis de Astorga, contador más antiguo que goza al año de año 792.595 maravedíes de vellón por salario, cera de la candelaria, casa de aposento, propinas, luminarias, aguinaldos y goces de secretario. Y en lugar del referido se le señalan por sueldo líquido y fijo al año 18.000 reales de vellón.*

*A Dn. Antonio de Salazar, Contador de Cuentas segundo del numerario goza por salario y emolumentos 620.002 maravedíes de vellón y se le señalan 16.000 reales de vellón al año.*

*A Dn. Alonso de Buendía Contador de Cuentas tercero del numerario en lugar del goce que tiene se le señalan 16.000 reales de vellón al año.*

*A Dn. Josef Manuel de Liaño, Contador de Cuentas cuarto del número se le señalan 16.000 reales de vellón al año.*

*A Dn Isidro de Velasco y Montoya, Oficial mayor de la Contaduría se le señalan 6.000 reales de vellón al año<sup>759</sup>.*

Desde ese momento y hasta el año de 1760 el salario fijo fue de 18.000 reales de vellón para el contador más antiguo, el resto de los contadores titulares 16.000, la mitad de esa cantidad para los supernumerarios y los oficiales que formaban parte de la Contaduría cobraban un salario de 6.000 reales de vellón anuales<sup>760</sup>.

Una de las grandes misiones de los contadores era la emisión de informes sobre cualquier negocio que directa o indirectamente afectara a la hacienda real<sup>761</sup>, de ahí que tuvieran a su cargo la revisión de todas las cuentas que le remitiese tanto el tesorero del Consejo<sup>762</sup> y como el de la Casa de la Contratación<sup>763</sup>. Éste último además debía remitir toda la información lo más pronto posible, sobre todo tras la llegada de cada flota, a lo sumo con un intervalo de dos años. También les incumbía el conocimiento de todas las cuentas sobre las construcciones de navíos reales para las armadas de guarda de las Indias<sup>764</sup>.

---

<sup>758</sup> Vid. G. Bernard, *Le Secrétariat d'État...*, p. 121.

<sup>759</sup> A.G.I., Indiferente General, 829.

<sup>760</sup> F. X. Garma y Durán, *Theatro de la legislación...*, t. 4, p. 346.

<sup>761</sup> Vid. R. D. García Pérez, *El Consejo de Indias...*, p. 334.

<sup>762</sup> Ordenanza 233 de 1636. Recop. Indias 2.7.19.

<sup>763</sup> Ordenanza 196 de 1636. Recop. Indias 2.11.9.

<sup>764</sup> Ordenanza 197 de 1636. Recop. Indias 2.11.10.

El contador debía examinar el informe de cuentas que los tribunales de Cuentas en las Indias<sup>765</sup> habían realizado<sup>766</sup>, de ahí que Garma afirmara que la razón por la que fue erigida la Contaduría del Consejo *era para ver todas las cuentas que se reciben de los tribunales de aquellos dos imperios mexicano y peruano, glosar y fenecer las de la real hacienda en dichos reinos, que corresponde a S. M. en los caudales pertenecientes a ella*<sup>767</sup>. En este caso el contador más antiguo era el encargado de repartir los negocios dando aviso al Consejo de aquellos tribunales que aún no habían entregado las cuentas<sup>768</sup>, quedando exento de examinarlas<sup>769</sup>.

En la Contaduría del Consejo era menester llevar distintas clases de libros en donde asentaban numerosa información<sup>770</sup>, entre los que destacaban: Libro de *títulos de los miembros del Consejo* en donde se concretaran los sueldos, los días que tomaron posesión del cargo y el lugar<sup>771</sup>. Libros de *Recepta* donde debían asentar las condenaciones establecidas por el Consejo<sup>772</sup>. Libro de *Depósitos* tanto en los pleitos fiscales, como de entre partes<sup>773</sup>. Libro de *Cargos* que resultaban contra personas particulares, así para llamarlos a cuentas, como para cobrar los alcances que de ellas resultasen<sup>774</sup>. Libro de *Cargo* al Portero que sirve de Reportero de Estrados, y al que sirve en la Capilla donde oye Misa el

---

<sup>765</sup> Los tribunales de cuentas o también llamados Contadurías Mayores de Indias tenían por objeto el examen, aprobación y fenecimiento de las cuentas, administración y recaudación de los ingresos y de los gastos de Indias. Durante el siglo XVI se crearon los tribunales de Cuentas de México, Lima y Santa Fe, mientras que en el reinado de Felipe V se crearon los de Río de la Plata y Chile. Vid. I. Sánchez-Bella, "La Administración...", p. 229.

<sup>766</sup> Ordenanza 190 de 1636. Recop. Indias 2.11.2. Fue hasta 1774 cuando una real orden dispuso que las cuentas debían dirigirse directamente a la vía reservada de donde posteriormente pasarían a examen e informe de la Contaduría General del Consejo. A.G.I., Indiferente General, 909. También R. D. García Pérez, *El Consejo de Indias...*, p. 335.

<sup>767</sup> F. X. Garma y Durán, *Theatro de la legislación...*, t. 4, p. 344.

<sup>768</sup> Ordenanza 191 de 1636. Recop. Indias 2.11.4.

<sup>769</sup> Ordenanza 192 de 1636. Recop. Indias 2.11.5.

<sup>770</sup> Señala Alberto Donoso que el principal motivo para que las leyes establecieron esta tipología de libros, era por la necesidad de distinguir los valores de cada uno en particular, con sus cargas peculiares, pudiendo así determinar el líquido resultante. De esta forma se facilitaba el camino para la posterior ordenación de la cuenta a final de año, estos libros los consideraban necesarios para llevar los distintos ramos o productos de la Hacienda Real que mantenían una entrada continua de caudales en el arca. Vid. A. Donoso Anes, "Organización y funcionamiento administrativo y contable de la Real Hacienda de Indias en tiempo Austrias de los a la luz de la legislación aplicable", en *De Computis Revista Española de Historia de la Contabilidad*, nº. 9 (diciembre 2008), p. 69.

<sup>771</sup> Ordenanza 198 de 1636. Recop. Indias 2.11.11.

<sup>772</sup> Ordenanza 199 de 1636. Recop. Indias 2.11.12.

<sup>773</sup> Ordenanza 200 de 1636. Recop. Indias 2.11.13.

<sup>774</sup> Ordenanza 201 de 1636. Recop. Indias 2.11.14.

Consejo<sup>775</sup>. Libro de *Cargo y Data* de todos los negocios que por el Consejo se beneficiaren para sus efectos de cualesquier cantidades<sup>776</sup>. Libro de las *Provincias, Audiencias y ministros de las Indias*<sup>777</sup>. Libro de *Títulos de Virreyes y ministros de las Indias*<sup>778</sup>. Libro de *Fianzas* otorgadas por los jueces de la Casa de la Contratación y por el tesorero del Consejo<sup>779</sup>. Libro de *Fianzas* de las personas que pasan a las Indias a fin de regresar a la Península<sup>780</sup>. Libro duplicado de *limosnas y mercedes*<sup>781</sup>, asimismo tengan libro y tomen razón de las *Mercedes*<sup>782</sup>. Libro de *Cuentas extraordinarias* de personas particulares<sup>783</sup>.

Como sucedía con la mayoría de los oficiales subalternos del Consejo de Indias, los contadores también estaban sujetos a visita, en este caso era el presidente o gobernador quienes nombraban dentro de los consejeros a un

<sup>775</sup> Ordenanza 202 de 1636. Recop. Indias 2.11.15.

<sup>776</sup> Ordenanza 203 de 1636. Recop. Indias 2.11.16.

<sup>777</sup> Ordenanza 204 de 1636. Recop. Indias 2.11.17. Ayala afirmaba que este libro nunca se había llevado en la Contaduría obligando al Consejo a pedir informes a las Indias. Vid. M. J. de Ayala, *Notas a la Recopilación...*, p. 148.

<sup>778</sup> Ordenanza 205 de 1636. Recop. Indias 2.11.18. Según Ayala este libro no se puso en práctica en la Contaduría, no solo por la duplicidad del contenido, sino porque sería menester destinar un oficial a sólo este fin, que quizá no bastaría. Loc. Cit.

<sup>779</sup> Ordenanza 206 de 1636. Recop. Indias 2.11.19.

<sup>780</sup> Ordenanza 207 de 1636. Recop. Indias 2.11.20.

<sup>781</sup> Ordenanza 208 de 1636. Recop. Indias 2.11.21.

<sup>782</sup> Ordenanza 209 de 1636. Recop. Indias 2.11.22. Por real decreto de 28.06.1696 Carlos II obligó a los contadores a tomar razón de las mercedes únicamente en aquellos casos que fuere especificado *con toda distinción y claridad los ramos y rentas en que se libraren y consignaren*, exceptuando en esta regla solo en aquellos casos que se dieran a los interesados en asiento de provisiones hechas y que se hayan de hacer como también en casos de urgente necesidad que se justifiquen. A.H.N., Cedulaire de Ayala, t. 2 (Códices, L. 685), f. 171v-172v, n.º. 85. Por su parte Felipe V a través de los reales decretos de 19.08.1717 estableció que *todos los despachos y cédulas que se expidieren por el Consejo en virtud de que se hubieren de pagar cualesquier maravedí de mi real hacienda ya sea por sueldo, salario o por otra cualesquier razón como por crédito que hago contra ella, y se libren en cualquier causales y rentas se prevenga en ellos se tome la razón en la contaduría general de Cargo y Data de mi real hacienda dentro de dos meses de su fecha...* A.H.N., Cedulaire de Ayala, t. 14 (Códices, L. 697), f.12r-12v, n.º. 18. En un segundo decreto de 23.10.1717 Felipe V intentando aclarar el decreto antes mencionado, ordenó que con el fin de evitar duplicación de lo consignado solamente se tomara la razón en las Contadurías según la naturaleza que correspondiera de cada una de las mercedes y no en ambas (cargo y data). Asentándose en los libros del *Cargo* todo lo que toca y pueda tener conexión con él y de lo perteneciente al servicio de lanzas, derechos de la media anata, milicias, penas de cámara y lo demás que perteneciere a lo que está agregado y en la de *Data* de todo lo que se librare de lo perteneciente a la Secretaría del registro general de mercedes que se agregó a ella y de todos los títulos de ministros por lo tocante a los libros de quitaciones que también le estaban agregados y todo lo demás que sea y pertenezca a cargas y salida de la real hacienda. A.H.N., Cedulaire de Ayala, t. 14 (Códices, L. 697), f.12v-13r, n.º. 19.

<sup>783</sup> Ordenanza 210 de 1636. Recop. Indias 2.11.23.

superintendente para que cada fin de año revisara las cuentas de los contadores *para que den informes al Consejo de lo que se hubiere hecho y les pareciere que convenga proveer, ordenar y remediar*<sup>784</sup>.

## 12. El cronista mayor.

### 12.1. La evolución histórica de la figura del cronista mayor de Indias durante el reinado de Felipe V.

Al cronista de Indias le correspondía tener siempre *hecha descripción y averiguación cumplida y cierta de todas las cosas de las Indias, así de la tierra como de la mar, naturales y morales, perpetuas y temporales, eclesiásticas y seglares, pasadas y presentes*<sup>785</sup>.

La figura del cronista fue regulada por primera vez en las Ordenanzas del Consejo de 1571<sup>786</sup>. En sus inicios el cronista debía al mismo tiempo ejercer el oficio de cosmógrafo de Indias<sup>787</sup>, de manera que en esos tiempos era el responsable no sólo de investigar y recopilar todos los asuntos relativos a la geografía, física y náutica, sino también de relatar los hechos *memorables y señalados que ha habido y hubiere en las Indias*<sup>788</sup>. El primero en ocupar el cargo fue Juan López de Velasco gracias a lo cual escribió su obra *Descripción de las Indias Occidentales*, sirviendo el empleo con gran agrado de Felipe II por más de veinte años, por lo que fue premiado con la concesión de la secretaría del Consejo de Hacienda<sup>789</sup>.

Justamente tras su salida el monarca decidió separar ambos oficios, quedando en el año de 1588 completamente desvinculados. Por un lado se designó al doctor Arias de Loyola como el cronista de las Indias y a Pedro Ambrosio de Ondériz cosmógrafo mayor. Posteriormente fue nombrado Antonio de Herrera y Tordesillas el nuevo cronista dando comienzo la llamada “crónica oficial”<sup>790</sup>.

---

<sup>784</sup> Ordenanza 76 de 1636. Recop. Indias 2.3.8.

<sup>785</sup> Ordenanza 3 de 1571.

<sup>786</sup> Ordenanza 1 de 1571.

<sup>787</sup> Ordenanzas 117 y 118 de 1571.

<sup>788</sup> Ordenanza 119 de 1571.

<sup>789</sup> Vid. E. Schäfer, *El Consejo Real...*, t. 1, p. 127.

<sup>790</sup> N. Bas Martín, *El cosmógrafo e historiador Juan Bautistas Muñoz (1745-1799)*, Valencia, 2002, pp. 90.

A principios del siglo XVII Felipe III decidió crear el cargo de cronista historiador general de las Indias nombrando a Pedro de Valencia para este oficio. Durante todo ese siglo fueron nombrados una serie de cronistas que en opinión de Nicolás Bas no lograron profundizar en una historia general de América que comprendiese todas las épocas y territorios, lo que dio por resultado que el cargo entrara en franca decadencia<sup>791</sup>.

En 1689 Carlos II concedió a Luis Salazar y Castro<sup>792</sup> la plaza de cronista general de España e Indias. Cuando Felipe V ocupó el trono, Salazar y Castro obtuvo los favores del monarca y no sólo conservó el oficio de cronista, sino que además le puso al frente para la organización de la Biblioteca Real. Tras la muerte de Salazar en 1736 el monarca nombró a Miguel Herrero de Ezpeleta<sup>793</sup> como el nuevo cronista de las Indias. Pero en esos años el cargo entró en franca decadencia debido a la falta de estudios importantes sobre América, por ende, en 1744 Felipe V tomó la decisión de conceder la futura<sup>794</sup> de la plaza a la recién creada Real Academia de la Historia<sup>795</sup>. Al enterarse de esta situación, Miguel Herrero se apresuró en reclamar el oficio de cronista, por lo que ese mismo año la plaza le fue concedida<sup>796</sup>, la cual ejerció hasta su muerte, sobrevenida en 1750<sup>797</sup>.

<sup>791</sup> Ibídem, p. 91.

<sup>792</sup> Título de nombramiento 30.09.1691. A.G.S., Dir. Gral. del Tesoro, leg. 171, f. 9. Entre sus obras más importantes se encuentran *Historia genealógica de la Casa de Silva* en 2 vols. (1685), *Historia genealógica de la Casa de Lara*, en 4 vols. (1697) y un *Índice de las glorias de la Casa Farnese* (1716).

<sup>793</sup> Título de nombramiento 08.02.1736. A.G.S., Dir. Gral. del Tesoro, leg. 180, f. 408.

<sup>794</sup> Según el *Diccionario de Autoridades de 1791* la futura “es el derecho a la sucesión de algún empleo antes de estar vacante”. Los que estaban a espera de la futura recibían el nombre de futurarios y no podían cobrar sueldo hasta su colocación definitiva, pero al menos participaban con propinas y otros ingresos especiales que el oficio llevaba anejo.

<sup>795</sup> La Real Academia de la Historia fue fundada por Felipe V a través del real decreto de 18.04.1738, elaborando la Junta fundacional los Estatutos por los que habría de regirse la nueva corporación. El monarca dictó tres decretos en 1744 a fin de consolidar la situación de la Academia: fijó la asignación económica anual que recibiría para su manutención, concedió a la institución los oficios de cronista general y cronista de Indias. Vid. R. González Fernández y M. P. Sánchez Gómez “La Real Academia de la Historia y las Memorias de 1796: los godos en la idea de la identidad nacional española”, en *Historia y sociabilidad: homenaje a la profesora M<sup>a</sup> del Carmen Melendreras Gimeno*, Madrid, 2007, p. 351. También puede verse M<sup>a</sup> T. Nava Rodríguez, “La Real Academia de la Historia como modelo de unión formal entre el Estado y la cultura (1735-1792)”, en *Cuadernos de Historia Moderna y Contemporánea*, n° 8 (1987), p. 131 y ss.

<sup>796</sup> Durante el tiempo en que Herrero de Ezpeleta ejerció el cargo dentro de la Real Academia se propuso dar un giro importante a la historiografía de América. Solicitó al Consejo de Indias la apertura de archivos públicos y el acceso a cualquier documentación tendente a recopilar todo lo que faltare de escribir para la claridad y verdadera inteligencia de lo sucedido en su descubrimiento y de las demás cosas dignas de memoria... Vid. P. Vélez Jiménez, *Historiografía americanista en España, 1755-1936*, Madrid, 2007, p. 21 y

A la muerte de Herrera la futura fue solicitada por el benedictino Martín Sarmiento<sup>798</sup>, quien cinco años más tarde abandonó el cargo para ocupar la abadía de Nuestra Señora de Ripoll<sup>799</sup>. Posteriormente Fernando VI revalidó a través de un real decreto de 1755 la orden que su padre había dado de integrar el oficio de cronista de Indias a la Real Academia de la Historia<sup>800</sup>, lo que significaba que sería desde este momento la propia Academia la encargada de realizar la historia de Indias.

## 12.2. Nombramiento y toma de posesión.

El nombramiento del cronista mayor de Indias era potestad real, pero era la Cámara de Indias el órgano encargado de elaborar la consulta con el nombre de los posibles candidatos. Una vez que el monarca hacía su elección, el recién nombrado cronista debía recibir su título de nombramiento a fin de hacer el pago de la media anata y poder realizar el correspondiente juramento ante los miembros del Consejo<sup>801</sup>.

---

también puede verse la forma de trabajar de Herrero en F. Esteve Barba, *Historiografía Indiana*, Madrid, 1992, pp. 148-49.

<sup>797</sup> Vid. A. Rumeu de Armas, *La Real Academia de la Historia*, Madrid, 2001, p. 23.

<sup>798</sup> Título de nombramiento 01.08.1750. A.G.S., Dir. Gral. del Tesoro, leg. 182, f. 556.

<sup>799</sup> Vid. P. Vélez Jiménez, *Historiografía americanista...*, pp. 20-21.

<sup>800</sup> Consulta del Consejo de Indias para confirmar el traspaso del oficio de cronista de Indias a la Real Academia de la Historia. *Reconociendo el Consejo lo poco que sin embargo de su vigilancia se ha adelantado de muchos años a esta parte en los útiles e importantes trabajos de este empleo y que no podrá lograrse mejor que fiándolo a un cuerpo tan digno como la Academia es de sentir será propio de la rectitud de VM asegurar el cabal desempeño de este empleo confirmando en todo con su nueva merced el citado decreto del año de 1744. Consejo de Indias de 1755. Resolución «Como parece». A.H.N. Códices L. 753, f. 279, n° 218. El Título de Nombramiento de Cronista Mayor de Indias bajo la Real Academia de la Historia de fecha 18.10.1755. A.G.S., Dir. Gral. del Tesoro, leg. 183, f. 31.*

<sup>801</sup> Debían recitar la siguiente fórmula: - *Que juráis a Dios y a esta ⁊ (o a la del hábito que tuviere) y a las palabras de los cuatro Santos Evangelios, que bien y fielmente ejerceréis el oficio de Historiógrafo, Cronista mayor de las Indias, en que SM os ha proveído y haréis y recopilaréis la Historia General Moral y Natural de todas las cosas dignas de memoria de las Indias, y de los acontecimientos memorables, según que por S. M. o el Consejo os fuere mandado y ordenado, con toda diligencia y certidumbre, y guardaréis el secreto del Consejo, y de los papeles que se os entregaren y advertiréis de todo lo que os pareciere conveniente para la averiguación de las cosas naturales y en todo haréis lo que conforme a las obligaciones del dicho cargo sois obligado, hacen y deben hacer los dichos cronistas = Decid: -Si, Juro. -Si así lo hicierdes Dios os ayude, y si no os lo demande. Decid Amen. - Amen.* B.P.R., Mss. II/2893, p. 287v-288r.

### 12.3. Prerrogativas y atribuciones.

El salario del cronista en 1571 fue de 100.000 maravedís (1.941 reales) y que al año siguiente Felipe II decidió incrementarlo a 150.000 maravedís. En cambio, en los primeros años del siglo XVIII el cronista de Indias percibía un salario de 13.603 reales además de las propinas, emolumentos, ceras y demás cantidades que le pudieren corresponder<sup>802</sup>. Posteriormente, Felipe V a través del real decreto de 1718 en donde se fijaba el salario de los oficiales y subalternos del Consejo de Indias señaló que Luis de Salazar y Castro, cronista mayor de las Indias, recibiría por concepto único de salario 12.000 reales de vellón al año<sup>803</sup>, cantidad que no variaría aún en 1755 cuando el oficio quedó agregado a la Real Academia de la Historia.

La misión más importante del cronista era la de escribir la Historia de las Indias incluyendo todos aquellos *hechos memorables y señalados, averiguando las costumbres, ritos, antigüedades, hechos y acontecimientos con sus causas y motivos y circunstancias que en ellos hubiere...*<sup>804</sup>. También debía escribir una Historia Natural de las Indias que contuviera una descripción pormenorizada de *la historia de las hierbas, plantas, animales, aves, peces, minerales y otras cosas que fueren dignas de saberse y hubiere en las Indias*<sup>805</sup>.

Para que el cronista contara realizara su oficio era menester que contara con la información necesaria, por ello, tanto los secretarios del Consejo, como el escribano de cámara y los demás oficiales debían entregarle la documentación que éste solicitase<sup>806</sup>.

Una vez que tuviera listo parte de su trabajo y con el fin de que cobrara parte de su salario, el cronista debía mostrar cada año el avance de su trabajo a un comisario nombrado por el propio Consejo, quien reconocería los escritos entregados por el cronista y decidiría guardarlos en el archivo del Consejo o, en su caso, enviarlos a imprimir<sup>807</sup>.

---

<sup>802</sup> G. Bernard, *Le Secrétariat d'État...*, pp. 103-4.

<sup>803</sup> Real decreto 17.07.1718. A.G.I., Indiferente General, 829.

<sup>804</sup> Ordenanza 234 de 1636. Recop. Indias 2.12.1.

<sup>805</sup> Ordenanza 235 de 1636. Recop. Indias 2.12.2.

<sup>806</sup> Ordenanza 236 de 1636. Recop. Indias 2.12.3.

<sup>807</sup> Ordenanza 237 de 1636. Recop. Indias 2.12.4.



### 13. El Cosmógrafo y Catedrático de Matemáticas.

#### 13.1. Situación del cosmógrafo y catedrático de matemáticas en el reinado de Felipe V.

El cosmógrafo era aquel experto en geometría que se dedicaba a la descripción del universo, dibujando el mar y la circunferencia de las islas, enderezando las lineaciones en las cartas de navegar, midiendo la tierra y dividiendo las regiones<sup>808</sup>.

Como ya se ha mencionado, la figura del cosmógrafo estuvo unida con la de cronista de Indias según lo establecido por las Ordenanzas de 1571. A partir de 1588 ambos oficios quedaron desligados cuando Felipe II nombró a Pedro Ambrosio Ondériz como el primer cosmógrafo mayor de Indias. Posteriormente Felipe IV decidió unir al oficio de cosmógrafo el de catedrático de matemáticas vinculando la plaza a la orden de los jesuitas, quienes la monopolizaron desde el Colegio Imperial de Madrid hasta su expulsión de España y de las Indias en el año de 1767<sup>809</sup>.

#### 13.2. Nombramiento y toma de posesión.

Desde el siglo XVII los sucesivos catedráticos-cosmógrafos mayores de Indias durante los ciento cincuenta años, fueron siempre jesuitas nombrados por el monarca, a propuesta del provincial o el rector del Colegio Imperial de San Isidro en Madrid y previo informe del Consejo de Indias<sup>810</sup>. Como prueba de ello aún en el año de 1760 el Consejo de Indias envió al monarca una consulta solicitando que el provincial de la Compañía de Jesús redujera a número de tres a los sujetos propuestos para proveer la plaza de cosmógrafo, a lo que Fernando VI accedió<sup>811</sup>.

---

<sup>808</sup> T. Garzoni, *Piazza universale di tutte le professioni del mondo*, Venecia, 1578. Citado por M. Esteban Piñeiro, "Los oficios matemáticos en la España del siglo XVI", en *Actes de les II Trobades d'Història de la Ciència i de la Tècnica*, Barcelona, 1992, p. 240.

<sup>809</sup> Vid. N. Bas Martín, *El cosmógrafo e historiador...*, pp. 56-57.

<sup>810</sup> Vid. M. Esteban Piñeiro, M., "Los oficios matemáticos...", p. 30.

<sup>811</sup> *Señor por real cédula de 29 de octubre del año de 1628 mandó el señor rey don Felipe IV que la cátedra de Cosmografía de los reinos de las Indias en esta Corte se leyese en el Colegio Imperial de la Compañía de Jesús para los religiosos de ella, quedando al cuidado del provincial el proponer los sujetos que fuesen más idóneos. Y con motivo de haber*

Como cualquier otro oficio del Consejo de Indias, tras la expedición del título y del pago de la media anata, el nuevo cosmógrafo y catedrático de matemáticas debía jurar ante los miembros del Consejo<sup>812</sup>.

Durante el reinado de Felipe V fueron sucesivamente cosmógrafos mayores de Indias Pedro de Ulloa<sup>813</sup>, Alejandro Burneto<sup>814</sup>, Nicasio Gramatici<sup>815</sup>, Manuel de Campos<sup>816</sup>, Carlos de la Reguera<sup>817</sup> y Pedro Fresneda<sup>818</sup>.

### 13.3. Prerrogativas y atribuciones.

Desde el siglo XVII el salario de los cosmógrafos fue de 800 ducados a pagar sobre el fondo de penas de Cámara de Consejo<sup>819</sup>. A partir de 1718 el

---

*renunciado el maestro Juan Wendlingen en la expresada cátedra, propone para ella el padre Francisco Javier Cornejo actual Provincial en primer lugar al maestro Cristiano Riezzer de la provincia de Austria donde con crédito ha ejercitado la referida facultad. En segundo al maestro Gaspar Sagnéz de la provincia de Bohemia, profesor de matemáticas en el seminario de nobles de esta Corte. Y en tercer al maestro Esteban Terreros que actualmente regenta la cátedra de la propia facultad del Colegio Imperial. El consejo acompaña la citada proposición del Provincial y la respuesta del fiscal para que en su visa se digne V. M. elegir el que de los propuestos sea más de su real agrado. Consejo de Indias a 20 de octubre de 1760. Resolución. Nombro al maestro Cristiano Riezzer. A.H.N., Cedulario de Ayala t. 60, (Códices, L. 723), f. 383, n° 308.*

<sup>812</sup> La fórmula de juramento era la siguiente: *-Que juráis a Dios y a esta  $\dagger$  (o a la del hábito que tuviere) y a las palabras de los cuatro Santos Evangelios, que bien y fielmente y con todo cuidado usaréis y ejerceréis el oficio de Cosmógrafo mayor de las Indias de SM, y guardaréis el secreto que en ello convenga y se debe guardar = Decid: -Si, Juro. -Si así lo hicieredes Dios os ayude, y si no os lo demande. Decid Amen. -Amen. B.P.R., Mss. II/2893, p. 288r-288v.*

<sup>813</sup> Pedro de Ulloa fue nombrado cosmógrafo mayor de los reinos de Indias y catedrático de matemáticas de la compañía de Jesús a través de la real cédula de 26.10.1675. A.G.I. Indiferente General, 445 L. 40, ff. 1-5. Posteriormente, Felipe V nuevamente le ratificó en la plaza de cosmógrafo mediante decreto de 26.10.1715. A.G.S., Dir. Gral. del Tesoro, Inv. 2, leg. 15, f. 47. Impartió matemáticas en el Colegio Imperial. Sólo se conoce una obra de matemáticas publicada en 1706, *Elementos de matemáticas*, en el que introduce en España por primera vez la geometría analítica de Descartes. Vid. I. Fernández Pérez, *Aproximación histórica al desarrollo de la Astronomía en España*, tesis doctoral, Universidad de Santiago de Compostela, 2009, p. 38.

<sup>814</sup> Título de nombramiento 13.09.1722. A.G.S., Dir. Gral. del Tesoro, Inv. 2, leg. 20, f. 6.

<sup>815</sup> Título de nombramiento 13.02.1727. A.G.S., Dir. Gral. del Tesoro, Inv. 2, leg. 24, f. 93.

<sup>816</sup> Título de nombramiento 23.12.1728. A.G.S., Dir. Gral. del Tesoro, Inv. 2, leg. 25, f. 163.

<sup>817</sup> Título de nombramiento 22.04.1733. A.G.S., Dir. Gral. del Tesoro, Inv. 2, leg. 29, f. 31.

<sup>818</sup> Título de nombramiento 03.02.1743. A.G.S., Dir. Gral. del Tesoro, Inv. 2, leg. 34, f. 74.

<sup>819</sup> Vid. R. D. García Pérez, *El Consejo de Indias...*, p. 230.

salario ascendió a 6.000 reales de vellón al año<sup>820</sup>, cifra que permaneció durante todo el reinado de Felipe V.

Varias eran las obligaciones que tenía el cosmógrafo. Como requisito previo era necesario que contara no sólo con un conocimiento profundo no en matemáticas, sino también requería saberes en geografía y astronomía a fin de realizar los cálculos exactos para averiguar los eclipses de la luna y otras señales para tomar la longitud de la tierra, de manera que los datos fueran enviados a los gobernadores de las Indias junto con la orden e instrumentos necesarios para que en aquellos sitios también se tomaran los datos convenientes<sup>821</sup>. Todos estos datos serían de gran ayuda para mejorar la navegación, así como la salida de las flotas de una y otra parte del Atlántico.

Además, el cosmógrafo debía recopilar la información necesaria con el propósito de elaborar un libro *describiendo todas las derrotas, navegaciones y viajes que hay desde estos reinos hasta las Indias*<sup>822</sup>. Al respecto señala Ayala que *desde el año de 1636 que se cita hasta el presente de 1800 que se encuentran 164 años no se ha cumplido ¡Qué dolor! Sueltas podrá haber en los archivos del Consejo y entre sujetos particulares*<sup>823</sup>.

Tenía que realizar las tablas de cosmografía de las Indias, así como un libro en donde se describiera todas las provincias con sus ríos, canales, mares y sitios...<sup>824</sup>, a propósito de esta información Ayala declaró no haber hallado ningún libro en el archivo con estas características, sí en cambio encontró mucha confusión de papeles sueltos, pero no encontró el libro de las descripciones antes mencionado<sup>825</sup>.

Al igual que el cronista, para que el cosmógrafo pudiera cobrar al final de cada el último tercio de su salario era menester que entregara al comisario designado por los miembros del Consejo un ejemplar de sus escritos<sup>826</sup>. Dicho comisario también debía estar atento que el cosmógrafo hubiere cumplido con su obligación de leer la cátedra de matemáticas todos los días que se le hubieran señalado por las propias Ordenanzas del Consejo<sup>827</sup>.

---

<sup>820</sup> Real decreto 17.07.1718. A.G.I., Indiferente General, 829.

<sup>821</sup> Ordenanza 239 de 1636. Recop. Indias 2.13.2.

<sup>822</sup> Ordenanza 240 de 1636. Recop. Indias 2.13.3.

<sup>823</sup> Vid. J. M. de Ayala, *Notas a la Recopilación...*, p. 158.

<sup>824</sup> Ordenanza 241 de 1636. Recop. Indias 2.13.4.

<sup>825</sup> Vid. J. M. de Ayala, *Notas a la Recopilación...*, p. 159.

<sup>826</sup> Ordenanza 243 de 1636. Recop. Indias 2.13.6.

<sup>827</sup> Se refiere a la obligación del cosmógrafo de leer la cátedra de matemáticas en el Consejo o en el Palacio del rey *todos los días que le hubiere, una hora entera en la mañana, en invierno de nueve a diez y en verano de ocho a nueve...* Ordenanza 242 de 1636. Recop.

## 14. Porteros y barrendero.

### 14.1. La situación de los porteros en el reinado de Felipe V.

Los porteros eran los encargados de vigilar el buen orden dentro del Consejo, de acompañar a los ministros en cuestiones oficiales fuera del Consejo o de ejecutar los encargos o comisiones<sup>828</sup>. Al igual que sucedió con otros oficios, la plaza de portero existió aún antes que el Emperador fundara el Consejo de Indias, de manera que el 4 de noviembre de 1519 se nombró a Pedro de Algeciras como el primer portero del Consejo con un salario de 6.000 maravedís anuales<sup>829</sup>. En 1540 como consecuencia de una excesiva carga de trabajo fue necesario crear una segunda plaza de portero que debía servir además como ordenanza y recadero<sup>830</sup>. Durante todo este período su salario se libraba por una parte de las penas de Cámara del Consejo y por el otro de la Casa de Contratación<sup>831</sup>.

Mientras que las Ordenanzas de 1571 no señalaron un número concreto de porteros que debían laborar dentro del Consejo<sup>832</sup>, las de 1636 establecieron en cuatro el número de porteros que formarían parte del Consejo<sup>833</sup>. Desde 1628 además de los cuatro porteros se nombró a un portero supernumerario con derecho a percibir las cantidades que correspondían al pago de la casa de aposento y algunas otras gratificaciones. Pero debido a los apuros económicos por los que siempre atravesaba la maltrecha hacienda real, Felipe IV hubo de declarar vendibles todas las plazas de porteros de los consejos, encargándose la ejecución de esta medida al privado del conde-duque, Jerónimo de Villanueva, protonotario de Aragón y tesorero general. A partir de este momento las plazas de

---

Indias 2.13.15. Respecto al cumplimiento de esta obligación, nuevamente Ayala menciona que *No hay memoria de lo que dice, ni nombre ni apellido de tal catedrático en 167 años que se cuentan*. Vid. J. M. de Ayala, *Notas a la Recopilación...*, p. 159.

<sup>828</sup> Vid. J. Fayard, *Los miembros del Consejo...*, p. 28.

<sup>829</sup> Vid. E. Schäfer, *El Consejo Real...*, t. 1, p. 254.

<sup>830</sup> *Ibíd.*, p. 66.

<sup>831</sup> Esta situación causó graves inconvenientes a los porteros toda vez que la Casa de Contratación se negaba a pagar los salarios a los porteros del Consejo. Para solventar este problema el monarca ordenó a la Casa de la Contratación que no librara a cada uno de los destinatarios la nómina legalizada y remitida a Sevilla, sino que simplemente enviara al receptor del Consejo de Indias la cantidad de 5.289.600 maravedís para que éste hiciera la distribución conveniente. *Id.*, p. 132.

<sup>832</sup> Se refería simplemente a los “porteros necesarios”. Ordenanza 1 de 1571. Pero sabemos que al final del reinado de Felipe II había tres porteros trabajando en el Consejo. *Id.*, p. 127.

<sup>833</sup> Ordenanza 1 de 1636. Recop. Indias 2.2.1.

porteros aumentaron en 1640 a siete y más tarde llegaron a ejercer el oficio hasta ocho porteros<sup>834</sup>.

En la práctica estas cifras se duplicaron, el desmesurado crecimiento de los negocios despachados en el Consejo provocó que en 1660 fuera necesario aumentar el número de plazas de oficiales subalternos. Para disminuir los gastos que el voluminoso número de ministros y oficiales generaban, Carlos II hubo de reorganizar la planta del Consejo de Indias. En el caso de los porteros ordenó su reducción, de los once que había sólo debían quedar cuatro numerarios con ejercicio y goce entero y los siete restantes quedarían como supernumerarios con opción a plaza cuando fueren vacando y les concedió la mitad del sueldo, determinándose la situación de cada uno de ellos por razón de antigüedad<sup>835</sup>.

En opinión de Concepción de Castro toda esta situación llevaría algún tiempo normalizarla toda vez que las porterías de los consejos se convirtieron en una recompensa por haber prestado determinados servicios a la Corona. De hecho aún en la época de Felipe V fueron respetados aquellos oficios que se encontraban en esta situación, como lo fue el caso de las porterías de Consejo de Indias<sup>836</sup>. En efecto, si bien en el decreto de reforma de 1715 se redujo nuevamente a cuatro el número de porteros que debían permanecer en el Consejo *quedando los demás que hubiere con la opción y el sueldo que tenían antes de la Nueva Planta*<sup>837</sup>; en el decreto de julio de 1718 el monarca concedió un salario de 4.000 reales de vellón a los cuatro porteros numerarios<sup>838</sup> y al resto de los porteros 2.000 reales de vellón<sup>839</sup>.

---

<sup>834</sup> Vid. E. Schäfer, *El Consejo Real...*, t. 1, p. 254.

<sup>835</sup> Real decreto 17.07.1691. A.G.I., Indiferente General, 829.

<sup>836</sup> Estas porterías habían sido cedidas al menos por dos vidas prorrogables y con la posibilidad de nombrar sustituto que las atendieran, cuya retribución anual era de 600 ducados. Conseguir alguna de ellas era una forma de contribuir al porvenir de un hijo, a veces de disponer de una dote para una hija dada la posibilidad del teniente o sustituto en cargos enajenados. Vid. C. de Castro Monsalve, "Las Secretarías de los consejos...", p. 206, nota 27.

<sup>837</sup> Real decreto 05.08.1715. A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 90r-97r; 827.

<sup>838</sup> A la Portería de Dn Antonio Pradillo, 4.000 reales de vellón al año. A la Portería de Dn Juan Ruíz de la Peña y por el a Dña Catalina Ruíz de la Peña su hija, otros 4.000 reales de vellón al año. A la Portería que pertenece a Dn Diego Gómez Falcón, se señalan 4.000 reales de vellón al año por esta ocupación y 500 reales como Repostero de Estrados del Consejo, considerándolo todo por un sueldo de 4.500 reales de vellón al año. A la Portería de Dn Francisco Pantoja y de Dña Ma. de los Ángeles, otros 4.000 reales de vellón al año y 200 más como Sacristán de la capilla del Consejo. Real decreto 17.07.1718. A.G.I., Indiferente General, 829.

<sup>839</sup> A la Portería de Dn Lorenzo de Velasco por la mitad del sueldo de una plaza de número 2.000 reales de vellón al año. A la Portería de Dn Pedro Gómez Falcón, 2.000 reales de

Normalmente los titulares de las porterías solían nombrar a un teniente para que ejerciera el oficio a su nombre y de quien percibirían por arrendamiento la cantidad acordada<sup>840</sup>. El portero, como el resto de los oficiales, debía realizar la solemnidad habitual del juramento ante los miembros del Consejo<sup>841</sup>.

En 1588 los porteros tenían un salario de 40.000 maravedís y 19.600 de ayuda de costas, además de una serie de suplementos que en ocasiones solían ser mayores que el propio salario<sup>842</sup>. Ya hemos visto que Felipe V concedió un salario de 4.000 reales de vellón al año a los porteros numerarios y la mitad de dicha cantidad a los supernumerarios. También era costumbre que los porteros recibieran emolumentos y propinas de aquellos a quienes se había provisto alguna dignidad, ya fuera civil o eclesiástica<sup>843</sup>.

Entre las labores que debían realizar los porteros se encontraban la provisión de papel y material de escritura, el traslado de escritos, de documentos y los objetos que fueren necesarios a otras dependencias del propio Consejo, la guarda de la sala del Consejo, acompañamiento a éste empuñando una vara<sup>844</sup> y por su puesto les estaba asignado la guarda de cerrar y abrir las puertas a las estancias del Consejo.

Rafael García en su obra sobre el Consejo de Indias analiza el contenido de un memorial escrito por el ministro Pedro Muñoz en el año de 1779 quien explica a los porteros con detalle su labor dentro del propio Consejo. Sin ánimo de repetirlo creemos que dichas “prevenciones” podían aplicarse perfectamente al período que venimos estudiando<sup>845</sup>.

---

vellón al año. A la Portería de Dn Francisco de Cuadras, 2.000 reales de vellón al año. A la Portería de Dn Ignacio de los Reyes, 2.000 reales de vellón al año. Loc. Cit.

<sup>840</sup> Normalmente el titular recibía la mitad del salario establecido y la otra mitad el teniente. Vid. R. D. García Pérez, *El Consejo de Indias...*, p. 220.

<sup>841</sup> El juramento era el siguiente: *Que juráis a Dios y a esta  $\dagger$  y a las palabras de los cuatro Santos Evangelios, que bien y fielmente y con todo cuidado y diligencia usaréis y haréis el oficio de Portero de este Real Consejo de las Indias, y en todo lo que por el os fuere mandado y guardaréis secreto de lo que en él viereis y entendieredes que se deba guardar, y os fuere encargado y mandado. = Decid: -Si, Juro. -Si así lo hicieredes Dios os ayude, y si no os lo demande. Decid Amen. -Amen. B.P.R., Mss. II/2893, p. 287.*

<sup>842</sup> Vid. E. Schäfer, *El Consejo Real...*, t. 1, p. 246.

<sup>843</sup> Refiere Rafael García que a partir de la expedición del real decreto de 21.05.1755 Fernando VI prohibió a los porteros y el resto del personal subalterno del Consejo la percepción de estos derechos y emolumentos. Vid. *El Consejo de Indias...*, pp. 223-24.

<sup>844</sup> Vid. J. Arrieta Albert, *El Consejo Supremo...*, pp. 402-3.

<sup>845</sup> En dicho memorial el ministro Muñoz destinó a dos porteros en cada una de las Salas del Consejo de manera que mientras uno de ellos era llamado por los miembros de la respectiva Sala, el otro debía permanecer en la puerta sin permitir el paso de persona alguna. También señalaba que los porteros que habían sido destinados a la Sala de Justicia

#### 14.2. El portero de estrados.

Además de las ocupaciones comunes a todos los porteros, existían algunos servicios que debían ser prestados por un portero en específico, el llamado portero de estrados<sup>846</sup> cuyo nombramiento dependía de la voluntad privativa del presidente o gobernador del Consejo<sup>847</sup>.

Dicho oficial era el encargado de la custodia y aseo de todos los bancos, mesas, tapicería, pinturas, escribanías, ornamentos y alhajas del Consejo. Otras de sus obligaciones consistían en preparar todos los estrados en las fiestas y ceremonias públicas donde participaba el Consejo, colocando los bancos para los ministros. Derivado de dichas obligaciones, el portero de estrados debía velar por la limpieza de todas las habitaciones en donde residía el Consejo de ahí que el barrendero estuviera bajo sus órdenes.

Normalmente acudía a la sala de gobierno tomando a su cargo el cuidado del reloj para avisar la entrada y salida de los miembros del Consejo. Asimismo era el responsable de remitir a los consejeros las consulta para que estamparan sus rúbricas, quemaba los votos que se daban por escrito, daba aviso al presidente o gobernador del Consejo de los ministros que había acudido a cada una de las salas del Consejo. Cobraba y repartía los sueldos de los ministros y oficiales<sup>848</sup>. Era el responsable de llevar los gastos del servicio interior del Consejo adelantando las cantidades todos los meses y debiendo remitir cuentas detalladas al contador del Consejo y tras su revisión y aprobación por el Consejo, dichos gastos le eran devueltos<sup>849</sup>.

Por todas estas ocupaciones el portero de estrados recibía junto a su salario una gratificación de 500 reales de vellón<sup>850</sup>.

---

debían velar para que en la estancia contigua se guardara el debido silencio. Señaló a los porteros que debían ocurrir al Consejo media hora antes de la hora señalada a los ministros. En caso de ausencia por enfermedad debían notificarlo al portero de estrados o al más antiguo para que éste a su vez informase al juez de ministros. En caso de ausencia de los ministros eran los porteros, por riguroso turno, quienes debían notificar tales hechos. Además les prohibía solicitar aisladamente cualquier tipo de propina o gratificación.... El documento se denomina *Las prevenciones de Pedro Muñoz de la Torre* (04.05.1779). A.G.I., Indiferente General 829. Vid. R. D. García Pérez, *El Consejo de Indias...*, pp. 227-28.

<sup>846</sup> Según el *Diccionario de Autoridades* 1732 los estrados eran *las salas de los consejos y tribunales reales donde los consejeros y oidores asisten para oír las causas, juzgarlas y sentenciarlas. Dióseles este nombre por el adorno y majestad que tienen*.

<sup>847</sup> *Instrucciones para el gobierno del presidente o gobernador del Consejo...*, p. 295.

<sup>848</sup> Vid. A. Martínez de Salazar, *Colección de memorias...*, pp. 715-16.

<sup>849</sup> Vid. E. Schäfer, *El Consejo Real...*, t. 1, p. 250, nota 317.

<sup>850</sup> Vid. R. D. García Pérez, *El Consejo de Indias...*, p. 226.

### 14.3. El barrendero.

El barrendero era aquel que por oficio particular limpiaba y recogía las distintas habitaciones y enseres que pertenecían al Consejo de Indias<sup>851</sup>. Su nombramiento era un derecho privativo del presidente o del gobernador<sup>852</sup>. El salario del barrendero ascendía a 2.393 reales, cantidad a la que se sumaban algunas gratificaciones por parte del portero principal en concepto de “gastos menudos”<sup>853</sup>. A partir del decreto de 1718 el único salario del barrendero fue de 2.300 reales de vellón al año, cantidad que no variaría hasta el año de 1808<sup>854</sup>.

Desde la llegada al trono de Felipe V y quizá hasta finales de su reinado, Andrés Mateo ocupó la plaza de barrendero del Consejo<sup>855</sup>.

Entre las ocupaciones más importantes del barrendero se encontraban la de limpiar las salas del Consejo bajo la supervisión del portero estrados, quien además era el encargado de abrirle las puertas de todas las salas del Consejo, ya que el barrendero no podía tener las llaves del Consejo<sup>856</sup>.

## 15. El abogado y el procurador de pobres.

### 15.1 El abogado de pobres.

Los abogados eran peritos en derecho que llevaban la parte técnica del juicio, asesorando a las partes o a sus procuradores, y realizando los escritos, alegaciones e informaciones a favor de los interesados de éstas. Señala J. L. de las Heras que desde la época de los Reyes Católicos en los tribunales supremos existieron los llamados abogados de pobres, “cuya

---

<sup>851</sup> *Diccionario de Autoridades* 1732.

<sup>852</sup> *Instrucciones para el gobierno del presidente o gobernador del Consejo...*, p. 295.

<sup>853</sup> Vid. E. Schäfer, *El Consejo Real...*, t. 1, p. 246, nota 306.

<sup>854</sup> G. Bernard, Bernard, *Le Secrétariat d'État...*, p. 109.

<sup>855</sup> Sabemos que en 1689 ya ocupaba el cargo de barrendero del Consejo por una carta acordada del Consejo dirigida al tesorero general dándole orden de pago de 443 reales de vellón a Andrés Mateo, barrendero del Consejo, para sus vestidos. A.G.I., Indiferente General, 443 L. 35, ff. 65v-66. Pero también conocemos que en 1737 aún ocupaba la plaza de barrendero del Consejo por una carta que el secretario del Consejo remitió al depositario del Consejo con la finalidad que se le pagaran 300 reales de limosna a Andrés Mateo. A.G.I., Indiferente General, 446 L. 44, ff. 77r-77v.

<sup>856</sup> Vid. R. D. García Pérez, *El Consejo de Indias...*, p. 226.



ocupación consistía en preservar el derecho de los humildes en sus contenciosos<sup>857</sup>. En el Consejo de Indias en particular se creó la figura del abogado de pobres a partir que se le confirió a dicho órgano competencias judiciales. Por tanto fue en el reinado de Carlos V cuando en el Consejo de Indias se nombró al primer abogado de pobres y cuya misión consistía en defender en juicio a los litigantes pobres<sup>858</sup>.

Según establecían las Ordenanzas del Consejo de Indias 1636 los abogados de pobres debían regirse de acuerdo a las leyes castellanas<sup>859</sup>, lo que significaba que no podían ejercer su oficio si antes no aprobaban el examen ante el Consejo de Castilla<sup>860</sup> y se inscribían en la matrícula correspondiente.

El examen se realizaba en el Consejo de Castilla<sup>861</sup> y era al escribano de Cámara más antiguo después del de gobierno a quien le correspondía el despacho de todos los asuntos relacionados con los exámenes de

---

<sup>857</sup> Vid. J. L. de las Heras Santos, *La justicia penal...*, p. 168.

<sup>858</sup> Cuando en el Consejo de Indias hubo un fuerte aumento de los negocios por el ensanche permanente del imperio colonial fue imprescindible crear algunos oficios accesorios, especialmente de justicia, surgiendo en 1536 un abogado de pobres que tenía un sueldo inverosímilmente pequeño. El licenciado Ramiro de Soto fue el primer abogado de pobres cuyo salario era de 2.000 maravedís (13 1/3 ducados) por año. Pero este pequeño salario no era el único ingreso del abogado de pobres, también obtenía provechos por la confección de las escrituras jurídicas, siendo su ingreso principal los honorarios convenidos con sus clientes y los derechos del arancel general. Vid. E. Schäfer, *El Consejo Real...*, t. 1, pp. 75-76.

<sup>859</sup> Ordenanza 245 de 1636. Recop. Indias 2.14.2.

<sup>860</sup> Desde el reinado de los Reyes Católicos era menester que los abogados que ejercían su oficio dentro de los reales Consejo de la monarquía debían de realizar previamente un examen en la Sala de Gobierno del Consejo de Castilla. N. Recop. 2.16.1.

<sup>861</sup> La organización de los exámenes la realizaba una comisión del Consejo. El tribunal examinador estaba integrado por los propios ministros del Consejo de Castilla, quienes se turnaban por antigüedad, de manera que todos debían ser examinadores. En dicho tribunal también intervenían cuando menos tres abogados de los reales consejos. El contenido del examen solía incluir temas de jurisprudencia y práctica jurídica. Designado el tribunal, se convocaba la fecha de examen. Ese día se entregaba al candidato un caso real designado por el presidente o decano de la Comisión de exámenes de abogados y debía versar sobre materias de derecho civil, criminal o eclesiástico. El aspirante contaba con 24 horas para escribir la demanda, elaborar los autos y realizar las notificaciones hasta la sentencia definitiva o auto correspondiente y en caso de tratarse de un caso de segunda instancia debía elaborar todos los documentos necesarios hasta llegar a la confirmación o revocación de la sentencia apelada. El examen se realizaba dentro de una habitación del Consejo y con los libros necesarios para su resolución. Concluido el ejercicio, el examinado era convocado a una sesión con el tribunal dentro de las siguientes 24 horas debiendo leer el proceso para que fuera juzgado. En caso que el tribunal considerara apto al aspirante remitía al Consejo el dictamen favorable a fin de que se mandara a expedir el título correspondiente. Vid. J. M. Puyol Montero, *El Consejo Real de Castilla...*, p. 1150-52.

abogados<sup>862</sup>. Una vez que el abogado había aprobado el examen debía jurar la plaza ante la sala primera de gobierno del Consejo de Castilla, e inmediatamente después, tenía que inscribirse dentro de los ocho días siguientes a su aprobación al colegio de abogados de Madrid<sup>863</sup>.

Los abogados de Madrid constituían un colegio profesional cuyos estatutos habían sido aprobados por auto del Consejo de 30 agosto de 1732<sup>864</sup>. Todo aquel abogado que quisiera ejercer su profesión en la Villa y Corte debía inscribirse en el colegio de abogados de Madrid<sup>865</sup>. En caso que el abogado no se hubiere incorporado en el colegio, los alegatos y pedimentos que firmase no se debían admitir en las escribanías<sup>866</sup>.

Tras la entrega del título y el correspondiente pago de la media anata, la Escribanía de Cámara del Consejo de Castilla entregaba al interesado la instancia donde certificaba que era competente para ejercer como abogado en cualquiera de los altos tribunales de la Monarquía<sup>867</sup> y entonces podía ingresar al Consejo de Indias, aunque la provisión de la plaza de abogado de pobres era privativa del presidente o gobernador del Consejo<sup>868</sup>. Durante el reinado de Felipe V ocuparon la plaza de abogados de pobres Alfonso Castellanos de la Torre<sup>869</sup>, Julián de Cañaberas<sup>870</sup>, Luis Verdugo<sup>871</sup> y Diego de Ibarra Navarro<sup>872</sup>.

Los abogados de pobres percibían un salario muy bajo, cuando Felipe V subió al trono su salario era de 5.000 maravedís (147 reales 2 maravedís),

---

<sup>862</sup> Vid. Martínez de Salazar, *Colección de memorias del Consejo...*, p. 670. También se permitió que aquellos abogados que hubieren sido aprobados por alguna de las Audiencias castellanas pudieran ser nombrado abogados dentro de cualquiera de los consejos y tribunales de la Corte siempre que estuvieran admitidos en el colegio de abogados de Madrid. Auto Acordado 23.06.1722. A. A. de la N. Recop. 2.16.10.

<sup>863</sup> Real decreto 16.11.1617. A. A. de la N. Recop. 2.16.5.

<sup>864</sup> A. A. de la N. Recop. 2.16.12.

<sup>865</sup> En caso que no se hubiere inscrito en el Colegio de Abogados debía pagar una multa de 50 ducados, la segunda ocasión tendría una pena de seis meses de suspensión y en la tercera sería privado de su oficio. A. A. de la N. Recop. 2.16.13.

<sup>866</sup> Vid. A. Martínez de Salazar, *Colección de memorias del Consejo...*, p. 663.

<sup>867</sup> Vid. J. M. Puyol Monterio, *El Consejo Real de Castilla...*, p. 1149.

<sup>868</sup> *Instrucciones para el gobierno del presidente o gobernador del Consejo de Indias...*, p. 295.

<sup>869</sup> Título de nombramiento 16.03.1710. A.G.S., Dir. Gral. del Tesoro, Inv. 13, leg. 9, f. 385.

<sup>870</sup> Título de nombramiento 12.11.1715. A.G.S., Dir. Gral. del Tesoro, Inv. 13, leg. 8, f. 258.

<sup>871</sup> Título de nombramiento 31.03.1718. A.G.S., Dir. Gral. del Tesoro, leg. 177, f. 312.

<sup>872</sup> Título de nombramiento 05.02.1730. A.G.S., Dir. Gral. del Tesoro, leg. 179, f. 108.

posteriormente su salario aumentó a 3.000 reales de vellón al año, cifra que no variaría en todo ese siglo<sup>873</sup>.

La misión principal del abogado era asesorar al pobre a lo largo de un litigio. A partir de 1737 ninguna instancia presentada ante el Consejo podía ir sin la firma del abogado<sup>874</sup>. Debía estar presente durante la lectura de la demanda de su cliente hecha por el escribano de cámara y de la memoria elaborada por el relator, podía realizar aclaraciones y asesorar al cliente durante toda la vista.

Para realizar su trabajo era menester que acudiera al Consejo cada día, poco antes que los consejos y asistir tres horas, lo cual no haciendo y viéndose algún pleito o negocio en que hayan firmado petición y hayan ayudado a las partes se proveerá justicia y lo que convenga<sup>875</sup>.

Los abogados no podían intervenir en aquellos pleitos donde sepan y conozcan que sus partes no tienen en justicia<sup>876</sup>, tampoco en aquellos casos estén relacionados directa o indirectamente familiares tales como padres, hijos, yernos, hermanos y cuñados<sup>877</sup>. Les estaba prohibido aconsejar a un tiempo a las partes opuestas en un mismo negocio<sup>878</sup>. Asimismo no debían detener o enredar con largas el curso del pleito para cansar y fatigar a las partes<sup>879</sup>.

## 15.2 El procurador de pobres.

El procurador era el representante de la parte que lo había designado, haciendo en su nombre todas las solicitudes, peticiones, presentación de escrito y demás actuaciones. Para Martínez de Salazar aquellos que ejercían este oficio debían estar *instruidos de lo que previenen las leyes del reino y autos acordados y puntuales prácticas de sustanciar los pleitos en los tribunales donde se controviertan*<sup>880</sup>.

---

<sup>873</sup> Vid. G: Bernard, *Le Secrétariat d'État...*, p. 103.

<sup>874</sup> Real disposición 21.05.1737. A. A. de la N. Recop. 2.16.13.

<sup>875</sup> Real disposición 12.10.1611. A. A. de la N. Recop. 2.16.2.

<sup>876</sup> N. Recop. 2.16.2.

<sup>877</sup> N. Recop. 2.16.33.

<sup>878</sup> N. Recop. 2.16.17.

<sup>879</sup> R. L. de Dou y de Bassols, *Instituciones del derecho público general de España con noticia particular de Cataluña y de las principales reglas de gobierno en cualquier Estado*, Barcelona, 1801, t. 3, pp. 17-18.

<sup>880</sup> Vid. A. Martínez de Salazar, *Colección de memorias y noticias...*, p. 722

Para acceder a ejercer como procurador dentro de los consejos había que pertenecer previamente a un colegio de procuradores<sup>881</sup>. Posteriormente se presentaba una solicitud para que el presidente o gobernador del Consejo pudiera elegir al candidato más idóneo<sup>882</sup>. Tras su elección, se expedía el título de nombramiento respectivo de manera que el procurador pudiera realizar el pago de la media anata. A partir de este momento debía jurar ante los miembros del Consejo<sup>883</sup>.

Durante los primeros años del reinado de Felipe V fue procurador de pobres Pedro Gálvez<sup>884</sup>. Desde la planta de 1717 se nombró a Diego del Puerto para ocupar dicha plaza y veinte años más tarde fue sustituido interinamente por Francisco López de Iglesias<sup>885</sup> a quien en 1739 se le concedió en propiedad del oficio de procurador<sup>886</sup>.

Al ser el salario de abogados y procuradores de pobres tan bajo, era común que padecieran de falta de diligencia en la ayuda de los litigantes humildes, ya que sus mejores esfuerzos los dedicaban a las causas de pago<sup>887</sup>. En efecto, Schäfer señalaba que desde el inicio ambos oficiales contaban con sueldos inverosímiles, pero los dos tenían gran cantidad de negocios judiciales más provechosos, el procurador las representaciones formales en los procesos, el abogado la confección de las escrituras propiamente jurídicas<sup>888</sup>. En el Consejo de Indias un procurador de pobres actuaba para representar a los indigentes. Durante el reinado de Carlos II su

---

<sup>881</sup> Para poder pertenecer a uno de los colegios era necesario que el candidato presentara juramento en la Junta General del Número de Procuradores de la Corte y Reales consejos. Después de prestar el juramento obtenían el título real de procurador de número de la Corte y reales consejos. A partir de ese momento ya podía acudir al Consejo a presentar solicitud de ingreso. Vid. J M<sup>a</sup> Puyol Montero, *El Consejo Real...*, pp. 1162-63.

<sup>882</sup> Vid. M. Gómez Gómez, "Instrucciones para el gobierno...", p. 295.

<sup>883</sup> *La fórmula que debían recitar era: - Que juráis a Dios y a esta f y a las palabras de los Santos cuatro Evangelios, que bien y fielmente usaréis el empleo de Procurador de Pobres de este Real Consejo de que SM os ha hecho merced, defendiéndolos con todo cuidado y aplicación, inspeccionando los autos en que sean actores o reos y aconsejándoles para su mejor dirección en los casos y cosas en que os pidieren dictamen, sin pedirles derechos algunos, ni retardarles el despacho por no dároslos, y antes bien los preferiréis en él, sin dar lugar a que con el motivo de dilación, se les origine perjuicio, y en todo haréis lo que como bueno y fiel procurador de pobres debéis y sois obligado a hacer = Decid: -Si, Juro. -Si así lo hicierdes Dios os ayude, y si no os lo demande. Decid Amen. -Amen. B.P.R., Mss. II/2893, p. 305.*

<sup>884</sup> Título de nombramiento 07.10.1682. A.G.I., Indiferente General, 442 L. 32, ff. 178v-179.

<sup>885</sup> Real Cédula 03.31.1737. A.G.I., Indiferente General, 446A L. 43, ff.370v-372.

<sup>886</sup> Real Cédula 01.03.1739. A.G.I., Indiferente General, 447 L. 45, ff. 61-62.

<sup>887</sup> Vid. J. L. de las Heras Santos, *La justicia pena ...*, p. 169.

<sup>888</sup> Vid. E. Schäfer, *El Consejo Real...*, t. 1, pp. 75-76.

salario era de 8.000 maravedís al año<sup>889</sup>. El sueldo del procurador fue a partir de 1718 de 2.000 reales de vellón anuales<sup>890</sup>.

Los procuradores estaban sujetos a una serie de prohibiciones legales tales como no poder *ser allegados a los del Consejo, ni den a entender que sus clientes podrían ser favorecidos con ellos, ni tomen salarios, ni se encarguen de negocios que despachan otros procuradores*<sup>891</sup>; así mismo les estaba prohibido entenderse con las dos partes del litigio al mismo tiempo o con el abogado<sup>892</sup>. Para evitar el favoritismo se prohibió que los oficiales del Consejo o sus familiares funcionasen como procuradores de los pleitos en cosas de las Indias y que los consejeros las admitiesen<sup>893</sup>. Tampoco podían firmar, ni poner demandas sin que se les hubiera conferido poder reconocido y bastante, debiendo, además aceptar los poderes y jurar que usarán bien y fielmente de su oficio<sup>894</sup>.

En 1707 Felipe V estableció que las Escribanías de Cámara tenían prohibido admitir peticiones firmadas de las partes de un pleito sin que estuviesen firmadas de su procurador<sup>895</sup>. Para realizar su trabajo era común que el procurador se hiciera ayudar de un abogado, el cual le asesoraba y por general le confeccionaba los escritos que más tarde presentaría ante el Consejo; de hecho a partir de 1737 fue obligatorio que los procuradores presentaran el expediente elaborado con el refrendo de un abogado a fin de poder remitirlo a uno de los escribanos del Consejo<sup>896</sup>.

---

<sup>889</sup> Carta acordada del Consejo dirigida al tesorero del Consejo dándole orden de pagar 8.000 maravedís de plata a Pedro de Gálvez procurador de pobres del Consejo por el salario de un año. A.G.I. Indiferente General, 444 L. 36, ff. 246r-246v.

<sup>890</sup> Real decreto 17.07.1718. A.G.I., Indiferente General, 829. G. Bernard, *Le Secrétariat d'Etat...*, p. 103.

<sup>891</sup> Ordenanza 245 de 1636. Recop. Indias 2.14.2.

<sup>892</sup> J. Fayard, *Los miembros del Consejo...*, p. 29.

<sup>893</sup> Vid. E. Schäfer, *El Consejo Real...*, t. 1, p. 141.

<sup>894</sup> Podía suceder que el procurador con justa causa no prosiguiese con la defensa de su parte, pudiéndose separar siempre que lo notifique, de lo contrario, esto es, si abandonase y por ello se perdiese el pleito, los perjuicios originados correrían por cuenta del procurador por haber aceptado el poder. Vid. A. Martínez de Salazar, *Colección de memorias...*, p. 724.

<sup>895</sup> Real resolución 26.11.1707, 10.05.1734 y 22.02.1745. A. X. Pérez y López, *Teatro de la legislación...*, t. 24, p. 326.

<sup>896</sup> Vid. J. Fayard, *Los miembros del Consejo...*, p. 29.

## 16. Otros cargos anejos al Consejo de Indias.

### 16.1. El comisario general de Indias de la orden de San Francisco.

Una de las principales obligaciones de la corona Castellana respecto a las Indias fue la de enviar *maestros y predicadores* para la conversión y salvación de los naturales<sup>897</sup>. Para cumplir con esta misión, el monarca poseía el derecho de selección, examen y veto de los frailes enviados a América; sin embargo, la bula *Omnímoda* de Adriano IV del año de 1522 había concedido a los superiores de las órdenes religiosas el derecho a designar y nombrar a los religiosos que acudirían a los territorios de ultramar<sup>898</sup>.

En la práctica la expedición de la mencionada bula provocó una disminución en el número de religiosos enviados a las Indias se había reducido de manera considerable debido a la falta de acuerdo entre éste órgano colegiado y los superiores de cada una de las principales órdenes<sup>899</sup>. A fin de paliar esta situación, el Consejo remitió al monarca una consulta en 1542 proponiendo enviar una petición a Roma a fin de que el Papa expidiera nuevamente un Breve a fin de obtener hasta doscientos frailes de las tres órdenes de Santo Domingo, San Francisco y San Jerónimo<sup>900</sup>, a lo que el emperador respondió “que se haga”<sup>901</sup>.

Pero este envío masivo de misioneros a Indias provocó considerables gastos a la real hacienda, por lo que el propio Consejo de Indias recomendó al monarca el nombramiento de un comisario o visitador general para cada una de las órdenes misioneras; dicho comisario debía ser escogido por el

---

<sup>897</sup> Recop. Indias 1.1.1.

<sup>898</sup> F. de Arvizu, “Una nueva interpretación de la teoría del regio vicariato indiano”, en *Ius canonicum*, n° 36:71 (ene-jun 1996), pp. 63-99. Sobre esta bula, vid. P. Torres, *La Bula Omnímoda de Adriano VI en Indias*, Madrid 1948.

<sup>899</sup> Vid. E. Schäfer, *El Consejo Real...*, t. 2, p. 206.

<sup>900</sup> Consulta de 20.04.1543. *Como quiera que siempre se tiene gran cuidado de este Consejo de procurar con los Prelados que den religiosos, y dan algunos, no son tantos como convenía y aunque algunos religiosos movidos con bueno y santo celo, se determinarían a pasar a aquellas partes, no se determinan por el estorbo que a ello les ponen sus Provinciales y Prelados, VM por estas causas, obtuvo de Su Santidad un Breve para poder sacar de las órdenes de Santo Domingo, San Francisco y San Jerónimo hasta 200 frailes, cuyo traslado va con ésta y porque convenía que éste se renovase, suplicamos a VM mande a su embajador que está en Roma que lo saque de nuevo y lo envíe con la más brevedad que ser pueda.* Vid. L. Arroyo, “Comisarios Generales de Indias”, en *Archivo Iberoamericano, Revista de Estudios Históricos 2ª época*, n° 46 (abr-jun 1952), pp. 129-30.

<sup>901</sup> *Ibidem*, p. 130.

monarca y debiendo estar bajo su autoridad directa los frailes y religiosos de cada orden<sup>902</sup>. Tras lo cual, el 7 de abril de 1572 firmaba el general franciscano la patente de creación del cargo de comisario general de Indias, con carácter meramente de delegado, nombrando a fray Francisco de Guzmán como el primer comisario<sup>903</sup>. Once años más tarde fue creado el oficio de comisario general reconocido por la Congregación General de Toledo<sup>904</sup>.

A partir de entonces quedó establecido que el dicho comisario debía residir en la corte<sup>905</sup> y tendría autoridad *ordinaria, inmediata, privativa, omnímoda y suprema con veces de general en todas las provincias y religiones de su jurisdicción*<sup>906</sup>, en otras palabras el comisario general debía conocer todos los asuntos relacionados con el envío de misioneros a Indias, así como la resolución de todos los negocios de la orden franciscana, bien se tratase de licencias de viaje, ya sobre cualidades de las personas que se enviaban o sobre el castigo de los excesos que se cometían por la orden franciscana tanto en las provincias de la Nueva España como del Perú<sup>907</sup>.

Es importante mencionar que el oficio de comisario general de Indias de la orden de San Francisco fue creado con la autoridad plenísima expuesta, por lo que se incorporó a la real corona y se convirtió en una regalía de allí que el monarca podía nombrar al comisario sin consultar al general de la Orden, previa propuesta de la Cámara de Indias<sup>908</sup>, aunque lo normal fue que el monarca tuvo la atención de pedir al ministro general su parecer<sup>909</sup>. Durante el reinado del primer Borbón ocuparon el cargo de comisario

---

<sup>902</sup> V. Rodríguez Casado, “Notas sobre las relaciones de la Iglesia y el Estado en Indias en el reinado de Carlos III”, en *Revista de Indias*, nº 11 (1951), pp. 103.

<sup>903</sup> Su biografía puede verse en L. Arroyo, “Comisarios Generales...”, nº 46 (abr-jun 1952), pp. 138-141.

<sup>904</sup> Vid. L. Arroyo, “Comisarios Generales...”, nº 46 (abr-jun 1952), p. 132.

<sup>905</sup> *Declaramos que en negocios de la orden de San Francisco se ha de acudir al comisario general de las Indias que reside en nuestra corte y asiste para este efecto con la autoridad y veces del general*. Recop. Indias 1.14.56.

<sup>906</sup> Representación de fray Plácido Pineda al rey. A.G.I., Indiferente General, 3042. Citado por V. Rodríguez Casado, “Notas sobre las relaciones...”, pp. 103-104.

<sup>907</sup> En relación con los comisarios de México y Perú la Constitución Franciscana establecía que *Porque la mucha distancia es causa que los negocios que ocurren no se puedan despachar por el ministro General ni por su Comisario, que reside en la Corte, se ordena que en las Indias haya dos comisarios generales, el uno resida en las provincias de Nueva España y el otro en las provincias del Perú; y los dichos comisarios han de ser instituidos por el ministro General*. Ibídem, p. 104.

<sup>908</sup> Respecto al nombramiento del comisario Ayala se refiere que en aquellos momentos que no había Cámara en el Consejo, entonces a quien tocaba hacer la consulta de propuesta de sujetos era a los ministros del Consejo. J. M. de Ayala, *Notas a la Recopilación...*, pp.44-45.

<sup>909</sup> Vid. V. Rodríguez Casado, “Notas sobre las relaciones...”, p. 105.

general de las Indias de la orden de San Francisco fray Alonso de Biezma (1700-1702)<sup>910</sup>, fray Lucas Álvarez de Toledo (1702-1711)<sup>911</sup>, fray José Sanz (1711-1721)<sup>912</sup>, fray Juan de Soto (1722-1729)<sup>913</sup>, fray Domingo de Losada (1729-1741)<sup>914</sup> y fray Matías de Velasco (1741-1763)<sup>915</sup>. De todos estos comisarios, solamente Felipe V decidió nombrar a fray Juan de Soto en contra de la decisión del comisario general de la orden, los otros, fueron elegidos con el acuerdo de dicho comisario<sup>916</sup>.

En 1700 la remuneración que recibía el comisario general de Indias era de 3.308 reales, 28 maravedís. A partir de 1718 fue de 3.000 reales de vellón anuales, cantidad que no variaría al menos hasta 1808<sup>917</sup>.

## 16.2. El agente para las Indias con sede en Roma.

Otro empleo que en principio corría a cargo de la nómina del Consejo de Indias fue el de agente para la Indias. El empleo se creó desde el reinado de Carlos V en 1538 con la finalidad de asesorar al embajador español en Roma sobre los asuntos relacionados con la de aquellos territorios y permaneciese en contacto continuo con la curia romana<sup>918</sup>. Con el tiempo el cargo fue transformado en agente general y procurador de los negocios de

<sup>910</sup> Fue el último comisario nombrado por Carlos II a través de la patente de de 22.02.1700. Vid. L. Arroyo, "Comisarios Generales...", n° 47 (jul-sep 1952), pp. 270-272.

<sup>911</sup> En su primera patente despachada en Madrid 02.04.1702 decía *por la promoción de nuestro Rvdo. Padre fray Alonso de Biezma, ex-comisario general dignísimo de todas las provincias de las Indias Occidentales a la Prelacia General de toda nuestra seráfica religión, consultándose sujetos de nuestra orden (según se acostumbra) a Su Majestad (que Dios guarde), para la provisión de dicho oficio de Comisario General de Indias por los señores del Real Supremo de ella, fue servido de encargar a nuestro cuidado el gobierno de esas nuestras Provincias, como consta de su real decreto, expedido en Barcelona en 15 de marzo de este presente año de 1702, el cual por lo que toca a nuestra sagrada Religión, por letras está aprobado y confirmado de nuestro Rvdo. ministro General, su data en este convento de S. Francisco de Madrid a 22 de dicho mes y año. Ibídem, pp. 272-275.*

<sup>912</sup> Título nombramiento a través de la real Cédula 04.12.1711. Id., pp. 275-280.

<sup>913</sup> Título nombramiento a través de la real Cédula 29.01.1722. Id., pp. 280-284.

<sup>914</sup> Título nombramiento a través del real decreto 06.11.1729. Id., pp. 284-289.

<sup>915</sup> Título nombramiento 21.03.1741. A.G.I., Indiferente General, 447 L. 46 f. 34. Vid. L. Arroyo, "Comisarios Generales...", n° 47 (jul-sep 1952), pp. 289-296.

<sup>916</sup> V. Rodríguez Casado, "Notas sobre las relaciones...", p. 106, nota 57.

<sup>917</sup> Real decreto 17.07.1718. A.G.I., Indiferente General, 829. También en G. Bernard, *Le Secrétariat d'État...*, p. 109.

<sup>918</sup> Vid. E. Schäfer, *El Consejo Real...*, t. 1, pp. 76-77. También en Solano, F., "Algunos aspectos de la política...", pp. 178-79; G. Bernard, *Le Secrétariat d'État...*, p. 110; R. D. García Pérez, *El Consejo de Indias...*, p. 235-36 y V. de Cadenas y Vicent, *Carlos I de Castilla, señor de las Indias*, Madrid, 1988, pp. 174-75.



Castilla, de las Indias y de Cruzada<sup>919</sup> también con sede en la corte de Roma. Dicho empleo cobraba 300 ducados por los asuntos indianos y 200 por los asuntos de cruzada<sup>920</sup>.

### 16.3. El capellán.

De acuerdo con la Recopilación de Indias<sup>921</sup> los miembros del Consejo debían acudir a misa todos los días laborables de allí que la figura del capellán estuviera contemplada desde las primeras plantas del Consejo<sup>922</sup>. Según afirmaba Ayala el capellán era nombrado por el presidente, gobernador o el propio decano quien enviaba la consulta directamente al monarca<sup>923</sup>.

A la llegada al trono del primer Borbón ocupaba el cargo de capellán Francisco Martínez Perona a quien se le habían concedido 45.000 maravedís de salario anual, más 33.500 en concepto de casa de aposento<sup>924</sup>. Dicha capellanía la ejercería hasta el mes de julio de 1706 cuando Felipe V decidió nombrar capellán en ínterin a Juan de Bustamante, entonces alguacil del Consejo de Indias, por las sospechas de traición que cernían sobre el capellán titular por no haber seguido al monarca en la Jornada de Burgos<sup>925</sup>.

---

<sup>919</sup> Sobre la destacada figura de este empleo puede verse R. Olaechea, *Las relaciones hispano-romanas en la segunda mitad del siglo XVIII*, Zaragoza, 1965, t. 1.

<sup>920</sup> G. Bernard, *Le Secrétariat d'État...*, p. 110.

<sup>921</sup> Ordenanza 1 de 1636. Recop. Indias 2.2.1..

<sup>922</sup> León Pinelo aludía que en 1560 se nombró a Antonio Lintorne como el primer capellán elegido para decir misa en el Consejo. *Tablas cronológicas...*, p. 41.

<sup>923</sup> J. M. Ayala, *Notas a la Recopilación...*, p. 30.

<sup>924</sup> Título de nombramiento 24.02.1693. A.G.I., Indiferente General, 444 L. 37, ff. 57r-58v.

<sup>925</sup> *Por cuanto no habiendo seguido a mi Consejo de las Indias el Capellán dél y siendo preciso nombrar sujeto de virtud y literatura que sirva este empleo, atendiendo el Duque de Atrisco mi presidente dél a que estas circunstancias concurren en la parroquia del licenciado don Juan de Bustamante, le he elegido para que sirva y ejerza en ínterin dicha capellanía con el mismo sueldo, gajes y preeminencias que hubiere gozado el propietario. Por la presente quiero y es mi voluntad que vos el dicho Licenciado Don Juan de Bustamante seáis Capellán en ínterin del referido mi Consejo de las Indias y que uséis y ejerzáis este empleo, según lo han hecho podido y debido hacer los demás capellanes, y que se os acuda con el mismo sueldo, gajes que a ellos en la misma forma y de las propias consignaciones que se le hubiese satisfecho desde el día siete de julio de este año en que os fue hecho el referido nombramiento, y mando al tesorero o administrador que eso fuese de la tesorería del dicho mi Consejo de las Indias os de y pague lo que esto importa y que con vuestro recibo y traslado signado de esta mi cédula, se le reciba y pague en cuenta, sin otro recaudo alguno. Y de esta mi cédula toma la razón para los mis Contadores que actualmente lo son en ínterin del dicho mi consejos de las Indias.* Real decreto 05.08.1706. A.G.I., Indiferente General, 542 L. 1, ff. 66-68.

Tras comprobarse su lealtad a Felipe V nuevamente Martínez Perona ocupó la capellanía<sup>926</sup>. Con el tiempo y debido a sus continuas ausencias y enfermedades el monarca decidió conceder a Francisco de la Torre Ocón<sup>927</sup>, la plaza en ínterin hasta la muerte del mencionado Martínez Perona, acaecida en 1725. Ese año el monarca concedió a Francisco de la Torre<sup>928</sup> la titularidad de la plaza, pero al año siguiente falleció y fue sustituido por Raimundo Rezabal<sup>929</sup> quien tras varios años de servicio hubo de ser sustituido debido a sus largas ausencias por Vicente Sanz<sup>930</sup>, el cual en 1745 finalmente obtuvo la titularidad de la capellanía<sup>931</sup>.

A fin de que el capellán pudiera decir misa todos los días era necesario que contara con un ayudante, el sacristán, el cual era nombrado por el presidente o gobernador del Consejo elegido de entre los porteros numerarios del Consejo<sup>932</sup>.

---

<sup>926</sup> Real decreto 23.09.1706 en el que mandan S. M. vuelvan a ejercer empleos los ministros subalternos e inferiores del Consejo, excepto lo que se supiere tuvieron correspondencia con los enemigos, o tengan comunicación con los cabos y oficiales de sus tropas o desatención en hablar contra el respeto de S. M., excitando a que se aumente el número de los desafectos con sus comunicaciones. A.G.I., Indiferente General, 583 L. 2, ff. 28-29.

<sup>927</sup> Real Cédula de 03.07.1711 a Francisco de la Torre para que sirva las ausencias y enfermedades de la capellanía del Consejo de Indias de la que S.M. le ha hecho merced. A.G.I., Indiferente General, 445 L.39, ff. 93v-94r.

<sup>928</sup> Título de nombramiento 06.06.1725. A.G.S., Dir. Gral. del Tesoro, Inv. 13, leg. 9, f. 598.

<sup>929</sup> Título de nombramiento 16.11.1726. A.G.S., Dir. Gral. del Tesoro, Inv. 13, leg. 8, f. 605.

<sup>930</sup> Real Cédula de 16.12.1738 al tesorero general dándole orden de pago de 150 ducados de ayuda de costa anuales a D. Vicente Sanz, durante el tiempo que sirviere las ausencias y enfermedades del capellán del Consejo. A.G.I., Indiferente General, 447 L.45, ff. 60v-60r.

<sup>931</sup> Título de nombramiento 02.11.1745. A.G.S., Dir. Gral. del Tesoro, Inv. 13, leg. 8, f. 694.

<sup>932</sup> Vid. E. Schäfer, *El Consejo Real...*, t. 1, p. 146. En la *Instrucción sobre las competencias y prerrogativas correspondientes al empleo de presidente del Consejo de Indias, realizadas por Simón Martínez del Arroyo...*, se especifica que dentro de los empleos cuya provisión era privativa del presidente estaba la de capellán del Consejo y la del sacristán. Publicada por M. Gómez Gómez, "Instrucciones para el gobierno del presidente...", p. 295. Sabemos que ocuparon el cargo de sacristán del Consejo en 1712 Manuel de los Reyes (A.G.I., Indiferente General, 445 L.39, ff. 177r-177v.) o en 1715 Francisco de Pantoja (A.G.I., Indiferente General, 445 L.39, ff. 301).

### III. LAS COMPETENCIAS DEL CONSEJO DE INDIAS

#### 1. Consideraciones Generales.

Desde su fundación el Real y Supremo Consejo de Indias fue constituido como el principal órgano colegiado de carácter consultivo relacionado con los asuntos de aquellos territorios. Su intitulación de Real y Supremo le otorgaba por un lado la posibilidad de acudir directamente ante el monarca y por la otra impedía a otros órganos de la administración intervenir en la tramitación de cuestiones relativas a Indias<sup>1</sup>, excluyendo por tanto del conocimiento de sus asuntos a cualquier otro Consejo de la Monarquía<sup>2</sup>.

La falta de una clara delimitación de las áreas competenciales y la existencia de trámites irregulares, amparado por la propia voluntad regia, hicieron que esta característica de supremo se viera empañada en el quehacer administrativo cotidiano a lo largo de los siglos XVI y XVII<sup>3</sup>. Por ello, a fin de armonizar las distintas fuerzas políticas y administrativas los monarcas intentaron inhibir a cualquier otro órgano del conocimiento de los asuntos de Indias. Así Felipe III dispuso que no se cumpliera cédula, ni despacho de otro Consejo si antes no hubiera pasado por el de Indias<sup>4</sup>. Situación que como veremos más adelante generó numerosos problemas políticos, administrativos y económicos.

---

<sup>1</sup> La Recopilación de Indias disponía al respecto la inhibición de todos los consejos del conocimiento de asuntos de Indias de la siguiente manera: *Ordenamos y mandamos, que ninguno de los nuestros consejos, ni Tribunales de nuestra Casa y Corte, Chancillerías, ni Audiencias, ni otro juez alguno, ni Justicia de todos nuestros Reinos, y Señoríos, se entrometan á conocer, ni conozcan de negocios de Indias, ni cosas pertenecientes al nuestro Consejo de las Indias, por demanda, ni querella, ni en grado de apelación, ni por vía ordinaria, ni executiva, en primera, ni en segunda, ni en otras instancias, sino que luego que vinieren, y se pusieren ante ellos, los remitan todos al dicho nuestro Consejo de las Indias...* Recop. Indias 2.2.3.

<sup>2</sup> Sobre la preeminencia del Consejo frente a otros órganos de la Monarquía puede verse F. Barrios, "Solórzano, la Monarquía y un conflicto entre consejos", en *Derecho y administración pública en las Indias hispánicas*, Cuenca, 2002, vol. 1, pp. 265-283.

<sup>3</sup> Vid. F. Barrios, "Consolidación de la polisinodia...", p. 128.

<sup>4</sup> *Mandamos a los Virreyes, Presidentes, Oidores, gobernadores y Justicias de las Indias, que obedezcan y no cumplan las Cédulas, Provisiones y otros cualesquier despachos dados por nuestros reales consejos, si no fueren pasados por el de las Indias, y despachada por él nuestra Real Cédula de cumplimiento...* Recop. Indias 2.1.39.

En el siglo XVI el Consejo estaba *encargado del gobierno y de la jurisdicción de las Indias*<sup>5</sup>, de manera que todos los negocios debían resolverse a partir de estas dos competencias<sup>6</sup>. Pero el despacho diario de los asuntos generó la necesidad de ampliar jurídicamente el ámbito competencial del Consejo a otro tipo de competencias relacionados con la hacienda y la guerra en Indias. Aún así, dicha ampliación dejaba fuera de engarce a otro tipo de asuntos que también debían tramitarse por el Consejo como por ejemplo todo lo relacionado con la navegación, el comercio de Indias o el trato a los indios. De hecho, en opinión de García Gallo esta distinción de negocios que tan claramente se inició en Indias desde el primer momento triunfó luego en España plenamente en el siglo XVIII, en el que

---

<sup>5</sup> *Ordenanzas para la Gobernación de las Indias y buen tratamiento y conservación de los indios. Leyes Nuevas 1542-1543* (en adelante *Leyes Nuevas*), texto facsimilar y estudio A. Muro Orejón, *Anuario de Estudios Americanos*, nº 16 (1959), pp. 561-619. *Leyes Nuevas de 1542*, 7.

<sup>6</sup> La dicotomía entre justicia y gobierno en la Edad Moderna originó un gran debate teórico durante la segunda mitad del siglo pasado. Así por ejemplo en opinión de J. M. Pérez-Prendes en la Edad Media existía la tendencia de distinguir entre las tareas de juzgar y otras de tipo gubernativo. Señalaba que esa diferenciación existía en cuanto funciones y en cuanto a actividad propia de los oficiales a los que se les encomendaban como propias, unas y otras. Pero la distinción se diluía cuando ambas tareas confluían en el soberano, titular tanto de esas dos funciones, así como de la legislativa<sup>6</sup>. Para el mencionado autor el término “facer justicia” tenía dos sentidos diferentes. El primero de ellos, esto es, “facer justicia juzgando” hacía referencia a un contenido específicamente judicial, implicaba la actividad de juzgar, tarea que propiamente competía al juez. El segundo de ellos, esto es, “facer justicia de fecho” englobaba un conjunto de funciones tales como la vigilancia del orden público, la guarda de las propiedades y de las personas; velar por la paz del rey evitando asonadas, desmanes y cualquier tipo de ataque a la paz jurídica; cuidado de los presos, persecución de los malhechores; cuidar la integridad de los sujetos o bienes involucrados en un litigio; retener bajo custodia las cosas susceptibles de ser usadas como prueba en un proceso; tomar las prendas de las fianzas solicitadas por el juez; evitar desmanes que surjan de las percepciones de prestaciones económicas por parte del Estado sobre sus súbditos, etcétera. Vid. J. M. Pérez-Prendes Muñoz-Arranco, “«Facer Justicia». Notas sobre actuación gubernativa medieval”, en *Interpretatio. Revista de Historia del Derecho*, Madrid, nº 7-1, 1999, p. 437. Gallego Anabitarte en cambio, disiente de la opinión generalizada que durante el Antiguo Régimen el derecho público siguió aferrado a la visión de que el rey concentraba todos los poderes entre sus manos y que la idea moderna de separación de poderes es completamente extraña a las concepciones del Antiguo Régimen”; sin embargo, dicho autor aduce que “la separación de poderes también quiere decir que la función o poder ejecutivo está separado del poder o función judicial, y si hay algo cierto jurídica e institucionalmente en el Antiguo Régimen es la obsesiva separación entre la función judicial y contenciosa civil y criminal, y la función gubernativa y administrativa”. Vid. A. Gallego Anabitarte, “La distinción entre contencioso y gubernativo, principio fundamental del derecho europeo”, en *Poder y Derecho. Del Antiguo Régimen al Estado Constitucional en España. Siglos XVIII al XIX*, Madrid, 2009, pp. 125-26.

incluso los órganos del Estado se especializaron correspondiendo a cada una de aquellas materias<sup>7</sup>.

En efecto, sabemos que en la época del Emperador el “todopoderoso” Consejo de Indias podía conocer de cualquier asunto, pero poco a poco, esta situación tendió a variar, desde el reinado de Felipe II, y posteriormente sus herederos, crearon órganos permanentes o temporales que también intervenían en la resolución de asuntos relativos a las Indias<sup>8</sup>. Ya en el siglo XVIII con la ascensión al poder de Felipe V el camino estaba preparado y parte de las competencias de privativo conocimiento del Consejo indiano fueron atribuidas para su despacho exclusivo a las secretarías de Estado y del despacho, según se desprende de la real orden de agosto de 1716:

*Por cuanto teniendo presente puede haber casos en que la brevedad y otras circunstancias no den tiempo a que los despachos que se expidieren por la vía reservada vayan pasadas por mi Consejo de las Indias, lleven cédula de él para su cumplimiento en consecuencia de las leyes y cédulas que así lo disponen. Por tanto por la presente mando a mis Virreyes, Audiencias, gobernadores, y otros cualesquiera Jueces y Justicias del Perú y Nueva España den puntual ejecución a todas las cédulas y despachos que se expidieren por la vía reservada firmadas de mi real mano y refrendadas de mi secretarios del despacho, aunque por el motivo que va expuesto de no caber en el tiempo, no vayan pasadas por mi Consejo de las Indias, por lo mucho que puede importar el puntual cumplimiento, para lo que dispengo a todas las leyes, cédulas y órdenes que mandan no se de obediencia a los despachos que faltare la expresada circunstancia por ser asimismo voluntad y convenir a mi servicio<sup>9</sup>.*

Además, a partir de la promulgación de los reales decretos de 20 de enero<sup>10</sup> y 11 de septiembre<sup>11</sup> de 1717, las más importantes competencias que hasta entonces ejercía el Consejo de Indias fueron remitidas a las mencionadas secretarías de Estado y del despacho para su tramitación a través de la llamada vía reservada. Con la expedición de los mencionados decretos el Consejo de Indias vio reducido su ámbito de acción y en teoría sus atribuciones quedaron limitadas a negocios contenciosos y de mera

---

<sup>7</sup> Vid. A. García Gallo, “La división de las competencias...”, p. 298.

<sup>8</sup> En opinión de Feliciano Barrios fue muy frecuente que un asunto que en principio pertenecía a la privativa esfera de actuación de un Consejo era enviado a otros consejos y juntas para que emitieran su opinión sobre alguna consulta o representación de otro Consejo. Vid. F. Barrios, “Consolidación de la polisinodia...”, p. 128, nota 34.

<sup>9</sup> Real Orden de 08.08.1716. A.H.N., Cedulaire de Ayala t. 21 (Códices, L. 704), ff. 50v-51r, n°46.

<sup>10</sup> A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 107v-108v.

<sup>11</sup> A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 113r- 114r.

justicia. Pero como tendremos ocasión de comprobar, la realidad administrativa fue bien distinta, ya que la puesta en marcha de estos decretos no fue del todo fácil, máxime porque en estos años el Consejo de Indias contaba con una organización interna absolutamente establecida mientras que las secretarías estaban en proceso de formación.

Ots y Capdequí al analizar el tema de las secretarías del Despacho Universal de Indias afirmaba que “la delimitación de funciones entre el viejo Consejo de Indias y la nueva secretaría no fue cosa fácil de mantener en la práctica. Por el camino de lo contencioso continuó el Consejo de Indias, de manera directa o indirecta, en asuntos que habían sido separados de su esfera de influencia para entregarlos a la exclusiva competencia de las secretarías del despacho”<sup>12</sup>.

Para establecer las atribuciones que le fueron sustraídas al Consejo de Indias a favor de la vía reservada nos ha parecido conveniente elaborar en primer lugar una breve panorámica del contenido material de cada una de las competencias propias del Consejo. En segundo lugar establecer cómo dichas competencias fueron atribuidas desde los siglos XVI y XVII a órganos de la administración central distintos del Consejo de Indias. Y finalmente analizaremos aquellas atribuciones con las que el Consejo de Indias trabajó a partir de las reformas de 1717.

## **2. Los principios rectores de la administración indiana.**

Desde sus inicios, el Consejo de Indias fue un órgano encargado del conocimiento y resolución de todos los asuntos relacionados con la administración de las Indias. Dicho órgano debía ser capaz de resolver las nuevas cuestiones surgidas de la colonización del Nuevo Mundo, así como los problemas subyacentes provocados por la navegación, el comercio, la explotación de minas, la educación, el buen tratamiento a los naturales, etcétera. El conocimiento de temas tan variados provocó que en la primera mitad del siglo XVI se diferenciaron diversos ramos, cosas o negocios dentro de las competencias del Estado<sup>13</sup>, a lo que Hespanha denominó “los

---

<sup>12</sup> J. M<sup>a</sup> Ots y Capdequí, *Historia del Derecho español en América y del Derecho indiano*, Madrid, 1968, p. 118.

<sup>13</sup> Vid. A. García-Gallo, “La división de las competencias administrativas en España e Indias en la Edad Moderna”, en *Los orígenes españoles de las instituciones americanas. Estudios de Derecho indiano*, Madrid, 1987, p. 297.

grandes sectores de la actividad del poder” refiriéndose especialmente a materias de justicia, estado, guerra, gracia, conciencia, hacienda y gobierno<sup>14</sup>.

Para este autor, la tipología de la actividad político-administrativa de la Corona era la que separaba la justicia ordinaria del *imperium*, esto es, de la defensa interna y externa de la paz, que correspondería a las materias de “estado” o de “guerra”. La segunda era la que deslindaba las actividades en materia de justicia de aquellas que el poder ejercía de manera espontánea, esto es, lo que pertenecía al campo de las de “gracia” incluyendo la concesión de títulos, oficios, beneficios o privilegios no remunerados (emancipaciones, legitimaciones, cartas de libranza...). La tercera categoría estaba relacionada con la protección del poder espiritual, en donde se buscaba la defensa de la ortodoxia y de la moralidad, la protección de las instituciones eclesiásticas sujetas a patronato real, las actividades de misericordia o de beneficencia. La cuarta categoría estaba relacionada al “gobierno económico”, esto es, a los actos dirigidos a gestionar los bienes e intereses y rentas de la que el rey era el administrador. Este gobierno económico poco a poco se perfiló en gobierno “político” distinguiendo el patrimonio de la casa real del patrimonio del reino o entre el interés económico del rey, por la búsqueda del interés político de la República a través de actos que garantizaran el abastecimiento y el control de las importaciones y exportaciones a través de su “buena policía”. Finalmente el poder “de gobierno” se utilizaba para justificar la punición por parte del rey de aquellos que no lo hubiesen sido suficientemente por la jurisdicción eclesiástica competente<sup>15</sup>.

Las Leyes Nuevas de 1542 fueron las primeras disposiciones que distinguieron taxativamente los diversos ramos de la administración de las Indias, en especial cuando ordenaban al Consejo de Indias ocuparse de saber cómo se cumplía lo que *el monarca ordena y ordenará para la buena gobernación de nuestras Indias y administración de justicia de ellas*<sup>16</sup>. Esta distinción entre asuntos de gobierno y de justicia se comprobó nuevamente en las Instrucciones que Carlos V expidió antes de su partida de España, en ellas señaló que *en las cosas de pleitos de justicia haréis lo que se*

---

<sup>14</sup> Vid. A. M. Hespanha, *Vísperas del Leviatán. Instituciones y poder político (Portugal, siglo XVII)*, Madrid, 1989, p. 218.

<sup>15</sup> *Ibíd.*, pp. 218-220.

<sup>16</sup> Leyes Nuevas de 1542, 7.

*acostumbra cuando yo estoy presente. Lo mismo haréis en negocios de gobernación...*<sup>17</sup>

Por su parte, Felipe II ordenó a sus virreyes y Audiencias remitir los informes de manera que quedaran separadas las materias de gobierno, justicia, hacienda y guerra<sup>18</sup>. En 1618 una real cédula ordenó a los virreyes dar cuenta especial *del estado general y particular de sus gobiernos, para que tengamos individual noticia de las materias de su cargo, y forma con que cumplen nuestras órdenes. Mandamos que ajustándose a las leyes que tratan de esta obligación, y se dirigen a los presidentes, Audiencias y Prelados nos avisen continuamente en primer lugar de todo lo que tocara a religión, culto divino y piedad, en el segundo a lo tocante a gobierno, militar, político y hacienda, proponiéndonos las personas que justamente pueden ser ocupadas en empleos eclesiásticos y de nuestro real servicio...*<sup>19</sup>. Años más tarde, Felipe IV ordenó a los virreyes, presidentes, gobernadores y ministros de Indias enviar las cartas por materias *comenzando por las eclesiásticas, siguiendo a estas las de gobierno político y luego las tocantes a materias de hacienda y después las de asuntos militares*<sup>20</sup>.

Pero esta distinción de la actividad político-administrativa de la Corona respecto al gobierno de las Indias no siempre fue lo bastante clara. En realidad fueron las Ordenanzas del Consejo de 1571 las que perfilaron el ámbito competencial de dicho órgano colegiado, pero no resolvieron el problema de clasificación de algunas materias<sup>21</sup>. Según dichas disposiciones

<sup>17</sup> Instrucción al Consejo de Indias dada por el Emperador en Barcelona 01.05.1543. Citado por F. de Laiglesia y Auset, *Estudios históricos (1515-1555)*, Madrid, 1918, pp. 58-60.

<sup>18</sup> Una real Cédula de 15.10.1595 indicó al virrey del Perú que para mayor facilidad en las respuestas era menester que sus cartas *vengan escritas en el papel doblado a la larga, por manera que quede otra tanta margen como fuere lo escrito, y en aquella margen frontero de cada capítulo, al principio del, sacada en relación la sustancia del mismo capítulo, y en lo que toca a los papeles que hubieren de venir con ellas, ponéis en la cubierta de cada recaudo de por sí la fecha de la carta y número del capítulo donde se cita, y todo lo que se acostumbra a escribir en muchas cartas lo reduciréis a cuatro por sus materias distintas: gobierno, justicia, guerra y hacienda*. Cedula de Encinas II, pp. 314-15. Vid. A. García-Gallo, "La ley como fuente...", pp. 638-39.

<sup>19</sup> Recop. Indias 3.14.1.

<sup>20</sup> Recop. Indias 2.16.6. A finales del siglo XVI la distinción entre las materias en que se dividía el gobierno de las Indias era una realidad. Un ejemplo lo fue la figura del virrey a quien se le otorgó el gobierno superior del Virreinato, así como la administración de justicia de todos los súbditos y vasallos (Recop. Indias 3.3.1). Se le concedió el título de gobernador dentro de su distritos con el fin de resolver todo tipo de asuntos relacionados con la gobernación. Además debía guardar un especial cuidado en el recaudo, administración, cuenta y cobranza de la real hacienda (Recop. Indias 3.3.2) y se le otorgó la defensa de sus distritos nombrándole capitán general (Recop. Indias 3.3.3).

<sup>21</sup> Ordenanza 2 de 1571 que pasó con algunas variantes de redacción a la Ordenanza 2 de 1636. Recop. Indias 2.2.2.



los asuntos de justicia debían comprender únicamente lo contencioso entre partes, así como la sustanciación de las visitas y residencias. Por exclusión, todo aquello que no fuera justicia, se entendería materia de gobernación. Y dentro de la gobernación, el Consejo debía distinguir asuntos espirituales de los temporales. Los primeros abarcaban tanto la organización y control de la organización eclesiástica en Indias, como todos los asuntos relacionados con la educación, la inquisición o los hospitales, entre otros. En cambio, la gobernación temporal que incluía provisiones de oficio, concesiones de mercedes, políticas de primeras poblaciones, fundación de ciudades, etcétera<sup>22</sup>. Los asuntos de hacienda en cambio en principio sólo se referirían a la recaudación de impuestos y a los pagos que debía asumir la Corona. Lo militar únicamente estaba relacionado a los asuntos propios de guerra, especialmente en lo relativo a la organización y actuación de las tropas profesionales del rey<sup>23</sup>.

En la propia Recopilación se estableció el criterio que debía primar en la leyes para que los súbditos pudieran conocerlas: *considerando que las materias son tan diversas y los casos tantos y tan arduos y que todo lo proveído y acordado por Nos es justo que llegue a noticia de todos, para que universalmente sepan las leyes con que son gobernados y deben guardar en materias de gobierno, justicia, guerra, hacienda y las demás...*

En el siglo XVIII Santiago Riol en su conocido *Informe* elaboró una relación con las materias que conocía el Consejo de Indias:

*...el globo de los negocios y expedientes en que entiende este Consejo, y las materias de que trata y reconoce es tan gran y universal que abraza toda la diversidad de las que están divididas en todos los demás negocios de la Monarquía. No solo ejerce VM en el dilatado Imperio de las Indias la autoridad real como soberano monarca, sino la delegada de la Santa Sede Apostólica. Tratase en este Consejo de real Hacienda, de Armadas, flotas, comercios, navegaciones, conservación de presidios y puertos, y sus defensas, reales quintos, derechos de minas, y otros aprovechamientos, provisiones Eclesiásticas y temporales, diezmos, vacantes de Obispos, expolios de Obispos, Bulas y otra multitud de negocios universales y particulares de suma gravedad, en cuya acertada expedición, y en la más*

---

<sup>22</sup> Ordenanza 4 de 1571 que pasó a la Ordenanza 7 de 1636. Recop. Indias 2.2.7.

<sup>23</sup> Vid. A. García-Gallo, "La división de las competencias...", p. 298. Para J. M. Pérez Prendes esta ordenación general de relaciones y funciones político-administrativas distribuye a dos dimensiones por un lado la gobernación (espiritual y temporal) y por el otro la jurisdicción. Pero como a su vez hacienda y defensa son espacios con personalidad muy diferenciada dentro de lo que es el enorme cúmulo de atenciones de la gobernación temporal, a la que de suyo pertenecen, se puede formar un catálogo de funciones, jurisdicción, gobernación, militar y financiera. Vid. J. M. Pérez Prendes, *La monarquía indiana...*, p.185.

*principal de la recta administración de Justicia, se siguen a VM y a todos sus vasallos imponderables bienes, y parte se afianzan estando los papeles de las dos Secretarías, Contadurías y Escribanías de Cámara de este Consejo en el buen orden y claridad que corresponde a la calidad y circunstancias de cada uno de los graves negocios que corren por su manejo*<sup>24</sup>.

De acuerdo a lo anterior es fácil establecer que el conocimiento de los asuntos que llegaban al Consejo eran tan amplios como problemas existían; sin embargo, tres siglos gobernando un territorio siempre creciente provocaron que los monarcas se decantaran por la creación de instituciones político-administrativas que conocieran en profundidad materias como la hacienda o la guerra<sup>25</sup>. De manera que la clasificación de los asuntos varió según las necesidades de cada momento. Así por ejemplo, mientras que para los siglos XVI o XVII el comercio no formaba parte de materia hacendaria, para el siglo XVIII el fomento del comercio fue considerado un asunto de hacienda.

R. García al tratar de establecer algún criterio clasificatorio de las competencias del Consejo de Indias señaló acertadamente el problema de clasificar las atribuciones a partir del contenido material, esto es, distinguiendo los asuntos según se tratase de materias de gobierno, justicia, guerra o hacienda. Sobre todo porque en su opinión se corre el riesgo de caer en un casuismo carente de orden y por tanto de claridad<sup>26</sup>. Conscientes de esta cuestión decidimos utilizar este criterio de análisis por dos motivos. El primero de ellos porque a la hora de confeccionar la base de datos de las consultas nos dimos cuenta que era factible manejar dichos criterios clasificatorios sin perder la información individual de cada consulta, de manera que era posible obtener datos estadísticos fiables. Por otro lado, no podíamos dejar de contemplar una de las características del propio sistema jurídico indiano, que era precisamente su casuismo, entendido en palabras de Víctor Tau Anzoátegui “como una aspiración al mejor gobierno y no como un vicio técnico despreciable”<sup>27</sup>.

Otro criterio comúnmente utilizado fue aquel que distinguía las competencias dependiendo del procedimiento utilizado en la resolución de

---

<sup>24</sup> S. A., Riol, “Informe que hizo Su Majestad...”, p. 160.

<sup>25</sup> En el siglo XVI Felipe II decidió unir la hacienda indiana con la de Castilla, de manera que el Consejo de Hacienda temporalmente conoció de los asuntos de hacienda de las Indias. Lo mismo sucedió respecto a los asuntos de guerra cuando Felipe III creó la Junta de guerra de Indias. Temas que analizaremos con más detenimiento en los siguientes epígrafes.

<sup>26</sup> Vid. R. D. García Pérez, *El Consejo de Indias...*, pp. 356-57.

<sup>27</sup> Vid. V. Tau Anzoátegui, *¿Qué fue el Derecho indiano?*, Buenos Aires, 1982, p. 43.

los asuntos<sup>28</sup>. Entre los siglos XVI y XVII existían tres vías procedimentales diferentes: justicia, merced y gobierno. La vía “de justicia” suponía la tramitación de los asuntos estrictamente procesales, especialmente para la resolución de pleitos entre partes. La otra vía se denominaba “de merced” o también llamada “de Cámara” donde se tramitaban asuntos de gracia, merced y patronato real. Finalmente la vía “de gobierno” que incluía todos aquellos asuntos no resueltos en las anteriores vías.

A partir de la segunda década del siglo XVIII irrumpió en el panorama administrativo una nueva forma de despachar los asuntos llamada “vía reservada” a través de la cual se comenzaron a despachar asuntos que de antaño habían corrido por la vía ordinaria o también llamada vía de Consejo. Desde ese momento el rey atrajo para sí asuntos “en derecho” a su despacho. Si bien en principio parecía que esta nueva forma de despachar la mayor parte de los asuntos relacionados con las Indias dejaba fuera la vía ordinaria, en realidad ambas vías conocían simultáneamente algunas materias, aunque a cada una de ellas se les fue asignado un papel diferente en su trámite y resolución<sup>29</sup>.

Por otro lado, creemos que es necesario el estudio de las competencias que le eran propias al Consejo a fin de dilucidar aquella transformación de la que fue objeto a partir de la llegada de Felipe V al poder. Al efecto analizaremos en primer lugar aquellas materias que en el transcurso de los siglos XVI, XVII y primera mitad del XVIII fueron de la competencia exclusiva del Consejo y como poco a poco le fueron sustraídas y trasladadas al conocimiento de otros órganos especializados.

## **2.1. El Consejo de Indias y el gobierno de las Indias.**

### **a) El gobierno temporal.**

El Consejo de Indias era un órgano eminentemente gubernativo. Las Leyes Nuevas de 1542 establecieron como su principal misión el gobierno de aquellos territorios, compeliéndole en todo momento a que evitara en la

---

<sup>28</sup> Vid. S. de Dios, *El Consejo Real...*, pp. 341 y ss. También utiliza este criterio R. D. García Pérez, *El Consejo de Indias...*, pp. 356 y ss.

<sup>29</sup> M. Gómez Gómez, “La nueva tramitación de los negocios...”, p. 217.

medida de lo posible el conocimiento de negocios particulares<sup>30</sup>. Sin embargo, debido a su amplitud y a la dificultad de encerrarlas en un listado indeterminado, trataremos de organizarlas por ramas administrativas.

La primera y más importante competencia que ostentaba el Consejo fue precisamente el *deber de consejo* en todos los asuntos relacionados directa e indirectamente con las Indias. Varias miles de consultas emitidas a lo largo de tres siglos dan fe de ello. A través de las consultas el monarca podía conocer en todo momento el estado de sus Indias, facilitándole la toma de decisiones. Si bien la opinión del Consejo no era vinculante en ningún momento, normalmente el monarca resolvía aceptando el parecer de su Consejo<sup>31</sup>, de manera que dicho órgano colegiado tenía un papel de primer orden en cuanto al gobierno y administración de aquellos vastos territorios. Cuestión que más adelante abordaremos a través de una serie de estadísticas que hemos obtenido del estudio de cientos de consultas remitidas a los reyes durante los siglos XVI y XVII y por supuesto de las enviadas a Felipe V.

Derivado de ese deber de asesorar al monarca, el Consejo era uno de los órganos que participaba en la elaboración del ordenamiento jurídico indiano. Ciertamente la potestad de legislar pertenecía únicamente al monarca<sup>32</sup>, pero por atribución delegada podía preparar disposiciones de carácter general o de vigencia general, tales como pragmáticas, decretos u ordenanzas; así mismo podía dictar disposiciones de gobierno como provisiones o mandamientos<sup>33</sup>.

Tal y como sucedía en el resto de los consejos de la monarquía, todas las disposiciones debían contar con la sanción real, distinguiéndose unas de otras según las cláusulas de estilo utilizadas, las firmas de los consejeros y

---

<sup>30</sup> Leyes Nuevas de 1542, 3.

<sup>31</sup> En el apartado de los resultados analizaremos los datos que nos ha arrojado el análisis realizado a numerosas consultas que el Consejo remitía al monarca y la decisión que éste tomaba al respecto.

<sup>32</sup> Vid. S. de Dios, *El Consejo Real de Castilla...*, p. 349.

<sup>33</sup> ...y para la buena gobernación de ellas, y administración de justicia, pueda ordenar, y hacer, con consulta nuestra, las Leyes, Pragmáticas, Ordenanzas, y Provisiones generales y particulares, que por tiempo para el bien de aquella Republica convinieren: y asimismo ver, y examinar, para que Nos las aprobemos, y mandemos guardar, cualesquier ordenanzas, constituciones, y otros estatutos que hicieren los Prelados, Capítulos, y Cabildos, y Conventos de las Religiones, y los nuestros virreyes, Audiencias, consejos y otras comunidades de las Indias: en las cuales, como dicho es, y en todos los demás Reinos y Señoríos nuestros, en las cosas y negocios de Indias, y dependientes de ellas, el dicho nuestro Consejo sea obedecido y acatado, así como lo son los otros nuestros consejos en lo perteneciente á ellos, y que sus provisiones y mandamientos sean en todo y por todo cumplidos y obedecidos en todas partes, y en estos Reinos, y en aquellos, y por todas y cualesquier personas á quien fueren dirigidos. Ordenanza 2 de 1636. Recop. Indias 2.2.2.

el refrendo de los secretarios<sup>34</sup>. Las materias que regulaban dichas disposiciones fueron tan amplias como los propios asuntos que le competían al Consejo de ahí la dificultad de sistematizar su contenido<sup>35</sup>.

Además de la preparación de la normativa regia, el Consejo de Indias tenía la competencia de realizar interpretaciones a normas en cuestiones controvertidas o poner fin a una situación confusa. Dicha interpretación generalmente se hacía a petición de parte interesada, ya se tratase de particulares, oficiales u órganos colegiados<sup>36</sup>.

Entre las materias que el Consejo debía conocer con mayor detalle estaba todo lo relacionado con el buen tratamiento a los indios. En efecto, desde los inicios de la conquista y colonización de los nuevos territorios fue una constante por parte de los monarcas dictar una copiosa legislación en búsqueda de la conversión y el buen trato a los indios. Sobre esta misma temática ocupaban un papel fundamental en el trabajo diario del Consejo la regulación de los repartimientos y encomiendas de indios<sup>37</sup>.

Los asuntos relacionados con nuevos descubrimientos, colonización, fundación de nuevos distritos fueron temas recurrentes sobre todo durante todo el siglo XVI y los primeros años del XVII, así como la creación de las audiencias y chancillerías, los virreinos, las gobernaciones, los corregimientos, alcaldías, etcétera.

Se incluía dentro de la gobernación temporal de las Indias la concesión de gracias o mercedes que el monarca otorgaba a sus súbditos. Se trataba de aquellos asuntos que implicaban la excepción a la aplicación de una ley como lo era la concesión de dispensas legales o el perdón de los condenados. También incluía el reparto por parte del monarca de las rentas y del patrimonio de la corona en forma de oficios, tenencias, señoríos o

---

<sup>34</sup> Vid. S. de Dios, *El Consejo Real de Castilla...*, p. 350.

<sup>35</sup> A. García-Gallo afirmaba que ese casuismo daba lugar a designar las diferentes disposiciones jurídicas según las manifestaciones de la actividad ordenadora del rey y del Consejo. Por lo que se puede hablar de cartas, provisiones, cédulas sobre gobernación, títulos de nombramiento o concesión de oficios; la comisión para realizar funciones determinadas de carácter no ordinario; donación de villas o de tierras, exención o concesión de privilegios, otorgamiento de títulos a ciudades, licencias para pasar a Indias, para sacar cosas vedadas por la legislación general, para comerciar con el Nuevo Mundo; sobre cualquier materia de navegación; de salvaguarda de encomienda, de seguro de tregua, de salvoconducto o guía de personas y ganados, de hidalguía, de concesión de títulos nobiliarios y armas; de encomienda de indios; de franquicia de tributos o de limosnas; de perdón de delitos; de emancipación o legitimación de hijos, exención de tutela, constitución de mayorazgos. Vid. A. García-Gallo, "La ley en Indias...", pp. 657-58.

<sup>36</sup> Vid. S. de Dios, *El Consejo Real de Castilla...*, p. 359.

<sup>37</sup> El libro sexto de la Recopilación de Indias existen más de 561 disposiciones relacionadas con el tratamiento y organización de los indios.

mercedes en dinero<sup>38</sup>. Justamente estas competencias de gracia le correspondieron en todo momento al Consejo, con excepción de aquellos períodos en los que se delegaba estas competencias de gracia y merced a la Cámara de Indias.

Uno de los más importantes relatores del Consejo de Indias, Antonio de León Pinelo, elaboró una *Relación de los despachos que tocan distintamente a los consejos Real y de la Cámara de Indias* en donde precisó con detalle las competencias de ambos organismos indianos. No es nuestra intención reproducirla nuevamente<sup>39</sup>, sin embargo, creemos que será de gran utilidad conocer con cierto detalle algunas competencias a fin de tener una idea más global del volumen de trabajo al que estaba dicho órgano colegiado.

Según relataba Pinelo a la Cámara de Indias le correspondía en exclusiva la provisión de todos los cargos, oficios, prelacías, prebendas y beneficios que requerían título o cédula real. Provisión de los títulos de virrey, capitán general y presidente. Las mercedes perpetuas de títulos, oficios, rentas y otras cosas. Las mercedes ordinarias y extraordinarias que se hacían a las viudas de los oficiales y ministros del Consejo, de la Casa de Contratación y de las Indias en cualquier género y titulación que sean. La provisión de las secretarías del Consejo de Indias. Las ayudas de costa que se daban por servicio o por ocupaciones particulares de comisiones para tomar residencias o cosas semejantes y a los que traen avisos de haber llegado los galeones o flotas. Conceder jubilaciones a los ministros que lo solicitaban. Prestar dinero a ministros y prelados a cuenta de sus salarios y rentas. Licencias a los ministros y oficiales para contraer matrimonio en sus distritos o para casa a sus hijos. Podía imponer multas. Admitir renunciaciones de oficios no renunciables. Mandar se reciba información de servicios de un pretendiente a una plaza. Conceder suplemento de edad para ser escribano o para otros oficios que requieran una mayor edad. Facultades para traspasar oficios de una persona o a otra y para renunciarlos. Dar licencias para pasar a Indias y a prebendados y ministros venir a España.

En materia de real patronato era competencia de la Cámara la distribución de obras pías. La asignación de limosnas que se daban en iglesias, monasterios y hospitales, y las ordinarias del vino y azufre. Expedición de cédulas que se daban a los obispos para se les suplieran los diezmos a quinientos mil maravedís. La distribución de vacantes de iglesias entre ellas los prelados sucesorios y los ejecutoriales de los arzobispos y obispos, entre otros muchos asuntos relacionados con esta materia.

---

<sup>38</sup> Vid. S. de Dios, *El Consejo Real...*, p. 342, nota 10.

<sup>39</sup> Ha sido transcrita por J. A. Escudero. "La creación del Consejo de...", pp. 651-57.

También la Cámara, y en algunos momentos el Consejo, tuvo atribuciones para fundar mayorazgos y para gravarlos o subrogar bienes. Conceder encomiendas, repartimientos, pensiones y rentas de indios y tributos de ellos. Conocer asuntos relacionados con legitimación de padres a hijos. Otorgar a los virreyes facultades para encomendar indios. Licencias para traer negros con espadas. Licencias para plantar o sembrar y beneficiar algún fruto. Privilegios para utilizar privativamente ingenios o máquinas. Licencias para arrendar obrajes y encomiendas. Prórrogas para encomiendas y confirmaciones. Licencias a indios para traer armas, andar a caballo y vestir como españoles. Conceder privilegios, preeminencias e hidalguías. Dar exenciones a ciudades para no pagar almojarifazgo de ciertos géneros o por algún tiempo. Despachar comisiones reales para el conocimiento de los pleitos de mil quinientas. Conceder a las ciudades el cobro de penas de cámara. Perdonar delitos y otorgar indultos por nacimientos de príncipes o por otras causas. Pedir informes de todo aquello le toque a su resolución. Licencias para pasar a Indias. En materia de hacienda podía aprobar gastos hechos de la real hacienda. Señalar fianza para el ejercicio de un oficio. Ordenar por cédula real que el fiscal del Consejo de Indias ponga demanda o siga pleito sobre cosas que toquen a la Cámara y que fenecidos en el Consejo se dé noticia a la Cámara de lo que saliere.

Empero, el propio Pinelo de manera privativa relataba aquellos asuntos que eran competencia específica del Consejo Indias, entre ellos, asuntos relacionados con lo eclesiástico, gobierno de la iglesia, prelados y ministros de ellos. Fundación de iglesias y monasterios. Erecciones y fundaciones de fábricas, rentas de las religiones y bulas apostólicas. Estudios universitarios, colegios, seminarios, sus rentas y privilegios. Conocimiento de todo el correo proveniente de autoridades indianas. Conocimiento de todos los fiades y títulos de escribanos reales con las cédulas de examen. Títulos de oficios vendibles y renunciables. Cédulas para que los casados de España fueran enviados a la Indias o para traer bienes de difuntos. Todo lo relacionado con preeminencias, cortesías, concursos de lugares y ceremonias. Confirmaciones de encomiendas. Capitulaciones para descubrimiento y poblaciones. Expedición de todas las cédulas generales sobre cualquier materia porque siempre tocan a gobierno<sup>40</sup>.

Otro conjunto de materias que conocía el Consejo eran aquellas que tenían relación con su propia organización, tales como la inspección del trabajo de algunos de sus oficiales como relatores, contadores, receptor, etcétera. También tenían que prestar asesoría al Consejo de Cruzada cuando

---

<sup>40</sup> Ibídem, pp. 650-51.

se reuniera para conocer asuntos de la Santa Cruzada en Indias<sup>41</sup>. Debían contar con un Archivo en donde custodiar no sólo la documentación emitida por dicho órgano indiano<sup>42</sup>, sino también todos los papeles relacionados con la historia de las Indias<sup>43</sup>. También debían nombrar a juez para que realizara todas las cobranzas de condenaciones y multas que le correspondían al Consejo<sup>44</sup>.

El conocimiento del comercio y de navegación relacionada con aquellos territorios ocupó un lugar muy importante dentro de las competencias del Consejo. Si bien en principio ambas materias estaban dirigidas por la Casa de la Contratación, ésta también dependía de la autoridad sevillana, ejecutiva de Consejo de Indias, al cual desde 1524 le correspondió la dirección superior de ambos asuntos. De manera que en la mayor parte de las decisiones tomadas por la Casa de Contratación, como lo fue la elección de navíos que debían componer la flota de Indias<sup>45</sup>. También debía remitir al Consejo un aviso de la salida de armada y flotas, especificando los pasajeros, sus lugares de destino y licencias, siendo además el Consejo de Indias el órgano encargado de la publicación de las flotas y la elección de capitanes y almirantes<sup>46</sup>.

En el caso del comercio, la atención dada en las diversas consultas remitidas al monarca fueron muy importantes, especialmente desde el momento en que las flotas que venía cargadas con metales y productos de Indias se veían amenazadas por el corso y la piratería<sup>47</sup>. El comercio entre España y las Indias era muy variado, casi todas las cosas que se importaban

---

<sup>41</sup> Recop. Indias 2.3.21.

<sup>42</sup> Ordenanzas 64 a 67 de 1636. Recop. Indias 2.2.67-70.

<sup>43</sup> Ordenanza 234 de 1636. Recop. Indias 2.12.1.

<sup>44</sup> Recop. Indias 2.3.23.

<sup>45</sup> Vid. J. Cervera Pery, *La Casa de la Contratación...*, p. 72.

<sup>46</sup> Según establecía la Recopilación de Indias cada año deberá salir para Indias dos flotas y una armada real de escolta. Una debía dirigirse a Nueva España y la otra a Tierra Firme. Recop. Indias 9.30.1.

<sup>47</sup> *Todos los despachos tocantes al apresto y despacho de las Armadas de la guarda de la Carrera de las Indias, y de las Flotas de Tierra Firme, y de los Navíos, y otros Baxeles, que hubieren de ir en conserva, ó sueltos, y de aviso, ó en otra manera, á las Provincias de Tierra Firme, ó Puertos de ellas: y la correspondencia que para todo ello se ha de tener con los nuestros Presidente, y jueces Oficiales de la Casa de la Contratación de Sevilla, y con los Generales, Almirantes, Y otros cualesquier Ministros, y personas, han de correr por mano del secretario, á cuyo cargo estuvieren los negocios; y materias del Perú. Y por mano del secretario de la Nueva España todo lo que en la misma forma tocara á las Flotas, y á todos los Navíos que fueren á las Provincias de la dicha Nueva España, y á la de Honduras, é Islas de su distrito y los despachos de la Cruzada, que tocaren á las Indias, refrendarán por el mismo orden los dos secretarios, cada uno los que tocaren á su distrito.* Ordenanza 116 de 1636. Recop. Indias 2.6.3.



a las Indias no se producían allí y algunas mercancías requerían licencias para su exportación como los metales preciosos labrados, los animales de cría, las armas y los esclavos negros, entre otros muchos productos<sup>48</sup>. Con el tiempo se logró monopolizar el comercio a Indias desde la ciudad de Sevilla, lo que les permitió influir en las políticas legislativas relativas a la restricción de producción de varios productos en las Indias, por lo menos en lo que la metrópoli podía proveer, y si no la desarraigaban por completo, al menos la encarecían con un cobro excesivo de impuestos<sup>49</sup>.

En principio los asuntos de navegación se despachaban de manera independiente a los de comercio. Tras diez años de funcionamiento del Consejo de Indias y debido al ensanche de las posesiones españolas en las Indias la navegación cobró carta de naturaleza. Desde ese momento todo lo relacionado con las flotas y la armada de Indias quedó bajo el conocimiento del Consejo de Indias<sup>50</sup>.

Durante el siglo XVIII Fernando VI con la finalidad de distinguir aquellos asuntos que quedaban fuera del conocimiento del Consejo de Indias expidió un real decreto en mayo de 1747 en el que taxativamente señalaba aquellos asuntos que debían entenderse tanto de materia de comercio, como de navegación. Así por ejemplo reconocía que debía entenderse por asuntos de comercio todo aquello relacionado con *la salida y despacho de flotas, azogues y registros, celebración de ferias, ventas, cambios y demás partes peculiares de esta clase, y el tráfico recíproco de los simples y manufacturas debía entenderse como materia de comercio*. En cambio la navegación comprendía *el avío y despacho de todos los navíos destinados en la carrera de Indias, sea para el transporte de caudales, frutos y cualesquiera efectos; conserva de flotas, galeones y otras expediciones, o con registros particulares o para avisos o cualquiera otro motivo o bien del comercio de cualquiera individuo dentro o fuera de él*<sup>51</sup>.

Otro bloque de competencias, a las que Pérez Prendes denominaba “científicas”, estaban relacionadas con el conocimiento de la geografía, historia general y natural de esos territorios<sup>52</sup>. Que si bien en principio la Corona no buscaba el fomento de la investigación americanista sólo por

---

<sup>48</sup> Vid. E. Schäfer, *El Consejo Real...*, t. 2, p. 335.

<sup>49</sup> *Ibíd.*, pp. 337-38.

<sup>50</sup> Para el análisis de este tema sigue siendo fundamental la obra de C. H. Haring, *Comercio y navegación entre España y las Indias*, México, 1939.

<sup>51</sup> Real decreto 18.05.1747. A.G.I., Indiferente General, 539.

<sup>52</sup> Vid. J. M. Pérez Prendes, *La Monarquía indiana...*, p. 192.

razones científicas<sup>53</sup>, sino que lo hace impulsado por sus exigencias políticas<sup>54</sup>, lo cierto es que gracias al trabajo realizado por los cronistas e historiadores indianos fue posible obtener una visión bastante completa de las Indias.

Por otro lado, con el fin de asegurar el éxito de la navegación de las Indias también era menester que el Consejo contara con los datos científicos que el cosmógrafo obtuviera de los datos remitidos por la flota, armada y navíos a Indias a fin de elaborar las tablas cosmográficas indianas<sup>55</sup>. Un ramo de la ciencia que incumbía al Consejo su inspección fue el de la instrucción pública en los territorios indianos, no tanto en su actuación práctica, sino más bien en su inspección general. Entre las materias que incluía su conocimiento se encontraba todo lo relativo a universidades<sup>56</sup>, escuelas superiores y de indios<sup>57</sup>, etcétera. También pertenecía a las tareas científicas del Consejo el conocimiento y examen de las múltiples invenciones y descubrimientos científicos<sup>58</sup>.

El Consejo también ejerció competencias de censura. Ningún libro referente a las Indias podía imprimirse en dichos territorios o en la Península sin la inspección, aprobación y licencia, de manera que no se podía introducir ningún libro o escrito sin la aprobación expresa<sup>59</sup>.

---

<sup>53</sup> En opinión de Schäfer, Carlos V tuvo poca ocasión de fomentar la ciencia teórica referente a las colonias y de dar impulso a ellas. En esta época sólo se atendió a la petición de Gonzalo Fernández de Oviedo para dotarle de una subvención a fin de realizar la geografía e historia de las Indias. Por su parte Felipe II más amante de las ciencias y de las artes y por su afán de tener un mayor control de sus territorios decidió crear en 1571 la figura del Cronista de Indias. En su reinado se expidió la obra que sería utilizada aún en el siglo XVIII “Descripción Universal de las Indias” escrita por el cronista Juan López de Velasco. Vid. E. Schäfer, *El Consejo Real...*, t. 2, pp. 405 y ss.

<sup>54</sup> Así se desprende del contenido de la Ordenanza 234 dictada por Felipe IV en 1636 (Recop. Indias 2.12.1): *...el Coronista mayor de ellas, que ha de asistir en nuestra Corte, vaya siempre escribiendo la historia general de todas sus Provincias, ó la particular de las principales de ellas, con la mayor precisión y verdad que ser pueda, averiguando las costumbres, ritos, antigüedades, hechos, y acontecimientos, con sus causas, motivos, y circunstancias que en ellos hubiere, para que de lo pasado se pueda tomar ejemplo para lo futuro, sacando, y deduciéndolo de las relaciones y papeles más auténticos y verdaderos, que se nos enviaren en el nuestro Consejo de las Indias...*

<sup>55</sup> Ordenanza 238 de 1636. Recop. Indias 2.13.1.

<sup>56</sup> Recop. Indias 1.22.1.

<sup>57</sup> Recop. Indias 1.23.11.

<sup>58</sup> Por ejemplo en materia de minería el Consejo inspeccionaba todos aquellos inventos relacionados con la minería en búsqueda de mejoras en el trabajo y mejorar la explotación de los metales. Vid. E. Schäfer, *El Consejo Real...*, t. 2, p. 431.

<sup>59</sup> Vid. C. H. Haring, *El imperio hispánico en América*, Buenos Aires, 1966, p. 116.

## b) El gobierno espiritual.

Como ya se ha mencionado, desde los inicios de la colonización la principal obligación de los monarcas castellanos fue el cuidado de los indios y su conversión a la fe católica. Para llevar a cabo la misión evangelizadora los monarcas de Castilla obtuvieron una serie de privilegios que la Santa Sede les otorgó<sup>60</sup>, convirtiéndolos en los patronos de la Iglesia en Indias<sup>61</sup>. Estos privilegios eclesiásticos además fueron aumentando a voluntad del propio monarca, de acuerdo a las amplias interpretaciones hechas a los documentos pontificios. Entre los derechos más significativos que comprendía este derecho de patronato se encontraban el envío de misioneros a Indias, el derecho de presentación de arzobispos, obispos y otros beneficios eclesiásticos, el derecho de percepción del diezmo, el pase regio, los recursos de fuerza, entre otros muchos asuntos que planteaba la recién fundada Iglesia en Indias.

A través del trabajo llevado a cabo por el Consejo fue posible implementar estos privilegios. Así, para llevar a cabo la propagación de la fe entre los naturales, dicho órgano colegiado fue el encargado de designar a las personas adecuadas para ello haciendo uso de cualquier medida que juzgare necesaria para la obtención de tal fin<sup>62</sup>.

---

<sup>60</sup> Nos referimos sobre todo a las Bulas *inter coetera* y *Eximie devotionis* de 1493, la *Universalis ecclesiae* de 1508 y la *Sacri Apostolatus munera* de 1518. Vid. J. M<sup>a</sup> García Añoveros, *La Monarquía y la Iglesia en América*, Valencia, 1991.

<sup>61</sup> Recop. Indias 1.6.1. Sobre el regio patronato indiano pueden consultarse: M. Giménez Fernández, “Las regalías mayestáticas en el Derecho Canónico Indiano”, en *Anuario de Estudios Americanos*, n<sup>o</sup> 6 (1949), pp. 799-811; M. Gutiérrez de Arce, “Regio patronato indiano (Ensayo de valoración histórico-canónico)”, en *Anuario de Estudios Americanos*, n<sup>o</sup> 11, (1954), pp. 107-168; C. Bruno, *El derecho público de la Iglesia en Indias. Estudio histórico-jurídico*, Salamanca, 1967; P. de Leturia S. I., *Relaciones entre la Santa Sede e Hispanoamérica. 1. Época del Real Patronato 1493-1800*, Caracas, 1959; A. de la Hera, *El regalismo borbónico*, Madrid, 1963, de este mismo autor “El regalismo indiano”, en *Ius canonicum*, n<sup>o</sup> 32-64 (1992), pp. 411-437 o el de Ismael Sánchez Bella, *Iglesia y Estado en la América Española*, Pamplona, 1990, entre otros muchos textos que al respecto se han publicado.

<sup>62</sup> Hasta 1552 el Consejo no intervino de manera directa en el envío de misioneros, únicamente se limitó a comunicar a la Casa de Contratación que le sufragara los gastos de desplazamiento a determinados religiosos que iban a cargo de un Comisario o Procurador o simplemente se inhibió de cursar esta orden. A partir de 1552 toda expedición misionera necesitaba la aprobación especial del Consejo. Vid. P. Borges, “El Consejo y el paso de misiones...”, p. 184.

Otra de las regalías fue el derecho de presentación<sup>63</sup>, esto es, la facultad que se atribuían los reyes para elegir prelados que ocuparan las vacantes eclesiásticas<sup>64</sup>. Si bien la concesión de 1508 fue universal, sólo se hizo mención a las iglesias mayores y no a los beneficios inferiores<sup>65</sup>. En la Concordia de 1512 se estableció que dichos beneficios fueran provistos por el obispo, previa oposición y examen de suficiencia, exigiéndose únicamente la confirmación real. Años más tarde, Carlos V facultó a los obispos para que proveyeran por sí mismos cuatro prebendas en tanto no llegaran las presentaciones reales. Pero con el tiempo las cosas cambiaron, por una real cédula de 23 de septiembre de 1567 se prohibió a los obispos el proveer beneficios eclesiásticos<sup>66</sup>. Finalmente en la Recopilación de Indias se dispuso que para todos los beneficios eclesiásticos en propiedad era menester que el rey realizara la presentación a través de su Consejo de Indias, quedando las plazas nombradas provisionalmente reservadas a los vicepatronos<sup>67</sup>. Este derecho de presentación permitía proveer a los miembros de los cabildos eclesiásticos, tales como deanes, arcedianos, maestrescuelas, canónigos, racioneros, capellanes, etc. El procedimiento era el mismo que para arzobispos y obispos, sólo que eran éstos los encargados de hacer la colación e institución canónica.

Otro beneficio eclesiástico consistió en organizar las parroquias, curatos y doctrinas. En principio los beneficios no eran perpetuos, sino amovibles, en prevención que se hiciesen eternos ministros inadecuados, y para que la situación les sirviese de cierto incentivo evangélico<sup>68</sup>.

La Corona tenía derecho al cobro del diezmo, esto es, la décima parte de los frutos recogidos por los fieles estuvo condicionada a la obligación de establecer en los nuevos dominios las iglesias y obispados necesarios para sostenerlos con la comodidad y decencia<sup>69</sup>. Si bien la recaudación estaba en

<sup>63</sup> El derecho de presentación se encuentra regulado en Recop. Indias 1.2.6.

<sup>64</sup> Ribadeneyra definía al patronato como *una potestad de nombrar o presentar en el beneficio vacante al clérigo, que se quiere promover o instituir*. Vid. *Manual Compendio de el Regio Patronato Indiano*, Madrid, 1755, Cap. 6.1.

<sup>65</sup> Vid. C. Bruno, *El derecho público...*, p. 102.

<sup>66</sup> I. Sánchez Bella, *Iglesia y Estado en la América...*, pp. 34-36.

<sup>67</sup> Recop. Indias 1, 6, 4

<sup>68</sup> A. Garrido Aranda, *Organización de la Iglesia...*, p. 174.

<sup>69</sup> Fue por la bula *Eximiae devotionis sinceritatis*, de 16 de noviembre de 1501 que los Reyes Católicos obtuvieron a perpetuidad los diezmos de las Indias con tal de "*asignar de antemano, en forma real y efectiva, por vosotros y por vuestros sucesores, de vuestros bienes y de los suyos, dote suficiente a las iglesias que en las dichas indias se hubieren de erigir, con la cual sus prelados y rectores se puedan sustentar congruentemente y llevar las cargas que incumbieren a las dichas iglesias, y ejercitar cómodamente el culto divino a*

manos de los oficiales reales, éstos debían enviar las cuentas a la Contaduría del Consejo a fin de ser revisadas.

El pase regio fue introducido por Carlos I en 1538 como una medida para evitar que se vulneraran los derechos de patronazgo, debiendo el Consejo de Indias aprobar todas las disposiciones papales antes de ser aplicadas en aquellos territorios<sup>70</sup>. En caso que alguna disposición pontificia planteara dificultades en su aplicación, era suspendido su cumplimiento y se le suplicaba al pontífice las modificaciones respectivas, aduciendo evitar que el Papa incurriera en un error por ignorar la realidad americana. Felipe II mediante una pragmática de 1569 prohibió la publicación de bulas, gracias, perdones, indultos, sin el examen previo del Consejo de Indias<sup>71</sup>.

Este derecho de pase regio también se extendió a todas aquellas disposiciones emanadas de los concilios provinciales, los cuales se celebraban, sobre todo con el fin de lograr la evangelización de los naturales. A partir de 1560 se estableció que todas las disposiciones conciliares debían ser aprobadas por el Consejo de Indias antes de su publicación e impresión, a fin de que no se incurriera en menoscabo de las facultades reales<sup>72</sup>. En este derecho de regio *placet* se incluyeron todas aquellas gracias y dispensas que el Sumo Pontífice otorgaba de manera particular a los fieles.

Para que los religiosos pudieran fundar un convento o un monasterio se requería la licencia del rey. En principio dicha autorización podían emitirla los virreyes o gobernadores, pero al crecer excesivamente el número de conventos, el monarca reservó para sí la expedición de la licencia de fundación, por lo que desde ese momento se convirtió en una competencia exclusiva para Consejo<sup>73</sup>. Así mismo, los superiores de las órdenes religiosas debían remitir al Consejo de Indias una relación de los religiosos que hubiere en las Indias y aquellos que iban a ser enviados. Los religiosos no podían pasar a las Indias sin tener previamente la cédula y beneplácito para poder pasar. Una real cédula de 1650 ordenó se recogieran aquellas

---

*honra y gloria de Dios omnipotente, y pagar los derechos episcopales...* Vid. J. M<sup>a</sup> García Añoveros, *La Monarquía y la Iglesia...*, p. 78.

<sup>70</sup> Recop. Indias 1, 9, 1.

<sup>71</sup> En opinión de Antonio Garrido la postura de Roma ante la existencia del *placet regio* fue de desatención, muchas bulas y breves pasaban a las Indias sin el trámite del Consejo de Indias. Vid. *Organización de la Iglesia...*, p. 156.

<sup>72</sup> Recop. Indias 1, 7, 1.

<sup>73</sup> Recop. Indias 1.3.1. Vid. J. M<sup>a</sup> García Añoveros, *La Monarquía y la Iglesia en América*, Valencia, 1991, pp. 92-93.

patentes recibidas en Indias que no hubieren pasado por el Consejo de Indias<sup>74</sup>.

## 2.2. El Consejo de Indias y los asuntos de justicia.

La política general de la Corona respecto al Consejo de Indias fue que se limitara en la medida de lo posible a los asuntos de gobierno, pudiendo sólo conocer aquellas materias de justicia que resultaran con mayor trascendencia. Podía avocar el conocimiento de cualquier asunto que se estuviera tramitando ante las Audiencias o cualquier otro tribunal siempre que el asunto fuere *grave y de calidad*<sup>75</sup>.

Si bien el Consejo de Indias era el máximo tribunal de Indias<sup>76</sup> sólo podía conocer en única instancia juicios relacionados con las encomiendas que implicaran tributos superiores a mil ducados<sup>77</sup>. Asimismo, era de su competencia despachar privativamente todos los juicios sobre comisos aunque se “fulminasen, sustanciasen y determinasen en cualquier parte”. Intervenia judicialmente en asuntos de comisos sobre cualquier mercancía aprehendida en todos los puertos de las Indias, ya que las mercancías decomisadas en “Tierra adentro” correspondían al conocimiento de las reales Audiencias<sup>78</sup>.

Conocía los recursos de segunda suplicación donde revisaba la decisión de los otros magistrados. Se podía interponer en aquellas sentencias dictadas en grado de revista<sup>79</sup>, siempre que el asunto fuere *grave y de calidad que a los del dicho Consejo parezca que se debe advocar a él, porque en tal caso permitimos que lo puedan hacer por Cédula nuestra*<sup>80</sup>. También podía

---

<sup>74</sup> Loc. cit.

<sup>75</sup> Ordenanza 56 de 1636. Recop. Indias 2.2.58.

<sup>76</sup> *...es nuestra merced, y queremos, que el dicho Consejo tenga la jurisdicción suprema de todas las nuestras Indias Occidentales, descubiertas, y que se descubrieren, y de los negocios que dellas resultaren, y dependieren...*, Ordenanza 2 de 1636. Recop. Indias 2.2.2.

<sup>77</sup> En la práctica estos pleitos eran sustanciados en las Audiencias indianas y cuando estaban en el momento procesal de emitir un fallo entonces se debían remitir al Consejo para que éste dictara la sentencia correspondiente. Recop. Indias 2.15.123-130.

<sup>78</sup> Recop. Indias , 8.17.4.

<sup>79</sup> El grado de revista era un recurso de súplica que se entablaba ante el mismo Tribunal colegiado que había fallado antes, al cual se pedía que se avocara nuevamente el conocimiento de la causa. Vid. R. Zorraquín Becú, *La organización judicial argentina en el período hispánico*, Buenos Aires, 1981, p. 175.

<sup>80</sup> Ordenanza 56 de 1636. Recop. Indias 2.2.58.

conocer asuntos por vía de suplicación sin necesidad de autorización especial en aquellos casos en los que el pleito fuere de tanta cantidad e importancia que el valor de la propiedad superara los seis mil pesos<sup>81</sup> o cuando se tratara de cuentas tomadas por las contadurías de Indias y sustanciadas en vista y revista en la Audiencia<sup>82</sup>.

En segunda instancia conocía las apelaciones de juicios civiles que se hubieren sustanciado en la Casa de la Contratación cuya cuantía superase los seiscientos mil maravedís y que así lo conviniesen las partes litigantes, de lo contrario, el asunto podría continuar en la Casa<sup>83</sup>. Eran de su competencia las apelaciones de sentencias dictadas por los jueces de registro de las Islas Canarias que excedieran de cuarenta mil maravedís y que llevaran consigo la pena de muerte, mutilación de miembro u otra pena corporal o destierro perpetuo<sup>84</sup>.

Era el único Tribunal por donde se debían tramitar los juicios de residencia y las visitas realizadas a aquellos cargos proveídos a través de consulta del Consejo o de la Cámara de Indias como fue el caso de los virreyes, gobernadores, corregidores, alcaldes mayores, oficiales reales, oidores, presidentes, virreyes y otros cualesquier ministros aunque fueran militares<sup>85</sup>. Una real cédula de 1639 ordenó a las Audiencias a no entrometerse en conocer, ver y determinar residencia alguna de gobernadores, corregidores, alcaldes mayores y otras justicias proveídas por el rey, pues era una competencia exclusiva del Consejo<sup>86</sup>.

Además, desde el año de 1551 en el Consejo de Indias también se sustanció el recurso de fuerza<sup>87</sup>, esto es, las apelaciones que se interponían

---

<sup>81</sup> Recop. Indias 5.13.1.

<sup>82</sup> Recop. Indias 8.1.36.

<sup>83</sup> Recop. Indias 5.12.1.

<sup>84</sup> Recop. Indias 5.12.4.

<sup>85</sup> ...y que el dicho nuestro Consejo solamente conozca de las visitas y residencias de los Virreyes, Presidentes, Oidores, y Oficiales de las nuestras Audiencias, Y Contadores, y Oficiales de los Tribunales de Cuentas, de los Oficiales de Hacienda, y de las de los gobernadores proveídos por el Consejo con títulos nuestros... y de todas las residencias, y visitas de Generales, Almirantes, Capitanes, Maestres de Raciones, y otros: y de todos los demás Oficiales y Ministros de las Armadas, y Flotas de las Indias... Ordenanza 56 de 1636. Recop. Indias 2.2.58. También en Recop. Indias 5.5.14.

<sup>86</sup> La sustanciación del juicio de residencia es analizada ampliamente por J. M<sup>a</sup> Mariluz Urquijo, *Ensayo sobre los juicios de residencia indianos*, Sevilla, 1952, pp. 233 y ss.

<sup>87</sup> *Mandamos que en conformidad de las órdenes referidas, y de los que ahora hemos resuelto, conozca el dicho nuestro Consejo de Indias de todas las causas y negocios de fuerzas, que se ofrecieren en estos Reinos tocantes a ellas, y que pueda dar, y de las Cédulas, y Provisiones, Autos y Mandamientos, que convenga y sean necesarios, para que los Jueces Eclesiásticos no procedan, y se desistan de las dichas causas; y para el cumplimiento de lo que así proveyere según y por los medios y vías que convinieren, de*

ante la justicia real por aquellos que se sentían perjudicados por las decisiones de los tribunales eclesiásticos con el fin que examinaran si había existido algún vicio en la resolución eclesiástica, y en su caso revocarla<sup>88</sup>.

Cuando el Consejo entendía de pleitos civiles o de justicia entre partes y en las causas criminales que llegaban ante la misma, procedía como cualquier otro tribunal de justicia, esto es, ajustándose estrictamente a la ley y aplicando esta. Nadie ajeno a ella intervenía en sus deliberaciones, y ni siquiera el propio monarca interfería en estas<sup>89</sup>.

Relacionado con la administración de justicia, correspondía al Consejo velar por su correcto funcionamiento, para lo cual resolvía las distintas cuestiones que le planteaban, así como los conflictos de competencias y de jurisdicción que surgían entre diversas instancias indianas<sup>90</sup>. Empero, eran tanto y tan variados los asuntos que conocía el Consejo en materia de justicia que R. García prefirió analizarlos desde la perspectiva del conocimiento que debían tener los consejeros letrados que formaban parte de la Sala de Justicia. Entre dichos saberes destacaban los de jurisprudencia civil, derecho público y de gentes, instrucción de comercio marítimo y terrestre; jurisprudencia mercantil, presas, comisos, derecho internacional, derecho canónico, etc.<sup>91</sup> Por tanto, es posible que en dicho órgano indiano se sustanciara los más importantes asuntos judiciales relacionados con las Indias.

En el siglo XVIII una *Representación* que el Consejo envió al monarca señaló que eran rarísimos los casos de segundas suplicaciones que el Consejo veía sobre todo porque las leyes establecían que se abstuviera de admitir demandas y pleitos entre particulares *por ser su instituto entender en sólo el puro gobierno de las Indias en el celo y gobierno de la real hacienda, en las visitas que se enviaren a las Indias, en las residencias de*

---

*manera que tenga cumplido efecto lo que así ordenare y proveyere, usando en esta parte de el mismo poder y facultad, que para ello tienen los demás consejos, que conocen de fuerzas.* Ordenanza 4 de 1636. Recop. Indias 2.2.4. Sobre el recurso de fuerza puede verse J. de Covarrubias, *Máximas sobre recursos de fuerza y protección, con el método de introducirlos en los tribunales*, Madrid, 1786; C. Raull, *Defensa de las regalías. Primera Parte*, Barcelona, 1852; M. E. Suárez, “El regalismo a través de los recursos de fuerza en España e Indias”, en *Anales de la Universidad de El Salvador*, Buenos Aires, 1972; A. Levaggi, “Los recursos de fuerza en el Derecho indiano”, en *Anuario Mexicano de Historia del Derecho*, n° 4 (1992), pp. 117-138.

<sup>88</sup> Vid. C. Bruno, *El derecho público...*, p. 222.

<sup>89</sup> Vid. A. García-Gallo, “El Consejo y los secretarios...”, p. 783.

<sup>90</sup> Vid. R. D. García Pérez, *El Consejo de Indias...*, p. 368.

<sup>91</sup> *Ibidem*, p. 369.



*virreyes, presidentes, oficiales de la real hacienda y demás que en dichas ordenanzas se contiene*<sup>92</sup>.

### 2.3. El Consejo de Indias y la hacienda indiana.

Desde su fundación Carlos V concedió al Consejo la suprema dirección de la hacienda indiana<sup>93</sup>. Varios fueron los asuntos en los que el Consejo de Indias intervino pero pueden distinguirse en opinión de Sánchez Bella dos, por un lado el velar por el desarrollo y fomento de la hacienda real y la otra dirigida a asegurar la pureza de la administración de los oficiales reales<sup>94</sup>.

Para lograr el fomento de la hacienda real los miembros del Consejo debían reunirse de ordinario al menos una vez a la semana para analizar y estudiar medidas tendentes a dicho fin, así lo establecieron tanto las ordenanzas de 1571<sup>95</sup>, como las de 1636<sup>96</sup>. Por su parte, de manera especial el fiscal del Consejo tenía por obligación defender y promover todo lo referente al patrimonio y hacienda real<sup>97</sup>.

Una importante competencia lo fue el nombramiento de los oficiales reales, pues en última instancia eran ellos los responsables del buen recaudo de las cuentas reales. Para ello, el Consejo debía remitir a través de una consulta dirigida al monarca una terna con el nombre y los méritos de los candidatos a fin de que éste pudiera hacer la mejor elección. En caso que alguna de las plazas de oficiales reales en aquellos territorios ultramarinos quedase vacante por muerte, renuncia o remoción de su titular, se concedió

---

<sup>92</sup> *Representación exponiendo las reglas...* B.P.R. Mss. II/844. Este mismo informe indicaba que cuando algún vasallo acudía a interponer una demanda al Consejo, sobre todo si se trataba de algún pleito entre partes, el Consejo no la admitía señalándole que para ello el monarca *les tenía destinadas y pagadas en Indias las dichas Audiencias*.

<sup>93</sup> Para la elaboración del presente epígrafe han sido de gran utilidad los textos de Ismael Sánchez Bella, “El gobierno del Perú 1556-1564”, en *Anuario de Estudios Americanos*, n° 17 (1960), pp. 407-524, “El Consejo y la hacienda...” y *La organización financiera de las Indias...*

<sup>94</sup> *Ibíd.*, p. 89.

<sup>95</sup> Ordenanza 9 de 1571. *Item, encargamos a los del nuestro consejo de las Indias, que los miércoles de cada semana señaladamente, y las mas veces que pudieren, platiquen, y se ocupen en pensar y saber, en que cosas nos podemos ser servido, y nuestra hacienda aprovechada en las Indias, proveyendo de tales medios y personas para ministros y oficiales della, que siempre sea acrecentada, y en ella haya el buen recaudo y guarda que conviene.*

<sup>96</sup> Ordenanza 10 de 1636. Recop. Indias 2.2.10.

<sup>97</sup> Ordenanza 51 de 1571 y 98 de 1636. Recop. Indias 2.5.1.

a los virreyes, gobernadores o Audiencias de las Indias la posibilidad de nombrar a oficiales provisionales<sup>98</sup> en espera del nombramiento del oficial titular.

También era competencia del Consejo la fiscalización del trabajo de los oficiales reales. Para ejercer esta atribución seguía dos vertientes, la primera de ellas consistía en realizar visitas<sup>99</sup> a los distritos fiscales a modo de revisar el trabajo de los oficiales reales<sup>100</sup>; la segunda se basaba en una revisión de las cuentas<sup>101</sup> que remitían primero las cajas reales<sup>102</sup> y posteriormente las liquidaciones y finiquitos que enviaban los Tribunales de Cuentas<sup>103</sup>. Esta revisión era realizada por la Contaduría del propio Consejo de Indias a quien se le debía enviar cada año un tiento de cuenta, es decir, un resumen de lo recibido y lo gastado, y cada tres años una cuenta completa<sup>104</sup>.

Una de las misiones más importantes del Consejo fue, como ya hemos mencionado líneas atrás, confirmar todas las disposiciones jurídicas con

---

<sup>98</sup> *En la vacante de oficial real por muerte o privación o otra cualquier causa provea el Virrey, Presidente o Audiencia si gobernare con las calidades referidas en la ley 47, tit. 2, lib.3 el oficio, entre tanto que Nos le proveemos en quien nuestra voluntad fuere.* Recop. Indias 8.4.24.

<sup>99</sup> El Consejo comisionaba contadores especiales encargados de visitar las cajas de una determinada región y tomar las cuentas *in situ*, otras veces eran los visitadores generales quienes intervenían y revisaban la contabilidad de las cajas reales. Vid. E. Schäfer, *El Consejo Real...*, t. 2, p. 173.

<sup>100</sup> Ordenanza 56 de 1636. Recop. Indias 2.2.58.

<sup>101</sup> Por real Provisión de 04.06.1543 se estableció que los oficiales reales debían enviar cada año un tiento y cada tres años las cuentas definitivas: *...los nuestros oficiales de todas las nuestras Indias, Islas y Tierra-Firme del Mar Océano, nos envíen en fin de cada un año un tiento de cuenta de su cargo, de todo lo que ovieren recibido y cobrado aquel año, así de nuestros quintos y rentas de almojarifazgo, como de los tributos que recibieren de los indios que estuvieren en nuestra cabeza, y de las penas de cámara, y otras cualesquier rentas y derechos nuestros, poniendo muy clara y especificadamente lo que de cada cosa hay y queda en nuestra arca de las tres llaves... y que de tres en tres años envíen a la casa de la contratación de Sevilla la cuenta por entero y particular de todo lo que fuere a su cargo de aquellos tres años, poniendo en ellos el cargo y dacta y resolución dello, porque de lo contrario nos ternemos por deservidos, y lo mandaremos castigar con todo rigor; y encargamos y mandamos a los nuestros presidentes e oidores de las dichas nuestras audiencias, que tengan muy particular cuidado de que los dichos nuestros oficiales que residieren en las islas y provincias de sus distritos, hagan y cumplan todo lo de suso contenido, y de nos avisar de los que no lo hicieren...*, Leyes Nuevas 1543, 6.

<sup>102</sup> La primera caja real se fundó en la isla Española, a la que siguieron la creación de otras más. En los últimos años del siglo XVII existían más de 50 cajas reales distribuidas en toda la América Hispana. Vid. E. Schäfer, *El Consejo Real...*, t. 2, p. 169.

<sup>103</sup> En 1605 se crearon los primeros tres Tribunales de Cuentas en México, Lima y Santa Fe encargados de tomar cuentas de las rentas y derechos reales. Recop. Indias 8.1.1.

<sup>104</sup> J. M<sup>a</sup>, Mariluz Urquijo, "El Tribunal Mayor y Audiencia Real de Cuentas de Buenos Aires, en *Revista Española de Control Externo*, vol. 2, n° 4 (2000), p. 130.

aplicación en las Indias, tanto aquellas emanadas por autoridades radicadas en aquellos territorios<sup>105</sup>, como las que remitían a las Indias los otros consejos de la monarquía<sup>106</sup>. En este sentido el número de cédulas reales, instrucciones u ordenanzas relativas a esta materia hacendaria se multiplicaron de modo asombroso desde el inicio de la colonización<sup>107</sup>.

Sin embargo, todas estas competencias en materia hacendaria fueron arrancadas del conocimiento del Consejo de Indias en 1556 cuando Felipe II decidió unir toda su hacienda en una sola. A través de esta decisión, el monarca confió al Consejo de Hacienda la administración de todos los fondos reales, incluso los ingresos y gastos de Indias<sup>108</sup>. Situación que provocó en opinión de Schäfer la reducción de la autonomía administrativa del Consejo de Indias, ya que desde entonces, todos los gastos para pertrechar flotas o para la administración colonial tenían que ser aprobados a través de una orden real librada por dicho órgano hacendario<sup>109</sup>.

A partir de entonces fueron varios los momentos en los que este Consejo de Hacienda intervino de manera directa o indirecta en la administración de los ingresos y gastos de las Indias, situación a la que continuamente se oponía el Consejo de Indias, sin recibir una resolución favorable. En 1595 se creó una Junta de Hacienda de Indias que debería funcionar en el seno del Consejo, con la única misión de procurar el aumento de ingresos en las Indias<sup>110</sup>. Lewis Hanke publicó un documento que contiene, entre otras cuestiones, las materias que conocía dicha Junta de Hacienda destacando además de materia de comercio y de organización de la Casa de Contratación, también se discutieron asuntos sobre la salida de la flota, envío de artillería a las Indias. También se analizaron cuestiones relacionadas con el aumento de la real hacienda a partir de potenciar la minería, el repartimiento de indios y el pago de sus servicios personales, administración del azogue, arrendamiento de salinas, fraudes en la fundiciones de metales preciosos, aumento del cobro de alcabalas, diezmos y expolios en las Iglesias indianas, comercio entre México y Filipinas,

---

<sup>105</sup> Recop. Indias 2.1.34.

<sup>106</sup> Recop. Indias 2.1.39.

<sup>107</sup> Vid. I. Sánchez Bella, "El Consejo y la hacienda...", p. 143. A modo de ejemplo en la Recopilación de Indias se recogieron más de 767 leyes relacionadas con la real hacienda indiana que integraron el libro octavo.

<sup>108</sup> Vid. I. Sánchez Bella, "El Consejo y la hacienda...", p. 150.

<sup>109</sup> Vid. E. Schäfer, *El Consejo Real...*, t. 1, pp. 116-17.

<sup>110</sup> Vid. I. Sánchez Bella, *La organización financiera...*, p. 90.

posibles ingresos a partir de la exportación de productos como caña, grana, jabón, los asientos de negros, etcétera<sup>111</sup>.

En 1600, junto a la creación de la Cámara de Indias, Felipe III decidió crear nuevamente una Junta de Hacienda compuesta de miembros del Consejo de Indias y de Hacienda, pero de la que lamentablemente apenas se conoce detalles de sus competencias. Aún y cuando en todo el siglo XVII fueron continuas la creación de juntas *ad hoc*, el Consejo continuó realizando asuntos en materia hacendaria, prosiguiendo por ejemplo con su labor de fiscalización de los oficiales indianos a través del análisis de sus cuentas por medio de la Contaduría Mayor del Consejo<sup>112</sup>.

En opinión de García-Gallo en el siglo XVIII además de la recaudación de impuestos y los pagos al Estado, se incluyó como materia de hacienda el fomento de la economía<sup>113</sup>. En 1747 Fernando VI señaló taxativamente aquellas materias que debían comprender la hacienda indiana, entre ellas, *los asuntos de su manejo, recaudación, distribución, estado, consistencia, aumento, o disminución de rentas, arriendos, subarriendos, administración, y de cada ramo de ella en particular, asimismo la disposición de las remesas de su producto a estos Reinos*<sup>114</sup>.

#### **2.4. El Consejo de Indias y los asuntos de guerra relacionados con las Indias.**

Durante el siglo XVI correspondió al Consejo de las Indias entender todo lo relativo a cuestiones técnicamente militares o en asuntos relacionados con el tráfico de ultramar en donde desempeñaba labores de conducción y de supervisión. Básicamente en este siglo su intervención se dirigió a conocer la evolución del tráfico y a consultar con el monarca sobre las políticas generales relativas a la navegación de las Indias<sup>115</sup>.

Con la consolidación del sistema de flotas en los primeros años del reinado de Felipe II algunas competencias hasta entonces ejercidas por la Casa de la Contratación pasaron al conocimiento del Consejo como lo

---

<sup>111</sup> Hanke, L., “An unpublished document on the Junta de Hacienda de Indias”, en *Revista de Indias*, nº 20 (1960), p. 137 y ss.

<sup>112</sup> Vid. I. Sánchez Bella, *La organización financiera...*, p. 90-91.

<sup>113</sup> Vid. A. García-Gallo, “La división de competencias...”, p. 298.

<sup>114</sup> Real decreto 18.05.1747. A.G.I., Indiferente General, 539.

<sup>115</sup> Vid. J. A. Caballero Juárez, *El régimen jurídico de las armadas de la carrera de Indias. Siglos XVI y XVII*, México, 1997, p. 81.

fueron la presentación de los oficiales y mandos encargados de organizar y dirigir las formaciones indianas. Así mismo debía conocer las visitas y residencias de los generales y demás oficiales que formaban parte de las milicias indianas.

Pero todos estos asuntos militares y navales desde 1600 estuvieron reservados a la Junta de guerra de Indias integrada por el presidente, tres consejeros de Indias y cuatro del Consejo de guerra de Castilla<sup>116</sup>. La creación de esta Junta provocó una pérdida del poder que hasta entonces ostentaba el Consejo de Indias.

Entre los asuntos que fueron sustraídos del conocimiento del Consejo a favor de la recién creada Junta se encontraban la provisión de oficios y cargos tocantes a la guerra de mar y tierra, así como gratificaciones por la prestación de los servicios de armas llevados a cabo en las Indias<sup>117</sup>. También le correspondía el despacho de las flotas y armadas que iban y volvían a las Indias; la emisión de las certificaciones de servicios previo conocimiento de los mismos, etcétera<sup>118</sup>. Sin embargo, en opinión de Tanzi los verdaderos asuntos militares que conocía esta Junta eran “los interlocutorios y definitivos y conclusos para terminar, y las causas en definitiva para sentenciar”, pues las demás se veían en el Consejo, de la cual era parte aquel organismo. Eran del conocimiento de la Junta las apelaciones civiles y criminales por las causas militares resueltas en América en primera y segunda instancia por los virreyes, capitanes generales o gobernadores, si el fallo era revocado, el juicio se sobreseía desde entonces, sin perjuicio de la pena cumplida<sup>119</sup>.

Lo militar sólo se consideraba originariamente como materia propia de guerra cuando se organiza con independencia de la obligación general de servicio militar; es decir, referido a la organización y actuación de las tropas profesionales del rey. Por eso, García-Gallo afirmaba que en los territorios no castellanos, las tropas se organizaban bajo las órdenes inmediatas de las Diputaciones de los Reinos, no se aludía como algo independiente de las cosas de guerra, pues era las autoridades comunes las que se ocupaban de ello. Esto sólo se hacía desde un principio en Castilla y en Indias, aunque ya

---

<sup>116</sup> Creada mediante cédula real de 25.08.1600. A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 20r-27v. Vid. J. C. Domínguez Nafra, *El Real y Supremo Consejo...*, p. 109.

<sup>117</sup> Vid. H. J. Tanzi, “La Junta de guerra...”, pp.88-89.

<sup>118</sup> Vid. C. H. Haring, *El imperio hispánico...*, p. 117.

<sup>119</sup> Vid. H. J. Tanzi, “La Junta de guerra...”, p. 89.

a fines del siglo XVI la conveniencia de unificar la acción militar llevó a considerar de un modo unitario por los monarcas las cosas de guerra<sup>120</sup>.

Las cuestiones de guerra que continuaron siendo competencia del Consejo fueron los juicios de residencias instruidos a generales, almirantes, capitanes y otros oficiales de las armadas y flotas de la Carrera de Indias, pues ellos tenían carácter político más que militar.

Desde el mismo año de creación de la Junta de guerra, el Consejo siempre buscó que el monarca reconsiderara su decisión de haberle sustraído sus competencias en materia de guerra, que si bien algunos de sus miembros formaban parte integrante, dependían ahora también de la voluntad de los miembros del Consejo de guerra y eso era lo que se pretendía evitar a toda costa; empero el monarca siempre respondía de la misma manera: «*Hágase la Junta, como lo tengo mandado, en Palacio en días y horas que no falte el Consejo, y no haya en esto más dilación, y cuando las Juntas se hubieren comenzado y se fueren continuando, podrá el Consejo representarme lo que se le ofreciere*»<sup>121</sup>.

En un documento escrito por León Pinelo se aclaraban algunas cuestiones relacionadas con las competencias que tendrían por un lado la Junta de guerra de Indias y por el otro el Consejo. En dicho documento el relator del Consejo señaló que las propuestas para ocupar cargos y oficios militares relacionados con gente de mar y de tierra<sup>122</sup> correspondía a la también recién creada Cámara de Indias. Cuando el año de 1609 por cédula de 16 de marzo se mandó extinguir la Cámara de Indias, se conservaron y aumentaron las competencias de la Junta de guerra en perjuicio del Consejo. En este documento quedaba claro que todas aquellas provisiones de oficios y cargos tocantes a la guerra de mar y de tierra quedarían bajo la responsabilidad de la mencionada Junta, mientras que aquellos oficios relacionados con la real hacienda para el pago de la gente de guerra y de los presidios debían ser provistos por el Consejo. Así mismo todas las mercedes

---

<sup>120</sup> Vid. A. García-Gallo, "La división de competencias...", pp. 765-66.

<sup>121</sup> Vid. E. Schäfer, *El Consejo Real...*, t. 1, p. 203.

<sup>122</sup> Se refería principalmente a los siguientes nombramientos: de generales, almirantes de armadas y flotas, veedores, capitanes, cabos, entretenidos y maestros de plaza, y para las Indias maeses de campo, sargentos mayores, condestables de artillería y castellanos de fuerzas, que daban ventajas y plazas muertas en amadas y presidios, que estoy y no otra cosa se halla de haber proveído, y tan sin dependencia que ni la cláusula ordinaria de ser consultados, que se ponía en las mercedes y en dichos despachos, se estiló poner en los títulos de oficios. Vid. J. A. Escudero, "Creación del Consejo de Cámara...", p. 659.

otorgadas por haber prestado servicios en la guerra y en la Carrera de Indias debían despacharse por el Consejo y no por la Junta<sup>123</sup>.

Aquellas competencias que se le habían asignado al Consejo de Indias fueron variando a lo largo de los siglos XVII y XVIII, normalmente en su perjuicio. En efecto, la subordinación de los negocios de hacienda y de guerra de toda la Monarquía a los respectivos consejos de Hacienda y guerra supuso a decir de García Gallo “la posibilidad de una acción y política coordinada por un mismo órgano rector”, lo que explicaba que el sistema tratase de generalizarse, en un doble sentido: suprimiendo o desplazando los órganos que aún se ocupan indistintamente del gobierno y de la justicia, para deslindar una cosa de otra, y reuniendo lo que afecta a uno u otra en toda la Monarquía bajo un solo órgano y dirección. Esta es la doble tarea que en lo administrativo llevan a cabo los Borbones en España<sup>124</sup>.

Pero no fue sino hasta la expedición del real decreto de 1747 cuando fueron perfilados aquellos asuntos que debían considerarse dentro de la materia de guerra, entre ellos:

*...el surtimiento de presidios, revista y subsistencia de tropa, su armamento y vestuario, noticias de su calidad, y demás partes que tocan a la inspección de ellas: el abasto de almacenes de víveres y municiones, observancia de Ordenanzas y Reglamentos generales y particulares, fortificaciones de plazas, formación de planos, provisión de empleos militares y de todos los empleados superiores y subalternos para estos manejos*<sup>125</sup>.

---

<sup>123</sup> Y continúa explicando el propio Pinelo: *De esta orden se prueba con evidencia que hasta entonces no tuvo la Junta de guerra facultad alguna para consultar oficio ni premio, i que entonces se le concedió para lo uno i lo otro. Y después, por un billete del Duque de Lerma de 13 de abril de 1617, escrito por orden de Su Majestad, se dio para que los oficios que tuviesen ocupación mixta de guerra i gobierno, se propusiesen personas a un mismo tiempo por el Consejo i por la Junta, para que se tomase más acertada resolución. Luego empeñó la Junta a consultar así plazas como premios, asistiendo con todos los del Consejo de Indias dos del de guerra, porque hasta entonces no e halla que hubiese orden para más. Después, por decreto de 10 de febrero e 1629, mandó Su Majestad que del Consejo de guerra entrasen cuatro, i que ir ausencia de los propietarios, que éstos avían de ser los nombrados por Su Majestad, supliesen los más antiguos del mismo Consejo. De que resultó que como los de guerra tienen siempre nombramientos particulares i los de Indias no, debiendo ser otros cuatro, se dio este lugar a los más antiguos i así se ha practicado i practica. Loc. Cit.*

<sup>124</sup> Vid. A. García-Gallo, “La división de competencias...”, p. 772.

<sup>125</sup> Real decreto 18.05.1747. A.G.I., Indiferente General, 539.

### **3. La asignación de competencias al Consejo de Indias entre los siglos XVI y XVII.**

Desde su fundación y hasta la muerte del último de los Austrias el Consejo de Indias sufrió una serie de modificaciones dentro de su ámbito de actuación. Si bien en sus inicios el desconocimiento de aquellos territorios y las nuevas circunstancias dieron como resultado que dicho órgano conociera prácticamente todos los asuntos relacionados con las Indias, con el tiempo los monarcas hubieron de disminuir de su ámbito de actuación el conocimiento de algunos asuntos. En otras palabras, mientras que en el reinado de Carlos V el Consejo quedó investido de las más amplias competencias en materia de gobierno, justicia, guerra y hacienda, sus descendientes hubieron de limitarle.

Por ende, en las siguientes páginas analizaremos la evolución que el Consejo sufrió respecto de sus competencias. Nos pareció conveniente dividir el reinado de la monarquía de los Austrias en dos partes. Por un lado estableceremos aquellas atribuciones que tanto el Emperador como su hijo concedieron a dicho órgano colegiado. Y por el otro indicaremos cómo dichas competencias fueron diluyéndose y atribuyéndose a otros órganos de la administración central de la Monarquía.

#### **3.1. Las competencias del Consejo de Indias durante los reinados de Carlos V y Felipe II.**

La primera disposición jurídica que estableció las competencias que debía desarrollar el Consejo de Indias fue la real cédula que el Emperador dirigió al licenciado Hernán Gómez de Herrera, alcalde de Casa y Corte, para que *las cosas tocantes a Indias las remitiese* al Consejo de Indias y para que se enviara allí el proceso promovido por Hernán Cortés contra Juan Velázquez de Salazar<sup>126</sup>. En dicho documento quedaba patente que el Consejo de Indias, como suprema instancia, era el órgano competente para despachar todos los pleitos civiles tocantes a las Indias, tanto en primera instancia, como en grado de apelación<sup>127</sup>.

---

<sup>126</sup> Vid. E. Schäfer, *El Consejo Real...*, t. 1, p. 69.

<sup>127</sup> Real Cédula 28.06.1537 dirigido al licenciado Hernán Gómez de Herrera, alcalde de la Casa y Corte, para que las cosas tocantes a Indias se remitan al Consejo, y envíe allí el



En principio, todos los asuntos relativos al comercio y navegación que conocía de manera independiente la Casa de Contratación quedaron subordinados al conocimiento del Consejo de Indias, para lo cual en opinión de Schäfer ni siquiera hizo falta una disposición especial. Simplemente se consideró a la Casa como un órgano de administración indiano bajo la autoridad del Consejo<sup>128</sup>.

Por otro lado, para lograr que el Consejo de Indias conociera de causas criminales fue menester solicitar al Papa la expedición de un Breve que permitiera a los consejeros clérigos, que formaban parte de dicho Consejo, el conocimiento de dichas causas criminales a fin de poder sentenciar condenas de mutilación o penas de muerte evitando caer en irregularidades<sup>129</sup>, siendo ésta concedida en 1551<sup>130</sup>.

Como autoridad suprema en los primeros años de su fundación también le correspondió ejercer competencias de carácter administrativo tales como la fundación de las Audiencias y Chancillerías para la isla Española y para México<sup>131</sup>, el apresto de flotas para nuevos descubrimientos y también para tener comunicación ordinaria con las Indias<sup>132</sup>, nombramiento de gobernadores y oficiales reales, administración de la hacienda<sup>133</sup>, legislación sobre el tratamiento a los indios<sup>134</sup>, etcétera.

Competencia aparte lo fue el conocimiento de todo aquello que se relacionara con el ejercicio de patronato real de las Indias. De hecho al poco tiempo de comenzar la colonización, y sobre todo, a partir de la expedición por parte del Papa Julio II de la bula *Universalis Ecclesiae regiminis* el patronato eclesiástico de las Indias fue una realidad<sup>135</sup>, correspondiéndole al

---

proceso promovido por Hernán Cortés contra Juan Velázquez de Salazar. A.G.I., Indiferente General, 421, L. 12, f.136r.

<sup>128</sup> Vid. E. Schäfer, *El Consejo Real...*, t. 1, p. 94.

<sup>129</sup> Real Cédula de 07.08.1549 dirigida a Diego de Mendoza, embajador en Roma, para que procure que Su Santidad dé un breve para que los clérigos que sean del Consejo de Indias puedan tratar de causas criminales en él. A.G.I., Indiferente General, 424, L. 21, f. 397v.

<sup>130</sup> Vid. E. Schäfer, *El Consejo Real...*, t. 1, p. 93.

<sup>131</sup> La primera se crearía a través de real Provisión 14.09.1526 y la segunda el 29.11.1527. Vid. J. Sánchez-Arcilla Bernal, *Las Ordenanzas de las Audiencias de Indias (1511-1821)*, Madrid, 1992, p. 28.

<sup>132</sup> Los registros generales de las resoluciones relativas a las flotas durante los primeros años de vida del Consejo de Indias pueden verse en A.G.I., Indiferente General, 1961.

<sup>133</sup> Los asuntos que conocía el Consejo en los primeros años de su vida se pueden ver entre otros en A.G.I., Indiferente General, 1848.

<sup>134</sup> Por ejemplo de la expedición de las Ordenanzas de buen tratamiento de los indios e instrucción que se daba a los descubridores. Real Provisión de 17.11.1526. A.G.I., Indiferente General, 421, L. 11, f. 332r-336v.

<sup>135</sup> Un análisis completo del antecedente de esta bula, así como de los derechos que otorgó puede verse en C. Bruno, *El derecho público...*, pp. 99-114.

Consejo de Indias la tramitación de los negocios tocantes a dicho patronato, sobre todo, en lo relativo al nombramiento de obispos<sup>136</sup> y al ensanche de la propagación de la fe con la ayuda de las órdenes religiosas.

El descubrimiento de nuevos territorios hacia noroeste de la Nueva España, la creación de la gobernación de Venezuela y la conquista del Perú dieron como resultado un crecimiento desmesurado de los asuntos que debía resolver el Consejo de Indias. Además, la carencia de una ordenación ad hoc a las nuevas circunstancias provocaron una hipertrofia en su propia organización. Debido a esta falta de normativa específica para las Indias y como consecuencia de las irregularidades en la sustanciación del proceso contra los hermanos Pinzón por la muerte de Diego de Almagro, Carlos V hubo de revisar personalmente la acción del Consejo de Indias<sup>137</sup>.

El resultado de la visita contribuyó a que el Emperador decidiera promulgar las primeras Ordenanzas que normaran la acción del Consejo de Indias. En efecto, a través de las llamadas Leyes Nuevas de 1542 se establecieron nueve normas que regularon la vida y organización de dicha institución indiana. En estas leyes se estableció como primordial dedicación el conocimiento de las tareas de gobierno<sup>138</sup>, evitando en la medida de lo posible conocer asuntos de justicia entre partes, ya que los mismos debían ser tramitados directamente en las Audiencias indianas<sup>139</sup>. En caso que el

---

<sup>136</sup> Durante la primera mitad del siglo XVI se crearon 23 diócesis y una abadía. En principio todas las diócesis fueron sufragáneas de la metropolitana de Sevilla, pero en 1546 con la erección de las provincias de Santo Domingo, Concepción de la Vega, Santa María del Antigua y la Isla Carolina, la iglesia indiana adquirió autonomía jurídica. Vid. P. Castañeda Delgado y J. Marchena Fernández, *La jerarquía de la Iglesia en Indias: el episcopado americano (1500-1850)*, Madrid, 1992, pp. 154 y ss. Las consultas sobre presentaciones de obispos en los primeros años del siglo XVI pueden verse en A.G.I., Indiferente General, 187.

<sup>137</sup> Vid. E. Schäfer, *El Consejo Real...*, t. 1, pp. 78-79.

<sup>138</sup> Ítem: *porque los dichos presidente y los del nuestro Consejo de Indias estén más desocupados para entender en las cosas de la gobernación de aquellas partes, ordenamos y mandamos que se abstengan en todo lo que fuere posible de entender en negocios particulares, porque para este efecto habemos proveído y mandado lo que toca a las dichas Audiencias, y negocios que en ellas se han de tratar; y como quiera que lo del ver las residencias es cosa propia que parece que se debía facer en el Consejo, pero para que mejor haya efecto lo de la gobernación, y entiendan en ella con más cuidado y menos ocupación de otros negocios, y por la gran distancia que hay en la venida a estos reinos, mandamos que solamente se traigan al dicho nuestro Consejo de las Indias las residencias y visitas que fueren tomadas a los oidores y personas de las Audiencias; y las que se tomen a los nuestros gobernadores de todas las Indias y provincias dellas; y todas las demás permitimos y mandamos que se vean y provean, sentencien y determinen por las dichas audiencias, cada una en su distrito y jurisdicción.* Leyes Nuevas de 1542, 9.

<sup>139</sup> Ítem: *porque Nos habemos mandado de nuevo hacer ciertas ordenanzas para las nuestras audiencias de la Nueva España, y el Perú, y Guatemala, y Nicaragua, y la Isla*

Consejo conociera asuntos de justicia la cuantía de ellos debía ser mayor de quinientos pesos de oro<sup>140</sup>.

El Consejo podía conocer de apelaciones de causas civiles cuyo importe fuera mayor de diez mil pesos de oro, en caso contrario sería en la Audiencia donde las partes debían interponer el recurso correspondiente<sup>141</sup>. De manera exclusiva, el Consejo debía conocer y sentenciar juicios de residencia de oidores y gobernadores de Indias, así como de sustanciar las visitas que se hicieran a los oficiales y autoridades radicadas en las provincias indianas. Una competencia especialmente atribuida al Consejo lo fue la conservación y protección de los indios a fin de que fueran instruidos en la fe cristiana<sup>142</sup>.

Las licencias que se concedían para nuevos descubrimientos se convirtieron en una competencia delegada a las Audiencias indianas<sup>143</sup>, las cuales estaban obligadas a detallar la información al Consejo para que éste tomara las decisiones pertinentes<sup>144</sup>. El fiscal era quien debía verificar el

---

*Española, cerca de la orden y manera que deben tener en el conocer y determinar las causas que en ellas se ofrecieren, y en la provisión de las otras cosas tocantes al buen gobierno y conservación de aquellas partes y naturales de ellas; y para que los del dicho nuestro Consejo tengan más presente lo que está proveído y mandado a las dichas audiencias, y no conozcan ni advoquen causas, ni cosa contraria dellas, las habemos mandado incorporar aquí; y mandamos a los dichos nuestro presidente y los del nuestro Consejo de las Indias, que las guarden y cumplan como en ellas se contiene, y contra el tenor y forma dellas no advoquen ni conozcan de causa alguna. Leyes Nuevas de 1542, 3.*

<sup>140</sup> *Y porque en el dicho nuestro Consejo hay número de jueces, ordenamos que el negocio que todos ellos vieren, siendo la causa de quinientos pesos de oro, o dende arriba, en la determinación della haya tres votos conformes; pero si la causa fuere de menos cantidad de los dichos quinientos pesos, mandamos que habiendo dos votos conformes de toda conformidad, y siendo los otros votos entre sí diferentes, la puedan determinar y determinen: y que hasta la dicha cantidad de quinientos pesos, para más breve determinación de los negocios, puedan conocer y determinar dos de los del dicho nuestro Consejo, siendo conformes. Leyes Nuevas de 1542, 1.*

<sup>141</sup> Leyes Nuevas de 1542, 13.

<sup>142</sup> *Y porque nuestro principal intento y voluntad siempre ha sido y es de la conservación y aumento de los indios, y que sean instruidos y enseñados en las cosas de nuestra santa fe católica, y bien tratados, como personas libres y vasallos nuestros, como lo son; encargamos y mandamos a los del dicho nuestro Consejo tengan siempre muy gran atención y especial cuidado, sobre todo de la conservación y buen gobierno y tratamiento de los dichos indios, y de saber como se cumple y ejecuta lo que por Nos está ordenado y se ordenare para la buena gobernación de las nuestras Indias, y administración de la justicia en ellas, y de hacer que se guarde, y cumpla y ejecute, sin que en ello haya remisión, falta ni descuido alguno. Leyes Nuevas de 1542, 7.*

<sup>143</sup> *... que el que quisiere descubrir algo por mar, pida licencia a la audiencia de aquel distrito y jurisdicción, y teniéndola pueda descubrir y rescatar... Leyes Nuevas de 1542, 34.*

<sup>144</sup> *...que el tal descubridor vuelva a dar cuenta a la audiencia de lo que hubiere hecho y descubierto, y con entera relación que tome de ello el audiencia, lo envíe al nuestro*

cumplimiento de las normas indianas, pudiendo exigir en todo momento el castigo que considerase conveniente en caso de incumplimiento<sup>145</sup>.

En dichas Ordenanzas el Emperador hizo especial hincapié en dar libertad a sus consejeros para que pudieran pensar *en qué cosas Nos podemos justamente ser servidos y aprovechados en las cosas de las Indias* por lo que desde este momento el Consejo podía conocer cualquier asunto relacionado con aquellos territorios.

En 1543 Carlos V hubo de salir de España nombrando como regente al príncipe Felipe para quien dirigió una serie de instrucciones relacionadas con el funcionamiento de sus consejos, incluyendo por supuesto al de Indias. En principio los asuntos de justicia y de gobierno debían permanecer según lo establecido en las Leyes Nuevas<sup>146</sup>, pero las cuestiones relacionadas con provisión de algunos cargos el Emperador los reservó para sí, de manera que los nombramientos de oficiales de la contratación, de los presidentes de las Audiencias, de los gobernadores y obispos sólo podían ser nombrados por Carlos V, quedando el resto de nombramientos en manos del príncipe-gobernador con el parecer del Consejo de Indias<sup>147</sup>.

---

*Consejo de las Indias, para que se provea lo que convenga al servicio de Dios y nuestro ...*  
Leyes Nuevas de 1542, 35.

<sup>145</sup> Leyes Nuevas de 1542, 9.

<sup>146</sup> *...En la expedición de las cosas ordinarias que se han de despachar en el dicho Consejo se guarden las ordenanzas ó instrucciones que nuevamente he mandado hacer, y contra ellas no se haga cosa alguna, por ninguna vía, y en la expedición de los negocios se trabaje que haya el buen recaudo y diligencia que ser pueda. Las consultas, que fueren necesarias hacerlas eis con el serenísimo Príncipe, mi hijo, como lo hacíades conmigo, y porque el Comendador mayor de León siempre ha entendido, como sabéis, con vosotros en lo que se ha ofrecido cuando se hubiere de hacer alguna consulta comunicarlo eis con él, y hállese presente a ella y ejecutarse ha lo que con consulta fuere acordado.*

*Los negocios de importancia, que conviniere consultar conmigo, hacerlo veis y las consultas que se me hubieren de enviar sea con intervención y por medio del Comendador mayor de León. Instrucción al Consejo de Indias dada por el Emperador en Barcelona 01.05.1543. Vid. F. de Laiglesia y Auset, *Estudios históricos...*, pp. 58-60.*

<sup>147</sup> *...Que provea todos los oficios que vacaren en las Indias, así de justicia como de otros, con parecer del Presidente y consejo de ellas, excepto los oficios de la casa de Sevilla y Presidentes de las audiencias y oficios de fundidor, y marcador, y gobernaciones principales que quedan reservados para que yo los provea.*

*Asimismo quede reservada para mí la provisión de los obispados de las Indias, pero, así por ser de la cualidad que son como porque en la provisión dellos no haya tanta dilación, cuando acaeciére vacar alguno, y se hubiere de proveer, el dicho Presidente y los del nuestro Consejo de las Indias, piensen las personas que se deben proveer, y consultado con el Príncipe, envíensenos hechas las presentaciones para que las enviemos firmadas, y todas las otras dignidades y beneficios de Indias provea el Príncipe con parecer del dicho Presidente y Consejo...* Instrucción para la gobernación dirigida al príncipe Felipe. Barcelona 01.05.1543. *Ibíd.*, pp. 45-46.

Además, en dichas instrucciones el Emperador prohibió que en su ausencia se librara *cosa alguna de las Indias, ni de la Casa de Contratación, salvo las ordinarias para pagar a algunas personas el oro que se le tomó*. Asimismo quedó prohibido la concesión de mercedes, donaciones, pechos o derechos. Tampoco se podía autorizar licencias de esclavos, ni caballerías, ni hidalguías, ni naturalezas de cualquier clase. En cambio, se ordenó al Consejo tener especial cuidado en no declarar que los indios se dieran o encomendasen sin expresa orden del Emperador<sup>148</sup>.

Tras la abdicación de Carlos V a favor del príncipe Felipe, el Consejo continuaba rigiéndose de acuerdo a las leyes de 1542. Sin embargo, los cuarenta y dos años del reinado de Felipe II generaron tres modificaciones sustanciales en el cuanto a las competencias de dicho órgano colegiado.

La primera reforma consistió en unir temporalmente toda la hacienda real, incluyendo la indiana, en un solo organismo, el Consejo de Hacienda<sup>149</sup>. Así a finales del año de 1552 se aumentó el número de contadores de la Contaduría Mayor de Castilla y fueron nombrados nuevos oficiales de la Casa de la Contratación con instrucciones precisas emanadas del Consejo de Hacienda con la finalidad que comunicaran en adelante todas las cuestiones relacionadas con la real hacienda indiana directamente a dicho órgano castellano, sin pasar por el de Indias<sup>150</sup>. La pérdida de competencias en materia de hacienda provocó que el Consejo de Indias elevara varias consultas al monarca exponiendo los inconvenientes de la reforma, a lo que Felipe II respondía «*en lo que toca hacienda, se guarde lo ordenado, porque así conviene, y en lo de justicia y gobierno hagan los del Consejo de Indias lo que les toca*»<sup>151</sup>.

Pese a las manifestaciones contrarias por parte del Consejo de Indias que se sentía agraviado en sus competencias, Felipe II decidió continuar adelante con la reforma, de allí que por real cédula de 1559 comunicó a las autoridades indianas su decisión de centralizar la hacienda indiana junto a la de Castilla:

*Habemos acordado y es nuestra voluntad que de aquí adelante las cosas de nuestra hacienda ordinaria y extraordinaria de las dichas provincias de la*

---

<sup>148</sup> Loc. Cit.

<sup>149</sup> Sobre el Consejo de Hacienda de Castilla puede verse C. J de Carlos Morales, *El Consejo de Hacienda de Castilla, 1523-1602: patronazgo y clientelismo en el gobierno de las finanzas reales durante el siglo XVI*, Valladolid, 1996. Del mismo autor “Grupos de poder en el Consejo de Hacienda de Castilla: 1551-1556”, en *Instituciones y élites de poder en la monarquía hispana durante el siglo XVI*, 1992, pp. 107-136.

<sup>150</sup> Vid. I. Sánchez Bella, “El Consejo y la hacienda...”, p. 150.

<sup>151</sup> Consulta elevada al monarca 12.03.1558. A.G.I., Indiferente General, 738m, nº 24.

*Nueva España y Perú y otras partes y lugares de las Indias, rentas y derechos y todo lo demás concerniente a nuestro patrimonio en cualquier manera que sea, se trate y gobierne y administre por los nuestros contadores mayores y en la Contaduría Mayor y esté junto y unido con lo demás de nuestra Hacienda de la corona de Castilla. E que todo sea uno, y que como miembro y parte de las dichas rentas e hacienda de la corona de Castilla, se trate y sea a cargo de los dichos contadores mayores y Contaduría Mayor. E mandamos a los nuestros virreyes y gobernadores e a los nuestros oficiales de hacienda de las dichas provincias e partes de que aquí adelante en todo lo concerniente a la nuestra hacienda, tengan recurso cuenta e correspondencia a los dichos nuestros contadores mayores. E a la Contaduría Mayor e que en todo los negocios e cosas tocantes a la dicha nuestra hacienda acudan e recurran a los dichos contadores mayores e contaduría e que las cédulas provisiones y otros despachos se den y libren e despachen por ellos bien así como hasta ahora recurrían e se deban e libraba por los del nuestro Consejo de las Indias en cuanto toca al tratar e administrar de la dicha nuestra hacienda se ha de tener y en los casos y cosas que de aquellas partes e provincias se ha de ocurrir e proveer por los dichos nuestros contadores mayores y lo demás todo que en esto convendrá ordenarse*<sup>152</sup>.

Esta decisión provocó que el Consejo de Indias perdiera autonomía teniendo que dedicar buena parte de su actividad y de su tiempo a la tarea de “arrancar grandes cantidades de dinero” para la administración y provisión de las flotas anuales<sup>153</sup>. Además, todos los oficiales de la hacienda en las Indias *tendrían recurso, cuenta y correspondencia con los contadores en lugar del Consejo de Indias*. También las cédulas, provisiones y despachos sobre materias relacionadas con la hacienda se despacharían a través de la Contaduría Mayor de Castilla<sup>154</sup>.

Felipe II en otra real disposición indicó al Consejo de Indias su obligación de continuar despachando todos los demás asuntos *que tocaren a justicia, a la administración y gobierno en la dicha Casa y al despacho de las flotas que a ellas van y las que de ellas vienen, y en el servicio de las armadas que en dicha Casa se suelen despachar, y gastos y cuentas de averías y en otras cualesquier otras cosas que los del nuestro Consejo de*

<sup>152</sup> Real cédula 26.07.1559 concediendo a la Contaduría Mayor de Castilla la suprema dirección de la hacienda indiana (A.G.S., Contaduría del Sueldo, 2ª serie, leg. 2). Citado por I. Sánchez Bella, “El gobierno del Perú...”, pp. 520-22.

<sup>153</sup> La intromisión del Consejo de Hacienda en los gastos del de Indias generaron los más inoportunos retrasos. Así por ejemplo para el apresto y envío de navíos de convoy por peligro inminente de corsarios era menester que llegaran al mismo tiempo la aprobación de gastos que emitía el Consejo de Hacienda y el decreto de salida de la flota remitido por el de Indias; sin embargo, esta situación pocas veces se logró, provocando consecuencias irreparables en el comercio indiano. Vid. E. Schäfer, *El Consejo Real...*, t. 1, pp. 116-17.

<sup>154</sup> Vid. I. Sánchez Bella, *La organización financiera...*, p.32.

*las Indias tienen ordenado y mandado, habéis de guardar y cumplir lo que tuvieren proveído y proveyeren adelante y tener correspondencia con ellos...*<sup>155</sup>.

Al principio, el Consejo de Hacienda hizo gran uso de su posición privilegiada, de hecho se arrojó el conocimiento de asuntos que competían directamente al Consejo de Indias, como fue el caso de nombramientos de oficiales de la Casa de la Contratación o de la visita por parte de sus oficiales a la flotas<sup>156</sup>. Al respecto, Schäfer consideró que con el tiempo se atenuó la estricta observancia de las disposiciones establecidas en 1559 y sólo al final del reinado de Felipe II debido a la desesperada situación de la real hacienda volvieron a aumentar las instrucciones del Consejo de Hacienda relacionadas con asuntos de Indias<sup>157</sup>. Para Sánchez Bella en cambio, la intromisión del Consejo de Hacienda en los asuntos de la real hacienda indiana cesó a partir del año de 1562 por lo que todo parecía indicar que la dirección superior de la hacienda volvió a manos del Consejo de Indias<sup>158</sup>.

Sin embargo, el estado lamentable en que se encontraban las finanzas de la Monarquía movió a Felipe II a crear la Junta de Hacienda de Indias cuyo principal cometido consistía en “deliberar sobre los medios de aumentar los ingresos de las colonias”<sup>159</sup>. La Junta inició sus sesiones en febrero de 1596 bajo la dirección del presidente del Consejo de Indias, el licenciado Pablo de la Laguna, contó además con la asistencia de los dos secretarios Juan de Ibarra y Pedro de Ledesma. Tras varias reuniones dicho órgano colegiado remitió al monarca un informe exponiendo algunas recomendaciones para

---

<sup>155</sup> Vid. E. Schäfer, *El Consejo Real...*, t. 1, pp. 114, nota. 26.

<sup>156</sup> Real Cédula de 12.11.1557 dándole instrucciones a Sancho de Paz, tesorero de la Casa de la Contratación de las Indias para el despacho y visita de la flota que ha de partir a Indias. A.G.I., Indiferente General, 1995, L. 13, ff. 440-442.

<sup>157</sup> Una real Cédula del Consejo de Hacienda de 11.03.594 dirigida a la Casa de la Contratación exigía la puntual ejecución de sus órdenes, aceptando que en casos urgentes pudieran hacer gastos sin permiso previo y luego comunicarlo al Consejo de Hacienda, *para que en él se entienda y se despache el recaudo...*, A.G.I., Indiferente General, 746. Citado por E. Schäfer, *El Consejo Real...*, t. 1, p. 167.

<sup>158</sup> Para fundamentar sus conclusiones el mencionado autor consideró lo señalado por Solórzano y Pereira en su *Política Indiana* cuando se refirió que *en el año de 1562 se volvió al Consejo de Indias esta administración, porque se embarazaban las resoluciones con dividir los papeles en que iban juntos con todos los negocios de Gobierno y Hacienda; pero con advertencia de que dos del Consejo de ella pasasen al de las Indias las veces que fueran llamados por él, de orden de SM para conferir lo que en estas materias dudase. Y esta forma se ha ido guardando algunas veces, como se refiere en la del año de 1584, dada sobre el gobierno del mismo Consejo*. Vid. I. Sánchez Bella, “El gobierno del Perú...”, p. 511.

<sup>159</sup> E. Schäfer, *El Consejo Real...*, t. 1, p. 174.

paliar la bancarrota y formuló varias recomendaciones<sup>160</sup>. Básicamente aconsejaba la introducción del cobro de alcabalas en todas las Indias, la reorganización del comercio del azogue desde el Perú y Nueva España y también propuso la importación de la cochinilla por cuenta del rey. Pero la puesta en marcha de las recomendaciones no lograron paliar la crisis económica y finalmente dejó de reunirse. Fueron tantos y tan diversos los asuntos que conoció la Junta que llevaron a concluir a Lewis Hanke que en caso de hacerse un estudio pormenorizado de los asuntos tratados en dicho órgano colegiado es posible concluir que se trataba de otro Consejo de Indias y no de una simple Junta<sup>161</sup>.

El segundo cambio fundamental que sufrió el Consejo de Indias relacionado con sus competencias surgió con la promulgación de las Ordenanzas del Consejo de Indias de 1571, ordenamiento creado como resultado de la visita que Juan de Ovando hiciere a dicho órgano colegiado. En él quedaron establecidas de manera más concreta aquellas atribuciones propias del Consejo, así como la forma de llevarlas a efecto. Según dichas Ordenanzas el Consejo tenga la jurisdicción suprema de todas las nuestras Indias y de los negocios que de ellas resultaren y dependieren y para la buena gobernación y administración de justicia<sup>162</sup>.

Si bien, como ya vimos, se permitió la intromisión del Consejo de Hacienda dentro de los asuntos de la hacienda indiana y también se creó la Junta de Hacienda de Indias, dichas Ordenanzas establecían la obligación por parte del Consejo de deliberar con mayor frecuencia sobre las medidas que fueren convenientes al aumento de la real hacienda<sup>163</sup>.

Las competencias de gracia y merced que eran propias del Consejo de Indias como órgano colegiado se vieron modificadas durante estos años. En efecto, desde las Leyes Nueva de 1542 se concedió al Consejo la posibilidad

---

<sup>160</sup> El texto del informe se puede ver en L. Hanke, "An unpublisher document...", p. 137-141.

<sup>161</sup> Entre otros asuntos, la Junta conoció de medidas relacionadas con el desarrollo de la explotación de las minas, administración del azogue, arrendamiento de salinas, fraudes en la fundición de metales, repartimiento de indios del cerro y su conservación, abusos que había en la labor de la moneda, la conveniencia de la creación de los Tribunales de Cuentas de Indas, diezmos y expolios de las iglesias, entre otros muchos negocios Ibídem, p. 140.

<sup>162</sup> Ordenanza 2 de 1571.

<sup>163</sup> *Item, encargamos a los del nuestro Consejo de las Indias, que los miércoles de cada semana señaladamente, y las mas veces que pudieren, platiquen, y se ocupen en pensar y saber, en que cosas nos podemos ser servido, y nuestra hacienda aprovechada en las Indias, proveyendo de tales medios y personas para ministros y oficiales della, que siempre sea acrecentada, y en ella haya el buen recaudo y guarda que conviene.* Ordenanza 9 de 1571.



de proponer mediante consulta el nombre de los candidatos a ocupar distintos cargos dentro de la administración indiana. Posteriormente y como resultado de la visita de Juan de Ovando al Consejo de Indias, Felipe II a través de una real cédula de 1571 concedió en exclusiva al presidente del Consejo la facultad de proponer por consulta la provisión de todos los oficios de Indias<sup>164</sup>. Cuando Ovando murió los consejeros lucharon para que el monarca retornara la prerrogativa a todo el Consejo. Tras varios infructuosos intentos por parte del Consejo finalmente el monarca derogó la prerrogativa concedida al presidente a través de la expedición del real decreto de enero de 1591<sup>165</sup>. Desde entonces y hasta el año de 1600 las

---

<sup>164</sup> *...Ordenamos vos el presidente solo nos propongáis, nombréis y consultéis las personas que se hayan de presentar a nuestro muy Santo Padre para Prelados de las Indias y las que en ellas nos hubieren de servir de virreyes y presidentes de cualquiera de las Audiencias dellas y las que hubieren de ser oidores o alcaldes del crimen en las Audiencias que residen en México y en la ciudad de los Reyes y los Alguaciles mayores de las dichas Audiencias y ciudades de México y los Reyes y los que en ellas hubieren de ser oficiales de nuestra real hacienda y así mismo todos los oficios de escribanías que se hubieren de proveer en las Indias y para todas las demás presentaciones y provisiones de beneficios o oficios seculares y eclesiásticos, jueces de comisión, escribanos, receptores y otros cargos y comisiones que en el consejo se hubieren de proveer para estos Reinos y fuera dellos. Vos el dicho Presidente solo elijáis y nombréis las personas que os parecieron convenientes sin consulta nuestra y les hagáis hacer los títulos y provisiones dellos para que nos los firmemos...* Real cédula 06.10.1571. A.G.I., Indiferente General, 582 L. 1, ff. 3r-3v.

<sup>165</sup> *Conviene a saber que cuando estuvieren vacos o vacaren en las mis Indias, islas y Tierra Firme del mar Océano algunos arzobispados, obispados, dignidades, Prebendas, canonjías y otros cualesquiera beneficios eclesiásticos y los cargos de Virrey, Presidencias, Plazas de asiento, gobernaciones, corregimientos, alguacilazgos mayores y menores y otros oficios de asiento o temporales, y los que se proveen y han de proveer para la administración de mi hacienda, así en las dichas Indias como en la Casa de la Contratación de Sevilla, como son Contadurías, tesorerías, factorías, veedurías, oficiales del dicho Consejo, capitanes generales de Armada y flotas, almirantazgos y otros oficiales y ministros dellas, capitanes particulares de galeras, galeones y navíos, alcaides de fuertes y castillos y todo lo demás que estuviere vaco y vacare, así eclesiástico como seglar que yo haya de proveer y se me haya de consultar, se trate en el dicho consejo de todas las personas que parecieron a propósito y de mas partes, así propuestas por Vos, como por los demás del dicho Consejo, y de éstas se me consulten tres o cuatro, que al parecer de todos tengan más partes para lo que se hubiere de proveer y la consulta que se hiciere, señalada de todos, me la enviareis vos el dicho Presidente para que de las dichas personas o de otras yo escoja la que me pareciere mejor y de lo que yo resolviere se os dará aviso, para que vos lo digáis a la parte, y después que haya aceptado, lo digáis así mismo en el dicho Consejo, y destas se me consulten tres o cuatro que al parecer de todos, tengan más partes para lo que se hubiere de proveer y la consulta que se hiciere, señalada de todos, me la enviaréis vos el dicho Presidente para que de las dichas personas o de otras yo escoja la que me pareciere mejor y de lo que yo resolviere se os dará aviso, para que vos los digáis a la parte, y después que haya aceptado, lo digáis así mismo en el dicho Consejo...* Real Cédula 31.01.1591. A.G.I., Indiferente General, 1651. Citado por Vid. J. J. Real Díaz, "El Consejo de Cámara de Indias...", p. 741-42.

consultas para la provisión de oficios reales debían estar firmadas por el presidente y los consejeros de Indias.

En los últimos años del reinado de Felipe II se reunió una Junta *para dar forma y regla al Consejo de Indias*. La Junta estuvo integrada por Rodrigo Vázquez de Arce, presidente del Consejo de Castilla, Diego Gasca de Salazar del mismo Consejo y Benito Rodríguez de Valtodano del Consejo de Indias. Según la documentación encontrada dicho órgano se reunió en algunas ocasiones pero no resolvió nada en concreto<sup>166</sup>.

### **3.2. La pérdida de competencias del Consejo de Indias en los reinados de Felipe III, Felipe IV y Carlos II.**

El siglo XVII se caracterizó por la masiva creación de Juntas particulares cuyos cometidos, en muchas de las ocasiones, tendieron acaparar competencias que un siglo antes habían sido exclusivas del Consejo de Indias. Cada una de ellas, dentro de su ámbito competencial, despachaba expedientes relacionados con asuntos de especial interés para la Corona<sup>167</sup>, entre ellas, la Junta de Hacienda de Indias, la Junta de guerra de Indias, la Junta de Comercio o la Cámara de Indias. Es importante mencionar que si bien la mayoría de estas Juntas comenzaron a reunirse de manera puntual desde finales del reinado de Felipe II, fue durante el reinado de Felipe III cuando alcanzaron su caracterización institucional, para finalmente desaparecer algunas de ellas en el siglo XVIII cuando sus competencias fueron absorbidas por las secretarías de Estado y del despacho<sup>168</sup>.

Entre esas Juntas, una de ellas tuvo vital importancia para el posterior desarrollo de las competencias del Consejo. Específicamente nos referimos aquella creada en los últimos años de Felipe II cuya finalidad, como se ha mencionado fue la de dar forma y regla al Consejo de Indias. Durante el reinado de Felipe III la mencionada Junta de reforma estuvo presidida por el conde de Miranda, presidente del Consejo de Castilla, junto con Cristóbal de Mora, Juan de Borja y Juan de Acuña consejeros del de Castilla y Gonzalo

---

<sup>166</sup> Vid. J. J. Real Díaz, “El Consejo de Cámara...”, p. 743.

<sup>167</sup> En opinión de Baltar el uso político que de las Juntas hicieron algunos validos como el duque de Lerma o el conde-duque de Olivares tenía por objetivo minimizar la posible oposición de los consejos. Vid. J. F. Baltar Rodríguez, “Sobre el origen de la Junta...”, p. 671.

<sup>168</sup> Vid. J. F. Baltar Rodríguez, *Las Juntas de gobierno...*, pp. 504-5.

Aponte del de Indias<sup>169</sup>. Tras varias reuniones los miembros de la Junta remitieron al monarca sendas consultas proponiéndole profundos cambios dentro del Consejo de Indias, a lo que el monarca prefirió antes de tomar una decisión escuchar nuevas opiniones, de allí que existiera una tercera Junta. Ésta última estuvo formada por Juan de Idiáquez, presidente del Consejo de Órdenes y consejero de Estado, el confesor real Gaspar de Córdoba, Pedro de Tudanca del Consejo de Castilla y Agustín Álvarez de Toledo consejero de Indias. Después de varias sesiones, la Junta propuso al monarca no sólo resolver el problema del órgano competente para la provisión de oficios indianos, sino que también se aprovechó el camino para resolver problemas de hacienda y de guerra<sup>170</sup>. En opinión de Baltar existía una relación de causalidad entre la actividad de esta Junta y la aparición poco tiempo después de al menos tres nuevas estructuras en el ámbito de actuación del Consejo de Indias al que descargan sus competencias: la Cámara, la Junta de Hacienda y la Junta de guerra de Indias<sup>171</sup>.

El primer órgano creado fue la Junta de Cámara de Indias, a la que más adelante llamaron Cámara de Indias<sup>172</sup>, la cual se instituyó de manera permanente a partir de la expedición de la real Cédula de 27 de agosto de 1600:

*...se forme una junta de Cámara como está formado el Consejo de Cámara de Castilla y que para la dicha Junta de Cámara se nombren el presidente del mismo consejo y tres consejeros de los que me parecerán mas a propósito por su entereza, rectitud y celo que juntamente con el secretario Juan de Ibarra y el que le sucediere o fuere mi voluntad se junten dos veces cada semana a horas que no se encuentren con las de los consejos*

<sup>169</sup> Vid. E. Schäfer, *El Consejo Real...*, t. 1, p. 180.

<sup>170</sup> En opinión de Joaquín Real esta Junta tuvo como principal problema a resolver la provisión de cargos y oficios indianos, pero su labor no se restringió a esto. Aprovecharon para acometer una reforma a fondo de la institución, creando en ellas Juntas especializadas de modo permanente y reglamentando lo conveniente para el buen despacho de los negocios del Consejo de Indias. Vid. J. J. Real Díaz, "El Consejo de Cámara...", p. 744.

<sup>171</sup> Vid. J. F. Baltar Rodríguez, "Sobre el origen de la Junta...", p. 674. Ya en el siglo XVI Luis Cabrera de Córdoba afirmaba: *También se ha proveído que haya aquí en el Consejo de Indias tres del mismo Consejo, que provean con el Presidente todo lo que fuere de gracia y merced: y que se llame Consejo de Cámara, como le hay para lo de Castilla; lo vual hasta ahora se proveía por todo el Consejo, de lo cual resultaba mucha discordia entre ellos y emulación y con esto se remediará. Asimismo quieren que haya dos veces en la semana junta de algunos del mismo Consejo, con dos consejeros de Hacienda, para tratar de la de Indias, y juntamente otros de guerra, que en diferentes días traten de lo que allá se ofrece de esta materia, y para esto se acrecentan dos consejeros más, que sean diez; hasta ahora han sido ocho en el dicho Consejo de Indias* L. Cabrera de Córdoba, *Relaciones de las cosas sucedidas en la Corte de España desde 1599 hasta 1614*, Madrid, 1857.p. 83.

<sup>172</sup> Vid. J. J. Real Díaz, "El Consejo de Cámara...", p. 744.

*ordinarios y que traten y me consulten las dichas provisiones así eclesiásticas como temporales y que en todo y por todo se hayan de conformar con el estilo y forma que en el Consejo de Cámara de Castilla se guarda y está establecido así en las cosas que han de tratar como en la manera de votar, proponer y consultar las provisiones y gracias, declarando que lo que toca a remuneraciones de servicios en que haya alguna contradicción se haya de remitir al Consejo de Indias para que en él se trate como negocio perteneciente a gobierno pues es bien conservar en cuanto se pudiere la autoridad del cuerpo del consejo...*<sup>173</sup>.

Por tanto, las competencias de gracia y merced que desde su creación le habían correspondido al Consejo de Indias en pleno y posteriormente al presidente de dicho órgano colegiado fueron encargadas a la Cámara de Indias. Pero esta situación hubo de cambiar nueve años más tarde cuando Felipe III decidió remitir nuevamente estas competencias al Consejo de Indias y extinguir la Cámara<sup>174</sup>. Fue hasta el año de 1644 cuando Felipe IV decidió rehabilitar dicho órgano consultivo con todas las competencias y prerrogativas que había gozado la anterior Cámara<sup>175</sup>.

En las competencias en materia de guerra sucedió lo mismo que en los asuntos de gracia y merced. Por real Cédula de agosto de 1600 Felipe III dio vida a la Junta de guerra de Indias<sup>176</sup>, como una institución de carácter permanente con la misión de tratar negocios y materias de guerra. Integrada por el presidente y dos consejeros de Indias y dos del Consejo de guerra:

*Cuando se ofreciere haber de tratar de negocios y materias de guerra mando que asistan a ellas con los de Indias dos consejeros de guerra, los que yo señalaré y que esto se haga por las tardes en días extraordinarios,*

---

<sup>173</sup> Real Cédula 27.08.1600. B.N., Mss. 3/34336, ff. 154-165. Citado por. J. J. Real Díaz, "El Consejo de Cámara...", pp. 748-49.

<sup>174</sup> *Que la dicha Junta de Cámara de Indias se extinga desde luego, y no la haya ni se tenga más de aquí adelante, y que todas las provisiones eclesiásticas y seglares de los negocios y materias que en ella se tratan, se reduzcan y vuelvan al Consejo...* Real Cédula 16.03.1609. A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 35v-42v.

<sup>175</sup> *Han me movido algunas consideraciones a resolver que en el Consejo de Indias haya Consejo de Cámara (como solía) formándose de tres consejeros del mismo Consejo que concurran con el Presidente de él, y por ellos se despachen, y consulten las cosas y negocios que se consultarán, y despacharán por él, cuando le había, ejecutarse así.* Real decreto 10.02.1644. A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 42v-43r.

<sup>176</sup> Existen importantes estudios sobre dicha Junta de guerra de Indias, entre ellos el clásico de A. de León Pinelo, *Real Junta de guerra de Indias. Su origen, forma y jurisdicción*, Madrid, 1659, publicado por L. Hanke en *Revista Chilena de Historia y Geografía*, nº 91 (jul-dic 1937). También puede consultarse H. J. Tanzi, "La Junta de guerra...", J. C. Domínguez Nafria, "La Junta de guerra... y los textos de J. F. Baltar Rodríguez, *Las Juntas de Gobierno en la Monarquía...* y "La Junta de guerra de Indias..."

*los que señalará el presidente de manera que no se encuentren con los destinados para otros negocios*<sup>177</sup>.

A partir de ese momento se convirtió en el principal órgano asesor en materia militar de las Indias<sup>178</sup>, con las disposiciones que se expidieron a lo largo del siglo XVII fueron concretando su jurisdicción y competencias. Mientras otras Juntas eran extinguidas, la de guerra de Indias fue confirmada como institución permanente, ampliando sus competencias, restringida hasta entonces a los negocios militares de gobierno y justicia<sup>179</sup>, a los asuntos de nombramientos y de mercedes, consultadas antes por la Cámara, incluyendo las plazas de administración financiera de las armadas de Guarda de las Indias. Entre los asuntos de gracia que en los años siguientes fueron competencia de la mencionada Junta se encontraban las gratificaciones de servicios hechos en la guerra en las Indias y en la Carrera de ellas, y en la Mar del Sur, excluyendo únicamente las mercedes de repartimientos de indios, que se otorgaban por méritos militares y que seguían formando parte de las competencias del Consejo de las Indias<sup>180</sup>.

<sup>177</sup> Real Cédula 27.08.1600. B.N., Mss. 3-34336, ff. 154-165. Citado por. J. J. Real Díaz, "El Consejo de Cámara...", p. 751.

<sup>178</sup> En realidad no se trataba de la primera Junta relacionada con asuntos militares. Sus antecedentes se encuentran por un lado en la Junta de Puerto Rico creada en 1585 con la finalidad de tomar las medidas necesarias para la defensa de las costas de las islas antillanas contra los corsarios y ataques de las flotas enemigas. Y por el otro la Junta de la Armada del Océano de 1594 integrada por los presidentes de los consejos de Indias y guerra, un consejero de guerra y el secretario Juan de Ibarra que se reunía en una sala del propio órgano indiano cuya misión fue la gestión de la Armada del Océano hasta que traspasó sus competencias a esta Junta de guerra de Indias, Vid. J. F. Baltar, *Las Juntas de Gobierno...*, p. 505.

<sup>179</sup> Desde su fundación la Junta era competente para ver y determinar apelaciones civiles y criminales que hubieran sustanciado aquellas autoridades indianas con atribuciones militares contra alguna persona sometida al fuero militar. Recop. Indias 3.3.3.

<sup>180</sup> Real Orden 16.03.1609. *Que la Junta de guerra que por la dicha orden mande tener, y se tiene al presente en el dicho Consejo de Indias, se continúe, y conserve, por los buenos efectos que han resultado, y resultan de las resoluciones que con su acuerdo, y parecer he mandado tomar: y que para que las provisiones de los oficios, y cargos tocantes a la guerra que al presente se hacen por la dicha Junta de Cámara así de Mar como de Tierra se hagan con la inteligencia noticia y conocimiento de las personas más prácticas, y suficientes, y aprobadas en las cosas de la mar y de la guerra, estos, y todos los oficios que tocan a la distribución, cuenta y razón de la hacienda que se gasta en las Armadas y flotas de las Carreras de las Indias, se me consulten, y se provean de aquí en adelante por la dicha Junta de guerra de ellas, y no se han de comprender en estos oficios los de mi Hacienda Real de las Indias, porque estos aunque tengan a su cargo la cuenta, y razón, y la paga de gente de guerra, y Presidios, se han de proveer por el Consejo, y por la dicha Junta, se me consulten, y despachen también las gratificaciones de servicios hechos en la guerra en las Indias, y en la Carrera de ellas, y en la Mar del Sur, con que no se entiendan las dichas gratificaciones o repartimientos o encomiendas de Indios por que estas se han de despachar por el Consejo. Y lo que tocara a las dichas gratificaciones, y provisiones de oficios los da y se despache por mano de los secretarios de la Cámara, entre tanto que no*

También quedaron bajo el conocimiento de dicha Junta las fortificaciones, la organización y disposición de la flota, el apresto de la flota o la provisión de los mandos militares<sup>181</sup>. Pero esto último cuando en 1644 nuevamente retornó la Cámara de Indias, todas aquellas provisiones de plazas militares en principio quedaron en manos de ambos órganos colegiados, de manera que en la Junta se examinaban y consultaban las propuestas e instancias, pasando después a la Cámara, la que también debía enviar sus consultas al monarca a través del presidente del Consejo de Indias<sup>182</sup>.

En materia de justicia la Junta de guerra de Indias gozaba de jurisdicción privativa militar<sup>183</sup>. También podía conocer asuntos relacionados con presas y todos los despachos de Armadas, Capitanas y Almirantas de Flotas, barcos de avisos y todos los demás navíos de guerra. La tramitación de cualquier asunto militar se instruía en el seno del Consejo y sólo era remitido a la Junta para votar y dictar sentencias, que eran rubricados de la misma manera que en el Consejo. Esta jurisdicción de la Junta quedó limitada a las tropas de infantería y de artillería de las flotas y armadas que tenían contacto periódico con los puertos de la Península, porque las ya establecidas permanentemente en las Indias quedaron bajo la jurisdicción de los virreyes y capitanes generales respectivos<sup>184</sup>.

Los únicos cambios que sufrió la Junta de guerra de Indias tuvieron que ver con el número de los consejeros integrantes, mientras que por real

---

*se reducen a dos estos oficios, como está dicho.* A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 35v-42v. Esta real Orden con algunas variantes pasó a la Recop. Indias 2.2.77.

<sup>181</sup> Juan Diez de la Calle señaló en el siglo XVII las plazas cuya propuesta era a cargo de la Junta de guerra de Indias. Para la Armada de la Carrera de Indias los de capitán general de la Armada, o galeones de la plata, almirante, siete capitanes de mar y guerra, incluyendo la Capitana y la Almiranta, sargento mayor de puesto, alférez, cuatro capitanes, ocho caballeros entretenidos, veedor, contador, proveedor, pagador y piloto mayor. Para la Flota de Tierra Firme los de capitán general de la flota y almirante. Y para la de Nueva España capitán general, almirante, veedor general, capitán general de la artillería de armada y flotas, y veedor de la artillería de armadas y flotas de la casa de la fundición de Sevilla. Vid. J. Diez de la Calle, *Memorias y noticias sacras y reales del Imperio de las Indias Occidentales*, Madrid, 1646.

<sup>182</sup> Vid. E. Schäfer, *El Consejo Real...*, t. 1, pp. 211-12.

<sup>183</sup> Esta jurisdicción fue adquirida debido a una consulta que el conde de Lemos remitió a Felipe III en 1608 solicitando al monarca que la Junta de guerra tratara de materias de guerra como lo hacía el propio Consejo de guerra en los negocios y causas de Castilla con la finalidad de evitar dudas y nulidades. A lo que Felipe III aceptó. Vid. J. C. Domínguez Nafria, "La Junta de guerra...", p. 104.

<sup>184</sup> *Ordenamos y mandamos, que los virreyes como capitanes generales de las Provincias del Perú y Nueva España conozcan de todos los delitos, casos y causas que en cualquier forma tocaren a los capitanes, oficiales, capitanes de artillería, artilleros y demás gente de guerra, que nos sirviere a sueldo en todas las dichas Provincias siendo convenidos como reos cada uno en las que fueren de su distrito y virreinato...* Recop. Indias 3.11.1

decreto de 1677 se estableció en cuatro el número de consejeros que deberían acudir a despachar en la Junta, de nuevo otro real decreto de 1699 se permitió que tanto el Consejo de Indias como el de guerra enviaran a los seis miembros más antiguos de cada uno de ellos para resolver las cuestiones militares de Indias.

La multicitada cédula de agosto de 1600 creó la Junta de Hacienda de Indias para que despachase los expedientes relacionados con la hacienda indiana:

*La Junta que solía hacerse en la posada del presidente de Indias en que intervenían en él Agustín Álvarez de Toledo y Molina de Medrano y el secretario Juan de Ibarra para tratar materias de Hacienda mando que se prosiga y que con gran diligencia y cuidado se atienda a la ejecución de lo que estaba en ella resuelto, continuando lo que estaba comenzado y tomando de nuevo lo demás que se tuviere por conveniente y haranme consulta con relación muy particular del estado que tenían los dichos negocios y de lo que en ejecución de ellos hubiere acordado la junta y conviene proveer adelante*<sup>185</sup>.

Con la creación de esta Junta, el monarca buscaba contar con un órgano especializado en las finanzas indianas a fin de buscar medios económicos suficientes para sufragar los voluminosos gastos de la Monarquía. Si bien esta Junta tuvo una vida muy corta ya que desapareció seis años<sup>186</sup> después a su creación, quizás por las tensas relaciones entre el Consejo de Indias con el de Hacienda<sup>187</sup>, lo cierto es que entre una de sus grandes aportaciones lo fueron las Ordenanzas para la creación de los Tribunales de Cuentas de las Indias<sup>188</sup>.

La formación de todos estos órganos colegiados claramente mermaban las amplias competencias que hasta entonces había gozado el Consejo de Indias, de allí que en múltiples ocasiones remitía al monarca consultas con la intención que éste reconsiderara su postura, argumentando en contra de la conveniencia de las Juntas y solicitando la devolución de sus antiguas prerrogativas. Sin embargo, en la mayoría de los casos el rey resolvía «*Háganse las Juntas como lo tengo mandado, en Palacio en días y horas*

<sup>185</sup> Real Cédula 27.08.1600. B.N., Mss. 3-34336, ff. 154-165. Citado por. J. J. Real Díaz, "El Consejo de Cámara...", p. 751.

<sup>186</sup> J. F. Baltar Rodríguez, *Las Juntas de Gobierno...*, pp. 531-32.

<sup>187</sup> Vid. E. Schäfer, *El Consejo Real...*, t. 1, p. 204.

<sup>188</sup> En el preámbulo de las Ordenanzas para el Gobierno de los Tribunales de Cuentas que en los reinos de las Indias se han formado se especificó *que habiéndolo conferido, y tratado y mirándose en nuestro Consejo Real de Indias y en otras Juntas de Ministros de mucha inteligencia y larga experiencia, hemos acordado...*, Vid. I. Sánchez Bella, *La organización financiera...*, pp. 65-66. Las Ordenanzas aludidas han sido incluidas en el libro G. Escalona Agüero, *Gazophilacium Regium Perubicum*, Madrid, 1775, pp. 318 y ss.

*que no se falta al Consejo, y no haya en esto más dilación y cuando las Juntas se hubieren comenzado y se fueren continuando, podrá el Consejo representarme lo que se le ofreciere»*<sup>189</sup>.

Aún y cuando la mencionada Junta de Hacienda de Indias dejó de reunirse, el Consejo de Hacienda reanudó su intromisión en los asuntos de Indias, por ello, el Consejo de Indias no cesaba en manifestar su inconformidad sobre todo respecto del cobro del almojarifazgo que se recaudaban en Sevilla antes de la salida de la flota, por formar parte este ingreso de la hacienda castellana y no de la indiana. Para evitar los continuos roces el duque de Lerma hubo de confirmar al Consejo de Indias la prohibición que tenía de librar por su cuenta sobre la hacienda venida de las Indias, aunque por razones prácticas autorizó que pudiera disponer de diez mil ducados para ser librados en caso de necesidades urgentes<sup>190</sup>. Sin embargo, el Consejo de Hacienda continuaba extralimitándose en sus competencias, como por ejemplo interviniendo de manera directa en la concesión masiva de licencias de esclavos o pretendiendo que los pleitos relacionados con las contravenciones de las Ordenanzas de Registro fueran despachados por éste<sup>191</sup>.

Curiosamente en el reinado de Felipe IV cuando más Juntas particulares fueron creadas, el monarca promulgó en 1636 unas nuevas Ordenanzas del Consejo de Indias dotándole de la suprema jurisdicción de las Indias, de manera que era competente para conocer y despachar asuntos relacionados con gobierno, justicia, guerra y hacienda<sup>192</sup>. Pero en realidad cada uno de los nuevos órganos colegiados le arrancaban parte de dichas competencias, sin que el Consejo pudiera evitarlo. En efecto, las Juntas se multiplicaron de tal modo en el reinado de Felipe IV que hasta el Consejo de Castilla en 1643 hubo de estudiar en varias sesiones la conveniencia de reformar o suprimir alguna de ellas, concluyendo que la dirección de las materias no corriera por

<sup>189</sup> Vid. E. Schäfer, *El Consejo Real...*, t. 1, pp. 203-4.

<sup>190</sup> Vid. I. Sánchez Bella, "El gobierno del Perú...", p. 512.

<sup>191</sup> Loc. Cit.

<sup>192</sup> *Mandamos, que los Lunes y Viernes de cada semana se vean y determinen negocios de Estado y gobierno de las nuestras Indias: los Martes, y Jueves los de guerra: los Miércoles por la mañana señaladamente y las mas veces que se pudiere, se trate de negocios de nuestra hacienda, y se platique en pensar, y saber en qué cosas podrá ser aprovechada en las Indias. Y los lunes, miércoles, y viernes a la tarde, acabadas peticiones, y encomiendas, se vean cosas de gracia y Cámara. Ordenamos y mandamos, que al principio de cada Consejo se vean, platiquen, y resuelvan todas las cosas y negocios, que conforme á estas Ordenanzas se hubieren de ver por todos, ó se hayan remitido para todo el Consejo: y acabados estos, el Presidente reparta por salas los demás pleitos y negocios que hubiere, y como le pareciere más conveniente á la breve y buena expedición, y despacho dellos, y más conforme á la Ordenanza antes desta. Ordenanza 11 de 1636. Recop. Indias 2.2.11.*



Juntas, sino por consejos, “evidenciando la desorganización administrativa y el deseo de volver al sistema antiguo, más racional y organizado”<sup>193</sup>.

En materia de comercio, entre la década de 1620 y 1630 Felipe IV impulsó la creación de juntas y compañías orientadas a promover y proteger la actividad comercial<sup>194</sup>. Así en 1624 fue creada la Junta de Minas<sup>195</sup> y a al año siguiente la Junta de Comercio, Población y Agricultura de 1625, ambas bajo la presidencia del conde-duque de Olivares y con la presencia de ministros pertenecientes al Consejo de Castilla, de Indias, de Portugal y de Hacienda Sin embargo, debido a la urgencia de los problemas políticos y financieros de la década de 1630 ambas juntas cayeron en el olvido. Con la creación de esta Junta en opinión de Pere Molas “se proponía separar al Consejo de Castilla de determinadas áreas de la política económica, cuya jurisdicción debía ser privativa, con exclusión de otros organismo”<sup>196</sup>, este mismo argumento, podría ser aplicado al Consejo de Indias, el cual tenía en principio la vigilancia del comercio de Indias<sup>197</sup>.

Años más tarde, por iniciativa del duque de Medinaceli fue creada nuevamente una Junta de Comercio con la finalidad de restablecer y restaurar el comercio general de “estos reinos”. Creada por real decreto de 29 de enero de 1679 celebró su primera reunión poco después. Sus miembros formaban parte de los consejos de Castilla, guerra, Hacienda, e Indias<sup>198</sup>, así como un regidor de la villa de Madrid. Dicho órgano colegiado

---

<sup>193</sup> Vid. C. Espejo Hinojosa, “Enumeración y atribuciones...”, p. 361.

<sup>194</sup> En 1622 Felipe IV creó una Junta de comercio integrada por el conde de Godomar, Juan de Villela gobernador del Consejo de Indias, Mendo Mota del Consejo de Portugal, siendo nombrado presidente el marqués de Montesclaros. Su principal misión fue la dirigir la guerra económica contra Holanda y examinar los proyectos presentados para fomentar el comercio. La Junta desapareció hacia 1624 tras la creación de El Almirantazgo de los Países Septentrionales. Vid. J. F. Baltar Rodríguez, “Las Juntas de Gobierno...”, pp. 210-12.

<sup>195</sup> Por real decreto de 16.01.1624 se confió a esta Junta “la facultad de disponer, ordenar y ejecutar todo lo que tocara al beneficio, labor y administración de cualesquier minas, escoriales, desmontes y echaderos de estos Reinos, con la potestad de examinar las leyes y ordenanzas promulgadas sobre este objeto...”. E. Larruga y Boneta, *Memorias políticas y económicas sobre los frutos, comercio, fábricas y minas de España*, Madrid, 1789, t. 4, p. 255.

<sup>196</sup> Su presidente era el propio Olivares y entre los vocales estaban el marqués de la Hinojosa, Gilimón, el futuro conde de Castrillo, el portugués Mota, un regente del Consejo de Italia y el flamenco conde de Solre. Vid. P. Molas y Ribalta, “Instituciones y comercio...”, p. 94.

<sup>197</sup> El Consejo de Indias debía tener especial cuidado no sólo en el despacho de las flotas, armadas hacia Indias y administración de la avería, sino también en el comercio de las Indias. Recop. Indias 2.2.28.

<sup>198</sup> Del Consejo de Indias acudió José Veitia Linaje. Vid. P. Molas y Ribalta, “La Junta General de Comercio...”, p. 32. Según afirmaba Callahan la presencia en las Juntas de miembros de los consejos de la Monarquía se diseñó para evitar conflictos de competencias

fue dotado de *jurisdicción privativa en todos los asuntos de comercio y fábricas mandando a las Justicias obedeciesen sus órdenes, inhibiendo a consejos y demás Tribunales del conocimiento de semejantes materias*<sup>199</sup>. En dicha Junta se discutieron los planes para traer un gran número de artesanos extranjeros y se propuso el establecimiento de montepíos a fin de fomentar la industria nacional con capital extranjero. También buscaban obtener información sobre el progreso del comercio y la industria en el extranjero, por lo que solicitó a los diplomáticos españoles a presentar informes detallados sobre las condiciones económicas en los países a los que les fueron asignadas. Desafortunadamente, estos planes pronto se hundieron en un letargo administrativo y de gran indiferencia. Las reuniones de la Junta fueron cada vez menos frecuentes y las muchas contradicciones que experimentaron sus decisiones dieron motivo a su extinción en abril de 1680<sup>200</sup>. Dos años más tarde, el monarca decidió reconstituir una nueva Junta de Comercio<sup>201</sup> y su personal fue renovado por completo. A esta segunda etapa correspondieron las iniciativas protectoras del comercio y del artesanado, así como el establecimiento de una red de superintendentes de comercio y de juntas regionales de Andalucía. En noviembre de 1691 la Junta se había reunido en muy pocas ocasiones por lo que Carlos II ordenó

---

que constantemente paralizaba la obra de gobierno. Vid. W. J. Callahan, “A Note on the Real y General Junta de Comercio, 1679-1814”, en *The Economic History Review*, vol 21 (1968), p. 520.

<sup>199</sup> Real decreto 25.04.1679. Citada por E. Larruga y Boneta, *Memorias políticas...*, t. 4, pp. 229-30.

<sup>200</sup> Vid. W. J. Callahan, “A Note on the Real...”, p. 520.

<sup>201</sup> *Considerando lo que conviene aumentar el comercio en esto Reinos, he resuelto poner materia tan importante al cuidado de una Junta, que mande formar a este fin, de cuatro Ministros de mis consejos -de Castilla, Indias, Hacienda, guerra y un Regidor de Madrid; y conviniendo que esta Junta tenga toda autoridad y jurisdicción, he tenido por bien concedérsela, como por la presente se la concedo, privativa, para todo lo que la tocare y perteneciere; y es mi voluntad que las apelaciones, que se interpusieren en sus incidencias y dependencias, que conforme a derecho se deben otorgar, vayan privativamente a la dicha Junta, y no a otro Tribunal; porque a los consejos, chancillerías, tribunales, jueces y Justicias de estos Reinos los inhibo, y he por inhibidos, y les mando no se entrometan en conocer, de ello en manera alguna, ni con ningún pretexto porque solo la dicha Junta ha de Conocer única y privativamente de todo lo referido de lo anexo y dependiente; para cuyo efecto le doy y concedo poder, facultad y jurisdicción, como de derecho es necesaria, y en tal caso se requiere con sus incidencias, dependencias; y para excusar las competencias que tanto embarazan el curso de los negocios, derogo todos y cualesquier fueros, que pretendieren y pudieren pretender los interesados a título de cualesquiera exención que tengan o deban gozar y mando, que sobre ello no se forme, ni admita competencia alguna.* Real decreto 04.03.1683. A. A. de la N. Recop. 5.12.3.

nuevamente la reanudación de sus sesiones y decidió nombrar a nuevos miembros<sup>202</sup>, quienes continuaron hasta su muerte.

En el reinado de Carlos II la situación no varió, tras la muerte de su padre se formaron una serie de Juntas que apoyarían a la reina en el trabajo de la regencia durante la minoría de edad del rey<sup>203</sup>. Cuando Carlos II hubo ocupado la Corona la creación de Juntas temporales o permanentes de los más variados asuntos fue la tónica general de gobernar, situación que dio como resultado una afectación en los negocios que debía conocer el propio Consejo de Indias. La razón puede verse en opinión de Baltar por un continuo proceso de decadencia, debido entre otras razones, a los constantes problemas de precedencias y jurisdicciones y, sobre todo, a la lentitud en la resolución de los asuntos más graves<sup>204</sup>.

Para el caso que nos ocupa, esto es, aquellas Juntas que abarcaron de manera directa competencias que las Ordenanzas de 1636 habían concedido al Consejo se encontraban, entre otras, las ya establecidas Juntas de guerra de Indias y de Comercio. Pero también hubo nuevas Juntas creadas en momentos puntuales para conocer asuntos de Indias. Así por ejemplo la Junta Magna o de los Tres Presidentes integrada por los titulares de los consejos de Castilla, Hacienda e Indias donde se discutían cuestiones que afectaban a toda la Monarquía, pero básicamente buscaban soluciones para la obtención de nuevos ingresos<sup>205</sup> o la Junta de Medios, de Alivios o Reformadora de Hacienda como indistintamente se le denominaba en la que se propusieron una serie de medidas importantes en materia económica cuya impronta se incluyó en el real decreto de 6 de febrero de 1688. Dicha disposición además de reorganizar los ingresos de la Corona, incluyó reformas en materia de salarios, mercedes y plazas en los consejos y secretarías<sup>206</sup>. Por tanto, estas Juntas impedían al Consejo de Indias intervenir de manera ordinaria en la consulta en asuntos en materias de hacienda o de su propia organización interna.

---

<sup>202</sup> Mediante real decreto de 13.11.1691 nombró al conde de Monterrey presidente de la Junta. Citado por E. Larruga y Boneta, *Memorias políticas...*, t. 4, p. 234.

<sup>203</sup> En el testamento de Felipe IV quedaron confeccionadas tres Juntas: la de Gobierno para aconsejar a la reina consorte durante la regencia, una Junta de Tutores compuesta por los mismos que formaban la de Gobierno, para el caso de fallecimiento de la reina y una Junta testamentaria como albacea de la última voluntad del rey. J. F. Baltar Rodríguez, *Las Juntas de Gobierno...*, pp. 104-8.

<sup>204</sup> *Ibíd.*, p. 104.

<sup>205</sup> *Id.*, p. 134.

<sup>206</sup> El contenido de este real decreto puede verse en M. Artola, *La Hacienda del Antiguo Régimen*, Madrid, 1982, pp.218-19.

En los últimos años del siglo XVII debido a la larga enfermedad de Carlos II, las Juntas ocuparon un lugar fundamental en el gobierno de la Monarquía. Las consultas emanadas de los diversos consejos, entre ellos el de Indias, eran despachadas por una especie de Junta de Gobierno integrada por el secretario de Estado y del despacho, Antonio de Ubilla y dos o tres consejeros de Estado<sup>207</sup>.

#### **4. Las competencias del Consejo de Indias durante la primera mitad del siglo XVIII.**

Para analizar las competencias que el Consejo de Indias detentaba en los casi cincuenta años del reinado de Felipe V hemos creído conveniente separar el epígrafe en dos partes. En la primera de ellas estableceremos aquellas materias que despachaba dicho Consejo según la herencia aportada por la dinastía de los Austrias. De manera que trataremos aquellos órganos colegiados que conocían asuntos de Indias en detrimento del Consejo, como lo fueron entre otros, la Cámara de Indias, la Junta de guerra de Indias o la Junta de Comercio.

En la segunda parte dilucidaremos las materias que de antaño había conocido el Consejo de Indias y que Felipe V decidió despachar directamente a través de la vía reservada dejando, en principio, al Consejo fuera de toda actuación. Finalmente acudiremos al análisis de la documentación que hemos venido manejando para situar a dicho órgano dentro de la medida justa de su actuación, para lo cual abordaremos el estudio de las consultas que el Consejo remitía al monarca sobre las materias que antes había ejercido.

##### **4.1. La gradual pérdida de competencias en el reinado de Felipe V.**

Durante el reinado del primer Borbón también fue común el uso de Juntas como instrumentos político-administrativos con capacidad para

---

<sup>207</sup> Pero esta Junta debía abstenerse de resolver los grandes temas de Estado y por supuesto no podía pronunciarse sobre la concesión de gracias y mercedes. Vid. Príncipe de Baviera, "Documentos inéditos referentes a las postrimerías de la Casa de Austria en España", en *Boletín de la Real Academia de la Historia*, t. 104 (1935), p. 774.

conocer los más importantes asuntos de la Monarquía<sup>208</sup>. Empero la nueva dinastía ansiosa de grandes cambios cesó la actividad de alguna de ellas y otras simplemente fueron transformadas según las necesidades de los nuevos tiempos. La Cámara de Indias fue una de esas instituciones que sufrió los vaivenes de la política del setecientos. Así por ejemplo en marzo de 1701 Felipe V decidió suprimirla:

*He resuelto cese, y se extinga desde luego la Junta de Cámara de Indias, y que las provisiones y negocios que en ella se expidan, se traten, confieran y consulten de aquí adelante por ese Consejo en los mismos días, y horas que se trataban, y consultaban en la Junta de Cámara...*<sup>209</sup>.

Quince años más tarde dispuso crearla una vez más con las mismas competencias que la Cámara ejercía antes de su extinción:

*Y porque he considerado conviene a mí servicio, he resuelto se restablezca en ese Consejo el Tribunal de la Cámara compuesto del presidente o gobernador que es, o fuere del Consejo, dos Ministros de Capa y Espada, y un Togado... Y en este Tribunal se ha de conocer de todo lo que por lo pasado, antes de su extinción se trataba, y conocía, sin diferencia alguna...*<sup>210</sup>.

Al promulgarse los decretos de reforma del Consejo de Indias de 1717, nuevamente la Cámara de Indias fue extinguida y sus competencias trasladadas al Consejo<sup>211</sup>. Finalmente mediante un real decreto de 1721<sup>212</sup> Felipe V restauró por cuarta ocasión la Cámara, misma que permaneció en activo hasta su cese definitivo en 1809<sup>213</sup>.

Si bien en líneas atrás aludimos a un escrito de León Pinelo en el que el relator del Consejo señalaba, de manera pormenorizada, las atribuciones propias de la Cámara de Indias, ahora lo haremos, pero de un Informe elaborado a principios del siglo XIX en el que se relataba con detalle las

<sup>208</sup> Vid. J. F. Baltar Rodríguez, *Las Juntas de Gobierno...*, pp. 148-49.

<sup>209</sup> Real decreto 06.03.1701. A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 53v-56r; 827; 583 L. 3, ff. 73-77.

<sup>210</sup> Real decreto 29.04.1716. A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 97r-99v; 827.

<sup>211</sup> Felipe V expresa su decisión de extinguir la Cámara *por no necesitarse*, retornando al Consejo sólo algunas de las competencias que entendía la Cámara, pero remitiendo a la vía reservada las provisiones de empleos y cargos, así como la confirmación de algunas mercedes, como lo eran las encomiendas. A.G.I., Indiferente General 829, ff. 113r-14r; 824; 542 L. 2, ff. 73-75. BNM ms. 19251. f. 31

<sup>212</sup> Real decreto 22.12.1721. *Considerando por conveniente el que se restablezca la Cámara de Indias para que divididas las dependencias de aquellos bastos Dominios se aseguren más los aciertos; he resuelto restablecerla.* A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 121r-121v; 824.

<sup>213</sup> Vid. J. J. Real Díaz, "El Consejo de Cámara...", p. 726.

competencias propias de la mencionada Cámara<sup>214</sup>. Se trata de un informe que perteneció a un período posterior al que analizamos, sin embargo, es posible considerar que su contenido pueda aplicarse al propio reinado de Felipe V.

El *Informe* aludido dividió en dos ramos las atribuciones que le correspondían a la Cámara. La primera de ellas describía aquellas competencias relacionadas con materia relacionadas con el gobierno espiritual, de manera que la Cámara proponía sujetos para las mitras y prebendas de las Iglesias metropolitanas, catedrales y colegiata de Guadalupe de México. Debía examinar los autos de oposición a las prebendas de oficios, la terna presentada por el cabildo y los informes del asistente Real y vice-patrono. Remitía consultas relacionadas con la jubilación de prebendados, permutas y licencias para regresar a España o para salir de la diócesis. Propone a los candidatos para comisarios de Indias y para el Comisario General de la Orden de San Francisco. También expedía los títulos de las gracias concedidas a los eclesiásticos y remitía a las Indias los informes de los eclesiásticos<sup>215</sup>.

En materia secular la Cámara consultaba las plazas togadas del Consejo, fiscalías, regencias y plazas de las Audiencias de Indias, las plazas de las asesorías de los gobiernos, así como de los corregimientos y alcaldías mayores. Se examinaban y consultaban las mercedes de títulos de Castilla. Estaba facultado para fundar mayorazgos, sus agregaciones y confirmaciones. Podía intervenir en la exención de suplementos de edad para ser regidores, escribanos, procuradores, médicos; dispensación de tiempo para obtener grados universitarios, suplemento de edad para regir y administrar bienes. Confirmación de fundación de ciudades o villas. Otorgamiento de licencias para servir oficios de mayorazgo, exenciones de jurisdicción a los pueblos y lugares que se erijan en villas; dispensaciones de oficios vendibles y renunciables y facultades para nombrar tenientes de ellos.

La Cámara también consultaba al monarca para conceder cualquier tipo de licencias, como por ejemplo para servir oficios de mayorazgos; para firmar con estampillas; licencias para servir oficios vencibles, entre otros. Legitimaciones de todo tipo; privilegios de hidalguía y declaraciones de ella. Concesiones de distintivo don, honores de regidores y padres general

---

<sup>214</sup> Se trataba de un borrador que bien pudo ser elaborado por el que fuera oficial de la Secretaría del Perú, Pedro Telmo Iglesias. A.G.I., Indiferente General, 1057. Citado por R. D. Pérez García, *El Consejo de Indias...*, pp. 527-30.

<sup>215</sup> *Ibidem.*, pp. 527-28.

de menores. Correspondía a la Cámara proponer dispensaciones de leyes o ampliaciones de calidades de oficios<sup>216</sup>. Además era competencia de la Cámara la formación de los títulos de empleos del Consejo de Indias, así como de los nombramientos para ejercer un cargo u oficio en Indias sea aquellos consultados directamente por éste o por aquellos cuyo nombramiento estaba a cargo de la vía reservada de tipo militar, político o hacendístico<sup>217</sup>.

Por otra parte, la Junta de guerra también sufrió algunos reveses durante el reinado de Felipe V. En las modificaciones propuestas por Orry y que quedaron reflejadas en el real decreto de 1713 la Junta fue extinguida. Tras la caída del ministro nuevamente el monarca decidió restablecerla *en la forma que prescriben las Leyes, y Ordenanzas, y como se tenía, y observaba antes del decreto de Nueva Planta de diez de noviembre de mil setecientos trece*<sup>218</sup>. La Junta continuó despachando los asuntos de guerra de Indias hasta la creación de la Secretaría de Estado y del Despacho de Marina e Indias en 1714<sup>219</sup>.

En materia de hacienda, tanto el Consejo de Hacienda como la varias Juntas que al efecto se fueron creando controlaban los asuntos relacionados con la hacienda indiana. En este período un real decreto de 1713, Felipe V dio vida nuevamente a una Junta de Hacienda de Indias<sup>220</sup> integrada por tres consejeros de Indias y tres de Hacienda, siendo presidida por el titular del Consejo de Hacienda. La creación de este órgano colegiado tuvo un interés importante en la política de la Monarquía, sobre todo, con la intención de lograr un aumento en los ingresos de la Corona a partir del control privativo de la real hacienda indiana:

*...de todo lo tocante a la Hacienda de Indias gastos de ella para su beneficio recaudación, y aumento, y la que produjeran los comercios, envío, y retorno de Flotas, y Galeones, y esta Junta arrendará, administrará, y dirigirá general y particularmente, todo lo que tocara a los referidos gastos, rentas, regalías, y derechos que me tocaren sin que ninguno de los dos consejos de Indias, y Hacienda, ni otra ninguna Junta, se puedan mezclar, ni mezclen en nada que a esto toque, por que han de quedar inhibidos de este conocimiento respecto de que todo lo que mira a esta recaudación, cuentas,*

---

<sup>216</sup> Id., pp. 528-29.

<sup>217</sup> Id., pp. 296-97.

<sup>218</sup> Real decreto 05.08.1715. A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 90r-97r; 827.

<sup>219</sup> Real decreto 30.11.1715. Nov. Recop. 3.6.4.

<sup>220</sup> Vid. F. Gallardo Fernández, *Origen, progreso y estado de las rentas de la Corona de España, su gobierno y administración*, Madrid, 1805, t. 1, pp. 73-74 y C. Espejo Hinojosa, "Enumeración y atribuciones de algunas juntas...", pp. 345-46. También analiza este tema D. M. Sánchez González, "El deber del Consejo durante...", pp. 1010-11.

*y razón de las expresadas rentas, regalías, y derechos que me pertenezcan, se han de presentar, formar, ver y concluir en la Contaduría mayor del Consejo de Hacienda, como se hace y debe practicar generalmente con todas la rentas, y hacienda que me pertenece en los demás Reinos y Dominios*<sup>221</sup>.

A través de real decreto de 14 de noviembre de ese mismo año se designaron a los ministros que habían de componer la referida Junta, previniendo que esta se debía de reunir en una de las piezas de la Secretaría del Despacho de guerra y *que inmediatamente se diese orden por el Consejo a los dos secretarios de él para que hiciesen separar, luego de sus Secretarías, y de la Contaduría del Consejo, todos los papeles y relaciones tocantes a cuentas de cargos, y datas y los demás de real hacienda así de las rentas, y del comercio, como de la navegación de flotas, y galeones, y que los pasasen sin la menor dilación, una réplica a manos de Dn Jerónimo de Uztáriz a quien VM había nombrado por secretario de la referida Junta, mandado VM al Consejo se abstuviese de conocer, tratar, ni entrometerse en cosa alguna que tocase a estos puntos*<sup>222</sup>.

La creación de la Junta provocó las quejas del Consejo de Indias, ya que éste se veía prácticamente desposeído de sus atribuciones en materia financiera en beneficio de un organismo, donde la mayor influencia estaría del lado de los consejeros de Hacienda. De allí que remitió al monarca una consulta fechada el 17 de noviembre. En dicha consulta el Consejo pretendía evidenciar la interdependencia que existía entre la hacienda y las otras ramas de Indias<sup>223</sup>. Pero el rey no se dejó influir, ya que su intención estaba indicada y al menos hasta 1715, con la creación de la Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda, la Junta continuó despachando.

En lo relativo al comercio de las Indias es menester resaltar que cuando Felipe V accedió al trono de la Corona española intensificó la política de signo mercantilista orientada sobre todo a la restauración del comercio. A fin de cubrir estas políticas decidió renovar la Junta Comercio, para lograrlo, expidió un real decreto en 1701 donde manifestaba su agrado con las providencias que la Junta de Comercio había despachado<sup>224</sup>. En dicho decreto también dispuso el modo en que había de desarrollarse el corso y el comercio de América.

---

<sup>221</sup> Real decreto 10.11.1713. A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 58v-62v; 827.

<sup>222</sup> B.P.R. Mss. 844.

<sup>223</sup> Vid. G. Bernard, *Le Secrétariat d'État...*, pp. 7-9.

<sup>224</sup> Vid. H. Kamen, *La guerra de sucesión...*, p. 142.



Ya constituida la Junta el monarca ordenó a los pueblos y ciudades de sus reinos que enviaran propuestas para la restauración del comercio y las manufacturas. En esos primeros años dicho órgano colegiado redactó el nuevo Reglamento para la manutención del comercio con Filipinas y en los años venideros promovió medidas para aumentar el comercio con las Indias. Pero en 1705 Felipe V descontento con la actuación de los miembros que formaban parte de la Junta de Comercio hubo de crear una nueva Junta con el título de Restablecimiento del Comercio, quedando además subsistente la Junta de Comercio. Cada una de dichas Juntas desempeñaba competencias distintas, la primera cuidaba del comercio interior de la Península y la otra el comercio con América, *conspirando ambas a fin de hacer la nación comerciante*<sup>225</sup>.

Los miembros de la nueva Junta para el Restablecimiento del Comercio estuvo integrada por tres ministros del Consejo de Castilla, cinco del Consejo de las Indias<sup>226</sup>, dos del Consejo de Hacienda y el fiscal de la Casa de Contratación de Sevilla. También formaban parte de dicho órgano dos consejeros franceses de Felipe V. La característica más interesante de los miembros de la Junta fue la presencia de los delegados comerciales de Sevilla, Cádiz, el Puerto de Santa María, Málaga y La Coruña. Varios inconvenientes tuvo esta Junta pero quizá la más grave consistió en las dificultades para convocar a todos sus integrantes para asistir a las tres sesiones semanales establecidas. En enero de 1706 el rey autorizó a los miembros comerciantes regresar a sus lugares de residencia debido a las dificultades de residir permanentemente en la Corte, quedando muy reducida la Junta<sup>227</sup>. Dada la duplicidad de funciones con la anterior Junta de Comercio ésta fue disuelta y la de Restablecimiento ocupó su lugar y su nombre<sup>228</sup>.

Con el tiempo, la Junta jugó un papel relativamente menor en la aplicación de las primeras medidas específicas de Felipe V para promover el desarrollo del comercio y de la industria. Aún así, en 1707 el monarca expidió un real decreto ampliando las competencias de dicho órgano colegiado:

*...y conviniendo, que para este fin tenga toda autoridad y jurisdicción, he tenido por bien de concedérsela privativa para todas las materias tocantes a*

---

<sup>225</sup> Vid. E. Larruga y Boneta, *Memorias políticas...*, t. 4, p. 236.

<sup>226</sup> Representaron al Consejo de Indias ante la Junta: Manuel García de Bustamante, Martín de Solís, Manuel de Gamboa, Marqués de Casal y el fiscal Agustín de los Ríos. Vid. P. Molas y Ribalta, "La Junta General de Comercio...", p. 33.

<sup>227</sup> Vid. W. J. Callahan, "A Note on the Real...", p. 521.

<sup>228</sup> Vid. P. Molas y Ribalta, "La Junta General de Comercio...", pp. 4-5.

*puntos de tráfico y comercio , en la misma forma y con la propia ampliación y calidades que el Señor Rey mi tío se la concedió a las Juntas antecedentes por su Real cédula de 15 de Marzo de 1683 y decreto de 24 de Septiembre de 86, sin limitación de cosa alguna, que he aquí por repetida una y otra, como si se expresase a la letra; oyendo en justicia y administrándosela a los interesados en todos los pleitos y causas que estuvieren pendientes, y que en adelante se ofrecieren, y en cualquier manera, tengan o pudieren tener su origen de materias de cosas tocantes a tráfico y comercio, así demandando como defendiendo; acordando y dando las providencias convenientes al mejor logro de esta incumbencia, despachando para su ejecución por la Secretaría de la Junta todas las cédulas y órdenes necesarias sin intervención de Consejo, Tribunal, ni Ministro alguno; porque única y privativamente ha de poder conocer esta Junta de todo ello y lo anexo y dependiente, y subdelegar esta jurisdicción cuando convenga, en la persona o personas que tuviere por convenientes, a quienes en tal caso se la concedo igual; y a todos los demás los inhiho y he por inhibidos del conocimiento de las dichas causas...*<sup>229</sup>.

Pese a la expedición de dicho decreto, el monarca tomó algunas decisiones relacionadas con asuntos manufacturados sin contar con la Junta<sup>230</sup>. Empero, la Junta de Comercio continuó sesionando y sus integrantes aún eran miembros de los distintos consejos involucrados con el comercio, entre ellos, el de Indias<sup>231</sup>. Para 1730 el prestigio y la eficacia decreciente de la Junta había reducido a sus miembros a tres ministros. El rey decidió finalmente realizar una reforma administrativa, pero en esta ocasión fusionó a la Junta de Moneda con la de Comercio. De manera que la nueva institución tendría la responsabilidad de las Casas de Moneda Real, la regulación de los asuntos monetarios y los asuntos de comercio<sup>232</sup>. La recién

<sup>229</sup> Real decreto 15.05.1707. Nov. Recop. 9.1.2.

<sup>230</sup> Por ejemplo, cuando el rey decidió establecer un estado de fabricación de prendas de lana en Guadalajara en 1719. Vid. P. Molas i Ribalta, "La Junta General de Comercio...", p. 5 y W. J. Callahan, "A Note on the Real...", p. 522.

<sup>231</sup> La Junta de 1707 quedó presidida por Lorenzo Fernández de Cardona del Consejo de Castilla, José Agustín de los Ríos fiscal y miembro del Consejo de Indias, Antonio de la Vega Calo del Consejo de Hacienda, Bernardo Tinajero de la Escalera secretario del Consejo de Indias, el conde de Torrehermosa, el marqués de Montesacro y por secretario a Juan Manuel Heredia Tejada. Vid. J. F. Baltar Rodríguez, "Las Juntas de Gobierno...", p. 225.

<sup>232</sup> ...he resuelto, teniendo presente la gran conexión de estos con los de Moneda que todos los que corren y han debido correr por la Junta de Comercio, así gubernativos como de justicia, según su establecimiento, estén desde ahora en adelante a cargo de la Junta de Moneda con el nombre de Junta de Comercio y de Moneda, y que se despachen por ella (en la forma que lo ha hecho y debido hacer hasta aquí la Junta de Comercio) con las mismas facultades, autoridad y jurisdicción privativa que están concedidas a esta por decretos y órdenes expedidas desde el año de 1679: en la inteligencia de que los Ministros, que hoy lo son de la Junta de Comercio, han de cesar, como mando cesen, en este encargo; pues solo debe estar al cuidado de los de la Junta de Moneda, y darse por ella todas las

fusionada institución quedó integrada según lo establecido para la Junta de Moneda<sup>233</sup>, esto es, por seis ministros provenientes de los consejos de Castilla, Hacienda e Indias<sup>234</sup>. La diferencia más relevante consistió en que el nuevo presidente de la Junta no sería el presidente del Consejo de Castilla, sino aquel que ocupara el cargo de secretario de Estado y del despacho de Hacienda, entre ellos, José Patiño, el marqués de la Ensenada y, en su momento, José Carvajal y Lancaster<sup>235</sup>. También fueron nombrados dos fiscales, uno para despachar asuntos relacionados con el comercio y las manufacturas, y el otro sobre materias relacionadas con las Casas de Moneda. Como resultado de la reforma de 1730 la Junta empezó a funcionar con cierto grado de regularidad y eficiencia. En los años posteriores su intervención se hizo cada vez más importante, sobre todo, por sus medidas en favor del comercio y la industria.

De acuerdo con todo lo anterior es posible afirmar que los primeros quince años del reinado de Felipe V no supusieron un gran cambio respecto de las competencias atribuidas al Consejo de Indias en sus Ordenanzas de 1636. Como se ha visto, las modificaciones a sus atribuciones vinieron dadas un siglo antes, especialmente desde la aparición de órganos colegiados y juntas especiales que desnaturalizaron el trabajo de la propia institución. Quizá por ello Carlos Espejo afirmara que “el reinado de Felipe V con ser más orgánico, se asemeja al de Felipe IV”, sobre todo, “por su devoción a los organismos particulares, pues creó más de veinticinco”<sup>236</sup>.

La verdadera reestructuración administrativa, como veremos a continuación, vino dada con los decretos de 1715 y los promulgados en años posteriores, los cuales perfilaron la formación de las nuevas secretarías de Estado y del despacho, cuyos titulares, poco a poco ocuparían políticamente

---

*providencias, despachos y órdenes que se ofrecieren pertenecientes a comercio...* Real decreto 09.12.1730. Nov. Recop. 9.1.4. Un estudio pormenorizado de esta Junta puede verse en J. M<sup>a</sup> de Francisco Olmos de, *Los miembros del Consejo de Hacienda...*, pp. 390-91.

<sup>233</sup> *la cual se ha de componer de seis ministros, incluso el que ha de presidir, siendo los dos o más togados, y los restantes de capa y espada, y un fiscal también togado, y un secretario con ejercicio y refrendata, declarando que el que ha de presidir esta Junta ha de ser siempre mi secretario que es un en adelante fuera del despacho de mi Real Hacienda, a quien desde luego constituyo y nombro por juez conservador y Superintendente general de todos mis reales ingenios y casas de moneda con jurisdicción privativa para todo lo peculiar y gubernativo de ellas...* Real decreto 15.11.1730. Nov. Recop. 9.1.3.

<sup>234</sup> Fueron nombrados del Consejo de Indias para acudir a las sesiones de la Junta de Comercio y Moneda: Jerónimo de Ustáriz, Manuel Martínez Carvajal, Antonio Álvarez de Abreu y José de la Quintana. Vid. P. Molas i Ribalta, “La Junta General de Comercio...”, p. 34.

<sup>235</sup> Vid. W. J. Callahan, “A Note on the Real...”, p. 523.

<sup>236</sup> C. Espejo Hinojosa, “Enumeración y atribuciones de algunas juntas...”, p. 361.

el lugar de los presidentes de los consejos de la Monarquía, lo que les permitiría tener una relación más estrecha con el monarca. En este sentido, D. Sánchez afirmaba que la fuerte presencia de los secretarios del despacho fue muy notoria dentro de las diferentes Juntas especiales que se crearon en el reinado de Felipe V, como fue el caso de la intervención del secretario de Estado y del despacho de Hacienda quien al ser superintendente general de las Casas de Moneda debía presidir la Junta de Comercio y Moneda<sup>237</sup>. Para esta autora, Felipe V no creó nada, se limitó a transformar el esquema administrativo que había recibido de sus predecesores pero reincidiendo en la faceta consultiva de los órganos, “el soberano requiere frecuentemente a las Juntas para que le consulten y para poder decidir él con posterioridad”<sup>238</sup>.

#### **4.2. Las competencias del Consejo de Indias y la vía reservada.**

La llegada de Felipe V al poder supuso una nueva organización dentro de las estructuras político-administrativas heredadas de los Austrias. Para lograr revitalizar la Monarquía fue necesario hacer uso de instituciones que pudieran adaptarse con mayor rapidez a los cambios provocados como consecuencia de la guerra de Sucesión frente a órganos tan anquilosados como lo eran los consejos. Eso explica la razón por la que Felipe V y sus asesores utilizaron a la Secretaría del Despacho Universal como un ente capaz de aglutinar mayores atribuciones, obviando en algunos momentos, la consulta a cualquiera de los otros órganos asesores de la Monarquía.

En efecto, esta figura fue utilizada para transformar el modelo administrativo y de gobierno hasta entonces imperante. No fue una innovación, la institución ya existía desde antiguo, simplemente, le otorgaron mayores competencias. Las sucesivas divisiones de la única Secretaría del Despacho Universal permitieron crear un cuadro cada vez más especializado con los que abarcar las diversas cuestiones del gobierno. El secretario de Estado y del despacho comenzó entonces a cobrar

---

<sup>237</sup> D. M. Sánchez González, “El deber del Consejo durante...”, p. 1022.

<sup>238</sup> *Ibidem*, p. 1021. Desdevides explicaba la proliferación de organismos deliberantes por la “naturaleza irresoluta y de espíritu perezoso de los españoles... Su educación clerical lo hace timorato, tiene escrúpulos de conciencia, tiene miedo a equivocarse, se inclina a pedir consejo... el régimen de Juntas cuadraba muy bien a un temperamento semejante”. Afirmación algo especial si consideramos que en el reinado de Felipe V se crearon más de una veintena de Juntas. Vid. G. Desdevises Du Dezert, *La España del Antiguo...*, pp. 332-33.

protagonismo y asumir una serie de atribuciones cuyo contenido dependerá del grado de confianza que el monarca depositara en él.

La figura del secretario del despacho remonta al reinado de Felipe IV cuya finalidad era agilizar la cada vez más “extenuante, numerosa y dispar documentación regia”<sup>239</sup>. Para lograr la agilización del despacho de los asuntos no se consideró necesario configurar de manera específica las atribuciones que desempeñaría, sobre todo porque su actuación dependía básicamente de la decisión del monarca, y en su caso, del valido de turno. En esta época, dicho secretario tenía como principal misión preparar y extractar la documentación que los distintos consejos y juntas remitían al monarca para que éste adoptara una resolución y así hacer más ágil y precisa la tramitación de los asuntos. Igualmente debía comunicar las resoluciones adoptadas a las diversas instituciones competentes en el asunto, así como todas aquellas disposiciones que dimanaban directamente de la voluntad soberana o sus más inmediatos colaboradores. El secretario carecía de competencias específicas de gobierno y tampoco existían disposiciones que delimitaran sus atribuciones. En realidad su principal objetivo era el de convertirse en un simple transmisor de la autoridad soberana, esto es, ser “la voz” y “las manos” del Príncipe<sup>240</sup>.

Posición muy distinta tomaron los Borbones respecto de la figura del secretario del despacho<sup>241</sup>. De hecho, en opinión de M. Gómez la progresiva

---

<sup>239</sup> J. L. Bermejo Cabrero, “Del Secretario del Despacho Universal a los Diversos Secretarios del siglo XVIII”, en *Estudios sobre la Administración central española*, Madrid, 1982, pp. 20-21.

<sup>240</sup> Vid. M. Gómez Gómez, “La nueva tramitación de los negocios...”, p. 207.

<sup>241</sup> Sobre los orígenes de esta institución puede verse S. Riol, “Informe que hizo Su Majestad en 16 de junio de 1726... Las secretarías de Estado y del despacho han sido ampliamente analizadas por diversos autores, entre ellos J. A. Escudero en sus multitudinarias obras: *Los Secretarios de Estado y del Despacho (1474-1724)*..., *Los orígenes del Consejo de Ministros*..., “La reconstrucción de la administración central... y “Privados, validos y primeros ministros en la monarquía... También ha analizado la génesis de la secretaría del despacho J. L. Bermejo en su artículo “Del Secretario del Despacho Universal... Desde hace más de dos décadas se han editado numerosos textos sobre la misma temática: C. Fernández Espeso, y J. Martínez Cardos, *Primera Secretaría de Estado. Ministerio de Estado. I. Disposiciones orgánicas (1705-1936)*, Madrid, 1977; B. Badorrey Martín, B., *Los orígenes del Ministerio de...*; G. A. Franco Rubio, “La Secretaría Estado y del Despacho de guerra en la primera mitad del siglo XVIII”, en *Sociedad, administración y poder en la España del antiguo régimen. Hacia una nueva historia institucional. I Symposium Internacional del Grupo P.A.P.E.*, Granada, 1996, pp. 131-156; de la misma autora hay artículos importantes como “Civiles y militares en la alta administración española del siglo XVIII: La Secretaría de Estado y del Despacho de Marina”, en *Monarquía, Imperio y pueblos en la España Moderna*, Alicante, 1997, pp. 51-62 y “Reformismo institucional y elites administrativas en la España del siglo XVIII: Nuevos oficios, nueva burocracia. La Secretaría Estado y del Despacho de Marina (1721-1808)”, en

subdivisión de la Secretaría del Despacho Universal y su cada vez mayor protagonismo, no fueron más que la prolongación del poder real que, de este modo, se hizo patente al resto de las instituciones regias, y muy en especial, a los omnímodos consejos<sup>242</sup>.

Con el fin de dar trámite directo a la toma de decisiones, Felipe V decidió despachar los asuntos de la Monarquía a través de su secretario del despacho, Antonio de Ubilla y Medina. En 1703 la premura en la resolución de los asuntos y las necesidades económicas provocadas por la guerra de Sucesión obligaron al monarca a repartir el conocimiento de los asuntos de la Monarquía en dos secretarios. Por un lado se nombró al marqués de Canales para despachar con el monarca todos los asuntos relacionados con la guerra y la hacienda. Mientras que Ubilla continuó despachando todo el resto de los asuntos<sup>243</sup>.

En la práctica esta división significaba que cada Consejo estaba obligado a remitir sus consultas al secretario respectivo. Así, los asuntos relacionados con la guerra y la hacienda indiana tendrían que ser despachados a través del marqués de Canales y las consultas de gobierno y de justicia continuaban enviándose a Ubilla<sup>244</sup>. Finalmente esta división fue formalizada a través de la expedición del decreto de 11 de julio de 1705, en el que la Secretaría del Despacho Universal quedó dividida en dos: una, para “guerra y Hacienda” y otra “para todo lo demás”. Los titulares fueron respectivamente José Grimaldo y el marqués de Mejorada y de la Breña:

*Conviniedo a mi servicio, para la más breve y fácil expedición de los negocios dividir en dos la Secretaría del Despacho Universal. He resuelto que por la una se despache todo lo que tocara y perteneciere a guerra y hacienda y por la otra (que queda al cargo del Marqués de Mejorada) todo lo demás de cualquiera materia que sea; tendrase entendido en el Consejo de Indias como asimismo haber puesto la de guerra y Hacienda al cuidado de D. Joseph de Grimaldo*<sup>245</sup>.

---

*La pluma, la mitra y la espada. Estudios de Historia Institucional en la Edad Moderna*, Madrid, 2000, pp. 95-130; M. Gómez Gómez, *Forma y expedición...*, “La nueva tramitación de los negocios... y Actores del documento. Oficiales, archiveros y escribientes... M<sup>a</sup> V. León Sanz, “Administración y política en el siglos XVIII: Las secretarías de Estado y del despacho”, en *Crónica Nova*, 1995, n<sup>o</sup> 22, pp.185-209, entre otros muchos obras.

<sup>242</sup> Vid. M. Gómez Gómez, “La nueva tramitación de los negocios...”, p. 208.

<sup>243</sup> Vid. J. A. Escudero, *Las Secretarías de Estado...*, t. 1, p. 290.

<sup>244</sup> En opinión de J. A. Escudero en realidad la resolución de los asuntos quedaron en manos de Orry enviado por Luis XIV. El ministro actuaba en la sombra con la intención de poner orden a la destartada hacienda española. *Ibidem.*, pp. 292-293.

<sup>245</sup> Real decreto 11.07.1705. A.G.I., Indiferente General, 260. Citado por M. Gómez Gómez, *Forma y expedición...*, p. 34, nota 20.

En realidad, el decreto de 1705 sólo formalizó lo que dos años atrás el monarca había establecido. Por tanto, no se modificaron las competencias de cada una de las dos secretarías de Estado y del despacho, simplemente el Consejo de Indias debía remitir ahora todos los asuntos relacionados con la guerra y la hacienda de Indias a Grimaldo. El resto de sus asuntos, esto es, las consultas relacionadas con el gobierno político y la justicia de aquellos territorios debía remitirlos al marqués de Mejorada a fin de que éste los despachara con el monarca. En este sentido, señala M. Gómez que las secretarías del despacho satisfacían las aspiraciones de los nuevos monarcas, ya que a través de ellas los asuntos que le eran remitidos quedaban centralizados en pocas manos, logrando que hombres de su confianza filtraran y depuraran los asuntos antes de ponerla en su conocimiento, a fin que pudiera tomar su directa<sup>246</sup>.

Además, cuando la Corte hubo de trasladarse a Burgos con motivo de la guerra de Sucesión, el monarca expidió una real cédula el 27 de julio de 1706 a fin de salvaguardar la integridad de los sellos reales en caso que los mismos hubieren sido usurpados por la administración del archiduque. La cédula dirigida a las autoridades indianas ordenaba que por razones de seguridad no diese cumplimiento a aquellos documentos que hayan sido expedidos desde el 19 de junio en adelante y que sólo considerasen como válidos aquellos que cumpliesen las siguientes formalidades:

*...no le deis cumplimiento en manera alguna, si no fuesen firmados o señalados del Duque de Atrisco como presidente que es de mi Consejo de las Indias, y de los Ministros que con él firmaron, refrendados de uno de mis dos secretarios de Estado y del despacho universal Marqués de Mejorada, o Don Joseph de Grimaldo, sellados con mi sello secreto...*<sup>247</sup>.

Dicha real cédula fue expedida y comunicada a las Indias a través de la vía reservada, firmada por el monarca y refrendada por el secretario de Estado y del despacho José de Grimaldo sin que interviniese en su expedición el Consejo de Indias.

Años más tarde y tras varios cambios en la vida política<sup>248</sup> y familiar del monarca<sup>249</sup>, su ministro Jean Orry propuso la creación de cuatro secretarías

<sup>246</sup> Vid. M. Gómez Gómez, "La nueva tramitación de los negocios...", p. 208.

<sup>247</sup> Real cédula 27.07.1706. A.G.I., Indiferente General, 542 L. 1, ff. 68-72.

<sup>248</sup> Entre 1706 y 1714 se libró en la península la guerra de Sucesión misma que se dio por concluida tras la firma del Tratado de Utrecht. Vid. W. Coxe, *España bajo el reinado...*, 471 y ss.

<sup>249</sup> En el mes de febrero de 1714 falleció la reina María Luisa y en septiembre de ese mismo año contrajo matrimonio por poderes con Isabel de Farnesio. Vid. H. Kamen, *Felipe V...*, p. 121.

de Estado análogas al sistema administrativo francés. Según su proyecto, las competencias de cada una de las secretarías debían establecerse siguiendo un criterio material, pero manteniendo el antiguo complejo de competencias geográficas<sup>250</sup>. Su programa alcanzaba de manera global los órganos más importantes de la administración central: consejos y secretarías del despacho. Según ha señalado Martínez, el ministro Orry no se planteaba grandes cambios que suscitaran un rechazo absoluto de los tradicionales órganos de la administración, sino que optó por la construcción de un entramado paralelo, que sin estridencias innecesarias lograra el objetivo último de ir sustituyendo progresivamente a los consejos por las secretarías del despacho, de las cuales él mismo formaría parte<sup>251</sup>.

Por tanto, se proyectó la creación de cuatro Secretarías del Despacho: Estado, Justicia, Guerra y Marina e Indias. La materia de hacienda debía quedar a cargo de un veedor general encargado de mantener contacto con las cuatro secretarías y que estaría auxiliado por un Intendente Universal. Para el caso que nos ocupa, el proyecto de Orry pretendía que en la Secretaría de Marina e Indias se despacharan las siguientes materias:

*La correspondencia con los virreyes, gobernadores de provincias y particulares. Sus nombres, apellidos, calidades y países. La jurisdicción de todos, gajes, número de tropas de que debe componerse su guarnición. Su sueldo y asignación. Los arzobispos, obispos, capítulos, abades, priores, conventos de uno y otro sexo, parroquias, número y nombres de los eclesiásticos y religiosos; provincias y lugares donde están las rentas de cada uno y de su naturaleza. La de todas las encomiendas, su situación, rentas, quién las posee. Sus cargas futuras, a favor de quién y por qué tiempo. Los tribunales, corregimientos, alcaldías y otras jurisdicciones, contadores, su sueldo y ejercicio. Las casas de moneda, oficiales, gajes y adonde están situadas. Los administradores, arrendadores de rentas reales, el nombre de cada una, su producto, cargas y lo que produjeron desde el año de 1640. Que respecto de haberse formado una Junta para la Hacienda de Indias y manutención de tropas, asistirán a ella este secretario y el de guerra, todo lo que mira a la Marina, compra y construcción de báseles, sus fondos para que SM dará consignación*<sup>252</sup>.

<sup>250</sup> Vid. J. A. Escudero, *Las Secretarías de Estado...*, t. 1, p. 298.

<sup>251</sup> Vid. I. Martínez Navas, "La división de la materia administrativa en el reinado de Felipe V y la real Cédula de 18 de mayo de 1747", en *XIII Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano*, Puerto Rico, 2003, p. 524.

<sup>252</sup> A.H.N., Estado L. 696d, letra s; L. 3497; Publicado por J. A. Escudero, *Los Secretarios...*, pp. 301.4 y en *Los Orígenes del Consejo*, t. 1, pp. 52-53. Si bien el contenido de las competencias que correspondían a la Secretaría de Estado y del Despacho de Marina e Indias no quedaron reflejados en el real decreto de 30.11.1714, al menos dicho proyecto de Orry sirvió de base para la posterior ordenación oficial de las Secretarías de Indias. Vid. M. Gómez Gómez, *Forma y expedición...*, p. 36.



Por otro lado, a la Secretaría de Estado y del Despacho de Justicia le correspondió, entre otras materias, todo lo relacionado con el estado de los consejos, entre ellos el de Indias, para lo cual *todos los consejos debían remitir la lista de los que en ese momento ocupaban los empleos con sus nombres y apellidos, méritos, literatura, costumbres, naturaleza, gajes y retribuciones, límites de su jurisdicción... Las consultas de los consejos sobre todo lo de eclesiástico y las de procedimientos de justicia entre partes civiles o criminales. Y todo lo demás dependiente de eclesiástico y Justicia*<sup>253</sup>.

Finalmente el proyecto de Orry vio la luz con la promulgación del real decreto de 30 de noviembre de 1714. En él se crearon formalmente las cuatro secretarías del despacho antes mencionadas, la Veeduría y la Intendencia Universal<sup>254</sup>. El decreto a diferencia del proyecto nada mencionó sobre las competencias que le correspondía a la Secretaría de Marina e Indias, pero su denominación permitía conocer de manera genérica sus competencias. A todos los titulares de la secretarías del despacho se les concedió el título y empleo de secretario de Estado<sup>255</sup>, lo que les permitía despachar directamente con el monarca<sup>256</sup>.

Por lo que respecta al Consejo de Indias, no debemos olvidar que fue en este año cuando se puso en marcha el decreto de 10 de noviembre de 1713, el cual, amplió su planta y reestructuró la forma de despachar los asuntos<sup>257</sup>. Además, en este mismo decreto fue creada la Junta de Hacienda Indias<sup>258</sup>. De manera que entre los años de 1713 y 1715 éste órgano colegiado tuvo competencias básicamente en materia de justicia y de gobierno. Debiendo enviar sus consultas a la recién creada Secretaría de Estado y del Despacho de Marina e Indias.

---

<sup>253</sup> Vid. J. A. Escudero, *Las Secretarías de Estado...*, t. 1, p. 303.

<sup>254</sup> Nov. Recop. 3.6.4.

<sup>255</sup> Convertirse en secretario de Estado, esto es, aquellos que habían recibido el título de secretario del rey para trabajar al lado de éste. Vid. J. A. Escudero, *Las Secretarías de Estado...*, t. 1, p. 233.

<sup>256</sup> Para ocupar la titularidad de los órganos recién creados fueron nombradas personas expertas y de reconocido prestigio, entre ellos, Bernardo Tinajero de la Escalera como el de Estado y del despacho de Marina e Indias, José Grimaldo como secretario de Estado y del despacho de Estado, Manuel Fernández Durán en la de guerra, Manuel Vadillo y Velasco en Justicia y Gobierno Político. El cargo de intendente Universal de Hacienda se concedió al obispo de Girona y la Veeduría recayó en Orry. Vid. M. Gómez Gómez, *Forma y expedición...*, p. 35.

<sup>257</sup> A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 58v.-62v; 827.

<sup>258</sup> En los días posteriores a la reforma el Consejo remitió al monarca sendas consultas planteando dudas acerca de si debía o no despachar algunas resoluciones ya adoptadas por el Consejo en materias atribuidas a la reciente Junta de Hacienda de Indias. Consulta 17.11.1713. A.G.I., Indiferente General, 827.

El Consejo de Indias intentando recuperar su posición dentro del panorama político decidió enviar al monarca una *Representación exponiendo las reglas y leyes, que ha observado para el gobierno de ellas; desvelo, y dilatado tiempo que se causó en su formación, y perjuicios que se podrían ocasionar de alterarlas*<sup>259</sup>, buscando convencerle de retornar las cosas al estado al que se encontraban antes de las reformas de 1713.

Su autor, el entonces fiscal del Consejo, José Agustín de los Ríos, señalaba que los distintos principios que regían la organización territorial de las Indias, esto es, gobierno, justicia, hacienda y asuntos eclesiásticos le eran propios al Consejo de Indias y el arrancarlos de su conocimiento generaría graves inconvenientes a la Monarquía<sup>260</sup>. La citada *Representación* indicaba que la mayor parte de los asuntos que conocía el Consejo eran *de puro gobierno y su despacho absolutamente distinto de todas las materias que en todos los demás consejos se tratan y despachan*<sup>261</sup>. Aludía que en materia de justicia el Consejo tenía prohibido por leyes y ordenanzas conocer de pleitos entre partes<sup>262</sup>, sólo se veían residencias que eran de la provisión del

---

<sup>259</sup> B.P.R. Mss II/844.

<sup>260</sup> En realidad el fiscal lo que buscaba era “defender una Monarquía con criterio conciliar/judicialista frente a otra ministerial/gubernativa que los borbones pretendían implantar”. Vid. J. A. Escudero, *Las Secretarías de Estado...*, t. 1, p. 232.

<sup>261</sup> Entre los principales asuntos se encontraba lo relacionado la provisión de oficios, conocimiento de cualquier asunto remitido desde las Indias. Una materia de vital importancia para el gobierno de Indias lo era el comercio y la navegación. En cuanto a esto último el Consejo *entiende despachos y recibimientos de Armadas en el de los navíos de permisión y registro que salen de los Puertos de España y en los que se despachan de Canarias para las Islas y costas de Barlovento, en fábricas y en carenas de navíos, en arribadas de Navíos, a Puertos o Islas de Indias*. También todo lo relacionado con el Real Patronato, la organización del gobierno territorial y todo lo relacionado con las Audiencias. Asimismo contaba con atribuciones para creación de los *estatutos y ordenanzas municipales que se acostumbran hacer*, previa consulta a SM para su aprobación. Todo lo perteneciente a la situación de los indios, *su conservación, su libertad, su buen tratamiento y censos de Indios; todo lo que mira a las encomiendas de indios y pensiones, a las confirmaciones o caducidades de las encomiendas, al modo de tratar por parte de los encomenderos; reconocimiento de todos los servicios de los beneméritos de Indias, sus sueldos y situados de las plazas de islas y de tierra...* B.P.R. Mss II/844.

<sup>262</sup> *En el Consejo de Indias y sus salas de Gobierno y Justicia no hay pleitos sobre sucesión de mayorazgos, ni tenutas, no hay fuerzas, porque en más de nueve años sólo he visto una, no hay pleitos de testamentos, ni materias de últimas voluntades, ni tutelas, no hay concursos ni pleitos de acreedores para sustanciarlos, ni graduarlos, no hay contratos, pleitos ni demandas entre partes, sobre arrendamientos de casas, tierras o raíces. No hay vías ejecutivas, ni vienen a este Consejo por apelación de las Audiencias, y jueces ordinarios de las Indias, no hay pleitos sobre censos, compras, ni ventas, las causas criminales todas las sustancian y fenecen en las Indias, sin que al Consejo vengan en apelación ninguno, porque allá se ejecutan las sentencias. Salvo en el caso en que por SM o el Consejo se comete el conocimiento de una causa y se manda que el Juez de Comisión o Audiencia a quien se comete la sustancie y ponga en estado de sentencia para que citadas*

monarca, pesquisas y visitas que se cometían, segundas suplicaciones, causas de comisos<sup>263</sup> y arribadas cuando se reducían a juicio contencioso, así como las apelaciones de la Casa de la Contratación de Sevilla. Otra de las materias propias del conocimiento del Consejo era todo aquello relacionado con la real hacienda indiana<sup>264</sup>, por lo que pretendía convencer al monarca de cesar del conocimiento de las finanzas indianas a la recién creada Junta de Hacienda de Indias. Para ello se esforzó en demostrar que el Consejo nunca había contado con la capacidad de librar ni un solo real de plata por sí mismo, siempre se había consultado con el monarca antes de llevar a la práctica cualquier política en materia hacendaria.

En principio el escrito del fiscal del Consejo no generó ningún cambio en la política reformista de Felipe V ya que su intención estaba indicada expresamente en el decreto de reforma: *«porque mi voluntad es que en esta reforma se uniformicen en todo los tribunales de la corte»*. En realidad, la marcha atrás de algunas de las modificaciones vino dado por otras razones, entre ellas, la caída en desgracia del promotor de las reformas, quien hubo de retirarse a Francia. Las reformas al Consejo de Indias de 10 de noviembre de 1713 fueron anuladas. Se restituyó al estado en que se

---

*las partes las remita al Consejo o que pronuncie sentencia, y oiga las apelaciones para el Consejo. No porque todo lo referido y toda cuantas causas y materias se ven en los Tribunales de España no lo hay en las Indias, porque todo lo hay, y los mismos pleitos, causas y dependencias, que en estos Tribunales, y muchos más de los que no hay en estos, que es todo lo tocante a Gobierno, y derechos municipales, y ordenanzas de las Indias tanto en puntos de Gobierno, como de Justicia. Pero todos se sustancian, ven y determinan en aquellas Audiencias sin que aquellos vasallos necesiten venir a España, ni a litigar al Consejo, sobre dicha calidad de pleitos por que se despoblarán las Indias, tanto de indios como de españoles, con gran detrimento de aquel reino, y notorio perjuicio para su conservación por lo mucho que sobre ello pudiera decirse. Ibídem.*

<sup>263</sup> Con la expedición de un real decreto de 10.01.1742 se ordenó al Consejo de Indias consultar antes a la Secretaría de Marina e Indias las decisiones tomadas en las causas de comisos antes de juzgar los asuntos de dicho género. El Consejo de Indias se quejó que este procedimiento no era práctico, porque para cada confiscación había tantas formalidades, que hasta la llegada de una de esas causas el expediente pasaba primero a la Contaduría para información, al fiscal para consulta y por último al relator para que hiciera el informe, después por tanto, cuando el secretario correspondiente tomaba la decisión y consultaba al Rey juntando todos los documentos, se hallaba que si era necesario hacer este camino largo para todas las confiscaciones ya vistas no se terminaría nunca. A.G.I. Indiferente General, 800. También en A.H.N., Cedula de Ayala t. 10, ff. 113, nº 192. Vid. G. Bernard, *Le Secrétariat d'État...*, pp. 18-19.

<sup>264</sup> *...para sus reglamentos y aumentos, castigo de abusos y fraudes, en la observación de sus almonedas, para el conocimiento de su disminución, o aumentos en los tributos de indios, sobre cuyo punto hay que decir infinito, en quintos diezmos, y veinte años, de la plata, el oro y demás metales, en los almojarifazgos, en las evaluaciones y aforos, en los oficios vendibles, y renunciabiles, en los espolios, y todas las administraciones de las vacantes de obispos...* Id.

encontraba según las plantas establecidas en los reales decretos de 1691 y 1701. Por lo que respecta a sus competencias, algunas de ellas, no quedaron totalmente aclaradas. Los asuntos militares fueron reintegrados a la Junta de guerra de Indias<sup>265</sup>; de la recién creada Junta de Hacienda de Indias nada se mencionó y en lo relativo a las competencias de gobierno y justicia se estableció lo siguiente:

*Últimamente ordeno al Consejo que continuando su mayor aplicación y satisfaciendo a mi deseo de la más recta, y pronta administración de Justicia observen y guarden todo lo prevenido por las Leyes de Indias, así en la puntal asistencia de los Ministros, como en la expedición de los negocios, y prefiriendo en ella las causas criminales, y de presos, no obstante que sean menos antiguas, y las que pidieren más pronta providencia en Gobierno, y principalmente en materias Eclesiásticas, y las de las Misiones, y propagación de la fe, que estas han de ser las primeras, por interesarse en ellas la Religión y mayor servicio de Dios, y para que los fiscales se puedan enterar de la naturaleza de todos los negocios y causas, y puedan pedir su expediente según esta orden y conforme juzgar en convenir, se les pasará por las secretarías copia de los índices de la Cartas que vinieren en cada ocasión de Galeones, Flotas y Navíos sueltos*<sup>266</sup>.

Con la intención de estar enterado de la situación de su gobierno, Felipe V decidió que todos sus consejos, entre ellos el de Indias, expusieran sus observaciones acerca de los males causados a la religión y al Estado durante el último gobierno<sup>267</sup>. Así un real decreto de 10 de febrero de 1715 recordó al Consejo su deber como órgano asesor por excelencia en relación con asuntos de aquellos territorios para *que vigile y trabaje con toda la mayor aplicación posible al cumplimiento de esta obligación en inteligencia de que mi voluntad es que en adelante, no sólo me represente lo que juzgare conveniente y necesario para su logro con entera libertad cristiana, sin detenerse en motivo alguno, por respeto humano sino que también replique a mis resoluciones siempre que juzgare (por no haberlas yo tomado con entero conocimiento) contraviene a cualquiera cosa que sea...*<sup>268</sup>.

Por otra parte, la organización de las recién creadas secretarías de Estado y del despacho también fue modificada. El 28 de abril de 1715 se suprimieron la Veeduría General y la Secretaría de Estado y del Despacho de Marina e Indias, repartiendo sus negocios entre las restantes secretarías

<sup>265</sup> La Junta de guerra se continuará, y restablecerá en la forma que prescriben las Leyes, y Ordenanzas, y como se tenía, y observaba antes del decreto de Nueva Planta de diez de noviembre de mil setecientos trece.

<sup>266</sup> Real decreto 05.08.1715. A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 90r-97r; 827.

<sup>267</sup> Vid. W. Coxe, *España bajo el reinado...*, p. 528.

<sup>268</sup> Real decreto 10.02.1715. A.G.I., Indiferente General 829, ff. 89r-90r; 583 L. 3, ff. 259-262. A. Muro Orejón, *Cedulario Americano...*, t. II, p. 429.

de Justicia, guerra y la Intendencia General de Hacienda<sup>269</sup>, lo que significó sustituir el criterio geográfico por el material<sup>270</sup>. En opinión de Fernando Muro esta situación benefició al Consejo de Indias, ya que las competencias de las secretarías quedaron confusamente repartidas, por lo que el Consejo continuó en solitario preparando los despachos y cédulas requeridos para el gobierno de las Indias<sup>271</sup>.

El año de 1717 fue muy importante para la organización de la administración de la Monarquía. Por un lado, se expidieron decretos que limitaron las competencias del Consejo de Indias, y por el otro, se promulgaron disposiciones de reasignación de atribuciones a las secretarías de Estado y del despacho.

Entre las primeras reformas un real decreto de 30 de enero de 1717 estableció que en adelante el Consejo sólo debía resolver asuntos tocantes a *causas contenciosas y negocios de mera justicia*, prohibiéndole conocer y despachar asuntos relacionados con todo lo gubernativo, económico y providencial de Indias, pues estas materias serían tramitadas a través de la vía reservada:

*...se abstengan desde hoy así el Consejo de mandar expedir, como las secretarías de formar, y dirigir por ellas cédulas, despachos, ni otras órdenes de gobierno, porque todo lo que fuere de esta naturaleza y calidad, y en cualquiera manera y de todas las cosas de la dependencia del Consejo, tocara a lo gubernativo, económico, y providencial, lo reservo para mandarlo ejecutar, por la vía reservada, como tuviere por conveniente, Y si al Consejo se le ofreciere en los negocios que expidiere, hay en las noticias que tuviere cosa digna de mi real noticia, me lo podrá hacer presente*<sup>272</sup>.

A partir de este momento, el Consejo tuvo prohibido expedir cédulas, despachos o cualquier orden dirigida a las Indias relacionada de forma directa o indirecta en materia de gobierno. En contrapartida, dicho decreto concedió a la vía reservada a través de las secretarías de Estado y del despacho la facultad de formar y expedir documentos en nombre del monarca y dirigirlos a las Indias<sup>273</sup>. Por otro lado, el Consejo conservaba su plena facultad consultiva, así como la autonomía en la resolución de los

---

<sup>269</sup> Vid. J. A. Escudero, *Los secretarios de Estado...*, t.1, pp. 307-8. G. Bernard, *Le Secrétariat d'État...*, p. 31; M. Gómez Gómez, *Forma y expedición...*, p. 36.

<sup>270</sup> Vid. I. Martínez Navas, "La división de la materia...", p. 529.

<sup>271</sup> F. Muro Romero, "Instituciones de gobierno...", p. 170.

<sup>272</sup> Real decreto 20.01.1717. A.G.I., Indiferente General, 829 ff. 107vº-108vº; 542 L. 2, ff. 41-43. A. Muro Orejón, *Cedulario Americano...*, t. 2, pp. 529-30.

<sup>273</sup> Vid. M. Gómez Gómez, *Forma y expedición...*, p. 38.

negocios de mera justicia, pero perdía su exclusividad en la comunicación con las Indias.

Como era natural, la expedición de este decreto no fue grato al Consejo, de ahí que se apresurara a solicitar una rectificación del mismo<sup>274</sup>. A través de un real decreto de 11 de septiembre de 1717 Felipe V no sólo aclaró el contenido del decreto de enero, sino que además especificó los asuntos en los que el Consejo podía intervenir y aquellos que quedarían reservados al conocimiento de la vía reservada<sup>275</sup>. De esta manera, el Consejo conservaba el despacho de los asuntos relacionados con el gobierno municipal de las Indias y el cumplimiento de sus leyes, siempre y cuando no tuvieran conexión con la hacienda, la guerra, el comercio y la navegación indiana. Conservó la atribución de conceder licencias para pasar a Indias, así como la tramitación de todo lo relativo con el regio patronato indiano, debiendo en todo caso, consultar al monarca cualquier resolución que tomare sobre esta temática. Respecto a las encomiendas, el monarca también se reservó el derecho de confirmación<sup>276</sup>. En materia de gobierno el Consejo únicamente

<sup>274</sup> A.G.I., Indiferente General, 1057.

<sup>275</sup> Real decreto 11.09.1717. *Enterado de lo que el Consejo me tiene representado sobre las dudas que se le ofrecen, en la inteligencia y práctica de mi Real decreto de veinte de enero de este año, en orden al modo de despachar los negocios que ocurren en él, para el alivio de las partes, y que no experimenten dilación:*

*He resuelto que todo lo que mira directa, o indirectamente al manejo de mi Real Hacienda, guerra, Comercio, y Navegación de aquellos a estos Reinos, provisiones de empleos y cargos, y órdenes respectivas de estas tres clases, y sus incidencias y dependencias, corra privativamente por la Vía Reservada quedándose al cuidado del Consejo el participarme las noticias de que yo mandare me informe, y no en otros términos, tampoco procederá el Consejo a confirmar las encomiendas que sitúan los Virreyes, Presidentes y gobernadores, ni estos usarán en adelante de esta facultad, porque la reservo en mi suprema potestad y regalía, para ejercitarlas distribuyéndolas a mi arbitrio entre los que examinados sus servicios tuviere por mas beneméritos.*

*Y si al presente o en adelante se hallare el Consejo con noticia de haber algunas vacantes, o estuvieren pendientes sus confirmaciones, me las participarán luego y lo continuará sucesivamente, pero todo lo respectivo al gobierno municipal de las Indias, y a la observancia de sus Leyes que no sean opuestas a esta mi resolución (pues a las que lo fueren es mi Real Voluntad derogarlas en aquella parte sola que lo fuesen) correrá como hasta aquí sin novedad alguna por el Consejo, como también la facultad de conceder las licencias para pasar aquellos dominios los que lo desearan dentro de los límites de las leyes y ordenanzas establecidas sobre este asunto. Igualmente quiero que todo lo concerniente a mi Real Patronato, las providencias y correspondencias a él anejas corran como han corrido por el Consejo, pero en cuanto a las provisiones de esta clase, me consultara el mismo Consejo en la forma regular, sin proveer por sí materia alguna... y sobre todo lo expresado mandaré Yo por la Vía Reservada expedir algunas órdenes, sobre cualesquier materias, o clases que sean... A.G.I., Indiferente General 829, ff. 113r-114r; 824; 542, L. 2, ff. 73-75.*

<sup>276</sup> La extracción al Consejo de los asuntos relacionados con las encomiendas fue muy importante. El real decreto de 26.06.1718 despachado a través de la Secretaría de Estado y

podía elaborar las consultas para provisión de oficios vinculados con la justicia y otros empleos puramente políticos, pero sin relación con los cuatro ramos mencionados<sup>277</sup>. Solo conservó íntegra su competencia en materia de justicia. En contrapartida, la vía reservada le correspondía lo relativo a la hacienda, guerra, comercio y navegación, incluida la provisión de empleos y cargos. A partir de entonces, en opinión de M. Gómez, el Consejo de Indias quedó excluido de la toma de decisiones en materia de gobierno y fue configurado simplemente como órgano específico de consulta y de justicia<sup>278</sup>.

Pese a la pérdida tan grande de competencias, este mismo decreto dejó la puerta abierta para que el Consejo pudiera intervenir en todos los asuntos que en principio se le habían extraído, dándole la posibilidad de opinar en todos aquellos remitidos por el propio monarca. De manera que el Consejo siguió conociendo y resolviendo expedientes relacionados con materias de gobierno, hacienda y guerra sólo que remitidos a través de la vía reservada. En otras palabras, el rey por mediación de sus secretarías de Estado y del despacho enviaba un asunto al Consejo para que éste lo estudiara y emitiera su opinión, lo que en la práctica significó, la intromisión del Consejo en los asuntos que el decreto de septiembre de 1717 quiso arrancar de su conocimiento.

Tras la expedición de este real decreto, el Consejo de Indias intentando dar cumplimiento a lo ordenando por Felipe V dispuso que se enviaran las respectivas órdenes a todas las autoridades indianas<sup>279</sup>. Pero esta situación generó confusión respecto a las atribuciones documentales del Consejo y las

---

del Despacho de guerra, Marina e Indias resolvió incorporar a la hacienda real todas las encomiendas vacantes o sin confirmar. Vid. L. Navarro García, "Felipe V y el Consejo de Indias: el debate de las encomiendas", en *Boletín de Temas Americanistas*, nº 3 (1983), pp. 5-11.

<sup>277</sup> *En cuanto a la provisión de presidencias, plazas de administración de justicia, y gobierno, corregimientos, alcaldías mayores, alguaciles mayores, de regidores, y demás ministros de las Audiencias, y Cabildos seculares, escribanías mayores de provincia, reales y del número, y otros empleos puramente políticos, y sin conexión próxima ni remota con las expresadas materias de hacienda, guerra, comercio y navegación. Me consultará el Consejo como lo practicaba antes poniéndome los sujetos que tuviere por más hábiles, y dignos para que yo elija el que fuere mas de mi real agrado, quedando sin uso y extinta la Cámara por no necesitarse...*, Real decreto 11.09.1717. A.G.I., Indiferente General 829, ff. 113r-114r; 824; 542, L. 2, ff. 73-75.

<sup>278</sup> Vid. M. Gómez Gómez, *Forma y expedición...*, p. 37.

<sup>279</sup> Real decreto 13.11.1717. *Para que los virreyes, presidente, audiencias, gobernadores, arzobispos, obispos y demás ministros de las Indias, observen lo resuelto por V. M. sobre la forma de despacharse los negocios de aquellos reinos.* A.G.I., Indiferente General, 432, L. 48, f. 61. B.N., Mss. 19251. ff. 31-32. A. Muro Orejón, *Cedulario Americano...*, t. II, pp. 520-522.

concedidas a la vía reservada, sobre todo, porque según la Recopilación de Indias las cédulas y demás provisiones que no fueran firmadas por los del Consejo de Indias debían ser “obedecidas y no cumplidas”<sup>280</sup>. Con el fin de paliar este inconveniente legal, el 22 de noviembre de ese mismo año, el rey envió a las autoridades indianas un nuevo decreto donde aludía la necesidad de adaptar las viejas leyes a las nuevas circunstancias de los tiempos, por lo que decidió derogar todas aquellas normas anteriores al 20 de enero de 1717.

A partir de este momento todos los asuntos relacionados con la real hacienda, guerra, comercio y navegación debían enviarse a la vía reservada. Excepcionalmente y por una sola ocasión permitió al Consejo comunicar a las autoridades indianas el nuevo marco legal establecido en los decretos antes señalados<sup>281</sup>. Además, el mencionado decreto declaró expresamente que la dirección de las cédulas y despachos en lo gubernativo corriera por la

<sup>280</sup> Recop. Indias 2.1.23. Sobre este tema puede verse A. García-Gallo, “La ley como fuente...”, B. González Alonso, “La fórmula “Obedézcase pero no se cumpla” en el Derecho castellano de la Baja Edad Media”, en *Anuario de Historia del Derecho Español*, nº 50 (1980), pp. 469-488; V. Tau Anzoátegui, *La ley en América Hispana*, Buenos Aires, 1992, pp. 67-143.

<sup>281</sup> ...observando que la alteración y novedad que en tiempo han tenido el gobierno, tráfico y comercio de las Indias algunas de aquellas reglas y leyes oportunas y convenientemente establecidas después de su conquista no son hoy tan acomodados al mejor gobierno; fui servido resolver entre otras cosas, que la dirección de las cédulas y despachos en lo gubernativo, corriera por la vía reservada como antes por la Secretaría del Consejo, para que así experimentasen las importancias de aquellos reinos, y alivio de mis vasallos, más propensa mi real protección y autorizadas mis reales órdenes como de esto más necesitadas sus distancias conforme ha entendido el Consejo por mi Real decreto de veinte de enero de este presente año. En cuya consecuencia y para que mi Real deliberación tenga el más exacto y universal cumplimiento, y no pueda tomarse pretexto para retardarle de las antiguas referidas leyes que disponen sobre la forma de las cédulas y despachos, y especialmente previenen que hayan de ser pasadas por el Consejo para ser cumplidas.

He tenido por conveniente declarar, como declaro, que todas las expresadas Leyes, Cédulas, decretos y Resoluciones anteriores al citado decreto de veinte de enero, y que a él en cualquiera manera se opongan quedaron insubsistentes, y sin alguna fuerza y efecto como de necesidad revocadas, y anuladas y yo de nuevo las revoco, cavo y anulo en esta parte, y mando al Consejo que para que llegue a noticia de todos, y no se pueda alegar en ningún tiempo del caso ignorancia de esta mi Real resolución, haga expedir luego órdenes, circulares a los Virreyes, Audiencias y demás Tribunales, gobernadores, y Justicias de todos los Reinos de las Indias, formándose para este efecto sólo y no para otro en adelante las Cédulas en el método, y con la solemnidad que se hacía antes del mencionado decreto, usando en ellas de las cláusulas del motu proprio, cierta ciencia, poderío real y absoluto, con expresión de las leyes, y partes que en ellas se anulan, y revocan, y las demás firmezas de una pragmática y pública sanción más propia de mi Real soberanía en aquellos dominios poblados de los Vasallos de esta Corona, después de conquistarlos por mis gloriosos predecesores, a cuyo fin y para que yo quede enterado podrá el Consejo en mis Reales Manos antes de su expedición un tanto del despacho, que acordare formar. Real decreto 22.11.1717. A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 110v-112r.



vía reservada, de ahí que en opinión de Ayala con esta disposición el monarca logró conceder *plena fuerza, vigencia y cumplimiento* a las disposiciones expedidas por las secretarías de Estado y del despacho<sup>282</sup>.

Por otro lado, a fin de darle mayor autenticidad a las disposiciones emanadas a través de la vía reservada y aumentar así la capacidad documental del secretario del despacho en su comunicación con las Indias<sup>283</sup>, Felipe V ordenó que en todo los despachos que se expidieren por la vía reservada no se tomara la razón en la cara donde estuviere la firma real, sino a la vuelta o en la cara siguiente, para lo cual el Consejo deberá prevenir lo conveniente a su cumplimiento<sup>284</sup>.

Sin embargo, tampoco el secretario del despacho gobernó en solitario de hecho la participación de dos instituciones en el gobierno indiano favoreció la comunicación mutua de las resoluciones adoptadas. Señala la mencionada autora que el propio secretario del despacho, Miguel Fernández Durán, remitió al Consejo de Indias un extracto de las *órdenes y providencias que he mandado dar para las Provincias del Perú, en despachos expedidos por la vía reservada*<sup>285</sup>.

Del análisis de los decretos expedidos en 1717 que modificaron las competencias del Consejo se puede comprender que dicho órgano colegiado mantuviera al menos intactas sus atribuciones como órgano jurisdiccional y consultivo, incluso en relación con los cuatro ramos de hacienda, guerra, comercio y navegación. También conservó algunas competencias en materia de gobierno toda vez que le reservaron el conocimiento de asuntos del

---

<sup>282</sup> J. M. de Ayala, *Notas a la Recopilación...*, p. 18. Posteriormente el real decreto de 15.06.1751 Fernando VI prohibió al Consejo de Indias expedir cualquier documento destinado a recibir su firma si antes no eran remitidas a la vía reservada que las transmitía al secretario de Cámara del rey para que éste las firmase, de allí los documentos debían retornar a la secretaría del despacho correspondiente que a su vez los retornaba al Consejo. en 1760 el Consejo se quejó ante el monarca que la secretaría de Estado y del despacho guardaba indefinidamente bajo el pretexto de hacerlas firmar por el Rey. El Consejo de Indias hizo notar que era el único Consejo a quien el rey había impuesto a esta obligación, y pidió volver a la práctica de lo que se hacía antes, es decir, enviar directamente las cédulas a la Secretaría de Cámara, a pesar de todo el rey confirmó el decreto de 1751 en su totalidad. A.G.I., Indiferente General, 800. Vid. Bernard, *Le Secrétariat d'État...*, p. 19.

<sup>283</sup> Vid. M. Gómez Gómez, "La nueva tramitación de los negocios...", p. 215.

<sup>284</sup> Real decreto 26.11.1717. A.G.I., Indiferente General, 542 L. 2, f. 30.

<sup>285</sup> A través de un real decreto fechado el 18.10.1718 el mencionado secretario también remitió al Consejo una *copia del Reglamento que se ha formado y remitido a Buenos Aires para el mejor gobierno, economía y disciplina militar de aquella guarnición y así mismo otra de la instrucción ejecutada en 14 de febrero del año de 1716 para la expedición de la escuadra que mandé enviar al Mar del Sur al cargo de al jefe de la cuadra don Juan Nicolás Martínez a fin que el Consejo se halle enterado de todo*. A.G.I., Indiferente General, 542 L. 2, f. 81. Vid. M. Gómez Gómez, "La nueva tramitación de los

gobierno municipal, así como la propuesta para provisión de oficios políticos, expedición de licencias para pasar a las Indias, todo lo concerniente con el real patronato y la obligación de velar por el cumplimiento de las Leyes de Indias<sup>286</sup>.

Además, en aquellos momentos en los que la Cámara de Indias fue extinguida, sus competencias eran absorbidas nuevamente por el Consejo. Aún así, en opinión de R. García, los mencionados decretos de enero y septiembre de 1717 fueron “un auténtico mazazo para las aspiraciones y la moral del Consejo” que no pudo evitar la pérdida de competencias, pero que sí pudo controlar la aplicación de semejantes disposiciones<sup>287</sup>.

La otra gran reforma llevada a cabo en este año de 1717 fue la redistribución de los negocios que debía conocer cada una de las secretarías de Estado y del despacho. De las cuatro secretarías que se habían establecido en 1715, el real decreto de 2 de abril las fusionó y sólo quedaron tres de ellas. Continuaron como titulares José Grimaldo en la Secretaría de Estado y Negocios Extranjeros y Miguel Fernández Durán en la de guerra y Marina. Para la nueva Secretaría de Justicia, Gobierno Político y Hacienda fue nombrando José Rodrigo Villalpando, marqués de la Compuesta.

Al no existir una Secretaría de Indias como tal, los asuntos sustraídos al Consejo fueron repartidos entre las existentes para España según se observa en el real decreto de 2 de abril de 1717 por el que se establecían los negocios que debían correr por la distintas secretarías<sup>288</sup>. A la de guerra y Marina se le atribuyeron competencias tanto para España como para las Indias<sup>289</sup> y el resto de los negocios indianos, así como *la formación de todas*

<sup>286</sup> Vid. I. Martínez Navas, “La división de la materia...”, p. 546.

<sup>287</sup> Vid. R. D. García Pérez, *El Consejo de Indias...*, p. 43.

<sup>288</sup> Vid. J. A. Escudero López, *Los orígenes del Consejo...*, p. 215.

<sup>289</sup> *La Secretaría del Despacho de guerra y Marina, debe correr con todo lo perteneciente a una y otra dependencia, según mis resoluciones con la nominación de Oficiales de guerra de mis Ejércitos de tierra y armada, y la formación de sus títulos, patentes, cédulas, nombramientos y demás despachos, tanto de España como de las Indias, y de los Ministros de guerra y Marina: todas las consultas que por cualesquiera Tribunales y Juntas particulares que yo mandare formar, u otros Ministros me hicieren: reglamentos que yo tuviere por bien expedir sobre el gobierno y manutención de mis tropas y armadas: decretos y resoluciones que yo tomare sobre su subsistencia en general y en particular: órdenes sobre descuentos, o liquidaciones que se debieren hacer en sueldos de Oficiales, Ministros, u otros cualesquier interesados dependientes de guerra y Marina: las instrucciones y órdenes que hubieren de darse en cualesquiera expediciones de mar y tierra que se hayan de hacer, y las órdenes que, o sobre consultas, o de mi Real deliberación procediere para los aprestos de mis Reales escuadras, flotas y navíos sueltos, y todo lo demás perteneciente a ello; como así mismo todo lo que tocara a Artillería, municiones, pertrechos y fábricas, así para las Tropas que componen mis Ejércitos, como para mis Armadas...queriendo, que todas las órdenes y resoluciones que en materia de*

*las cédulas y despachos que se hubieren de dirigir a ella en lo gubernativo y político quedaban en manos de la Secretaría de Justicia, Gobierno Político y Hacienda*<sup>290</sup>.

---

*guerra y Marina diere y tomare, dispositivas o sobre consultas, sean directamente despachadas por esta mi Secretaría del Despacho Universal. Nov. Recop. 3.6.5.*

<sup>290</sup> *La Secretaría del Despacho de Justicia, Gobierno Político y Hacienda deberá correr con las resoluciones que yo tomare sobre todas consultas de los consejos, órdenes o decretos que en materia particulares o generales les expidiere, como sobre las consultas, proposiciones, informes..., decreto de elecciones y nominaciones de Ministros, informes de sus calidades y todos los demás empleos políticos y mixtos de Policía y de Justicia; y por lo que toca a Indias, con la formación de todas las cédulas y despachos que se hubieren de dirigir a ellas en lo gubernativo y político: todas las nominaciones y concesiones sobre Dignidades o Beneficios Eclesiásticos, presentaciones y otras semejantes, como también otras cualesquiera gracias de Encomiendas de las Órdenes Militares y de las Indias, y demás mercedes que tenga relación o dependencia de mi Real Hacienda; y así mismo los de los Hábitos, Títulos, y otras que son de mi Regalía Real potestad: las resoluciones sobre consultas del Consejo y Cámara, o informes pertenecientes a estas materias, tanto tocantes a pretensiones de partes, como derecho de mi Soberanía, Regalía, o Patronato; Y todas las providencias que en general o en particular diere en todo que por su naturaleza incluye lo referido. Así mismo deberán correr por esta Secretaría todas mis resoluciones pertenecientes a mi Real Hacienda, tanto sobre consultas e informes, como en otra cualquiera materia; y todas las nominaciones, resoluciones o decretos que en esta materia tuviere que dar: todas las resoluciones que tomare sobre derechos, imposiciones o cobranzas de mis Reales haberes; y encargos o comisiones que para este fin se diera a los Tribunales, o Ministros que por regla general o comisión particular corrieren en estas dependencias; y todo perteneciente al útil, disminución o aumento del Comercio, en que en cualquier manera se interese mi Real Fisco, dentro de mis Reinos y con mis vasallos: todo lo tocante al beneficio y cobro de mis rentas y derechos reales absolutamente tanto en administración, como en arrendamiento: todos los libramientos u órdenes que diere yo a mí Tesorero General para gastos que se hubieren de hacer según los decretos que generalmente hubiere dado, tanto para la subsistencia de mi Casa Real, y todo lo a ella anexo como para la de las Tropas, o salarios de Ministros, u otras que por mis decretos particulares hubiere expedido por las otras Secretarías: la nominación y aviso de los Ministros de las Juntas particulares que por cualquiera de las referidas dependencias tuviere por conveniente formar, como todo lo que de ellas procediere, o se consultare y por que las instancias y memoriales de las partes para pagamentos, sueldos o salarios, u otros que yo mandare hacer, y ayudas de costas que tuviere por bien de dar en cualquiera de las dependencias de las otras dos Secretarías deben correr por ellas hasta mis Reales resoluciones; y como los libramientos que en virtud de estas se hubieren de despachar han de ser todos por la de Hacienda, tendrán en esto la correspondencia precisa pasando por avisos de aquellos a esta mis determinaciones, con bastante relación de los expedientes, para que por ellas se puedan formar en la Hacienda los libramientos u órdenes, y para que las partes tengan noticia de las resoluciones, una vez que estén tomadas, sobre sus pagamentos o socorros, se les responderá en la Secretaría por donde han corrido los mismos expedientes, que acudan a sacar el libramiento, para que lo puedan hacer de la Hacienda, estando ya prevenido. Y para que en la dirección y expedición de los negocios se proceda con toda claridad y distinción debida, y se eviten confusiones, deberán los secretarios repartir entre sus Oficiales los que a cada uno tocan; proporcionándolos con la igualdad posible, de manera que los de cada clase y naturaleza estén sin dividirse, y puedan siempre correr por una misma mano para su mayor inteligencia: y con motivo de*

Considerando el nuevo mapa de competencias asignadas tanto al Consejo, como a las secretarías de Estado y del despacho es posible comprender que el Consejo remitiera la mayor parte de sus consultas a la Secretaría de Justicia, Gobierno Político y Hacienda, mientras que la Junta de guerra de Indias lo hiciera a través de la Secretaría de guerra y Marina. Pero esta situación cambió en 1718 cuando el monarca ordenó que todas las dependencias de Indias corriesen por las Secretaría de guerra y Marina, con excepción de los asuntos eclesiásticos, los cuales debían despacharse a través de Secretaría de Justicia<sup>291</sup>. Dos años más tarde, los asuntos indianos se centralizaron en una única Secretaría titulada de guerra, Marina e Indias a excepción de los asuntos eclesiásticos que continuaron enviándose a través de las Secretaría de Estado y del Despacho de Justicia y Gobierno Político.

En enero de 1721 la estructura de las secretarías fue nuevamente reconfigurada. La Secretaría de guerra, Marina e Indias se escindió en dos, una dirigida a gestionar los asuntos de guerra y la otra los de Marina e Indias. Como secretario de Marina e Indias se nombró a Andrés de Pez, concediéndole al mismo tiempo la plaza de gobernador del Consejo de Indias<sup>292</sup> y como titular de la Secretaría de guerra fue nombrado al marqués de Castelar. A partir de entonces la Secretaría de Marina e Indias sería la encargada despachar con el monarca los asuntos remitidos por los órganos indianos y en especial, las consultas del Consejo de Indias.

Posteriormente, un real decreto de 1730 separó en dos negociados el despacho de los asuntos que se resolvían a través de la Secretaría de Estado y del Despacho de Marina e Indias:

*...Considerando conveniente que para la mejor dirección de los dos Negociados de Marina e Indias se sirvan con separación lográndose por este medio, mayor claridad y distinción en la expedición de las dependencias de una y otra clase*<sup>293</sup>.

Como resultado de dicho decreto cada uno de esos departamentos contó con una jerarquía de oficiales propia y separada totalmente del ascenso y

---

*formarse todo género de despachos, patentes, decretos, u otros expresados o no expresados, por mis secretarios del despacho universal, quiero, que no se tome bajo ningún pretexto en ellas, derechos ni gratificación alguna.* Nov. Recop. 3.6.5.

<sup>291</sup> Vid. Bernard, *Le Secrétariat d'État...*, p. 15.

<sup>292</sup> Comunicación dirigida al marqués de Tolosa con la noticia de haberse dividido en dos partes las dependencias de Indias y Marina, fiándolas al cuidado de Don Andrés de Pez y la de guerra encargándola al marqués de Castelar. Y confiriéndosele plaza en el Consejo de Indias. El Pardo del 08.01.1721. A.H.N. L. 3496, I. Vid. J. A. Escudero, "Los Secretarios de...", t. 3, p. 961.

<sup>293</sup> A.G.S., D.G.T., Inv. 16 -23, leg. 46. Citado por A. Perona, *Los orígenes del Ministerio de Marina*, Madrid, 1998, p. 105.

antigüedad<sup>294</sup>. Este nuevo cambio generado con la intención de lograr la especialización y consolidación de las secretarías del despacho, dio lugar a que en adelante y hasta mediados del siglo, el régimen ministerial estuviera integrado por cinco secretarías: Estado; guerra; Marina e Indias; Justicia y Gobierno Político; y Hacienda y Superintendencia. Contando cada una de ellas con sus propias competencias y gozando de amplios poderes ejecutivos<sup>295</sup>.

En los años siguientes continuaron de manera pausada las reformas a las atribuciones del Consejo de Indias. Mientras que algunas de ellas revitalizaron sus antiguas competencias como fue el caso de la real cédula de 1720 en la que debido a la precaria situación que padecía el Consejo, tanto para el despacho de sus asuntos, como para el pago de sus nóminas, Felipe V aceptó que éste volviera a ocuparse de cobrar y distribuir *lo que pertenece al producto de composiciones de tierras en las Indias, condenaciones y multas que se imponen en el Consejo*<sup>296</sup>. Pero dieciséis años más tarde otro real decreto le prohibió expedir cédula o provisión en que se mandara sacar alguna multa o condenación que no fuera entregado el despacho al ministro que tuviera a su cargo la referida comisión<sup>297</sup>. Pero las eternas quejas del Consejo ante el monarca por la falta de dinero para hacer frente a los gastos precisos de estrados, fiestas y otros gastos menores dieron como resultado que Felipe V decidiera mediante decreto expedido en febrero de 1743 restituirle la facultad de cobrar y distribuir las multas y penas de cámara que en justicia imponía para costear sus gastos<sup>298</sup>.

---

<sup>294</sup> Según afirma M. Gómez fue en 1754 cuando se hizo efectiva dicha separación, surgiendo como unidad administrativa independiente la Secretaría de Estado y del Despacho Universal de Indias de acuerdo con el Real decreto de 26.08.1754 (Nov. Recop. 3.6.9). Vid. M. Gómez Gómez, *Forma y distribución...*, p. 40. En cambio, en opinión de Dionisio Perona la división de los negociados de Marina e Indias se realizó a partir de la reorganización que José del Campillo hiciera a las secretarías de Estado y del despacho de Marina e Indias el 13.06.1742 y a una orden que años más tarde el marqués de Ensenada remitió a Bernardino Freire el 12.01.1745. Vid. D. Perona, *Los orígenes del Ministerio de Marina...*, pp. 137-38.

<sup>295</sup> Vid. M. Gómez Gómez, *Forma y expedición...*, pp. 39-40.

<sup>296</sup> Real Cédula 07.12.1720. Por el que los asuntos de la real hacienda y órdenes no corran privativamente por la vía reservada. A.G.I., Indiferente General, 652.

<sup>297</sup> Real decreto 27.10.1736. A.G.I., Indiferente General, 824. Vid. M. Gómez Gómez, "La nueva tramitación de los negocios...", p. 217.

<sup>298</sup> *Por cuanto por mi real decreto de 25 de febrero de 1743 he tenido a bien el volver a mi Consejo de las Indias la facultad que antes tenía de cobrar y distribuir las multas y penas de Cámara que impone para que su producto pueda costear sus gastos precisos de estrados, fiestas votadas y otros, a fin de que tenga el debido efecto esta mi real determinación, he resuelto que siempre que se remitan a España caudales procedidos de los mencionados efectos de multas y penas de cámara, sea sin incluirlos en manera alguna*

Otras modificaciones a las competencias del Consejo supusieron un mayor control de su actividad, como por ejemplo la obligación de remitir al monarca, a través de la vía reservada, cada mes el número y el estado de los pleitos pendientes y fenecidos<sup>299</sup> o la obligación de remitir al monarca las sentencias de las causas de comisos que hubiere librado antes de su publicación, debiendo además, remitir el parecer del fiscal y el extracto de los autos<sup>300</sup>.

Una de las atribuciones que el Consejo recuperó en el año de 1745 fue el control absoluto de la administración y organización de las Casas de Moneda existentes en las Indias<sup>301</sup>, competencia que en 1730 se había asignado a la Real Junta de Comercio y de Moneda<sup>302</sup>.

Todos estos ajustes en las competencias que ejercía el Consejo de Indias frente a otros órganos que formaban parte de la administración central de la Monarquía generaron un sinfín de problemas de competencias, mismos que se intentaron resolver de manera puntual a medida que surgían dudas de tramitación o resolución de determinadas disposiciones<sup>303</sup>. Así por ejemplo la aplicación de los reales decretos de 1717 planteó especial incertidumbre respecto al desempeño de la comisión de Juez de Composición de tierras de Indias o la de cobranza de multas y condenaciones del Consejo. Tras varias deliberaciones, Felipe V estableció que el Consejo mantuviera ambos encargos, aunque por tratarse de cuestiones relativas a la hacienda indiana

---

*con otros cualesquiera naturaleza que pertenezcan a mi Real Hacienda...* Real Cédula 02.08.1743. A.G.I. Indiferente General, 539 L. YY12, ff. 105r-106v.

<sup>299</sup> Real decreto 04.01.1729. Nov. Recop. 4.2.2.

<sup>300</sup> *Queriendo tener presente lo que se determina en las causas de comisos que se hacen en las Indias o en España, pertenecientes a su contratación de cualquiera naturaleza que sean y vienen por apelación recurso o noticia al Consejo: mando que en adelante antes de publicar las sentencias o resoluciones que causaren me las consulte insertando las respuestas fiscales y pasando al mismo tiempo a mis manos el apuntamiento extracto o memorial ajustado que se hubiere hecho de los autos.* Real decreto 10.01.1742. A.H.N., Cedulario de Ayala t. 10 (Códices, 693), ff. 113, n°192.

<sup>301</sup> *...que en adelante y para siempre queden sujetas a su jurisdicción todas las Casas de Moneda que hay y hubiere en aquellos mis Reinos y Provincias a fin de que el mismo Consejo entienda y conozca privativa y absolutamente de todos los negocios pertenecientes a ellas, así en las labores de los metales, como en su régimen y gobierno y en todas las causas y pleitos y recursos que acerca de ello se ofrezcan según y en la forma en que hasta ahora lo he practicado y ejecutado mi Real Junta de Comercio y de Moneda en virtud de lo dispuesto por el enunciado mi real decreto y por la citada real cédula cuyo contenido quiero y es mi voluntad que se entienda en adelante, en cuanto a las Casas de la Moneda de las Indias con mi Consejo de ellas.* Real decreto 25.05.1745. A.G.I., Indiferente General, 539 L. YY12, ff. 119r.-121v.

<sup>302</sup> Real decreto 15.11.1730. Nov. Recop. 9.1.3. Vid. P. Molas y Ribalta, "La Junta General de Comercio y Moneda...", pp. 5-6.

<sup>303</sup> Vid. M. Gómez Gómez, "La nueva tramitación de los negocios...", p. 216.

quedaba con la obligación de dar cuenta al rey, sin poder resolver ningún asunto relativo a estas materias por sí mismo<sup>304</sup>.

Llama la atención que aún en 1726 Santiago Riol mencionara en su informe que el Consejo de Indias abrazaba *toda la diversidad de las que están divididas en todos los demás negocios de la Monarquía*. Afirmaba que en dicho órgano se trataban asuntos *de real Hacienda, de armadas, flotas, comercios, navegaciones, conservación de presidios y puertos, y sus defensas, ramos reales, quintos, derechos de minas, y otros aprovechamientos, provisiones eclesiásticas y temporales, diezmos, vacantes de obispados, bulas y otra multitud de negocios universales y particulares de suma gravedad, en cuya acertada expedición, y en la más principal de la recta administración de Justicia*<sup>305</sup>.

De las anteriores palabras es fácil deducir entonces que el Consejo de Indias aún conservaba la mayoría de sus competencias, aún en contra de lo establecido por los decretos de reforma. En este sentido, A. Muro Romero afirmaba que la reagrupación de la secretarías provocó que el Consejo continuara expresando su parecer sobre la mayoría de los asuntos que tradicionalmente eran de su competencia, sobre todo entre los años de 1726 a 1743, pues mientras el Consejo en 1737 vio aumentar a diez las plazas de sus consejeros, las secretarías, faltas de personal y fondos, no se dedicaban a muchos temas americanos<sup>306</sup>. Sin embargo, y a pesar de lo dicho anteriormente, el mencionado autor es de la opinión que los decretos de 1717 colocaron al Consejo en franca decadencia a favor de la vía reservada, sobre todo porque hubo períodos en donde el Consejo careció de titular, lo

---

<sup>304</sup> Real decreto 26.10.1717. A.G.I., Indiferente General, 844. *Ibidem*.

<sup>305</sup> S. A., Riol, *Informe que hizo...*, pp. 160-61. En este mismo sentido Garma y Durán afirmaba en 1751 que *la suprema Jurisdicción que maneja este Consejo es tan grande y tan universal que abraza toda la diversidad de negociados y expedientes que están repartidos en los demás consejos de la Monarquía ejerciendo no solo la autoridad real, sino la de legado de la Sede Apostólica, de la real hacienda, armadas y flotas, y sus defensas, de reales quintos, derechos de ministros y otros aprovechamientos; provisiones eclesiásticas y seculares, diezmos, vacantes de obispados, espolios de obispos, bulas y otra infinidad de cosas y negocios generales y particulares de suma gravedad; en cuya acertada expedición y en la más principal de la recta administración de justicia logran imponderables beneficios esta Corona y sus vasallos...* Vid. F. X. Garma y Durán, *Theatro Universal de España...*, pp. 320-21.

<sup>306</sup> En estos años los asuntos de Indias quedaron unidos a los de Marina, cuando estaban unidos en la misma Secretaría, en manos de los titulares de Hacienda, muy significativamente desde 1726 con casi los mismos dirigentes ambas secretarías, los cuales, con Patiño en 1730, acumularon también los asuntos de guerra. Vid. F. Muro Romero, "Instituciones de gobierno...", p. 171.

que probaba que el Consejo cada vez más perdía su posición dentro de la política indiana<sup>307</sup>.

En consonancia con ésta última afirmación, M. Gómez señalaba que la inclusión de las secretarías de Estado en el despacho de los asuntos de Indias provocó que “el Consejo fuera instrumentalizado como institución de justicia, de asesoramiento y en caso necesario, de comunicación con las Indias”. Que si bien es cierto que a lo largo del siglo no fueron extraños los envíos y remisiones de expedientes al Consejo para tomar su parecer o incluso para remitir a Indias documentos con mayores solemnidades como reales decretos o reales Órdenes expedidas previamente por la secretaría del despacho, también lo fue que las secretarías de Estado se convirtieron en el filtro para el acceso y distribución de la información entre los distintos organismos de la Monarquía y como eje en la resolución de los negocios, al decidir junto al monarca la vía o cauce que los mismos debían tomar para su oportuna tramitación<sup>308</sup>. Aún así, dicha autora ensu artículo titulado *La nueva tramitación de los negocios de Indias en el siglo XVIII*, afirmaba que a pesar de la nueva organización ministerial, “el Consejo no quedó excluido ni del gobierno, ni de la comunicación con América”, sin embargo, ya no lo hacía de forma exclusiva<sup>309</sup>.

Bajo esta perspectiva es posible argüir que durante gran parte del reinado de Felipe V la inclusión de las secretarías de Estado y del despacho no supuso, al menos en los primeros treinta años del siglo XVIII, una pérdida significativa de las competencias del Consejo de Indias en materia de gobierno, pues como lo demostraremos en los resultados, fueron significativos el número de consultas que el Consejo preparó al monarca sobre esta materia. Quizá por ello, Fernando VI en el año de 1747 se vio obligado no solo a revalidar el contenido de los reales decretos de 1717, sino a especificar de forma contundente aquellas materias que quedaban fuera del ámbito de competencias del Consejo de Indias, derogando además, *cualquier disposición o providencia dada o practicada en contrario*<sup>310</sup>.

---

<sup>307</sup> Ibídem, p. 172. Esta misma opinión ha sido expresada por A. M<sup>a</sup> Barrero, “La vía ordinaria...”, p. 241.

<sup>308</sup> Vid. M. Gómez Gómez, *Actores del documento...*, p. 37.

<sup>309</sup> Vid. M. Gómez Gómez, “La nueva tramitación de los negocios...”, p. 217.

<sup>310</sup> Real decreto 18.05.1747. A.G.I., Indiferente General, 544, L. 1, ff. 23v-27r. Vid. A. M<sup>a</sup> García Barrero, “La vía ordinaria...”, pp. 242 y ss.



#### **4.3. La situación de las competencias del Consejo de Indias tras la expedición de los reales decretos de 1717.**

De todo lo anteriormente expuesto es posible establecer de manera general que, en teoría, las disposiciones dictadas en 1717 y en los posteriores años, afectaron considerablemente las atribuciones del todopoderoso Consejo de las Indias. Sin embargo, según el análisis que hemos realizado a la documentación contenida en el Archivo de Indias nos percatamos que en la práctica, éste órgano de la administración indiana, continuó tramitando aquellos asuntos que las disposiciones jurídicas le habían desposeído. En palabras de R. García “la historia es testigo de que las normas no siempre consiguen encauzar una realidad que menudo es mucho más rica, y que logra en ocasiones desbordar al derecho positivo”<sup>311</sup>.

Es importante advertir que el proceso que permitió el fortalecimiento del poder de las secretarías de Estado y del despacho fue lento y complejo, por lo que aún ahora resulta difícil deslindar las competencias efectivas<sup>312</sup>. Contribuyeron a la confusión de las materias que debía conocer el Consejo de Indias y las respectivas secretarías de Estado y del despacho la imprecisión y vaguedad con que se expresaron los reales decretos que establecieron la configuración del llamado régimen ministerial, así como por la carencia de instrucciones y ordenanzas que dispusieron con mayor claridad la mecánica de los órganos de la administración de la Monarquía que debían despachar asuntos relacionados con las Indias<sup>313</sup>.

La nueva asignación de competencias implicaba una transformación en el sistema de comunicación con las Indias. Lo primero que se buscó fue evitar que el Consejo de Indias conociera de primera mano los asuntos, para lograrlo, el monarca decidió que gran parte de la documentación fuera remitida directamente a sus secretarios del despacho sin pasar previamente por el Consejo de Indias, así el rey conocería “en derecho” los asuntos más importantes relacionados con las Indias, e igualmente una vez, resueltos, se expediesen y dirigiesen por la vía reservada sin dar cuenta al mencionado Consejo.

A partir de entonces, Felipe V y sus sucesores resolvieron los asuntos relacionados con las Indias a través de la vía reservada; así, asuntos que antaño habían sido despachados por la vía ordinaria, ahora eran reclamados

---

<sup>311</sup> R. D. García Pérez, *El Consejo de Indias durante...*, p. 355.

<sup>312</sup> Vid. M. Gómez Gómez, “La nueva tramitación de los negocios de...”, p. 209.

<sup>313</sup> *Ibíd.*, p. 210.

por el monarca sin que el Consejo hubiera intervenido en el negocio<sup>314</sup>. Quizá por ello durante el siglo XVIII existió una constante proliferación de reales decretos que buscaban pulir y perfeccionar a la vía reservada y de aclarar competencia entre unas y otras instituciones<sup>315</sup>.

Pese a ello, en el reinado de Felipe V el Consejo de Indias continuó siendo el órgano encargado de asesorar al monarca en todo momento, de modo que este *deber de consejo* le autorizaba a emitir su opinión en aquellos asuntos que el propio monarca remitía a través de su vía reservada, pudiendo además ejercer dicho deber de *motu proprio*<sup>316</sup>. Conservaba entonces su prestigio como máximo tribunal y autoridad moral, por lo que continuó ejerciendo sus atribuciones consultivas y judiciales<sup>317</sup>. Si bien los reales decreto de 1717 prohibieron al Consejo el conocimiento directo de los asuntos relacionados con la hacienda, guerra, navegación y comercio de Indias, también es cierto que a través de la vía reservada, dichos expedientes le eran remitidos para que pudieran emitir su opinión. Esta situación se explica entre otras razones por la profunda experiencia de su personal, ya que entre sus miembros se encontraban especialistas en asuntos financieros, comerciales o económicos<sup>318</sup>.

Aún así, durante el reinado de Felipe V son comunes las consultas que el Consejo de Indias remitía al monarca sobre asuntos relacionados con las materias de gobierno, justicia, hacienda y guerra sin que le fueran remitidos por la vía reservada. Sin embargo, conviene no olvidar que a partir de la división de la única Secretaría de Despacho Universal en el año de 1705 se estableció que las consultas e informes del Consejo debían remitirse al secretario de Estado y del despacho correspondiente según la división por materias a fin de recabar la resolución y la rúbrica del rey<sup>319</sup>.

<sup>314</sup> Vid. H. Pietschmann, *Las reformas borbónicas* ..., p. 61.

<sup>315</sup> Vid. M. Gómez Gómez, "La nueva tramitación de los negocios...", p. 212.

<sup>316</sup> El real decreto de 10.02.1715 por medio del cual el monarca autorizó al Consejo para que le representare todo lo que juzgare conveniente para la recta administración de justicia y bien de los vasallos y seguridad de su real conciencia sin atender a respeto humano, y replicando a sus reales resoluciones siempre que juzgare ser conveniente al fin expresado. A.G.I., Indiferente General 829, ff. 89r-90r; 583 L. 3, ff. 259-262.

<sup>317</sup> Vid. J. Miranda, *Las ideas y las instituciones políticas mexicanas. Primera parte. 1521-1820*, edición facsimilar, México, 1978, p. 187.

<sup>318</sup> Vid. H. Pietschmann, *Las reformas borbónicas*..., p. 62.

<sup>319</sup> M. Gómez cita un escrito de Orry en donde al referirse al trabajo desempeñado por la única Secretaría del Despacho Universal señalaba que se le remitían *todas las consultas de los consejos, daba cuenta de ellas al rey y las volvía respondidas a los mismos consejos a quienes estaba remitida la ejecución*. Vid. *Forma y Expedición del Documento*..., p. 142, nota 56. También Vid. R. D. García Pérez, *El Consejo de Indias*..., p. 392.

En efecto, a partir de la división de las secretarías de Estado y del despacho fue práctica generalizada que el Consejo remitiera al secretario del despacho su consulta para que fuera resuelta por el monarca. Normalmente dicho secretario era el encargado de dar al monarca su parecer a la consulta de forma oral, lo que de alguna manera condicionaba el criterio del rey. En ocasiones si el secretario no acompañaba al monarca a sus jornadas fuera de la Corte, dicha opinión era puesta por escrito y remitida al monarca al otro secretario del despacho encargado de presentar el asunto ante el rey y de recabar de su mano la resolución, misma que luego le era devuelta a manos del secretario de origen para que éste a su vez la remitiera al Consejo para su ejecución<sup>320</sup>. Por lo que es posible inferir, que este deber de aconsejar por parte del Consejo de Indias quedó mediatizado debido en gran parte por la utilización de dicha vía reservada como medio para acceder al monarca.

No obstante lo anterior y tal como lo reflejaremos en el capítulo de resultados, a través del análisis de un número considerable de consultas que el Consejo de Indias remitía al monarca a través de su vía reservada nos percatamos que la mayor parte de ellas fueron confirmadas positivamente. Se ha mencionado que nada obligaba al rey a seguir las opiniones de sus consejeros, pero en más de un ochenta por ciento de ellas, el soberano solía aceptar la recomendación del Consejo.

Poco a poco la práctica administrativa se impuso y la aplicación de los decretos de Nueva Planta no fueron del todo realistas, por ello, el monarca hubo de resolver los problemas planteados en la vida cotidiana de las Indias, a través de reintegrar al Consejo de Indias algunas de sus antiguas atribuciones, en cambio otras tendieron a profundizar su relegación a favor de las secretarías del despacho. Entre las primeras, un real decreto de 1720 dispuso que el Consejo retomase la percepción de las composiciones de tierras, condenaciones, multas y penas de cámara que imponía a fin de sufragar sus gastos de estrados y fiestas votadas<sup>321</sup>. También recuperó la competencia de intervenir en todo lo relacionado en materia de comisos<sup>322</sup>. Resolvía los comisos sin necesidad de elevar consulta al rey a menos que se

---

<sup>320</sup> Vid. M. Gómez Gómez, "La nueva tramitación de los negocios...", pp. 218-19.

<sup>321</sup> Vid. v. gr. los expedientes sobre libranzas de los ramos de multas, condenas y penas de Cámara en A.G.I., Indiferente General 607, Santa Fe 764, México 1943 o Lima 1063.

<sup>322</sup> El comiso era la pena que por contrabando de mercancías se impone y consiste en la pérdida o confiscación de las mercaderías o cosas del mismo contrabando. Vid. A. X. Pérez y López, *Teatro de la legislación...*, t. 9, p. 113. Según la Recopilación de Indias el Consejo de Indias sólo podía conocer de apelaciones de causas de comisos de esclavos y de causas de otras mercancías hechas en los puertos de las Indias (Recop. Indias 8.17.4). Un ejemplo sobre despacho de asuntos sobre comisos puede verse en A.G.I., México, 3152.

tratasen de comisos de gran cuantía<sup>323</sup>. Posteriormente a través de un real decreto de 1742 se ordenó al Consejo publicar las sentencias en las causas de comisos que se hicieren en las Indias o en España de cualquier naturaleza que fueran y hayan sido remitidas al Consejo por apelación, noticia o recurso debiendo consultar al monarca insertando la respuesta del fiscal y agregando apuntamientos o extractos de los autos<sup>324</sup>. Hacia el final de su reinado, Felipe V decidió confiar al Consejo la administración de todas las Casas de Moneda de las Indias, dejando a un lado en esta materia, tanto al Consejo de Hacienda, como a la vía reservada<sup>325</sup>.

En cambio, los asuntos de guerra en realidad fueron totalmente extraídos del ámbito de competencias del Consejo, aunque recordemos que un siglo antes, Felipe III había creado la Junta de guerra de Indias como órgano permanente con atribuciones en materia militar, sustituyendo al Consejo en dicha materia<sup>326</sup>. Aún así, era posible que el Consejo resolviera a través de la vía de justicia asuntos relacionados con la milicia, al menos así se desprende del contenido de un real decreto de 1738 en el que se manda al Consejo de Indias a que siempre que el Consejo de guerra pidiese noticias de las culpas y sentencias de los reos condenados y rematados a los presidios de África y España lo hiciera sin dilación, ni excusa alguna<sup>327</sup>.

Además, el Consejo conservaba el gobierno político<sup>328</sup>, siendo los asuntos más relevantes la organización del gobierno municipal, la propuesta

---

<sup>323</sup> Vid. R. D. García Pérez, *El Consejo de Indias...*, p. 372.

<sup>324</sup> Real decreto 10.01.1742. A.G.I. Indiferente General, 800. También en A.H.N., Cedulaire de Ayala t. 10, ff. 113, n° 192

<sup>325</sup> Real decreto 25.05.1745. A.G.I., Indiferente General, 539 L.YY12, ff. 119r.-121v.

<sup>326</sup> Existen algunos expedientes relacionados con fortificaciones y situados en Indias vistos por el Consejo de Indias. Vid. A.G.I., Santa Fe, 457.

<sup>327</sup> Real decreto 30.06.1739. A.H.N., Cedulaire de Ayala t. 22 (Códices, L. 705), ff. 302v-303r, n°275.

<sup>328</sup> Entre algunas de esas atribuciones de gobierno del Consejo estaban hacer leyes, pragmáticas, declaraciones o derogaciones de las antiguas, erecciones de Audiencias o Iglesias, nombramientos, divisiones, uniones y otras materias graves... Vid. F. X. Garma y Durán, *Theatro Universal de España...*, pp. 321-22. También podían considerarse como labor de gobierno la protección de los indios y los bienes de sus comunidades; lo relativo a materia de educación, sanidad, agricultura, industria, obras públicas, concesión de títulos de ciudades y villas. En relación con los oficios vendibles y renunciabiles, resolviendo los recursos que se tramitaban sobre este punto. Concesión de gratificaciones y mercedes, siempre que no excedieran de dos mil reales de vellón. Concesión de licencias de embarque para pasar a las Indias, licencias para los virreyes y sus familiares. Confirmación de títulos de repartimientos de tierras, concesión de encomiendas. En materia educativa podía censurar los libros que se imprimían. Además dictaba providencias sobre cuestiones relacionadas con el estatuto jurídico de las personas y de los oficiales. Conocía negocios sobre capitulaciones de gobernadores y magistrados, separaciones y jubilaciones, entre otros muchos. Vid. R. D. García Pérez, *El Consejo de Indias...*, pp. 358-69.

de la provisión de cargos políticos, la expedición de licencias para pasar a aquellos reinos<sup>329</sup>, todo lo relacionado con el real patronato<sup>330</sup>, así como velar por el cumplimiento de las Leyes de Indias.

En materia de justicia, el Consejo de Indias continuó siendo el Supremo Tribunal de Indias pero bajo la supervisión de la vía reservada. En efecto, a través de un real decreto del 1726 el monarca ordenó *a todos los consejos y Tribunales ubicados dentro y fuera de la Corte que tuvieran a su cuidado la administración de Justicia en general y la expedición de los pleitos, causas criminales y demás litigios y demandas entre partes y de oficio a darle cuenta cada mes el número y estado de los pleitos pendientes y fenecidos*<sup>331</sup>. Disposición que hubo de ser recordada para el caso del Consejo de Indias por un real decreto de enero de 1747<sup>332</sup> ya que con el tiempo su práctica cayó en desuso<sup>333</sup>.

---

<sup>329</sup> Son numerosos los expedientes conservados en el Archivo de Indias relacionados con esta materia. V. gr. A.G.I. Indiferente General, 178-79; 2108-09.

<sup>330</sup> Durante el reinado de Felipe V la situación del real patronato y su administración fueron motivo de varias reformas. Si bien no es nuestra intención analizar todas y cada una de dichas reformas ya que rebasaría nuestro objeto de estudio, al menos creemos necesario perfilar aquellas disposiciones que modificaron algunas de las competencias del Consejo de Indias en materia eclesiástica. En materia de diezmos una real Cédula de 20.09.1737 estableció que los diezmos de las Indias pertenecían con pleno, absoluto e irrevocable derecho a la Corona, por ello, todos los caudales procedentes de las vacantes de beneficios menores pasaron también a ser de libre disposición real. Dos años más tarde Felipe V ordenó a los obispos, cabildos eclesiásticos y oficiales reales remitiesen al Consejo una relación de los valores y distribución de los diezmos. En materia de predicaciones, Felipe V señaló la obligación al Consejo de poner *especial cuidado en no permitir que ninguno de sus súbditos perturbase la paz de la república...* A través de un real decreto de 1706 ordenó que los superiores religiosos no permitieran venir a España por compañero a religiosos indios. Así mismo una instrucción de julio de 1741 estableció la obligación a los obispos de remitir al Consejo la relación del nombre, número y calidad de los pueblos de sus diócesis y vecindarios y de sus naturalezas, así como del estado y progreso de las misiones y de las nuevas reducciones. Además, la real Cédula de julio de 1721 señaló a los oficiales reales de la real Hacienda enviar por quinquenios relación del valor y rentas de los arzobispados, obispados y prebendas de las Iglesias catedrales. Vid. J. M<sup>a</sup> García Añoveros, *La Monarquía y la Iglesia...*, pp. 122-33. De acuerdo a lo anterior es posible afirmar que en esta materia, el Consejo conservó en todo momento sus amplias atribuciones. Así lo demuestra el informe que realizara Pedro Telmo, oficial del Consejo de Indias. Vid. R. D. García Pérez, *El Consejo de Indias durante...*, pp. 519-30.

<sup>331</sup> Real decreto 04.01.1726. A. A. de la N. Recop. 2.4.90.

<sup>332</sup> Real decreto 02.01.1747. ... *Y por cuanto asimismo deseo el posible alivio de los que traen pleitos y negocios, es mi voluntad que cada cuatro meses se me dé cuenta por su Presidente o gobernador de todos los pleitos que estuvieren concluidos para definitiva y de los sentenciados entre estos, son de superior recomendación los recursos que se introducen para las retenciones de bulas y rescriptos de Roma para justificar por este medio la súplica a su Santidad y debiendo esta hacerse en mi Real nombre por mis ministros en aquella Corte, hecho menos que no se me dé por ese Consejo aviso formal de los breves o bulas retenidas para poder ejecutar la suplicación de ellas: en cuya inteligencia tendrá en*

---

*adelante el cuidado que corresponde poniendo en mis manos copia del auto de retención con el pedimento fiscal para la súplica a su Santidad a fin que remitiéndose a mi agente en la Corte de Roma pueda interponerla y darme cuenta de haberlo ejecutado cuya noticia haré comunicar al Presidente o gobernador de ese Consejo para que lo haga anotar en los autos de retención pues de lo contrario se expone a no conseguirse el principal intento de este remedio tuitivo que con justa causa dispensa mi regalía a quien lo implora. A.G.I., Indiferente General, 544 L. 3, ff. 3r-9r. Para un estudio en profundidad sobre los efectos jurídicos de dicho real decreto puede verse I. Martínez Nava, “La división de competencias...”, pp. 548 y ss.*

<sup>333</sup> Para la época que manejamos sólo hemos localizado un expediente en el Archivo de Indias que contiene las Relaciones de los expedientes despachados en el Consejo y Cámara. Vid. A.G.I., Indiferente General, 1075.

## IV. LA FORMA DE TRABAJO DEL CONSEJO DE INDIAS

### 1. Introducción.

Para cumplir con su deber de asesorar el Consejo de Indias debía remitir al monarca su consulta a través de dos vías distintas. La primera podía realizarse por medio del despacho *a boca*, esto es, el procedimiento mediante el cual se representaba al monarca en forma oral el parecer del Consejo. El otro procedimiento, en cambio, suponía un sistema de despacho *por escrito* por medio del cual los órganos colegiados remitían al rey sus consultas por escrito en busca de la resolución real.

Con el tiempo, el despacho *por escrito* triunfó no sólo para comunicar resoluciones o acuerdos importantes, sino para puntualizar cualquier nimio asunto que requiriera la resolución del monarca. Esta forma de despachar los asuntos permitió, en opinión de Escudero, que desde el siglo XVI se lograra cierta claridad, orden y seguridad en el despacho de los asuntos<sup>1</sup>.

Para el despacho por escrito de los asuntos indianos el Consejo podía hacer uso de dos procedimientos o vías: el primero de ellos denominado vía de *justicia* o de *proceso*, y el segundo, la vía de *expediente* también llamado vía de *fuerza*, de *Consejo*, de *gobierno*, o simplemente *vía ordinaria*<sup>2</sup>. Con la llegada de los Borbones a la Monarquía de España y con el fin de agilizar el despacho de los negocios se implementó una nueva forma de manejo de los asuntos a través de la denominada vía *reservada*.

Precisamente las siguientes líneas las dedicaremos a analizar la relación que surgió entre ésta vía y el Consejo de Indias a partir del trabajo diario realizado. Nuestra intención es recrear, en la medida de lo posible, el funcionamiento interno del Consejo de Indias en el entramado burocrático de los expedientes, lo que nos permitirá obtener una base teórica sobre la

---

<sup>1</sup> Vid. J. A. Escudero López, *Felipe II...*, p. 461.

<sup>2</sup> P. L. Lorenzo Cardoso, *El documento real en la época de los Austrias (1516-1700)*, Cáceres, 2001, pp. 63-65.

cual profundizar en su relación con las secretarías de Estado y del despacho<sup>3</sup>.

## 2. El despacho *a boca*.

El despacho *a boca* era el método de trabajo burocrático que seguían los monarcas con sus secretarios y que consistía en un encuentro personal en el que se veían y, en su caso, resolvían los negocios<sup>4</sup>. Por lo general, los secretarios del rey eran los encargados de remitir al monarca las consultas que los distintos consejos de la Monarquía le hacían llegar con el fin de que éste tomara una resolución<sup>5</sup>. La voluntad del monarca debía de trasladarse a papel, lo que exigía un trabajo subsiguiente de comunicación a los órganos o personas involucrados por las resoluciones adoptadas. El despacho *a boca* requería como tarea previa la elaboración de dictámenes o resúmenes en los que el secretario extractaba para información del rey las consultas del Consejo.

La utilización de esta forma de despacho proporcionaba, en opinión de J. A. Escudero, tres ventajas. La primera porque facilitaba la consulta de un mismo asunto a varios secretarios sin las complicaciones de volver a escribir billetes y ocultar al segundo interlocutor lo escrito por el primero, ofreciendo así al monarca un mayor margen de flexibilidad para prescindir de las competencias formalmente atribuidas a cada Consejo. La segunda

---

<sup>3</sup> La regulación de la que fue objeto el trabajo que debía realizar el Consejo de Indias ha sido escasa, la manera proceder en el despacho de los asuntos tanto por vía de gobierno, como por vía de justicia, lo haremos a partir de la documentación que al efecto se encuentra en el Archivo General de Indias. Acerca de la falta de normas procesales de despacho de los asuntos en otros consejos de la Monarquía puede verse S. de Dios, *El Consejo Real de Castilla...*, p. 423; F. Barrios, *El Consejo de Estado...*, p. 273; J. C. Domínguez Nafria, *El Real y Supremo Consejo...*, p. 530; R. D. García Pérez, *El Consejo de Indias...*

<sup>4</sup> Vid. F. Barrios, “Donde no se ponía el sol”, en *La monarquía hispánica Felipe II, un monarca y su época*, Madrid, 1998, pp. 40-41.

<sup>5</sup> En los siglos XVI y XVII existieron tres tipos de secretarios. En primer lugar, los privados o también llamados particulares quienes le ayudaban tanto en el despacho *a boca*, como en el despacho por escrito. En segundo lugar, los secretarios de los consejos, y ocasionalmente de las Juntas, que en determinados momentos despachaban con el rey por escrito. Y en tercer lugar, algunos secretarios especiales como lo fueron los del Consejo de Estado y de Guerra, organismos supremos de gobierno que al ser presididos por el monarca y no asistir él a las sesiones, eran controlados y dirigidos por el soberano a través de esos secretarios, con quienes despachaba tanto *a boca* como por escrito. Vid. J. A. Escudero López, “El rey y el gobierno central de la Monarquía en el Antiguo Régimen”, en *El Rey*, Barcelona, 2008, vol. 1, pp. 325-26.



ventaja del despacho *a boca* permitía aclarar cuestiones que resultaban confusas en el texto escrito. Y, en tercer lugar, se presentaba como un procedimiento más ligero y llevadero cuando el rey estaba sobrecargado de trabajo y no podía contestar a tantos papeles<sup>6</sup>.

Durante el reinado de Carlos V el Consejo de Indias debía consultarle los asuntos más importantes por mediación de su presidente o de su secretario Francisco de los Cobos<sup>7</sup>. En el caso de su secretario, era común que antes de entrevistarse con el monarca llevara en el documento original sus propias anotaciones, por cuanto era él quien leía el contenido y registraba de su mano en cada párrafo el comentario y el parecer del rey<sup>8</sup>.

Felipe II en cambio, por lo general, rehuyó a la resolución de las consultas mediante el despacho *a boca*<sup>9</sup>, reservándolo para muy pocas personas, entre ellas, algunos miembros de sus consejos<sup>10</sup> o con su secretario de Estado<sup>11</sup>. Dicho secretario debía auxiliar al monarca en la resolución de los asuntos a través del trabajo diario y anotando en cada uno de los memoriales o consultas que le remitían la resolución real<sup>12</sup>. Bermúdez de Pedraza relató la forma en la que se llevaba a cabo este despacho:

*...el secretario asistía siempre con su persona, consultando a boca los memoriales, leyendo las cartas y respondiendo a ellas, unas veces de su nota, y otras de la nota del rey, y esto con tanta puntualidad, que para no fiar nada de la memoria, tenía libros blancos distribuidos por meses y días,*

---

<sup>6</sup> Vid. J. A. Escudero López, *Felipe II. El rey en el...*, p. 459.

<sup>7</sup> Vid. J. A. Escudero López, *Los secretarios de Estado...*, t. 1, pp. 87-88.

<sup>8</sup> Quizá por ello afirme Schäfer que conocemos tan pocas consultas de los primeros veinte años de vida del Consejo de Indias, toda vez que cuando el Emperador estaba en España y las consultas se podían hacer de palabra, se usaban apuntes breves que después eran rasgados, y de las consultas que se le enviaban al extranjero, gran parte se perdería en los montones de papeles acumulados en las secretarías o también durante el viaje. Vid. *El Consejo Real...*, t. 1, p. 72.

<sup>9</sup> Vid. J. A. Escudero López, *Felipe II. El rey en el...*, p. 451.

<sup>10</sup> Durante el reinado de Felipe II también los presidentes o algunos de los consejeros de Indias acudían al despacho *a boca*. Vid. J. J. Real Díaz, *Estudio diplomático...*, p. 72.

<sup>11</sup> El secretario de Estado era en realidad el secretario del Consejo de Estado, lo que le daba también la posición de confidente de Felipe II. Vid. J. A. Escudero López, "Orígenes de la administración central borbónica, en *Administración y Estado...*, p. 45.

<sup>12</sup> En su estudio sobre el documento indiano J. J. de Real ejemplifica algunas consultas despachadas *a boca* por Felipe II, entre ellas, una consulta fechada 07.11.1576 en la que se mencionaba que «*El Consejo tiene algunas cosas que consultar a S.M. de palabra, siendo V.M. servido de señalar día para ello...*». Señala el mencionado historiador que en ocasiones, aunque el Consejo había determinado hacerlas *de boca*, las hacía por escrito por las razones que él mismo aducía: «*El Consejo había acordado algunas cosas para consultarlas a V.M. de palabra y porque las partes aguardan la resolución ha parecido meditarlo más y hacerlo en ésta...*» (Consulta de 12.12.1580, A.G.I., Indiferente General, 739). Vid. J. J. Real Díaz, *Estudio diplomático...*, p. 72, nota 40.

*y cada uno era de un mes y en él escribía los memoriales que recibía cada día lo que consultaba las respuestas de Su Majestad, las cartas que había recibido aquel día, las respuestas dellas, si fue escrita de su mano o de la de su Majestad y las demás en escribir en su aposento lo que le ordenaba y estos fragmentos con tanta aprobación y descanso de Su Majestad...*<sup>13</sup>.

Un documento escrito en el reinado de Felipe III describía la práctica administrativa del despacho *a boca* que Felipe II desarrollaba a fin de dar solución a las consultas que los distintos consejos le remitían:

*Leía el secretario lo sustancial de ellas con el parecer del Consejo, y Su Majestad habiendo entendido lo que contenían tomaba la resolución en cada una que mejor le parecía, en presencia del secretario. Y ésta la escribía el secretario en un papel aparte, y después con las más breves, claras y sucintas razones ponía en las mismas consultas, en cada una un decreto de su mano, que después rubricaba Su Majestad de la suya. Y de ellas y de los decretos y órdenes particulares, hacía el secretario cada día pliegos para los ministros a quien tocaban, volviéndoles las consultas. Y los memoriales iban remitidos a los secretarios, a cada uno los de su negociación, con que se ganaba mucho tiempo y se despachaban con brevedad las partes*<sup>14</sup>.

En el siglo XVII con la llegada de los validos al poder, la figura del secretario de Estado fue relegada a su labor dentro del Consejo de Estado y sus atribuciones del despacho *a boca* fueron asumidas por los validos de turno<sup>15</sup>. Así por ejemplo, Felipe III solo se relacionaba de forma inmediata con el duque de Lerma; quien tenía dada la orden de entender todos los negocios, así como de abrir y resolver las consultas remitidas por los consejos y las Juntas<sup>16</sup>. Durante el tránsito del reinado de Felipe III a Felipe IV el duque de Uceda fue quien conservó el carácter de primero en la Monarquía, sin concurrir los secretarios de Estado, ni ningún otro; posición que muy pronto adquiriría también el conde-duque de Olivares. Esta potenciación del valido como figura relevante dentro de la Monarquía obstaculizó el normal desenvolvimiento de los asuntos, logrando la imposición de su personal criterio con base al ascendiente que disfrutaba

---

<sup>13</sup> F. Bermúdez de Pedraza, *El secretario del rey...*, ff. 47r-47v.

<sup>14</sup> *Estilo que guardó el Rey nuestro Señor D. Phelipe Segundo en el despacho de los negocios, desde que comenzó a valerse del secretario Matheo Vázquez hasta que murió.* Citado por J. A. Escudero López, *Los secretarios de Estado...*, t. 1, pp. 202-3.

<sup>15</sup> *...los Grandes de España afectos a su real servicio, despachan con su real persona a boca las consultas y expedientes, con que en la realidad y en la sustancia el privado viene a ser el secretario, porque el ejercicio es el que le hace y no el nombre y la pluma, y es la mayor grandeza suya, haber ocupado los Grandes su ejercicio...*, F. Bermúdez de Pedraza, *El secretario del rey...*, f. 12v.

<sup>16</sup> Vid. J. A. Escudero López, *Los secretarios de Estado...*, t. 1, p. 234.

sobre consejeros y secretarios, dando como resultado un desajuste de todas las reglas de una buena administración<sup>17</sup>.

Mientras que el despacho *a boca* era realizado entre el monarca y su valido, era necesario por otra parte, un intermediario entre ellos, capaz de conseguir la firma de los despachos y el mantenimiento de los papeles, de allí la necesidad de dar vida a un nuevo cargo administrativo denominado secretario del Despacho, al que más tarde, por ocuparse de todo género de asuntos se le designó como secretario del despacho universal<sup>18</sup>. Cuando los validos comenzaron a caer en desgracia, los secretarios del despacho se fueron subrogando en el despacho *a boca* con el rey.

Al asumir Felipe V el gobierno de la Monarquía hubo de tomar grandes decisiones auxiliado por un órgano colegiado al que se denominó Consejo de Gabinete el cual monopolizó durante los casi quince años de su existencia el despacho *a boca*, toda vez que en su seno el monarca “expresaba su voluntad y daba órdenes precisas”. En principio, los miembros de dicho Consejo debían informar y asesorarle de modo que le auxiliaran a decidir, pero para ejecutar las decisiones los documentos eran remitidos al secretario del despacho para su expedición<sup>19</sup>.

Además, como ya se ha mencionado líneas atrás, fue en el reinado de Felipe V cuando la antigua Secretaría del Despacho Universal fue objeto de continuas divisiones hasta su configuración definitiva en 1721 con la formación de cuatro secretarías de Estado y del despacho, todas ellas herederas del despacho *a boca*<sup>20</sup>.

Los asuntos que se consultaban al monarca a través de esta entrevista oral normalmente estaban señalados por él mismo a partir de los documentos ya examinados por el propio rey, bien a sugerencia del secretario o como producto de ambos casos. En ocasiones, el secretario remitía al monarca algunos papeles a fin de que fueran analizados por el propio rey antes de la entrevista en persona. Si bien el despacho se producía de forma oral, cara a cara, lo común era que las consultas, memoriales y cartas que el secretario remitía al rey dieran lugar a respuestas escritas mediante anotaciones o billetes dentro del mismo documento original. Tras la entrevista, era

---

<sup>17</sup> Ibídem, p. 240.

<sup>18</sup> Vid. J. A. Escudero López, “Orígenes de la administración...”, pp. 47-48.

<sup>19</sup> Vid. M<sup>a</sup> T. Nava “El poder y su precio...”, p. 114. Comparte esta misma opinión Joaquín Real al señalar que los nuevos secretarios al despachar directamente con el soberano los asuntos de su departamento lo hacían oralmente auxiliados por notas o memorándums y no mediante consulta formal. Vid. J. J. Real Díaz, *Estudio diplomático...*, p. 71.

<sup>20</sup> Vid. J. A. Escudero López, *Los secretarios de Estado...*, t. 2, p. 467.

menester remitir a las partes o autoridades involucradas en el negocio la decisión real, por lo que era menester despachar el asunto por escrito<sup>21</sup>.

### 3. El despacho por escrito.

En contraposición con el despacho *a boca*, el despacho por escrito operó como un procedimiento que proporcionaba no sólo claridad, orden y seguridad en la resolución de los distintos negocios que se planteaban al monarca, sino que además, constituía una forma de organizar el propio gobierno de la Monarquía<sup>22</sup>. En efecto, la masa de oidores, letrados, escribanos, oficiales, procuradores, secretarios, solicitadores, relatores, etc. que pululaban por la Corte hicieron del documento escrito el eje central de todo procedimiento administrativo y de toda decisión política, por ello, tomó significado en opinión de Lorenzo Cadarso la máxima romana de *quod non est in acta, non est in mundo*<sup>23</sup>.

En el Consejo de Indias este despacho por escrito podía llevarse básicamente a cabo mediante dos procedimientos. El primero denominado *de expediente* o también llamado *vía de gobierno* y el segundo *de proceso* o *vía de justicia*. Procedimientos cuyas diferencias no sólo estaban, como ya mencionamos, basadas en las concepciones teóricas que distinguían los asuntos de gobierno, de los asuntos de justicia<sup>24</sup>, sino que también dependía

---

<sup>21</sup> Vid. J. A. Escudero López, *Felipe II...*, p. 460.

<sup>22</sup> *Ibíd.*, p. 461.

<sup>23</sup> P. L. Lorenzo Cadarso, "La correspondencia administrativa en el Estado Absoluto Castellano (ss. XVI-XVII) en *La correspondencia den la historia. Modelos y prácticas de la escritura epistolar. Actas del VI Congreso Internacional de Historia de la Cultura Escrita*, Madrid, 2002, vol. 1, pp. 122-23.

<sup>24</sup> En este sentido A. García-Gallo afirmaba que a partir del siglo XV la función genérica de justicia se distinguió y separó, surgiendo primero los negocios de hacienda y después los de guerra. Cobrando en el siglo XVI especial importancia los asuntos de gobernación. Por lo que según el mencionado autor un mismo asunto según se considere de uno y otro ángulo puede encuadrarse dentro de un tipo u otro. Así se llega a la división que se mantiene durante toda la edad Moderna en negocios de Estado, justicia, gobierno, hacienda y guerra, que luego durante el siglo XIX y el XX se ampliará con la distinción de nuevos ramos. Vid. A. García-Gallo, "Cuestiones y problemas de la Historia de la Administración española", en *Actas del I Symposium de Historia de la Administración*, Madrid, 1970, pp. 52-53. Para Gustavo Villapalos Salas, en cambio, opina que no se conoce con precisión el proceso que llevó a esta delimitación material, ni si fue la distinción de negocios la que determinó la existencia de órganos especializados o en fenómeno se produjo a la inversa. Vid. "Los recursos en materia administrativa de Indias en los siglos XVI y XVII", en *Anuario de Historia del Derecho Español*, n 46 (1976), p. 5. También pueden verse las obras de A.

del curso de la tramitación documental, esto es, que tal distinción podía referirse también al procedimiento que el Consejo seguía para tramitarlos, así como el órgano interno competente para sustanciarlos<sup>25</sup>.

Dentro del trabajo diario del Consejo no existía un criterio unívoco que estableciera los asuntos que debían despacharse por uno u otro procedimiento. En principio todo aquello que no fuera materia de justicia debía tramitarse por la vía de expediente, pero había casos en que asuntos judiciales eran resueltos por la vía de gobierno, y a la inversa, asuntos no pertenecían al ámbito judicial eran tramitados por la vía de proceso<sup>26</sup>. Así por ejemplo, la obligación de los casados de llevar a sus mujeres a las Indias inicialmente había sido considerado asunto de justicia en cuanto que suponía el cumplimiento de una obligación derivada del matrimonio, más tarde pasó a formar parte de las cuestiones de gobierno por su incidencia en la buena organización de la vida social. Del mismo modo las licencias para pasar a España eran consideradas, a veces, asuntos de justicia y otras como cuestiones de gobierno<sup>27</sup>.

Esta continua indefinición de los procedimientos que se debían utilizar en la resolución de asuntos también vino dada en varias ocasiones por un trasfondo social y político de gran importancia. La forma de despacho por la que se optaba para resolver un problema o atender una petición, en ocasiones, escondía un entramado de intereses políticos tanto de la propia administración como quienes acudían a ella. Mientras que la vía *de proceso* otorgaba mayor confianza, ya que al menos era pública y las partes interesadas podían elevar sus alegaciones, sus probanzas, recibían noticias sobre el desarrollo del procedimiento y cuando era dictada la sentencia los interesados tenían la opción de recurrir la decisión. No así en la vía *de expediente*, ya que en ella existía el riesgo de sufrir una gran arbitrariedad por parte del Consejo, toda vez que el decreto que ponía fin al procedimiento podía no ser comunicado a las partes sino se consideraba

---

Gallego Anabitarte, "La distinción entre contencioso y gubernativo...", pp. 125 y ss y J. M. Pérez-Prendes, "«Facer Justicia»...", pp. 437 y ss.

<sup>25</sup> Nos referimos a la Sala de Gobierno y a la Sala de Justicia.

<sup>26</sup> Sin embargo, las propias Ordenanzas de 1571 conminaron al Consejo a abstenerse de conocer negocios particulares y de justicia entre partes de manera que pudiera atender y proveer las cosas de gobernación (Ordenanza 10). Por su parte, las Ordenanzas de 1636 refrendaron la prohibición de que el Consejo conozca negocios particulares y de justicia entre partes, pero amplía los asuntos que en materia de justicia podía conocer (Ordenanza 56).

<sup>27</sup> Vid. G. Villapalos Salas, "Los recursos en materia...", p. 23.

oportuno<sup>28</sup>, y nada podían hacer los interesados, más que remitir al Consejo o al propio monarca nuevas peticiones o denuncias, de manera que se les mantenía deliberadamente en la incertidumbre durante meses, años e incluso décadas<sup>29</sup>. De hecho fue común que aquellas resoluciones definitivas que denegaban peticiones nunca se comunicaran formalmente a los interesados<sup>30</sup>.

En principio, las Ordenanzas del Consejo de 1636 regularon la tramitación que se debía seguir en cada una de estas vías, pero la práctica administrativa y las constantes quejas por la lentitud en la resolución de los asuntos provocaron que se expidieran normas tendentes a agilizar el despacho de los asuntos.

Antes de analizar en particular cada uno de los procedimientos utilizados por el Consejo de Indias durante el reinado de Felipe V aludiremos a algunos pasos previos al despacho de gobierno y de justicia. Nos referimos a la recepción de los asuntos y a su distribución dentro de las salas.

Con la finalidad de recrear en la medida de lo posible el trabajo diario del Consejo de Indias hemos considerando conveniente realizar el presente estudio a partir de dos momentos claves, el primero centrado en el análisis funcional antes de la expedición de los decretos de nueva planta y el

---

<sup>28</sup> Las Ordenanzas de 1636 otorgaron al Consejo dicha posibilidad: *los del nuestro Consejo de las Indias procuren siempre dar orden como las nuestras Leyes, y provisiones, que de aquí adelante diéremos, se publiquen donde, y cuando convenga, y que de la publicación y cumplimiento de ellas se tenga siempre en el dicho Consejo aviso y certificación; salvo si al Consejo pareciere que alguna provisión sea secreta, porque en tal caso mandamos, que no se haga la dicha publicación*. Ordenanza 24 de 1636. Recop. Ind. 2.2.24.

<sup>29</sup> En opinión de Schäfer numerosas fueron las razones de la gran lentitud en la tramitación de los negocios de Indias. Una de ellas venía dada porque los monarcas intentaban retardar la resolución de algunos de los asuntos remitidos por el Consejo quizá porque el propio rey no estuviera de acuerdo con la opinión del Consejo pero quería evitar resolver a la consulta con un “no” llano y franco, toda vez que trataba de tener cuidado no menguar la dignidad y categoría de sus consejeros, y con ello, la propia autoridad del Estado. Se refiere por ejemplo al caso de la insistente opinión del Consejo de cesar al virrey Francisco de Toledo del Perú decisión que pudo evitar por más de siete años. otra razón del retraso en la resolución de las consultas podía ser de índole económica. En ocasiones la permanente falta de recursos económicos necesarios para sufragar los gastos hacía indispensable contar con el parecer de otros órganos de la administración de la Monarquía, tales como del Consejo de Hacienda, la Casa de Contratación o financieros privados para lograr obtener los fondos necesarios para conceder alguna merced o resolver un asunto de suma gravedad. Vid. E. Schäfer, *El Consejo Real...*, pp. 108-9.

<sup>30</sup> Menciona Lorenzo Cadarso que cientos de solicitadores y procuradores, cuando no los propios interesados, deambulaban por la Corte en busca de noticias «*de lo mío*», y en expedientes ya resueltos negativamente años atrás se encontraban como se iban acumulando los memoriales, peticiones, cartas de intercessio y hasta sobornos inútiles. Vid. P. L. Lorenzo Cadarso, *El documento real...*, p. 65.

segundo teniendo como punto de partida la injerencia de la *vía reservada* en la labor del Consejo.

### 3.1. La vía de expediente

La *vía de expediente* era un procedimiento extrajudicial con la intención de despachar los asuntos presentados al Consejo con mayor agilidad. Surgido en el seno del Consejo de Castilla, configuraba un procedimiento judicial abreviado, pero sin los formalismos propios del sistema procesal. Lo que caracterizaba a esta forma de resolver los asuntos era, en opinión de Salustiano de Dios, la celeridad, la rapidez, la supresión de las formalidades propias del proceso<sup>31</sup>. Por medio de esta vía el Consejo de Indias logró dar pronto despacho a un sinnúmero de asuntos provenientes de todo el territorio indiano. Aunque hubo ocasiones en los que el trámite de un asunto llegó a ser mucho más lento que si se hubiera seguido por la vía de justicia

El expediente, además, se convirtió en el instrumento base sobre el que se desarrollaba esta labor consultiva del Consejo<sup>32</sup>. Así pues la palabra expediente podía entenderse en dos acepciones diferentes. Por un lado como conjunto de actos llevados a cabo por una entidad durante la tramitación de un asunto, y por el otro, como un conjunto de documentos que se generaban durante dicha tramitación y que normalmente eran agrupados en una unidad<sup>33</sup>.

En un estudio sobre la historia del documento real, L. Lorenzo Cadarso determinó las fases del procedimiento administrativo para el despacho de los asuntos y que a nuestro parecer nos pueden auxiliar para el presente estudio:

---

<sup>31</sup> Vid. S. de Dios, *El Consejo Real...*, p. 430.

<sup>32</sup> Vid. R. D. García Pérez, *El Consejo de Indias...*, p. 443.

<sup>33</sup> Vid. P. L. Lorenzo Cadarso, *El documento real...*, p. 67. Para M. Gómez en cambio, los expedientes son el fruto documental que crea, por medio del escrito, la actividad burocrática de una oficina. Actividad que podía plasmarse al margen del documento originario o bien por la superposición y sedimentación de informaciones y antecedentes que provocan la multiplicación del volumen documental originario. Vid. *Forma y expedición...*, p. 136. Sobre el origen y evolución del expediente puede verse J. L. Rodríguez de Diego, "Evolución histórica del documento", en *Anuario de Historia del Derecho Español*, nº 68 (1998), pp. 475-90 y E. Sierra Valenti, "El expediente administrativo. Esbozo de tipología documental", en *Boletín de ANABAD*, año 19, nº 2, pp. 248-260.

1. Actos de iniciación, sean de oficio o a petición de parte por medio de los cuales se abría el procedimiento.
2. Actos de instrucción, eran los actos de gestión administrativa que se realizaban durante la tramitación del asunto.
3. Actos de resolución, mediante los cuales culminaba el proceso a través de una disposición real.
4. Actos de comunicación de la resolución, mediante los cuales el Consejo notifica a particulares o a las autoridades respectivas la resolución real.
5. Actos de recurso en caso que los particulares solicitasen la revisión de la resolución<sup>34</sup>.

Para una comprensión global de la forma de funcionar del Consejo de Indias antes y después de los decretos de nueva planta, también hemos creído conveniente organizar la información a manera de diagramas en las siguientes páginas, lo cual, nos dará una visión más completa de dicho procedimiento.

### **3.1.1. Actos de iniciación.**

Esta primera fase de la vía de expediente se refería a todos aquellos pasos que debía seguir los asuntos desde el momento que la documentación era emitida por una persona o autoridad requiriendo la intervención del Consejo de Indias para el despacho de su asunto.

Básicamente eran dos los momentos importantes dentro de esta etapa de iniciación. El primero relacionado con la recepción de la documentación proveniente de las Indias y de la propia Península. Y el otro momento correspondía a la distribución de la documentación según criterios procedimentales, es decir, aquello que no fuera relativo a asuntos de justicia,

---

<sup>34</sup> Vid. P. L. Lorenzo Cadarso, *El documento real...*, p. 67. Por su parte, M. Gómez distinguió dentro del procedimiento seguido por las secretarías de Estado y del despacho las siguientes fases: de iniciación del expediente, de instrucción, de tramitación, de despacho o resolución, de escrituración o puesta por escrito de la resolución despachada y de expedición. Creemos que parte de su estudio es posible aplicarlo al tema de la tramitación de los asuntos dentro del Consejo de Indias, toda vez que ambos son instituciones político-administrativas que formaban parte de la Monarquía hispánica en el siglo XVIII. Vid. M. Gómez Gómez, *Forma y expedición...*, p. 137.



debía continuar el trámite de expediente, de lo contrario continuaría a través de la vía de justicia o de proceso.

#### **a) Recepción de la documentación.**

La acción del Consejo se iniciaba con la recepción de los asuntos que le remitían los particulares, autoridades indianas o autoridades radicadas en la Península. El rey de manera especial también enviaba al Consejo algún asunto para conocer su opinión<sup>35</sup>. Pero además el Consejo podía iniciar un asunto de *motu proprio* o de oficio, así lo recuerda Felipe V en un real decreto de 1701:

*Deseando en mi Gobierno los mayores aciertos para el servicio de Dios y bien de mis Vasallos, y debiendo valerme a este fin del Consejo de mis Ministros, ordeno y encargo a todos los de ese Consejo que en cuanto pertenezca a su Instituto me consulten con celo, cristiana libertad, y suma pureza, y sin respeto humano; lo que juzgaren sea de mi obligación, y más conveniente a mis Reynos y por que el Secreto es el alma de las resoluciones, encargo y mando que se observe religiosamente en cuanto se tratare, confiere, resolviere advirtiéndole que haré gran cargo al que faltare en lo que tanto importa...*<sup>36</sup>.

Toda esta documentación de oficio o de parte proveniente de las Indias debía remitirse al Consejo a través del correo marítimo, cuya organización y administración dependía directamente del *correo mayor de las Indias*. Oficio de carácter venal que requería el nombramiento de tenientes para poder llevar el correo entre Sevilla, Perú y Nueva España<sup>37</sup>.

---

<sup>35</sup> Había casos en los que las partes y sus agentes remitían sus memoriales directamente a la casa del rey, quien los hacía remitir al Consejo para que le informe con su parecer. "Representación hecha a S.M. por el Consejo de Indias... B.P.R., Mss. II/844.

<sup>36</sup> Real decreto 26.02.1701. A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 53r -53.

<sup>37</sup> El oficio de *correo mayor de las Indias, Islas y Tierra Firme del Mar Océano* fue creado mediante real cédula de 14.05.1514 con el fin de agilizar la correspondencia oficial y particular entre las Indias y la Península Ibérica. La merced de la plaza se otorgó a perpetuidad al doctor Lorenzo Galíndez de Carvajal, quien podía designar tenientes. Tenía a su cargo el envío y distribución de la correspondencia oficial y particular que se dirigía a las Indias y que se embarcaba en los puertos de Sevilla y Cádiz procedente de la corte, para lo cual su titular nombró a un teniente que debía residir en Sevilla. También estaba obligado a recibir y distribuir la correspondencia en las Indias, obligación que fue desempeñada por tenientes que arrendaban parcialmente el oficio. Con el tiempo los sucesores del doctor Galíndez tomaron posesión en los territorios americanos. Sin embargo, la situación jurídica del oficio fue bien distinta en cada uno de los virreinos. Mientras que la merced del correo mayor de las Indias en el Perú se mantuvo intacta, en la Nueva España

A principios del siglo XVIII todo este panorama hubo de ser modificado por dos motivos fundamentales, primero por los grandes gastos que generó la guerra de Sucesión y por el desorden que ocasionaba el monopolio privado de las postas<sup>38</sup>. Para poner remedio a esta situación, Felipe V decidió asumir directamente la gestión del correo incorporando a la Corona el oficio del *correo mayor de las Indias* que despachaba desde Sevilla y el de Nueva España por haber sido enajenados por sus titulares<sup>39</sup>, a diferencia

---

y en la de España con sede en Sevilla fueron enajenados en subasta pública por sus titulares, perdiendo por tanto su carácter perpetuo. Vid. J. M<sup>a</sup> Vallejo García-Hevia, “El correo mayor de las Indias (1514-1768), en *Derecho y administración pública en las Indias hispánicas*, Cuenca, 2002, vol. 2, pp. 1806-13 y ss. También puede verse en C. Alcázar de Molina, *Historia del correo en América (notas y documentos para su estudio)*, Madrid, 1920.

<sup>38</sup> Antes de la incorporación del oficio a la corona, la situación del sistema de las comunicaciones postales en los virreinos del Perú y de Nueva España era, en términos generales, el que se indica a continuación. En la ciudad de Lima existía una denominada Dirección General de Correos, y de allí partían, todos los meses, tres correos, conducidos por indígenas: el de Cuzco, el de Valles y el de Arequipa. El primero recorría unas 200 leguas, con diversas paradas en Casas de Correos situadas en las localidades intermedias. Una vez llegado a Cuzco, salía otro correo hacia Potosí (300 leguas), donde era sustituido por otro que se dirigía a la Ciudad de la Plata, en donde residía el presidente y la Audiencia de Charcas. El tiempo que se invertía en la ida y la vuelta de Lima a Cuzco era de «30 días, y otros 30 desde el Cuzco hasta Charcas, de suerte que el mismo día que debe entrar en el Cuzco correo de Lima, debe igualmente entrar el de Charcas y Potosí, para que no se retarden el uno ni el otro en recibir las cartas respectivas». El mismo método era empleado en el correo de Valles, que partía de Lima y se encaminaba hacia Piura, y de allí continuaba hasta Quito, tardando el retomo sesenta días; y en el de Arequipa, en el que sólo se empleaban treinta días, ya que «este correo no pasa de Arequipa, porque más adelante provee de cartas el correo del Cuzco, por lo que sólo corre uno». Existían otros dos correos: el de Potosí a Buenos Aires, y el de Quito a Santa Fe de Bogotá. El de Buenos Aires, a causa de la enorme distancia (500 leguas), y de los despoblados y tierras desérticas del Tucumán, era absolutamente irregular, de forma que «el Correo mayor de Lima, Conde del Castillejo, le dio facultad a un vecino de Buenos Aires para que estableciese dicho correo, cediendo todo el producto y utilidades que pudiese lograr en el término de 10 años, y cumplidos éstos había de recaer en su Casa, pero por más diligencias que actuó, nunca pudo conseguir al año de tres a cuatro correos, lo más». El de Quito a Santa Fe, aunque igualmente dificultoso por la enorme distancia (500 leguas), y el mal estado de los caminos, se hallaba, en cambio mejor establecido. En el virreinato de Nueva España existían, fundamentalmente, cuatro correos principales organizados: los que unían, de forma centralizada, la ciudad de México con Veracruz y Acapulco (unas 80 leguas), Guadalajara (120 leguas), Zacatecas (125 leguas) y Oaxaca (100 leguas). Los puertos de Veracruz y de Acapulco mantuvieron, desde siempre, unas rápidas comunicaciones con México, ya que constituían las puertas de entrada de las noticias y cartas que conducían los navíos procedentes de Europa, Asia y la América meridional. Vid. J. M<sup>a</sup> Vallejo García-Hevia, “El correo mayor de las Indias...”, pp. 1803-5.

<sup>39</sup> El real decreto de incorporación es de 21.11.1706 pasando a depender ahora de la Superintendencia General de Correos, Estafetas y caminos de España e Indias. *Ibidem*, p. 1789.

del Perú, cuyos titulares conservaron la perpetuidad del oficio y cuya incorporación completa hubo de esperar más de cincuenta años<sup>40</sup>.

Sin embargo, la corona no pudo afrontar la decisión de organizar debidamente el servicio de correo, por lo que tuvo nuevamente que otorgar en arrendamiento todos los servicios postales terrestres y marítimos. A Diego de Murga, marqués de Montesacro, se le arrendó el servicio de postas de 1707 a 1711. Entre las obligaciones que se le impusieron estaban la de armar y despachar seis fragatas en cada año con salidas cada cuatro meses, tres para cada reino, siendo la salida independiente del regreso de las demás que hiciesen el servicio, pudiéndose además detenerse hasta dos meses en los puertos indianos. Además, las fragatas debían salir de los puertos de Andalucía pagando los portes a razón de medio peso y por cada carta sencilla dos reales de plata antigua, observándose lo mismo para el correo proveniente de América. Se exceptuaban de este pago los pliegos que se referían al propio monarca, al Consejo de Indias, al de la Inquisición y al de órdenes, sin permitir que se cursaran gratuitamente cartas de particulares<sup>41</sup>.

En 1711 la administración de los correos de España y de Indias fue arrendada por cinco años a Juan Francisco Goyeneche, pero los abusos y las corruptelas de esta forma de organización del correo nuevamente condujeron a que en 1716 el monarca reconociera la importancia del servicio postal para el bien de la Monarquía, por lo que decidió crear la figura del Superintendente General de la Renta de Correos, Estafetas y Caminos de España y de las Indias, anejo a la titularidad de la Secretaría de Estado y del Despacho de Estado<sup>42</sup> nombrando a Juan Mateo Goyeneche como su titular. Dicho superintendente quedaría no sólo encargado de arrendar o administrar libremente las estafetas, postas y correos, sino también de nombrar y remover cuantas veces quisiera a todos los correos mayores. Dos años más tarde fue nombrado Juan de Azpiazu como el nuevo administrador del correo y en 1727 se designó a José de Palacios, juez superintendente y administrador general de todas las estafetas y correos de dentro y fuera del reino y la corte y carreras de postas con facultades para nombrar a los ministros de la renta y con jurisdicción para conocer los pleitos en primera instancia sobre causas pertenecientes al ramo de postas y correos, así como arrendarlos cuando lo considerara oportuno<sup>43</sup>.

---

<sup>40</sup> Por real orden de 09.09.1768 se otorgó escritura pública de cesión del oficio de correo mayor de las Indias a favor de la Corona ante escribano real. Id., p. 1809.

<sup>41</sup> Vid. C. Alcázar de Molina, *Historia del correo...*, p. 85.

<sup>42</sup> Vid. B. Badorrey Martín, *Los orígenes del Ministerio...*, pp. 336-38.

<sup>43</sup> Vid. C. Alcázar de Molina, *Historia del correo...*, pp. 86-7.

Durante los siglos XVI y XVII la correspondencia a las Indias se enviaba entre flota y flota. Desde la creación del sistema de flotas en 1561, la correspondencia entre el Nuevo Mundo y la Península debía realizarse al menos una vez al año y el de las Islas Filipinas cada año y medio<sup>44</sup>. Junto a las flotas era común que existieran los llamados navíos de avisos, esto es, pequeñas embarcaciones que navegaban sueltas con el fin de dar noticias sobre la llegada de las flotas, tanto a los puertos americanos como a los peninsulares, de allí que desde muy pronto fueron utilizadas como medio de envío del correo, tanto oficial, como particular<sup>45</sup>.

El sistema de avisos quedó establecido durante todo el siglo XVII siendo controlado por el Consulado de Sevilla. Cada tres meses zarpaba una embarcación a Cartagena a fin de recoger la correspondencia del Perú y desde allí se dirigía a La Habana a tomar la procedente de la Nueva España y las islas, a continuación regresaban a la Península. En principio estas naves tenían prohibido transportar mercancía, pero la presión del comercio andaluz logró que se autorizara a cargar hasta 40 toneladas de frutos de la tierra en cada uno de ellos.

Dicho sistema de envío fue utilizado por Felipe V pero incrementando a ocho las salidas anuales, cuatro a Nueva España y cuatro a Tierra Firme. Durante estos años el Consulado continuó la gestión de dichas naves de aviso. Posteriormente, en 1720, el Proyecto para Galeones, Flotas y Navíos de Registro y Avisos fue un intento de mejorar las comunicaciones navales entre España y América, consolidando el sistema tradicional de flotas, con la variedad que con ellas fueren también navíos de registro que se dirigieran a las Provincias donde las flotas no llegaban. Pero no fue sino hasta 1764 por Real cédula de 26 de agosto cuando se estableció por primera vez un

---

<sup>44</sup> Recop. Indias 9.30.1. A partir de 1561 los tiempos de salida serían en enero y agosto. La flota estaría a cargo de un general y su almirante. Al llegar a las Antillas, el contingente se dividiría en dos: una parte se dirigiría a Tierra Firme y la otra, a la Nueva España. Durante su trayecto las formaciones irían despidiendo a las embarcaciones que tuvieran otros puertos destino, como por ejemplo las naos de Honduras. Para el regreso se planeó la reunión de todas las embarcaciones del contingente original en La Habana, para de ahí emprender el viaje. Pero tres años más tarde hubo que realizar algunas modificaciones, la flota de Nueva España debía salir a mediados de febrero y la de Tierra Firme a mediados de enero rumbo a La Habana. Llegadas a ese puerto, las formaciones se esperarían unas a otras, así como a las provenientes de Honduras. El 10 de marzo debían iniciar el viaje hacia España, incluso en el caso de que una de las flotas no hubiese llegado a La Habana. En 1582 se lleva a cabo un nuevo intento para dotar al sistema de la puntualidad de que carecía. Al efecto se expiden nuevas ordenanzas para el despacho, disponiéndose que la flota de Nueva España saliera en mayo y la de Tierra Firme, en agosto. En 1660 las salidas se hicieron bianuales. Vid. J. A. Caballero Juárez, *El régimen jurídico...*, pp. 49 y ss.

<sup>45</sup> Vid. B. Torres, *La Marina en el gobierno y administración de las Indias*, Madrid, 1992, pp. 55-58.

correo de mar ordinario entre España y las Indias, canalizando así la comunicación, a través de la correspondencia, entre la Península y los territorios ultramarinos<sup>46</sup>.

Para darnos una idea del tiempo que podía tardar el correo entre América y Sevilla una embarcación de aviso se consideraba rápida si hacía el viaje en cincuenta días; un promedio aproximado estaría cerca de los sesenta y cinco días. Aunque el cálculo no dejaba de ser arbitrario, porque el desarrollo del viaje dependía de las condiciones tales como el tamaño de la nao, la presencia de enemigos, las condiciones climatológicas, la carga o la destreza del piloto. Hubo ocasiones en que los viajes llegaron a superar los ciento diez días de duración<sup>47</sup>.

Como ya se ha mencionado, al Consejo de Indias llegaba documentación emanada de autoridades o de particulares, si bien la documentación podía provenir de instituciones radicadas en la propia Corte, la mayor parte de los asuntos procedía de los territorios ultramarinos. El correo mayor de las Indias que residía en la ciudad de Sevilla debía recibir personalmente el correo que tocara a aquellos reinos y provincias para remitirlos a la Corte<sup>48</sup>. Tanto él como sus tenientes tenían la obligación de anotar en un libro encuadernado todos los correos que eran despachados para la Corte, con expresa consignación del año, el mes, el día y la hora que partían de su casa, su nombre, con qué diligencia iban, por cuenta de quién eran despachados, y qué cantidad en metálico recibían para el viaje, siendo firmada cada partida original<sup>49</sup>.

---

<sup>46</sup> Mensualmente debía salir un navío con todas las cartas dirigidas a América desde el puerto de La Coruña con destino a La Habana y desde allí a La Coruña se emprendería más tarde el tornaviaje. La Habana se convirtió en centro de distribución de pliegos con envíos en balandras y paquebotes a Veracruz, Tierra Firme y Perú, allí también se debía dejar la correspondencia, al paso, en Puerto Rico y Santo Domingo. Entre Buenos Aires y el puerto gallego pronto se establece una comunicación directa con salida cada dos meses. Vid. C. Alcázar Molina, *Historia del correo...*, pp. 99-100.

<sup>47</sup> Vid. J. A. Caballero Juárez, *El régimen jurídico...*, p. 267.

<sup>48</sup> Recop. Indias 9.7.1.

<sup>49</sup> El correo mayor de Indias residente en Sevilla debía contar con posadas bien provistas de caballos -postas- en Sevilla, y en los lugares del camino hacia Sanlúcar de Barrameda y Cádiz, no pudiendo arrendar el maestrazgo de dichas postas, pues debían estar siempre a cargo de criados suyos, al objeto de aprovisionar con diligencia a los correos que allí llegasen. Tenía expresamente prohibido cobrar más derechos de los legalmente reconocidos, esto es, una décima parte de los portes del viaje, ni tampoco podía realizar otros encargos a los correos que los pliegos de correspondencia y los despachos oficiales que habían de entregar. Vid. J. M<sup>a</sup> Vallejo García-Hevia, "El correo mayor de las Indias...", pp. 1795-6.

## **b) Tipos de asuntos que se remitían al Consejo.**

### **- Los asuntos de oficio provenientes de las Indias.**

La documentación de oficio que recibía el Consejo generalmente provenía de las Indias. En principio cualquier asunto de gobierno, justicia, guerra y hacienda podía llegar al Consejo de Indias, de manera que cualquier autoridad indiana o peninsular le podía remitir todo tipo de documentación. Según hemos establecido en el capítulo anterior con la expedición de los decretos de nueva planta quedaron vedados al Consejo el conocimiento de asuntos relacionados con lo gubernativo, económico y providencial<sup>50</sup>, esto es, todo aquello que mirara a la hacienda, guerra, comercio y navegación, así como a las provisiones de empleos y cargos, y órdenes respectivas de estas tres clases, así como sus incidencias y dependencias, lo cuales quedaban fuera de su ámbito competencial. Sólo podía conocer de dichos asuntos cuando el monarca se los remitiera través de la vía reservada<sup>51</sup>.

Para evitar que las autoridades indianas encargadas de los asuntos antes mencionados remitieran la documentación al Consejo, un real decreto de 1717 ordenó que la dirección de las cédulas y despachos que antes se remitían por la vía de Consejo, se hiciera ahora por la vía reservada<sup>52</sup>. Por tanto, sólo podían remitirle información las autoridades radicadas en Indias cuyos asuntos tuvieran relación con las competencias reconocidas a través de los propios decretos de nueva planta. En otras palabras, los virreyes, audiencias, presidentes, gobernadores, alcaldes, corregidores, oficiales reales, cabildos o cualquier prelado eclesiástico podían enviarle

---

<sup>50</sup> Real decreto 20.01.1717. A.G.I., 829 ff. 107v-108v.

<sup>51</sup> Real decreto 11.09.1717. A.G.I., 829 ff. 113r-114r.

<sup>52</sup> *Considerando la equidad, y conveniencia de las Leyes en proporcionarse a la región y demás circunstancias ocurrentes a su constitución, es preciso, que en la inconsistencia de las cosas tanto más estén sujetas a la aparición, cuanto sean más justas, en cuya consideración, y observando, que el alteración, y novedad, que en tiempo han tenido el gobierno, tráfico, y comercio de las Indias, algunas de aquellas reglas y Leyes oportunas y convenientemente establecidas después de su conquista, no son hoy tan acomodados al mejor Gobierno; fui servido resolver entre otras cosas, que la dirección de las cédulas y despachos en lo gubernativo, corriere por la vía reservada como antes por la secretaría del Consejo, para que así experimentasen las importancias de aquellos Reinos, y alivio de mis vasallos, más propensa mi real protección y autorizadas mis reales órdenes como de esto más necesitadas sus distancias conforme ha entendido el Consejo por mi real decreto de veinte de enero de este presente año...* Real decreto 22.11.1717. A.G.I., 829 ff. 110v-112r.

documentación para su conocimiento y despacho relacionados con justicia, gobierno municipal, provisión de plazas de justicia y gobierno y empleos puramente políticos, concesión de licencias, Real Patronato y todo aquello que no tuviere relación ni próxima, ni remota con materias de hacienda, guerra, comercio y navegación<sup>53</sup>.

Esta información era enviada a través de cartas en las que daban cuenta al rey, por mediación de su Consejo, de un sinnúmero de asuntos sobre los más variados temas. En opinión de Joaquín Real las cartas tenían por principal finalidad informar al monarca de todo lo ocurrido en aquellos territorios. Especialmente comunicaban la ejecución de sus reales órdenes a través del acuse de recibo, daban cuenta de su cumplimiento y de los problemas surgidos de su ejecución<sup>54</sup>. El Consejo debía tener un registro de todas las cartas que se hubieren recibido por tiempo de los últimos diez años, los registros anteriores debían remitirse al Archivo de Simancas<sup>55</sup>.

Con la finalidad de hacer más ágil el despacho de los asuntos se expidió una copiosa regulación tendente a simplificar el contenido de dichas cartas. Cada una de ellas debía referirse a un solo asunto, debiendo mantener un margen equivalente al espacio ocupado por el texto<sup>56</sup>, en donde el autor de la carta consignaría un resumen o extracto del asunto remitido.

Los virreyes, presidentes, gobernadores y cualquier ministro debían remitir la correspondencia dividida por materias:

*...ordenarán a sus secretarios que numeren y dividan las cartas por materias y escriban al margen, sacada en la otra relación sucinta de lo que contienen, comenzando por las eclesiásticas, siguiendo las de gobierno político y luego las tocantes a materias de hacienda, después las de lo militar refiriendo sustancialmente en cada una lo que se les ofreciere, aunque con ellas remitan autos y otros papeles, de las diligencias que se hubieren hecho...*<sup>57</sup>.

<sup>53</sup> Real cédula 13.11.1717. A.G.I., Indiferente General, 432 L. 48, f. 61. También publicado por F. Muro Orejón, *Cedulario americano...* t.2, pp. 520-22.

<sup>54</sup> Vid. J. J. Real Díaz, *Estudio diplomático del...*, p. 212.

<sup>55</sup> Ordenanza 95 de 1636. Recop. Indias 2.4.7.

<sup>56</sup> El margen reducido a una cuarta parte del folio para lo cual doblaban con anterioridad el papel en cuatro dobleces. Costumbres que se mantuvo desde el virrey Antonio de Mendoza hasta el conde de Coruña que aumenta el tamaño del margen a la tercera parte del folio, siguiendo para ello la práctica de los dobleces. Vid. A. Heredia Herrera, "La carta vehículo de comunicación entre la península y las Indias", en *Recopilación de estudios de Diplomática indiana*, Sevilla, 1985, p. 129.

<sup>57</sup> Recop. Indias 2.16.6. Obligación impuesta especialmente a los virreyes Recop. Ind. 3.14.1. Sin embargo, en la Representación de 1714 se señalaba que: *frecuente despacho son unos autos informativos, una carta con papeles, un informe de virreyes, obispos, Audiencias, Comunidades, oficiales de real hacienda, o de vasallos particulares,*

Sobre este mismo punto, Felipe V hubo de recordar por real cédula de 1718 la obligación de que en sus representaciones se respetara la separación de materias<sup>58</sup>. Si las cartas fueren acompañadas por documentos relacionados con el asunto que sirvieran de antecedentes como reales cédulas, reales provisiones, mandamientos, etc., o como pruebas en forma de testimonios de auto era necesario que en la correspondiente carta se aludiera a dichos documentos anexos, debiendo ir numerados en orden lógico de exposición<sup>59</sup>.

Era requisito indispensable enviar la documentación por duplicado en diversos navíos, encaminándolos por donde mejor conviniera, con buen recaudo de cubiertas<sup>60</sup>. Para el caso de los asuntos que se enviaban directamente a la vía reservada se estableció en 1739 que todos los despachos debían venir por triplicado<sup>61</sup>.

Podía suceder que desde las Indias se quisiera enviar una carta “secreta” directamente al monarca, para ello, el autor del documento estaba obligado a indicarlo en el encabezamiento, debiendo enviarse en índice de separado del resto de cartas<sup>62</sup>. El registrador del Consejo debía tener un registro de todas las cartas que se hubieren recibido por tiempo de los últimos diez años, los registros anteriores debían remitirse al Archivo de Simancas<sup>63</sup>.

Las Ordenanzas de 1636 obligaban al Consejo a leer las cartas provenientes de las Indias, *prefiriendo siempre el abrirlas, y leerlas, a todos otros cualesquier negocios, aunque más graves, é importantes sean, hasta haber visto, y sabido lo que en ellas se escribiere*. Terminada su lectura

---

*corregidores, presidentes o Ciudades, que todos vienen con su carta de guía, y lo que casi siempre sucede, es que una misma carta, en un testimonio, en unos Autos, informes, noticias o Consultas, vienen comprendidas diversidad de especies, y de puntos, y es muy raro el expediente que así no venga...* “Representación hecha a S.M. por el Consejo de Indias... B.P.R., Mss. II/844.

<sup>58</sup> Real cédula 12.02.1718. A.G.I., Indiferente General, 653. Vid. M. Gómez Gómez, *Forma y expedición...*, p. 139.

<sup>59</sup> Vid. M. Gómez Gómez, *Forma y expedición...*, p. 140.

<sup>60</sup> Ordenanza 149 de 1636. Recop. Indias 2.6.36. Había ocasiones que el duplicado llegara antes que el original, por ello, dentro de los legajos de cartas remitidas por distintas autoridades no basta sólo con revisar las originales, quizá dentro de los legajos de los duplicados exista un mayor número de documentación. Vid. J. J. Real Díaz, *Estudio diplomático del...*, p. 20 y A. Heredia Herrera “La carta vehículo...”, p. 128.

<sup>61</sup> Auto Acordado del Consejo de Indias 14.12.1739. A.G.I., Indiferente General, 265. Vid. J. J. Real Díaz, *Estudio diplomático del...*, p. 21.

<sup>62</sup> Loc. Cit.

<sup>63</sup> Ordenanza 95 de 1636. Recop. Indias 2.4.7.



debían inventariarse por el secretario y ponerse a buen recaudo en el arca o archivo del Consejo<sup>64</sup>.

#### **- Los asuntos de oficio provenientes de la Península.**

Al Consejo de Indias le eran remitidos documentos de órganos colegiados y unipersonales radicados en la Península. Era común que los otros consejos que integraban el gobierno de la Monarquía o Juntas particulares enviaran documentación jurídica con la intención de poner en su conocimiento asuntos de interés general o particular. Asimismo llegaba al Consejo correspondencia que le era propia, o simplemente los otros órganos de la administración solicitaban información antecedente de un asunto en específico o para que emitiera su opinión respecto de un tema en concreto.

En efecto, al Consejo podían llegar pragmáticas, reales cédulas, reales decretos de cualquier Consejo o Junta de la administración central. Desde el siglo XVII la entonces secretaría del despacho también remitía al Consejo sus consultas resueltas por el monarca a fin de poder ejecutar las decisiones reales. Cuando Felipe V institucionalizó la vía reservada, las secretarías de Estado y del despacho no sólo remitían las consultas resueltas, sino también, a través de reales órdenes enviaban al Consejo asuntos en los que interesaba conocer el parecer de sus ministros, para que informado el monarca, pudiera tomar la mejor resolución.

Cando las secretarías de Estado y del despacho requerían del Consejo información de los antecedentes de un asunto, remitirle informes o comunicarle decisiones burocráticas y administrativas cortas utilizaban el oficio como documento informativo, suplicativo o de remisión<sup>65</sup>. Este tipo de documento tenía la virtud que se podía entregar en mano por un oficial de la corte al Consejo, pero también por correo sin más trámites que la propia remisión<sup>66</sup>.

Las secretarías de Estado y del despacho también remitían al Consejo a través de reales órdenes<sup>67</sup> asuntos que requerían la visión de los ministros

---

<sup>64</sup> Ordenanza 27 de 1636. Recop. Indias 2.2.27.

<sup>65</sup> Vid. M. Gómez Gómez, *Forma y expedición...*, p. 248.

<sup>66</sup> Vid. P. L. Lorenzo Cadarso, *El documento real...*, p. 87.

<sup>67</sup> La real orden fue el documento ministerial más usado para comunicaciones administrativas o de gobierno entre las distintas autoridades e instituciones de dentro y fuera de la Corte. Su contenido fue muy variado. Existieron Reales Ordenes de simple

del Consejo. En otras palabras, las secretarías solicitaban al Consejo la confección de una consulta sobre materias ajenas a su competencia, es decir, asuntos relacionados con gobierno, guerra o hacienda. Normalmente la real orden llegaba al Consejo por la vía reservada conteniendo los principios básicos sobre los cuales debía regirse la consulta que el monarca le ordenaba preparar<sup>68</sup>. En este caso el negocio documentado aparecía como emanado del rey, pero comunicado al Consejo por el secretario del Despacho. De hecho el formulario de la real orden era “un reflejo exacto de la realidad jurídica de la nueva institución, que se convertía en el intermediario entre la voluntad real y los súbditos”<sup>69</sup>.

Esta remisión de reales órdenes por la vía reservada para la confección de consultas la hallamos en el Archivo de Indias en un libro-registro<sup>70</sup> de consultas, decretos y órdenes del Consejo de Indias entre los años de 1652 a 1826<sup>71</sup>. En dicho legajo, el grueso de la documentación giraba en torno al reinado de Felipe V (1700-1746). Centrándonos en dichos años los resultados obtenidos fueron los siguientes: de las 838 consultas, 265 de ellas habían sido remitidas por la vía reservada a través de reales órdenes, esto es, el 32% de las consultas que emitió el Consejo fueron a petición de las secretarías de Estado y del despacho.

De los datos anteriores es posible deducir que uno de cada tres asuntos que este órgano colegiado despachaba era enviado por la vía reservada, proporciones que pueden valorarse de manera más patente en el Gráfico 1 que a continuación presentamos. Si bien esta cifra la debemos entender de manera relativa, toda vez que hasta 1717 no quedó consolidada la vía

---

remisión o presentación de documentos o expedientes, otras comunicaban nombramientos, y muchas resolvían negocios políticos gubernativos y administrativos. Pudieron dirigirse a personas individuales sobre negocios concretos o por el contrario, ser expedidas en forma circular para normalizar asuntos generales. Vid. M. Gómez Gómez, *Forma y expedición...*, p. 141.

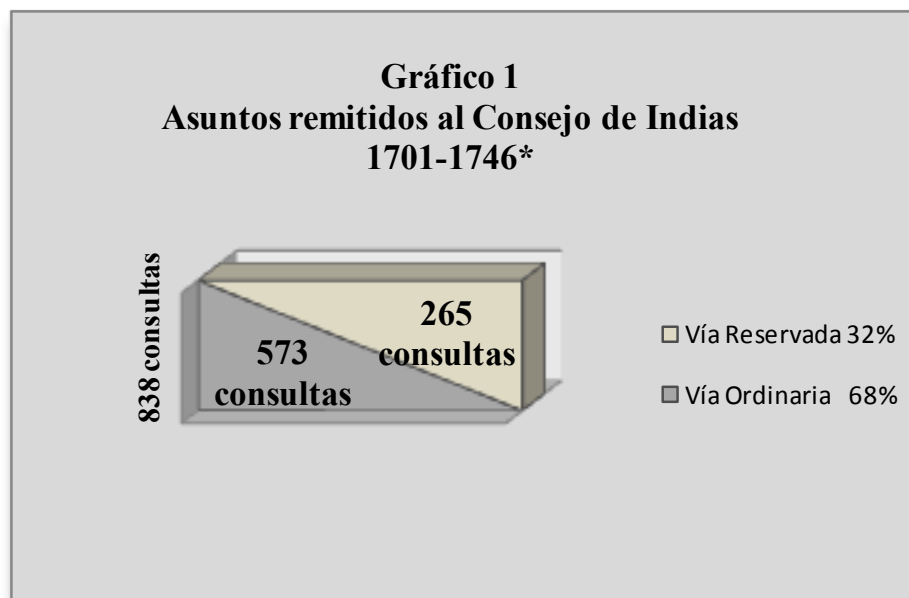
<sup>68</sup> Este procedimiento de remisión de real orden para la confección de una consulta ha sido analizado respecto al Consejo de Castilla y que es posible adaptarlo, dentro de su propio ámbito territorial, al Consejo de Indias. Vid. M<sup>a</sup> I. Cabrera Bosch, *La ley y el Consejo...*, pp. 16 y ss.

<sup>69</sup> La redacción de la real orden era muy sencilla. Expresaba la motivación y el dispositivo. Vid. J. J. Real Díaz, *Estudio diplomático del...*, p. 200.

<sup>70</sup> El Consejo de Indias estaba obligado a recoger las consultas en un libro registro. Al cargo de esta misión se encontraba el secretario quien debía consignar en dos libros las consultas, en uno colocando una síntesis del contenido de la consulta y la opinión de los ministros del Consejo. En el otro libro además de incluir una síntesis de lo consultado, también debía colocar la respuesta real. Ordenanza 26 de las de 1636. Recop. Indias 2.2.26. Sobre la importancia de los libro-registro puede verse el artículo de A. M<sup>a</sup> Heredia Herrera, “Los cedularios de oficio...”, pp.1-60.

<sup>71</sup> A.G.I., México, 1119.

reservada y hasta 1721 no hubo una Secretaría de Estado con especial atención a los asuntos indianos, también es cierto que la mayor parte de dichas remisiones fueron posteriores a 1720.



#### - Los asuntos de particulares.

La documentación de parte era aquella remitida directamente por los particulares o instituciones eclesiásticas que se dirigían al rey solicitando la concesión de una merced o una gracia real<sup>72</sup>. Pero no sólo escribían para pedir, sino también para informar al Consejo de una situación determinada.

Fue común que los particulares, incluso instituciones como el caso de los cabildos, utilizaran al solicitar un favor real dos tipos de documentos: las peticiones y los memoriales<sup>73</sup>. A través de ambos tipos documentales los

<sup>72</sup> En opinión de Salustiano de Dios la gracia y la merced aparecieron no sólo como ámbitos distintos, sino antagónicos. Mientras que la gracia en uno de sus sentidos significa don y favor que una persona hace a otra sin atender a mérito, ni esperar recompensa de lo que recibe. En cambio merced equivale al premio o galardón que se da por su trabajo. Pero con el tiempo, en los documentos se solía utilizar las palabras merced y gracia de forma acumulativa o de modo alternativo. Vid. S. de Dios, *Gracia, merced y...*, p. 275.

<sup>73</sup> Señala Joaquín Real que en teoría ambos documentos son distintos: mientras que el memorial era el escrito en que se pedía alguna merced o gracia alegando los méritos o

peticionarios recurrían al monarca para suplicar todo tipo de gracias y mercedes. Las más comunes fueron por ejemplo licencia para servir al mismo tiempo dos oficios vendibles y renunciables, licencia para entrar con espada a un ayuntamiento, para examinarse de escribano sin pasar a las Audiencias de distrito o para examinarse de médico o boticario sin acudir a los protomedicatos, a los extranjeros se les otorgaba licencias para pasar a las Indias<sup>74</sup>; provisión de oficios públicos; cartas de naturaleza<sup>75</sup>; beneficios eclesiásticos<sup>76</sup>; legitimaciones de hijos nacidos fuera de matrimonio<sup>77</sup>; perdones e indultos; concesión de encomiendas<sup>78</sup>, o repartimientos<sup>79</sup>; mercedes en dinero<sup>80</sup>; mercedes de jubilación<sup>81</sup>; peticiones por parte de instituciones eclesiásticas en ruego y ayuda para sus diversas necesidades; mercedes de encomiendas<sup>82</sup>, hábitos de las órdenes militares<sup>83</sup>, etc.

Para el caso de las peticiones y de los memoriales también fue necesario establecer una serie de requisitos a fin de agilizar su despacho. Los documentos debían estar escritos con buena letra, sin tachaduras, si enmendaduras, ni rotos<sup>84</sup>. Debían contener la firma y la data, exigencia que comúnmente no se cumplía<sup>85</sup>. Todo memorial debía estar escrito en papel del sello tercero<sup>86</sup>; desde 1744 quedaron exceptuados de este requisito

---

motivos en que se funda su razón; la petición era el escrito con que se pedía jurídicamente ante un juez. Sin embargo, ambas formas solicitaban una petición. . Vid. J. J. Real Díaz, *Estudio diplomático del...*, p. 59. Para Luis Lorenzo en cambio el documento más común es la petición en el que normalmente se encuentra acompañado de un memorial o documentos justificativo de la solicitud. Vid. L. Lorenzo Cadarso, *El documento real...*, pp. 75 y ss.

<sup>74</sup> Otras licencias también consistían en permitir la impresión de libros en A.G.I., Indiferente General, 1655; licencias para pasar a Indias A.G.I., Indiferente General, 1979; licencias para embarques A.G.I., Indiferente General, 2108-2109.

<sup>75</sup> A.G.I., Indiferente General, 1536 y 1537.

<sup>76</sup> A.G.I., Indiferente General, 189-190; Quito, 129;

<sup>77</sup> A.G.I., México, 709.

<sup>78</sup> A.G.I., México, 1016.

<sup>79</sup> A.G.I., Quito 131.

<sup>80</sup> A.G.I., Contaduría, 217.

<sup>81</sup> A.G.I., Contaduría, 239.

<sup>82</sup> A.G.I., Indiferente General, 529 L. 4, 530 L. 1, 1615-1617.

<sup>83</sup> A.G.I., Indiferente General, 1628 A.

<sup>84</sup> Cedulario Indiano, t. 2, p. 285. Vid. M. Gómez Gómez, *Forma y expedición...*, p. 144.

<sup>85</sup> Los virreyes tenían prohibido recibir memoriales sin firma. Recop. Indias 3.3.44.

<sup>86</sup> Real decreto 28.12.1638. *Asimismo ordenamos y mandamos que todas las peticiones, y memoriales que fe dieren a nuestros Virreyes, Audiencias, Tribunales, Juzgados, gobernadores, Corregidores, y otras cualesquier Justicias hayan de ser escritos en papel del sello tercero, y no siendo así no se han de poder decretar, ni remitir, ni hacer relación en ninguno de los dichos Tribunales, y Justicias, so las penas contenidas en esta ley.* Recop. Indias 8.23.18.

aquellos memoriales que fueran enviados directamente a las secretarías de Estado y del despacho pudiéndose remitir en papel común<sup>87</sup>.

Con el fin de evitar corruptelas se prohibió a los miembros del Consejo escribir cartas de recomendación, sólo se autorizó a las Audiencias indianas remitir información de los pretendientes:

*Para que tengamos entera noticia de las partes y calidades de los que nos sirven, y sean premiados dignamente: Ordenamos y mandamos que cuando alguno viniere o enviare ante Nos a que le hagamos merced, y ocupemos en puestos de nuestro real servicio parezca en la real audiencia del distrito, y declare lo que pretende suplicar y la audiencia se informe y con mucho secreto reciba información de oficio de la calidad de la persona, y hecha, al pie de ella, el presidente y oidores den su parecer determinado de la merced que mereciere, y cerrado y sellado todo, sin entregarlo a la parte, lo remitan de oficio por dos vía a nuestro Consejo de Indias, para que visto se provea lo que convenga y sea justicia, y si la parte quisiere hacer información por si, la reciba y entreguen, sin parecer de la audiencia, para los efectos que hubiere lugar de derecho<sup>88</sup>.*

Era común que la petición la realizara el solicitante o su representante legal, quien debía contar con una carta poder. Los cabildos indianos solían tener en la corte procuradores encargados de resolver y dar seguimiento a los asuntos que planteaban las ciudades<sup>89</sup>.

No se admitía memorial de servicios de ninguna persona sin la correspondiente certificación de *Virreyes, Generales u otros Jefes, debajo de cuya mano hubieren servido; excepto de los que sirvieren en los consejos*<sup>90</sup>. En caso de haberse hecho merced a un pretendiente y teniendo nuevos servicios pretendiere por ellos, el Consejo debía establecer si eran dignos los nuevos méritos<sup>91</sup>. En caso que un pretendiente alegare en sus memoriales servicios falsos y se probare, no sólo perdía lo que fuere, sino el derecho de poder solicitar merced por ellos<sup>92</sup>.

---

<sup>87</sup> Real Pragmática 17.01.1744. Nov. Recop. 10.24.8.

<sup>88</sup> Recop. Indias 2.33.1.

<sup>89</sup> Dicho procurador debía tener expresa licencia real para poder residir en la Corte. Recop. Indias 4.11.1.

<sup>90</sup> Ordenanza 43 de 1636. Recop. Indias 2.2.43.

<sup>91</sup> Ordenanza 46 de 1636. Recop. Indias 2.2.46.

<sup>92</sup> Ordenanza 47 de 1636. Recop. Indias 2.2.47.

### c) Distribución de la documentación.

La apertura de la documentación que llegaba tanto de las Indias, como de la propia corte iniciaba el proceso de despacho de los asuntos que el Consejo debía conocer. Este era el momento en donde se señalaba la vía que debía seguir el asunto.

El Consejo funcionaba en el despacho de los asuntos en pleno o trabajando separadamente los asuntos de justicia, de los de gobierno. Únicamente la Sala de Justicia podía estar integrada por ministros togados, quienes podían conocer y sustanciar asuntos de justicia, aunque también podía despachar en materia de gobierno. No así la Sala de Gobierno, que podía conocer cualquier materia a excepción de asuntos de justicia. Cuando el asunto era relevante el Consejo se reunía en pleno<sup>93</sup>. Al presidente o gobernador le correspondía determinar los ministros que debían integrar cada sala, siempre que no fueran menos de dos, además del propio presidente<sup>94</sup>.

Uno de los asuntos que obligaba al Consejo a reunirse en pleno era el despacho de la correspondencia. En efecto, en cuanto llegaban los pliegos y cajones de cartas y papeles los secretarios eran los encargados de recibirlos y sin abrirlos; después eran conducidos directamente al Consejo reunido en pleno, donde, con preferencia a cualquier otro negocio se abría y reconocía su contenido, separando todo lo concerniente a gobierno del resto de materias<sup>95</sup>.

En la *Representación* que el Consejo de Indias elaboró en 1714 describía a Felipe V el proceso de recepción y distribución de la documentación que se recibía:

---

<sup>93</sup> *Para las cosas universales de gobierno, como hacer Leyes y Pragmáticas, declaración, o derogación de ellas, erecciones de Audiencias, y de Iglesias, y desmembración, división, y unión dellas, y otras materias, que al parecer del presidente, o gobernador, sean grandes. Mandamos, que concurra, y esté junto todo el Consejo, y los que se hallaren presentes en él, antes que se aparten y dividan salas...* Ordenanza 14 de 1636. Recop. 2.2.14.

<sup>94</sup> Por real decreto de 15.03.1752 Fernando VI privó al presidente del Consejo de nombrar a los ministros que compondrían la Sala de Justicia, en su lugar el monarca designaría a los seis ministros togados que formarían parte de una nueva Sala de Justicia. Pero esta situación fue nuevamente modificada mediante decreto de 02.01.1764 restableciendo al presidente la prerrogativa de nombrar los ministros que habrían de despachar en la Sala de Justicia alternándolos según la naturaleza de los expedientes que hubieren de tratarse. Vid. R. D. García Pérez, *El Consejo de Indias...*, pp. 68-9.

<sup>95</sup> Ordenanza 128 de 1636. Recop. Indias 2.6.15.

*Envíase en cada ocasión de flotas, o galeones de ambos Reinos treinta o cuarenta cajones de pliegos, autos, procesos y papeles más o menos cajones en los navíos sueltos de permisión de comercio que llaman, y en los avisos de uno y otro Reino, y de las Islas y Costas.*

*Todos vienen siempre en derechura a parar a la Sala de Gobierno del Consejo donde presentes el Sr. presidente, todos los Señores Ministros, y el Oficio de Correo Mayor de España, se abren los referidos cajones, trae cada uno un índice con toda distinción de los pleitos, los autos, procesos, residencias, consultas, testimonios e informes que se envían, tanto de Virreyes, Audiencias, como de Iglesias, Prelados, Comunidades, Ciudades, Gobernadores, Corregidores, Alcaldes Mayores, Ministros y Oficiales reales de la Real Hacienda, quejas o pretensiones de Vasallos particulares.*

*Lo primero que se reconoce son las cartas, cuentas que en cada ocasión se envían, y los navíos en que los caudales vienen, y en este acto y abertura sin levantarse el Consejo acuerda incontinentemente poner todas las cartas cuentas originales en manos de SM, sin embargo de que generales, diputados, capitanes o maestros de plata al punto de dar fondo, suelen enviarlas en derechura a SM.*

*En este mismo acto, se ven todos los rótulos, o titulatras de cada proceso, residencias, cuentas, consultas e informes hasta el último pliego, apartándose todos los pertenecientes al gobierno, y servicio de SM en todas líneas porque todos vienen para SM rotulados.*

*Vienen en dichas cartas cuentas con gran separación, los caudales y los Reinos y Provincias de donde se remiten, y de los ramos que proceden, y de todos los derechos. Índices se saca copia, y pone en una de los cajones del Consejo<sup>96</sup>.*

Pero este sistema de recepción del correo generó algunos inconvenientes, entre ellos, además de la pérdida de tiempo, dio lugar a ciertas corruptelas cuando los propios ministros decidían con qué cartas y qué peticiones quedarse. Además, a esto se unía que cuando el Consejo no estaba reunido, había que convocar Consejo extraordinario<sup>97</sup>. Tratando de evitar todos estos problemas, Felipe V ordenó en 1738 que los cajones de Indias fueran abiertos en una sala del Consejo con la asistencia del ministro que el presidente o gobernador nombrase, así como la presencia de los secretarios y del escribano de cámara, y algunos oficiales<sup>98</sup>.

<sup>96</sup> “Representación hecha a S.M. por el Consejo de Indias... B.P.R., Mss. II/844.

<sup>97</sup> Vid. R. D. García Pérez, *El Consejo de Indias...*, pp. 441-2.

<sup>98</sup> Real decreto 27.12.1738. *No obstante la ordenanza, y práctica que hasta ahora se ha observado en el Consejo en el modo de abrir los Cajones de pliegos de Indias, y reconocer estos: He resuelto que en adelante (siempre que se hubiere de ejecutar esta diligencia) para que el Consejo pleno no se embarace en ella, dilatando el curso de otros expedientes de mayor urgencia, se haga en una de sus salas, con asistencia del Ministros que el presidente o gobernador, y por su falta el Decano destinare, y de los secretarios, y Escribano de Cámara (según la negociación a que correspondan y de un oficial de la*

Una vez abiertas las cajas ante el Consejo en pleno, el secretario era el responsable de inventariar las cartas y los pliegos que llegaban al Consejo, solía ocurrir que por falta de tiempo tuviera que llevarse la documentación a su casa para reconocerla y hacerse ayudar por sus oficiales a fin de elaborar relaciones sumarias de su contenido<sup>99</sup>.

Al secretario del Perú le correspondía el despacho del correo de los asuntos provenientes de la Armada de la guarda de la Carrera de las Indias, flotas, navíos, bajeles y avisos provenientes de Tierra Firme o puertos de ellas, así como la correspondencia proveniente de la Casa de Contratación y todo lo remitido por almirantes, generales o ministros que tuvieran relación con el Perú. Por su parte al secretario de Nueva España todo lo que enviase las flotas y naos que hubieren ido a dicho virreinato y a las provincias de Honduras e Islas de su distrito. Los despachos de la Cruzada correspondían a cada uno de los secretarios según tocare a sus distritos<sup>100</sup>. Aquella correspondencia de indifferente que se mandaba despachar con las Indias, así como la establecida con la Casa de la Contratación, Consulado y comercio de Sevilla, con las Islas Canarias, despachos generales a Roma y toda aquella remitida dentro de la Corte le correspondía al secretario más antiguo<sup>101</sup>. A partir de la expedición de los decretos de nueva planta algunos documentos concernientes a materias relacionadas con la real hacienda, guerra, comercio, navegación dejaron de remitirse al Consejo de Indias, yendo a parar a las oficinas de las secretarías de Estado y del despacho correspondientes<sup>102</sup>.

En los días siguientes a la apertura del correo el secretario realizaba un reconocimiento más detallado de las cartas, memoriales y peticiones con la finalidad de presentar dicha información en inventarios debidamente clasificados. Con esta información el presidente estaba en posición de señalar los documentos que debían remitirse según su materia al fiscal, a la Contaduría o a la Escribanía de Cámara<sup>103</sup>.

Esta primera fase culminaba cuando el presidente con el memorial de los asuntos en su poder hacía despachar con la mayor brevedad los expedientes

---

*secretaría; y que el Ministro disponga se inventarién todos los pliegos que toquen a la Escribanía de Cámara.* A.G.I., Indiferente General, 543 L. 3, ff. 461-462.

<sup>99</sup> Ordenanza 128 de 1636. Recop. Indias 2.6.15.

<sup>100</sup> Ordenanza 116. Recop. Indias 2.6.3.

<sup>101</sup> Ordenanza 117 de 1636. Recop. Indias 2.6.4. Por Real decreto 06.06.1776 se dispuso que el negociado de Indiferente quedase fijo en la secretaría del Perú. Vid. M. J. de Ayala, *Notas a la Recopilación...*, p. 107.

<sup>102</sup> Real decreto 20.01.1717. A.G.I., Indiferente General, 829 ff. 107v-108v.

<sup>103</sup> Ordenanza 11 de 1636. Recop. Indias 2.2.11.



y en especial los asuntos de justicia de los residentes en Indias<sup>104</sup>. En caso que hubiere duda sobre la calidad de los negocios, el presidente era el responsable de declararlo<sup>105</sup>. En este momento daba inicio la segunda fase de instrucción, en donde se tomaba un “verdadero conocimiento del contenido de los documentos y se procedía a su tramitación”<sup>106</sup>.

### **3.1.2. Actos de instrucción.**

Esta etapa del procedimiento consistía en la tramitación del asunto propiamente dicho. El presidente había repartido los asuntos estableciendo la vía a seguir. Si se trataba de un asunto de gobierno, guerra o hacienda normalmente se tramitaban por la vía de *expediente* y el asunto podía conocerse tanto en la Sala de Gobierno, como en la Sala de Justicia; en cambio, si eran asunto relacionados con la interposición de algunos de los recursos que podía conocer el Consejo, así como de visitas, residencias o justicia entre partes de gran valor, éstos asuntos se sustanciaba en la vía de *justicia* y sólo se podían tramitar en la Sala de Justicia.

Tras la decisión del procedimiento que debía seguir cada negocio era el momento de su reparto, búsqueda y localización de antecedentes. Los secretarios y sus oficiales se abocaban a inventariar la documentación y a la búsqueda de antecedentes. En caso necesario se remitía el asunto al fiscal o al contador del Consejo a fin de recabar su opinión por escrito. Con toda esta documentación añadida al documento original era momento de proceder a las votaciones de los consejeros y resolver el asunto. A partir de ese momento se procedía a documentar la consulta, misma que sería elevada al monarca para su resolución.

#### **a) Búsqueda y localización de antecedentes.**

Una vez que el presidente había enviado a los secretarios los asuntos que debían despachar, éstos repartían el trabajo entre sus oficiales<sup>107</sup> y eran ellos los encargados de leerlas y anotar los datos generales del asunto, así como

---

<sup>104</sup> Ordenanzas 11 y 72 de 1636. Recop. Indias 2.2.11 y 2.3.4.

<sup>105</sup> Ordenanza 74 de 1636. Recop. Indias 2.3.6.

<sup>106</sup> M. Gómez Gómez, *Forma y expedición...*, p. 145.

<sup>107</sup> Vid. G. Bernard, *Le Secrétariat d'État...*, p. 185.

adjuntar los antecedentes, en caso que existieran. Dentro de sus atribuciones, los secretarios y el escribano de Cámara eran los encargados de tramitar gran parte de los expedientes. Debían realizar la búsqueda y exposición de los antecedentes como requisito previo e indispensable para el despacho de los negocios.

Según la *Representación* de 1714 dicho trámite se despachaba de la siguiente manera:

*Hecha la separación de todos los pliegos, autos, consultas, informes, procesos, y de todo cuanto es Gobierno y servicio de SM se lo lleva todo a su casa el Sr. secretario, de donde en aquélla ocasión vienen los navíos, el cual distribuye los cajones, y pliegos entre los oficiales que están destinados para el despacho de cada Provincia, de forma que el pronto despacho consiste en esto, y en que cada oficial tenga presente cuanto en las Provincias de su incumbencia se comprende de forma que si se ofrece alguna especial materia y el Sr. secretario la participa entre todo sus oficiales cada uno le participa los expedientes, órdenes, y providencias antiguas, o modernas que sobre la referida materia, se han ido dando o están pendientes, y este es un esencialísimo punto, porque sin él se volverá a las mismas antecedentes confusiones, y cada día se encontrarán las resoluciones*<sup>108</sup>.

La necesidad de buscar los antecedentes<sup>109</sup> de un asunto agilizaba el posterior trabajo del fiscal o del contador, de manera que contaran con elementos suficientes que les permitieran confeccionar su informe. Sin embargo, la tónica general fue que los oficiales prescindieron de la búsqueda de dicha información complementaria<sup>110</sup>.

A fin de remitir al fiscal o al contador el expediente completo, además de los antecedentes, se agregaban toda clase de *papeles, consultas, resoluciones, y todo cuanto ha precedido de sujeta materia, es o puede ser concerniente a ella, y estos son papeles de 4, de 10, de 20, de 40 y más años, y muchas veces, el que de la otra secretaría, se le agreguen y junten papeles de otro Reino y negociación por si tiene alguna conexión en la dependencia actual y ver en ellos las providencias que allí se tomaron en*

---

<sup>108</sup> “Representación hecha a S.M. por el Consejo de Indias... B.P.R., Mss. II/844.

<sup>109</sup> La localización de antecedentes dentro del trámite seguido en la Secretaría de Estado y del Despacho de Indias se expresaba según el argot administrativo de la época como “instruirse de la correspondencia”. Vid. M. Gómez Gómez, *Forma y expedición...*, p. 145.

<sup>110</sup> Un real decreto de 09.02.1764 insistía en la necesidad de anexar los antecedentes de un asunto para evitar nuevas retardaciones. A.G.I., Indiferente General, 826. Citado por R. D. García Pérez, *El Consejo de Indias...*, p. 445, nota. 94.

*diferentes tiempos, todo a fin de univocar el régimen universal, o en toda América, o en cada Reino, o en cada Provincia sobre cada punto*<sup>111</sup>.

La búsqueda de los antecedentes comúnmente se hacía revisando la información que se contenía en los libros registros que al efecto se preparaban en las secretarías del Consejo<sup>112</sup>. Si bien dentro del Consejo la mayor parte de negocios que despachaba eran de gobierno, también lo era que muchos de estos asuntos requerían un estudio más profundo de materias de jurisprudencia, civil, canónica, municipal, leyes del reino, de Indias, sinodales, dubios...<sup>113</sup>.

Para tal efecto, el Consejo estaba obligado a guardar en un archivo cartas de todo tipo, así como libros y manuscritos relacionados con la navegación, derroteros, mapas, información sobre descubrimientos y relaciones tocantes a la tierra y mar de las Indias, así como libros de materias morales, políticas y naturales, de historia, de navegación, geografía, relaciones, discursos, arbitrios... y cualquier papel que pudiera tocar a las dichas Indias, o a cualquiera de sus materias...<sup>114</sup>.

A. Muro Orejón en un artículo relativo a los *Libros impresos y Manuscritos del Consejo de Indias*, señalaba que justamente había encontrado un listado de manuscritos y libros que el Consejo utilizaba para “la perfección de sus informes”<sup>115</sup>. Los listados de estos libros se encontraban en los inventarios que los porteros de estrados salientes estaban obligados a entregar a su sucesor<sup>116</sup>. Interesa aquí sólo mencionar que en el archivo del Consejo había información jurídica suficiente, sobre todo en materia de Indias. Especialmente importante fue toda la colección de textos legales tanto del Derecho común, como del castellano e indiano<sup>117</sup>.

---

<sup>111</sup> “Representación hecha a S.M. por el Consejo de Indias... B.P.R., Mss. II/844.

<sup>112</sup> Ordenanza 153 de 1636. Recop. Indias 2.6.40.

<sup>113</sup> “Representación hecha a S.M. por el Consejo de Indias... B.P.R., Mss. II/844.

<sup>114</sup> Ordenanza 65 de 1636. Recop. Indias 2.2.68.

<sup>115</sup> Vid. F. Muro Orejón, “Los libros impresos...”, p. 717.

<sup>116</sup> Algunos de esos inventarios pueden verse en A.G.I. Indiferente General, 845.

<sup>117</sup> El derecho común y castellano se encontraban representados por el Corpus de derecho civil y canónico, el Código de las Siete Partidas, la Recopilación de Castilla... La Recopilación de Indias también se encontraba en los anaqueles del archivo, en sus ediciones de 1681, 1756, 1774 y 1791. También se encontraban las Leyes Nuevas, el Cedulaire de Nueva España del doctor Vasco de Puga, el Cedulaire de Encinas, los Sumarios de Aguiar y Acuña, el proyecto de Recopilación de Solórzano y Pereira... Para el siglo XVIII contaba el Consejo con el Teatro de la Legislación de Pérez y López. De las Recopilaciones del derecho indiano criollo se encontraban los Sumario de Montemayor y Cuenca y sus decisiones de la Audiencia de la Isla Española; los originales de las Ordenanzas del Virrey Francisco de Toledo para Perú, y las Ordenanzas del Perú de Tomás de Ballesteros... Vid. F. Muro Orejón, “Los libros impresos...”, pp. 728 y ss.

## b) Elaboración de extractos y sus tipos.

Además de incluir todos los antecedentes relacionados con el asunto, era necesario elaborar un breve extracto del documento a fin de presentarlo para consulta del fiscal o del Consejo. Según la *Representación* de 1714 todos los días a la salida del Consejo, los dos agentes fiscales concurrían cada uno a la secretaría que le correspondía y *se le entregaban los expedientes del reino o provincia de su incumbencia, cada uno firmaba conocimiento y recibo con toda distinción de papeles en los libros de las secretarías*.

Antes de remitírselos al fiscal, los dos agentes separadamente formaban el extracto por escrito<sup>118</sup>. Los extractos tenían por finalidad agilizar el despacho de los asuntos, ya que al exponerse breve y claramente lo esencial del expediente, se evitaban largas lecturas y a veces pesadas redacciones<sup>119</sup>. Los relatores también estaban encargados de elaborar los resúmenes, extractos y anotaciones sobre todo en asuntos de justicia<sup>120</sup>.

Entre las características de dichos resúmenes era que debían ser breves pero contener todo lo esencial; se aconsejaba no ponerlo en limpio hasta que el fiscal lo hubiere aprobado<sup>121</sup>. Normalmente los extractos se realizaban en los propios documentos ya fuera al margen o en el reverso, o bien redactado en pliego aparte. La calidad y cualidad del extracto dependía de la complejidad del expediente extractado, por ello, en opinión de M. Gómez existían tres tipos de extractos: uno simple, relativo al contenido del expediente, esto es, la cabeza del expediente en donde se resumía la petición o carta que daba inicio a la tramitación del asunto; el segundo tipo resumía tanto la cabeza del expediente, como sus antecedentes y posterior desarrollo y el tercero consistía en elaborar un resumen más breve del extracto general<sup>122</sup>.

La práctica de elaborar resúmenes y extractos de los documentos era común dentro de los órganos de la administración central de la Monarquía, por ello cuando el Consejo remitía por la vía reservada sus consultas, los oficiales de la secretaría de Estado y del despacho debían elaborar extractos del documento y exponer la situación legal del asunto a resolver. Sin embargo, tenían prohibido elaborar la denominada “nota”, es decir un documento anejo a la consulta en donde un oficial de la secretaría de Estado exponía su parecer. Sólo hacia finales de la centuria, Antonio Porlier

<sup>118</sup> “Representación hecha a S.M. por el Consejo de Indias... B.P.R., Mss. II/844.

<sup>119</sup> Vid. M. Gómez, *Forma y expedición...*, p. 148.

<sup>120</sup> Ordenanzas 168-174 de 1636. Recop. Indias 2.9.1-7.

<sup>121</sup> Vid. G. Bernard, *Le Secrétariat d'État...*, p. 90.

<sup>122</sup> Vid. M. Gómez, *Forma y expedición...*, p. 148.

permitió a los oficiales hacer dictamen de las consultas, pero no en el extracto general, sino en una “esquela separada”<sup>123</sup>.

### c) Opinión del fiscal.

Después que los agentes fiscales recibían los expedientes y negocios debían examinarlos y extractarlos; asimismo realizaban las anotaciones pertinentes y aportaban los antecedentes necesarios a fin de dar cuenta al fiscal sobre el estado de cada uno de los asuntos que debía despachar<sup>124</sup>. La Representación de 1714 señalaba con detalle el trabajo de los agentes fiscales:

*Para tomar todos los referidos papeles, y expedientes y llevárselos al fiscal ocurren al medio día indefectiblemente los dos agentes fiscales a la secretaría de la incumbencia y negociación de cada uno... Reciben los dichos agentes fiscales en las secretarías, todos los referidos papeles y expedientes con separación de cada uno y de todos firman recibo y conocimiento con las fechas en los Libros de las secretarías de donde los llevan*<sup>125</sup>.

Al llegar a la posada del fiscal debían comunicarle de todo cuanto contenían los asuntos a través del extracto, que previamente se había elaborado, dándole cuenta de de todo cuanto en aquella materia se había procedido en otros tiempos, así como las providencias que se habían tomado, las consultas y las resoluciones que se habían hecho, hasta descender a la conclusión con el punto y en vista de todo concluyen con la expresión de su dictamen<sup>126</sup>.

El gran volumen de trabajo convenció a Felipe V a elevar en 1715 a dos el número de fiscales, uno para despachar los asuntos relacionados con la Nueva España y Filipinas, y el otro del Perú y Santa Fe de Bogotá; el más antiguo además debía ocuparse de los asuntos de indifferente<sup>127</sup>.

El fiscal podía solicitar a las secretarías que le facilitaran todos “los informes, memoriales, capítulos de cartas y papeles que tuviese

---

<sup>123</sup> Ibídem, p. 149.

<sup>124</sup> Ordenanza 113 de 1636. Recop. Indias 2.5.16.

<sup>125</sup> “Representación hecha a S.M. por el Consejo de Indias... B.P.R., Mss. II/844.

<sup>126</sup> Loc. Cit.

<sup>127</sup> Real decreto 05.08.1715. A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 90r-97r.

necesidad”<sup>128</sup>, para ello debía dejar “conocimiento” de toda la documentación que recibiere para que al terminar su instrucción, todos los antecedentes y memoriales retornasen a la secretaría para su guarda y custodia<sup>129</sup>.

Cada expediente contenía varios puntos. El fiscal adaptándose a las peculiaridades indianas realizaba un extracto o dictamen de cada uno de ellos en la misma sesión, de tal forma que el Consejo resolvía sobre todos ellos a la vez y daba cumplida respuesta a la autoridad o a la institución que lo había remitido<sup>130</sup>. Para realizar su dictamen el fiscal debía fundar y citar todo lo referido en cada respuesta que daba a los asuntos de gobierno, también era preciso que en aquellas “materias tan irregulares y exquisitas” debía escribir y hacer informes en derecho porque aunque no se hayan visto, ni ofrecido en otros tiempos. Sus dictámenes comenzaban en el frente o en los márgenes de cada expediente, en caso que las partes blancas no alcanzaran debía ir agregando pliegos sueltos<sup>131</sup>.

#### **d) Opinión de los contadores.**

En alguno de los asuntos en donde estuviera implicados asuntos de la real hacienda indiana era frecuente que los secretarios remitieran a los contadores el expediente a fin de recabar su opinión<sup>132</sup>. Además de asuntos relacionados con la real hacienda, los cuatro contadores del Consejo conocían todo tipo de documentación relacionada con las cuentas de las Audiencias indianas, de los Tribunales de Cuentas<sup>133</sup>, así como de los expedientes remitidos por la Casa de la Contratación y del Seminario de San Telmo.

Normalmente el contador elaboraba informes que otros órganos del Consejo le solicitaban para resolver un asunto en materia hacendaria.

---

<sup>128</sup> La secretaría era responsable de contar con inventarios en donde se anotase la salida de los papeles. Ordenanza 162 de 1636. Recop. Indias 2.6.49. A su vez en la Ordenanza 101 de 1636 se ordenó a los secretarios entregar al fiscal del Consejo todas las informaciones que éste requiriese, dejando conocimiento de todas las que recibiere para que habiendo usado de ellas las retornasen a su sitio.

<sup>129</sup> Ordenanza 101 de 1636. Recop. Indias 2.5.4.

<sup>130</sup> M<sup>a</sup> del Pérez Canto y C. Vázquez Rodríguez, “El Consejo de Indias...”, p. 234.

<sup>131</sup> “Representación hecha a S.M. por el Consejo de Indias... B.P.R., Mss. II/844.

<sup>132</sup> Ordenanza 147 de 1636. Recop. Indias 2.6.34.

<sup>133</sup> Ordenanza 190 de 1636. Recop. Indias 2.11.2.

Cuando las providencias correspondientes eran despachadas, las cuentas se remitían nuevamente a los contadores para su archivo<sup>134</sup>.

#### e) Votaciones.

Culminada la etapa de preparación del expediente al que se le habían unido los informes de los contadores o el dictamen del fiscal ahora era el turno de conocer la valoración del Consejo. El Consejo reunido debía deliberar y resolver sobre el asunto en cuestión. Ya fuera en pleno o en sala, el secretario era el encargado de remitir los expedientes que se debían someter al parecer de los consejeros.

Al presidente gozaba además de la prerrogativa de acudir a cualquiera de las salas para observar la regularidad del despacho de cada uno, como para el debido conocimiento e instrucción de sus causas y negocios y poder informar al rey siempre que fuere necesario.

El Consejo despachaba en pleno<sup>135</sup> y como sala de gobierno todos los días. Según las Ordenanzas de 1636 correspondía al Consejo en pleno con la concurrencia de todos sus miembros asuntos graves de gobierno, esto es, todo lo relativo a:

*...cosas universales de gobierno, como hacer leyes y pragmáticas, declaración, o derogación de ellas, erecciones de Audiencias, y de*

---

<sup>134</sup> Vid. R. D. García Pérez, *El Consejo de Indias...*, pp. 306-7.

<sup>135</sup> Aunque se aplicó por poco tiempo el real decreto de 01.11.1713 este señaló la composición del Consejo y su organización interna. Al Consejo en pleno debían acudir los diez ministros de capa y espada y los diez ministros togados, el fiscal y tres secretarios. En el pleno se debían ver todos los negocios de materias graves y generales, así de Perú como de Nueva España. A esta sala acudirían de primera vez todos los decretos y órdenes que se expidieren y todas las representaciones que vinieren de Indias y habiéndose visto en ella se repartirían los pertenecientes a las otras dos Salas de Gobierno y de Justicia. Dos años más tarde por real decreto de 05.08.1715 el Consejo volvió a quedar en su antigua planta compuesta por ocho ministros togados y dos de capa y espada, dos fiscales y dos secretarios que solamente componían una sala. Fue hasta el real decreto de 26.02.1776 cuando se mandó formar tres salas en el Consejo y por otro de 06.06.1776 siguiendo el orden para determinar los negocios de mucha gravedad que solo habían de ser regulados por el Consejo pleno se juntasen únicamente ministros de la sala primera y tercera, debiendo quedar siempre expedita la segunda para que no cesase el continuado despacho de los expedientes de gobierno y a elección de los ministros que las precediesen el señalar los que hubiesen de verse y determinarse en ellas como se hace en el Consejo de Castilla. B.P.R., Miscelánea de Ayala II/2889, ff. 264r-256r. También R. D. García Pérez, *El Consejo de Indias...*, pp. 417-423.

*Iglesias, y desmembración, división, y unión dellas, y otras materias, que al parecer del presidente o gobernador, sean grandes*<sup>136</sup>.

A la Sala de Gobierno correspondían aquellos asuntos que no fueren ni tan grandes, ni graves; bastaba que concurriesen aquellos que el presidente o el gobernador decidiera, siempre que no fueren menos de dos, además del propio presidente.

El orden que seguía en el despacho diario era el siguiente: en primer lugar se veían los reales decretos que no precisaban antecedentes, a continuación se revisaba la correspondencia enviada por los jueces destinados en los puertos de Andalucía y Castilla y que controlaban el comercio con las Indias<sup>137</sup>. De igual manera, se analizaban cartas, informes y consultas de los tribunales de la Casa de Contratación<sup>138</sup>. Acabado el despacho de los asuntos procedentes de la Península, el Consejo atendía los expedientes de Indias propiamente dichos, turnándose los diferentes secretarios para presentar los asuntos por orden de antigüedad. Se dedicaban un espacio de tiempo a la consulta de empleos políticos, militares y eclesiásticos en caso que los hubiere<sup>139</sup>.

Con la reforma de 1717, los asuntos que debían verse en el Consejo en pleno variaron significativamente. Lo habitual era que la actividad comenzaba con la publicación de las reales resoluciones que el monarca había dado a las consultas y de las reales órdenes remitidas por la vía reservada, para que se despacharan los despachos pertinentes<sup>140</sup>. Continuaba con la revisión de los asuntos provenientes de la Casa de Contratación y de todos aquellos asuntos que presentaran especial gravedad. Posteriormente se analizaban los expedientes de Indias propiamente dichos, turnándose los diferentes secretarios para presentar los asuntos por orden de antigüedad.

---

<sup>136</sup> Ordenanza 14 de 1636. Recop. Indias 2.2.14.

<sup>137</sup> Relacionado con esta materia, también se daba cuenta al Consejo en pleno de los registros y visitas realizados a *los dichos navíos y su carga, gente y pasajeros, que traen, reciben declaraciones a las capitanes, comandantes, o maestros de donde vienen, la carga que traen, a quien pertenece, el estado de los parajes, y Puertos de las Indias de donde salieron, los puertos donde ha tocado, el viaje que ha hecho, el estado y seguridad de los mares y de lo que alcanzaron a saber de aquellos Reinos declarando por decomiso todas las mercaderías frutos o géneros, que no vienen profesados en el registro, y de todo da cuenta con autos al Consejo donde o se aprueban o confirman las diligencias y comisos, o consultan con SM y para los derechos que deben pagar de que se les envían las órdenes.* “Representación hecha a S.M. por el Consejo de Indias... B.P.R., Mss. II/844.

<sup>138</sup> En materia de contratación el Consejo no solo veía cartas, informes y consultas de los tribunales de la Casa de la Contratación, sino también entendía de los comisos que se hacían en dichos puertos. Loc. Cit.

<sup>139</sup> M<sup>a</sup> del Pérez Canto y C. Vázquez Rodríguez, “El Consejo de Indias...”, p. 234.

<sup>140</sup> Vid. R. D. García Pérez, *El Consejo de Indias...*, pp. 419-20.



Cuando finalizaba el Consejo en pleno, el presidente era el encargado de distribuir los asuntos entre la Sala de Gobierno y la Sala de Justicia<sup>141</sup>.

El secretario estaba obligado a dar cuenta de los expedientes que le hubieren sido asignados con la finalidad que dicho órgano reunido colegiadamente estuviera en condiciones de deliberar y proceder a su resolución. En caso que el Consejo decidiera solicitar información adicional, la sesión era suspendida. En aquellos asuntos especialmente voluminosos o complejos, previa autorización del presidente se solicitaba que se eligiera a un relator que expusiera ante la Sala de Gobierno un memorial ajustado de todo el expediente<sup>142</sup>.

Según la importancia del asunto hubo ocasiones en que antes de la votación el Consejo encargaba a alguno de sus consejeros la elaboración de un informe sobre un asunto concreto<sup>143</sup>. Dicho informe se remitía al secretario correspondiente y se reservaba para presentarlo en las siguientes votaciones. También se le hacía presente al fiscal para que pudiese dictaminar lo que considerase conveniente.

El Consejo siempre despachaba a puerta cerrada, máxime porque todos los asuntos de gobierno eran secretos. Sólo intervenían los ministros del Consejo, el fiscal y el secretario correspondiente. La Representación que el Consejo de Indias remitió a Felipe V aludía que *nunca en materia de gobierno se ha dado traslado, ni se ha escuchado a las partes como en otros tribunales, ni están presentes las partes, sus abogados, procuradores, ni agentes, pues si así fuese se pervertiría y confundiría el universal despacho y gobierno de las Indias*<sup>144</sup>. En caso que el asunto afectara de manera directa

---

<sup>141</sup> Ordenanza 11 de 1636. Recop. Indias 2.2.11. Esta prerrogativa de calificación de la gravedad de un asunto fue modificada con el real decreto de 08.09.1787 atribuyendo esta prerrogativa al Tribunal reunido en plenísimo. En caso de singular gravedad en los que ocurriesen especiales circunstancias, el gobernador podía, si así lo consideraba, consultar la decisión con el monarca. Vid. R. D. García Pérez, *El Consejo de Indias...*, p. 420.

<sup>142</sup> *Ibídem*, p. 448.

<sup>143</sup> La Representación de 1714 señalaba que al ser los expedientes de gobierno innumerables y *si estos se hubiesen de repartir entre todos los Ministros para que como exponentes hiciesen extracto y diesen cuenta en el Consejo cada uno; tuviera en casa un Archivo de papeles y expedientes para irles formando extractos, y como en Sala de Gobierno de Indias, nunca se presentan ni admiten escrituras, ni instrumentos, ni alegatos de las partes, porque con solo los papeles que vienen de las Indias, y los antecedentes que les agrega la secretaría, y con la respuesta del fiscal, se ven, resuelven y despachan, parece que variada esta forma...* "Representación hecha a S.M. por el Consejo de Indias... B.P.R., Mss. II/844.

<sup>144</sup> *Loc. Cit.*

alguno de los miembros del Consejo o a sus parientes más cercanos el interesado debía abstenerse de concurrir a la resolución del asunto<sup>145</sup>.

Reunido el Consejo en sala de gobierno únicamente daba cuenta el secretario a quien tocaba el asunto, si era necesario, se le solicitaba el expediente y se le entregaba al fiscal correspondiente. Oída la respuesta y el dictamen del fiscal, votaba el Consejo, o se daba por visto el expediente y si era menester solicitar documentación complementaria se pedía nuevamente a estudio y se remitía al fiscal<sup>146</sup>.

El número de miembros que acudían a una sesión del Consejo condicionaban el tipo de consulta que se podía someter a votación. Si se trataba de asuntos de gobierno se requería los votos de la mayoría; en caso de empate era menester elevar consulta al monarca<sup>147</sup>. En cambio para la aprobación o derogación de leyes era necesaria la concurrencia de las dos terceras partes de los ministros que formaban parte del Consejo, debiendo además consultar al monarca. En los asuntos de solo gobierno era necesario incluir el voto particular del consejero cuya opinión se alejara de la común opinión del Consejo<sup>148</sup>, el ministro que decidiera tomar esta postura contraria a la mayoría, debía manifestar su intención de este voto particular antes de las votaciones<sup>149</sup>. A partir de 1717 cualquier asunto que el Consejo tras su votación estimara de gravedad debía elevar consulta al monarca y *espere su soberana decisión*<sup>150</sup>.

El orden que se seguía en las votaciones del Consejo correspondía a la antigüedad de sus ministros, comenzando siempre con el más moderno<sup>151</sup>. En el momento de las votaciones los consejeros debían evitar cualquier disputa, podían aportar nuevas razones siempre que no repitieran lo ya expuesto, ni intentar interferir en la voluntad de los otros ministros. En caso

<sup>145</sup> Ordenanza 85 de 1636. Recop. Indias 2.3.17.

<sup>146</sup> “Representación hecha a S.M. por el Consejo de Indias... B.P.R., Mss. II/844.

<sup>147</sup> Ordenanza 15 de 1636. Recop. Indias 2.2.15.

<sup>148</sup> Ordenanza 16 de 1636. Recop. Indias 2.2.16. Al afecto Ayala ejemplificaba como un voto particular podía afectar a una consulta ya resuelta por el monarca. Así una real orden de 01.06.1712 remitida al Dr. Pedro Rovinet, confesor del Rey, con motivo de haber expuesto por el presidente del Consejo de Indias, el conde de Frigiliana, varias razones retractando su dictamen al voto que dio fray Juan Lardino para el obispado de Guatemala, para que dicho confesor le tuviese presente en la consulta que de dicho obispado se le había remitido. Vid. M. J. de Ayala, *Notas a la Recopilación...*, p. 38.

<sup>149</sup> Señalaba Ayala que en el Consejo existía una arquilla con llave al frente del banco trastero en que se guardaba el voto del ministro no conforme que no quería extenderlo en la consulta que se hiciera al monarca. *Ibidem*, p. 42.

<sup>150</sup> Real decreto 06.05.1717. A.G.I., Indiferente General, 824. Citado por Vid. R. D. García Pérez, *El Consejo de Indias...*, p. 449.

<sup>151</sup> Vid. R. D. García Pérez, *El Consejo de Indias...*, p. 432.

que el asunto fuera sencillo y la voluntad de los ministros pareciera unánime era posible evitar votaciones. En caso de no lograr un acuerdo se debía posponer la deliberación y señalar un nuevo día de votaciones<sup>152</sup>.

Un gran problema en la investigación de las sesiones del Consejo es que no se conservaron los pareceres de sus miembros, aún así con el tiempo, aquellos votos particulares contrarios al criterio mayoritario tenían que quedar dentro de la propia consulta<sup>153</sup>. Cada uno de los secretarios era responsable de tomar las notas necesarias para poder formar con la debida información las consultas y despachos surgidos de estas votaciones.

Después de haber resuelto el expediente mediante la votación de los ministros reunidos en el pleno del Consejo o en alguna de sus salas, el expediente podía seguir distintas vías. Cuando se trataban de asuntos de importante entidad eran elevados a consulta real; en otras ocasiones se dirigía un oficio a alguna autoridad o se expedía a los territorios una real cédula o un real despacho según el caso<sup>154</sup>.

#### e) Consulta.

Cuando el Consejo reunido en pleno o en sala terminaba las votaciones era el momento de confeccionar los documentos, que como resultado de las resoluciones del Consejo se debían de despachar, entre esos documentos se encontraban las consultas<sup>155</sup>. El encargado de tomar las notas pertinentes en todo lo actuado durante las votaciones era el secretario, ya que con ello se

---

<sup>152</sup> Ordenanza 59 de 1636. Recop. Indias 2.2.61.

<sup>153</sup> E. Schäfer, *El Consejo Real...*, t. 1, p. 150. Martínez de Salazar afirmaba que en los tribunales reales había un libro reservado en el que los ministros escribían sus votos cuando no se conformaban con el voto de los demás. Vid. *Colección de memorias...*, p. 187.

<sup>154</sup> Así lo señala la Representación de 1714: *La calidad de la materia da motivo, o para que a SM se le consulte, o para que con lo que se acuerda, se despache desde luego a las Indias las órdenes y cédulas de lo resuelto, pero habiendo Consulta todo queda suspenso hasta que baje la resolución de SM en cuya conformidad se despachan*. Vid. "Representación hecha a S.M. por el Consejo de Indias... B.P.R., Mss. II/844.

<sup>155</sup> En opinión de Schäfer las consultas eran tan importantes sobre todo por el hecho que reproducían el desarrollo histórico de los sucesos, los asuntos de organización, de manera natural y "sin el misterio acostumbrado en publicaciones oficiales. Vid. *El Consejo Real...*, t. 1, p. 43. Esta es quizá una de las razones principales por las que decidimos analizar varios centenares de consulta a fin de comprender los problemas indianos que con mayor frecuencia se le presentaban al monarca.

podía elaborar con precisión las consultas y los despachos que se hubieren de remitir<sup>156</sup>.

La consulta era el acto por medio del cual el Consejo asesoraba al monarca en un asunto determinado. Por extensión recibió el nombre de consulta el documento en el que el Consejo transmitía al soberano su opinión en el negocio que se le había encomendado<sup>157</sup>.

El Consejo debía consultar al monarca en todas aquellas decisiones importantes destinadas hacer jurisprudencia, así como en los nombramientos altos cargos indianos y de miembros del propio Consejo. También debía remitir consulta al monarca cuando había igualdad de votos después de una segunda votación, de lo contrario, en caso de igualdad de votos, el rey autorizó al presidente a resolver él mismo cuando se trataba si un asunto era de gobierno o de gracia<sup>158</sup> y también para nombramientos de un consejero para la inspección de los relatores, escribanos de cámara, alguaciles, abogados y procuradores de pobres.<sup>159</sup>

<sup>156</sup> Vid. R. D. García Pérez, *El Consejo de Indias...*, p. 449.

<sup>157</sup> Vid. J. J. Real Díaz, *Estudio diplomático...*, pp. 72 y ss. En el siglo XVIII Prado y Rozas señaló que existían tres clases de consulta. Las de oficio que eran aquellas en que se interesaba el gobierno del reino, bien sea por razón de Estado, de guerra, de hacienda, de lo político, económico, etc. Normalmente este tipo de consultas debían contener un solo punto. El segundo tipo se denominaba de partes, la cual se debe de formar de tres capítulos incluyendo los méritos que exponga el pretendientes, con todo lo demás que alegue a su favor y súplica que hiciere; también se debe incluir los papeles justificativos y los informes que sobre ello se pidan de oficio y también debe contener el parecer del Consejo. La tercera clase de consultas llamada de oficio y de parte surge cuando un negocio o pretensión de parte iba relacionado con algún incidente de oficio o al contrario. Vid. *Reglas para oficiales...*, p. 105-9.

<sup>158</sup> Durante el tiempo que el primer Borbón extinguió la Cámara de Indias, todas las atribuciones de gracia y merced las asumió el Consejo de Indias, hasta que en 1717 los decretos de Nueva Planta trasladaron las competencias de provisión de *empleos y cargos en materia de hacienda, guerra, comercio y navegación a través de la vía reservada*. El Consejo conservó la atribución de consultar al monarca los nombramientos para provisión de *Presidencias, plazas de Administración de Justicia, y Gobierno, Corregimientos, Alcaldías mayores, Alguaciles mayores, de Regidores, y demás Ministros de las Audiencias, y cabildos seculares, Escribanías mayores de provincia, reales y del número, y otros empleos puramente políticos, y sin conexión próxima ni remota con las expresadas materias de Hacienda, Guerra, Comercio, y Navegación*. Sin embargo, mediante real decreto de 22.12.1721 se restableció definitivamente la Cámara de Indias por lo que el Consejo perdió las competencias de consultar con el monarca asuntos de gracia y merced.

<sup>159</sup> Vid. G. Bernard, *Le Secrétariat d'État...*, p. 195. Garma señalaba que el Consejo debía consultar con el monarca en *dependencias generales de gobierno como hacer leyes, pragmáticas, declaraciones, derogaciones de las antiguas, erecciones de Audiencias o Iglesias, desmembramientos, divisiones, uniones y otras materias graves...* para proponer altos cargos en materia eclesiástica y por lo militar y político. Vid. F. X. Garma y Durán, *Theatro Universal...*, pp. 325 y ss.

Como se ha mencionado, cuando el asunto revestía una gran importancia era necesaria remitir la consulta al monarca, así lo recordó Felipe V mediante real decreto de 1717, a contrario *sensu* aquellos asuntos que no revistieran especial gravedad podía el Consejo resolverlo por sí solo<sup>160</sup>. El decreto referido aludía precisamente a que *la calidad de la materia da motivo o para que a SM se le consulte, o para que con lo que se acuerda, se despachen desde luego a las Indias las órdenes y cédulas de lo resuelto, pero habiendo consulta todo queda suspenso hasta que baje la resolución a SM*<sup>161</sup>.

Recabada la opinión de los consejeros, el secretario que había asistido a la sesión en donde se decidió la consulta, y había anotado por escrito el acuerdo, encargaba a sus oficiales la confección de una minuta<sup>162</sup>: Aunque esta función de escribir de propia mano la consulta recayó directamente en el secretario normalmente no se llevaba a cabo<sup>163</sup>. La inobservancia de esta ley fue puesta de relieve por Ayala al afirmar que:

*Insensiblemente la desdicha, vejez, achaques y otras causas, como la tolerancia del Consejo, y no tenerse presente en la secretaría del despachola disposición de esta Ley, ha introducido su inobservancia en cuanto a que los secretarios no sólo no escriben las Consultas, más ni las forman, si no por ellos sus Oficiales, respectivamente conforme están repartidos los negocios a cada uno, y únicamente en las de provisiones de empleos que propone la Cámara, suscriben dichos secretarios los nombres de los propuestos. Los daños ya los indica la ley, y los sucesos y las resultas e imposibilitan más el breve despacho, porque son propias obligaciones cargan sobre los Oficiales, y les quitan el tiempo para las peculiares formación de expedientes, extractos, notas y minutas de los despachos y cédulas. ¿Y qué diremos cuando los Oficiales Mayores son habilitados por enfermedad o*

---

<sup>160</sup> Para Garma y Durán los casos en los que el Consejo determinaba sin consulta real eran entre otros: *las visitas y ajustes de cuentas de los virreyes, presidentes, oidores, alcaldes del crimen, fiscales de las Audiencias, gobernadores, capitanes generales de Provincia como el castigo n sea de pena capital, ni privación o suspensión de oficio, pero si le consulta en las de los Generales de Mar, Almirantes, Capitanes y Oficiales de Marina.* Ibídem, p. 322.

<sup>161</sup> Real decreto 06.05.1717. *En los expedientes que el Consejo regular de suma gravedad, exponga a SM su dictamen, y espere su soberana resolución...*, A.G.I., Indiferente General, 824. Citado por R. D. García Pérez, *El Consejo de Indias...*, p. 449.

<sup>162</sup> La minuta puede entenderse como el esquema primario y casi necesario para la redacción de un documento, es un reflejo más o menos exacto de su contenido. Vid. J. J. Real Díaz, *Estudio diplomático...*, p. 23. Para M. Gómez la confección de la minuta implica seguir un procedimiento en donde se plantea, ensaya y finalmente se elige la forma interna y tenor que deberá mostrar el documento final que comunique una resolución determinada. Vid. *Forma y expedición...*, p. 164.

<sup>163</sup> Ordenanza 126. Recop. Indias 2.6.13.

*ausencia de los secretarios para despachar en el Consejo? mayor el atraso*<sup>164</sup>.

Como sucedió con la mayoría de los documentos que eran parte de la vía de *expediente*, las consultas también debían cumplir con varios requisitos con el fin de agilizar su trámite. Así por ejemplo, todas las consultas debían ir dirigidas al monarca, únicamente en caso de ausencia real de España, algunas consultas podían elevarse a las personas que hubieran dejado al frente del reino, casi siempre el príncipe o la reina<sup>165</sup>. Cada una de las consultas debía contener un solo asunto a fin de evitar la confusión que se pudiera producir de unos asuntos con otros. Los votos particulares tenían que ir señalados inmediatamente después del voto común<sup>166</sup>. En la parte superior izquierda se contenía el listado con el nombre de los ministros que habían participado en la votación y que por ende habían suscrito la consulta.

Una vez que se tenía la consulta en limpio se iniciaba el trámite de validación<sup>167</sup>, para lo cual era necesario recabar las firmas completas de los consejeros que habían intervenido en el asunto. A partir del siglo XVIII, con el fin de simplificar el procedimiento validativo de la consulta, se permitió que sólo tuviera la firma del secretario del Consejo<sup>168</sup>.

El envío de la consulta al monarca era responsabilidad de los secretarios del Consejo, que lo remitían al rey si se encontraba en la Corte<sup>169</sup>. Cuando estaba fuera de ella y le acompañaba el presidente del Consejo, se le enviaba

<sup>164</sup> M. J. de Ayala, *Notas a la Recopilación...*, pp. 109-10.

<sup>165</sup> Mediante un real decreto de 13.05.1702 Felipe V resolvió constituir una Junta de Estado para que junto con la reina se tomaran las decisiones más importantes: *...doy amplia facultad, y poder para que juntos con la Reina puedan tratar, conferir, y votar todos los negocios así de oficio, como de partes, resolviendo y determinando sobre las consultas e instancias de las partes, reservando lo que tocara a provisiones en lo Militar y Político, todo lo cual quiero se me remita por la misma Junta con su parecer para que yo tome resolución... y las resoluciones que en vista de ellas se acordaren en la Junta se pondrán por el secretario que fuere de ella, y las señalará solamente la Reina, como también los decretos decisivos, y los que se ejecutaren por resoluciones de consultas, y los despachos de oficio, y parte de todos los Tribunales, los firmará la Reina Gobernadora, y en la refrendata de los que hubiere de firmar la Reina, pondrán los secretarios por merced de SM y los pliegos de consultas y despachos se intitularán con el sobre escrito para mí y se entregarán en la secretaría del despacho para que de allí, se lleven cerrados a la Junta, y se abran en ella...* A.G.I., Indiferente General, 583 L. 3, ff. 90-94.

<sup>166</sup> Ordenanza 16 de 1636. Recop. Indias 2.2.16.

<sup>167</sup> La validación consiste en dotar al documento de unos signos de identidad y autenticidad mediante los cuales lo escrito se vincula de una forma directa a aquellas personas o institución que lo originó. Vid. M. Gómez Gómez, Vid. *Forma y expedición...*, p. 172.

<sup>168</sup> La rúbrica iba procedida de la indicación “Señor, por acuerdo del Consejo sube con mi señal. (rubricado). Vid. J. J. Real Díaz, *Estudio diplomático...*, p. 80.

<sup>169</sup> Ordenanza 126 de 1636. Recop. Indias 2.6.13.

a través de éste<sup>170</sup>. En principio, el recibo de las consultas estaba fijado todos los lunes primero de cada mes, pero si entretanto se ofreciere algún negocio que requiriera presta y breve determinación, lo debía consultar directamente el presidente o gobernador del Consejo<sup>171</sup>. Un Real decreto de junio de 1715 señaló los viernes como el día que el Consejo debía dejar por escrito las consultas al monarca, y en caso que se hallare fuera de la corte se deberá remitir a donde se encuentre<sup>172</sup>.

Durante el siglo XVII el encargado de recibir las consultas lo fue el secretario Universal del Despacho, de manera que él era quien despachaba el asunto con el rey<sup>173</sup>. Con la implantación de la vía reservada, las

---

<sup>170</sup> Así lo estableció Felipe V en un real orden de 18.11.1710 en el que se autorizó al presidente del Consejo de Indias, conde de Frigiliana, a remitirle a sus manos las consultas del Consejo por hallarse el monarca fuera de la Corte y el presidente cerca de su persona. Vid. M. J. de Ayala, *Notas a la Recopilación...*, p. 110.

<sup>171</sup> Ordenanza 23 de 1636. Recop. Indias 2.2.23. Señalaba Ayala que el contenido de esta ley no estaba en uso, ni en memoria que 50 años a esta parte no se había practicado. Vid. M. J. de Ayala, *Notas a la Recopilación...*, p. 41.

<sup>172</sup> Real decreto 15.06.1715. *...siempre que SM se hallaba ausente, en virtud de tácito permiso se ejecutaba por el Consejo lo mismo, que cuando estaba presente se consultaba a la Real Persona; mediante lo cual se daban a las partes los despachos con cláusula de visto, y consultado con Su Majestad, y que desea saber el Consejo si es mi voluntad continúe esta práctica suya, que procedía de la inmediata voz, autoridad, y Real Representación, que siempre tuvo, y nuevamente le he vuelto a comunicar, y del inmediato conocimiento de que, a mas de excusar la molestia de repetidas consulta, su asunto las más veces, o todas, pide una brevísima expedición, que no se conseguiría, mediante la necesaria dilación de consulta, y resolución Real a ella, en grave daño de los Pueblos, que comúnmente recurren a solicitar el alivio de la dispensación de alguna facultad para redimir su indulgencia, y satisfacer las cargas de derechos, y Tributos Reales, donativos, y otros gravámenes, y excusarle de la ejecución, con que les precisa a la satisfacción, que no pueden dar sin este beneficio, o si, no obstante estas consideraciones es mi Real agrado que en mi ausencia, y durante ella, haga el Consejo por escrito la Consulta, pasando a mis Reales manos la noticia de los puntos, que comprendieren los Expedientes, que en aquella forma se despachen, para arreglarse a lo que sea mas de mi Real voluntad; y en vista de que lo que se me propone, mando al Consejo observe lo que tengo resuelto en decreto de 9 de este mes cuanto a dejar por escrito en mis manos los Viernes de cada semana los puntos, que tuviere que representarme; esto se entiende cuando yo me hallare en Madrid, o en la parte, que residiere el Consejo; pero en mi ausencia a distancia, que no exceda de ocho leguas, el Ministro Consultante leerá el Viernes por las mañana en Consejo pleno una relación, que llevará formada, de todo los expedientes remitidos a consulta, que hubieren ocurrido en la Semana, y al margen de cada uno pondrá el secretario, el Acuerdo del Consejo; y esta forma se enviará a mis manos, para que Yo los resuelva: y en el caso de mayor ausencia de las ocho leguas, daré providencia.* A. A. de la N. Recop. 2.4.73.

<sup>173</sup> El duque de Maura relataba como el secretario del Consejo elevaba la consulta al Despacho Universal y cómo Carlos II daba despacho junto con su secretario a las consultas que le remitían los consejos de la siguiente manera: *...sobre el bufete del Ministro de esta oficina se acumulaban, pues, montones ingentes de pliegos manuscritos... No intentaba siquiera el rey, incapaz de seguir... el escrupuloso ejemplo de su abuelo. Más como le incumbía... la responsabilidad de cada resolución, y a falta de valido, tenía que adoptarla*

secretarías de Estado y del despacho se convirtieron en las oficinas receptoras de las consultas, allí sus oficiales preparaban un extracto de la consulta a fin de que el secretario pudiera acordar con el monarca la decisión pertinente, influyendo por tanto, de manera directa en la toma de decisiones<sup>174</sup>.

### 3.1.3. Actos de resolución.

El asunto documentado en una consulta era simplemente el parecer o consejo de un grupo de ministros, por lo que no engendraba ni derechos, ni obligaciones, requería la resolución del rey.

Al llegar el asunto a la oficina de la secretaría del Despacho, los oficiales procedían hacer un breve resumen, a manera de apunte, de manera que el secretario pudiera exponer al monarca la razón del asunto en cuestión<sup>175</sup>.

Reunido el monarca con su secretario universal del despacho o con cualquiera de los secretarios de Estado y del despacho debía tomar una decisión a la consulta planteada por el Consejo. El secretario leía en el despacho *a boca* ante el monarca el extracto de la consulta y, en su caso, los documentos originales y sus antecedentes. El secretario podía expresar su opinión sobre el asunto antes que el rey tomara la decisión. Finalmente, con la respuesta del monarca el secretario debía anotar al margen o al dorso del propio documento o del extracto la resolución real, siendo frecuente que el rey rubricase el decreto<sup>176</sup>.

El monarca podía conformarse o no con la opinión de sus ministros. En caso de aceptar la consulta utilizaba expresiones lacónicas como «*Así*», «*Hágase así*», «*Como Parece*», etc. Había asuntos en donde decidía dar respuestas más amplias a la consulta; también podía remitir su respuesta a

---

*él o encomendarla circunstancialmente a algún ministro, había de soportar horas enteras la farragosa lectura de las consultas e invertía quizá otras tantas en la maduración de los decretos, que, escritos de su puño o dictados, pero rubricados siempre con su señal, constarían al margen de cada una, para que, devueltas al Consejo correspondiente, se procediese, con arreglo a derecho, a la ejecución de lo mandado.* Vid. G. Maura y Gamazo, *Vida y reinado...*, p. 37.

<sup>174</sup> Con la intervención directa de los oficiales de la secretaría la consulta originaria del Consejo era transformada y ampliado su contenido por los miembros de la Secretaría de Estado y del Despacho, añadiendo al parecer del Consejo la opinión del secretario y sus oficiales. Vid. M. Gómez Gómez, *Forma y expedición...*, p. 142.

<sup>175</sup> Vid. J. L. Bermejo Cabrero, "Del secretario del Despacho...", p. 26.

<sup>176</sup> Vid. M. Gómez Gómez, *Forma y expedición...*, pp. 160-61.



otra consulta ya resuelta o solicitar una nueva consulta al Consejo. Pero cuando el rey no se mostraba conforme con las medidas o innovaciones que el Consejo proponía, anotaba: «*Que por ahora se esté como se está*», o «*No conviene introducir novedad*»<sup>177</sup>. Formado el decreto y rubricado de la mano del rey, o en su caso con la estampilla, se remitía por medio de la oficina de la secretaría el despacho a manos de los presidentes.

Al finalizar la reunión con el monarca, el secretario Universal del Despacho, o en su caso, los secretarios de Estado y del despacho remitían a sus oficiales las respuestas reales para que retornaran al Consejo su consulta con la correspondiente decisión del monarca<sup>178</sup>. La resolución real que quedaba inserta en la consulta o en documento a parte tomaba el nombre de decreto<sup>179</sup>, el cual podía ser manuscrito por el mismo soberano o escrito por el secretario que asistió al despacho.

#### 3.1.4. Actos de comunicación de la resolución.

Despachada la consulta por el rey, la Secretaría Universal del Despacho o las secretarías de Estado y del despacho la remitían al Consejo, junto con el decreto con la firma real. El Consejo debía transcribir íntegramente la resolución en el libro que al efecto existía en el Consejo<sup>180</sup>.

---

<sup>177</sup> Vid. A. García-Gallo, “La ley en Indias...”, p. 708.

<sup>178</sup> Según una Representación acerca de *El secretario de Estado y del Despacho instruido, su origen en España, sus funciones, ejercicio y máximas y manejos; su dirección, honores y preeminencias*, editado por J. A. Escudero López, *Los secretarios de Estado...*, t. 4, pp. 1220-21.

<sup>179</sup> En opinión de Joaquín del Real el real decreto era el documento por el que la autoridad de quien emanaba el negocio jurídico, comunicaba la resolución a aquella institución destinada a su definitiva puesta por escrito. Vid. *Estudio diplomático...*, p. 95. El real decreto era validado con el exclusivo signo personal del monarca y puesto por escrito al dorso de las consultas del Consejo o en papel aparte. Durante el siglo XVIII esta forma documental no sólo se utilizó para remitir una resolución real al Consejo, sino también era utilizado al igual que la real cédula para comunicar decisiones reales que debían ser conocidas, obedecidas y cumplidas no sólo por los organismos residentes en la Corte, sino también para autoridades indianas como lo eran los virreyes, Audiencias, gobernadores... Un real decreto siempre debía ir dirigido a una autoridad, jamás a un particular. Vid. M. Gómez Gómez, *Forma y expedición...*, p. 241.

<sup>180</sup> *Mandamos, que en el nuestro Consejo de las Indias haya un libro, en que luego como se acordare, que algún negocio se nos consulte, demás de tomarlo por memoria el que hubiere de ordenar la consulta, se ponga la sustancia de lo que como dicho es, se nos hubiere de consultar, y en él se pongan también los acuerdos del Consejo, que al presidente pareciere: y haya otro, en que se pongan todas las consultas que se nos hicieren, y después en ellas lo que mandaremos, y respondiéremos, todo reducido al estilo*

Sólo las consultas aprobadas por el monarca se convertían en disposiciones jurídicas<sup>181</sup>. Teóricamente los secretarios del Consejo<sup>182</sup> eran los encargados de elaborar la minuta<sup>183</sup>, así como los documentos en limpio de las reales provisiones, reales cédulas, mandamientos, etc., dependiendo del negocio que se tratara y de la persona a la que iba dirigida. En la práctica eran los oficiales de cada una de las secretarías del Consejo los que directamente estaban encargados de redactar los documentos, interviniendo en esta revisión el consejero semanero<sup>184</sup>.

Aprobada la minuta por el secretario o el consejero semanero, se procedía a la definitiva puesta en limpio<sup>185</sup> y a su validación. En la redacción del texto se acostumbraba reproducir en la exposición, con leves variantes, el texto mismo de la consulta, se hacía referencia de lo acordada por el Consejo y se redactaba la decisión. El consejero que la había revisado, la firmaba y el secretario del Consejo ponía el refrendo<sup>186</sup>. Los documentos que se emitían a las partes además debían ir escrito en papel sellado<sup>187</sup>, sólo las cartas oficiales dirigidas a las autoridades indianas quedaban exentas de dicha obligación y se podían asentar en papel común.

---

*de los secretarios, como se platica en todos los nuestros consejos, y Tribunales, que nos consultan...* Ordenanza 26 de 1636. Recop. Indias 2.2.26. Respecto de ambos libros, Ayala recordaba la falta de observancia de esta ley. Vid. M. J. de Ayala, *Notas a la Recopilación...*, p. 42.

<sup>181</sup> Vid. A. García-Gallo, "La ley en Indias...", p. 709.

<sup>182</sup> El secretario era el responsable directo de la confección del documento por ser, según su título de nombramiento, secretario real y por lo tanto, en él estaba depositada la fe pública. Su intervención en la génesis del documento era patente: leía las cartas, memoriales y peticiones en las sesiones del Consejo *decretando lo que se acordare y resolviera para hacer conforme a ello los despachos y consultas que convinieren*. Confeccionaba las consultas. Y en teoría era quien redactaba el documento en la forma y estilo en que se debía despachar. Tenía bajo su directa guarda y vigilancia los registros administrativos, es decir, los libros reales de gobierno y gracia y una vez copiado el documento era misión suya el corregirlo y autorizarlo con su firma. Además, refrendaba los documentos firmados por el Rey. Vid. J. J. Real Díaz, *Estudio diplomático...*, p. 130.

<sup>183</sup> En opinión de Joaquín del Real la minuta era la consecuencia de una necesidad práctica. Si bien la legislación no obligaba a su confección, muy pocos documentos emanaron del Consejo sin que previamente no se proyectase en una minuta. *Ibídem*, p. 104.

<sup>184</sup> Ordenanza 77 de 1636. Recop. Indias 2.3.9.

<sup>185</sup> El documento en limpio no debía tener enmiendas, tachaduras, fórmulas incompletas, abreviaturas, ni mala letra. Vid. J. J. Real Díaz, *Estudio diplomático...*, p. 111.

<sup>186</sup> El secretario en la cláusula del refrendo se presentaba como el responsable del lo asentado en el documento. En los documentos más solemnes, además de contener su nombre y rúbrica, aparecía su calidad de secretario y la circunstancia de intermediario «*la fize escribir por mandado de N*». *Ibídem*, p. 116.

<sup>187</sup> Con el fin de autenticar y dar validación a los documentos indianos era necesario que todos documento públicos fueran escritos en papel sellado. Para tal efecto existían cuatro tipos de papel sellado que debía ser utilizado según el tipo de documento. El del sello

Había casos en los que el Consejo de Indias al elevar una consulta al monarca cuyo contenido versaba sobre un asunto de trámite, como por ejemplo un nombramiento, o simplemente porque estimase, con gran certeza, que el monarca aceptaría el dictamen, añadía directamente el original de una real provisión sin fecha, para que el monarca pudiera firmar directamente el documento<sup>188</sup>.

Varias fueron las formas en las que se redactaba el documento original. En el caso del Consejo de Indias dos eran los tipos documentales que utilizaba para transmitir las decisiones reales a las Indias: la real provisión y la real cédula. La decisión de utilizar una u otra forma dispositiva dependía entre otras razones, de la persona a la que se dirigía, de la materia que contenía o de la solemnidad que se quería imprimir a la resolución real.

La real provisión<sup>189</sup> se utilizaba para transmitir títulos y concesiones de gracias y mercedes, así como la mayoría de asuntos de justicia. Quedando la real cédula<sup>190</sup> destinada a informar cualquier decisión real.

---

primero tenía un costo de 24 reales y se trataba de un papel de pliego entero donde se asentaban los despachos de gracia mercedes que se hicieran en las provincias de las Indias por los virreyes, presidentes, Audiencias, Tribunales de Cuentas, gobernadores y capitanes generales, corregidores y otros cualesquier ministros de justicia, guerra y hacienda y si los tales despachos ocuparan más de un pliego se debían escribir en papel de sello tercero. El papel de sello segundo tenía un coste de seis reales y era papel de pliego entero, se debían escribir todos los instrumentos de escrituras, testamentos y contratos de cualquier género y forma que sean y que se otorgaran ante escribano, las demás hojas en los protocolos debían escribirse en papel de con sello tercero. Así, el papel de sello tercero tenía un costo de un real y se trataba de papel de medio pliego en donde se debían escribir todas las actuaciones judiciales que se realizare frente a los virreyes, chancillerías, Audiencias y tribunales y los demás jueces y justicias de Indias, y lo compulsado sobre cualquier cosa que fuere debía llevar en el prime pliego con el sello segundo y lo demás en papel común. Finamente el sello cuarto era un papel de medio pliego con un costo de un cuartillo en donde se escribían todos los despachos de oficio y de pobres de solemnidad, todo lo relacionado con los indios”. La regulación del papel sellado en las Indias quedó dispuesto en Recop. Indias 8.23.18. Vid. J. J. Real Díaz, *Estudio diplomático...*, pp. 116-120. Un estudio pormenorizado sobre el papel sellado puede verse en J. F. Baltar Rodríguez, “Notas sobre la introducción y desarrollo de la renta del papel sellado en le Monarquía española (siglos XVII y XVIII), en *Anuario de Historia del Derecho Español*, nº 66 (1996), pp. 519-560; G. Morazzani-Pérez Enciso, “El régimen de estancos en las Provincias de Venezuela y la nueva administración de Hacienda (siglo XVIII), en *Cuadernos de Historia del Derecho*, nº 8 (2001), pp. 111-39 y I. Seco Campos, “La provisión de papel sellado en América: comentario de unas cifras y la actividad burocrática indiana”, *Boletín de la ANABAD*, t. 44, nº 4 (1994), pp. 109-126.

<sup>188</sup> *Ibídem*, p. 112.

<sup>189</sup> La real provisión era “el documento más solemne emanados de la autoridad soberana”. Autores como Peña y Cámara propugnaba por llamar real provisión únicamente aquellos documentos que contenían un título de nombramiento. Vid. *Ibídem*, pp. 148 y ss. Un

Hasta antes del real decreto de 22 de noviembre de 1717 el Consejo de Indias era el único órgano de la administración central capacitado para formalizar y refrendar reales provisiones, que suscritas por el monarca, eran expedidas a las Indias. Pero este decreto cambió el panorama normativo de la Monarquía<sup>191</sup>. A partir de entonces, las secretarías de Estado y del despacho también pudieron participar en la validación de reales provisiones, con la misma autoridad y suficiencia que el Consejo<sup>192</sup>.

M. Gómez elaboró un estudio pormenorizado a fin de distinguir una real provisión expedida por el Consejo de Indias de la expedida por la vía reservada. Mientras que aquellas tenían una validación compuesta por cuatro signos: suscripción regia, el refrendo del secretario mediante la fórmula del mandado «*Yo N. secretario del Rey la fize escribir por su mandado*» y rúbrica; la rúbrica de consejeros y demás intervinientes, y el sello mayor real de placa. Por el contrario, las reales provisiones del secretario del despacho tenían una validación compuesta por tres elementos: suscripción regia, el refrendo del propio secretario, compuesta de sólo su nombre y rúbrica, como forma más directa y autoritaria, y el sello secreto también de placa y de menores dimensiones<sup>193</sup>.

La real cédula, durante todo el siglo XVI y XVII, fue el documento dispositivo más utilizado en el Consejo de Indias para dar a conocer una disposición real. Sin embargo, a partir de la expedición de los decretos de nueva planta, la vía reservada segregó del conocimiento del Consejo materias tocantes a hacienda, guerra, navegación y comercio, para lo cual se le ordenó abstenerse de *mandar expedir, como las secretarías de formar y dirigir por ellas, cédulas, despachos, ni otras órdenes de gobierno porque todo lo que fuere de esta naturaleza y calidad y en cualquier manera... lo*

---

análisis completo de las reales provisiones en el siglo XVI fue elaborado puede verse en A. García Gallo, “La Ley en Indias...”, pp. 673-691.

<sup>190</sup> La reales cédulas constituía el tipo de despacho ordinario que empleaba el monarca para dirigirse a las autoridades y particulares en asuntos de gobierno o de justicia. Como característica principal, las reales cédulas sólo podían ser firmadas por el monarca o quien en su ausencia tuviera la gobernación general del reino. Ni el Consejo, ni las Audiencias o Virreyes podían librar cédulas bajo su nombre, pero podían utilizar su equivalente en otros documentos como los autos y los mandamientos de gobernación. *Ibidem*, p. 691. También puede verse en J. J. Real Díaz, *Estudio diplomático...*, pp. 178 y ss.

<sup>191</sup> Fue revocado el real decreto de 17.05.1564 expedido por Felipe II (Recop. Indias 2.1.23) en donde se concedía al Consejo de Indias el monopolio de despacho de provisiones y reales cédulas dirigidas a las Indias.

<sup>192</sup> El real decreto de 22.11.1707 dispuso que la dirección de las cédulas y despachos en lo gubernativo debía correr por la vía reservada como antes se hacía por la secretaría del Consejo. A.G.I., Indiferente General 829, ff. 110v-112r. Vid. M. Gómez Gómez, *Forma y expedición...*, p. 235 y A. M<sup>a</sup> Barrero “La vía ordinaria...”, pp. 243-44.

<sup>193</sup> Vid. M. Gómez Gómez, *Forma y expedición...*, p. 236.

*reservo en mí para mandarlo ejecutar por la vía reservada como tuviere por conveniente...*<sup>194</sup>.

Por tanto, la real cédula sobre asuntos de hacienda, guerra, navegación y comercio quedó prohibida su expedición dentro del Consejo de Indias. El monarca se reservaba para sí el mandar expedir dichas materias a través de las secretarías de Estado y del despacho y tuvo por conveniente expedir las órdenes de gobierno por medio de la vía reservada creando un nuevo tipo documental llamada real orden<sup>195</sup>.

Pero dicha modificación al sistema normativo que hasta entonces se llevaba a cabo no dejó sin intervención al Consejo. Para transmitir decisiones reales importantes, a las que se requería revestirlas de gran solemnidad, fue necesario contar con un documento que fuera firmado por el monarca, y “en lugar de crear otro tipo de documento, se aprovechó la estructura diplomática de la real cédula tradicional, que sin embargo reflejaría ciertas modificaciones”<sup>196</sup>. De lo anterior se desprende que en el reinado de Felipe V coexistieron en el Consejo dos tipos de reales cédulas con distinto procedimiento de creación. Joaquín Real denominó a una de ellas “real cédula a secas” y que fue única entre los siglos XVI y XVII y coexistió en el siglo XVIII con otra a la que denominó “real cédula ministerial o de la vía reservada”.

Una de las distinciones entre estos dos tipos de cédulas se reflejó en el refrendo. Mientras que las elaboradas en el Consejo debían llevar el refrendo del secretario precedido de una cláusula de mandato: «*Por mandado de SM*», firma y rúbrica del secretario y las rúbricas del presidente o gobernador, consejero semanero y la de otro consejero que hubiere intervenido en el negocio documentado<sup>197</sup>. En cambio, en la real cédula que surgió con la intervención de la vía reservada, el refrendo se redujo a la sola firma y rúbrica del secretario de Estado y del despacho, sin que se acompañase ninguna expresión, desapareciendo las señales o rúbricas de los consejeros. Además carecían de sello aunque en ocasiones podía ser utilizado para dar mayor solemnidad al documento<sup>198</sup>.

Preparada la disposición era necesario validar el documento. El secretario remitía el documento a la firma del monarca y si se trataba de una real provisión se ponía en ella el sello real. Tanto en las reales provisiones, como

<sup>194</sup> Real decreto 20.01.1717. A.G.I., Indiferente General, 829 ff. 107v-108v.

<sup>195</sup> Vid. J. J. Real Díaz, *Estudio diplomático...*, pp. 180-81.

<sup>196</sup> *Ibidem*, p. 181.

<sup>197</sup> *Id.*, p. 183.

<sup>198</sup> Vid. M. Gómez Gómez, *Forma y expedición...*, p. 173

en las reales cédulas era necesario que la firma del monarca estuviera acompañada de la suscripción del secretario bajo el que se formó el documento, dotando al documento de fehaciencia<sup>199</sup>.

El secretario del Consejo remitía al secretario del universal del despacho o a la vía reservada, según la época, la disposición para la firma del monarca. La firma real siempre era expresada en forma pronominal con la aposición de su título mediante las palabras «Yo el Rey», tras los cual se extendía su rúbrica o signo personal<sup>200</sup>. Durante este período se generalizó el uso de firmar con estampilla, esto es la aposición de un molde de metal que reproducía fielmente la firma del monarca o de aquellas personas a las que el rey les concedía su uso<sup>201</sup>. La estampilla real estaba custodiada por la Secretaría de Cámara y de la Real Estampilla a la que se le remitían todos los documentos del Consejo que precisaban la firma real para su oportuna expedición.

En general, el rey no solía poner reparos en las cédulas y decretos enviadas por el Consejo para su firma una vez dada su conformidad con las consultas. En tal caso, dichas disposiciones no eran más que la transformación del contenido de la consulta, en su mayor parte con las mismas palabras y frases<sup>202</sup>, mediante los cuales el Consejo notificaba a particulares o a las autoridades la resolución real.

Cuando la resolución real había sido firmada por el monarca, el secretario universal del despacho o la vía reservada remitían el documento al secretario del Consejo, para en su caso, remitir el documento al teniente del chanciller a fin de sellar el documento. En efecto, el tercer elemento de validación era el sello real, el cual solamente se utilizaba en documentos solemnes como era el caso de las reales provisiones. En el Consejo de Indias

---

<sup>199</sup> Alonso Carnero señalaba que la refrendata del secretario *sirve de hacer auténtico el despacho y ser auténtico es lo mismo que digno de fe, por cuya razón se pone debajo de la firma del que da el título par significar también que todo lo arriba escrito tuvo presente el secretario para autenticarlo. De donde se sigue que despachos que no están refrendados son lo mismo que papeles simples para lo que es su ejecución, pues no se debe dar a lo que no consta que es digno de fe.* A. Carnero, *Formulario de lo que debe observar un secretario que lo fuere de Estado como también los oficiales, para formar las consultas y despachos, con otras particularidades curiosas y esenciales...*, en J. A. Escudero López, *Los secretarios de Estado...*, t. 3, p. 919. También en M. Gómez Gómez, *Forma y expedición...*, p. 173.

<sup>200</sup> Vid. M. Gómez Gómez, “La Secretaría de la Cámara y de la Real Estampilla: Su relevancia en la Diplomática de Documentos Reales (ss. XVII-XVIII), en *Historia, instituciones, documentos*, nº 15 (1988), p. 169.

<sup>201</sup> Vid. M. Gómez Gómez, *Forma y expedición...*, p. 174.

<sup>202</sup> E. Schäfer, *El Consejo Real...*, t. 1, p. 40.

se utilizaba el sello mayor<sup>203</sup>. La imposición de dicho sello devengaba derechos que fueron establecidos en aranceles específicos según la naturaleza del negocio<sup>204</sup>.

Los documentos validados debían de registrarse en los libros que al efecto custodiaba cada uno de los secretarios del Consejo<sup>205</sup>. Para M. Gómez la importancia de estos registros era doble, por un lado tenían por objeto controlar la documentación expedida, y por el otro, servir de ayuda e información al propio Consejo<sup>206</sup>. Quizá por ello estaba prohibido asentar reales resoluciones que no contuvieran la firma real<sup>207</sup>.

El Consejo era también el encargado de efectuar la publicación y de vigilar el cumplimiento de lo mandado<sup>208</sup>. Las Ordenanzas de 1636 conminaban al Consejo a procurar saber cómo *se cumple y ejecuta lo proveído y ordenado por Nos, castigando con rigor y demostración de justicia a las personas que por malicia, o negligencia lo dejaren de cumplir, o ejecutar*<sup>209</sup>. Por tanto, tras el correspondiente asiento del documento en los libros registro era necesario remitir las disposiciones a sus destinatarios.

Los secretarios eran los responsables de enviar a las Indias los pliegos y cartas cerradas<sup>210</sup>, así como asentar en un libro todos los asuntos que despacharen<sup>211</sup>. Normalmente los despachos para las Indias se enviaban por duplicado<sup>212</sup>.

La resolución del asunto era comunicada a través del correo ordinario del que ya nos hemos referido líneas atrás. Simplemente mencionar que en los

---

<sup>203</sup> El sello real abierto para las Indias era un sello mayor, igual que el de Castilla, para usar placado sobre cera y papel, al pie o al dorso de los documentos reales que lo necesitaban para su oportuna validación. Vid. M. Gómez Gómez, *El sello y el registro...*, pp. 118-19.

<sup>204</sup> El arancel que regulaba estos derechos fue establecido mediante decreto de febrero de 1618, tasas que permanecieron sin variación hasta la expedición del real decreto de marzo de 1740 en el que se actualizó el nuevo arancel, no sólo para el Consejo de Indias, sino para todas las cancillerías metropolitanas.

<sup>205</sup> M. Gómez en su monografía *El sello y el registro de Indias en la Península* dedica gran parte su análisis a señalar la organización y distribución de los libros que debían conservar cada secretario del Consejo. Para la realización de la presente investigación fueron importantes las consultas a las tablas y cuadros de los libros registros para la secretaría del Perú pp. 270-74 y los de Nueva España pp. 275-80.

<sup>206</sup> Vid. M. Gómez Gómez, *Forma y expedición...*, p. 178.

<sup>207</sup> Ordenanza 155 de 1636. Recop. Indias 2.6.42.

<sup>208</sup> Vid. R. Rico Linaje, "Publicación y publicidad de la ley en el siglo XVIII: La Gaceta de Madrid y el Mercurio Histórico-Político", en *Anuario de Historia el Derecho Español*, nº 56 (1987), pp. 325-26.

<sup>209</sup> Ordenanza 25 de 1636. Recop. Indias 2.2.25.

<sup>210</sup> Ordenanza 152 de 1636. Recop. Indias 2.6.39.

<sup>211</sup> Ordenanza 153 de 1636. Recop. Indias 2.6.40.

<sup>212</sup> Ordenanza 149 de 1636. Recop. Indias 2.6.36.

envíos de correspondencia de la Península a las Indias era preciso distinguir el correo oficial, del particular. Para ello era necesario apostillar los documentos remitidos por el Consejo con dos tipos de sellos, el de cierre y el denominado “negro”. El primero de ellos se lacraba en el plegado del documento para asegurar el secreto de su contenido<sup>213</sup>. El sello negro, en cambio, fue creado por Felipe V en 1716 con la intención de garantizar la distinción de los pliegos oficiales que estaban exentos de postas<sup>214</sup>. El sello debía estamparse en el lugar donde se especificaba el nombre de la persona a quien iba dirigido<sup>215</sup>. Sólo podía ser utilizado por los secretarios de Estado y del despacho y los presidentes, fiscales y secretarios de los consejos<sup>216</sup>.

Cuando los documentos llegaban a su destino, la autoridad respectiva debía enviar al Consejo un acuse de haber recibido dicha documentación<sup>217</sup>. Tras la devolución del acuse de recibo, el secretario debía anotar en un libro aparte las remisiones de los negocios que se hicieron en el Consejo a las autoridades indianas y a otras personas y justicias y de las informaciones y pareceres que les fueron enviadas<sup>218</sup>.

### 3.1.5. Actos de recurso.

Recibida la documentación por las autoridades indianas y por las partes interesadas llegaba el momento de su cumplimiento. Aquellas disposiciones dirigidas a las autoridades debían cumplirse inmediatamente, para lo cual era preciso que en el primer correo a la Península remitieran al Consejo el acuse de recibido de dichos documentos<sup>219</sup>. Para asegurar su cumplimiento se prohibió a las Audiencias representar al Consejo los inconvenientes y razones de derecho de las órdenes remitidas, simplemente debían guardarlas y observarlas puntualmente<sup>220</sup>. Los particulares también recibían la

<sup>213</sup> Normalmente eran de cera roja y representaban las armas reales. Vid. M. Gómez Gómez, *Forma y expedición...*, p. 185.

<sup>214</sup> Una panorámica del coste de las postas puede verse en C. Rodríguez, “Las tarifas postales españolas hasta 1850 (del pago aplazado al franqueo previo”, en *Investigaciones históricas. Época moderna y contemporánea*, n 2 (1980), p. 117, nota 8. pp. 107-165.

<sup>215</sup> *Ibidem...*, p. 186.

<sup>216</sup> Real decreto 07.12.1716. Nov. Recop. 3.13.18.

<sup>217</sup> Ordenanza 159 de 1636. Recop. Indias 2.6.46.

<sup>218</sup> Ordenanza 151 de 1636. Recop. Indias 2.6.38.

<sup>219</sup> Los presidentes y oidores estaban obligados a remitir las cédulas y provisiones a las partes sin dilación. Recop. Indias 2.1.25.

<sup>220</sup> Recop. Indias 2.1.26.



resolución real a sus peticiones. Dicha resolución podía ser aceptada y las partes allanarse a su cumplimiento, por tanto quedaba la norma firme.

Pero había ocasiones en que el destinatario de la norma interponía un recurso ante el propio Consejo en donde suplicaba al monarca “obedecerla y no cumplirla” debido a la falta de adecuación de la norma a las exigencias de la realidad indiana o a su derogación por ser contraria a una costumbre local<sup>221</sup>. Este recurso denominado de suplicación y cuyos orígenes se remontaban a la Edad Media<sup>222</sup> fue utilizado con gran profusión en el mundo indiano.

En opinión de V. Tau Anzoátegui la tramitación de este recurso aun cuando presentaba rasgos propios del proceso judicial se diferenciaba por la mayor fluidez que ofrecía en sus distintas fases, en lo relativo a los plazos y de los efectos producidos<sup>223</sup>.

El recurso se interponía ante la misma autoridad que había sancionado la norma para que revisara su decisión, en este caso, ante el rey a través de su Consejo de Indias. El acto de obedecer representaba el acatamiento y reconocimiento que se presentaba a la autoridad real y era forzoso hacerlo para no incurrir en rebeldía, luego de obedecerlo, procedía a examinarlo y a determinar si debía cumplirlo o no<sup>224</sup>, únicamente se suspendía su aplicación en negocios de calidad, que de su cumplimiento se pudiese provocar un escándalo conocido o un daño irreparable<sup>225</sup>.

Cualquier autoridad, vasallo o institución podía entablar el recurso de suplicación con la intención, no sólo de obtener la suspensión de la ejecución de la norma impugnada, sino también lograr que se revocara la norma suplicada<sup>226</sup>.

---

<sup>221</sup> V. Tau Anzoátegui, “La ley «se obedece pero no se cumple». En torno a la suplicación de las leyes en el Derecho indiano”, en *La ley en América Hispana*, Buenos Aires, 1992, p. 74. Por su parte A. García-Gallo afirmaba que obedecer equivalía al reconocimiento de la autoridad real y el acatamiento de sus mandatos, pero el desconocimiento frecuente de la realidad, las informaciones erróneas o tendenciosas y a un cierto idealismo en los gobernantes daban lugar, no pocas veces a que el monarca dictase leyes que en abstracto eran justas y convenientes, pero que en la realidad de las Indias aparecían injustas y perturbadoras. El no cumplimiento era en realidad una suspensión de la aplicación de la ley, hasta que el monarca, informado del hecho, resolviese en definitiva. Vid. A. García-Gallo, “La ley en Indias...”, pp. 646-54.

<sup>222</sup> Este recurso de suplicación ha sido profusamente analizado por B. González Alonso, “La fórmula «Obedézcase, pero no se cumpla»...”, pp. 469-488.

<sup>223</sup> Vid. V. Tau Anzoátegui, “La ley «se obedece...”, pp. 117-18.

<sup>224</sup> *Ibidem*, p. 118.

<sup>225</sup> Recop. Indias 2.1.24.

<sup>226</sup> Vid. V. Tau Anzoátegui, “La ley «se obedece...”, p. 136.

No existía un plazo determinado para entablar dicho recurso, aunque lo común fue que se hiciera en el mismo acto de obediencia o en un breve término. El recurso podía prepararse contra todo tipo de mandamientos de gobernación, aún cuando no trajera aparejada la suspensión de la ejecución. Podían ser objeto de suplicación tanto normas dictadas de oficio, como las resoluciones recaídas a solicitudes de parte<sup>227</sup>. Quedaban exceptuadas de este recurso aquellas normas que fueren a favor de los indios<sup>228</sup>.

Mientras que la suspensión de la ejecución podía ser autorizada con mayor facilidad, no así la revocación de la norma. De hecho muchos de los recursos de suplicación entablados tras conseguir un aplazamiento en la ejecución no perseguían la revocación de la misma; en otros casos, el recurso quedaba sepultado en el papeleo oficinesco y otras veces olvidados ex profeso<sup>229</sup>. Si el recurso salía adelante, esto es, que el rey decidiera revocar la norma, el “segundo mandado debía cumplirse invariablemente”, sin la posibilidad de entablar una nueva suplicación, aunque hubo casos excepcionales<sup>230</sup>.

Con la intención de contar con una visión más global del procedimiento de la vía de expediente a continuación hemos desarrollado algunos esquemas en donde se desarrollan las principales fases de dicha vía.

---

<sup>227</sup> *Porque nuestra voluntad es, que la nuestra justicia florezca, y aquella no sea contrariada, establecemos, que si en nuestras cartas mandáremos algunas cosas en perjuicio de partes, que sean contra ley ó fuero ó Derecho, que la tal carta sea obedecida y no cumplida...* Nov. Recop. 3.4.4.

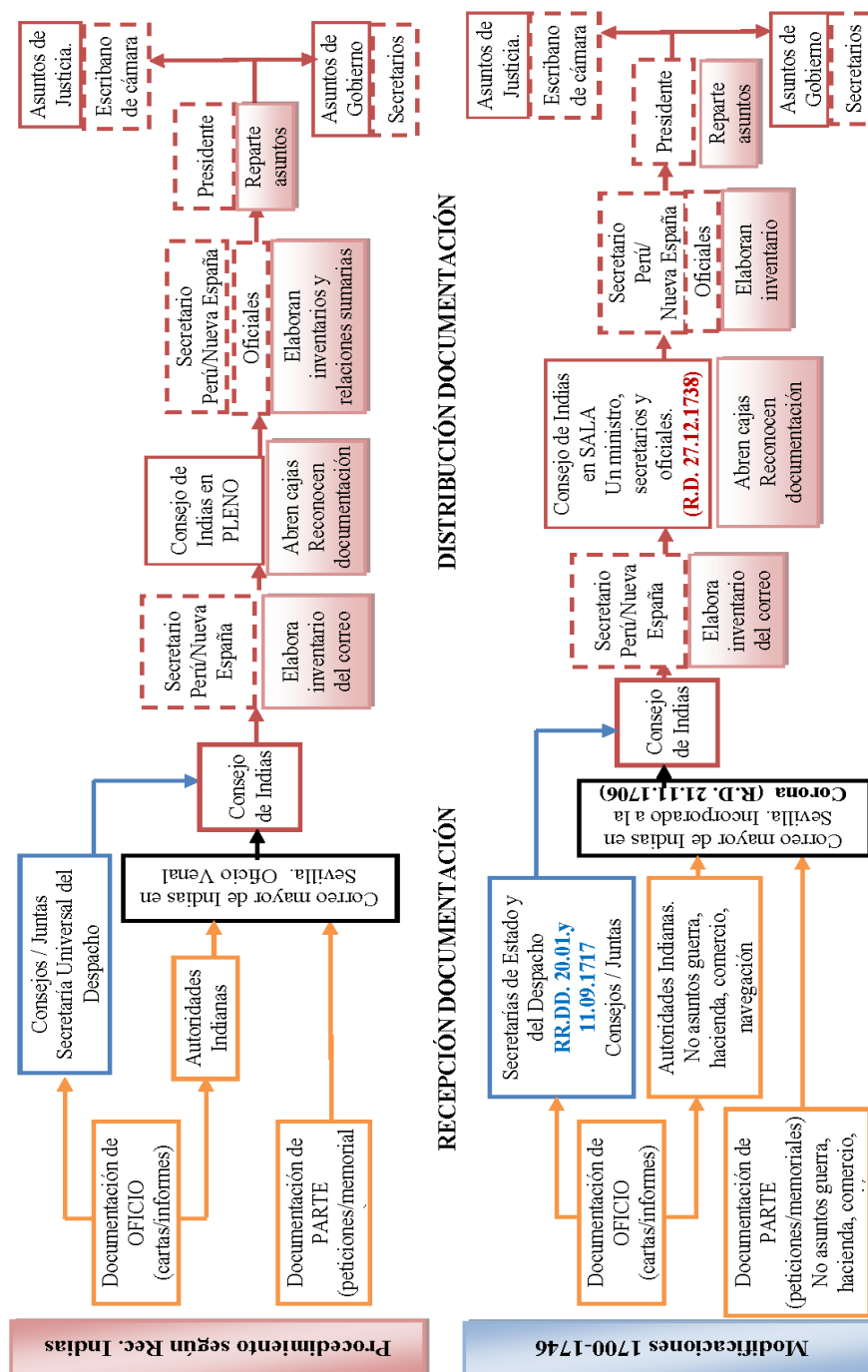
<sup>228</sup> Recop. Indias 2.1.5.

<sup>229</sup> Vid. V. Tau Anzoátegui, “La ley «se obedece...», pp. 136-39.

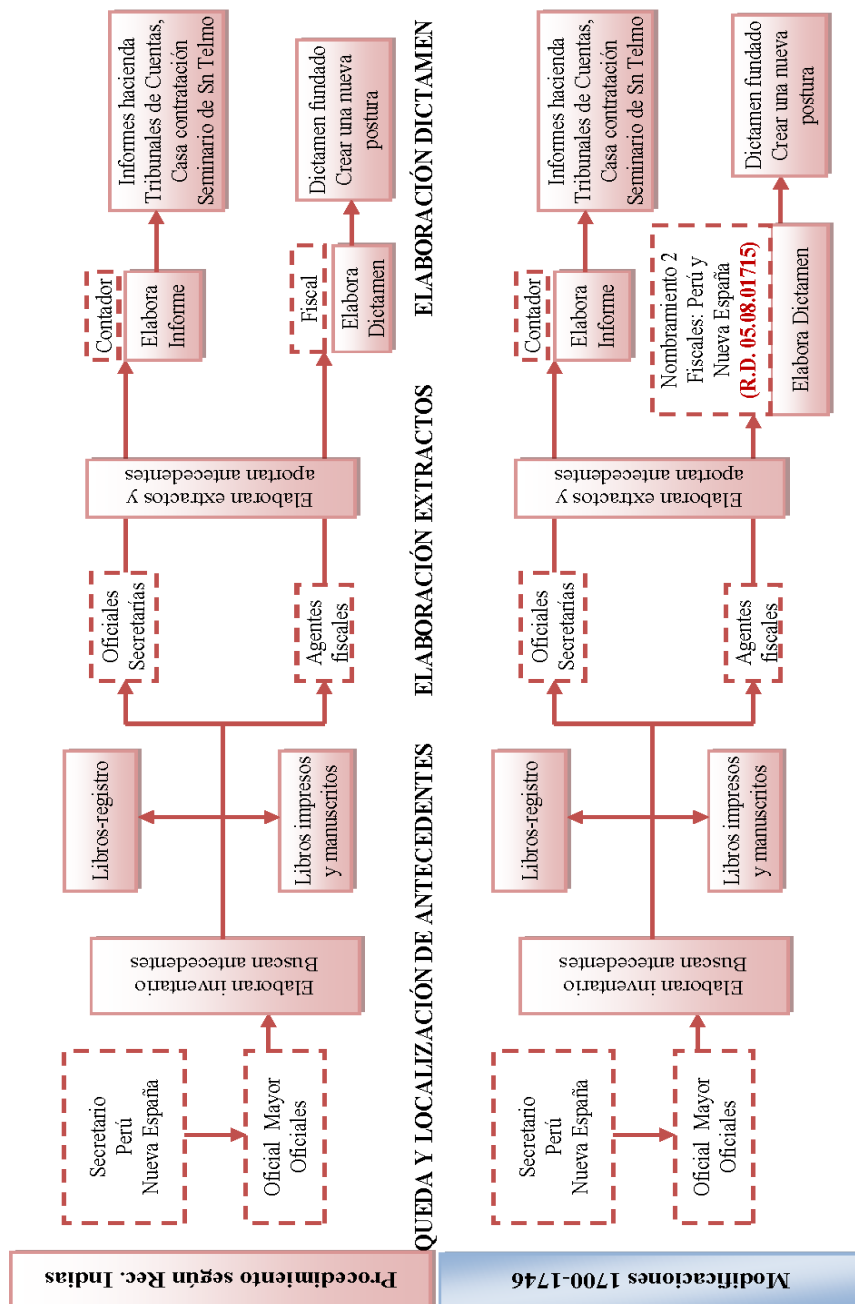
<sup>230</sup> *Ibíd.*, p. 143.

### 3.2. Esquema de la vía de expediente

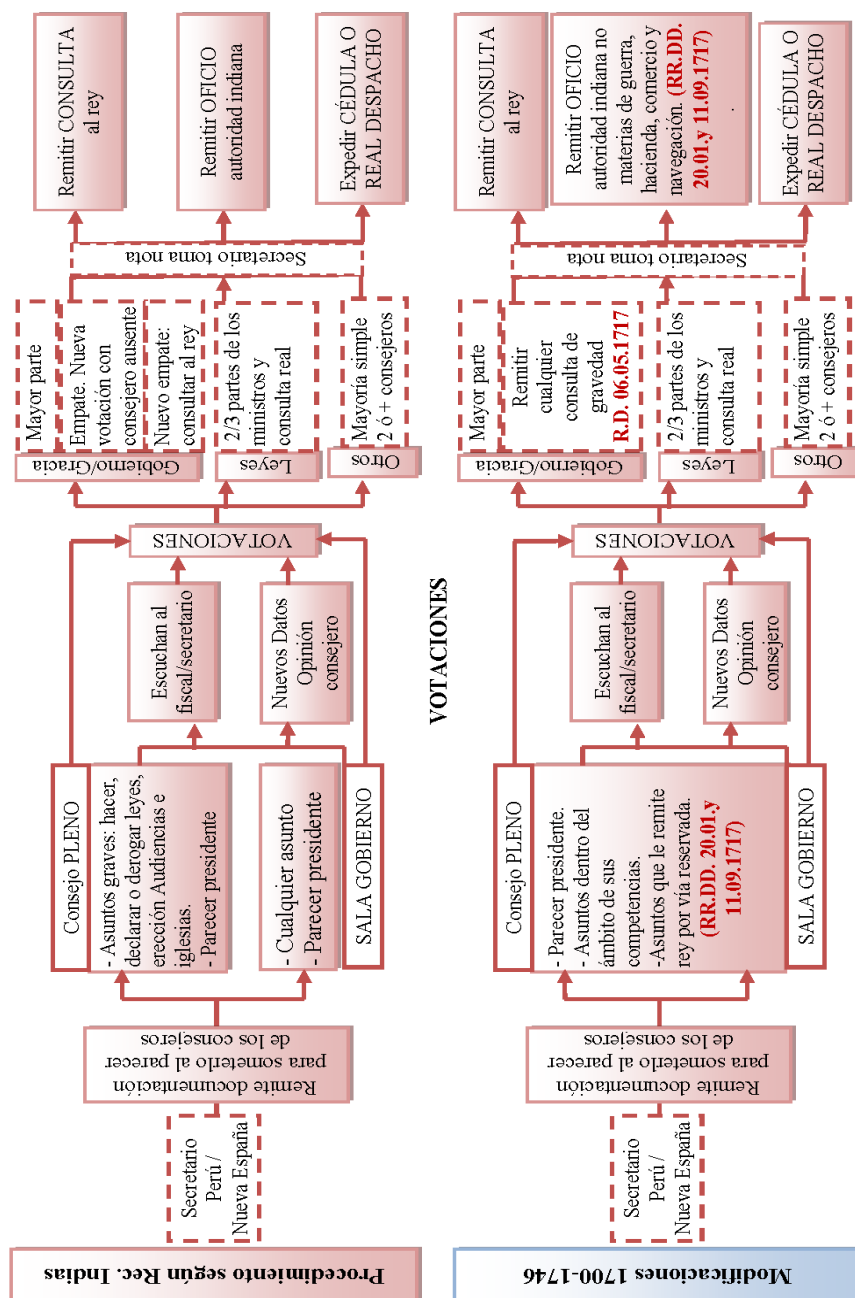
#### Actos de Iniciación.



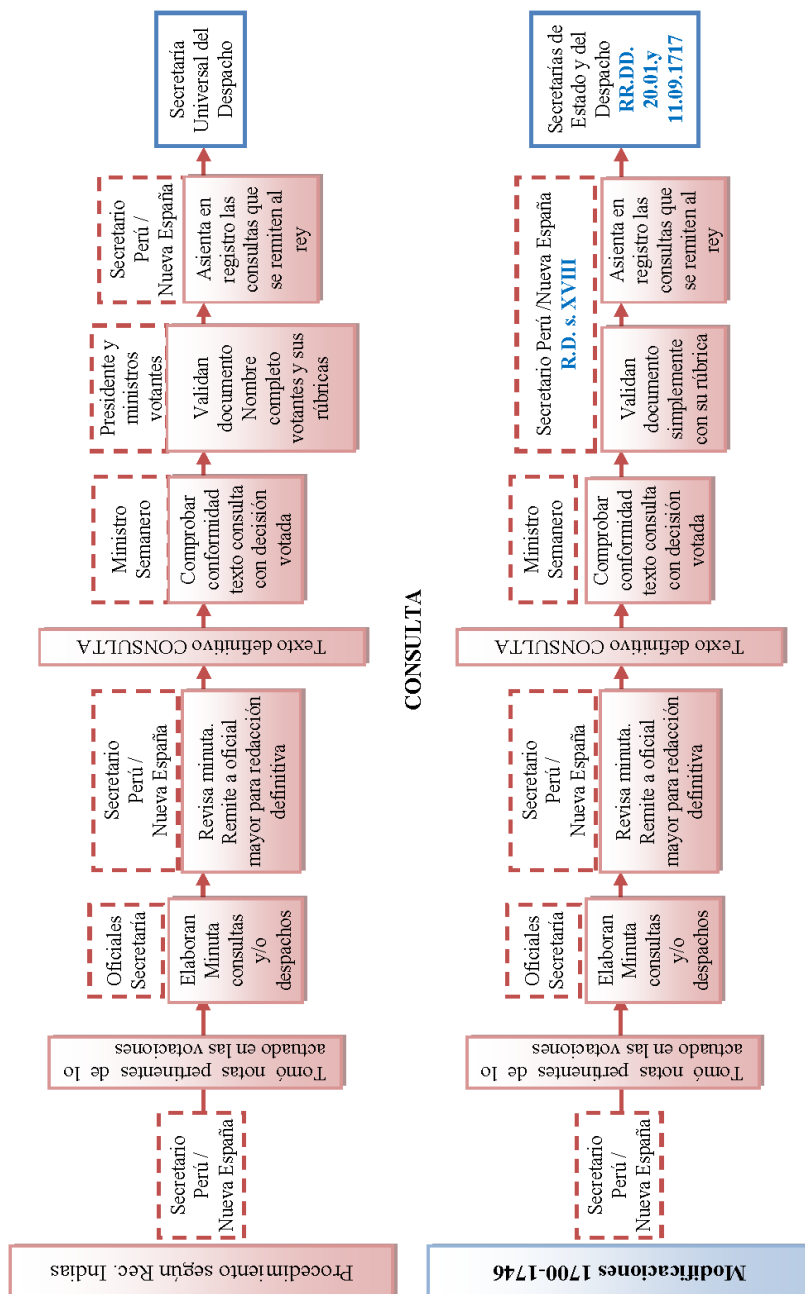
## Actos de Instrucción I.



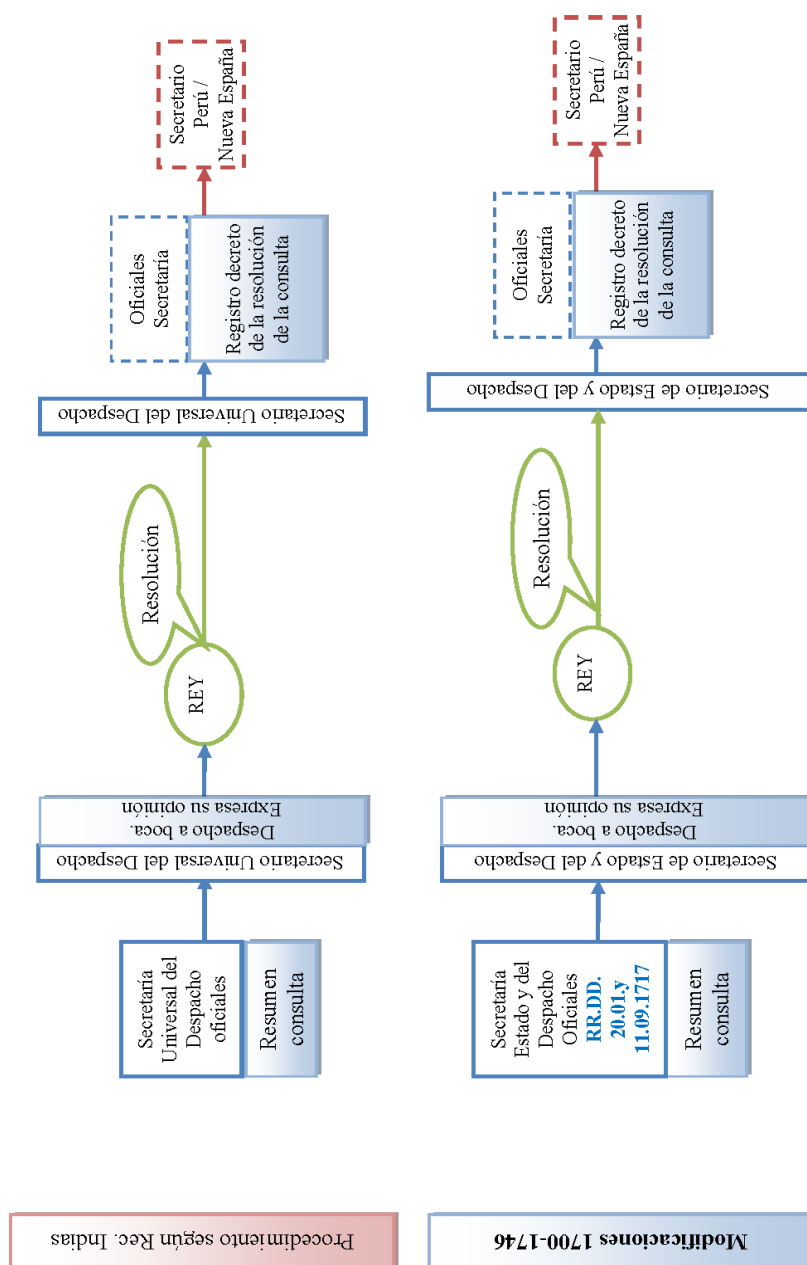
## Actos de Instrucción II.



### Actos de Instrucción III.



## Actos de Resolución.



**Procedimiento según Rec. Indias**

Secretaría Perú / Nueva España

Registrar resolución

Confeción minuta

Consejero  
semanero

Revisión  
minuta

Secretario Perú / Nueva España

Puesta en limpio

Refrenda con su firma y rúbrica

Presidente,  
Consejero  
semanero y  
consejero  
interviniente

Firma y  
rúbrica

Real Provisión

Solemne: gracia, merced,  
justicia

Papel sellado

Real Cédula

Cualquier materia

Secretario Universal del Despacho

Rey

Secretario Universal del Despacho

- Firma autógrafa  
- Estampilla  
(Sria.de Cámara  
Real Estampilla

**Modificaciones 1700-1746**

Secretaría Perú / Nueva España

Registrar resolución

Confeción minuta

Consejero  
semanero

Revisión  
minuta

Secretario Perú / Nueva España

Puesta en limpio

Refrenda con su firma y rúbrica

Presidente,  
Consejero  
semanero y  
consejero  
interviniente

Firma y  
rúbrica

Real Provisión

Solemne: gracia, merced,  
justicia **(R.D. 22.11.1717)**  
Real provisión ministerial

Papel sellado

Real Cédula

**RR.DD. 20.01.y  
11.09.1717. No asuntos de  
guerra, hacienda,  
comercio y navegación**

Secretario de Estado y del Despacho

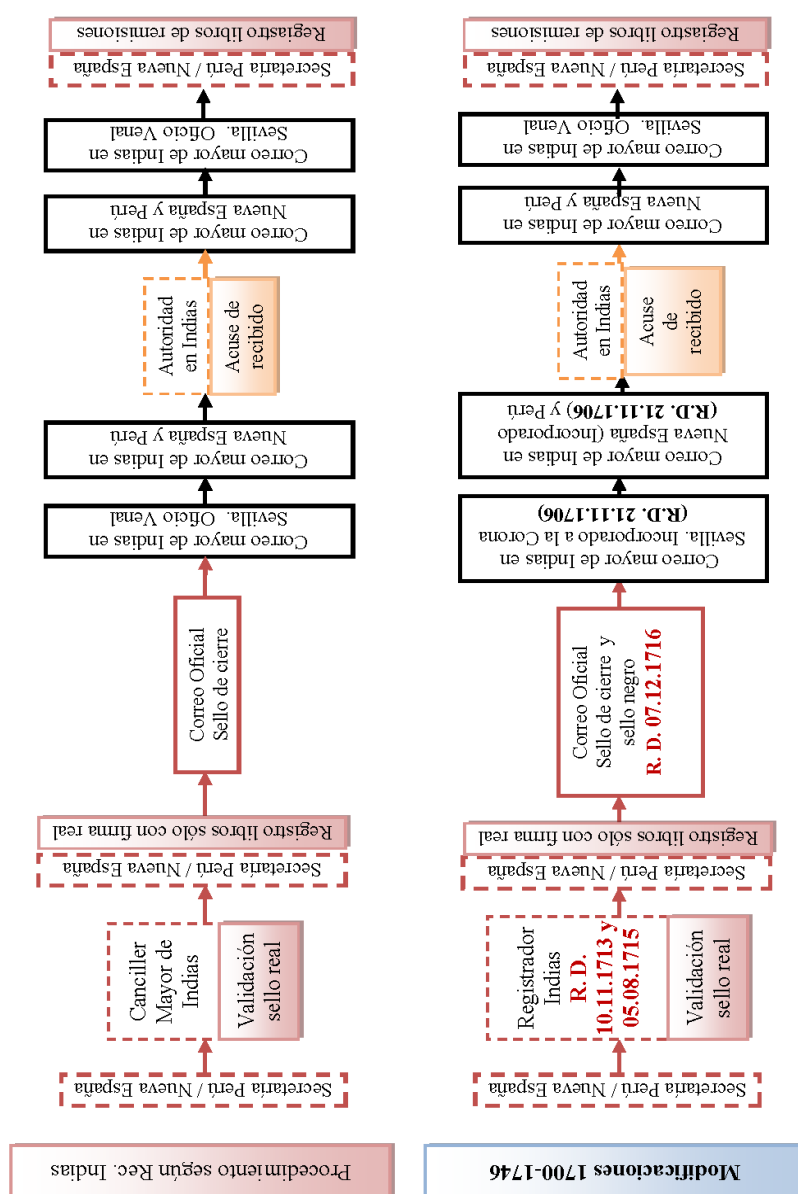
Rey

Secretario de Estado y del Despacho

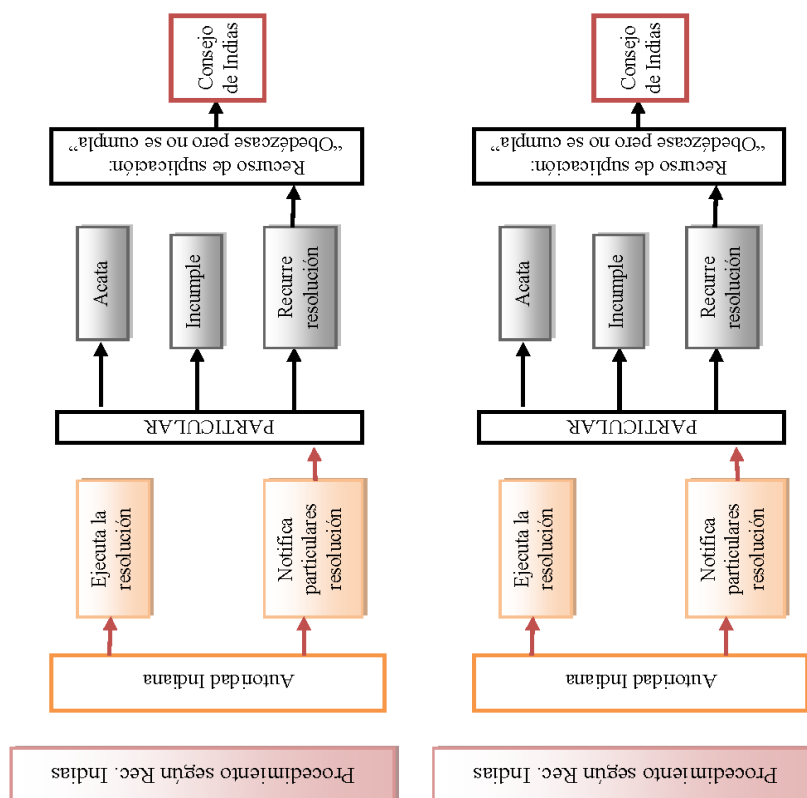
- Firma autógrafa  
- Estampilla  
(Sria.de Cámara  
Real Estampilla



## Actos de Comunicación de la Resolución II.



## Actos de Recurso.



### 3.2. La vía *de justicia o de proceso*.

Además de la resolución de asuntos de gobierno, hacienda o guerra a través de la vía *de expediente*, el Consejo de Indias también conocía asuntos de justicia que despachaba a través de la denominada vía *de justicia o de proceso* precisamente porque se sustanciaba siguiendo las directrices del procedimiento judicial.

El Consejo de Indias era el Supremo Tribunal de las Indias<sup>231</sup>, lo que le convertía en la máxima instancia jurisdiccional de asuntos relacionados con aquellos territorios. Empero, la propia legislación dispuso que se abstuviera de ocuparse de negocios particulares y de justicia entre partes, salvo si se trataba de un asunto grave<sup>232</sup>. La legislación real limitó la actuación en materia de justicia del Consejo a asuntos de visitas y residencias, así como recursos de segunda suplicación, de injusticia notoria, las causas de decomisos de arribadas cuando se reducían a juicio contencioso, las apelaciones de la Casa de Contratación de Sevilla, tanto en materia civil como criminal y las causas de fuerzas eclesiásticas<sup>233</sup>. Las reformas de 1717 nuevamente señalaron que el “instituto” del Consejo sería *todo aquello que procediere de causas contenciosas y demás negocios de mera justicia*<sup>234</sup>.

A pesar de esta reforma, el conocimiento de asuntos en materia de justicia fue menor comparada con los de gobierno, debido entre otras razones, al dispendio económico que suponía tramitar un proceso judicial en Madrid residiendo en las Indias, por ello, lo habitual fue que las causas concluyeran en las Audiencias indianas o en la propia Casa de Contratación<sup>235</sup>.

Los asuntos que en materia de justicia el Consejo debía admitir a trámite daban lugar a procesos singulares, en parte comunes a la vía *de expediente* y en parte distintos<sup>236</sup>. Normalmente el procedimiento por esta vía era por

---

<sup>231</sup> Ordenanza 2 de 1636. Recop. Indias 2.2.2.

<sup>232</sup> Ordenanza 66 de 1636. Recop. Indias 2.2.58.

<sup>233</sup> Ordenanza 4 de 1636. Recop. Indias 2.2.4.

<sup>234</sup> Real decreto 20.01.1717. A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 107v-108v.

<sup>235</sup> Así por ejemplo los pleitos contenciosos entre partes fueron escasos. Los mercaderes y cargadores de Indias resolvieron sus conflictos ante el Tribunal del Consulado de la Casa de Contratación y las apelaciones ante el Juez de Alzadas nombrado por el Consejo para la misma ciudad. Sólo en contadas ocasiones, los cargadores y comerciantes recurrían al Consejo, y cuando *esto* ocurría, se enviaban los Autos y Acuerdos, que el Consejo se limitaba a verificar y a devolver al Consulado que ejecutaba la sentencia. Vid. M<sup>a</sup> del Pérez Canto y C. Vázquez Rodríguez, “El Consejo de Indias...”, pp. 234-35.

<sup>236</sup> Vid. R. D. García Pérez, *El Consejo de Indias...*, p. 459.

escrito, sin fase oral y compuesto por una serie de fases en los que se iba desarrollando el procedimiento mediante diligencias, disposiciones y resoluciones judiciales, así como peticiones, pruebas, alegaciones, recursos, etc.<sup>237</sup>

En el desarrollo de esta vía *de proceso*, el Consejo procedía como cualquier otro tribunal de justicia, ajustándose estrictamente a la ley. Nadie ajeno a ella intervenía en sus deliberaciones, y ni siquiera el propio monarca interfería en sus resoluciones<sup>238</sup>. Además, el proceso junto con el sistema probatorio ofrecía mayores garantías de justicia que la vía *de expediente*<sup>239</sup>.

No es este el lugar de analizar cada uno de esos procedimientos, toda vez que rebasaría nuestro objeto de estudio. Si en cambio, queremos dar una panorámica del desarrollo de esta vía dentro de la propia organización administrativa del Consejo. En otras palabras indicaremos aquellos elementos que distinguían la vía *de gobierno*, de la vía *de justicia* tomando como referencia algunas de las fases que utilizamos para describir la vía *de expediente*.

Para iniciar la tramitación del recurso de segunda suplicación<sup>240</sup> primero debía presentarse el recurso ante la Audiencia, la cual, en caso de verificar que el pleito superaba el valor mínimo previsto por la ley, debía remitir al Consejo el escrito de presentación del recurso, junto con el proceso original y citar a las partes a presentarse ante el Consejo<sup>241</sup>.

El recurso de apelación contra causas de decomisos<sup>242</sup> era competencia del Consejo de Indias, siempre y cuando se tratara de decomisos que se

<sup>237</sup> Vid. P. L. Lorenzo Cadarso, *El documento real...*, pp. 139-40. Del mismo autor *La documentación judicial en la época de los Austrias*, Cáceres, 1999.

<sup>238</sup> Vid. A. García-Gallo, "El Consejo y los secretarios...", p. 783.

<sup>239</sup> Vid. S. de Dios, *El Consejo Real...*, p. 458.

<sup>240</sup> El recurso de suplicación era otorgado para que el rey por intermediación de su Consejo reviera la decisión de otros magistrados ( Recop. Indias 2.2.58). Se concedía contra los fallos de las Audiencias en grado de revista siempre que el rey a través de cédula real lo autorizara. El Consejo también podía admitir a trámite este recurso cuando se tratara de un pleito superara los seis mil pesos ensayados de a cuatrocientos y cincuenta maravedís cada uno o más. ( Recop. Indias. 5.13.1) y cuando se tratase de un asunto derivado de las cuentas tomadas por las contadurías de Indias y se hayan sustanciado en vista y revista ante la audiencia. ( Recop. Indias 8.1.36). Vid. R. Zorraquín Becú, *La organización...*, p. 176.

<sup>241</sup> Las sentencias sobre visitas y residencias puede verse en A.G.I., Escribanía de Cámara, 960 (1700-1746), 966 (1671-1747), 969 (1637-1712) y 1183 (1701-1736)

<sup>242</sup> El decomiso era la pena que se imponía al delito de contrabando y consistía en la pérdida y confiscación de los bienes. Pérez y López definía al contrabando como el hecho de quebrantar dolosamente las leyes, ya sea extrayendo fuera del reino o entrando en él las cosas que estaban prohibidas, sea comerciando con ellas o no pagando los justos derechos impuestos de las mercaderías, ocultándolas, o no registrándolas para eximirse del pago de

hubieren hecho en los Puertos de Indias<sup>243</sup>, así como para asuntos relacionados en el contrabando de esclavos<sup>244</sup>

También se podía interponer ante el Consejo de Indias el recurso de injusticia notoria<sup>245</sup>, para lo cual era necesario presentar la sentencia de revista dictada por la Audiencia indiana, además de un depósito de quinientos ducados de vellón o fianza legal<sup>246</sup>.

En el caso de los juicios de residencia<sup>247</sup> y visitas<sup>248</sup> eran prerrogativas del presidente proponer el nombre de las personas que debían instruir las visitas a las autoridades que hubieren sido proveídos por el Consejo de Indias<sup>249</sup>. Los autos debían ser entregados al fiscal, quien debía tramitarlos para cuando se determinasen el fallo en la Sala de Justicia.

---

ellos. Vid. *Teatro de la legislación universal...*, t. 9, p. 113. En A.G.I., Indiferente General, L. 1828 contiene los reales decretos sobre decomisos y contrabando entre los años de 1674 a 1805. Sobre contrabando de negros y comisos puede verse A.G.I., Indiferente General, 2849- 2851.

<sup>243</sup> Los recursos de apelación contra sentencias de decomisos por contrabando dentro de las Indias correspondía a las Audiencias. Recop. Indias 8.17.4.

<sup>244</sup> Recop. Indias 8.17.1.

<sup>245</sup> La injusticia notoria es un recurso creado por real decreto 17.02.1700 en el que el monarca admite que en las sentencias dictadas en revista por las Audiencias debiéndose invocar la comisión de una grave injusticia o irregularidad procesal (Nov. Recop. 11.23.1). Vid. R. Zorraquín Becú, *La organización...*, p. 177.

<sup>246</sup> Real decreto 24.04.1703. Nov. Recop. 11.23.2.

<sup>247</sup> El juicio de residencia era la cuenta que se tomaba de los actos cumplidos por un funcionario público al terminar el desempeño de su cargo. El juicio se desarrollaba en dos partes. En la primera se investigaba de oficio la conducta del funcionario, en la segunda se recibían las demandas que interponían los particulares ofendidos para obtener satisfacción de los agravios y vejaciones que habían recibido del enjuiciado. Vid. J. M<sup>a</sup> Mariluz Urquijo, *Ensayos sobre los juicios...*, p. 3.

<sup>248</sup> Mariluz Urquijo señalaba más de ocho distinciones entre el procedimiento seguido en las residencias y el de las visitas. Para efectos de esta investigación nos parece la más relevante la relacionada con el derecho de suplicación, toda vez que en las sentencias dictadas por el Consejo de Indias que contuvieran condenaciones de privación de oficio o de pena corporal podía solicitarse el recurso de suplicación, no así en el caso del juicio de residencia. Vid. *Ensayos sobre los juicios...*, pp. 255-266. Los expedientes de las visitas llevada a cabo a las Audiencias y gobernaciones de las Indias se localizan en la sección de Escribanía de Cámara del A.G.I. de la siguiente manera: Visitas de las Audiencias de Buenos Aires, Escribanía, S.76 (1631-1710); Guatemala, Escribanía, S.32 (1573-1718); La Plata, Escribanía, S.69 (1573-1690); Lima, Escribanía, S.47 (1560-1691); México, Escribanía, S.20 (1584-1732); Panamá, Escribanía, S.42 (1585-1735); Quito, Escribanía, S.79 (1586-1625); Santo Domingo, Escribanía, S.4 (1570-1660); Santa Fe, Escribanía, S.65 (1576-1687); Visitas de la Contratación y Consulado de Cádiz, Escribanía, S.91 (1582-1710); Visitas de las gobernaciones de Cartagena de Indias, Escribanía, S.51 (1619-1724); Santa Marta, Escribanía, S.61 (1679); Veracruz, Escribanía, S.24 (1586-1729); Cumaná y Caracas, Escribanía, S.57 (1668-1686); del distrito de Potosí, Escribanía, S.71 (1610-1729).

<sup>249</sup> Entre ellos virreyes, presidentes, gobernadores, oidores y oficiales de las Audiencias, contadores, oficiales de los Tribunales de Cuentas, oficiales de Hacienda. Ordenanza 56 de

En la vía *de proceso* era el escribano de cámara el encargado de gestionar todas las cartas y despachos emanados del Consejo en materia de justicia. Debía comparecer en todos los pleitos y elaborar los despachos necesarios. También era el encargado de leer personalmente las peticiones de justicia solicitadas por las partes y escribir de su mano los decretos que se acordaren en el Consejo. Para llevar a cabo su labor podía estar auxiliado por un oficial mayor<sup>250</sup>. Por su parte, los relatores estaban encargados de elaborar los apuntamientos y memoriales ajustados a las decisiones tomadas por los ministros togados en la Sala de Justicia<sup>251</sup>. El secretario tenía prohibido intervenir en los asuntos de justicia, sin embargo, como veremos era el encargado de confeccionar la consulta que posteriormente se remitiría al monarca.

Para que los ministros tuvieran una panorámica general de los asuntos de justicia tramitados en el Consejo era necesario que el relator elaborara los extractos correspondientes. El sábado era el día elegido para que los relatores entregaran al presidente una memoria en la que comunicaban el estado en que se encontraban los trabajos pendientes<sup>252</sup>.

---

1636. Recop. Indias 2.2.58. Los legajos de las residencias llevadas a cabo por el Consejo de Indias durante el reinado de Felipe V se encuentran en el A.G.I. sexta sección llamada “Escribanía de Cámara”, dividida de la siguiente manera: Residencias de las Audiencias de Buenos Aires, Escribanía, S.75 (1624-1738); Chile, Escribanía, S.83 (1576-1778); Filipinas, Escribanía, S.37 (1618-1755); Guadalajara, Escribanía, S.34 (1648-1745); Guatemala, Escribanía, S.30 (1582-1759); La Plata, Escribanía, S.68 (1609-1745); Lima, Escribanía, S.44 (1570-1746); México, Escribanía, S.18 (1581-1760); Panamá, Escribanía, S.40 (1577-1755); Quito, Escribanía, S.77 (1614-1752); Santa Fe, Escribanía, S.63 (1566-1753); Santo Domingo, Escribanía, S.2 (1608-1758); Residencia de las gobernaciones de Cumaná y Caracas, Escribanía, S.56 (1583-1754); Cartagena de Indias, Escribanía, S.50 (1606-1725); Florida, Escribanía, S.15 (1577-1737); La Habana, Escribanía, S.6 (1602-1755); La M., Escribanía, S.12 (1582-1756); Popayán, Escribanía, S.52 (1571-1753); Puerto Rico, Escribanía, S.9 (1555-1755); Santa Marta, Escribanía, S.59 (1592-1732); Tucumán, Escribanía, S.72 (1580-1736); Veracruz, Escribanía, S.23 (1662-1728); Yucatán, Escribanía, S.26 (1604-1749); Residencias de las Islas Canarias, Escribanía, S.84 (1599-1755) y Residencias del Distrito de Potosí, Escribanía, S.70 (1590-1690).

<sup>250</sup> Ordenanza 175 de 1636. Recop. Indias 2.10.1.

<sup>251</sup> Ordenanza 168 de 1636. Recop. Indias 2.9.1 Esta ley de la recopilación remite el trabajo de los relatores al realizado en el Consejo de Castilla. Vid. N. Recop. 2.4.14. También A. Martínez de Salazar, *Colección de memorias...*, p. 679.

<sup>252</sup> En la Representación de 1714 el relator del Consejo señalaba a Felipe V que *todos los sábados entregan los tres relatores al señor presidente una memorial, de todos los pleitos, causas, residencias y pleitos fiscales y de partes, y en ellas participan que unos pleitos o residencias están prontos y en estado de poder verse desde luego, y de otros estarlos viendo, y forman dos memorias con que al tiempo de pasar los togados a sala de justicia, ordena el señor presidente al antiguo que va a presidirla los pleitos que han de verse prefiriéndolos según la gravedad y antigüedad de cada uno*. “Representación hecha a S.M. por el Consejo de Indias... B.P.R., Mss. II/844.

El despacho de los asuntos de justicia era público, generalmente con la participación de los implicados<sup>253</sup>. Si bien no siempre intervenía el fiscal, parece que fue requerido en numerosas ocasiones para pedirle información. Así por ejemplo era el encargado de revisar las visitas y residencias que se llevaran en el Consejo<sup>254</sup>.

Los asuntos de justicia eran despachados en la Sala de Justicia la cual sólo podía integrarse por ministros togados<sup>255</sup>. El presidente era el encargado de nombrar en cada caso los consejeros que formarían parte de esta sala<sup>256</sup>. También señalaba los pleitos que se debían de sustanciar para lo cual se servía de una lista con los juicios que debían votarse, aunque normalmente el orden que se seguía en la resolución de los pleitos estaba determinado por la gravedad y la antigüedad del mismo. La vista era a puerta abierta en presencia de las partes, abogados y procuradores.

A diferencia de la vía *de expediente* en donde debía guardarse secreto en el despacho de los asuntos, en la vía *de justicia* los consejeros estaban obligados a dar grata audiencia a las partes. La Recopilación de Indias estableció tres horas por la mañana para el despacho de los asuntos y los martes, jueves y sábados otras dos horas por la tarde<sup>257</sup>. Pero al ser este tiempo insuficiente, Felipe V por decreto de 1703 ordenó ampliar el horario de atención a los litigantes:

*Han llegado a mi noticia que a los litigantes y pretendientes se les asigne notable perjuicio, de no tener regulares, y francas las audiencias de los ministros. Y siendo esta una tan principal parte de sus ministerios, como lo es de mi real providencia, el atender al consuelo de mis vasallos, os mando que celéis con vuestro ejemplo y con la mayora vigilancia en que todos los ministros del Consejo, tengan indispensablemente hora señalada cada día sea por mañana o tarde para aliviar a los que tengan que hablarles por razón del oficio, haciendo saber a estos la hora que señalaren para que puedan acudir a ella. Y os encargo atendáis al más exacto cumplimiento de este decreto; a cuyo fin le haréis publicar en el Consejo de Indias, y me daréis cuenta de su observancia*<sup>258</sup>.

Para dar cumplimiento a este decreto el monarca encargó al presidente vigilar que los ministros señalaran hora por la mañana o por la tarde para

<sup>253</sup> Vid. M<sup>a</sup> del Pérez Canto y C. Vázquez Rodríguez, “El Consejo de Indias...”, pp. 235-36.

<sup>254</sup> Ordenanza 102 de 1636. Recop. Indias 2.5.5.

<sup>255</sup> Estaba prohibido que los relatores, escribanos de Cámara y cualquier otra persona entrase durante las votaciones del Consejo. Vid. A. Martínez de Salazar, *Colección de memorias...*, p. 681.

<sup>256</sup> Ordenanza 11 y 69 de 1636. Recop. Indias 2.2.11 y 2.3.1.

<sup>257</sup> Recop. Indias. 2.2.5. Por real decreto de 08.05.1707 se habilitó el horario de trabajo del Consejo para que se entrara desde el primero de mayo hasta fines de agosto a las siete de la mañana, y desde el uno de septiembre al último de abril a las ocho de la mañana. A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 57r -57v.

<sup>258</sup> Real decreto 09.11.1703. A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 57v-58r.

atender a las partes<sup>259</sup>. Tres años más tarde el atraso de expedientes era tal que otro real decreto de 1707 amplió a tres los días de sesiones de la Sala de Justicia. Los ministros togados debían acudir todas las tardes de los martes, jueves y sábados a fin de dar salida a los expedientes de justicia<sup>260</sup>.

Tratando de controlar aún más el trabajo de los consejos y especialmente en materia de justicia, Felipe V ordenó a todos los Tribunales de dentro y fuera de la corte le remitiesen información cada semana del número de pleitos pendientes por resolver y de su estado de tramitación, así como los que se hubieren resuelto<sup>261</sup>.

Los casos de justicia requerían los votos de la mayoría, siempre que hubiera tres votos conformes. En los asuntos de menor cuantía era necesario tener dos votos. Y si había discordia entre los miembros de la sala era necesario elevar consulta al rey<sup>262</sup>. En su notas a la Recopilación, José de Ayala señalaba que desde el año de 1736 el monarca había expedido resoluciones para el caso de la discordia entre consejeros togados, la posibilidad de que pudieran asistir los fiscales y ser habilitados para votar en en los procesos en los que ellos no hubieren actuado como fiscales<sup>263</sup>.

En la tramitación de los recursos de segunda suplicación debían participar cinco jueces del Consejo de Indias, y si después de nombrados faltare alguno se podía ver con cuatro, pero si faltare uno más entonces se consultaría al monarca para que nombrase nuevamente a cinco ministros togados que declarasen si se aceptaba o no el recurso a trámite<sup>264</sup>.

En caso que el presidente del Consejo fuera letrado podía votar en las causas de justicia que se sustanciaban en el propio Consejo, en las visitas y en las residencias<sup>265</sup>. Por su parte, los secretarios no podían estar en las

<sup>259</sup> Vid. M. J de Ayala, *Notas a la Recopilación...*, p. 81.

<sup>260</sup> *Considerando que por la falta de ministros togados, que antes había en ese Consejo se han atrasado expedientes de justicia así fiscales, como residencias, pesquisas, y otros juicios que tocan al mejor gobierno y justicia de las Indias, he resuelto que para que todos estos se vayan concluyendo, y sentenciando haya y se forme Sala de Justicia, los martes, jueves y sábados de todas las semanas hasta que enteramente estén concluidos, así los referidos como los que concurrieren de partes, sin que se falte sino es sólo en caso de que se hallen enfermos los Ministros que la han de componer, y de irse así ejecutando se me irá dando cuenta por las dos secretarías, como de cuando se hayan concluido todos los citados juicios...* Real decreto 10.11.1707. A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 58r-58v.

<sup>261</sup> decreto que se observó según Ayala sólo por algún tiempo y no continuó porque se agolparon las quejas al monarca o porque se vio la imposibilidad de su efecto en los negocios de España. Vid. M. J. de Ayala, *Notas a la Recopilación...*, pp. 128-29.

<sup>262</sup> Ordenanza 57 de 1636. Recop. Indias 2.2.59.

<sup>263</sup> M. J. de Ayala, *Notas a la Recopilación...*, pp. 54-55.

<sup>264</sup> Recop. Indias 5.13.5.

<sup>265</sup> Ordenanza 73 de 1636. Recop. Indias 2.3.5.



reuniones del Consejo cuando se veían y votaban pleitos, residencias y visitas. Sin embargo, eran los encargados de elaborar la consulta en materia de justicia, para lo cual los ministros togados les remitirían los puntos que se hubieren acordado<sup>266</sup>.

A través de la consulta, el monarca era informado sobre cualquiera de los procesos que se ventilaban en el Consejo y era además el medio en donde el monarca intervenía directamente en el proceso, pudiendo hasta ordenar la suspensión o el sobreseimiento de un pleito en el Consejo. Por ejemplo, en las sentencias dictadas en los juicios de residencia y en las visitas en que se hubiere condenado con pena de muerte, pena corporal o privación de oficio era necesario remitir consulta al rey antes de ejecutar la sentencia<sup>267</sup>.

A fin de remitir al monarca todos aquellos asuntos de justicia que se resolvían en el Consejo, era menester que el escribano de cámara enviara la documentación correspondiente al secretario del Consejo, quien era el encargado de presentar al monarca dichos despachos. Además, ambos debían asentar en un libro las consultas que en materia de justicia se acordaren, así como la resolución real<sup>268</sup>.

Las provisiones de justicia para las Indias debían ir firmadas por el monarca, no así las que se expedían para dentro de la Península, solamente se debían despachar a nombra del rey, pero debían estar firmadas por el Consejo<sup>269</sup>.

En principio, las sentencias dictadas por el Consejo de Indias eran definitivas, sin embargo en casos como las visitas y las residencias se permitió a los condenados interponer recurso de suplicación de sentencias de vista y revista dictadas por el mismo Consejo<sup>270</sup>.

#### **4. La vía reservada y el Consejo de Indias.**

Si bien la vía reservada surgió como una nueva forma de despacho de los asuntos, en donde, el monarca se “reservaba para sí” el conocimiento exclusivo de un amplio abanico de negocios. Lo cierto es que esta forma de tramitación de los asuntos de la Monarquía logró la articulación de toda la

---

<sup>266</sup> Ordenanza 122 de 1636. Recop. Indias 2.6.9.

<sup>267</sup> Ordenanza 62 de 1636. Recop. Indias 2.2.64.

<sup>268</sup> Ordenanza 178 de 1636. Recop. Indias. 2.10.4.

<sup>269</sup> Ordenanzas 136 y 179 de 1636. Recop. Indias 2.6.23 y 2.10.5.

<sup>270</sup> Vid. R. D. García Pérez, *El Consejo de Indias...*, p. 468.

acción gubernativa, tanto en el interior, como en el exterior de la Monarquía<sup>271</sup>.

No es este el lugar para dilucidar las razones por las que Felipe V decidió superponer la vía reservada dentro del tradicional sistema político-administrativo hispánico, basta con apuntar que existen distintos argumentos al respecto. Uno de ellos ve el origen del despliegue de esta vía en contra del gobierno por consejos debido a las circunstancias de la guerra y al deseo del monarca de castigar a los rebeldes<sup>272</sup>, la otra corriente en cambio, afirma que aún reconociendo la oportunidad de un proceso bélico, consideraban que la nueva dinastía tenía una voluntad centrada en afirmar la autoridad del rey sobre el reino y las instituciones<sup>273</sup>.

Sea cual fuera el punto de vista, lo cierto es que desde el primer momento Felipe V decidió asesorarse por un grupo pequeño de personas con la intención de dar solución a los graves problemas que aquejaban a la Monarquía y en donde los órganos tradicionales de gestión eran incapaces de resolverlos. Sobre esta cuestión, López-Cordón señala que el triunfo de las secretarías sobre los consejos se encuentra precisamente en el debilitamiento de los mecanismos políticos y jurisdiccionales que detentaban ciertas instancias, frente a las nuevas instituciones que surgían y que respondían a otro tipo de planteamientos<sup>274</sup>.

Esta supremacía de la vía reservada<sup>275</sup> frente a la vía ordinaria no solo supuso el fortalecimiento del poder real frente a otras fuerzas políticas, sino

<sup>271</sup> Vid. L. M<sup>a</sup> García-Badell Arias, “Los primeros pasos...”, p. 116.

<sup>272</sup> En opinión del Bernard cuando Consejo de Indias decidió apoyar la causa del archiduque, entró sin saberlo por el camino de su propia decadencia. Felipe V jamás se lo perdonó y debemos ver en ello la causa principal de su apartamiento, a favor de las Secretarías de Estado, que serían creadas poco después. Vid. G. Bernard, *Le Secrétariat d’État...*, p. 3.

<sup>273</sup> Sobre esta cuestión puede verse M<sup>a</sup> V. López-Cordón Cortezo, “Instauración dinástica y reformismo administrativo...”, pp. 94 y ss. A. Dubet, “¿La importación de un modelo...”, pp. 209 y ss. y C. de Castro, *A la sombra de Felipe V...*, pp. 18 y ss.

<sup>274</sup> Vid. M<sup>a</sup> V. López-Cordón Cortezo, “Instauración dinástica...”, p. 95.

<sup>275</sup> No es este el lugar para dilucidar el origen de esta vía reservada basta con apuntar que existen distintos argumentos al respecto. Uno de ellos ve el origen del despliegue de esta vía en contra de la vía de consejos debido a las circunstancias de la guerra y al deseo del monarca de castigar a los rebeldes, la otra que “aún reconociendo la oportunidad de un proceso bélico, consideran que la nueva dinastía tenía una voluntad centrada en afirmar la autoridad del rey sobre el reino y las instituciones”. Sobre esta cuestión puede verse M<sup>a</sup> V. López-Cordón Cortezo, “Instauración dinástica y reformismo administrativo...”, pp. 94 y ss. A. Dubet, “¿La importación de un modelo...”, pp. 209 y ss. y de la misma autora *Un estadista francés en la España...*, pp. 136-140. Para J. L. Bermejo en cambio, el origen de la vía reservada se encontraba en las cartas que el monarca remitía a las autoridades superiores en el extranjero, con las que mantenía una correspondencia “reservada y por

también como un medio para centralizar las decisiones y agilizar la administración<sup>276</sup>. Por tanto, en opinión de García-Badell con el empleo de la vía reservada “las decisiones del monarca quedaban libres de los alambicados procedimientos de los consejos y de sus controles”<sup>277</sup>.

Ahora bien, lo que importa es reconocer la relación que existió entre las secretarías de Estado y del despacho y el Consejo de Indias. Aunque la cuestión sigue siendo algo compleja, lo cierto es que a partir de los decretos de nueva planta la forma de gobernar las Indias se modificó. Si tenemos en cuenta que las secretarías de Estado y del despacho, en principio, fueron instituciones eminentemente burocráticas de trámite, de gestión de papeles y de comunicación de las decisiones regias<sup>278</sup>, entonces es posible afirmar que fue allí donde confluyeron ambas instituciones.

El primer elemento de relación vino dado a través del ejercicio del *deber de consejo*. Tradicionalmente el presidente o el gobernador del Consejo de Indias realizaban la llamada “consulta de los viernes” en presencia del monarca, para que éste resolviera las consultas emitidas. Pero con la inclusión de la vía reservada en el despacho de los asuntos, el secretario de Estado se convirtió en el encargado de llevar a cabo ese despacho a través de “la consulta a boca” de la documentación que el Consejo directamente le remitía.

Otro punto de encuentro entre ambos órganos se desarrolló a partir de la pérdida de competencias del Consejo a favor de las secretarías de Estado. Ciertamente el Consejo de Indias no podía conocer de manera directa asuntos relacionados con hacienda, guerra, comercio y navegación. Sin embargo, la vía reservada le remitía asuntos «de orden del rey» o «el rey me manda decir» para que asesorara al monarca en cualquier materia.

Además, con el fin de dar seguridad jurídica a la legislación indiana, la Recopilación de Indias estableció que el Consejo de Indias fuera el único órgano encargado de validar las disposiciones reales<sup>279</sup>. Por tanto, si las secretarías de Estado y del despacho emitían alguna orden dirigida a aquellos territorios debían previamente remitir la disposición al Consejo para que éste lo validara. Pero una reforma de septiembre de 1717 derogó el

---

cifra secreta” que convirtió a la secretaría en el centro de información político-administrativo mejor dotado de toda la monarquía. Vid. J. L. Bermejo Cabrero, “Del secretario del Despacho...”, p. 35.

<sup>276</sup> Vid. M. Gómez Gómez, *Forma y expedición...*, p. 34. También en C. de Castro, *A la sombra de Felipe V...*, pp. 18-19.

<sup>277</sup> L. M<sup>a</sup> García-Badell Arias, “Los primeros pasos...”, p. 115.

<sup>278</sup> *Ibidem*, p. 127.

<sup>279</sup> Recop. Indias 2.1.23.

contenido de esta disposición *con tal de darle fuerza, vigor y cumplimiento a las cédulas expedidas por las secretarías de Estado y del despacho*<sup>280</sup>. Aún así, gran parte de la legislación indiana continuaba validándose en el Consejo, como era el caso de los nombramientos de oficiales en donde se utilizaban reales provisiones que se remitían a través de la vía ordinaria. Quizá por ello la vía reservada fue comúnmente usada en negocios que, expedidos en la secretaría del Despacho, eran remitidos al Consejo para su más solemne expedición a territorios indianos, lo que se tradujo en opinión de M. Gómez en la distinción entre organismo decisorio, la secretaría del despacho, y organismo documental y de publicación, el Consejo<sup>281</sup>.

Pero el mayor punto de encuentro de ambos órganos de la administración central se dio en lo que Isabel Cabrera denominó “proceso legislativo”<sup>282</sup>, esto es, aquel proceso de elaboración de la legislación que se iniciaba con la formulación de un texto normativo y que culminaba con su aplicación en territorio indiano. En efecto, una real orden surgida de la oficina del secretario de Estado y del despacho o del propio Consejo podía ser tramitada en el Consejo de Indias y convertirse, tras la aceptación del rey, en una disposición de aplicación general en las Indias.

Para lograr una esquematización coherente no podemos perder de vista que tanto el Consejo, como las secretarías de Estado y del despacho eran órganos de la administración que actuaban por delegación de funciones<sup>283</sup>, el único que podía sancionar leyes era el rey<sup>284</sup>. El esquema que a continuación presentamos justamente analizará ese proceso de creación de la norma<sup>285</sup>. Por tanto, de manera general los pasos que debían seguirse eran:

---

<sup>280</sup> M. J. de Ayala, *Notas a la Recopilación...*, p. 18.

<sup>281</sup> Vid. M. Gómez Gómez, *Forma y expedición...*, p. 240.

<sup>282</sup> Vid. I. Cabrera Bosch, *La ley y el Consejo...* p. 114.

<sup>283</sup> Sobre la delegación de atribuciones puede verse R. Zorraquín Becú, “La condición política de las Indias”, en *Estudios de Historia del Derecho*, Buenos Aires, 1992.

<sup>284</sup> Vid. S. de Dios, *El Consejo Real...*, p. 349.

<sup>285</sup> Para la elaboración de este esquema nos hemos basado en los estudios de Isabel Cabrera acerca del “proceso legislativo” en el Consejo de Castilla. Vid. *La ley y el Consejo...*, pp. 109-63 y “El poder legislativo...”, pp. 224-237.

#### 4.1. Procedimiento de creación de la legislación indiana.

##### 4.1.1. Iniciativa.

La propuesta de creación de la norma podía surgir por parte del Consejo de Indias, como por la vía reservada.

El Consejo como órgano asesor por excelencia remitía al monarca a través de la vía reservada sus consultas sobre las materias de las que tenía competencia a fin de que éste las aceptara y convertirlas en reales decreto. Dicho órgano indiano también podía *motu proprio* remitir al monarca la propuesta de analizar algún asunto de suma importancia, el rey recibía dicha propuesta por medio del secretario de Estado y si era aceptada la propuesta, a través de una real orden se compelia al Consejo a consultar sobre esa materia<sup>286</sup>.

También la iniciativa de una posible norma podía surgir directamente de la vía reservada. En este caso el secretario se podía encontrar en dos supuestos: por un lado tener listo un asunto para llevarlo a despacho con el rey, quien debía resolver o remitir al Consejo un asunto mediante una real orden con el acuerdo del monarca, para que emitiera su opinión a través de una consulta.

En el preámbulo de la real orden era común señalar de dónde o de quién partía la iniciativa. Podía surgir directamente del secretario de Estado que requería la opinión de los expertos consejeros indianos respecto de un asunto de importancia fundamental para las Indias. En este caso, la real orden recogía propiamente la disposición o resolución, por lo que el fiscal

---

<sup>286</sup> Así sucedió el 23.11.1718 cuando Felipe V expidió un decreto al Consejo de Indias resolviendo la incorporación de todas las encomiendas que se hallaren vacantes o sin confirmar y las que en adelante vacaren al fallecer los actuales poseedores, aunque hubiera más vidas concedidas. El decreto se envió al Consejo para su aplicación, quien sólo debía despachar todas las órdenes oportunas a las autoridades indianas. Sin embargo el Consejo pasó el documento al fiscal y oído este, consultó al rey el 12 de diciembre «*que si fuere de su real agrado oír al Consejo lo que se le ofrecía sobre la mencionada resolución, lo ejecutaría*». El rey resolvió «*dígame el Consejo su parecer*». El parecer del Consejo de la consulta fue de 12.04.1719 (acordado el 30.03). La consulta ocupaba más de 100 folios, recogiendo los setenta últimos votos particulares de no menos de cinco miembros del Consejo, de los once que participaron en la adopción de este acuerdo. Vid. L. Navarro García, “Felipe V y el Consejo de Indias: el debate de las encomiendas”, en *Boletín de Temas Americanistas*, Sevilla, 1983, No. 3, pp. 5-11.

no tenía que elaborar dictamen, solo era necesario que opinara respecto a la validez y legalidad del proyecto normativo consultado<sup>287</sup>.

Pero en ocasiones una real orden por la que se ordenaba simplemente al Consejo la preparación de una consulta, la cual si era aceptada por el monarca, podría convertirse en una disposición real. En dicha real orden era común que el secretario enumerara exclusivamente los puntos que debían tenerse en cuenta para la preparación de la consulta<sup>288</sup>.

#### **4.1.2. Remisión de la real orden por la vía reservada y su lectura en el Consejo.**

Después que el presidente o gobernador del Consejo recibían la real orden remitida por la secretaría de Estado y del despacho, la misma era leída en el Consejo. La decisión de despachar la real orden en el pleno del Consejo o en Sala de Gobierno era una atribución del presidente, quien considerando la importancia del asunto la enviaba a un lado u otro<sup>289</sup>.

Ya sea reunido todo el Consejo o algunos consejeros en Sala de Gobierno, el secretario era el encargado de la tramitación de la real orden. Posteriormente, a fin de dar cabal cumplimiento a la voluntad real el expediente era remitiendo al fiscal para que pudiera emitir un dictamen al respecto. Normalmente se escribía una nota aparte a la real orden en donde se asentaba alguna fórmula de remisión como: «*Se acordó que se guarde y cumpla y pasó a los fiscales*» o simplemente «*Pase a los señores fiscales*»<sup>290</sup>. A partir de este momento los ministros del Consejo no volverán a tener conocimiento del asunto hasta el momento de ser informados de lo dictaminado por los fiscales.

---

<sup>287</sup> Vid. I. Cabrera Bosch, *La ley y el Consejo...*, p. 118. Puede verse varias series de remisión de reales órdenes de la Secretaría de Estado y Despacho de Marina e Indias dirigido al Consejo de Indias. A.G.I., Panamá, 250; Santa Fe, 550; Guatemala, 422, Quito, 220, Lima, 605; Caracas, 30.

<sup>288</sup> Vid. I. Cabrera Bosch, *La ley y el Consejo...*, p. 119.

<sup>289</sup> Ordenanzas 11 y 69 de 1636. Recop. Indias 2.2.11 y 2.3.1.

<sup>290</sup> Manuel Romero señalaba que el dictamen de los fiscales no tenía una forma, ni un contenido de plasmación singular y distintivo simplemente era un documento más de los muchos que integraban parte de un expediente. Vid. “Guía de la Sección «Gobierno» (Audencia y Virreinato de Santa Fe), del Archivo General de Indias”, en *Historiografía y bibliografía americanista*, nº 28 (1984), p. 17.

#### 4.1.3. Dictamen del fiscal.

Una de las atribuciones de los fiscales consistía en emitir su opinión respecto de un asunto. Para elaborar el dictamen el fiscal era auxiliado por sus agentes fiscales quienes tenían la obligación de preparar el extracto del asunto, y en su caso, localizar antecedentes que existieran en los libros registro del propio Consejo.

Como se trataba de una consulta que había remitido directamente el monarca a través de una real orden, el fiscal debía ceñirse al contenido señalado en dicha real orden. El tamaño del dictamen podía variar según el tipo de consulta que enviara la vía reservada. Si la real orden que llegaba al Consejo, y por tanto a manos del fiscal, contenía un real decreto, que era el resultado del estudio previo elaborado por otros órganos de la administración, como podía ser la propia secretaría de Estado y del despacho o Juntas *ad hoc*, dicho decreto era ya un proyecto de ley en sí mismo, perfectamente articulado y sujeto exclusivamente para obtener la sanción real a las posibles observaciones que los fiscales pudieran hacer al respecto, sobre todo que no fuera contrario a las leyes<sup>291</sup>. En este caso ni el fiscal, ni los miembros del Consejo podían variar el contenido del real decreto, sólo debían dar su opinión<sup>292</sup>.

El otro tipo de dictamen que podía elaborar el fiscal era sobre una real orden que remitía la vía reservada solicitando la preparación de un proyecto de ley a partir de la preparación de una consulta sobre un tema determinado<sup>293</sup>. En este tipo de dictamen era común que el fiscal incluyera todo un conjunto de leyes que configurarían la regulación de una sola materia, es decir, formulando en artículos las normas por las que se debía reglamentar el tema dictaminado<sup>294</sup>. También podía existir un dictamen de asuntos en los que el monarca solicitaba una consulta de un tema que había

---

<sup>291</sup> Vid. I. Cabrera Bosch, *La ley y el Consejo...*, pp. 127-29.

<sup>292</sup> Un caso lo fue el dictamen que el fiscal del Consejo elaboró en relación al real decreto de 23.11.1718 sobre la incorporación de todas las encomiendas que se hallaren vacantes o sin confirmar. Se trataba de un dictamen que el Consejo posteriormente había aceptado mediante votación y que el monarca rechazó. Vid. L. Navarro García, "Felipe V y el Consejo...", p. 6.

<sup>293</sup> Por ejemplo el asunto del traslado de la Casa de Contratación de Sevilla a la Ciudad de Cádiz requirió el informe del fiscal del Consejo. A.G.I., Indiferente General, 2039.

<sup>294</sup> Vid. I. Cabrera Bosch, *La ley y el Consejo...*, p. 130.

sido remitido desde las Indias<sup>295</sup>. El dictamen partía de cero y había que crear las disposiciones jurídicas necesarias.

#### **4. Debate del dictamen del fiscal en pleno o en sala del Consejo.**

Una vez que el fiscal había terminado su dictamen era remitido al Consejo, para que ya sea, reunido en pleno o en sala, resolviera sobre la propuesta del fiscal. Como ya se ha mencionado, los asuntos graves debían tratarse en el pleno, así como aquellos que a juicio del presidente o gobernador así lo requirieran.

Si se trataba de asuntos para la aprobación o derogación de leyes era necesaria la concurrencia de las dos terceras partes de los ministros que formaban parte del Consejo, debiendo además consultar al monarca<sup>296</sup>. En caso de no alcanzarse este número de votos era necesario solicitar la preparación de otro dictamen al fiscal, o en caso contrario, se podía solicitar a un consejero que estudiara el caso y presentara un informe alternativo<sup>297</sup>. Al contar con mayor información, nuevamente se sometían dichos informes a votación.

Desde que se aprobaba el dictamen del fiscal, cuya fórmula podía ser «*como lo dice el señor fiscal*» o «*lo acordado que lleva entendido el señor fiscal*» o del dictamen que hubiere preparado cualquier ministro del Consejo, era el momento de ordenar la preparación de la consulta, señalando la fecha de la misma<sup>298</sup>.

##### **4.1.5. Preparación de la consulta.**

El secretario que estuvo presente en las votaciones era también el encargado de tomar apuntes de todo lo ocurrido en dichas sesiones. Sus

---

<sup>295</sup> Sobre este tipo de dictamen es interesante el elaborado a finales del reinado de Felipe V por José de Laysequilla de cobrar a negros, mestizos y mulatos el tributo en metálico. A.G.I., Quito, 145. Vid. L. Ramos Gómez y C. Ruigómez Gómez, “Una propuesta a la corona para extender la mita y el tributo a negros, mestizos y mulatos (Ecuador, 1735-1748), en *Revista Complutense de Historia de América*, n° 25 (1999), pp. 99-110.

<sup>296</sup> Ordenanza 16 de 1636. Recop. Indias 2.2.16.

<sup>297</sup> Vid. I. Cabrera Bosch, *La ley y el Consejo...*, pp. 139-41.

<sup>298</sup> *Ibíd.*, p. 143.



notas las remitía a sus oficiales con el fin de que prepararan la minuta de la consulta<sup>299</sup>. Al término de la redacción de dicha minuta, el secretario era el responsable de revisar que coincidiera el contenido de la consulta con las votaciones del Consejo.

La puesta en limpio del documento también era deber de los oficiales. El secretario y el consejero semanero únicamente debían verificar que el contenido de la consulta fuera acorde con el dictamen del fiscal y lo resuelto en las votaciones en el Consejo.

Dos eran los tipos de consulta que se podían elaborar dependiendo, como ya se ha mencionado, del contenido del real orden de remisión. Si se trataba de elaborar un dictamen sobre la legalidad de un real decreto, entonces el documento debía adecuarse a señalar tal situación sin necesidad de agregar los antecedentes. En este caso se remitía por la vía reservada el decreto o cédula para obtener la sanción real, por no necesitar que el documento se elevara a consulta<sup>300</sup>.

El otro tipo de consulta consistía en exponer al monarca su parecer o dictamen sobre el asunto que le había hecho llegar a través de la vía reservada. En el encabezado del documento normalmente se colocaba un resumen de la real orden remitida al Consejo para su consulta; a continuación aparecía el dictamen completo del fiscal, y por último, el parecer del Consejo. Si hubiera habido un voto en contra, también debía anexarse a la propia consulta. En este caso la consulta era elevada al monarca para que resolviera lo que fuera oportuno<sup>301</sup>.

## **6. Envío de la consulta al monarca por la vía reservada.**

Cuando el contenido de la consulta era aprobado por el secretario del Consejo y el consejero semanero entonces era el momento de remitirlo nuevamente a la secretaría de Estado y del despacho.

---

<sup>299</sup> Las minutas de consultas de asuntos relacionados con la Nueva España se pueden encontrar en A.G.I., Indiferente General, 27 (1715-1723) y 28 (1724-1758). Por su parte las del Perú se encuentran en A.G.I., Indiferente General, 290 (1716-1719); 291 (1720-1726); 292 (1727-1737); 293 (1738-1743) y 294 (1744-1759).

<sup>300</sup> Vid. I. Cabrera Bosch, *La ley y el Consejo...*, pp. 145-47.

<sup>301</sup> Las consultas originales del Consejo se pueden ver en A.G.I., Santa Fe 263 (1718-1731) y 264 (1732-1759).

Los oficiales de la secretaría eran los encargados de elaborar un extracto de la consulta con la opinión del fiscal y en su caso, los votos particulares. Cuando el secretario de Estado despachaba con el monarca acudía con toda la documentación remitida por el Consejo y que previamente su oficina había inventariado.

## **7. Despacho a boca con el monarca.**

El secretario de Estado en el despacho *a boca* con el monarca debía reseñarle el contenido de las consultas, así como la decisión que el Consejo hubiere tomado<sup>302</sup>. En esta misma audiencia con el rey, su secretario podía dar su opinión sobre el particular. En el despacho de los asuntos, el secretario además debía anotar la resolución real a las consultas y documentos que el Consejo había remitido.

Podía suceder que el monarca no estuviera de acuerdo con el dictamen del fiscal, la opinión mayoritaria del Consejo o del voto particular de un ministro, para lo cual remitía nuevamente el asunto ordenando una nueva consulta. Otro supuesto era que el monarca aceptara la opinión de los consejeros, entonces la consulta era remitida nuevamente al Consejo para que confeccionara las disposiciones correspondientes. Y también podía suceder que el Consejo hubiere remitido al monarca la minuta en limpio de aquella consulta que buscaba que el fiscal emitiera simplemente su parecer sobre la legalidad de un real decreto, en este caso, el monarca sólo firmaba la minuta dándole fuerza legal.

Con la resolución en la misma consulta, la oficina del secretario de Estado remitía al Consejo de Indias dichos documentos a fin de dar cumplimiento a la decisión del monarca.

## **8. Remisión del real decreto para su validación.**

El Consejo nuevamente recibía documentación por parte de la vía reservada<sup>303</sup>, entre ellas, sus consultas con la resolución real. En caso que la

---

<sup>302</sup> En A.G.I., Santa Fe 550 y 551 se encuentran las minutas de los oficios de los secretarios de Estado y del despacho en relación a las consultas del Consejo de Indias.

<sup>303</sup> Así puede verse un legajo de los extractos de las consultas que el Consejo remitía a la Secretaría de Estado y del Despacho de Indias en A.G.I., Panamá, 247.

consulta hubiera sido aprobada en los mismo términos que se remitió entonces se procedía a su escrituración para poder remitirla nuevamente por la vía reservada al monarca para que se procediera a su firma. Pero si el monarca solicitaba nuevamente aclaración a un asunto, entonces se tenía que confeccionar una nueva consulta y remitirla al monarca.

Cuando la consulta había sido definitivamente aprobada, la real resolución a la misma era publicada en el Consejo, que, a su vez, ordenaba su cumplimiento; el Consejo se limitaba a dar la orden de impresión y comunicación: «*se acordó su cumplimiento y se expida real cédula, la cual se imprima y circule en la forma acostumbrada*»<sup>304</sup>.

La norma ya sancionada por el monarca, esto es, firmada de su puño y letra o por estampilla necesitaba ahora la validación por parte del Consejo, entre ellos, la firma del presidente, del consejero semanero y del consejero que había intervenido en las votaciones. También se remitía al teniente del chanciller a fin de sellar el documento. Los documentos validados eran registrados en los libros que al efecto custodiaba cada uno de los secretarios del Consejo.

El Consejo era también el encargado de efectuar la publicación y de vigilar el cumplimiento de lo mandado, por lo que era necesario remitir las disposiciones a sus destinatarios. Cuando los documentos llegaban a su destino, la autoridad respectiva debía enviar al Consejo un acuse de haber recibido dicha documentación<sup>305</sup>. Tras la devolución del acuse de recibo, el secretario debía anotar en un libro aparte las remisiones de los negocios que se hicieron en el Consejo a las autoridades indianas y a otras personas y justicias y de las informaciones y pareceres que les fueron enviadas.

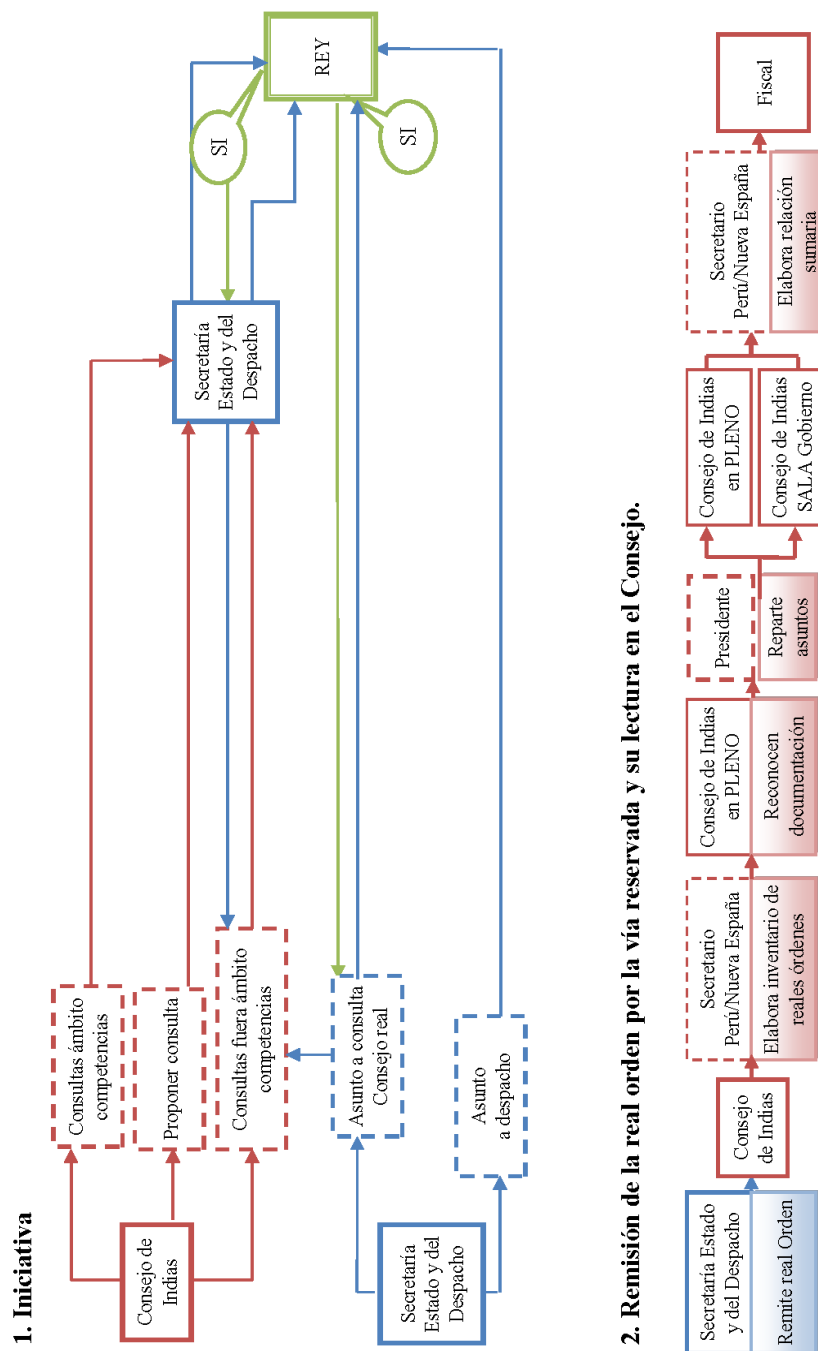
Toda esta información hemos querido reflejarla a partir de esquemas con la intención de especificar todos los pasos que se debían seguir para la creación de una disposición jurídica. En todo este proceso intervenían de manera continuada tanto el Consejo de Indias, como la Secretaría de Estado y del Despacho, quizá por ello el esquema que a continuación presentamos nos ha permitido identificar aquellos puntos que unían la vía ordinaria con la vía reservada en la creación del derecho indiano.

---

<sup>304</sup> Vid. I. Cabrera Bosch, *La ley y el Consejo...*, pp. 154-55.

<sup>305</sup> Los acuses de recibo o “piezas de avisos” muestran que toda la legislación real era publicada y de obligado cumplimiento en todos los territorios de la Monarquía. *Ibíd.*, p. 163.

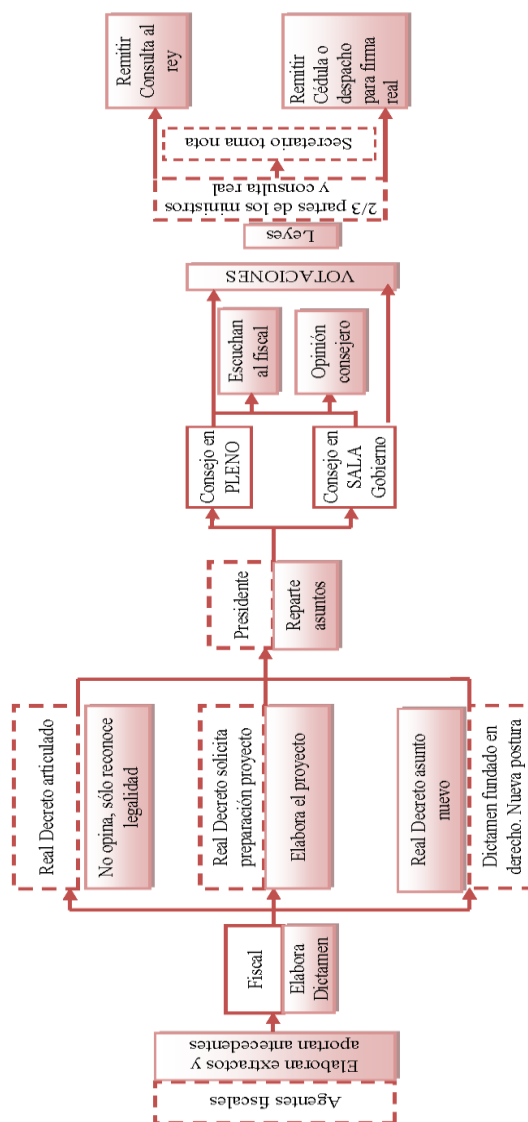
# **Relación entre la vía ordinaria y la vía reservada dentro del procedimiento de creación de la legislación indiana I.**



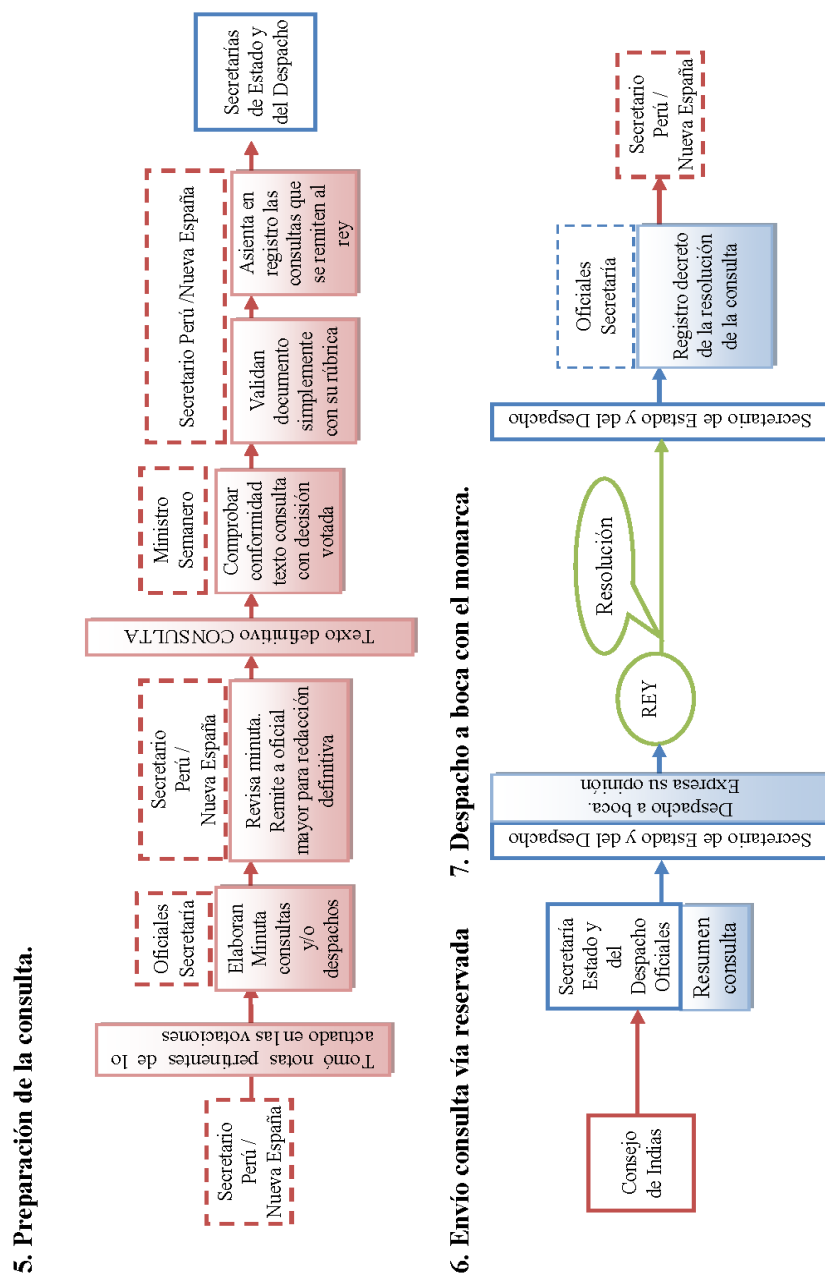
## Relación entre la vía ordinaria y la vía reservada dentro del procedimiento de creación de la legislación indiana II.

### 4. Debate dictamen del fiscal en Pleno o Sala de Gobierno.

### 3. El dictamen del fiscal.

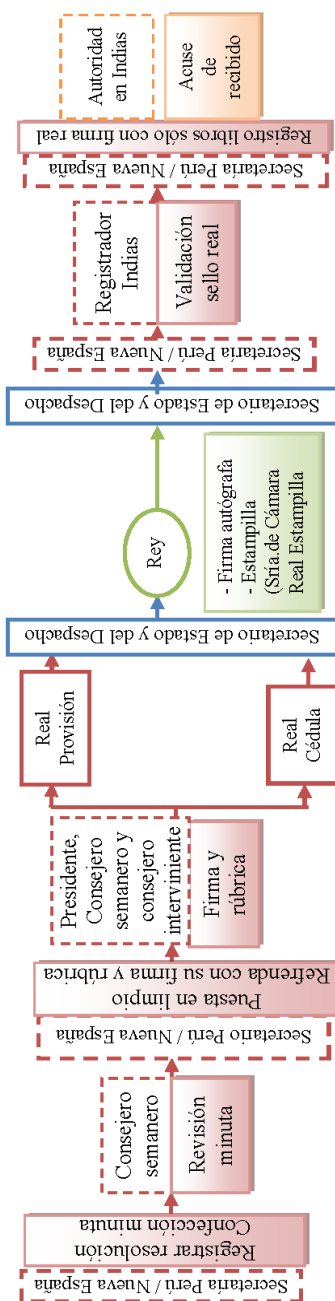


### Relación entre la vía ordinaria y la vía reservada dentro del procedimiento de creación de la legislación indiana III.



# **Relación entre la vía ordinaria y la vía reservada dentro del procedimiento de creación de la legislación indiana IV.**

## **8. Remisión por parte de la vía reservada del decreto real para su validación**



## V. RESULTADOS

### **1. Las competencias del Consejo de Indias: gobierno, justicia, guerra y hacienda a la luz de las consultas remitidas al monarca.**

La consulta, como ya se ha mencionado, era el acto por el cual el Consejo en el cumplimiento de su deber de asesorar al monarca le daba su parecer sobre las materias que le estaban permitidas. Por extensión, el documento donde se consagraba dicho parecer recibía también el nombre de consulta.

Precisamente el análisis de la consulta ha sido la base de nuestro estudio. Por ello en esta parte de nuestra investigación nos proponemos a exponer estadísticamente los resultados obtenidos a partir del estudio de un gran número de consultas.

Recordando lo que hemos mencionado en el capítulo introductorio, una buena parte de la información la obtuvimos de la obra dirigida por la archivera A. Hereda Herrera, quien, a lo largo de doce tomos concentró alrededor de 32.444 consultas referidas a los años de 1529 a 1675, esto es, prácticamente el período del reinado de la dinastía de los Austrias. En este sentido nuestra labor consistió en incluir todas y cada una de esas consultas en una base de datos capaz de facilitarnos el manejo de la información. Por tanto, el criterio que utilizamos para determinar cuáles y cuántas consultas revisar vino dado por la propia obra.

La otra parte de la información fue necesaria obtenerla de los libros-registro ubicados en el Archivo General de Indias. El criterio con el que nos avocamos para revisar las consultas del Consejo durante el reinado de Felipe V partió de dos ejes. El primero de ellos considerando los años del reinado del monarca, esto es, de 1700 a 1746. El otro eje se movió en torno a la expedición en 1717 de los decretos de nueva planta, momento en el cual el contenido de la documentación podría variar.

También hubo que tomar la decisión de elegir cuáles consultas revisar. Decidimos hacer uso de los libros-registro confeccionados por los secretarios del Consejo en el llamado “Indiferente General”, esto es, asuntos



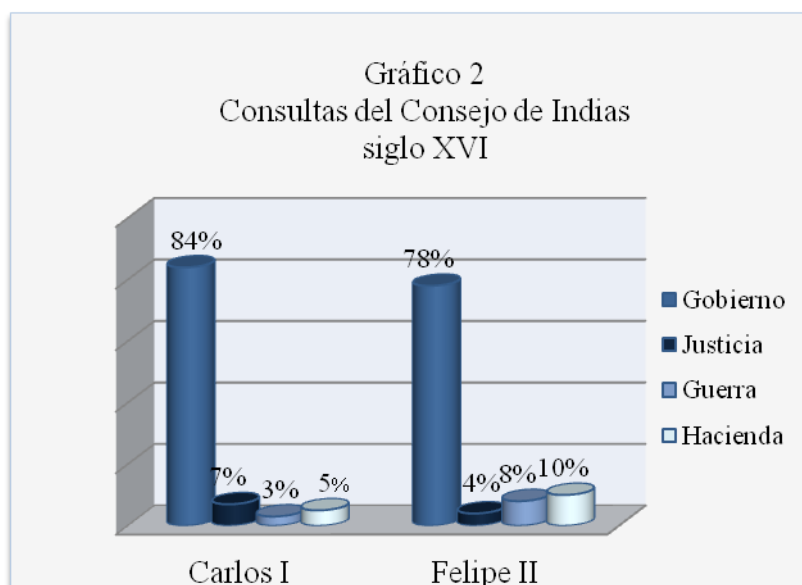
que podían afectar a ambos virreinos o que no admitían cómoda división. La razón principal fue que en esos momentos una parte de dichos libros-registro se encontraban digitalizados, lo que facilitaba nuestra labor de recopilación de datos.

Terminado el proceso de recolección establecimos varios criterios de búsqueda. Para los fines de nuestro estudio nos interesaron dos variables. La primera de ellas relacionada con las materias que consultaba el Consejo de Indias relativas a gobierno, justicia, guerra y hacienda. La otra variable era la resolución real que le recaía a cada una de las consultas remitidas al monarca.

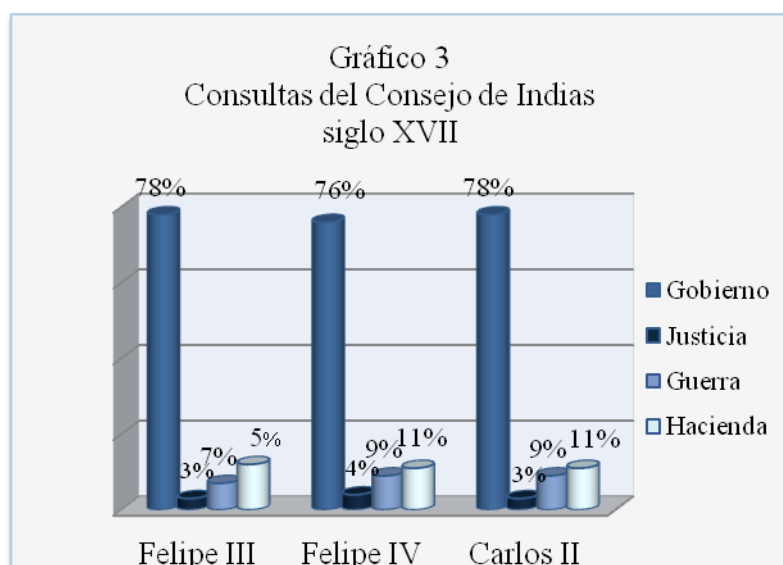
Con el fin de hacer más fácil el manejo de la información y tener a simple vista los datos obtenidos decidimos elaborar una serie de tablas que contuviera las variables a estudiar. Por ello, al final de esta explicación incluimos las tablas de trabajo de las consultas que incluimos en nuestra base de datos. Del contenido de esas tablas obtuvimos los datos que a continuación detallamos.

El reinado de Carlos V fue el más complicado respecto a información. La propia A. Herrera refería que fueron muy pocas las consultas que se pudieron encontrar en el Archivo de Indias, con lo cual, del periodo que abarca los años 1529 a 1556 sólo encontramos 147 consultas, de las cuales la mayor parte de ellas no distinguían las materias, se trataba de una descripción de hechos (Ver tabla 1). Otra de las causas por las que no se encontraron un gran número de consultas fue la inclinación del el Emperador por el despacho a boca, que si bien la respuesta tenía que anotarse en algún documento, muchos de ellos se perdieron. Aún así, logramos establecer que un 84% de ellas tenía relación con materias de gobierno, sólo un 7% se relacionaban con materias de justicia y de hacienda respectivamente, y solo un 3% de las consultas trataban de asuntos militares (ver gráfico 3).

Revisamos 3.619 consultas del reinado de Felipe II, muchas de ellas incluían sólo un asunto por consulta, por ello fue más fácil distinguir las materias sobre las que el monarca era consultado (ver tabla 2). Además en su reinado se promulgaron las Ordenanzas de 1571, mismas que reglamentaron con mayor detalle las materias en las que el Consejo debía remitir consultas, regulación que se llevó a la práctica en relación al contenido y forma de las consultas. De los documentos analizados obtuvimos un 78% de consultas relacionadas a materias de gobierno, el 4% a justicia, y entre un 8% y 10% a asuntos de guerra y hacienda respectivamente (ver grafico 3).



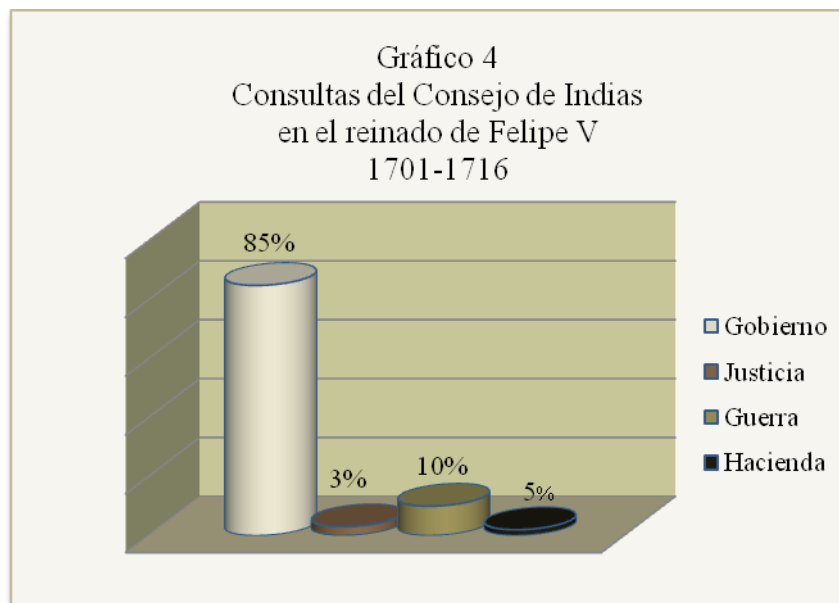
En el análisis de resultados de las consultas que el Consejo de Indias remitió a los Austrias menores algunos datos fueron significativos. Conscientes de que existía una gran variación del número de consultas que se localizaron de cada rey, esto es, 8.250 de Felipe III (ver tabla 4), 16.625 de Felipe IV (ver tabla 5) y 3.793 de Carlos II (ver tabla 6) pensamos que los resultados serían muy diferentes. En realidad fue todo lo contrario (ver gráfico 3). Un promedio de 77% de las consultas pertenecían asuntos relacionados con el gobierno de las Indias, un 3% asuntos de justicia y un 8% entre asuntos de guerra y hacienda.



Quizá estos datos tengan una explicación lógica. La falta de asuntos en materia de guerra se debía a que en 1600 fue creada la Junta de Guerra de Indias, institución encargada de despachar todos los asuntos relacionados con la guerra en Indias. Por otra parte, los asuntos de hacienda de Indias fueron remitidos al Consejo de Hacienda y a varias Juntas temporales de Hacienda y Comercio. Finalmente, la cifra tan pequeña de asuntos de justicia que debía conocer el máximo Tribunal de Indias podía tener dos explicaciones, la primera por el alto costo del proceso lo que provocaba que al Consejo llegaran un número pequeño de asuntos, en este sentido los asuntos más consultados en materia de justicia lo fueron los relativos a las visitas y residencias que realizaba el Consejo a algunas autoridades indianas.

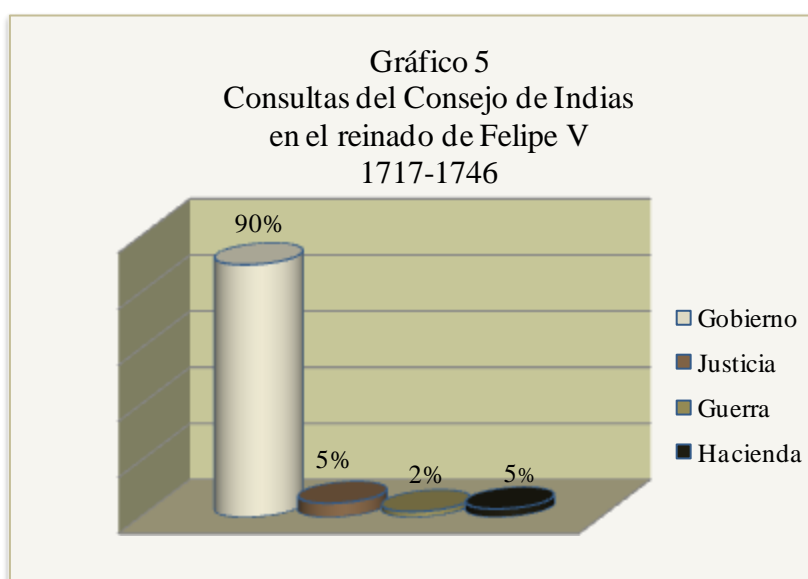
El período de Felipe V, en cambio, decidimos dividirlo en dos etapas, la primera de ellas abarcaría desde los inicios de su reinado hasta 1716. La segunda fase comenzó con la transformación que las competencias del Consejo sufrieron a partir de la expedición de los reales decretos de 1717. Ambas etapas nos aportaron una información importante.

Durante los primeros dieciséis años del reinado del primer Borbón analizamos dentro de la Sección Indiferente General 1.858 consultas (Tabla 6), de las cuales el 85 % de ellas versaban sobre materias de gobierno, sólo un 4% en asuntos de justicia y el resto despachos relacionados con la hacienda y la guerra (gráfico 4). Al no funcionar de manera permanente la Cámara de Indias es fácil comprender el por qué el mayor número de consultas son relativas asuntos de gracia y merced.



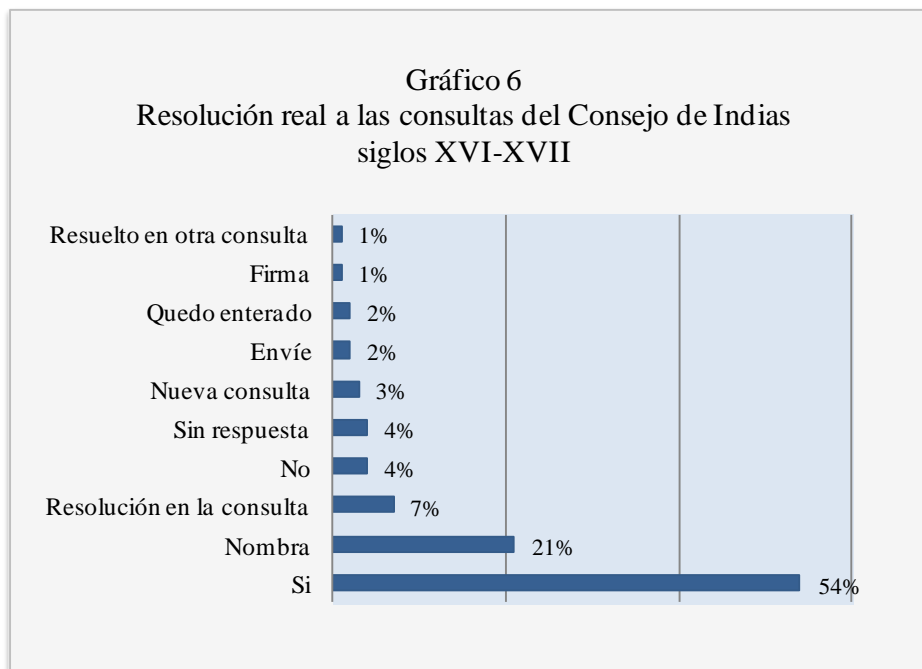
De lo que restaba del reinado de Felipe V, esto es, desde la expedición de los decretos de nueva planta hasta su fallecimiento analizamos 2.741 consultas, en donde el 91 % de su trabajo se abocaba a resolver asuntos de gobierno (tabla 7). Recordemos que hasta 1721 el Consejo era el órgano que proponía al monarca provisiones de oficios de justicia y de gobierno político. Sin embargo, a partir de esa fecha el número de consultas no se reduce, sigue constante como se verá en la eran asuntos relacionados con gracia y merced. Si bien los reales decretos de 1717 alejaron al Consejo del conocimiento de asuntos de hacienda, lo cierto es que encontramos un aumento del número de asuntos relacionados con dicha materia sobre todo porque a partir de 1735 fue competencia de dicho órgano colegiado el conocimiento de todos los asuntos relacionados con la Casa de Moneda.

En la segunda mitad del reinado de Felipe V la ausencia de presidente y gobernador del Consejo se Indias condicionó el número de consultas que encontramos. Así sucedió entre los años de 1727 y 1737 en donde solo se despacharon 600 consultas, lo que significaba un 18% del total de los 29 años. Esta situación justamente nos ha llevado a considerar que el mayor o menor grado de implicación del Consejo en la administración indiana se debía entre otras razones a la figura de su presidente o gobernador. Lo que se comprueba en los años que fue presidente Gregorio Portocarrero, conde de Montijo, en cuyos once años interrumpidos de nombramiento se despacharon más del 50% del total de las consultas entre los años de 1717 y 1746 (gráfico 5). Llama la atención que si bien los decretos de 1717 postraron al Consejo a asuntos de justicia, lo cierto es que de las 4.599 consultas, sólo un 4% eran de esa materia.



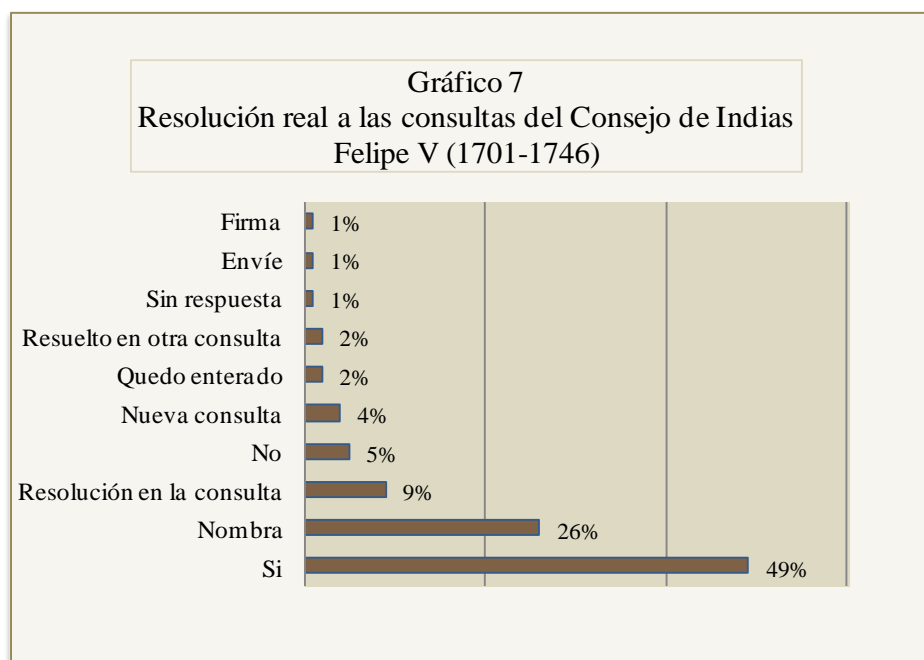
Otro de los elementos que nos pareció importante analizar fue la resolución que a cada una de las consultas daba el monarca. Al efecto establecimos varias posibilidades, la primera y más importante era aquella que el monarca aceptaba la opinión de su Consejo «Si» y la que rechazaba «No»; el resto de resoluciones no significaba que el rey no aprobara la consulta, se trataba simplemente del despacho de asuntos particulares como era el caso de provisión de empleos cuya resolución era la de «Nombro». También había casos que el monarca prefería no responder, responder en otra consulta, solicitar mayor información al propio Consejo o remitir la consulta a otro órgano de la administración (tablas 8-12).

Así, durante los siglos XVI y XVII un 54 % de las consultas que el Consejo remitió fueron aceptadas y únicamente se rechazaron el 4%. El resto, como se ha dicho no suponía que el monarca las desechara la consulta, simplemente se trataba distintos trámites (ver Gráfico 6).



En el caso de las consultas que revisamos de Felipe V la situación no fue muy distinta. Del total de las consultas que le remitieron, el monarca aceptó un 49% de las opiniones de sus consejeros y sólo un 5% fue rechazado (tablas 13-14). Curiosamente la provisión de oficios aumentó de un 5%

respecto a los reinados anteriores, para situarse en un 26% del total de las consultas que le eran remitidas al monarca. (gráfico 7).



**TABLA 1**  
**Consultas del Consejo de Indias en el reinado de Carlos I<sup>1</sup>**

MATERIA	1529	1530	1531	1532	1533	1534	1535	1536	1537	1538	1539	1540	1541	1542	1543	1544	1545	1546	1547
Gobierno	4	7	11	2	7	2	5	2				5	3		3	3			
Justicia																1			
Guerra				2	2														
Hacienda	1				2														
Total	5	7	11	4	11	2	5	2	0	0	0	5	3	0	3	4	0	0	0

MATERIA	1548	1549	1550	1551	1552	1553	1554	1555	1556	TOTALES
Gobierno			3	16	9	2	13	20	7	124
Justicia			1				3	5	1	11
Guerra							1			5
Hacienda				2	1			1		7
Total	0	0	4	18	10	2	17	26	8	147

<sup>1</sup> Datos obtenidos de A. Heredia Herrera, *Catálogo de las Consultas del Consejo de Indias*, Sevilla, 1972, t. I (1529-1591).

TABLA 2  
Consultas del Consejo de Indias en el reinado de Felipe II<sup>2</sup>

MATERIA	1556	1557	1558	1559	1560	1561	1562	1563	1564	1565	1566	1567	1568	1569	1570	1571	1572	1573	1574
Gobierno	22	18	16	16				5	4	6	6		5	12	9	7	4		1
Justicia	3	1							1	1				2					
Guerra									1	1	1				1				
Hacienda			1	3			1			1				1					2
Total	25	19	17	19	0	0	1	5	6	9	7	0	5	15	10	7	4	0	3

MATERIA	1575	1576	1577	1578	1579	1580	1581	1582	1583	1584	1585	1586	1587	1588	1589	1590	1591	1592	1593
Gobierno	27	96	62	122	96	72	97	103	108	130	23	257	36	39	46	126	33	98	54
Justicia		1	1	7	4	13	14	9	7	2		5	1	2	2	4		8	5
Guerra		2	1	4	4	4	8	5	9	1	1	8	2	1		6	3	13	3
Hacienda	4	3		4		3	1	4	8	4		3	1		1	2	1	26	5
Total	31	102	64	137	104	92	120	121	132	137	24	273	40	42	49	138	37	145	67

MATERIA	1594	1595	1596	1597	12/09/1598	TOTALES
Gobierno	143	191	264	265	198	2.817
Justicia	8	12	17	16	16	162
Guerra	19	33	50	52	57	290
Hacienda	37	39	81	59	55	350
Total	207	275	412	392	326	3.619

<sup>2</sup> Datos obtenidos de A. Heredia Herrera, *Catálogo de las Consultas del Consejo de Indias*, Sevilla, 1972, t. I (1529-1591) y t II (1591-1599).



**TABLA 3**  
**Consultas del Consejo de Indias en el reinado de Felipe III<sup>3</sup>**

MATERIA	13/09/1598	1599	1600	1601	1602	1603	1604	1605	1606	1607	1608	1609	1610	1611	1612	1613	1614	1615
Gobierno	47	204	191	167	343	385	396	470	269	471	427	342	174	211	267	249	255	238
Justicia	1	4	12	3	13	13	11	20	5	24	22	6	6	9	3	5	4	8
Guerra	20	36	46	41	67	38	21	24	39	23	24	14	13	21	25	24	14	9
Hacienda	18	36	70	44	95	53	54	56	31	80	85	49	20	45	23	32	33	33
<b>Total</b>	<b>86</b>	<b>280</b>	<b>319</b>	<b>255</b>	<b>518</b>	<b>489</b>	<b>482</b>	<b>570</b>	<b>344</b>	<b>598</b>	<b>558</b>	<b>411</b>	<b>213</b>	<b>286</b>	<b>318</b>	<b>310</b>	<b>306</b>	<b>288</b>

MATERIA	1616	1617	1618	1619	1620	20.03.1621	TOTALES
Gobierno	335	299	258	200	233	29	6.460
Justicia	9	14	9	1	10	3	215
Guerra	20	27	14	24	9	3	596
Hacienda	20	17	35	18	29	3	979
<b>Total</b>	<b>384</b>	<b>357</b>	<b>316</b>	<b>243</b>	<b>281</b>	<b>38</b>	<b>8.250</b>

<sup>3</sup> Datos obtenidos de A. Heredia Herrera, *Catálogo de las Consultas del Consejo de Indias*, Sevilla, 1972, t II (1591-1599); 1983 t. 1 (1600-1604) ; 1984 t.2 (1605-1609); t. 3 (1610-1616) y 1985 t.4 (1617-1625).

TABLA 4  
Consultas del Consejo de Indias en el reinado de Felipe IV<sup>4</sup>

MATERIA	21.03.1621	1622	1623	1624	1625	1626	1627	1628	1629	1630	1631	1632	1633	1634	1635	1636	1637	1638
Gobierno	61	131	119	115	133	253	225	207	277	304	256	250	250	330	354	256	292	308
Justicia	9	16	9	9	6	15	17	12	14	12	13	8	13	12	18	19	6	15
Guerra	1	17	19	1	6	41	29	14	32	51	48	44	41	43	108	60	25	51
Hacienda	14	12	25	17	15	45	59	50	67	33	61	35	45	67	91	56	58	54
Total	85	176	172	142	160	354	330	283	390	400	378	337	349	452	571	391	381	428

MATERIA	1639	1640	1641	1642	1643	1644	1645	1646	1647	1648	1649	1650	1651	1652	1653	1654	1655	1656	1647
Gobierno	316	305	267	219	242	221	333	287	393	297	293	257	342	330	409	365	212	243	303
Justicia	11	5	12	7	17	21	12	13	23	13	16	21	25	17	16	13	12	15	19
Guerra	60	89	68	40	50	26	20	18	24	2	9	7	6	26	29	23	37	37	45
Hacienda	46	28	35	30	22	22	18	34	42	26	23	34	69	78	60	46	32	19	34
Total	433	427	382	296	331	290	383	352	482	338	341	319	442	451	514	447	293	314	401

MATERIA	1658	1659	1660	1661	1662	1663	1664	1664	TOTALES
Gobierno	319	369	449	265	376	452	452	177	12.614
Justicia	16	7	11	11	19	23	22	9	629
Guerra	34	34	29	39	37	58	43	20	1.541
Hacienda	64	53	37	32	33	52	54	24	1.851
Total	433	463	526	347	465	585	571	230	16.635

<sup>4</sup> Datos obtenidos de A. Heredia Herrera, *Catálogo de las Consultas del Consejo de Indias*, Sevilla, 1985, t.4 (1617-1625); 1987, t.5 (1626-1630); 1988, t.6 (1631-1636); 1990, t.7 (1637-1643); 1992, t.8 (1644-1650); t.9 (1651-1656); 1993, t.10 (1657-1661); 1994, t.11 (1662-1668).

**TABLA 5**  
**Consultas del Consejo de Indias en algunos años del reinado de Carlos II<sup>5</sup>**

MATERIA	17.09.1665	1666	1667	1668	1669	1670	1671	1672	1673	1674	1675	TOTALES
Gobierno	75	242	229	232	247	300	383	361	321	323	257	2.970
Justicia	1	3	3	9	2	15	6	6	6	9	10	70
Guerra	3	24	22	8	40	21	54	61	66	64	84	447
Hacienda	11	31	21	20	21	35	33	39	38	30	27	306
Total	90	300	275	269	310	371	476	467	431	426	378	3.793

---

<sup>5</sup> Datos obtenidos de A. Heredia Herrera, *Catálogo de las Consultas del Consejo de Indias*, Sevilla, 1994, t.11 (1662-1668) y 1995 t. 12 (1669-1676).

**TABLA 6**  
**Consultas del Consejo de Indias en el reinado de**  
**Felipe V**  
**(1700-1716)<sup>6</sup>**

MATERIA	1700	1701	1702	1703	1704	1705	1706	1707	1708	1709	1710	1711	1712	1713	1714	1715	1716	TOTALES
Gobierno			44	226	194	103	59	66	55	69	85	89	103	97	90	142	164	1.586
Justicia			1	8	5	6		2	1		7	6	1	1	4	10	2	54
Guerra			14	38	24	5	36	22	33	7	3	4		1				187
Hacienda			3	15	7	2			1	2					1			31
Total	0	0	62	287	230	116	95	90	90	78	95	99	104	99	95	152	166	1.858

<sup>6</sup> Datos obtenidos A.G.I., Indiferente General, 553A, L. 3 (03.08.1702 - 22.12.1705) y L. 4 (01.01.1703 - 30.12.1711); 554, L. 3 (01.01.1712 - 13.01.1740); 569, L.7 (26.02.1713 - 14.07.1713) y L. 8 (31.07.1713 - 22.01.1714).

**TABLA 7**  
**Consultas del Consejo de Indias en el reinado de**  
**Felipe V**  
**(1717-1746)<sup>7</sup>**

MATERIA	1717	1718	1719	1720	1721	1722	1723	1724	1725	1726	1727	1728	1729	1730	1731	1732	1733	1734
Gobierno	78	98	41	7	47	31	57	41	44	31	30	45	38	49	45	50	52	137
Justicia	8	5					1	1				2						6
Guerra																1		1
Hacienda																		9
Total	86	103	41	7	47	31	58	42	44	31	30	47	38	49	45	51	52	153

MATERIA	1735	1736	1737	1738	1739	1740	1741	1742	1743	1744	1745	1746	TOTALES
Gobierno	128	192	170	208	191	139	97	125	72	106	84	54	2.487
Justicia	5	12	6	4	9	1	6	10	12	13	10	13	124
Guerra	5	2	6	2	6	8	1	4	2	2	2	2	44
Hacienda	30	15	7	2	5	2		6	6	1	2	1	86
Total	168	221	189	216	211	150	104	145	92	122	98	70	2.741

<sup>7</sup> Datos obtenidos A.G.I., Indiferente General, 555A, L. 1 16.04.1734 - 11.08.1738); 555B, L. 3 (01.01.1736 - 08.02.1739) y L. 4 (06.04.1739 - 21.10.1740); 556, L1 (18.03.1738 - 11.06.1746) y L. 2 (25.10.1741 - 29.11.1757); 557, L. 6 (12.1742 06.- 07.1745); 557, L.7 (28.03.1744 - 06.11.1747); 558, L. 1 (17.05.1746 - 08.08.1752) y L. 10(15.02.1745 - 03.12.1761).

TABLA 8  
Resolución real a las consultas del Consejo de Indias en el reinado de Carlos I<sup>8</sup>

RESOLUCIÓN REAL	1529	1530	1531	1532	1533	1534	1535	1536	1537	1538	1539	1540	1541	1542	1543	1544	1545	1546	1547
Si	2	1	2	1	3		1					2	1						
No																			
Nombra																			
Envíe																			
Resolución en la consulta	1	4	9	3	3		2	1				3			3	1			
Nueva consulta																			
Quedo enterado																			
Sin respuesta	2	2			5	2	2	1					2			3			
Firma																			
Resuelto en otra consulta																			
Total	5	7	11	4	11	2	5	2	0	0	0	5	3	0	3	4	0	0	0

RESOLUCIÓN REAL	1548	1549	1550	1551	1552	1553	1554	1555	1556	TOTALES
Si					1		2		2	18
No										0
Nombra										0
Envíe							1			1
Resolución en la consulta				4	4		4		2	44
Nueva consulta							1		1	2
Quedo enterado										0
Sin respuesta			4	14	5	2	9	26	3	82
Firma										0
Resuelto en otra consulta										0
Total	0	0	4	18	10	2	17	26	8	147

<sup>8</sup> Datos obtenidos de A. Heredia Herrera, *Catálogo de las Consultas del Consejo de Indias*, Sevilla, 1972, t. I (1529-1591).

**TABLA 9**  
**Resolución real a las consultas del Consejo de Indias en el reinado de Felipe II<sup>9</sup>**

RESOLUCIÓN REAL	1556	1557	1558	1559	1560	1561	1562	1563	1564	1565	1566	1567	1568	1569	1570	1571	1572	1573	1574
Si	7	8	7	5				1		4	2		4	8	3	2	2		2
No				2															
Nombra																			
Envíe	1																		
Resolución en la consulta	8	5	3	1					1	2					2	3			
Nueva consulta	2	1	1	1															
Quedo enterado		1								1					1				
Sin respuesta	7	4	6	10			1	4	5	2	5		1	7	3	2	2		1
Firma																			
Resuelto en otra consulta															1				
Total	25	19	17	19	0	0	1	5	6	9	7	0	5	15	10	7	4	0	3

RESOLUCIÓN REAL	1575	1576	1577	1578	1579	1580	1581	1582	1583	1584	1585	1586	1587	1588	1589	1590	1591	1592	1593
Si	15	63	47	105	62	64	71	69	90	114	14	192	32	31	37	117	17	71	18
No		2		1	1	2	6	5	2	3		9			1			4	6
Nombra	6	19	11		20	18	20	22	16	10	7	45	5	5	7	10	17	13	10
Envíe					2	1	3	6					1	1			1	4	3
Resolución en la consulta		5	2	8	4	6	15	12	20	8	3	15			2	2		15	11
Nueva consulta	2	2	3	10	6	1	4	6	2				1	1				21	10
Quedo enterado		6		4	4				2	2		6			1			6	2
Sin respuesta	1			1	1		1	1				6	1	4	1	9	2	7	5
Firma																			
Resuelto en otra consulta	7	5	1	8	4													4	2
Total	31	102	64	137	104	92	120	121	132	137	24	273	40	42	49	138	37	145	67

<sup>9</sup> Datos obtenidos de A. Heredia Herrera, *Catálogo de las Consultas del Consejo de Indias*, Sevilla, 1972, t. I (1529-1591) y t II (1591-1599).

RESOLUCIÓN REAL	1594	1595	1596	1597	12/09/1598	TOTALES
Si	111	141	226	186	170	2.118
No	13	17	17	17	5	113
Nombra	17	21	47	50	27	423
Envie	13	17	17	20	28	118
Resolución en la consulta	12	15	31	42	30	283
Nueva consulta	22	27	40	38	37	238
Quedo enterado	14	20	15	15	13	113
Sin respuesta	4	9	13	17	14	157
Firma						0
Resuelto en otra consulta	1	8	6	7	2	56
Total	207	275	412	392	326	3.619



**TABLA 10**  
**Resolución real a las consultas del Consejo de Indias en el reinado de Felipe III<sup>10</sup>**

RESOLUCIÓN REAL	13/09/1598	1599	1600	1601	1602	1603	1604	1605	1606	1607	1608	1609	1610	1611	1612	1613	1614	1615
Si	49	115	162	94	267	315	284	382	202	414	357	293	115	166	226	207	198	196
No	1	6	22	9	17	34	15	10	7	16	22	7	6	11	9	2	13	8
Nombra	1	71	23	64	66	30	68	86	54	61	90	52	51	61	33	49	59	37
Envíe	14	18	25	9	28	19	19	13	13	17	12	2	7	8	4	4	3	7
Resolución en la consulta	5	22	32	19	25	19	27	27	19	27	20	11	1	7	5	10	7	5
Nueva consulta	8	8	16	21	41	25	25	12	21	20	19	5	5	5	12	6	8	10
Quedo enterado	2	19	17	16	34	19	16	22	16	16	13	13	12	10	13	10	10	17
Sin respuesta	3	6	3	8	12	5	7	16	5	19	12	20	4	14	7	10	3	2
Firma	3	9	7	4	12	10	5	1	4	7	11	6	6	1	8	8	2	3
Resuelto en otra consulta	0	6	12	11	16	13	16	1	3	1	2	2	6	3	1	4	3	3
Total	86	280	319	255	518	489	482	570	344	598	558	411	213	286	318	310	306	288

RESOLUCIÓN REAL	1616	1617	1618	1619	1620	20.03.1621	TOTALES
Si	222	166	200	135	129	17	4.911
No	17	6	6	7	1	0	252
Nombra	99	132	58	74	114	12	1.445
Envíe	2	8	4	4	7	1	248
Resolución en la consulta	5	5	4	5	3	3	313
Nueva consulta	6	8	3	2	6	2	294
Quedo enterado	17	17	21	5	8	1	344
Sin respuesta	2	4	9	2	4	1	178
Firma	7	3	2	6	1	0	126
Resuelto en otra consulta	7	8	9	3	8	1	139
Total	384	357	316	243	281	38	8.250

<sup>10</sup> Datos obtenidos de A. Heredia Herrera, *Catálogo de las Consultas del Consejo de Indias*, Sevilla, 1972, t II (1591-1599); 1983 t. 1 (1600-1604) ; 1984 t.2 (1605-1609); t. 3 (1610-1616) y 1985 t.4 (1617-1625).

**TABLA 11**  
**Resolución real a las consultas del Consejo de Indias en el reinado de Felipe IV<sup>11</sup>**

RESOLUCIÓN REAL	21.03.1621	1622	1623	1624	1625	1626	1627	1628	1629	1630	1631	1632	1633	1634	1635	1636	1637	1638
Si	49	66	72	61	79	174	194	158	181	209	244	193	198	182	275	208	175	189
No	2	8	13	8	9	14	22	25	30	22	16	19	17	48	34	28	20	27
Nombra	16	64	54	47	49	117	67	70	95	92	60	61	59	109	98	55	89	91
Envíe	0	0	4	0	2	5	0	2	8	8	3	9	12	13	17	9	8	7
Resolución en la consulta	2	10	6	4	10	9	9	8	24	20	17	16	16	37	74	40	42	45
Nueva consulta	2	9	1	4	3	12	14	9	9	16	4	13	13	17	19	14	17	22
Quedo enterado	10	8	6	7	3	5	9	5	13	13	21	7	10	18	19	12	8	13
Sin respuesta	1	5	6	7	3	3	7	4	12	7	5	13	15	16	23	11	16	25
Firma	2	4	5	4	2	11	6	1	14	6	6	3	3	10	7	6	1	5
Resuelto en otra consulta	1	2	5	0	0	4	2	1	4	7	2	3	6	2	5	8	5	4
Total	85	176	172	142	160	354	330	283	390	400	378	337	349	452	571	391	381	428

RESOLUCIÓN REAL	1639	1640	1641	1642	1643	1644	1645	1646	1647	1648	1649	1650	1651	1652	1653	1654	1655	1656	1657
Si	191	212	177	142	179	153	170	178	246	150	186	143	179	230	253	218	148	149	221
No	26	25	13	16	24	7	14	19	26	13	23	19	27	16	25	12	12	12	7
Nombra	91	69	62	45	56	75	126	100	96	106	58	101	151	87	131	145	78	96	94
Envíe	10	14	12	7	3	1	7	2	2	0	3	5	6	11	6	10	3	8	8
Resolución en la consulta	39	41	58	35	31	22	27	29	60	30	33	25	43	58	39	22	24	18	29
Nueva consulta	27	8	6	13	9	10	10	10	15	5	9	3	4	7	10	2	1	8	3
Quedo enterado	10	6	13	5	7	9	7	2	13	10	11	8	12	18	23	22	13	12	25
Sin respuesta	26	30	24	23	7	8	13	2	10	13	12	10	9	16	18	8	11	12	14
Firma	3	10	8	5	12	3	6	8	9	7	3	2	5	3	4	8	3	5	
Resuelto en otra consulta	10	12	9	5	3	2	3	2	5	4	3	3	6	5	5				
Total	433	427	382	296	331	290	383	352	482	338	341	319	442	451	514	447	293	314	401

<sup>11</sup> Datos obtenidos de A. Heredia Herrera, *Catálogo de las Consultas del Consejo de Indias*, Sevilla, 1985, t.4 (1617-1625); 1987, t.5 (1626-1630); 1988, t.6 (1631-1636); 1990, t.7 (1637-1643); 1992, t.8 (1644-1650); t.9 (1651-1656); 1993, t.10 (1657-1661); 1994, t.11 (1662-1668).

RESOLUCIÓN REAL	1658	1659	1660	1661	1662	1663	1664	16.09.1665	TOTALES
Si	238	263	270	182	249	320	319	116	8.389
No	12	18	10	4	22	13	18	5	800
Nombra	79	76	116	73	103	155	143	52	3.857
Envíe	3	5	2	1	4	8	7	2	249
Resolución en la consulta	55	49	40	28	31	33	34	23	1.345
Nueva consulta		4	8	5	8	10	9	4	406
Quedo enterado	26	19	30	16	13	24	12	9	562
Sin respuesta	14	21	35	32	28	16	18	11	620
Firma	4	2	8	3	2	4	3	3	229
Resuelto en otra consulta	2	6	7	3	5	2	8	5	178
Total	433	463	526	347	465	585	571	230	16.635

TABLA 12  
Resolución real a las consultas del Consejo de Indias en algunos años del reinado de Carlos II<sup>12</sup>

RESOLUCIÓN REAL	17.09.1665	1666	1667	1668	1669	1670	1671	1672	1673	1674	1675	TOTALES
Si	37	161	136	161	139	197	227	222	243	207	214	1.944
No	1	10	18	7	12	31	31	21	24	35	24	214
Nombra	32	78	93	66	113	93	98	134	78	99	53	937
Envíe	0	3	3	6	5	8	7	2	4	5	7	50
Resolución en la consulta	12	26	5	8	15	16	50	44	41	37	31	285
Nueva consulta	3	3	3	4	2	5	18	4	6	14	10	72
Quedo enterado	2	3	9	1	12	13	21	26	16	15	20	138
Sin respuesta	2	15	8	15	10	5	19	11	10	7	14	116
Firma	0	0	0	0	0	2	4	0	2	1	0	9
Resuelto en otra consulta	1	1	0	1	2	1	1	3	7	6	5	28
Total	90	300	275	269	310	371	476	467	431	426	378	3.793

<sup>12</sup> Datos obtenidos de A. Heredia Herrera, *Catálogo de las Consultas del Consejo de Indias*, Sevilla, 1994, t.11 (1662-1668) y 1995 t. 12 (1669-1676).

**TABLA 13**  
**Resolución real a las consultas del Consejo de Indias en el reinado de Felipe V (1700-1716)<sup>13</sup>**

RESOLUCIÓN REAL	1700	1701	1702	1703	1704	1705	1706	1707	1708	1709	1710	1711	1712	1713	1714	1715	1716	TOTALES
Si			34	128	132	64	53	45	55	41	39	45	37	57	46	61	75	912
No			3	21	18	16	6	5	2	3	7	6	3	5	2	9	10	116
Nombra			9	58	28	7	14	12	15	13	22	32	45	21	29	46	47	398
Envíe				4	2											3	2	11
Resolución en la consulta			3	30	27	19	10	12	8	6	7	5	9	7	10	19	20	192
Nueva consulta			5	21	9	3	6	5	6	8	7	6	6	6	7	10	9	114
Quedo enterado			5	18	13	7	6	5	4	3	8	5	4	3	1	4	3	89
Sin respuesta			3	2	1			6		4	5							21
Firma																		
Resuelto en otra consulta				5								7	4	3	10	11	5	45
Total	0	0	62	287	230	116	95	90	90	78	95	99	104	99	95	152	166	1898

<sup>13</sup> Datos obtenidos A.G.I., Indiferente General, 553A, L. 3 (03.08.1702 - 22.12.1705) y L. 4 (01.01.1703 - 30.12.1711); 554, L. 3 (01.01.1712 - 13.01.1740); 569, L.7 (26.02.1713 - 14.07.1713) y L. 8 (31.07.1713 - 22.01.1714).

TABLA 14  
Resolución real a las consultas del Consejo de Indias en el reinado de Felipe V (1717-1746)<sup>14</sup>

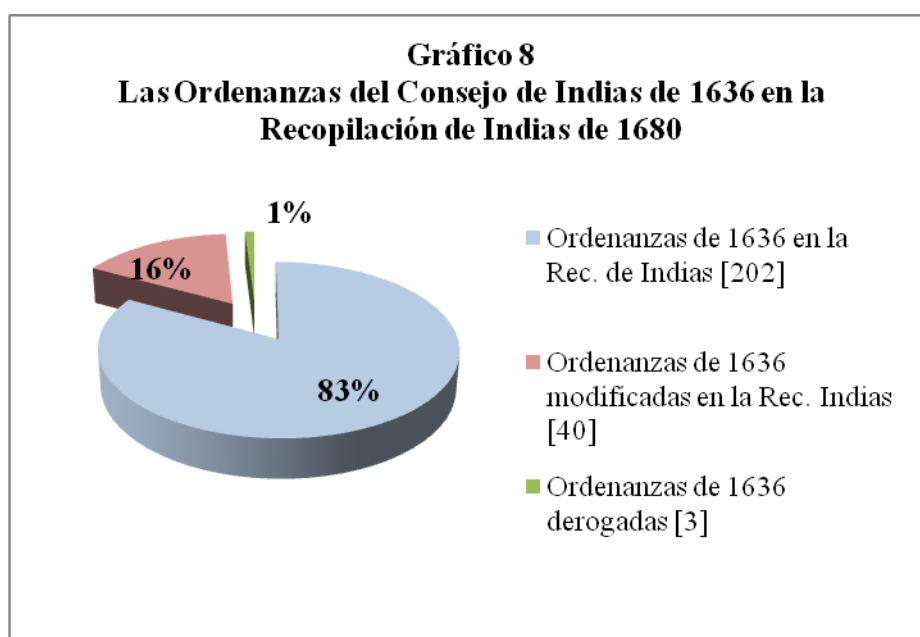
RESOLUCIÓN REAL	1717	1718	1719	1720	1721	1722	1723	1724	1725	1726	1727	1728	1729	1730	1731	1732	1733	1734	1735
Si	47	34	22	1	11	6	13	13	7	12	6	15	8	7	15	22	19	76	94
No	2	2	2		1	1	4	1	3					1	2	3	2	9	14
Nombra	26	56	11	2	31	21	38	27	31	19	21	31	28	40	27	22	27	44	34
Envíe	1										1						1	1	1
Resolución en la consulta	3	7	3	3	1	2	2	1	3							2	1	16	15
Nueva consulta	4	3	2	1	3		1				1	1	2	1		1	2	4	2
Quedo enterado	2																	1	2
Sin respuesta																			
Resuelto en otra consulta	1	1	1			1	58	42	44	31	30	47	38	49	45	51	52	153	168
Total	86	103	41	7	47	31													

RESOLUCIÓN REAL	1736	1737	1738	1739	1740	1741	1742	1743	1744	1745	1746	TOTALES
Si	119	100	125	104	89	60	84	55	75	69	43	1.351
No	11	12	10	5	6	18	17	2	1	2	1	132
Nombra	46	40	40	62	6	9	20	17	19	6	14	815
Envíe	1						2		1			9
Resolución en la consulta	20	13	15	9	23	11	18	11	8	8	8	203
Nueva consulta	6	7	16	3	6	1	3	1	3	5	3	82
Quedo enterado	2	1	2	4	1					6	1	22
Sin respuesta	4	2	2	15	15		1	6	10			43
Resuelto en otra consulta	16	12	6	9	4	5			5	2		74
Total	221	189	216	211	150	104	145	92	122	98	70	2.741

<sup>14</sup> Datos obtenidos A.G.I., Indiferente General, 555A, L. 1 16.04.1734 - 11.08.1738); 555B, L. 3 (01.01.1736 - 08.02.1739) y L. 4 (06.04.1739 - 21.10.1740); 556, L1 (18.03.1738 - 11.06.1746) y L. 2 (25.10.1741 - 29.11.1757); 557, L. 6 (12.1742 06.- 07.1745); 557, L.7 (28.03.1744 - 06.11.1747); 558, L. 1 (17.05.1746 - 08.08.1752) y L. 10(15.02.1745 - 03.12.1761).

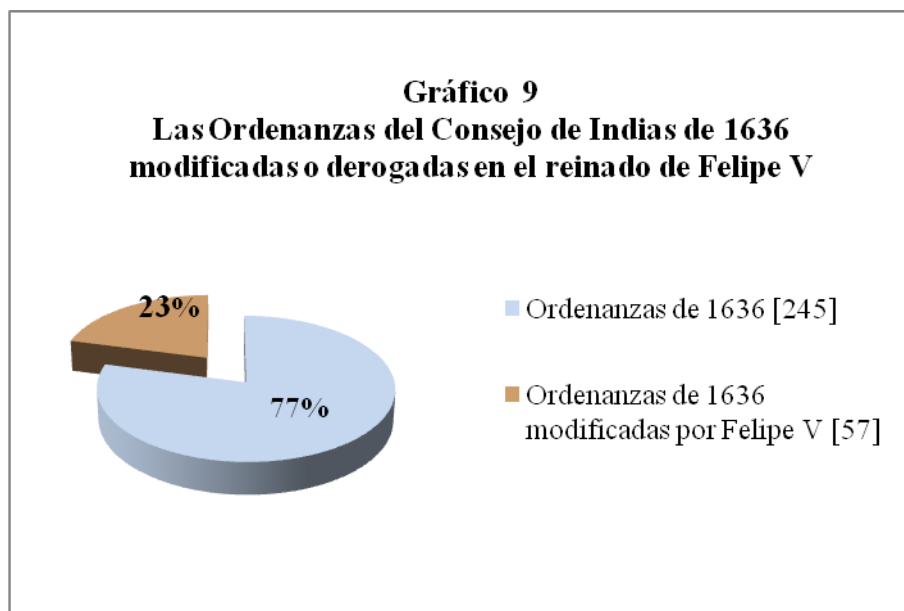
## 2. La vigencia de las Ordenanzas de 1636 ente los años de 1701 a 1746.

A fin de contar con datos fiables que nos permitieran comprobar la vigencia de las Ordenanzas de 1636 en el reinado de Felipe V, elaboramos una tabla en donde enlistamos las 245 disposiciones que formaban parte de las Ordenanzas de 1636 (Tabla 15). Tras un minucioso cotejo de aquellas ordenanzas que fueron integradas al libro segundo de la Recopilación de Indias nos encontramos que únicamente 3 de las 245 Ordenanzas no pasaron a dicha Recopilación y 40 disposiciones fueron modificadas en su contenido. Por tanto, sólo un 18 % de las disposiciones que regulaban la organización y funcionamiento del Consejo de Indias variaron en esos 44 años de vigencia (Gráfico 8).



Pero nuestra hipótesis debía centrarse en el reinado del primer Borbón, por ello en la siguiente columna incluimos los decretos que a nuestro juicio y según las fuentes de las que disponíamos modificaron o derogaron algunas de las Ordenanzas de 1636. Al terminar el estudio de un gran número de decretos nos encontramos que básicamente fueron 57 las disposiciones que

modificaron el contenido de las mencionadas Ordenanzas lo que en términos porcentuales equivaldría a un 23% de las 245 (Gráfico 9).





**TABLA 15**

**Las Ordenanzas del Consejo de Indias de 1636 que pasaron a la Recopilación de Indias de 1680 y que fueron modificadas por diversos decretos promulgados por Felipe V.**

<b>Ordenanzas 1636</b>	<b>Rec. Ind.</b>	<b>Sólo Rec. Ind.</b>	<b>Principales modificaciones (1701-1746)</b>
1	2.2.1		Reales decretos 20.11.1717 <sup>1</sup> Real decreto 28.01.1738 <sup>2</sup>
2	2.2.2		Reales decretos 20.11.1717 <sup>3</sup>
3	2.2.3		
4	2.2.4		Real decreto 08.05.1707 <sup>4</sup>
5	2.2.5		
6	2.2.6		
7	2.2.7		
8	2.2.8		
9	2.2.9		
10	2.2.10		Real decreto 15.06.1715 <sup>5</sup>
11	2.2.11		
12	2.2.12		Real decreto 20.11.1717 <sup>6</sup>
13	2.2.13		
14	2.2.14		
15	2.2.15		Real decreto 20.11.1717 <sup>7</sup>
16	2.2.16		
17	2.2.17		
18	2.2.18		
19	2.2.19		
20	2.2.20		
21	2.2.21		
22	2.2.22		Real decreto 29.11.1706 <sup>8</sup>
23	2.2.23		
24	2.2.24		

<sup>1</sup> A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 99 v -106r, 829, ff. 106r -107v y 829, ff. 107v-108v.

<sup>2</sup> A.G.I., Indiferente General, 543 L. 3, ff. 275-278.

<sup>3</sup> A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 99 v -106r y ff. 106r -107v.

<sup>4</sup> A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 57r -57v.

<sup>5</sup> Autos Acordados de la Nueva Rec. 2.4.73.

<sup>6</sup> A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 106r -107v.

<sup>7</sup> A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 106r -107v.

<sup>8</sup> A.G.I., Indiferente General, 583, L. 2, ff. 40-41.

<b>Ordenanzas 1636</b>	<b>Rec. Ind.</b>	<b>Sólo Rec. Ind.</b>	<b>Principales modificaciones (1701-1746)</b>
25	2.2.25		
26	2.2.26		
27	2.2.27		Real decreto 27.12.1738 <sup>1</sup>
28	2.2.28		Real decreto 20.11.1717 <sup>2</sup> Real decreto 11.09.1717 <sup>3</sup>
29	2.2.29		Real decreto 26.09.1736 <sup>4</sup>
30	2.2.30		Real decreto 09.06.1715 <sup>5</sup>
31	2.2.31		
32	2.2.32		
33	2.2.33		Real decreto 10.08.1746 <sup>6</sup>
34	2.2.34		
35	2.2.35		Real decreto 31.03.1720 <sup>7</sup>
36	2.2.36		Real decreto 20.01.1717 <sup>8</sup>
37	2.2.37		
38	2.2.38		Real decreto 11.09.1717 <sup>9</sup>
39	2.2.39		Real decreto 04.09.1726 <sup>10</sup>
40	2.2.40		
41	2.2.41		
42	2.2.42		
43	2.2.43		
44	2.2.44		
45	2.2.45		
46	2.2.46		
47	2.2.47		
48	2.2.48		
		2.2.49	
		2.2.50	
49	2.2.51		Real decreto 11.09.1717 <sup>11</sup>
50	2.2.52		Real decreto 19.08.1717 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> A.G.I., Indiferente General, 543 L. 3, ff. 461-462.

<sup>2</sup> A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 107v-108v.

<sup>3</sup> A.G.I., Indiferente General 829, ff. 113r- 114r.

<sup>4</sup> A.G.I., Indiferente General, 652.

<sup>5</sup> M. J. de Ayala, *Notas a la Recopilación...*, p. 44.

<sup>6</sup> A.H.N., Cedula de Ayala, t. 12, f. 78, n 3.

<sup>7</sup> A.G.I., Indiferente General, 542 L. 1, f. 152.

<sup>8</sup> A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 99v-106r.

<sup>9</sup> A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 107v-108v.

<sup>10</sup> A.H.N., Colección de Consultas de Ayala, Códice 755, f. 245, n 71.

<sup>11</sup> A.G.I., Indiferente General, 829 ff. 107v-108v.

<b>Ordenanzas 1636</b>	<b>Rec. Ind.</b>	<b>Sólo Rec. Ind.</b>	<b>Principales modificaciones (1701-1746)</b>
51	2.2.53		Real decreto 12.10.1703 <sup>2</sup>
<b>52</b>	No pasó		
53	2.2.54		
54	2.2.55		
		2.2.56	
55	2.2.57		
56	2.2.58		
57	2.2.59		Real decreto 26.01.1736 <sup>3</sup>
58	2.2.60		Real decreto 20.01.1717 <sup>4</sup>
59	2.2.61		
60	2.2.62		Real decreto 10.01.1742 <sup>5</sup>
61	2.2.63		
62	2.2.64		
		2.2.65	
63	2.2.66		
64	2.2.67		
65	2.2.68		
66	2.2.69		
67	2.2.70		
68	2.2.71		
		2.2.72	
		2.2.73	
		2.2.74	
		2.2.75	
		2.2.76	
		2.2.77	
		2.2.78	
		2.2.79	
		2.2.80	
		2.2.81	
		2.2.82	
69	2.3.1.		
70	2.3.2		
71	2.3.3		

<sup>1</sup> A.G.I., Indiferente General, 542, L. 2, f. 71.

<sup>2</sup> M. J. de Ayala, *Notas a la Recopilación...*, p. 52.

<sup>3</sup> A.H.N., Colección de Consultas de Ayala, Códice 753, f. 132, n 85.

<sup>4</sup> A.G.I., Indiferente General, 829 ff. 107v-108v.

<sup>5</sup> M. J. de Ayala, *Notas a la Recopilación...*, p. 55.

<b>Ordenanzas 1636</b>	<b>Rec. Ind.</b>	<b>Sólo Rec. Ind.</b>	<b>Principales modificaciones (1701-1746)</b>
72	2.3.4		
73	2.3.5		Real decreto 20.01.1717 <sup>1</sup>
74	2.3.6		
75	2.3.7		
76	2.3.8		
77	2.3.9		
78	2.3.10		Real decreto 18.10.1722 <sup>2</sup>
79	2.3.11		
80	2.3.12		
81	2.3.13		Real decreto 09.12.1703 <sup>3</sup>
82	2.3.14		Real decreto 24.02.1701 <sup>4</sup>
83	2.3.15		
84	2.3.16		
85	2.3.17		
86	2.3.18		Real decreto 20.01.1717 <sup>5</sup>
87	2.3.19		
88	2.3.20		
		2.3.21	
		2.3.22	
		2.3.23	
89	2.4.1		Real decreto de 10.11.1713 <sup>6</sup> Real decreto de 05.08.1715 <sup>7</sup>
90	2.4.2		
91	2.4.3		Real decreto 01.01.1706 <sup>8</sup>
92	2.4.4		
93	2.4.5		
94	2.4.6		
95	2.4.7		
96	2.4.8		
97	2.4.9		
98	2.5.1		Real decreto 15.08.1715 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> A.G.I., Indiferente General, 829 ff. 107v-108v.

<sup>2</sup> A.H.N., Cedula de Ayala t. 17, n 328, f. 307.

<sup>3</sup> A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 57v-58r.

<sup>4</sup> A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 53r-53v.

<sup>5</sup> A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 99 v-106r.

<sup>6</sup> A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 58v-62v.

<sup>7</sup> A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 90r-97v.

<sup>8</sup> A.G.I., Indiferente General, 583 L. 2, ff. 30-31.

<b>Ordenanzas 1636</b>	<b>Rec. Ind.</b>	<b>Sólo Rec. Ind.</b>	<b>Principales modificaciones (1701-1746)</b>
99	2.5.2		Real decreto 15.08.1715 <sup>2</sup>
100	2.5.3		
101	2.5.4		
102	2.5.5		
103	2.5.6		
104	2.5.7		
105	2.5.8		
106	2.5.9		
107	2.5.10		
108	2.5.11		
109	2.5.12		
110	2.5.13		Real decreto 20.01.1717 <sup>3</sup>
111	2.5.14		
112	2.5.15		Real decreto 20.01.1717 <sup>4</sup> Real decreto 30.04.1717 <sup>5</sup>
113	2.5.16		
114	2.6.1		Real decreto 20.01.1717 <sup>6</sup> Real decreto 19.12.1719 <sup>7</sup> Real decreto 24.08.1742 <sup>8</sup>
115	2.6.2		Real decreto 20.01.1717 <sup>9</sup>
116	2.6.3		Real decreto 20.01.1717 <sup>10</sup>
117	2.6.4		
118	2.6.5		
119	2.6.6		Real decreto 20.01.1739 <sup>11</sup>
120	2.6.7		
121	2.6.8		
122	2.6.9		
123	2.6.10		
124	2.6.11		

<sup>1</sup> A.H.N., Cedula de Ayala, t. 13, f. 7, n 6.

<sup>2</sup> Loc. Cit.

<sup>3</sup> A.H.N., Cedula de Ayala, t. 8, f. 74, n 114.

<sup>4</sup> A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 109r-110v.

<sup>5</sup> A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 113r-114r.

<sup>6</sup> A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 99 v-106r.

<sup>7</sup> A.G.I., Indiferente General, 918.

<sup>8</sup> Loc. Cit.

<sup>9</sup> A.G.I., Indiferente General, 829 ff. 107v-108v.

<sup>10</sup> Loc. Cit.

<sup>11</sup> A.G.I., Indiferente General, 543 L. 3, ff. 468r-470v.

<b>Ordenanzas 1636</b>	<b>Rec. Ind.</b>	<b>Sólo Rec. Ind.</b>	<b>Principales modificaciones (1701-1746)</b>
125	2.6.12		
126	2.6.13		
127	2.6.14		
128	2.6.15		
129	2.6.16		
130	2.6.17		
131	2.6.18		
132	2.6.19		
133	2.6.20		
134	2.6.21		
135	2.6.22		
136	2.6.23		
137	2.6.24		
138	2.6.25		
139	2.6.26		
140	2.2.27		
141	2.6.28		Real decreto 20.01.1717 <sup>1</sup> Real decreto 30.04.1717 <sup>2</sup>
142	2.6.29		
143	2.6.30		
144	2.6.31		
145	2.6.32		
146	2.6.33		
147	2.6.34		
148	2.6.35		
149	2.6.36		
150	2.6.37		
151	2.6.38		
152	2.6.39		
153	2.6.40		
154	2.6.41		
155	2.6.42		
156	2.6.43		
157	2.6.44		
158	2.6.45		
159	2.6.46		

<sup>1</sup> A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 109r-110v.

<sup>2</sup> A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 113r-114r.

<b>Ordenanzas 1636</b>	<b>Rec. Ind.</b>	<b>Sólo Rec. Ind.</b>	<b>Principales modificaciones (1701-1746)</b>
160	2.6.47		
161	2.6.48		
162	2.6.49		
163	2.6.50		
164	2.6.51		
165	2.6.52		
		2.6.53	
215	2.7.1		Real decreto 20.01.1717 <sup>1</sup>
216	2.7.2		
217	2.7.3		Real decreto 19.08.1717 <sup>2</sup> Real decreto 25.10.1717 <sup>3</sup>
218	2.7.4		
219	2.7.5		
220	2.7.6		
221	2.7.7		Real decreto 30.04.1717 <sup>4</sup>
222	2.7.8		Real decreto 20.01.1717 <sup>5</sup> Real decreto 30.04.1717 <sup>6</sup>
223	2.7.9		Real decreto 12.05.1717 <sup>7</sup>
224	2.7.10		Real decreto 30.04.1717 <sup>8</sup>
225	2.7.11		Real decreto 20.01.1717 <sup>9</sup> Real decreto 30.04.1717 <sup>10</sup>
226	2.7.12		
227	2.7.13		Real decreto 18.11.1710 <sup>11</sup>
228	2.7.14		Real decreto 30.04.1717 <sup>12</sup>
229	2.7.15		Real decreto 27.12.1738 <sup>13</sup>
230	2.7.16		Real decreto 30.04.1717 <sup>14</sup>

<sup>1</sup> A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 109r-110v.

<sup>2</sup> A.G.I., Indiferente General, 542 L. 2, f. 71v.

<sup>3</sup> A.G.I., Indiferente General, 542 L. 2, ff. 77r-79r.

<sup>4</sup> A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 113r-114r.

<sup>5</sup> A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 109r-110v.

<sup>6</sup> A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 113r-114r.

<sup>7</sup> A.G.I. Indiferente General, 542 L. 2, ff. 21r-24r.

<sup>8</sup> A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 113r-114r.

<sup>9</sup> A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 109r-110v.

<sup>10</sup> A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 113r-114r.

<sup>11</sup> A.H.N., Cedula de Ayala, t. 112, f. 244v, n 299.

<sup>12</sup> A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 113r-114r.

<sup>13</sup> A.G.I., Indiferente General, 543 L. 3, ff. 461-462.

<sup>14</sup> A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 113r-114r.

<b>Ordenanzas 1636</b>	<b>Rec. Ind.</b>	<b>Sólo Rec. Ind.</b>	<b>Principales modificaciones (1701-1746)</b>
231	2.7.17		Real decreto 10.11.1713 <sup>1</sup> Real decreto 17.07.1718 <sup>2</sup>
232	2.7.18		Real decreto 10.11.1713 <sup>3</sup>
233	2.7.19		
		2.8.1	
<b>166</b>	No pasó		
<b>167</b>	No pasó		
168	2.9.1		
169	2.9.2		
170	2.9.3		
171	2.9.4		
172	2.9.5		
173	2.9.6		
174	2.9.7		
175	2.10.1		
176	2.10.2		
177	2.10.3		
178	2.10.4		
179	2.10.5		
180	2.10.6		
		2.10.7	
181	2.10.8		
		2.10.9	
182	2.10.10		Real decreto 23.05.1732 <sup>4</sup>
183	2.10.11		
184	2.10.12		
185	2.10.13		
186	2.10.14		
187	2.10.15		Real decreto 22.09.1733 <sup>5</sup>
188	2.10.16		
189	2.11.1		
190	2.11.2		
		2.11.3	
191	2.11.4		

<sup>1</sup> A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 58v-62v.

<sup>2</sup> A.G.I., Indiferente General, 829.

<sup>3</sup> A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 58v-62v.

<sup>4</sup> A.H.N., Cedulaire de Ayala, t. 10, f. 294v, n 491.

<sup>5</sup> M. J. de Ayala, *Notas a la Recopilación...*, p. 142.



<b>Ordenanzas 1636</b>	<b>Rec. Ind.</b>	<b>Sólo Rec. Ind.</b>	<b>Principales modificaciones (1701-1746)</b>
192	2.11.5		
193	2.11.6		
194	2.11.7		
195	2.11.8		Real decreto 30.04.1717 <sup>1</sup>
196	2.11.9		Real decreto 12.05.1717 <sup>2</sup>
197	2.11.10		
198	2.11.11		
199	2.11.12		
200	2.11.13		
201	2.11.14		
202	2.11.15		
203	2.11.16		
204	2.11.17		
205	2.11.18		
206	2.11.19		
207	2.11.20		
208	2.11.21		Real decreto 19.08.1717 <sup>3</sup>
209	2.11.22		Real decreto 19.08.1717 <sup>4</sup>
210	2.11.23		
211	2.11.24		
212	2.11.25		
3	2.11.26		
214	2.11.27		
234	2.12.1		
235	2.12.2		
236	2.12.3		
237	2.12.4		
238	2.13.1		
239	2.13.2		
240	2.13.3		
241	2.13.4		
242	2.13.5		
243	2.13.6		
244	2.14.1		

<sup>1</sup> A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 113r-114r.

<sup>2</sup> A.G.I., Indiferente General, 542 L. 2, ff. 21r-24r.

<sup>3</sup> A.G.I., Indiferente General, 542 L. 2, f. 71.

<sup>4</sup> Loc. Cit.

<b>Ordenanzas 1636</b>	<b>Rec. Ind.</b>	<b>Sólo Rec. Ind.</b>	<b>Principales modificaciones (1701-1746)</b>
245	2.14.2		

## VI. CONCLUSIONES

Una vez desarrollados los distintos apartados que nos propusimos analizar en la presente investigación, creemos conveniente resaltar algunas consideraciones generales a modo de conclusión. En primer lugar establecer que el Consejo de Indias, como cualquier otra institución administrativa fue objeto de continuas modificaciones con la finalidad de adaptar su trabajo a la realidad de cada momento.

En 1524 Carlos V instauró un órgano colegiado, con carácter exclusivo, para el conocimiento de todos los asuntos relacionados con las Indias Occidentales, de manera que aquel todopoderoso Consejo tenía competencias relacionadas con el gobierno, la justicia, la guerra y la hacienda de aquellos territorios ultramarinos. Su sucesor en principio respetó la organización establecida pero la mala situación económica de la Monarquía impuso nuevos cambios. Por ello, Felipe II en aras a obtener mayores ingresos decidió unir la hacienda indiana con la castellana bajo la administración del Consejo de Hacienda, situación que provocó la primera gran pérdida de competencias del Consejo de Indias. Pero esta decisión no sólo arrancó de su conocimiento una materia fundamental, la hacienda, sino que al mismo tiempo, abrió la puerta para que algunos otros órganos colegiados, como fue el caso de la Junta de Hacienda de 1595 se inmiscuyera en asuntos de gobierno indianos, so pretexto de potenciar la hacienda real. Dicha Junta propuso por ejemplo varias modificaciones a la regulación de asuntos como la minería, el trabajo de los indios y el pago de servicios personales, arrendamiento de salinas, azogue, diezmos, expolios...

En el siglo XVII la gran influencia de los validos en la toma de decisiones reales ejerció su impronta limitando los asuntos que debía conocer el Consejo de Indias. Se potenció la creación de Juntas *ad hoc* con la intención de interferir en asuntos puntuales. Así en 1600 Felipe III creó dos instituciones político-administrativas que desgajaron las propias competencias del Consejo de Indias. Por un lado creó la Junta de Guerra de Indias cuyo cometido central fue precisamente el conocimiento de la materia militar dejando al Consejo fuera de dicha competencia. Por el otro lado, se creó la Cámara de Indias como órgano encargado del despacho de asuntos relativos a materias de gracia y merced de aquellos territorios

indianos. Si bien dicha Cámara tuvo una vida azarosa, con el tiempo fue restablecida y el Consejo dejó de intervenir en dichos asuntos.

Cuando Felipe V asumió el trono de la Monarquía hispánica el Consejo de Indias era un órgano completamente distinto al creado por Carlos V. Competencias relacionadas con guerra, hacienda o gracia y merced habían quedado fuera de su conocimiento. Los decretos de Nueva Planta lo único que hicieron fue continuar con esta política, sólo que ahora el monarca decidió reservarse para sí, sin la intromisión de ningún otro órgano colegiado, el conocimiento y resolución de materias relacionadas con la hacienda, guerra, navegación y comercio.

En efecto, las reformas político-administrativas llevadas a cabo por Felipe V disminuyeron aún más el poder que hasta entonces había ostentado el Consejo respecto a los territorios indianos. Pero las competencias extraídas a dicho órgano colegiado debían adjudicarse a otras instituciones, nos referimos a las distintas secretarías de Estado y del despacho.

Como ya se ha analizado en detalle, los decretos de nueva planta establecieron el nuevo modo de trabajo del Consejo de Indias y la manera en la que se debía relacionar con esas nuevas instituciones político-administrativas. En este sentido, la vía ordinaria quedaba prácticamente sometida a la vía reservada. En efecto, según lo hemos comprobado, a partir de 1721 cuando se crea una secretaría de Estado con competencias específicas para asuntos indianos, la vía de Consejo pasó a depender de la voluntad del secretario.

Sin embargo, la vía reservada dio pie a que el Consejo de Indias continuara ejerciendo gran influencia en la toma de decisiones, aunque fuera de manera indirecta. Lo anterior se desprende de la obligación por parte del Consejo de emitir su opinión a todos aquellos asuntos que le fueran remitidos mediante la vía reservada.

Además, la reconstrucción del complejo trabajo del Consejo de Indias en el entramado administrativo del setecientos y su relación con la vía reservada ha sido de gran importancia para comprender las propias necesidades políticas de la época. Esta relación la buscamos no sólo a través de lo establecido en los reales decretos, sino mediante su trabajo diario. Allí se podía ver de manera clara, por un lado, la lentitud de un proceso administrativo en el que no sólo se le habían eliminado fases, sino que, con la inclusión de la vía reservada en su propia tramitación el procedimiento se convirtió, al menos en el reinado de Felipe V, mucho más engorros y lento.

En nuestro estudio era de vital importancia conocer hasta qué punto el Consejo había dejado de asesorar al monarca, lo que podía significar que dicho órgano colegiado podía haber perdido prácticamente su razón de ser, esto es, el deber de consejo para cualquier asunto relacionado con las Indias. Pero la documentación nos mostró una realidad bien distinta. En aquellos asuntos que habían quedado fuera de su ámbito competencial el Consejo continuaba exponiendo su parecer al monarca. Bien es cierto que el filtro de sus opiniones se encontraba en la propia Secretaría de Estado y del Despacho, cuyos oficiales, eran los encargados de hacer la síntesis del parecer del Consejo para que el secretario lo remitiera al monarca. Aún así de las más de 4.600 consultas que revisamos, sólo un 5% de ellas no fueron aceptadas por el rey, lo que indicaba que sus opiniones eran mayoritariamente aceptadas y puestas en ejecución a través de las reales cédulas y provisiones que el Consejo debía remitir a las Indias.

Por otro lado, si consideramos que el Consejo de Indias era el órgano asesor por excelencia, cuyo funcionamiento estaba organizado desde el siglo XVII con las Ordenanzas de 1636, es posible afirmar que su estructura y funcionamiento estaba más que probado, cada uno de sus integrantes sabía lo que tenía que hacer en todo momento. No así sucedía con las Secretarías de Estado y del Despacho durante el período que venimos manejando.

Las razones de esta situación podían ser varias, entre ellas, la falta de una regulación específica que normara su forma de trabajo, de manera que era su titular, el secretario de Estado y del despacho, quien debía distribuir el trabajo y organizar el funcionamiento de la oficina según su propio criterio. Esta situación provocó que aún a mediados de los años treinta del setecientos, cuando las reformas comenzaban a asentarse en el sistema político y administrativo de la Monarquía hispánica, la Secretaría de Estado y del Despacho de Marina e Indias continuaba remitiendo al Consejo gran parte de su trabajo por carecer de medios necesarios para llevar a cabo su cometido.

La otra gran diferencia entre una y otra institución era precisamente el personal que lo componía. Mientras que el Consejo de Indias contaba con ministros y oficiales con amplia experiencia en asuntos indianos, las Secretarías de Estado carecían de un personal versado en materias relacionadas con las Indias, de allí que en muchos asuntos que les remitían directamente desde aquellos territorios eran incapaces de resolverlo, por lo que se remitía el asunto al Consejo.

Estas diferencias entre ambos organismos confirmaron los resultados que habíamos obtenido en el análisis de la documentación proveniente del

Archivo de Indias. Según el contenido del inventario de las consultas de la Audiencia de México entre los años de 1717 a 1746 uno de cada tres asuntos habían sido remitidos por la vía reservada al Consejo de Indias para conocer su opinión. Los otros dos tercios provenían de particulares y de autoridades indianas que requerían una resolución real a través de una consulta que el Consejo remitía al monarca nuevamente a través de la vía reservada. Por tanto, es posible inferir que durante el reinado del primer Borbón, el Consejo continuó influyendo en la toma de decisiones que afectaban a los territorios ultramarinos, lo que lo convertía en el órgano asesor en materia de Indias por excelencia. De manera que si el secretario, en cumplimiento de los decretos de nueva planta, no hubiera consultado al Consejo con tanta frecuencia, era posible que dicho órgano hubiera desaparecido.

Una cuestión importante lo fue el análisis de la organización interna del Consejo. Nos dimos cuenta que había una relación directa entre los decretos que disminuían las competencias del Consejo de Indias con los decretos que también intentaban disminuir el personal que debía laborar dentro del Consejo. Pero nuevamente la realidad fue bien distinta, al analizar las nóminas del Consejo de Indias nos percatamos que siempre había más personal del autorizado en los distintos decretos. Situación que a nuestro entender refuerza nuestra consideración acerca de la importancia tan grande que el Consejo de Indias tuvo en el reinado de Felipe V. Por ello nos pareció importante incluir dichos listados en el anexo al presente trabajo.

De lo anterior se desprende que la imagen que algunos autores como Gildas Bernard<sup>1</sup>, Guillermo Céspedes del Castillo<sup>2</sup>, José Antonio Escudero<sup>3</sup> o Jonh Lynch<sup>4</sup> dieron acerca de la pretendida marginación del Consejo de Indias de la escena política en el siglo XVIII y su progresiva decadencia ha quedado en algunos aspectos desechada. Ciertamente sufrió pérdidas de competencias, pero no sólo en este reinado, casi desde su fundación fue sometido a diferentes modificaciones. Ya sea de manera directa, a través de la vía ordinaria, o de manera indirecta, por medio de la vía reservada, el Consejo de Indias continuó emitiendo su opinión en asuntos relacionados con aquellos territorios.

El estudio de un gran número de consultas que el Consejo de Indias remitió al monarca nos ha dado luz sobre este tema. Por ello, coincidiendo

---

<sup>1</sup> Vid. *Le Secrétariat d'État...*, pp. 6 y ss.

<sup>2</sup> Vid. *América Hispánica...*, p. 343.

<sup>3</sup> Vid. *Los Secretarios de Estado...*, t. 2, p. 351.

<sup>4</sup> Vid. *La España del siglo XVIII...*, pp. 156-7.

con lo señalado por Rafael García<sup>5</sup> pero referido al reinado de Felipe V, el Consejo conservó su prestigio y autoridad moral, convirtiéndose en el órgano más idóneo de la Corte para asesorar al monarca en los intrincados asuntos de la administración indiana.

En el caso de las resoluciones que el monarca dio a las opiniones vertidas por sus consejeros indianos creemos que la intromisión de la vía reservada en los asuntos indianos no fue un elemento a considerar al menos en lo que respecta a las respuestas que el rey daba a las consultas. Por supuesto que variaron el contenido de las consultas, sobre todo porque el Consejo de Indias fue vaciado de competencias.

Otra de las hipótesis que nos planteamos para la elaboración del presente trabajo fue establecer hasta qué punto las Ordenanzas del Consejo de Indias promulgadas en 1636 se encontraban en plena vigencia durante el reinado de Felipe V. Con el estudio de su organización interna, competencias y funcionamiento pudimos comprender hasta qué punto continuaban rigiendo la vida de dicho órgano de la administración de la Monarquía. Por tanto, es posible afirmar que un siglo más tarde aquellas disposiciones que Felipe IV promulgó el 1 de agosto de 1636 aún regían la vida del Consejo de Indias. Tres fueron las líneas básicas de las reformas a las Ordenanzas de 1636. La primera de ellas confirmaba la tendencia generalizada de disminuir el número de ministros y del personal que formaba parte del Consejo a fin de reducir el coste de la abultada administración de la Monarquía. El segundo grupo de ordenanzas que fueron modificadas estaban relacionadas con las materias que podía conocer el Consejo, toda vez que con la creación de las Secretarías de Estado y del Despacho gran parte de las competencias que las ordenanzas de 1636 le habían atribuido al Consejo fueron asignadas a la vía reservada. Y la tercera línea se centró en la administración de los caudales de las Indias los cuales debían quedar concentrados en una única Tesorería general de la Monarquía.

Ciertamente estos tres ejes sobre los que se desarrolló la reforma al Consejo de Indias desnaturalizaron la idea que en su momento Carlos V tuvo del todopoderoso Consejo de Indias; sin embargo, los aires de cambio de una nueva forma de entender el gobierno de la Monarquía y tras dos siglos de administración de aquellos territorios ultramarinos dieron como resultado un nuevo orden para la resolución de los asuntos indianos a partir ya no sólo de un órgano colegiado central, sino también de la participación de órganos unipersonales, como lo fueron los secretarios de Estado y del

---

<sup>5</sup> Vid. *El Consejo de Indias...*, p. 390.

Despacho, capaces de llevar a cabo decisiones más racionales y menos complejas.



## VII. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA

### 1. Fuentes Manuscritas.

#### 1.1. Archivo General de Indias (A.G.I.).

##### Secciones:

Indiferente General, legajos número: 146, 228, 420, 421, 425, 426, 427, 428, 429, 431, 432, 436, 437, 443, 444, 445, 446A, 447, 448, 538, 539, 542, 543, 544, 545, 546, 548, 553A, 553B, 554, 555A, 555B, 556, 557, 558, 567, 568, 569, 570, 571, 574, 575, 579, 582, 583, 598, 600, 652, 653, 659, 662, 822, 824, 826, 827, 829, 832, 845, 863, 865, 869B, 886A, 892, 893, 901B, 902, 909, 918, 986, 994, 1092, 1318, 1852, 1853, 2872.

Contaduría, legajos número: 14, 211.

#### 1.2. Archivo General de Simancas (A.G.S.).

##### Secciones:

Dirección General del Tesoro (D.G.T.), Inv. 13, legs. 8 y 9.

#### 1.3. Archivo Histórico Nacional (A.H.N.).

##### Secciones:

Ayala, M. J. de, *Cedulario de Indias*, Códices, L. 684, 693, 696-698, 705, 710, 715-711.

————— *Índice del Diccionario de Gobierno, y legislación de Indias y España, Norte de los acertados Actos positivos de la Experiencia. Comprehende no solo la Nomenclatura de los Decretos, Consultas, Cédulas, Reglamentos, Reales Ordenes, y Oficios, sino en Compendio, o Extracto, los Casos, y Resoluciones en cada Materia a que se contrahe la Voz, como se demuestra aquí...*, Madrid, 1772. Códices, L. 726-751. También conocido como *Diccionario de Gobierno y Legislación de Indias, edición y estudios M. M. del Vas Mingo*, Madrid, 1988-1996, 13 ts.

Estado, legajos número: 2812, 3496, 4841.

Consejos Suprimidos: 8944 A.

#### **1.4. Biblioteca Nacional de Madrid (B.N.).**

Carta a Felipe V, pidiendo el relevo como Presidente del Consejo de Indias. Madrid, 20 febrero 1703. Mss. 11.319/36.

*Junta de vivos y muertos en el Panteón del Escorial: recíprocas quejas, cargos y descargos en presencia de Felipe IV, entre D. Juan de Austria y el Duque de Medinaceli, sobre su gobierno, en el valimiento y primer ministerio del reinado de Carlos II, año de 1684.* Mss. 11.097.

Papeles satíricos en verso y prosa sobre el reinado de Carlos II. Mss. 17.535.

Visita de la Esperanza al tiempo presente. Mss. 18.208, pp. 1-146.

Reales Decretos, Órdenes y Cédulas que el Consejo de Indias tiene en su tabla. Mss. 19.251.

#### **1.5. Biblioteca Palacio Real (B.P.R.).**

Ayala, M. J. de, *Miscelánea*:

- *Representación hecha a S.M. por el Consejo de Indias, exponiendo las reglas y leyes que ha observado para el gobierno de ellas, desvelo y dilatado tiempo que se causó en su formación y perjuicios que se podrían ocasionar de alterarlas. Año de 1714.* Mss. II/844.
- Catálogo de los Secretarios que ha habido en el Consejo de Indias, desde el tiempo de la conquista, o descubrimiento del nuevo mundo, hasta el año de 1793. Mss. 11/2876.
- *Noticia de la Cámara de Indias y consulta del Consejo a S. M. del 2-XII-1755.* Mss. II/2889.
- *Extracto del expediente determinado el año 1756 sobre los oficiales de las Secretarías de Nueva España y Perú.* Mss. II/2890.
- *Formulario del juramento que hacen los señores presidentes, gobernadores, consejeros y demás empleos de Indias en el Supremo Consejo de ellas.* Mss. II/2893.

## 2. Fuentes Impresas.

### 2.1. Textos normativos.

- Autos Acordados que contienen los libros por el orden de títulos de las leyes de Recopilación*, Madrid, Joaquín Ibarra, 1777, 4 ts.
- Cortes de los Antiguos Reinos de León y de Castilla*, publicadas por la Real Academia de la Historia, Madrid, 1863.
- Diccionario de Gobierno y Legislación de Indias*, edición y estudios M. M. del Vas Mingo, Madrid, 1988-1996, 13 ts.
- Instrucción que se dio al Señor Felipe Quarto sobre materias del gobierno de estos reynos y sus agregados. [Memorial enviado a Felipe IV por el conde-duque de Olivares el 25 de diciembre de 1624]*, en *Semanario Erudito de Valladares*, Madrid, 1788, t. 11, pp. 162-224.
- Matraya y Ricci, J. J., *Catálogo cronológico de las pragmáticas, cédulas, decretos, órdenes y resoluciones reales generales emanadas después de la Recopilación de las leyes de Indias*, advertencia preliminar J. M. Mariluz Urquijo, Buenos Aires, 1978.
- Muro Orejón, F., *Cedulario Americano del siglo XVIII*, Sevilla, 1969, 3 ts.
- Novísima Recopilación de las leyes de España en que se reforma la recopilación publicada por... Felipe II y se incorporan las pragmáticas, cédulas, decretos... expedidas hasta el de 1804 mandando formar por Carlos IV*, Madrid, 1805.
- Ordenanzas del Consejo de las Indias de 1571*, texto facsimilar de la edición de 1585, edición y notas de A. Muro Orejón, en *Anuario de Estudios Americanos*, nº 14 (1957), pp. 363-423.
- Ordenanzas del Consejo Real de las Indias nuevamente recopiladas por el rey D. Felipe Quarto N. S. para su gobierno establecido*, Año de 1636, Madrid, Julián Paredes, 1681, texto facsimilar y estudio M. Moranchel Pocatererra en *Cuadernos de Historia del Derecho*, nº 8 (2001), pp. 273-379 y nº 9 (2002), pp. 247-364.
- Ordenanzas hechas el año de 1510 para la Casa de la Contratación de Sevilla* 15.06.1510. A.G.I., Indiferente General, 1092, N. 3.
- Ordenanzas para la Gobernación de las Indias y buen tratamiento y conservación de los indios. Leyes Nuevas 1542-1543*, texto facsimilar y estudio A. Muro Orejón, *Anuario de Estudios Americanos*, nº 16 (1959), pp. 561-619.
- Pérez y López, A. X., *Teatro de la legislación universal de España e Indias, por orden cronológico de sus cuerpos, y decisiones no recopiladas: y alfabético de sus títulos y principales materias*, Madrid, 1791-1798, 28 vols.

*Recopilación de las leyes de estos Reynos hecha por mandado de la magestad católica del Rey don Phipippe Segundo nuestro señor*, Alcalá de Henares, casa de Andrés de Angulo, 1569.

*Recopilación de las leyes de los Reynos de las Indias*, Madrid, Julián de Paredes, 1681.

*Las Siete Partidas del Rey Don Alfonso el Sabio*, cotejadas con varios códices antiguos por la Real Academia de la Historia, Madrid, Imprenta Real, 1807.

## 2.2. Literatura jurídica.

Arrazola, L., et. al., *Enciclopedia Española de Derecho y Administración o Nuevo Teatro Universal de la legislación de España y de las Indias*, Madrid, 1860, t. 11.

Ayala, J. M. de, *Notas a la Recopilación de Indias. Origen e Historia Ilustrada de las Leyes de Indias*, transcripción y notas J. Manzano Manzano, Madrid, 1945, 2 vol.

Bacallar y Sanna, V., (marqués de San Felipe), *Comentarios de la Guerra de España e historia de su rey Phelipe V el Animoso, desde el principio de su reynado hasta la paz general del año 1725*, Génova, 1725, 2 t.

Belando, N. de J., *Historia civil de España. Sucesos de la guerra y tratados de paz desde el año de mil setecientos, hasta el del mil setecientos y treinta y tres*, Madrid, 1744, 3 vols.

Bermúdez de Pedraza, F., *El Secretario del Rey*, Madrid, 1620.

Burriel, A. M., *Memorias para la vida del Señor Rey Don Fernando III*, Madrid, 1800.

Cabrera de Córdoba, L., *Relaciones de las cosas sucedidas en la Corte de España desde 1599 hasta 1614*, Madrid, 1857.

Camos, A. de, *Microcosmia y gobierno universal del hombre cristiano*, Barcelona, 1592.

Campo Raso, J., *Memorias políticas y militares, para servir de continuación a los comentarios del marqués de San Felipe*, Madrid, 1792.

Cantos Benitez, P., *Escrutinio de maravedises y monedas de oro antiguas, su valor, reducción y cambio a las monedas corrientes*, Madrid, 1763.

Castillo de Bobadilla, J., *Política para corregidores y Señores de vasallos, en tiempo de paz y de guerra y para perlados en lo espiritual y temporal entre legos, jueces de comisión, regidores, abogados y otros oficiales públicos y de las jurisdicciones, preeminencias, residencias y salarios dellos y de lo tocante a las de órdenes y cavalleros dellas*, Madrid, 1597.

- Carnero, A., *Formulario de lo que debe observar un Secretario que lo fuere de Estado como también los oficiales, para formar las consultas y despachos, con otras particularidades curiosas y esenciales...*, en J. A. Escudero López, *Los Secretarios de Estado y del Despacho (1474-1724)*, Madrid, 1973, t. 3, pp. 914-928.
- Castro, A. de, *Vida del Almirante D. Andrés de Pes*, Ministro de Marina, Cádiz, 1879.
- Ceballos, J. de, *Arte real para el buen gobierno de los Reyes y Príncipes y de sus vasallos*, Toledo, 1623.
- Cerdán de Tallada, T., *Verdadero gobierno de esta Monarquía tomando por su propio sugeto la conservación de la paz*, Valencia, 1581.
- , *Veriloquium en Reglas de Estado*, Valencia, 1604.
- Colmeiro, M., *De la constitución y del gobierno de los Reinos de León y Castilla*, Madrid, 1855.
- Cos Gayón, F., *Historia de la administración pública de España en sus diferentes ramos de derecho político, diplomacia, organización administrativa y hacienda desde la dominación romana hasta nuestros días*, Madrid, 1851.
- Covarrubias, J. de, *Máximas sobre recursos de fuerza y protección, con el método de introducirlos en los tribunales*, Madrid, 1786.
- Coxe, W., *España bajo el reinado de la Casa de Borbón, desde 1700 en que subió al trono Felipe V hasta la muerte de Carlos III acaecida en 1788*, Madrid, 1846, ed. facsimilar, Alicante, 2011.
- Danvila y Collado, M., *El poder civil en España*, Madrid, 1883, 6 ts.
- Díez de la Calle, J., *Memorias y noticias sacras y reales del Imperio de las Indias Occidentales*, Madrid, 1646.
- Dou y de Bassols, R. L. de, *Instituciones del derecho público general de España con noticia particular de Cataluña y de las principales reglas de gobierno en cualquier Estado*, Barcelona, 1801, t. 3.
- Escalona Agüero, G., *Gazophilacium Regium Perubicum*, Madrid, 1775.
- Escolano de Arrieta, P., *Práctica del Consejo Real en el despacho de los negocios consultivos, instructivos y contenciosos con distinción de los que pertenecen al Consejo Pleno, o a cada Sala en Particular: y las fórmulas y cédulas, provisiones y certificaciones respectivas*, Madrid, 1796.
- Espinal y García, B., *Dirección General de Cartas en forma de Diccionario*, Madrid, 1775.
- Ezpeleta y Mallol, G., *Práctica de secretarios, que contiene una concisa explicación de las calidades de este empleo, distinción de las cartas misivas y declaración de las circunstancias principales de que deben constar para tenerse por bien escritas*, Barcelona, 1758.
- Felipe, B., *Del Consejo y consejeros de Príncipes*, Turín, 1589.
- Fernández de Navarrete, P., *Conservación de Monarquías*, Madrid, 1626.
- Furió Ceriol, F., *Consejo y consejeros del Príncipe*, Amberes, 1559.

- Gallardo Fernández, F., *Origen, progreso y estado de las rentas de la Corona de España, su gobierno y administración*, Madrid, 1805.
- Garma y Durán, F. X., *Theatro Universal de España e Indias*, Madrid, 1751, t. 4.
- Henry Veira, A. A., *El oficinista instruido o práctica de oficinas reales*, Madrid, 1815, ed. facsimilar, Madrid, 2000.
- Hurtado de Mendoza, D., *Guerra de Granada que hizo el rey Felipe II contra los moriscos de aquel Reino*, Lisboa, 1627.
- Larruga y Boneta, E., *Memorias políticas y económicas sobre los frutos, comercio, fábricas y minas de España*, Madrid, 1789, t. 4.
- León Pinelo, A., *Discurso sobre la Importancia, Forma y Disposición de la Recopilación de Leyes de las Indias Occidentales*, Madrid, 1623.
- *El Gran Canciller de Indias*, estudio y notas G. Lohmann Villena, Sevilla, 1953.
- *Real Junta de Guerra de Indias. Su origen, forma y jurisdicción*, Madrid, 1659, publicado por L. Hanke en *Revista Chilena de Historia y Geografía*, nº 91 (jul-dic 1937).
- *Tablas cronológicas de los reales Consejos Supremo y de la Cámara de las Indias Occidentales*, Madrid, 1660, 2ª ed. facsimilar, Madrid, 1892.
- Louvielle, marqués de, *Mémoires secrets sur l'établissement de la maison de Bourbon en Espagne, extraits de la correspondance du Marquis de Louville, gentilhomme de la Chambre de Philippe V et chef de Sa Maison française*, París, 1818, t. 1.
- Macanaz, M. R. de, "Explicación jurídica e histórica de la consulta que hizo el Real Consejo de Castilla al Rey Nuestro Señor, sobre lo que S.M. se sirvió preguntarle, y se expresa en esa obra; con los motivos que dieron causa para la real pregunta y la respuesta. Y defensa legal de una de las principales partes, que componen el todo de la soberanía de su Magestad", en *Semanario Erudito de Valladares*, Madrid, 1788, t. 9, pp. 3-142.
- "Noticias individuales de los sucesos más particulares, tanto de Estado como de Guerra, acontecidos en el reinado del rey nuestro señor don Felipe Quinto desde el año de 1703 hasta el de 1706", en *Semanario Erudito de Valladares*, Madrid, 1788, t. 7, pp. 14-102.
- *Obras escogidas*, Madrid, 1847.
- Madariaga, J. de, *Del Senado y de su Príncipe*, Valencia, 1617.
- Mallea, S. de, *Rey pacífico, y gouierno de principe catolico, sobre el Psalmo 100 de Daud "Misericordiam, & iudicium cantabo tibi Domine"*, Génova, 1646.
- Mañer, S. J., *Historia del duque de Riperdá, Primer ministro de España, en el reynado del señor Felipe V*, Madrid, 1796.
- Mariana, J. de, *Historia General de España*, Madrid, 1873.

- Marichalar A. y Manrique, C., *Historia de la Legislación y Recitaciones del Derecho Civil en España*, Madrid, 1861.
- Martínez de Salazar, A., *Colección de memorias y noticias del gobierno general y político del Consejo*, Madrid, 1764.
- Martínez Marina, F., *Teoría de las Cortes o grandes juntas de los reinos de León y Castilla. Monumentos de su constitución política y de la soberanía del pueblo*, Madrid, 1813.
- Mártir Rizo, J. P., *Norte de Príncipes*, Madrid, 1626.
- Miranda, J., *Las ideas y las instituciones políticas mexicanas. Primera parte. 1521-1820*, México, 1978.
- Moore, G., *Lives of Cardinal Alberoni, and the Duke of Ripperda, and Marquis of Pombal, three distinguished political adventurers of the last century exhibiting a view of the kingdoms of Spain and Portugal*, Londres, 1814.
- Morel-Fatio A. y Léonardon H., “Mémoire pour servir d’instruction au sieur marquis de Bonnac, lieutenant pour le roi au pays de Foie, allant en Espagne en qualité d’envoie extraordinaire de Sa Majesté. 5 Août 1711, en *Recueil des Instructions données Aux Ambassadeurs et Ministres de France depuis les traités de Westphalie Jusqu’a la Révolution Française*, París, 1898, t. 12-2.
- Nieremberg, J. E., *Centuria de Dictámenes Prudentes*, Bruselas, 1664.
- Núñez de Castro, A., *Vida de S. Fernando III, rey de Castilla y León*, Madrid, 1787.
- Pérez del Barrio Angulo, G., *Secretario y consejero de señores y ministros*, Madrid, 1645.
- Porlier Bajamar, A., *Discursos al Consejo de Indias*, estudio y edición M<sup>a</sup> S. Campos Díez, Madrid, 2002.
- Portocarrero y Guzmán, P., *Theatro Monárchico de España*, Madrid, 1700.
- Prado y Rozas, A. de, *Reglas para oficiales de secretarías y catálogo de los secretarios del Despacho y del Consejo de Estado que ha habido desde los señores Reyes Católicos hasta el presente, junto con las plantas dadas a las secretarías*, edit. J. M<sup>a</sup> García Madaira, *Las Secretarías del Despacho. Dos Estudios sobre Historia de la Administración*, Madrid, 1982. pp. 79-184.
- Pulgar, H. del, *Crónica de los Reyes Católicos don Fernando y doña Isabel de Castilla y de Aragón*, Valencia, 1780.
- Ramírez de Prado, L., *Consejo y consejeros de príncipes*, Madrid, 1616.
- “Representación hecha a la Majestad del Rey Don Carlos Segundo por el Obispo de Solsona, en el año de 1694, en que se descubre los males de este Reyno”, en *Semanario Erudito de Valladares*, Madrid, 1790, t. 30, pp. 260-263.
- “Representación hecha por Juan Antonio Romeo fechado el 15 de septiembre de 1710, Guerra de Sucesión. Correspondencia

- interceptada”, en *Revista de Archivos Bibliotecas y Museos*, año III (enero 1873), p. 26.
- Rezabal y Ugarte, J., *Tratado del real derecho de las medias anatas seculares y del servicio de lanzas a que están obligados los Títulos de Castilla*, Madrid, 1792.
- Ribadeneyra y Barrientos, A. J., *Manual Compendio de el Regio Patronato Indiano*, Madrid, 1755.
- Ribadeneyra, P. de, *Tratado de la religión y virtudes que debe tener el Príncipe Christiano, para gobernar y conservar sus Estados, contra lo que Nicolás Machiavelo, y los políticos de este tiempo enseñan*, Madrid, 1595.
- Riol, S. A., “Informe que hizo Su Majestad en 16 de junio de 1726 sobre la creación, erección e institución de los Consejos y Tribunales, las instrucciones que se les impusieron para obrar según su instituto; el estado que hoy tienen los papeles de sus archivos, y la forma de su antiguo y actual manejo; las causas que hubo en cada una para etc.”, en *Semanario Erudito de Valladares*, Madrid, nº 3 (1787), pp. 73-236.
- Rodríguez Villa, A., *D. Cenón de Somodevilla, Marqués de la Ensenada*, Madrid, 1878.
- *Patiño y Campillo. Reseña histórico-biográfica de estos dos ministros de Felipe V. Formada por documentos inéditos y desconocidos en su mayor parte*, Madrid, 1882.
- Saavedra Fajardo, D. de, *Empresas políticas o idea de un Príncipe político christiano*, Milán, 1640.
- Salazar de Mendoza, P. de, *Origen de las dignidades seglares de Castilla y León con relación sumaria de los reyes de estos Reynos*, Madrid, 1696.
- Sánchez de Arévalo, R., *Suma de la política*, Madrid, 1456, ed. facsimilar, Madrid, 1944.
- Sánchez Santiago, A., *Idea elemental de los tribunales de la Corte en su actual estado*, Madrid, 1788, 2 t.
- Santa María, J. de, *Tratado de República, y policía christiana. Para Reyes y Príncipes: y para los que en el gobierno tienen sus vezes*, Barcelona, 1616.
- “El Secretario de Estado y del Despacho instruido, su origen en España, sus funciones, ejercicio y máximas y manejos; su dirección, honores y preeminencias”, editado por J. A. Escudero López, *Los Secretarios de Estado...*, t. 4, pp. 118-1275.
- Sempere y Guarinos, J., *Histoire des Cortès D’Espagne*, Burdeos, 1815.
- *Historia del Derecho Español*, Madrid, 1822.
- Solórzano y Pereira, J. de, *Política Indiana*, Madrid, 1647, ed. facsimilar, Madrid, 1972, 4 ts.
- Taboada y Leal, N., *Descripción topográfico-histórica de la ciudad de Vigo, su Ría y Alrededores*, Santiago, 1840.



- Torreánaz (conde de), *Los Consejos del Rey durante la Edad Media*, Madrid, 1884, t. 1.
- Valladares Sotomayor, A., *Semanario Erudito que comprende varias obras inéditas, críticas, morales, instructivas, políticas, históricas, satíricas y jocosas de nuestros mejores autores antiguos y modernos*, Madrid, 1787-1790, 34 ts.
- Vilar y Pascual, L., *Diccionario Histórico Genealógico y Heráldico de las Familias Ilustres de la Monarquía Española*, Madrid, 1864, 8 ts.

### 3. Bibliografía.

- Abad León, F., *El Marqués de la Ensenada, su vida y su obra*, Madrid, 1985.
- Álamo Martell, M. T., “El VIII duque de Medinaceli: primer ministro de Carlos”, en *Los validos*, Madrid, 2004, pp. 547-572.
- Alcázar de Molina, C., *Historia del correo en América (notas y documentos para su estudio)*, Madrid, 1920.
- Alcocer Martínez, M., “El Consejo de Cruzada”, en *Revista Histórica* (1925), pp. 237-288.
- Alonso Díaz, C. S., “El traslado de la Casa de la Contratación a Cádiz 1717”, en *Revista da Faculdade de Letras*, nº 13 (1996), pp. 354-64.
- Altamira y Crevea, R., “La intervención de D. Juan de Solórzano en la Recopilación de Indias”, en *Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales*, nº 3 (1920), pp. 50-84.
- “Los cedularios como fuente histórica de la legislación indiana”, en *Revista de Historia de América*, nº 10 (1940), pp. 5-86 y nº 19 (1945), pp. 61-129.
- Alvarado, J., *Historia de la literatura jurídica en la España del Antiguo Régimen I*, Madrid, 2000.
- Álvarez-Coca González, M<sup>a</sup> J., “La Corona de Aragón: documentación en el Consejo y la Cámara de Castilla (1707-1834): fuentes en el Archivo Histórico Nacional”, en *Hispania: Revista española de historia*, vol. 49, nº 173 (1989), pp. 895-948.
- “La Cámara de Castilla: Secretaría de Gracia y Justicia. Problemas archivísticos e investigación histórica”, en *El tercer poder. Hacia una comprensión histórica de la justicia contemporánea en España*, Frankfurt, 1992, pp. 1-32.

- “La Cámara de Castilla: Secretaría de Gracia y Justicia”, en *Cuadernos de Historia Moderna*, nº 15 (1994), pp. 279-296.
- “El Consejo de las Órdenes Militares”, en *Cuadernos de Historia Moderna*, nº 15 (1994), pp. 297-324.
- Andrés Santos, F. J., “Los proyectos de Recopilación del Derecho indiano en la época de Felipe IV”, en *Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Coruña*, nº 11 (2007), pp. 45-69.
- Andújar Castillo, F., *Consejo y consejeros de guerra en el siglo XVIII*, Granada, 1996.
- Anes Fernández, L., “Don Lope de Sierra Cienfuegos, fiscal del Consejo de Castilla en el reinado de Carlos III”, en *Cuadernos de Estudios del siglo XVIII*, nº 5 (1995), pp. 3-22.
- Aquerreta, S., *Negocios y finanzas en el siglo XVIII: la familia Goyeneche*, Pamplona, 2001.
- Arregui Zamorano, P., “Ordenanzas del Consejo de Aragón”, en *Anuario de Historia del Derecho Español*, nº 55 (1985), pp. 705-734.
- Arrieta Alverdi, J., “El Consejo de Aragón y las Cortes catalanas”, en *Les Corts a Catalunya: Actes del Congrés d'Historia Institucional*, 1991, pp. 245-255.
- *El Consejo Supremo de la Corona de Aragón (1494-1707)*, Zaragoza, 1994.
- “Gobernar rescribiendo: Felipe II y el Consejo de Aragón”, en *Felipe II y el Mediterráneo*, 1999, vol. 3, pp. 65-96.
- “Austracismo, ¿Qué hay detrás de ese nombre?”, en *Los Borbones. Dinastía y memoria de Nación en la España del siglo XVIII*, Madrid, 2001, pp. 177-216.
- Arroyo, L., “Comisarios Generales de Indias”, en *Archivo Iberoamericano, Revista de Estudios Históricos 2ª época*, nº 46 (abr-jun 1952), pp. 129-172 y nº 47 (jul-sep. 1952), pp. 257-296.
- Artola, M., “Campillo y las reformas de Carlos III”, en *Revista de Indias*, vol. 12, nº 50 (1952), pp. 685-714.
- *La Hacienda del Antiguo Régimen*, Madrid, 1982.
- Arvizu, F. de, “Una nueva interpretación de la teoría del regio vicariato indiano”, en *Ius canonicum*, nº 36:71 (ene-jun 1996), pp. 63-99.
- Badorrey Martín, B., *Los orígenes del Ministerio de Asuntos Exteriores (1714-1808)*, Madrid, 1999.
- Baltar Rodríguez, J. F., “Notas sobre la introducción y desarrollo de la renta del papel sellado en la Monarquía española (siglos XVII y XVIII)”, en *Anuario de Historia del Derecho Español*, nº 66 (1996), pp. 519-560.

- *Las Juntas de Gobierno en la Monarquía Hispánica (s. XVI-XVII)*, Madrid, 1998.
- “Las negociaciones del Consejo de Aragón en el siglo XVII”, en *Anuario de Historia del Derecho Español*, nº 71 (2001), pp. 267-316.
- “Sobre el origen de la Junta de Guerra de Indias”, en *XIII Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano: Actas y estudios*, 2003, vol. 1, pp. 671-686.
- Barbier, J., “The Culmination of the Bourbon reforms, 1787-1792”, en *The Hispanic American Historical Review*, vol. 57, nº 1 (1977), pp. 51-68.
- Barreca, L., “El Consejo Supremo de Italia y el caso de la Baronesa de Carini”, en *Cuadernos de Investigación Histórica*, nº 2 (1978), pp. 115-119.
- Barrero García, A. M<sup>a</sup>, “La vía ordinaria y la vía reservada en la administración de la América española”, en *Estructuras, gobierno y agentes de la administración en la América española siglos XVI, XVII y XVIII*, *Actas del VI Congreso del Instituto de Historia del Derecho Indiano*, Valladolid, 1984, pp. 233-249.
- Barrio Gozalo, M., “El Cardenal Alberoni y España: política religiosa y carrera eclesiástica” en *Hispania sacra*, vol. 62, nº 127 (2011), pp. 205-234.
- Barrio Moya J. L., “El abogado navarro Don Antonio de Feloaga y Ozcoidi, Fiscal del Real Consejo de Indias durante el reinado de Felipe IV”, en *Boletín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País*, t. 65, nº 2 (2009), pp. 667-688.
- Barrios Pintado, F., *El Consejo de Estado de la Monarquía Española 1521-1812*, Madrid, 1984.
- *Los Reales Consejos. El gobierno central de la Monarquía en los escritores sobre Madrid del siglo XVII*, Madrid, 1988.
- “Donde no se ponía el sol”, en *La monarquía hispánica Felipe II, un monarca y su época*, Madrid, 1998, pp. 31-44.
- “Solórzano, la Monarquía y un conflicto entre Consejos”, en *Derecho y administración pública en las Indias hispánicas*, Cuenca, 2002, vol. 1, pp. 265-283.
- “Consolidación de la polisinodia hispánica y administración indiana”, en *El Gobierno de un mundo. Virreinos y Audiencias en la América Hispánica*, Cuenca, 2004, pp. 119-134.
- Bas Martín, N., *El cosmógrafo e historiador Juan Bautistas Muñoz (1745-1799)*, Valencia, 2002.
- Baudrillart, A., *Philippe V et la Cour de France*, Paris, 3 vols.

- Beneyto Pérez, J., “Burocracia y derecho público: la conciencia y los medios del Estado en la España moderna”, en *Revista de Estudios Políticos*, nº 95 (1957), pp. 15-38.
- *Historia de la administración española e hispanoamericana*, Madrid, 1958.
- Benigno, F., *La sombra del rey: validos y lucha política en la España del siglo XVII*, Madrid, 1994.
- Bermejo Cabrero, J. L., “Del Secretario del Despacho Universal a los Diversos Secretarios del siglo XVIII”, en *Estudios sobre la Administración central española*, Madrid, 1982, pp. 19-43.
- “El Consejo de Guerra en el siglo XVIII”, en *Estudios sobre la administración central española*, Madrid, 1982, pp. 61-73.
- “Sobre la caracterización institucional de Riperdá”, en *Anuario de Historia del Derecho Español*, nº 60 (1990), pp. 551-556.
- *Poder político y administración de justicia en la España de los Austrias*, Madrid, 2005.
- Bermúdez Aznar, A., “El oficio de relator del Consejo de Indias”, en *Derecho, instituciones y procesos históricos: XIV Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano*, Lima, 2004, pp. 457-470.
- Bernal, B., “Exégesis del Libro II de las notas a la Recopilación de leyes de Indias de Prudencio Antonio de Palacios” en *IV Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano*, Madrid, 1980, pp. 97-114.
- Bernard, M. G., “La Casa de Contratación de Sevilla, luego en Cádiz en el siglo XVIII”, en *Anuario de Estudios Americanos*, vol. 12 (1955), pp. 253-286.
- “Liste des Secrétaires d’Etat Espagnols de l’avénement des Bourbons jusque’en 1808”, en *Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos*, t. 52, nº 2 (1956), pp. 387-394.
- *Le Secrétariat d’État et le Conseil Espagnol des Indes (1700-1808)*, Ginebra-París, 1972.
- Bernardo Ares, J. M. de, “La Monarquía de Ryswick y el Estado Español de Utrecht. Dos formas diferentes de configurar política y económicamente a Europa”, en *Felipe V de Borbón, 1701-1746*, Córdoba, 2002, pp. 501-518.
- “La política colonial americana de los Borbones durante la Guerra de Sucesión a la Corona española”, en *Estudios de historia iberoamericana: XXXIV Reunión Anual de la Society for Spanish and Portuguese Historical Studies*, Madrid, 2004, vol. 2, pp. 174-177.

- “Felipe V: La transformación de un sistema de gobierno”, en *Felipe V y su tiempo. Congreso Internacional*, Zaragoza, 2004, pp. 967-990.
- “La España francesa y la Europa británica a comienzos del siglo XVIII. De la monarquía «paccionada» de los Austrias a la monarquía «nacional» de los borbones”, en *El Estado-Nación en dos encrucijadas históricas*, Madrid, 2006, pp. 153-186.
- Bethencourt, A., *Patiño en la política de Felipe V*, Madrid, 1954.
- Blas Ladrón de Guevara, A. de, *Historia de la muy noble y leal ciudad de Alfaró*, Zaragoza, 1915.
- Bolaños Mejías, C., “Fracaso de la reforma institucional a finales del reinado de Felipe III”, en *Anuario de Historia del Derecho Español*, n° 74 (2004), pp. 659-684.
- Borges Morán, P., “El Consejo de Indias y el paso de los misioneros a América durante el siglo XVI”, en *El Consejo de las Indias en el siglo XVI*, Valladolid, 1970, pp. 181-189.
- Bottineau, Y., *El arte cortesano en la España de Felipe V (1700-1746)*, Madrid, 1986.
- *El arte barroco*, Madrid, 1990.
- Bouza Álvarez, F., *Portugal en la monarquía hispánica (1580-1640), Felipe II, las Cortes de Tomar y la génesis del Portugal católico*, Madrid, 1987.
- *Portugal no tempo dos Filipes. Política, cultura, representações (1580-1668)*, Lisboa, 2000.
- Bruno, C., *El derecho público de la Iglesia en Indias. Estudio histórico-jurídico*, Salamanca, 1967.
- Burkholder, M., “The Council of the Indies in the Late Eighteenth Century: A new Perspective”, en *The Hispanic American Historical Review*, vol. 56, n° 3 (1976), p. 404-423.
- *Biographical Dictionary of Councilors of the Indies, 1717-1808*, Connecticut, 1986.
- y D. S. Chandler, *Biographical Dictionary of Audiencia Ministers in the Americas, 1687-1821*, Connecticut, 1982.
- Burrieta Mateos, J. M<sup>a</sup>, “Aportación documental para el estudio del Consejo de Guerra”, en *Actas del Congreso Internacional Carlos V. Europeísmo y universalidad*, Madrid, 2001, pp. 85-93.
- Caballero Juárez, J. A., *El régimen jurídico de las armadas de la Carrera de Indias. Siglos XVI y XVII*, México, 1997.

- Cabezas Fontanilla, S., “Las Secretarías del Consejo de Inquisición y su sistema de producción documental (siglos XV-XVII)” en *Boletín de la Sociedad Española de Ciencias y Técnicas Historiográficas*, nº 3 (2005), pp. 211-238.
- Cabrera Bosch, M<sup>a</sup> I., “El poder legislativo en la España del siglo XVIII (1716-1808)”, en *La economía española al final del antiguo régimen. Instituciones*, Madrid, 1982, t. IV, pp. 185-268.
- *El Consejo Real de Castilla y la Ley*, Madrid, 1993.
- Cadenas y Vicent, V., *Carlos I de Castilla, señor de las Indias*, Madrid, 1988.
- Callahan, W. J., “A Note on the Real y General Junta de Comercio, 1679-1814”, en *The Economic History Review*, vol. 21 (1968), pp. 519-528.
- Calvo Poyato, J., *Carlos II el Hechizado*, Madrid, 1996.
- *La vida y la época de Carlos II el Hechizado*, Madrid, 1998.
- “Jaue mate la expulsión de Nithard” en *La aventura de la historia*, nº 60 (2003), pp. 50-54.
- Candela Marco, M<sup>a</sup> V., “El Consejo de Aragón: asistencia social a sus miembros en tiempos de Carlos II”, en *Millars: Espai i historia*, nº 32 (2009), pp. 123-142.
- Cano, J., “El gobierno y la imagen de la Monarquía Hispánica en los viajeros de los siglos XVI y XVII. De Austrias a Borbones”, en *La monarquía de España y sus visitantes: siglos XVI al XIX*, Madrid, 2007, pp. 15-80.
- Cañas Murillo, J., “Juan Pablo Forner y su “Consulta [...] al Consejo de Castilla”, en *Dieciocho: Hispanic Enlightenment*, vol. 22, nº 1 (1999), pp. 17-24.
- Carande, R., “Gobernantes y gobernados en la hacienda de Castilla (1536-1665)”, en *Siete estudios de Historia de España*, Barcelona, 1969, pp. 85-116.
- Cárceles de Gea, B., “La crisis de la monarquía judicial: la consulta del Consejo de Castilla de 1683”, en *Norba, Revista de historia*, nº 5 (1984), pp. 137-154.
- “Juicio y debate del régimen polisinodial en las campañas políticas del reinado de Carlos II”, en *Predalbes. Revista d’història moderna*, nº 7 (1987), pp. 103-124.
- *Reforma y fraude fiscal en el reinado de Carlos II. La Sala de Millones (1658-1700)*, Madrid, 1995.
- “*Voluntas e iurisdictio*: obediencia, ejecución y cumplimiento de la voluntad real en la Corona de Castilla en el siglo XVII”, en

- Monarquía, imperio y pueblos en la España moderna*, Alicante, 1997, pp. 663-677.
- Cárdenas Gutiérrez, S., “De las juras reales al juramento constitucional: Tradición e innovación en el ceremonial novohispano, 1812-1820”, en *Cuadernos del Instituto de Investigaciones Jurídicas. La supervivencia del Derecho español en Hispanoamérica durante la época independiente*, México, 1997, pp. 63-93.
- Carlos Morales, C. J., “El Consejo de Hacienda de Castilla en el reinado de Carlos V (1523-1526)”, en *Anuario de Historia del Derecho Español*, nº 59 (1989), pp. 49-59.
- y Martínez Millán, J. “Los orígenes del Consejo de Cruzada (siglo XVI)”, en *Hispania: Revista española de historia*, vol. 51, nº 179 (1991), pp. 901-932.
- “Grupos de poder en el Consejo de Hacienda de Castilla: 1551-1556”, en *Instituciones y élites de poder en la monarquía hispana durante el siglo XVI*, 1992, pp. 107-136.
- *El Consejo de Hacienda de Castilla, 1523-1602: patronazgo y clientelismo en el gobierno de las finanzas reales durante el siglo XVI*, Valladolid, 1996.
- Carrasco Canals, C., “La burocracia española del siglo XVI al XVIII: (un examen de su ordenamiento a través del Consejo de Castilla 1532 a 1732)”, en *La burguesía española en la Edad Moderna*, vol. 2, 1996, pp. 875-892.
- Castagnoli, P., *Il Cardinale Giulio Alberoni. I. Il ministro dei Farnese*, Piacenza-Roma, 1929.
- Castañeda Delgado, P. y Marchena Fernández, J., *La jerarquía de la Iglesia en Indias: el episcopado americano (1500-1850)*, Madrid, 1992.
- Castañeda y G., D. H., “La bibliografía jurídica del Consejo de Indias”, en *Cuadernos del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Ejemplar dedicado a La supervivencia del Derecho español en Hispanoamérica durante la época independiente*, México, 1998, pp. 95-108.
- Castellano Castellano, J. L., “La carrera burocrática en la España del siglo XVIII”, en *Sociedad, administración y poder en la España del antiguo régimen. Hacia una nueva historia institucional. I Simposium Internacional del Grupo PAPE*, Granada, 1996, pp. 25-45.
- “El gobierno de los primeros años del reinado de Felipe V”, en *Felipe V de Borbón: la influencia francesa, 1701-1746*, Córdoba, 2002, pp. 129-142.
- Castro Monsalve, C. de, “Las Secretarías de los Consejos, las de Estado y Despacho y sus oficiales durante la primera mitad del siglo XVIII”, en *Hispania*, nº 201, vol. 59/1 (1999), pp. 193-215.

- “El Estado español en el siglo XVIII: su configuración durante los primeros años del reinado de Felipe V”, en *Historia y política: Ideas, procesos y movimientos sociales*, Madrid, nº 4 (2000), pp. 137-170.
- “Las primeras reformas institucionales de Felipe V: El marqués de Canales, 1703-1704”, en *Cuadernos dieciochescos* nº 1 (2000), p. 155-183.
- *A la sombra de Felipe V. José de Grimaldo, ministro responsable (1703-1726)*, Madrid, 2004.
- Cervera Pery, J., *La Casa de la Contratación y el Consejo de Indias (Las razones de un Superministerio)*, Madrid, 1997.
- Céspedes del Castillo, C., “La visita como institución indiana”, en *Anuario de Estudios Americanos*, nº 3 (1946), pp. 984-1025.
- *América hispánica (1492-1898)*, Barcelona, 1983.
- Chacón y Calvo, J. M<sup>a</sup>, *El Consejo de Indias y la Historia de América*, Santander, 1932.
- Clavero, B., “Sevilla, Concejo y Audiencia: Invitación a sus Ordenanzas de Justicia”, en *Ordenanzas de la Real Audiencia de Sevilla*, facsímil, Sevilla, 1995, pp. 7-95.
- Contreras, J., *Carlos II el Hechizado. Poder y melancolía en la corte del último Austria*, Madrid, 2003.
- Cordero Torres, J. M<sup>a</sup>, *El Consejo de Estado. Su trayectoria y perspectivas en España*, Madrid, 1944.
- Coronas González, S. M., “La crisis del antiguo régimen consultivo en la España constitucional”, en *Revista de Estudios Políticos* (Nueva Época) nº 57 (jul-sep 1987), pp. 177-190.
- *Estudios de Historia del Derecho Público*, Valencia, 1988.
- *Ilustración y Derecho. Los fiscales del Consejo de Castilla en el siglo XVIII*, Madrid, 1992.
- Cortés Alonso, V., “La documentación del Consejo de Indias en el Archivo Histórico Nacional”, en *Revista de Indias*, vol. 47, nº 179 (1987), pp. 27-35.
- Crespo Solana, A., *La Casa de Contratación y la Intendencia General de la Marina en Cádiz (1717-1730)*, Cádiz, 1996.
- Cuartas Rivero, M., “El Consejo de Hacienda en su primera época”, en *Hacienda Pública Española*, nº 74 (1982), pp. 255-266.
- Danvila, A., *El reinado relámpago. Luis I y Luisa Isabel de Orleáns (1707-1742)*, Madrid, 1952.



- Dedieu, J. P., “La Nueva Planta en su contexto. Las reformas del aparato del Estado en el reinado de Felipe V”, en *Manuscripts, Revista d’Història Moderna*, nº18, (2000), pp. 113-139.
- “Procesos y redes. Historia de las Instituciones administrativas de la época moderna. Hoy”, en *La pluma, la mitra y la espada. Estudios de Historia Institucional en la Edad Moderna*, Madrid, 2000, pp. 13-30.
- “Dinastía y elites de poder en el reinado de Felipe V”, en *Actas del Coloquio Internacional Los Borbones. Dinastía y memoria de nación en la España del siglo XVIII*, Madrid, 2002, pp. 381-399.
- “La muerte del letrado”, en *Letrados, juristas y burócratas en la España moderna*, Cuenca, 2005, pp. 479-512.
- Delgado Barrado, J. M., “La Cámara de Castilla: fuentes legislativas para un estudio institucional (1442-1759)”, en *Hispania: Revista española de historia*, vol. 52, nº 180 (1992), pp. 59-81.
- “América y el proyecto de compañías privilegiadas de José de Carvajal y Lancaster (1745-1754)”, en *Brocar*, nº 22 (1998), pp. 103-120.
- *José de Carvajal y Lancáster: testamento político o idea de un gobierno católico (1745)*, Córdoba, 1999.
- *El proyecto político de Carvajal: pensamiento y reforma en tiempos de Fernando VI*, Madrid, 2001.
- “Ensenada versus Carvajal: un tópico a debate”, en *El Catastro de Ensenada: magna averiguación fiscal para alivio de los vasallos y mejor conocimiento de los reinos: 1749-1756*, Madrid, 2002, pp. 101-112.
- “La transmisión de las obras de Carvajal: del Testamento Político a Mis pensamientos (1745 - 1753)”, en *Ministros de Fernando VI*, Córdoba, 2002, pp. 45-64.
- Desdevises Du Désert, G., “Les institutions de l’Espagne au XVIII siècle”, en *Revue Hispanique*, t. 70, nº 157 (1927), pp. 1-304.
- *La España del Antiguo Régimen*, Madrid, 1989.
- Díaz-Trechuela Spínola, M. L., “El Consejo de las Indias y Filipinas en el siglo XVI”, en *El Consejo de las Indias en el siglo XVI*, Valladolid, 1970, pp. 125-138.
- Dios, S. de, “Ordenanzas del Consejo de Castilla (1385-1490)”, en *Historia, Instituciones y Documentos*, nº 7 (1980), pp. 269-271.
- *El Consejo Real de Castilla (1385-1522)*, Madrid, 1982.
- *Fuentes para el estudio del Consejo Real de Castilla*, Salamanca, 1986.

- “El ejercicio de la gracia regia en Castilla entre 1250 y 1530, los inicios del Consejo de la Cámara”, en *Anuario de Historia del Derecho Español*, nº 60 (1990), pp. 323-352.
- *Gracia, merced y patronazgo real. La Cámara de Castilla entre 1474-1530*, Madrid, 1993.
- Domínguez Nafria, J. C., “La Junta de Guerra de Indias. Estudio institucional”, en *Temas de historia militar: 2º Congreso de Historia Militar*, Zaragoza, 1988, vol. 1, pp. 79-116.
- *El Real y Supremo Consejo de Guerra (siglos XVI-XVIII)*, Madrid, 2001.
- Domínguez Ortiz, A., “Testamento de Felipe IV”, en *Testamentos de los reyes de la Casa de Austria*, Madrid, 1982, vol. 4.
- *Política y hacienda de Felipe IV*, Madrid, 1983.
- Domínguez Ortiz, “La venta de cargos y oficios en Castilla y sus consecuencias económicas y sociales”, en *Instituciones y sociedad en la España de los Austrias*, Barcelona, 1985, pp. 137-184.
- Donoso Anes, A. “Organización y funcionamiento administrativo y contable de la Real Hacienda de Indias en tiempo Austrias de los a la luz de la legislación aplicable”, en *De Computis Revista Española de Historia de la Contabilidad*, nº 9 (diciembre 2008), pp. 48-96.
- Dubet, A., “¿La importación de un modelo francés? Acerca de algunas reformas de la administración española a principios del siglo XVIII”, en *Revista de Historia Moderna*, nº 25 (2007), pp. 207-233.
- *Un estadista francés en la España de los Borbones. Juan Orry y las primeras reformas de Felipe V (1701-1706)*, Madrid, 2008.
- Echevarria, M. A., *Flandes y la Monarquía Hispánica 1500-1713*, Madrid, 1998.
- Elliot J. H. y Peña, F. de la, *Memoriales y cartas el Conde Duque de Olivares. T.1 Política interior 1621 a 1627*, Madrid, 1978.
- *El conde-duque de Olivares*, Barcelona, 1990.
- *El mundo de los validos*, Madrid, 2000.
- Escudero López, J. A., *Los Secretarios de Estado y del Despacho (1474-1724)*, Madrid, 1973, 4 t.
- “Consultas al Consejo de Estado. Trámites irregulares en el reinado de Carlos II”, en *Homenaje al Dr. Dn. Juan Reglá Campistol*, Valencia, 1975, vol. 1, pp. 661-664.
- *Los orígenes del Consejo de Ministros en España. La Junta Suprema de Estado*, Madrid, 1979, 2 t.

- “La creación del Consejo de Portugal”, en *Boletim da Faculdade de Direito*, Coimbra nº 58 (1982), pp. 1-20.
- “Los orígenes del Consejo de la Suprema Inquisición”, en *Anuario de Historia del Derecho Español*, nº 53 (1983), pp. 237-288.
- “La reconstrucción de la administración central en el siglo XVIII”, en *Historia de España Menéndez Pidal*, Madrid, vol. 1, t. 29 (1985), pp. 81-175.
- “Los poderes de Lerma”, en *Homenaje al Profesor Alfonso García-Gallo*, Madrid, 1996, t. II, vol.1, pp. 47-104.
- “El Consejo de Cámara de Castilla y la reforma de 1588”, en *Anuario de Historia del Derecho Español*, nº 67 (1997), pp. 925-942.
- *Administración y Estado en la España moderna*, Madrid, 1999.
- *Felipe II. El rey en el despacho*, Madrid, 2002.
- “La creación del Consejo de Cámara de Indias”, en *Derecho y Administración Pública en las Indias Hispánicas, Actas del XII Congreso Internacional de Historia del Derecho Indiano*, Cuenca, 2002, vol. I, pp. 621-667.
- “Introducción. Privados, Validos y Primeros Ministros”, en *Los validos*, Madrid, 2004, pp. 15-34.
- “Los poderes de Lerma”, en *Los validos*, Madrid, 2004, pp. 121-176.
- “El gobierno del Consejo de Indias entre los siglos XVI y XVII”, en *Derecho, instituciones y procesos históricos: XIV Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano*, 2004, vol. 1, pp. 457-470.
- “Reformas del Consejo de Indias a la entrada del siglo XVIII”, en *La América hispana en los albores de la emancipación, Actas del IX Congreso de Academias Iberoamericanas de Historia*, 2005, pp. 675-684.
- “El rey y el gobierno central de la Monarquía en el Antiguo Régimen”, en *El Rey*, Barcelona, 2008, vol. 1, pp. 319-350.
- “Privados, validos y primeros ministros en la monarquía española de Antiguo Régimen: viejas y nuevas reflexiones”, en *Anales de la Real Academia de jurisprudencia y legislación*, nº 39 (2009), pp. 665-680.
- Espejo Hinojosa, C., “Enumeración y atribuciones de algunas juntas de la administración española desde el siglo XVI hasta el año 1800”, en *Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo del Ayuntamiento de Madrid*, nº 8 (1931), pp. 325-362.

- Esteban Estríngana, A., “Preludio de una pérdida territorial. La supresión del Consejo Supremo de Flandes a comienzos del reinado de Felipe V”, en *La pérdida de Europa: la guerra de Sucesión por la Monarquía de España*, 2007, pp. 335-378.
- Esteban Piñeiro, M., “Los oficios matemáticos en la España del siglo XVI”, en *Actes de les II Trobades d’Història de la Ciència i de la Tècnica*, Barcelona, 1992, pp. 239-252.
- Esteve Barba, F., *Historiografía Indiana*, Madrid, 1992.
- Ezquerria Revilla, I. J., “El limes doméstico de la administración castellana moderna: los porteros de Cámara y el Consejo Real”, en *Evolución y estructura de la Casa Real de Castilla, Estructura y oficios de la Casa de Castilla*, Madrid, 2010, vol. 2, pp. 809-836.
- Fayard, J., “La tentative de reforme du Conseil de Castilla sou le regne de Philippe V (1713-1715)”, en *Melanges de la Casa de Velázquez II* (1966), pp. 259-281.
- *Los miembros del Consejo de Castilla (1612-1746)*, Madrid, 1982.
- “Los ministros del Consejo Real de Castilla (1746-1788)”, en *Cuadernos de Investigación Histórica*, nº 6 (1982), pp. 109-136.
- Felices de la Fuente, M<sup>a</sup> del M., “La Cámara de Castilla, el rey y la creación de títulos nobiliarios en la primera mitad del siglo XVIII”, en *Hispania: Revista española de historia*, vol. 70, nº 236 (2010), pp. 661-686.
- Fernández Albaladejo, P., *Fragmentos de Monarquía*, Madrid, 1992.
- Fernández Álvarez, M., *Corpus Documental de Carlos V. (1516-1539)*, Salamanca, 1973-1981, 5 vols.
- Fernández Cano, V., “Disputa por la sede de la Casa de la Contratación en 1725”, en *Anuario de Estudios Americano*, nº 26 (1969), pp. 357-383.
- Fernández Conti, S., “El gobierno de los asuntos de la Guerra en Castilla durante el reinado del emperador Carlos V (1516-1558)”, en *Instituciones y Elites de Poder en la Monarquía Hispana durante el siglo XVI*, Madrid, 1992, pp. 47-105.
- *Los Consejos de Estado y Guerra de la Monarquía hispana durante la época de Felipe II: 1548-1598*, Madrid, 1998.
- Fernández Espeso, C. y Martínez Cardos, J., *Primera Secretaria de Estado. Ministerio de Estado. I. Disposiciones orgánicas (1705-1936)*, Madrid, 1972.
- Fernández García, J., *El cambio dinástico y sus repercusiones en el s. XVIII*, Madrid, 2001.

- Fernández Giménez, M<sup>a</sup> del C., “Notas sobre la reforma de Castilla en 1713”, en *Anuario de Historia del Derecho Español*, n° 69 (1999), pp. 547-578.
- “Problemas del Consejo de la Inquisición en el reinado de Felipe II, en *Revista de la Inquisición: (intolerancia y derechos humanos)*, n° 10 (2001), pp. 193-211.
- “Notas sobre el Consejo de Hacienda y la política financiera de Felipe IV”, en *Anuario de Historia del Derecho Español*, n° 73 (2003), pp. 315-350.
- “Valenzuela: valido o primer ministro”, en *Los validos*, Madrid, 2004, pp. 353-405.
- Fernández Pérez, I., *Aproximación histórica al desarrollo de la Astronomía en España*, tesis doctoral, Universidad de Santiago de Compostela, 2009.
- Feros Carrasco, A., “Almas gemelas: monarcas y favoritos en la primera mitad del siglo XVII”, en *España, Europa y el mundo atlántico: homenaje a John H. Elliott*, 2001, pp. 49-82.
- *El Duque de Lerma: realeza y privanza en la España de Felipe III*, Madrid, 2002.
- “El Duque de Lerma: valimiento y construcción de un nuevo paradigma político”, en *Los validos*, Madrid, 2004, pp. 63-80.
- Fortún Pérez de Ciriza, L. J., “El Consejo Real de Navarra entre 1494 y 1525”, en *Príncipe de Viana. Anejo (Ejemplar dedicado a: Homenaje a José María Lacarra)*, n° 2-3 (1986), pp. 165-180.
- Francisco Olmos, J. M<sup>a</sup> de, *Los miembros del Consejo de Hacienda (1722-1838) y organismos económico-monetarios*, Madrid, 1997.
- Franco Rubio, G. A., Reforma administrativa y nuevas instituciones: la Secretaría de Guerra y Marina en la España del Siglo XVIII”, en *El mundo hispánico en el siglo de las luces. Actas del Coloquio Internacional Unidad y diversidad en el mundo hispánico del siglo XVIII*, Salamanca, 1996, pp. 643-654.
- “La Secretaría Estado y del Despacho de Guerra en la primera mitad del siglo XVIII”, en *Sociedad, administración y poder en la España del antiguo régimen. Hacia una nueva historia institucional. I Symposium Internacional del Grupo P.A.P.E.*, Granada, 1996, pp. 131-156.
- “Civiles y militares en la alta administración española del siglo XVIII: La Secretaría de Estado y del Despacho de Marina”, en *Monarquía, Imperio y pueblos en la España Moderna*, Alicante, 1997, pp. 51-62.

- “Reformismo institucional y elites administrativas en la España del siglo XVIII: Nuevos oficios, nueva burocracia. La Secretaría Estado y del Despacho de Marina (1721-1808)”, en *La pluma, la mitra y la espada. Estudios de Historia Institucional en la Edad Moderna*, Madrid, 2000, pp. 95-130.
- Funes, J. M<sup>a</sup>, *El Supremo Consejo de Indias y su Recopilación de Leyes*, Santa Fe, 1954.
- Fuertes Arias, R., *Ensayo biográfico acerca del Excmo. Sr. Don Joseph del Campillo Cossío (1692-1743)*, Madrid, 1927.
- Gallego Anabitarte, A., “La distinción entre contencioso y gubernativo, principio fundamental del derecho europeo”, en *Poder y Derecho. Del Antiguo Régimen al Estado Constitucional en España. Siglos XVIII al XIX*, Madrid, 2009.
- Gálvez Ruiz, M<sup>a</sup> A., “Demanda de plazas en el Consejo de Indias: méritos y servicios para la promoción en la carrera judicial”, en *Chronica nova: Revista de Historia Moderna*, n<sup>o</sup> 35 (2009), pp. 311-331.
- Galván Rodríguez, E., “La Inquisición y el Consejo de Aragón en el reinado de Felipe II (1586-1589)”, en *Revista de la Inquisición: (intolerancia y derechos humanos)*, n<sup>o</sup> 11 (2005), pp. 11-22.
- Gambra Gutiérrez, A., “Don Luis Méndez de Haro, el Valido encubierto”, en *Los validos...*, pp. 277-310.
- Gan Giménez, P., “Los Presidentes del Consejo de Castilla”, en *Chronica Nova: Revista de historia moderna de la Universidad de Granada*, n<sup>o</sup> 1 (1968), pp. 7-31.
- “El Consejo Real de Castilla: tablas cronológicas (1499-1558)”, en *Chronica Nova: Revista de historia moderna de la Universidad de Granada*, n<sup>o</sup> 4-5 (1969), pp. 5-179.
- *El Consejo Real de Carlos V*, Granada, 1988.
- García Añoveros, J. M<sup>a</sup>, *La Monarquía y la Iglesia en América*, Valencia, 1991.
- García-Badell Arias, L. M<sup>a</sup>, “La frustración de Felipe II: el fracaso de la reforma del Consejo Real de Castilla de 1598”, en *Felipe II (1527-1598): Europa y la monarquía católica*, vol. 1, t. 1, 1998, pp. 307-340.
- “La Junta Grande de Competencias de Felipe IV: Rey, nobleza y Consejos en la Monarquía Católica”, en *Cuadernos de Historia del Derecho*, vol. extraordinario (2004), pp. 105-136.
- “Felipe V, la Nobleza Española y el Consejo de Castilla. La Explicación jurídica e histórica de la consulta que hizo el Real Consejo de Castilla, atribuida a Macanaz”, en *Cuadernos de Historia del Derecho*, n<sup>o</sup> 12 (2005), pp. 125-149.

- “La sucesión de Carlos II y las Cortes de Castilla”, en *Cuadernos de Historia del Derecho*, vol. 13 (2006), pp. 125-149.
- “Los primeros pasos de Felipe V en España”, en *Cuadernos de Historia del Derecho*, nº 15 (2008), pp. 45-127.
- “Luis XIV y la sucesión de la Monarquía española: los presupuestos de la Embajada de Amelot. 1705-1706, en *Cuadernos de Historia del Derecho*, vol. extraordinario (2010), pp. 147-171.
- García Cárcel, R., *Felipe V y los españoles. Una visión periférica del problema de España*, Barcelona, 2002.
- García Caso, V., *El ministro Campillo*, Asturias, 1988.
- García-Cuenca Ariati, T., “El Consejo de Hacienda (1476-1803)”, en *La Economía española al final del Antiguo Régimen. Instituciones*, vol. IV, 1982, pp. 403-502.
- García-Gallo, A., “La ley como fuente del derecho en Indias en el siglo XVI”, en *Anuario de Historia del Derecho Español*, nº 21-22 (1951-1952), pp. 607-730.
- “Cuestiones y problemas de la Historia de la Administración española”, en *Actas del I Symposium de Historia de la Administración*, Madrid, 1970, pp. 39-59.
- “Los principios rectores de la organización territorial de las Indias en el siglo XVI”, en *Anuario de Historia del Derecho Español*, nº 40 (1970), pp. 313-347.
- “Las Audiencias en Indias: su origen y caracteres”, en *Los orígenes españoles de las instituciones americanas. Estudios de Derecho indiano*, Madrid, 1987, pp. 889-951.
- “El Consejo y los Secretarios en el Gobierno de las Indias en los siglos XVI y XVII”, en *Los orígenes españoles de las instituciones americanas. Estudios de Derecho Indiano*, Madrid, 1987, pp. 777-809.
- “La división de las competencias administrativas en España e Indias en la Edad Moderna”, en *Los orígenes españoles de las instituciones americanas. Estudios de Derecho indiano*, Madrid, 1987, pp. 759-776.
- García-Gallo, C., “La información administrativa en el Consejo de Indias. Las «Noticias» de Diez de la Calle”, en *Actas del III Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano*, Madrid, 1973, pp. 361-376.
- “La legislación indiana de 1636 y la Recopilación de 1680”, *Anuario de Historia del Derecho Español*, nº 49 (1979), pp. 99-120.

- García Herrero, V., “Los recursos contra las resoluciones de la Cámara de Castilla. Un ejemplo de proceso judicial”, en *Espacio, tiempo y forma*, Serie IV, Historia moderna (2005-2006), pp. 271-299.
- García Marín, J., *La burocracia castellana bajo los Austrias*, Sevilla, 1976.
- García Pérez, R. D., *El Consejo de Indias durante los reinados de Carlos III y Carlos IV*, Pamplona, 1998.
- “Las nonatas ordenanzas del Consejo de Indias de Carlos IV”, en *Anuario de Estudios Americanos*, vol. 56, nº 2 (1999), pp. 651-672.
- “El Consejo Real de Navarra, entre el derecho del rey las libertades del reino (1800-1836)”, en *Anuario de Historia del Derecho Español*, nº 72 (2002), pp. 125-200.
- “El Consejo de Indias en la Corte de Felipe V: lógica jurídica y lógica política en el gobierno de América”, en *El Gobierno de un mundo. Virreinos y Audiencias en la América Hispánica*, Cuenca, 2004, pp. 167-201.
- “El gobierno y suprema jurisdicción del Consejo de Indias en el reinado de Carlos III: Apuntes para una revisión historiográfica”, en *Derecho, instituciones y procesos históricos: XIV Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano*, 2008, vol. 1, pp. 471-492.
- Giardina, C., “II Supremo Consiglio d’Italia”, en *Atti della Reale Accademia de Scienze, Lettere e Belle Arti de Palermo*, Palermo 1934, pp. 1-190.
- Gibert Sánchez de la Vega, R., *El antiguo Consejo de Castilla*, Madrid, 1964.
- Giménez Fernández, M., “Las regalías mayestáticas en el Derecho Canónico Indiano”, en *Anuario de Estudios Americanos*, nº 6 (1949), pp. 799-811.
- Gimeno Gómez, A., “El Consejo de Indias y la difusión del castellano”, en *El Consejo de las Indias en el siglo XVI*, Valladolid, 1970, pp. 191-210.
- Gómez Gómez M., “La Secretaría de la Cámara y de la Real Estampilla: Su relevancia en la Diplomática de Documentos Reales (ss. XVII-XVIII)”, en *Historia, instituciones, documentos*, nº 15 (1988), pp. 167-180.
- y González Ferrín, I., “El archivo secreto del Consejo de Indias y sus fondos bibliográficos”, en *Historia. Instituciones. Documentos*, nº 19 (1992), pp. 187-214.
- *Forma y expedición del documento en la Secretaría de Estado y del Despacho de Indias*, Sevilla, 1993.



- “Las imprentas oficiales: el caso del impresor del Consejo de Indias”, en *Historia, instituciones, documentos*, nº 22 (1995), pp. 247-260.
- *Actores del documento: oficiales, archiveros y escribientes de la Secretaría de Estado y del Despacho Universal de Indias durante el siglo XVIII*, Madrid, 2003.
- “Instrucciones para el gobierno del Presidente o Gobernador del Consejo de Indias”, en *Historia, Instituciones y Documentos*, nº 31 (2004), pp. 287-299.
- “La nueva tramitación de los negocios de Indias en el siglo XVIII: de la “Vía del Consejo” a la “Vía Reservada”, en *El Gobierno de un mundo. Virreinos y Audiencias en la América Hispánica*, Cuenca, 2004, pp. 203-250.
- “La Secretaría de la presidencia del Consejo de Indias y sus competencias documentales”, en *Derecho, instituciones y procesos históricos: XIV Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano*, 2008, vol. 1, pp. 493-514.
- *El sello y registro de Indias. Imagen y Representación*, República Checa, 2008.
- Gómez Rivero, R., “Las competencias del Ministerio de Justicia en el Antiguo Régimen”, en *Documentación Jurídica*, nº 65-66 (1990).
- “Cámara de Castilla (1588-1598)”, en *Anuario de Historia del Derecho Español*, nº 70 (2000), pp. 125-194.
- “Consejeros de Órdenes: procedimiento de designación (1598-1700)”, en *Hispania: Revista española de historia*, vol. 63, nº 214 (2003), pp. 657-744.
- “Lerma y el control de los cargos”, en *Anuario de Historia del Derecho Español*, nº 73 (2003), pp. 193-230.
- “Consejeros de Castilla de Felipe III”, en *Anuario de Historia del Derecho Español*, nº 74 (2004), pp. 97-138.
- “Lerma y el control de cargos”, en *Los validos*, Madrid, 2004, pp. 81-120.
- González Alonso, B., *El corregidor castellano (1348-1808)*, Madrid, 1970.
- “La fórmula «Obedézcase, pero no se cumpla» en el Derecho castellano de la Baja Edad Media”, en *Anuario de Historia del Derecho Español*, nº 50 (1980), pp. 469-487.
- González de Amenúa, A., *Un modelo de estadista, el Marqués de la Ensenada*, Madrid, 1917.

- González de San Segundo, M. A., “El Consejo de Aragón y la Orden de Montesa”, en *Anuario de Historia del Derecho Español*, no 67 (1997), pp. 901-924.
- “Notas sobre miembros del Consejo de Aragón en la administración indiana (1621-1707)”, en *Actas y estudios del XI Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano*, Buenos Aires, 1997, vol. 3, pp. 31-50.
- “Los consejeros de capa y espada en el Consejo de Aragón (la nobleza aragonesa en el gobierno de la Monarquía)”, en *Nobleza y sociedad en la España moderna III: Las Noblezas españolas, reinos y señoríos en la Edad Moderna*, Oviedo, 1999, pp. 145-194.
- “Ministros aragoneses en el Consejo de Hacienda (1641-1746)”, en *Anuario de Historia del Derecho Español*, nº 70 (2000), pp. 89-124.
- “Los aragoneses y la Fiscalía del Consejo de Indias en el reinado de Felipe IV”, en *XIII Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano: Actas y estudios*, 2003, vol. 1, pp. 709-726.
- González Enciso, A., *Felipe V: la renovación de España. Sociedad y economía en el reinado del primer Borbón*, Pamplona, 2003.
- González Fernández R. y Sánchez Gómez, M. P., “La Real Academia de la Historia y las Memorias de 1796: los godos en la idea de la identidad nacional española”, en *Historia y sociabilidad: homenaje a la profesora M<sup>a</sup> del Carmen Melendreras Gimeno*, Madrid, 2007, pp. 347-364.
- González Fuertes, M. A., “La Cámara de Castilla y el Real Patronato (1733-1759): de la prepotencia a la impotencia”, en *Brocar: Cuadernos de Investigación Histórica*, nº 25 (2001), pp. 75-108.
- *La organización institucional de la Cámara de Castilla en la época borbónica*, Córdoba, 2002.
- González González, A. F., “El Consejo de Indias en la crisis de los Consejos y en el nacimiento de la estructura administrativa contemporánea”, en *Boletín Americanista*, nº 28 (1978), pp. 169-171.
- González Palencia, A., “Extracto del Catálogo de los documentos del Consejo de Indias conservados en la Sección de Consejos del Archivo Histórico Nacional”, en *Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos*, 3<sup>a</sup> época, año 24, t. 41 (ene-dic 1920), pp. 417-448.
- González Quintana, M., “Don Juan Vázquez de Arce, un granadino presidente del Consejo de Indias”, en *El reino de Granada y el Nuevo Mundo: V Congreso Internacional de Historia de América*, Granada, 1994, vol. 1, pp. 223-236.

- Guglielmi, N., “La Curia Regia en León y Castilla”, en *Cuadernos de Historia del Derecho Español*, nº 23-24 (1955), pp. 116-267 y nº 28 (1958), pp. 5-42.
- Gutiérrez de Arce, M., “Regio patronato indiano (Ensayo de valoración histórico-canónico)”, en *Anuario de Estudios Americanos*, nº 11, (1954), pp. 107-168.
- Kallagan, W. J., “A note on the Real y General Junta de Comercio 1679-1814”, en *The Economic History Review*, nº 21 (dic. 1968), pp. 519-528.
- Hanke, L., “An unpublished document on the Junta de Hacienda de Indias”, en *Revista de Indias*, nº 20 (1960), pp. 135-141.
- Haring, C. H., *Comercio y navegación entre España y las Indias*, México, 1939.
- *El imperio hispánico en América*, Buenos Aires, 1966.
- Hera, A. de la, *El regalismo borbónico*, Madrid, 1963.
- “El regalismo indiano”, en *Ius canonicum*, nº 32-64 (1992), pp. 411-437.
- Heras Santos, J. L., “Indultos concedidos por la Cámara de Castilla en tiempos de los Austrias”, en *Studia historia. Historia moderna*, nº 1 (1983), pp. 115-142.
- *La justicia penal de los Austrias en la Corona de Castilla*, Salamanca, 1994.
- Heredia Herrera, A. M., “Los cedularios de oficio y de partes del Consejo de Indias: sus tipos documentales (s. XVII)”, en *Anuario de Estudios Americanos*, nº 29 (1972), pp. 1-60.
- *Catálogo de las Consultas del Consejo de Indias*, Sevilla, t. I (1529-1591) 1972; t. II (1591-1599) 1972; t.1 (1600-1604) 1983; t.2 (1605-1609) 1984; t.3 (1610-1616) 1984; t.4 (1617-1625) 1985; t.5 (1626-1630) 1987; t.6 (1631-1636) 1988; t.7 (1637-1643) 1990; t.8 (1644-1650) 1992; t.9 (1651-1656) 1992; t.10 (1657-1661) 1993; t.11 (1662-1668) 1994; t.12 (1669-1676) 1995.
- “La carta como tipo diplomático indiano”, en *Anuario de Estudios Americanos*, nº 77 (1977), pp. 65-95.
- *de estudios de diplomática indiana*, Sevilla, 1985.
- Hernández Esteve, E., *Creación del Consejo de Hacienda de Castilla (1523-1525)*, Madrid, 1983.
- Hernández Ruigómez, M., “Un sermón pronunciado ante el Consejo de Indias en vísperas de la ruptura de hostilidades entre las coronas española y británica (1739)”, en *Revista de Indias*, nº 42 (1982), pp. 203-222.

- Herrero y Rodríguez de Miñón, M., “Un presidente del Consejo de Indias”, en *Revista de Indias*, nº 13 (1943), pp. 555-562.
- Hespanha, A. M., *Vísperas del Leviatán. Instituciones y poder político (Portugal, siglo XVII)*, Madrid, 1989.
- Huerga Criado, P., “La etapa inicial del Consejo de Inquisición (1483-1498)”, en *Hispania Sacra*, vol. 37, nº 76 (1985), pp. 451-463.
- Ibañez de Ibero, C., *El marqués de la Ensenada*, Cádiz, 1944.
- Icaza Dufour F., (coord.), *Recopilación de las Leyes de los reynos de las Indias. Estudios histórico-jurídicos*, México, 1987.
- Jordana de Pozas, L., *El Consejo de Estado español y las influencias francesas a lo largo de su evolución*, Madrid, 1953.
- Kamen, H., *La guerra de sucesión en España 1700-1715*, Barcelona, 1974.
- *La España de Carlos II*. Barcelona, 1981.
- *Felipe V. El rey que reinó dos veces*, Madrid, 2000.
- Kantorowicz, E. H., *Los dos cuerpos del rey. Un estudio de teología política medieval*, Madrid, 1985.
- Kuethe, A. J., “La Casa de la Contratación en la época de su traslado a Cádiz”, en *La Casa de Contratación y navegación entre España y las Indias*, 2004, pp. 205-218.
- Laiglesia y Auset, F. de, *Estudios históricos (1515-1555)*, Madrid, 1918.
- Lalinde Abadía, J., “El Vicecanciller y la Presidencia del Consejo Supremo de Aragón”, en *Anuario de Historia del Derecho Español*, nº 3 (1960), pp. 175-248.
- Lecertúa Goñi, M<sup>a</sup> J., “Las elites Vasco-Navarras en la monarquía borbónica en el siglo XVIII: la familia Goyeneche”, en *Sancho el sabio: Revista de cultura e investigación vasca*, nº 19 (2003), pp. 67-94.
- León Sanz, M<sup>a</sup> V., *Entre Austrias y Borbones. El Archiduque Carlos y la Monarquía de España (1700-1714)*, Madrid, 1993.
- “El fin del pactismo: La autoridad real y los últimos años del Consejo de Aragón”, en *Pedralbes. Revista d'història Moderna*, nº 13-1 (1993), pp. 197-204.
- “La Secretaría de Estado y del Despacho Universal del Consejo de España (1713-1734)”, en *Cuadernos de Historia Moderna*, Madrid, nº 16 (1995), pp. 239-257.
- “Administración y política en el siglos XVIII: Las Secretarías de Estado y del Despacho”, en *Crónica Nova*, nº 22 (1995), pp.185-209.
- “La oposición a los Borbones españoles: los austracistas en el exilio”, en *Actas de la IV Reunión Científica de la Asociación Española*

- de Historia Moderna*, vol. 2. Disidencias y exilios en la España Moderna, Alicante, 1996, pp. 469-500.
- “Confiscación de bienes y represión borbónica en la Corona de Castilla a comienzos del siglo XVIII”, en *Cuadernos de Historia Moderna*, nº 21 (1998), pp. 127-175.
- “El reinado del archiduque Carlos en España: la continuidad de un programa dinástico de gobierno”, en *Manuscripts, Revista d’Història Moderna*, nº 18 (2000), pp. 41-62.
- Leturia S. I., P. de, *Relaciones entre la Santa Sede e Hispanoamérica. I. Época del Real Patronato 1493-1800*, Caracas, 1959.
- Lohmann Villena, G., “El índice general de los papeles del Consejo de Indias”, en *Revista de historia de América*, nº 51 (1961), pp. 137-162.
- López-Cordón Cortezo, M<sup>a</sup> V., “Administración y política en el siglo XVIII: Las Secretarías de Estado y del Despacho”, en *Crónica Nova*, 1995, nº 22, pp. 185-209.
- “Cambio social y poder administrativo en la España del siglo XVIII: las Secretarías Estado y del Despacho”, en *Sociedad, administración y poder en la España del antiguo régimen. Hacia una nueva historia institucional. I Simposium Internacional del Grupo PAPE*, Granada, 1996, pp. 111-130.
- “Oficiales y caballeros: la carrera administrativa en la España del siglo XVIII”, en *El Mundo Hispánico en el siglo de las Luces*, Madrid, 1996, vol. 2, pp. 843-854.
- “Secretarios y Secretaría en la Edad Moderna: de las manos del Príncipe a relojeros de la Monarquía”, en *Studia Historica*, nº 15 (1996), pp. 107-131.
- “Instauración dinástica y reformismo administrativo: la implantación del sistema ministerial”, en *Manuscripts, Revista d’Història Moderna*, Barcelona, nº 18 (2000), pp. 93-111.
- López Gómez, A., “Los fiscales del Consejo Real”, *Hidalguía*, nº 219 (1980), 193-243.
- López González, C. y Ruiz Rodríguez, J. I., “Felipe V y la reforma del Consejo de las Órdenes Militares”, en *Política y cultura en la época moderna: (cambios dinásticos, milenarismos, mesianismos y utopías)*, 2004, pp. 443-448.
- López, R. J., “José Patiño: un político al servicio del rey Felipe V”, en *Plenitudo veritatis: homenaje a Mons. Romero Pose*, Madrid, 2008, pp. 581-624.
- Lorenzo Cardoso, P. L., *La documentación judicial en la época de los Austrias*, Cáceres, 1999.

- *El documento real en la época de los Austrias (1516-1700)*, Cáceres, 2001.
- “La correspondencia administrativa en el Estado Absoluto Castellano (ss. XVI-XVII) en *La correspondencia den la historia. Modelos y prácticas de la escritura epistolar. Actas del VI Congreso Internacional de Historia de la Cultura Escrita*, Madrid, 2002, vol. 1, pp.121-144.
- Loupès, P., “Los mecanismos de la Cámara de Castilla en el siglo XVIII”, en *La pluma, la mitra y la espada: estudios de historia institucional en la Edad Moderna*, 2000, pp. 49-64.
- Luxán Meléndez, S. de, “La pervivencia del Consejo de Portugal durante la Restauración: 1640-1668”, en *Norba. Revista de Historia*, nº 8-9 (1987-1988), pp. 61-86.
- *La revolución de 1640 en Portugal, sus fundamentos sociales y sus caracteres nacionales. El Consejo de Portugal, 1580-1640*, Madrid, 1988.
- “Los funcionarios del Consejo de Portugal: 1580-1640”, en *Cuadernos de Investigación Histórica*, nº 12 (1989), pp. 197-228.
- Lynch, J., *Los Austrias (1598-1700)*, Barcelona, 1992.
- *La España del siglo XVIII*, Barcelona, 2004.
- *Edad Moderna: Crisis y recuperación, 1598-1808*, Barcelona, 2005.
- Manzanares Beriaín, A., *El Marqués de la Ensenada, estadista universal*, Logroño, 1982.
- Manzano Manzano, J., “Un documento inédito relativo a cómo funcionaba el Consejo de Indias, en *The Hispanic American Historical Review*, vol. 15, nº 3 (agosto 1935), pp. 313-351.
- “La visita de Ovando al Real Consejo de las Indias y el Código Ovandino”, en *Seminario de Historia de América*, Valladolid, 1970, pp. 111-123.
- “Cómo se formó la Ley primera de la Recopilación de Indias de 1680”, en *III Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano*, Madrid, 1973, pp. 281-296.
- *Historia de las Recopilaciones de Indias*, Madrid, 1991, 2 vols.
- Maravall, J. A., *La teoría española del Estado en el siglo XVII*, Madrid, 1944.
- “Los hombres de saber o letrados y la formación de la conciencia estamental, en *Estudios de Historia del pensamiento español*, Madrid, 1973, vol. 1, pp. 355-389.

- Mariluz Urquijo, J. M<sup>a</sup>, *Ensayo sobre los juicios de residencia indianos*, Sevilla, 1952.
- “Proyectos de Andrés de Pes sobre la organización del Consejo de Indias”, en *Actas del IX Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano*, Madrid, 1991, t. 1, pp. 357-365.
- “Hacia la unificación legislativa: la Recopilación de las Leyes de Indias” en *La formación de las sociedades iberoamericanas (1568-1700)*, Madrid, 1999, pp. 717-738.
- “El Tribunal Mayor y Audiencia Real de Cuentas de Buenos Aires, en *Revista Española de Control Externo*, vol. 2, n° 4 (2000), pp. 129-156.
- Martín Velasco, M., “La documentación histórica y la publicística del siglo XVIII, El IV Duque de Uceda y su correspondencia con don Félix de la Cruz Aedo”, en *Documentación de las Ciencias de la Información*, vol. 29 (2006), pp. 141-164.
- Martínez Cardós, J., “Un informe de Campillo sobre la propuesta de una compañía holandesa para comerciar con la América Española, en *Revista de Indias*, vol. 21, n° 84 (1961), pp. 255-69.
- “Don José del Campillo y Cossio”, en *Homenaje a Ciriaco Pérez-Bustamante*, II, Madrid, 1969 y en *Revista de Indias*, vol. 30, n° 119-122 (1970), pp. 503-42.
- Martínez Millán, J., “La Inquisición en Cataluña durante el siglo XVIII ¿Una institución en crisis?”, en *Pedralbes. Revista d'història moderna*, n° 4 (1984); pp. 63-92.
- y Sánchez Revilla, T., “El Consejo de Inquisición (1483-1700)”, en *Hispania Sacra*, vol. 36, n° 73 (1984), pp. 71-193.
- “Los miembros del Consejo de Inquisición durante el siglo XVII”, en *Hispania sacra*, vol. 37, n° 76 (1985), pp. 409-449.
- “Las elites de poder durante el reinado de Carlos V a través de los miembros del Consejo de Inquisición (1516-1558)”, en *Hispania: Revista española de historia*, vol. 48, n° 168 (1988), pp. 103-168.
- y Carlos Morales, C. J. de, “La administración de la Gracia Real: los miembros de la Cámara de Castilla (1543-1575)”, en *Instituciones y élites de poder en la monarquía hispana durante el siglo XVI*, Madrid, 1992, pp. 25-46.
- Martínez Navas, I., “El Tribunal del Santo Oficio de Logroño y don José del Campillo y Cossio”, en *Berceo*, n° 140 (2001), pp. 275-292.
- “La división de la materia administrativa en el reinado de Felipe V y la real Cédula de 18 de mayo de 1747”, en *XIII Congreso*

- del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano*, Puerto Rico, 2003, pp. 519-557.
- “Alberoni y el gobierno de la Monarquía española”, en *Revista electrónica del Departamento de Derecho de la Universidad de La Rioja*, nº 8 (2010), pp. 63-110.
- Martínez de Salinas, M<sup>a</sup> L., “La Sala del papel sellado del Consejo de Indias”, en *Poder y presión fiscal en la América española (siglos XVI, XVII y XVIII)*, *Trabajos del VI Congreso Internacional de Historia del Derecho Indiano*, Valladolid, 1986, pp. 455-464.
- Martínez Shaw C. y Alfonso Mola, M., *Felipe V*, Madrid, 2001.
- Maura y Gamazo, G., *Carlos II y su corte: ensayo de reconstrucción biográfica*, Madrid, 1911.
- *Vida y reinado de Carlos II*, Madrid, 1990.
- Medina Font, J., “Las reformas de la administración central indiana en el siglo XVIII”, en *Memorias del IV Congreso Internacional de Historia del Derecho Indiano*, *Revista de la Facultad de Derecho de México*, t. 26, nº 101-102 (ene-jun. 1976), pp. 437-445.
- Miquel, F., “Notas de Archivo, de la sección 2<sup>a</sup>. «Consejo supremo de Aragón»”, en *Analecta sacra tarraconensia: Revista de ciències histórico-eclesiàstiques*, vol. 31, nº 1 (1958), p. 169.
- Molas y Ribalta, P., “La Junta General de Comercio y Moneda. La Institución y los hombres”, en *Hispania. Revista de Historia*, vol. 38, nº extraordinario 9 (1978), pp. 1-38.
- “Instituciones y comercio en la España de Olivares”, en *Studia Historica. Historia Moderna*, nº 5 (1987), pp. 91-97.
- “Los fiscales de la Cámara de Castilla”, en *Cuadernos de Historia Moderna*, nº 14 (1993), pp. 11-28.
- “Consejos y Audiencias”, en *Studia Historica. Historia Moderna*, nº 15 (1996), pp. 9-21.
- “Aragón en la Corona de Castilla” en *Cuadernos Dieciochistas*, nº 2 (2001), pp. 13-35.
- *Bibliografía de Felipe V*, Madrid, 2004.
- Molina Argüello, C., “Visitas y residencias en Indias”, en *III Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano*, Madrid 1973, pp. 423-431.
- Molina Recio, R., “La alta nobleza castellana en el reinado de Carlos V: don Pedro Fernández de Córdoba, primer presidente del Consejo de Órdenes”, en *Carlos V europeísmo y universalidad*, Madrid, 2001, vol. 2, pp. 405-420.



- Morales Moya, A., "Política y administración en la España del siglo XVIII (notas para una sociología histórica de la administración pública)", en *Revista de Administración Pública*, nº 105 (1984), pp. 167-201.
- Moranchel Pocaterra, M., "Las Ordenanzas del Real y Supremo Consejo de Indias de 1636. Primera parte", en *Cuadernos de Historia del Derecho*, nº 8 (2001), pp. 273-379.
- "Las Ordenanzas del Real y Supremo Consejo de Indias de 1636. Segunda parte", en *Cuadernos de Historia del Derecho*, nº 9 (2002), pp. 247-364.
- "Gobierno, Justicia, Guerra y Hacienda: una nueva visión del "Indiferente General" del Archivo General de Indias", en *Cuadernos de Historia del Derecho*, nº 14 (2007), pp. 329-398.
- "El *deber de consejo* y su reflejo institucional en los dominios indianos (s. XVI-XVIII)", en *Cuadernos de Historia del Derecho*, vol. extraordinario (2010), pp. 403-420.
- Morazzani-Pérez Enciso, G., "El régimen de estancos en las Provincias de Venezuela y la nueva administración de Hacienda (siglo XVIII)", en *Cuadernos de Historia del Derecho*, nº 8 (2001), pp. 111-39.
- Muro Orejón, A., "Cedulario americano del siglo XVIII", en *Anuario de Historia del Derecho Español*, nº 23 (1953), pp. 37-54.
- "Las Ordenanzas de 1571 del Real y Supremo Consejo de las Indias", ed. facsimilar de la edición de 1585, en *Anuario de Estudios Americanos*, nº 14 (1957), pp. 363-423.
- "Las leyes nuevas de 1542-1543. Ordenanzas para la Gobernación de las Indias y buen tratamiento y conservación de los indios", en *Anuario de Estudios Americanos*, nº 16 (1959), pp. 561-619.
- *Cedulario americano del Siglo XVIII*, Sevilla, 1969, 3 vols.
- "La Recopilación de Indias de 1680", en *Justicia, Sociedad y Economía en la América Española (siglos XVI, XVII y XVIII)*, Valladolid, 1983, pp. 53-70.
- y Muro Romero, F., "Los libros impresos y manuscritos del Consejo de Indias", en *Anuario de Estudios Americanos*, nº 33 (1976) pp. 713-854. Publicado en tirada aparte en Sevilla, 1979.
- Muro Romero, F., "La administración bajo los primeros Borbones", en *Historia General de España y América*, Madrid, Rialp, 1983, t. XI-1, pp. 267-294.
- "Instituciones de gobierno y sociedad en Indias (1700-1760)", en *Estructuras, gobierno y agentes de la administración en la América española siglos XVI, XVII y XVIII*, Actas del VI Congreso del Instituto de Historia del Derecho Indiano, Valladolid, 1984, pp. 163-232.

- Nava Rodríguez, M<sup>a</sup> T., “La Real Academia de la Historia como modelo de unión formal entre el Estado y la cultura (1735-1792)”, en *Cuadernos de Historia Moderna y Contemporánea*, n<sup>o</sup> 8 (1987), pp. 127-155.
- “El poder y su precio: los orígenes de la Secretaría del Despacho de Hacienda (1700-1724), en *Gobernar en tiempos de crisis. Las quiebras dinásticas en el ámbito hispánico (1250-1808)*, Madrid, 2008, pp. 109-132.
- Navarro García, L., “Felipe V y el Consejo de Indias: el debate de las encomiendas”, en *Boletín de Temas Americanistas*, n<sup>o</sup> 3 (1983), pp. 5-11.
- “La política indiana”, en *Historia General de España y América*, RIALP, Madrid, 1983, t. XI-1, pp. 3-64.
- “El Consejo de Castilla y su crítica de la política indiana en 1768”, en *Homenaje al profesor Alfonso García-Gallo*, vol. 5 (1996), pp. 187-208.
- Novo Zaballos, J. R., “De confesor de la Reina a embajador extraordinario en Roma: La expulsión de Juan Everardo Nithard”, en *Centros de poder italianos en la monarquía hispánica (siglos XV-XVIII)*, Madrid, 2010, pp. 751-836.
- Ochagavía Fernández, D., “Don Cenón de Somodevilla, el Marqués de la Ensenada”, en *Berceo*, n<sup>o</sup> 13 (1949), pp. 511-524.
- Olaechea, R., *Las relaciones hispano-romanas en la segunda mitad del siglo XVIII*, Zaragoza, 1965.
- Ortega López, M., “Las consultas del Consejo Supremo de Aragón a finales del siglo XVI, en *Hernán Cortés y su tiempo. V Centenario (1485-1985)*, Cáceres, vol. 2 (1987), pp. 578-584.
- “La observación del reino de Aragón por el Consejo Supremo de Aragón durante el siglo XVII, en *Manuscripts Revista d'història moderna*, n<sup>o</sup> 7 (1988), pp. 51-69.
- “El Consejo Supremo de Aragón y la supervisión de la justicia del reino aragonés durante el siglo XVII, en *Manuscripts Revista d'història moderna*, n<sup>o</sup> 8 (1990), pp. 139-164.
- Ostolaza Elizondo, M<sup>a</sup> I., “El Consejo Real de Navarra en los siglos XVI y XVII: aspectos administrativos y tramitación documental”, en *Huarte de San Juan. Geografía e historia. Revista de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales*, n<sup>o</sup> 3-4 (1996-1997), pp. 105-164.
- “Administración del reino de Navarra en la etapa de los Austrias”, en *Hispania: Revista española de historia*, vol. 60, n<sup>o</sup> 205 (2000), pp. 563-596.

- Ots y Capdequí, J. M<sup>a</sup>, “Don Manuel Josef de Ayala y la Historia Natural de Nuestra Legislación de Indias”, en *The Hispanic American Historical Review*, vol. 3, n° 3 (ago 1920), pp. 281-332.
- *Historia del Derecho español en América y del Derecho indiano*, Madrid, 1968.
- Ozanam, D., *Les diplomates espagnols du XVIIIe siècle*, Madrid, 1998.
- “El marqués de la Ensenada”, en *Fernando VI y Bárbara de Braganza: un reinado bajo el signo de la paz. 1746-1759*, Madrid, 2002, pp. 299-307.
- Pelorson, J. M., *Los “letrados” los juristas castellanos bajo Felipe III*, Valladolid, 2008.
- Pérez, J., *Isabel y Fernando: Los Reyes Católicos*, Guipúzcoa, 1988.
- Pérez Bustamante, C., “Campillo y las Indias”, en *Revista de Indias*, vol. 1, n° 2 (1940), pp. 119-125.
- Pérez Canto M<sup>a</sup> P. y Vázquez Rodríguez de Alba, C., “El Consejo de Indias ante los decretos de Nueva Planta, 1714”, en *Boletín Americanista*, n° 38 (1988), pp. 227-245.
- Pérez de Tudela, J., “El Presidente Loaysa, la real provisión de Granada y la Leyes Nuevas”, en *El Consejo de las Indias en el siglo XVI*, Valladolid, 1970, pp. 49-60.
- Pérez Fernández-Turégano, C., *Patiño y las reformas de la administración en el reinado de Felipe V*, Madrid, 2006.
- Pérez Marcos, R. M<sup>a</sup>, “El duque de Uceda”, en *Los validos*, Madrid, 2004, pp. 177-24.
- Pérez Picazo, M. T., *La publicística española en la Guerra de Sucesión*, Madrid, 1966, 2 t.
- Pérez Picón, C., “Don Luis Méndez Quixada, presidente del Real Consejo de Indias”, en *El Consejo de las Indias en el siglo XVI*, Valladolid, 1970, pp. 89-108.
- Pérez-Prendes y Muñoz de Arranco, J. M., “Cortes de Castilla y Cortes de Cádiz”, en *Revista de Estudios Políticos*, Madrid, n° 126 (1962), pp. 321-432.
- *La monarquía indiana y el Estado de derecho*, Madrid, 1989.
- “«Facer Justicia». Notas sobre actuación gubernativa medieval”, en *Interpretatio. Revista de Historia del Derecho*, Madrid, n° 7-1, 1999.
- *Cortes de Castilla y León*, Madrid, 2000.

- Perona Tomás, D., “Apuntes sobre el perfil institucional de Alberoni, Riperdá y Godoy”, *Anuario de Historia del Derecho Español*, nº 68 (1998), pp. 83-150.
- *Los orígenes del Ministerio de Marina. La Secretaría de Estado y del Despacho de Marina 1714-1808*, Madrid, 1999.
- Pfandl, L., *Carlos II*, Madrid, 1947.
- Pietschmann, H., *Las reformas borbónicas y el sistema de intendencias en la Nueva España. Un estudio político administrativo*, México, 1992.
- “Los problemas políticos indianos, el humanismo político y la autoridad imperial”, en *Carlos V y la quiebra del humanismo político en Europa (1530-1558)*, Madrid, 2001, vol. IV, pp. 49-70.
- Pilo Gallisai, R., “La correspondencia del cardenal de Moncada en la conjura contra Nithard (1666-1668)”, en *La dinastía de los Austria: las relaciones entre la Monarquía Católica y el Imperio*, Madrid, 2011, vol. 2, pp. 1075-1088.
- Pizarro Llorente, H., “La pugna cortesana por el control del Consejo de Cruzada (1575-1585)”, en *Felipe II (1527-1598): Europa y la monarquía católica*, Madrid, 1998, vol. 1, t. 2, pp. 635-676.
- Ponce de León Armenta, L., “La metodología de la Investigación científica del Derecho”, en *Revista de la Facultad de Derecho de México*, nº 205-206 (ene-abr. 1996), pp. 61-83.
- Porras Arboledas, P. A., “El origen del Real Consejo de Órdenes de José López de Agurleta”, en *Cuadernos de Historia del Derecho*, nº 16 (2009), pp. 275-351.
- Postigo Castellanos, E., “El Consejo de las Órdenes Militares: fundación y reformas de Carlos V”, en *Hispania Sacra*, vol. 39, nº 80 (1987), pp. 537-565.
- *Honor y privilegio en la corona de Castilla. El Consejo de las Órdenes y los caballeros de hábito en el siglo XVII*, Soria, 1988.
- Pujol Aguado, J. A., “España en Cerdeña (1717-1720)”, en *Studia historica. Historia moderna*, nº 13 (1995), pp. 191-214.
- Pulido Bueno, I., *José Patiño: el inicio del gobierno político-económico ilustrado en España*, Huelva, 1997.
- Puñal Fernández, T., “Los oficios de la escritura: escribanos de Cámara en Castilla en el siglo XV”, en *Evolución y estructura de la Casa Real de Castilla, Estructura y oficios de la Casa de Castilla*, Madrid, 2010, vol. 2, pp. 737-760.
- Puyol Montero, J. M<sup>a</sup>, *El Consejo Real de Castilla en el reinado de Fernando VII*, Madrid, 1992, 2ts.

- Rabasco Valdés, J. M., “Una etapa del Consejo de Flandes de Borgoña: del Ministerio colateral a las ordenanzas de 1588”, en *Anuario de Historia Contemporánea*, nº 6 (1979), pp. 59-82.
- *El Real y Supremo Consejo de Flandes y de Borgoña*, tesis doctoral, Universidad de Granada, 1978.
- Ramos, D., “El problema de la fundación del Real Consejo de las Indias y la fecha de su creación”, en *El Consejo de las Indias en el siglo XVI*, Valladolid, 1970, pp. 11-48.
- “Retrato de un Presidente del Consejo siendo niño, con su padre, el Virrey Velasco en un lienzo guadalupano”, en *El Consejo de las Indias en el siglo XVI*, Valladolid, 1970, pp. 211-215.
- “La época de la Nueva Monarquía”, en *Historia General de España y América*, Rialp, Madrid, 1983, t. XI-1, pp. XI-XLI.
- Ramos Gómez, L. y Ruigómez Gómez, C., “Una propuesta a la corona para extender la mita y el tributo a negros, mestizos y mulatos (Ecuador, 1735-1748), en *Revista Complutense de Historia de América*, nº 25 (1999), pp. 99-110.
- Real Díaz, J. J., “El Consejo de Cámara de Indias: Génesis de su fundación”, en *Anuario de Estudios Americanos*, nº 19 (1962), pp. 725-758.
- “La política del Consejo de Indias, durante la presidencia de don Luis Méndez Quixada”, en *El Consejo de las Indias en el siglo XVI*, Valladolid, 1970, pp. 79-87.
- *Estudio diplomático del documento indiano*, Madrid, 1991.
- Reza, G. de la., “Síntesis y reajuste de la tradición anfictiónica. El proyecto de Paz perpetua del abate de Saint Pierre”, en *La Invención de la Paz. De la República Cristiana del Duque de Sully a la Sociedad de Naciones de Simón Bolívar*, México, 2009, pp. 51-60.
- Riba y García, C., *El Supremo Consejo de Aragón en el reinado de Felipe II*, Madrid, 1914.
- Rico-Avelló y Rico, C., *Carlos II. Sus “terciananas” hechizos y dolencias*, Madrid, 1948.
- Rico Linaje, R., “Publicación y publicidad de la ley en el siglo XVIII: La Gaceta de Madrid y el Mercurio Histórico-Político”, en *Anuario de Historia el Derecho Español*, nº 56 (1987), pp. 265-338.
- Rípodaz Adarnaz, D., “Los discursos exhortatorios del marqués de Bajamar (Una imagen del Consejo de las Indias bajo Carlos IV)”, en *Anuario Histórico Jurídico Ecuatoriano*, nº 6 (1980), pp. 241-269.
- “Contribución a la iconografía del Consejo de Indias”, en *Revista de Historia del Derecho*, nº 16 (1988), pp. 193-208.

- Rivero Rodríguez, M., “El Consejo de Aragón y la fundación del Consejo de Italia” en *Pedralbes. Revista d’Historia Moderna*, nº 9 (1989), pp. 57-90.
- *El Consejo de Italia (1556-1598)*, Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Madrid, 1991, inédita.
- “El Consejo de Italia: la gobernación de los dominios hispánicos”, en *Historia 16*, nº 197 (1992), pp. 55-58.
- “La Fundación del Consejo de Italia: Corte, grupos de poder y periferia (1536-1559)”, en *Instituciones y élites de poder en la monarquía hispana durante el siglo XVI*, 1992, pp. 199-222.
- “La visita del Consejo de Italia”, en *Felipe II (1527-1598): Europa y la monarquía*, vol. 1, t. 2, 1998, pp. 705-730.
- “El Consejo de Italia y la territorialización de la monarquía (1554-1600)”, en *Felipe II y el Mediterráneo*, vol. 3, 1999 (La monarquía y los reinos I), pp. 97-114.
- “La preeminencia del Consejo de Italia y el sentimiento de la nación italiana” en *La monarquía de las naciones: patria, nación y naturaleza en la monarquía de España*, 2004, pp. 505-528.
- Rodríguez Besné, J. R., *El Consejo Supremo y General Inquisición*, Madrid, 2000.
- “El Consejo de Inquisición: entre el sistema polisinodial y el Santo Oficio” en *Intolerancia e Inquisición*, Madrid, 2006, vol. 1, pp. 441-453.
- “Crisis y quebranto político del noveno conde de Oropesa”, en *Los validos*, Madrid, 2004, pp. 573-582.
- Rodríguez, C., “Las tarifas postales españolas hasta 1850 (del pago aplazado al franqueo previo)”, en *Investigaciones históricas. Época moderna y contemporánea*, nº 2 (1980), pp. 107-165.
- Rodríguez Casado V., “Notas sobre las relaciones de la Iglesia y el Estado en Indias en el reinado de Carlos III”, en *Revista de Indias*, nº 11 (1951), pp. 89-109.
- “La orden de San Francisco y la Visita General de reforma de 1769”, en *Anuario de Estudios Americanos*, nº 9 (1952), pp. 209-233.
- Rodríguez de Diego, J. L., “Evolución histórica del documento”, en *Anuario de Historia del Derecho Español*, nº 68 (1998), pp. 475-90.
- Rodríguez Flores, I., “Decisiones del Consejo de Indias en materia de visitas y residencias a través de la obra de Lorenzo Matéu I Sanz”, en *Actas del III Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano*, Madrid, 1973, pp. 433-474.

- Rodríguez Vicente, M<sup>a</sup> E., “El derecho de media anata”, en *Poder y Presión fiscal en la América española, siglos XVI, XVII y XVIII*, Madrid, 1986, pp. 465-504.
- Romero Tallafigo, M., “Guía de la Sección «Gobierno» (Audiencia y Virreinato de Santa Fe), del Archivo General de Indias, en *Historiografía y bibliografía americanista*, n° 28 (1984), pp. 3-46.
- Ruiz Martín, F., “Notas sobre el Consejo de Italia”, en *Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos*, n° 54 (1948), pp. 315-322.
- Rumeu de Armas, A., *La Real Academia de la Historia*, Madrid, 2001.
- Saavedra Zapater, J. C., “Entre el castigo y el perdón. Felipe V y los austracistas de la Corona de Castilla, 1706-1715”, en *Espacio, Tiempo y Forma*, Madrid, H<sup>a</sup> Moderna, serie IV, t. 13 (2000), pp. 469-497.
- Saenz Berceo, M<sup>a</sup> del C., “Juan Everardo Nithard, un valido extranjero”, en *Los validos*, Madrid, 2004, pp. 323-352.
- Salcedo Izu, J., *El Consejo Real de Navarra en el siglo XVI*, Pamplona, 1964.
- Salva Riera, J., *El marqués de la Ensenada*, Madrid, 1942.
- Sánchez Albornoz, C., “El Aula Regia y las asambleas políticas de los Godos”, en *Cuadernos de Historia del Derecho Español*, Buenos Aires 5 (1946), pp. 5-110
- “La Curia Regia Portuguesa. Siglos XII y XIII”, en *Investigaciones y documentos sobre las instituciones hispanas*, Madrid, Santiago de Chile, 1970, pp. 382-459.
- Sánchez-Arcilla Bernal, J., *Las Ordenanzas de las Audiencias de Indias (1511-1821)*, Madrid, 1992.
- “La administración de justicia inferior en la Ciudad de México a finales de la época colonial. I. La punición de la embriaguez en los libros de reos, (1794-1798)”, en *Cuaderno de Historia del Derecho*, n° 7 (2000), pp. 309-453.
- *Jacobus, id quod ego. Los caminos de la ciencia jurídica*, Madrid, 2003.
- Sánchez Bella, I., “La Jurisdicción de hacienda en las Indias (s. XVI y XVII)”, en *Anuario de Historia del Derecho Español*, n° 29 (1959), pp. 175-228.
- “El gobierno del Perú 1556-1564”, en *Anuario de Estudios Americanos* n° 17 (1960), pp. 407-524.
- “Antecedentes indianos del presidente Tello de Sandoval”, en *El Consejo de las Indias en el siglo XVI*, Valladolid, 1970, pp. 61-78.

- “El Consejo de las Indias y la hacienda indiana en el siglo XVI, en *El Consejo de las Indias en el siglo XVI*, Valladolid, 1970, pp. 139-172.
- *La organización financiera de las Indias*. Siglo XVI, México, 1990.
- *Iglesia y Estado en la América Española*, Pamplona, 1990.
- *Derecho Indiano. Estudios II. Fuentes. Literatura Jurídica. Derecho Público*, Pamplona, 1991.
- “La administración central”, en *Historia del Derecho Indiano*, Madrid, 1992, pp. 193-250.
- Sánchez González, M<sup>a</sup> D., *El deber de Consejo en el Estado Moderno. Las Juntas “Ad hoc” en España (1471-1665)*, Madrid, 1993.
- *Las Juntas ordinarias: Tribunales permanentes en la corte de los Austrias*, Madrid, 1995.
- “El deber del Consejo durante el siglo XVIII, partiendo del estudio de algunas normas borbónicas sobre Juntas ordinarias”, en *Anuario de Historia del Derecho Español*, nº 67-II (1997), pp. 1005-1025.
- Sánchez Marcos, F., “El Consejo de Aragón y Cataluña durante el virreinato de don Juan de Austria (1653-1656)”, en *Historia social de la administración española. Estudios sobre los siglos XVII y XVIII*, Barcelona, 1980, pp. 65-83.
- Sánchez Rivilla, T., *El Consejo de Inquisición (1483-1700): introducción al estudio social de sus miembros*, Madrid, 1995.
- Sanz Ayán, C., “Reformismo y Real Hacienda: Oropesa y Medinaceli”, en *Nobleza y Sociedad en la España Moderna*, Oviedo, 1995, pp. 157-183.
- Sarrablo Agráveles, E., *Catálogo de consultas del Consejo de Aragón*, Madrid, 1975.
- Schäfer, E., “El Consejo de Indias y el virrey Francisco de Toledo”, en *Investigación y Progreso*, año V, nº 7 (jul-ago 1931), pp. 103-106.
- “La plantilla del Consejo de Indias y las reformas intentadas durante el reinado de Carlos II”, en *Investigación y Progreso*, año VI, nº 4 (abril 1932), pp. 59-62.
- “Algunos conflictos de jurisdicción en la administración española durante los siglos XVI y XVII”, en *Investigación y Progreso*, año VI, nº 8, (agosto 1932), pp. 121-124.
- “El origen del Consejo de Indias. Ha existido la Junta de Indias?”, en *Investigación y Progreso*, año VII, nº3 (marzo 1933), pp. 71-75



- “La fundación del Consejo por Carlos V”, en *Investigación y Progreso*, año VII, nº 5 (mayo 1933), pp. 141-146.
- *El Consejo Real y Supremo de las Indias*, (1ª ed. 1935), Sevilla, 2003, 2 ts.
- “El cosmógrafo Jaime Juan”, en *Investigación y Progreso*, año X, nº 1 (enero 1936), pp. 10-15.
- Seco I. Seco Campos, “La provisión de papel sellado en América: comentario de unas cifras y la actividad burocrática indiana”, *Boletín de la ANABAD*, t. 44, nº 4 (1994), pp. 109-126.
- Sesé Alegre, J. M., *El Consejo Real de Navarra en el siglo XVIII*, Pamplona, 1994.
- Sevilla González, Mª C., “La Junta de Gobierno durante la minoría del rey Carlos II”, en *Los validos*, Madrid, 2004, pp. 583-615.
- Sierra Valenti, E., “El expediente administrativo. Esbozo de tipología documental”, en *Boletín de ANABAD*, año 19, nº 2, pp. 248-260.
- Solano, F. de, “Algunos aspectos de la política de consejero sobre la organización de la iglesia indiana en el siglo XVI”, en *El Consejo de las Indias en el siglo XVI*, Valladolid, 1970, pp. 173-180.
- Soldevilla, F., “El Document de fundació del Consell Suprem d'Aragó”, en *V Congreso de la Corona de Aragón*, Zaragoza, 1955, pp. 329-339.
- Solís Fernández, J., “Notas para el estudio del Consejo de Indias del archiduque Carlos de Austria”, en *Actas del VII Congreso Internacional de Historia de América. I. La Corona de Aragón y el Nuevo Mundo: del Mediterráneo a las Indias*, Zaragoza, 1996, pp. 685-710.
- “Elementos de la administración austro-española y la administración central castellana en 1710”, en *Cuadernos de Historia del Derecho*, vol. extraordinario (2010), pp. 647-658.
- Suárez Fernández, L., “La política en la crisis de la hegemonía española (s. XVII)”, en *Historia general de España y América*, Riapl, Madrid, 1991, t. 8, pp. 419-520.
- *Juan I de Trastámara: 1379-1390*, Palencia, 1994.
- Tanzi, H. J., “La Junta de Guerra de Indias”, en *Revista Chilena de Historia del Derecho*, nº 5 (1969), pp. 81-96.
- Tau Anzoátegui, V., *¿Qué fue el Derecho indiano?*, Buenos Aires, 1982.
- “La formación y promulgación de las leyes indianas: en torno a una Consulta del Consejo de Indias en 1794”, en *Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas*, nº 23, (1986), pp. 209-231.
- *La ley en América Hispana*, Buenos Aires, 1992.

- Taxonera, L. de, *Felipe V: fundador de una dinastía y dos veces rey de España*, Barcelona, 1942.
- 
- *El Cardenal Julio Alberoni, forjador de una nueva España en el siglo XVIII*, Madrid, 1945.
- *El Duque de Riperdá: el gobernante aventurero*, Madrid, 1945.
- Thompson, I. A. A., “The Armada and administrative reform: the Spanish council of war in the reign of Phillip II”, en *Historical English Review*, nº 82 (1967), pp. 698-725.
- “El contexto institucional de la aparición del ministro favorito”, en *El mundo de los validos*, Madrid, 2000, 25-42.
- “El valido arbitrista: El Conde-Duque de Olivares y el valimiento de su tiempo”, en *Los validos*, Madrid, 2004, pp. 311-322.
- Tomás y Valiente, F., “Notas sobre las ventas de oficios públicos en Indias” en *III Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano, Actas y Estudios*, Madrid, 1973, pp. 377-421.
- “Ventas y renunciaciones de oficios públicos a mediados del siglo XVII”, en *Revista de la Facultad de Derecho de México*, 26, nº 101-102 (enero-junio 1976), pp. 727-53.
- “Venta de oficios públicos en Castilla durante los siglos XVII y XVIII”, en *Gobierno e instituciones en la España del Antiguo Régimen*, Madrid, 1980, pp. 151-177.
- *La venta de oficios en Indias (1492-1606)*, Madrid, 1982.
- “El gobierno de la monarquía y la administración de los reinos en la España del siglo XVII”, en *Historia de España Menéndez Pidal*, Madrid, 1982, vol. XXV, pp. 1-214.
- *Los validos en la monarquía española del siglo XVI. Estudio institucional*, Madrid, 1990.
- Torre Revello, J., *Ensayo bibliográfico sobre Juan de Solórzano y Pereira*, Buenos Aires, 1929.
- *Noticias históricas sobre la Recopilación de Indias*, Buenos Aires, 1929.
- Torres, B., *La Marina en el gobierno y administración de las Indias*, Madrid, 1992.
- Torres, P., *La Bula Omnímoda de Adriano VI en Indias*, Madrid 1948.
- Troyano Chicharro, J. M., “El papel del Marqués de Bedmar en el cambio dinástico y su presencia en el Consejo de Guerra”, en *El cambio dinástico y sus repercusiones en el s. XVIII*, Jaén, 2001, pp. 153-167.

- Valdeavellano, L. G. de, *Curso de historia de las instituciones españolas. De los orígenes al final de la Edad Media*, Madrid, 1970.
- Valdeón Barúque, J., *Los Trastámaras: el triunfo de una dinastía bastarda*, Madrid, 2001.
- Valero Torrijos, J., *Los órganos colegiados. Análisis histórico de la colegialidad en la organización pública española y régimen jurídico-administrativo vigente*, Madrid, 2002.
- Vallejo García-Hevia, J. M<sup>a</sup>, “El correo mayor de las Indias (1514-1768), en *Derecho y administración pública en las Indias hispánicas*, Cuenca, 2002, vol. 2, pp. 1785-1810.
- Valsecchi, F., “La política italiana de Alberoni: aspectos y problemas” en *Cuadernos de investigación histórica*, n° 2 (1978), pp. 479-494.
- Vas del Mingo M. M. y Luque Talaván, M., “Análisis de la Miscelánea de Manuel José de Ayala conservada en la real biblioteca (palacio real de Madrid), en *IX Congreso Internacional de Historia de América*, 2002, vol. 1, pp. 285-292.
- Vélez Jiménez, P., *Historiografía americanista en España, 1755-1936*, Madrid, 2007.
- Vicens Vives, J., “Estructura administrativa estatal en los siglos XVI y XVII”, en *Obra dispersa*, Madrid, 1971, vol. 2, pp. 359-377.
- Vicent López, I. M<sup>a</sup>, “Felipe V y la Monarquía Católica durante la Guerra de Sucesión: una cuestión de «estilo»”, en *Espacio, Tiempo y Forma*, Madrid, serie IV, H<sup>a</sup> Moderna, t. 7 (1994), pp. 397-424.
- Villapalos Salas, G., *Los recursos contra los actos de gobierno en la Baja Edad Media*, Madrid, 1976.
- “Los recursos en materia administrativa en Indias en los siglos XVI y XVII”, en *Anuario de Historia del Derecho Español*, n° 46 (1976), pp. 5-76.
- Villegas, J., “Consultas del Consejo de Indias al Rey para nombrar a los arzobispos y obispos de las iglesias de Indias, 1577-1601”, en *Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas*, n° 9, 1972, pp. 102-136.
- Voltes Bou, P., *Felipe V fundador de la España contemporánea*, Madrid, 1991.
- VV.AA., *Juan de Goyeneche y el triunfo de los navarros en la monarquía hispánica del siglo XVIII*, Pamplona, 2005.
- VV.AA., *Juristas Universales*, vol. 2. Juristas Modernos, Madrid, 2004.
- VV.AA., *Los validos*, Madrid, 2004.
- Weiss, J., “La *Qüestión entre dos Cavalleros*: Un nuevo tratado político del siglo XV, en *Revista de Literatura Medieval*, n° 4 (1992), pp. 9-42.

————— “La *Qüestión entre dos Cavalleros*: Un nuevo tratado político del siglo XV (II), en *Revista de Literatura Medieval*, nº 7 (1995), pp. 187-210.

Zorraquín Becú, R., *La organización judicial argentina en el período hispánico*, Buenos Aires, 1981.

Zumalacárregui, L., “Visitas y Residencias en el siglo XVI”, en *Revista de Indias*, nº 7 (1946), pp. 917-21.

## **VIII. APÉNDICE**

### **El personal del consejo de indias en el reinado de Felipe V (1700-1746)**

Creemos que para tener una comprensión más completa de la evolución que sufrió el Real y Supremo Consejo de Indias durante el reinado de Felipe V es importante contar con la información más particular que sea posible. Por ello nos ha parecido conveniente elaborar un “organigrama” del personal que laboraba todos los días en dicho órgano colegiado.

En un reinado tan convulso en sus primeros años debido a la guerra de Sucesión y después tan cambiante como consecuencia de las numerosas reformas a las que se sometió no sólo al Consejo indiano, sino a todas las estructuras de la administración real, la composición interna de dicho órgano de la administración no fue nada estable, muy al contrario repleto de modificaciones e incluso de contradicciones. De lo anterior se desprende que no contemos con una información homogénea dentro de los casi cincuenta años de reinado. Carecemos de datos completos entre los años de 1704 a 1717, sin embargo hemos intentado cubrir dichas lagunas a partir de referencias de algunas fuentes y de manera muy indirecta. En cambio para los años posteriores a 1717 existen numerosas fuentes de información tanto de la época, como de estudios historiográficos más modernos.

Mientras que para el estudio de los cargos más importantes del Consejos, esto es, los presidentes, consejeros, fiscales, secretarios y relatores contamos con una información más detallada entre los años de 1700 a 1717, no así para el personal subalterno y auxiliar en donde las nóminas han sido prácticamente nuestra única fuente de información.

Cada uno de los ministros y oficiales que formaron parte del Consejo de Indias debían poseer su título del nombramiento pues de ello dependía tomar posesión del empleo. Con el fin de homogenizar los datos colocamos junto al nombre del personaje respectivo la fecha que consta en el título de nombramiento y al lado la fecha de cesación del cargo misma que

normalmente era por muerte, pero también por ascenso a otro cargo, destitución o jubilación.

De una manera general, los textos y documentos que hemos utilizados para la confección del presente apéndice son

1. Los distintos decretos de reforma del Consejo de Indias. En ellos el monarca no solo daba estructura y organización al Consejo, sino que servía de medio para realizar los nombramientos correspondientes<sup>1</sup>.

2. Las nóminas que el propio Consejo de Indias confeccionaba<sup>2</sup>, así como las copias de los títulos de nombramiento entregados de sus ministros<sup>3</sup> y oficiales<sup>4</sup>. Documentación que se encuentra en el Archivo General de Indias dentro de la sección “Gobierno”.

3. Los títulos que los ministros y oficiales debían enviar a la Contaduría General de Valores para enterar el pago de la media anata<sup>5</sup>. Información que se ubica dentro del Archivo General de Simancas en la sección “Dirección General del Tesoro”.

4. Los apéndices que en sus respectivas obras elaboraron por una parte Schäfer<sup>6</sup> para la reconstrucción del organigrama del Consejo durante los

---

<sup>1</sup> Entre los más importantes de encuentran real decreto 06.03.1701 por el que se extingue la Cámara de Indias y reforma de los ministros del Consejo (AGI Indiferente General, 829, ff. 53v-56r; 827; 583 L. 3, ff. 73-77.). Real decreto composición del Consejo de Indias y de la Junta de Guerra. 02.07.1702 (A.G.I., Indiferente General, 583 L. 3, ff. 87-88). Real decreto de 06.03.1705 donde extingue la Cámara de Indias y se establece los salarios de los miembros del Consejo. (A.G.I., Indiferente General, 826). Real decreto de 23.09.1706 para que todos los tribunales queden con el número de ministros asignados en la última reforma. (A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 56r-56v; 583 L. 3 ff. 29-30). Real decreto de 10.11.1713 Dando regla y planta del número de señores ministros y salas de que debe componerse el Consejo de Indias (A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 58v-.62v; 827.). Real decreto 05.08.1715 reduciendo al Consejo a su antigua planta (A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 90r-97r; 827). Real decreto de 20.01.1717 reforma del Consejo de Indias (A.G.I., Indiferente General, 829, ff. 160r – 107; 542 L. 2, ff. 35-37. B.N., Mss. 19251. ff. 7-8. A. Muro Orejón, *Cedulario Americano...*, t. II, pp. 527-528. Lista de los oficiales que se compondría la Secretaría del Perú remitida el 01.05.1717. (B.N., Mss. 19.251, ff. 21-22. A.G.I., Indiferente General, 542, L. 2, ff. 61-62). Lista de los oficiales que se compondría la Secretaría del Perú remitida el 01.05.1717. (B.N., Mss. 19.251, f. 22.). Real decreto de 28.01.1738 proveyendo dos plazas de ministros togados (A.G.I., Indiferente General, 543 L. 3, ff. 275-278.).

<sup>2</sup> A.G.I., Indiferente General, 869A y 869B.

<sup>3</sup> A.G.I., Indiferente General, 865, 866 y 867.

<sup>4</sup> A.G.I., Indiferente General, 870 a 875.

<sup>5</sup> A.G.S., D.G.T., inventario 13, legajos 8 y 9.

<sup>6</sup> E. Schäfer, *El Real y Supremo...*, t. 1, pp. 333-370.

primeros años del reinado de Felipe V y el de Bernard<sup>7</sup> para los posteriores años.

5. Los diccionarios elaborados M. Bulkholder de los miembros de las Audiencias<sup>8</sup> y de los consejeros y fiscales del Consejo de Indias<sup>9</sup> fueron de vital importancia para obtener información a partir de 1717.

6. Los nombres de los frailes a quienes se les concedió la patente de comisario general de la orden de San Francisco en Indias fueron obtenidos de los valiosos artículos que el padre L. Arroyo publicó en la Revista Ibero-Americana<sup>10</sup>.

Somos conscientes que en el apéndice que a continuación se presenta existen errores de fechas, de los apellidos o de algunos de los datos incluidos, pero consideramos que es un primer intento por ordenar la información que se encuentra dispersa en diferentes archivos por lo que en algunos momentos resulta incompleta y contradictoria; empero es probable que con nuevas investigaciones lo seguiremos completando y perfeccionando.

---

<sup>7</sup> G. Bernard, *Le Secrétariat d'Etat...*, pp. 209-232. Para el caso de los secretarios del Consejo durante el siglo XVIII consultamos también a J. J. Real Díaz, *Estudio diplomático...*, pp. 132-33.

<sup>8</sup> M. A. Burkholder y D. S. Chandler, *Biographical Dictionary of Audiencia...*

<sup>9</sup> M. A. Burkholder, *Biographical Dictionary of Councilors...*

<sup>10</sup> Arroyo, L., "Comisarios Generales de Indias", en *Archivo Iberoamericano, Revista de Estudios Históricos 2ª época*, n° 46 (abr-jun 1952), pp. 129-172 y n° 47 (jul-sep 1952), pp. 257-296.

## AÑO 1700

Presidente	Francisco de Haro Guzmán y Toledo, marqués del Carpio [12.03.1699-01.11.1700]
Gran Canciller	Francisco de Haro, Guzmán y Toledo, marqués del Carpio [12.09.1688-05.09.1707] suspensión del cargo RD, el marqués continuó cobrando hasta 1711
Consejeros Capa y espada	Pedro Fernández de Velasco y Tobar, marqués del Fresno (camarista) [11.09.1687-04.01.1713 m.] Manuel Francisco de Lira (camarista) [19.06.1691-10.10.1703] Juan de Castro y Gallego (camarista) [13.01.1693-18.09.1706] Francisco de Haro, Guzmán y Toledo, marqués del Carpio [07.05.1695-18.09.1706] Manuel García Bustamante [22.08.1695-18.09.1706] Juan de Larrea (camarista) [18.04.1697-21.06.1706 m.] Alonso Carnero (camarista) [06.07.1695-28.04.1721 m.] Francisco Bernardo de Quirós (camarista) [18.03.1700-1710?] Baltasar Zúñiga y Guzmán, marqués de Valero y de Ayamonte [07.06.1700-16.08.1716; 1722-28.01.1724] Luis de Restorga [09.06.1700-?] José María Francisco de la Cerda Manrique de Lara, marqués de la Laguna, Conde de Paredes (camarista) [02.08.1695-18.09.1706]
Togados	Francisco Camargo y Paz (camarista) [13.09.1685-12.08.1701] José Díaz Ortega [09.10.1689-16.03.1702 m.] Martín Solís y Miranda [22.06.1696-12-02.1706 m.] Antonio Aranguren y Zubiate [08.04.1699-18.03.1701 m.] Mateo Ibáñez de Mendoza (supernumerario) [16.02.1700-18.09.1706] Alonso Pérez de Araciel [17.05.1700-13.07.1702 honorario] Diego Hermoso Romero y Aragón [22.04.1700-15.12.1705 m.]
Fiscal	Pedro de Gamarra y Arriaga [17.09.1699-25.06.1702]
Secretarios Nueva España	Domingo López de Caló y Mondragón [17.09.1699-01.11.1700] Manuel Aperregui [04.03.1700-18.09.1706]
Perú	Martín de Sierralta [13.08.1699-01.11.1700]
Contaduría	Pedro de Castro y Colona [21.12.1691-06.03.1701] Gabriel Francisco de Hontañón Enríquez [26.12.1695-06.03.1701] José Martínez de Angulo [21.11.1698-06.03.1701] Gonzalo Hurtado de Mendoza [08.07.1699-06.03.1701] Vicente de Cabrera [08.09.1699-06.03.1701] Juan Antonio Blanco [13.01.1685-15.06.1703 m.] José Cobo [14.12.1695-20.11.1704] Lorenzo Núñez [05.07.1697-11.01.1704 m.] Francisco Velasco Villar y Enciso (Contador honorario) [04.07.1695-15.02.1707 m.] Juan Muñiz [01.04.1696-14.08.1712 m.] Juan de Velasco y Angulo [10.07.1689-07.11.1716 m.] Luis Garzón de Astorga [22.02.1685-08.11.1719 m.] Antonio de Salazar [27.09.1688-30.07.1720 m.] Alonso de Buendía [07.12.1689-26.01.1729]
Tesorero	Diego Manuel González de Arce, marqués de Fuentehermosa [26.03.1680-07.11.1703]
Relatores	Agustín de Ceballos de Estrada [20.10.1676-12.12.1720] Francisco Serrano de Valencia [03.05.1685-01.01.1710 m.] Juan Villagutierre [10.03.1696-18.09.1706]
Capellán	Francisco Martínez Perona [24.02.1693-10.02.1725]
Comisario General orden Sn Francisco	Fray Alonso de Biezma [22.02.1700-1702]
Cronista	Luis de Salazar y Castro [12.02.1698-09.02.1734 m.]
Cosmógrafo	
Barrendero	Andrés Mateo [1689-]



## AÑO 1701

Presidente	Luis Francisco de la Cerda y Aragón, Duque de Medinaceli [29.11.1701-30.04.1703]
Gran Canciller	Francisco de Haro, Guzmán y Toledo, marqués del Carpio [12.09.1688-05.09.1707]
Consejeros Capa y espada	Pedro Fernández de Velasco y Tobar, marqués del Fresno (camarista) [11.09.1687-04.01.1713 m.] Manuel Francisco de Lira (camarista) [19.06.1691-10.10.1703] Juan de Castro y Gallego (camarista) [13.01.1693-18.09.1706] Francisco de Haro, Guzmán y Toledo, marqués del Carpio [07.05.1695-18.09.1706] Manuel García Bustamante [22.08.1695-18.09.1706] Alonso Carnero (camarista) [06.07.1695-28.04.1721 m.] Juan de Larrea (camarista) [18.04.1697-21.06.1706 m.] Baltasar Zúñiga y Guzmán, marqués de Valero y de Ayamonte [07.06.1700-16.08.1716; 1722-28.01.1724] José María Francisco de la Cerda Manrique de Lara, marqués de la Laguna, Conde de Paredes (camarista) [02.08.1695-18.09.1706]
Togados	Francisco Camargo y Paz (camarista) [13.09.1685-12.08.1701] José Díaz Ortega [09.10.1689-16.03.1702 m.] Martín Solís y Miranda [22.06.1696-12.02.1706 m.] Antonio Aranguren y Zubiate [08.04.1699-18.03.1701 m.] Mateo Ibáñez de Mendoza (supernumerario) [16.02.1700-18.09.1706] Alonso Pérez de Araciel [17.05.1700-13.07.1702 honorario] Diego Hermoso Romero y Aragón [22.04.1700-15.12.1705 m.]
Fiscal	Pedro de Gamarra y Arriaga [17.09.1699-25.06.1702]
Secretarios Nueva España	Manuel Aperregui [04.03.1700-18.09.1706]
Perú	Domingo López de Caló y Mondragón [01.11.1700-18.09.1706]
Contaduría	Pedro de Castro y Colona [21.12.1691-06.03.1701] Gabriel Francisco de Hontañón Enríquez [26.12.1695-06.03.1701] José Martínez de Angulo [21.11.1698-06.03.1701] Gonzalo Hurtado de Mendoza [08.07.1699-06.03.1701] Vicente de Cabrera [08.09.1699-06.03.1701] Juan Antonio Blanco [13.01.1685-15.06.1703 m.] José Cobo [14.12.1695-20.11.1704] Lorenzo Núñez [05.07.1697-11.01.1704 m.] Francisco Velasco Villar y Enciso (Contador honorario) [04.07.1695-15.02.1707 m.] Juan Muñiz [01.04.1696-14.08.1712 m.] Juan de Velasco y Angulo [10.07.1689-07.11.1716 m.] Luis Garzón de Astorga [22.02.1685-08.11.1719 m.] Antonio de Salazar [27.09.1688-30.07.1720 m.] Alonso de Buendía [07.12.1689-26.01.1729]
Tesorero	Diego Manuel González de Arce, marqués de Fuentehermosa [26.03.1680-07.11.1703]
Relatores	Agustín de Ceballos de Estrada [20.10.1676-12.12.1720] Francisco Serrano de Valencia [03.05.1685-01.01.1710 m.] Juan Villagutierre [10.03.1696-18.09.1706]
Capellán	Francisco Martínez Perona [24.02.1693-10.02.1725]
Comisario General orden Sn Francisco	Fray Alonso de Biezma [22.02.1700-1702]
Cronista	Luis de Salazar y Castro [12.02.1698-09.02.1734 m.]
Cosmógrafo	

## AÑO 1702

Presidente	Luis Francisco de la Cerda y Aragón, Duque de Medinaceli [29.11.1701-30.04.1703]
Gran Canciller	Francisco de Haro, Guzmán y Toledo, marqués del Carpio [12.09.1688-05.09.1707]
Consejeros Capa y espada	Pedro Fernández de Velasco y Tobar, marqués del Fresno [11.09.1687-04.01.1713 m] Manuel Francisco de Lira [19.06.1691-10.10.1703] Juan de Castro y Gallego [13.01.1693-18.09.1706] Francisco de Haro, Guzmán y Toledo, marqués del Carpio [07.05.1695-18.09.1706] Manuel García Bustamante [22.08.1695-18.09.1706] Alonso Carnero [06.07.1695-28.04.1721 m.] Juan de Larrea [18.04.1697-21.06.1706 m.] José María Francisco de la Cerda Manrique de Lara, marqués de la Laguna, Conde de Paredes (camarista) [02.08.1695-18.09.1706]
Togados	José Díaz Ortega [09.10.1689-16.03.1702 m.] Martín Solís y Miranda [22.06.1696-12-02.1706 m.] Mateo Ibáñez de Mendoza (supernumerario) [16.02.1700-18.09.1706] Alonso Pérez de Araciel [13.07.1702-04.01.1718 m.] Diego Hermoso Romero y Aragón [22.04.1700-15.12.1705 m.] Pedro Colón de Larriátegui [05.04.1702-?] Pedro de Gamarra y Arriaga [25.06.1702-18.09.1706 suspendido]
Fiscal	Mateo Ibáñez de Mendoza (supernumerario) [16.02.1700-18.09.1706] Manuel Gamboa y Aledo [06.07.1702-09.07.1703]
Secretarios Nueva España Perú Presidencia	Manuel Apérregui [04.03.1700-18.09.1706] Domingo López de Caló y Mondragón [01.11.1700-18.09.1706] Manuel de Ugarte Bernardo de Ezpeleta [30.11.1702-10.08.1704]
Contaduría	Juan Antonio Blanco [13.01.1685-15.06.1703 m.] José Cobo [14.12.1695-20.11.1704] Lorenzo Núñez [05.07.1697-11.01.1704 m.] Francisco Velasco Villar y Enciso (Contador honorario) [04.07.1695-15.02.1707 m.] Juan Muñiz [01.04.1696-14.08.1712 m.] Juan de Velasco y Angulo [10.07.1689-07.11.1716 m.] Luis Garzón de Astorga [22.02.1685-08.11.1719 m.] Antonio de Salazar [27.09.1688-30.07.1720 m.] Alonso de Buendía [07.12.1689-26.01.1729]
Tesorero	Diego Manuel González de Arce, marqués de Fuentehermosa [26.03.1680-07.11.1703]
Relatores	Agustín de Ceballos de Estrada [20.10.1676-12.12.1720] Francisco Serrano de Valencia [03.05.1685-01.01.1710 m.] Juan Villagutierre [10.03.1696-18.09.1706]
Capellán	Francisco Martínez Perona [24.02.1693-10.02.1725]
Comisario General orden Sn Francisco	Fray Alonso de Biezma [22.02.1700-1702] Fray Lucas Álvarez de Toledo [02.04.1702-1711]
Cronista	Luis de Salazar y Castro [12.02.1698-09.02.1734 m.]
Cosmógrafo	

### AÑO 1703

Presidente	Luis Francisco de la Cerda y Aragón, Duque de Medinaceli [29.11.1701-30.04.1703] Félix Fernández de Córdoba, Duque de Uceda (30.04.1703-18.09.1706)
Gran Canciller	Francisco de Haro, Guzmán y Toledo, marqués del Carpio [12.09.1688-- 05.09.1707]
Consejeros Capa y espada	Pedro Fernández de Velasco y Tobar, marqués del Fresno [11.09.1687-04.01.1713 m.] Manuel Francisco de Lira [19.06.1691-10.10.1703] Juan de Castro y Gallego [13.01.1693-18.09.1706] Francisco de Haro, Guzmán y Toledo, marqués del Carpio [07.05.1695-18.09.1706] Manuel García Bustamante [22.08.1695-18.09.1706] Alonso Carnero [06.07.1695-28.04.1721 m.] Juan de Larrea [18.04.1697-21.06.1706 m.] Baltasar Zúñiga y Guzmán, marqués de Valero y de Ayamonte [07.06.1700-16.08.1716; 1722-28.01.1724] Sebastián Ortega y Melgares [27.02.1703-?] José María Francisco de la Cerda Manrique de Lara, marqués de la Laguna, Conde de Paredes (camarista) [02.08.1695-18.09.1706]
Togados	Martín Solís y Miranda [22.06.1696-12-02.1706 m.] Mateo Ibáñez de Mendoza (supernumerario) [16.02.1700-18.09.1706] Alonso Pérez de Araciel [13.07.1702-04.01.1718 m.] Diego Hermoso Romero y Aragón [22.04.1700-15.12.1705 m.] Pedro de Gamarra y Arriaga [25.06.1702-18.09.1706 suspendido] Juan de Aguilera [05.02.1703-?] José Bolero y Muñoz [05.02.1703-18.09.1706] Manuel Gamboa y Aledo [09.07.1703-18.09.1706 exiliado] Ramón Portocarrero [29.08.1703-18.09.1706 suspendido]
Fiscal	Manuel Gamboa y Aledo [06.07.1702-09.07.1703]
Secretarios Nueva España Perú Presidencia	Manuel Apérregui [04.03.1700-18.09.1706] Domingo López de Caló y Mondragón [01.11.1700-18.09.1706] Bernardo de Ezpeleta [30.11.1702-10.08.1704]
Contaduría	Juan Antonio Blanco [13.01.1685-15.06.1703 m.] José Cobo [14.12.1695-20.11.1704] Lorenzo Núñez [05.07.1697-11.01.1704 m.] Francisco Velasco Villar y Enciso (Contador honorario) [04.07.1695-15.02.1707 m.] Juan Muñiz [01.04.1696-14.08.1712 m.] Juan de Velasco y Angulo [10.07.1689-07.11.1716 m.] Luis Garzón de Astorga [22.02.1685-08.11.1719 m.] Antonio de Salazar [27.09.1688-30.07.1720 m.] Alonso de Buendía [07.12.1689-26.01.1729]
Tesorero	Diego Manuel González de Arce, marqués de Fuentehermosa [26.03.1680-07.11.1703] Juan Velasco y Angulo [07.11.1703-30.11.1707]
Relatores	Agustín de Ceballos de Estrada [20.10.1676-12.12.1720] Francisco Serrano de Valencia [03.05.1685-01.01.1710 m.] Juan Villagutierre [10.03.1696-18.09.1706]
Capellán	Francisco Martínez Perona [24.02.1693-10.02.1725]
Comisario General orden Sn Francisco	Fray Lucas Álvarez de Toledo [02.04.1702-1711]
Cronista	Luis de Salazar y Castro [12.02.1698-09.02.1734 m.]
Cosmógrafo	

## AÑO 1704

Presidente	Félix Fernández de Córdoba, Duque de Uceda [30.04.1703-18.09.1706] Juan Pacheco, Duque de Uzeda
Gran Canciller	Francisco de Haro, Guzmán y Toledo, marqués del Carpio [12.09.1688-05.09.1707]
Consejeros Capa y espada	Pedro Fernández de Velasco y Tobar, marqués del Fresno [11.09.1687-04.01.1713 m.] Juan de Castro y Gallego [13.01.1693-18.09.1706] Francisco de Haro, Guzmán y Toledo, marqués del Carpio [07.05.1695-18.09.1706] Manuel García Bustamante [22.08.1695-18.09.1706] Alonso Carnero [06.07.1695-28.04.1721 m.] Juan de Larrea [18.04.1697-21.06.1706 m.] Baltasar Zúñiga y Guzmán, marqués de Valero y de Ayamonte [07.06.1700-16.08.1716; 1722-28.01.1724] José María Francisco de la Cerda Manrique de Lara, marqués de la Laguna, Conde de Paredes (camarista) [02.08.1695-18.09. 1706] Diego Jiménez de Encina, marqués de Casal. (supernumerario) [31.08.1704-18.09. 1706] Sancho de Castro y Losada (supernumerario) [31.08.1704-18.09. 1706]
Togados	Martín Solís y Miranda [22.06.1696-12-02.1706 m.] Mateo Ibáñez de Mendoza (supernumerario) [16.02.1700-18.09.1706] Alonso Pérez de Araciél [13.07.1702-04.01.1718 m.] Diego Hermoso Romero y Aragón [22.04.1700-15.12.1705 m.] Pedro de Gamarra y Arriaga [25.06.1702-18.09.1706 suspendido] José Bolero y Muñoz [05.02.1703-18.09.1706] Manuel Gamboa y Aledo [09.07.1703-18.09.1706 exiliado] Ramón Portocarrero [29.08.1703-18.09.1706 suspendido]
Fiscal	José Agustín de los Ríos [01.12.1704-18.09.1706]
Secretarios Nueva España Perú Presidencia	Manuel Apérregui [04.03.1700-18.09.1706] Domingo López de Caló y Mondragón [01.11.1700-18.09.1706] Bernardo de Ezpeleta [30.11.1702-10.08.1704] Manuel de Ugarte [10.08.1704-]
Contaduría	José Cobo [14.12.1695-20.11.1704] Lorenzo Núñez [05.07.1697-11.01.1704 m.] Francisco Velasco Villar y Enciso (Contador honorario) [04.07.1695-15.02.1707 m.] Juan Muñiz [01.04.1696-14.08.1712 m.] Alonso de Buendía (supernumerario) [28.02.1704-11.06.1715] Gabriel Francisco de Hontañón Enríquez [04.02.1703-11.06.1715 m.] Juan de Velasco y Angulo [10.07.1689-07.11.1716 m.] Luis Garzón de Astorga [22.02.1685-08.11.1719 m.] Antonio de Salazar [27.09.1688-30.07.1720 m.]
Tesorero	Juan Velasco y Angulo [07.11.1703-30.11.1707]
Relatores	Agustín de Ceballos de Estrada [20.10.1676-12.12.1720] Francisco Serrano de Valencia [03.05.1685-01.01.1710 m.] Juan Villagutierre [10.03.1696-18.09.1706]
Capellán	Francisco Martínez Perona [24.02.1693-10.02.1725]
Comisario General orden Sn Francisco	Fray Lucas Álvarez de Toledo [02.04.1702-1711]
Cronista	Luis de Salazar y Castro [12.02.1698-09.02.1734 m.]
Cosmógrafo	

**AÑO 1705**

Presidente	Félix Fernández de Córdoba, Duque de Uceda [30.04.1703-18.09.1706]
Gobernador	José de Sarmiento Valladares, Duque de Atrisco (Gobernador Interino) [31.08.1705-10.09.1708]
Gran Canciller	Francisco de Haro, Guzmán y Toledo, marqués del Carpio [12.09.1688-05.09.1707]
Consejeros Capa y espada	Pedro Fernández de Velasco y Tobar, marqués del Fresno [11.09.1687-04.01.1713 m.] Juan de Castro y Gallego [13.01.1693-18.09.1706] Francisco de Haro, Guzmán y Toledo, marqués del Carpio [07.05.1695-18.09.1706] Manuel García Bustamante [22.08.1695-18.09.1706] Alonso Carnero [06.07.1695-28.04.1721 m.] Juan de Larrea [18.04.1697-21.06.1706 m.] Baltasar Zúñiga y Guzmán, marqués de Valero y de Ayamonte [07.06.1700-16.08.1716; 1722-28.01.1724] José María Francisco de la Cerda Manrique de Lara, marqués de la Laguna, Conde de Paredes (camarista) [02.08.1695-18.09. 1706] Diego Jiménez de Encina, marqués de Casal. (supernumerario) [31.08.1704-18.09. 1706] Sancho de Castro y Losada (supernumerario) [31.08.1704-18.09. 1706] Antonio Cristóbal de Ubilla y Medina, marqués de Rivas (camarista en 22.12.1721) [13.02.1705-18.09.1706; rehabilitado en 1715-16.10.1726 m.]
Togados	Martín Solís y Miranda [22.06.1696-12-02.1706 m.] Mateo Ibáñez de Mendoza (supernumerario) [16.02.1700-18.09.1706] Alonso Pérez de Araciel [13.07.1702-04.01.1718 m.] Diego Hermoso Romero y Aragón [22.04.1700-15.12.1705 m.] Pedro de Gamarra y Arriaga [25.06.1702-18.09.1706 suspendido] José Bolero y Muñoz [05.02.1703-18.09.1706] Manuel Gamboa y Aledo [09.07.1703-18.09.1706 exiliado] Ramón Portocarrero [29.08.1703-18.09.1706 suspendido]
Fiscal	José Agustín de los Ríos [01.12.1704-18.09.1706]
Secretarios Nueva España Perú Presidencia	Manuel Apérregui [04.03.1700-18.09.1706] Domingo López de Caló y Mondragón [01.11.1700-18.09.1706]
Contaduría	Francisco Velasco Villar y Enciso (Contador honorario) [04.07.1695-15.02.1707 m.] Juan Muñiz [01.04.1696-14.08.1712 m.] Alonso de Buendía (supernumerario) [28.02.1704-11.06.1715] Gabriel Francisco de Hontañón Enríquez [04.02.1703-11.06.1715 m.] Juan de Velasco y Angulo [10.07.1689-07.11.1716 m.] Luis Garzón de Astorga [22.02.1685-08.11.1719 m.] Antonio de Salazar [27.09.1688-30.07.1720 m.]
Tesorero	Juan Velasco y Angulo [07.11.1703-30.11.1707]
Relatores	Agustín de Ceballos de Estrada [20.10.1676-12.12.1720] Francisco Serrano de Valencia [03.05.1685-01.01.1710 m.] Juan Villagutierre [10.03.1696-18.09.1706]
Capellán	Francisco Martínez Perona [24.02.1693-10.02.1725]
Comisario General orden Sn Francisco	Fray Lucas Álvarez de Toledo [02.04.1702-1711]
Cronista	Luis de Salazar y Castro [12.02.1698-09.02.1734 m.]
Cosmógrafo	

## AÑO 1706

Presidente	Félix Fernández de Córdoba, Duque de Uceda [30.04.1703-18.09.1706]
Gobernador	José de Sarmiento Valladares, Duque de Atrisco (Gobernador Interino) [31.08.1705-10.09.1708]
Gran Canciller	Francisco de Haro, Guzmán y Toledo, marqués del Carpio [12.09.1688-05.09.1707]
Consejeros Capa y espada	Pedro Fernández de Velasco y Tobar, marqués del Fresno [11.09.1687-04.01.1713 m.] Francisco de Haro, Guzmán y Toledo, marqués del Carpio [07.05.1695-18.09.1706] Baltasar Zúñiga y Guzmán, marqués de Valero y de Ayamonte [07.06.1700-16.08.1716; 1722-28.01.1724] José María Francisco de la Cerda Manrique de Lara, marqués de la Laguna, Conde de Paredes (camarista) [02.08.1695-18.09. 1706] Juan de Castro y Gallego [13.01.1693-18.09.1706] Manuel García Bustamante [22.08.1695-18.09.1706 exiliado] Juan de Larrea [18.04.1697-21.06.1706 m.] Diego Jiménez de Encina, marqués de Casal (supernumerario) [31.08.1704-18.09.1706 exiliado] Sancho de Castro y Losada (supernumerario) [31.08.1704-18.09. 1706 exiliado] Antonio Cristóbal de Ubilla y Medina, marqués de Rivas (camarista en 22.12.1721) [13.02.1705-18.09.1706 exiliado; rehabilitado en 1715-16.10.1726 m.] José de Escals [23.05.1706-18.09.1706] Antonio Oms Santa [19.01.1706-18.09.1706] Alonso Carnero [06.07.1695-28.04.1721 m.] José Agustín de los Ríos [27.09.1706-20.01.1717] Martín Solís y Miranda [22.06.1696-12-02.1706 m.] Mateo Ibáñez de Mendoza (supernumerario) [16.02.1700-18.09.1706] Alonso Pérez de Araciel [13.07.1702-04.01.1718 m.] Pascual de Villacampo [23.05.1706-18.09.1706 suspendido] Francisco de Dicastillo [05.06.1706-18.09.1706 suspendido] Pedro de Gamarra y Arriaga [25.06.1702-18.09.1706 suspendido y exiliado] José Bolero y Muñoz [05.02.1703-18.09.1706 exiliado] Manuel de Gamboa y Aledo [09.07.1703-18.09.1706 exiliado] Ramón Portocarrero [29.08.1703-18.09.1706 suspendido] José de Cossío Barreda [19.01.1706-18.09.1706 suspendido] Manuel de la Cruz Ahedo [27.09.1706-20.01.1717] Pedro de Ursúa [27.09.1706-?] José de Hualte, [27.09.1706-?] Luis Ramírez de Arellano [27.09.1706-?]
Togados	
Fiscal	José Agustín de los Ríos [01.12.1704-18.09.1706]
Secretarías	
Nueva España	Manuel Apérregui [04.03.1700-18.09.1706] Gaspar de Pinedo [15.10.1706-31.08.1713]
Perú	Domingo López de Caló y Mondragón [01.11.1700-18.09.1706] Bernardo Tinajero de la Escalera [15.10.1706-30.11.1714] Simón Mozo de la Torre (oficial tercero) (30.01.1706)
Contaduría	Gonzalo del Río y Lorenzana [30.07.1706-1706] Juan Francisco del Zerro [30.07.1706-1706] Francisco Velasco Villar y Enciso (Contador honorario) [04.07.1695-15.02.1707 m.] Juan Muñiz [01.04.1696-14.08.1712 m.] Alonso de Buendía (supernumerario) [28.02.1704-11.06.1715] Gabriel Francisco de Hontañón Enríquez [04.02.1703-11.06.1715 m.] Juan de Velasco y Angulo [10.07.1689-07.11.1716 m.] Luis Garzón de Astorga [22.02.1685-08.11.1719 m.] Antonio de Salazar [27.09.1688-30.07.1720 m.]
Tesorero	Juan Velasco y Angulo [07.11.1703-30.11.1707]
Relatores	Agustín de Ceballos de Estrada [20.10.1676-12.12.1720] Francisco Serrano de Valencia [03.05.1685-01.01.1710 m.] Juan Villagutierre [10.03.1696-18.09.1706] Juan de la Bría Chacón [18.09.1706-20.01.1717]
Capellán	Francisco Martínez Perona [24.02.1693-10.02.1725] Juan de Bustamante [capellán en ínterin 05.08.1706-23-09-1706]
Comisario General orden Sn Francisco	Fray Lucas Álvarez de Toledo [02.04.1702-1711]
Cronista	Luis de Salazar y Castro [12.02.1698-09.02.1734 m.]

## AÑO 1707

Presidente	Félix Fernández de Córdoba, Duque de Uceda [26.02.1707-?]
Gobernador	José de Sarmiento Valladares, Duque de Atrisco (Gobernador Interino) [31.08.1705-10.09.1708]
Gran Canciller	Francisco de Haro, Guzmán y Toledo, marqués del Carpio [12.09.1688-05.09.1707]
Consejeros Capa y espada	Pedro Fernández de Velasco y Tobar, marqués del Fresno [11.09.1687-04.01.1713 m.] Alonso Carnero [06.07.1695-28.04.1721 m.] Baltasar Zúñiga y Guzmán, marqués de Valero y de Ayamonte [07.06.1700-16.08.1716; 1722-28.01.1724] José Agustín de los Ríos [27.09.1706-20.01.1717] Manuel Mieses y Arias [10.03.1707-?] Tomás de. Pomar, marqués de Milán [26.07.1707-20.01.1717] Francisco Javier de Goyeneche y Balanza, marqués de Belzunce [11.11.1707-09.12.1715; 16.02.1722-05.05.1748 m.]
Togados	Alonso Pérez de Araciél [13.07.1702-04.01.1718 m.] Manuel de la Cruz Ahedo [27.09.1706-20.01.1717] José Agustín de los Ríos [27.09.1706-20.01.1717] José de Hualte [27.09.1706-?] Pedro de Ursúa [27.09.1706-?] Luis Ramírez de Arellano [27.09.1706-?] Miguel Calderón de la Barca [08.06.1707-20.01.1717] José Pastor [26.07.1707-01.08.1712 m.]
Fiscal	
Secretarios Nueva España	Gaspar de Pinedo [05.10.1706-25.06.1709] Bernardo Tinajero de la Escalera [05.10.1706-30.11.1714]
Perú	Simón Mozo de la Torre (oficial tercero) (30.01.1706)
Presidencia	
Contaduría	Francisco Velasco Villar y Enciso (Contador honorario) [04.07.1695-15.02.1707 m.] Juan Muñiz [01.04.1696-14.08.1712 m.] Alonso de Buendía (supernumerario) [28.02.1704-11.06.1715] Gabriel Francisco de Hontañón Enríquez [04.02.1703-11.06.1715 m.] Juan de Velasco y Angulo [10.07.1689-07.11.1716 m.] Luis Garzón de Astorga [22.02.1685-08.11.1719 m.] Antonio de Salazar [27.09.1688-30.07.1720 m.] José Manuel de Llano [22.12.1707-03.11.1729]
Tesorero	Juan Velasco y Angulo [07.11.1703-30.11.1707] Juan Francisco de Goyeneche [30.11.1707-25.03.1708] Francisco Javier de Goyeneche y Balanza, marqués de Belzunce [30.11.1707-09.12.1715]
Relatores	Agustín de Ceballos de Estrada [20.10.1676-12.12.1720] Francisco Serrano de Valencia [03.05.1685-01.01.1710 m.] Juan de la Bría Chacón [18.09.1706-20.01.1717]
Capellán	Francisco Martínez Perona [24.02.1693-10.02.1725]
Comisario General orden Sn Francisco	Fray Lucas Álvarez de Toledo [02.04.1702-1711]
Cronista	Luis de Salazar y Castro [12.02.1698-09.02.1734 m.]
Cosmógrafo	

## AÑO 1708

Presidente	
Gobernador	José de Sarmiento Valladares, Duque de Atrisco (Gobernador Interino) [31.08.1705-10.09.1708]
Consejeros	
Capa y espada	Pedro Fernández de Velasco y Tobar, marqués del Fresno (camarista) [11.09.1687-04.01.1713 m.] Alonso Carnero (camarista) [06.07.1695-28.04.1721 m.] Baltasar Zúñiga y Guzmán, marqués de Valero y de Ayamonte [07.06.1700-16.08.1716; 1722-28.01.1724] Tomás de Pomar, marqués de Milán [26.07.1707-20.01.1717] Francisco Javier de Goyeneche y Balanza, marqués de Belzunce [11.11.1707-09.12.1715; 16.02.1722-05.05.1748 m.] Juan de Ojalora Bravo de Laguna [23.08.1708-?]
Togados	Alonso Pérez de Araciél [13.07.1702-04.01.1718 m.] Manuel de la Cruz Ahedo [01.10.1706-20.01.1717] José Agustín de los Ríos [27.09.1706-20.01.1717] Miguel Calderón de la Barca [08.06.1707-20.01.1717] José Pastor [26.07.1707-01.08.1712 m.] Nicolás Manrique de Lara (supernumerario 24.07.1708-1713) [10.11.1713-20.01.1717]
Fiscal	
Secretarios	
Nueva España	Gaspar de Pinedo [05.10.1706-25.06.1709]
Perú	Bernardo Tinajero de la Escalera [05.10.1706-30.11.1714]
Presidencia	Simón Mozo de la Torre, (interino de la Secretaría del Perú) [24.05.1708]
Contaduría	Juan Muñiz [01.04.1696-14.08.1712 m.] Alonso de Buendía (supernumerario) [28.02.1704-11.06.1715] Gabriel Francisco de Hontañón Enríquez [04.02.1703-11.06.1715 m.] Juan de Velasco y Angulo [10.07.1689-07.11.1716 m.] Luis Garzón de Astorga [22.02.1685-08.11.1719 m.] Antonio de Salazar [27.09.1688-30.07.1720 m.] José Manuel de Llano [22.12.1707-03.11.1729]
Tesorero	Juan Francisco de Goyeneche [30.11.1707-25.03.1708] Francisco Javier de Goyeneche y Balanza, marqués de Belzunce [30.11.1707-09.12.1715]
Relatores	Agustín de Ceballos de Estrada [20.10.1676-12.12.1720] Francisco Serrano de Valencia [03.05.1685-01.01.1710 m.] Juan de la Bría Chacón [18.09.1706-20.01.1717]
Capellán	Francisco Martínez Perona [24.02.1693-10.02.1725]
Comisario General orden Sn Francisco	Fray Lucas Álvarez de Toledo [02.04.1702-1711]
Cronista	Luis de Salazar y Castro [12.02.1698-09.02.1734 m.]
Cosmógrafo	



**AÑO 1709**

Presidente	
Gobernador	
Consejeros	
Capa y espada	Pedro Fernández de Velasco y Tobar, marqués del Fresno (camarista) [11.09.1687-04.01.1713 m.] Alonso Carnero (camarista) [06.07.1695-28.04.1721 m.] Baltasar Zúñiga y Guzmán, marqués de Valero y de Ayamonte [07.06.1700-16.08.1716; 1722-28.01.1724] Tomás de. Pomar, marqués de Milán [26.07.1707-20.01.1717] Francisco Javier de Goyeneche y Balanza, marqués de Belzunce [11.11.1707-09.12.1715; 16.02.1722-05.05.1748 m.] Conde de Adanero [15.11.1709-?]
Togados	Alonso Pérez de Araciél [13.07.1702-04.01.1718 m.] Manuel de la Cruz Ahedo [01.10.1706-20.01.1717] José Agustín de los Ríos [27.09.1706-20.01.1717] Miguel Calderón de la Barca [08.06.1707-20.01.1717] José Pastor [26.07.1707-01.08.1712 m.] Nicolás Manrique de Lara (supernumerario 24.07.1708-1713) [10.11.1713–20.01.1717] José de Veitia y Linaje [22.03.1709-22.03.1711]
Fiscal	
Secretarios	
Nueva España	Gaspar de Pinedo [05.10.1706-25.06.1709] Bernardo Tinajero de la Escalera [02.07.1709-20.10.1709] Félix de la Cruz Aedo [05.11.1709-24.02.1711]
Perú	Bernardo Tinajero de la Escalera [05.10.1706-30.11.1714]
Presidencia	
Contaduría	Juan Muñiz [01.04.1696-14.08.1712 m.] Alonso de Buendía (supernumerario) [28.02.1704-11.06.1715] Gabriel Francisco de Hontañón Enríquez [04.02.1703-11.06.1715 m.] Juan de Velasco y Angulo [10.07.1689-07.11.1716 m.] Pedro Pablo de Herrera (Contador supernumerario) [27.08.1709-17.06.1718] Luis Garzón de Astorga [22.02.1685-08.11.1719 m.] Antonio de Salazar [27.09.1688-30.07.1720 m.] José Manuel de Llano [22.12.1707-03.11.1729]
Tesorero	Francisco Javier de Goyeneche y Balanza, marqués de Belzunce [30.11.1707-09.12.1715]
Relatores	Agustín de Ceballos de Estrada [20.10.1676-12.12.1720] Francisco Serrano de Valencia [03.05.1685-01.01.1710 m.] Juan de la Bría Chacón [18.09.1706-20.01.1717]
Capellán	Francisco Martínez Perona [24.02.1693-10.02.1725]
Comisario General orden Sn Francisco	Fray Lucas Álvarez de Toledo [02.04.1702-1711]
Cronista	Luis de Salazar y Castro [12.02.1698-09.02.1734 m.]
Cosmógrafo	

## AÑO 1710

Gobernador	Rodrigo Manuel Manrique de Lara, conde de Frigiliana [17.01.1710-10.11.1713]
Consejeros	
Capa y espada	Pedro Fernández de Velasco y Tobar, marqués del Fresno (camarista) [11.09.1687-04.01.1713 m.] Alonso Carnero (camarista) [06.07.1695-28.04.1721 m.] Baltasar Zúñiga y Guzmán, marqués de Valero y de Ayamonte [07.06.1700-16.08.1716; 1722-28.01.1724] Tomás de. Pomar, marqués de Milán [26.07.1707-20.01.1717] Francisco Javier de Goyeneche y Balanza, marqués de Belzunce [11.11.1707-09.12.1715; 16.02.1722-05.05.1748 m.] Manuel de Silva y Meneses [10.02.1710-20.02.1739] (camarista 22.12.1721)
Togados	Alonso Pérez de Araciel [13.07.1702-04.01.1718 m.] Manuel de la Cruz Ahedo [01.10.1706-20.01.1717] José Agustín de los Ríos [27.09.1706-20.01.1717] Miguel Calderón de la Barca [08.06.1707-20.01.1717] José Pastor [26.07.1707-01.08.1712 m.] Nicolás Manrique de Lara (supernumerario 24.07.1708-1713) [10.11.1713-20.01.1717] José de Veitia y Linaje [22.03.1709-22.03.1711]
Fiscal	
Secretarios	
Nueva España	Félix de la Cruz Aedo [05.11.1709-24.02.1711]
Perú	Bernardo Tinajero de la Escalera [05.10.1706-30.11.1714]
Presidencia	
Contaduría	Juan Muñiz [01.04.1696-14.08.1712 m.] Alonso de Buendía (supernumerario) [28.02.1704-11.06.1715] Gabriel Francisco de Hontañón Enríquez [04.02.1703-11.06.1715 m.] Juan de Velasco y Angulo [10.07.1689-07.11.1716 m.] Pedro Pablo de Herrera (Contador supernumerario) [27.08.1709-17.06.1718] Luis Garzón de Astorga [22.02.1685-08.11.1719 m.] Antonio de Salazar [27.09.1688-30.07.1720 m.] José Manuel de Llano [22.12.1707-03.11.1729]
Tesorero	Francisco Javier de Goyeneche y Balanza, marqués de Belzunce [30.11.1707-09.12.1715]
Relatores	Agustín de Ceballos de Estrada [20.10.1676-12.12.1720] Francisco Serrano de Valencia [03.05.1685-01.01.1710 m.] Juan de la Bría Chacón [18.09.1706-20.01.1717]
Abogado Pobres	Alfonso Castellanos y la Torres [16.03.1710-1715]
Capellán	Francisco Martínez Perona [24.02.1693-10.02.1725]
Comisario General orden Sn Francisco	Fray Lucas Álvarez de Toledo [02.04.1702-1711]
Cronista	Luis de Salazar y Castro [12.02.1698-09.02.1734 m.]
Cosmógrafo	

## AÑO 1711

Gobernador	Rodrigo Manuel Manrique de Lara, conde de Frigiliana [17.01.1710-10.11.1713]
Consejeros	
Capa y espada	Pedro Fernández de Velasco y Tobar, marqués del Fresno (camarista) [11.09.1687-04.01.1713 m.] Alonso Carnero (camarista) [06.07.1695-28.04.1721 m.] Baltasar Zúñiga y Guzmán, marqués de Valero y de Ayamonte [07.06.1700-16.08.1716; 1722-28.01.1724] Tomás de Pomar, marqués de Milán [26.07.1707-20.01.1717] Francisco Javier de Goyeneche y Balanza, marqués de Belzunce [11.11.1707-09.12.1715; 16.02.1722-05.05.1748 m.] Manuel de Silva y Meneses [10.02.1710-20.02.1739] (camarista 22.12.1721) Marqués de Monteleón [21.09.1711-20.01.1717]
Togados	Alonso Pérez de Araciel [13.07.1702-04.01.1718 m.] Manuel de la Cruz Ahedo [01.10.1706-20.01.1717] José Agustín de los Ríos [27.09.1706-20.01.1717] Miguel Calderón de la Barca [08.06.1707-20.01.1717] José Pastor [26.07.1707-01.08.1712 m.] Nicolás Manrique de Lara (supernumerario 24.07.1708-1713) [10.11.1713-20.01.1717] José de Veitia y Linaje [22.03.1709-22.03.1711] Fernando Ignacio Arango Queipo [21.04.1711-?] José de Munibé (supernumerario) [02.05.1711-20.01.1717] Diego de Zúñiga y Tobar [12.10.1711-22.12.1721]
Fiscal	Gonzalo Ramírez de Baquedano [20.05.1711-10.11.1713] Miguel de Santisteban Galindo, Fiscal supernumerario de la Secretaría de Nueva España (11.09.1711)
Secretarios	
Nueva España	Félix de la Cruz Aedo [05.11.1709-24.02.1711]
Perú	Bernardo Tinajero de la Escalera [05.10.1706-30.11.1714]
Presidencia	
Contaduría	Juan Muñiz [01.04.1696-14.08.1712 m.] Alonso de Buendía (supernumerario) [28.02.1704-11.06.1715] Gabriel Francisco de Hontañón Enríquez [04.02.1703-11.06.1715 m.] Juan de Velasco y Angulo [10.07.1689-07.11.1716 m.] Pedro Pablo de Herrera (Contador supernumerario) [27.08.1709-17.06.1718] Luis Garzón de Astorga [22.02.1685-08.11.1719 m.] Antonio de Salazar [27.09.1688-30.07.1720 m.] José Manuel de Llano [22.12.1707-03.11.1729]
Tesorero	Francisco Javier de Goyeneche y Balanza, marqués de Belzunce [30.11.1707-09.12.1715]
Relatores	Agustín de Ceballos de Estrada [20.10.1676-12.12.1720] Juan de la Bría Chacón [18.09.1706-20.01.1717] Manuel de Arredondo [31.10.1711-18.08.1734]
Abogado Pobres	Alfonso Castellanos y la Torres [16.03.1710-1715]
Capellán	Francisco Martínez Perona [24.02.1693-10.02.1725] Francisco de la Torre Ocón [supernumerario en las ausencias del titular 03.07.1711-06.06.1725]
Comisario General orden Sn Francisco	Fray Lucas Álvarez de Toledo [02.04.1702-1711] Fray José Sanz [04.12.1711-1721]
Cronista	Luis de Salazar y Castro [12.02.1698-09.02.1734 m.]
Cosmógrafo	

## AÑO 1712

Gobernador	Rodrigo Manuel Manrique de Lara, conde de Frigiliana [17.01.1710-10.11.1713]
Consejeros	
Capa y espada	Pedro Fernández de Velasco y Tobar, marqués del Fresno (camarista) [11.09.1687-04.01.1713 m.] Alonso Carnero (camarista) [06.07.1695-28.04.1721 m.] Baltasar Zúñiga y Guzmán, marqués de Valero y de Ayamonte [07.06.1700-16.08.1716; 1722-28.01.1724] Tomás de Pomar, marqués de Miaña [26.07.1707-20.01.1717] Francisco Javier de Goyeneche y Balanza, marqués de Belzunce [11.11.1707-09.12.1715; 16.02.1722-05.05.1748 m.] Manuel de Silva y Meneses [10.02.1710-20.02.1739] (camarista 22.12.1721) Marqués de Monteleón [21.09.1711-20.01.1717]
Togados	Alonso Pérez de Araciel [13.07.1702-04.01.1718 m.] Manuel de la Cruz Ahedo [01.10.1706-20.01.1717] José Agustín de los Ríos [27.09.1706-20.01.1717] Miguel Calderón de la Barca [08.06.1707-20.01.1717] José Pastor [26.07.1707-01.08.1712 m.] Nicolás Manrique de Lara (supernumerario 24.07.1708-1713) [10.11.1713-20.01.1717] José de Munibé (supernumerario 02.05.1711) [10.11.1713-20.01.1717] Diego de Zúñiga y Tobar [12.10.1711-22.12.1721]
Fiscal	Gonzalo Ramírez de Baquedano [20.05.1711-10.11.1713]
Secretarios	
Nueva España	Pinedo, Gaspar de [05.10.1706-31.08.1713]
Perú	Bernardo Tinajero de la Escalera [05.10.1706-30.11.1714]
Presidencia	
Contaduría	Juan Muñiz [01.04.1696-14.08.1712 m.] Alonso de Buendía (supernumerario) [28.02.1704-11.06.1715] Gabriel Francisco de Hontañón Enríquez [04.02.1703-11.06.1715 m.] Juan de Velasco y Angulo [10.07.1689-07.11.1716 m.] Pedro Pablo de Herrera (Contador supernumerario) [27.08.1709-17.06.1718] Luis Garzón de Astorga [22.02.1685-08.11.1719 m.] Antonio de Salazar [27.09.1688-30.07.1720 m.] José Manuel de Llano [22.12.1707-03.11.1729]
Tesorero	Francisco Javier de Goyeneche y Balanza, marqués de Belzunce [30.11.1707-09.12.1715]
Relatores	Agustín de Ceballos de Estrada [20.10.1676-12.12.1720] Juan de la Bría Chacón [18.09.1706-20.01.1717] Francisco Ramiro Valenzuela [31.10.1711-21.07.1739 m.] Manuel de Arredondo [31.10.1711-18.08.1734]
Abogado Pobres	Alfonso Castellanos y la Torres [16.03.1710-1715]
Capellán	Francisco Martínez Perona [24.02.1693-10.02.1725] Francisco de la Torre Ocón [supernumerario en ausencia del titular 03.07.1711-06.06.1725]
Comisario General orden Sn Francisco	Fray José Sanz [04.12.1711-1721]
Cronista	Luis de Salazar y Castro [12.02.1698-09.02.1734 m.]
Cosmógrafo	

**AÑO 1713**

Presidentes	Rodrigo Manuel Manrique de Lara, conde de Frigiliana [10.11.1713-08.05.1715] Alonso Pérez de Araciél [10.11.1713-08.05.1715] Gonzalo Machado [10.11.1713-08.05.1715]
Gobernador	Rodrigo Manuel Manrique de Lara, conde de Frigiliana [17.01.1710-10.11.1713]
Consejeros	
Capa y espada	Pedro Fernández de Velasco y Tobar, marqués del Fresno (camarista) [11.09.1687-04.01.1713 m.] Nicolás Manrique de Lara (supernumerario) [24.07.1708-20.01.1717] Alonso Carnero (camarista) [06.07.1695-28.04.1721 m.] Baltasar Zúñiga y Guzmán, marqués de Valero y de Ayamonte [07.06.1700-16.08.1716; 1722-28.01.1724] Tomás de Pomar, marqués de Miaña [26.07.1707-20.01.1717] Francisco Javier de Goyeneche y Balanza, marqués de Belzunce [11.11.1707-09.12.1715; 16.02.1722-05.05.1748 m.] Manuel de Silva y Meneses [10.02.1710-20.02.1739] (camarista 22.12.1721) Marqués de Monteleón [21.09.1711-20.01.1717] Manuel de Silva y Meneses [10.02.1710-20.02.1739] (camarista 22.12.1721) Conde de Aranero [21.09.1711] Joseph Grimaldo [21.09.1711] Francisco Antonio de Salcedo [21.09.1711]
Togados	Alonso Pérez de Araciél [13.07.1702-04.01.1718 m.] Manuel de la Cruz Ahedo [01.10.1706-20.01.1717] José Agustín de los Ríos [27.09.1706-20.01.1717] Miguel Calderón de la Barca [08.06.1707-20.01.1717] Nicolás Manrique de Lara [10.11.1713-20.01.1717] Juan de Otalora [10.11.1713] Fernando de Arango [10.11.1713] José de Munibé (supernumerario 02.05.1711) [10.11.1713-20.01.1717] Diego de Zúñiga y Tobar [12.10.1711-22.12.1721] Antonio Valcarcel Formento [10.11.1713] Gonzalo Machado [26.09.1713-10.11.1713] Diego de Rojas [10.11.1713-14.06.1734]
Fiscal	Gonzalo Ramírez de Baquedano [20.05.1711-10.11.1713] Martín de Miraval [10.11.1713]
Secretarios	
Nueva España	Gaspar de Pinedo [05.10.1706-31.08.1713] Diego Sebastián de Morales Velasco [31.08.1713-20.01.1717]
Perú	Bernardo Tinajero de la Escalera [05.10.1706-30.11.1714] Francisco Castejón [20.11.1713-20.01.1717]
Presidencia	
Contaduría	Alonso de Buendía (supernumerario) [28.02.1704-11.06.1715] Gabriel Francisco de Hontañón Enríquez [04.02.1703-11.06.1715 m.] Juan de Velasco y Angulo [10.07.1689-07.11.1716 m.] Pedro Pablo de Herrera (Contador supernumerario) [27.08.1709-17.06.1718] Luis Garzón de Astorga [22.02.1685-08.11.1719 m.] Antonio de Salazar [27.09.1688-30.07.1720 m.] Pedro de Perea Salazar (supernumerario) [01.06.1713-1720] José Manuel de Llano [22.12.1707-03.11.1729]
Abogado General	Pedro Gómez de la Caba [10.11.1713-01.12.1714] Baltasar de Acevedo [10.11.1713-01.05.1715]
Tesorero	Francisco Javier de Goyeneche y Balanza, marqués de Belzunce [30.11.1707-09.12.1715]
Relatores	Agustín de Ceballos de Estrada [20.10.1676-12.12.1720] Juan de la Bría Chacón [18.09.1706-20.01.1717] Francisco Ramiro Valenzuela [31.10.1711-21.07.1739 m.] Manuel de Arredondo [31.10.1711-18.08.1734]
Capellán	Francisco Martínez Perona [24.02.1693-10.02.1725] Francisco de la Torre Ocón [supernumerario en ausencia del titular 03.07.1711-06.06.1725]
Comisario General orden Sn Francisco	Fray José Sanz (04.12.1711-1721)
Cronista	Luis de Salazar y Castro [12.02.1698-09.02.1734 m.]
Cosmógrafo	

**AÑO 1714**

Presidentes	Rodrigo Manuel Manrique de Lara, conde de Frigiliana [10.11.1713-08.05.1715] Alonso Pérez de Araciel [10.11.1713-08.05.1715] Gonzalo Machado [10.11.1713-08.05.1715]
Consejeros Capa y espada	Pedro Fernández de Velasco y Tobar, marqués del Fresno (camarista) [11.09.1687-04.01.1713 m.] Nicolás Manrique de Lara (supernumerario) [24.07.1708-20.01.1717] Alonso Carnero (camarista) [06.07.1695-28.04.1721 m.] Baltasar Zúñiga y Guzmán, marqués de Valero y de Ayamonte [07.06.1700-16.08.1716; 1722-28.01.1724] Tomás de Pomar, marqués de Miaña [26.07.1707-20.01.1717] Francisco Javier de Goyeneche y Balanza, marqués de Belzunce [11.11.1707-09.12.1715; 16.02.1722-05.05.1748 m.] Manuel de Silva y Meneses [10.02.1710-20.02.1739] (camarista 22.12.1721) Marqués de Monteleón [21.09.1711-20.01.1717] Manuel de Silva y Meneses [10.02.1710-20.02.1739] (camarista 22.12.1721) Conde de Aranero [21.09.1711] Joseph Grimaldo [21.09.1711] Francisco Antonio de Salcedo [21.09.1711]
Togados	Alonso Pérez de Araciel [13.07.1702-04.01.1718 m.] Manuel de la Cruz Ahedo [01.10.1706-20.01.1717] José Agustín de los Ríos [27.09.1706-20.01.1717] Miguel Calderón de la Barca [08.06.1707-20.01.1717] Nicolás Manrique de Lara [10.11.1713-20.01.1717] Juan de Otalora [10.11.1713] Fernando de Arango [10.11.1713] José de Munibé (supernumerario 02.05.1711) [10.11.1713-20.01.1717] Diego de Zúñiga y Tobar [12.10.1711-22.12.1721] Antonio Valcarcel Formento [10.11.1713] Diego de Rojas [10.11.1713-14.06.1734]
Fiscal	Martín José de Mirabal y Espínola [18.03.1714-05.08.1715]
Secretarios Nueva España Perú	Diego Sebastián de Morales Velasco [31.08.1713-20.01.1717] Bernardo Tinajero de la Escalera [05.10.1706-30.11.1714] Francisco Castejón [20.11.1713-20.01.1717]
Presidencia	
Contaduría	Alonso de Buendía (supernumerario) [28.02.1704-11.06.1715] Gabriel Francisco de Hontañón Enríquez [04.02.1703-11.06.1715 m.] Juan de Velasco y Angulo [10.07.1689-07.11.1716 m.] Pedro Pablo de Herrera (Contador supernumerario) [27.08.1709-17.06.1718] Luis Garzón de Astorga [22.02.1685-08.11.1719 m.] Antonio de Salazar [27.09.1688-30.07.1720 m.] Pedro de Perea Salazar (supernumerario) [01.06.1713-1720] José Manuel de Llano [22.12.1707-03.11.1729]
Abogado General	Baltasar de Acevedo [10.11.1713-01.05.1715] Diego de Valdés [11.12.1714-05.08.1715]
Tesorero	Francisco Javier de Goyeneche y Balanza, marqués de Belzunce [30.11.1707-09.12.1715]
Relatores	Agustín de Ceballos de Estrada [20.10.1676-12.12.1720] Juan de la Bría Chacón [18.09.1706-20.01.1717] Francisco Ramiro Valenzuela [31.10.1711-21.07.1739 m.] Manuel de Arredondo [31.10.1711-18.08.1734]
Capellán	Francisco Martínez Perona [24.02.1693-10.02.1725] Francisco de la Torre Ocón [supernumerario en ausencia del titular 03.07.1711-06.06.1725]
Comisario General orden Sn Francisco	Fray José Sanz (04.12.1711-1721)
Cronista	Luis de Salazar y Castro [12.02.1698-09.02.1734 m.]
Cosmógrafo	

**AÑO 1715**

Presidentes	Rodrigo Manuel Manrique de Lara, conde de Frigiliana [10.11.1713-08.05.1715] Alonso Pérez de Araciel [10.11.1713-08.05.1715] Gonzalo Machado [10.11.1713-08.05.1715]
Consejeros	
Capa y espada	Antonio Cristóbal de Ubilla y Medina, marqués de Rivas (camarista en 22.12.1721) [13.02.1705-18.09.1706 cesado; rehabilitado en 1715-16.10.1726 m.] Pedro Fernández de Velasco y Tobar, marqués del Fresno (camarista) [11.09.1687-04.01.1713] Nicolás Manrique de Lara (supernumerario) [24.07.1708-20.01.1717] Alonso Carnero (camarista) [06.07.1695-28.04.1721 m.] Baltasar Zúñiga y Guzmán, marqués de Valero y de Ayamonte [07.06.1700-16.08.1716; 1722-28.01.1724] Tomás de Pomar, marqués de Miaña [26.07.1707-20.01.1717] Francisco Javier de Goyeneche y Balanza, marqués de Belzunce [11.11.1707-09.12.1715; 16.02.1722-05.05.1748 m.] Manuel de Silva y Meneses [10.02.1710-20.02.1739] (camarista 22.12.1721) Marqués de Monteleón [21.09.1711-20.01.1717] Manuel de Silva y Meneses [10.02.1710-20.02.1739] (camarista 22.12.1721) Conde de Aranero [21.09.1711] Joseph Grimaldo [21.09.1711]
Togados	Francisco Antonio de Salcedo [21.09.1711] Diego de Rojas [10.11.1713-14.06.1734] Alonso Pérez de Araciel [13.07.1702-04.01.1718 m.] Manuel de la Cruz Ahedo [01.10.1706-20.01.1717] José Agustín de los Ríos [27.09.1706-20.01.1717] Miguel Calderón de la Barca [08.06.1707-20.01.1717] Nicolás Manrique de Lara [10.11.1713-20.01.1717] Juan de Otalora [10.11.1713] Fernando de Arango [10.11.1713] José de Munibé (supernumerario 02.05.1711) [10.11.1713-20.01.1717] Diego de Zúñiga y Tobar [12.10.1711-22.12.1721] Antonio Valcarcel Formento [10.11.1713] Diego de Rojas [10.11.1713-14.06.1734] Gonzalo Machado [05.08.1715-29.12.1732] camarista a partir de 22.12.1721
Fiscal	Martín José de Mirabal y Espínola [18.03.1714-05.08.1715]
Secretarios	
Nueva España	Diego Sebastián de Morales Velasco [31.08.1713-20.01.1717]
Perú	Francisco Castejón [20.11.1713-20.01.1717]
Contaduría	Alonso de Buendía (supernumerario) [28.02.1704-11.06.1715] Gabriel Francisco de Hontañón Enríquez [04.02.1703-11.06.1715 m.] Juan de Velasco y Angulo [10.07.1689-07.11.1716 m.] Pedro Pablo de Herrera (Contador supernumerario) [27.08.1709-17.06.1718] Luis Garzón de Astorga [22.02.1685-08.11.1719 m.] Antonio de Salazar [27.09.1688-30.07.1720 m.] Pedro de Perea Salazar (supernumerario) [01.06.1713-1720] José Manuel de Llano [22.12.1707-03.11.1729]
Abogado General	Acevedo, Baltasar de (Abogado General) [10.11.1713-01.05.1715] Valdés, Diego de (Abogado General) [11.12.1714-05.08.1715] Chica, Juan de la (Abogado General) [30.05.1715-05.08.1715]
Abogado Pobres	Juan Manuel de la Chica [30.05.1715-12.11.1715] Julían de Cañaveras [12.11.1715-1718]
Tesorero	Francisco Javier de Goyeneche y Balanza, marqués de Belzunce [30.11.1707-09.12.1715] Miguel de Iriarte (Teniente de Tesorero) [09.12.1715-10.05.1716].
Relatores	Agustín de Ceballos de Estrada [20.10.1676-12.12.1720] Juan de la Bría Chacón [18.09.1706-20.01.1717] Francisco Ramiro Valenzuela [31.10.1711-21.07.1739 m.] Manuel de Arredondo [31.10.1711-18.08.1734]
Capellán	Francisco Martínez Perona [24.02.1693-10.02.1725] Francisco de la Torre Ocón [supernumerario en ausencia del titular 03.07.1711-06.06.1725]
Comisario General orden Sn Francisco	Fray José Sanz (04.12.1711-1721)
Cronista	Luis de Salazar y Castro [12.02.1698-09.02.1734 m.]
Cosmógrafo	Pedro de Ulloa [26.10.1715-1721m.]

## AÑO 1716

Presidente	
Gobernador	
Consejeros	Alonso Carnero (camarista) [06.07.1695-28.04.1721 m.]
Capa y espada	Baltasar Zúñiga y Guzmán, marqués de Valero y de Ayamonte [07.06.1700-16.08.1716; 1722-28.01.1724]
	Antonio Cristóbal de Ubilla y Medina, marqués de Rivas (camarista en 22.12.1721) [13.02.1705-18.09.1706; rehabilitado en 1715-16.10.1726 m.]
	Tomás de Pomar, marqués de Milán [26.07.1707-20.01.1717]
	Nicolás Manrique de Lara (supernumerario) [24.07.1708-20.01.1717]
	Manuel de Silva y Meneses [10.02.1710-20.02.1739] (camarista 22.12.1721)
	Marqués de Monteleón [21.09.1711-20.01.1717]
Togados	Alonso Pérez de Araciél [08.05.1715-04.01.1718 m.]
	José Agustín de los Ríos [27.09.1706-20.01.1717]
	Manuel de la Cruz Ahedo [01.10.1706-20.01.1717]
	Miguel Calderón de la Barca [08.06.1707-20.01.1717]
	José de Munibé (supernumerario 02.05.1711) [10.11.1713-20.01.1717]
	Diego de Zúñiga y Tobar [12.10.1711-22.12.1721]
	Gonzalo Machado [05.08.1715-29.12.1732] camarista a partir de 22.12.1721
	Diego de Rojas [10.11.1713-14.06.1734]
Fiscal	
Secretarios	
Nueva España	Diego Sebastián de Morales Velasco [31.08.1713-20.01.1717]
Perú	Francisco Castejón [20.11.1713-20.01.1717]
Presidencia	
Contaduría	Juan de Velasco y Angulo [10.07.1689-07.11.1716 m.]
	Pedro Pablo de Herrera (Contador supernumerario) [27.08.1709-17.06.1718]
	Luis Garzón de Astorga [22.02.1685-08.11.1719 m.]
	Antonio de Salazar [27.09.1688-30.07.1720 m.]
	Pedro de Perea Salazar (supernumerario) [01.06.1713-1720]
	José Manuel de Llano [22.12.1707-03.11.1729]
Tesorero	Francisco Javier de Goyeneche y Balanza, marqués de Belzunce [09.12.1715-20.01.1717]
Teniente tesorero	Miguel de Iriarte () [09.12.1715-10.05.1716].
Relatores	Agustín de Ceballos de Estrada [20.10.1676-12.12.1720]
	Juan de la Bría Chacón [18.09.1706-20.01.1717]
	Francisco Ramiro Valenzuela [31.10.1711-21.07.1739 m.]
	Manuel de Arredondo [31.10.1711-18.08.1734]
Abogado Pobres	Julián de Cañaveras [12.11.1715-1718]
Capellán	Francisco Martínez Perona [24.02.1693-10.02.1725]
	Francisco de la Torre Ocón [supernumerario en ausencia del titular 03.07.1711-06.06.1725]
Comisario General orden Sn Francisco	Fray José Sanz (04.12.1711-1721)
Cronista	Luis de Salazar y Castro [12.02.1698-09.02.1734 m.]
Cosmógrafo	Pedro de Ulloa [26.10.1715-1721m.]



**AÑO 1717 (antes de las reformas de 20.01 y 11.09.1717)**

Presidente	
Gobernador	
Consejeros	Manuel Padillo y Velasco (22.02.1717)
Capa y espada	Alonso Carnero (camarista) [06.07.1695-28.04.1721 m.] Antonio Cristóbal de Ubilla y Medina, marqués de Rivas (camarista en 22.12.1721) [13.02.1705-18.09.1706; rehabilitado en 1715-16.10.1726 m.] Tomás de Pomar, marqués de Milán [26.07.1707-20.01.1717] Nicolás Manrique de Lara (supernumerario) [24.07.1708-20.01.1717] Manuel de Silva y Meneses [10.02.1710-20.02.1739] (camarista 22.12.1721) Marqués de Monteleón [21.09.1711-20.01.1717]
Togados	Alonso Pérez de Araciel [08.05.1715-04.01.1718 m.] José Agustín de los Ríos [27.09.1706-20.01.1717] Manuel de la Cruz Ahedo [01.10.1706-20.01.1717] Miguel Calderón de la Barca [08.06.1707-20.01.1717] José de Munibé (supernumerario 02.05.1711) [10.11.1713-20.01.1717] Diego de Zúñiga y Tobar [12.10.1711-22.12.1721] Gonzalo Machado [05.08.1715-29.12.1732] camarista a partir de 22.12.1721 Diego de Rojas [10.11.1713-14.06.1734]
Fiscal	Juan Caballero Soto 13.04.1717
Agente Fiscal	Cristóbal Navarro Joseph Cornejo [03.02.1716-25.09.1729 m.] Francisco Pavia de Espinosa
Secretarías Nueva España	Diego de Sebastián Morales de Velasco [31.08.1713-20.01.1717]
Perú	Francisco Castejón [20.11.1713-20.01.1717] Francisco Quincoces [20.01.1717-30.04.1717] Roque Monje, Oficial mayor de la Secretaría del Perú (23.09.1717) Nicolás Ruíz de Garibay, Oficial segundo (22.10.1717) Prudencio de la Cruz, Oficial tercera Secretaría de Perú (23.09.1717) Pedro de la Vega, Oficial cuarto (22.10.1717) Miguel Gutiérrez de Lara, Oficial quinto [06.06.1717]
Secretario Presidencia	
Contaduría	Pedro Pablo de Herrera (Contador supernumerario) [27.08.1709-17.06.1718] Luis Garzón de Astorga [22.02.1685-08.11.1719 m.] Antonio de Salazar [27.09.1688-30.07.1720 m.] Pedro de Perea Salazar (supernumerario) [01.06.1713-1720] José Manuel de Llano [22.12.1707-03.11.1729]
Tesorero	Francisco Javier de Goyeneche y Balanza, marqués de Belzunce [09.12.1715-20.01.1717]
Relatores	Agustín de Ceballos de Estrada [20.10.1676-12.12.1720] Juan de la Bria Chacón [18.09.1706-20.01.1717] Francisco Ramiro Valenzuela [31.10.1711-21.07.1739 m.] Manuel de Arredondo [31.10.1711-18.08.1734]
Abogado Pobres	Julián de Cañaveras [12.11.1715-1718]
Alguacil mayor	Francisco de Castejón [28-05.1685-28.12.1719 m.]
Capellán	Francisco Martínez Perona [24.02.1693-10.02.1725] Francisco de la Torre Ocón [supernumerario en ausencia del titular 03.07.1711-06.06.1725]
Comisario General orden Sn Francisco	Fray José Sanz (04.12.1711-1721)
Cronista	Luis de Salazar y Castro [12.02.1698-09.02.1734 m.]
Cosmógrafo	Pedro de Ulloa [26.10.1715-1721m.]

## AÑO 1717

Presidente	Rodrigo Manuel Manrique de Lara, conde de Frigiliana (honorario) [Gobernador 17.01.1710 y toma posesión desde 20.01.1717 a m 13.09.1717]
Gobernador	Andrés Matías de Pez y Malzarraga, [desde 20.01.1717 en 20.09.1718 abandonó su puesto hasta 08.01.1721 en que regresa al cargo de Gobernador; m. 03.07.1723]
Consejeros Capa y espada	Alonso Carnero (capa y espada, camarista) [06.07.1695-28.04.1721 m.] Manuel de Silva y Meneses [desde 10.02.1710; en 22.12.1721 es camarista; en 20.11.1739 es dispensado de asistir personalmente, m. 11.05.1743] Antonio Cristóbal de Ubilla y Medina, .marqués de Rivas [desde 13.02.1705, cesado 1706; rehabilitado en 1715; en 22.12.1721 es camarista, m. 16.10.1726] Antonio Salcedo y Aguirre, marqués de Vadillo [01.08.1715 –31.12.1728] Manuel de Vadillo Estrada y Velasco [28.01.1717-25.06.1729 m.]
Togados	Manuel Cruz Ahedo [01.10.1706-20.01.1717] Gonzalo Machado [desde 26.09.1713 a 10.11.1713 (que es nombrado Presidente tercero); 05.08.1715, m. 29.12.1732. camarista a partir de 22.12.1721] Martín José de Mirabal y Espínola [20.01.1717-22.09.1720 m.] Antonio Ignacio de la Pedrosa y Guerrero [20.01.1717-28.06.1733 m.] Alonso Pérez de Araciel [08.05.1715-04.01.1718]. Diego de Rojas y Ortega [10.11.1713-14.06.1734 m.] Diego de Zúñiga y Tobar [desde 12.10.1711; en 22.12.1721 es camarista; en 21.11.1735 es dispensado de asistir personalmente m. 20.05.1738]
Fiscal Nueva España Perú	Antonio Valcárcel y Formento [05.08.1715-08.02.1718] Juan Cavallero de Soto [20.01.1717-11.06.1720]
Agente Fiscal	Cristóbal Navarro Joseph Cornejo de Nueva España [03.02.1716-25.09.1729 m.] Francisco Pavia de Espinosa
Secretaría Nueva España Secretario Oficial Mayor Oficial 2º Oficial 3º Oficial 4º Oficial 5º Oficial 6º	Andrés de Elcorobarrutia y Zupide [20.01.1717-07.02.1729 m.] Francisco de Vera y Valencia Nicolás Ruíz de Garibay Dionisio García de Chaves Pedro de Vega Adrián de Alfaro Joseph Fernández de Madrigal
Secretaría Perú Secretario Oficial Mayor Oficial 2º Oficial 3º Oficial 4º Oficial 5º Oficial 6º	Francisco Quincoces [20.01.1717-30.04.1717] Francisco de Arana [30.04.1717-16.11.1726 m.] Roque Monje Francisco Antonio Maturana Prudencio de Cruz Andrés de Llamas Ortiz Miguel Gutiérrez Gabriel de Peralta
Contadores	Luis Garzón de Astorga [22.02.1685-08.11.1719] Isidro de Velasco y Montoya [20.01.1717-12.03.1720] Antonio de Salazar [27.09.1688-30.07.1720 m.] Alonso de Buendía [11.06.1715-26.01.1729 m.] José Manuel Llano [22.12.1707-03.02.1729 m.] Pedro Pablo de Herrera (supernumerario) [27.08.1709-16.09.1720] Francisco Millán y Cevallos (oficial)
Secretario Presidencia	Francisco Castejón [16.05.1715-20.01.1717]
Depositario	Miguel Gastón de Iriarte [20.01.1717-13.05.1730]
Capellán	Francisco Martínez Perona [24.02.1693-10.02.1725] Francisco de la Torre Ocón [supernumerario en ausencia del titular 03.07.1711-06.06.1725]

El Consejo de Indias y su relación con la vía reservada en el reinado de Felipe V

Comisario General orden Sn Francisco	Fray José Sanz (04.12.1711-1721]
Cronista	Luis de Salazar y Castro [12.02.1698-09.02.1734 m.]
Cosmógrafo	Pedro de Ulloa [26.10.1715-1721m.]
Escribano Cámara	Juan Ortiz de Bracamonte [01.03.1709-1725 m.]
Relatores	
Relator 1º	Agustín Ceballos de Estrada [20.01.1717-12.12.1720]
Relator 2º	Francisco Ramiro Valenzuela [31.10.1711-21.07.1739 m.]
Relator 3º	Manuel de Arredondo [31.10.1711-18.08.1734]
Sello y Registro	Andrés de Vadillo
Abogado Pobres	Julián de Cañaveras [12.11.1715-1718]
Procurador Pobres	Diego del Puerto
Porteros	
Portero 1º	Antonio Pradillo (perpetua 1ª)
Portero 2º	Juan Ruíz de la Peña (perpetua 2ª)
Portero 3º	Diego Gómez Falcón (perpetua 3ª)
Portero 4º	Francisco Pantoja (perpetua 4ª)
Supernumerario	Lorenzo de Velasco y Angulo
Supernumerario	Antonio Izquierdo
Supernumerario	Francisco de Cuadros
Supernumerario	Ignacio de los Reyes
Supernumerario	Pedro Gómez Falcón
Alguacil Mayor	Francisco Justiniano Chavarri Francisco de Castejón [28-05.1685-28.12.1719 m.] Joseph de Cabrera Pedro de la Braña y Lastra (alguacil de corte) Joseph Pavón (alguacil de corte)
Barrendero	Andrés Mateo [1689-]

## AÑO 1718

Gobernador	Andrés Matías de Pez y Malzarraga, [desde 20.01.1717 en 20.09.1718 abandonó su puesto hasta 08.01.1721 en que regresa al cargo de Gobernador; m. 03.07.1723]
Consejeros Capa y Espada	Alonso Carnero (camarista) [06.07.1695-28.04.1721 m.] Antonio Cristóbal de Ubilla y Medina, marqués de Rivas) [desde 13.02.1705, cesado 1706; rehabilitado en 1715; en 22.12.1721 es camarista, m. 16.10.1726] Manuel de Silva y Meneses desde 10.02.1710; en 22.12.1721 es camarista; en 20.11.1739 es dispensado de asistir personalmente, m. 11.05.1743] Antonio Salcedo y Aguirre, marqués de Vadillo [01.08.1715 –31.12.1728] Manuel de Vadillo Estrada y Velasco [28.01.1717-25.06.1729 m.]
Togados	Alonso Pérez de Araciel 08.05.1715-04.01.1718 m. Diego de Zúñiga y Tobar [desde 12.10.1711; en 22.12.1721 es camarista; en 21.11.1735 es dispensado de asistir personalmente m. 20.05.1738] Gonzalo Machado [26.09.1713-10.11.1713 (nombrado Presidente tercero)-05.08.1715; m. 29.12.1732. camarista a partir de 22.12.1721] Diego de Rojas y Ortega [10.11.1713-14.06.1734 m.] Martín José de Mirabal y Espínola [20.01.1717-22.09.1720 m.] Antonio Ignacio de la Pedrosa y Guerrero [20.01.1717-. 28.06.1733 m.] Antonio Valcárcel y Formento [08.02.1718-25.10.1725 m.] Rodrigo de Cepeda y Estrada de Jerez [08.02.1718-25.10.1723] Gonzalo Ramírez de Baquedano [08.02.1718-29.12.1730 m.]
Fiscal Nueva España	Antonio Valcárcel y Formento [desde 05.08.1715 a 08.02.1718] Tomás de Solá y Soto (desde 01.02.1718 a 14.03.1726) Juan Cavallero de Soto [desde 20.01.1717 a 11.06.1720]
Perú	
Agente Fiscal	Joseph Cornejo de Nueva España [03.02.1716-25.09.1729 m.] Francisco Félix García de Espinosa de Nueva España [desde 18.08.1715-01.06 1724 jubilado] Miguel Arenzana (con media plaza de número) [desde 23.06.1718] Francisco Rojo (supernumerario para Nueva España) [desde 15.09.1718] Miguel Arenzana (con media plaza de número) [desde 23.06.1718]
Secretaría Nueva España	
Secretario	Andrés de Elcorobarrutia y Zupide [20.01.1717-07.02.1729 m.]
Oficial Mayor	Francisco de Vera y Valencia
Oficial 2º	Nicolás Ruíz de Garibay
Oficial 3º	Dionisio García de Chaves
Oficial 4º	Pedro de Vega
Oficial 5º	Adrián de Alfaro
Oficial 6º	Joseph Fernández de Madrigal
Secretaría Perú	
Secretario	Francisco de Arana [30.04.1717-16.11.1726 m.]
Oficial Mayor	Roque Monje
Oficial 2º	Francisco Antonio Maturana
Oficial 3º	Prudencio de Cruz
Oficial 4º	Andrés Llamas Ortiz [m. 12.12.1718]
Oficial 5º	Miguel Gutiérrez
Oficial 6º	Gabriel de Peralta
Contadores	Luis Garzón de Astorga [22.02.1685-08.11.1719] Isidro de Velasco y Montoya [20.01.1717-12.03.1720] Antonio de Salazar [27.09.1688-30.07.1720 m.] Alonso de Buendía [11.06.1715-26.01.1729 m.] José Manuel Llano [22.12.1707-03.02.1729 m.] Pedro Pablo de Herrera (supernumerario) [27.08.1709-17.06.1718] Francisco Millán y Cevallos (oficial)
Secretario Presidencia	Francisco Arana y Araube [21.09.1718-31.12.1718]
Depositario	Miguel Gastón de Iriarte [20.01.1717-13.05.1730]
Capellán	Francisco Martínez Perona [24.02.1693-10.02.1725] Francisco de la Torre Ocón [supernumerario en ausencia del titular 03.07.1711-06.06.1725]

El Consejo de Indias y su relación con la vía reservada en el reinado de Felipe V

Comisario General orden Sn Francisco	Fray José Sanz (04.12.1711-1721]
Cronista	Luis de Salazar y Castro [12.02.1698-09.02.1734 m.]
Cosmógrafo	Pedro de Ulloa [26.10.1715-1721m.]
Escribano Cámara	Juan Ortiz de Bracamonte [01.03.1709-1725 m.] Juan Antonio Lecaroz (oficial mayor)
Relatores	
Relator 1º	Agustín Ceballos de Estrada [20.01.1717-12.12.1720]
Relator 2º	Francisco Ramiro Valenzuela [31.10.1711-21.07.1739 m.]
Relator 3º	Manuel de Arredondo [31.10.1711-18.08.1734]
Sello y Registro	Andrés de Vadillo
Abogado Pobres	Julián de Cañaveras [12.11.1715-1718] Luis Verdugo [31.03.1718-1730]
Procurador Pobres	Diego del Puerto
Porteros	
Portero 1º	Antonio Pradillo (perpetua 1ª)
Portero 2º	Juan Ruíz de la Peña (perpetua 2ª)
Portero 3º	Diego Gómez Falcón (perpetua 3ª)
Portero 4º	Francisco Pantoja (perpetua 4ª)
Supernumerario	Lorenzo de Velasco y Angulo
Supernumerario	Pedro Gómez Falcón (perpetua)
Supernumerario	Francisco de Cuadros
Supernumerario	Ignacio de los Reyes
Alguacil Mayor	Francisco de Castejón [28-05.1685-28.12.1719 m.] José de Cabrera [24.05.1712-1741 m.]
Barrendero	Andrés Mateo (barrendero)

## AÑO 1719

Presidente	
Gobernador	
Consejeros Capa y espada	Alonso Carnero (camarista) [06.07.1695-28.04.1721 m.] Antonio Cristóbal de Ubilla y Medina, marqués de Rivas [desde 13.02.1705, cesado 1706; rehabilitado en 1715; en 22.12.1721 es camarista, m. 16.10.1726] Manuel de Silva y Meneses [desde 10.02.1710; en 22.12.1721 es camarista; en 20.11.1739 es dispensado de asistir personalmente, m. 11.05.1743] Antonio Salcedo y Aguirre, marqués de Vadillo [01.08.1715 –31.12.1728] Manuel de Vadillo Estrada y Velasco [28.01.1717-25.06.1729 m.]
Togados	Diego de Zúñiga y Tobar [desde 12.10.1711; en 22.12.1721 es camarista; en 21.11.1735 es dispensado de asistir personalmente m. 20.05.1738] Gonzalo Machado [desde 26.09.1713 a 10.11.1713 (que es nombrado Presidente tercero); 05.08.1715, m. 29.12.1732. camarista a partir de 22.12.1721] Diego de Rojas y Ortega) [10.11.1713-14.06.1734 m.] Martín José de Mirabal y Espínola [20.01.1717-22.09.1720 m.] Rodrigo de Cepeda y Estrada de Jerez [08.02.1718-25.10.1723] Gonzalo Ramírez de Baquedano [08.02.1718-29.12.1730 m.] Antonio Ignacio de la Pedrosa y Guerrero [20.01.1717-28.06.1733 m.] Antonio Valcárcel y Formento [08.02.1718-25.10.1725 m.]
Fiscal Nueva España Perú	Tomás de Solá y Soto [01.02.1718-14.03.1726] Juan Cavallero de Soto [20.01.1717-11.06.1720]
Agente Fiscal	Joseph Cornejo de Nueva España [03.02.1716-25.09.1729 m.] Francisco Félix García de Espinosa de Nueva España [desde 18.08.1715-01.06.1724 jubilado] Francisco Rojo (supernumerario para Nueva España) [desde 15.09.1718] Miguel Arenzana (con media plaza de número) [desde 23.06.1718]
Secretaría Nueva España Secretario Oficial Mayor Oficial 2º Oficial 3º Oficial 4º Oficial 5º Oficial 6º	Andrés de Elcorobarrutia y Zupide [20.01.1717-07.02.1729 m.] Francisco de Vera y Valencia (m. 11.11.1719) Francisco Amatrán [jura cargo 02.12.1719-14.06.1726 m.] Nicolás Ruíz de Garibay Juan Nicolás Villanueva (desde 02.12.1719) Dionisio García de Chaves Salvador Antonio Florián (desde 02.12.1719) Pedro de la Vega Adrián de Alfaro Joseph Fernández de Madrigal
Secretaría Perú Secretario Oficial Mayor Oficial 2º Oficial 3º Oficial 4º Oficial 5º Oficial 6º	Francisco de Arana [30.04.1717-16.11.1726 m.] Roque Monje Francisco Antonio Maturana Prudencio de Cruz  Miguel Gutiérrez Gabriel de Peralta
Contadores	Luis Garzón de Astorga [22.02.1685-08.11.1719] Isidro de Velasco y Montoya [20.01.1717-12.03.1720] Antonio de Salazar [27.09.1688-30.07.1720 m.] Alonso de Buendía [11.06.1715-26.01.1729 m.] José Manuel Llano [22.12.1707-03.02.1729 m.] Pedro Pablo de Herrera (supernumerario) [27.08.1709-17.06.1718] Francisco Millán y Cevallos (oficial)
Secretario Presidencia	
Depositario	Miguel Gastón de Iriarte [20.01.1717-13.05.1730]
Capellán	Francisco Martínez Perona [24.02.1693-10.02.1725] Francisco de la Torre Ocón [supernumerario en ausencia del titular 03.07.1711-06.06.1725]

El Consejo de Indias y su relación con la vía reservada en el reinado de Felipe V

Comisario General orden Sn Francisco	Fray José Sanz (04.12.1711-1721]
Cronista	Luis de Salazar y Castro [12.02.1698-09.02.1734 m.]
Cosmógrafo	Pedro de Ulloa [26.10.1715-1721m.]
Escribano Cámara	Juan Ortiz de Bracamonte [01.03.1709-1725 m.] Juan Antonio Lecaroz (oficial mayor)
Relatores	
Relator 1º	Agustín Ceballos de Estrada [20.01.1717-12.12.1720]
Relator 2º	Francisco Ramiro Valenzuela [31.10.1711-21.07.1739 m.]
Relator 3º	Manuel de Arredondo [31.10.1711-18.08.1734]
Sello y Registro	Andrés de Vadillo
Abogado Pobres	Luis Verdugo [31.03.1718-1730]
Procurador Pobres	Diego del Puerto
Porteros	
Portero 1º	Antonio Pradillo (perpetua)
Portero 2º	Juan Ruíz de la Peña (perpetua)
Portero 3º	Diego Gómez Falcón (perpetua)
Portero 4º	Francisco Pantoja (perpetua)
Supernumerario	Francisco Lorenzo de Velasco y Angulo
Supernumerario	Pedro Gómez Falcón (perpetua)
Supernumerario	Francisco de Cuadros
Supernumerario	Ignacio de los Reyes
Alguacil Mayor	Francisco de Castejón [28-05.1685-28.12.1719 m.] José de Cabrera [24.05.1712-1741 m.] José Merino [29.12.1719-27.03.1724]
Barrendero	Andrés Mateo

**AÑO 1720**

Presidente	
Gobernador	
Consejeros Capa y espada	Alonso Carnero (camarista) [06.07.1695-28.04.1721 m.] Antonio Cristóbal de Ubilla y Medina, marqués de Rivas [desde 13.02.1705, cesado 1706; rehabilitado en 1715; en 22.12.1721 es camarista, m. 16.10.1726] Manuel de Silva y Meneses [desde 10.02.1710; en 22.12.1721 es camarista; en 20.11.1739 es dispensado de asistir personalmente, m. 11.05.1743] Antonio Salcedo y Aguirre, marqués de Vadillo [01.08.1715 –31.12.1728] Manuel de Vadillo Estrada y Velasco [28.01.1717-25.06.1729 m.]
Togados	Diego de Zúñiga y Tobar [desde 12.10.1711; en 22.12.1721 es camarista; en 21.11.1735 es dispensado de asistir personalmente m. 20.05.1738] Gonzalo Machado [desde 26.09.1713 a 10.11.1713 (que es nombrado Presidente tercero); 05.08.1715, m. 29.12.1732. camarista a partir de 22.12.1721] Diego de Rojas y Ortega [10.11.1713-14.06.1734 m.] Martín José de Mirabal y Espínola [20.01.1717-22.09.1720 m.] Juan Francisco Santos de San Pedro [12.12.1720-09.02.1726 m.] Antonio Ignacio de la Pedrosa y Guerrero [01.12.1720-28.06.1733 m.] Antonio Valcárcel y Formento [08.02.1718-25.10.1725 m.] Rodrigo de Cepeda y Estrada de Jerez [08.02.1718-25.10.1723] Gonzalo Ramírez de Baquedano [08.02.1718-29.12.1730 m.]
Fiscal Nueva España Perú	Tomás de Solá y Soto [01.02.1718 –14.03.1726] Juan Cavallero de Soto [20.01.1717-11.06.1720] Juan Valcárcel Dato [08.10.1720-21.04.1721]
Agente Fiscal	Joseph Cornejo de Nueva España [03.02.1716-25.09.1729 m.] Francisco Félix García de Espinosa de Nueva España [desde 18.08.1715-01.06.1724 jubilado] Francisco Rojo (supernumerario para Nueva España) [desde 15.09.1718] Miguel Arenzana (con media plaza de número) [desde 23.06.1718]
Secretaría Nueva España Secretario Oficial Mayor Oficial 2º Oficial 3º Oficial 4º Oficial 5º Oficial 6º	Andrés de Elcorobarrutia y Zupide [20.01.1717-07.02.1729 m.] Francisco Amatrán [jura cargo 02.12.1719-14.06.1726 m.] Juan Nicolás Villanueva [02.12.1719] Nicolás Ruíz de Garibay (jubilado y ostenta el cargo Francisco de la Azuela ) Salvador Antonio Florián [02.12.1719] Dionisio García de Chávez [jubilado y ostenta otro el cargo] Pedro de la Vega Adrián de Alfaro Joseph Fernández de Madrigal
Secretaría Perú Secretario Oficial Mayor Oficial 2º Oficial 3º Oficial 4º Oficial 5º Oficial 6º	Francisco de Arana [30.04.1717-16.11.1726] Roque Monje [03.05.1721 m.] Joseph de Mayorga [desde 25.01.1720] Antonio Maturana Prudencio de Cruz Miguel Gutiérrez [desde 12.01.1720] Gabriel de Peralta [desde 19.02.1720] Miguel Gutiérrez [01.01.1720-12.01.1720] Manuel de Castellanos [desde 20.02.1720] Gabriel de Peralta [hasta 19.02.1720] Joseph Caro [desde 19.02.1720]
Contadores	Antonio de Salazar [01.07.1719-30.07.1720 m.] Isidro de Velasco y Montoya [20.01.1717-12.03.1720] Pedro Pablo de Herrera (supernumerario) [27.08.1709 a 16.09.1720] Juan Antonio Franco (supernumerario) [13.03.1720-1729] Alonso de Buendía [01.08.1720-26.01.1729 m.] José Manuel Llano [22.12.1707-03.02.1729 m.] Pedro Pablo Herrera [16.09.1720-21.04.1749 m.]



El Consejo de Indias y su relación con la vía reservada en el reinado de Felipe V

Secretario Presidencia	
Depositorio	Miguel Gastón de Iriarte [20.01.1717-13.05.1730]
Capellán	Francisco Martínez Perona [24.02.1693-10.02.1725] Francisco de la Torre Ocón [supernumerario en ausencia del titular 03.07.1711-06.06.1725]
Comisario General orden Sn Francisco	Fray José Sanz (04.12.1711-1721)
Cronista	Luis de Salazar y Castro [12.02.1698-09.02.1734 m.]
Cosmógrafo	Pedro de Ulloa [26.10.1715-1721m.]
Escribano Cámara	Juan Ortiz de Bracamonte [01.03.1709-1725 m.] Juan Antonio Lecaroz (oficial mayor)
Relatores	
Relator 1º	Agustín Ceballos de Estrada [20.01.1717-12.12.1720]
Relator 2º	Francisco Ramiro Valenzuela [31.10.1711-21.07.1739 m.]
Relator 3º	Manuel de Arredondo [31.10.1711-18.08.1734]
Sello y Registro	Andrés de Vadillo
Abogado Pobres	Luis Verdugo [31.03.1718-1730]
Procurador Pobres	Diego del Puerto
Porteros	
Portero 1º	Antonio Pradillo (perpetua)
Portero 2º	Juan Ruíz de la Peña (perpetua)
Portero 3º	Diego Gómez Falcón (perpetua)
Portero 4º	Francisco Pantoja (perpetua)
Supernumerario	Lorenzo de Velasco y Angulo
Supernumerario	Pedro Gómez Falcón (perpetua)
Supernumerario	Francisco de Cuadros
Supernumerario	Ignacio de los Reyes
Alguacil Mayor	José de Cabrera [24.05.1712-1741 m.] José Merino [29.12.1719-27.03.1724]
Barrendero	Andrés Mateo

## AÑO 1721

Presidente	
Gobernador	Andrés Matías de Pez y Malzarraga [desde 20.01.1717 en 20.09.1718 abandonó su puesto hasta 08.01.1721 en que regresa al cargo de Gobernador; m. 03.07.1723]
Consejeros Capa y espada	<p>Alonso Carnero (camarista) [06.07.1695-28.04.1721 m.]</p> <p>Antonio Cristóbal de Ubilla y Medina, marqués de Rivas [desde 13.02.1705, cesado 1706; rehabilitado en 1715; en 22.12.1721 es camarista, m. 16.10.1726]</p> <p>Manuel de Silva y Meneses [desde 10.02.1710; en 22.12.1721 es camarista; en 20.11.1739 es dispensado de asistir personalmente, m. 11.05.1743]</p> <p>Antonio Salcedo y Aguirre, marqués de Vadillo [01.08.1715 –31.12.1728]</p> <p>Manuel de Vadillo Estrada y Velasco [28.01.1717-25.06.1729 m.]</p> <p>Miguel Fernández Durán y Fernández de la Casa, marqués de Tolosa [08.01.1721-11.10.1721 m.]</p> <p>Fernando Luján y Silva, marqués de Almodóvar [30.03.1721-08.07.1736 m.]</p> <p>Diego de Zúñiga y Tobar [desde 12.10.1711; en 22.12.1721 es camarista; en 21.11.1735 es dispensado de asistir personalmente m. 20.05.1738]</p> <p>Gonzalo Machado [26.09.1713-10.11.1713 (que es nombrado Presidente tercero); 05.08.1715, m. 29.12.1732. camarista a partir de 22.12.1721]</p> <p>Diego de Rojas y Ortega [10.11.1713-14.06.1734 m.]</p> <p>Antonio Ignacio de la Pedrosa y Guerrero [01.12.1720-28.06.1733 m.]</p> <p>Antonio Valcárcel y Formento [08.02.1718-25.10.1725 m.]</p> <p>Rodrigo de Cepeda y Estrada de Jerez [08.02.1718-25.10.1723]</p> <p>Gonzalo Ramírez de Baquedano [08.02.1718-29.12.1730 m.]</p> <p>Juan Francisco Santos de San Pedro [12.12.1720-09.02.1726 m.]</p>
Fiscal Nueva España Perú	<p>Tomás de Solá y Soto [01.02.1718-14.03.1726]</p> <p>Juan Valcárcel Dato [08.10.1720-21.04.1721]</p> <p>Pedro de Afán de Rivera [30.04.1721-27.07.1723]</p>
Agente Fiscal	<p>Joseph Cornejo de Nueva España [03.02.1716-25.09.1729 m.]</p> <p>Francisco Félix García de Espinosa de Nueva España [desde 18.08.1715-01.06.1724 jubilado]</p> <p>Francisco Rojo (supernumerario para Nueva España) [desde 15.09.1718]</p> <p>Miguel Arenzana (con media plaza de número) [desde 23.06.1718]</p>
Secretaría Nueva España Secretario Oficial Mayor Oficial 2º Oficial 3º Oficial 4º Oficial 5º Oficial 6º	<p>Andrés de Elcorobarrutia y Zupide [20.01.1717-07.02.1729 m.]</p> <p>Francisco Amatrán [jura cargo 02.12.1719-14.06.1726 m.]</p> <p>Juan Nicolás Villanueva [02.12.1719-09.06.1722 m.]</p> <p>Nicolás Ruíz de Garibay (jubilado y ostenta el cargo Francisco de la Azuela )</p> <p>Salvador Antonio Florián [desde 02.12.1719]</p> <p>Dionisio García Chávez (jubilado y ostenta el cargo otro)</p> <p>Pedro de la Vega</p> <p>Adrián de Alfaro</p> <p>Joseph Fernández de Madrigal</p>
Secretaría Perú Secretario Oficial Mayor Oficial 2º Oficial 3º	<p>Francisco de Arana [30.04.1717-16.11.1726 m.]</p> <p>Roque Monje [03.05.1721 m.]</p> <p>Antonio Maturana [desde 26.05.1721]</p> <p>Antonio Maturana [hasta 26.05.1721]</p> <p>Joseph de Mayorga [desde 25.01.1720]</p> <p>Prudencio de Cruz [desde 26.01.1721]</p> <p>Prudencio de Cruz [hasta 26.01.1721]</p> <p>Miguel Gutiérrez [desde 12.01.1720]</p> <p>Gabriel de Peralta [desde 26.05.1721]</p>
Oficial 4º Oficial 5º Oficial 6º	<p>Gabriel de Peralta [desde 19.02.1720-26.05.1721]</p> <p>Manuel de Castellanos [desde 26.05.1721-]</p> <p>Miguel Gutiérrez [hasta 12.01.1720]</p> <p>Manuel de Castellanos [20.02.1720-26.05.1721]</p> <p>Joseph Caro [19.02.1720-07.04.1722 m.]</p> <p>Marcos Chirinos y Ubilla [desde 13.06.1721]</p>

El Consejo de Indias y su relación con la vía reservada en el reinado de Felipe V

Contadores	Alonso de Buendía [01.08.1720-26.01.1729 m.] Juan Antonio Franco (supernumerario)[13.03.1720-1729] Alonso de Buendía [01.08.1720-26.01.1729 m.] José Manuel Llano [22.12.1707-03.02.1729 m.] Pedro Pablo Herrera [16.09.1720-21.04.1749 m.]
Secretario Presidencia	Joseph de Torrecilla [desde 11.01.1721]
Depositario	Miguel Gastón de Iriarte [20.01.1717-13.05.1730]
Capellán	Francisco Martínez Perona [24.02.1693-10.02.1725] Francisco de la Torre Ocón [supernumerario en ausencia del titular 03.07.1711-06.06.1725]
Comisario General orden Sn Francisco	Fray José Sanz (04.12.1711-1721)
Cronista	Luis de Salazar y Castro [12.02.1698-09.02.1734 m.]
Cosmógrafo	Pedro de Ulloa [26.10.1715-1721m.]
Escribano Cámara	Juan Ortiz de Bracamonte [01.03.1709-1725 m.] Juan Antonio Lecaroz (oficial mayor)
Relatores Relator 1º Relator 2º Relator 3º	Luis Escandón [27.11.1721-08.04.1734 m.] Francisco Ramiro Valenzuela [31.10.1711-21.07.1739 m.] Manuel de Arredondo [31.10.1711-18.08.1734]
Sello y Registro	Andrés de Vadillo
Abogado Pobres	Luis Verdugo [31.03.1718-1730]
Procurador Pobres	Diego del Puerto
Porteros Portero 1º Portero 2º Portero 3º Portero 4º Supernumerario Supernumerario Supernumerario Supernumerario	Antonio Pradillo (perpetua) Juan Ruíz de la Peña (perpetua) Diego Gómez Falcón (perpetua) Francisco Pantoja (perpetua) Lorenzo de Velasco y Angulo Pedro Gómez Falcón (perpetua) Francisco de Cuadros Ignacio de los Reyes Baltasara Pardinás [la ocupa su hijo Manuel de Esnoz desde 19.10.1721]
Alguacil Mayor	José de Cabrera [24.05.1712-1741 m.] José Merino [29.12.1719-27.03.1724]
Barrendero	Andrés Mateo

## Año 1722

Gobernador	Andrés Matías de Pez y Malzarraga [desde 20.01.1717 en 20.09.1718 abandonó su puesto hasta 08.01.1721 en que regresa al cargo de Gobernador; m. 03.07.1723]
Consejeros Capa y espada	Antonio Cristóbal de Ubilla y Medina, marqués de Rivas [desde 13.02.1705, cesado 1706; rehabilitado en 1715; en 22.12.1721 es camarista, m. 16.10.1726] Francisco Javier de Goyeneche y Balanza, marqués de Belzunce 05.10.1722-05.05.1748 m., camarista desde 11.03.1744] Manuel de Silva y Meneses [desde 10.02.1710; en 22.12.1721 es camarista; en 20.11.1739 es dispensado de asistir personalmente, m. 11.05.1743] Antonio Salcedo y Aguirre, marqués de Vadillo [01.08.1715 –31.12.1728] Manuel de Vadillo Estrada y Velasco [28.01.1717-25.06.1729 m.] Fernando Luján y Silva, marqués de Almodóvar [30.03.1721-08.07.1736 m.]
Togados	Diego de Zúñiga y Tobar [desde 12.10.1711; en 22.12.1721 es camarista; en 21.11.1735 es dispensado de asistir personalmente m. 20.05.1738] Gonzalo Machado [desde 26.09.1713 a 10.11.1713 (que es nombrado Presidente tercero); 05.08.1715, m. 29.12.1732. camarista a partir de 22.12.1721] Diego de Rojas y Ortega [10.11.1713-14.06.1734 m.] Antonio Ignacio de la Pedrosa y Guerrero [01.12.1720-28.06.1733 m.] Antonio Valcárcel y Formento [08.02.1718 a 25.10.1725 m.] Rodrigo de Cepeda y Estrada de Jerez [08.02.1718-25.10.1723] Gonzalo Ramírez de Baquedano [08.02.1718-29.12.1730 m.] Juan Francisco Santos de San Pedro [12.12.1720-09.02.1726 m.]
Fiscal Nueva España Perú	Tomás de Solá y Soto [01.02.1718-14.03.1726] Pedro de Afán de Rivera [30.04.1721-27.07.1723]
Agente Fiscal	Joseph Cornejo de Nueva España [03.02.1716-25.09.1729 m.] Francisco Félix García de Espinosa de Nueva España [desde 18.08.1715-01.06.1724 jubilado] Francisco Rojo (supernumerario para Nueva España) [desde 15.09.1718] Miguel Arenzana (con media plaza de número) [desde 23.06.1718]
Secretaría Nueva España Secretario Oficial Mayor	Andrés de Elcorobarrutia y Zupide [20.01.1717-07.02.1729 m.] Francisco Amatrán [jura cargo 02.12.1719-14.06.1726 m.] Juan Nicolás Villanueva [02.12.1719-09.06.1722 m.]
Oficial 2º	Nicolás Ruíz de Garibay (jubilado y ostenta el cargo Francisco de la Azuela) Salvador Antonio Florián [desde 08.08.1722]
Oficial 3º	Salvador Antonio Florián [02.12.1719-08.08.1722] Dionisio García Chávez (jubilado y ostenta el cargo otro) Pedro de la Vega [desde 08.08.1722]
Oficial 4º	Pedro de la Vega [hasta 08.08.1722]
Oficial 5º	Adrián de Alfaro
Oficial 6º	Joseph Fernández de Madrigal
Secretaría Perú Secretario Oficial Mayor	Francisco de Arana [30.04.1717-16.11.1726 m.] Antonio Maturana [desde 26.05.1721]
Oficial 2º	Joseph de Mayorga [desde 25.01.1720] Prudencio de Cruz [desde 26.01.1721]
Oficial 3º	Miguel Gutiérrez [desde 12.01.1720] Gabriel de Peralta [desde 26.05.1721]
Oficial 4º	Manuel de Castellanos [desde 26.05.1721-]
Oficial 5º	Marcos Chirinos y Ubilla [desde 07.04.1722] Joseph Caro [desde 19.02.1720-07.04.1722 m.]
Oficial 6º	Marcos Chirinos [13.06.1721-07.04.1722] Francisco Adrada [desde 29.10.1722]
Contadores	Alonso de Buendía [01.08.1720-26.01.1729 m.] Juan Antonio Franco (supernumerario)[13.03.1720-1729] Alonso de Buendía [01.08.1720-26.01.1729 m.] José Manuel Llano [22.12.1707-03.02.1729 m.] Pedro Pablo Herrera [16.09.1720-21.04.1749 m.]

El Consejo de Indias y su relación con la vía reservada en el reinado de Felipe V

Secretario Presidencia	Joseph de Torrecilla [desde 11.01.1721]
Depositorio	Miguel Gastón de Iriarte [20.01.1717-13.05.1730]
Capellán	Francisco Martínez Perona [24.02.1693-10.02.1725] Francisco de la Torre Ocón [supernumerario en ausencia del titular 03.07.1711-06.06.1725]
Comisario General orden Sn Francisco	Fray Juan de Soto [29.01.1722-1729]
Cronista	Luis de Salazar y Castro [12.02.1698-09.02.1734 m.]
Cosmógrafo	Alejandro Burneto [13.09.1722-1727]
Escribano Cámara	Juan Ortiz de Bracamonte [01.03.1709-1725 m.] Juan Antonio Lecaroz (oficial mayor)
Relatores Relator 1º Relator 2º Relator 3º	Luis Escandón [27.11.1721-08.04.1734 m.] Francisco Ramiro Valenzuela [31.10.1711-21.07.1739 m.] Manuel de Arredondo [31.10.1711-18.08.1734]
Sello y Registro	Andrés de Vadillo
Abogado Pobres	Luis Verdugo [31.03.1718-1730]
Procurador Pobres	Diego del Puerto
Porteros Portero 1º Portero 2º Portero 3º Portero 4º Supernumerario Supernumerario Supernumerario Supernumerario	Antonio Pradillo (perpetua) Juan Ruíz de la Peña (perpetua) Diego Gómez Falcón (perpetua) Francisco Pantoja (perpetua) Lorenzo de Velasco y Angulo Pedro Gómez Falcón (perpetua) Francisco de Cuadros Ignacio de los Reyes Baltasara Pardinás [la ocupa su hijo Manuel de Esnoz desde 19.10.1721]
Alguacil Mayor	José de Cabrera [24.05.1712-1741 m.] José Merino [29.12.1719-27.03.1724]
Barrendero	Andrés Mateo

## AÑO 1723

Presidente	
Gobernador	Andrés Matías de Pez y Malzarraga [desde 20.01.1717 en 20.09.1718 abandonó su puesto hasta 08.01.1721 en que regresa al cargo de Gobernador; m. 03.07.1723]
Consejeros Capa y espada	<p>Antonio Cristóbal de Ubilla y Medina, marqués de Rivas [desde 13.02.1705, cesado 1706; rehabilitado en 1715; en 22.12.1721 es camarista, m. 16.10.1726]</p> <p>Francisco Javier de Goyeneche y Balanza, marqués de Belzunce [05.10.1722-05.05.1748m., camarista desde 11.03.1744]</p> <p>Manuel de Silva y Meneses [desde 10.02.1710; en 22.12.1721 es camarista; en 20.11.1739 es dispensado de asistir personalmente, m. 11.05.1743]</p> <p>Antonio Salcedo y Aguirre, marqués de Vadillo [01.08.1715 –31.12.1728]</p> <p>Manuel de Vadillo Estrada y Velasco [28.01.1717-25.06.1729 m.]</p> <p>Fernando Luján y Silva, marqués de Almodóvar [30.03.1721-08.07.1736 m.]</p> <p>Pedro Casado [28.04.1723-22.12.1725 m.]</p> <p>Diego de Zúñiga y Tobar [desde 12.10.1711; en 22.12.1721 es camarista; en 21.11.1735 es dispensado de asistir personalmente m. 20.05.1738]</p> <p>Gonzalo Machado [desde 26.09.1713 a 10.11.1713 (que es nombrado Presidente tercero); 05.08.1715, m. 29.12.1732. camarista a partir de 22.12.1721]</p> <p>Diego de Rojas y Ortega [10.11.1713-14.06.1734 m.]</p> <p>Antonio Ignacio de la Pedrosa y Guerrero [01.12.1720-28.06.1733 m.]</p> <p>Antonio Valcárcel y Formento [08.02.1718 a 25.10.1725 m.]</p> <p>Rodrigo de Cepeda y Estrada de Jerez [08.02.1718-25.10.1723]</p> <p>Gonzalo Ramírez de Baquedano [08.02.1718-29.12.1730 m.]</p> <p>Juan Francisco Santos de San Pedro [12.12.1720-09.02.1726 m.]</p>
Fiscal Nueva España Perú	<p>Tomás de Solá y Soto [01.02.1718-14.03.1726]</p> <p>Pedro de Afán de Rivera [30.04.1721-27.07.1723]</p> <p>José de Laysequilla y Palacios y Aguilar [21.09.1723-08.02.1738]</p>
Agente Fiscal	<p>Joseph Cornejo de Nueva España [03.02.1716-25.09.1729 m.]</p> <p>Francisco Félix García de Espinosa de Nueva España [desde 18.08.1715-01.06.1724 jubilado]</p> <p>Francisco Rojo (supernumerario para Nueva España) [desde 15.09.1718]</p> <p>Miguel Arenzana (con media plaza de número) [desde 23.06.1718]</p>
Secretaría Nueva España Secretario Oficial Mayor Oficial 2º Oficial 3º Oficial 4º Oficial 5º Oficial 6º	<p>Andrés de Elcorobarrutia y Zupide [20.01.1717-07.02.1729 m.]</p> <p>Francisco Amatrán [jura cargo 02.12.1719-14.06.1726 m.]</p> <p>Nicolás Ruíz de Garibay (jubilado y ostenta el cargo Francisco de la Azuela)</p> <p>Salvador Antonio Florián [desde 08.08.1722]</p> <p>Dionisio García Chávez (jubilado y ostenta el cargo otro)</p> <p>Pedro de la Vega [desde 08.08.1722]</p> <p>Adrián de Alfaro [desde 06.10.1723]</p> <p>Adrián de Alfaro [hasta 06.10.1723]</p> <p>Joseph Fernández de Madrigal [desde 06.10.1723]</p> <p>Joseph Fernández de Madrigal [hasta 06.10.1723]</p> <p>Nicolás de Benavente [desde 06.10.1723]</p>
Secretaría Perú Secretario Oficial Mayor Oficial 2º Oficial 3º Oficial 4º Oficial 5º Oficial 6º	<p>Francisco de Arana [30.04.1717-16.11.1726 m.]</p> <p>Antonio Maturana [desde 26.05.1721]</p> <p>Joseph de Mayorga [desde 25.01.1720]</p> <p>Prudencio de Cruz [desde 26.01.1721]</p> <p>Miguel Gutiérrez [desde 12.01.1720]</p> <p>Gabriel de Peralta [desde 26.05.1721]</p> <p>Manuel de Castellanos [desde 26.05.1721-]</p> <p>Marcos Chirinos y Ubilla [desde 07.04.1722]</p> <p>Francisco Adrada [desde 29.10.1722]</p>
Contadores	<p>Alonso de Buendía [01.08.1720-26.01.1729 m.]</p> <p>Juan Antonio Franco (supernumerario)[13.03.1720-1729]</p> <p>Alonso de Buendía [01.08.1720-26.01.1729 m.]</p> <p>José Manuel Llano [22.12.1707-03.02.1729 m.]</p> <p>Pedro Pablo Herrera [16.09.1720-21.04.1749 m.]</p>

El Consejo de Indias y su relación con la vía reservada en el reinado de Felipe V

Secretario Presidencia	Joseph de Torrecilla [11.01.1721-08.03.1723]
Depositorio	Miguel Gastón de Iriarte [20.01.1717-13.05.1730]
Capellán	Francisco Martínez Perona [24.02.1693-10.02.1725] Francisco de la Torre Ocón [supernumerario en ausencia del titular 03.07.1711-06.06.1725]
Comisario General orden Sn Francisco	Fray Juan de Soto [29.01.1722-1729]
Cronista	Luis de Salazar y Castro [12.02.1698-09.02.1734 m.]
Cosmógrafo	Alejandro Burneto [13.09.1722-1727]
Escribano Cámara	Juan Ortiz de Bracamonte [01.03.1709-1725 m.] Juan Antonio Lecaroz (oficial mayor)
Relatores Relator 1º Relator 2º Relator 3º	Luis Escandón [27.11.1721-08.04.1734 m.] Francisco Ramiro Valenzuela [31.10.1711-21.07.1739 m.] Manuel de Arredondo [31.10.1711-18.08.1734]
Sello y Registro	Andrés de Vadillo
Abogado Pobres	Luis Verdugo [31.03.1718-1730]
Procurador Pobres	Diego del Puerto
Porteros Portero 1º Portero 2º Portero 3º Portero 4º Supernumerario Supernumerario Supernumerario Supernumerario	Antonio Pradillo (perpetua) Juan Ruíz de la Peña (perpetua) Diego Gómez Falcón (perpetua) Francisco Pantoja (perpetua) Lorenzo de Velasco y Angulo Pedro Gómez Falcón (perpetua) Francisco de Cuadros Ignacio de los Reyes Baltasara Pardinás [la ocupa su hijo Manuel de Esnoz desde 19.10.1721]
Alguacil Mayor	José de Cabrera [24.05.1712-1741 m.] José Merino [29.12.1719-27.03.1724]
Barrendero	Andrés Mateo

## AÑO 1724

Presidente	Baltasar Zúñiga y Guzmán (marqués de Valero y de Ayamonte, Duque de Arion) [28.01.1724-26.12.1727 m.]
Gobernador	
Consejeros	
Capa y espada	Antonio Cristóbal de Ubilla y Medina, marqués de Rivas [desde 13.02.1705, cesado 1706; rehabilitado en 1715; en 22.12.1721 es camarista, m. 16.10.1726] Francisco Javier de Goyeneche y Balanza, marqués de Belzunce [05.10.1722-05.05.1748m., camarista desde 11.03.1744] Manuel de Silva y Meneses [desde 10.02.1710; en 22.12.1721 es camarista; en 20.11.1739 es dispensado de asistir personalmente, m. 11.05.1743] Antonio Salcedo y Aguirre, marqués de Vadillo [01.08.1715 –31.12.1728] Manuel de Vadillo Estrada y Velasco [28.01.1717-25.06.1729 m.] Fernando Luján y Silva, marqués de Almodóvar [30.03.1721-08.07.1736 m.] Pedro Casado [28.04.1723-22.12.1725 m.] Gaspar Cayetano Girón Venegas de Córdoba (supernumerario) [16.03.1724-15.12.1727 m.]
Togados	Diego de Zúñiga y Tobar [desde 12.10.1711; en 22.12.1721 es camarista; en 21.11.1735 es dispensado de asistir personalmente m. 20.05.1738] Gonzalo Machado [desde 26.09.1713 a 10.11.1713 (que es nombrado Presidente tercero); 05.08.1715, m. 29.12.1732, camarista a partir de 22.12.1721] Diego de Rojas y Ortega [10.11.1713-14.06.1734 m.] Antonio Ignacio de la Pedrosa y Guerrero [01.12.1720-28.06.1733 m.] Antonio Valcárcel y Formento [08.02.1718-25.10.1725 m.] Antonio Francisco Aguado Fernández de Córdoba [03.02.1724-30.10.1729] Gonzalo Ramírez de Baquedano [08.02.1718-29.12.1730 m.] Juan Francisco Santos de San Pedro [12.12.1720-09.02.1726 m.]
Fiscal	
Nueva España	Tomás de Solá y Soto [01.02.1718-14.03.1726]
Perú	José de Laysequilla y Palacios y Aguilar [21.09.1723-08.02.1738]
Agente Fiscal	Joseph Cornejo de Nueva España [03.02.1716-25.09.1729 m.] Francisco Félix García de Espinosa de Nueva España [desde 18.08.1715-01.06.1724 jubilado] Joseph Ruíz Cenzano (supernumerario de Perú) [desde 18.08.1724] Francisco Rojo (supernumerario para Nueva España) [desde 15.09.1718] [desde 15.09.1718] Miguel Arenzana para Nueva España (plaza de número completa) [desde 18.08.1724]
Secretaría Nueva España	
Secretario	Andrés de Elcorobarrutia y Zupide [20.01.1717-07.02.1729 m.]
Oficial Mayor	Francisco Amatrán [jura cargo 02.12.1719-14.06.1726 m.] Nicolás Ruíz de Garibay (jubilado y ostenta el cargo Francisco de la Azuela )
Oficial 2º	Salvador Antonio Florián [desde 08.08.1722] Joseph del Corrovarrutia (supernumerario) [desde 09.03.1724]
Oficial 3º	Dionisio García Chávez (jubilado y ostenta el cargo otro) Pedro de la Vega [desde 08.08.1722]
Oficial 4º	Adrián de Alfaro [desde 06.10.1723]
Oficial 5º	Joseph Fernández de Madrigal [desde 06.10.1723]
Oficial 6º	Nicolás de Benavente [desde 06.10.1723]
Secretaría Perú	
Secretario	Francisco de Arana [30.04.1717-16.11.1726 m.]
Oficial Mayor	Antonio Maturana [desde 26.05.1721]
Oficial 2º	Joseph de Mayorga [desde 25.01.1720] Prudencio de Cruz [desde 26.01.1721]
Oficial 3º	Miguel Gutiérrez [desde 12.01.1720] Gabriel de Peralta [desde 26.05.1721]
Oficial 4º	Manuel de Castellanos [desde 26.05.1721-]
Oficial 5º	Marcos Chirinos y Ubilla [desde 07.04.1722]
Oficial 6º	Francisco Adrada [desde 29.10.1722]
Contadores	Alonso de Buendía [01.08.1720-26.01.1729 m.] Juan Antonio Franco (supernumerario)[13.03.1720-1729] José Manuel Llano [22.12.1707-03.02.1729 m.] Pedro Pablo Herrera [16.09.1720-21.04.1749 m.]



El Consejo de Indias y su relación con la vía reservada en el reinado de Felipe V

Secretario Presidencia	Bartolomé Crespo [desde 02.01.1724]
Depositorio	Miguel Gastón de Iriarte [20.01.1717-13.05.1730]
Capellán	Francisco Martínez Perona [24.02.1693-10.02.1725] Francisco de la Torre Ocón [supernumerario en ausencia del titular 03.07.1711-06.06.1725]
Cronista	Luis de Salazar [12.02.1698-1734]
Cosmógrafo	Alejandro Burneto [13.09.1722-1727]
Comisario General orden Sn Francisco	Fray Juan de Soto [29.01.1722-1729]
Escribano Cámara	Juan Ortiz de Bracamonte [01.03.1709-1725 m.] Juan Antonio Lecaroz (oficial mayor)
Relatores Relator 1º Relator 2º Relator 3º	Luis Escandón [27.11.1721-08.04.1734 m.] Francisco Ramiro Valenzuela [31.10.1711-21.07.1739 m.] Manuel de Arredondo [31.10.1711-18.08.1734] Luis Lagúnez Malaguilla [desde 10.05.1724-02.01.1756 m.]
Sello y Registro	Andrés de Vadillo
Abogado Pobres	Luis Verdugo [31.03.1718-1730]
Procurador Pobres	Diego del Puerto
Porteros Portero 1º Portero 2º Portero 3º Portero 4º Supernumerario Supernumerario Supernumerario Supernumerario	Antonio Pradillo (perpetua) Juan Ruíz de la Peña (perpetua) Diego Gómez Falcón (perpetua) Francisco Pantoja (perpetua) Lorenzo de Velasco y Angulo Pedro Gómez Falcón (perpetua) Francisco de Cuadros Ignacio de los Reyes Baltasara Pardinás [la ocupa su hijo Manuel de Esnoz desde 19.10.1721] Antonio Gómez Falcón (supernumeraria) [desde 09.03.1724] Antonio Marcelo Iglesias (supernumeraria, la sirve su padre Isidro López Iglesias) [desde 11.12.1724]
Alguacil Mayor	José de Cabrera [24.05.1712-1741 m.] José Merino [29.12.1719-27.03.1724] Francisco Antonio Borja [desde 27.03.1724]
Barrendero	Andrés Mateo

## AÑO 1725

Presidente	Baltasar Zúñiga y Guzmán (marqués de Valero y de Ayamonte, Duque de Arion) [28.01.1724-26.12.1727 m.]
Consejeros Capa y espada	Antonio Cristóbal de Ubilla y Medina, marqués de Rivas [desde 13.02.1705, cesado 1706; rehabilitado en 1715; en 22.12.1721 es camarista, m. 16.10.1726] Francisco Javier de Goyeneche y Balanza, marqués de Belzunce [05.10.1722-05.05.1748m., camarista desde 11.03.1744] Manuel de Silva y Meneses [desde 10.02.1710; en 22.12.1721 es camarista; en 20.11.1739 es dispensado de asistir personalmente, m. 11.05.1743] Antonio Salcedo y Aguirre, marqués de Vadillo [01.08.1715 –31.12.1728] Manuel de Vadillo Estrada y Velasco [28.01.1717-25.06.1729 m.] Fernando Luján y Silva, marqués de Almodóvar [30.03.1721-08.07.1736 m.] Pedro Casado [28.04.1723-22.12.1725 m.] Luis Yopulo y Espadafora, Príncipe de San Antonio, Duque de San Blas [18.12.1725-22.07.1732 m.] Gaspar Cayetano Girón Venegas de Córdoba (supernumerario) [16.03.1724-15.12.1727 m.] Manuel Silva Rivera, marqués de Montemayor (camarista) [22.03.1725 –09.08.1737]
Togados	Diego de Zúñiga y Tobar [desde 12.10.1711; en 22.12.1721 es camarista; en 21.11.1735 es dispensado de asistir personalmente m. 20.05.1738] Gonzalo Machado [desde 26.09.1713 a 10.11.1713 (que es nombrado Presidente tercero); 05.08.1715, m. 29.12.1732, camarista a partir de 22.12.1721] Diego de Rojas y Ortega [10.11.1713-14.06.1734 m.] Antonio Ignacio de la Pedrosa y Guerrero [01.12.1720-28.06.1733 m.] Antonio Valcárcel y Formento [08.02.1718-25.10.1725 m.] Juan José Mutiloa y Lodosa [20.11.1725-01.08.1730] Antonio Francisco Aguado Fernández de Córdoba [03.02.1724-30.10.1729] Gonzalo Ramírez de Baquedano [08.02.1718-29.12.1730 m.] Juan Francisco Santos de San Pedro [12.12.1720-09.02.1726 m.]
Fiscal Nueva España	Tomás de Solá y Soto [01.02.1718-14.03.1726]
Perú	José de Laysequilla y Palacios y Aguilar [21.09.1723-08.02.1738]
Agente Fiscal	Joseph Cornejo de Nueva España [03.02.1716-25.09.1729 m.] Joseph Ruíz Cenzano (supernumerario parar Perú) [desde 18.08.1724] Francisco Rojo (supernumerario para Nueva España) [desde 15.09.1718] Miguel Arenzana para Nueva España (plaza de número completa) [desde 18.08.1724]
Secretaría Nueva España Secretario Oficial Mayor	Andrés de Elcorobarrutia y Zupide [20.01.1717-07.02.1729 m.] Francisco Amatrán [jura cargo 02.12.1719-14.06.1726 m.] Nicolás Ruíz de Garibay (jubilado y ostenta el cargo Francisco de la Azuela) Salvador Antonio Florián [desde 08.08.1722]
Oficial 2º	Joseph del Corrovarrutia (supernumerario) [desde 09.03.1724] Juan Ortiz de Bracamonte (supernumerario) [desde 20.09.1725]
Oficial 3º	Dionisio García Chávez (jubilado y ostenta el cargo otro) Pedro de la Vega [desde 08.08.1722]
Oficial 4º	Adrián de Alfaro [desde 06.10.1723]
Oficial 5º	Joseph Fernández de Madrigal [desde 06.10.1723]
Oficial 6º	Nicolás de Benavente [desde 06.10.1723] Miguel Santiestebán Galindo (supernumerario) le toca por devengado a Antonio de Zamora, oficial jubilado
Secretaría Perú Secretario Oficial Mayor	Francisco de Arana [30.04.1717-16.11.1726 m.] Antonio Maturana [desde 26.05.1721]
Oficial 2º	Joseph de Mayorga [desde 25.01.1720] Prudencio de Cruz [desde 26.01.1721]
Oficial 3º	Miguel Gutiérrez [desde 12.01.1720] Gabriel de Peralta [desde 26.05.1721]
Oficial 4º	Manuel de Castellanos [desde 26.05.1721-]
Oficial 5º	Marcos Chirinos y Ubilla [desde 07.04.1722]
Oficial 6º	Francisco Adrada [desde 29.10.1722]

El Consejo de Indias y su relación con la vía reservada en el reinado de Felipe V

Contadores	Alonso de Buendía [01.08.1720-26.01.1729 m.] Juan Antonio Franco (supernumerario) [13.03.1720-1729] José Manuel Llano [22.12.1707-03.02.1729 m.] Pedro Pablo Herrera [16.09.1720-21.04.1749 m.]
Secretario Presidencia	Bartolomé Crespo [desde 02.01.1724]
Depositario	Miguel Gastón de Iriarte [20.01.1717-13.05.1730]
Capellán	Francisco Martínez Perona [24.02.1693-10.02.1725] Francisco de la Torre Ocón [titular 06.06.1725-1726 m.]
Comisario General orden Sn Francisco	Fray Juan de Soto [29.01.1722-1729]
Cronista	Luis de Salazar y Castro [12.02.1698-09.02.1734 m.]
Cosmógrafo	Alejandro Burneto [13.09.1722-1727]
Escribano Cámara	Juan Ortiz de Bracamonte [01.03.1709-1725 m.] Antonio de Salazar y Castillo [18.03.1725-03.04.1759] Juan Antonio Lecaroz (oficial mayor)
Relatores Relator 1º Relator 2º Relator 3º	Luis Escandón [27.11.1721-08.04.1734 m.] Francisco Ramiro Valenzuela [31.10.1711-21.07.1739 m.] Manuel de Arredondo [31.10.1711-18.08.1734] Luis Lagúnez Malaguilla [desde 10.05.1724-1756 m.]
Sello y Registro	Andrés de Vadillo
Abogado Pobres	Luis Verdugo [31.03.1718-1730]
Procurador Pobres	Diego del Puerto
Porteros Portero 1º Portero 2º Portero 3º Portero 4º Supernumerario Supernumerario Supernumerario Supernumerario	Antonio Pradillo (perpetua) Juan Ruíz de la Peña (perpetua) Diego Gómez Falcón (perpetua) Francisco Pantoja (perpetua) Lorenzo de Velasco y Angulo Pedro Gómez Falcón (perpetua) Francisco de Cuadros Ignacio de los Reyes Baltasara Párdinas [la ocupa su hijo Manuel de Esnoz desde 19.10.1721] Antonio Gómez Falcón (supernumeraria) [desde 09.03.1724] Antonio Marcelo Iglesias (supernumeraria, la sirve su padre Isidro López Iglesias) [desde 11.12.1724]
Alguacil Mayor	José de Cabrera [24.05.1712-1741 m.] Francisco Antonio Borja [desde 27.03.1724]
Barrendero	Andrés Mateo

## AÑO 1726

Presidente	Baltasar Zúñiga y Guzmán (marqués de Valero y de Ayamonte, Duque de Arion) [28.01.1724-26.12.1727 m.]
Consejeros Capa y espada	Antonio Cristóbal de Ubilla y Medina, marqués de Rivas [desde 13.02.1705, cesado 1706; rehabilitado en 1715; en 22.12.1721 es camarista, m. 16.10.1726] Francisco Javier de Goyeneche y Balanza, marqués de Belzunce [05.10.1722-05.05.1748m., camarista desde 11.03.1744] Manuel de Silva y Meneses [desde 10.02.1710; en 22.12.1721 es camarista; en 20.11.1739 es dispensado de asistir personalmente, m. 11.05.1743] Antonio Salcedo y Aguirre, marqués de Vadillo [01.08.1715 –31.12.1728] Manuel de Vadillo Estrada y Velasco [28.01.1717-25.06.1729 m.] Fernando Luján y Silva, marqués de Almodóvar [30.03.1721-08.07.1736 m.] Luis Yopulo y Espadafora, Príncipe de San Antonio, Duque de San Blas [18.12.1725-22.07.1732 m.] Gaspar Cayetano Girón Venegas de Córdoba (supernumerario) [16.03.1724-15.12.1727 m.] Manuel Silva Rivera, marqués de Montemayor (camarista) [22.03.1725 –09.08.1737] Antonio de Sopena y Mioño (camarista 17.10.1741) [12.02.1726-15.05.1748 m.] Mateo Ibáñez de Mendoza y Córdoba (camarista 06.08.1736) [23.12.1726-07.05.1738 m.] José Francisco Casado y Velasco (honorario) [16.11.1726-23.07.1744 m.]
Togados	Diego de Zúñiga y Tobar [desde 12.10.1711; en 22.12.1721 es camarista; en 21.11.1735 es dispensado de asistir personalmente m. 20.05.1738] Gonzalo Machado [desde 26.09.1713 a 10.11.1713 (que es nombrado Presidente tercero); 05.08.1715, m. 29.12.1732. camarista a partir de 22.12.1721] Diego de Rojas y Ortega [10.11.1713-14.06.1734 m.] Antonio Ignacio de la Pedrosa y Guerrero [01.12.1720-28.06.1733 m.] Juan José Mutiolo y Lodosa [20.11.1725-01.08.1730] Antonio Francisco Aguado Fernández de Córdoba [03.02.1724-30.10.1729] Gonzalo Ramírez de Baquedano [08.02.1718-29.12.1730 m.] Juan Francisco Santos de San Pedro [12.12.1720-09.02.1726 m.] Tomás de Solá y Soto [14.03.1726-14.10.1726 m.]
Fiscal	
Nueva España	Tomás de Solá y Soto [01.02.1718-14.03.1726]
Perú	Manuel Martínez Carvajal [28.03.1726-28.01.1738] José de Laysequilla y Palacios y Aguilar [21.09.1723-08.02.1738]
Agente Fiscal	Joseph Cornejo de Nueva España [03.02.1716-25.09.1729 m.] Joseph Ruíz Cenzano (supernumerario para Perú) [desde 18.08.1724] Francisco Rojo (supernumerario para Nueva España) [desde 15.09.1718] Miguel Arenzana para Nueva España (plaza de número completa) [desde 18.08.1724]
Secretaría Nueva España Secretario Oficial Mayor	Andrés de Elcorobarrutia y Zupide [20.01.1717-07.02.1729 m.] Francisco Amatrán [jura cargo 02.12.1719-14.06.1726 m.] Salvador Antonio Florián [30.07.1726-03.11.1731 m.] Nicolás Ruíz de Garibay (jubilado y ostenta el cargo Francisco de la Azuela ) Salvador Antonio Florián [08.08.1722-30.07.1726]
Oficial 2º	Pedro de la Vega [31.07.1726-] Joseph del Corrovarrutia (supernumerario) [desde 09.03.1724] Juan Ortiz de Bracamonte (supernumerario) [desde 20.09.1725] Fernando Antonio Acebedo (oficial entretenido) [desde 06.09.1726]
Oficial 3º	Dionisio García Chávez (jubilado y ostenta el cargo otro) Pedro de la Vega [08.08.1722-31.07.1726] Adrián de Alfaro [31.07.1726-]
Oficial 4º Oficial 5º Oficial 6º	Joseph Fernández de Madrigal [31.07.1726-] Miguel Santiestebán Galindo (supernumerario) [desde 01.01.1726-05.09.1726]; entretenido [05.09.1726] Adrián de Alfaro [desde 06.10.1723-31.07.1726] Joseph Fernández de Madrigal [06.10.1723-31.07.1726] Nicolás de Benavente [desde 06.10.1723]

El Consejo de Indias y su relación con la vía reservada en el reinado de Felipe V

Secretaría Perú	Francisco de Arana [30.04.1717-16.11.1726 m.]
Secretario	Antonio Maturana [26.05.1721-]
Oficial Mayor	Joseph de Mayorga [desde 25.01.1720]
Oficial 2º	Prudencio de Cruz [desde 26.01.1721]
	Miguel Gutiérrez [desde 12.01.1720]
Oficial 3º	Gabriel de Peralta [desde 26.05.1721]
	Eugenio Anastasio Illescas (supernumerario) [01.01.1726-25.05.1726]
Oficial 4º	Manuel de Castellanos [desde 26.05.1721-]
Oficial 5º	Marcos Chirinos y Ubilla [desde 07.04.1722]
Oficial 6º	Francisco Adrada [desde 29.10.1722]
Contadores	Alonso de Buendía [01.08.1720-26.01.1729 m.]
	Juan Antonio Franco (supernumerario)[13.03.1720-1729]
	José Manuel Llano [22.12.1707-03.02.1729 m.]
	Pedro Pablo Herrera [16.09.1720-21.04.1749 m.]
Secretario Presidencia	Bartolomé Crespo [desde 02.01.1724]
Depositario	Miguel Gastón de Iriarte [20.01.1717-13.05.1730]
Capellán	Francisco de la Torre Ocón [titular 06.06.1725-1726 m.]
	Raimundo Rezabal [16.11.1726-1745 m.]
Comisario General orden Sn Francisco	Fray Juan de Soto [29.01.1722-1729]
Cronista	Luis de Salazar y Castro [12.02.1698-09.02.1734 m.]
Cosmógrafo	Alejandro Burneto [13.09.1722-1727]
	Antonio de Salazar y Castillo [18.03.1725-03.04.1759]
Escribano Cámara	Juan Antonio Lecaroz (oficial mayor)
Relatores	
Relator 1º	Luis Escandón [27.11.1721-08.04.1734 m.]
Relator 2º	Francisco Ramiro Valenzuela [31.10.1711-21.07.1739 m.]
Relator 3º	Manuel de Arredondo [31.10.1711-18.08.1734]
	Luis Lagúnez Malaguilla [desde 10.05.1724-1756 m.]
Sello y Registro	Andrés de Vadillo
Abogado Pobres	Luis Verdugo [31.03.1718-1730]
Procurador Pobres	Diego del Puerto
Porteros	
Portero 1º	Antonio Pradillo (perpetua)
Portero 2º	Juan Ruíz de la Peña (perpetua)
Portero 3º	Diego Gómez Falcón (perpetua)
Portero 4º	Francisco Pantoja (perpetua)
Supernumerario	Lorenzo de Velasco y Angulo
Supernumerario	Pedro Gómez Falcón (perpetua)
Supernumerario	Francisco de Cuadros
Supernumerario	Ignacio de los Reyes
	Baltasara Pardinás [la ocupa su hijo Manuel de Esnoz desde 19.10.1721]
	Antonio Gómez Falcón (supernumeraria) [desde 09.03.1724]
	Antonio Marcelo Iglesias (supernumeraria, la sirve su padre Isidro López Iglesias) [desde 11.12.1724]
Alguacil Mayor	José de Cabrera [24.05.1712-1741 m.]
	Francisco Antonio Borja [desde 27.03.1724]
Barrendero	Andrés Mateo

## AÑO 1727

Presidente	Baltasar Zúñiga y Guzmán (marqués de Valero y de Ayamonte, Duque de Arion) [28.01.1724-26.12.1727 m.]
Consejeros	<p>Francisco Javier de Goyeneche y Balanza, marqués de Belzunce [05.10.1722-05.05.1748m., camarista desde 11.03.1744]</p> <p>Manuel de Silva y Meneses [desde 10.02.1710; en 22.12.1721 es camarista; en 20.11.1739 es dispensado de asistir personalmente, m. 11.05.1743]</p> <p>Antonio Salcedo y Aguirre, marqués de Vadillo [01.08.1715 –31.12.1728]</p> <p>Manuel de Vadillo Estrada y Velasco [28.01.1717-25.06.1729 m.]</p> <p>Fernando Luján y Silva, marqués de Almodóvar [30.03.1721-08.07.1736 m.]</p> <p>Luis Yopulo y Espadafora, Príncipe de San Antonio, Duque de San Blas [18.12.1725-22.07.1732 m.]</p> <p>Gaspar Cayetano Girón Venegas de Córdoba (capa y espada supernumerario) [16.03.1724-15.12.1727 m.]</p> <p>Manuel Silva Rivera, marqués de Montemayor (capa y espada camarista) [22.03.1725 – 09.08.1737]</p> <p>Antonio de Sopeña y Mioño (capa y espada; camarista 17.10.1741) [12.02.1726-15.05.1748 m.]</p> <p>Mateo Ibáñez de Mendoza y Córdoba (capa y espada; camarista 06.08.1736) [23.12.1726-07.05.1738 m.]</p> <p>José Francisco Casado y Velasco (capa y espada honorario) [16.11.1726-23.07.1744 m.]</p>
Togados	<p>Diego de Zúñiga y Tobar [desde 12.10.1711; en 22.12.1721 es camarista; en 21.11.1735 es dispensado de asistir personalmente m. 20.05.1738]</p> <p>Gonzalo Machado [desde 26.09.1713 a 10.11.1713 (que es nombrado Presidente tercero); 05.08.1715, m. 29.12.1732. camarista a partir de 22.12.1721]</p> <p>Diego de Rojas y Ortega [10.11.1713-14.06.1734 m.]</p> <p>Antonio Ignacio de la Pedrosa y Guerrero [01.12.1720-28.06.1733 m.]</p> <p>Juan José Mutilloa y Lodosa [20.11.1725-01.08.1730]</p> <p>Antonio Francisco Aguado Fernández de Córdoba [03.02.1724-30.10.1729]</p> <p>Gonzalo Ramírez de Baquedano [08.02.1718-29.12.1730 m.]</p>
Fiscal Nueva España	Manuel Martínez Carvajal [28.03.1726-28.01.1738]
Perú	José de Laysequilla y Palacios y Aguilar [21.09.1723-08.02.1738]
Agente Fiscal	<p>Joseph Cornejo de Nueva España [03.02.1716-25.09.1729 m.]</p> <p>Joseph Ruíz Cenzano (supernumerario para Perú) [desde 18.08.1724]</p> <p>Francisco Rojo (supernumerario para Nueva España) [desde 15.09.1718]</p> <p>Miguel Arenzana para Nueva España (plaza de número completa) [desde 18.08.1724]</p>
Secretaría Nueva España	
Secretario	Andrés de Elcorobarrutia y Zupide [20.01.1717-07.02.1729 m.]
Oficial Mayor	<p>Salvador Antonio Florián [30.07.1726-03.11.1731 m.]</p> <p>Nicolás Ruíz de Garibay (jubilado y ostenta el cargo Francisco de la Azuela )</p> <p>Pedro de la Vega [31.07.1726-]</p>
Oficial 2º	<p>Joseph del Corrovarrutia (supernumerario) [desde 09.03.1724]</p> <p>Juan Ortiz de Bracamonte (supernumerario) [desde 20.09.1725]</p> <p>Fernando Antonio Acebedo (oficial entretenido) [desde 06.09.1726]</p> <p>Dionisio García Chávez (jubilado y ostenta el cargo otro)</p> <p>Adrián de Alfaro [31.07.1726-]</p>
Oficial 3º	<p>Joseph Fernández de Madrigal [31.07.1726-]</p> <p>Miguel Santiestebán Galindo (supernumerario) [desde 01.01.1726-05.09.1726]; entretenido [05.09.1726]</p>
Oficial 4º	Adrián de Alfaro [desde 06.10.1723-31.07.1726]
Oficial 5º	Joseph Fernández de Madrigal [06.10.1723-31.07.1726]
Oficial 6º	Nicolás de Benavente [desde 06.10.1723]

El Consejo de Indias y su relación con la vía reservada en el reinado de Felipe V

Secretaría Perú	Francisco Díaz Román [15.02.1727-16.02.1732 m.]
Secretario	Antonio Maturana [26.05.1721-]
Oficial Mayor	Joseph de Mayorga [desde 25.01.1720]
Oficial 2º	Prudencio de Cruz [desde 26.01.1721]
	Miguel Gutiérrez [desde 12.01.1720]
Oficial 3º	Gabriel de Peralta [desde 26.05.1721]
	Eugenio Anastasio Illescas (numerario) [25.05.1726-02.12.1730 m.]
	Fernando Treviño (oficial entretenido) [10.05.1727-]
Oficial 4º	Manuel de Castellanos [26.05.1721-08.03.1727 m.]
Oficial 5º	Marcos Chirinos y Ubilla [desde 07.04.1722]
Oficial 6º	Francisco Adrada [desde 29.10.1722]
Contadores	Alonso de Buendía [01.08.1720-26.01.1729 m.]
	Pedro de Buendía [16.09.1727-15.06.1728]
	Juan Antonio Franco (supernumerario) [13.03.1720-1729]
	José Manuel Llano [22.12.1707-03.02.1729 m.]
	Pedro Pablo Herrera [16.09.1720-21.04.1749 m.]
Secretario	Bartolomé Crespo [desde 02.01.1724]
Presidencia	
Depositario	Miguel Gastón de Iriarte [20.01.1717-13.05.1730]
Capellán	Raimundo Rezabal [16.11.1726-1745 m.]
Comisario General	Fray Juan de Soto [29.01.1722-1729]
orden Sn Francisco	
Cronista	Luis de Salazar y Castro [12.02.1698-09.02.1734 m.]
Cosmógrafo	Alejandro Burneto [13.09.1722-1727]
	Nicasio Gramatici [17.03.1727-1728]
Escribano Cámara	Antonio de Salazar y Castillo [18.03.1725-03.04.1759]
	Juan Antonio Lecaroz (oficial mayor)
Relatores	
Relator 1º	Luis Escandón [27.11.1721-08.04.1734 m.]
Relator 2º	Francisco Ramiro Valenzuela [31.10.1711-21.07.1739 m.]
Relator 3º	Manuel de Arredondo [31.10.1711-18.08.1734]
	Luis Lagúnez Malaguilla [desde 10.05.1724-1756 m.]
Sello y Registro	Andrés de Vadillo
Abogado Pobres	Luis Verdugo [31.03.1718-1730]
Procurador Pobres	Diego del Puerto
Porteros	
Portero 1º	Antonio Pradillo (perpetua)
Portero 2º	Juan Ruíz de la Peña (perpetua)
Portero 3º	Diego Gómez Falcón (perpetua)
Portero 4º	Francisco Pantoja (perpetua)
Supernumerario	Lorenzo de Velasco y Angulo
Supernumerario	Pedro Gómez Falcón (perpetua)
Supernumerario	Francisco de Cuadros
Supernumerario	Ignacio de los Reyes
	Baltasara Pardinás [la ocupa su hijo Manuel de Esnoz desde 19.10.1721]
	Antonio Gómez Falcón (supernumeraria) [desde 09.03.1724]
	Antonio Marcelo Iglesias (supernumeraria, la sirve su padre Isidro López Iglesias) [desde 11.12.1724]
Alguacil Mayor	José de Cabrera [24.05.1712-1741 m.]
	Francisco Antonio Borja [desde 27.03.1724]
Barrendero	Andrés Mateo

## AÑO 1728

Presidente	
Gobernador	
Consejeros Capa y espada	Francisco Javier de Goyeneche y Balanza, marqués de Belzunce [05.10.1722-05.05.1748 m., camarista desde 11.03.1744] Manuel de Silva y Meneses [desde 10.02.1710; en 22.12.1721 es camarista; en 20.11.1739 es dispensado de asistir personalmente, m. 11.05.1743] Antonio Salcedo y Aguirre, marqués de Vadillo [01.08.1715 –31.12.1728] Manuel de Vadillo Estrada y Velasco [28.01.1717-25.06.1729 m.] Fernando Luján y Silva, marqués de Almodóvar [30.03.1721-08.07.1736 m.] Luis Yopulo y Espadafora, Príncipe de San Antonio, Duque de San Blas [18.12.1725-22.07.1732 m.] Juan Pizarro y Aragón, marqués de San Juan de Piedras Albas [28.02.1728-18.01.1771 m.] Manuel Silva Rivera, marqués de Montemayor (capa y espada camarista) [22.03.1725 – 09.08.1737] Antonio de Sopeña y Mioño (capa y espada; camarista 17.10.1741) [12.02.1726-15.05.1748 m.] Mateo Ibáñez de Mendoza y Córdoba (capa y espada; camarista 06.08.1736) [23.12.1726-07.05.1738 m.] José Francisco Casado y Velasco (capa y espada honorario) [16.11.1726-23.07.1744 m.] Fernando Verdes Montenegro y Castro Baamonde [01.03.1728-13.01.1740]
Togados	Diego de Zúñiga y Tobar [desde 12.10.1711; en 22.12.1721 es camarista; en 21.11.1735 es dispensado de asistir personalmente m. 20.05.1738] Gonzalo Machado [desde 26.09.1713 a 10.11.1713 (que es nombrado Presidente tercero); 05.08.1715, m. 29.12.1732. camarista a partir de 22.12.1721] Diego de Rojas y Ortega [10.11.1713-14.06.1734 m.] Antonio Ignacio de la Pedrosa y Guerrero [01.12.1720-28.06.1733 m.] Juan José Mutilloa y Lodosa [20.11.1725-01.08.1730] Antonio Francisco Aguado Fernández de Córdoba [03.02.1724-30.10.1729] Gonzalo Ramírez de Baquedano [08.02.1718-29.12.1730 m.]
Fiscal Nueva España Perú	Manuel Martínez Carvajal [28.03.1726-28.01.1738] José de Laysequilla y Palacios y Aguilar [21.09.1723-08.02.1738]
Agente Fiscal	Joseph Cornejo de Nueva España [03.02.1716-25.09.1729 m.] Joseph Ruíz Cenzano (supernumerario parar Perú) [desde 18.08.1724] Francisco Rojo (supernumerario para Nueva España) [desde 15.09.1718] Miguel Arenzana para Nueva España (plaza de número completa) [desde 18.08.1724]
Secretaría Nueva España Secretario Oficial Mayor	Andrés de Elcorobarrutia y Zupide [20.01.1717-07.02.1729 m.] Salvador Antonio Florián [30.07.1726-03.11.1731 m.] Nicolás Ruíz de Garibay (jubilado) m. 16.01.1728 Pedro de la Vega [31.07.1726-] Adrián de Alfaro [28.01.1728-]
Oficial 2º	Joseph del Corrovarrutia (supernumerario) [desde 09.03.1724] Juan Ortiz de Bracamonte (supernumerario) [20.09.1725-31.12.1728] Fernando Antonio Acebedo (oficial entretenido) [desde 06.09.1726] Adrián de Alfaro [31.07.1726-28.01.1728] Joseph Fernández de Madrigal [31.07.1726-]
Oficial 3º	Nicolás de Benavente [desde 29.01.1728] Miguel Santiestebán Galindo (supernumerario) [desde 01.01.1726-05.09.1726]; entretenido [05.09.1726] Pedro Perea Salazar (entretenido) [desde 16.03.1728] Sebastián Unamuniaga (entretenido) [desde 16.03.1728]
Oficial 4º	Juan Antonio Mioño y Carranza (supernumerario) [desde 05.11.1728]
Oficial 5º	
Oficial 6º	Nicolás de Benavente [06.10.1723-29.01.1728]



El Consejo de Indias y su relación con la vía reservada en el reinado de Felipe V

Secretaría Perú	Francisco Díaz Román [15.02.1727-16.02.1732 m.]
Secretario	Antonio Maturana [26.05.1721-]
Oficial Mayor	Joseph de Mayorga [desde 25.01.1720]
Oficial 2º	Prudencio de Cruz [desde 26.01.1721]
	Miguel Gutiérrez [desde 12.01.1720]
Oficial 3º	Gabriel de Peralta [desde 26.05.1721]
	Eugenio Anastasio Illescas (numerario) [25.05.1726-02.12.1730 m.]
	Fernando Treviño (oficial entretenido) [10.05.1727-12.01.1728]
Oficial 4º	Joseph Portearroyo (oficial entretenido) [desde 06.03.1728]
Oficial 5º	Joseph Borgoña y Laoz (oficial entretenido supernumerario) [desde 13.04.1728]
Oficial 6º	Francisco Adrada [desde 29.10.1722]
Contadores	Alonso de Buendía [01.08.1720-26.01.1729 m.]
	Pedro de Buendía [16.09.1727-15.06.1728]
	Juan Antonio Franco (supernumerario) [13.03.1720-1729]
	José Manuel Llano [22.12.1707-03.02.1729 m.]
	Juan de Miranda y Testa (supernumerario) [31.08.1728-24.02.1746 m.]
	Pedro Pablo Herrera [16.09.1720-21.04.1749 m.]
	Tomás de Castro y Colona [04.11.1728-27.03.1760]
Secretario Presidencia	Bartolomé Crespo [desde 02.01.1724]
Depositario	Miguel Gastón de Iriarte [20.01.1717-13.05.1730]
Capellán	Raimundo Rezabal [16.11.1726-1745 m.]
Comisario General orden Sn Francisco	Fray Juan de Soto [29.01.1722-1729]
Cronista	Luis de Salazar y Castro [12.02.1698-09.02.1734 m.]
Cosmógrafo	Nicasio Gramaticí [17.03.1727-1728]
	Manuel de Campos [23.12.1728-1733]
Escribano Cámara	Antonio de Salazar y Castillo [18.03.1725-03.04.1759]
	Juan Antonio Lecaroz (oficial mayor)
Relatores	
Relator 1º	Luis Escandón [27.11.1721-08.04.1734 m.]
Relator 2º	Francisco Ramiro Valenzuela [31.10.1711-21.07.1739 m.]
Relator 3º	Manuel de Arredondo [31.10.1711-18.08.1734]
	Luis Lagúnez Malaguilla [desde 10.05.1724-1756 m.]
Sello y Registro	Andrés de Vadillo
Abogado Pobres	Luis Verdugo [31.03.1718-1730]
Procurador Pobres	Diego del Puerto
Porteros	
Portero 1º	Antonio Pradillo (perpetua)
Portero 2º	Juan Ruíz de la Peña (perpetua)
Portero 3º	Diego Gómez Falcón (perpetua)
Portero 4º	Francisco Pantoja (perpetua)
Supernumerario	Lorenzo de Velasco y Angulo
Supernumerario	Pedro Gómez Falcón (perpetua)
Supernumerario	Francisco de Cuadros
Supernumerario	Ignacio de los Reyes
	Baltasara Párdinas [la ocupa su hijo Manuel de Esnoz desde 19.10.1721]
	Antonio Gómez Falcón (supernumeraria) [desde 09.03.1724]
	Antonio Marcelo Iglesias (supernumeraria)
Alguacil Mayor	José de Cabrera [24.05.1712-1741 m.]
	Francisco Antonio Borja [desde 27.03.1724]
Barrendero	Andrés Mateo

## AÑO 1729

Presidente	
Gobernador	
Consejeros	
Capa y espada	<p>Francisco Javier de Goyeneche y Balanza, marqués de Belzunce [05.10.1722-05.05.1748 m., camarista desde 11.03.1744]</p> <p>Manuel de Silva y Meneses [desde 10.02.1710; en 22.12.1721 es camarista; en 20.11.1739 es dispensado de asistir personalmente, m. 11.05.1743]</p> <p>Manuel de Vadillo Estrada y Velasco [28.01.1717-25.06.1729 m.]</p> <p>Fernando Luján y Silva, marqués de Almodóvar [30.03.1721-08.07.1736 m.]</p> <p>Luis Yopulo y Espadafora, Príncipe de San Antonio, Duque de San Blas [18.12.1725-22.07.1732 m.]</p> <p>Juan Pizarro y Aragón, marqués de San Juan de Piedras Albas [28.02.1728-18.01.1771 m.]</p> <p>Manuel Silva Rivera, marqués de Montemayor (capa y espada camarista) [22.03.1725 – 09.08.1737]</p> <p>Antonio de Sopena y Mioño (capa y espada; camarista 17.10.1741) [12.02.1726-15.05.1748 m.]</p> <p>Mateo Ibáñez de Mendoza y Córdoba (capa y espada; camarista 06.08.1736) [23.12.1726-07.05.1738 m.]</p> <p>José Francisco Casado y Velasco (capa y espada honorario) [16.11.1726-23.07.1744 m.]</p> <p>Fernando Verdes Montenegro y Castro Baamonde [01.03.1728-13.01.1740]</p> <p>marqués de Capicelatro [25.01.1729-01.05.1735]</p>
Togados	<p>Diego de Zúñiga y Tobar [desde 12.10.1711; en 22.12.1721 es camarista; en 21.11.1735 es dispensado de asistir personalmente m. 20.05.1738]</p> <p>Gonzalo Machado [desde 26.09.1713 a 10.11.1713 (que es nombrado Presidente tercero); 05.08.1715, m. 29.12.1732. camarista a partir de 22.12.1721]</p> <p>Diego de Rojas y Ortega [10.11.1713-14.06.1734 m.]</p> <p>Antonio Ignacio de la Pedrosa y Guerrero [01.12.1720-28.06.1733 m.]</p> <p>Juan José Mutilloa y Lodosa [20.11.1725-01.08.1730]</p> <p>Antonio Francisco Aguado Fernández de Córdoba [03.02.1724-30.10.1729]</p> <p>Gonzalo Ramírez de Baquedano [08.02.1718-29.12.1730 m.]</p>
Fiscal	
Nueva España	Manuel Martínez Carvajal [28.03.1726-28.01.1738]
Perú	José de Laysequilla y Palacios y Aguilar [21.09.1723-08.02.1738]
Agente Fiscal	<p>Joseph Cornejo de Nueva España [03.02.1716-25.09.1729 m.]</p> <p>Joseph Ruíz Cenzano (numerario para Perú) [desde 26.12.1729]</p> <p>Francisco Rojo (supernumerario para Nueva España) [desde 15.09.1718]</p> <p>Miguel Arenzana para Nueva España (plaza de número completa) [desde 18.08.1724]</p>
Secretaría Nueva España	
Secretario	Andrés de Elcorobarrutia y Zupide [20.01.1717-07.02.1729 m.]
Oficial Mayor	<p>Jerónimo Uztáriz [19.04.1729-31.01.1732 m.]</p> <p>Salvador Antonio Florián [30.07.1726-03.11.1731 m.]</p> <p>Pedro de la Vega [31.07.1726-]</p>
Oficial 2º	<p>Adrián de Alfaro [28.01.1728-]</p> <p>Joseph del Corrovarrutia (supernumerario) [desde 09.03.1724]</p> <p>Fernando Antonio Acebedo (oficial entretenido) [desde 06.09.1726]</p> <p>Joseph Fernández de Madrigal [31.07.1726-]</p> <p>Nicolás de Benavente [desde 29.01.1728]</p>
Oficial 3º	<p>Miguel Santiestebán Galindo (supernumerario) [desde 01.01.1726-05.09.1726]; entretenido [05.09.1726]</p> <p>Pedro Perea Salazar (entretenido) [desde 16.03.1728]</p> <p>Sebastián Unamuniaga (entretenido) [desde 16.03.1728]</p>
Oficial 4º	Juan Antonio Mioño y Carranza (supernumerario) [desde 05.11.1728]
Oficial 5º	
Oficial 6º	

El Consejo de Indias y su relación con la vía reservada en el reinado de Felipe V

Secretaría Perú	Francisco Díaz Román [15.02.1727-16.02.1732 m.]
Secretario	Antonio Maturana [26.05.1721-]
Oficial Mayor	Joseph de Mayorga [desde 25.01.1720]
Oficial 2º	Prudencio de Cruz [desde 26.01.1721]
	Miguel Gutiérrez [desde 12.01.1720]
Oficial 3º	Gabriel de Peralta [desde 26.05.1721]
	Eugenio Anastasio Illescas (numerario) [25.05.1726-02.12.1730 m.]
	Fernando Treviño (oficial entretenido) [10.05.1727-12.01.1728]
Oficial 4º	Joseph Portearroyo (oficial entretenido) [desde 06.03.1728]
Oficial 5º	Joseph Borgoña y Laoz (oficial entretenido supernumerario) [desde 13.04.1728]
Oficial 6º	Francisco Adrada [desde 29.10.1722]
Contadores	Alonso de Buendía [01.08.1720-26.01.1729 m.]
	Manuel González de Ampuero [01.02.1729-]
	José Manuel Llano [22.12.1707-03.02.1729 m.]
	Bernardo Calderón (supernumerario) [1730-17.02.1731]
	Juan Antonio Franco [31.01.1729-31.01.1732 m.]
	Juan de Miranda y Testa (supernumerario) [31.08.1728-24.02.1746 m.]
	Pedro Pablo Herrera [16.09.1720-21.04.1749 m.]
	Tomás de Castro y Colona [04.11.1728-27.03.1760]
Secretario	Bartolomé Crespo [desde 02.01.1724]
Presidencia	
Depositario	Miguel Gastón de Iriarte [20.01.1717-13.05.1730]
Capellán	Raimundo Rezabal [16.11.1726-1745 m.]
Comisario General	Fray Juan de Soto [29.01.1722-1729]
orden Sn Francisco	Fray Domingo de Losada [06.11.1729-1741]
Cronista	Luis de Salazar y Castro [12.02.1698-09.02.1734 m.]
Cosmógrafo	Manuel de Campos [23.12.1728-1733]
Escribano Cámara	Antonio de Salazar y Castillo [18.03.1725-03.04.1759]
	Juan Antonio Lecaroz (oficial mayor)
Relatores	
Relator 1º	Luis Escandón [27.11.1721-08.04.1734 m.]
Relator 2º	Francisco Ramiro Valenzuela [31.10.1711-21.07.1739 m.]
Relator 3º	Manuel de Arredondo [31.10.1711-18.08.1734]
	Luis Lagúnez Malaguilla [desde 10.05.1724-1756 m.]
Sello y Registro	Andrés de Vadillo
Abogado Pobres	Luis Verdugo [31.03.1718-1730]
Procurador Pobres	Diego del Puerto
Porteros	
Portero 1º	Antonio Pradillo (perpetua)
Portero 2º	Juan Ruíz de la Peña (perpetua)
Portero 3º	Diego Gómez Falcón (perpetua)
Portero 4º	Francisco Pantoja (perpetua)
Supernumerario	Lorenzo de Velasco y Angulo
Supernumerario	Pedro Gómez Falcón (perpetua)
Supernumerario	Francisco de Cuadros
Supernumerario	Ignacio de los Reyes
	Baltasara Párdinas [la ocupa su hijo Manuel de Esnoz desde 19.10.1721]
	Antonio Gómez Falcón (supernumeraria) [desde 09.03.1724]
	Antonio Marcelo Iglesias (supernumeraria, la sirve su padre Isidro López Iglesias) [desde 11.12.1724]
Alguacil Mayor	José de Cabrera [24.05.1712-1741 m.]
	Francisco Antonio Borja [desde 27.03.1724]
Barrendero	Andrés Mateo

## AÑO 1730

Presidente	
Gobernador	
Consejeros	
Capa y espada	Francisco Javier de Goyeneche y Balanza, marqués de Belzunce [05.10.1722-05.05.1748 m., camarista desde 11.03.1744] Manuel de Silva y Meneses [desde 10.02.1710; en 22.12.1721 es camarista; en 20.11.1739 es dispensado de asistir personalmente, m. 11.05.1743] Fernando Luján y Silva, marqués de Almodóvar [30.03.1721-08.07.1736 m.] Luis Yopulo y Espadafora, Príncipe de San Antonio, Duque de San Blas [18.12.1725-22.07.1732 m.] Juan Pizarro y Aragón, marqués de San Juan de Piedras Albas [28.02.1728-18.01.1771 m.] Manuel Silva Rivera, marqués de Montemayor (camarista) [22.03.1725-09.08.1737] Antonio de Sopena y Mioño (camarista 17.10.1741) [12.02.1726-15.05.1748 m.] Mateo Ibáñez de Mendoza y Córdoba (capa y espada; camarista 06.08.1736) [23.12.1726-07.05.1738 m.] José Francisco Casado y Velasco (capa y espada honorario) [16.11.1726-23.07.1744 m.] Fernando Verdes Montenegro y Castro Baamonde [01.03.1728-13.01.1740] marqués de Capicelatro [25.01.1729-01.05.1735]
Togados	Diego de Zúñiga y Tobar [desde 12.10.1711; en 22.12.1721 es camarista; en 21.11.1735 es dispensado de asistir personalmente m. 20.05.1738] Gonzalo Machado [desde 26.09.1713 a 10.11.1713 (que es nombrado Presidente tercero); 05.08.1715, m. 29.12.1732. camarista a partir de 22.12.1721] Diego de Rojas y Ortega [10.11.1713-14.06.1734 m.] Antonio Ignacio de la Pedrosa y Guerrero [01.12.1720-28.06.1733 m.] Juan José Mutiolo y Lodosa [20.11.1725-01.08.1730] Luis Ambrosio de Alarcón y Vargas [22.05.1730-05.03.1732 m.] Gonzalo Ramírez de Baquedano [08.02.1718-29.12.1730 m.]
Fiscal	
Nueva España	Manuel Martínez Carvajal [28.03.1726-28.01.1738]
Perú	José de Laysequilla y Palacios y Aguilar [21.09.1723-08.02.1738]
Agente Fiscal	Miguel Arenzana para Nueva España (plaza de número completa) [desde 18.08.1724] Joseph Ruíz Cenzano (numerario para Perú) [desde 26.12.1729] Francisco Rojo (supernumerario para Nueva España) [desde 15.09.1718] Blas Benítez de Cifuentes (para el Perú) [07.01.1730-]
Secretaría Nueva España	
Secretario	Jerónimo Uztáriz [19.04.1729-31.01.1732 m.]
Oficial Mayor	Salvador Antonio Florián [30.07.1726-03.11.1731 m.] Pedro de la Vega [31.07.1726-] Adrián de Alfaro [28.01.1728-]
Oficial 2º	Joseph del Corrovarrutia (supernumerario) [desde 09.03.1724] Fernando Antonio Acebedo (oficial entretenido) [desde 06.09.1726] Joseph Fernández de Madrigal [31.07.1726-] Nicolás de Benavente [desde 29.01.1728]
Oficial 3º	Miguel Santiestebán Galindo (supernumerario) [desde 01.01.1726-05.09.1726]; entretenido [05.09.1726] Pedro Perea Salazar (entretenido) [desde 16.03.1728] Sebastián Unamuniaga (entretenido) [desde 16.03.1728]
Oficial 4º	Juan Antonio Mioño y Carranza (supernumerario) [desde 05.11.1728]
Oficial 5º	
Oficial 6º	

El Consejo de Indias y su relación con la vía reservada en el reinado de Felipe V

Secretaría Perú Secretario Oficial Mayor	Francisco Díaz Román [15.02.1727-16.02.1732 m.] Antonio Maturana [26.05.1721-]
Oficial 2º	Joseph de Mayorga [desde 25.01.1720] Prudencio de Cruz [desde 26.01.1721] Miguel Gutiérrez [desde 12.01.1720]
Oficial 3º	Gabriel de Peralta [desde 26.05.1721] Eugenio Anastasio Illescas (numerario) [25.05.1726-02.12.1730 m.]
Oficial 4º	Joseph Portearroyo (oficial entretenido) [desde 06.03.1728] Joseph Borgoña y Laoz (oficial entretenido supernumerario) [desde 13.04.1728]
Oficial 5º Oficial 6º	Francisco Adrada [desde 29.10.1722]
Contadores	Manuel González de Ampuero [01.02.1729-] Bernardo Calderón (supernumerario) [1730-17.02.1731] Juan Antonio Franco [31.01.1729-31.01.1732 m.] Juan de Miranda y Testa (supernumerario) [31.08.1728-24.02.1746 m.] Lope Hurtado de Mendoza y Figueroa (supernumerario) [02.02.1730-12.11.1747 m.] Pedro Pablo Herrera [16.09.1720-21.04.1749 m.] Tomás de Castro y Colona [04.11.1728-27.03.1760]
Secretario Presidencia	Bartolomé Crespo [desde 02.01.1724]
Depositario	Miguel Gastón de Iriarte [20.01.1717-13.05.1730] Martín de Echarte [13.05.1730-27.09.1736]
Capellán	Raimundo Rezabal [16.11.1726-1745 m.]
Comisario General orden Sn Francisco	Fray Domingo de Losada [06.11.1729-1741]
Cronista	Luis de Salazar y Castro [12.02.1698-09.02.1734 m.]
Cosmógrafo	Manuel de Campos [23.12.1728-1733]
Escribano Cámara	Antonio de Salazar y Castillo [18.03.1725-03.04.1759] Juan Antonio Lecaroz (oficial mayor)
Relatores Relator 1º Relator 2º Relator 3º	Luis Escandón [27.11.1721-08.04.1734 m.] Francisco Ramiro Valenzuela [31.10.1711-21.07.1739 m.] Manuel de Arredondo [31.10.1711-18.08.1734] Luis Lagúnez Malaguilla [desde 10.05.1724-1756 m.]
Sello y Registro	Andrés de Vadillo
Abogado Pobres	Luis Verdugo [31.03.1718-1730] Diego de Ibarra Navarro [06.03.1730-]
Procurador Pobres	Diego del Puerto
Porteros Portero 1º Portero 2º Portero 3º Portero 4º Supernumerario Supernumerario Supernumerario Supernumerario	Antonio Pradillo (perpetua) Juan Ruíz de la Peña (perpetua) Diego Gómez Falcón (perpetua) Francisco Pantoja (perpetua) Lorenzo de Velasco y Angulo Pedro Gómez Falcón (perpetua) Francisco de Cuadros Ignacio de los Reyes Baltasara Párdinas [la ocupa su hijo Manuel de Esnoz desde 19.10.1721] Antonio Gómez Falcón (supernumeraria) [desde 09.03.1724] Antonio Marcelo Iglesias (supernumeraria, la sirve su padre Isidro López Iglesias) [desde 11.12.1724]
Alguacil Mayor	José de Cabrera [24.05.1712-1741 m.] Francisco Antonio Borja [desde 27.03.1724]
Barrendero	Andrés Mateo

## AÑO 1731

Presidente	
Gobernador	
Consejeros	<p>Francisco Javier de Goyeneche y Balanza, marqués de Belzunce [05.10.1722-05.05.1748 m., camarista desde 11.03.1744]</p> <p>Manuel de Silva y Meneses [desde 10.02.1710; en 22.12.1721 es camarista; en 20.11.1739 es dispensado de asistir personalmente, m. 11.05.1743]</p> <p>Fernando Luján y Silva, marqués de Almodóvar [30.03.1721-08.07.1736 m.]</p> <p>Luis Yopulo y Espadafora, Príncipe de San Antonio, Duque de San Blas [18.12.1725-22.07.1732 m.]</p> <p>Juan Pizarro y Aragón, marqués de San Juan de Piedras Albas [28.02.1728-18.01.1771 m.]</p> <p>Manuel Silva Rivera, marqués de Montemayor (camarista) [22.03.1725 –09.08.1737]</p> <p>Antonio de Sopena y Mioño (camarista 17.10.1741) [12.02.1726-15.05.1748 m.]</p> <p>Mateo Ibáñez de Mendoza y Córdoba (camarista 06.08.1736) [23.12.1726-07.05.1738 m.]</p> <p>José Francisco Casado y Velasco (honorario) [16.11.1726-23.07.1744 m.]</p> <p>Fernando Verdes Montenegro y Castro Baamonde [01.03.1728-13.01.1740]</p> <p>marqués de Capicelatro [25.01.1729-01.05.1735]</p> <p>Francisco Antonio Aguirre y Salcedo, marqués de Montehermoso [07.10.1731-09.11.1745 m.]</p>
Togados	<p>Diego de Zúñiga y Tobar [desde 12.10.1711; en 22.12.1721 es camarista; en 21.11.1735 es dispensado de asistir personalmente m. 20.05.1738]</p> <p>Gonzalo Machado [desde 26.09.1713 a 10.11.1713 (que es nombrado Presidente tercero); 05.08.1715, m. 29.12.1732. camarista a partir de 22.12.1721]</p> <p>Diego de Rojas y Ortega [10.11.1713-14.06.1734 m.]</p> <p>Antonio Ignacio de la Pedrosa y Guerrero [01.12.1720-28.06.1733 m.]</p> <p>Luis Ambrosio de Alarcón y Vargas [22.05.1730-05.03.1732 m.]</p> <p>Antonio José Álvarez de Abreu, marqués de Regalía (camarista desde 22.07.1733) [27.01.1731-28.11.1756 m.]</p>
Fiscal	
Nueva España	Manuel Martínez Carvajal [28.03.1726-28.01.1738]
Perú	José de Laysequilla y Palacios y Aguilar [21.09.1723-08.02.1738]
Agente Fiscal	<p>Miguel Arenzana para Nueva España (plaza de número completa) [desde 18.08.1724]</p> <p>Joseph Ruíz Cenzano (numerario para Perú) [desde 26.12.1729]</p> <p>Francisco Rojo (supernumerario para Nueva España) [desde 15.09.1718]</p> <p>Blas Benítez de Cifuentes (para el Perú) [07.01.1730-]</p>
Secretaría Nueva España	
Secretario	Jerónimo Uztáriz [19.04.1729-31.01.1732 m.]
Oficial Mayor	<p>Salvador Antonio Florián [30.07.1726-03.11.1731 m.]</p> <p>Pedro de la Vega [31.07.1726-]</p> <p>Adrián de Alfaro [28.01.1728-]</p>
Oficial 2º	<p>Joseph del Corrovarrutia (supernumerario) [desde 09.03.1724]</p> <p>Fernando Antonio Acebedo (oficial entretenido 1º) [06.09.1726-29.08.1731]</p> <p>Nicolás de Benavente [02.11.1731-]</p> <p>Joseph Fernández de Madrigal [31.07.1726-]</p> <p>Nicolás de Benavente [desde 29.01.1728-02.11.1731]</p> <p>Fernando Antonio Acebedo [29.08.1731-]</p>
Oficial 3º	<p>Miguel Santiestebán Galindo (entrenido del número 2º) [05.09.1726-05.09.1731]</p> <p>Miguel Santiestebán Galindo (entrenido del número 1º) [05.09.1731-]</p> <p>Pedro Perea Salazar (entrenido 3º) [desde 16.03.1728]</p> <p>Sebastián Unamuniaga (entrenido 3º) [desde 16.03.1728]</p>
Oficial 4º	Juan Antonio Mioño y Carranza (supernumerario) [desde 05.11.1728]
Oficial 5º	
Oficial 6º	

El Consejo de Indias y su relación con la vía reservada en el reinado de Felipe V

Secretaría Perú	Francisco Díaz Román [15.02.1727-16.02.1732 m.]
Secretario	Antonio Maturana [26.05.1721-]
Oficial Mayor	Joseph de Mayorga [desde 25.01.1720]
Oficial 2º	Prudencio de Cruz [desde 26.01.1721]
Oficial 3º	Miguel Gutiérrez [desde 12.01.1720]
	Gabriel de Peralta [desde 26.05.1721]
	Francisco Adrada (entretenido 1º) [desde 29.10.1722]
Entretenidos	Joseph Portearroyo (oficial entretenido 2º) [desde 06.03.1728]
	Joseph Borgoña y Laoz (entretenido 3º) [desde 13.04.1728]
Contaduría	Tomás de Castro y Colona [04.11.1728-27.03.1760]
Contador	Juan Antonio Franco (numerario) [31.01.1729-31.01.1732 m.]
Oficial Mayor	Manuel González de Ampuero [01.02.1729-]
Oficial 2º	Pedro Pablo Herrera [16.09.1720-21.04.1749 m.]
Oficial 3º	Lope Hurtado de Mendoza y Figueroa (supernumerario) [02.02.1730-12.11.1747 m.]
Oficial 4º	Juan de Miranda y Testa (supernumerario) [31.08.1728-24.02.1746 m.]
	Bernardo Calderón (supernumerario) [1730-17.02.1731]; (numerario) [07.02.1731-03.09.1737]
Secretario	Bartolomé Crespo [desde 02.01.1724]
Presidencia	
Depositario	Martín de Echarte [13.05.1730-27.09.1736]
Capellán	Raimundo Rezabal [16.11.1726-1745 m.]
Comisario General	Fray Domingo de Losada [06.11.1729-1741]
orden Sn Francisco	
Cronista	Luis de Salazar y Castro [12.02.1698-09.02.1734 m.]
Cosmógrafo	Manuel de Campos [23.12.1728-1733]
Secretario de	Juan Antonio Lecaroz (oficial mayor)
Cámara	
Escribano Cámara	Antonio de Salazar y Castillo [18.03.1725-03.04.1759]
	Juan Antonio Lecaroz (oficial mayor) [18.12.1732 m.]
Relatores	
Relator 1º	Luis Escandón [27.11.1721-08.04.1734 m.]
Relator 2º	Francisco Ramiro Valenzuela [31.10.1711-21.07.1739 m.]
Relator 3º	Manuel de Arredondo [31.10.1711-18.08.1734]
	Luis Lagúnez Malaguilla [desde 10.05.1724-1756 m.]
Sello y Registro	Andrés de Vadillo
Abogado Pobres	Diego de Ibarra Navarro [06.03.1730-]
Procurador Pobres	Diego del Puerto
Porteros	
Portero 1º	Antonio Pradillo (perpetua)
Portero 2º	Juan Ruíz de la Peña (perpetua)
Portero 3º	Diego Gómez Falcón (perpetua)
Portero 4º	Francisco Pantoja (perpetua)
Supernumerario	Lorenzo de Velasco y Angulo
Supernumerario	Pedro Gómez Falcón (perpetua)
Supernumerario	Francisco de Cuadros
Supernumerario	Ignacio de los Reyes
	Baltasara Pardinás [la ocupa su hijo Manuel de Esnoz desde 19.10.1721]
	Antonio Gómez Falcón (supernumeraria) [desde 09.03.1724]
	Antonio Marcelo Iglesias (supernumeraria, la sirve su padre Isidro López Iglesias) [desde 11.12.1724]
Alguacil Mayor	José de Cabrera [24.05.1712-1741 m.]
	Francisco Antonio Borja [desde 27.03.1724]
Barrendero	Andrés Mateo

## AÑO 1732

Presidente	
Gobernador	
Consejeros	
Capa y espada	<p>Francisco Javier de Goyeneche y Balanza, marqués de Belzunce [05.10.1722-05.05.1748 m., camarista desde 11.03.1744]</p> <p>Manuel de Silva y Meneses [desde 10.02.1710; en 22.12.1721 es camarista; en 20.11.1739 es dispensado de asistir personalmente, m. 11.05.1743]</p> <p>Fernando Luján y Silva, marqués de Almodóvar [30.03.1721-08.07.1736 m.]</p> <p>Luis Yopulo y Espadafora, Príncipe de San Antonio, Duque de San Blas [18.12.1725-22.07.1732 m.]</p> <p>Manuel Silva Rivera, marqués de Montemayor (capa y espada camarista) [22.03.1725-09.08.1737]</p> <p>Antonio de Sopena y Mioño (capa y espada; camarista 17.10.1741) [12.02.1726-15.05.1748 m.]</p> <p>Mateo Ibáñez de Mendoza y Córdoba (capa y espada; camarista 06.08.1736) [23.12.1726-07.05.1738 m.]</p> <p>Juan Pizarro y Aragón, marqués de San Juan de Piedras Albas [28.02.1728-18.01.1771 m.]</p> <p>Fernando Verdes Montenegro y Castro Baamonde [01.03.1728-13.01.1740]</p> <p>marqués de Capicelatro [25.01.1729-01.05.1735]</p> <p>Francisco Antonio Aguirre y Salcedo, marqués de Montehermoso [07.10.1731-09.11.1745 m.]</p> <p>José Francisco Casado y Velasco (honorario) [16.11.1726-23.07.1744 m.]</p>
Togados	<p>Diego de Zúñiga y Tobar [desde 12.10.1711; en 22.12.1721 es camarista; en 21.11.1735 es dispensado de asistir personalmente m. 20.05.1738]</p> <p>Diego de Rojas y Ortega [10.11.1713-14.06.1734 m.]</p> <p>Antonio José Álvarez de Abreu, marqués de Regalía (camarista desde 22.07.1733) [27.01.1731-28.11.1756 m.]</p> <p>Luis Ambrosio de Alarcón y Vargas [22.05.1730-05.03.1732 m.]</p> <p>José de Valdivieso [29.03.1732-11.01.1739 m.]</p> <p>Gonzalo Machado [desde 26.09.1713 a 10.11.1713 (que es nombrado Presidente tercero); 05.08.1715, m. 29.12.1732. camarista a partir de 22.12.1721]</p> <p>Antonio Ignacio de la Pedrosa y Guerrero [01.12.1720-28.06.1733 m.]</p>
Fiscal	
Nueva España	Manuel Martínez Carvajal [28.03.1726-28.01.1738]
Perú	José de Laysequilla y Palacios y Aguilar [21.09.1723-08.02.1738]
Agente Fiscal	<p>Miguel Arenzana para Nueva España (plaza de número completa) [desde 18.08.1724]</p> <p>Joseph Ruíz Cenzano (numerario para Perú) [desde 26.12.1729]</p> <p>Francisco Rojo (supernumerario para Nueva España) [desde 15.09.1718]</p> <p>Blas Benítez de Cifuentes (para el Perú) [07.01.1730-]</p>
Secretaría Nueva España	
Secretario	Jerónimo Uztáriz [19.04.1729-31.01.1732 m.]
Oficial Mayor	<p>Juan Ventura Maturana [28.06.1732-06.03.1737]</p> <p>Pedro de la Vega [03.01.1732-]</p> <p>Pedro de la Vega [31.07.1726-03.01.1732]</p>
Oficial 2º	<p>Adrián de Alfaro [28.01.1728-]</p> <p>Joseph del Corrovarrutia (supernumerario) [desde 09.03.1724]</p> <p>Nicolás de Benavente [02.11.1731-]</p> <p>Fernando Antonio Acebedo (más moderno) [29.08.1731-]</p>
Oficial 3º	<p>Miguel Santiestebán Galindo (entretenido del número 1º) [05.09.1731-]</p> <p>Pedro Perea Salazar (entretenido 3º) [desde 16.03.1728]</p> <p>Sebastián Unamuniaga (entretenido 2º) [desde 16.03.1728]</p> <p>Juan Antonio Mioño y Carranza (supernumerario entretenido 2º) [desde 05.11.1728]</p> <p>Miguel Santiestebán Galindo (entretenido del número 1º) [05.09.1731-]</p>



El Consejo de Indias y su relación con la vía reservada en el reinado de Felipe V

Secretaría Perú	Francisco Díaz Román [15.02.1727-16.02.1732 m.]
Secretario	Juan Ventura Maturana [06.02.1732-06.03.1732] Miguel de Villanueva [06.03.1732-16.05.1747]
Oficial Mayor	Antonio Maturana [26.05.1721-] Joseph de Mayorga (más antiguo) [25.01.1720-23.02.1732 m.]
Oficial 2º	Prudencio de Cruz (más antiguo) [26.01.1721-26.02.1732] Prudencio de Cruz (más moderno) [26.02.1732-] Miguel Gutiérrez (más moderno) [26.02.1732-]
Oficial 3º	Miguel Gutiérrez (más antiguo) [desde 12.01.1720-26.02.1732] Gabriel de Peralta (más moderno) [26.05.1721-26.02.1732] Gabriel de Peralta (más antiguo) [26.02.1732-] Francisco Adrada (más moderno) [26.02.1732-]
Entretenidos	Francisco Adrada (entrenido 1º) [29.10.1722-26.02.1732] Joseph Portearroyo (oficial entrenido 2º) [desde 06.03.1728] Joseph Borgoña y Laoz (entrenido 3º) [desde 13.04.1728]
Contaduría	Pedro Pablo Herrera [16.09.1720-21.04.1749 m.] Tomás de Castro y Colona [04.11.1728-27.03.1760] Juan de Miranda y Testa (supernumerario) [31.08.1728-24.02.1746 m.] Lope Hurtado de Mendoza y Figueroa (supernumerario) [02.02.1730-12.11.1747 m.] Juan Crisóstomo Bonavia (supernumerario) [15.12.1732-12.05.1758]
Secretario	Bernardo Calderón (numerario) [07.02.1731-03.09.1737]
Oficial Mayor	Manuel González de Ampuero [01.02.1729-] Juan Antonio Franco (numerario) [31.01.1729-31.01.1732 m.]
Secretario Presidencia	Bartolomé Crespo [desde 02.01.1724]
Depositario	Martín de Echarte [13.05.1730-27.09.1736]
Capellán	Raimundo Rezabal [16.11.1726-1745 m.]
Comisario General orden Sn Francisco	Fray Domingo de Losada [06.11.1729-1741]
Cronista	Luis de Salazar y Castro [12.02.1698-09.02.1734 m.]
Cosmógrafo	Manuel de Campos [23.12.1728-1733]
Escribano Cámara	Antonio de Salazar y Castillo [18.03.1725-03.04.1759] Juan Antonio Lecaroz (oficial mayor) [18.12.1732 m.] Joseph Siles (oficial mayor) [22.10.1732-]
Relator 1º	Francisco Ramiro Valenzuela [31.10.1711-21.07.1739 m.]
Relator 2º	Manuel de Arredondo [31.10.1711-18.08.1734]
Relator 3º	Luis Escandón [27.11.1721-08.04.1734 m.] Luis Lagúnez Malaguilla [10.05.1724-1756 m.]
Sello y Registro	Andrés González Vadillo
Abogado Pobres	Diego de Ibarra Navarro [06.03.1730-]
Procurador Pobres	Diego del Puerto
Portero 1º	Antonio Pradillo (perpetua 1ª)
Portero 2º	Juan Ruíz de la Peña (perpetua 2ª)
Portero 3º	Diego Gómez Falcón (perpetua 3ª)
Portero 4º	Francisco Pantoja (perpetua 4ª)
Supernumerario	Lorenzo de Velasco y Angulo
Supernumerario	Antonio Izquierdo
Supernumerario	Francisco de Cuadros
Supernumerario	Ignacio de los Reyes
Supernumerario	Pedro Gómez Falcón (perpetua)
Supernumerario	Antonio Gómez Falcón (supernumeraria) [desde 09.03.1724] Antonio Marcelo Iglesias (supernumeraria) [desde 11.12.1724] Baltasara Pardinás [la ocupa su hijo Manuel de Esnoz desde 19.10.1721]
Alguacil Mayor	José de Cabrera [24.05.1712-1741 m.] Francisco Antonio Borja [desde 27.03.1724]
Barrendero	Andrés Matheo

## AÑO 1733

Presidente	
Gobernador	
Consejeros	
Capa y espada	Francisco Javier de Goyeneche y Balanza, marqués de Belzunce [05.10.1722-05.05.1748 m., camarista desde 11.03.1744] Manuel de Silva y Meneses [desde 10.02.1710; en 22.12.1721 es camarista; en 20.11.1739 es dispensado de asistir personalmente, m. 11.05.1743] Fernando Luján y Silva, marqués de Almodóvar [30.03.1721-08.07.1736 m.] Manuel Silva Rivera, marqués de Montemayor (camarista) [22.03.1725-09.08.1737] Antonio de Sopena y Mioño (camarista 17.10.1741) [12.02.1726-15.05.1748 m.] Mateo Ibáñez de Mendoza y Córdoba (camarista 06.08.1736) [23.12.1726-07.05.1738 m.] Juan Pizarro y Aragón, marqués de San Juan de Piedras Albas [28.02.1728-18.01.1771 m.] Fernando Verdes Montenegro y Castro Baamonde [01.03.1728-13.01.1740] marqués de Capicelatro [25.01.1729-01.05.1735] Francisco Antonio Aguirre y Salcedo, marqués de Montehermoso [07.10.1731-09.11.1745 m.] José Francisco Casado y Velasco (honorario) [16.11.1726-23.07.1744 m.]
Togados	Diego de Zúñiga y Tobar [desde 12.10.1711; en 22.12.1721 es camarista; en 21.11.1735 es dispensado de asistir personalmente m. 20.05.1738] Diego de Rojas y Ortega [10.11.1713-14.06.1734 m.] Antonio José Álvarez de Abreu, marqués de Regalía (camarista desde 22.07.1733) [27.01.1731-28.11.1756 m.] José de Valdivieso [29.03.1732-11.01.1739 m.] Antonio Ignacio de la Pedrosa y Guerrero [01.12.1720-28.06.1733 m.] Andrés de Orbeta y Yrusta reemplaza a Luis Ambrosio de Alarcón [16.01.1733-02.12.1733 m.]
Fiscal	
Nueva España	Manuel Martínez Carvajal [28.03.1726-28.01.1738]
Perú	José de Laysequilla y Palacios y Aguilar [21.09.1723-08.02.1738]
Agente Fiscal	Miguel Arenzana para Nueva España (plaza de número completa) [desde 18.08.1724] Joseph Ruíz Cenzano (numerario para Perú) [desde 26.12.1729] Francisco Rojo (supernumerario para Nueva España) [desde 15.09.1718] Blas Benítez de Cifuentes (para el Perú) [07.01.1730-]
Secretaría Nueva España	
Secretario	Juan Ventura Maturana [28.06.1732-06.03.1737]
Oficial Mayor	Pedro de la Vega [03.01.1732-] Adrián de Alfaro [28.01.1728-]
Oficial 2º	Joseph del Corrovarrutia (supernumerario) [desde 09.03.1724] Nicolás de Benavente [02.11.1731-]
Oficial 3º	Fernando Antonio Acebedo (más moderno) [29.08.1731-] Miguel Santiestebán Galindo (entrenido del número 1º) [05.09.1731-] Pedro Perea Salazar (entrenido 3º) [desde 16.03.1728]
Entretenidos	Sebastián Unamuniaga (entrenido 2º) [desde 16.03.1728] Juan Antonio Mioño y Carranza (supernumerario entrenido 2º) [desde 05.11.1728] Miguel Santiestebán Galindo (entrenido del número 1º) [05.09.1731-]
Secretaría Perú	
Secretario	Miguel de Villanueva [06.03.1732-16.05.1747]
Oficial Mayor	Antonio Maturana [26.05.1721-]
Oficial 2º	Prudencio de Cruz (más moderno) [26.02.1732-] Miguel Gutiérrez (más moderno) [26.02.1732-]
Oficial 3º	Miguel Gutiérrez (más antiguo) [desde 12.01.1720-26.02.1732] Gabriel de Peralta (más moderno) [26.05.1721-26.02.1732] Gabriel de Peralta (más antiguo) [26.02.1732-] Francisco Adrada (más moderno) [26.02.1732-] Francisco Adrada (entrenido 1º) [29.10.1722-26.02.1732]]
Entretenidos	Joseph Portearroyo (oficial entrenido 2º) [desde 06.03.1728] Joseph Borgoña y Laoz (entrenido 3º) [desde 13.04.1728]

El Consejo de Indias y su relación con la vía reservada en el reinado de Felipe V

Contaduría	Pedro Pablo Herrera [16.09.1720-21.04.1749 m.] Tomás de Castro y Colona [04.11.1728-27.03.1760] Juan de Miranda y Testa (supernumerario) [31.08.1728-24.02.1746 m.] Lope Hurtado de Mendoza y Figueroa (supernumerario) [02.02.1730-12.11.1747 m.] Juan Crisóstomo Bonavía (supernumerario) [15.12.1732-12.05.1758]
Secretario Oficial Mayor	Bernardo Calderón (numerario) [07.02.1731-03.09.1737] Manuel González de Ampuero [01.02.1729-]
Secretario Presidencia	Bartolomé Crespo [desde 02.01.1724]
Depositario	Martín de Echarte [13.05.1730-27.09.1736]
Capellán	Raimundo Rezabal [16.11.1726-1745 m.]
Comisario General orden Sn Francisco	Fray Domingo de Losada [06.11.1729-1741]
Cronista	Luis de Salazar y Castro [12.02.1698-09.02.1734 m.]
Cosmógrafo	Manuel de Campos [23.12.1728-1733] Carlos de la Reguera [22.04.1733-1743]
Escribano Cámara	Antonio de Salazar y Castillo [18.03.1725-03.04.1759] Joseph Siles (oficial mayor) [22.10.1732-]
Relatores Relator 1º Relator 2º Relator 3º	Francisco Ramiro Valenzuela [31.10.1711-21.07.1739 m.] Manuel de Arredondo [31.10.1711-18.08.1734] Luis Escandón [27.11.1721-08.04.1734 m.] Luis Lagúnez Malaguilla [10.05.1724-1756 m.]
Sello y Registro	Andrés González Vadillo
Abogado Pobres	Diego de Ibarra Navarro [06.03.1730-]
Procurador Pobres	Diego del Puerto
Porteros Portero 1º Portero 2º Portero 3º Portero 4º Supernumerario Supernumerario Supernumerario Supernumerario Supernumerario	Antonio Pradillo (perpetua 1ª) Juan Ruíz de la Peña (perpetua 2ª) Diego Gómez Falcón (perpetua 3ª) Francisco Pantoja (perpetua 4ª) Lorenzo de Velasco y Angulo Antonio Izquierdo Francisco de Cuadros Ignacio de los Reyes Pedro Gómez Falcón (perpetua) Antonio Gómez Falcón (supernumeraria) [desde 09.03.1724] Antonio Marcelo Iglesias (supernumeraria, la sirve su padre Isidro López Iglesias) [desde 11.12.1724] Baltasara Pardinás [la ocupa su hijo Manuel de Esnoz desde 19.10.1721]
Alguacil Mayor	José de Cabrera [24.05.1712-1741 m.] Francisco Antonio Borja [desde 27.03.1724]
Barrendero	Andrés Matheo

**AÑO 1734**

Presidente	
Gobernador	
Consejeros	
Capa y espada	<p>Francisco Javier de Goyeneche y Balanza, marqués de Belzunce [05.10.1722-05.05.1748 m., camarista desde 11.03.1744]</p> <p>Manuel de Silva y Meneses [desde 10.02.1710; en 22.12.1721 es camarista; en 20.11.1739 es dispensado de asistir personalmente, m. 11.05.1743]</p> <p>Fernando Luján y Silva, marqués de Almodóvar [30.03.1721-08.07.1736 m.]</p> <p>Manuel Silva Rivera, marqués de Montemayor (capa y espada camarista) [22.03.1725-09.08.1737]</p> <p>Antonio de Sopeña y Mioño (capa y espada; camarista 17.10.1741) [12.02.1726-15.05.1748 m.]</p> <p>Mateo Ibáñez de Mendoza y Córdoba (capa y espada; camarista 06.08.1736) [23.12.1726-07.05.1738 m.]</p> <p>Juan Pizarro y Aragón, marqués de San Juan de Piedras Albas [28.02.1728-18.01.1771 m.]</p> <p>Fernando Verdes Montenegro y Castro Baamonde [01.03.1728-13.01.1740]</p> <p>marqués de Capicelatro [25.01.1729-01.05.1735]</p> <p>Francisco Antonio Aguirre y Salcedo, marqués de Montehermoso [07.10.1731-09.11.1745 m.]</p> <p>José Francisco Casado y Velasco (capa y espada honorario) [16.11.1726-23.07.1744 m.]</p> <p>Joachín Antonio Bazán y Melo, marqués de San Gil (capa y espada en 16.09.1737) [18.11.1734-01.09.1746]</p>
Togados	<p>Diego de Zúñiga y Tobar [desde 12.10.1711; en 22.12.1721 es camarista; en 21.11.1735 es dispensado de asistir personalmente m. 20.05.1738]</p> <p>Diego de Rojas y Ortega [10.11.1713-14.06.1734 m.]</p> <p>Antonio José Álvarez de Abreu, marqués de Regalía (camarista desde 22.07.1733) [27.01.1731-28.11.1756 m.]</p> <p>José de Valdivieso [29.03.1732-11.01.1739 m.]</p> <p>Antonio José de Pineda Capdevilla [24.07.1734-25.08.1743 m.] sucede a Antonio de la Pedrosa</p> <p>José Cornejo y Ibarra [29.07.1734-12.12.1764 m.] sucede a Andrés de Orbeta</p> <p>Pedro Domingo Contreras y Zúñiga [22.08.1734-31.12.1751] Sucede a Gonzalo Machado</p>
Fiscal	
Nueva España	Manuel Martínez Carvajal [28.03.1726-28.01.1738]
Perú	José de Laysequilla y Palacios y Aguilar [21.09.1723-08.02.1738]
Agente Fiscal	<p>Miguel Arenzana para Nueva España (plaza de número completa) [desde 18.08.1724]</p> <p>Joseph Ruíz Cenzano (numerario para Perú) [desde 26.12.1729]</p> <p>Francisco Rojo (supernumerario para Nueva España) [desde 15.09.1718]</p> <p>Blas Benítez de Cifuentes (para el Perú) [07.01.1730-]</p>
Secretaría Nueva España	
Secretario	Juan Ventura Maturana [28.06.1732-06.03.1737]
Oficial Mayor	<p>Pedro de la Vega [03.01.1732-]</p> <p>Adrián de Alfaro [28.01.1728-]</p>
Oficial 2º	<p>Joseph del Corrovarrutia (supernumerario) [desde 09.03.1724]</p> <p>Nicolás de Benavente [02.11.1731-]</p>
Oficial 3º	<p>Fernando Antonio Acebedo (más moderno) [29.08.1731-]</p> <p>Miguel Santiestebán Galindo (entrenido del número 1º) [05.09.1731-]</p> <p>Pedro Perea Salazar (entrenido 3º) [desde 16.03.1728]</p> <p>Sebastián Unamuniaga (entrenido 2º) [desde 16.03.1728]</p>
Entretenidos	<p>Juan Antonio Mioño y Carranza (supernumerario entrenido 2º) [desde 05.11.1728]</p> <p>Miguel Santiestebán Galindo (entrenido del número 1º) [05.09.1731-]</p>

El Consejo de Indias y su relación con la vía reservada en el reinado de Felipe V

Secretaría Perú	Miguel de Villanueva [06.03.1732-16.05.1747]
Secretario	Antonio Maturana [26.05.1721-]
Oficial Mayor	Prudencio de Cruz (más moderno) [26.02.1732-]
Oficial 2º	Miguel Gutiérrez (más moderno) [26.02.1732-] Miguel Gutiérrez (más antiguo) [desde 12.01.1720-26.02.1732]
Oficial 3º	Gabriel de Peralta (más moderno) [26.05.1721-26.02.1732] Gabriel de Peralta (más antiguo) [26.02.1732-] Francisco Adrada (más moderno) [26.02.1732-]
Entretenidos	Francisco Adrada (entrenido 1º) [29.10.1722-26.02.1732]] Joseph Portearroyo (oficial entrenido 2º) [desde 06.03.1728] Joseph Borgoña y Laoz (entrenido 3º) [desde 13.04.1728]
Contaduría	Pedro Pablo Herrera [16.09.1720-21.04.1749 m.] Tomás de Castro y Colona [04.11.1728-27.03.1760] Juan de Miranda y Testa (supernumerario) [31.08.1728-24.02.1746 m.] Lope Hurtado de Mendoza y Figueroa (supernumerario) [02.02.1730-12.11.1747 m.] Juan Crisóstomo Bonavía (supernumerario) [15.12.1732-12.05.1758]
Secretario	Bernardo Calderón (numerario) [07.02.1731-03.09.1737]
Oficial Mayor	Manuel González de Ampuero [01.02.1729-]
Secretario	Bartolomé Crespo [desde 02.01.1724]
Presidencia	
Depositarario	Martín de Echarte [13.05.1730-27.09.1736]
Capellán	Raimundo Rezabal [16.11.1726-1745 m.]
Comisario General orden Sn Francisco	Fray Domingo de Losada [06.11.1729-1741]
Cronista	Luis de Salazar y Castro [12.02.1698-09.02.1734 m.]
Cosmógrafo	Carlos de la Reguera [22.04.1733-1743]
Escribano Cámara	Antonio de Salazar y Castillo [18.03.1725-03.04.1759] Joseph Siles (oficial mayor) [22.10.1732-]
Relatores	
Relator 1º	Francisco Ramiro Valenzuela [31.10.1711-21.07.1739 m.]
Relator 2º	Manuel de Arredondo [31.10.1711-18.08.1734] Dionisio Martínez de Larne [18.08.1734-14.09.1758]
Relator 3º	Luis Escandón [27.11.1721-08.04.1734 m.] Luis Lagúnez Malaguilla [10.05.1724-1756 m.]
Sello y Registro	Andrés González Vadiño
Abogado Pobres	Diego de Ibarra Navarro [06.03.1730-]
Procurador Pobres	Diego del Puerto
Porteros	
Portero 1º	Antonio Pradillo (perpetua 1ª)
Portero 2º	Juan Ruíz de la Peña (perpetua 2ª)
Portero 3º	Diego Gómez Falcón (perpetua 3ª)
Portero 4º	Francisco Pantoja (perpetua 4ª)
Supernumerario	Lorenzo de Velasco y Angulo
Supernumerario	Antonio Izquierdo
Supernumerario	Francisco de Cuadros
Supernumerario	Ignacio de los Reyes
Supernumerario	Pedro Gómez Falcón (perpetua) Antonio Gómez Falcón (supernumeraria) [desde 09.03.1724] Antonio Marcelo Iglesias (supernumeraria, la sirve su padre Isidro López Iglesias) [desde 11.12.1724] Baltasara Pardinás [la ocupa su hijo Manuel de Esnoz desde 19.10.1721]
Alguacil Mayor	José de Cabrera [24.05.1712-1741 m.] Francisco Antonio Borja [desde 27.03.1724]
Barrendero	Andrés Matheo

## AÑO 1735

Presidente	
Gobernador	
Consejeros	
Capa y espada	<p>Francisco Javier de Goyeneche y Balanza, marqués de Belzunce [05.10.1722-05.05.1748 m., camarista desde 11.03.1744]</p> <p>Manuel de Silva y Meneses [desde 10.02.1710; en 22.12.1721 es camarista; en 20.11.1739 es dispensado de asistir personalmente, m. 11.05.1743]</p> <p>Fernando Luján y Silva, marqués de Almodóvar [30.03.1721-08.07.1736 m.]</p> <p>Manuel Silva Rivera, marqués de Montemayor (capa y espada camarista) [22.03.1725-09.08.1737]</p> <p>Antonio de Sopeña y Mioño (capa y espada; camarista 17.10.1741) [12.02.1726-15.05.1748 m.]</p> <p>Mateo Ibáñez de Mendoza y Córdoba (capa y espada; camarista 06.08.1736) [23.12.1726-07.05.1738 m.]</p> <p>Juan Pizarro y Aragón, marqués de San Juan de Piedras Albas [28.02.1728-18.01.1771 m.]</p> <p>Fernando Verdes Montenegro y Castro Baamonde [01.03.1728-13.01.1740]</p> <p>marqués de Capicelatro [25.01.1729-01.05.1735]</p> <p>Francisco Antonio Aguirre y Salcedo, marqués de Montehermoso [07.10.1731-09.11.1745 m.]</p> <p>José Francisco Casado y Velasco (capa y espada honorario) [16.11.1726-23.07.1744 m.]</p> <p>Joachín Antonio Bazán y Melo, marqués de San Gil (capa y espada en 16.09.1737) [18.11.1734-01.09.1746]</p> <p>Diego Yopulo y Espadafora [08.02.1735-19.01.1763 m.]</p> <p>Mauro Fernando de Mendoza Caamaño [16.02.1735-29.11.1764]</p>
Togados	<p>Diego de Zúñiga y Tobar [desde 12.10.1711; en 22.12.1721 es camarista; en 21.11.1735 es dispensado de asistir personalmente m. 20.05.1738]</p> <p>Antonio José Álvarez de Abreu, marqués de Regalía (camarista desde 22.07.1733) [27.01.1731-28.11.1756 m.]</p> <p>José de Valdivieso [29.03.1732-11.01.1739 m.]</p> <p>Antonio José de Pineda Capdevilla [24.07.1734-25.08.1743 m.] sucede a Antonio de la Pedrosa</p> <p>José Cornejo y Ibarra [29.07.1734-12.12.1764 m.] sucede a Andrés de Orbeta</p> <p>Pedro Domingo Contreras y Zúñiga [22.08.1734-31.12.1751] Sucede a Gonzalo Machado</p> <p>José Francisco Aguirre (honorario) [21.08.1735]</p>
Fiscal	
Nueva España	Manuel Martínez Carvajal [28.03.1726-28.01.1738]
Perú	José de Laysequilla y Palacios y Aguilar [21.09.1723-08.02.1738]
Agente Fiscal	<p>Miguel Arenzana para Nueva España (plaza de número completa) [desde 18.08.1724]</p> <p>Joseph Ruíz Cenzano (numerario para Perú) [desde 26.12.1729]</p> <p>Francisco Rojo (supernumerario para Nueva España) [desde 15.09.1718]</p> <p>Blas Benítez de Cifuentes (para el Perú) [07.01.1730-]</p>
Secretaría Nueva España	
Secretario	Juan Ventura Maturana [28.06.1732-06.03.1737]
Oficial Mayor	<p>Pedro de la Vega [03.01.1732-]</p> <p>Adrián de Alfaro [28.01.1728-]</p>
Oficial 2º	<p>Joseph del Corrovarrutia (supernumerario) [desde 09.03.1724]</p> <p>Nicolás de Benavente [02.11.1731-]</p>
Oficial 3º	<p>Fernando Antonio Acebedo (más moderno) [29.08.1731-]</p> <p>Miguel Santiestebán Galindo (entretenido del número 1º) [05.09.1731-]</p> <p>Pedro Perea Salazar (entretenido 3º) [desde 16.03.1728]</p>
Entretenidos	<p>Sebastián Unamuniaga (entretenido 2º) [desde 16.03.1728]</p> <p>Juan Antonio Mioño y Carranza (supernumerario entretenido 2º) [desde 05.11.1728]</p> <p>Miguel Santiestebán Galindo (entretenido del número 1º) [05.09.1731-]</p>

El Consejo de Indias y su relación con la vía reservada en el reinado de Felipe V

Secretaría Perú	Miguel de Villanueva [06.03.1732-16.05.1747]
Secretario	Antonio Maturana [26.05.1721-]
Oficial Mayor	Prudencio de Cruz (más moderno) [26.02.1732-]
Oficial 2º	Miguel Gutiérrez (más moderno) [26.02.1732-] Miguel Gutiérrez (más antiguo) [desde 12.01.1720-26.02.1732]
Oficial 3º	Gabriel de Peralta (más moderno) [26.05.1721-26.02.1732] Gabriel de Peralta (más antiguo) [26.02.1732-] Francisco Adrada (más moderno) [26.02.1732-]
Entretenidos	Francisco Adrada (entrenido 1º) [29.10.1722-26.02.1732] Joseph Portearroyo (oficial entrenido 2º) [desde 06.03.1728] Joseph Borgoña y Laoz (entrenido 3º) [desde 13.04.1728]
Contaduría	Pedro Pablo Herrera [16.09.1720-21.04.1749 m.] Tomás de Castro y Colona [04.11.1728-27.03.1760] Juan de Miranda y Testa (supernumerario) [31.08.1728-24.02.1746 m.] Lope Hurtado de Mendoza y Figueroa (supernumerario) [02.02.1730-12.11.1747 m.] Juan Crisóstomo Bonavía (supernumerario) [15.12.1732-12.05.1758]
Secretario	Bernardo Calderón (numerario) [07.02.1731-03.09.1737]
Oficial Mayor	Manuel González de Ampuero [01.02.1729-]
Secretario	Bartolomé Crespo [desde 02.01.1724]
Presidencia	
Depositario	Martín de Echarte [13.05.1730-27.09.1736]
Capellán	Raimundo Rezabal [16.11.1726-1745 m.]
Comisario General orden Sn Francisco	Fray Domingo de Losada [06.11.1729-1741]
Cronista	
Cosmógrafo	Carlos de la Reguera [22.04.1733-1743]
Escribano Cámara	Antonio de Salazar y Castillo [18.03.1725-03.04.1759] Joseph Siles (oficial mayor) [22.10.1732-]
Relatores	
Relator 1º	Francisco Ramiro Valenzuela [31.10.1711-21.07.1739 m.]
Relator 2º	Dionisio Martínez de Larne [18.08.1734-14.09.1758]
Relator 3º	Luis Lagúnez Malaguilla [10.05.1724-1756 m.]
Sello y Registro	Andrés González Vadillo
Abogado Pobres	Diego de Ibarra Navarro [06.03.1730-]
Procurador Pobres	Diego del Puerto
Porteros	
Portero 1º	Antonio Pradillo (perpetua 1ª)
Portero 2º	Juan Ruíz de la Peña (perpetua 2ª)
Portero 3º	Diego Gómez Falcón (perpetua 3ª)
Portero 4º	Francisco Pantoja (perpetua 4ª)
Supernumerario	Lorenzo de Velasco y Angulo
Supernumerario	Antonio Izquierdo
Supernumerario	Francisco de Cuadros
Supernumerario	Ignacio de los Reyes
Supernumerario	Pedro Gómez Falcón (perpetua)
Supernumerario	Antonio Gómez Falcón (supernumeraria) [desde 09.03.1724] Antonio Marcelo Iglesias (supernumeraria, la sirve su padre Isidro López Iglesias) [desde 11.12.1724] Baltasara Pardinás [la ocupa su hijo Manuel de Esnoz desde 19.10.1721]
Alguacil Mayor	José de Cabrera [24.05.1712-1741 m.] Francisco Antonio Borja [desde 27.03.1724]
Barrendero	Andrés Matheo

**AÑO 1736**

Presidente	
Gobernador	
Consejeros	
Capa y espada	<p>Francisco Javier de Goyeneche y Balanza, marqués de Belzunce [05.10.1722-05.05.1748 m., camarista desde 11.03.1744]</p> <p>Manuel de Silva y Meneses [desde 10.02.1710; en 22.12.1721 es camarista; en 20.11.1739 es dispensado de asistir personalmente, m. 11.05.1743]</p> <p>Manuel Silva Rivera, marqués de Montemayor (capa y espada camarista) [22.03.1725-09.08.1737]</p> <p>Antonio de Sopeña y Mioño (capa y espada; camarista 17.10.1741) [12.02.1726-15.05.1748 m.]</p> <p>Juan Pizarro y Aragón, marqués de San Juan de Piedras Albas [28.02.1728-18.01.1771 m.]</p> <p>Fernando Verdes Montenegro y Castro Baamonde [01.03.1728-13.01.1740]</p> <p>Mateo Ibáñez de Mendoza y Córdoba (capa y espada; camarista 06.08.1736) [23.12.1726-07.05.1738 m.]</p> <p>Fernando Luján y Silva, marqués de Almodóvar [30.03.1721-08.07.1736 m.]</p> <p>José Francisco Casado y Velasco (capa y espada honorario) [16.11.1726-23.07.1744 m.]</p> <p>Diego Yopulo y Espadafora [08.02.1735-19.01.1763 m.]</p> <p>Francisco Antonio Aguirre y Salcedo, marqués de Montehermoso [07.10.1731-09.11.1745 m.]</p> <p>Joachín Antonio Bazán y Melo, marqués de San Gil (capa y espada en 16.09.1737) [18.11.1734-01.09.1746]</p> <p>Mauro Fernando de Mendoza Caamaño [16.02.1735-29.11.1764]</p> <p>José de la Quintana (capa y espada, camarista 24.10.1741) [20.12.1736-07.03.1739; 24.10.1741-22.05.1750 m.]</p>
Togados	<p>Diego de Zúñiga y Tobar [desde 12.10.1711; en 22.12.1721 es camarista; en 21.11.1735 es dispensado de asistir personalmente m. 20.05.1738]</p> <p>Antonio José Álvarez de Abreu, marqués de Regalía (camarista desde 22.07.1733) [27.01.1731-28.11.1756 m.]</p> <p>José de Valdivieso [29.03.1732-11.01.1739 m.]</p> <p>Antonio José de Pineda Capdevilla [24.07.1734-25.08.1743 m.] sucede a Antonio de la Pedrosa</p> <p>José Cornejo y Ibarra [29.07.1734-12.12.1764 m.] sucede a Andrés de Orbeta</p> <p>Pedro Domingo Contreras y Zúñiga [22.08.1734-31.12.1751] Sucede a Gonzalo Machado</p> <p>José Francisco Aguirre (honorario) [21.08.1735]</p> <p>Francisco Sagardía y Palencia (honorario) [20.08.1736]</p>
Fiscal	
Nueva España	Manuel Martínez Carvajal [28.03.1726-28.01.1738]
Perú	José de Laysequilla y Palacios y Aguilar [21.09.1723-08.02.1738]
Agente Fiscal	<p>Miguel Arenzana para Nueva España (plaza de número completa) [desde 18.08.1724]</p> <p>Joseph Ruíz Cenzano (numerario para Perú) [desde 26.12.1729]</p> <p>Francisco Rojo (supernumerario para Nueva España) [desde 15.09.1718]</p> <p>Blas Benítez de Cifuentes (para el Perú) [07.01.1730-]</p>
Secretaría Nueva España	
Secretario	Juan Ventura Maturana [28.06.1732-06.03.1737]
Oficial Mayor	Pedro de la Vega [03.01.1732-]
	Adrián de Alfaro [28.01.1728-]
Oficial 2º	Joseph del Corrovarrutia (supernumerario) [desde 09.03.1724]
	Nicolás de Benavente (más antiguo) [02.11.1731-muere antes de 1736]
Oficial 3º	Fernando Antonio Acebedo (más moderno) [29.08.1731-]
	Miguel Santiestebán Galindo (entretenido del número 1º) [05.09.1731-]
	Pedro Perea Salazar (entretenido 3º) [desde 16.03.1728]
	Sebastián Unamuniaga (entretenido 2º) [desde 16.03.1728]
Entretenidos	Juan Antonio Mioño y Carranza (supernumerario entretenido 2º) [desde 05.11.1728]
	Miguel Santiestebán Galindo (entretenido del número 1º) [05.09.1731-]



# El Consejo de Indias y su relación con la vía reservada en el reinado de Felipe V

Secretaría Perú	Miguel de Villanueva [06.03.1732-16.05.1747]
Secretario	Antonio Maturana [26.05.1721-]
Oficial Mayor	Prudencio de Cruz (más moderno) [26.02.1732-]
Oficial 2º	Miguel Gutiérrez (más moderno) [26.02.1732-] Miguel Gutiérrez (más antiguo) [desde 12.01.1720-26.02.1732]
Oficial 3º	Gabriel de Peralta (más moderno) [26.05.1721-26.02.1732] Gabriel de Peralta (más antiguo) [26.02.1732-] Francisco Adrada (más moderno) [26.02.1732-]
Entretenidos	Francisco Adrada (entrenido 1º) [29.10.1722-26.02.1732] Joseph Portearroyo (oficial entrenido 2º) [desde 06.03.1728] Joseph Borgoña y Laoz (entrenido 3º) [desde 13.04.1728]
Contaduría	Pedro Pablo Herrera [16.09.1720-21.04.1749 m.] Tomás de Castro y Colona [04.11.1728-27.03.1760] Juan de Miranda y Testa (supernumerario) [31.08.1728-24.02.1746 m.] Lope Hurtado de Mendoza y Figueroa (supernumerario) [02.02.1730-12.11.1747 m.] Juan Crisóstomo Bonavía (supernumerario) [15.12.1732-12.05.1758]
Secretario	Bernardo Calderón (numerario) [07.02.1731-03.09.1737]
Oficial Mayor	Manuel González de Ampuero [01.02.1729-]
Secretario	Bartolomé Crespo [desde 02.01.1724]
Presidencia	
Depositorio	Martín de Echarte [13.05.1730-27.09.1736] Pedro Domínguez de Contreras [28.09.1736-09.01.1737]
Capellán	Raimundo Rezabal [16.11.1726-1745 m.]
Comisario General orden Sn Francisco	Fray Domingo de Losada [06.11.1729-1741]
Cronista	Miguel de Herrera y Ezpeleta [08.02.1736-25.10.1744]
Cosmógrafo	Carlos de la Reguera [22.04.1733-1743]
Escribano Cámara	Antonio de Salazar y Castillo [18.03.1725-03.04.1759] Joseph Siles (oficial mayor) [22.10.1732-]
Relatores	
Relator 1º	Francisco Ramiro Valenzuela [31.10.1711-21.07.1739 m.]
Relator 2º	Dionisio Martínez de Larne [18.08.1734-14.09.1758]
Relator 3º	Luis Lagúnez Malaguilla [10.05.1724-1756 m.]
Sello y Registro	Andrés González Vadillo
Abogado Pobres	Diego de Ibarra Navarro [06.03.1730-]
Procurador Pobres	Diego del Puerto
Porteros	
Portero 1º	Antonio Pradillo (perpetua 1ª)
Portero 2º	Juan Ruíz de la Peña (perpetua 2ª)
Portero 3º	Diego Gómez Falcón (perpetua 3ª)
Portero 4º	Francisco Pantoja (perpetua 4ª)
Supernumerario	Lorenzo de Velasco y Angulo
Supernumerario	Antonio Izquierdo
Supernumerario	Francisco de Cuadros
Supernumerario	Ignacio de los Reyes
Supernumerario	Pedro Gómez Falcón (perpetua)
Supernumerario	Antonio Gómez Falcón (supernumeraria) [desde 09.03.1724] Antonio Marcelo Iglesias (supernumeraria) [desde 11.12.1724] Baltasara Pardinás [la ocupa su hijo Manuel de Esnoz desde 19.10.1721]
Alguacil Mayor	José de Cabrera [24.05.1712-1741 m.] Francisco Antonio Borja [desde 27.03.1724]
Barrendero	Andrés Matheo

**AÑO 1737**

Presidente	Cristóbal Gregorio Portocarrero de Guzmán Luna, conde de Montijo [18.06.1737-27.01.1748]
Gobernador	
Consejeros	
Capa y espada	Francisco Javier de Goyeneche y Balanza, marqués de Belzunce [05.10.1722-05.05.1748 m., camarista desde 11.03.1744] Manuel de Silva y Meneses [desde 10.02.1710; en 22.12.1721 es camarista; en 20.11.1739 es dispensado de asistir personalmente, m. 11.05.1743] Manuel Silva Rivera, marqués de Montemayor (capa y espada camarista) [22.03.1725-09.08.1737] Antonio de Sopeña y Mioño (capa y espada; camarista 17.10.1741) [12.02.1726-15.05.1748 m.] Juan Pizarro y Aragón, marqués de San Juan de Piedras Albas [28.02.1728-18.01.1771 m.] Fernando Verdes Montenegro y Castro Baamonde [01.03.1728-13.01.1740] Mateo Ibáñez de Mendoza y Córdoba (capa y espada; camarista 06.08.1736) [23.12.1726-07.05.1738 m.] José Francisco Casado y Velasco (honorario) [16.11.1726-23.07.1744 m.] Diego Yopulo y Espadafora [08.02.1735-19.01.1763 m.] Francisco Antonio Aguirre y Salcedo, marqués de Montehermoso [07.10.1731-09.11.1745 m.] Mauro Fernando de Mendoza Caamaño [16.02.1735-29.11.1764] Joaquín Antonio Bazán y Melo, marqués de San Gil [18.11.1734-01.09.1746] José de la Quintana (camarista 24.10.1741) [20.12.1736-07.03.1739; 24.10.1741-22.05.1750 m.]
Togados	Antonio José Álvarez de Abreu, marqués de Regalía (camarista desde 22.07.1733) [27.01.1731-28.11.1756 m.] José de Valdivieso [29.03.1732-11.01.1739 m.] Antonio José de Pineda Capdevilla [24.07.1734-25.08.1743 m.] sucede a Antonio de la Pedrosa José Cornejo y Ibarra [29.07.1734-12.12.1764 m.] sucede a Andrés de Orbeta Pedro Domingo Contreras y Zúñiga [22.08.1734-31.12.1751] Sucede a Gonzalo Machado José Francisco Aguirre (honorario) [21.08.1735] Francisco Sagardía y Palencia (honorario) [20.08.1736]
Fiscal	
Nueva España	Manuel Martínez Carvajal [28.03.1726-28.01.1738]
Perú	José de Laysequilla y Palacios y Aguilar [21.09.1723-08.02.1738]
Agente Fiscal	Miguel Arenzana para Nueva España (plaza de número completa) [desde 18.08.1724] Joseph Ruíz Cenzano (numerario para Perú) [desde 26.12.1729] Francisco Rojo (supernumerario para Nueva España) [desde 15.09.1718] Blas Benítez de Cifuentes (para el Perú) [07.01.1730-]
Secretaría Nueva España	
Secretario	Juan Ventura Maturana [28.06.1732-06.03.1737] Simón Mozo de la Torre [01.04.1737-17.11.1737 m.]
Oficial Mayor	Pedro de la Vega (oficial mayor) [03.11.1731-] Adrian Alfaro (oficial 2º más antiguo) Joseph Corrobarrutia y Zupide (oficial 2º más moderno) [09.03.1724-]
Oficial 2º	Nicolás de Benavente (oficial 2º más antiguo) Sebastián Unamunsaga (oficial entretenido 2º de número) Antonio Mioño y Carranza (oficial entretenido 2º de supernumerario)
Oficial 3º	Fernando Antonio Acevedo (oficial 3º más moderno) Miguel Santiestebán Galindo (oficial 3º más antiguo) Pedro Perea Salazar (oficial 3º más moderno)

El Consejo de Indias y su relación con la vía reservada en el reinado de Felipe V

Secretaría Perú Secretario	Miguel de Villanueva [06.03.1732-16.05.1747] Antonio Maturana [26.05.1721-]
Oficial Mayor	Prudencio de Cruz [-en 1737 ya es oficial mayor y se le jubila, quizá se nombra en su lugar a Miguel Gutiérrez]
Oficial 2º	Prudencio de Cruz (más moderno) [26.02.1732-] Miguel Gutiérrez (más moderno) [26.02.1732-]
Oficial 3º	Gabriel de Peralta (más antiguo) [26.02.1732-] Francisco Adrada (más moderno) [26.02.1732-]
Entretenidos	Joseph Portearroyo (oficial entretenido 2º) [desde 06.03.1728] Joseph Borgoña y Laoz (entrenido 3º) [desde 13.04.1728]
Contaduría	Pedro Pablo Herrera [16.09.1720-21.04.1749 m.] Tomás de Castro y Colona [04.11.1728-27.03.1760] Juan de Miranda y Testa (supernumerario) [31.08.1728-24.02.1746 m.] Lope Hurtado de Mendoza y Figueroa (supernumerario) [02.02.1730-12.11.1747 m.] Juan Crisóstomo Bonavía (supernumerario) [15.12.1732-12.05.1758] Eugenio de Alfaro (supernumerario) [10.09.1737-27.03.1760] Bernardo Calderón (numerario) [07.02.1731-03.09.1737]
Secretario Oficial Mayor	Manuel González de Ampuero [01.02.1729-]
Secretario Presidencia	Bartolomé Crespo [desde 02.01.1724]
Depositario	Pedro Domínguez de Contreras [28.09.1736-09.01.1737] José de Partearroyo [18.01.1737-12.12.1769 m.]
Capellán	Raimundo Rezabal [16.11.1726-1745 m.]
Comisario General orden Sn Francisco	Fray Domingo de Losada [06.11.1729-1741]
Cronista	Miguel de Herrera y Ezpeleta [08.02.1736-25.10.1744]
Cosmógrafo	Carlos de la Reguera [22.04.1733-1743]
Escribano Cámara	Antonio de Salazar y Castillo [18.03.1725-03.04.1759] Joseph Siles (oficial mayor) [22.10.1732-]
Relatores Relator 1º Relator 2º Relator 3º	Francisco Ramiro Valenzuela [31.10.1711-21.07.1739 m.] Dionisio Martínez de Larne [18.08.1734-14.09.1758] Luis Lagúnez Malaguilla [10.05.1724-1756 m.]
Sello y Registro	Andrés González Vadillo
Abogado Pobres	Diego de Ibarra Navarro [06.03.1730-]
Procurador Pobres	Diego del Puerto Francisco López de Iglesias (supernumerario por ausencias y enfermedad del titular) [31.03.1737-1739]
Porteros Portero 1º Portero 2º Portero 3º Portero 4º Supernumerario Supernumerario Supernumerario Supernumerario Supernumerario	Antonio Pradillo (perpetua 1ª) Juan Ruíz de la Peña (perpetua 2ª) Diego Gómez Falcón (perpetua 3ª) Francisco Pantoja (perpetua 4ª) Lorenzo de Velasco y Angulo Antonio Izquierdo Francisco de Cuadros Ignacio de los Reyes Pedro Gómez Falcón (perpetua) Antonio Gómez Falcón (supernumeraria) [desde 09.03.1724] Antonio Marcelo Iglesias (supernumeraria, la sirve su padre Isidro López Iglesias) [desde 11.12.1724] Baltasara Pardinás [la ocupa su hijo Manuel de Esnoz desde 19.10.1721]
Alguacil Mayor	José de Cabrera [24.05.1712-1741 m.] Francisco Antonio Borja [desde 27.03.1724]
Barrendero	Andrés Matheo

## AÑO 1738

Presidente	Cristóbal Gregorio Portocarrero de Guzmán Luna, conde de Montijo [18.06.1737-27.01.1748]
Gobernador	
Consejeros	
Capa y espada	Francisco Javier de Goyeneche y Balanza, marqués de Belzunce [05.10.1722-05.05.1748 m., camarista desde 11.03.1744] Manuel de Silva y Meneses [desde 10.02.1710; en 22.12.1721 es camarista; en 20.11.1739 es dispensado de asistir personalmente, m. 11.05.1743] Antonio de Sopena y Mioño (camarista 17.10.1741) [12.02.1726-15.05.1748 m.] Juan Pizarro y Aragón, marqués de San Juan de Piedras Albas [28.02.1728-18.01.1771 m.] Fernando Verdes Montenegro y Castro Baamonde [01.03.1728-13.01.1740] Mateo Ibáñez de Mendoza y Córdoba (camarista 06.08.1736) [23.12.1726-07.05.1738 m.] José Francisco Casado y Velasco (honorario) [16.11.1726-23.07.1744 m.] Diego Yopulo y Espadafora [08.02.1735-19.01.1763 m.] Francisco Antonio Aguirre y Salcedo, marqués de Montehermoso [07.10.1731-09.11.1745 m.] Joachín Antonio Bazán y Melo, marqués de San Gil [18.11.1734-01.09.1746] Mauro Fernando de Mendoza Caamaño [16.02.1735-29.11.1764] José de la Quintana (camarista 24.10.1741) [20.12.1736-07.03.1739; 24.10.1741-22.05.1750 m.] Estebán José de Abaría y Ymaz [02.07.1738-09.03.1753]
Togados	Antonio José Álvarez de Abreu, marqués de Regalía (camarista desde 22.07.1733) [27.01.1731-28.11.1756 m.] José de Valdivieso [29.03.1732-11.01.1739 m.] Antonio José de Pineda Capdevilla [24.07.1734-25.08.1743 m.] sucede a Antonio de la Pedrosa José Cornejo y Ibarra [29.07.1734-12.12.1764 m.] sucede a Andrés de Orbeta Pedro Domingo Contreras y Zúñiga [22.08.1734-31.12.1751] Sucede a Gonzalo Machado José Francisco Aguirre (honorario) [21.08.1735] Francisco Sagardía y Palencia (honorario) [20.08.1736] José de Carvajal y Lancaster [27.01.1738-23.10.1742] Luis Fernando de Isla [28.08.1738-27.09.1741] Reemplaza a Mateo Ibáñez Pedro Martínez de Arizala (honorario) [14.08.1738] José de Laysequilla y Palacios y Aguilar (camarista) [08.02.1738-18.09.1755 m.]
Fiscal	
Nueva España	Manuel Martínez Carvajal [28.03.1726-28.01.1738] José Borrul y Ramón [28.01.1738-01.10.1748]
Perú	José de Laysequilla y Palacios y Aguilar [21.09.1723-08.02.1738] Prudencio Antonio Palacios [28.01.1738-03.03.1744]
Agente Fiscal	Miguel Arenzana para Nueva España (plaza de número completa) [desde 18.08.1724] Joseph Ruíz Cenzano (numerario para Perú) [desde 26.12.1729] Francisco Rojo (supernumerario para Nueva España) [desde 15.09.1718] Antonio Velez Moro y Figueroa (para Nueva España) [desde 22.05.1738] Blas Benítez de Cifuentes (para el Perú) [07.01.1730-]
Secretaría Nueva España	
Secretario	Francisco Campo de Arbe [01.02.1738-03.04.1740]
Oficial Mayor	Pedro de la Vega (oficial mayor) [03.11.1731-] Adrian Alfaro (oficial 2º más antiguo)
Oficial 2º	Joseph Corrobarrutia y Zupide (oficial 2º más moderno) [09.03.1724-] Nicolás de Benavente (oficial 2º más antiguo) Sebastián Unamunsaga (oficial entretenido 2º de número)
Oficial 3º	Antonio Mioño y Carranza (oficial entretenido 2º de supernumerario) Fernando Antonio Acevedo (oficial 3º más antiguo) Miguel Santiestebán Galindo (oficial 3º más antiguo) Pedro Perea Salazar (oficial 3º más moderno)

El Consejo de Indias y su relación con la vía reservada en el reinado de Felipe V

Secretaría Perú	Miguel de Villanueva [06.03.1732-16.05.1747]
Secretario	Antonio Maturana [26.05.1721-]
Oficial Mayor	Prudencio de Cruz (más moderno) [26.02.1732-]
Oficial 2º	Miguel Gutiérrez (más moderno) [26.02.1732-]
Oficial 3º	Gabriel de Peralta (más antiguo) [26.02.1732-]
Entretenidos	Francisco Adrada (más moderno) [26.02.1732-]
	Joseph Portearroyo (oficial entretenido 2º) [desde 06.03.1728]
	Joseph Borgoña y Laoz (entrenido 3º) [desde 13.04.1728]
Contaduría	Pedro Pablo Herrera [16.09.1720-21.04.1749 m.]
	Tomás de Castro y Colona [04.11.1728-27.03.1760]
	Juan de Miranda y Testa (supernumerario) [31.08.1728-24.02.1746 m.]
	Lope Hurtado de Mendoza y Figueroa (supernumerario) [02.02.1730-12.11.1747 m.]
	Juan Crisóstomo Bonavía (supernumerario) [15.12.1732-12.05.1758]
	Eugenio de Alfaro (supernumerario) [10.09.1737-27.03.1760]
Secretario	
Oficial Mayor	Manuel González de Ampuero [01.02.1729-]
Secretario	
Presidencia	Bartolomé Crespo [desde 02.01.1724]
Depositario	José de Partearroyo [18.01.1737-12.12.1769 m.]
Capellán	Raimundo Rezabal [16.11.1726-1745 m.]
	Vicente Sanz (supernumerario en ausencias del titular desde 16.12.1738-02.11.1745]
Comisario General	
orden Sn Francisco	Fray Domingo de Losada [06.11.1729-1741]
Escribano Cámara	Antonio de Salazar y Castillo [18.03.1725-03.04.1759]
	Joseph Siles (oficial mayor) [22.10.1732-]
Cosmógrafo	Carlos de la Reguera [22.04.1733-1743]
Relatores	
Relator 1º	Francisco Ramiro Valenzuela [31.10.1711-21.07.1739 m.]
Relator 2º	Dionisio Martínez de Larne [18.08.1734-14.09.1758]
Relator 3º	Luis Lagúnez Malaguilla [10.05.1724-1756 m.]
Sello y Registro	Andrés González Vadillo
Abogado Pobres	Diego de Ibarra Navarro [06.03.1730-]
Procurador Pobres	Diego del Puerto
	Francisco López de Iglesias (supernumerario) [31.03.1737-1739]
Porteros	
Portero 1º	Antonio Pradillo (perpetua 1ª)
Portero 2º	Juan Ruíz de la Peña (perpetua 2ª)
Portero 3º	Diego Gómez Falcón (perpetua 3ª)
Portero 4º	Francisco Pantoja (perpetua 4ª)
Supernumerario	Lorenzo de Velasco y Angulo
Supernumerario	Antonio Izquierdo
Supernumerario	Francisco de Cuadros
Supernumerario	Ignacio de los Reyes
	Pedro Gómez Falcón (perpetua)
Supernumerario	Antonio Gómez Falcón (supernumeraria) [desde 09.03.1724]
	Antonio Marcelo Iglesias (supernumeraria) [desde 11.12.1724]
	Baltasara Pardinas [la ocupa su hijo Manuel de Esnoz desde 19.10.1721]
Alguacil Mayor	José de Cabrera [24.05.1712-1741 m.]
	Francisco Antonio Borja [desde 27.03.1724]
Barrendero	Andrés Matheo

## AÑO 1739

Presidente	Cristóbal Gregorio Portocarrero de Guzmán Luna, conde de Montijo [18.06.1737-27.01.1748]
Gobernador	
Consejeros	
Capa y espada	Francisco Javier de Goyeneche y Balanza, marqués de Belzunce [05.10.1722-05.05.1748 m., camarista desde 11.03.1744] Manuel de Silva y Meneses [desde 10.02.1710; en 22.12.1721 es camarista; en 20.11.1739 es dispensado de asistir personalmente, m. 11.05.1743] Antonio de Sopena y Mioño (camarista 17.10.1741) [12.02.1726-15.05.1748 m.] Juan Pizarro y Aragón, marqués de San Juan de Piedras Albas [28.02.1728-18.01.1771 m.] Fernando Verdes Montenegro y Castro Baamonde [01.03.1728-13.01.1740] José Francisco Casado y Velasco (honorario) [16.11.1726-23.07.1744 m.] Diego Yopulo y Espadafora [08.02.1735-19.01.1763 m.] Francisco Antonio Aguirre y Salcedo, marqués de Montehermoso [07.10.1731-09.11.1745 m.] Joaquín Antonio Bazán y Melo, marqués de San Gil [18.11.1734-01.09.1746] Mauro Fernando de Mendoza Caamaño [16.02.1735-29.11.1764] José de la Quintana (capa y espada, camarista 24.10.1741) [20.12.1736-07.03.1739; 24.10.1741-22.05.1750 m.] Estebán José de Abaría y Ymaz [02.07.1738-09.03.1753] Mateo Pablo de Díaz de Lavandero y Martín, marqués de Torrenueva (capa y espada, camarista) [08.03.1739-18.04.1746 m.] Ventura de Pinedo, conde de Villanueva (honorario) [01.06.1739-10.03.1745 m.] Tomás Geraldino [22.12.1739-14.06.1755 m.]
Togados	Antonio José Álvarez de Abreu, marqués de Regalía (camarista desde 22.07.1733) [27.01.1731-28.11.1756 m.] José de Valdivieso [29.03.1732-11.01.1739 m.] Antonio José de Pineda Capdevilla [24.07.1734-25.08.1743 m.] sucede a Antonio de la Pedrosa José Cornejo y Ibarra [29.07.1734-12.12.1764 m.] sucede a Andrés de Orbeta Pedro Domingo Contreras y Zúñiga [22.08.1734-31.12.1751] Sucede a Gonzalo Machado José Francisco Aguirre (honorario) [21.08.1735] Francisco Sagardía y Palencia (honorario) [20.08.1736] José de Carvajal y Lancaster [27.01.1738-23.10.1742] Luis Fernando de Isla [28.08.1738-27.09.1741] Reemplaza en el Consejo a Mateo Ibáñez de Mendoza Pedro Martínez de Arizala (honorario) [14.08.1738] José de Laysequilla y Palacios y Aguilar (camarista) [08.02.1738-18.09.1755 m.]
Fiscal	
Nueva España	José Borrul y Ramón [28.01.1738-01.10.1748]
Perú	Prudencio Antonio Palacios [28.01.1738-03.03.1744]
Agente Fiscal	Miguel Arenzana para Nueva España (plaza de número completa) [desde 18.08.1724] Joseph Ruíz Cenzano (numerario para Perú) [desde 26.12.1729] Francisco Rojo (supernumerario para Nueva España) [desde 15.09.1718] Antonio Velez Moro y Figueroa (para Nueva España) [desde 22.05.1738] Blas Benítez de Cifuentes (para el Perú) [07.01.1730-]
Secretaría Nueva España	
Secretario	Francisco Campo de Arbe [01.02.1738-03.04.1740]
Oficial Mayor	Pedro de la Vega (oficial mayor) [03.11.1731-]
Oficial 2º	Adrian Alfaro (oficial 2º más antiguo) Joseph Corrobarrutia y Zupide (oficial 2º más moderno) [09.03.1724-] Nicolás de Benavente (oficial 2º más antiguo) Sebastián Unamunsaga (oficial entretenido 2º de número) Antonio Mioño y Carranza (oficial entretenido 2º de supernumerario) Fernando Antonio Acevedo (oficial 3º más antiguo)
Oficial 3º	Miguel Santiestebán Galindo (oficial 3º más antiguo) Pedro Perea Salazar (oficial 3º más moderno)

El Consejo de Indias y su relación con la vía reservada en el reinado de Felipe V

Secretaría Perú	Miguel de Villanueva [06.03.1732-16.05.1747]
Secretario	Antonio Maturana [26.05.1721-]
Oficial Mayor	Prudencio de Cruz (más moderno) [26.02.1732-]
Oficial 2º	Miguel Gutiérrez (más moderno) [26.02.1732-]
Oficial 3º	Gabriel de Peralta (más antiguo) [26.02.1732-]
Entretenidos	Francisco Adrada (más moderno) [26.02.1732-] Joseph Portearroyo (oficial entretenido 2º) [desde 06.03.1728] Joseph Borgoña y Laoz (entretenido 3º) [desde 13.04.1728]
Contaduría	Pedro Pablo Herrera [16.09.1720-21.04.1749 m.] Tomás de Castro y Colona [04.11.1728-27.03.1760] Juan de Miranda y Testa (supernumerario) [31.08.1728-24.02.1746 m.] Lope Hurtado de Mendoza y Figueroa (supernumerario) [02.02.1730-12.11.1747 m.] Juan Crisóstomo Bonavia (supernumerario) [15.12.1732-12.05.1758] Eugenio de Alfaro (supernumerario) [10.09.1737-27.03.1760]
Secretario	
Oficial Mayor	Manuel González de Ampuero [01.02.1729-]
Secretario	
Presidencia	Bartolomé Crespo [desde 02.01.1724]
Depositario	José de Partearroyo [18.01.1737-12.12.1769 m.]
Capellán	Raimundo Rezabal [16.11.1726-1745 m.] Vicente Sanz (supernumerario en ausencias del titular desde 16.12.1738-02.11.1745)
Comisario General orden Sn Francisco	Fray Domingo de Losada [06.11.1729-1741]
Cronista	Miguel de Herrera y Ezpeleta [08.02.1736-25.10.1744]
Cosmógrafo	Carlos de la Reguera [22.04.1733-1743]
Escribano Cámara	Antonio de Salazar y Castillo [18.03.1725-03.04.1759] Joseph Siles (oficial mayor) [22.10.1732-]
Relatores	
Relator 1º	Francisco Ramiro Valenzuela [31.10.1711-21.07.1739 m.] Francisco Javier Sánchez de Villegas [22.12.1739-16.12.1749]
Relator 2º	Dionisio Martínez de Larne [18.08.1734-14.09.1758]
Relator 3º	Luis Lagúnez Malaguilla [10.05.1724-1756 m.]
Sello y Registro	Andrés González Vadiño
Abogado Pobres	Diego de Ibarra Navarro [06.03.1730-]
Procurador Pobres	Francisco López de Iglesias [01.03.1739-]
Porteros	
Portero 1º	Antonio Pradillo (perpetua 1ª)
Portero 2º	Juan Ruíz de la Peña (perpetua 2ª)
Portero 3º	Diego Gómez Falcón (perpetua 3ª)
Portero 4º	Francisco Pantoja (perpetua 4ª)
Supernumerario	Lorenzo de Velasco y Angulo
Supernumerario	Antonio Izquierdo
Supernumerario	Francisco de Cuadros
Supernumerario	Ignacio de los Reyes
Supernumerario	Pedro Gómez Falcón (perpetua)
Supernumerario	Antonio Gómez Falcón (supernumeraria) [desde 09.03.1724] Antonio Marcelo Iglesias (supernumeraria) [desde 11.12.1724] Baltasara Pardinas [la ocupa su hijo Manuel de Esnoz desde 19.10.1721]
Alguacil Mayor	José de Cabrera [24.05.1712-1741 m.] Francisco Antonio Borja [desde 27.03.1724]
Barrendero	Andrés Matheo

## AÑO 1740

Presidente	Cristóbal Gregorio Portocarrero de Guzmán Luna, conde de Montijo [18.06.1737-27.01.1748]
Consejeros	
Capa y espada	Francisco Javier de Goyeneche y Balanza, marqués de Belzunce [05.10.1722-05.05.1748 m., camarista desde 11.03.1744] Antonio de Sopena y Mioño, (camarista 17.10.1741) [12.02.1726-15.05.1748 m.] Juan Pizarro y Aragón, marqués de San Juan de Piedras Albas [28.02.1728-18.01.1771 m.] Fernando Verdes Montenegro y Castro Baamonde [01.03.1728-13.01.1740] José Francisco Casado y Velasco (honorario) [16.11.1726-23.07.1744 m.] Diego Yopulo y Espadafora [08.02.1735-19.01.1763 m.] Francisco Antonio Aguirre y Salcedo, marqués de Montehermoso [07.10.1731-09.11.1745 m.] Juan de Gaona y Portocarrero, conde de Valdeparaíso (capa y espada supernumerario, regular 24.10.1741) [04.10.1740-04.01.1760 m.] Estebán José de Abaría y Ymaz [02.07.1738-09.03.1753] Mateo Pablo de Díaz de Lavandero y Martín, marqués de Torrenueva (capa y espada, camarista) [08.03.1739-18.04.1746 m.] Ventura de Pinedo, conde de Villanueva (capa y espada honorario) [01.06.1739-10.03.1745 m.] Tomás Geraldino [22.12.1739-14.06.1755 m.]
Togados	Antonio José Álvarez de Abreu, marqués de Regalía (camarista desde 22.07.1733) [27.01.1731-28.11.1756 m.] Antonio José de Pineda Capdevilla [24.07.1734-25.08.1743 m.] sucede a Antonio de la Pedrosa José Cornejo y Ibarra [29.07.1734-12.12.1764 m.] sucede a Andrés de Orbeta Pedro Domingo Contreras y Zúñiga [22.08.1734-31.12.1751] Sucede a Gonzalo Machado José Francisco Aguirre (honorario) [21.08.1735] Francisco Sagardía y Palencia (honorario) [20.08.1736] José de Carvajal y Lancaster (camarista supernumerario 29.04.1740) [27.01.1738-23.10.1742] Gobernador Interino [09.11.1742-27.01.1748] Luis Fernando de Isla [28.08.1738-27.09.1741] Reemplaza a Mateo Ibáñez Pedro Martínez de Arizala (togado honorario) [14.08.1738] Martín de Lardizábal y Elorza [22.05.1740-23.10.1743 m.] sucede a José de Valdiveso José de Laysequilla y Palacios y Aguilar (camarista) [08.02.1738-18.09.1755 m.]
Fiscal	
Nueva España	José Borrul y Ramón [28.01.1738-01.10.1748]
Perú	Prudencio Antonio Palacios [28.01.1738-03.03.1744]
Agente Fiscal	Miguel Arenzana para Nueva España (plaza de número completa) [desde 18.08.1724] Joseph Ruíz Cenzano (numerario para Perú) [desde 26.12.1729] Francisco Rojo (supernumerario para Nueva España) [desde 15.09.1718] Antonio Velez Moro y Figueroa (para Nueva España) [desde 22.05.1738] Sebastián San Román y Medrano (para Perú) [desde 21.03.1741] Blas Benítez de Cifuentes (para el Perú) [07.01.1730-]
Secretaría Nueva España	
Secretario	Francisco Campo de Arbe [01.02.1738-03.04.1740] Fernando Triviño y Figueroa [30.04.1740-20.02.1748]
Oficial Mayor	Pedro de la Vega (oficial mayor) [03.11.1731-] Adrian Alfaro (oficial 2º más antiguo)
Oficial 2º	Joseph Corrobarrutia y Zupide (oficial 2º más moderno) [09.03.1724-] Nicolás de Benavente (oficial 2º más antiguo) Sebastián Unamunsaga (oficial entretenido 2º de número) Antonio Mioño y Carranza (oficial entretenido 2º de supernumerario)
Oficial 3º	Fernando Antonio Acevedo (oficial 3º más moderno) Miguel Santiestebán Galindo (oficial 3º más antiguo) Pedro Perea Salazar (oficial 3º más moderno)



El Consejo de Indias y su relación con la vía reservada en el reinado de Felipe V

Secretaría Perú	Miguel de Villanueva [06.03.1732-16.05.1747]
Secretario	Antonio Maturana [26.05.1721-]
Oficial Mayor	Prudencio de Cruz (más moderno) [26.02.1732-]
Oficial 2º	Miguel Gutiérrez (más moderno) [26.02.1732-]
Oficial 3º	Gabriel de Peralta (más antiguo) [26.02.1732-]
Entretenidos	Francisco Adrada (más moderno) [26.02.1732-] Joseph Portearroyo (oficial entretenido 2º) [desde 06.03.1728] Joseph Borgoña y Laoz (entretenido 3º) [desde 13.04.1728]
Contaduría	Pedro Pablo Herrera [16.09.1720-21.04.1749 m.] Tomás de Castro y Colona [04.11.1728-27.03.1760] Juan de Miranda y Testa (supernumerario) [31.08.1728-24.02.1746 m.] Lope Hurtado de Mendoza y Figueroa (supernumerario) [02.02.1730-12.11.1747 m.] Juan Crisóstomo Bonavia (supernumerario) [15.12.1732-12.05.1758] Eugenio de Alfaro (supernumerario) [10.09.1737-27.03.1760]
Secretario	
Oficial Mayor	Manuel González de Ampuero [01.02.1729-]
Secretario	
Presidencia	Bartolomé Crespo [desde 02.01.1724]
Depositario	José de Partearroyo [18.01.1737-12.12.1769 m.]
Capellán	Raimundo Rezabal [16.11.1726-1745 m.] Vicente Sanz (supernumerario en ausencias del titular desde 16.12.1738-02.11.1745)
Comisario General orden Sn Francisco	Fray Domingo de Losada [06.11.1729-1741]
Cronista	Miguel de Herrera y Ezpeleta [08.02.1736-25.10.1744]
Cosmógrafo	Carlos de la Reguera [22.04.1733-1743]
Escribano Cámara	Antonio de Salazar y Castillo [18.03.1725-03.04.1759] Joseph Siles (oficial mayor) [22.10.1732-]
Relatores	
Relator 1º	Francisco Javier Sánchez de Villegas [22.12.1739-16.12.1749]
Relator 2º	Dionisio Martínez de Larne [18.08.1734-14.09.1758]
Relator 3º	Luis Lagúnez Malaguilla [10.05.1724-1756 m.]
Sello y Registro	Andrés González Vadillo
Abogado Pobres	Diego de Ibarra Navarro [06.03.1730-]
Procurador Pobres	Francisco López de Iglesias [01.03.1739-]
Porteros	
Portero 1º	Antonio Pradillo (perpetua 1ª)
Portero 2º	Juan Ruíz de la Peña (perpetua 2ª)
Portero 3º	Diego Gómez Falcón (perpetua 3ª)
Portero 4º	Francisco Pantoja (perpetua 4ª)
Supernumerario	Lorenzo de Velasco y Angulo
Supernumerario	Antonio Izquierdo
Supernumerario	Francisco de Cuadros
Supernumerario	Ignacio de los Reyes
Supernumerario	Pedro Gómez Falcón (perpetua)
Supernumerario	Antonio Gómez Falcón (supernumeraria) [desde 09.03.1724] Antonio Marcelo Iglesias (supernumeraria) [desde 11.12.1724] Baltasara Pardinás [la ocupa su hijo Manuel de Esnoz desde 19.10.1721]
Alguacil Mayor	José de Cabrera [24.05.1712-1741 m.] Prudencio de Cruz [03.11.1741-] José Martín de Eugenio [03.11.1741-] Francisco Antonio Borja [desde 27.03.1724]
Barrendero	Andrés Matheo

**AÑO 1741**

Presidente	Cristóbal Gregorio Portocarrero de Guzmán Luna, conde de Montijo [18.06.1737-27.01.1748]
Consejeros Capa y espada	Francisco Javier de Goyeneche y Balanza, marqués de Belzunce [05.10.1722-05.05.1748 m.] Antonio de Sopeña y Mioño, (camarista 17.10.1741) [12.02.1726-15.05.1748 m.] Juan Pizarro y Aragón, marqués de San Juan de Piedras Albas [28.02.1728-18.01.1771 m.] Mateo Pablo de Díaz de Lavandero y Martín, marqués de Torrenueva (capa y espada, camarista) [08.03.1739-18.04.1746 m.] Ventura de Pinedo, conde de Villanueva (capa y espada honorario) [01.06.1739-10.03.1745 m.] Tomás Geraldino [22.12.1739-14.06.1755 m.] Francisco Antonio Aguirre y Salcedo, marqués de Montehermoso [07.10.1731-09.11.1745 m.] Joaquín Antonio Bazán y Melo, marqués de San Gil [18.11.1734-01.09.1746] Mauro Fernando de Mendoza Caamaño [16.02.1735-29.11.1764] Estebán José de Abaría y Ymaz [02.07.1738-09.03.1753] José de la Quintana (capa y espada, camarista 24.10.1741) [20.12.1736-07.03.1739; 24.10.1741-22.05.1750 m.] Mateo Pablo de Díaz de Lavandero y Martín, marqués de Torrenueva (capa y espada, camarista) [08.03.1739-18.04.1746 m.] Ventura de Pinedo, conde de Villanueva (capa y espada honorario) [01.06.1739-10.03.1745 m.] Tomás Geraldino [22.12.1739-14.06.1755 m.] Juan de Gaona y Portocarrero, conde de Valdeparaíso (capa y espada supernumerario, regular 24.10.1741) [04.10.1740-04.01.1760 m.] Casimiro Osorio Rubín de Celis (capa y espada supernumerario, regular 01.03.1746) [04.04.1741-01.03.1746] Alvaro de Navía y Bolaño (capa y espada honorario) [01.05.1741] Juan Bautista de Herrera y Loysaga (capa y espada honorario) [01.07.1741]
Togados	Antonio José de Pineda Capdevilla [24.07.1734-25.08.1743 m.] sucede a Antonio de la Pedrosa José Cornejo y Ibarra [29.07.1734-12.12.1764 m.] sucede a Andrés de Orbeta Pedro Domingo Contreras y Zúñiga [22.08.1734-31.12.1751] Sucede a Gonzalo Machado José Francisco Aguirre (honorario) [21.08.1735] Francisco Sagardía y Palencia (honorario) [20.08.1736] José de Carvajal y Lancaster [27.01.1738-23.10.1742] Luis Fernando de Isla [28.08.1738-27.09.1741] Pedro Martínez de Arizala (honorario) [14.08.1738] Martín de Lardizábal y Elorza [22.05.1740-23.10.1743 m.] sucede a José de Valdiveso Gerónimo de Sola y Fuente [28.01.1741-12.02.1767 m.] José de Laysequilla y Palacios y Aguilar (camarista) [08.02.1738-18.09.1755 m.]
Fiscal Nueva España Perú	José Borrul y Ramón [28.01.1738-01.10.1748] Prudencio Antonio Palacios [28.01.1738-03.03.1744]
Agente Fiscal	Miguel Arenzana para Nueva España (plaza de número completa) [desde 18.08.1724] Joseph Ruíz Cenzano (numerario para Perú) [desde 26.12.1729] Francisco Rojo (supernumerario para Nueva España) [desde 15.09.1718] Francisco Paniagua (para el Perú) [05.11.1741-] Sebastián San Román y Medrano (para Perú) [desde 21.03.1741] Blas Benítez de Cifuentes (para el Perú) [07.01.1730-]
Secretaría Nueva España Secretario Oficial Mayor	Fernando Triviño y Figueroa [30.04.1740- 20.02.1748] Pedro de la Vega (oficial mayor) [03.11.1731-] Adrian Alfaro (oficial 2º más antiguo) Joseph Corrobarrutia y Zupide (oficial 2º más moderno) [09.03.1724-]
Oficial 2º	Nicolás de Benavente (oficial 2º más antiguo) Sebastián Unamunsaga (oficial entretenido 2º de número) Antonio Mioño y Carranza (oficial entretenido 2º de supernumerario)
Oficial 3º	Fernando Antonio Acevedo (oficial 3º más moderno) Miguel Santiestebán Galindo (oficial 3º más antiguo) Pedro Perea Salazar (oficial 3º más moderno)

El Consejo de Indias y su relación con la vía reservada en el reinado de Felipe V

Secretaría Perú	Miguel de Villanueva [06.03.1732-16.05.1747]
Secretario	Antonio Maturana [26.05.1721-]
Oficial Mayor	Prudencio de Cruz (más moderno) [26.02.1732-]
Oficial 2º	Miguel Gutiérrez (más moderno) [26.02.1732-]
Oficial 3º	Gabriel de Peralta (más antiguo) [26.02.1732-]
Entretenidos	Francisco Adrada (más moderno) [26.02.1732-] Joseph Portearroyo (oficial entretenido 2º) [desde 06.03.1728] Joseph Borgoña y Laoz (entretenido 3º) [desde 13.04.1728]
Contaduría	Pedro Pablo Herrera [16.09.1720-21.04.1749 m.] Tomás de Castro y Colona [04.11.1728-27.03.1760] Juan de Miranda y Testa (supernumerario) [31.08.1728-24.02.1746 m.] Lope Hurtado de Mendoza y Figueroa (supernumerario) [02.02.1730-12.11.1747m.] Juan Crisóstomo Bonavia(supernumerario) [15.12.1732-12.05.1758] Eugenio de Alfaro (supernumerario) [10.09.1737-27.03.1760] Julián de la Torre (supernumerario) [01.02.1741-23.02.1754 m.]
Secretario	
Oficial Mayor	Manuel González de Ampuero [01.02.1729-]
Secretario	
Presidencia	Miguel Gutiérrez [14.05.1741-]
Depositario	José de Partearroyo [18.01.1737-12.12.1769 m.]
Capellán	Raimundo Rezabal [16.11.1726-1745 m.] Vicente Sanz (supernumerario en ausencias del titular desde 16.12.1738-02.11.1745]
Comisario General	Fray Domingo de Losada [06.11.1729-1741]
orden Sn Francisco	Fray Matías Velasco [21.03.1741-1763]
Cronista	Miguel de Herrera y Ezpeleta [08.02.1736-25.10.1744]
Cosmógrafo	Carlos de la Reguera [22.04.1733-1743]
Escribano Cámara	Antonio de Salazar y Castillo [18.03.1725-03.04.1759] Joseph Siles (oficial mayor) [22.10.1732-]
Relatores	
Relator 1º	Francisco Javier Sánchez de Villegas [22.12.1739-16.12.1749]
Relator 2º	Dionisio Martínez de Larne [18.08.1734-14.09.1758]
Relator 3º	Luis Lagúnez Malaguilla [10.05.1724-1756 m.]
Sello y Registro	Andrés González Vadillo
Abogado Pobres	Diego de Ibarra Navarro [06.03.1730-]
Procurador Pobres	Francisco López de Iglesias [01.03.1739-]
Porteros	
Portero 1º	Antonio Pradillo (perpetua 1ª)
Portero 2º	Juan Ruíz de la Peña (perpetua 2ª)
Portero 3º	Diego Gómez Falcón (perpetua 3ª)
Portero 4º	Francisco Pantoja (perpetua 4ª)
Supernumerario	Lorenzo de Velasco y Angulo
Supernumerario	Antonio Izquierdo
Supernumerario	Francisco de Cuadros
Supernumerario	Ignacio de los Reyes
Supernumerario	Pedro Gómez Falcón (perpetua)
Supernumerario	Antonio Gómez Falcón supernumeraria) [desde 09.03.1724]
Supernumerario	Antonio Marcelo Iglesias (supernumeraria, la sirve su padre Isidro López Iglesias) [desde 11.12.1724]
Supernumerario	Baltasara Pardinás [la ocupa su hijo Manuel de Esnoz desde 19.10.1721]
Alguacil Mayor	José de Cabrera [24.05.1712-1741 m.] José Martín de Eugenio [03.11.1741-] Francisco Antonio Borja [desde 27.03.1724]
Barrendero	Andrés Matheo

**AÑO 1742**

Presidente	Cristóbal Gregorio Portocarrero de Guzmán Luna, conde de Montijo [18.06.1737-27.01.1748]
Gobernador	José de Carvajal y Lancaster (Interino) [09.11.1742-27.01.1748]
Consejeros Capa y espada	Francisco Javier de Goyeneche y Balanza, marqués de Belzunce [05.10.1722-05.05.1748 m.] Antonio de Sopeña y Mioño, (camarista 17.10.1741) [12.02.1726-15.05.1748 m.] Juan Pizarro y Aragón, marqués de San Juan de Piedras Albas [28.02.1728-18.01.1771 m.] José Francisco Casado y Velasco (capa y espada honorario) [16.11.1726-23.07.1744 m.] Diego Yopulo y Espadafora [08.02.1735-19.01.1763 m.] Francisco Antonio Aguirre y Salcedo, marqués de Montehermoso [07.10.1731-09.11.1745 m.] Joaquín Antonio Bazán y Melo, marqués de San Gil (capa y espada en 16.09.1737) [18.11.1734-01.09.1746] Mauro Fernando de Mendoza Caamaño [16.02.1735-29.11.1764] José de la Quintana (capa y espada, camarista 24.10.1741) [20.12.1736-07.03.1739; 24.10.1741-22.05.1750 m.] Mateo Pablo de Díaz de Lavandero y Martín, marqués de Torrenueva (capa y espada, camarista) [08.03.1739-18.04.1746 m.] Ventura de Pinedo, conde de Villanueva (capa y espada honorario) [01.06.1739-10.03.1745 m.] Tomás Geraldino [22.12.1739-14.06.1755 m.] Juan de Gaona y Portocarrero, conde de Valdeparaíso (supernumerario, regular 24.10.1741) [04.10.1740-04.01.1760 m.] Casimiro Osorio Rubín de Celis (supernumerario, regular 01.03.1746) [04.04.1741 - 01.03.1746] Alvaro de Navía y Bolaño (honorario) [01.05.1741] Juan Bautista de Herrera y Loysaga (honorario) [01.07.1741] Francisco Fernández Molinillo [23.04.1742-14.05.1765 m.]
Togados	Antonio José Álvarez de Abreu, marqués de Regalía (camarista desde 22.07.1733) [27.01.1731-28.11.1756 m.] Antonio José de Pineda Capdevilla [24.07.1734-25.08.1743 m.] sucede a Antonio de la Pedrosa José Cornejo y Ibarra [29.07.1734-12.12.1764 m.] sucede a Andrés de Orbeta Pedro Domingo Contreras y Zúñiga [22.08.1734-31.12.1751] Sucede a Gonzalo Machado José Francisco Aguirre (honorario) [21.08.1735] Francisco Sagardía y Palencia (honorario) [20.08.1736] José Carvajal y Lancaster [27.01.1738-23.10.1742] Pedro Martínez de Arizala (honorario) [14.08.1738] Martín de Lardizábal y Elorza [22.05.1740-23.10.1743 m.] sucede a José de Valdiveso Gerónimo de Sola y Fuente [28.01.1741-12.02.1767 m.] José de Laysequilla y Palacios y Aguilar (camarista) [08.02.1738-18.09.1755 m.]
Fiscal Nueva España Perú	José Borrul y Ramón [28.01.1738-01.10.1748] Prudencio Antonio Palacios [28.01.1738-03.03.1744]
Agente Fiscal	Miguel Arenzana para Nueva España (plaza de número completa) [desde 18.08.1724] Joseph Ruíz Cenzano (numerario para Perú) [desde 26.12.1729] Agustín de la Torre Guedeja (para Nueva España) [desde 08.02.1742] Francisco Rojo (supernumerario para Nueva España) [desde 15.09.1718] Francisco Paniagua (para el Perú) [05.11.1741-] Sebastián San Román y Medrano (para Perú) [desde 21.03.1741] Blas Benítez de Cifuentes (para el Perú) [07.01.1730-]
Secretaría Nueva España Secretario Oficial Mayor	Fernando Triviño y Figueroa [30.04.1740-20.02.1748] Pedro de la Vega (oficial mayor) [03.11.1731-] Adrian Alfaro (oficial 2º más antiguo)
Oficial 2º	Joseph Corrobarrutia y Zupide (oficial 2º más moderno) [09.03.1724-] Nicolás de Benavente (oficial 2º más antiguo) Sebastián Unamunsaga (oficial entretenido 2º de número) Antonio Mioño y Carranza (oficial entretenido 2º de supernumerario)
Oficial 3º	Fernando Antonio Acevedo (oficial 3º más moderno) Miguel Santiestebán Galindo (oficial 3º más antiguo) Pedro Perea Salazar (oficial 3º más moderno)

El Consejo de Indias y su relación con la vía reservada en el reinado de Felipe V

Secretaría Perú	Miguel de Villanueva [06.03.1732-16.05.1747]
Secretario	Antonio Maturana [26.05.1721-]
Oficial Mayor	Prudencio de Cruz (más moderno) [26.02.1732-]
Oficial 2º	Miguel Gutiérrez (más moderno) [26.02.1732-]
Oficial 3º	Gabriel de Peralta (más antiguo) [26.02.1732-]
Entretenidos	Francisco Adrada (más moderno) [26.02.1732-] Joseph Portearroyo (oficial entretenido 2º) [desde 06.03.1728] Joseph Borgoña y Laoz (entretenido 3º) [desde 13.04.1728]
Contaduría	Pedro Pablo Herrera [16.09.1720-21.04.1749 m.] Tomás de Castro y Colona [04.11.1728-27.03.1760] Juan de Miranda y Testa (supernumerario) [31.08.1728-24.02.1746 m.] Lope Hurtado de Mendoza y Figueroa (supernumerario) [02.02.1730-12.11.1747 m.] Juan Crisóstomo Bonavia (supernumerario) [15.12.1732-12.05.1758] Eugenio de Alfaro (supernumerario) [10.09.1737-27.03.1760] Julián de la Torre (supernumerario) [01.02.1741-23.02.1754 m.]
Secretario	
Oficial Mayor	Manuel González de Ampuero [01.02.1729-]
Secretario	Bartolomé Crespo [desde 02.01.1724]
Presidencia	Cedeño, Francisco ¿¿?
Depositario	José de Partearroyo [18.01.1737-12.12.1769 m.]
Capellán	Raimundo Rezabal [16.11.1726-1745 m.] Vicente Sanz (supernumerario en ausencias del titular desde 16.12.1738-02.11.1745]
Comisario General orden Sn Francisco	Fray Matías Velasco [21.03.1741-1763]
Cronista	Miguel de Herrera y Ezpeleta [08.02.1736-25.10.1744]
Cosmógrafo	Carlos de la Reguera [22.04.1733-1743]
Escribano Cámara	Antonio de Salazar y Castillo [18.03.1725-03.04.1759] Joseph Siles (oficial mayor) [22.10.1732-]
Relatores	
Relator 1º	Francisco Javier Sánchez de Villegas [22.12.1739-16.12.1749]
Relator 2º	Dionisio Martínez de Larne [18.08.1734-14.09.1758]
Relator 3º	Luis Lagúnez Malaguilla [10.05.1724-1756 m.]
Sello y Registro	Andrés González Vadiillo
Abogado Pobres	Diego de Ibarra Navarro [06.03.1730-]
Procurador Pobres	Francisco López de Iglesias [01.03.1739-]
Porteros	
Portero 1º	Antonio Pradillo (perpetua 1ª)
Portero 2º	Juan Ruíz de la Peña (perpetua 2ª)
Portero 3º	Diego Gómez Falcón (perpetua 3ª)
Portero 4º	Francisco Pantoja (perpetua 4ª)
Supernumerario	Lorenzo de Velasco y Angulo
Supernumerario	Antonio Izquierdo
Supernumerario	Francisco de Cuadros
Supernumerario	Ignacio de los Reyes
Supernumerario	Pedro Gómez Falcón (perpetua) Antonio Gómez Falcón (supernumeraria) [desde 09.03.1724] Antonio Marcelo Iglesias (supernumeraria, la sirve su padre Isidro López Iglesias) [desde 11.12.1724] Baltasara Pardinás [la ocupa su hijo Manuel de Esnoz desde 19.10.1721]
Alguacil Mayor	José Martín de Eugenio [03.11.1741-] Francisco Antonio Borja [desde 27.03.1724]
Barrendero	Andrés Matheo

## AÑO 1743

Presidente	Cristóbal Gregorio Portocarrero de Guzmán Luna, conde de Montijo [18.06.1737-27.01.1748]
Gobernador	José de Carvajal y Lancaster (Interino) [09.11.1742-27.01.1748]
Consejeros	
Capa y espada	Francisco Javier de Goyeneche y Balanza, marqués de Belzunce [05.10.1722-05.05.1748 m., camarista desde 11.03.1744] Antonio de Sopena y Mioño, (camarista 17.10.1741) [12.02.1726-15.05.1748 m.] Juan Pizarro y Aragón, marqués de San Juan de Piedras Albas [28.02.1728-18.01.1771 m.] José Francisco Casado y Velasco (honorario) [16.11.1726-23.07.1744 m.] Diego Yopulo y Espadafora [08.02.1735-19.01.1763 m.] Francisco Antonio Aguirre y Salcedo, marqués de Montehermoso [07.10.1731-09.11.1745 m.] Joaquín Antonio Bazán y Melo, marqués de San Gil [18.11.1734-01.09.1746] Mauro Fernando de Mendoza Caamaño [16.02.1735-29.11.1764] José de la Quintana (camarista 24.10.1741) [20.12.1736-07.03.1739; 24.10.1741-22.05.1750 m.] Estebán José de Abaría y Ymaz [02.07.1738-09.03.1753] Mateo Pablo de Díaz de Lavandero y Martín, marqués de Torrenueva (camarista) [08.03.1739-18.04.1746 m.] Ventura de Pinedo, conde de Villanueva (honorario) [01.06.1739-10.03.1745 m.] Tomás Geraldino [22.12.1739-14.06.1755 m.] Juan de Gaona y Portocarrero, conde de Valdeparaíso (supernumerario, regular 24.10.1741) [04.10.1740-04.01.1760 m.] Casimiro Osorio Rubín de Celis (supernumerario, regular 01.03.1746) [04.04.1741 - 01.03.1746] Alvaro de Navía y Bolaño (honorario) [01.05.1741] Juan Bautista de Herrera y Loysaga (honorario) [01.07.1741] Francisco Fernández Molinillo [23.04.1742-14.05.1765 m.]
Togados	Antonio José Álvarez de Abreu, marqués de Regalía [27.01.1731-28.11.1756 m.] Antonio José de Pineda Capdevilla [24.07.1734-25.08.1743 m.] sucede a Antonio de la Pedrosa José Cornejo y Ibarra [29.07.1734-12.12.1764 m.] sucede a Andrés de Orbeta Pedro Domingo Contreras y Zúñiga [22.08.1734-31.12.1751] Sucede a Gonzalo Machado José Francisco Aguirre (honorario) [21.08.1735] Francisco Sagardía y Palencia (honorario) [20.08.1736] Pedro Martínez de Arizala (honorario) [14.08.1738] Martín de Lardizábal y Elorza [22.05.1740-23.10.1743 m.] sucede a José de Valdiveso Gerónimo de Sola y Fuente [28.01.1741-12.02.1767 m.] Antonio Jacinto Romay Armada y Sotomayor [13.10.1743-08.09.1760 m.] José de Laysequilla y Palacios y Aguilar (camarista) [08.02.1738-18.09.1755 m.]
Fiscal	
Nueva España	José Borrul y Ramón [28.01.1738-01.10.1748]
Perú	Prudencio Antonio Palacios [28.01.1738-03.03.1744]
Agente Fiscal	Miguel Arenzana para Nueva España (plaza de número completa) [desde 18.08.1724] Joseph Ruíz Cenzano (numerario para Perú) [desde 26.12.1729] Francisco Rojo (supernumerario para Nueva España) [desde 15.09.1718] Blas Benítez de Cifuentes (para el Perú) [07.01.1730-] Sebastián San Román y Medrano (para Perú) [desde 21.03.1741] Francisco Paniagua (para el Perú) [05.11.1741-] Agustín de la Torre Guedeja (para Nueva España) [desde 08.02.1742]
Secretaría Nueva España	
Secretario	Fernando Triviño y Figueroa [30.04.1740-20.02.1748]
Oficial Mayor	Pedro de la Vega (oficial mayor) [03.11.1731-] Adrian Alfaro (oficial 2º más antiguo) Joseph Corrobarrutia y Zupide (oficial 2º más moderno) [09.03.1724-]
Oficial 2º	Nicolás de Benavente (oficial 2º más antiguo) Sebastián Unamunsaga (oficial entretenido 2º de número) Antonio Mioño y Carranza (oficial entretenido 2º de supernumerario)
Oficial 3º	Fernando Antonio Acevedo (oficial 3º más moderno) Miguel Santiestebán Galindo (oficial 3º más antiguo) Pedro Perea Salazar (oficial 3º más moderno)

El Consejo de Indias y su relación con la vía reservada en el reinado de Felipe V

Secretaría Perú	Miguel de Villanueva [06.03.1732-16.05.1747]
Secretario	Antonio Maturana [26.05.1721-]
Oficial Mayor	Prudencio de Cruz (más moderno) [26.02.1732-]
Oficial 2º	Miguel Gutiérrez (más moderno) [26.02.1732-]
Oficial 3º	Gabriel de Peralta (más antiguo) [26.02.1732-]
Entretenidos	Francisco Adrada (más moderno) [26.02.1732-] Joseph Portearroyo (oficial entretenido 2º) [desde 06.03.1728] Joseph Borgoña y Laoz (entretenido 3º) [desde 13.04.1728]
Contaduría	Pedro Pablo Herrera [16.09.1720-21.04.1749 m.] Tomás de Castro y Colona [04.11.1728-27.03.1760] Juan de Miranda y Testa (supernumerario) [31.08.1728-24.02.1746 m.] Lope Hurtado de Mendoza y Figueroa (supernumerario) [02.02.1730-12.11.1747 m.] Juan Crisóstomo Bonavia (supernumerario) [15.12.1732-12.05.1758] Eugenio de Alfaro (supernumerario) [10.09.1737-27.03.1760] Julián de la Torre (supernumerario) [01.02.1741-23.02.1754 m.]
Secretario	Manuel González de Ampuero [01.02.1729-]
Oficial Mayor	
Secretario	Bartolomé Crespo [desde 02.01.1724]
Presidencia	
Depositario	José de Partearroyo [18.01.1737-12.12.1769 m.]
Capellán	Raimundo Rezabal [16.11.1726-1745 m.] Vicente Sanz (supernumerario en ausencias del titular desde 16.12.1738-02.11.1745]
Comisario General orden Sn Francisco	Fray Domingo de Losada [06.11.1729-1741]
Cronista	Miguel de Herrera y Ezpeleta [08.02.1736-25.10.1744]
Cosmógrafo	Carlos de la Reguera [22.04.1733-1743] Pedro Fresneda [03.02.1743-]
Escribano Cámara	Antonio de Salazar y Castillo [18.03.1725-03.04.1759] Joseph Siles (oficial mayor) [22.10.1732-]
Relatores	
Relator 1º	Francisco Javier Sánchez de Villegas [22.12.1739-16.12.1749]
Relator 2º	Dionisio Martínez de Larne [18.08.1734-14.09.1758]
Relator 3º	Luis Lagúnez Malaguilla [10.05.1724-1756 m.]
Sello y Registro	Andrés González Vadillo
Abogado Pobres	Diego de Ibarra Navarro [06.03.1730-]
Procurador Pobres	Francisco López de Iglesias [01.03.1739-]
Porteros	
Portero 1º	Antonio Pradillo (perpetua 1ª)
Portero 2º	Juan Ruíz de la Peña (perpetua 2ª)
Portero 3º	Diego Gómez Falcón (perpetua 3ª)
Portero 4º	Francisco Pantoja (perpetua 4ª)
Supernumerario	Lorenzo de Velasco y Angulo
Supernumerario	Antonio Izquierdo
Supernumerario	Francisco de Cuadros
Supernumerario	Ignacio de los Reyes
Supernumerario	Pedro Gómez Falcón (perpetua) Antonio Gómez Falcón (supernumeraria) [desde 09.03.1724] Antonio Marcelo Iglesias (supernumeraria, la sirve su padre Isidro López Iglesias) [desde 11.12.1724] Baltasara Pardinás [la ocupa su hijo Manuel de Esnoz desde 19.10.1721]
Alguacil Mayor	José Martín de Eugenio [03.11.1741-] Francisco Antonio Borja [desde 27.03.1724]
Barrendero	Andrés Matheo

## AÑO 1744

Presidente	Cristóbal Gregorio Portocarrero de Guzmán Luna, conde de Montijo [18.06.1737-27.01.1748]
Gobernador	José de Carvajal y Lancaster (Interino) [09. 11.1742-27.01.1748]
Consejeros	
Capa y espada	Francisco Javier de Goyeneche y Balanza, marqués de Belzunce [05.10.1722-05.05.1748 m., camarista desde 11.03.1744] Antonio de Sopena y Mioño, (camarista 17.10.1741) [12.02.1726-15.05.1748 m.] Juan Pizarro y Aragón, marqués de San Juan de Piedras Albas [28.02.1728-18.01.1771 m.] José Francisco Casado y Velasco (honorario) [16.11.1726-23.07.1744 m.] Diego Yopulo y Espadafora [08.02.1735-19.01.1763 m.] Francisco Antonio Aguirre y Salcedo, marqués de Montehermoso [07.10.1731-09.11.1745 m.] Joaquín Antonio Bazán y Melo, marqués de San [18.11.1734-01.09.1746] Mauro Fernando de Mendoza Caamaño [16.02.1735-29.11.1764] José de la Quintana (camarista 24.10.1741) [20.12.1736-07.03.1739; 24.10.1741-22.05.1750 m.] Estebán José de Abaría y Ymaz [02.07.1738-09.03.1753] Mateo Pablo de Díaz de Lavandero y Martín, marqués de Torrenueva (camarista) [08.03.1739-18.04.1746 m.] Ventura de Pinedo, conde de Villanueva (honorario) [01.06.1739-10.03.1745 m.] Tomás Geraldino [22.12.1739-14.06.1755 m.] Juan de Gaona y Portocarrero, conde de Valdeparaíso (supernumerario, regular 24.10.1741) [04.10.1740-04.01.1760 m.] Casimiro Osorio Rubín de Celis (supernumerario, regular 01.03.1746) [04.04.1741 - 01.03.1746] Alvaro de Navía y Bolaño (honorario) [01.05.1741] Juan Bautista de Herrera y Loysaga (honorario) [01.07.1741] Francisco Fernández Molinillo, [23.04.1742-14.05.1765 m.] Felipe de Arco Riva Herrera [25.07.1744-07.08.1785 m.]
Togados	Antonio José Álvarez de Abreu, marqués de Regalía (camarista desde 22.07.1733) [27.01.1731-28.11.1756 m.] José Cornejo y Ibarra [29.07.1734-12.12.1764 m.] sucede a Andrés de Orbeta Pedro Domingo Contreras y Zúñiga [22.08.1734-31.12.1751] Sucede a Gonzalo Machado José Francisco Aguirre (honorario) [21.08.1735] Francisco Sagardía y Palencia (honorario) [20.08.1736] Pedro Martínez de Arizala (honorario) [14.08.1738] Gerónimo de Sola y Fuente [28.01.1741-12.02.1767 m.] Prudencio Antonio Palacios de [03.03.1744-13.06.1755 m.] Antonio Jacinto Romay Armada y Sotomayor [13.10.1743-08.09.1760 m.] Juan Vázquez de Agüero [19.03.1744-01.03.1766 m.] Antonio Hermenegildo Querejazu y Mollinedo (honorario) [21.09.1744] José de Laysequilla y Palacios y Aguilar (camarista) [08.02.1738-18.09.1755 m.]
Fiscal	
Nueva España	José Borrul y Ramón [28.01.1738-01.10.1748] Prudencio Antonio Palacios [28.01.1738-03.03.1744]
Perú	José Manuel de Rojas [28.03.1744-22.11.1748]
Agente Fiscal	Miguel Arenzana para Nueva España (plaza de número completa) [desde 18.08.1724] Joseph Ruíz Cenzano (numerario parar Perú) [desde 26.12.1729] Francisco Rojo (supernumerario para Nueva España) [desde 15.09.1718] Agustín de la Torre Guedeja (para Nueva España) [desde 08.02.1742] Sebastián San Román y Medrano (para Perú) [desde 21.03.1741] Francisco Paniagua (para el Perú) [05.11.1741-] Blas Benítez de Cifuentes (para el Perú) [07.01.1730-]
Secretaría Nueva España	
Secretario	Fernando Triviño y Figueroa [30.04.1740-20.02.1748] Pedro de la Vega (oficial mayor) [03.11.1731-]
Oficial Mayor	Adrian Alfaro (oficial 2º más antiguo) Joseph Corrobarrutia y Zupide (oficial 2º más moderno) [09.03.1724-]
Oficial 2º	Nicolás de Benavente (oficial 2º más antiguo) Sebastián Unamunsaga (oficial entretenido 2º de número) Antonio Mioño y Carranza (oficial entretenido 2º de supernumerario)



El Consejo de Indias y su relación con la vía reservada en el reinado de Felipe V

Oficial 3º	Fernando Antonio Acevedo (oficial 3º más moderno) Miguel Santiestebán Galindo (oficial 3º más antiguo) Pedro Perea Salazar (oficial 3º más moderno)
Secretaría Perú Secretario Oficial Mayor Oficial 2º Oficial 3º Entretenidos	Miguel de Villanueva [06.03.1732-16.05.1747] Antonio Maturana [26.05.1721-] Prudencio de Cruz (más moderno) [26.02.1732-] Miguel Gutiérrez (más moderno) [26.02.1732-] Gabriel de Peralta (más antiguo) [26.02.1732-] Francisco Adrada (más moderno) [26.02.1732-] Joseph Portearroyo (oficial entretenido 2º) [desde 06.03.1728] Joseph Borgoña y Laoz (entrenido 3º) [desde 13.04.1728]
Contaduría  Secretario Oficial Mayor	Pedro Pablo Herrera [16.09.1720-21.04.1749 m.] Tomás de Castro y Colona [04.11.1728-27.03.1760] Juan de Miranda y Testa (supernumerario) [31.08.1728-24.02.1746 m.] Lope Hurtado de Mendoza y Figueroa (supernumerario) [02.02.1730-12.11.1747 m.] Juan Crisóstomo Bonavia (supernumerario) [15.12.1732-12.05.1758] Eugenio de Alfaro (supernumerario) [10.09.1737-27.03.1760] Julián de la Torre (supernumerario) [01.02.1741-23.02.1754 m.] Manuel González de Ampuero [01.02.1729-]
Secretario Presidencia	Bartolomé Crespo [desde 02.01.1724]
Depositario	José de Partearroyo [18.01.1737-12.12.1769 m.]
Capellán	Raimundo Rezabal [16.11.1726-1745 m.] Vicente Sanz (supernumerario en ausencias del titular desde 16.12.1738-02.11.1745]
Comisario General orden Sn Francisco	Fray Domingo de Losada [06.11.1729-1741]
Cronista	Miguel de Herrera y Ezpeleta [08.02.1736-25.10.1744] Real Academia de la Historia y la plaza la ostenta Miguel de Herrera y Ezpeleta [25.10.1744-1750 m.]
Cosmógrafo	Pedro Fresneda [03.02.1743-]
Escribano Cámara	Antonio de Salazar y Castillo [18.03.1725-03.04.1759] Joseph Siles (oficial mayor) [22.10.1732-]
Relatores Relator 1º Relator 2º Relator 3º	Francisco Javier Sánchez de Villegas [22.12.1739-16.12.1749] Dionisio Martínez de Larne [18.08.1734-14.09.1758] Luis Lagúñez Malaguilla [10.05.1724-1756 m.]
Sello y Registro	Andrés González Vadillo
Abogado Pobres	Diego de Ibarra Navarro [06.03.1730-]
Procurador Pobres	Francisco López de Iglesias [01.03.1739-]
Porteros Portero 1º Portero 2º Portero 3º Portero 4º Supernumerario	Antonio Pradillo (perpetua 1ª) Juan Ruíz de la Peña (perpetua 2ª) Diego Gómez Falcón (perpetua 3ª) Francisco Pantoja (perpetua 4ª) Lorenzo de Velasco y Angulo
Supernumerario Supernumerario Supernumerario  Supernumerario	Antonio Izquierdo Francisco de Cuadros Ignacio de los Reyes Pedro Gómez Falcón (perpetua) Antonio Gómez Falcón (supernumeraria) [desde 09.03.1724] Antonio Marcelo Iglesias (supernumeraria, la sirve su padre Isidro López Iglesias) [desde 11.12.1724] Baltasara Pardinás [la ocupa su hijo Manuel de Esnoz desde 19.10.1721]
Alguacil Mayor	José Martín de Eugenio [03.11.1741-] Francisco Antonio Borja [desde 27.03.1724] Cayetano Díaz (alguacil interino 05.07.1744)
Barrendero	Andrés Matheo

**AÑO 1745**

Presidente	Cristóbal Gregorio Portocarrero de Guzmán Luna, conde de Montijo [18.06.1737-27.01.1748]
Gobernador	José de Carvajal y Lancaster (Interino) [09.11.1742-27.01.1748]
Consejeros	
Capa y espada	<p>Francisco Javier de Goyeneche y Balanza, marqués de Belzunce [05.10.1722-05.05.1748 m., camarista desde 11.03.1744]</p> <p>Antonio de Sopeña y Mioño, (capa y espada; camarista 17.10.1741) [12.02.1726-15.05.1748 m.]</p> <p>Juan Pizarro y Aragón, marqués de San Juan de Piedras Albas [28.02.1728-18.01.1771 m.]</p> <p>Diego Yopulo y Espadafora [08.02.1735-19.01.1763 m.]</p> <p>Francisco Antonio Aguirre y Salcedo, marqués de Montehermoso [07.10.1731-09.11.1745 m.]</p> <p>Joachín Antonio Bazán y Melo, marqués de San Gil [18.11.1734-01.09.1746]</p> <p>Mauro Fernando de Mendoza Caamaño [16.02.1735-29.11.1764]</p> <p>Estebán José de Abaría y Ymaz [02.07.1738-09.03.1753]</p> <p>Mateo Pablo de Díaz de Lavandero y Martín, marqués de Torrenueva (camarista) [08.03.1739-18.04.1746 m.]</p> <p>Ventura de Pinedo, conde de Villanueva (honorario) [01.06.1739-10.03.1745 m.]</p> <p>Tomás Geraldino [22.12.1739-14.06.1755 m.]</p> <p>Juan de Gaona y Portocarrero, conde de Valdeparaíso (supernumerario, regular 24.10.1741) [04.10.1740-04.01.1760 m.]</p> <p>Casimiro Osorio Rubín de Celis (supernumerario, regular 01.03.1746) [04.04.1741-01.03.1746]</p> <p>Alvaro de Navía y Bolaño (capa y espada honorario) [01.05.1741]</p> <p>Juan Bautista de Herrera y Loysaga (capa y espada honorario) [01.07.1741]</p> <p>Francisco Fernández Molinillo, [23.04.1742-14.05.1765 m.]</p> <p>Felipe de Arco Riva Herrera [25.07.1744-07.08.1785 m.]</p> <p>Rodrigo de Torres y Morales, marqués de Matallana de Val Madrigal (capa y espada, camarista) [14.03.1745-15.12.1755 m.]</p> <p>Manuel de Salcedo [20.06.1745-30.06.1747 m.]</p> <p>Gaspar de Leyva (capa y espada honorario) [21.11.1745]</p> <p>José de la Quintana (camarista 24.10.1741) [20.12.1736-07.03.1739; 24.10.1741-22.05.1750 m.]</p>
Togados	<p>Antonio José Álvarez de Abreu, marqués de Regalía (camarista desde 22.07.1733) [27.01.1731-28.11.1756 m.]</p> <p>José Cornejo y Ibarra [29.07.1734-12.12.1764 m.] sucede a Andrés de Orbeta</p> <p>Pedro Domingo Contreras y Zúñiga [22.08.1734-31.12.1751] Sucede a Gonzalo Machado</p> <p>José Francisco Aguirre (honorario) [21.08.1735]</p> <p>Francisco Sagardía y Palencia (honorario) [20.08.1736]</p> <p>Pedro Martínez de Arizala (honorario) [14.08.1738]</p> <p>Gerónimo de Sola y Fuente [28.01.1741-12.02.1767 m.]</p> <p>Prudencio Antonio Palacios de [04.11.1741-13.06.1755 m.]</p> <p>Antonio Jacinto Romay Armada y Sotomayor [13.10.1743-08.09.1760 m.]</p> <p>Juan Vázquez de Agüero [19.03.1744-01.03.1766 m.]</p> <p>Antonio Hermenegildo Querejazu y Mollinedo (honorario) [21.09.1744]</p> <p>José de Laysequilla y Palacios y Aguilar (camarista) [08.02.1738-18.09.1755 m.]</p>
Fiscal	
Nueva España	José Borrul y Ramón [28.01.1738-01.10.1748]
Perú	José Manuel de Rojas [28.03.1744-22.11.1748]
Agente Fiscal	<p>Miguel Arenzana para Nueva España (plaza de número completa) [desde 18.08.1724]</p> <p>Joseph Ruíz Cenzano (numerario parar Perú) [desde 26.12.1729]</p> <p>Francisco Rojo (supernumerario para Nueva España) [desde 15.09.1718]</p> <p>Sebastián San Román y Medrano (para Perú) [desde 21.03.1741]</p>
	<p>Francisco Paniagua (para el Perú) [05.11.1741-]</p> <p>Agustín de la Torre Guedeja (para Nueva España) [desde 08.02.1742]</p> <p>Blas Benítez de Cifuentes (para el Perú) [07.01.1730-]</p>
Secretaría Nueva España	
Secretario	Fernando Triviño y Figueroa [30.04.1740-20.02.1748]
Oficial Mayor	Pedro de la Vega (oficial mayor) [03.11.1731-]
	Adrian Alfaro (oficial 2º más antiguo)
	Joseph Corrobarrutia y Zupide (oficial 2º más moderno) [09.03.1724-]
Oficial 2º	Nicolás de Benavente (oficial 2º más antiguo)
	Sebastián Unamunsaga (oficial entretenido 2º de número)
	Antonio Mioño y Carranza (oficial entretenido 2º de supernumerario)

El Consejo de Indias y su relación con la vía reservada en el reinado de Felipe V

Oficial 3º	Fernando Antonio Acevedo (oficial 3º más moderno) Miguel Santiestebán Galindo (oficial 3º más antiguo) Pedro Perea Salazar (oficial 3º más moderno)
Secretaría Perú Secretario Oficial Mayor Oficial 2º Oficial 3º Entretenidos	Miguel de Villanueva [06.03.1732-16.05.1747] Antonio Maturana [26.05.1721-] Prudencio de Cruz (más moderno) [26.02.1732-] Miguel Gutiérrez (más moderno) [26.02.1732-] Gabriel de Peralta (más antiguo) [26.02.1732-] Francisco Adrada (más moderno) [26.02.1732-] Joseph Portearroyo (oficial entretenido 2º) [desde 06.03.1728] Joseph Borgoña y Laoz (entretenido 3º) [desde 13.04.1728]
Contaduría  Secretario Oficial Mayor	Pedro Pablo Herrera [16.09.1720-21.04.1749 m.] Tomás de Castro y Colona [04.11.1728-27.03.1760] Juan de Miranda y Testa (supernumerario) [31.08.1728-24.02.1746 m.] Lope Hurtado de Mendoza y Figueroa (supernumerario) [02.02.1730-12.11.1747 m.] Juan Crisóstomo Bonavia (supernumerario) [15.12.1732-12.05.1758] Eugenio de Alfaro (supernumerario) [10.09.1737-27.03.1760] Julián de la Torre (supernumerario) [01.02.1741-23.02.1754 m.] Manuel Antonio de Cevallos (supernumerario) [10.02.1745-27.03.1760]  Manuel González de Ampuero [01.02.1729-]
Secretario Presidencia	Bartolomé Crespo [desde 02.01.1724]
Depositario	José de Partearroyo [18.01.1737-12.12.1769 m.]
Capellán	Raimundo Rezabal [16.11.1726-1745 m.] Vicente Sanz (titular 02.11.1745-1767 m.)
Comisario General orden Sn Francisco	Fray Domingo de Losada [06.11.1729-1741]
Cronista	Real Academia de la Historia y la plaza la ostenta Miguel de Herrera y Ezpeleta [25.10.1744-1750 m.]
Cosmógrafo	Pedro Fresneda [03.02.1743-]
Escribano Cámara	Antonio de Salazar y Castillo [18.03.1725-03.04.1759] Joseph Siles (oficial mayor) [22.10.1732-]
Relatores Relator 1º Relator 2º Relator 3º	Francisco Javier Sánchez de Villegas [22.12.1739-16.12.1749] Dionisio Martínez de Larne [18.08.1734-14.09.1758] Luis Lagúnez Malaguilla [10.05.1724-1756 m.]
Sello y Registro	Andrés González Vadillo
Abogado Pobres	Diego de Ibarra Navarro [06.03.1730-]
Procurador Pobres	Francisco López de Iglesias [01.03.1739-]
Porteros Portero 1º Portero 2º Portero 3º	Antonio Pradillo (perpetua 1ª) Juan Ruíz de la Peña (perpetua 2ª) Diego Gómez Falcón (perpetua 3ª)
Portero 4º Supernumerario Supernumerario Supernumerario Supernumerario  Supernumerario	Francisco Pantoja (perpetua 4ª) Lorenzo de Velasco y Angulo Antonio Izquierdo Francisco de Cuadros Ignacio de los Reyes Pedro Gómez Falcón (perpetua) Antonio Gómez Falcón (supernumeraria) [desde 09.03.1724] Antonio Marcelo Iglesias (supernumeraria, la sirve su padre Isidro López Iglesias) [desde 11.12.1724] Baltasara Pardinás [la ocupa su hijo Manuel de Esnoz desde 19.10.1721]
Alguacil Mayor	José Martín de Eugenio [03.11.1741-] Francisco Antonio Borja [desde 27.03.1724]
Barrendero	Andrés Matheo

## AÑO 1746

Presidente	Cristóbal Gregorio Portocarrero de Guzmán Luna, conde de Montijo [18.06.1737-27.01.1748]
Gobernador	José de Carvajal y Lancaster (Interino) [09.11.1742-27.01.1748]
Consejeros	
Capa y espada	Francisco Javier de Goyeneche y Balanza, marqués de Belzunce [05.10.1722-05.05.1748 m.] (camarista desde 11.03.1744) Antonio de Sopena y Mioño, (camarista 17.10.1741) [12.02.1726-15.05.1748 m.] Juan Pizarro y Aragón, marqués de San Juan de Piedras Albas [28.02.1728-18.01.1771 m.] Diego Yopulo y Espadafora [08.02.1735-19.01.1763 m.] Joaquín Antonio Bazán y Melo, marqués de San Gil [18.11.1734-01.09.1746] Mauro Fernando de Mendoza Caamaño [16.02.1735-29.11.1764] José de la Quintana (camarista 24.10.1741) [20.12.1736-07.03.1739; 24.10.1741-22.05.1750 m.] Estebán José de Abaría y Ymaz [02.07.1738-09.03.1753] Mateo Pablo de Díaz de Lavandero y Martín, marqués de Torrenueva (camarista) [08.03.1739-18.04.1746 m.] Tomás Geraldino [22.12.1739-14.06.1755 m.] Juan de Gaona y Portocarrero, conde de Valdeparaíso (supernumerario, regular 24.10.1741) [04.10.1740-04.01.1760 m.] Casimiro Osorio Rubín de Celis (supernumerario, regular 01.03.1746) [04.04.1741-01.03.1746] Alvaro de Navía y Bolaño (honorario) [01.05.1741] Juan Bautista de Herrera y Loysaga (honorario) [01.07.1741] Francisco Fernández Molinillo [23.04.1742-14.05.1765 m.] Felipe de Arco Riva Herrera [25.07.1744-07.08.1785 m.] Rodrigo de Torres y Morales, marqués de Matallana de Val Madrigal (camarista) [14.03.1745-15.12.1755 m.] Manuel de Salcedo [20.06.1745-30.06.1747 m.] Gaspar de Leyva (honorario) [21.11.1745]
Togados	Antonio José Álvarez de Abreu, marqués de Regalía (camarista desde 22.07.1733) [27.01.1731-28.11.1756 m.] José Cornejo y Ibarra [29.07.1734-12.12.1764 m.] sucede a Andrés de Orbeta Pedro Domingo Contreras y Zúñiga [22.08.1734-31.12.1751] Sucede a Gonzalo Machado José Francisco Aguirre (honorario) [21.08.1735] Francisco Sagardía y Palencia (honorario) [20.08.1736] Pedro Martínez de Arizala (honorario) [14.08.1738] Gerónimo de Sola y Fuente [28.01.1741-12.02.1767 m.] Prudencio Antonio Palacios de [04.11.1741-13.06.1755 m.] Antonio Jacinto Romay Armada y Sotomayor [13.10.1743-08.09.1760 m.] Juan Vázquez de Agüero [19.03.1744-01.03.1766 m.] Antonio Hermenegildo Querejazu y Mollinedo (honorario) [21.09.1744] José de Laysequilla y Palacios y Aguilar (camarista) [08.02.1738-18.09.1755 m.]
Fiscal	
Nueva España	José Borrul y Ramón [28.01.1738-01.10.1748]
Perú	José Manuel de Rojas [28.03.1744-22.11.1748]
Agente Fiscal	Miguel Arenzana para Nueva España (plaza de número completa) [desde 18.08.1724] Joseph Ruíz Cenzano (numerario para Perú) [desde 26.12.1729] Francisco Rojo (supernumerario para Nueva España) [desde 15.09.1718] Agustín de la Torre Guedeja (para Nueva España) [desde 08.02.1742] Francisco Paniagua (para el Perú) [05.11.1741-] Sebastián San Román y Medrano (para Perú) [desde 21.03.1741] Blas Benítez de Cifuentes (para el Perú) [07.01.1730-]
Secretaría Nueva España	
Secretario	Fernando Triviño y Figueroa [30.04.1740-20.02.1748]
Oficial Mayor	Pedro de la Vega (oficial mayor) [03.11.1731-] Adrian Alfaro (oficial 2º más antiguo) Joseph Corrobarrutia y Zupide (oficial 2º más moderno) [09.03.1724-] Nicolás de Benavente (oficial 2º más antiguo) Sebastián Unamunsaga (oficial entretenido 2º de número) Antonio Mioño y Carranza (oficial entretenido 2º de supernumerario)
Oficial 2º	

El Consejo de Indias y su relación con la vía reservada en el reinado de Felipe V

Oficial 3º	Fernando Antonio Acevedo (oficial 3º más moderno) Miguel Santiestebán Galindo (oficial 3º más antiguo) Pedro Perea Salazar (oficial 3º más moderno)
Secretaría Perú Secretario Oficial Mayor Oficial 2º	Miguel de Villanueva [06.03.1732-16.05.1747] Antonio Maturana [26.05.1721-] Prudencio de Cruz (más moderno) [26.02.1732-] Miguel Gutiérrez (más moderno) [26.02.1732-]
Oficial 3º Entretenidos	Gabriel de Peralta (más antiguo) [26.02.1732-] Francisco Adrada (más moderno) [26.02.1732-] Joseph Portearroyo (oficial entretenido 2º) [desde 06.03.1728] Joseph Borgoña y Laoz (entrenido 3º) [desde 13.04.1728]
Contaduría  Secretario Oficial Mayor	Pedro Pablo Herrera [16.09.1720-21.04.1749 m.] Tomás de Castro y Colona [04.11.1728-27.03.1760] Juan de Miranda y Testa (supernumerario) [31.08.1728-24.02.1746 m.] Lope Hurtado de Mendoza y Figueroa (supernumerario) [02.02.1730-12.11.1747 m.] Juan Crisóstomo Bonavia (supernumerario) [15.12.1732-12.05.1758] Eugenio de Alfaro (supernumerario) [10.09.1737-27.03.1760] Julián de la Torre (supernumerario) [01.02.1741-23.02.1754 m.] Manuel Antonio de Cevallos (supernumerario) [10.02.1745-27.03.1760] Manuel González de Ampuero [01.02.1729-]
Secretario Presidencia	Bartolomé Crespo [desde 02.01.1724]
Depositario	José de Partearroyo [18.01.1737-12.12.1769 m.]
Capellán	Vicente Sanz (titular 02.11.1745-1767 m.)
Comisario General orden Sn Francisco	Fray Domingo de Losada [06.11.1729-1741]
Cronista	Real Academia de la Historia y la plaza la ostenta Miguel de Herrera y Ezpeleta [25.10.1744-1750 m.]
Cosmógrafo	Pedro Fresneda [03.02.1743-]
Escribano Cámara	Antonio de Salazar y Castillo [18.03.1725-03.04.1759] Joseph Siles (oficial mayor) [22.10.1732-]
Relatores Relator 1º Relator 2º Relator 3º	Francisco Javier Sánchez de Villegas [22.12.1739-16.12.1749] Dionisio Martínez de Larne [18.08.1734-14.09.1758] Luis Lagúnez Malaguilla [10.05.1724-1756 m.]
Sello y Registro	Andrés González Vadillo
Abogado Pobres	Diego de Ibarra Navarro [06.03.1730-]
Procurador Pobres	Francisco López de Iglesias [01.03.1739-]
Porteros Portero 1º Portero 2º Portero 3º Portero 4º Supernumerario Supernumerario Supernumerario Supernumerario Supernumerario	Antonio Pradillo (perpetua 1ª) Juan Ruíz de la Peña (perpetua 2ª) Diego Gómez Falcón (perpetua 3ª) Francisco Pantoja (perpetua 4ª) Lorenzo de Velasco y Angulo Antonio Izquierdo Francisco de Cuadros Ignacio de los Reyes Pedro Gómez Falcón (perpetua) Antonio Gómez Falcón (supernumeraria) [desde 09.03.1724] Antonio Marcelo Iglesias (supernumeraria, la sirve su padre Isidro López Iglesias) [desde 11.12.1724] Baltasara Párdinas [la ocupa su hijo Manuel de Esnoz desde 19.10.1721]
Alguacil Mayor	José Martín de Eugenio [03.11.1741-] Francisco Antonio Borja [desde 27.03.1724]
Barrendero	Andrés Matheo